

ANDRE HORI:

EXCMA. SRA.:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2011ko abenduaren 27an egindako bilkuran, Kiroleko dopinaren aurkako LEGE PROIEKTUA onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 27 de diciembre 2011, ha procedido a la aprobación del PROYECTO DE LEY contra el dopaje en el deporte.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoaren eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2004ko otsailaren 3an hartutako Erabakian -lege proiektuekin batera Eusko Legebiltzarrera bidali behar diren agiriak zehazten dituen xedatutakoaren arabera.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y con lo dispuesto en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el día 3 de febrero de 2004, por el que se determinan los documentos que deberán remitirse al Parlamento Vasco junto con los Proyectos de Ley.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko urtarrilaren 19a.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2012.

Idoia Mendia Cueva

SECRETARIA DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

II

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia deportiva. Al amparo de dicha competencia, el Parlamento aprobó la Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte, texto legal que no reguló el dopaje. El acelerado proceso de transformaciones que estaba experimentando el deporte condujo a la sustitución de la misma por la vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que sí regula el ámbito del dopaje.

Esta Ley 14/1998 destina completamente el Capítulo V, del Título VII, al dopaje. Además de dicho Capítulo, a lo largo del resto del articulado se contienen diversas previsiones sobre tal problemática. Aunque dicha Ley supuso un primer e importante paso para dotar al País Vasco de una regulación propia para combatir la lacra del dopaje, el tiempo transcurrido desde la aprobación ha puesto de manifiesto nuevas problemáticas e importantes transformaciones organizativas y normativas en el ámbito estatal e internacional.

Por un lado, los eventos deportivos, estructurados tradicionalmente en torno a las federaciones deportivas, se han mercantilizado notablemente y están siendo organizados por entidades, ajenas a la organización federativa, para quienes no estaba prevista la normativa reguladora de la lucha contra el dopaje.

Por otra parte, aunque las diferentes prácticas de dopaje han constituido siempre una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva, en la actualidad el fenómeno del dopaje ya no es sólo un grave engaño deportivo; se ha convertido en un conjunto de prácticas peligrosas organizadas que pueden ser muy peligrosas para la salud pública, especialmente para la vida de los deportistas. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva y de la salud individual de un deportista para convertirse en un auténtico problema de salud pública. El dopaje no es la expresión de prácticas aisladas e individuales de las y los deportistas sino que responde a tramas organizadas con fuertes intereses económicos.

El marco jurídico de la lucha contra el dopaje también ha experimentado profundas reformas. Un año después de la aprobación de la Ley 14/1998 se celebró en Lausana, Suiza, la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, que puso de manifiesto la necesidad de profundizar en la colaboración entre poderes públicos y organizaciones deportivas. Tal Conferencia supuso un cambio de rumbo en la forma de abordar el problema del dopaje en el deporte, poniendo el acento en la necesidad de crear un organismo internacional independiente que estableciera normas comunes para combatir el dopaje y coordinara los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de los poderes públicos. Ese mismo año se acordó constituir la Agencia Mundial Antidopaje, en cuya estructura y financiación participan de forma equitativa el Comité Olímpico Internacional y los gobiernos de un gran número de países, preocupados cada vez más por el auge del dopaje y su rápida expansión más allá del ámbito de la alta competición deportiva.

En 2003, la Agencia Mundial Antidopaje, fundación privada sometida al Derecho Suizo, elaboró el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que lo complementan. Tales textos constituyen un conjunto

de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional y de necesaria referencia para las instituciones públicas implicadas en la lucha contra el dopaje. Estas iniciativas de la Agencia Mundial Antidopaje condujeron a la aprobación, por la UNESCO, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Dicha Convención, que ha sido ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de febrero de 2007, forma parte de nuestro ordenamiento interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Tales textos exigen a los gobiernos la elaboración de normas que conduzcan a una armonización sobre aspectos clave para combatir el dopaje. Por ello, con la presente Ley se trata, también, de armonizar la normativa vasca de lucha contra el dopaje con los principios que aquel Código proclama y de alcanzar mayor eficacia a la hora de combatir el dopaje en el deporte.

Otra etapa de este proceso de profundos cambios ha venido protagonizada por la aprobación, por el Parlamento Español, de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. Parte de sus preceptos tienen naturaleza orgánica y otros han sido aprobados sobre la base de las competencias que el Estado ostenta en materias relacionadas con el dopaje.

Por todo lo anterior, la normativa que se contiene en la presente Ley se basa en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales y nacionales más avanzados en la lucha de contra el dopaje en el deporte. La estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exige un marco jurídico común en la lucha contra el dopaje en el deporte. En el País Vasco se celebran competiciones deportivas internacionales y estatales con participación de deportistas, clubes y federaciones de diversa procedencia y ello precisa una normativa mínimamente armonizada.

Por tanto, el régimen novedoso que fue introducido en el País Vasco por la Ley 14/1998, aparece hoy día necesitado de reformas y actualizaciones para combatir un fenómeno, el dopaje, que simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo, muy particularmente en el artículo 2.1 de la Ley 14/1998, el cual dispone que *“el deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social”*.

Desde el punto de vista competencial, conviene recordar que el artículo 4 de la citada Ley 14/1998 ya dispuso que corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de la siguiente competencia, consistente en la *“regulación de la prevención, control y represión del dopaje”*.

En la Ley se produce un endurecimiento notable del marco legal de la lucha contra el dopaje, endurecimiento que se ha tratado de cohonestar con el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las y los deportistas y demás personas intervinientes. El texto parte de una idea básica; la lucha contra el dopaje no puede llevarse a cabo de cualquier modo y se debe ser exquisito con todos los derechos de las y los deportistas implicados en los controles antidopaje, sin merma alguna de la eficacia de éstos. Para alcanzar tal eficacia algunos derechos de las y los deportistas deben ser ponderados de modo proporcional a los fines legítimos que se consigan en materia de lucha contra el dopaje (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de julio de 2006, Caso David Meca y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas).

Con esta nueva ley se aplica también el régimen de control y represión contra el dopaje a las actividades deportivas no federadas. Se amplían las actuales previsiones legales sobre el deporte federado a otras realidades deportivas que también son merecedoras de protección, aunque con un régimen menos estricto. En este aspecto la Ley sigue el camino iniciado con la Ley 14/1998, que ya contemplaba un régimen sancionador

fuera del ámbito de las federaciones, y también sigue la estela marcada por la Ley Orgánica 7/2006 que contempla medidas sancionadoras en el ámbito de la actividad deportiva no competitiva. En esta línea, la Ley incorpora prohibiciones expresas con relación a los centros deportivos donde se distribuyen o comercializan sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

En materia de control de dopaje la Ley hace un esfuerzo por contemplar de forma expresa otras modalidades de control. La tolerancia cero con el dopaje no es compatible con un control de dopaje ceñido exclusivamente a las tomas de muestras y análisis. Es necesario controlar otras vías de fraude como el control de las autorizaciones de uso terapéutico. Por ello, la Ley no restringe los controles antidopaje a las tomas de muestras y, además, las tomas de muestras no se reducen a la orina de las y los deportistas sino que el texto legal abre los controles a otros tipos de muestras, sin imponer vía alguna. Tendrá que ser la evolución de las investigaciones científicas y los resultados de los avances tecnológicos quienes marquen en cada momento la vía más adecuada de control. La Ley, lejos de frenar tales avances, trata de ser abierta y dar cobertura jurídica a tales avances.

Mención especial requiere el tratamiento que el nuevo texto otorga a los denominados controles de salud. Siguiendo el mismo criterio que la Ley Orgánica 7/2006 se incluyen bajo ese concepto el conjunto de actuaciones que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva así como a controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones previstas en la Ley en materia de dopaje y salud.

Asimismo, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de la licencia a deportistas por razones de salud. A diferencia de la legislación estatal, tales controles de salud no se insertan en el marco de las relaciones laborales. En el presente texto se ha optado por facultar a cualesquiera entidades deportivas a realizar controles de salud a sus deportistas, con independencia de que tengan una relación laboral. Sería un franco retroceso negar a las federaciones y demás entidades deportivas la facultad de realizar controles de salud sobre sus deportistas por el mero hecho de no existir una relación laboral.

En el texto legal se incorpora una mención expresa a la prohibición de patrocinio público a clubes, deportistas y demás personas físicas o jurídicas en determinadas circunstancias relacionadas con el dopaje. Resultaría pura retórica que se trate de endurecer el régimen de control y represión del dopaje si se permite a los poderes públicos ayudar económicamente a personas y entidades que infringen la normativa antidopaje.

La tipificación de las infracciones y sanciones de la Ley 14/1998 era muy limitada y se ha aprovechado esta Ley para ajustarla a las necesidades que han ido surgiendo y a la normativa internacional. Las sanciones existentes en dicha Ley no se acomodaban a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje y se ha realizado un esfuerzo de adaptación, debiéndose significar que tal régimen está inspirado en la vigente Ley Orgánica 7/2006.

La Ley trata de dar respuesta al importante fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico que, como se viene reconociendo abiertamente, se ha convertido en una puerta abierta al dopaje. Los deportistas, como cualquier persona, pueden padecer enfermedades o lesiones que precisan tratamiento médico. La posibilidad de solicitar una autorización de uso terapéutico se reconoce en la Ley en determinadas circunstancias. Junto a esta vía se instaura la figura de la baja deportiva, nueva figura que permite a la o el deportista un tratamiento terapéutico totalmente libre, como a cualquier otra persona, pero sin posibilidad de competir.

La Ley incorpora de forma expresa un instrumento fundamental en la batalla contra el dopaje: el reconocimiento mutuo de sanciones impuestas por otras instancias públicas o privadas. Una o un deportista sancionado por dopaje en otro país, comunidad autónoma o modalidad deportiva no puede competir en el País Vasco mientras esté vigente la sanción, cualquiera que sea su naturaleza.

La lucha contra el dopaje se concibe en esta Ley de forma integral, además de regular la práctica del dopaje, contempla en su articulado, de forma especial, la investigación, sensibilización, formación e información de las entidades profesionales y personas deportistas sobre los efectos que las diferentes sustancias y métodos utilizados para mejorar el rendimiento deportivo pueden tener sobre la salud. Por ello, la Ley contempla la obligación de adoptar diversas medidas de prevención. Entre las mismas se incluyen acciones de investigación y, con el objetivo de hacer efectiva dichos programas de investigación científica, la Ley contempla mecanismos de información poniendo a disposición de los diversos agentes públicos y privados aquellos datos que puedan ser utilizados en el desarrollo de aquellos programas. Asimismo, se incluye expresamente la realización de programas de formación e información dirigidos fundamentalmente a clubes, federaciones, deportistas, técnicos y técnicas, dirigentes y demás agentes deportivos a fin de evitar que los valores del deporte sean amenazados por el dopaje y con el objetivo de impedir que las y los deportistas recurran a sustancias y métodos prohibidos en grave perjuicio de su salud. Especial mención se debe hacer a la previsión de programas específicos de sensibilización en la lucha contra el dopaje en el campo del deporte que no es de competiciones oficiales de rendimiento: pruebas atléticas populares, carreras cicloturistas, gimnasios, etcétera.

Capítulo especial precisa todo lo relativo a la protección de datos de carácter personal en materia de dopaje. La Ley incluye disposiciones que inciden, aunque no regulan, en el derecho de deportistas y de otras personas a la protección de sus datos de carácter personal. En algunos supuestos se contemplan deberes de comunicación de determinadas informaciones a las autoridades competentes, en otros supuestos se contempla el tratamiento de dichos datos, etcétera. Por dicha razón, se ha tenido en consideración la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, así como la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

La Ley parte de la consideración que los datos relacionados con los controles de dopaje y de salud (resultados de los análisis, resultados de los reconocimientos médicos, resultados de los controles de salud, solicitudes y concesiones de autorizaciones de uso terapéutico, etcétera) son datos de carácter personal relativos a la salud y, por dicha razón, merecedores de una especial protección.

Por último, la Ley, pretendiendo ser consecuente con el fin de impedir actos contrarios al espíritu deportivo y con el fin, asimismo, de proteger la salud de las y los deportistas, con independencia de su condición federada, establece un régimen especial para las y los deportistas que participan en competiciones deportivas no federadas, tales como los deportistas con licencia escolar, con licencia universitaria o mediante inscripción equivalente a licencia. Resulta necesario proteger la salud de las y los deportistas que participan en competiciones organizadas, haciendo abstracción de la posesión de licencia federada. La Ley no pretende extender la realización de controles de dopaje generalizados sobre toda la población que practica deportiva y por ello habilita a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco a aprobar y publicar una relación de las competiciones deportivas no federadas que podrán ser objeto de la realización de controles de dopaje a sus deportistas. Se ha pretendido con ello ponderar la proporcionalidad de dicho control y limitar el mismo a aquellas competiciones deportivas que, por sus singulares características, deban ser susceptibles de control.

En definitiva, la Ley surge de una necesidad evidente de adaptar las disposiciones establecidas a lo largo de la Ley 14/1998 en materia de dopaje a la nueva realidad y pretende dotar al País Vasco de un marco jurídico ambicioso dirigido a erradicar de forma eficaz tal lacra del dopaje en nuestro deporte.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Concepto de dopaje y ámbito de aplicación.

1.- A los efectos de esta Ley, el dopaje consiste en el consumo por el o la deportista de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos para aumentar artificialmente su rendimiento deportivo representando ello un acto contrario al espíritu deportivo.

2.- Respecto a las competiciones deportivas en las que participen animales, el dopaje consiste en la administración a los animales de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos para aumentar artificialmente su rendimiento deportivo, representando ello un acto contrario al espíritu deportivo.

3.- A los puros efectos sancionadores también se considera como dopaje el conjunto de infracciones de la normativa antidopaje contenida en la presente Ley y en el resto de la normativa aplicable en materia de dopaje por parte de cualesquiera personas físicas o jurídicas que estén sujetas a la misma.

4.- El ámbito material general de la presente Ley está constituido, en principio, por las competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco. No obstante lo anterior, quedan excluidas de la aplicación de la Ley las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente.

5.- El ámbito subjetivo general de aplicación de esta Ley se extiende a las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco así como a todos aquellos y aquellas deportistas que compitan en el País Vasco. De igual forma, la Ley también será de aplicación a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad en el País Vasco, aunque sea temporalmente. Dicho ámbito subjetivo se entiende sin perjuicio de la aplicación de disposiciones estatales e internacionales a los citados deportistas con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal o internacional o por razón de poseer también licencias de dicho ámbito.

6.- A los efectos de la presente Ley se consideran deportistas todas aquellas personas que participen en las competiciones deportivas sujetas a la misma mediante licencia federada, universitaria o escolar o mediante título de inscripción que, a efectos de esta Ley, también tendrá la consideración de licencia deportiva.

7.- La presente Ley no será de aplicación a los controles de dopaje realizados con ocasión de la realización de pruebas de acceso a estudios universitarios, oposiciones y procesos de selección análogos.

Artículo 2.- Principios generales.

El deporte se regirá en la Comunidad Autónoma del País Vasco por los siguientes principios fundamentales en el campo de la lucha contra el dopaje:

- a) El dopaje es contrario a los valores de la ética deportiva y del olimpismo.
- b) El dopaje puede atentar gravemente a la salud de las y los deportistas o, en su caso, de los animales.
- c) El dopaje es rechazable en todas sus formas, de modo que está prohibido recomendar, proponer, autorizar, permitir, facilitar, vender, suministrar, consumir o utilizar sustancias y métodos que figuren prohibidos en la lista que apruebe el organismo competente siempre que dichas acciones se realicen por personas no autorizadas para ello o fuera de los cauces, objetivos o condiciones establecidas por la normativa correspondiente.
- d) Las y los deportistas tienen la obligación de someterse, dentro o fuera de competiciones, al control de dopaje al que se les requiera por las autoridades competentes y a los exámenes, revisiones, comprobaciones o investigaciones complementarias.
- e) La erradicación del dopaje en el deporte debe ser un objetivo fundamental de todas las organizaciones deportivas.
- f) La formación, la información y la investigación son instrumentos indispensables para la erradicación del dopaje.

Artículo 3.- Responsabilidades de las y los deportistas.

Las y los deportistas deberán asumir las siguientes responsabilidades en el campo de la lucha contra el dopaje:

- a) Conocer las disposiciones y acuerdos aplicables en el campo del dopaje y someterse a todas las medidas derivadas de los mismos.
- b) Presentarse a las tomas de muestras y demás controles en que sean requeridos y, asimismo, proporcionar toda la información que le sea solicitada.
- c) Ser responsables de todo lo que ingieran o utilicen.
- d) Informar al personal médico de su condición de deportista y de su obligación de no consumir o utilizar sustancias o métodos prohibidos en la reglamentación deportiva y asegurarse, en la medida de sus posibilidades, de que el tratamiento terapéutico prescrito no viola las normas antidopaje.
- e) Denunciar ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y ante aquellas instituciones competentes de cualquier violación de las normas antidopaje de la que tengan conocimiento.

- f) Colaborar en los programas de formación, información e investigación en materia antidopaje.
- g) Suscribir los documentos que se aprueben en el campo del control del dopaje para la participación en competiciones deportivas.
- h) Cualesquiera otras que les atribuya la presente Ley o el resto de la normativa aplicable.

Artículo 4.- Responsabilidades del personal del entorno de las y los deportistas y de los animales que participan en competiciones deportivas.

1.- El personal del entorno de las y los deportistas y de los animales que participan en competiciones deportivas deberá asumir las siguientes responsabilidades en el campo de la lucha contra el dopaje:

- a) Conocer las disposiciones y acuerdos aplicables en el campo del dopaje y someterse a todas las medidas derivadas de los mismos.
- b) Cooperar en los procesos de control de dopaje sobre sus deportistas y animales, así como proporcionar toda la información que le sea solicitada.
- c) Ejercer una influencia positiva sobre los valores y conductas en torno al dopaje.
- d) Instruir y aconsejar a sus deportistas en materia de medidas y reglas antidopaje.
- e) Denunciar ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y ante aquellas instituciones competentes de cualquier violación de las normas antidopaje de la que tengan conocimiento.
- f) Colaborar en los programas de formación, información e investigación en materia antidopaje.
- g) Suscribir los documentos que se aprueben en el campo de control del dopaje para la participación en competiciones deportivas.
- h) Cualesquiera otras que les atribuya la presente Ley o el resto de la normativa aplicable.

2.- A los efectos de esta Ley se considerarán personas del entorno del deportista o animal que participa en competiciones deportivas, cualquier entrenador o entrenadora, instructor o instructora, director o directora deportivo, agente, personal del equipo, personal médico, veterinario o paramédico, o personal que trate o auxilie a deportistas o animales que participen en competiciones deportivas o se preparen para ellas.

Artículo 5.- Responsabilidades de los poderes públicos.

Los poderes públicos del País Vasco deberán asumir las siguientes responsabilidades en el campo de la lucha contra el dopaje:

- a) Asegurarse de que todas las medidas y normas antidopaje que se adopten sean conformes con la normativa vigente.
- b) Exigir a las organizaciones deportivas el cumplimiento estricto de las normas y acuerdos adoptados en la materia.
- c) Contribuir, en la medida de sus posibilidades y competencias, al sostenimiento financiero de los diferentes programas antidopaje.
- d) Adoptar medidas de protección de deportistas menores ante el riesgo del dopaje.
- e) Denunciar ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y aquellas instituciones competentes cualquier violación de las normas antidopaje de la que tengan conocimiento.
- f) Negar cualquier subvención o ayuda a cualesquiera entidades deportivas o deportistas que hayan sido sancionados por infringir la normativa antidopaje o que rehúsen someterse a los controles correspondientes.
- g) Cualesquiera otras que les atribuya la presente Ley o el resto de la normativa aplicable.

Artículo 6.- Responsabilidades de las entidades deportivas.

1.- Las entidades deportivas del País Vasco deberán asumir las siguientes responsabilidades en el campo de la lucha contra el dopaje:

- a) Asegurarse de que todas las medidas y normas antidopaje que se adopten sean conformes con la normativa vigente.
- b) Contribuir, en la medida de sus posibilidades y competencias, al sostenimiento financiero de los diferentes programas antidopaje.
- c) Negar cualquier subvención o ayuda a cualesquiera entidades deportivas o deportistas que hayan sido sancionados por infringir la normativa antidopaje o que rehúsen someterse a los controles correspondientes.
- d) Adoptar medidas de protección de deportistas menores ante el riesgo del dopaje.
- e) Aprobar la reglamentación antidopaje correspondiente con arreglo a las normas contenidas en esta Ley y en las disposiciones que desarrollen la misma.
- f) Realizar los adecuados controles dentro y fuera de competición.

- g) Denunciar ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y ante aquellas instituciones competentes la violación de las normas antidopaje que conozcan.
- h) Desarrollar programas de formación, información e investigación en materia antidopaje o colaborar con los mismos.
- i) Autorizar la participación de observadores y observadoras independientes en materia de control de dopaje.
- j) Habilitar áreas en adecuadas condiciones para la realización de controles de dopaje, adaptadas a las necesidades de mujeres y hombres deportistas.
- k) Velar por la confidencialidad de los resultados de los análisis de los procesos de control de dopaje hasta el momento que resulte procedente la comunicación de los mismos.
- l) Dotarse de los órganos antidopaje que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.
- m) Comprobar la concesión y aplicación de las autorizaciones de uso terapéutico y de las bajas deportivas.
- n) Impedir la participación de deportistas con sanciones vigentes en materia de dopaje.
- ñ) Cualesquiera otras que les atribuya la presente Ley o el resto de la normativa aplicable.

2.- Las federaciones deportivas vascas y territoriales y otras entidades deportivas deberán disponer, en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo en materia de dopaje, de los correspondientes programas, disposiciones y órganos antidopaje. Para ello podrán contar con la asistencia técnica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.- En el supuesto que una federación deportiva vasca o territorial u otras entidades deportivas no asuman el ejercicio de la función pública en materia de dopaje deberá intervenir la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos previstos en el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 7.- Responsabilidad de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos.

Las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos del País Vasco deberán asumir las siguientes responsabilidades en el campo de la lucha contra el dopaje:

- a) Asegurarse de que todas las medidas y normas antidopaje que se adopten sean conformes con la normativa vigente.
- b) Exigir a las organizaciones deportivas el cumplimiento estricto de las normas y acuerdos adoptados en la materia.

- c) Contribuir, en la medida de sus posibilidades y competencias, al sostenimiento financiero de los diferentes programas antidopaje.
- d) Adoptar medidas de protección de deportistas menores ante el riesgo del dopaje.
- e) Aprobar la reglamentación antidopaje correspondiente con arreglo a las normas contenidas en esta Ley y en las disposiciones que desarrollen el mismo.
- f) Realizar los adecuados controles de dopaje.
- g) Denunciar ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco la violación de las normas antidopaje sobre la que tengan conocimiento.
- h) Desarrollar, o en su caso colaborar en, programas de formación, información e investigación en materia antidopaje.
- i) Autorizar, en sus eventos, la participación de observadores y observadoras independientes en materia de control de dopaje.
- j) Velar por la confidencialidad de los resultados de los análisis de los procesos de control de dopaje hasta el momento que resulte procedente la comunicación de los mismos.
- k) Impedir la participación de deportistas con sanciones vigentes en materia de dopaje.
- l) Habilitar áreas en adecuadas condiciones para la realización de controles de dopaje adaptadas a las necesidades de mujeres y hombres deportistas.
- m) Dotarse de los órganos antidopaje que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.
- n) Comprobar la concesión y aplicación de las autorizaciones de uso terapéutico y de las bajas deportivas.
- ñ) Cualesquiera otras que les atribuya la presente Ley o el resto de la normativa aplicable.

Artículo 8.- Derechos de las y los deportistas.

Las y los deportistas que vayan a ser sometidos a un control de dopaje ostentan, entre otros, los siguientes derechos:

- a) A que sus datos de carácter personal sean protegidos con arreglo al ordenamiento jurídico vigente.
- b) A ser asistidos y asistidas, a su costa, en el control antidopaje por la persona de su confianza que se halle presente o disponible en la zona de dicho control.

- c) A presentar alegaciones ante una notificación de presunto dopaje.
- d) A realizar el control antidopaje con pleno respeto a su dignidad o intimidad salvo en los límites que resulten necesarios.
- e) A que no se les grabe o fotografíe en el momento de la realización del control antidopaje.
- f) A exigir la realización de un contraanálisis en el supuesto de que el primer análisis dé un resultado analítico positivo o adverso.
- g) A exigir la destrucción de las muestras de sangre, orina o cualesquiera muestras que le hayan sido tomadas u obtenidas, una vez transcurrido el plazo de prescripción previsto en esta Ley. La utilización de las muestras para fines de investigación se realizará previa anonimización de manera que no pueda asociarse a ningún deportista en particular y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre investigación biomédica.
- h) A exigir de los organismos deportivos la confidencialidad de los resultados en los términos previstos en esta Ley y a ser informados por dichos organismos con carácter preferente de cualquier resultado de los análisis.
- i) A obtener las correspondientes autorizaciones de uso terapéutico para que usen una sustancia prohibida o un método prohibido contenido en la lista de sustancias y métodos prohibidos cuando cumplan los requisitos establecidos en la normativa de desarrollo de la presente Ley.
- j) Cualesquiera otras que les atribuya la presente Ley o el resto de la normativa aplicable.

Artículo 9.- Patrocinio de deportistas y entidades.

1.- Las Administraciones Públicas del País Vasco y sus entidades instrumentales de Derecho Público o Privado, o entidades participadas por aquellas, no podrán patrocinar ni subvencionar a entidades deportivas que hayan sido sancionadas por infringir la normativa antidopaje o por haberse negado a colaborar en los controles correspondientes. Tal prohibición subsistirá mientras dure la sanción o subsista la falta de colaboración.

2.- Las Administraciones Públicas del País Vasco y sus entidades instrumentales de Derecho Público o Privado, o entidades participadas por aquellas, no podrán patrocinar ni subvencionar a deportistas que se encuentren sancionados y sancionadas por acciones de dopaje o a deportistas que hayan sido sancionados o sancionadas por haberse negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje. Tal prohibición subsistirá mientras dure la sanción o subsista la falta de colaboración.

3.- En el supuesto de que se encuentre vigente una relación de patrocinio o subvencional la sanción facultará a las Administraciones para resolver dicha relación jurídica quedando exoneradas de abonar aquellas cantidades que resultaren pendientes de pago. El deber de reintegro se sujetará a los requisitos y procedimientos establecidos en las correspondientes normas reguladoras de las subvenciones.

Artículo 10.- Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá las siguientes competencias en la lucha contra el dopaje:

- a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre dopaje.
- b) Atender las peticiones, consultas, denuncias y reclamaciones formuladas en materia de dopaje.
- c) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos y obligaciones en materia de dopaje.
- d) Requerir a los organismos competentes la adopción de las medidas necesarias para la adecuación de su organización, normativa o actividad a la legislación en materia de dopaje y, en su caso, ordenar la cesación o modificación cuando no se ajusten a dicha legislación.
- e) Ejercer la potestad sancionadora, así como adoptar las medidas cautelares que procedan.
- f) Realizar las funciones de inspección deportiva a que se refiere el artículo 119 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco recabando cuanta información precise para el cumplimiento de su cometido. A tal efecto, podrá solicitar cualesquiera aclaraciones a deportistas y personas de su entorno, la exhibición o el envío de documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar equipos y locales en los términos que permita la legislación vigente.
- g) Elaborar y, en su caso, llevar a cabo y vigilar, un programa anual de controles de dopaje que incluya controles dentro y fuera de competición, realizados a su instancia, sin perjuicio de los que pudiesen ser realizados en Euskadi por otras entidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- h) Recabar de los órganos correspondientes cuanta ayuda e información estime necesaria para una eficaz lucha contra el dopaje.
- i) Redactar una memoria anual y remitirla al Parlamento Vasco.
- j) Realizar actividades divulgativas, formativas y de sensibilización por un deporte libre de dopaje; divulgar información relativa al uso de sustancias y métodos prohibidos y sus modalidades de control; hacer informes y estudios sobre las causas y efectos del dopaje; promover e impulsar acciones de prevención. En el desarrollo de estas funciones, se deberá integrar la perspectiva de género para fomentar y divulgar la investigación sobre el dopaje y sus efectos concretos en los hombres y en las mujeres deportistas.
- k) Determinar las competiciones y las pruebas deportivas susceptibles de sometimiento a controles antidopaje.
- l) Velar por la protección de la presunción de inocencia de las y los deportistas sometidos a control.

- m) Instar a las federaciones deportivas vascas y territoriales a abrir expedientes disciplinarios y, si procede, interponer los correspondientes recursos contra las resoluciones disciplinarias de estas federaciones.
- n) Tramitar y resolver los expedientes disciplinarios cuando las federaciones deportivas no hayan resuelto en plazo los mismos.
- ñ) Aprobar las disposiciones y formularios necesarios en materia de localización de deportistas para la realización de controles de dopaje.
- o) Emitir informe preceptivo respecto a aquellos proyectos normativos que sean tramitados por el Gobierno Vasco y afecten a la lucha contra el dopaje, así como emitir informe respecto a iniciativas normativas de otras instituciones cuándo sea requerida por éstas.
- ð) Participar en reuniones, foros e instituciones estatales e internacionales, relacionadas directamente con la lucha contra el dopaje.
- q) Colaborar con otras Administraciones y entidades deportivas en lo relativo a la información y documentación sobre las autorizaciones de uso terapéutico y en cualesquiera otros ámbitos cuando sea necesario para una eficaz lucha contra el dopaje en el deporte.
- r) Llevar a cabo las relaciones de colaboración que resulten precisas con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el dopaje en el deporte.
- s) Promover la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación en materia de dopaje, impulsando proyectos específicos, directamente o en colaboración con universidades, organismos públicos de investigación y cualesquiera otras instituciones que promuevan la investigación, desarrollo o innovación.
- t) Realizar la recogida y transporte de las muestras en los controles de dopaje que organice la propia Administración o en los controles realizados por terceras entidades cuando así esté previsto en los correspondientes convenios.
- u) Promover la formación de personal para la recogida de muestras en los controles de dopaje en orden a su posterior habilitación, fomentando una participación equilibrada de mujeres y hombres que asegure el cumplimiento de las previsiones legales sobre la presencia de una persona del equipo de recogida que sea del mismo sexo que el o la deportista.
- v) Conceder o denegar las autorizaciones de uso terapéutico a través del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT).
- w) Cuantas otras que, siendo competencia de la citada Administración, se refieran a la lucha contra el dopaje y no estén expresamente atribuidas a otros órganos o entidades, así como aquellas funciones que le sean atribuidas por otras Leyes y reglamentos.

2.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco se dotará de las estructuras administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.

El personal que ejerza la inspección a que se refiere la letra f) del apartado anterior tendrá la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos, y estará obligado a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en las mismas. Sus actas se presumen veraces.

Artículo 11.- Consejo Consultivo y Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT).

1.- El Consejo Consultivo está compuesto por los siguientes miembros:

- a) Cuatro representantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que serán designados por la Consejera o Consejero competente en materia de deporte, procedentes de áreas departamentales relacionadas con el deporte, la sanidad, la seguridad y la protección de animales.
- b) Una persona en representación de cada uno de los territorios históricos designada por la Consejera o Consejero competente en materia de deporte a propuesta de éstos.
- c) Una persona en representación de las federaciones deportivas que se designará por la Consejera o Consejero competente en materia de deporte a propuesta de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
- d) Una persona experta en Medicina en el ámbito del Deporte, una experta en Farmacia, una experta en Veterinaria, una experta en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y una experta en Derecho del Deporte designada por la Consejera o Consejero competente en materia de deportes, a propuesta de las organizaciones profesionales interesadas.

2.- El Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT) actuará con plena autonomía funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus miembros serán designados por el Director o Directora del Gobierno Vasco competente en materia de deportes con arreglo a las directrices que establece el Anexo II de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de 18 de noviembre de 2005 en materia de composición y cualificación de sus miembros.

3.- La pertenencia al Consejo Consultivo y al COVAUT no dará lugar a retribución alguna, pero las y los miembros y participantes en los mismos tendrán derecho al abono de los gastos y dietas en los términos establecidos en la normativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma reguladora de las indemnizaciones por razón de servicio.

4.- La composición del Consejo Consultivo y del COVAUT tratará de atender el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.

CAPITULO II

CONTROLES DE DOPAJE

Artículo 12.- Deportistas con obligación de someterse a control de dopaje.

- 1.- Las y los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la presente Ley tendrán obligación de someterse a los controles en competición y fuera de competición que determine la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los demás organismos públicos y privados habilitados mediante la presente Ley. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de tales deportistas a someterse a los controles previstos en las disposiciones estatales e internacionales.
- 2.- Los controles fuera de competición pueden realizarse por sorpresa o previa citación. En el primer supuesto, la obligación a que se refiere este artículo alcanza al sometimiento de los mismos y, en el segundo, a la obligación de comparecer y al sometimiento a los mismos.
- 3.- Los términos de los controles en competición y fuera de competición se determinarán reglamentariamente, procurando una adecuada ponderación de los derechos de las y los deportistas y las necesidades materiales para una efectiva realización de los mismos.
- 4.- La obligación de someterse a los controles alcanza, igualmente, a las y los deportistas que hayan sido suspendidos por haber incurrido en una infracción de dopaje mientras se encuentren cumpliendo la sanción y, en todo caso, con carácter previo a la rehabilitación de la licencia deportiva.
- 5.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá extender la obligación de someterse a los controles de dopaje a aquellas y aquellos deportistas que, teniendo licencia y no habiéndola renovado en el plazo establecido, exista presunción razonable de que no han abandonado la práctica deportiva y puedan estar tratando de eludir la realización de controles de dopaje fuera de competición hasta la renovación de la misma.
- 6.- Para la realización y la mayor eficacia posible de los controles a que se refiere el apartado primero, deportistas, equipos, entrenadores y entrenadoras, personal directivo y demás personas del entorno de la o el deportista deberán facilitar, en los términos que reglamentariamente se establezca, los datos que permitan la localización habitual de las y los deportistas, de forma que se puedan realizar, materialmente, los controles de dopaje.
- 7.- Las y los deportistas, sus entrenadores y entrenadoras, médicos, médicas y demás personal sanitario, así como el personal directivo de clubes y organizaciones deportivas y demás personas del entorno de la o el deportista indicarán, en el momento de realización de los controles de dopaje, los tratamientos terapéuticos a que estén sometidos o sometidas las y los deportistas, responsables de los mismos y el alcance del tratamiento, salvo que las y los deportistas negaren expresamente la autorización para tal indicación. Asimismo, dicha obligación de información se extiende, cuando así se les requiera, a la verificación de las dolencias y de su tratamiento.

8.- La negativa de una o un deportista a informar o a conceder la citada autorización para que otros informen será considerada como infracción por incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos.

9.- Los controles para los que hayan sido citados, los controles realizados y los resultados de los mismos se incluirán en la Tarjeta de Salud de Deportista, en los términos de la regulación de la misma contenidos en el desarrollo reglamentario de esta Ley.

10.- Podrán ser sometidos y sometidas a control deportistas con licencia estatal o internacional que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o que residan, aunque temporalmente, en ésta. La tramitación de los expedientes administrativos sancionadores o disciplinarios que pudieran derivarse de los mismos se tramitará por el organismo que resulte competente con arreglo a la Ley. Asimismo, podrán ser sometidos y sometidas a controles fuera de competición cuando se encuentren entrenando en el País Vasco, a instancia de la federación u organismo internacional competente.

En cualquier caso, los resultados analíticos definitivos de los controles de dopaje efectuados en el País Vasco serán trasladados a los organismos deportivos correspondientes que puedan resultar competentes.

Artículo 13.- De las garantías en los controles y de los efectos legales de los mismos.

1.- Los controles a que se refiere el artículo anterior se realizarán por un equipo de recogida de muestras siempre bajo la responsabilidad del personal habilitado por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desempeño de esta función.

2.- De conformidad con la normativa internacional antidopaje y, en especial, el Código Mundial Antidopaje y sus normas de desarrollo, los controles de dopaje fuera de competición y los controles de salud no podrán realizarse durante una franja horaria, que se determinará reglamentariamente y que comprenderá, en todo caso, las horas habitualmente destinadas al descanso nocturno. Durante esas horas no podrá realizarse en el País Vasco ningún control de dopaje, con independencia de que éste haya sido ordenado por una autoridad administrativa, federación deportiva u organismo estatal o internacional.

3.- Tampoco podrá obligarse a una o un deportista a pasar más de un control de dopaje en una misma prueba. No se considerará que se trata del mismo control cuando los tipos de muestras solicitadas a las y los deportistas sean diferentes. Reglamentariamente se regulará el alcance de este derecho.

4.- La negativa a ser sometido a controles de dopaje durante la franja horaria destinada al descanso nocturno o al amparo del derecho establecido en el párrafo anterior no producirá responsabilidad alguna.

5.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco velará para que los controles de dopaje en el País Vasco se realicen siempre, con independencia de quién los ordene, respetando estas limitaciones horarias.

6.- Las y los deportistas serán informados en el momento de recibir la notificación de control y, en su caso, al iniciarse la recogida de la muestra, de los derechos y obligaciones que les asisten en relación con el citado control, de los trámites esenciales del procedimiento y de sus principales consecuencias, así como del

tratamiento y cesión de los datos previstos en la presente Ley, además de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

7.- Entre los citados derechos que les asisten se incluirá el derecho a no someterse a la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y de lo establecido en el artículo 23.1.c de esta Ley.

8.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá un modelo normalizado de información para la notificación de los controles, para la recogida de las muestras en la realización de los controles de dopaje y para la remisión de las muestras recogidas al correspondiente laboratorio.

9.- A los efectos de los procedimientos disciplinarios o sancionadores en materia de dopaje, la negativa sin justa causa a someterse a los controles o la negativa a responder a los requerimientos de información por parte de la organización antidopaje, una vez documentada, constituirá prueba suficiente para sancionar la conducta de la o el deportista. Se entiende por justa causa para no someterse a un control la imposibilidad de acudir, como consecuencia de lesión acreditada o cuando se acredite que la realización del control ponga en grave riesgo la salud de la o el deportista.

Dicha imposibilidad deberá ser verificada por la persona responsable del equipo de recogida de muestras.

10.- El documento que acredite la negativa a que se refiere el apartado anterior, suscrito por la o el médico o personal sanitario habilitado, gozará de la presunción de veracidad prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14.- Obligaciones accesorias y autorizaciones de uso terapéutico.

1.- Los clubes y demás entidades deportivas que se determinarán reglamentariamente están obligados a llevar un libro, debidamente registrado en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del que exista garantía de su integridad, en el que harán constar los tratamientos terapéuticos que se hayan prescrito a las y los deportistas bajo su dirección, siempre que éstos y éstas autoricen dicha inscripción. Dicho libro tendrá la consideración de documento sanitario a los efectos de custodia y protección de datos.

2.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá complementar o sustituir el libro registro por procedimientos centralizados de bases de datos con utilización de las nuevas tecnologías de la información e identificación electrónica, como la firma digital y los sistemas de historia electrónica única y centralizada.

3.- Las y los deportistas tendrán derecho a solicitar, en el momento de su inscripción en el libro, que se les entregue una copia del asiento en el que conste debidamente identificado el facultativo, facultativa o profesional sanitario que, bajo su dirección, ha prescrito o realizado el tratamiento médico o sanitario, debiendo constar la firma y sello, en su caso, de la o el profesional responsable de la atención sanitaria.

4.- En el libro cada actuación sanitaria deberá ser refrendada por la firma de la o el deportista como garantía de que se ha realizado dicha actuación y ha autorizado el asiento en dicho libro.

5.- Cualquier tratamiento terapéutico que se pueda considerar dopaje, incluso aunque cuente con la debida autorización, deberá seguir un procedimiento de consentimiento informado que se regulará reglamentariamente y del que se guardará una copia en el libro registro.

6.- Esta obligación de registro alcanza a las federaciones deportivas vascas y territoriales cuando las y los deportistas se encuentren bajo su responsabilidad en el marco de las selecciones deportivas.

7.- En los deportes individuales, esta obligación recaerá sobre la o el deportista o sobre la correspondiente federación en la forma que se indica en el apartado anterior.

8.- En caso de que se haya expedido una autorización de uso terapéutico por parte de un organismo de otra Comunidad Autónoma, estatal o internacional a una o un deportista que desee competir en el País Vasco, o exista una declaración de uso de glucocorticosteroides u otras sustancias con régimen análogo, la o el deportista, o la persona que se designe para ello, deberá informar de ello en el control de dopaje que, en su caso, se le realice.

9.- Los órganos antidopaje y los órganos disciplinarios o sancionadores del País Vasco no podrán considerar válidas las autorizaciones de uso terapéutico o las declaraciones citadas en el apartado anterior que no se encuentren debidamente registradas. Tampoco podrán considerar válidas aquellas autorizaciones o declaraciones que, debidamente registradas, se hayan obtenido fraudulentamente o se hayan aplicado a las y los deportistas incumpliendo sus condiciones en lo relativo a las dosis, vías de administración o plazo de tratamiento.

10.- Las entidades deportivas podrán limitar en sus reglamentos el número máximo de deportistas con autorizaciones de uso terapéutico o declaraciones de uso de glucocorticosteroides u otras sustancias con régimen análogo que pueden alinearse en los correspondientes equipos.

11.- La revisión de la correcta obtención o aplicación de las autorizaciones de uso terapéutico o declaraciones deberá ser realizada por el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT).

12.- El tratamiento y cesión de los datos de carácter personal a que se refieren los apartados anteriores se ajustará, íntegramente, a las disposiciones establecidas en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

13.- La concesión o denegación de autorizaciones de uso terapéutico podrá ser impugnada ante el órgano del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.

14.- En el supuesto de que el resultado analítico de un control de dopaje de una o un deportista arroje un positivo o informe adverso, pero exista una autorización de uso terapéutico válida, vigente y adecuada a los resultados analíticos, o la declaración de uso correspondiente, se considerará por el órgano disciplinario o sancionador correspondiente a través de la correspondiente instrucción reservada que el resultado es negativo, no resultando necesaria la remisión de actuaciones a los órganos disciplinarios o sancionadores.

15.- Las y los deportistas y demás personas obligadas a presentar las solicitudes de autorizaciones de uso terapéutico, declaraciones de uso de glucocorticosteroides y análogas deben comunicar previamente a la

celebración de los eventos que se han sometido a algún tratamiento, aunque presenten posteriormente las solicitudes y declaraciones correspondientes.

16.- Las y los deportistas sin licencia que residan, entrenen o compitan en el País Vasco no tendrán que cumplir las obligaciones documentales e informativas previstas en esta Ley para los deportistas con licencia.

Artículo 15.- Bajas deportivas.

1.- Las federaciones deportivas territoriales y vascas, así como las demás entidades deportivas a las que resulte aplicable esta Ley, podrán contemplar en sus reglamentos la situación de baja deportiva. En esta situación las y los deportistas pueden recibir libremente el tratamiento terapéutico que se considere adecuado para tratar cualquier lesión o enfermedad, aunque estarán inhabilitados e inhabilitadas para participar en competiciones deportivas de todo tipo.

2.- Al objeto de evitar sanciones en los supuestos de realización de controles de dopaje por sorpresa, la situación de baja deportiva deberá ser concedida por el correspondiente Comité Antidopaje y registrada en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Durante la situación de baja deportiva la o el deportista no podrá competir durante el plazo que determine el Comité Antidopaje de la correspondiente organización deportiva al objeto de evitar que dicho tratamiento pueda ser utilizado fraudulentamente para mejorar el rendimiento.

3.- Los comités antidopaje de las respectivas organizaciones deportivas y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán revisar el régimen de concesión de las bajas y altas deportivas.

4.- Las altas y bajas se incorporarán a la tarjeta de salud de deportista que, en su caso, disponga.

5.- Los órganos disciplinarios y sancionadores no podrán considerar válidas las bajas deportivas que no se encuentren debidamente registradas en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tampoco podrán considerar válidas aquellas bajas, debidamente registradas, que se hayan obtenido fraudulentamente.

6.- El tratamiento y cesión de los datos de carácter personal a que se refieren los apartados anteriores se ajustará, íntegramente, a las disposiciones establecidas en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, teniendo en consideración que los datos de las y los deportistas obtenidos en los controles de dopaje y de salud, en los reconocimientos médicos, en los procedimientos de las autorizaciones de uso terapéutico y de las bajas deportivas requieren medidas de seguridad de nivel alto.

7.- Las decisiones de los comités antidopaje en materia de altas y bajas deportivas podrán ser impugnadas ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

8.- En el supuesto de que el resultado de un control de dopaje arroje un resultado analítico adverso, pero exista una baja deportiva debidamente registrada en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se considerará por el comité antidopaje que el resultado es negativo y no se incoará el correspondiente expediente disciplinario o sancionador. Tampoco se incoará dicho expediente en el supuesto de que, existiendo la citada baja deportiva debidamente registrada, el o la deportista no realice el control de dopaje.

Artículo 16.- Controles de dopaje y controles de salud.

1.- A los efectos de esta Ley, se entienden como controles de dopaje el conjunto de actividades realizadas por entidades y personas habilitadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuya finalidad es averiguar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario, detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto. También se considerarán controles de dopaje todas aquellas actuaciones desarrolladas por los órganos antidopaje competentes para verificar el incumplimiento de la normativa antidopaje.

2.- En todo caso, quedan incluidos en el ámbito de los controles de dopaje la planificación necesaria para su realización con garantías, la selección de deportistas a quienes efectuar los controles y bajo qué modalidad, la recogida y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio, así como la gestión y custodia de los resultados obtenidos.

3.- Las muestras a que se refiere el párrafo anterior serán de aire, orina, sangre o cualquier otro fluido o muestra de carácter menor, en la forma que se determine reglamentariamente. Esta determinación incluirá la forma en que se validan, a estos efectos, los procedimientos analíticos.

4.- A los efectos de esta Ley, se entiende por controles de salud el conjunto de actuaciones que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva en sus miembros así como para controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones derivadas de la Ley en materia de dopaje y salud. Los resultados analíticos de los controles de salud no conllevarán sanciones disciplinarias o administrativas, aunque sí podrán llevar aparejadas medidas de carácter deportivo o laboral establecidas por dichas entidades deportivas y podrán servir para la planificación de los controles de dopaje.

5.- Tales controles de salud son independientes de los reconocimientos médicos que puedan realizar voluntariamente las y los deportistas profesionales al amparo de la legislación laboral para la protección de su salud.

6.- Asimismo, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de licencia a una o un deportista por razones de salud.

7.- Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y características que han de revestir las actuaciones de protección de la salud a las y los deportistas.

Artículo 17.- Planificación y gestión de los controles.

1.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco determinará, de conformidad con lo indicado en el artículo anterior, los controles de dopaje, los controles de salud y demás actuaciones en materia de protección de la salud que deben ser realizados por las entidades a que se refiere esta Ley.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en función de las características del respectivo deporte y de la planificación que al respecto se establezca, podrá someter a las y los deportistas a controles dentro y fuera de competición, especialmente cuando integren o vayan a integrar las selecciones deportivas vascas. Estos controles tienen la consideración de adicionales respecto de los que puedan establecer las federaciones deportivas u otras entidades deportivas.

3.- En la realización de los controles se cuidará que los mismos se lleven a cabo con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona, a la protección de sus datos personales y a las mejoras prácticas para la realización de dichas actividades.

Artículo 18.- Competencia para la realización de los controles.

1.- Con carácter general y, sin perjuicio de las competencias de otras entidades previstas en esta Ley, corresponde a las federaciones deportivas vascas y territoriales la realización de las actuaciones necesarias para llevar a cabo los controles respecto a las competiciones federadas que determine la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Cuando la insuficiencia de medios o la estructura de la propia federación así lo justifique, dicha función será realizada por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.- En los controles de dopaje realizados a las y los deportistas en el ámbito de aplicación de la presente Ley los análisis de las tomas de muestras deberán llevarse a cabo en laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial Antidopaje.

4.- De acuerdo con los criterios establecidos en el Código Mundial Antidopaje, en cada competición deportiva sólo debe existir una organización responsable del control de dopaje.

5.- Para la realización de controles fuera de competición a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones internacionales tendrán preferencia para la realización de aquellos controles las organizaciones deportivas internacionales.

6.- Para la realización de controles fuera de competición a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán preferencia para la realización de aquellos controles las organizaciones de ámbito estatal.

Artículo 19.- Publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

1.- En el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales, el Gobierno Vasco ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan cambios en la misma.

2.- El Gobierno Vasco establecerá formas adicionales de información y de consulta de la lista de sustancias y métodos prohibidos mediante su inserción en páginas digitales de instituciones y de entidades relacionadas con el deporte, así como por cualquier otro medio y soporte que faciliten el conocimiento, la difusión y la accesibilidad de la misma.

CAPITULO III

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL DOPAJE

Artículo 20.- Ámbito de aplicación del régimen disciplinario.

1.- El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta Ley resulta de aplicación a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias exigidas en el artículo 46 de la Ley 14/1998, del País Vasco, y a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción con las demás entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente Ley o se sujeten voluntariamente a la misma.

2.- Las infracciones cometidas en materia de dopaje con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal se regirán por las normas disciplinarias de ámbito estatal.

3.- Las infracciones cometidas en materia de dopaje con ocasión de competiciones deportivas de ámbito internacional se regirán por las normas disciplinarias de ámbito internacional.

Artículo 21.- Ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador.

1.- El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta Ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito autonómico, estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales. No será precisa la existencia de relaciones de especial sujeción y las acciones u omisiones también pueden materializarse en actividades deportivas de carácter no competitivo.

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32 de esta Ley sobre la aplicación del principio del *non bis in idem*.

Artículo 22.- Responsabilidad de deportistas y de su entorno.

1.- Las y los deportistas se asegurarán que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo, siendo responsables en cualquier caso cuando se produzca la detección de su presencia en el mismo. El alcance de la responsabilidad será el determinado en el régimen disciplinario y administrativo sancionador que se establece en el presente capítulo.

2.- Para establecer la responsabilidad de la o el deportista no será necesario demostrar intención, uso consciente o negligencia por su parte. No obstante lo anterior, podrá demostrar que no ha incurrido en culpa o negligencia o que no pretendía mejorar su rendimiento deportivo. En tal caso se seguirán los criterios establecidos en el Código Mundial Antidopaje.

3.- El incumplimiento de la obligación establecida en el apartado primero de este artículo dará lugar a la exigencia de responsabilidades y a la adopción de las correspondientes medidas disciplinarias y sancionadoras

de carácter administrativo, de conformidad y con el alcance previsto en los Convenios Internacionales ratificados por España, en la legislación estatal aplicable y en los artículos de esta Ley.

4.- Las y los deportistas, sus entrenadores y entrenadoras, el personal directivo, así como las entidades deportivas a las que esté adscrito la o el deportista y restantes personas del entorno del deportista, responderán del incumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de localización habitual de deportistas.

5.- Las y los deportistas, sus entrenadores y entrenadoras, médicos, médicas o personal sanitario y directivo, dirigentes, así como las entidades deportivas, y restantes personas del entorno de deportistas responderán por el incumplimiento de las disposiciones que regulan la obligación de facilitar a los órganos competentes información sobre las enfermedades de la o el deportista, tratamientos terapéuticos a que esté sometido, alcance y responsable del tratamiento, cuando aquél o aquélla haya autorizado la utilización de tales datos.

6.- De igual forma, responderán por el incumplimiento o infracción de los requisitos establecidos para la obtención de las autorizaciones de uso terapéutico o para la formulación de las declaraciones de uso de glucocorticosteroides o de otras sustancias previstas en la normativa vigente.

Artículo 23.- Tipificación de infracciones.

1.- A los efectos de la presente Ley, se consideran como infracciones muy graves:

- a) El incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el artículo 22.1 de esta Ley, que dé lugar a la detección de la presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en las muestras físicas de una o un deportista.
- b) La utilización, uso o consumo de sustancias o métodos prohibidos o no autorizados en el deporte.
- c) La resistencia o negativa, sin justa causa, a someterse a los controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, cuando sean exigidos o requeridos por los órganos o personas competentes; así como la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y demás conductas que, por acción u omisión, impidan, perturben o no permitan atender los requerimientos formulados por órganos o personas competentes para la recogida de muestras o para la realización de cualesquiera otras actuaciones en los procedimientos de control y represión del dopaje.
- d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones a que hace referencia el artículo 22.4 de esta Ley y de los requisitos relativos a la localización y disponibilidad de las y los deportistas para la realización de controles fuera de competición.
- e) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos terapéuticos y obtención de autorizaciones para el uso terapéutico a que hacen referencia los apartados 5 y 6 del artículo 22 de esta Ley, así como la negativa de la autorización para la inscripción de tales tratamientos terapéuticos referida en el artículo 14.1 y la vulneración de lo dispuesto en el artículo 48 de la presente Ley.

- f) La alteración, falsificación o manipulación de cualquier elemento de los procedimientos de control y de represión del dopaje.
- g) La posesión de sustancias o la utilización de métodos prohibidos o no autorizados en el deporte, cuando se carezca de una autorización de uso terapéutico para su administración o dispensación, o cuando el volumen o cantidad de las sustancias, útiles o métodos sea injustificadamente elevado o desproporcionado para su administración o aplicación con fines terapéuticos.
- h) La administración, dispensa, ofrecimiento, facilitación o suministro a deportistas de sustancias o la utilización de métodos no reglamentarios o prohibidos en la práctica deportiva.
- i) La promoción, incitación, contribución, instigación o facilitación de las condiciones para la utilización de sustancias o métodos prohibidos o no reglamentarios, o cualquier otra actividad que aliente a las y los deportistas a que utilicen productos o realicen conductas no permitidas por las normas de control de dopaje o que tenga por objeto poner a disposición de los deportistas sustancias o métodos prohibidos o no autorizados en el deporte.
- j) La colaboración o participación, por acción u omisión, en la puesta en práctica de los métodos no reglamentarios o en cualesquiera otras conductas que vulneren la normativa contra el dopaje.
- k) El depósito, comercialización o distribución, bajo cualquier modalidad, en centros deportivos, de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Igualmente, se prohíbe incitar al consumo de sustancias y productos en los citados centros deportivos.
- l) La obtención y uso de modo fraudulento de la baja deportiva y el incumplimiento o infracción de los requisitos establecidos, en su caso, para obtenerla y usarla.

2.- Se consideran infracciones graves:

- a) El incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el artículo 22.4 de esta Ley y la vulneración de los requisitos relativos a la localización y disponibilidad de deportistas para la realización de controles fuera de competición, salvo que se cometan de forma reiterada, en cuyo caso se considerarán infracciones muy graves.
- b) Las conductas descritas en las letras a), b), e) y g) del apartado anterior, cuando afecten, versen o tengan por objeto sustancias o métodos identificados en el correspondiente instrumento jurídico como de menor gravedad, salvo que se cometan de forma reiterada, en cuyo caso se considerarán infracciones muy graves.
- c) La contratación, adjudicación, asignación o encomienda de la realización material de actividades sanitarias a personas o entidades que carezcan o tengan suspendida la licencia federativa o la habilitación equivalente, cuando este requisito resulte exigible para la realización de tales actividades; así como la realización material de las referidas actividades sin disponer de licencia federativa o habilitación equivalente o estando suspendida la que se hubiere obtenido.

d) La no llevanza de los libros obligatorios previstos en esta Ley.

3.- Las infracciones descritas en los apartados anteriores también se entenderán referidas, con las lógicas adaptaciones, a los supuestos de participación de animales en competiciones deportivas.

Artículo 24.- Sanciones a deportistas.

1.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras a), b), c), d), e), f), g), j) y l) del apartado primero del artículo 23, se impondrán las sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia por un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Cuando se cometan por segunda vez las referidas conductas, la sanción consistirá en la privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

2.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras h) e i) del apartado primero del artículo 23 se impondrán las sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un período de cuatro a seis años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Cuando se cometa una segunda infracción, la sanción consistirá en la privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

3.- Por la comisión de las infracciones graves previstas en el apartado segundo del artículo 23 de esta Ley, se impondrá la sanción de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un período de tres meses a dos años y, en su caso, multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un periodo de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción consistirá en la privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

4.- En los supuestos en los que la o el deportista, teniendo justificación médica suficiente para disponer de una autorización de uso terapéutico, no la haya solicitado, o haya caducado la vigencia de la anteriormente obtenida, se le impondrá la primera vez una amonestación en el supuesto de que el control arroje un resultado analítico adverso. En el supuesto de que vuelva a cometer tal infracción por segunda vez se le impondrá una sanción por infracción grave en su grado mínimo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la sanción económica que se pueda imponer al club por su falta de diligencia en tales omisiones.

5.- Las sanciones previstas en los apartados anteriores llevarán, asimismo aparejada, la imposibilidad de participar en cualquier tipo de competición en instalaciones públicas del País Vasco durante el tiempo en que dure la suspensión, privación o imposibilidad de obtención de la licencia.

Artículo 25.- Sanciones a los clubes y equipos deportivos.

1.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en el apartado primero del artículo 23 de esta Ley, se impondrán las sanciones de multa de 6.001 a 24.000 euros y, en su caso, pérdida de puntos o puestos en la

clasificación o descenso de categoría o división. Cuando en las referidas conductas involucren a una o un menor de edad, o en caso de reincidencia, la sanción pecuniaria únicamente podrá tener carácter accesorio y se sancionará con multa de 24.001 a 50.000 euros.

2.- Por la comisión de las infracciones graves contempladas en el apartado segundo del artículo 23 de esta Ley, se impondrá la sanción de multa de 1.500 a 6.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de multa de 6.001 a 24.000 euros y, en su caso, pérdida de puntos o puestos en la clasificación o descenso de categoría o división. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción pecuniaria únicamente podrá tener carácter accesorio y se sancionará con multa de 24.001 a 50.000 euros.

Artículo 26.- Sanciones a técnicos, técnicas, jueces, juezas, árbitros, árbitras y demás personas con licencia deportiva, personal directivo, dirigentes o personal de federaciones deportivas, de ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial o no oficial, clubes o equipos deportivos.

1.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras b), c), d), e), f), g), j) y l) del apartado primero del artículo 23 de esta Ley, se impondrán las sanciones de inhabilitación temporal para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente durante un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Cuando en las referidas conductas esté involucrado o involucrada una o un menor de edad, o cuando se cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

2.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras h) e i) del apartado primero del artículo 23 de esta Ley, se impondrán las sanciones de inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente durante un período de cuatro a seis años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Cuando en las referidas conductas se involucre una o un menor de edad, o cuando se cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

3.- Por la comisión de las infracciones graves contempladas en el apartado segundo del artículo 23, se impondrá la sanción de suspensión o privación de licencia federativa por un período de tres meses a dos años y, en su caso, multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente por un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción consistirá en la inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos o privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

4.- Las personas físicas o jurídicas que realicen las conductas tipificadas como infracciones en el presente capítulo, sin disponer de licencia o de habilitación equivalente, pero prestando servicios o actuando por cuenta

de federaciones deportivas o entidades organizadoras de competiciones deportivas por delegación de las anteriores, sean oficiales o no, o las personas o entidades integradas dentro de dichas organizaciones, no podrán obtener licencia deportiva o habilitación equivalente, ni ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva por un período equivalente a la duración de las sanciones de inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos, privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente.

Las federaciones deportivas y entidades organizadoras de competiciones deportivas, sean oficiales o no, adaptarán su normativa para incluir estas previsiones, que serán compatibles con la responsabilidad civil que en cada caso proceda y con la depuración de cualesquiera otras responsabilidades que resulten exigibles en virtud de lo dispuesto por esta Ley.

5.- Las sanciones previstas en este artículo serán aplicables a las personas propietarias y poseedores de animales que participen en pruebas deportivas y a todas aquellas que sean participes en la comisión de la correspondiente infracción.

Artículo 27.- Sanciones a médicos, médicas y demás personal sanitario de clubes o equipos.

1.- Los médicos y médicas de equipo y demás personal que realicen funciones sanitarias bajo licencia deportiva o habilitación equivalente y que incurran en alguna de las conductas previstas en las letras c), e), f), g), h), i), j), k) y l) del apartado primero del artículo 23 de esta Ley, serán sancionados y sancionadas con privación o suspensión de licencia durante un período de dos a cuatro años y multa económica de 6.001 a 24.000 euros. Cuando en las referidas conductas se involucre una o un menor de edad, o cuando se cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

2.- Los médicos y médicas de equipo y demás personal que realice funciones sanitarias bajo licencia deportiva o habilitación equivalente y que incurran en alguna de las conductas previstas en las letras h) e i) del apartado primero del artículo 23 de esta Ley, serán sancionados y sancionadas con privación o suspensión de licencia federativa durante un período de cuatro a seis años y multa económica de 3.001 a 12.000 euros.

Cuando en las referidas conductas se involucre una o un menor de edad, o cuando se cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

3.- Los médicos y médicas de equipo y demás personal que realice funciones sanitarias bajo licencia deportiva o habilitación equivalente, y que incurran en las conductas tipificadas como infracciones graves por el apartado segundo del artículo 23 serán sancionados y sancionadas con privación o suspensión de licencia federativa por un período de tres meses a dos años y, en su caso, multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la conducta será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión o privación de licencia federativa por un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la presente Ley.

4.- Cuando el personal que realice funciones sanitarias incurra en conductas tipificadas como infracciones el presente capítulo, sin disponer de licencia federativa o de habilitación equivalente, pero preste servicios o actúe

por cuenta de federaciones deportivas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones deportivas o de personas o entidades integradas dentro de dichas organizaciones, no podrán obtener licencia deportiva o habilitación que faculte para realizar funciones sanitarias, ni ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva por un período equivalente a la duración de las sanciones de privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente. Las federaciones deportivas y entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, adaptarán su normativa para incluir estas previsiones, que serán compatibles con la responsabilidad civil que en cada caso proceda y con la depuración de las responsabilidades que resulten exigibles en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo.

5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de las responsabilidades que proceda exigir por las conductas tipificadas en el presente capítulo, los órganos disciplinarios comunicarán a los correspondientes colegios profesionales los actos realizados por el personal que realice funciones sanitarias.

6.- Las sanciones previstas en este artículo serán aplicables a las y los veterinarios con relación a las pruebas deportivas con participación de animales en lo que resulte de aplicación.

Artículo 28.- Criterios para la imposición de sanciones en materia de dopaje.

1.- Cuando una o un deportista incurra por primera vez en una de las infracciones previstas en esta norma se le impondrá, aplicando el principio de proporcionalidad, las sanciones establecidas en el artículo correspondiente apreciando las circunstancias concurrentes.

Para la apreciación de las circunstancias concurrentes y la graduación de la sanción se utilizarán, en todo caso, los criterios establecidos en el Código Mundial Antidopaje.

2.- Adicionalmente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley, la graduación de las sanciones se hará atendiendo al criterio de proporcionalidad y de las circunstancias que concurran en cada caso, específicamente las que se refieren a la existencia de intencionalidad, conocimiento, grado de responsabilidad de sus funciones y naturaleza de los perjuicios causados, así como las demás que puedan servir para la modulación de la responsabilidad.

3.- En caso de una segunda infracción muy grave, la sanción consistirá en la privación con carácter definitivo de licencia o habilitación equivalente, en la inhabilitación definitiva para el desempeño de cargos federativos o privación de licencia con carácter definitivo y, en su caso, la imposición de la correspondiente sanción pecuniaria en su cuantía máxima.

Artículo 29.- Imposición de sanciones pecuniarias.

1.- Las sanciones personales de multa, en los casos de deportistas, solo podrán imponerse cuando éstos obtengan ingresos, que estén asociados a la actividad deportiva desarrollada.

2.- Las multas impuestas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán ejecutadas, en caso de impago, de forma forzosa según los términos establecidos en la legislación administrativa aplicable.

3.- El producto de las multas recaudado por el procedimiento previsto en el apartado anterior constituye un ingreso de derecho público que se afecta al cumplimiento de los fines de investigación indicados en el artículo 10 y que permitirán generar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco los créditos necesarios para el desarrollo de dicha actividad, cuya realización material se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 30.- Consecuencias accesorias de la infracción y alteración de resultados.

1.- En los deportes individuales, la comisión de infracciones previstas en el presente capítulo implicará la retirada de premios o medallas, la anulación de los resultados individuales y la descalificación absoluta de la o el deportista en la prueba o competición en cuestión, en los campeonatos de los que forme parte o a los que esté vinculada la prueba o competición.

2.- Los órganos disciplinarios podrán extender estas medidas a las pruebas, competiciones o campeonatos que se hubieran celebrado con posterioridad, en fechas adyacentes o coincidiendo con la toma de muestras a la o el deportista o con la comisión de la infracción.

3.- En los deportes de equipo, y con independencia de las sanciones que puedan corresponder en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la presente Ley, los órganos disciplinarios deberán pronunciarse sobre la procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas, competiciones o campeonatos. Para ello ponderarán las circunstancias concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en materia de dopaje tipificadas en la presente sección y la implicación de menores de edad en las referidas conductas.

4.- Cuando por la naturaleza de la infracción sea posible, toda sanción que se impusiere llevará consigo el comiso de las sustancias y útiles que hayan producido o sean susceptibles de producir dopaje en el deporte. Las sustancias y útiles que hayan sido definitivamente decomisados por resolución sancionadora serán adjudicados a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, hasta que, reglamentariamente, se determine el destino final de los mismos, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la presente Ley para el decomiso como medida cautelar.

Artículo 31.- Eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad para obtener licencia deportiva.

1.- La imposición de sanciones relacionadas con el dopaje en el deporte constituye un supuesto de imposibilidad para obtener o ejercer los derechos derivados de las licencias deportivas emitidas al amparo de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y, especialmente, para participar en competiciones deportivas.

2.- Cuando la sanción haya sido impuesta por un órgano diferente de los previstos en la presente Ley, los afectados y afectadas podrán instar del Comité Vasco de Justicia Deportiva la declaración de incompatibilidad de la sanción impuesta con la de la presente Ley, en lo que se refiere a los principios que informan la potestad sancionadora pública. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la declaración de incompatibilidad que pueda realizar el Comité Español de Disciplina Deportiva u otras instancias competentes.

3.- El procedimiento a seguir para efectuar esta reclamación se establecerá reglamentariamente.

4.- Las y los deportistas que hayan sido sancionados en materia de dopaje deberán someterse a un control previo para la obtención de una nueva licencia o la reanudación de la actividad deportiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.4 de la presente Ley.

5.- Las entidades que organicen actividades deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicarán el principio general de reconocimiento mutuo de las sanciones por dopaje impuestas por otras organizaciones. Si una o un deportista tiene una sanción vigente por dopaje, con independencia de cuál sea el tipo de sanción, deberá impedirse su participación en las actividades deportivas a desarrollar en el País Vasco.

6.- La inhabilitación impedirá, asimismo, que las administraciones deportivas del País Vasco reconozcan o mantengan a las y los deportistas en su condición de deportista de alto nivel o deportista promesa.

Artículo 32.- Aplicación del principio *non bis in idem*.

1.- No podrán sancionarse disciplinaria o administrativamente los hechos que hayan sido sancionados penalmente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

2.- El órgano disciplinario o sancionador suspenderá la tramitación del procedimiento cuando se adviertan indicios de delito. En tal caso, deberá dar conocimiento de los hechos al Ministerio Fiscal.

3.- Asimismo, el órgano disciplinario o sancionador suspenderá la tramitación del procedimiento cuando, concurriendo la triple identidad antes referida, tenga noticia de que los mismos hechos están siendo perseguidos en vía penal, sin perjuicio de su posterior reanudación si procediese.

4.- Cuando el Instructor o Instructora tenga conocimiento de que se está siguiendo otro procedimiento sancionador por los mismos hechos lo notificará al órgano sancionador, el cual, sin paralizar el procedimiento, se pondrá en contacto con el órgano competente para resolver el procedimiento de referencia a fin de coordinarse para la eficaz aplicación de los preceptos pertinentes.

Sólo podrá recaer sanción administrativa y disciplinaria sobre el mismo hecho cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico.

5.- Cuando en cualquier fase del procedimiento sancionador, el órgano que tiene que resolver considere que existen elementos de juicio indicativos de que los hechos constitutivos de la presunta infracción son constitutivos de una infracción cuya sanción no le compete, lo comunicará al órgano que considere competente a tal efecto, trasladándole todo lo actuado hasta ese momento.

Artículo 33. - Causas de extinción de la responsabilidad.

Las causas de extinción total o parcial, según proceda, de la responsabilidad son las siguientes:

- a) Cumplimiento de la sanción. Las normas de desarrollo de la presente Ley y las que puedan dictar las federaciones y entidades deportivas no podrán prever efecto adicional de ningún tipo para las y los deportistas que hayan cumplido su sanción.

- b) Prescripción de la infracción. Los términos de la prescripción de la infracción son los previstos en el artículo siguiente.
- c) Colaboración en la detección, localización y puesta a disposición de los organismos competentes de las personas o los grupos organizados que suministren, faciliten o proporcionen el uso de sustancias o la utilización de métodos prohibidos en el deporte por ser causantes de dopaje. En este caso la extinción será parcial.
- d) Fallecimiento de la persona inculpada o sancionada.
- e) Extinción de la persona jurídica inculpada o sancionada.
- f) Prescripción de la sanción.
- g) Condonación de la sanción.

Artículo 34.- Prescripción de las infracciones y las sanciones.

1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las graves a los dos años. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años y las impuestas por faltas graves a los dos años.

2.- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

3.- Interrumpirá la prescripción de las infracciones la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, del procedimiento disciplinario o sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la o el presunto responsable. No obstante lo anterior, se mantendrá la interrupción de la prescripción en caso de suspensión del procedimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 32 de la presente Ley, reanudándose su cómputo cuando haya transcurrido un mes desde que legalmente pueda retomarse el procedimiento.

4.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

5.- Interrumpirá la prescripción de las sanciones la iniciación, con conocimiento de la interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona o entidad infractora.

6.- Asimismo, interrumpirá el plazo de prescripción de las sanciones la iniciación de procedimiento conducente a la extinción de la sanción por colaboración, reanudándose cuando, terminado éste sin concesión, haya transcurrido un mes desde su resolución.

Artículo 35.- Colaboración en la detección.

1.- La o el deportista podrá quedar exonerado parcialmente de responsabilidad administrativa y, en su caso, no se someterá a procedimiento disciplinario o sancionador si denuncia ante las autoridades competentes a las personas o entidades autoras o cooperadoras y coopera y colabora con la Administración competente, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el procedimiento o proceso correspondiente contra aquéllas. Para la aplicación de esta previsión la denuncia y, en su caso, las pruebas que se acompañen, deberán tener entidad suficiente para permitir la incoación de procedimiento disciplinario o sancionador o, en su caso, la iniciación del correspondiente proceso judicial.

2.- La exoneración prevista en el apartado anterior y la extinción total o parcial de la responsabilidad referida en la letra c) del artículo 33 de la presente Ley, será proporcionada a los términos de la denuncia y la colaboración, su eficacia y solvencia jurídica para la lucha contra el dopaje. La competencia para apreciar la exoneración y la extinción total o parcial de las sanciones impuestas corresponderá, respectivamente, al órgano disciplinario o sancionador o al que adoptó la sanción en origen. No podrá concederse antes de la incoación del procedimiento o, en su caso, la iniciación del correspondiente proceso judicial, que se deriven de su denuncia y, en todo caso, requerirá informe de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo que éste fuera el órgano competente.

3.- Atendidas las circunstancias concurrentes en el caso, especialmente la ausencia de antecedentes de la o el deportista, el órgano disciplinario podrá, en los supuestos de exoneración y extinción parcial, suspender la ejecución de la sanción siempre que la misma constituya la primera sanción en materia de dopaje. En la adopción de esta medida serán de aplicación los criterios previstos en el apartado anterior. La suspensión acordada quedará automáticamente revocada si la o el deportista fuese sometido a un procedimiento disciplinario posterior en materia de dopaje.

Artículo 36.- Competencia en materia sancionadora de carácter administrativo.

1.- El ejercicio de la potestad sancionadora de carácter administrativo en materia de represión del dopaje corresponderá a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en materia de represión de dopaje en animales que participan en competiciones deportivas y de las competencias de otros órganos en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 37.- Competencia en materia de procedimientos disciplinarios.

1.- La potestad disciplinaria en materia de dopaje corresponde a las federaciones deportivas del País Vasco y a las demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco.

2.- La instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios corresponde, inicialmente, a los órganos disciplinarios de las entidades antes citadas en los términos previstos en sus Estatutos y Reglamentos.

3.- Los expedientes deberán ser resueltos por los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas y demás entidades con las que exista una relación de sujeción especial en un plazo máximo de dos meses, a contar desde la comunicación fehaciente del último resultado obtenido por el laboratorio al órgano disciplinario.

Transcurrido dicho plazo sin que el expediente haya sido resuelto, cualquiera que sea el trámite en el que se encuentre, la competencia será asumida por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que continuará los trámites previstos hasta su finalización y resolución. No obstante lo anterior y en razón de las circunstancias concurrentes en un expediente concreto, Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá prorrogar en un mes el periodo al que se refiere el apartado anterior, siempre que medie petición expresa anterior a la caducidad del plazo.

4.- La instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios que, por incumplimiento de las prescripciones de la presente Ley, proceda llevar a cabo y que afecten al personal directivo de las federaciones deportivas y entidades con funciones análogas, corresponderá en única instancia administrativa al Comité Vasco de Justicia Deportiva. El procedimiento se sustanciará conforme a las normas de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y su normativa de desarrollo.

5.- El procedimiento disciplinario en materia de dopaje, incluida la fase de intervención de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá concluir en el plazo máximo de seis meses a contar desde la adopción del acuerdo de incoación del procedimiento. El vencimiento del plazo establecido en este apartado, sin que se haya notificado resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 38.- Procedimiento disciplinario.

1.- El procedimiento disciplinario se iniciará por resolución del órgano disciplinario de la correspondiente entidad deportiva, tras la correspondiente acta de inspección o tras recibir los resultados de los análisis del laboratorio y tras realizar la correspondiente instrucción reservada con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación y para dictar la resolución en que se decida la incoación del expediente disciplinario o, en su caso, el archivo de actuaciones.

2.- Los laboratorios adoptarán las medidas necesarias para que esta comunicación se realice en condiciones que permitan mantener el anonimato y la reserva de la identidad de la o el deportista.

3.- Una vez cumplido el plazo de prescripción previsto en esta Ley o cuando hubiera recaído resolución firme en el correspondiente procedimiento sancionador, disciplinario o causa penal, los laboratorios de control del dopaje no podrán mantener muestras vinculadas a una persona identificable. Las muestras deben ser destruidas y sólo podrán conservarse disociadas para fines de investigación si el deportista expresa su consentimiento.

4.- El procedimiento disciplinario se incoa e instruye de oficio en todos sus trámites. No obstante lo anterior, podrán denunciarse ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco aquellos hechos que proporcionen indicios de veracidad sobre la comisión de presuntas conductas o prácticas de dopaje. Admitida la denuncia por la Administración, ésta podrá ordenar la realización de controles a los deportistas afectados, con carácter de medida previa a la incoación del correspondiente expediente disciplinario.

5.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá un procedimiento para mantener en secreto la identidad de la o el denunciante frente a quienes intervengan en los procedimientos

disciplinarios y en las actuaciones previas a los mismos. Concluidas las actuaciones previas que, en cada caso, sean pertinentes, se dará traslado del expediente al órgano disciplinario competente para la incoación del procedimiento sancionador.

6.- Los procedimientos en materia de dopaje se sustanciarán en sede federativa y demás entidades con las que exista una relación de sujeción especial, en única instancia, ante el órgano disciplinario competente en materia de dopaje que se designe en sus Estatutos, sin que puedan ser objeto de recurso alguno dentro de las mismas, ya sea éste ordinario o potestativo. Su tramitación tendrá carácter de preferente, a fin de cumplir los plazos establecidos en esta Ley.

7.- Las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios competentes son inmediatamente ejecutivas salvo que el órgano disciplinario o jurisdiccional, previa adopción de las garantías conducentes al aseguramiento de la eficacia de la resolución para el caso de una eventual desestimación, acuerde su suspensión.

8.- La incoación del procedimiento y la resolución que ponga fin al mismo deberá ser objeto de comunicación a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

9.- Las normas procedimentales anteriores se aplicarán también al procedimiento administrativo sancionador en todo aquello que no sea incompatible con su naturaleza y características propias.

Artículo 39.- Potestad de inspección.

1.- Sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos y judiciales del Estado la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá inspeccionar, con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona, los botiquines, bolsas de deportes, taquillas, autobuses y demás espacios que permitan guardar o albergar los productos y sustancias susceptibles de dar positivo en un control de dopaje así como instrumentos destinados a la aplicación de métodos prohibidos.

2.- A los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración, se tendrá en cuenta el tipo de sustancias, el número de unidades, la justificación terapéutica, así como el resto de cuestiones directamente vinculadas a su ejercicio profesional.

3.- Reglamentariamente, se establecerá el contenido admisible de los botiquines y, específicamente, de aquellos medicamentos y productos sanitarios que resultan necesarios para atender las contingencias derivadas de cualquier urgencia médica.

Artículo 40.- Decomiso.

Las sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en el deporte y los instrumentos o útiles empleados a tal fin podrán ser objeto de decomiso por las autoridades administrativas que inicien los correspondientes procedimientos sancionadores, como medida cautelar dentro de los mismos o como medida previa a dichos procedimientos sancionadores. En este segundo supuesto, el órgano instructor deberá ratificar esta medida en el curso de la tramitación del expediente.

CAPITULO IV

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Artículo 41.- Medidas de prevención.

1.- Para garantizar una lucha eficaz contra el dopaje en el País Vasco, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptará y promoverá medidas de prevención que comprenderán:

- a) Programas de formación e información en el ámbito del deporte federado, escolar y universitario y de otras manifestaciones deportivas de carácter no competitivo.
- b) Programas de investigación sobre los efectos de las sustancias y métodos dopantes en el organismo humano.
- c) Programas de investigación sobre los sistemas eficaces de detección de las sustancias y métodos dopantes.
- d) Programas de investigación sobre el dopaje desde diferentes perspectivas: sociológicas, éticas, deportivas, médicas y cualesquiera otras análogas.

2.- Los programas de formación e información irán dirigidos fundamentalmente a los clubes, federaciones, centros deportivos, deportistas, técnicos, técnicas, personal médico, educadores, educadoras, dirigentes y demás agentes deportivos, a fin de evitar que los valores del deporte, la ética llevada a la práctica deportiva o el rendimiento saludable sean amenazados por el dopaje y de impedir que las y los deportistas recurran a sustancias y métodos prohibidos en grave perjuicio de su salud. Dichos programas deberán garantizar una formación e información permanente y actualizada sobre:

- a) Lista de sustancias y métodos prohibidos.
- b) Procedimientos de control antidopaje.
- c) Derechos y deberes de deportistas, clubes y cualesquiera otras personas que intervienen en los procedimientos.
- d) Efectos nocivos de las sustancias y métodos prohibidos en el organismo humano.

3.- Dentro de dichos programas de formación e información se prestará especial atención al mundo de las pruebas populares de gran exigencia física y a los usuarios y usuarias de los centros deportivos.

4.- El Centro Vasco de Medicina del Deporte auxiliará a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco en todas aquellas funciones que requieran su asistencia técnica.

5.- Las Diputaciones Forales colaborarán con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los programas de formación e información que se encuentren vinculados a sus competencias en materia deportiva.

Artículo 42.- Sistema de información sobre el dopaje en el deporte.

1.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá un sistema de información acerca del dopaje en el ámbito del deporte, que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las administraciones públicas con competencias en materia de deporte. Este sistema incluirá la variable de sexo en la recogida y explotación de los datos relativos a la población deportiva, la realización de análisis diferenciados de las expectativas y opiniones de los deportistas, e introducirá indicadores de género.

2.- El objetivo general del sistema de información será responder a las necesidades de los siguientes colectivos, con la finalidad que en cada caso se indica:

- a) Autoridades deportivas: La información favorecerá el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones, proporcionándoles información actualizada y comparada de la evolución que experimenta la acción concertada de los poderes públicos y del sistema deportivo a favor de un deporte limpio de dopaje.
- b) Profesionales: la información irá dirigida a mejorar sus conocimientos y aptitudes. Incluirá directorios, memorias, resultados de estudios, evaluaciones de medicamentos, productos sanitarios y tecnologías, análisis de buenas prácticas, guías clínicas, recomendaciones y recogida de sugerencias.
- c) Deportistas, entrenadores, directivos y clubes deportivos: la información contendrá información sobre sus derechos y deberes y los graves riesgos para la salud que el dopaje comporta, facilitará la toma de decisiones sobre estilos de vida, prácticas saludables y utilización de los servicios sanitarios, además de ofrecer la posibilidad de formular sugerencias acerca de los aspectos mencionados.

3.- El sistema de información permitirá conocer las sustancias susceptibles de producir dopaje y los métodos prohibidos en el deporte, los datos de los expedientes disciplinarios o sancionadores incoados y las sanciones impuestas, con indicación de las sustancias detectadas, los análisis realizados en los distintos laboratorios e incorporará, como datos básicos, los relativos a población deportiva, recursos humanos y materiales, actividad desarrollada, farmacia y productos sanitarios, financiación y resultados obtenidos, así como las expectativas y opinión de las y los deportistas, todo ello desde una concepción integral de la lucha contra el dopaje en el deporte.

4.- Asimismo, permitirá conocer los controles y demás pruebas realizadas al amparo de la protección de la salud de la o el deportista.

5.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, oída la Agencia Vasca de Protección de Datos, establecerá la definición y normalización de datos, la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios para la integración de la información, con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la información que se produzca.

6.- El sistema de información estará a disposición de sus usuarios, que serán las administraciones públicas deportivas y sanitarias, las y los gestores y profesionales del deporte y de la sanidad, así como la propia ciudadanía, en los términos de acceso y de difusión que permitan las disposiciones vigentes en materia de protección de datos.

7.- El acceso a los datos de los expedientes disciplinarios y sancionadores incoados, relativos a las sustancias detectadas y a los análisis realizados en los distintos laboratorios, quedará siempre limitado a los órganos competentes en relación con dichos expedientes. El acceso por otras organizaciones, personas o entidades a dichos datos deberá ir siempre precedido de la disociación de los datos de carácter personal para cuantos intervengan en el expediente.

8.- Las entidades públicas y privadas correspondientes aportarán a este sistema de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del mismo modo, las distintas administraciones públicas tienen derecho de acceder y disponer de los datos que formen parte del sistema de información y en la medida en que, estrictamente, lo precisen para el ejercicio de sus competencias.

9.- El tratamiento y la cesión de datos, incluidos aquellos de carácter personal necesarios para el sistema de información, estarán sujetos a la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 43.- Control de los productos susceptibles de producir dopaje.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar a los organismos competentes en materia de medicamentos, productos sanitarios y seguridad alimentaria que se adopten las medidas necesarias para conocer el ciclo productivo y de dispensación y comercialización de aquellos productos susceptibles de producir dopaje en el ámbito del deporte, considerando que, por sus circunstancias intrínsecas y su potencial afección a la salud pública, deban ser objeto de un especial seguimiento y control.

Artículo 44.- Productos nutricionales.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverá, la implantación de mecanismos de información y de publicidad específicos de los productos nutricionales que, sin ser medicamentos, puedan producir en el ámbito del dopaje un resultado positivo o adverso.

Artículo 45.- Tarjeta de Salud de Deportista.

1.- La tarjeta de salud de deportista es un documento público que expedirá la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco a deportistas con las licencias federativas y universitarias y a aquellos otros colectivos de deportistas que se determinen reglamentariamente.

2.- La tarjeta de salud tiene como finalidad que la o el deportista y el personal sanitario que le atiende dispongan de la mejor información clínica posible en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia o enfermedad.

3.- La tarjeta de salud contendrá la información referida al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y de dopaje, realizados a la o el deportista desde la obtención de la correspondiente licencia, el resultado

de los mismos y las determinaciones médicas a tener en cuenta para una adecuada atención sanitaria del mismo. Asimismo, incluirá los datos de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas y de las bajas laborales y/o deportivas que haya tenido el deportista. Reglamentariamente, se determinará el alcance de esta información y la forma de transmisión de la documentación correspondiente.

4.- Los datos contenidos en la tarjeta de salud sólo podrán ser utilizados, en principio, por los deportistas titulares de la tarjeta y, con su consentimiento, por el personal sanitario que le atienda, salvo en aquellos casos en que la legislación sanitaria permite el acceso a tales datos, sin su consentimiento, para la debida atención sanitaria.

5.- En materia de control de dopaje no cabe el acceso a los datos de la tarjeta de salud de deportista sin su consentimiento.

6.- Los datos que contiene la tarjeta de salud serán suministrados por la o el deportista, por el personal sanitario que le atienda, por los órganos disciplinarios competentes y, en su caso, por el equipo por el que tenga suscrita la licencia correspondiente.

7.- La tarjeta de salud de deportista podrá estar en un mismo soporte físico que permita el acceso a otras tarjetas o servicios siempre que las medidas de seguridad impidan a terceras personas o entidades el acceso indebido a los datos que obren en la tarjeta de salud de deportista. Aquel soporte físico funcionará como llave de acceso a la base de datos inherente a la tarjeta de salud de deportista pero no contendrá datos de salud de la o el deportista.

8.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá y será responsable del mantenimiento, con las debidas garantías de seguridad, del soporte digital que posibilite la recogida e intercambio de datos, así como de que su utilización sea conforme a las previsiones de esta Ley.

9.- La cesión de los datos que forman parte de la base de datos inherente a la tarjeta sólo podrá realizarse en los supuestos y condiciones que determine la normativa que regula el derecho fundamental a la protección de los datos personales.

10.- Será de aplicación al sistema que confeccione y permita la utilización de la tarjeta de salud las medidas de seguridad de nivel alto establecidas en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE LOS DATOS RELATIVOS AL DOPAJE

Artículo 46.- Confidencialidad de los datos.

1.- El personal que desempeñe las funciones de control del dopaje, así como las y los miembros de los órganos de entidades deportivas y su personal, deberán guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo.

2.- Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones sólo podrán utilizarse para los fines de control del dopaje y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción disciplinaria, administrativa o de delito. Dicho personal queda autorizado para la cesión de dichos datos, informes o antecedentes en caso de denuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.a de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 47.- Autorización de cesión de datos.

Los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos, en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos, a los organismos públicos o privados que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes.

Artículo 48.- Obligación de declaración de datos relativos a los productos y métodos susceptibles de producir dopaje en el deporte.

1.- Los equipos que participen en competiciones que se celebren en el País Vasco e incluidas en el ámbito material de esta Ley, están obligados a llevar un libro registro, en los términos que reglamentariamente se determine, en el que quede constancia fehaciente de los productos que se han dispensado o recetado a las y los deportistas, los métodos prohibidos utilizados, el médico que ordena u autoriza dicha utilización, periodo y forma de prescripción.

2.- Las y los deportistas, equipos deportivos y las y los directivos extranjeros que los representen están obligados, cuando entren en el País Vasco para participar en una actividad deportiva, a remitir a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debidamente cumplimentados, los formularios que la misma establezca, en los que se identifiquen los productos que transportan para su uso, los instrumentos que permiten la aplicación de métodos prohibidos, las unidades de los mismos y el médico responsable de su administración. También se entenderá cumplida la citada obligación si se ha acreditado que la remisión de los formularios se cumplió con la Agencia Estatal Antidopaje.

CAPÍTULO VI

FEDERACIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES Y DEMÁS ENTIDADES QUE RIGEN, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Artículo 49. Controles de dopaje a realizar en competiciones internacionales que se celebren en Euskadi.

1.- La responsabilidad de la ordenación y realización de controles de dopaje en las competiciones internacionales celebradas en Euskadi corresponde al Comité Olímpico Internacional o a las federaciones deportivas o instituciones internacionales que, respectivamente, las organicen o a aquellas federaciones o entidades en las que éstas deleguen la citada organización.

2.- Asimismo, les corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 31.2 de la presente Ley, en relación con la eficacia de las sanciones que los citados organismos internacionales puedan imponer.

3.- La realización efectiva de controles de dopaje en competiciones internacionales celebradas en Euskadi requerirá una comunicación previa a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 50.- Controles de dopaje fuera de competición a deportistas nacionales o extranjeros que compitan en Euskadi.

1.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá ordenar, sin menoscabo de las competencias que puedan tener otras organizaciones antidopaje, la realización de controles fuera de competición a deportistas nacionales o extranjeros que compitan en Euskadi.

2.- A los efectos oportunos, los resultados analíticos serán comunicados a la respectiva federación deportiva internacional, a la Agencia Mundial Antidopaje y a aquellas organizaciones antidopaje que también resulten competentes.

Artículo 51.- Controles de dopaje fuera de competición, realizados en Euskadi a deportistas con licencia por parte de organizaciones internacionales.

1.- La realización de estos controles exige que, con carácter previo, se notifique a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco la propuesta de realización de los mismos y las condiciones materiales de su realización. Sólo podrán llevarse a cabo estos controles de dopaje si cumplen los requisitos establecidos en esta Ley.

2.- Las organizaciones deportivas internacionales y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán suscribir acuerdos y convenios de colaboración para que sea ésta última quién realice, materialmente, los controles de dopaje que aquéllas tengan que llevar a cabo en Euskadi.

Artículo 52.- Efectos en Euskadi de las sanciones impuestas por las organizaciones internacionales a deportistas y demás personas con licencia.

Las sanciones impuestas por organizaciones internacionales a deportistas y demás personas con licencia se aplicarán en Euskadi y conllevarán la inhabilitación para participar en competiciones en Euskadi, salvo que el Comité Vasco de Justicia Deportiva, a instancia de la persona sancionada, declare la sanción como contraria al ordenamiento jurídico. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias para revisión de sanciones que puedan ostentar el Comité Español de Disciplina Deportiva u otras instancias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- 1.- Se habilita al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones que fueran necesarias en la adaptación o aplicación de las previsiones recogidas en la presente Ley al ámbito específico de la prevención, control y represión del dopaje en animales que participen en competiciones deportivas. Dichas disposiciones deberán contemplar, como mínimo, las siguientes particularidades:

- a) Criterios de aprobación de una lista específica de sustancias y métodos prohibidos para los animales. La lista emanada de las autoridades deportivas no deberá coincidir necesariamente con la lista aprobada por las autoridades competentes en materia de salud animal.

- b) Requisitos generales de los laboratorios que deben proceder al análisis de las muestras.
- c) Tipos de control de dopaje y de salud y el procedimiento para llevarlos a cabo.
- d) Régimen de autorizaciones de uso terapéutico y, en su caso, declaraciones de uso.
- e) Régimen de habilitación de veterinarios y veterinarias y demás personal que deba intervenir en los controles.

2.- Los resultados de los análisis realizados en los procesos de control de dopaje y de salud de los animales al amparo de la normativa deportiva y al amparo de la normativa de protección de animales deberán ser comunicados entre los órganos competentes en ambas materias en los términos que se fijen reglamentariamente.

3.- Los Departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de deportes y de sanidad animal, así como los órganos forales de los Territorios Históricos competentes en materia de protección de animales, implantarán, de acuerdo con las normas reglamentarias previstas en los apartados anteriores, los mecanismos de coordinación y colaboración pertinentes para alcanzar la necesaria eficacia en el control de dopaje y de salud a animales que participen en competiciones deportivas.

SEGUNDA.- La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá establecer con el Estado, a través de los correspondientes instrumentos de colaboración, fórmulas para la implantación de un sistema de mutua información y para la expedición, reconocimiento o realización de la Tarjeta de Salud de Deportista y para la habilitación de los médicos y médicas, veterinarios y veterinarias y demás personal que deba intervenir en los controles.

TERCERA.- 1.- Las y los profesionales sanitarios y cualesquiera profesionales que faciliten, colaboren, prescriban o dispensen sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en el ámbito de la actividad deportiva, o propicien la utilización de métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte, sin cumplir con las formalidades prescritas en sus respectivas normas de actuación y en las previstas en esta Ley, incurrirán en responsabilidad disciplinaria. Las conductas descritas anteriormente serán constitutivas de infracción muy grave y serán sancionadas de acuerdo con las respectivas normas de sus Colegios Profesionales.

2.- A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, los Colegios Profesionales del País Vasco que resulten afectados por la presente Ley deberán modificar sus estatutos y reglamentos para tipificar, expresamente, las responsabilidades previstas en la presente disposición. Esta adaptación deberá realizarse en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Ley.

CUARTA.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley todas las referencias a la Cartilla Sanitaria de Deportista se entenderán realizadas a la Tarjeta de Salud de Deportista.

QUINTA.- 1.- Las licencias federativas y universitarias podrán ir incorporadas en soportes electrónicos que permitan el acceso a la Tarjeta de Salud de Deportista, aunque mantendrán en todo caso una individualidad propia y dispondrán de las medidas de seguridad necesarias para impedir un acceso indebido a los datos propios de dicha Tarjeta de Salud de Deportista.

2.- Las licencias federativas que estén incorporadas a las tarjetas electrónicas citadas estarán dispensadas de ofrecer, en su formato físico externo, los datos exigidos en el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de federaciones deportivas. Lo anterior se entiende sin perjuicio del deber de informar por otras vías a los federados y federadas sobre los seguros incorporados a las licencias, el desglose de las cuotas abonadas y demás extremos contemplados en las disposiciones reglamentarias aplicables.

SEXTA.- Las y los organizadores de aquellas competiciones deportivas de gran exigencia física que se determinen mediante Orden por el Departamento competente del Gobierno Vasco en materia de deporte, deberán exigir a las y los participantes la acreditación de la aptitud física mediante la certificación del correspondiente reconocimiento médico en los términos que se determinen reglamentariamente.

SÉPTIMA.- 1.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de las competiciones deportivas no federadas que podrán ser objeto de la realización de controles de dopaje a sus deportistas.

2.- Las y los participantes en dichas competiciones deportivas podrán ser sometidos o sometidas a controles de dopaje aunque en este caso no tendrán que cumplir las obligaciones documentales e informativas previstas en esta Ley para las y los deportistas con licencia federada. El desarrollo reglamentario de la presente Ley establecerá el régimen especial de control de dichos participantes sin licencia federada con arreglo a los siguientes criterios:

- a) Las y los participantes no tendrán la obligación de solicitar autorizaciones de uso terapéutico ni de formular declaraciones de uso de glucocorticosteroides y demás sustancias sujetas a tal declaración.
- b) Las y los participantes deberán informar al personal médico de su condición de deportista y de su obligación de no consumir o utilizar sustancias o métodos prohibidos en la reglamentación deportiva y asegurarse, en la medida de sus posibilidades, de que el tratamiento terapéutico prescrito no viola las normas antidopaje.
- c) Las y los participantes deberán indicar, en el momento de realizar el control, los tratamientos médicos a que estén sometidos o sometidas, responsables de los mismos y el alcance del tratamiento.
- d) Las y los citados participantes podrán ser inhabilitados e inhabilitadas para participar en pruebas deportivas por razones de protección de su salud en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley. Asimismo, podrán ser descalificados o descalificadas de las pruebas en las que hubiesen participado con pérdida de los derechos deportivos y económicos derivados de las mismas.
- e) A los citados deportistas no se les aplicará el régimen de infracciones y sanciones previstas en la presente Ley.

3.- Los reglamentos de los citados campeonatos contemplarán expresamente el dopaje en el deporte como infracción muy grave o grave.

4.- La aplicación del régimen especial sólo procederá subsidiariamente en el supuesto de que los organizadores no se hayan sometido de forma voluntaria, a través de sus reglamentos, al régimen general previsto en la Ley para el deporte federado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procedimientos sancionadores, tanto en vía disciplinaria como en vía administrativa, incoados con anterioridad a la vigencia de esta Ley se seguirán tramitando conforme a la normativa aplicable al momento de la iniciación, salvo por lo que se refiere a los efectos que pudieran ser favorables a las y los interesados.

SEGUNDA.- Mientras la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco no conceda las habilitaciones previstas en la presente Ley podrán actuar como personas habilitadas en los equipos de recogida de muestras para los controles de dopaje quienes acrediten disponer de las habilitaciones previstas en el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por la que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte, o disposición que lo modifique o sustituya.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco:

- la letra e) del artículo 81.

- el Capítulo V del Título VII.

- la letra ñ) del artículo 109.

- la letra h) del artículo 127.

2. Quedan derogadas, asimismo, todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Se modifica el artículo 4.2.v) de la Ley 14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco, que quedará redactado en los siguientes términos:

“La regulación de la Tarjeta de Salud de Deportista”.

SEGUNDA.- Se modifica el artículo 83 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que quedará redactado en los siguientes términos:

“1.- El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva regulará la exigencia y el cumplimiento de la práctica de reconocimientos médicos obligatorios de las y los deportistas al objeto de controlar su aptitud física. Tales reconocimientos serán preceptivos para el otorgamiento de licencias federativas, escolares y universitarias y para la participación en aquellas actividades de gran exigencia física que determine el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes.

2.- Los datos de los reconocimientos médicos así como otras informaciones relacionadas con la salud de deportistas serán incorporados a la Tarjeta de Salud de Deportista en los términos que se establezcan reglamentariamente”.

TERCERA.- Se habilita al Gobierno Vasco para adaptar el régimen sancionador y disciplinario previsto en esta Ley en lo referente a la cuantía de las sanciones y reglas de aplicación de las mismas a las normas emanadas por los organismos internacionales y a la legislación estatal que, en su caso, resulte aplicable.

CUARTA.- Las federaciones deportivas y cualesquiera organizaciones deportivas a las que resulte de aplicación la presente Ley procederán, en el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Ley, a la adaptación de sus estatutos y reglamentos.

QUINTA.- La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

III

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA /
LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA

ZIOEN AZALPENA

Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia Estatutuko 10.36 artikulua arabera, eskumen eskusiboa du kirolaren arloan. Eskumen horren babesean, Soin Kulturaren eta Kirolaren otsailaren 19ko 5/1988 Legea onartu zuen Eusko Legebiltzarrak, baina ez zuen dopinaren alorra arautu. Kirolaren maila guztietan aldaketa-prozesu handia gertatzen ari zenez, lege hori indarrean dagoen Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak ordezkatu zuen, eta horretan bai, dopinaren alorra arautu zen.

14/1998 Legean VII. tituluko V. kapitulu osoa dopinaren gaiari buruzkoa da. Baina kapitulu horretan arautzen denaz gain, gainontzeko artikuluetan ere arazo horri buruzko zenbait xedapen biltzen dira. Dena den, nahiz eta lege hori lehen urrats garrantzitsua izan Euskadin dopinaren gaitzari aurre egiteko araudi propioa izateko, onartu zenetik igaro den denborak agerian utzi du arazo berriak sortu direla eta aldaketa handiak izan direla antolaketa-moduetan eta erakundeetan, bai estatuan nahiz nazioartean.

Batetik, kirol-ekitaldiak tradizionalki kirol-federazioek antolatzen zituzten arren, gaur egun merkatuaren joeren menpe jarri dira nabarmen ekitaldiok, eta federazioak ez diren beste erakunde batzuek antolatzen dituzte; bada, dopinaren aurkako borroka arautzen zuen araudia ez zegoen erakunde horiei begira zehazturik.

Bestetik, nahiz eta era batera zein bestera dopatzea beti izan den kiroleko etikaren oinarritzko printzipioak urratzeko modua, gaur egun dopina ez da, besterik gabe, kirolaren arloko engainu larria, baizik eta praktika arriskutsu antolatuen multzoa, oso arriskutsuak izan daitezkeenak osasun publikoarentzat, bereziki kirolarien bizitzarentzat. Dopina kirolaren arloko etikaren eta kirolari jakin baten osasunaren esparrua gainditu eta osasun publikoko benetako arazo bihurtu da. Dopina ez da kirolari jakin batzuen noizean behingo egintzen erakusgarri; horren atzean, interes ekonomiko handiak dituzten talde antolatuak daude.

Gainera, dopinaren aurkako esparru juridikoak ere aldaketa sakonak bizi izan ditu. 14/1998 Legea onartu eta urtebetera, Lausanan (Suitzan) Kiroleko Dopinari buruzko Munduko Konferentzia izan zen, eta bertan garbi utzi zuten aginte publikoen eta kirol-erakundeen arteko elkarlanean sakondu beharra zegoela. Konferentzia horrek norabide-aldaketa ekarri zuen kiroleko dopinaren arazoari heltzeko moduan, eta azpimarragarriena nazioarteko erakunde independente bat sortu beharra erakustea izan zen, dopinari aurre egiteko arau komunak jarri eta kirol-erakundeen nahiz aginte publikoen ahaleginak koordina zitzaizkien. Urte horretan bertan, Dopinaren aurkako Mundu Agentzia (gaztelaniaz, AMA) eratzea erabaki zen. Haren egituraren eta finantziazioaren modu orekatuan parte hartzen dute Nazioarteko Batzorde Olinpiarren (NBO) eta herrialde askotako gobernuak, gero eta kezkatuago baitaude dopinak izan duen gorakadaz eta dopina goi-mailako kirol-lehiaketan eremuaz haratago azkar zabaltzen ari izanaz.

2003. urtean, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak (Suitzako zuzenbidearen mendeko fundazio pribatua da) Dopinaren aurkako Mundu Kodea idatzi zuen, eta kode horren osagarri diren nazioarteko estandarrak ere zehaztu zituen. Testu horiek nazioarteko kirol-mugimenduak derrigor bete beharreko arau eta jarraibideen multzoa dira, eta horrekin batera, baita beharrezko erreferentzia ere dopinaren aurkako borrokan esku hartzen ari diren erakunde publikoentzat ere. Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren ekimen horien ondorioz, UNESCOk, 2005eko urriaren 19an izandako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen. Espainiak ere berretsi duen konbentzio hori (2007ko otsailaren 16ko Estatuaren Buletin Ofiziala) gure ordenamendu juridikoaren zati bat da, Konstituzioaren 96. artikuluan xedatutakoaren arabera. Testu horiek guztiak gobernuak dopinari aurre egiteko gakoa diren gaien inguruan harmonizazioa ekarriko duten arauak

idazteko eskatzen diete. Esandakoa dela eta, eskuartean dugun lege honen bidez, dopinaren aurkako euskal araudia mundu mailako kodeak dituen printzipioekin harmonizatu nahi da, kiroleko dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa lortzeaz gainera.

Izan diren aldaketa sakon horien beste erakusgarri bat Espainiako Legebiltzarrak Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurkako azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa onartu izana da. Jasotzen dituen aginduetako batzuk organikoak dira, eta beste batzuk onartzeko arrazoia estatuak kiroleko dopinarekin zerikusia duten gaietan dituen eskumenak izan dira.

Esandako guztiagatik, lege honetan jasotako araudiak oinarri izan dituen printzipioak hain zuzen ere kiroleko dopinaren aurkako borrokan estatuan eta nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutakoak dira. Lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez lurralde-eremuetan eta -mailetan, esparru juridiko komuna behar da kiroleko dopinaren aurkako borrokan aritzeko. Euskadin izaten diren nazioarteko zein estatuko kirol-lehiaketa batzuetan leku askotatik etorritako kirolari, talde eta federazioek hartzen dute parte, eta horrek gutxieneko kontu batzuetan behintzat harmonizatua izango den araua edukitzea eskatzen du.

Horren ondorioz, nahiz eta 14/1998 Legeak erregimen berritzailea ekarri garai hartan, gaur egun berrikuntza eta eguneratzeak behar ditu dopinari aurre egin ahal izateko; izan ere, kirolaren eta kirolari buruz zabaldu diren baloreen eta oinarrien antinomiaren sinbolo dugu dopina, bereziki Euskadiko Kirolari buruzko 14/1998 Legearen 2.1. artikuluan esaten denaren antinomia, hauxe baitio artikuluko horrek: *“interes publikoa duen gizarte-jarduera da kirola, pertsonen heziketan eta garapen integralean laguntzen duena; halaber, bizi-kalitatea eta norberaren nahiz gizartearen ongizatea hobetzen laguntzen du”*.

Eskumenei dagokienez, komeni da gogora ekartzea gorago aipaturiko 14/1998 Legearen 4. artikuluan xedaturik geratu zela Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunien eskumena izango zela ondorengo eskumena gauzatzea: *“dopinari aurrea hartzea, kontrolatzea eta zigortzea”*.

Legeak nabarmen gogortu du dopinaren aurka borrokan egiteko lege-esparrua, baina gogortze hori kirolarien eta prozesuan esku hartzen duten gainerako pertsonen oinarritzko eskubide eta askatasunak errespetatu beharraz bateratzen saiatu da. Testuak oinarritzko ideia bat du abiaburu: dopinaren aurkako borroka ezin da edozein modutan eraman aurrera, eta kontu handiz zaindu behar dira dopinaren aurkako kontroletan parte hartzen duten kirolarien eskubideak, baina kontrolon eraginkortasuna inondik ere gutxitu gabe. Eraginkortasun hori lortzeko, kirolariek dituzten eskubide batzuk orekatu egin beharko dira, dopinaren aurkako borrokan lortu nahi diren bidezko helburuekin proportzionalki jardun ahal izateko (Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren 2006ko uztailaren 18ko epaia, David Mecaren eta beste batzuen kasua Europako Erkidegoen Batzordearen aurka).

Lege berri honekin, bestalde, federazioenak ez diren kirol-jardueretako dopina kontrolatu eta zigortzeko erregimena ezartzen da. Gaur egungo legerian federatutako kirolari buruz egiten diren aurreikuspenak beste kirol-jarduera batzuetara ere hedatu dira, horiek ere babestu beharra dagoela ikusten baita, hain zorrotza ez den araubide batez baldin bada ere. Gai horretan, legeak 14/1998 Legearekin hasitako bideari jarraitzen dio, orduan ere aurreikusi baitzen zehapen-erregimena federazioen esparrutik kanporako ere, eta estatuko lege organikoak zabaldutako ildoan ere badoa, lehiaketetako ez den kirol-jardueretan ere zehapenak jarri ahal izatea

aurreikusten baitu. Horren inguruan, legeak berariaz aipatzen ditu zenbait debeku, kirolean galarazita dauden substantzia eta metodoak banatzen edo merkaturatzen dituzten kirol-zentroei begira.

Dopina kontrolatzearen arloan, kontrolak egiteko beste modu batzuk berariaz jasotzen ahalegindu da legea. Dopinarekin inolako tolerantziarik izan nahi ez badugu, ez da nahikoa, besterik gabe, laginak hartu eta analisiak egitea. Beharrezkoa da iruzur egiteko beste bide batzuk ere kontrolatzea, hala nola erabilera terapeutikoko baimenak. Hori dela eta, legeak ez du mugatzen dopinaren aurkako kontrola laginak hartzera, eta gainera, hartuko diren laginak ez dira kirolarien gernuarenak bakarrik izango; legeak beste lagin mota batzuk hartzeko atea zabalik uzten du, eta ez du inolako biderik inposatzen. Zientziaren eta teknologiaren arloko ikerketa eta aurrerapenen emaitzak izango dira unean-unean kontrol modurik egokiena zein den zehaztuko dutenak. Legeak aurrerapen horiek mugatu ordez, ikuspegi irekia du, eta aurrerapen horiei euskarri juridikoa eskaini nahi die.

Bereziki aipatzekoa da testu berriak osasun-kontrolak deitutakoei emandako garrantzia. 7/2006 Lege Organikoaren irizpide berbera kontuan izanik, legean, kontzeptu horrek jarduera-multzo hau hartzen du bere baitan: kirol-jarduerak osasunari eragin diezazkiokeen ondorioak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek egokitzen dituzten jarduerak, bai eta dopinaren eta osasunaren alorrean legeak ezarritako betebeharrak kirolariak bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zehaztuko du, lege hau erregelamendu bidez garatzeko arauak ezarritako moduan, zein kasutan izango den egokia kirolari bati lizentzia kentzea osasuna dela eta. Estatuko legerian ez bezala, osasun-kontrol horiek ez dira sartzen lan-harremanen esparruaren barruan. Lege honek kirol-erakunde orori ematen dio eskumena osasun-kontrolak egiteko erakundeko kirolariei, lan-harremana izan edo ez izan. Atzerapauso nabarmena izango litzateke federazioei eta gainontzeko kirol-erakundeei beren kirolariei osasun-kontrolak egiteko aukera ukatzea, lan-harremanik ez gotea arrazoitzat hartuta.

Lege-testuan berariaz aipatzen da zenbait kirol-elkarte, kirolari eta pertsona fisiko eta juridiko batzuek debekaturik izango dutela laguntza publikoak jasotzea dopinarekin zerikusia duten egoera batzuetan. Erretorika hutsa izango litzateke dopinaren aurkako kontrol- eta zigor-erregimena gogortzen saiatzea, eta aldi berean aginte publikoei aukera ematea dopinaren aurkako araudia urratu duten pertsona eta erakundeei ekonomikoki laguntzeko.

14/1998 Legean arau-hausteen eta zehapenen tipifikazioa oso mugatua zen, eta lege berri hau baliatu da sortu diren premia berriei erantzun eta nazioarteko araudiak dioenera egokitzeko. 14/1998 Legean aipatzen ziren zehapenak ez zetozen bat Dopinaren aurkako Mundu Kodean esaten zenarekin, eta hori dela eta, egokitzeko ahalegina egin da orain; dena den, esan beharrezkoa da oraingo erregimenak 7/2006 Lege Organikoa hartu duela erreferentziazat.

Erabilera terapeutikoko baimenen bidez gertatzen ari diren iruzur garrantzitsuei aurre egiten saiatu da legea; izan ere, gero eta garbiago ikusten da dopinari bide emateko aukera bihurtzen ari dela erabilera terapeutikoa. Kirolariak, beste edozein pertsonak bezala, gaixotu eta lesioak izan ditzakete, eta horiek sendatzeko tratamendu medikoa behar izango dute. Hori hala izanik, legeak zenbait kasutan erabilera terapeutikoko baimenak emateko aukera aitortzen du. Baina hori egitearekin batera, kirol-baja izenekoa ere zehazten du, eta egoera horren bidez, kirolariak erabateko askatasuna izango du tratamendu terapeutikoa jasotzeko, beste edozein pertsonak egiten duen gisan, baina tarte horretan ezin izango du lehiatu.

Legeak berariaz jasotzen du dopinaren aurka borroka egiteko oinarritzko beste tresna bat: beste erakunde publiko edo pribatu batzuek jarritako zehapenak aintzat hartzea. Hau da, beste herrialde edo autonomia-erkidego batean edo beste kirol-motaren batean zigorra jaso badu kirolari batek, ezin izango du Euskadin lehiari aritu zehapena indarrean den artean, zehapen hori dena delakoa izanik ere.

Lege honetan, dopinaren aurkako borroka modu integralean ulertu da. Dopinaren praktika arautzeaz gainera, bereziki jasotzen ditu Legearen artikuluetan kirolarien errendimendua handitzeko erabiltzen diren substantzia eta metodoek osasunean eduki ditzaketan ondorioei buruz entitate profesionalei eta kirolariei eman beharreko ikerketa, sentsibilizazioa, prestakuntza eta informazioa. Ez da komeni dopinaren aurka kontrolen eta zigorren bidez egitea, eta prebentzioa alde batera uztea. Hori dela eta, legeak prebentzioaren arloan zenbait neurri hartu beharko direla zehazten du. Neurri horien artean ikerketa-lanak sartzen dira, eta ikerketaren arloko programa horiek aurrera eramateko modua izateko, legean informazioa emateko bide batzuk zehazten dira, hain zuzen ere eragile publiko eta pribatuei ikerketako programak aurrera eramatean erabiltzeko modukoak izan daitezkeen datuak helarazteko. Halaber, legeak berariaz ezarri du formazio- eta informazio-programak egitea, batik bat, klub, federazio, kirolari, teknikari, zuzendari eta gainerako kirol-eragileei zuzenduak; horien helburua dopinak kirolaren balioak arriskuan ez jartzea da, eta osasunari kalte larriak eragiten dizkieten eta debekatuta dauden substantziez eta metodoez ez baliatzea kirolariak.

Merezi du bereziki adieraztea lehiaketa ofizialetakoa ez den errendimenduko kirolaren eremuan dopinaren aurkako borrokan sentsibilizatzeko berariazko programak aurreikusi direla; hauetaz ari gara: atletismoko proba herrikoiak, bizikleta-lasterketak, gimnasioak eta abar.

Atal berezia behar du dopinaren alorreko datu pertsonalen babesarekin zerikusia duen orok. Legeak bere baitan hartu dituen zenbait xedapenek, kirolarien eta beste pertsona batzuen eskubideei dagokienez, badu eraginik datu pertsonalen babesean, nahiz eta ez duten arautzen. Egoera jakin batzuetan, zenbait informazio agintari eskudunei jakinarazteko betebeharrak ezartzen dira; beste egoera batzuetan, berriz, datu horien tratamendua arautzen da, eta abar. Horregatik, lege hau egiterakoan honako hauek hartu dira kontuan: Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa; abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, datu pertsonalen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duena; eta otsailaren 25eko 2/2004 Legea, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.

Lege honetan, dopin- eta osasun-kontrolekin zerikusia duten datuak (analisiaren emaitzak, azterketa medikoen emaitzak, osasun-kontrolen emaitzak, erabilera terapeutikoko baimenen eskaerak eta baimenak, eta abar) osasunari buruzko datu pertsonaltzat hartzen dira, eta horregatik behar dute babes berezia.

Azkenik, legeak, kontuan izanik kirol-espirtuaren aurkako egintzak saihestu nahi dituela eta kirolariaren osasuna babestea duela helburu, edozein dela beraren federazio-mota, araudi berezia ezarri du federatu gabeko kirol lehiaketetan parte hartzen duten kirolarientzat, esaterako, eskola-lizentzia, unibertsitate-lizentzia, edo lizentziaren baliokidea den inskripzioa dutenentzat. Ezinbestekoa da antolatutako kirol-jardueretan parte hartzen duten kirolari guztien osasuna zaintzea, alde batera utzita lizentzia duten edo ez. Legearen asmoa ez da dopin-kontrolak orokorrean aplikatzea kirola egiten duen edonori, eta, horregatik, ahalmena ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zerrenda bat presta dezan, beren mendeko kirolariei dopin-kontrolak egitea zilegi izango den federatu gabeko kirol lehiaketekin. Horren bitartez kontrol horren proportzionaltasuna

zaindu nahi izan da, hau da, beren ezaugarri bereziengatik benetan kontrolatzekoak diren lehiaketetan baino ez egitea dopin-kontrola.

Azken batean, legea idazteko arrazoi nagusia 14/1998 Legean dopinaren arloan jasotzen diren xedapenak gaur egungo egoerara egokitu beharra izan da, nabarmena delako premia hori; eta Euskadik asmo handiko esparru juridikoa izatea ere lortu nahi du, gure kiroltik dopinaren gaitz larria eraginkortasunez erauzten saiatzeko.

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Dopatzea: kontzeptua eta ezarpen-eremua.

1.- Lege honetan arautzen direnetarako, ondorengo izango da dopatzea: kirolariaren errendimendua artifizialki handitzeko, debekatuta dauden substantziak hartzea edo debekatutako metodoak erabiltzea; hori guztia kirol-espirtuaren aurkakoa izango da.

2.- Animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketei dagokienez, dopatzetzat hartuko da animaliei debekatutako substantziak ematea edo haiekin debekatutako metodoak erabiltzea haien kirol-errendimendua artifizialki handitzeko; hori guztia kirol-espirtuaren aurkakoa izango da.

3.- Zehapenen arloan izango dituen ondorioengatik, dopatzea izango da, era berean, lege honetan eta ezartzekoa den gainontzeko araudian dopinaren aurka zehaztutako araudia ez betetzea edozein pertsona fisiko edo juridikok, araudia bete beharra badu.

4.- Legearen eremu material orokorra, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoan garatutako kirol-jarduerak osatzen dute, federatua izan edo ez izan. Aurrekoa hala izanik ere, ez zaie legeak dioena ezarriko estatuko lehiaketa ofizialei eta nazioarteko kirol-lehiaketei, azken horiek nazioarteko kirol-federazioek edo kasuan kasuko erakunde olinpikoak edo paraolimpikoak antolatzen dituenen.

5.- Legearen aplikazio-eremu subjektibo orokorrak euskal federazio-lizentzia duten kirolari guztiak hartzen ditu bere baitan, unibertsitatekoa zein eskolakoa izan, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen diren kirol-lehiaketa ofizialeetan parte hartzeko baimena ematen duen federazio-lizentzia dutenak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoan lehiatzen diren kirolari guztiak ere. Era berean, kirola Euskadin egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiei ere ezarriko zaie legea, nahiz eta kirol-jarduera hori aldi batez baino egin ez. Aplikazio-eremu subjektiboa esandakoa izanik ere, kirolari horiek estatuko edo nazioarteko kirol-jardueretan parte hartzen dutenean, estatuko edo nazioarteko xedapenak bete beharko dituzte.

6.- Lege honetan esaten direnetarako, kirolaritzat hartuko da legearen beraren mende dauden kirol-lehiaketetan parte hartzen duen pertsona oro, parte hartze hori federazio-lizentzia bidez egiten bada, unibertsitatekoa zein eskolakoa zein lege honen ondorioetarako kirol-lizentziaren balioa duen inskripzio-titulua izan.

7.- Legea ez da aplikatuko honako hauetan egindako dopin-kontrolatan: unibertsitateko ikasketetan sartzeko, oposizioetan eta antzeko hautaketa-prozesuetan.

2. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Euskal Autonomia Erkidegoan kirolak ondorengo oinarrizko printzipioak bete beharko ditu, dopinaren aurkako borrokaz ari garela:

- a) Dopina kiroleko etikaren eta olinpismoaren baloreen aurkakoa da.
- b) Dopinak kalte larria eragin diezaieke kirolariei eta kiroletako animaliei.
- c) Dopina modu guztietan da baztertzekoa, eta beraz, debekaturik egongo da eskumena duen organoak onartutako zerrendan galarazitakoak direla esaten den substantziak edo metodoak gomendatzea, proposatzea, baimentzea, uztea, eskura jartzea, saltzea, horiez hornitzea, kontsumitzea edo erabiltzea, betiere hori guztia baimenik ez duten pertsonak egiten badute edo kasuan kasuko araudian jarritako bideak, helburuak nahiz baldintzak bete gabe egiten bada.
- d) Kirolariek, lehiaketetan ari direla nahiz horietatik kanpora, dopinaren aurkako kontrolak egin beharko dituzte hala eskatzen dietenean eskumena duten agintariek, eta beste horrenbeste gertatuko da azterketa, egiaztatze eta ikerketa osagarriekin ere.
- e) Kiroletik dopina erauzteak kirol-antolakunde guztien oinarrizko helburuetako bat izango da.
- f) Informazioa, prestakuntza eta ikerketa ezinbesteko lantresnak dira dopina desagerrarazteko.

3. artikulua.- Kirolarien erantzukizuna.

Kirolariek ondorengo erantzukizunak hartu beharko dituzte beren gain dopinaren aurkako borrokan:

- a) Dopinaren esparruan ezartzekoak diren baldintza eta akordioen berri izatea, eta horien ondoriozko neurri guztiak betetzea.
- b) Hala eskatzen zaienetan, laginak ematera eta gainontzeko kontrolalara joatea eta, era berean, eskatzen zaien informazio guztia ematea.
- c) Irensten duten edo erabiltzen duten guztiaren erantzule izatea.
- d) Medikuntza-alorreko langileei jakinaraztea kirolaria izateagatik ezin duela kirol-alorreko legerian debekatuta dagoen substantziarik hartu edo metodorik erabili, eta ziurtatzea, ahal duen neurrian, agindu dioten tratamendu terapeutikoak ez dituela dopinaren aurkako arauak urratzen.

- e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta eskumena duten beste erakundeetan dopinaren inguruko arau-hausteak salatzea, halakoren baten berri izaten badute.
- f) Dopinaren aurkako informazio-, prestakuntza- eta ikerketa-programetan parte hartzea.
- g) Dopina kontrolatzeko onartuko diren dokumentuak izenpetzea, kirol-lehiaketetan parte hartu ahal izateko.
- h) Lege honetan edo ezartzekoa den gainerako araudian zehazten diren beste guztiak.

4. artikulua.- Kirolarien laguntzaileen eta kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien laguntzaileen inguruneke pertsonen erantzukizunak.

1.- Kirolarien laguntzaileen eta kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien laguntzaileen inguruneke pertsonen ondorengo erantzukizunak hartu beharko dituzte beren gain dopinaren aurkako borrokan:

- a) Dopinaren esparruan ezartzekoak diren baldintza eta akordioen berri izatea, eta horien ondoriozko neurri guztiak betetzea.
- b) Beren kirolariek eta animaliek dopinarekin zerikusirik ote duten jakiteko kontroletan lankidetzak eskaintzea, eta eskatzen zaien informazio guztia ematea.
- c) Eragin positiboa izatea kirolaren inguruko balore eta jarreretan, dopinaren aurrean izan beharreko jarreraz ari garela.
- d) Kirolariei prestakuntza eta aholkuak eskaintzea, dopinaren aurkako neurri eta arauak buruz.
- e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta eskumena duten beste erakundeetan dopinaren inguruko arau-hausteak salatzea, halakoren baten berri izaten badute.
- f) Dopinaren aurkako informazio-, prestakuntza- eta ikerketa-programetan parte hartzea.
- g) Dopina kontrolatzeko onartuko diren dokumentuak izenpetzea, kirol-lehiaketetan parte hartu ahal izateko.
- h) Lege honetan edo ezartzekoa den gainerako araudian zehazten diren beste guztiak.

2.- Lege honen ondorioetarako, hona zer hartuko den kirolarien laguntzaileen eta kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien laguntzaileen inguruneke pertsonatzat: kirol-lehiaketetan parte hartzen duten edo horretarako prestatzen ari diren kirolari edo animaliei arreta eman edo laguntzen dieten entrenatzaile, instruktore, kirol-zuzendari, agente, taldeko kide, mediku, albaitari edo parademidu edo pertsona oro.

5. artikulua.- Aginte publikoen erantzukizunak.

Euskadiko aginte publikoek ondorengo erantzukizunak hartu beharko dituzte beren gain dopinaren aurkako borrokan:

- a) Dopinaren aurka hartuko diren neurri eta arau guztiak indarrean den araudiaren arabera direla ziurtatzea.
- b) Kirol-taldeei eskatzea gaiaren inguruan emandako arau eta hartutako erabaki guztiak zorrotz bete ditzatela.
- c) Ditutzen aukeren eta eskumenen barruan, dopinaren kontrako programak finantziatzen laguntzea.
- d) Adin txikiko kirolariak babesteko neurriak hartzea, dopinaren arriskua dela eta.
- e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta eskumena duten beste erakundeetan dopinaren inguruko arau-hausteak salatzea, halakoren baten berri izaten badute.
- f) Edozein kirol-erakunde edo kirolariri dirulaguntzarik edo bestelako laguntzarik ez ematea, dopinaren aurkako araudia urratzeagatik zigorturik badaude edo kasuan kasuko kontrolak egiteari uko egin baldin badiote.
- g) Lege honetan edo ezartzekoa den gainerako araudian zehazten diren beste guztiak.

6. artikulua.- Kirol-erakundeen erantzukizunak.

1.- Euskadiko kirol-erakundeek ondorengo erantzukizunak hartu beharko dituzte beren gain dopinaren aurkako borrokan:

- a) Dopinaren aurka hartuko diren neurri eta arau guztiak indarrean den araudiaren arabera direla ziurtatzea.
- b) Ditutzen aukeren eta eskumenen barruan, dopinaren kontrako programak finantziatzen laguntzea.
- c) Edozein kirol-elkarte edo kirolariri dirulaguntzarik edo bestelako laguntzarik ez ematea, dopinaren aurkako araudia urratzen badute edo kasuan kasuko kontrolak egiteari uko egin baldin badiote.
- d) Adin txikiko kirolariak babesteko neurriak hartzea, dopinaren arriskua dela eta.

- e) Dopinaren aurkako kasuan kasuko erregelamendua onartzea, lege honetan eta legea garatuko duten xedapenetan esaten denarekin bat.
- f) Lehiaketan eta lehiaketatik kanpora kontrol egokiak egitea.
- g) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta eskumena duten beste erakundeetan dopinaren inguruko arau-hausteak salatzea, halakoren baten berri izaten badute.
- h) Dopinaren aurkako informazio-, prestakuntza- eta ikerketa-programak garatzea edo horietan lankidetzak eskaintzea.
- i) Dopinaren aurkako kontroletan behatzaile independenteek parte hartzea baimentzea.
- j) Baldintza egokiak dituzten guneak prestatzea dopinaren aurkako kontrolak egin ahal izateko, betiere kirolarien beharretara egokituak.
- k) Dopina kontrolatzeko prozesuetan egiten diren analisien emaitzak isilpean gordeko direla zaintzea, horien berri ematea bidezkoa den unera arte.
- l) Dopinaren aurka beharrezkoak diren organo eta erregelamenduak sortzea, lege honetan esaten direnak betetzeko.
- m) Erabilera terapeutikoko baimenak eta horren ondoriozko kirol-bajak nola eman diren eta nola betetzen diren egiaztatzea.
- n) Dopina dela eta zehapenak indarrean dituzten kirolariei kirol-ekitaldietan parte hartzea galaraztea.
- ñ) Lege honetan edo ezartzekoa den gainerako araudian zehazten diren beste guztiak.

2.- Euskadiko kirol-federazioek eta lurraldeetakoek, dopinaren arloan dituzten administrazio arloko eginkizun publikoak betetzeko, dopinaren aurkako programa, xedapen eta organoak izan beharko dituzte zehazturik. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari laguntza teknikoa eskatzeko aukera izango dute.

3.- Euskadiko edo lurralde bateko kirol-federazio batek edo beste kirol-erakunde batek ez badu bere gain hartzen dopinaren arloan duen eginkizun publikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak esku hartuko du, lege honen 10. artikuluan esaten den moduan.

7. artikulua.- Kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeek erantzukizuna.

Kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeek ondorengo erantzukizunak hartu beharko dituzte beren gain dopinaren aurkako borrokan:

- a) Dopinaren aurka hartuko diren neurri eta arau guztiak indarrean den araudiaren arabekoak direla ziurtatzea.
- b) Kirol-taldeei eskatzea gaiaren inguruan emandako arau eta hartutako erabaki guztiak zorrotz bete ditzatela.
- c) Dituzten aukeren eta eskumenen barruan, dopinaren kontrako programak finantziatzen laguntzea.
- d) Adin txikiko kirolariak babesteko neurriak hartzea, dopinaren arriskua dela eta.
- e) Dopinaren aurkako kasuan kasuko erregelamendua onartzea, lege honetan eta legea garatuko duten xedapenetan esaten denarekin bat.
- f) Dopinaren aurkako kontrol egokiak egitea.
- g) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan dopinaren inguruko arau-haustek salatzea, halakoren baten berri izaten badute.
- h) Dopinaren aurkako informazio-, prestakuntza- eta ikerketa-programak garatzea edo horietan lankidetzak eskaintzea.
- i) Dopinaren aurkako kontroletan behatzaile independenteek parte hartzea baimentzea, antolatzen dituzten ekitaldietan.
- j) Dopina kontrolatzeko prozesuetan egiten diren analisien emaitzak isilpean gordeko direla zaintzea, horien berri ematea bidezkoa den unera arte.
- k) Dopina dela eta zehapenak indarrean dituzten kirolariei kirol-ekitaldietan parte hartzea galaraztea.
- l) Baldintza egokiak dituzten guneak prestatzea dopinaren aurkako kontrolak egin ahal izateko, betiere kirolarien beharretara egokituak.
- m) Dopinaren aurka beharrezkoak diren organo eta erregelamenduak sortzea, lege honetan esaten direnak betetzeko.
- n) Erabilera terapeutikoko baimenak eta horren ondoriozko kirol-bajak nola eman diren eta nola betetzen diren egiaztatzea.
- ñ) Lege honetan edo ezartzekoa den gainerako araudian zehazten diren beste guztiak.

8. artikulua.- Kirolarien eskubideak.

Dopinaren aurkako kontrola egin beharko duten kirolariek ondorengo eskubideak izango dituzte, beste batzuen artean:

- a) Haiei buruzko datu pertsonalak babestuta egoteko eskubidea, indarrean den ordenamendu juridikoaren arabera.
- b) Dopinaren aurkako kontrola egitean, konfiantzazko pertsona batek laguntzeko eskubidea, betiere kontrol-gunean edo inguruan baldin badago, eta gastuak kirolariaren kontura direla.
- c) Ustez dopatu izanaren jakinarazpena jasotzen badu, alegazioak aurkeztekoa.
- d) Dopinaren aurkako kontrola kirolariaren erabateko duintasuna eta intimitatea urratu gabe egitekoa, betiere egin beharrekoaren mugak kontuan izanda.
- e) Dopinaren aurkako kontrola grabatu ez edo kontrolaren argazkirik ez ateratzeko eskubidea.
- f) Lehenengo analisi baten emaitza positiboa edo kirolariaren aurkakoa bada, kontraanalisia egin dadila eskatzeko eskubidea.
- g) Dopinaren kontrako prozesua eta lege honek ezarritako preskripzio-epeak amaitu ostean, hartu diren odol-, gernu- edo bestelako laginak desegin daitezela eskatzeko eskubidea. Lagin horiek ikerketak egiteko erabili behar badira, anonimotasuna gordeko da, hots, laginak ezingo zaizkio inongo kirolariri esleitu eta ikerketa biomedikoaren alorrean indarrean den araudia beteko da.
- h) Kirol-erakundeei emaitzak isilpean gordetzeko eskatzeko eskubidea, lege honek ezarritako eran, eta analisisen emaitzen berri jasotzeko lehentasuna izatekoa.
- i) Erabilera terapeutikoko baimenak eskuratzeko eskubidea, Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrendak jasotzen duen debekaturiko substantzia eta metodo bat erabili ahal izateko, lege hau garatzen duen araudian ezartzen diren baldintzak betez gero.
- j) Lege honetan edo ezartzekoa den gainerako araudian zehazten diren beste guztiak.

9. artikulua.- Kirolariei eta erakundeei babesa ematea.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta beren baitako zuzenbide publiko edo pribatuko bestelako erakundeek nahiz administrazioen parte hartzea duten gainerako erakundeek ezin izango diete babesik ez diru-laguntzarik eman kirol-erakundeei, baldin eta kirol-erakunde horiek zehapenen bat jaso badute dopinaren aurkako araudia urratzeagatik, edo dopin-kontrolak egiterakoan lankidetzak eskaintzeari uko egin

badiote. Debeku horrek bere horretan jarraituko du, zehapena indarrean den artean edo lankidetza eskaintzeari uko egiten zaion artean.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta beren baitako zuzenbide publiko edo pribatuko bestelako erakundeek nahiz administrazioen parte hartzea duten gainerako erakundeek ezin izango diete babesik ez diru-laguntzarik eman dena delako kirolariei, baldin eta kirolari horiek zehapenen bat jaso badute dopinagatik, edo dopin-kontrolak egiterakoan lankidetza eskaintzeari uko egin badiote. Debeku horrek bere horretan jarraituko du, zehapena indarrean den artean edo lankidetza eskaintzeari uko egiten zaion artean.

3.- Babesa edo diru-laguntzak emateko harremanik indarrean baldin badago, zehapenak ahalmena emango die administrazioei bertan behera uzteko babes edo diru-laguntzok, eta ez dute oraindik ordaintzeke dauden kopuruak ordaindu beharrik izango. Dopinaren berri izan arte emandako kopuruak itzultzeko betebeharrari dagokionez, diru-laguntzak arautzen dituzten arauetan zehaztutako baldintzek eta prozedurek diotena bete beharko da.

10. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eskumenak.

1.- Hauek dira dopinaren aurka Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak izango dituen eskumenak:

- a) Dopatzeari buruzko legeria betetzen dela zaintzea.
- b) Dopinaren arloan egindako eskaera, kontsulta, salaketa eta erreklamazioei erantzutea.
- c) Dopinaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokienez, pertsonen informazioa ematea.
- d) Eskumena duten organismoen, haien antolaketa, araudia edo jardura dopinaren arloko legeriara egokitzeko eskatzea, eta, hala badagokio, deuseztapena edo aldaketa agintzea, baldin eta legeria horretara egokitzen ez badira.
- e) Zehatzeko ahalaren erabiltzea eta, era berean, dagozkion kautela-neurriak hartzea.
- f) Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak 119. artikuluan aipatzen dituen kirola ikuskatzeko funtzioak, eta eginkizun hori betetzeko behar duen informazio guztia biltzea. Horretarako, edozein argibide eskatu ahal da kirolariei eta haien ingurunean pertsonen, bai eta agiriak eta datuak erakusteko edo bidaltzeko ere, eta dokumentazio hori gordeta dagoen tokian bertan aztertu ahal izango du, eta, halaber, taldeak eta lokalak ikuskatu ahal izango ditu, betiere indarreko legediak ezarritako eran.
- g) Dopin-kontrolen urteko programa bat egitea eta, hala badagokio, programa hori gauzatzea eta zaintzea. Programa horren barruan, lehiaketan bertan eta lehiaketatik kanpo Agentziak berak eskatuta egindako kontrolak sartuko dira. Nolanahi ere, horiek gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko beste erakunde batzuek Euskadin beste kontrol batzuk egin ahal izango dituzte.

- h) Dopinaren aurka modu eraginkorrean borroka egiteko beharrezko duen laguntza eta informazio guztia eskatzea dagokien organoei.
- i) Urtero-urtero txosten bat egitea eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzea.
- j) Dopinik gabeko kirolaren aldeko zabalkunde, prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak egitea; debekatuta dauden substantzien eta metodoen erabilerari buruzko informazioa eta horien kontrol-modalitateei buruzkoa jakinaraztea; dopinaren arrazoiei eta ondorioei buruzko txostenak eta azterketak egitea; prebentzio-ekintzak bultzatzea eta sustatzea. Eginkizun horiek betetzean, genero-ikuspegia integratu beharko du, dopinari eta dopinak gizon eta emakume kirolariengan dituen ondorio zehatzei buruzko ikerketa sustatzeko eta horren berri emateko.
- k) Dopin-kontrolak zein lehiaketa eta probatan egin daitezkeen zehaztea.
- l) Kontrola egiten zaien kirolarien errugabetasun-presuntzioa babestea.
- m) Euskadiko kirol-federazioei eta lurraldeetakoiei diziplina-espedienteak irekitzeko eskatzea, eta, hala badagokio, dagozkion errekursoak jartzea federazio horien diziplina-ebazpenen aurka.
- n) Diziplina-espedienteak izapidetu eta ebaztea, baldin eta kirol-federazioek ez badituzte espediente horiek epearen barruan ebatzi.
- ñ) Dopin-kontrolak egiteko kirolariak aurkitzeko moduan egoteari dagokionez, behar diren xedapen eta formularioak onartzea.
- o) Eusko Jaurlaritzak izapidetutako arau-egitasmoei —dopinaren aurkako borrokari eragiten dietenei— buruzko nahitaezko txostena ematea, baita beste erakunde batzuen arau-ekimenei buruzko txostena ematea ere, erakunde horiek eskatzen diotenean.
- p) Parte hartzea dopinaren aurkako borrokarekin zuzenean loturiko bileretan, foroetan eta erakundeetan, estatu barrukoetan zein nazioartekoetan.
- q) Dopinaren aurkako beste administrazio batzuekin eta kirol-erakundeekin lankidetzan aritzea, erabilera terapeutikoko baimenei buruzko informazioari eta dokumentazioari dagokienean, bai eta, orokorrean, beste edozein eremutan ere, kiroleko dopinaren aurka eraginkortasunez borrokatzeko beharrezkoa denean.
- r) Segurtasun indar eta kidegoekin behar diren lankidetzaharremanak izatea, kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko.
- s) Dopinaren arloan, ikerketa zientifiko eta tekniko bultzatzea, baita garapena eta berrikuntza ere, proiektu zehatzak bultzatuz, bai zuzenean edo bai unibertsitateekin lankidetzan, ikerketako erakunde

publikoekin lankidetzan eta ikerketa, garapena edo berrikuntza bultzatzen duten beste erakunde batzuekin lankidetzan.

- t) Administrazioak berak antolatutako dopin-kontroletan edo, dagozkion hitzarmenen bidez, beste erakunde batzuek egindakoetan, laginak jaso eta garraiatzea.
- u) Dopin-kontroletan laginak hartzeko langileen prestakuntza bultzatzea, gerora, zeregin horretarako gaitzeko langile horiek. Era berean, aintzat hartuko da genero-ikuspegia, laginak hartzeko taldean kirolariaren sexu bereko pertsona bat izan dadin, legeetan jasotzen denez.
- v) Erabilera terapeutikoko baimenak ematea edo ukatzea, erabilera terapeutikoko baimenen euskal batzordearen (COVAUT) bidez.
- w) Aipaturiko administrazioaren eskumenekoak izanik, dopinaren aurkako borrokaren arloetakoak diren gainontzeko eginkizunak, baldin eta berariaz beste organo edo erakunde batzuei esleituta ez badaude, baita beste lege eta araudi batzuen bidez esleitutako eginkizunak ere.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak beharrezkoak diren administrazio-egiturak sortuko ditu, aurreko idatz-zatian xedatutakoa betetzeko.

Aurreko idatz-zatiko f) letrako ikuskaritza burutu behar duten langileak aginte publikotzat joko dira lan horretan ari direla; eta beren zereginak betetzen dihardutenean jakiten dutena isilpean gorde beharko dute derrigor, baita lan hori utzi eta gero ere. Haien aktak egiazkotzat hartuko dira.

11. artikulua.- Aholku Batzordea eta Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea (COVAUT)

1.- Aholku Batzordeak honako kide hauek izango ditu:

- a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren lau ordezkari. Kirol arloan eskumena duen sailburuak izendatuko ditu, eta kirolarekin, osasunarekin, segurtasunarekin eta animalien babesarekin lotutako sailetakoak izango dira.
- b) Lurralde historikoen ordezkari bana; lurralde historikoek proposatuta, kirol arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuak izendatuko ditu.
- c) Kirol-federazioak ordezkatzeko dituen pertsona bat; Euskal Kirol Federazioen Batasunak proposatuta, kirol arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuak izendatuko du.
- d) Gorputz-hezkuntzako eta kiroleko medikuntzan aditua den pertsona bat, farmazian aditua den pertsona bat, albaitaritzan aditua den bat, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan aditua den bat eta kiroleko zuzenbidean aditua den bat, kirol arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuak izendaturikoak.

2.- Erabilera terapeutikoko baimenen euskal batzordeak (COVAUT) autonomia funtzional osoz beteko ditu bere eskumenak. Batzordeko kideak Eusko Jaurlaritzan kirolaren alorreko eskumena duen zuzendariak izendatuko ditu, 2005eko azaroaren 18ko Kiroleko dopajearen aurkako Nazioarteko Hitzarmenaren II. eranskinean batzordekideak izendatzeari buruz ezartzen dituen jarraibideen arabera.

3.- Aholku-kontseiluko kideei edo COVAUTeko kideei ez zaie ordainsaririk emango. Dena dela, gastu eta dietak bai, ordainduko zaizkie, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan zerbitzu-arrazoiengatik oro har aurreikusten diren baldintza, kopuru eta mugen arabera.

4.- Aholku Batzordean eta COVAUT batzordean, ahal dela, emakumeen eta gizonen presentziaren arteko oreka gordeko da.

II. KAPITULUA

DOPIN-KONTROLAK

12. artikulua.- Dopin-kontrolak egiteko betebeharra duten kirolariak.

1.- Lege honen aplikazio-eremu subjektiboan sartutako kirolariak nahitaez egin beharko dituzte, lehiaketan eta lehiaketetatik kanpora, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta lege honen bidez gaitutako erakunde publiko eta pribatuek erabakitako kontrolak. Horrez gain, kirolari horiek estatuko eta nazioarteko xedapenetan ezarritako kontrolak egiteko betebeharra izango dute.

2.- Lehiaketatik kanpoko kontrolak ustekabeen edo aldeztasunetik noiz egingo diren jakinarazita egin daitezke. Lehenengo kasuan, hau da, ustekabeen egingo diren kontrolen kasuan, betebeharra kontrolak egiteari dagokio, eta, bigarren kasuan, berriz, betebeharra agertzeari eta kontrolak egiteari dagokie.

3.- Lehiaketan eta lehiaketatik kanpoko kontrolen baldintzak erregelamendu bidez zehaztuko dira, eta ahalegina egingo da behar bezala kontuan hartzeko bai kirolarien eskubideak eta bai kontrolak eraginkortasunez egiteko beharrianak.

4.- Kontrolak egiteko betebeharra dopinaren alorreko arau-hauste bat egitearren lizentzia etenda dutenei ere badagokie zehapena betetzen ari diren bitartean, eta, edonola ere, kirol-lizentzia berriro gaitu aurretik kontrola egin beharko dute beti.

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak kirolari hauek ere derrigortu ahal izango ditu dopin-kontrolak egitera: lizentzia izan baina ezarritako epean berritu ez dutenak, baldin eta arrazoiz susmatzen bada kirolari horiek ez dutela kirola utzi eta lehiaketatik kanpoko kontrolak saihesteko asmoz ari direla, harik eta lizentzia berritu arte.

6.- Lehen paragrafoan adierazitako kontrolak egin eta ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen, kirolariek, taldeek, entrenatzaileek, zuzendariak eta kirolariak inguruan dituen gainerako pertsonak kirolariak non egon ohi diren jakiteko datuak eman behar dituzte —erregelamendu bidez ezarritako eran—, dopin-kontrolak egin ahal izateko.

7.- Kirolariek, beren entrenatzaileek, medikuek eta gainerako osasun-langileek, bai eta kirol-klubetako eta kirol-erakundeetako zuzendariak ere, dopin-kontrolak egiterakoan adierazi egin behar dute zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren kirolariak, nor diren horien erantzule eta tratamenduak zer hartzen duen bere baitan, baldin eta kirolariek berariaz adierazten ez badute ez dutela baimena ematen horren berri emateko. Era berean, eskatzen zaizenean, gaitzak eta gaitzen tratamendua egiaztatzeko ere eman beharko dute informazioa.

8.- Kirolariak ez badu tratamenduari buruzko informaziorik ematen edo ez badu informatzeko baimena ematen, arau-haustetzat hartuko da, tratamendu medikoei buruz informatzeko betebeharrak ez betetzeagatik.

9.- Kirolariaren Osasun Txartelean kontrola egiteko hitzorduak, egindako kontrolak eta kontrolen emaitzak jasoko dira, txartelaren araudian jasotako eran, lege honen erregelamenduzko garapenean adierazitako moduan.

10.- Kontrola egin ahal izango zaie dagokion euskal federazioaren lizentzia ez duten kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, bertan bizi badira. Kontrol horietatik etor litezkeen diziplina-espedienteak dagokion nazioarteko araudiak ezarritako eran izapidetuko dira. Era berean, lehiaketatik kanpora kontrolak egin ahal izango dizkiete Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen ari direnean, eskumena duen nazioarteko erakundeak edo federazioak eskatuta.

Dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako dopin-kontroletako analisisen emaitzak dagozkion kirol-erakundeetara —eskumena izan dezaketenetara— bidaliko dira.

13. artikulua.- Kontrolen bermeak eta legezko ondorioak.

1.- Laginak hartzeko ekipo batek egingo ditu aurreko artikuluan aipatutako kontrolak, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrek zeregin horretarako gaitutako langileen ardurapean.

2.- Dopinaren aurkako nazioarteko araudiarekin eta, batez ere, Dopinaren aurkako Mundu Kodearekin eta hori garatzeko arauarekin bat etorriz, lehiaketatik kanpoko dopin-kontrolak eta osasun-kontrolak ezin izango dira erregelamendu bidez ezarritako ordutegi-tarte jakin batean egin, eta tarte horretan sartuko dira betiere gaueko atsedenerako erabiltzen ohi diren orduak. Ordu horietan ezin izango da dopin-kontrolik egin Euskal Autonomia Erkidegoan, eta berdin dio kontrol hori agintari administratiboak, kirol-federazioak edo estatuko edo nazioarteko erakundeak agindutakoa izan.

3.- Era berean, kirolari berari ezin izango zaio dopin-kontrol bat baino gehiago eginarazi proba batean. Ez da kontrol beretzat hartuko kirolariei eskatutako lagin-motak desberdinak badira. Erregelamenduz arautuko da eskubide horren norainokoa.

4.- Gaueko atsedenaren barruan sartzen den ordutegi-tartean edo aurreko paragrafoan adierazitakoaren babesean dopin-kontrolak egiteari uko egiteak ez du inolako erantzukizunik eragingo.

5.- Euskal Autonomia Erkidegoan egindako dopin-kontrolak ordutegi-muga horiek errespetatuz egingo direla zainduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, eta berdin dio kontrol horiek nork agitzen dituen.

6.- Kontrola egingo zaiela jakinarazten zaienean esango zaie kirolariei, eta, hala badagokio, lagina hartu baino lehen, kontrol hori dela-eta zein eskubide eta betebeharrak dituzten, eta prozeduraren funtsezko izapideen eta horien ondorio nagusien berri ere emango zaie, bai eta lege honek datuen tratamenduari eta datuak emateari buruz zer xedatzen duen. Horrez gain, jakinaraziko zaie, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezereztzeko edo datuen aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera dutela. Azken horiek datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legerian ezarrita daude.

7.- Dituzten eskubideen artean kontrola ez egiteko eskubidea dago, artikuluan honetan xedatutakoaren eta lege honen 24.1.c artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe.

8.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak informazio-eredu normalizatu bat ezarriko du kontrolak jakinarazteko, dopin-kontrolak lagingo hartzeko eta hartutako lagingo dagokion laborategira bidaltzeko.

9.- Dopin arloko diziplina- edo zehapen-prozeduren ondorioetarako, bidezko arrazoirik gabe dopin-kontrolak egiteari uko egitea edo dopinaren aurkako erakundeek egindako informazio-eskaerei ez erantzutea, behar bezala dokumentatu ondoren, behar adinako frogak izango da kirolariaren jokabidea zehatzeko. Kontrola ez egiteko bidezko arrazoitzat hartuko da kontrola egitera bertaratu ezin izatea egiaztatutako lesio baten ondorioz, edo kontrola egiteak kirolariaren osasuna arrisku larrian jartzen duela egiaztatzen denean. Ezintasun hori lagingo hartzeko taldeko arduradunak egiaztatu beharko du.

10.- Aurreko paragrafoan adierazitako ezintasuna egiaztatzeko agiriari, gaitutako osasun langileak edo medikuak sinatutakoari, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitako egiazkotasun-presuntzioa aitortuko zaio.

14. artikulua.- Betebeharrak osagarriak eta erabilera terapeutikoko baimenak.

1.- Erregelamendu bidez zehaztuko diren klubek eta gainontzeko kirol-erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak behar bezala erregistratutako liburu bat izan eta bete beharko dute nahitaez. Liburu horren osotasuna bermatuko da, eta bertan kirolariei beren zuzendaritzapean agindu dizkieten tratamendu terapeutikoak jasotzeko beharko dituzte, baldin eta kirolariek inskripzio hori egitea onartzen badute. Liburu hori osasun-agiritzat hartuko da datuen babesaren ondorioetarako.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak osatu edo ordeztu egin ahal izango du erregistro-liburu hori datu-baseen prozedura zentralizatuen bidez, informazioaren teknologia berriak eta identifikazio elektronikoa erabiliz; esate baterako, sinadura elektronikoen eta historia elektronikoen bakar eta zentralizatutako sistemen bidez.

- 3.- Kirolariek, liburuan inskripzioa egiten den momentuan, idazpenaren kopia bat eman diezaioten eska dezakete. Bertan, behar bezala identifikatuta azaldu beharko da osasun-tratamendua agindu edo egin duen medikua edo osasun arloko profesionala; osasun-arretaren arduradun den profesionalaren sinadura eta, hala badagokio, zigilua jasoko dira.
- 4.- Liburuan, osasun-jarduera bakoitza kirolariaren sinadurarekin berretsi beharko da, jarduera hori egin dela eta liburuan idazpena egitea baimendu duela berresteko.
- 5.- Dopatze gisa har daitekeen edozein tratamendu terapeutikotan, nahiz eta tratamenduak behar den baimena izan, erregelamendu bidez arautuko den baimen informatuko prozedura bete beharko da, eta erregistro-liburuan horren kopia bat gordeko da.
- 6.- Erregistratzeko betebeharrak horrek Euskadiko kirol-federazioei eta lurraldeetakoiei ere eragiten die, kirolariak, kirol-selekzioetan, haien ardurapean daudenean.
- 7.- Banakako kirolean, betebeharrak hori kirolariena edo dagokion federazioarena izango da, aurreko paragrafoan adierazitako moduan.
- 8.- Beste autonomia erkidego bateko, estatuko edo nazioarteko erakunde batek Euskal Autonomia Erkidegoan lehiatu nahi den kirolari bati erabilera terapeutikoko baimen bat eman badio, edo glukokortikosteroideak edo parekoak erabiltzen direlako adierazpenik badago, kirolariak, edo horretarako izendatzen denak, horren berri eman beharko du dopin-kontrola eginez gero.
- 9.- Dopinaren aurkako organoek eta diziiplina- edo zehapen-organoez ezingo dituzte erabilera terapeutikoko baimenak edo adierazitako baimenak baliozkotzat hartu, horiek ez badaude behar bezala erregistratuta. Era berean, baimenak edo adierazpenak ez dira baliozkotzat hartuko erregistratuta egon eta iruzur eginez lortu badira, edo dosien baldintzak, emateko moduak edo tratamendu-epea ez badira betetzen.
- 10.- Kirol-erakundeek, beren araudietan, mugatu egin ahal izango dute, lehiatuko diren taldeetan, erabilera terapeutikoko baimenak edo glukokortikosteroideak edo parekoak erabiltzen dituztelako adierazpenak dauzkaten kirolarien kopurua.
- 11.- Erabilera terapeutikoko baimenen euskal batzordeak (COVAUT) berrikusiko du erabilera terapeutikoko baimenak edo adierazpenak behar bezala lortu edo aplikatzen diren.
- 12.- Aurreko paragrafoetan aipatutako datu pertsonalak tratatzeko eta lagatzeko, oso-osorik bete behar dira datu pertsonalak babestearen alorrean indarrean dagoen legedian ezarrita dauden xedapenak.
- 13.- Erabilera terapeutikoko baimenak emateko edo ukatzeko erabakiaren aurkako inpuñazioa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzan kirolaren alorreko eskumena duen organoari.

14.- Kirolari bati egindako dopin-kontroleko analisiaren emaitza positiboa bada edo aurkako txostena badu, baina erabilera terapeutikoko baimena badu —eta baimena balioduna bada, indarrean badago eta analisisen emaitzei dagokienez egokia bada— edo kirolariak behar den erabilera-adierazpena badu, dagokion diziiplina- edo zehapen-erakundeak, isilpeko eginbidearen bidez, emaitza negatibotzat hartuko du, eta ez da beharrezkoa izango jardunak bidaltzea diziiplina- edo zehapen-organoetara.

15.- Erabilera terapeutikoko baimenen eskabideak eta glukokortikosteroideak edo parekoak erabiltzen dituztelako adierazpenak aurkeztu behar dituzten kirolariek eta gainontzeko pertsonak, kirol-ekitaldien aurretik, jakinarazi egin behar dute tratamenduren bat jarraitzen ari direla, nahiz eta eskabideak eta adierazpenak gerora aurkeztu.

16.- Lizentziarik gabe Euskadin bizi, entrenatu edo lehiatzen diren kirolariek ez dituzte bete beharko lizentzia duten kirolarientzat lege honetan ezarritako betebeharrak dokumentalak.

15. artikulua.- Kirol-bajak.

1.- Euskadiko kirol-federazioek eta lurraldeetakoek, baita lege hau aplikatzekoa zaien gainontzeko kirol-erakundeek ere, beren araudietan kirol-bajaren egoera aurreikusi ahal izango dute. Egoera horretan, kirolariek edozein lesio edo gaixotasun tratatzeko egokitutako jotzen den edozein tratamendu hartu ahal izango dute askatasun osoz, nahiz eta eragotzita izango duten era guztietako kirol-lehiaketetan parte hartzea.

2.- Ustekabean egindako dopin-kontroleko zehapenak saihesteko asmoz, kirol-bajaren egoera dopinaren aurkako dagokion batzordeak eman beharko du eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean jaso beharko da. Kirol-bajan dagoen bitartean, kirolaria ezin izango da lehiatu dagokion kirol-erakundeko dopinaren aurkako batzordeak zehaztutako epean, kirolariak ez dezan, iruzur eginez, kasuan kasuko tratamendua bere errendimendua hobetzeko erabili.

3.- Kirol-erakundeetako dopinaren aurkako batzordeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean kirol-bajak eta kirol-altak emateko araubidea berrikusi ahal izango dute.

4.- Altak eta bajak kirolariaren osasun-txartelean jasoko dira, halakorik badauka.

5.- Diziiplina- eta zehapen-organoek ezingo dituzte kirol-bajak baliozkotzat hartu, baldin eta ez badaude behar bezala erregistratuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean. Era berean, ezingo dituzte baliozkotzat hartu, behar bezala erregistratuta egon arren, iruzur eginez lortu badira.

6.- Aurreko paragrafoetan aipatutako datu pertsonalak tratatzeko eta lagatzeko, oso-osorik bete behar dira datu pertsonalak babestearen alorrean indarrean dagoen legedian ezarritako xedapenak, eta, era berean, kontuan izan behar da dopin- eta osasun-kontrolan, osasun-azterketetan, erabilera terapeutikoko baimenatarako prozeduretan eta kirol-bajen baimenatarako prozeduretan lortutako datuek goi mailako segurtasun neurriak behar dituztela.

7.- Dopinaren aurkako batzordeek kirol-alten eta kirol-bajen arloan hartutako erabakien aurkako inpuñazioa aurkeztu ahal izango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari.

8.- Dopin-kontrol baten analisiaren emaitza kirolariaren kontrakoa bada, baina kirolariak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean behar bezala erregistratutako kirol-baja badu, emaitza negatibotzat hartuko du dopinaren aurkako batzordeak eta ez da diziplina- edo zehapen-espedienteak irekiko. Ez da espedienterik irekiko, halaber, kirol-baja hori behar bezala erregistratuta egonik kirolariak ez badu dopin-kontrola egiten.

16. artikulua.- Dopin-kontrolak eta osasun-kontrolak.

1.- Lege honen ondorioetarako, dopin-kontrolatzat hartuko dira dopina eragiteko moduko debekatutako substantziarik dagoen egiaztatze edo arauz kanpoko metodorik erabili den egiaztatze, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak gaitutako erakunde eta pertsonen egindako jarduerak. Prozedura estandarren bidez hautematen dira halakoak, eta, horretarako, lagin bat ateratzen da. Dopin-kontrolatzat hartuko dira, era berean, dopatzearen aurkako araudia bete den egiaztatze, eskumena duten dopinaren aurkako organoen egindako jarduerak guztiak.

2.- Dena dela, dopin-kontrolen esparruan sartzen dira honako hauek: kontrolak berme guztiekin egiteko behar den plangintza, kontrolak zein kirolariri eta nola egingo zaizkion aukeratzea, laginak hartu eta erabiltzea, baita laborategiko analisiak eta lortutako emaitzak kudeatu eta gordetzea ere.

3.- Aurreko paragrafoan adierazitako laginak aire, gernu, odol edo beste edozein fluidotatik hartutakoak edo lagin txikiak izango dira, erregelamendu bidez zehaztutako moduan. Bertan adieraziko da nola baliozkotzen diren, ondorio hauetarako, analisen prozedurak.

4.- Lege honen ondorioetarako, osasun-kontrol kontzeptuak jarduera-multzo hau hartzen du bere baitan: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek, kirol-jarduerak beren kirolarien osasunari eragin diezazkiokeen kontrako ondorioak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko, egokitzen dituzten jarduerak, bai eta dopinaren eta osasunaren alorreko legetik eratorritako betebeharrak kirolariak bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere. Osasun-kontrolak analisen emaitzek ez dute diziplina- edo administrazio-zehapenik ekarriko. Hala ere, kontrol horien ondorioz, kirol-erakunde horietan ezarritako kirol eta lan arloko neurriak ezarri ahal izango zaizkie kirolariei, eta dopin-kontrolen plangintza egiteko balio ahal izango dute.

5.- Osasun-kontrol horiek ez dute zerikusirik kirolariak beren borondatez egin ditzaketen azterketa medikoekin, osasuna zaintzeko lan-arloko legediaren babesean egindakoekin.

6.- Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak zehaztu egingo du, lege honen erregelamenduzko garapenen arauak ezarritako eran, zein kasutan den egokia kirolari bati lizentzia kentzea osasuna dela eta.

7.- Erregelamenduz zehaztuko dira kirolarien osasuna babesteko jarduerak izan behar dituzten baldintzak eta ezaugarriak.

17. artikulua.- Kontrolen plangintza eta kudeaketa.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, aurreko artikuluan ezarritakoarekin bat etorritz, lege honetan aipatutako erakundeek egin behar dituzten dopin-kontrolak, osasun-kontrolak eta osasunaren babesaren arloan egin beharreko gainontzeko jarduerak zehaztuko ditu.

2.- Aurrekoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, dagokion kirolaren ezaugarrien arabera eta, ezaugarri horiek aintzat hartuta, ezarritako plangintzaren arabera, lehiaketaren barruan eta lehiaketatik kanpora egin ahal izango dizkie kontrolak kirolariei, batez ere, euskal kirol-selekzioetan parte hartzen dutenean edo parte hartzekotan direnean. Kontrol horiek osagarritzat hartuko dira kirol-federazioek edo beste kirol-erakunde batzuek ezar ditzaketenei dagokienez.

3.- Kontrolak egitean, pertsonen funtsezko eskubideak eta datu pertsonalak erabat errespetatzen direla zainduko da, eta, era berean, praktikarik onenak errespetatuz jardungo da.

18. artikulua.- Kontrolak egiteko eskumena.

1.- Orokorrean, eta lege honetan adierazitako beste erakunde batzuen eskumenen kalterik gabe, Euskadiko kirol-federazioei eta lurraldeetakoiei dagokie behar diren jarduerak egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak zehaztutako lehiaketa federatuetako kontrolak egiteko.

2.- Behar besteko baliabiderik ez dagoenean edo federazioaren beraren egiturak hala justifikatzen duenean, eginkizun hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak beteko du.

3.- Kirolariei lege honen aplikazio-eremuan egindako dopin-kontroletan, laginen analisiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategietan egin beharko dira.

4.- Dopinaren aurkako Mundu Kodean ezarritako irizpideekin bat etorritz, kirol-lehiaketa bakoitzean erakunde bakarra arduratuko da dopin-kontrolaz.

5.- Nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko asmoz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kirolariei lehiaketatik kanpoko kontrolak egiteko, lehentasuna izango dute nazioarteko kirol-erakundeek.

6.- Estatu mailako lehiaketa ofizialetan parte hartzeko asmoz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kirolariei lehiaketatik kanpoko kontrolak egiteko, lehentasuna izango dute estatu mailako erakundeek.

19. artikulua.- Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrendaren publikizitatea.

1.- Nazioarteko erakundeek onartutako xedapenen esparruan, Eusko Jaurlaritzak kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko eskatuko du. Gainera, zerrendan aldaketak egiten diren guztietan, berriro argitaratuko da zerrenda.

2.- Eusko Jaurlaritzak debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrendari buruz informatzeko eta kontsultak egiteko beste modu batzuk ezarriko ditu. Horretarako, erakundeen eta kirolarekin zerikusia duten organoen orri digitaletan erantsiko du zerrenda, eta, horrezaz gain, zerrendaren berri emateko, hedatzeko eta eskura izateko bestelako moduak eta bitartekoak ere ezarriko ditu.

III. KAPITULUA

DOPINARI BURUZKO DIZIPLINAREN ETA ADMINISTRAZIO-ZEHAPENAREN ARAUBIDEA

20. artikulua.- Diziiplina-araubidearen aplikazio-eremua.

1.- Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko 14/1998 Legearen 46. artikuluan exigitzen diren lizentziak direla-eta lotura berezia duten pertsonen, bai eta, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izanik, lege honen peko kirol-jarduerak gauzatzen dituzten kirol-erakundeekin edo lege honen pean beren borondatez jartzen diren gainerako kirol-erakundeekin lotura bereziko harremanak dituzten pertsonen.

2.- Estatuko kirol-lehiaketa ofizialetan dopina dela-eta egindako arau-hausteak estatuko diziiplina-arauen pean egongo dira.

3.- Nazioarteko kirol-lehiaketetan dopina dela-eta egindako arau-hausteak nazioarteko diziiplina-arauen pean egongo dira.

21. artikulua.- Administrazio-zehapenen araubidearen aplikazio-eremua.

1.- Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie, bidezko den heinean, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, edozein kirol-lehiaketatan gertatzen direla ere, dela kirol-lehiaketa autonomia-erkidegoaren eremukoa, dela estatuaren eremukoa edo nazioartekoa, nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olinpikoek edo olinpiada berezietakoek antolatua. Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin, eta egiteak edo ez-egiteak lehiaz kanpoko kirol-jardueretan ere gauza daitezke.

2.- Aurreko idatz-zatian xedatutakoa lege honen 33. artikuluan *non bis in idem* printzipioaren aplikazioari buruz xedatutakoaren kalterik gabe ulertzen da.

22. artikulua.- Kirolariaren eta haren inguruaren erantzukizuna.

1.- Kirolariek ardura hartu beharko dute beren gorputz-organismoan gai debekaturik sar ez dadin, eta gorputzean horrelako gairen bat atzematen zaienean, berena izango da erantzukizuna, beti. Erantzukizunaren helmena, kapitulu honetan ezarritako diziplinako eta administrazio-zehapeneko araubidean ezarritakoa izango da.

2.- Kirolariak erantzukizuna duela ebazteko, ez da beharrezkoa izango haren asmoa, jakinaren gaineko erabilera edo zabarkeria frogatzea. Hori guztia gorabehera, kirolariak frogatu ahal izango du ez duela errurik izan, ez dela zabarkeriarik izan bere aldetik, edo ez duela kirol-errendimendua hobetzeko asmorik izan. Halakoetan, Dopinaren aurkako Mundu Kodean ezarritako irizpideak ezarriko dira.

3.- Artikulu honetako lehenbiziko paragrafoan ezarritako betebeharra bete gabe utziz gero, erantzukizuna exigitu ahal izango da, eta administrazio-neurriak ezarriko dira, diziplina- eta zehapen-neurriak, Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenetan, aplikatzekoa den estatuko legerian eta lege honetako artikuluetan aurreikusitako irismenarekin.

4.- Kirolariek, haien entrenatzaileek, zuzendaritzako langileek, kirolaria atxikita dagoen kirol-erakundeek eta kirolarien inguruko gainerako pertsonak kirolariak ohikotasunez lokalizatzeari buruz ezarritako betebeharrak ez betetzeaz erantzungo dute.

5.- Kirolariek, haien entrenatzaileek, medikuek, osasungintzako langileek edo zuzendaritzako kideek eta kirol-erakundeek eta kirolarien inguruko gainerako pertsonak erantzukizuna izango dute organo eskudunei kirolariaren gaixotasunei buruzko informazioa, tratamendu terapeutikoei buruzkoa eta tratamenduaren helmen eta erantzuleari buruzkoa emateko betebeharra arautzen duten xedapenak ez betetzeagatik, baldin eta kirolariak datu horiek erabiltzeko baimena eman badu.

6.- Era berean, erabilera terapeutikorako baimenak eskuratzeko ezarritako betekizunak ez betetzeagatik edo hausteagatik ere izango dute erantzukizuna, bai eta indarrean dagoen araudian glukokortikosteroideak edo beste gai batzuk erabili izanari buruzko adierazpenak egiteko ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik edo hausteagatik ere.

23. artikulua.- Arau-hausteen tipifikazioa.

1.- Lege honen ondorioetarako, oso arau-hauste larritzat joko dira:

- a) Lege honetako 22.1 artikulua aipatzen dituen betebeharrak ez betetzea, eta, horren ondorioz, debekatutako gai bat hautematea, edo haren metabolitoak edo markatzaileak, kirolari baten gorputz-laginetan.
- b) Kirolean baimentzen ez diren edo debekaturik dauden gaiak eta metodoak erabili edo kontsumitzea.
- c) Organo edo pertsona eskudunek hala eskatzen dutenean, lehiaketa barruan edo kanpoan dopin-kontrolak egiteari uko egitea edo aurka egitea, bidezko arrazoirik gabe. Era berean, organo edo pertsona eskudunek laginak biltzeko egindako eskakizunak, edo dopinaren kontrol- eta zigortze-prozeduretan beste edozein jarduera gauzatzeko egindako eskakizunak eragozteak, eskakizun horiei kasurik ez egitea, edo bidegabeki atzeratzea, edo ezkutaketan aritzea; orobat, eskakizun horiek betetzea galarazteko edo nahastea eragiteko gainerako jokabideak, egitezkoak edo ez-egitezkoak, edo eskakizun horiek betetzen uzten ez duten gainerako jokabideak, egitezkoak edo ez-egitezkoak.

- d) Lege honen 22.4 artikulua aipatzen dituen betebeharrak ez betetzea behin eta berriro, eta kontrolak lehiaketaz kanpo egiteko kirolariak lokalizatzeari eta eskuragarri egoteari buruz ezarritako betekizunak ez betetzea behin eta berriro.
- e) Tratamendu terapeutikoei eta erabilera terapeutikorako baimenei buruzko informazioari dagozkion betebeharrak, lege honetako 22. artikuluko 5 eta 6 idatz-zatiek aipatzen dituztenak, bai eta 14.1 artikulua aipatzen tratamendu terapeutikoak inskribatzeko baimena ezeztearen, ez betetzea, eta lege honetako 48. artikuluan xedatutakoa urratzea.
- f) Dopinaren kontrol- eta zigortze-prozeduretako edozein osagai aldatu, faltsifikatu edo manipulatuzea.
- g) Kirolean onartzen ez diren edo debekaturik dauden gaiak edukitzea edo metodoak erabiltzea, horiek emateko edo agintzeko erabilera terapeutikoko baimenik ez dagoenean; orobat gaien, tresnen edo metodoen bolumena edo kantitatea helburu terapeutikoekin emateko edo aplikatzeko gehiegizkoa edo neurririk gabea izatea, arrazoirik gabe.
- h) Kirolean debekaturik dauden edo arauzkoak ez diren gaiak eman, banatu, eskaini edo bideratzea kirolariari, edo horiez hornitzea kirolariari; orobat, kirolean onarturik ez dauden edo debekaturik dauden metodoak erabiltzea.
- i) Gai edo metodo debekatuak edo arauz kanpokoak erabiltzeko baldintzak sustatzea, bultzatzea, laguntzea, akuilatzea edo erraztea; edo kirolariak dopinaren kontrolerako arauak baimentzen ez dituzten produktuak erabiltzera edo jokabideak izatera bultzatzen dituen beste edozein jardura; edo kirolarien esku kirolean onartzen ez diren edo debekaturik dauden gaiak edo metodoak jartzeko xedea duen beste edozein jardura.
- j) Arauzkoak ez diren metodoak abian jartzen laguntzea edo parte hartzea, egitez edo ez-egitez, edo dopinaren kontrako araudia urratzen duen beste edozein jokabide, egiteko edo ez-egiteko.
- k) Debekatu egiten da kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoak kirol-zentroetan biltegiatzea, merkaturatzea edo banatzea, edozein dela modua. Halaber, debekatu egiten da aurreko paragrafoan adierazitako produktuak kirol-zentroetan kontsumi daitezen sustatzea.
- l) Kirol-baja iruzur bidez eskuratzea eta erabiltzea, eta baja hori lortzeko, baldintzak ez betetzea edo, hala badagokio, urratzea.

2.- Arau-hauste larriak izango dira:

- a) Legearen 22.4 artikulua aipatzen dituen betebeharrak ez betetzea, eta lehiaketaz kanpoko kontrolak egiteko kirolariak lokalizatzeari eta eskuragarri egoteari buruzko betekizunak urratzea, non eta ez diren behin eta berriro egiten, zeren eta, kasu horretan, arau-hauste oso larritzat joko baitira.

- b) Aurreko paragrafoko a), b), e) eta g) idatz-zatietan deskribatutako jokabideak, dagokion arau juridikoan larritasun txikikotzat jotako gaiak edo metodoak dituztenean helburutzat, gai edo metodo horiei eragiten dietenean edo horiei buruzkoak direnean, non eta ez diren behin eta berriro gauzatzen, zeren eta, kasu horretan, arau-hauste oso larritzat joko baitira.
- c) Osasun-jardueren gauzatze materiala federazio-lizentzia edo gaikuntza baliokidea etenik duten pertsonen edo erakundeen kontratatzea, esleitzea, izendatzea edo gomendio ematea, jarduera horiek gauzatzeko federazio-lizentzia edo gaikuntza baliokidea izatea exigitu ahal denean; orobat, jarduera horiek dagokion federazio-lizentzia edo gaikuntza baliokidea eduki gabe gauzatzea, edo eskuratutako lizentzia edo gaikuntza hori etenda izanik.
- d) Lege honek aurreikusitako beharrezko liburuak ez kudeatzea.

3.- Aurreko paragrafoetan deskribatzen diren arau-haustek animaliek kirol-lehiaketetan parte hartzen duten kasuetan ere aplikatuko dira, dagokion egokitze logikoekin.

24. artikulua.- Kirolariei ezartzekoak diren zehapenak.

1.- 23. artikulua lehenezko paragrafoko a), b), c), d), e), f), g), j) eta l) idatz-zatietan aurreikusitako arau-hauste oso larriak eginez gero, lizentzia bi urtetik lau urte arteko aldi batez eteteko edo kentzeko zehapenak ezarriko dira, eta, hala balegokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna. Jokabide horiek bigarren aldiz gauzatuz gero, zehapena izango da federazio-lizentzia betirako kentzea, eta, hala balegokio, dagokion diru-zehapena, lege honetako 28. artikulua hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritik.

2.- 23. artikulua lehenezko paragrafoko h) eta i) idatz-zatietan aurreikusitako arau-hauste oso larriak eginez gero, lizentzia lau urtetik sei urtera arteko aldi batez eten edo kentzeko zehapenak ezarriko dira, eta, hala balegokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna. Bigarren arau-haustea eginez gero, zehapena izango da federazio-lizentzia betirako kentzea, eta, hala balegokio, dagokion diru-zehapena, lege honetako 28. artikulua hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritik.

3.- Lege honetako 23. artikulua bigarren paragrafoan aurreikusitako arau-hauste larriak egiteagatik, federazio-lizentzia hiru hilabetetik bi urtera arteko aldi batez kendu edo etengo da, eta, hala balegokio, 1.500 eurotik 3.000 euro arteko isuna ezarriko da.

Lehen aipatutako legez kontrako ekintza horiek bigarren aldiz eginez gero, jokabidea arau-hauste oso larritzat joko da eta federazio-lizentzia kendu edo eten egingo da bi urtetik lau urtera arteko epe batez, eta, hala balegokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna ezarriko da. Hirugarren arau-haustea eginez gero, zehapena izango da federazio-lizentzia betirako kentzea, eta, hala balegokio, dagokion diru-zehapena, lege honetako 28. artikulua hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritik.

4.- Baldin eta kirolariak, erabilera terapeutikoko baimena edukitzeko behar bezalako mediku-justifikazioa izanik, ez badu eskatu, edo aurretik zuen baimenaren indarraldia iraungi egin bada, lehendabiziko aldian ohartarazpena ezarriko zaio, baldin eta kontrolean analisiaren emaitza aurkakoa bada. Kirolari berak bigarren aldiz egiten badu

arau-hauste bera, arau-hauste larriari dagokion zehapena ezarriko zaio, guztien artean txikiena. Zehapen horrez gain, klubak ere jaso dezake diru-zehapena, halako ez-egiteetan izandako arduragabekeriagatik.

5.- Aurreko idatz-zatietan adierazitako zehapenen ondorioz, ezinezkoa izango da Euskadiko instalazio publikoetako inolako lehiaketatan parte hartu, lizentziaren etenaldiak, kentzeak edo eskuratzeko ezintasunak irauten duen bitartean.

25. artikulua.- Klubei eta kirol-taldeei ezartzeakoak diren zehapenak.

1.- Lege honetako 23. artikuluaaren lehenbiziko paragrafoan aurreikusitako arau-hauste oso larriak egiteagatik isuna ezarriko da, 6001 eurotik 24.000 euro artekoa, eta, hala balegokio, puntuak edo posizioak galtzea sailkapenean edo mailaz edo kategoriaz jaitea. Jokabide horietan adingabea sartuz gero, edo behin eta berriro eroriz gero, isuna osagarria baino ez da izango, eta 24.001 eurotik 50.000 euro arteko isuna ezarriko da.

2.- Lege honetako 23. artikuluaaren bigarren paragrafoan aurreikusitako arau-hauste larriak egiteagatik, 1.500 eurotik 6.000 euro arteko isuna ezarriko da. Legez kontrako jokabide horietan bigarren aldiz eroriz gero, jokabidea arau-hauste oso larritzat joko da, eta 6.001 eurotik 24.000 euro arteko isuna ezarriko da, eta, hala balegokio, puntuak edo posizioak galtzea sailkapenean edo kategoriaz edo mailaz jaitea. Arau-haustea hirugarren aldiz eginez gero, diru-zehapena osagarria baino ez da izango, eta 24.001 eurotik 50.000 euro arteko isuna ezarriko da.

26. artikulua.- Teknikariei, epaileei, arbitroei eta kirol-lizentziadun gainerako pertsonen, zuzendaritzako langileei, zuzendariak edo kirol-federazioetako langileei, liga profesionaletako langileei, kirol-lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeei eta kirol-klubei edo -taldeei ezartzeakoak diren isunak.

1.- Lege honetako 23. artikuluaaren lehenbiziko paragrafo b), c), d), e), f), g) eta j) idatz-zatietan aurreikusitako arau-hauste oso larriak egiteagatik, kirol-karguak betetzeko aldi baterako desgaitzea, kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea bi urtetik lau urterako aldi batez kentzea edo etetea, eta, hala balegokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna ezarriko dira. Jokabide horietan adingabea sartuz gero, edo jokabide horiek bigarren aldiz gauzatzen direnean, kirol-karguak betetzeko desgaitzea izango da zehapena, edo kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea betirako kentzea edo etetea, eta, hala balegokio, diru-zehapena, lege honetako 28. artikuluaaren hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritik.

2.- Lege honetako 23. artikuluaaren lehenbiziko paragrafo b), c), d), e), f), g), j) eta l) idatz-zatietan aurreikusitako arau-hauste oso larriak egiteagatik, kirol-karguak betetzeko aldi baterako desgaitzea, kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea lau urtetik sei urterako aldi batez kentzea edo etetea, eta, hala balegokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna ezarriko dira. Jokabide horietan adingabea sartuz gero, edo jokabide horiek bigarren aldiz gauzatzen direnean, kirol-karguak betetzeko desgaitzea izango da zehapena, edo kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea betirako kentzea edo etetea, eta, hala balegokio, diru-zehapena, lege honetako 28. artikuluaaren hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritik.

3.- Lege honetako 23. artikulua bigarren paragrafoan aurreikusitako arau-hauste larriak egiteagatik, federazio-lizentzia hiru hilabetetik bi urtera arteko epe batez kendu edo etengo da, eta, hala balegokio, 1.500 eurotik 3.000 euro arteko isuna ezarriko da.

Legez kontrako ekintza horiek bigarren aldiz eginez gero, jokabidea arau-hauste oso larritzat joko da eta kirol-karguak betetzeko desgaitzea ezarriko da zehapena, edo kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea bi urtetik lau urtera arteko aldi batez kentzea edo etetea, eta, hala balegokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna. Hirugarren arau-haustea eginez gero, zehapena izango da kirol-karguak betetzeko desgaitzea edo kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea betirako kentzea edo etetea, eta, hala balegokio, dagokion diru-zehapena, lege honetako 28. artikulua hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritik.

4.- Atal honetan arau-haustetzat tipifikatutako jokabideak baimenik edo gaikuntza baliokiderik gabe gauzatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, zerbitzuak ematen dituztenean edo kirol-federazioen kontura edo haien eskuordetzez lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeen kontura jarduten dutenean, ofizialak izan zein ez izan, edo erakunde horien barruan integratutako pertsonak edo erakundeek ezingo dute kirol-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik eskuratu, ez kirol-lizentziari dagozkion eskubideak baliatu kirol-karguak betetzeko desgaitze-zigorrek irauten duten bezalako aldi batez, edo kirol-lizentziak edo gaikuntza baliokideak kentzeko edo eteteko zigorrak irauten duten bezalako aldi batez.

Kirol-federazioek eta kirol-lehiaketak antolatzen dituzten erakundeek, ofizialak izan zein ez izan, egokitu egingo dute beren araudia lege honetako aurreikuspenak sartzeko; aurreikuspen horiek bateragarriak izango dira kasu bakoitzean dagokiokeen erantzukizun zibilarekin eta lege honetan xedatutakoaren ondorioz exigitu ahal diren erantzukizunengatik dagokiokeen kontu ematearekin.

5.- Artikulu honetan aurreikusitako zehapenak kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien jabe diren pertsonak eta animalia horiek dauzkaten pertsonak ere aplikatu ahal zaizkie, bai eta dagokion arau-haustea egiten parte hartzen duten pertsona guztiei ere.

27. artikulua.- Klubetako edo taldeetako medikuei eta gainerako osasun-langileei ezartzekoak diren zehapenak.

1.- Talde-medikuei eta kirol-lizentziarekin edo gaikuntza baliokidearekin osasun-eginkizunak betetzen dituzten langileei, lege honetako 23. artikuluko lehenbiziko paragrafoko c), e), f), g), h), i), j), k) eta l) hizkietan aurreikusitako jokabideak gauzatzen badituzte, zehapena ezarriko zaie, lizentzia bi urtetik lau urterako aldi batez kenduz edo etenez eta 6001 eurotik 24.000 euro arteko diru-isuna ezarritik. Jokabide horietan adingabea sartuz gero, edo jokabide horiek bigarren aldiz gauzatuz gero, zehapena izango da federazio-lizentzia betirako kentzea, eta, hala balegokio, dagokion isuna, lege honetako 28. artikuluko hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritik.

2.- Talde-medikuei eta kirol-lizentziarekin edo gaikuntza baliokidearekin osasun-eginkizunak betetzen dituzten gainerako langileei, lege honetako 23. artikuluko lehenbiziko paragrafoko h) eta l) idatz-zatietan aurreikusitako jokabideren bat gauzatzen badute, zehapena ezarriko zaie, federazio-lizentzia lau urtetik sei urte arteko aldi batez kenduz edo etenez eta 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna ezarritik. Jokabide horietan adingabea sartuz gero, edo jokabide horiek bigarren aldiz gauzatuz gero, zehapena izango da federazio-lizentzia betirako kentzea,

eta, hala balegokio, dagokion isuna, lege honetako 28. artikuluko hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz.

3.- Talde-medikuei eta kirol-lizentziarekin edo gaikuntza baliokidearekin osasun-eginkizunak betetzen dituzten gainerako langileei, lege honetako 23. artikuluko bigarren paragrafoan arau-hauste larritzat tipifikatutako jokabideak gauzatzen badituzte, zehapena ezarriko zaie, federazio-lizentzia hiru hilabetetik bi urte arteko aldi batez kenduz edo etenez eta, hala balegokio, 1.500 eurotik 3.000 euro arteko isuna ezarriz. Lehen aipatutako legez kontrako ekintza horiek bigarren aldiz eginez gero, jokabidea arau-hauste oso larritzat joko da eta federazio-lizentzia kendu edo eten egingo da bi urtetik lau urtera arteko aldi batez, eta, hala balegokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna ezarriko da. Hirugarren arau-haustea eginez gero, zehapena izango da federazio-lizentzia betirako kentzea, eta, hala balegokio, dagokion isuna, lege honetako 28. artikulua erabiltzeko hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz.

4.- Osasun-eginkizunak betetzen dituzten langileek atal honetan arau-haustetzat tipifikatutako jokabideak gauzatzen dituztenean federazio-lizentzia edo gaikuntza baliokiderik gabe, eta kirol-federazioen, liga profesionalen edo kirol-lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeen kontura jarduten direnean edo zerbitzuak ematen dituztenean edo erakunde horietan atxikitako pertsonen edo erakundeen kontura jarduten direnean edo zerbitzuak ematen dituztenean, ezingo dute kirol-lizentziarik edo osasun-eginkizunetarako gaikuntzarik lortu, ez eta kirol-lizentziari dagozkion eskubideak baliatu, kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea kentzeko edo eteteko zehapenak irauten duen besteko epe batez. Kirol-federazioek eta kirol-lehiaketak antolatzen dituzten erakundeek egokitu egingo dute beren araudia lege honetako aurreikuspenak sartzeko; aurreikuspen horiek bateragarriak izango dira kasu bakoitzean dagokiokeen erantzukizun zibilarekin eta atal honetan xedatutakoaren ondorioz exigitu ahal diren erantzukizunengatik dagokiokeen kontu ematearekin.

5.- Aurreko paragrafoan xedatutakoaren kalterik gabe eta atal honetan tipifikatutako jokabideengatik dagozkiokeen erantzukizunen kalterik gabe, diziiplina-organoek dagozkien lanbide-elkargoei jakinaraziko dizkiete osasun-eginkizunak betetzen dituzten langileek gauzatutako egintzak.

6.- Artikulu honetan aurreikusitako zehapenak albaitariei ere aplikatuko zaizkie, animaliek parte hartzen duten kirol-probak direla-eta, baldin eta zehapenok aplikatzekoak badira.

28. artikulua.- Dopina dela-eta zehapenak ezartzeko irizpideak.

1.- Kirolari batek lehenbiziko aldiz egiten duenean arau honetan aurreikusitako arau-hausteetako bat, dagokion artikuluan ezarritako zehapenak ezarriko zaizkio, proportzionalitate-irizpidearen arabera, baina betiere egoeraren inguruabarrak kontuan hartuz.

Egoeraren inguruabarrak kontuan hartzeko eta zehapena graduatzeko, Dopinaren kontrako Mundu Kodean ezarritako irizpideak erabiliko dira beti.

2.- Horrez gain, lege honetako 36. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe, zehapenak graduatuko dira proportzionalitate-irizpideari eta kasu bakoitzean ageri diren inguruabarrei jarraituz, batez ere asmorik izan den,

jakinaren gainean egin den, eginkizunen erantzukizunaren maila nolakoa den eta zer kalte mota eragin diren begiratuz, bai eta erantzukizuna modulatzeko balio dezaketen gainerakoei begiratuz.

3.- Bigarren arau-hauste oso larria eginez gero, zehapena izango da lizentzia edo gaikuntza baliokidea betirako kentzea, federazioan karguak betetzeko betiko desgaitzea edo lizentzia betirako kentzea, eta, hala balegokio, dagokion isuna ezartzea, gehienezko zenbatekoan.

29. artikulua.- Isunak ezartzea.

1.- Pertsonari zehapen gisa ezartzen zaizkion isunak, kirolarien kasuan, diru-sarrerak izaten dituztenean baino ezingo dira ezarri, betiere diru-sarrera horiek kirol-jarduerarekin zerikusia badute.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ezarritako isunak ordaindu ezean, nahitaez ordainaraziko dira, aplikatzekoa den administrazio-legerian ezarritako moduan.

3.- Aurreko paragrafoan aurreikusitako prozeduraren bidez bildutako isunen emaitza zuzenbide publikoko diru-sarrera izango da, eta 10. artikuluan adierazitako ikerketa-helburuetarako baliatuko da. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak jarduera horretarako behar diren kredituak sortu ahal izango ditu, eta kreditu horiek lege honetan ezarritakoari jarraituz gauzatuko dira.

30. artikulua.- Arau-haustearen ondorio gehigarriak eta emaitzak aldaraztea.

1.- Banakako kirol-jardueretan, atal honetan aurreikusitako arau-haustek eginez gero, kirolariari kendu egingo zaizkio dena delako kirol-lehiaketako sariak edo dominak, baliogabetu egingo zaizkio emaitzak eta erabateko deskalifikazioa ezarriko zaio dena delako lehiaketa edo proba horretan, edo dena delako lehiaketa edo proba hori sartuta dagoen txapelketetan.

2.- Diziplina-organoek aurreko edo ondoko egunetan egindako proba, lehiaketa edo txapelketei, handik geroago egindakoei edo kirolariaren laginak hartu diren egunean edo arau-haustea egin den egunean egin direnei ere aplikatu ahal izango dizkiete neurri horiek.

3.- Talde-kiroletan, lege honetako 26. artikuluan xedatutakoaren ondorioz dagozkikeen zehapenak gorabehera, diziplina-organoek adierazi beharko dute ea beren iritziz egokia ote den partiden, proben, lehiaketen edo txapelketen emaitza aldatzea. Horretarako, egoeraren inguruabarrak haztatuko dituzte, eta orobat, dopina dela-eta atal honetan tipifikatutako arau-haustek egin dituztenek partidaren, probaren edo lehiaketaren emaitzan izandako parte hartzea erabakiorra izan ote den, eta zer parte hartze izan duten adingabeek jokabide horietan.

4.- Arau-haustearen izaera dela-eta posible denean, ezarritako zehapenekin batera, kirolean dopina eragin duten edo eragin dezaketen gai eta tresna guztiak konfiskatu egingo dira. Zehapena ezartzeko ebazpena dela-eta behin betiko konfiskatu diren gaiak eta tresnak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari esleituko zaizkio hari eta, erregelamendu bidez, haien behin betiko norakoa ezartzen den arte. Nolanahi ere, hori guztia

lege honetako 41. artikuluan kautelazko neurri gisa ezartzekoa den konfiskazioari buruz xedatutakoaren kalterik gabe izango da.

31. artikulua.- Zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentzia eskuratzeko gaitasuna galtzea.

1.- Kiroleko dopina dela-eta zehapenak ezarri izana Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 4/1998 Legearen babesean emandako kirol-lizentziari dagozkion eskubideak lortzeko edo baliatzeko ezintasun-kasuetako bat izango da, eta, bereziki, kirol-lehiaketetan parte hartzeko ezintasun-kasuetako bat.

2.- Zehapena lege honetan aurreikusitakoez besteko organo batek ezarri duenean, zehapen horren eta lege honen arabera dagokionaren arteko bateraezintasuna adierazteko eskatu ahal izango diote zehatuek Kirol Justiziako Euskal Batzordeari, zehatzeko ahal publikoari dagozkion printzipioei dagokienean. Aurreko hori ulertu behar da Kirol Diziplinaren Espainiako Batzordeak edo beste erakunde eskudun batzuek egin dezaketen bateraezintasun-adierazpenaren kalterik gabe.

3.- Erreklamazio hori egiteko prozedura erregelamendu bidez ezarriko da.

4.- Dopina dela-eta zehapena ezarri zaien kirolariek lizentzia berria eskuratzeko edo kirol-jarduera berriz hasteko aldez aurreko kontrola igaro beharko dute, lege honetako 12.4 artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

5.- Beste erakunde batzuek dopina dela-eta ezarritako zehapenak elkarri onartzeko printzipio orokorra aplikatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kirol-jarduerak antolatzen dituzten erakundeek. Kirolariren bati dopinagatiko zehapena ezarri gero eta zehapena indarrean egonez gero, edozein dela zehapen-mota, debekatu egingo zaio Euskal Autonomia Erkidegoan garatuko diren kirol-jardueretan parte hartzea.

6.- Gainera, desgaitasuna ezarri gero, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-administrazioek ezingo diote goi-mailako kirolariaren edo etorkizun handiko kirolariaren izaera aitortu kirolariari, edo lehendik zeukanari izaera horretan eutsi.

32. artikulua.- *Non bis in idem* printzipioaren aplikazioa.

1.- Ezingo da administrazio- edo diziplina-zehapenik ezarri zigor-zuzenbideko zigorra ezartzea eragin duten egitateengatik, subjektua, egitatea eta funtsa berberak izanez gero.

2.- Hortaz, diziplina-organoak, delitu-zantzuak hautematen baditu, eten egingo du prozedura-izapidea. Halakorik gertatuz gero, gertakarien berri emango dio ministerio fiskalari.

3.- Diziplina-organoak edo zehapen-organoak, halaber, eten egingo du prozedura-izapidea, baldin eta lehen aipatutako hiru ezaugarriak gertatu eta gertakari horiek bide penaletik zigortzen ari direlako berri badu, eta, hala badagokio, berriro ekingo dio prozedurari gerora.

4.- Instruktoareak jakiten badu gertaera berberen ondorioz beste zehazpen-prozeduraren bat bideratzen ari dela, jakinaren gainean jarriko du organo zehatzailea, eta organo hori, prozedura eten gabe, harremanetan jarriko da erreferentziako prozedura ebazteko eskumena duen organoarekin, koordinatu ahal izateko eta, hartara, behar diren aginduak eman ahal izateko.

Gertaera beraren gainean administrazio-zehapena jarriko da soilik oinarri juridikoak bat ez datozenean.

5.- Zehapen-prozeduraren edozein fasetan, ebazpena eman behar duen organoaren aburuz datuak baldin badaude pentsatzeko ustezko arau-haustea osatzen duten egiateen poderioz arau-hauste hori zehatztea ez dela bere eskumenekoa, bere iritziz eskuduna den organori jakinaraziko dio, eta ordurarte bideratutako guztia eskualdatuko dio.

33. artikulua.- Erantzukizuna azkentzeko kausak.

Honako hauek dira diziplina-erantzukizuna guztiz edo partez –zer dagokion kasu bakoitzean- azkentzeko kausak:

- a) Zehapena betetzea. Lege hau garatzeko arauak eta kirol-federazio eta -erakundeek eman ahal dituztenek ezingo dute izan inolako ondorio gehigarririk zehapena ezarria eta betea duten kirolarientzat.
- b) Arau-haustea preskribatzea. Arau-haustea preskribatzeko baldintzak hurrengo artikuluan daude ezarrita.
- c) Dopina eragiteagatik kirolean debekaturik dauden gaiak edo metodoak ematen edo hornitzen dituzten pertsonak edo talde antolatutak, edo gai edo metodo horiek baliatzeko modua ematen dutenak atzematen, bilatzen eta organismo eskudunen esku uzten laguntzea. Kasu horretan azkentzea partez gertatuko da.
- d) Erruztatuaren edo zehatuaren heriotza.
- e) Pertsona juridiko erruztatua edo zehatua azkentzea.
- f) Zehapena preskribatzea.
- g) Zehapena barkatzea.

34. artikulua.- Arau-haustea eta zehapenak preskribatzea.

1.- Arau-hauste oso larriak hiru urteren buruan preskribatuko dira, eta larriak bi urteren buruan. Falta oso larriengatik ezarritako zehapenak hiru urteren buruan preskribatuko dira, eta falta larriengatik ezarritakoak bi urteren buruan.

2. Arau-haustea egin zen egunetik hasita zenbatuko da arau-haustearen preskripzio-epea.

3.- Baldin eta, pertsona edo erakunde interesdunaren jakinaren gainean, diziiplina- edo zehapen-prozedurari ekiten bazaio, eten egingo da arau-hausteen preskripzioa; nolanahi ere, zehapen-espedientea, erantzuleari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, hilabete baino luzaroago geldirik egoten bada, preskripzio-epea zenbatzen jarraituko da. Aurreko hori gorabehera, preskripzioaren etendurak bere horretan jarraituko du, lege honen 33. artikuluan aurreikusitako kausaren batengatik eten bada; nolanahi ere, preskripzio-epea zenbatzen jarraituko da, legez prozedurari berrekin ahal zaionetik hilabete igaro denean.

4.- Zehapenen preskripzio-epea, berriz, zehapena ezartzen duen ebazpena irmo bihurtu den egunaren biharamunetik hasiko da kontatzen.

5.- Betearazteko prozedura interesduna jakitun dela hasiz gero, preskripzio-epearen zenbaketa eten egingo da. Prozedura hilabetetik gora geldirik egonez gero arau-hausleari egotzi ezin zaion arrazoiaren batengatik, jarraitu egingo da epea zenbatzen.

6.- Era berean, lagundu izanagatik zehapenaren azkentzea eragiten duen prozedura hasten bada, zehapenen preskripzio-epea eten egingo da; nolanahi ere, epea zenbatzen jarraituko da prozedura azkentzerik gabe amaitu eta ebatzi denetik hilabete igaro denean.

35. artikulua.- Dopina atzematen laguntzea.

1.- Baldin eta kirolariak agintari eskudunen aurrean salatzen baditu pertsona eta erakunde egileak eta laguntzaileak, eta administrazio eskudunari laguntzen badio haien kontrako prozeduran edo prozesuan lekukotza emanez edo funtsezko datuak emanez, salbuesirik geratuko da, partez, administrazio-erantzukizunetik, eta, hala balegokio, ez du diziiplina- edo zehapen-prozedurarik igaro beharko. Xedapen hau aplikatzeko, salaketak, eta, hala balegokio, salaketarekin batera aurkezten diren frogak, diziiplina- edo zehapen-prozedura hasten uzteko besteko garrantzia izan behar dute, edo, hala balegokio, prozesu judiziala hasten uzteko bestekoa.

2.- Aurreko paragrafoan aurreikusitako salbuespen hori, eta lege honetako 34. artikuluko c) hizkian aipatzen den erantzukizunaren azkentze erabatekoa edo partezkoa, honen arabera izango dira: salaketaren eta emandako laguntzaren zer-nolakoa, eta laguntza horrek dopinaren kontrako borrokan zer-nolako eraginkortasuna eta ahalmen juridikoa duen. Ezarritako zehapenetatik salbuestea ba ote dagokion ebazteko eskumena diziiplina- edo zehazpen-organoari dagokio, eta ezarritako zehapenen erabateko edo partezko azkentzerik ba ote dagokion ebaztekoa, hasieran zehapena ezarri zuen organoari. Salaketaren ondoriozko zehapen-prozedura edo, hala balegokio, prozesu judiziala hasi baino lehen, ezingo da salbuespenik edo azkentzerik eman, eta, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren txostena beharko da, non eta ez den agentzia hori bera organo eskuduna.

3.- Kontuan hartuz kasuan ageri diren inguruabarrak, eta, bereziki, kirolariak aurrekaririk izan ezean, diziiplina-organoak, salbuespenaren edo partezko azkentzearen kasuan, eten egin dezake zehapenaren betearazpena, betiere dopinaren arloan ezarritako lehenbizikoa baldin bada. Neurri hori onartzerakoan, aurreko paragrafoan aurreikusitako irizpideak aplikatuko dira. Baldin eta kirolariari, aurrerago, dopinaren alorreko beste diziiplina-prozedura bat ezartzen bazaio lege hau urratzeagatik, etendura berez ezeztatuko da.

36. artikulua.- Administrazio-zehapenen arloko eskumena.

1.- Dopina zigortzearen arloan administrazio-zehapenak ezartzeko ahala erabiltzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagokio.

2.- Aurreko hori gorabehera, beste administrazio-organo batzuek ez dute galduko animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketetan dopinaren kontra jazartzeko dagokien eskumena, ezta beste organo batzuek ere Herriarren Segurtasunaren Babeserako otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoak xedatutakoaren ondorioz dagokiena.

37. artikulua.- Diziplina-prozeduren alorreko eskumena.

1.- Dopinaren alorreko diziplinazko ahala Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioei dagokie, bai eta, erkidego horretan egiten diren kirol-lehiaketetan izaten den parte-hartzea dela-eta lotura bereziko harremana dagoen gainerako erakundeei ere.

2.- Diziplina-espedienteak izapidetzea eta ebaztea, hasiera batean, arestian aipatutako erakundeetako diziplina-organoei dagokie, haien estatutu eta erregelamenduetan aurreikusitako baldintzetan.

3.- Espedienteak, betiere, bi hileko gehienezko epean ebatzi beharko dituzte kirol-federazioetako diziplina-organoek. Laborategiak diziplina-organoari lortutako azken emaitzari buruz ematen dion jakinarazpen fedemaitetik kontatuko da epe hori. Dena dela, epe hori espedientea ebatzi gabe igarotzen bada, espediente hori edozein izapidetan egonda ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hartuko du bere gain eskumena, eta hark jarraituko ditu aurreikusitako izapideak, espedientea amaitu eta ebatzi arte. Aurrekoa gorabehera eta espediente jakin batean agertzen diren inguruabarrak direla eta, aurreko paragrafoan aipatzen den epea luzatu ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, baldin eta epea iraungi aurretik inork berariaz eskatzen badu.

4.- Lege honetako aginduak ez betetzea dela-eta egin beharreko eta kirol-federazioetako eta antzeko eginkizunak dituzten erakundeetako zuzendari-karguei eragiten dieten diziplina-espedienteak izapidetzea eta ebaztea, berriz, Kirol Justiziako Euskal Batzordeari egokituko zaio administrazio-auzialdi bakarrean. Prozedura hori Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeko arauen eta garapeneko araudiaren arabera bideratuko da.

5.- Dopinaren alorreko diziplina-prozedura, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku-hartze fasea barne dela, gehienez ere sei hileko epean amaitu beharko da, prozedurari hasiera emateko erabakia hartzen denetik kontatzen hasita. Dopinaren alorreko diziplina-prozedura ebazpen bidez edo iraungipenez bukatuko da. Artikulu honen lehenengo paragrafoan ezarritako epemuga igaro eta ebazpen adierazirik jakinarazi ez bada, prozedura iraungita geratuko da.

38. artikulua.- Diziplina-prozedura.

1.- Kasuan kasuko kirol-erakundeko diziplina-organoak ebazpena eman ondoren jarriko da abian diziplina-prozedura. Horretarako, laborategiak emandako analisien emaitzak jaso behar ditu diziplina-organoak eta kasuan kasuko isilpeko eginbidea amaitu. Eginbide hori aurretiaz egiten da, jakiteko ea espedientea irekitzea justifikatzen duten egoerak badiren eta azken ebazpena eman ahal izateko, eta, hala, diziplina-espedienteari hasiera emateko, edo, hala badagokio, jarduketak artxibatzeko.

2.- Laborategiek beharrezko neurriak hartuko dituzte, jakinarazpen hori kirolariaren anonimotasuna eta identitate-erreserba gordetzea ahalbidetzen duten baldintzetan egin dadin.

3.- Behin lege honetan aurreikusitako preskripzio-epea betetzen denean edo kasuan kasuko zehapen-prozeduran, diziplina-prozeduran edo auzi kriminalean ebazpen irmoa ematen denean, dopatzea kontrolatzeko laborategiek ezingo dute gorde pertsona identifikagarri bati lotutako laginik. Laginak suntsitu egin beharko dira, salbu eta ikerketarako erabili behar badira, orduan disoziatuta gordeko baitira, baina betiere kirolariak espresuki bere oniritzia eman badu.

4.- Diziplina-prozedura ofizioz hasten eta izapidetzen da, izapide guztietan. Aurrekoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrean salatu ahal izango dira ustezko dopin-jokabide edo -jarduerak egin izanari buruzko egiazkotasun-zantzuak ematen dituzten egiteak. Administrazioak salaketa onartuz gero, eragindako kirolariei kontrolak egitea agindu ahal izango du agentzia horrek, kasuan kasuko diziplina-espedientea hasi aurreko neurri moduan.

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak prozedura bat ezarriko du salatzailearen identitatea isilpean gordetzeko, diziplina-prozeduretan eta prozedura horien alde aurreko jarduketetan esku hartzen dutenen aurrean. Kasu bakoitzean bidezko diren alde aurreko jarduketak amaitzen direnean, espedientea diziplina-organo eskudunari helaraziko zaio, zehapen-prozedurari hasiera eman diezaion.

6.- Dopinaren alorreko prozedurak federazioen barruan bideratuko dira, auzialdi bakarrean, bakoitzaren estatutuetan izendatzen den dopin alorreko diziplina-organo eskudunaren aurrean, eta haien barruan ezingo da inolako errekurtsorik jarri, ez errekurtsio arruntik ez berraztertze-errekurtsorik. Prozedura horiek lehentasunezkoak izango dira, lege honetan ezartzen diren epeak betetze aldera.

7.- Diziplina-organo eskudunek ezartzen dituzten zehapenak berehala betearazi beharrekoak dira; salbu eta, organo jurisdikzionalak, balizko ezespren-kasu baterako ebazpenaren eraginkortasuna segurtatzera bideratutako bermeak hartu ondoren, zehapen horiek etetea erabakitzen duen.

8.- Prozedurari hasiera emateko erabakia eta prozedura amaitzeko ebazpena, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari jakinarazi beharko zaizkio.

9.- Aurreko prozedurazko arau horiek zehazpeneko administrazio-prozedurari ere aplikatuko zaizkio, prozeduraren izatasunarekin eta berezko ezaugarriekin bateraezin ez diren gai guztietan.

39. artikulua.- Ikuskapen-ahala.

1.- Estatuko beste organo administratibo eta judizial batzuen eskumena alde batera utzita, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ikuskatu ahal izango ditu, betiere pertsonaren oinarritzko eskubideak gordeta, dopin-kontrol batean positibo emateko gai diren produktu eta substantziak gordetzea eta biltzea ahalbidetzen duten botika-ontzi, kirol-poltsa, aldagela-armairu, autobus eta gainerako guneak, bai eta metodo debekatuak aplikatzera bideratzen diren tresnak ere.

2.- Administrazioak zehatzeko ahala erabili ahal izateko, kontuan izango dira substantzia mota, unitate-kopurua eta justifikazio terapeutikoa, bai eta bakoitzaren lanbide-jardunari zuzenean lotutako gainerako gaiak ere.

3.- Erregelamenduz ezarriko da botika-ontzien eduki onargarria, eta, berariaz, edozein larrialdi medikoren ondorio diren gertaerei erantzuteko beharrezko diren sendagai eta osasun-produktuak.

40. artikulua.- Konfiskatzea.

Kirolean dopina eragiteko gai diren substantzia eta produktuak eta xede horretarako erabiltzen diren tresna eta lanabesak konfiskatu ahal izango dituzte kasuan kasuko zehapen-prozedurak hasten dituzten administrazio-agintariek, prozedura horien barruko kautelazko neurri moduan edo zehapen-prozedura horien aurreko neurri moduan. Bigarren kasu horretan, instrukzio-organismoak berretsi egin behar du neurri hori, espedientea izapidetzerakoan.

IV. KAPITULUA

PREBENTZIO-NEURRIAK

41. artikulua.- Prebentzio-neurriak.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan, dopinaren aurkako borroka eraginkorra bermatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, gaian inplikazioa duten beste organo batzuen laguntzarekin, prebentzio-neurri batzuk hartuko eta sustatuko ditu, besteak beste:

- a) Informazioko eta prestakuntzako programak kirol federatuaren, eskola-kirolaren eta unibertsitate-kirolaren eta beste kirol-adierazpen ez-iraunkor batzuen esparruan.
- b) Dopin-substantzia eta -metodoek giza organismoan dituzten eraginen gaineko ikerketa-programak.
- c) Dopin-substantzia eta -metodoak hautemateko sistema eraginkorren gaineko ikerketa-programak.
- d) Dopinaren gaineko ikerketa-programak, hainbat ikuspegitatik: soziologikoak, etikoak, kirolekoak, medikoak eta beste zernahi antzeko.

2.- Informazioko eta heziketako programa horiek, batik bat, klub, federazio, kirol-zentro, kirolari, teknikari, zuzendari-kargu eta gainerako kirol-eragileei zuzenduta egongo dira. Izan ere, programa horien helburua da dopinak kirolaren balioak, kirol-jardunera eramandako etika edo errendimendu osasuntsua dopina dela-eta arriskuan ez jartzea, eta osasunari kalte larriak eragiten dizkioten eta debekatuta dauden substantzia eta metodoez ez baliatzea kirolariak. Programa horiek informazio etengabekoa eta eguneratua bermatu behar dute, gai hauei buruz:

- a) Debekatuta dauden substantzia eta metodoak.
- b) Dopin-kontroleko prozedurak.
- c) Prozeduretan esku hartzen duten kirolarien, klubaren eta beste zernahi pertsonaren eskubide eta betebeharrak.
- d) Debekatuta dauden substantzia eta metodoek giza organismoan dituzten eragin kaltegarriak.

3.- Programa horietan arreta berezia eskainiko zaio baldintza fisiko gogorreko kirol-proba herrikoien munduari, bai eta gimnasio eta gainerako kirol-zentroetako erabiltzaileei ere.

4.- Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroak lagundu egingo dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, laguntza teknikoa eskatzen duten eginkizun guztietan.

5.- Foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin elkarlanean jardungo dute, haien kirol arloko eskumenei lotuta dauden prestakuntzako eta informazioko programetan.

42. artikulua.- Kiroleko dopinari buruzko informazio-sistema.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak kirolaren eremuko dopinari buruzko informazio-sistema bat ezarriko du, informazioa eskuragarri egongo dela bermatuko duena eta kirolaren alorrean eskumena duten administrazio publikoen arteko komunikazioa bermatuko duena. Sistemak kontuan izango du sexuaren aldagaia kirol-biztanleriari buruzko datuak jaso eta ustiatzean, kirolarien igurikimen eta iritzien azterketa berezituak egingo ditu eta genero-adierazleak sartuko ditu.

2.- Informazio-sistemaren helburua honako talde hauen beharrei erantzutea izango da, kasu bakoitzean adierazten den helburuarekin:

- a) Kirol-agintariak. Informazioak ekimenen garapenari eta erabaki-hartzeari lagunduko dio, eta botere publikoak eta kirol-sistemak dopinik gabeko kirolaren alde egiten ari diren ekintza bateratua bizitzten ari den bilakaerari buruzko informazio eguneratua eta alderatua eskaintzea ahalbidetuko du.
- b) Profesionalak. Informazioa haien ezagutza eta gaitasunak hobetzera zuzenduko da. Besteak beste, direktorioak, memoriak, azterlanen emaitzak, sendagai, osasun-produktu eta teknologien ebaluazioak, jardunbide egokien azterketak, gida klinikoak, gomendioak eta iradokizunak biltzea jasoko dira.
- c) Kirolariak, entrenatzaileak, zuzendaritzako kideak eta kirol-klubak. Informazioak haien eskubide eta betebeharrei buruzko argibideak eta dopinak osasunerako dauzkan arrisku larriak jasoko ditu; bizi-estiloari buruzko erabaki-hartzea, jardunbide osasungarriak eta osasun-zerbitzuen erabilera erraztuko ditu, eta, gainera, aipatutako alderdi horien gaineko iradokizunak egiteko aukera eskainiko du.

3.- Informazio-sistemak honako hauek ezagutzeko aukera emango du: dopina eragiteko gai diren substantziak eta kiroleko metodo debekatuak, abian jarritako diziiplina- edo zehapen-espedienteetako datuak eta ezarritako zehapenak, hauteman diren substantziak adierazita, eta laborategietan egindako analisiak. Oinarritzko datu moduan, honako hauei buruzkoak txertatuko ditu: kirol-biztanleria, giza baliabideak eta baliabide materialak, egindako jarduerak, farmazia eta osasun-produktuak, finantzaketa eta lortutako emaitzak, bai eta kirolarien igurikimen eta iritziak ere, eta hori guztia kiroleko dopinaren aurkako borrokari buruzko ikuspegi osoko batetik.

4.- Era berean, kirolarien osasuna babesteko egiten diren kontrolak eta gainerako probak ezagutzeko aukera emango du.

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Datuak Babesteko Euskal Agentziak adierazitakoa entzunda, eginkizun hauek beteko ditu: datuen definizioa eta normalizazioa ezarri, adierazleak hautatu, eta informazioa osatzeko beharrezkoak diren baldintza teknikoak ezarri. Sortutako informazioa ahalik eta fidagarriena izatea da horren guztiaren helburua.

6.- Informazio-sistema bere erabiltzaileen eskueran egongo da, hau da, kirol eta osasun alorreko administrazio publikoak, kiroleko eta osasuneko kudeatzaile eta profesionalak, bai eta herritarrak berak ere, betiere datuen babesaren arloan indarrean dauden xedapenak ahalbidetzen dituzten eskuratzeko- eta zabaltzeko-baldintzetan.

7.- Abian jarritako diziiplina- eta zehapen-espedienteetako datuak –laborategietan hautemandako substantziei eta egindako analisiari buruzkoak– espediente horiekin zerikusia duten organo eskudunen esku egongo dira, eta soilik haientzat izango dira eskuragarri. Beste antolakunde, pertsona edo erakunde batzuek datu horiek eskuratu nahi izanez gero, espedientearen parte hartzen duten guzti-guztien datu pertsonalak disasoziatu behar dira beti aurretik.

8.- Kasuan kasuko erakunde publikoek eta pribatuek behar adina datu emango dituzte informazio-sistema horretarako, sistema mantendu eta garatu ahal izateko. Aldi berean, administrazio publikoek eskubidea izango dute informazio-sistema osatzen duten datuak eskuratzeko eta edukitzeko; baina, betiere, beren eskumenekoak diren eginkizunetarako behar duten neurrian bakar-bakarrik.

9.- Datuen tratamendua eta datuak uztea, informazio-sistamarako beharrezko datu pertsonalak barne direla, datu pertsonalak babesteko alorrean aplikagarri den legediari atxikita egongo dira.

43. artikulua.- Dopina eragiteko gai diren produktuen kontrola.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sendagaien, osasun-produktuen eta elikagai-segurtasunaren alorreko erakunde eskudunei eskatu ahal izango die kirolaren eremuan dopina eragiteko gai diren produktuen ekoizpen-zikloa eta banatze- eta merkaturatze-zikloak ezagutzeko beharrezko neurriak har ditzaten, kontuan hartuz, batik bat, beren berezko inguruabarrengatik eta osasun publikoan izan dezaketen eraginagatik, jarraipen eta kontrol berezia izan behar dutenak.

44. artikulua.- Nutrizio-produktuak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sendagaiak izan gabe dopinaren eremuan emaitza positiboa edo aurkakoa eragin dezaketen nutrizio-produktuei buruzko informazioko eta publizitateko mekanismo berariazkoak ezartzea sustatuko du.

45. artikulua.- Kirolariaren Osasun Txartela.

1.- Kirolariaren Osasun Txartela dokumentu publiko bat da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak federazio- eta unibertsitate-lizentzia duten kirolarietara eta erregelamenduz zehaztuko diren beste kirolari-kolektibo batzuei ere emango diena.

2.- Osasun-txartel horren helburua da kirolariak eta hura artatzeaz arduratzen den osasun arloko langileak ahalik eta informazio kliniko onena izatea, gaitz edo gaixotasunen bat izanez gero, zer tratamendu den egokiena erabakitzeko.

3.- Osasun-txartelak honako hauei guztiei buruzko informazioa jasoko du: azterketa medikoak, osasun- eta dopin-kontrolak –kasuan kasuko lizentzia eskuratzen duen unetik kirolariari egiten zaizkionak–, haien emaitzak eta medikuak hartzen dituen erabakiak, hain zuzen ere, kirolariaren osasun-laguntza egokia izan dadin kontuan hartu beharrekoak. Eta baita, horrez gain, kirolariak eskuratutako erabilera terapeutikoko baimenei buruzko datuak, eta kirolariaren lan-bajei eta/edo kirol-bajei buruzkoak. Erregelamenduz zehaztuko da informazio horren norainokoa eta dagokion dokumentazioa igortzeko modua.

4.- Osasun-txartelak bere baitan dituen datuak, hasiera batean, txartelaren titular den kirolariak soilik erabil ditzake, eta, haren baimena edukiz gero, artatu duten osasun arloko langileek; salbu eta, osasun alorreko legediak aukera ematen badu, kirolariaren datuak haren baimenik gabe eskuragarri izateko.

5.- Dopin-kontrolaren alorrean, ez da zilegi kirolariaren osasun-txarteleko datuak eskuratzea, haren baimenik gabe.

6.- Osasun-txartelak bere baitan dituen datuak honako hauek emandakoak izango dira: kirolariak berak, artatu duten osasun-alorreko langileek, diziplina-organo eskudunek eta kasuan kasuko lizentzia eman dioten taldeek.

7.- Kirolariaren Osasun Txartela euskarri fisiko bakar batean egon daiteke, beste txartel edo zerbitzu batzuk eskuratzeko aukera emango duena, baldin eta segurtasun-neurriek kirolariaren osasun-txartelean dauden datuak hirugarren batzuek ikustea eragozten badute. Euskarri fisiko horrek kirolariaren osasun-txartelari dagokion datu-basea sartzeko giltza moduan funtzionatuko du, baina ez ditu bilduko kirolariaren osasunari buruzko datuak.

8.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ezarriko du datuak biltzeko eta trukatzeko euskarri digitala, eta haren mantentze-lanez ere arduratuko da, segurtasun-bermeak ziurtatuta izango dituela. Horrez gain, euskarri digitala lege honetako xedapenetan ezarritakoa beteta erabiltzen dela ere ziurtatuko du.

9.- Datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubidea arautzen duen araudiak zehazten dituen kasuetan eta baldintzetan soilik utzi ahal izango dira kirolariaren osasun-txartelari dagokion datu-basea osatzen duten datuak.

10.- Osasun-txartela egiteko eta erabili ahal izateko sistemari goi-mailako segurtasun-neurriak ezarriko zaizkio, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudian xedatutakoak, hain zuzen ere.

V. KAPITULUA

DOPINARI BURUZKO DATUEN ARAUBIDEA

46 artikulua.- Datuen konfidentzialtasuna.

1. Dopin-kontrolak egingo dituzten langileek, bai eta kirol-erakundeetako organoetako kideek eta langileek ere, beren lanagatik jakiten dituzten gaien inguruko konfidentzialtasuna errespetatu behar dute, eta gai horiek isilean gorde.

2.- Beren zereginetan lortutako datuak, txostenak edo aurrekariak bakar-bakarrik dopin-kontrolak egiteko erabili ahal izango dira, eta, beharrezko izanez gero, bai eta diziplinazko, administrazioko edo delituzko arau-hausteak izan daitezkeen egintzak salatzeko ere. Langile horiei, salaketarik izanez gero, datu, txosten edo aurrekari horiek uzteko baimena ematen zaie, 15/1999 Lege Organikoaren 11.1.a artikuluan xedatutakoarekin bat etorruta.

47 artikulua.- Datuak uzteko baimena ematea.

Dopin-kontroletako datuak eta fitxategiak utzi ahal izango zaizkie, datuen babeserako indarrean dagoen legedian xedatzen den moduan, kirolaren alorrean dopinaren aurkako borrokan parte hartzen duten erakunde publiko eta pribatuei, legez lotesleak diren nazioarteko konpromisoek xedatzen dutenaren esparruan.

48 artikulua.- Kirolean dopina eragiteko gai diren produktu eta metodoei buruzko datuak aitortzeko betebeharra.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren lehiaketetan parte hartzen duten taldeak behartuta daude erregistro-liburu bat eramatera, erregelamenduz zehaztuko diren baldintzetan. Liburu horretan modu frogagarrian jaso behar da zer produktu hartzeko eman edo agindu zaien kirolariei, zer metodo debekatu erabili den, zer medikuk agindu edo baimendu duen hori, eta noiz eta nola egin den agindu hori.

2.- Atzerriko kirolari, talde, kirol-talde eta haien ordezkari diren zuzendari-karguak ere behartuta daude, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-jarduera batean parte hartzera sartzen direnean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrek ezartzen dituen inprimakiak, behar den bezala beteta, agentzia horretara bidaltzera. Inprimaki horietan identifikatuko dira erabiltzeko garraiatzen dituzten produktuak, debekatutako metodoak aplikatzea ahalbidetzen duten tresnak, produktu horien unitateak eta emateaz arduratzen den medikua. Eginbehar hori, era berean, betetzat joko da, baldin eta egiaztatzen bada inprimakiak bidali beharra Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziara bidalita bete zela.

VI. KAPITULUA

NAZIOARTEKO KIROL-FEDERAZIOAK ETA NAZIOARTEKO EREMUAN KIROL-JARDUERA ARAUTZEN DUTEN GAINERAKO ERAKUNDEAK

49. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan egin beharreko dopin-kontrolak.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan, dopin-kontrolak antolatzeko eta egiteko ardura Nazioarteko Batzorde Olinpiarri dagokio, bai eta, hurrenez hurren, lehiaketa horiek antolatzen dituzten kirol-federazio eta nazioarteko erakundeei ere, edo, antolaketa hori beste federazio edo erakunde batzuen eskuetan uzten denean, federazio edo erakunde haiei.

2.- Era berean, diziplinazko ahala erabiltzea dagokie, lege honen 32.2 artikuluan aurreikusitakoa alde batera utzita, nazioarteko erakunde horiek ezar ditzaketen zehapenen eraginkortasunaren inguruan.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan egiaz dopin-kontrolak egin aurretik, dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorri jakinarazi beharko zaio.

50. artikulua.- Lehiaketaz kanpoko kontrolak Euskal Autonomia Erkidegoan lehiatzen diren espainiar edo atzeritar kirolariei.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrek, dopinaren aurkako beste antolakunde batzuek izan ditzaketen eskumenei kalterik egin gabe, Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzen, entrenatzen edo lehiatzen ari diren espainiar edo atzeritar kirolariei lehiaketaz kanpoko kontrolak egitea agindu dezake.

2.- Eraitza analitikoak, bidezko ondorioetarako, kasuan kasuko nazioarteko kirol-federazioari, Dopinaren aurkako Mundu Agentziari eta eskudunak diren dopinaren aurkako antolakundeei jakinaraziko zaizkie.

51. artikulua.- Nazioarteko erakundeek kirolari lizentziadunei Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaketaz kanpo egiten dizkieten dopin-kontrolak.

1.- Kontrol horiek egin aurretik, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari jakinarazi beharko zaizkie horrelako kontrolak egiteko proposamena eta kontrolak egiteko baldintza materialak. Dena dela, lege honetan ezarritako baldintzak betetzen badira baino ezingo dira egin kontrol horiek.

2.- Nazioarteko kirol-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak akordioak eta lankidetzak hitzarmenak izenpetu ahal izango dituzte, azken horrek egin ditzan benetan erakunde horiek Euskal Autonomia Erkidegoan egin behar dituzten dopin-kontrolak.

52. artikulua.- Nazioarteko erakundeek ezarritako zehapenak kirolariengan eta gainerako lizentziadunengan izango dituzten eraginak.

Nazioarteko erakundeek kirolariei eta gainerako lizentziadunei ezartzen dizkieten zehapenak Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatuko dira, eta erkidego horretan egiten diren lehiaketetan parte hartzeko gaikuntza kentzea ekarriko dute, salbu eta Kirol Justiziako Euskal Batzordeak, pertsona zehatuak eskatuta, zehapena ordenamendu juridikoaren aurkako dela aitortzen duen. Aurreko hori Kirol Diziplinako Espainiako Batzordeak edo beste erakunde batzuek zehapenak berrikusteko izan ditzaketen eskumenei kalterik egin gabe ulertu behar da.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

LEHENENGOA.- 1.- Gobernuari ahalmena ematen zaio behar adina xedapen emateko, eta, haien bidez, lege honetan jasotako xedapenak egokitzeko edo aplikatzeko, hain zuzen ere, kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalietan dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko eremu espezifikoan. Xedapen horiek, gutxienez, honako berezitasun hauek jaso beharko dituzte:

- a) Animalientzat debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrenda espezifikoa onartzeko irizpideak. Kirol-agintariek egindako zerrendak eta animalien osasunaren alorrean eskumena duten agintariek onartutako zerrendak ez dute zertan, halaberharrez, bat etorri.
- b) Laginen analisisa egin behar duten laborategiei buruzko baldintza orokorrak.
- c) Dopin- eta osasun-kontrol motak eta haiek egiteko prozedura.
- d) Erabilera terapeutikoko baimenen araubidea, eta, behar izanez gero, erabilera-adierazpenak.
- e) Kontroletan esku hartu behar duten albaitariak eta gainerako langileak gaitzeko araubidea.

2.- Animalien dopin- eta osasun-kontrolako prozesuetan egiten diren analisien emaitzak, hau da, kirol-araudiaren eta animaliak babesteko araudiaren babesean egiten direnak, bi arloetako organo eskudunen artean komunikatu beharko dira, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan.

3.- Kirolen eta animalia-osasunaren alorreko Eusko Jaurlaritzako sail eskudunek, bai eta animalien babesaren alorrean eskudun diren lurralde historikoetako foru-organismoek ere, aurreko paragrafoetan aurreikusitako erregelamenduzko arauen arabera, bidezko koordinazioko eta lankidetzako mekanismoak ezarriko dituzte, kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien dopin- eta osasun-kontrolatan beharrezko eraginkortasuna lortzeko.

BIGARRENA.- Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak, estatuarekin batera, formula batzuk ezarri ahal izango ditu –lankidetzarako kasuan kasuko bitartekoen bidez–, elkarren artean informazioa trukatu duen sistema bat ezartzeko, Kirolariaren Osasun Txartela emateko, onartzeko edo egiteko, eta kontrolatan parte hartuko duten albaitariak eta gainerako langileak gaitzeko.

HIRUGARRENA.- 1.- Kirol-jardueraren eremuan dopina eragiteko gai diren substantzia eta produktuak eskaintzen, laguntzen, hartzeko agintzen edo ematen duten osasun-profesionalak eta beste zernahi profesional, bai eta metodo arauz kanpokoak edo debekatuak erabiltzea errazten dutenak ere, kasuan kasuko jarduerara arauetan eta lege honetan aurreikusitako arauetan zehazten diren formalitateak bete gabe, diziplinazko erantzukizunean eroriko dira. Arestian azaldu diren jokabideak arau-hauste oso larritzat joko dira, eta beren elkargo profesionalen kasuan kasuko arauen arabera zehatuko dira.

2.- Aurreko paragrafoan xedatutakoa betetze aldera, lege honek eragiten dien Euskal Autonomia Erkidegoko elkargo profesionalak beren estatutuak eta erregelamenduak aldatu beharko dituzte, xedapen honetan ezarritako erantzukizunak berariaz tipifikatzeko. Moldaketa hori, gehienez ere, urtebeteko epean egin beharko da, lege hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

LAUGARRENA.- Lege hau indarrean sartzen denetik aurrera, Kirolariaren Osasun Kartilari egiten zaizkion aipamen guztiak Kirolariaren Osasun Txartelari egindakotzat ulertuko dira.

BOSGARRENA.- 1.- Federazio- eta unibertsitate-lizentziak euskarri elektronikoetan txertatu ahal izango dira, kirolariaren osasun-txartela edukitzeko ere aukera ematen dutenetan. Hala ere, norberaren banakotasunari eutsiko dio txartelak eta behar beste segurtasun-neurri izango ditu, Kirolariaren Osasun Txartel horri dagozkion datuak nolatan eskura ez daitezen.

2.- Aipatutako txartel elektroniko horietan erantsitako federazio-lizentziak salbuetsita daude zenbait datu ematek –kanpoko formatu fisikoan–, hain zuzen ere, kirol-federazioei buruzko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan eskatzen diren datuak ematek. Hori hala izanik ere, federatuta dauden kirolariak informatu egin behar dira, beste bide batzuetatik, besteak beste, lizentziei gehitutako aseguruiei buruz, ordaindutako kuotaren xehetasunez, eta aplikagarri diren erregelamendu-xedapenetan ezarritako gainerako apartekoez.

SEIGARRENA.- Baldintza fisiko gogorreko kirol-probak –Eusko Jaurlaritzan kirolaren alorreko eskumena duen sailaren agindu bidez erabakiko dira zein diren halakoak– antolatzen dituztenek parte hartzeko gaitasun fisikoa egiaztatzea eskatu beharko diete parte-hartzaileei. Kasuan kasuko azterketa medikoaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da gaitasuna, eta erregelamenduz zehaztuko dira baldintzak.

ZAZPIGARRENA.- 1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrek aginduko du kirolariei dopin-kontrolak egitekoak diren federatu gabeko kirol-lehiaketan zerrenda bat argitaratzeko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

2.- Kirol-proba horietan parte hartu eta lizentziarik ez dutenek ere dopin-kontrolak egin beharko dituzte; nahiz eta haiek ez dituzten bete beharko lege honetan kirolari lizentziadunentzat ezarritako betebeharrak (dokumentu- eta informazio-betebeharrak, hain zuzen ere). Lege hau erregelamendu bidez garatzean ezarriko da lizentziarik gabeko parte-hartzaile horientzako kontroleko araubide berezia. Horretarako, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

- a) Parte-hartzaileek ez dute izango erabilera terapeutikoko baimenik eskatzeko betebeharrak, ez eta glukokortikosteroide-erabilerako eta adierazpen horri lotutako gainerako substantzien adierazpenik aurkeztu beharrik ere.
- b) Parte-hartzaileek medikuntza alorreko langileei jakinaraziko diete kirolariak direla eta ezin dutela kirol alorreko legedian debekatuta dagoen substantziarik hartu edo metodorik erabili, eta ziurtatu egin beharko dute, ahal duten neurrian, agindu dieten tratamendu terapeutikoak ez dituela dopinaren aurkako arauak urratzen.
- c) Parte-hartzaileek, dopin-kontrola egitean, adierazi egin behar dute zer tratamendu mediko duten, zein diren tratamendu horien arduradurak, bai eta haien eragina zein den ere.
- d) Parte-hartzaileei, beren osasuna babeste aldera, kirol-proba horietan parte hartzea eragotzi dakieke, lege hau erregelamendu bidez garatzean ezarriko diren baldintzetan. Era berean, parte hartu duten probetatik deskalifikatu ahal izango dira eta proba horietan eskuratutako kirol-eskubideak eta eskubide ekonomikoak gal ditzakete.
- e) Kirolari horiei ez zaie aplikatuko lege honetan ezarritako arau-hauste eta zehapen araubidea.

3.- Aipaturiko lehiaketa horien erregelamenduetan espresuki adieraziko da kiroleko dopina arau-hauste larria edo oso larria dela.

4.- Araudi berezia modu subsidiarioan aplikatuko da, soil-soilik antolatzaileek beren borondatez eta beren erregelamenduen bidez uko egin badiote lege honetan kirol federatuentzat aurreikusitako araubide orokorrari.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

LEHENENGOA.- Lege hau indarrean sartu aurretik hasitako zehazpen-prozedurak, diziiplina bidekoak zein administrazio bidekoak, izapideak hasi zirenean aplikagarri zen arauei jarraituz izapidetzen jarraituko dira, salbu eta interesdunentzat aldeko izan litezkeen ondorioei dagokienez.

BiGARRENA.- Harik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lege honetan ezarritako gaikuntzak ematen dituen arte, dopin-kontroletarako laginen bilketa-taldeetan gaitutako pertsona moduan jardun ahal izango dute apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretuan, edo hura aldatzeko edo ordezteko legean, aurreikusitako gaikuntza dutela egiaztatzen duten guztiek. Errege Dekretu horrek dopatzea kontrolatzeko prozesuak eta baimendutako analisi-laborategiak arautzen ditu, bai eta eta kirolean dopatzea prebenitzeko eta osasuna babesteko neurri osagarriak ere.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

1.- Indargabetuta geratzen dira Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen honako agindu hauek:

- 81. artikuluko e) idatz-zatia.

- VII. tituluko V. kapitulua.

- 109. artikuluko ñ) letra

- 127. artikuluko h) letra

2.- Indargabetu egiten dira, halaber, lege honetan ezarritakoekin bat ez datozen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

LEHENENGOA.- Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 4.2.v artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratuko da:

“Kirolariaren osasun-txartela arautzea”.

BIGARRENA.- Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 83. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratuko da:

“1.- Kirolaren alorrean Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailak arautuko du kirolariak, haien gaitasun fisikoa kontrolatze aldera, nahitaez egin beharreko azterketa medikoaren jardunaren baldintzak eta betebeharra. Horrelako azterketa medikoak ezinbestekoak dira, federazio-, eskola- eta unibertsitate-lizentziak emateko, eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak baldintza fisiko gogorreko jardueratzat hartzen dituen probetan parte hartzeko.

2.- Azterketa medikoetako datuak eta kirolarien osasunarekin zerikusia duten beste informazio batzuk Kirolariaren Osasun Txartelean erantsiko dira, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan”.

HIRUGARRENA.- Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio lege honetan zehapenen kopuruari eta zehapen horiek aplikatzeko arauari buruz ezarritako zehapen- eta diziplina-araubidea nazioarteko erakundeek ezarritako arauetara eta, behar izanez gero, aplikagarri gertatzen den estatuko legedira egokitzeko.

LAUGARRENA.- Kirol-federazioek eta lege hau aplikatzekoa zaion kirol-antolakunde orok beren estatutu eta erregelamenduak egokituko dituzte urtebeteko epean, legea argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

BOSGARRENA.-Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hiru hilabetera jarriko da indarrean Lege hau.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN / HONEKIN BATERA AURKEZTEN DIREN AGIRIAK

- I. OFICIO DE REMISIÓN / BIDALKETA-IDAZKIA.
- II. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ.
- III. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ.
- IV. MEMORIAS EXPLICATIVAS / AZALPEN MEMORIAK.
- V. MEMORIA ECONÓMICA / MEMORIA EKONOMIKOA
- VI. INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO / ESTATUKO ABOKATUTZAREN TXOSTENA
- VII. INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA / AHOIKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA.
- VIII. INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO / GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA.
- IX. INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER / EMAKUNDEAREN TXOSTENA.
- X. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA / BERRIKUNTZAREN ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN ZUZENDARITZAREN TXOSTENA
- XI. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.
- XII. DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/ EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA IRIZPENA.
- XIII. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE /KIROLAREN EUSKAL KONTSEILUAREN ZIURTAGIRIA
- XIV. INFORME DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS / DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN TXOSTENA
- XV. INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO / EKONOMIA- ETA ARAU-KONTROLAREN TXOSTENA
- XVI. DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI / EUSKADIKO AHOIKU BATZORDE JURIDIKOKO IRIZPENA.

IV

MEMORIAS EXPLICATIVAS / AZALPEN MEMORIAK.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



MEMORIA RELATIVA AL PROYECTO DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

Introducción

Las prácticas de dopaje constituyen una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva. Pero el fenómeno del dopaje, además de constituir un grave engaño deportivo, se ha convertido en un conjunto de prácticas que pueden ser muy peligrosas para la salud pública, y especialmente para la vida de los deportistas más jóvenes, que son los protagonistas habituales del deporte de rendimiento. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva para convertirse en un auténtico problema de salud pública, tal y como reconocen todos los organismos internacionales, especialmente en la Unión Europea. El recurso a sustancias o métodos prohibidos contradice la finalidad misma del deporte y en la mayoría de las ocasiones atenta contra la propia salud. El dopaje simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo.

Tal y como se constata en el documento *Modelo de Deporte Europeo*, elaborado en el seno de la Comisión Europea, tanto en el deporte profesional como en el aficionado existe actualmente un extraordinario clima competitivo donde el creciente uso de sustancias y métodos prohibidos para aumentar el rendimiento de los deportistas se ha convertido en uno de sus principales problemas. El desarrollo progresivo que va experimentando el dopaje resulta inquietante tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Por un lado, los estudios revelan que es considerable el número de deportistas que recurren a métodos y sustancias prohibidas y, por otro lado, las prácticas de dopaje ya no son la expresión de un comportamiento individual de los deportistas, sino el resultado de acciones organizadas y de mercados.

El presente Anteproyecto hunde sus raíces en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco (en adelante Ley del Deporte), que destina el Capítulo V, del Título VII, a la problemática del dopaje. Además de este Capítulo, a lo largo del articulado se contienen algunas previsiones sobre dicha materia. Este Ley supuso un primer paso en el establecimiento en el País Vasco de una regulación propia e independiente para luchar contra el dopaje. Sin embargo, desde su entrada en vigor se han producido numerosas novedades en el marco de actuación de los poderes públicos y de las organizaciones privadas en la tarea común de erradicar el dopaje, y consiguientemente en la normativa, tanto estatal como internacional, reguladora de la materia.

En el ámbito internacional cabe citar:

- Plan de Apoyo Comunitario a la Lucha contra el Dopaje en el Deporte, (1999) que desarrolla políticas activas en la lucha contra el dopaje por parte de la Unión Europea.



- Agencia Mundial Antidopaje (año 1999). Su creación es fruto de la Declaración de Lausana sobre Dopaje en el Deporte, de 4 de febrero de 1999, en la que se evidenció la necesidad inaplazable de constituir un organismo internacional que estableciera normas comunes para combatir el dopaje y coordinar los esfuerzos de las organizaciones privadas y de los poderes públicos. En su estructura y financiación participan de forma equitativa el Comité Olímpico Internacional y numerosos países.
- Código Mundial Antidopaje y estándares internacionales de procedimientos que lo complementan, surgido al amparo de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte (Copenhague 2003).
- Convención Internacional de la UNESCO contra el dopaje en el deporte (París 2005). Constituye un importante instrumento jurídico internacional que tiene por objeto la erradicación del dopaje y que posee a la vez un carácter obligatorio y un alcance internacional. Dicho texto brinda a los gobiernos un marco legal para la armonización internacional de los esfuerzos en la lucha contra el dopaje.

En el ámbito estatal, hay que mencionar:

- Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte (en adelante Ley Orgánica 7/2006).
- Real Decreto 255/1996, por el que se establece el régimen de infracciones y sanciones para la represión del dopaje. En vigor respecto de las infracciones y sanciones relativas a la administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva.
- Real Decreto 811/2007, de 22 de junio, por el que se determina la estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
- Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje.
- Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje.
- Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte, modificado mediante el Real Decreto 1642/2009, de 18 de septiembre, como consecuencia de las observaciones planteadas por la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional a la candidatura de Madrid 2016.

Este conjunto normas y convenios constituye el vigente sistema articulado de prevención, control y represión del dopaje que debe tenerse en consideración a la hora de elaborar, debatir y aprobar el nuevo marco jurídico antidopaje para el País Vasco.

Por un lado, la celebración en Lausana, Suiza, en 1999, de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, puso de manifiesto la necesidad de

profundizar en la colaboración entre poderes públicos y organizaciones deportivas; ello supuso un cambio de rumbo en la forma de abordar el problema del dopaje en el deporte, poniendo el acento en la necesidad de crear un organismo internacional independiente que estableciera normas comunes para combatir el dopaje y que coordinara los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de los poderes públicos. Ese mismo año se acordó constituir y poner en funcionamiento la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en cuya estructura y financiación participan de forma equitativa el Comité Olímpico Internacional (COI) y los gobiernos de un gran número de países, preocupados cada vez más por el auge del dopaje y su rápida expansión más allá del ámbito de la alta competición deportiva.

La AMA es una fundación de derecho privado, regida por el ordenamiento jurídico suizo, cuyo Consejo está integrado a partes iguales por representantes de organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y deportivas. Esta estructura mixta inusual es un reconocimiento a la necesidad de que los gobiernos y las organizaciones privadas, que conforman el sistema deportivo internacional, deben actuar de consuno en la lucha contra el dopaje, ya que ninguno de los dos logrará éxito en este empeño sin la estrecha colaboración y cooperación del otro.

En 2003, la AMA aprobó el Código Mundial Antidopaje, modificado el 1 de enero de 2007, y los estándares internacionales que lo complementan, de modo que tales textos vienen constituyendo un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional. Este camino de la armonización normativa emprendido bajo el patrocinio de la AMA exigía otra armonización normativa internacional sobre aspectos clave para combatir el dopaje, como el funcionamiento de laboratorios con criterios homologables, el régimen de exenciones para el uso de determinadas sustancias con fines terapéuticos, los procedimientos para efectuar los controles de dopaje, así como la elaboración de una lista armonizada de sustancias y métodos prohibidos, que sea aceptada y respetada por el mayor número posible de países.

Como aquel Código Mundial Antidopaje carecía de fuerza vinculante en el ámbito del Derecho Internacional Público, se ha producido otra importante novedad en el campo de la lucha contra el dopaje desde 1998: la aprobación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2006 y cuyo instrumento de Ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Tal Convención entró en vigor el 1 de febrero de 2007.

Por otro lado, en el ámbito estatal se ha producido una importante novedad, la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje, disposición que ha tratado de dar cumplimiento al deber de armonización exigido por la Convención internacional antes citada y que incide también en aspectos importantes en la lucha contra el dopaje en el País Vasco, teniendo un importante desarrollo reglamentario.

Considerando lo expuesto, el régimen novedoso introducido en la década de los noventa en el País Vasco, a través de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, ha perdido buena parte de su valor y aparece hoy necesitado de profundas reformas y actualizaciones. De hecho, la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día 22 de febrero de 2006, tras el debate de la proposición no de ley sobre el control de dopaje en el deporte, instó al Gobierno Vasco a finalizar con la mayor brevedad la elaboración y aprobación de la norma por la que se debe regular la prevención, control y represión del dopaje en el deporte del País Vasco. Con arreglo a dicha proposición no de ley se establecía que dicha disposición debía incluir la creación de la Agencia Vasca Antidopaje y debía tener presentes las orientaciones emanadas desde las instituciones competentes de ámbitos supracomunitarios.

En resumen, la elaboración del presente Anteproyecto responde:

- 1º. Al cumplimiento de dicho mandato parlamentario.
- 2º. A la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2006.
- 3º. A la necesidad de armonizar la normativa del País Vasco sobre el dopaje con los principios que el Código Mundial Antidopaje proclama y adecuarla, al igual que han hecho algunos países de nuestro entorno, a la nueva realidad deportiva y jurídica para alcanzar una mayor eficacia combatiendo el dopaje en el deporte.
- 4º. En este marco normativo actual, y como la normativa estatal constituye un ordenamiento mucho más completo, tanto el Gobierno Vasco como las federaciones territoriales y vascas vienen aplicando en el campo del dopaje lo que establece el artículo 149.3 de la Constitución: *"el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas"*. Este artículo, que tiene como objeto garantizar la plenitud del ordenamiento jurídico, no es una solución deseable pues, entre otros problemas, genera una inseguridad jurídica incompatible con el artículo 9 de la Constitución.

En este contexto, resulta inaplazable llevar a buen término en el País Vasco diferentes políticas y dotar a las distintas organizaciones antidopaje y agentes deportivos de los instrumentos necesarios para combatir con eficacia la lacra del dopaje.

Título competencial y rango de la disposición

Desde el punto de vista competencial conviene reseñar en primer lugar que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta, a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia deportiva. Al amparo de dicha competencia, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte, que no reguló el ámbito del dopaje. Materia que sí ha sido regulada en la vigente Ley del Deporte.

Precisamente su artículo 4 dispone que corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco: *"La regulación de la prevención, control y represión del dopaje"*, conteniendo diversas disposiciones relativas al ejercicio de esta competencia.

Asimismo, inciden en esta ley otros títulos competenciales. Además de la clara competencia exclusiva en materia deportiva, que es la que permite la regulación del dopaje en la vigente Ley del Deporte del País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco, ostenta otros títulos competenciales. Por ejemplo, el País Vasco ostenta también competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior que el art. 18 del Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco y la competencia autonómica en materia de protección de datos que ha dado lugar a la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

El Parlamento Vasco, por tanto, ya ha venido regulando esta materia de dopaje en el ejercicio de su plena competencia en la materia.

Con el presente Anteproyecto simplemente se modifica el marco de regulación: se pasa de regular el dopaje en el seno de la legislación deportiva general a regular el dopaje en una normativa específica en atención a su gran complejidad.

No obstante, el Estado también ha aprobado sus propias disposiciones en materia de dopaje en el deporte, aunque carezca de una competencia específica en materia de dopaje o deporte. Así, la Ley Orgánica 7/2006 reconoce en cierto modo esta circunstancias cuando, en su exposición de motivos, señala otros títulos competenciales para justificar su razón de ser:

"En el marco de las competencias del Estado, inciden en esta ley distintos títulos competenciales. Además de la competencia autoorganizativa que al Estado le corresponde, así como aquella de que dispone sobre los intereses que afectan, inseparablemente, al deporte español en su conjunto, concurren en esta ley diversas competencias específicas, entre las que cabría destacar las relativas a las bases y coordinación general de la sanidad, legislación penal, Administración de Justicia, seguridad pública, relaciones internacionales o estadística para fines estatales, todas ellas derivadas del artículo 149.1 de la Constitución"

Asimismo, a lo largo de la citada Ley Orgánica 7/2006, (artículos 1.7, 1.9, 1.10, 3.2.2.g y 4.6 entre otros) existen numerosas referencias a las competencias de las Comunidades Autónomas.

En resumen, resulta indubitado que el País Vasco ostenta competencias para regular la prevención, el control y la represión del dopaje en esta Comunidad Autónoma. Pero ello no impide que existan ciertos aspectos competenciales en torno al dopaje que puedan resultar controvertidos y merezcan ser expuestos en esta Memoria.

En primer lugar, deben reseñarse las sentencias números 488/09 y 586/09, de 20 de julio de 2009, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han concluido que el Gobierno Vasco, de conformidad con la normativa vigente, carece de competencia para imponer sanciones en materia de dopaje, ya que la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma ostenta en materia de deporte no ampara, en particular a la Administración de la CAPV para la imposición de sanciones en materia disciplinaria deportiva, sin que quepa hablar de un diferenciado ámbito

administrativo sancionador en lo que se refiere a los deportistas federados que permita aplicar a éstos sanciones administrativas propias del general sometimiento de todos los administrados.

Las citadas sentencias han puesto de manifiesto la necesidad de dotar a la Comunidad Autónoma del País Vasco de una norma específica en materia de dopaje que clarifique definitivamente el régimen de actuación de las distintas instituciones en materia de prevención, control y represión del dopaje.

En cualquier caso, para evitar cualquier nueva duda al respecto, el Anteproyecto deja bien sentado que la nueva Agencia Vasca Antidopaje tiene competencias en materia de prevención, control y represión en materia de dopaje y que el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes continuará ejerciendo dichas competencias hasta la puesta en funcionamiento de dicha Agencia.

En segundo lugar, otro de los problemas que pueden suscitarse desde el punto de vista competencial, son los relativos a la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la regulación de la prevención, control y represión del dopaje respecto a las competiciones, oficiales y no oficiales, de ámbito territorial superior al de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se celebren en esta Comunidad Autónoma y respecto a los deportistas sin licencia expedida por la correspondiente federación vasca que entrenen, compitan o residan en el País Vasco.

La aplicación de la normativa sobre dopaje de un determinado Estado a toda la actividad deportiva desarrollada en su ámbito territorial ha suscitado en el ámbito del deporte, desde siempre, diversos conflictos y los mismos han sido tenidos en consideración para la elaboración del Anteproyecto siguiendo los parámetros internacionales y las pautas hermenéuticas dictadas por el Tribunal Constitucional.

Por tanto, la presente disposición legal, con el deseo de evitar confusiones y con el objetivo de que no resulte afectada la seguridad jurídica de los agentes deportivos, trata de clarificar tales cuestiones siendo respetuosa con los distintos ámbitos competenciales en la materia. Por ejemplo, desde la perspectiva del control se han tenido en consideración los distintos tipos de control, administrativo o federativo, del dopaje a realizar en el País Vasco. Cuando el control del dopaje se produce a instancias federativas resultará de aplicación la legislación vasca a aquellas competiciones que se celebren en el País Vasco, salvo que se trate de competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional o salvo que se trate de controles fuera de competición instados por organismos estatales respecto a deportistas con licencia federativa para participar en dichas competiciones estatales. Por tanto, deberán realizarse controles de dopaje, al amparo de la legislación vasca, a cualesquiera deportistas con licencia expedida por la correspondiente federación deportiva vasca cuando compitan en competiciones oficiales que se desarrollen en el País Vasco. Los deportistas vascos cuando compitan en otros estados o comunidades deberán someterse a la legislación aplicable en dichos territorios.

Cuando el control del dopaje se produzca a instancias administrativas, es decir, no de las federaciones deportivas, resultará de aplicación la legislación vasca a todas los controles que se realicen en el País Vasco, sin excepciones, sobre la base del principio de territorialidad vigente.



La Ley Orgánica 7/2006, por su parte, circunscribe su competencia al ámbito estatal al establecer en el apartado 2 del artículo 1 de dicha Ley Orgánica que el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley *"se extiende a deportistas con licencia federativa, de ámbito estatal o con licencia autonómica homologada, que habiliten para participar en competiciones deportivas organizadas, promovidas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas en el ámbito objetivo establecido en el artículo 1.3"*. Asimismo, el apartado tercero señala que *"el ámbito objetivo de aplicación de esta ley está determinado por las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que se organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte"*.

En tercer lugar, con relación a la regulación acerca del dopaje en competiciones deportivas con animales (disposición adicional primera del presente anteproyecto), las comunidades autónomas tienen dictadas sus propias normas en esta materia al amparo de sus competencias en materia de protección de animales. De hecho, La Ley vasca 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, establece en su artículo 4.2.e la prohibición de suministrar, en todo caso, a los animales alcohol, drogas o fármacos o practicarles cualquier manipulación artificial que pueda producirles daños físicos o psíquicos, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición. En desarrollo de dicha Ley, el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 8/1997, de 22 de enero, de control de uso de drogas (control antidopaje) en animales que intervengan en actos culturales y deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho Decreto fue desarrollado por Orden de 10 de febrero de 1997, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión de Asesoramiento Técnico del Control Antidoping en animales que intervengan en actos culturales y deportivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Es cierto que la Ley Orgánica 7/2006, hace referencia a la protección, control y sanción del dopaje en animales, pero su disposición adicional primera circunscribe el ámbito competencial de la ley que debe elaborar el Gobierno a las *"competiciones de ámbito estatal"*.

En cuarto lugar, la Disposición Adicional Cuarta del Anteproyecto establece que, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley, los Colegios Profesionales del País Vasco que resulten afectados por la presente Ley deberán modificar sus estatutos y reglamentos para tipificar, expresamente, las responsabilidades previstas en la presente disposición. Esta adaptación deberá realizarse en el plazo máximo de un año. Se trata de una previsión análoga a la de la Ley Orgánica 7/2006 pero no debe perderse de vista que el Estatuto de Autonomía del País Vasco, establece en su artículo 10.22 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. Y en virtud de dicha competencia exclusiva se aprobó la Ley 18/1997, de 21 de diciembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco.



Por último, debe advertirse que la presente Ley no puede abordar, en exclusiva y de forma integral, la lucha contra el dopaje. La Comunidad Autónoma del País Vasco carece de competencias en algunas materias. Por ejemplo, es el Estado la instancia competente para aprobar y modificar el Código Penal en materia de dopaje y, asimismo, es el Estado la instancia competente en materia de legislación de medicamentos. Es por ello que se ha aprobado la Ley estatal 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Tal disposición establece que la importación, exportación, distribución, comercialización, prescripción y dispensación legalmente reconocidas no tendrán por finalidad aumentar las capacidades físicas de los deportistas o modificar los resultados de las competiciones en las que participan. Tampoco puede pasar por alto la competencia estatal en materia de seguridad ciudadana. Por esta razón la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2006 modifica la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, para incorporar infracciones relacionadas con el dopaje.

Objetivos y propuestas

El presente Anteproyecto de Ley surge, como ya se ha señalado en anteriores apartados, de la necesidad de adaptar las disposiciones establecidas en la Ley del Deporte en materia de prevención, control y represión del dopaje en el País Vasco a la nueva realidad jurídica y social, con el objetivo de erradicar de forma eficaz el dopaje en el deporte.

El anteproyecto de ley ha quedado conformado por siete capítulos, 53 artículos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias, cinco disposiciones finales. A continuación, se examina el contenido del mismo resaltando los aspectos que se consideran más importantes.

Capítulo I Disposiciones Generales (artículos 1 a 9)

La Ley incorpora al ordenamiento jurídico del País Vasco, por primera vez, una **definición de dopaje** que se ha sustentado básicamente en las definiciones contenidas en los diferentes instrumentos aprobados por organizaciones internacionales. Con arreglo al Anteproyecto, dopaje constituye el consumo de una sustancia o la utilización de métodos para aumentar artificialmente las capacidades del deportista o su rendimiento deportivo, pudiendo representar dicho consumo o utilización un riesgo para la salud de los deportistas. Se ha puesto énfasis en la faceta deportiva de la definición. Se trata, fundamentalmente, de una trampa deportiva o de un acto contrario al espíritu deportivo que, además, constituye por lo general un riesgo para la salud de los deportistas.

La Ley Orgánica 7/2006 y el propio Código Mundial Antidopaje establecen una definición del dopaje que, básicamente, coincide con la actual propuesta legislativa. Sin embargo, ambas normativas, estatal e internacional, identifican, el dopaje con la comisión de cualquier infracción contenida en las mismas, incluso las acciones instrumentales para la comisión de la propia trampa deportiva por el deportista o, incluso, el incumplimiento de meras obligaciones documentales o formales. De este modo, también es dopaje la infracción del

deportista que incumple el deber de localización, la realización de actividades por personas que carezcan de habilitación, la falsificación por técnicos de elementos de los controles, la omisión del deber de información por parte de directivos o médicos, etcétera.

El Anteproyecto, por el contrario, contempla dos diferencias con la definición estatal. Por un lado, identifica el fenómeno del dopaje con el consumo o utilización de sustancias o métodos prohibidos para aumentar artificialmente las capacidades del deportista o su rendimiento deportivo. Por supuesto, el Anteproyecto no limita las infracciones en materia de dopaje a dicho consumo o utilización de sustancias o métodos prohibidos, sino que extiende las infracciones a todas las actividades relacionadas (negativa a pasar controles, fraude en las autorizaciones de uso terapéutico, suministro, comercialización, etcétera).

Y por otro lado, establece que el consumo o utilización de dichas sustancias o métodos prohibidos puede representar un riesgo para la salud de los deportistas. No debe admitirse el mero automatismo de que todo consumo o utilización pone en peligro la vida o salud. Y buena prueba de ello es que el artículo 44 de la Ley Orgánica 7/2006 incluye un nuevo artículo del Código Penal que admite que en todas las infracciones de dopaje no se pone en peligro la vida o salud de los deportistas.

El Anteproyecto de Ley incluye una lógica determinación del ámbito de aplicación de la legislación vasca y para ello se han tenido en consideración los fundamentos competenciales a los que antes se ha hecho referencia. Por ello, en el texto que se propone se incluye, a diferencia de la vigente Ley del Deporte, una delimitación del **ámbito objetivo y subjetivo** de aplicación de las normas antidopaje evitando solapamientos con la Ley 7/2006.

Establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la ley es una tarea compleja. La ley comprende disposiciones referidas a la organización institucional, a los principios generales, a las obligaciones de información, a la prevención, al control y represión, etcétera. Todas estas disposiciones tienen un alcance diferente en virtud de los diferentes sujetos que se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley. Asimismo, el ámbito de la competición no es un criterio suficiente pues una buena parte de los controles de dopaje a los deportistas se realizan fuera de la competición.

Atendiendo a dicha complejidad, el ámbito material general de la Ley está constituido, en principio, por toda la actividad deportiva, federada o no, que se desarrolle en el País Vasco. Es decir, se sigue como criterio general el de la territorialidad. No obstante lo anterior, determinadas obligaciones legales sólo serán exigibles a determinadas actividades que se desarrollen en el País Vasco y, por tanto, tal ámbito material general presenta algunas excepciones.

Una de las novedades más importantes del Anteproyecto es la expresa extensión de la normativa antidopaje al ámbito deportivo no federativo. Se amplían todas las previsiones existentes hasta la fecha para el deporte federado a otras realidades deportivas. En este aspecto el Anteproyecto sigue la estela marcada por la Ley Orgánica 7/2006 que también contempla medidas en el ámbito de la actividad deportiva no competitiva.



El ámbito subjetivo general de aplicación de la Ley se extiende a todos los deportistas cuya licencia federativa, universitaria o escolar habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco así como a todos aquellos deportistas que entrenen, compitan o residan en el País Vasco. De igual modo que en el ámbito material general, también en este ámbito subjetivo general la ley contiene excepciones. Por ejemplo, no será de aplicación la misma en toda su integridad a los deportistas con licencia federativa estatal o con licencia autonómica homologada en competiciones deportivas organizadas, promovidas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas.

La Ley tampoco será de aplicación a los controles de dopaje realizados con ocasión de la realización de pruebas de acceso a estudios universitarios, oposiciones y procesos análogos.

Asimismo, en la Ley se contiene un catálogo de **principios generales y de responsabilidades de los distintos agentes** que intervienen en el mundo del deporte. Tales principios están enunciados con claridad y permiten entender adecuadamente el papel de los distintos agentes públicos y privados que deben implicarse en esta batalla contra el dopaje.

Capítulo II Organización administrativa (artículos 10 a 12)

En lo referente al ámbito organizativo, una de las novedades más importantes de la nueva Ley es la adecuación del marco institucional al fenómeno del dopaje con la creación de la **Agencia Vasca Antidopaje**. El tiempo transcurrido desde 1998, fecha de aprobación de la vigente Ley del Deporte, ha puesto de manifiesto la tendencia generalizada a la creación de agencias nacionales antidopaje. En el orden internacional se dio un paso importante en 1999, en Lausana, Suiza, con la creación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). También en los Estados está tomando fuerza la creación de agencias que luchan contra el dopaje. En esta línea, se ha creado la Agencia Estatal Antidopaje. Tales agencias, de inspiración norteamericana, se insertan en la Administración institucional.

Una de las razones que se argumentan para la creación de estas agencias es su mayor especialización para la realización de determinadas funciones y su independencia. Así, el Parlamento Vasco ya ha aprobado la creación de varias agencias (Agencia Vasca de Protección de Datos, Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, Agencia Vasca del Agua) que si bien ostentan un régimen jurídico diferenciado, tienen como común objetivo la descentralización administrativa funcional.

En el caso que ahora nos ocupa, se pretende separar las funciones de promoción del deporte, tanto el de alto nivel como las demás manifestaciones deportivas de competición que no son de alto nivel, que seguirían dentro del ámbito de actuación de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, y el control de las prácticas de dopaje, que estaría dirigido por la Agencia Vasca Antidopaje.

La propia Ley Orgánica 7/2006 prevé la creación de Agencias Antidopaje en las Comunidades Autónomas al contemplar la constitución de la Comisión de Agencias Antidopaje *"cuando se acredite la existencia de agencias antidopaje cuyo ámbito sea el de las comunidades autónomas"*.

Asimismo, la creación de la Agencia Vasca Antidopaje que se propone en este Anteproyecto viene avalada por el ya citado acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco, en relación a la proposición no de ley sobre el control de dopaje en el deporte.

Por otra parte, no puede perderse de vista que la mayor parte de las federaciones deportivas vascas y territoriales, aproximadamente 200, no están preparadas para hacer frente a la complejidad de la lucha contra el dopaje. Aunque el control de dopaje constituye en la actualidad una función pública de carácter administrativo que ejercen las federaciones deportivas (artículo 25.e de la Ley del Deporte) lo cierto es que tal complejidad técnica y la necesidad de contar con recursos humanos y materiales adecuados explican que, hasta la fecha, casi ninguna federación vasca o territorial tenga aprobado e inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco un reglamento específico de control antidopaje con la articulación de los diferentes órganos con competencia en materia de controles y gestión de resultados.

En cuanto a la constitución de la Agencia Vasca Antidopaje como un ente de Derecho Público (organismo con personalidad jurídica propia y sometimiento al derecho público) obedece a diversas razones.

Una de las alternativas examinadas era la creación de una Fundación de Derecho Privado. El Gobierno Vasco viene promoviendo y participando en la constitución de numerosas fundaciones para atender diferentes actividades de interés general. Incluso en el ámbito del deporte, el Gobierno Vasco ha promovido la constitución de la *Fundación Euskadi Kirola Fundazioa*, cuyo fin es impulsar y fomentar el desarrollo del deporte vasco de alto nivel. Incluso, la Agencia Mundial Antidopaje constituye una Fundación de Derecho Privado sometida al Derecho Suizo. Sin embargo, esta opción jurídica no resulta posible toda vez que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones, introducida mediante la Ley 7/2007, de Asociaciones, dispone que las personas jurídicas públicas podrán constituir o participar en la constitución de fundaciones exclusivamente para promover la participación de particulares o de otras entidades públicas o privadas en actividades de interés general y *"siempre que ello no suponga la asunción por parte de las fundaciones del ejercicio de potestades públicas"*.

Como quiera que la Agencia Vasca Antidopaje tiene encomendadas diversas potestades públicas (por ejemplo, la potestad sancionadora administrativa), la alternativa de constituir una Fundación de Derecho Privado debía descartarse. Por idéntica razón, se han descartado los entes públicos de Derecho Privado previstos en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Dos de las agencias que han sido tomadas como referencia son la Agencia Estatal Antidopaje, en el ámbito de dopaje, y la Agencia Vasca de Protección

de Datos, en el ámbito institucional vasco. Pues bien, ambos organismos están sometidos al Derecho Público.

Respecto a otras Comunidades Autónomas (Cantabria, Canarias, Castilla y León, Cataluña e Illes Balears), son escasas las que han creado alguna estructura administrativa *ad hoc* para la lucha contra el dopaje. Además, no en todos los casos se crea una Agencia u organismo de Derecho Público, sino que se opta por crear unos sencillos órganos colegiados de participación:

De otro lado, la organización administrativa del Gobierno Vasco al servicio de la prevención, control y represión del dopaje, presenta algunas diferencias respecto al modelo del Estado en cuanto al número de órganos que la componen.

La Ley Orgánica 7/2006 ha distribuido las competencias estatales en el ámbito del dopaje en el Consejo Superior de Deportes, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje y la Agencia Estatal Antidopaje.

A su vez, tanto la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje como la Agencia Estatal Antidopaje están compuestas por numerosos órganos colegiados y unipersonales con competencias diversas en materia de lucha contra el dopaje.

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de menor dimensión que la estatal, no precisa una organización tan compleja y, de hecho, hasta la fecha, todas las funciones en materia de prevención, control y represión del dopaje se han venido realizando a través de la Dirección de Deportes. Por ello, el presente Anteproyecto opta por atribuir casi todas las funciones que competen al Gobierno Vasco en materia de lucha contra el dopaje a la Agencia Vasca contra el Dopaje.

En consecuencia, el modelo organizativo que se propone para la Agencia Vasca Antidopaje es menos complejo que el estatal. Los órganos de la Agencia son el Director o Directora, el Secretario o Secretaria, el Consejo Consultivo y el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT). El Anteproyecto trata así de diseñar una estructura orgánica flexible para la Agencia, de modo que posibilita la creación de aquellos otros órganos que se puedan establecer en el estatuto de la Agencia, como puede ser un comité de expertos para determinados temas muy específicos, siguiendo el propio modelo de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Capítulo III Controles de dopaje (artículos 13 a 20)

El Anteproyecto se ha redactado partiendo de la necesidad de modular o atemperar los derechos fundamentales de los deportistas en materia de dopaje, deportistas que se encuentran sujetos a relaciones de especial sujeción. A este respecto debe citarse que la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas admite expresamente que los loables objetivos de lucha contra el dopaje conllevan un recorte en las libertades de los deportistas y tal limitación es inherente a las normas antidopaje y está justificada por un objetivo que es legítimo.

A juicio del Consejo General del Poder Judicial (según informe elaborado sobre el anteproyecto de la vigente Ley Orgánica 7/2006) la licencia deportiva permite y faculta al deportista "para participar en competiciones deportivas".

"proporciona derechos al deportista ... inherentes a la misma" y añade algo muy importante para la comprensión del Anteproyecto: "...pero también impone el cumplimiento de determinadas obligaciones; obligaciones que no pueden resultar injustificadas, desproporcionadas o desconectadas de los fines que han orientado su adopción, pero que, a su vez, suponen una cierta reducción del ámbito de libertad individual... En este orden de cosas, se podría hablar, haciendo traslación de categorías administrativo-públicas, de una relación de sujeción especial del deportista respecto de la organización deportiva (categoría expresamente utilizada por la doctrina en esta materia) que se traduce, entre otros aspectos, en el sometimiento a su disciplina, a la tutela que, en consecuencia, corresponde la organización, y que incluye la preservación de la salud de la práctica deportiva y de las competiciones en condiciones de limpieza y lealtad, de conformidad con las reglas del deporte. En otras palabras, la existencia de esta relación de sujeción especial se traduce en el establecimiento de un conjunto de obligaciones de prevención, cuidado y vigilancia de aquellas conductas que pueden incidir en el ámbito en que la precitada relación se enmarca..."

En consecuencia, la Ley Orgánica 7/2006 opta claramente por referirse a la ponderación de los derechos de los deportistas en el artículo 5.1: "Los controles fuera de competición pueden realizarse por sorpresa o previa citación. Los términos de ambas modalidades se determinarán, reglamentariamente, procurando una adecuada ponderación de los derechos de los deportistas".

La atemperación de los derechos de los deportistas es puesta de manifiesto, igualmente, en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2010, considerando que la respuesta a las dudas sobre la ponderación de determinados derechos de los deportistas previstos en el procedimiento sancionador depende *"de la previsión típica contenida en una norma jurídica hábil para hacerlo"*. Desde esta perspectiva, lo que trata de hacer el anteproyecto es dotar a los operadores que realizan los correspondientes controles de la cobertura legal necesaria para la efectividad de los mismos.

Por ejemplo, resultaría ilógico defender el derecho de los deportistas a ser citados en los plazos previstos en la legislación de procedimiento administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) impidiendo así el factor sorpresa que es imprescindible en la lucha contra el dopaje. Tampoco resultaría concebible que se defienda el derecho de los deportistas a negarse a realizar un control antidopaje, de cualquier tipo, sin la presencia de su abogado cuando el mismo no está presente o disponible en el área de control, o el derecho de un deportista menor de edad, que viaja con su equipo sin sus padres, a negarse a realizar el control sin la presencia de sus padres o tutores.

Por ello, el Anteproyecto contempla los derechos de los deportistas y procede a realizar algunas ponderaciones que resultan totalmente lógicas. Por ejemplo, el derecho de los deportistas a ser acompañado en los controles de dopaje se debe limitar a las personas de su confianza que se hallen presentes en la zona de control. Ningún deportista puede negarse a realizar un control si la persona de su confianza no se halla disponible en la zona de control.

De otro lado, tal y como se ha dicho, el Anteproyecto de Ley trata de ser garantista con los derechos de los deportistas. Por ejemplo, en el supuesto de que el resultado analítico de un control de dopaje de un deportista arroje un



positivo o informe adverso, pero exista una autorización de uso terapéutico válida, vigente y adecuada a los resultados analíticos, se considerará por el comité antidopaje que el resultado es negativo, no resultando necesario la incoación de expediente disciplinario. De este modo, se evita que el deportista con una autorización de uso terapéutico válida y vigente sufra el daño de la apertura de los correspondientes expedientes disciplinarios, tal y como viene exigiendo hasta la fecha el Comité Español de Disciplina Deportiva (Resoluciones 257/1998, 278/1998 y 44/1999) y la Ley Orgánica 7/2006.

El presente Anteproyecto sigue el criterio de la Agencia Mundial Antidopaje, según el cual, si el Comité Antidopaje comprueba en la revisión de un resultado adverso que existe una autorización de uso terapéutico vigente y suficiente *"el resultado de su prueba se registrará como negativo"*, sin necesidad de incoar expediente disciplinario alguno.

En esta línea garantista tampoco podrá obligarse a un deportista a pasar más de un control de dopaje en una prueba. No se considerará que se trata del mismo control cuando los tipos de muestras solicitadas a los deportistas sean diferentes. Reglamentariamente se regulará el alcance de este derecho de los deportistas. Ello obliga a concretar fórmulas de coordinación entre los diversos organismos que desean realizar controles de dopaje en una misma competición.

Otra de las cuestiones que se ha trata de resolver y clarificar es el alcance jurídico de la **obligatoriedad de someterse a controles antidopaje** por los deportistas. En ocasiones, desde algunos foros se ha puesto en duda la constitucionalidad de tal obligatoriedad por entender que tal obligatoriedad colisiona con el derecho fundamental de todo deportista a la intimidad y a la integridad física.

Al respecto, tanto la Ley Orgánica 7/2006 como la Ley del Deporte establecen dicha obligatoriedad de los deportistas de someterse a los controles de dopaje.

Admitida la obligatoriedad de someterse a controles antidopaje por parte de los deportistas, es preciso que se proceda a la determinación rigurosa de su alcance subjetivo. En primer lugar debe reseñarse que el artículo 86 de la Ley del Deporte hacia referencia únicamente a los deportistas con licencia federativa sembrando dudas sobre la obligatoriedad. ¿Qué significa ello? ¿Qué sólo los deportistas con licencia federativa están obligados a someterse a controles antidopaje? Evidentemente, si se hace una lectura sistemática del precepto, obligada por el artículo 3.1 del Código Civil, nos encontramos con que no dispensa expresamente a los deportistas no federados de tal obligatoriedad. Asimismo, la defensa de la salud de los deportistas, o la propia ética o limpieza de la competición, valores que tratan de protegerse con la normativa antidopaje, no pueden ceñirse sólo al deporte federado en la medida de que es un deber de los poderes públicos vascos (artículo 2, v de la Ley del Deporte, *"la adopción de las medidas para erradicar el dopaje en el deporte y cualesquiera otras prácticas atentatorias contra la salud y la dignidad de la persona"*). Este precepto establece un mandato para erradicar el dopaje en el deporte en general, no sólo en el federado. En el País Vasco se organizan numerosas competiciones (partidos de pelota profesional organizados por empresas privadas, pruebas populares organizadas por empresas en las que

participan deportistas no federados, etcétera) que precisan también el sometimiento a controles antidopaje, aunque con diferente alcance.

Por todo ello, y al objeto de evitar dudas interpretativas sobre el alcance subjetivo de la obligatoriedad, es decir, a qué deportistas cabe exigir que se sometan a controles antidopaje, se ha seguido un doble criterio:

1.- La Agencia Vasca Antidopaje podrá requerir a cualquier deportista que participe en competiciones que se celebren en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se someta a un control antidopaje. En el campo del Derecho Administrativo sancionador rige el principio de la territorialidad, no el de la nacionalidad o vecindad. Asimismo, el artículo 125 de la Ley del Deporte, establece que las disposiciones integrantes del Capítulo II (Régimen Sancionador) del Título XI serán de aplicación a las acciones u omisiones *"que tengan lugar en el ámbito de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito estatal o internacional"*.

No hay que ocultar que, al igual que sucede con otras cuestiones jurídico-administrativas relacionadas con el deporte (publicidad de tabaco y alcohol, autorizaciones administrativas al amparo de la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, cobertura de riesgos, tributación, etcétera), la aplicación de la normativa vasca a las competiciones internacionales o competiciones estatales que se celebren en el País Vasco puede suscitar algunos problemas, al igual que la normativa sobre el dopaje. Desde un plano puramente disciplinario deportivo ni las federaciones deportivas vascas ni el Gobierno Vasco ostentan competencias sobre tales competiciones, pero desde el punto de vista administrativo el Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca Antidopaje, puede exigir controles y sancionar.

2.- Asimismo, las federaciones deportivas vascas, y subsidiariamente la Agencia Vasca Antidopaje, sólo podrán establecer la obligatoriedad de someterse al régimen disciplinario deportivo a los deportistas con licencia federativa vasca con independencia del lugar o territorio donde se celebre la competición.

En cualquier caso, una de las notas características del Anteproyecto es que buena parte de las obligaciones y prohibiciones que en la Ley Orgánica 7/2006 (artículo 5.1) se ciñen a los organizadores de competiciones deportivas oficiales, también se extienden en este Anteproyecto a los organizadores de competiciones no oficiales. No parece lógico que exista un territorio franco de control de dopaje en función de la no oficialidad de las competiciones deportivas.

Asimismo, respecto a los efectos de la obligatoriedad de los controles, resulta preciso despejar la duda de si tal obligatoriedad puede traducirse en una intervención forzosa o compulsión sobre el deportista y, por ello, si dicho deportista se tiene que ver obligado a la extracción de sangre, de saliva o de cabello en contra de su voluntad. Pues bien, en la medida en que las pruebas antidopaje (hematológicas, de orina, de cabello, de saliva, etcétera) pueden implicar una invasión en el cuerpo o en la intimidad de los deportistas, el Anteproyecto no convierte la obligatoriedad del control antidopaje en compulsión sobre los deportistas, es decir, en contra de su voluntad. Si tales



controles forzosos no son admisibles desde un punto de vista constitucional en otros ámbitos (pruebas de paternidad, de alcoholemia, etcétera) son más difíciles de justificar desde la perspectiva de la protección de la salud de los deportistas o desde la perspectiva del juego limpio. Por ello, el alcance de la obligatoriedad es abordado en el Anteproyecto desde las siguientes perspectivas jurídicas:

- a) Si la negativa del deportista a someterse a los controles antidopaje es anterior a la celebración de la competición, el deportista, por supuesto, no puede participar en la misma. De la misma forma que el deportista que no cumpla determinadas condiciones no puede competir (reconocimiento médico de aptitud, licencia, seguro, etcétera) es razonable que, en línea con lo acordado por todos los organismos internacionales públicos y privados, y por los parlamentos estatales, se impida la participación a aquellos deportistas que se nieguen a la realización de las pruebas antidopaje. Por supuesto, tal negativa acarrea al mismo tiempo la pertinente sanción.
- b) Si la negativa del deportista es posterior a la competición también procede aplicar la correspondiente sanción por infracción muy grave.

Debe advertirse que con ello no se vulnera así el derecho de los deportistas a la presunción de inocencia pues la negativa no se considera como "positivo" sino que constituye una infracción autónoma, de carácter muy grave, de la misma forma que puede cometer una infracción el médico o auxiliar que promueva o colabore en el dopaje de un deportista, tampoco en este supuesto hay una presunción de dopaje sino, tan solo, la infracción de un deber.

Respecto a los **tipos de controles**, atendiendo a las modificaciones aprobadas en el Código Mundial Antidopaje, a las sugerencias de la doctrina científica y a la realidad de los controles antidopaje que se vienen realizando en la actualidad, el Anteproyecto de Ley no restringe los controles antidopaje a las tomas de muestras y, además, las tomas de muestras no se reducen a la orina de los deportistas. El texto abre los controles a otro tipo de muestras, sin imponer vía alguna. Tendrá que ser la evolución de las investigaciones y los resultados de los avances tecnológicos quienes marquen en cada momento la vía más adecuada de control, sin que deba ser esta Ley la que frene tales dinámicas. Por el contrario, se trata de proponer una ley abierta, de futuro, que ofrezca cobertura jurídica a tales avances.

Debe significarse que en este apartado de los tipos de controles la Ley trata de ser más ambiciosa que la reciente Ley Orgánica 7/2006. Esta Ley Orgánica circunscribe el control al conjunto de actividades materiales cuya finalidad es comprobar la presencia o no de alguna sustancia o método prohibido, detección que se realiza mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída al efecto.

En el presente Anteproyecto los controles de dopaje son entendidos en sentido mucho más amplio como el conjunto de actividades tendentes a verificar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa antidopaje.

Tampoco puede pasarse por alto que los tribunales han venido a admitir que existen diversos tipos de control de dopaje. Concretamente, el Tribunal

Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia de 20 de diciembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya ha admitido, con el marco vigente, la admisibilidad de controles de dopaje a través de otros medios probatorios diferentes a la toma de muestras como, por ejemplo, el interrogatorio.

En consecuencia, el concepto de control que se erige en este anteproyecto es consecuencia de lo que se viene llamando por la Agencia Mundial Antidopaje como "*violaciones no analíticas*", es decir, infracciones de los deportistas sin dar un positivo analítico. Arrojar un resultado positivo o *adverso* no es la única forma de violar las reglas antidopaje. También se puede traficar sustancias dopantes, prescribir dichas sustancias de modo fraudulento o simular enfermedades o lesiones. Estas violaciones no analíticas precisan que el control no se reduzca al mero análisis de tomas.

Debe recordarse a este respecto que el Código Mundial Antidopaje, tanto en su versión de 2003 como en la nueva versión de noviembre de 2007, contempla la facultad de las organizaciones antidopaje para proceder a investigaciones complementarias (artículo 7.4). En esta línea, se establece que "*el rechazo por parte del deportista ... a responder a las preguntas del tribunal o de la organización antidopaje que haya denunciado la infracción de las normas antidopaje*" será considerado como "*conclusión negativa en contra del deportista*". Asimismo, numerosas resoluciones del Tribunal Arbitral (TAS), del Deporte del Comité Olímpico Internacional, han reconocido la admisibilidad jurídica de las conclusiones negativas contra el deportista en caso de negativa a declarar.

Mención especial requiere el tratamiento que el Anteproyecto otorga a los denominados **controles de salud**. Siguiendo el mismo criterio que la Ley Orgánica 7/2006, se incluyen bajo ese concepto el conjunto de actuaciones que la Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva, así como para controlar el cumplimiento por los deportistas de las obligaciones derivadas de la Ley en materia de dopaje y salud. Asimismo, la Agencia Vasca Antidopaje determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de licencia a un deportista por razones de salud. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y características que han de revestir las actuaciones de protección de la salud a los deportistas.

De este modo, en el Anteproyecto se reconoce y regula una práctica que ha venido siendo habitual en el mundo del deporte. Una de las diferencias respecto a la regulación estatal se manifiesta con relación a la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica que faculta a las empresas a realizar controles de salud a sus deportistas trabajadores. En el presente Anteproyecto se ha optado por facultar a cualesquiera entidades deportivas a realizar controles de salud a sus deportistas, con independencia de que sean trabajadores o no. Sería ilógico negar a las federaciones deportivas, por ejemplo, la facultad de realizar controles de salud sobre los deportistas de alto nivel por inexistencia de relación laboral o negar a dichas federaciones deportivas la realización de controles de salud sobre sus deportistas

seleccionados por el mero hecho de no existir una relación laboral entre los mismos. Del mismo modo, sería incomprensible que los clubes no pudiesen hacer controles de salud a sus deportistas no profesionales. Se podría dar la circunstancia absurda de que en un mismo equipo algunos deportistas (los profesionales) tendrían un régimen de control de salud diferente a los restantes. Por tanto, en el presente Anteproyecto los controles de salud no se ciñen al ámbito de las relaciones laborales de carácter especial y, en consecuencia, otras organizaciones deportivas pueden realizar controles de salud a sus deportistas, haciendo abstracción de su relación jurídica con la entidad a la que presta servicios. El control de la salud previsto en el anteproyecto no se basa en la relación empresa-trabajador sino en la condición común de deportista de todos los miembros de un mismo equipo.

La legislación deportiva vigente establece un severo régimen sancionador para los clubes deportivos por las infracciones de dopaje de sus deportistas y ello avala la habilitación a las entidades deportivas de fórmulas que permitan controlar el cumplimiento de la normativa sobre dopaje.

Asimismo, es evidente que la normativa sobre prevención de riesgos laborales no se puede aplicar a los controles de salud dada la finalidad de éstos. Dicha normativa, configura la vigilancia de la salud de los trabajadores bajo parámetros, procedimientos y propósitos muy diferentes al control de la salud de los deportistas (voluntariedad, previa información de los representantes de los trabajadores, prohibición de que los datos puedan ser usados en perjuicio del trabajador, prohibición de que los datos puedan ser facilitados al empresario sin consentimiento expreso del trabajador, etcétera), que son incompatibles con los objetivos y funcionamiento de los controles de salud en el deporte. Además, y esto es muy importante, con los controles de salud no se trata de preservar únicamente la salud individual del deportista, se trata de realizar una labor preventiva por parte de las entidades deportivas respecto a la preparación, cuidado y rendimiento de sus deportistas, respecto a posibles sanciones colectivas en materia de dopaje a sufrir por los equipos, etcétera.

Por todo lo anterior, el artículo 17.4 del anteproyecto aclara que tales controles de salud que pueden realizar las entidades deportivas a sus deportistas son independientes de los reconocimientos médicos que puedan realizar voluntariamente los deportistas profesionales al amparo de la legislación laboral para la protección de su salud.

El texto legal dedica especial atención a las **autorizaciones de uso terapéutico**. En la medida que se está constatando en los últimos tiempos una utilización masiva y fraudulenta de dichas autorizaciones de uso terapéutico el Anteproyecto refleja un esfuerzo por atajar tal fraude. De poco sirve el extraordinario trabajo que puedan desarrollar prestigiosos laboratorios antidopaje y el enorme coste de la realización de los controles si los resultados analíticos de los laboratorios con hallazgos de sustancias prohibidas se deben archivar en un porcentaje importante de casos al disponer los deportistas de las correspondientes autorizaciones de uso terapéutico.

Si no se desea que el discurso sobre la "tolerancia cero" quede en pura retórica vacía de contenido efectivo, debe darse un paso firme en el tema de las

autorizaciones de uso terapéutico, que deben restringirse al máximo. Y el anteproyecto trata de ser muy sensible con esa situación preocupante.

Desde algunos colectivos médicos se ha venido argumentando, a través de artículos de opinión o enmiendas en la tramitación de la Ley Orgánica 7/2006, que la normativa antidopaje entorpece el trabajo profesional ético de los profesionales que se dedican a la medicina del deporte y desde esta perspectiva el anteproyecto trata de compatibilizar el derecho de los médicos a tratar libremente a sus pacientes, en este caso deportistas, con el interés del deportista en participar en competiciones oficiales. Una ley que trata de proteger, además de la limpieza de la competición, la salud de los deportistas debe posibilitar a los profesionales de la salud instrumentos que permitan tratar adecuadamente a los deportistas en aras a lograr su adecuada curación. Para ello, se contemplan en la ley dos mecanismos: las autorizaciones de uso terapéutico y declaraciones de uso de glucocorticosteroides y las bajas deportivas, con un régimen claramente diferenciado.

De cara a evitar los actuales fraudes en materia de autorizaciones de uso terapéutico el Anteproyecto incluye diversas novedades en comparación con la Ley Orgánica 7/2006.

En primer lugar, los órganos antidopaje y los órganos disciplinarios deportivos no podrán considerar válidas además de las autorizaciones de uso terapéutico que no se encuentren debidamente registradas en la Agencia Vasca Antidopaje o en otros organismos competentes, aquellas que, debidamente registradas se hallan obtenido fraudulentamente o se hallan aplicado incumpliendo sus condiciones en lo relativo a las dosis, vías de administración o plazo de tratamiento.

En segundo lugar, y en relación con el alcance del deber de información sobre tratamientos médicos, la citada Ley Orgánica establece que (artículo 5.4) los deportistas, sus entrenadores, médicos y demás personal sanitario, así como los directivos de clubes y organizaciones deportivas indicarán, en el momento de pasar los controles de dopaje, los tratamientos terapéuticos a que estén sometidos, los responsables de los mismos y el alcance del tratamiento, salvo que los deportistas negaren expresamente la autorización para tal indicación. Esta obligación se limita temporalmente al momento de pasar los controles de dopaje y se trata de una limitación injustificada y peligrosa para la eficacia en la lucha contra el dopaje. Por ello, en el anteproyecto se añade la obligación de información antes, durante y después de las tomas de muestras pues en numerosas ocasiones resulta preciso solicitar a los deportistas información adicional para verificar la existencia de posibles fraudes.

En tercer lugar, en esta línea de acentuar el control sobre los tratamientos médicos a los deportistas se introduce una nueva disposición: la negativa de un deportista a conceder el consentimiento citado más arriba será considerada como incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos.

Por último y respecto a estas autorizaciones de uso terapéutico se ha introducido una novedad en materia de sanciones a los deportistas. En el artículo 25.4 del anteproyecto se establece que en los supuestos en los que el deportista teniendo justificación médica suficiente para disponer de una

autorización de uso terapéutico no la haya solicitado, o haya caducado la vigencia de la anteriormente obtenida, se le impondrá la primera vez una amonestación en el supuesto de que el control arroje un resultado analítico adverso. Tal modalidad de sanción tiene tradición internacional en el ámbito del dopaje siendo habitual imponer una amonestación (public warning) y el propio Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en numerosas ocasiones aplica en materia de dopaje el principio de proporcionalidad.

En el supuesto de que tal deportista vuelva a cometer tal infracción por segunda vez se le impondrá una sanción por infracción grave en su grado mínimo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la sanción económica que se pueda imponer al club por su falta de diligencia en tales omisiones.

Tanto la Ley Orgánica 7/2006, como el Código Mundial Antidopaje, y el presente anteproyecto, acogen expresamente el principio de la proporcionalidad en la imposición de sanciones. Desde este punto de vista, parece razonable que no se deba imponer a un deportista que ostenta justificación médica suficiente para obtener una autorización de uso terapéutico, y que no la ha solicitado o no la ha renovado, por falta de diligencia, una sanción mínima de tres meses. En numerosas ocasiones, los deportistas sufren enfermedades de carácter crónico que les obliga a solicitar la correspondiente autorización de uso terapéutico, o a renovar el mismo, pero, sin embargo, no son diligentes en tales cuestiones formales. Resulta contrario a un elemental criterio de justicia que se sancione con severidad esa falta de diligencia. El anteproyecto contempla un diferente tratamiento en función de la reiteración de la infracción.

La Ley incorpora como novedad, respecto a la normativa vigente, tanto estatal como autonómica, la figura de la **baja deportiva**. Se trata de una importante incorporación que viene siendo demandada por la doctrina científica, tanto jurídica como médica. Los deportistas no dejan de ser ciudadanos y, por tanto, son acreedores a la protección de la salud de modo que los médicos no deben sufrir limitación alguna para conseguir su objetivo de curar al deportista empleando cualquier sustancia o método que resulta admisible en personas no deportistas. Ahora bien, esta libertad de tratamiento terapéutico de los deportistas debe conllevar algunas limitaciones deportivas. En aquellos casos en los que dicho tratamiento pueda mejorar su rendimiento debe producirse la baja deportiva durante un tiempo.

Por tanto, las bajas deportivas son una alternativa a las autorizaciones de uso terapéutico que puede resultar útil a para los deportistas que se encuentren enfermos cuando dichos deportistas precisen de tratamientos terapéuticos con sustancias prohibidas. Se trata de una solución novedosa que encaja perfectamente en una ley que pregona la limpieza de las competiciones y la protección de la salud de los deportistas.

Del mismo modo que el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 7/2006 reconoce expresamente que a los deportistas se les realicen controles de salud que pueden conllevar, sin carácter sancionador, la suspensión de licencia deportiva por razones de salud, acordada por la correspondiente organización deportiva, en el caso de la baja deportiva se suspenden los derechos deportivos de un deportista por razones de salud, a instancias del mismo, y se le permite el libre

tratamiento terapéutico sin poder competir por el tiempo que se determine por el correspondiente comité.

Por supuesto, este nuevo instrumento de la baja deportiva precisa de las oportunas garantías. Para ello se ha empleado para estas bajas deportivas el régimen de las autorizaciones de uso terapéutico, de modo que será el correspondiente comité antidopaje quien recibirá la comunicación de la baja deportiva. El alta del deportista, o la rehabilitación, será concedida por el comité antidopaje para evitar fraudes y el deportista también podrá ser sometido a controles.

Todo ello está en consonancia con el artículo 80 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Tal disposición establece que la importación, exportación, distribución, comercialización, prescripción y dispensación de los citados productos, legalmente reconocidos, no tendrán por finalidad aumentar las capacidades físicas de los deportistas o modificar los resultados de las competiciones en las que participan. Por tanto, los médicos pueden prescribir medicamentos a deportistas enfermos o lesionados en los términos que resulten adecuados y para evitar que tal tratamiento pueda *"modificar los resultados de las competiciones en las que participan"* se impide participar en las mismas en los términos que establezca cada comisión antidopaje.

En el supuesto de que los deportistas desean, simultáneamente, recibir un tratamiento y competir, deberán acudir a la figura de las autorizaciones de uso terapéutico, antes comentadas.

El Anteproyecto aborda el problema jurídico de la **titularidad de las muestras tomadas a los deportistas en los controles antidopaje**. La solución propuesta trata de garantizar todos los derechos en juego. El Anteproyecto contempla la titularidad de las muestras a favor del deportista, pero tal titularidad le confiere únicamente el derecho a disponer la destrucción de las mismas una vez finalizado el análisis definitivamente. Dicho derecho se conjuga con la posibilidad de que la Agencia Vasca Antidopaje, tras la renuncia del deportista a la destrucción, requiera tales muestras a los solos efectos de investigación (por ejemplo, para trazar el denominado mapa del dopaje). Así, el texto reconoce como derecho de los deportistas el solicitar la destrucción de las muestras una vez finalizado el proceso de análisis y el plazo de prescripción, de tal forma que transcurrido el plazo que reglamentariamente se determine perderá la facultad de disposición sobre dichas muestras.

Un tema extraordinariamente importante es el de la **gestión de los resultados**, concretamente, el traslado de los resultados de los controles realizados por la Agencia Vasca Antidopaje a otros organismos. El criterio que sigue el Anteproyecto es el contemplado en el artículo 3.2.2 de la Ley Orgánica 7/2006. Habida cuenta de los numerosos casos de filtraciones de *positivos* detectados en controles de dopaje, y considerando la propuesta contenida en el Código Mundial Antidopaje aprobado por la AMA, el Anteproyecto hace bastante hincapié en el tema de la confidencialidad de los datos. Los deportistas, como cualquier otra persona, tienen derecho a la presunción de inocencia y a la confidencialidad de los resultados hasta la finalización del procedimiento de análisis. Por ello, se incluye expresamente tal derecho a la confidencialidad

dentro del catálogo de derechos de los deportistas y dentro de los principios rectores de actuación de los organismos deportivos.

El Anteproyecto trata de facilitar la publicación y permanente **actualización de la lista de sustancias y métodos prohibidos**. Con arreglo a la propuesta contenida en el Anteproyecto se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, por orden de la Agencia Vasca Antidopaje, la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Tal publicación tendrá carácter periódico y se producirá, en todo caso, cuando se introduzcan cambios en la misma. Asimismo, se establece el deber de la Agencia Vasca Antidopaje para establecer fórmulas adicionales de información y consulta de la lista de sustancias y métodos prohibidos mediante su inserción en páginas digitales de instituciones y entidades relacionadas con el deporte, así como por cualquier otro medio y soporte que faciliten el conocimiento, la difusión y la accesibilidad de la misma.

El Anteproyecto también aborda especialmente la problemática de los **controles de dopaje en deportistas menores de edad**. La Ley 7/2006, no regula la materia, pero se trata de una cuestión que afecta a los derechos de los menores y desde ese punto de vista se pretende ser garantista. La Agencia Mundial Antidopaje viene recomendando el establecimiento de modificaciones para los controles de menores. Con arreglo a la Guía del Deportista de la AMA el deportista menor puede *"ser acompañado por un representante en todo momento durante el procedimiento de toma de muestras"*

Otra cuestión que merece la atención de la ley es la de los **controles de dopaje a los deportistas que padecen minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas**. Cualquiera que conozca las disposiciones reguladoras de los controles de dopaje es consciente que este colectivo de deportistas necesita unas normas especiales que se adecuen a sus necesidades. En este caso también se atiende la sugerencia de la AMA de permitir la modificación del procedimiento de toma de muestras. Aunque en este colectivo se plantean problemáticas muy diferentes la Ley trata de hacerse eco de la posibilidad de que se recojan especialidades que no afecten a la integridad de dicha toma de muestras: acompañamiento durante todo el proceso, instalaciones adecuadas a las dificultades que padezcan determinados deportistas, material de recogida especial en algunos casos.

Capítulo IV Régimen disciplinario y administrativo sancionador del dopaje (artículos 21 a 41)

En materia de infracciones y sanciones, el Anteproyecto pretende ser respetuoso con el principio constitucional de legalidad con arreglo al cual sólo constituyen infracciones las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por norma con rango de Ley. Por la comisión de dichas infracciones sólo podrán imponerse sanciones que, en todo caso, también deben estar delimitadas por Ley.

Como viene reconociendo el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, la descripción rigurosa y perfecta de las infracciones es, salvo excepciones, prácticamente imposible. Por ello, el mandato de tipificación legal no implica la

exclusión de la intervención reglamentaria. Tal y como previene el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que *"las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes"*. En el mismo sentido, nos encontramos con el artículo 4.1 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco, el cual dispone que *"las leyes y normas forales sectoriales configuradoras de los distintos regímenes sancionadores tipificarán las infracciones con la mayor precisión posible"*.

La tipificación detallada de las infracciones se ha ajustado fundamentalmente a la normativa estatal, pero debe resaltarse que se tipifica expresamente en la Disposición Adicional Quinta, como novedad, el depósito, comercialización, promoción, distribución o incitación, bajo cualesquiera modalidades, de tales sustancias o métodos en gimnasios, centros de fitness, clubes o cualesquiera centros deportivos. Se trata de una infracción que ya se encuentra en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero con un bien jurídico a proteger bien diferente. Los centros deportivos se encuentran regulados en la legislación deportiva y están concebidos al servicio de la salud y del bienestar de los ciudadanos. No nos encontramos ante un supuesto de vulneración del principio *non bis in idem*, pues no se tutelan los mismos intereses con ambas disposiciones legales.

En relación con este capítulo IV, debe recordarse lo ya expuesto en la introducción de esta memoria, respecto a las sentencias números 488/09 y 588/09, de 20 de julio de 2009, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han concluido que el Gobierno Vasco, de conformidad con la normativa vigente, carece de competencia para imponer sanciones en materia de dopaje, ya que la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma ostenta en materia de deporte no ampara, en particular a la Administración de la CAPV para la imposición de sanciones en materia disciplinaria deportiva, sin que quepa hablar de un diferenciado ámbito administrativo sancionador en lo que se refiere a los deportistas federados que permita aplicar a éstos sanciones administrativas propias del general sometimiento de todos los administrados. Las citadas sentencias han puesto de manifiesto la necesidad de dotar a la Comunidad Autónoma del País Vasco de una norma específica en materia de dopaje que clarifique definitivamente el régimen de actuación de las distintas instituciones en materia de prevención, control y represión del dopaje.

En esta línea debe indicarse que una de las características de la presente Anteproyecto de Ley es que sigue estableciendo un **régimen sancionador administrativo (heterotutela)** y un **régimen disciplinario deportivo basado en relaciones de especial sujeción (autotutela)**, continuando con el modelo de la vigente Ley del Deporte. La realidad es que el entorno del deportista, mayoritariamente sin licencia, se ha sentido extraordinariamente cómodo con una normativa que hasta la fecha ha afrontado el dopaje por una insuficiente

vía disciplinaria que, lógicamente, no afecta a quienes carecen de la correspondiente licencia o habilitación, es decir, a quienes no están sujetos a relación de sujeción especial. También debe reseñarse que ese régimen administrativo sancionador, que existe en la legislación de otros países de Europa, totalmente diferenciado del régimen disciplinario deportivo de las organizaciones privadas, trata de asegurar en un ámbito territorial determinado, la protección de la salud y la pureza de las competiciones deportivas. De este modo, la Administración ejerce sobre su ámbito territorial sus competencias en materia de prevención, control y represión del dopaje con independencia del carácter federado, nacionalidad, etcétera, de los deportistas. Y esta potestad sancionadora administrativa debe ser, lógicamente, independiente de la potestad disciplinaria deportiva que ostentan las organizaciones deportivas privadas para mantener el buen orden deportivo en su seno.

La Ley Orgánica 7/2006 sigue la vía de la Ley 10/1990 y configura un "régimen disciplinario", únicamente válido para aquellas personas con licencia o habilitación equivalente. Es decir, con arreglo a la legislación estatal sólo se puede sancionar a todas aquellas personas que cometen infracciones en materia de dopaje y cuentan con dicha licencia o habilitación equivalente. La Ley Orgánica 7/2006 sólo contempla en los artículos 17.4 (técnicos, jueces, árbitros, dirigentes, etcétera) y 18.4 (médicos y demás personal sanitario) la imposibilidad de obtener licencia deportiva o habilitación equivalente.

Frente a esta opción, el Anteproyecto contempla ambos regímenes, disciplinario y sancionador administrativo, siguiendo el modelo de la vigente Ley del Deporte. Así, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá requerir a cualquier deportista que participe en competiciones que se celebren en el País Vasco que se someta a un control antidopaje, de la misma forma que podrá requerir a cualquier médico, auxiliar, masajista, entrenador, etcétera. En el campo del derecho administrativo sancionador rige el principio de territorialidad, no el de la nacionalidad o vecindad, o el de la naturaleza de la competición.

El modelo sancionador con una dualidad de regímenes (potestad disciplinaria deportiva y potestad sancionadora administrativa) que contempla el anteproyecto es habitual en otros países y Francia constituye un buen ejemplo. Un deportista, sea cual sea su nacionalidad y licencia federativa, que compute en territorio francés se puede ver sometido a las sanciones de la Administración francesa y, al mismo tiempo, a las sanciones disciplinarias impuestas por la federación nacional o internacional correspondiente. Y este modelo sancionador dual también es muy evidente en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en donde cohabita un régimen administrativo sancionador (Título II) y un régimen disciplinario deportivo (Título III). En dicha Ley se reconoce la admisibilidad de la aplicación de las dos potestades sobre una misma persona por unos mismos hechos cuando no exista identidad de fundamento.

Con relación a la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia debe también ser objeto de aclaración el tema relativo a las funciones públicas de las federaciones deportivas en materia de prevención, control y represión del dopaje. Tal función puede ser objeto de avocación o recuperación por parte de la Administración Pública. Y de hecho, el Anteproyecto insiste en la misma

línea. Tal planteamiento está presente, de hecho, en el artículo 27 de la Ley Orgánica 7/2006, que dispone que la instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios corresponde, inicialmente, a los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas españolas. Si éstas no cumplen con su obligación de resolución de los expedientes citados, *"la competencia será asumida por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, que continuará los trámites hasta su finalización y resolución"*.

El artículo 38.3 del anteproyecto también contempla la posibilidad de que la Agencia Vasca Antidopaje recupere las funciones públicas que ejercen las federaciones deportivas en materia disciplinaria deportiva en el mismo supuesto que en la normativa estatal.

El anteproyecto incorpora en el artículo 23.2 una importante disposición sobre la **responsabilidad de los deportistas**. Este apartado segundo pretende atenuar las consecuencias excesivas del principio de responsabilidad objetiva o cuasiobjetiva que se impone en materia de represión del dopaje en la legislación estatal. Así, en el anteproyecto se aclara que para establecer la responsabilidad del deportista no será necesario demostrar intención, uso consciente o negligencia por su parte. No obstante lo anterior, el deportista podrá demostrar que no ha incurrido en culpa o negligencia o que no pretendía mejorar su rendimiento deportivo. En tal caso se seguirán los criterios establecidos en el Código Mundial Antidopaje. De este modo, el anteproyecto instaura un cierto equilibrio entre la efectividad de las normas antidopaje y el derecho de los deportistas a la equidad cuando se encuentre una sustancia prohibida en el organismo de un deportista sin culpa o negligencia. En este supuesto, recae la carga de la prueba en el propio deportista.

En el Anteproyecto de Ley se incorpora de forma clara el principio general de **reconocimiento mutuo de sanciones**. Una paradoja que se produce en el campo del deporte es, que mientras el dopaje es internacional, las medidas de lucha contra el mismo no lo son, sino que se reducen a un ámbito territorial reducido. La Europa sin fronteras es una realidad desde hace muchos años para quienes participan en las redes de dopaje y no lo es para quienes intentan erradicarlo. En este sentido una de las propuestas es, además de la armonización, el reconocimiento de las sanciones impuestas por otras federaciones y gobiernos.

El Código Mundial Antidopaje establece en su artículo 10.10.1 que ninguna persona que haya sido inhabilitada puede, durante el periodo de inhabilitación, participar en una competición o actividad deportiva. Es decir, no se puede permitir tomar parte en una de sus competiciones a un deportista que se encuentra sancionado por una violación de las normas antidopaje. Asimismo, el artículo 15.4.1 del Código Mundial Antidopaje dispone que *"los controles, las autorizaciones de uso terapéutico, las decisiones de las vistas y cualquier otra decisión final dictada por un signatario, serán reconocidos y respetados por todos los demás"*.

Dicho reconocimiento mutuo de sanciones se halla recogido, igualmente, en la Ley Orgánica 7/2006 (artículos 22 y 33).

Por ello, el Anteproyecto establece que las entidades que organicen actividades deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco

aplicarán el principio general de reconocimiento mutuo de las sanciones por dopaje impuestas por otras organizaciones. Si un deportista tiene una sanción vigente por dopaje, con independencia de cuál sea el tipo de sanción, deberá impedirse su participación en las actividades deportivas a desarrollar en el País Vasco.

El texto trata de poner fin a la grave confusión existente a la hora de determinar cuál debe ser el **órgano competente para calificar un resultado analítico como positivo o negativo**. Asimismo, el anteproyecto pretende dar respuesta a los problemas que suscita la literalidad del artículo 26.1 de la Ley Orgánica en relación a la posterior incoación de los expedientes disciplinarios. Frecuentemente se suscita el problema con ocasión de los informes adversos de los laboratorios en el supuesto de la preexistencia de autorizaciones de uso terapéutico. Sobre esta cuestión se ha suscitado un intenso debate y la interpretación emitida por diferentes organismos es diferente. El debate se centra en qué órgano del entramado de la entidad organizadora resultaría competente para calificar la existencia de un positivo o no. El Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD), a través de sus resoluciones dictadas en los expedientes 257/1998, 279/1998, 44/1999 y 99/1999 instó a las federaciones deportivas españolas a que den traslado de los informes analíticos adversos al órgano disciplinario, aunque medie una autorización de uso terapéutico que justifique los hallazgos. Este criterio era sostenido por el CEDD en contra del criterio lógico de las federaciones deportivas españolas y en contra de los criterios de la Agencia Mundial Antidopaje y de las federaciones internacionales. Dicho criterio da lugar a procedimientos innecesarios, es costoso para las partes que van a precisar asistencia jurídica y médica en el expediente sancionador y, además, es lesivo para los derechos de los deportistas que ven como se les incoa un expediente disciplinario innecesario cuando existe una válida Autorización de Uso Terapéutico y cuando los resultados del laboratorio son perfectamente compatibles con la autorización concedida.

El criterio por el que opta el Anteproyecto es el sostenido por la Agencia Mundial Antidopaje y por las federaciones deportivas internacionales, matizando lo establecido en la Ley Orgánica 7/2006, según la cual, si el laboratorio emite un informe con resultado adverso debe intervenir necesariamente el órgano disciplinario con la apertura del correspondiente expediente disciplinario.

Por el contrario, con arreglo a la propuesta del Anteproyecto, el proceso de represión del dopaje se divide en tres fases:

1.- Fase de detección. Es el conjunto de trámites previstos en orden a la detección del consumo de sustancias prohibidas. Y entre ellos cabe destacar la selección de deportistas, la notificación a los mismos, la recogida de muestras, el transporte y custodia de las muestras, su análisis inicial por el Laboratorio, la remisión del informe analítico al comité disciplinario, la petición de decodificación al comité antidopaje, la solicitud de contraanálisis por el deportista, etcétera.

2.- Fase intermedia de instrucción reservada. Es el conjunto de trámites a realizar una vez finalizada la fase de detección y mientras no se ha incoado el expediente disciplinario. Generalmente se corresponde esta fase con la



denominada fase de revisión, de instrucción reservada o de diligencias preliminares y en el seno de esta fase el comité disciplinario solicita información al CAUT sobre las autorizaciones de uso terapéutico, emplaza al deportista a realizar alegaciones y realiza cualquier otro tipo de diligencia complementaria. Esta fase no es de detección, pues ya ha finalizado, y tampoco es estrictamente disciplinaria (aunque sí en un sentido laxo) pues esta segunda fase finaliza con el archivo de actuaciones o con la incoación del expediente disciplinario.

3.- Fase disciplinaria propiamente dicha. Se inicia cuando, después de practicada la instrucción reservada, se incoa el expediente disciplinario oportuno y se resuelve finalmente el mismo.

Por todo ello, con arreglo al anteproyecto, el procedimiento disciplinario se iniciará por resolución del órgano disciplinario de la correspondiente entidad deportiva, tras recibir los resultados de los análisis del laboratorio y tras realizar la correspondiente instrucción reservada con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación y para dictar la resolución en que se decida la incoación del expediente disciplinario o, en su caso, el archivo de actuaciones.

Otra cuestión que aborda el Anteproyecto es la aplicación del principio **"non bis in idem"**. El Anteproyecto recoge la dimensión material de este principio, tal y como ha sido fijada por continua jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reiterada en su Sentencia 188/2005, de 7 de julio, y establece la imposibilidad de sancionar administrativamente o disciplinariamente hechos que hayan sido previamente penados cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Se ha seguido el criterio de la Ley Orgánica 7/2006 de modo que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penalmente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Por ello, el órgano sancionador suspenderá la tramitación del procedimiento cuando se adviertan indicios de delito. En tal caso, deberá dar conocimiento de los hechos al Ministerio Fiscal. Asimismo, el órgano sancionador suspenderá la tramitación del procedimiento cuando, concurriendo la triple identidad antes referida, tenga noticia de que los mismos hechos están siendo perseguidos en vía penal, sin perjuicio de su posterior reanudación si procediese.

Una vez sentado que no resultará posible la sanción penal y la sanción en vía disciplinaria o administrativa cuando exista triple identidad (sujeto, hecho y fundamento) debe analizarse el tema de la compatibilidad de las sanciones administrativas y las sanciones disciplinarias, es decir, la compatibilidad de la potestad disciplinaria (autotutela) en supuestos de relaciones de sujeción especial y la potestad sancionadora administrativa (heterotutela).

El criterio que finalmente se ha seguido es el de la compatibilidad de sanciones administrativas y sanciones disciplinarias tal y como se establece en los vigentes artículos 118 y 133 de la Ley del Deporte.

Hace unos años, en la tramitación de un proyecto de Decreto del Gobierno Vasco para la prevención, control y represión del Dopaje en el País Vasco, la Dirección de Régimen Jurídico del Departamento de Interior sugería que se

contemplase un régimen de comunicación de expedientes y sanciones al Departamento de Interior a los efectos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Pues bien, por ello el Anteproyecto prevé que la incoación de expedientes disciplinarios y sancionadores por dopaje, así como la resolución que ponga fin a los mismos, se comunicará al Departamento de Interior del Gobierno Vasco a los efectos de preservar el principio de proporcionalidad en la aplicación, en su caso, de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las comunicaciones anteriores no podrán realizarse hasta que finalice la fase de control de dopaje y pasen las actuaciones al órgano sancionador correspondiente.

Asimismo, las federaciones deportivas territoriales y vascas deberán comunicar a la Agencia Vasca Antidopaje la imposición de sanciones disciplinarias.

Por su parte, la Ley Orgánica 7/2006 contempla un sistema de revisión de las sanciones en la materia, que califica como "*arbitral*" y que sustituye al recurso administrativo clásico.

Esta "*fórmula arbitral*" ha suscitado una importante controversia, dado que su propia denominación puede inducir a confusión pues el nuevo procedimiento carece de los rasgos característicos de un sistema arbitral propiamente dicho al configurarse verdaderamente como un mero recurso administrativo previo a la jurisdicción contencioso-administrativa. El arbitraje es una institución que responde a unas características singulares (voluntariedad, alternativa a la vía judicial, etcétera). Además, no resulta admisible el arbitraje a fin de determinar o reducir las sanciones de dopaje pues no son materias disponibles por las partes, que no podrían entablar pactos al respecto.

Además, los objetivos que persigue la Ley Orgánica 7/2006 de evitar una sucesión larga y lenta de instancias para resolver los asuntos de dopaje pueden alcanzarse con otras medidas como garantizar un funcionamiento ágil del Comité Vasco de Justicia Deportiva. La excesiva dilación en la tramitación de los expedientes que tramitaba el Comité Vasco de Justicia Deportiva ha mejorado sustancialmente y en la actualidad puede decirse que el funcionamiento resulta más óptimo. Por todo ello, en el presente Anteproyecto se ha optado por no incorporar el nuevo sistema de revisión administrativa de las sanciones en materia de dopaje.

Capítulo V Medidas de prevención (artículos 42 a 42)

El Anteproyecto trata de afrontar la lucha contra el dopaje desde una perspectiva integral bajo el convencimiento de que no deben focalizarse los esfuerzos en el control y la represión. Es necesario un esfuerzo importante en el campo de la prevención. Así, el texto articulado de la nueva Ley contempla la obligación de adoptar diversas medidas en esta materia. Entre las mismas se incluyen acciones de investigación que son absolutamente necesarias si se desea ser eficaz; la credibilidad de las disposiciones y resoluciones que se adopten en la materia se basan en la fiabilidad de los sistemas de detección y ello precisa grandes esfuerzos en el campo de la investigación. Las modernas técnicas de dopaje evolucionan constantemente aprovechando los adelantos de los conocimientos médicos y farmacológicos. Por esta razón se hace

preciso un esfuerzo en el campo de la investigación, reconociéndose un papel activo al Centro Vasco de Medicina del Deporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 14/1998.

Con el objetivo de hacer efectivos dichos programas de investigación científica, el Anteproyecto contempla mecanismos de información poniendo a disposición de los diversos agentes públicos y privados aquellos datos que puedan ser utilizados en el desarrollo de aquellos programas.

Asimismo, el Anteproyecto incluye expresamente la realización de programas de formación e información dirigidos fundamentalmente a clubes, federaciones, deportistas, técnicos, dirigentes y demás agentes deportivos a fin de evitar que los valores del deporte sean amenazados por el dopaje y con el objetivo de impedir que los deportistas recurran a sustancias y métodos prohibidos en grave perjuicio de su salud.

Especial mención se debe hacer a la previsión de programas específicos de sensibilización en la lucha contra el dopaje en el campo del deporte que no es de rendimiento: pruebas atléticas populares, carreras cicloturistas, gimnasios, etcétera. Un informe elaborado por la Comisión Europea ha revelado que un porcentaje muy importante de usuarios de centros de fitness toman regularmente sustancias dopantes para mejorar su rendimiento utilizando para ello la existencia de mercados negros de suministro de sustancias dopantes.

El Anteproyecto de ley crea la figura de la Tarjeta de Salud del Deportista aunque, en realidad, tal tarjeta sustituye a la cartilla sanitaria del deportista prevista en el artículo 83 de la vigente Ley del Deporte del País Vasco.

El tiempo transcurrido desde que se elaboró y aprobó esta ley y los extraordinarios avances tecnológicos justifican sobradamente la transición entre un modelo de información, basado en el soporte papel, a un modelo de información basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

El artículo 49 de la Ley Orgánica 7/2006 también contempla la figura de la Tarjeta de Salud del Deportista. Sin embargo, tal tarjeta de salud está prevista para los deportistas de alto nivel así como para deportistas con licencia federativa estatal o autonómica homologada estatalmente. El presente Anteproyecto abre el campo de posibles beneficiarios de la tarjeta a otros colectivos; no federados o federados que no ostenten la condición de deportistas de alto nivel o que no dispongan de licencia estatal.

Por esa razón, y al objeto de evitar duplicidades innecesarias, la disposición adicional segunda del Anteproyecto establece que el Gobierno Vasco y el Estado podrán establecer, a través de los correspondientes instrumentos de colaboración, fórmulas para la implantación de un sistema de mutua información y para la expedición, reconocimiento o realización de la Tarjeta de Salud del Deportista y para la habilitación de los veterinarios y demás personal que deba intervenir en los controles.

Con arreglo al Anteproyecto, la tarjeta de salud del deportista es un documento público, que expide la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco a los deportistas con las licencias federativas y universitarias y aquellos otros colectivos de deportistas que se determinen reglamentariamente. Se excluye a los deportistas escolares en atención a su minoría de edad. El deporte escolar

es aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio.

Dicha tarjeta de salud tiene como finalidad que el deportista y el personal sanitario que le atiende dispongan de la mejor información clínica posible en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia o enfermedad. Asimismo, la tarjeta de salud puede servir de ayuda en la lucha contra el dopaje. La tarjeta de salud del deportista se erige así en una tarjeta dual pues, por un lado, contiene información que va a permitir el mejor tratamiento médico posible a los deportistas y, en segundo lugar, dicha tarjeta puede servir para ejercer un control más eficaz de los mismos pues la tarjeta irá conectada con una base de datos muy completa de los deportistas con datos sobre tratamientos recibidos, autorizaciones de uso terapéutico, bajas deportivas, espirometrías, electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, análisis de orina, hemoglobina, hematocrito, etcétera.

Los deportistas no deben ver tal tarjeta como una amenaza sino como una oportunidad pues, por ejemplo, puede constituir un valioso instrumento que pueden utilizar los mismos en defensa de cualquier expediente disciplinario por infracciones de dopaje. El perfil hematológico, el perfil esteroideo u otros parámetros que se puedan incorporar a la base de datos de las tarjetas de salud de los deportistas pueden permitir a éstos defenderse mejor para tratar de diferenciar verdaderos casos de dopaje y los falsos positivos.

Esta tarjeta de salud de los deportistas no puede confundirse con la tarjeta sanitaria electrónica. Se trata de dos figuras diferentes. Con arreglo al artículo 57 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la tarjeta sanitaria es un documento de identificación y permite, automáticamente, el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la asistencia sanitaria.

Características que no cumple la Tarjeta de Salud del Deportista, aunque si va a permitir el acceso al historial sanitario del deportista

Tampoco coinciden los sujetos titulares de ambas tarjetas. No todos los deportistas que ostenten licencia federativa vasca residen en el País Vasco como, por ejemplo, los que viven en áreas fronterizas (Hendaia, Castro Urdiales, Bera de Bidasoa, Condado de Treviño, etcétera). Asimismo, existen colectivos profesionales (abogados, arquitectos, etcétera) que no ostentan la tarjeta sanitaria electrónica. Puede suceder que existan deportistas vascos sin tarjeta sanitaria electrónica, pero que ostenten la tarjeta de salud del deportista. Y viceversa, deportistas que residen en el País Vasco y que cuentan con la tarjeta sanitaria electrónica que no puedan disponer de la tarjeta de salud del deportista.

A diferencia de la Ley Orgánica 7/2006, la tarjeta de salud del deportista podrá estar en un mismo soporte físico que permita el acceso a otras tarjetas o servicios siempre que las medidas de seguridad impidan a terceros el acceso indebido a los datos que obren en la tarjeta de salud del deportista.

En la Comunidad Autónoma existe en estos momentos una tarjeta electrónica, la Tarjeta Sanitaria Electrónica con Usos Ciudadanos (ONA), que constituye un ejemplo de tarjeta electrónica que podría servir de soporte, en la mayor parte de los casos, a la tarjeta de salud del deportista. La tarjeta ONA es una tarjeta sanitaria y, al mismo tiempo, una tarjeta de otros usos ciudadanos. Dicha

tarjeta, que combina los últimos avances tecnológicos en un único soporte, permite la firma electrónica y garantiza la máxima seguridad posible en las operaciones.

Por ello, con arreglo al Anteproyecto, los datos contenidos en la tarjeta de salud sólo podrán ser utilizados, en principio, por los deportistas titulares de la tarjeta y, con su consentimiento, por el personal sanitario que le atienda, salvo en aquellos casos en que la legislación sanitaria permite el acceso a los datos de los deportistas sin su consentimiento.

En materia de control de dopaje no cabe el acceso a los datos de los deportistas sin su consentimiento. No obstante lo anterior, a la negativa a dar el consentimiento o a la resistencia u obstrucción a acciones de investigación se le da el mismo tratamiento sancionador que el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones de control o de información previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica 7/2006 o en el artículo 24 del presente Anteproyecto de ley.

Los datos que contienen la tarjeta de salud serán suministrados por el personal sanitario que les atienda, los órganos disciplinarios competentes y los equipos por los que tengan suscrita la licencia correspondiente.

Con arreglo al Anteproyecto, la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco establecerá y será responsable del mantenimiento, con las debidas garantías de seguridad, del soporte digital que permita la recogida e intercambio de datos, así como de que su utilización sea conforme a las previsiones de esta Ley. No obstante lo anterior, y al objeto de posibilitar que dicha Dirección de Deportes pueda aprovechar la gran experiencia y los recursos del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en materia de Tarjeta Sanitaria Electrónica, se contempla la posibilidad de que la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco podrá delegar el ejercicio de su competencia en materia de tarjeta de salud del deportista en otros órganos del Gobierno Vasco, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en otras entidades de derecho público dependientes del mismo. Asimismo, la realización de las actividades de carácter material, técnico o de servicios relacionadas con la citada tarjeta podrá ser objeto de encomienda de gestión, por razón de eficacia, al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de sanidad.

La cesión de los datos que forman parte de la base de datos inherente a la tarjeta sólo podrá realizarse en los supuestos y condiciones que determine la Agencia Vasca de Protección de Datos. Se sigue así el modelo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, resultará de aplicación al sistema que confeccione y permita la utilización de la tarjeta de salud del deportista las medidas de seguridad de nivel alto establecidas en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

Capítulo VI Régimen de los datos relativos al dopaje (artículos 47 a 49)

Este Capítulo contempla la normativa referida a la **protección de datos de carácter personal en materia de dopaje**. El Anteproyecto incluye disposiciones que inciden, aunque no regulan, en el derecho de los deportistas y de otras personas, a la protección de sus datos de carácter personal. En determinados supuestos se contemplan deberes de comunicación de determinadas informaciones a las autoridades competentes, en otros supuestos se contempla el tratamiento de datos de carácter personal, etcétera.

Por dicha razón, en la elaboración del Anteproyecto se ha tenido en consideración la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

El Anteproyecto parte de la consideración que los datos relacionados con los controles de dopaje y de salud (resultados de los análisis, resultados de los reconocimientos médicos, resultados de los controles de salud, solicitudes y concesiones de autorizaciones de uso terapéutico, etcétera) son datos de carácter personal relativos a la salud y, por dicha razón, merecedores de una especial protección.

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que *"los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado lo consienta expresamente"*.

La existencia de estas razones de interés general de la lucha contra el dopaje está fuera de toda duda. A lo largo de la tramitación de la Ley Orgánica 7/2006, tanto el Consejo de Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la propia Agencia Española de Protección de Datos han reconocido expresamente dicho interés general. Por este motivo, no es necesario que los deportistas deban consentir expresamente que sus datos sean recabados, tratados o cedidos, el Anteproyecto incorpora una habilitación legal para el tratamiento de los datos de carácter personal derivados de la práctica de controles de dopaje y de salud, siendo por ello conforme con la Ley Orgánica 15/1999, tal y como ha admitido la Agencia Española de Protección de Datos en su informe de 25 de octubre de 2005 con relación al Anteproyecto de la Ley Orgánica 7/2006.

En esta línea de eximir de consentimiento se pronuncia también el artículo 10.6 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal cuando se refiere a los datos personales sobre la salud que desean ser conocidos en materia de atención sanitaria: *"En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación de datos personales sobre la salud, incluso a través de medios electrónicos, entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se realice para la atención sanitaria de las personas,*

conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Ahora bien, no es suficiente que una norma con rango de Ley prevea el tratamiento o la cesión de datos, sino que es preciso que dicha previsión legal se acomode a los principios de finalidad, proporcionalidad y conservación.

Es preciso indicar que el Anteproyecto es muy insistente en la protección de los datos de los deportistas. Así, por ejemplo, el artículo 8. relativo a los derechos de los y las deportistas dispone que aquellos que vayan a ser sometidos a un control de dopaje ostentan, entre otros, el derecho a que sus datos de carácter personal sean protegidos con arreglo al ordenamiento jurídico vigente.

El artículo 14 del Anteproyecto, relativo a las garantías de los controles de dopaje, dispone que los deportistas serán informados en el momento de recibir la notificación de control y, en su caso, al iniciarse la recogida de la muestra, de los derechos y obligaciones que les asisten en relación con el citado control, de los trámites esenciales del procedimiento y de sus principales consecuencias, así como del tratamiento y cesión de los datos previstos en la Ley, además de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

El artículo 15 establece que el tratamiento y cesión de los datos de carácter personal en materia de autorizaciones de uso terapéutico se ajustará, íntegramente, a las disposiciones establecidas en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

La obligatoria comunicación de datos de localización de los deportistas está recogida en el artículo 13 del Anteproyecto. Asimismo, se trata de una previsión contenida en el artículo 14.3 del Código Mundial Antidopaje.

También el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 7/2006 contempla el deber de información habitual de los deportistas. Resulta evidente que para la realización de controles, especialmente por sorpresa, es necesario poder contar con los datos de localización del deportista que, eventualmente y de forma sorpresiva, puede ser sometido a control, de modo que, como apunta la Agencia Española de Protección de Datos, sin recabarse dichos datos sobre la localización habitual de los deportistas, quedaría ineficaz la normativa de lucha contra el dopaje en el deporte donde el instrumento más eficaz es el factor sorpresa. Por este motivo, la Agencia Española de Protección de Datos concluyó en su informe de 2005 que la obligación de comunicación de los datos de localización habitual del deportista *"resulta conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999"*.

Respecto a la obligación de facilitar los datos referidos al tratamiento médico de los deportistas también cabe concluir la existencia de una habilitación legal basada en la proporcionalidad. Tanto el Código Mundial Antidopaje, como la Ley Orgánica 7/2006 contemplan tal tratamiento y cesión de dichos datos que, como reconoce expresamente la Agencia Española de Protección de Datos, tiene su fundamento en la garantía de la protección de la salud, consagrada en el artículo 43 de la Constitución. Por ello, la comunicación de tales datos

prevista en el presente Anteproyecto puede considerarse conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999.

Asimismo, el artículo 43 prevé que la Agencia Vasca Antidopaje establecerá un sistema de información acerca del dopaje en el ámbito del deporte, que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las administraciones públicas con competencias en materia de deporte. La Agencia Vasca Antidopaje, oída la Agencia Vasca de Protección de Datos, establecerá la definición y normalización de datos, la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios para la integración de la información, con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la información que se produzca.

Seguendo el mismo esquema de la Ley Orgánica 7/2006, el artículo 43 prevé que el acceso a los datos de los expedientes disciplinarios y sancionadores incoados, relativos a las sustancias detectadas y a los análisis realizados en los distintos laboratorios, quedará siempre limitado a los órganos competentes en relación con dichos expedientes. El acceso por otras organizaciones, personas o entidades a dichos datos deberá ir siempre precedido de la disociación de los datos de carácter personal para cuantos intervengan en el expediente. Las entidades públicas y privadas correspondientes aportarán a este sistema de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del mismo modo, las distintas administraciones públicas tienen derecho de acceder y disponer de los datos que formen parte del sistema de información y en la medida en que, estrictamente, lo precisen para el ejercicio de sus competencias.

El último apartado del artículo 43 vuelve a someter el tratamiento y la cesión de datos a que se refiere el precepto (sistema de información) a la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

Con arreglo al artículo 47, se dispone que el personal que desempeñe las funciones de control del dopaje, así como los miembros de los órganos de entidades deportivas y su personal, deberán guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo. Su apartado segundo insiste en que los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones sólo podrán utilizarse para los fines de control del dopaje y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción disciplinaria, administrativa o de delito.

En el artículo 48 del Anteproyecto se indica que los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos, en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos, a los organismos públicos o privados que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes.

En todo caso, el Anteproyecto deja claro que la protección de los datos de salud de los deportistas requiere medidas de seguridad de nivel alto. El apartado 3 del artículo 81 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, dispone lo

siguiente: " 3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal: a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual"

Incidencia en la normativa vigente

Tal y como se deduce del propio título de la disposición nos encontramos ante un Anteproyecto que modifica expresamente la Ley del Deporte y, en consecuencia, la incidencia en el ordenamiento vigente es clara.

El Anteproyecto contiene **dos disposiciones derogatorias** según la disposición derogatoria primera quedan derogadas los siguientes preceptos:

- la letra e) del artículo 81 de la Ley 14/1998. Este precepto atribuía al Centro Vasco de Medicina del Deporte simultáneamente *"la planificación y gestión del control antidopaje en la Comunidad Autónoma"* y el asesoramiento técnico en el deporte de alto nivel. Se trata de dos ámbitos funcionales que precisan una gran independencia y la ausencia de todo tipo de interferencias. Por ello, en el presente Anteproyecto se atribuyen a la Agencia Vasca Antidopaje aquellas funciones del Centro Vasco de Medicina del Deporte.

- el Capítulo V del Título VII de la Ley 14/1998. Este capítulo está dedicado, por entero, al dopaje y es sustituido por la presente ley.

- la letra ñ) del artículo 109 de la Ley 14/1998. Esta letra tipifica como infracción muy grave de carácter disciplinario *"la promoción, incitación y consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida su debido control"*. Con el nuevo Anteproyecto esta infracción se encuentra mucho mejor desarrollada y tipificada, por lo que resulta procedente su derogación.

- la letra h) del artículo 127 de la Ley 14/1998. Esta letra tipifica como infracción muy grave de carácter sancionador *"la promoción, la incitación o la colaboración en materia de consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida el debido control de aquellas sustancias y métodos"*. Con el nuevo Anteproyecto esta infracción se encuentra mucho mejor desarrollada y tipificada, por lo que resulta procedente su derogación.

La disposición derogatoria segunda constituye una cláusula derogatoria general y, con arreglo a la misma, quedan derogadas, asimismo, todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en esta ley.

El Anteproyecto cuenta con **ocho disposiciones adicionales**.

En la primera de ellas se contempla el desarrollo reglamentario y adaptación de la ley en materia de control de dopaje para animales que participen en pruebas deportivas. Se contemplan asimismo los mecanismos de información mutua y coordinación entre los diferentes órganos e instituciones con competencias en la materia en el País Vasco. Especialmente se contempla el deber de que los

Órganos Forales de los Territorios Históricos competentes en materia de sanidad animal remitan a la Agencia Vasca Antidopaje los resultados de los análisis.

El presente Anteproyecto aborda la problemática del dopaje en los deportes con animales, no lo hace desde una perspectiva integral por cuanto se limita a regular la materia desde la perspectiva de la limpieza de la competición deportiva y no desde el punto de vista de la protección de los animales que constituye el objeto de la Ley vasca 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales y el Decreto 6/1997, de 22 de enero, de control de uso de drogas (control antidopaje) en animales que intervengan en actos culturales y deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En la medida en que dicha normativa que trata de erradicar el dopaje en animales *"pretende, principalmente, evitar a los animales sufrimientos innecesarios y comportamientos muchas veces crueles en exceso"*, cabe concluir que dichas disposiciones no se dictan al amparo de las competencias en materia de deportes ni pretenden garantizar el normal desarrollo de las competiciones.

El presente Anteproyecto es respetuoso con el ámbito competencial del Estado en esta materia pues la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 7/2006 se refiere expresamente a *"los animales que participan en competiciones de ámbito estatal"*.

Una de las novedades que se contiene en este Anteproyecto de ley es el mandato para el establecimiento, por el Gobierno Vasco, a instancia conjunta de los departamentos competentes en materia de sanidad animal y de deportes, de una reglamentación con las particularidades del régimen de control. Es evidente que este ámbito de los controles a los animales precisará de una lista específica de sustancias y métodos prohibidos para los animales y, asimismo, la lista emanada de las autoridades deportivas no deberá coincidir necesariamente con la lista aprobada por las autoridades competentes en materia de salud animal. También será preciso regular los requisitos generales de los laboratorios que deben proceder al análisis de las muestras, los tipos de control de dopaje y de salud y el procedimiento para llevarlos a cabo o, por ejemplo, el régimen de autorizaciones de uso terapéutico y de bajas deportivas. Esta previsión está en sintonía con lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje, en vigor desde el 1 de enero de 2009:

No se ha incluido, tal y como sugirió en su momento el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, un listado de derechos de los animales, a diferencia del criterio seguido con los deportistas, por entender que la protección de los animales que participan en competiciones deportivas es, precisamente, algo que incumbe a la legislación de protección de los animales.

Una de las sugerencias de dicho Departamento es la presencia del campo profesional de los veterinarios. Así, en la composición de la Agencia Vasca Antidopaje si se prevé tal participación junto al de un representante del Departamento de Agricultura y Pesca.

Con arreglo a la siguiente disposición adicional, el Gobierno Vasco y el Estado podrán establecer, a través de los correspondientes instrumentos de

000169

colaboración, fórmulas para la implantación de un sistema de mutua información y para la expedición, reconocimiento y realización de la tarjeta de salud de los deportistas. La Ley Orgánica 7/2006 contempla la creación de una tarjeta estatal de salud de los deportistas y resulta necesario evitar duplicidades entre ambas tarjetas.

En la disposición adicional tercera se habilita al Gobierno Vasco para adaptar el régimen sancionador y disciplinario previsto en esta Ley en lo referente a la cuantía de las sanciones y reglas de aplicación de las mismas a las normas emanadas por los organismos internacionales.

En la disposición adicional cuarta se establece que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ley, los Colegios Profesionales del País Vasco que resulten afectados por la presente Ley deberán modificar sus estatutos y reglamentos para tipificar, expresamente, las responsabilidades previstas en la presente disposición. Esta adaptación deberá realizarse en el plazo máximo de un año. Se sigue así el mismo criterio de la Ley Orgánica 7/2006.

La disposición adicional quinta es importantísima. Con arreglo a la misma se prohíbe el depósito, comercialización o distribución, bajo cualquier modalidad, en centros deportivos, de aquellas sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Igualmente, se prohíbe incitar al consumo de los productos a que se refiere el apartado anterior en los citados centros deportivos. La infracción de dichas prohibiciones será considerada como infracción administrativa muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan derivarse.

La disposición adicional sexta establece que, a partir de la entrada en vigor, todas las referencias que hace la Ley del Deporte a la cartilla sanitaria del deportista se entenderán realizadas a la tarjeta de salud del deportista.

La disposición adicional séptima trata de facilitar una convergencia entre las licencias federativas y universitarias y la tarjeta de salud del deportista. No parece concebible que, en pleno desarrollo tecnológico, los deportistas se vean obligados a portar numerosas tarjetas (licencia federativa, tarjeta sanitaria, tarjeta de salud del deportista, etcétera) que pueden converger en un mismo soporte. Por ello, dicha disposición adicional permite que las licencias federativas y universitarias puedan ir incorporadas en los soportes electrónicos que permitan el acceso a la tarjeta de salud del deportista, aunque mantendrán en todo caso una individualidad propia y dispondrán de las medidas de seguridad necesarias para impedir un acceso indebido a los datos propios de dicha Tarjeta de Salud del Deportista. Las licencias federativas que estén incorporadas a las tarjetas electrónicas citadas estarán dispensadas de ofrecer, en su formato físico externo, los datos exigidos en el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de federaciones deportivas. Lo anterior se entiende sin perjuicio del deber de informar por otras vías a los federados sobre los seguros incorporados a las licencias, el desglose de las cuotas abonadas y demás extremos contemplados en las disposiciones reglamentarias aplicables.



Por último, el Anteproyecto, pretendiendo ser consecuente con el fin de proteger la salud de los deportistas, con independencia de su condición, establece un régimen especial para los deportistas, especialmente populares, que participan en pruebas deportivas extremas o de gran exigencia física. Una ley que sólo trate de proteger la salud de los deportistas con licencia no puede ser una buena ley; resulta necesario proteger la salud de todos los deportistas que participan en actividades deportivas organizadas, haciendo abstracción de la posesión de licencia, y especialmente de todos aquellos deportistas con mayores riesgos.

Es por ello que la disposición adicional octava, siguiendo las directrices de técnica normativa, que exigen el empleo de las disposiciones adicionales para establecer regímenes singulares, configura un régimen jurídico diferenciado para los deportistas que participan en pruebas extremas o de gran exigencia física que se determinarán por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes.

Para tales deportistas se establece una doble garantía. Por un lado, se extiende la obligación de contar con reconocimiento médico en aquellas pruebas que se determinen mediante Orden (actualmente exigible para la tramitación de una licencia federativa, escolar o universitaria). No parece razonable que quien vaya a tramitar una licencia de golf, billar, ajedrez o bolos deba acreditar la realización de un reconocimiento médico satisfactorio y, por el contrario, que quien vaya a correr una maratón o una prueba cicloturista de 250 kilómetros no precise tal reconocimiento. Algunas pruebas denominadas como "populares" presentan un elevado nivel de exigencia, de espíritu competitivo y vienen siendo focos de prácticas dopantes.

Esta medida de protección de la salud de dichos participantes va acompañada de otra medida necesaria: los participantes en dichas pruebas deportivas que no sean titulares de licencia también podrán ser sometidos a controles de dopaje aunque en este caso no estarán obligados a cumplir las obligaciones previstas en la Ley para los deportistas con licencia. El desarrollo reglamentario de la Ley establecerá el régimen particular de dichos participantes sin licencia con arreglo a determinados criterios.

Por tanto, se hace necesario incorporar tales medidas para evitar que prácticas deportivas que, en teoría, deben convertirse en fuentes de salud, se acompañen de prácticas fraudulentas y peligrosas para los propios deportistas. La ley no equipara, de ningún modo el régimen de estos participantes al de cualesquiera deportistas que participan en competiciones oficiales. Y para ello ha dispensado a tales participantes del rigor del régimen de los deportistas con licencia, limitándose a unas mínimas obligaciones. La única consecuencia prevista en caso de violación de las normas antidopaje puede ser una análoga a la prevista en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 7/2006, es decir, la inhabilitación para competir durante un tiempo por razones de salud.

El presente Anteproyecto contiene tres disposiciones transitorias.

En la primera de ellas se incorpora una solución habitual en materia de procedimientos administrativos: los expedientes sancionadores incoados previamente a la entrada en vigor de la Ley continuarán tramitándose con arreglo a las normas vigentes anteriormente salvo por lo que se refiere a los efectos que pudieran ser favorables a los interesados.

Con arreglo a la Disposición Transitoria Segunda, las funciones que esta Ley atribuye a la Agencia Vasca Antidopaje serán ejercidas, hasta su efectiva creación y funcionamiento por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.

En la Disposición Transitoria Tercera se aborda una cuestión práctica importante. La falta de habilitaciones para formar parte de los equipos de recogidas de muestras en los controles de dopaje mientras la Agencia Vasca Antidopaje no inicie el proceso de concesión de aquellas habilitaciones. A tal efecto podrán actuar como habilitados en los equipos de recogida de muestras de los controles de dopaje quienes acrediten disponer de las habilitaciones previstas en el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, o disposición que lo modifique o sustituya.

El Anteproyecto de Decreto contiene **cinco disposiciones finales**.

La primera disposición modifica el artículo 4.2.v de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que reconocía la competencia de las instituciones comunes para *"la regulación de la cartilla de las y los deportistas"*. Se ha sustituido la referencia de la cartilla sanitaria por una referencia a la *"tarjeta de salud del deportista"*

La disposición final segunda modifica el artículo 83 del mismo texto normativo, para adaptarse a la nueva tarjeta de salud del deportista. Con arreglo a la nueva redacción, el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva regulará la exigencia y el cumplimiento de la práctica de reconocimientos médicos obligatorios de los deportistas al objeto de controlar su aptitud física. Tales reconocimientos serán preceptivos para el otorgamiento de licencias federativas, escolares y universitarias y para la participación en aquellas actividades de gran exigencia física que determine la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. Los datos de los reconocimientos médicos así como otras informaciones relacionadas con la salud de los deportistas serán incorporados a la tarjeta de salud del deportista en los términos que se establezcan reglamentariamente.

En tercer lugar, se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley.

Con arreglo a la disposición final cuarta, las federaciones vascas y territoriales y cualesquiera organizaciones deportivas a las que resulte de aplicación la presente Ley procederán, en el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Ley, a la adaptación de sus estatutos y reglamentos.

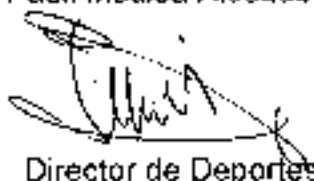
En la disposición final quinta se establece la supletoriedad del Derecho estatal. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.3 de la Constitución, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Estado sobre esta materia del dopaje en tanto no sean objeto de regulación por la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Por último, se regula la entrada en vigor de la Ley con arreglo al mismo criterio establecido en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. Es decir, se establece una "*vacatio legis*" de tres meses para posibilitar el conocimiento material de la Ley y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación. Se trata de una materia cuya regulación no está exenta de complejidad de modo que resultaría desaconsejable su entrada en vigor inmediata.

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 2010

Patxi Mutiloa Aldazabal



Director de Deportes

000173

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE-PROIEKTUARI BURUZKO MEMORIA

Sarrera

Dopin-jardunek kirol-etikaren oinarritzko printzipioak urratzen dituzte. Baina dopin-fenomenoa, kirol-iruzur larria izateaz gain, osasun publikorako oso arriskutsua bilakatu da, eta, bereziki, kirolari gazteenen bizitzarako, horiek baitira errendimenduko kirolaren ohiko protagonistak. Dopinak kirol-etikaren esparru eskusiboa gainditu du, eta osasun publikorako benetako arrisku bilakatu da; hala adierazi dute nazioarteko erakunde guztiek, bereziki Europar Batasunean. Debekatuta dauden substantziez edo metodoez baliatzea kontraesanean dago kirolaren helburuarekin, eta, gehienetan, osasunari berari egiten dio kalte. Kirolaren eta kirolari buruz zabaldu diren balioen eta oinarrien antinomiaren sinbolo dugu dopina.

Europako Kirol Eredua izeneko dokumentuak, Europako Batzordeak eginak, agerian utzi du kirol profesionalean zein zaletuen mailan lehiakortasun handia dagoela gaur egun, eta gero eta gehiago erabiltzen direla debekatuta dauden substantziak eta metodoak kirolarien errendimendua handitzeko; hori da, hain zuzen, arazo handienetako bat. Dopina edukitzen ari den garapen etengabea kezkarria da ikuspuntu kualitatibotik nahiz kuantitatibotik. Alde batetik, azterketek adierazten dute kirolari askotxok erabiltzen dituztela debekatutako metodoak eta substantziak, eta, bestetik, dopin-jardunak jada ez dira kirolari bakoitzaren jokabidearen adierazpenak, merkatuen jarduera antolatuen emaitza baizik.

Aurreproiektu honek ekainaren 11ko 14/1998 Legea du oinarri, Euskadiko kirolarena (aurrerantzean Kirolaren Legea). Izan ere, lege horren VII. tituluko V. kapitulua dopinaren arazoari buruzkoa da oso-osorik. Kapitulu horrez gain, beste artikulua batzuetan ere badira dopinari buruzko xedapenak. Euskal Autonomia Erkidegoak dopinari aurre egiteko bere arauketa independentea izateko lehen urratsa izan zen Kirolaren Legea. Nolanahi ere, indarrean sartu zenetik, berrikuntza ugari egon dira aginte publikoek eta erakunde pribatuek dopina desagerrarazteko erabiltzen duten jarduera-esparruan, bai eta Estatuan nahiz nazioartean gai hori arautzen duen araudian ere.

Nazioartean, honako hauek dira aipagarriak:

- Kiroleko Dopinaren Aurka Borrokatzeko Erkidegoko Babes Plana (1999), Europar Batasunak dopinaren aurka borrokatzeko politika aktiboak garatzen dituen.
- Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia (1999). 1999ko otsailaren 4an Lausanan egindako Kiroleko Dopinari buruzko Deklarazioaren emaitza da; izan ere, Deklarazio horretan argi utzi zen behar-beharrezkoa zela nazioarteko erakunde bat sortzea berehala, dopinaren aurkako borrokarako arau komunak ezartzeko eta erakunde pribatuen eta aginte publikoen ahaleginak koordinatzeko. Nazioarteko Batzorde Olinpiarrek eta hainbat herrialdek hartzen dute parte modu orekatuan Agentziaren egiturari eta finantziarioan.
- Dopinaren Aurkako Munduko Kodea eta hura osatzen duten prozeduren nazioarteko estandarrak, Kiroleko Dopinari buruzko Munduko Konferentziaren babespean sortuak (Kopenhage 2003).
- Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa, UNESCOrena (Paris 2005). Nazioarteko bitarteko juridiko garrantzitsu horrek dopina errotik desagerraraztea du xede; nahitaez bete beharrezkoa da, eta nazioarte osoari eragiten dio. Testu horrek lege-esparru bat ematen die gobernuei, nazioarte osoan dopinaren aurkako borrokan egindako ahaleginak harmonizatzeko.

Estatuan, berriz, honako hauek dira aipagarriak:

- 7/2006 Lege Organikoa, azaroaren 21ekoa, Osasuna babestekoa eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzekoa (aurrerantzean, 7/2006 Lege Organikoa).
- 255/1996 Errege Dekretua, Dopinari aurre egiteko arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzen duena. Indarrean daude kirolean erabiltzen diren animaliei debekatutako substantziak ematea edo animalia horiekin debekatutako jarduerak egitea arautzen duten arau-haustek eta zehapenak.
- 811/2007 Errege Dekretua, ekainaren 22koa, Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordearen egitura, osaera, funtzioak eta funtzionamendu-araubidea zehazteko dena.
- 63/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, Dopinaren alorrean diziiplina-zehapenak ezartzeko eta berrikusteko prozedura arautzen duena.
- 185/2008 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziaren estatutua onartzen duena.
- 641/2009 Errege Dekretua, apirilaren 17koa, Dopin-kontrolen prozesuak eta baimendutako analisi-laborategiak arautzen dituenak, eta kirolean dopatzea prebenitzeko eta osasuna babesteko neurri osagarriak ezartzen dituenak; irailaren 18ko 1642/2009 Errege Dekretuaren bidez aldatu zen, Nazioarteko Batzorde Olinpiarreko Ebaluazio Batzordeak Madril 2016 hautagaitzarako egindako oharren ondorioz.

Arauen eta hitzarmenen multzo horrek osatzen du dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko indarrean dagoen artikuluko-sistema. Eta sistema hori kontuan hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurka borrokatzeko esparru juridiko berria egitean, eztabaidatzean eta onartzean.

Alde batetik, 1999an Lausanan (Suitza) Kiroleko Dopinari buruzko Munduko Konferentzia egitean, argi geratu zen beharrezkoa zela aginte publikoen eta kirol-erakundeen arteko lankidetzaren indartzea. Horrek aldatu egin zuen kiroleko dopinaren arazoa jorratzeko modua; izan ere, azpimarratu zen beharrezkoa zela nazioarteko erakunde independente bat sortzea, dopinaren aurkako arau komunak ezartzeko eta kirol-erakundeen eta aginte publikoen ahaleginak koordinatzeko. Urte horretan bertan, Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia eratzea eta abiaraztea erabaki zen. Haren egituraren eta finantziazioaren modu orekatuan parte hartzen dute Nazioarteko Batzorde Olinpiarrek (NBO) eta herrialde askotako gobernuak, gero eta kezkatuago baitaude dopinak izan duen gorakada eta dopina goi-mailako kirol-lehiaketan eremuaz haratago azkar zabaldu dela ikusita.

Zuzenbide pribatuko fundazioa da Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia, Suitzako ordenamendu juridikoaren bidez araututa dago eta Agentziaren Kontseilua gobernuetako, gobernuen arteko eta kirol-erakundeetako ordezkariak osatuta dago kopuru berdinetan. Ezohiko egitura misto hori edukitzearen arrazoiak da beharrezkoa dela nazioarteko kirol-sistema osatzen duten gobernuak eta erakunde pribatuak elkarrekin aritzea dopinaren aurkako borrokan. Izan ere, elkarri lagundu gabe eta lankidetzan aritu gabe, horietako bakar batek ere ez du lortuko arrakastarik borroka horretan.

2003. urtean, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak Dopinaren Aurkako Munduko Kodea onartu zuen —2007ko urtarrilaren 1ean aldatua—, bai eta hura osatzen duten nazioarteko estandarrak ere. Nazioarteko kirol-mugimenduak nahitaez bete behar ditu testu horietako arauak eta jarraibideak. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziaren babesarekin arauak harmonizatzeko abian jarri zen bide horrek ezinbestez eskatzen zuen dopinari aurre egiteko alderdi nagusiei buruzko nazioarteko arauak ere harmonizatzea, eta ahalik eta herrialde gehienek onartzea eta errespetatzea arau horiek. Harmonizatu beharreko alderdi nagusi horien artean daude, besteak beste, laborategietarako irizpide homologagarriak, zenbait substantzia helburu

terapeutikoetarako erabiltzeko salbuespenen araubidea, dopin-kontrolak egiteko prozedurak, eta debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda.

Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak ez zuenez indar loteslerik nazioarteko zuzenbide publikoan, beste berrikuntza handi bat egon da dopinaren aurkako borrokan 1998az geroztik: Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartzea, hain zuzen. Parisen sortu zen 2006ko azaroaren 18an, eta hura berresteko tresna Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. 2007ko otsailaren 1ean jarri zen indarrean Konbentzioa.

Estatuan ere berrikuntza garrantzitsu bat gertatu da: Osasuna babesteko eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa onartu izana, hain zuzen. Lehen aipatutako nazioarteko konbentzioak eskatzen zuen harmonizazio-eginkizuna betetzen saiatu da Lege Organikoa, eta eragina izan du Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurka borrokatzeko alderdi garrantzitsuetan, erregelamendu bidez garatu baita.

Adierazitakoa kontuan hartuta, balio handia galdu du Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen bidez laurogeita hamarreko hamarkadan Euskal Autonomia Erkidegoan ezarri zen araubide berritzaileak, eta, gaur egun, berrikuntza eta eguneratze asko behar ditu. Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura Batzordeak, adibidez, 2006ko otsailaren 22an izandako bilkuran, kirolean dopina kontrolatzeari buruzko legekoea ez den proposamena eztabaidatu ondoren, hau eskatu zion Eusko Jaurlaritzari: ahalik eta azkarren egiteko eta onartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko kirolean dopinaren prebentzioa, kontrola eta zigorra erregulatzen zituen araua. Legekoea ez den proposamenaren arabera, arau horrek bere baitan hartu behar zuen Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzea, eta kontuan hartu behar zituen Erkidegoaz gaindiko eremuetan eskumena duten erakundeek emandako jarraibideak.

Laburbilduz, Aurreproiektu hau egitearen oinarrian honako hauek daude:

1. Eusko Legebiltzarren agindu hori betetzea.
2. 7/2006 Lege Organikoa indarrean sartzeari.
3. Euskal Autonomia Erkidegoan dopinari buruz dagoen araudia Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak aldarrikatzen dituen printzipioekin harmonizatzea, eta, gure inguruko herrialde batzuek egin duten moduan, kirol- eta zuzenbide-errealitate berrira egokitzea, kiroleko dopinaren aurkako borrokan eraginkorrak izateko.
4. Gaur egungo arau-esparrua halakoa izanik, eta Estatuko araudia askoz ere ordenamendu osatuagoa denez, Eusko Jaurlaritzak zein lurraldeetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko federazioek Konstituzioaren 149.3 artikulua ezarritakoa aplikatzen dute dopin-gaietan: *“Estatuaren zuzenbidea autonomia-erkidegoetako zuzenbidearen ordezkia izango da beti”*. Artikulu horrek ordenamendu juridikoaren osotasuna bermatzea du xede, baina ez da irtenbiderik egokiena; izan ere, Konstituzioko 9. artikuluekin bateragarria ez den ziurgabetasun juridiko bat sortzen du.

Halako testuingurua izanik, lehenbailehen ezarri behar dira zenbait politika Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, horrez gain, dopinaren aurkako erakundeei eta kirol-eragileei behar adina bitarteko eman behar zaizkie dopinari eraginkortasunez aurre egiteko.

Eskumena eta arauaren maila

Eskumenari dagokionez, komeni da adieraztea, lehenik eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen eskusiboa duela kirol-gaietan, Autonomia Estatutuko 10.36 artikulua ezarritakoari

jarraiki. Eskumen horren babesean, otsailaren 19ko 5/1988 Legea onartu zuen Eusko Legebiltzarrak, Soin-kulturarena eta kirolarena, baina ez zuen dopinaren alorra arautu. Indarrean dagoen Kirolaren Legeak, ordea, arautu du alor hori.

4. artikuluan ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokiela: *“dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea”*, eta eskumen hori gauzatzeari buruzko xedapen ugari ditu.

Bestalde, beste eskumen batzuek ere eragina dute Legean. Kirolaren alorrean eskumen eskusibo argia izateaz gain –eskumen horri esker arautzen da dopina indarrean dagoen Euskadiko Kirolaren Legean–, Euskal Autonomia Erkidegoak baditu beste eskumen batzuk ere. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena dauka barneko osasunaren alorrean Estatuko oinarritzko legeak lege berriz garatzeko eta betearazteko, Autonomia Estatutuko 18. artikulua Euskal Autonomia Erkidegoari ematen diolako eskumen hori, eta eskumena dauka, halaber, datuak babestearen alorrean, hala ezartzen duelako otsailaren 25eko 2/2004 Legeak, Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoak.

Beraz, Eusko Legebiltzarrak arautu izan du dopinaren gaia, alor horretan duen erabateko eskumena erabiliz.

Aurreproiektu honen bidez, erregulazio-esparrua aldatu baino ez da egiten; hau da, dopina, kirol-araudi orokorrean arautu ordez, berariazko araudi baten barruan arautuko da, haren konplexutasuna kontuan hartuta.

Nolanahi ere, Estatuak ere onartu ditu kiroleko dopinaren gaiari buruzko arauak, nahiz eta ez izan berariazko eskumenik dopinaren edo kirolaren gaian. 7/2006 Lege Organikoak onartzen du neurri batean egoera hori; izan ere, zioen azalpenean, beste eskumen batzuk adierazten ditu, bere izateko arrazoia justifikatzeko: *“Estatuari dagozkion eskumenen alorrean, zenbait eskumenek eragiten diote lege honi. Estatuari dagokion autoantolaketa-eskumenez gain, bai eta Espainiako kirolari halaberrez orokorrean eragiten dioten interesen gaineko eskumenez gain ere, berariazko zenbait eskumenek parte hartzen dute lege honetan. Horien artean nabarmentzeko modukoak dira, besteak beste, gai hauen oinarriei eta koordinazio orokorrari buruzkoak: osasuna, zigor-arloko legegintza, Justizia Administrazioa, herri-segurtasuna, nazioarteko harremanak eta Estatuaren helburuetarako estatistika. Horiek guztiak dira Konstituzioaren 149.1 artikuluan ezarritakoak”*.

Horrez gain, 7/2006 Lege Organikoan zehar (1.7, 1.9, 1.10, 3.2.2.g eta 4.6 artikulua, besteak beste), hainbat erreferentzia egiten zaizkie autonomia-erkidegoen eskumenei.

Laburbilduz, argi eta garbi dago Euskal Autonomia Erkidegoak badituela eskumenak Autonomia Erkidego honetan dopina prebenitu, kontrolatu eta zigortzeko modua arautu ahal izateko. Baina horrek ez du esan nahi dopinaren alorreko eskumenaren zenbait alderdik zalantza eragiten ez dutenik, eta merezi du horiek Memoria honetan adieraztea.

Lehenik eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salako 488/09 eta 586/09 epaiak aipatu behar dira, 2009ko uztailaren 20koak; izan ere, epai horiek adierazi dute, indarrean dagoen araudiari jarraiki, Eusko Jaurlaritzak ez duela dopinaren alorrean zehapenak ezartzeko eskumenik, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren alorrean duen eskumen eskusiboak ez duelako barnean hartzen EAEko Administrazioak kirol-diziplinaren alorrean zehapenak ezartzea, baldin eta ez badago administrazio-zehapenaren alor bereizi bat kirolari federatuentzat, oro har administratu guztiak mendearen hartzen dituen administrazio-zehapenak aplikatu ahal izateko haiei.

Aipatutako epaiek argi utzi dute beharrezkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoak berariazko araudi bat izatea dopinaren alorrean, behin betiko argitzeko zer jarduera-araubide erabili behar duten instituzioek dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko.

Nolanahi ere, horri buruzko inolako zalantzarik egon ez dadin, Aurreproiektuak argi uzten du Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia berriak dituela dopinaren alorrean dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko eskumenak, eta, horrez gain, kirol-gaietarako eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak izango dituela eskumen horiek Agentzia abian jarri bitartean.

Bigarrenik, eskumenen arloan sor daitekeen beste arazo bat da zer eskumen duen Euskal Autonomia Erkidegoak dopinaren arloko prebentzioa, kontrola eta zigorrak arautzeko, EAEz gaindiko lurralde-eremu batekoak izanik, EAEn egiten diren lehiaketa ofizial eta ez-ofizialen kasuan, edota kasuan kasuko euskal federazioak eman beharreko lizentziarik gabe EAEn entrenatzen, lehiatzen edo bizi diren kirolarien kasuan.

Betidanik eragin ditu zenbait arazo estatu jakin batek dopinari buruzko araudia bere lurralde-eremuan egiten den kirol-jarduera orori aplikatzeak. Arazo horiek kontuan hartu dira Aurreproiektu hau egitean, eta kontuan hartu dira, halaber, nazioarteko parametroak eta Konstituzio Auzitegiak emandako jarraibide hermeneutikoak.

Horrenbestez, Lege honek, nahasketak eragozteko eta kirol-eragileen segurtasun juridikoari kalterik ez egiteko, arazo horiek argitu nahi ditu, eta, era berean, gai horri dagozkion eskumen-eremuak errespetatu nahi ditu. Esate baterako, kontrolei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko zenbait dopin-kontrol mota hartu dira kontuan: administrazio- eta federazio-arlokoak, hain zuzen. Dopin-kontrola federazioak eskatuta egiten bada, euskal legedia aplikatuko da Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren lehiaketetan, baldin eta ez badira Estatuko edo nazioarteko lehiaketa ofizialak, edota Estatuko erakundeek ez badiete eskatzen lehiaketatik kanpo dopin-kontrola egiteko Estatuko lehiaketa horietan parte hartzeko federazio-lizentzia duten kirolariei. Horrenbestez, dopin-kontrolak egin behar zaizkie, euskal legediaren babesean, kasuan kasuko euskal federazioak emandako lizentzia duten kirolari guztiei, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren lehiaketa ofizialetan parte hartzen badute. Euskal Autonomia Erkidegoko kirolariek beste estatu edo erkidegoren batean parte hartzen dutenean, lurralde horietako legedia aplikatuko zaie.

Dopin-kontrola administrazioak eskatuta egiten bada, hau da, ez kirol-federazioek eskatuta, euskal legedia aplikatuko zaie Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kontrol guztiei, salbuespenik gabe, indarrean dagoen lurraldetasun-printzipioa oinarri hartuta.

7/2006 Lege Organikoak, berriz, Estatura mugatzen du bere eskumena; izan ere, 1. artikuluko 2. paragrafoan ezartzen duenez, Legearen aplikazio-eremu subjektiboak *“Estatuaren federazio-lizentzia duten kirolari guztiak edo autonomia-erkidegoren baten federazio-lizentzia homologatua dutenak hartzen ditu bere baitan; lizentzia horiek Espainiako kirol-federazioek 1.3 artikuluan ezarritako eremu objektiboan antolatutako, sustatutako edo baimendutako kirol-lehiaketetan parte hartzeko gaitu behar dute”*. Era berean, hirugarren paragrafoan hau adierazten du: *“lege honen aplikazio-eremu objektiboa kirol-erakundeek Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legearen esparruan antolatzen dituzten Estatuko kirol-lehiaketa ofizialen arabera da”*.

Hirugarrenik, animaliekin egiten diren kirol-lehiaketetan dopina arautzeari dagokionez (Aurreproiektu honetako lehenengo xedapen gehigarria), autonomia-erkidegoek beren arauak sortu dituzte dagoeneko alor horretan, animaliak babesteko alorrean eskumenak dituztelako. Hain zuzen, urriaren 29ko 6/1993 euskal Legeak, Animaliak babestekoak, 4.2.e artikuluan xedatutakoaren arabera, debekatuta dago kasu guztietan animaliei alkohola, drogak edo botikak ematea, edo kalte fisikoak edo psikikoak eragin diezazkiekeen edozein manipulazio artifizial

egitea, lehiaketaren batean errendimendu handiagoa edukitzeko izan arren. Lege hori garatzeko, Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 22ko 6/1997 Dekretua onartu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoan kultura- eta kirol-ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei droga-kontrola (antidopina) egiteko modua arautzekoa. Dekretu hori Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak emandako 1997ko otsailaren 10eko Agindu bidez garatu zen. Agindu horrek arautzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan kultura- eta kirol-ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei droga-kontrola (antidopina) egiteko Aholkularitza Teknikoko Batzordearen eraketa eta funtzioak.

Egia da 7/2006 Lege Organikoak animalien dopina prebenitzeari, kontrolatzeari eta zigortzeari erreferentzia egiten diola, bai, baina lehen xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, Gobernuak egin beharreko legearen eskumen-eremua *“Estatuaren eremuko lehiaketetara”* mugatzen da.

Laugarrenik, Aurreproiektuaren laugarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, Legeak xedatutakoa betetze aldera, Lege honen eragina duten Euskal Autonomia Erkidegoko elkargo profesionalak beren estatutuak eta araudiak aldatu beharko dituzte, xedapen honetan ezarritako erantzukizunak berariaz tipifikatzeko. Egokitzen hori urtebeteko epean egin behar da gehienez. 7/2006 Lege Organikoak ere antzeko zerbeit ezartzen du, baina kontuan izan behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak 10.22 artikulua bidez ezartzen duela Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen eskusiboa dela elkargo profesionalen gaia eta tituludun lanbideen jarduna, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan ezarritakoa aintzat hartuta. Eta eskumen eskusibo horren bidez onartu zen abenduaren 21eko 18/1997 Legea, Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa.

Azkenik, ohartarazi behar da Lege honek ezin duela berak bakarrik dopinaren aurkako borroka oso-osorik arautu. Euskal Autonomia Erkidegoak ez du eskumenik zenbait gaitan. Esate baterako, Estatuak du dopinaren alorrean zigor-kodea onartzeko eta aldatzeko eskumena, eta Estatuak du sendagaien araudiaren alorreko eskumena ere. Horregatik onartu du uztailaren 26ko 29/2006 Legea, Sendagaien eta osasun-produktuen erabilera zuzentzeko eta bermeei buruzkoa. Lege horrek ezartzen du legalki aitortutako inportazio, esportazio, banaketa, komertzializazio eta aginduen xedea ez dela izango kirolarien gaitasun fisikoak areagotzea edota haiek parte hartzen duten lehiaketetako emaitzak aldatzea. Kontuan hartu behar da, halaber, Estatuak duela eskumena herritarren segurtasunaren alorrean. Horrexegatik, hain zuzen, 7/2006 Lege Organikoaren azken xedapenetan hirugarrenak otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoa, Herritarren segurtasunaren babesari buruzkoa, aldatu du, dopinarekin zerikusia duten arau-hausteak gehitzeko.

Helburuak eta proposamenak

Lege-aurreproiektu hau egitearen arrazoia da, aurreko ataletan azaldu den moduan, beharrezkoa dela Kirolaren Legeak EAEn dopina prebenitu, kontrolatu eta zigortzeko ezarritako xedapenak errealitate juridiko eta sozial berrira egokitzea, dopina modu eraginkorrean desagerrarazteko.

Lege-aurreproiektuak zazpi kapitulu, 53 artikulua, zortzi xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, bi xedapen indargabetzaile eta bost azken xedapen ditu. Orain, Lege-aurreproiektuaren edukia aztertuko dugu, eta alderdi garrantzitsuenak azpimarratuko ditugu.

1. kapitulua. Xedapen orokorrak (1-9. artikulua)

Legearen bidez, lehendabizikoz, **dopinaren definizioa** erantsi da Euskal Autonomia Erkidegoko ordenamendu juridikoan. Definizio horren oinarrian, funtsean, nazioarteko erakundeek

onartutako zenbait tresnatan jasotako definizioak ditugu. Aurreproiektuak ezarritakoaren arabera, dopatzea honako hau da: substantzia bat kontsumitzea edo metodoen bat erabiltzea, kirolariaren gaitasunak edo errendimendua artifizialki handitzeko, eta kontsumo edo erabilera hori kirolariaren osasunerako arriskutsua izateko aukera egotea. Definizioaren kirol-ikuspegia nabarmendu da. Kirolaren alorreko iruzurra edo kirol-espirituaren aurkako ekintza bat da batik bat, eta, horrez gain, kirolariaren osasunerako arriskutsua izan ohi da.

7/2006 Lege Organikoak eta Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak ere dopatzearen definizio bat ematen dute; definizio hori lege-proposamen honetan egiten denaren berdina da, funtsean. Nolanahi ere, bi araudiek, Estatukoak eta nazioartekoak, araudi horietan jasotako edozein arau-hauste egitearekin identifikatzen dute dopatzea; hau da, dopatzearen barruan sartzen dituzte kirolariak kirol-iruzurra egiteko beharrezkoak diren ekintza instrumentalak, eta dopatzearen barruan sartzen dute, halaber, ez betetzea dokumentuekin lotutako betebeharrak edo betebeharrak formalak. Horrek esan nahi du dopintzat hartzen direla honako arau-hauste hauek ere: kokalekua zehazteko betebeharra ez betetzea, gaikuntzarik ez duten pertsonak jarduerak egitea, teknikariek kontrol-elementuak faltsutzea, zuzendariak edo medikuek informatzeko duten betebeharra ez betetzea...

Dena den, Aurreproiektuaren eta Estatuaren definizioaren artean bi desberdintasun daude. Batetik, kirolariek gaitasunak edo errendimendua artifizialki handitzeko debekatuta dauden substantziak hartzearekin edo metodoak erabiltzearekin identifikatzen du Aurreproiektuak dopatzearen fenomeno. Jakina, ez ditu debekatuta dauden substantziak kontsumitzera edo metodoak erabiltzera mugatzen dopatzearen alorreko arau-haustea: harekin zerikusia duten jarduera guztiak hartzen ditu arau-haustetzat (kontrolak egiteari uko egitea, iruzurrak egitea erabilera terapeutikorako baimenetan, substantziak banatzea, merkaturatzea eta abar).

Eta, bestetik, Aurreproiektuan xedatutakoari jarraiki, debekatuta dauden substantzia horiek kontsumitzeak edo metodoak erabiltzeak arriskutsua izan behar du kirolariaren osasunerako. Ezin da onartu kontsumo edo erabilera orok bizitza edo osasuna arriskuan jartzen duelako automatismo hutsa. Eta horren adibide garbia da 7/2006 Lege Organikoaren 44. artikulua zigorkodearen artikulua bat bere baitan hartu izana; artikulua horren arabera, dopineko arau-hauste orok ez du kirolariaren bizitza edo osasuna arriskuan jartzen.

Lege-aurreproiektuak logikari jarraituz zehaztu du euskal legediaren aplikazio-eremua, eta, horretarako, lehen adierazitako eskumen-oinarriak hartu dira kontuan. Horregatik, proposatutako testuan, indarrean dagoen Kirolaren Legean ez bezala, dopinaren aurkako arauak aplikatzeko **eremu objektiboa eta subjektiboa** zehazten dira, 7/2006 Legearekin gainjar ez daitezela.

Zaila da Legearen eremu objektiboa eta subjektiboa ezartzea. Izan ere, Legearen barruko xedapenek era askotako gaiak jorratzen dituzte: erakunde-antolaketa, printzipio orokorrak, informatzeko betebeharrak, prebentzioa, kontrola, zigorrak... Xedapen horiek eragin desberdinak dituzte, Legearen aplikazio-eremuaren barruan sartzen diren subjektuen arabera. Horrez gain, lehiaketaren eremua ez da nahikoa irizpide; izan ere, dopin-kontrol gehienak lehiaketatik kanpo egiten zaizkie kirolariei.

Konplexutasun hori aintzat hartuta, Legearen eremu material orokorra, hasiera batean, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den kirol-jarduera orok osatzen du, federatua izan edo ez izan; hau da, irizpide nagusia lurraldetasuna da. Nolanahi ere, legezko betebeharrak jakin batzuk Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren jarduera jakin batzuei soilik eskatuko zaizkie, eta, beraz, eremu material orokorrak zenbait salbuespen ditu. Aurreproiektuaren berrikuntza garrantzitsuenetako bat da berariaz adierazten duela federazioz kanpoko kirol-eremuan ere aplikatuko dela dopinaren aurkako araudia. Orain arte kirol federaturako emandako xedapen guztiak beste kirol-errealitate batzuei ere aplikatuko zaizkie. Alde horretatik, 7/2006 Lege

Organikoak hasitako bideari jarraitzen dio Aurreproiektuak, lehiaketetako ez den kirol-jarduerarako neurriak jasotzen baitira Lege horretan ere.

Legearen aplikazio-eremu subjektibo orokorrak honako hauek hartzen ditu barnean: Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gaitzen duten federazio-, unibertsitate- edo eskola-lizentzia duten kirolari guztiak, eta Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen, lehiatzen edo bizi diren kirolari guztiak. Eremu material orokorrak bezala, Legearen eremu subjektibo orokorrak ere salbuespenak ditu. Esate baterako, ez zaie osorik aplikatuko Estatuaren federazio-lizentzia edo autonomia-erkidegoaren federazio-lizentzia homologatua duten kirolariei, Espainiako kirol-federazioek antolatutako, sustatutako edo baimendutako kirol-lehiaketetan.

Bestalde, Legea ez da aplikatuko unibertsitateko ikasketetan sartzeko, oposizioetarako eta antzeko prozesuetarako dopin-kontroletan.

Horrez gain, kirolean parte hartzen duten **eragileen erantzukizunei eta printzipio orokorrei** buruzko katalogoa ere jasotzen du Legeak. Printzipio horiek argi eta garbi idatzita daude, eta primeran ulertzen da dopinaren aurkako borrokan parte hartu behar duten eragile publikoen eta pribatuen zeregina.

II. kapitulua. Antolaketa administratiboa (10-12. artikulua)

Antolaketari dagokionez, Lege berriaren berrikuntza garrantzitsuenetako bat da erakunde-esparrua dopinaren fenomenora egokitzen duela, **Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia** sortuta. 1998. urtean onartu zen indarrean dagoen Kirolaren Legea, eta ordutik igaro den denborak agerian utzi du dopinaren aurkako agentzia nazionalak sortzeko joera nagusitu dela. Nazioartean, urrats handia eman zen 1999. urtean; izan ere, Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia sortu zen Lausanan (Suitza). Estatuetan ere, dopinaren aurka borrokatzen duten geroz eta agentzia gehiago sortzen ari dira. Ildo horretatik Dopinaren Aurkako Estatuko Agentzia sortu da. Agentzia horiek eredu iparramerikarrean oinarritzen dira, eta erakunde-administrazioaren barruan daude.

Mota horretako agentziak sortzeko ematen den argudioetako bat da askoz ere espezializatuagoak daudela zeregin jakin batzuetarako, eta, horrez gain, independenteak direla. Horregatik, Eusko Legebiltzarrak zenbait agentzia sortzea onartu du (Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatze Agentzia, Uraren Euskal Agentzia); araubide juridiko bereizia izan arren, helburu bera dute guztiek: Administrazioaren deszentralizazio funtzionala.

Aztergai dugun gaian, funtzio hauek bereizi nahi dira: batetik, kirola sustatzeko funtzioa —goi-mailako kirola zein goi-mailakoa ez den lehiaketako gainerako kirola sartzeko—, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzaren zeregina izango litzatekeena gerora ere; eta, bestetik, dopin-jarduna kontrolatzeko funtzioa, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak zuzenduko lukeena.

7/2006 Lege Organikoak ere autonomia-erkidegoetan dopinaren aurkako agentziak sortzeko aukera jasotzen du; izan ere, ezartzen du Dopinaren Aurkako Agentzien Batzordea eratuko dela *“baldin eta aplikazio-eremua autonomia-erkidegoa duten dopinaren aurkako agentziak daudela egiaztatzen bada”*.

Era berean, Aurreproiektu honetan Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzeko egiten den proposamenak aurrez aipatu dugun Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura Batzordearen akordioaren babesa du; hau da, kirolean dopina kontrolatzeari buruzko legekoa ez den proposamenarekin lotutako akordioaren babesa.

Bestalde, kontuan izan behar da Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurraldeetako kirol-federazio gehienak –200 inguru– ez daudela prestatuta dopinaren aurkako borrokaren konplexutasunari aurre egiteko. Dopina kontrolatzea, gaur egun, kirol-federazioek gauzatzen duten funtzio publikoa da, administrazio-izaerakoa (Kirolaren Legearen 25.e artikulua), baina teknikoki zeregin konplexua denez eta giza baliabide eta baliabide material egokiak izatea ezinbestekoa denez, gaurdaino, euskal federazio edo lurralde-federazio gutxik dute onartuta eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundearen Erregistroan jasota berariazko araudi bat dopin-kontrolak egiteko, kontrolak egiteko eta emaitzak kudatzeko eskumena duten erakundeak biltzen dituen.

Hainbat arrazoi daude Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia zuzenbide publikoko erakunde gisa (berezko nortasun juridikoa duen erakundea, zuzenbide publikoaren mendekoa) sortzeko.

Beste aukera bat zen zuzenbide pribatuko fundazio gisa sortzea. Eusko Jaurlaritzak halako fundazio askoren sorrera sustatu du eta halako sorrera askotan parte hartu du, interes orokorreko zenbait jarduerari erantzuteko. Kirolaren alorrean, esate baterako, Euskadi Kirola Fundazioa sortzea sustatu du, goi-mailako euskal kirolaren garapena bultzatzeko eta sustatzeko. Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia ere zuzenbide pribatuko fundazioa da, eta Suitzako zuzenbidearen mende dago. Hala ere, aukera juridiko hori ez da posible; izan ere, Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen laugarren xedapen gehigarriak, Elkarteei buruzko 7/2007 Legearen bidez gehituak, honako hau ezartzen du: pertsona juridiko publikoek fundazioak era ditzaketela edo haien eraketan parte har dezaketela, baina bakar-bakarrik partikularrek edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuek interes orokorreko jardueretan parte har dezaten sustatzeko, eta, betiere, *“horrek fundazioei ez badie eragiten ahalmen publikoak beren gain hartu behar izatea”*.

Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak zenbait ahalmen publiko dituen (adibidez, administrazioaren zehapen-ahalmena), zuzenbide pribatuko fundazio bat sortzeko aukera baztertu beharra zegoen. Arrazoi horrexegatik baztertu dira, halaber, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bategina onartzen duenak, 7. artikuluan ezarritako zuzenbide pribatuko erakunde publikoak.

Erreferentziatzen hartu diren agentzien artean, bi hauek daude: Dopinaren Aurkako Estatuko Agentzia (dopinaren alorreko erreferentzia), eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa (EAEko esparru instituzionalaren erreferentzia). Bada, bi erakunde horiek zuzenbide publikoaren mendekoak dira.

Beste autonomia-erkidego batzuei dagokienez (Kantabria, Kanariak, Gaztela eta Leon, Katalunia eta Balear Uharteak), gutxik sortu dute *ad hoc* egitura administratiboren bat dopinaren aurka borrokatzeko. Gainera, kasu guztietan ez da agentzia bat edo zuzenbide publikoko erakunde bat sortzen; batzuek, adibidez, parte-hartezko kide anitzeko organo sinpleak sortzen dituzte.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko duen antolaketa administratiboa ez da Estatuko ereduak duenaren berdina; organo-kopurua desberdina da.

7/2006 Lege Organikoak zenbait erakunderen artean banatu ditu Estatuak dopinaren alorrean dituen eskumenak. Hauek dira erakundeak: Kirol Kontseilu Gorena, Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordea, eta Dopinaren Aurkako Estatuko Agentzia. Era berean, bai Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordea, bai Dopinaren Aurkako Estatuko Agentzia kide anitzeko eta pertsona bakarrekoko organo ugariz osatuta daude, eta dopinaren aurkako borrokaren alorrean zenbait eskumen dituzte.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Estatukoa baino txikiagoa denez, ez du horren antolaketa konplexurik behar, eta, horregatik, dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko funtzio guztiak Kirol Zuzendaritzaren bidez egin dira orain arte. Hori dela eta, dopinaren aurka borrokatzearen alorrean Eusko Jaurlaritzari dagozkion ia zeregin guztiak Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari esleitzen dizkio Aurreproiektu honek.

Beraz, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarako proposatutako antolaketa-eredua ez da Estatukoa bezain konplexua. Hauek dira Agentziaren organo bakarrak: zuzendaria, idazkaria, Aholku Kontseilua eta Erabilera Terapeutikorako Baimenen Euskal Batzordea. Aurreproiektuak antolaketa-egitura malgua diseinatu nahi du Agentziarentzat, eta, horregatik, Agentziaren estatutuan sar daitekeen edozein organo sortzeko aukera ematen du; adituen batzorde bat sor daiteke, esaterako, gai espezifiko jakin batzuetarako, Datuak Babesteko Euskal Bulegoan bezala.

III. kapitulua. Dopin-kontrolak (13-20. artikulua)

Aurreproiektua idazterakoan, abiapuntutzat hartu da beharrezkoa dela kirolariek dopinaren alorrean dituzten funtsezko eskubideak modulatzeko edo neurritzea, lotura bereziko harremanen mende baitaude. Esan beharra dago Europako Erkidegoetako Auzitegi Nagusiko hirugarren salak berariaz onartu duela dopinaren aurkako borrokaren helburu laudagarriek ezinbestez eragiten dutela kirolarien askatasunak mugatzea. Mugaketa hori berezkoa dute dopinaren aurkako arauak, eta bidezko helburu batek justifikatzen du.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren ustez (indarrean dagoen 7/2006 Lege Organikoaren aurreproiektuari buruz egindako txostenaren arabera), kirol-lizentziak “*kirol-lehiaketetan parte hartzeko*” aukera eta ahalmena ematen dio kirolariari. “*Zenbait eskubide ematen dizkio kirolariari... berezkoak dituenak*” azaltzen du, eta Aurreproiektua ulertzeko oso garrantzitsua den zerbait gehitzen du: “*...baina zenbait betebeharrak ere ezartzen dira, ezinbestez bete beharrekoak; betebeharrak horiek ezin dira bidegabeak, neurrigabeak edo lortu nahi diren helburuekiko loturarik gabeak izan, baina, era berean, askatasun indibidualaren eremua murrizten dute nolabait... Testuingurua halakoa izanik, eta kategoria administratibo eta publikoen eredua erabiliz, esan daiteke kirolariak nolabaiteko lotura bereziko harremana duela kirol-erakundearekin (lantzaren ari garen alorreko doktrinak berariaz erabiltzen duen kategoria). Horren ondorioz, kirolaria erakundearen diziplinaren mende dago, eta erakundeak babesak ematen dio; babes horren barruan sartzen da kirol-jardunaren eta lehiaketaren osasuna zaintzea, eta garbitasuna eta leialtasuna bermatzea, kirolaren arauak jarraiki. Beste modu batera esanda, lotura-egoera berezi horrek berekin dakar zenbait betebeharrak edukitzea, aipatutako harreman horren eremuan eragin dezaketen jarrerak prebenitzeko, kontrolatzeko eta zaintzeko betebeharrak...*”

Hori guztia dela eta, 7/2006 Lege Organikoak 5.1 artikuluan argi eta garbi adierazten du kirolarien eskubideak kontuan hartuko direla: “*Lehiaketatik kanpoko kontrolak ustekabeak edo aldeztuak aurretik noiz egingo diren jakinarazita egin daitezke. Bi modalitate horiek arauz zehaztutako dira, eta kirolarien eskubideak behar bezala kontuan hartzen direla saiaturik*”.

Auzitegi Gorenaren 2010eko urtarrilaren 27ko epaiak ere argi uzten du kirolarien eskubideak neurritzeko beharra, azaltzen baitu zehapen-prozeduran ezarrita dauden kirolarien eskubide jakin batzuk kontuan hartu edo ez erabakitzea “*horretarako gaitasuna duen arau juridiko baten ezarpen tipikoaren mende dagoela*”. Ikuspegi horretatik, Aurreproiektu honen asmoa da kasuan kasuko kontrolak egiten dituzten eragileei behar adinako lege-ahalmena ematea, kontrolak eraginkorrak izan daitezen. Esate baterako, administrazio-prozeduraren legediak xedatutako epeetan deituak izateko eskubidea dute kirolariek (30/1992 Legea, azaroaren 26koa), baina ez

da zentzuzkoa eskubide hori defendatzea; izan ere, hala eginez gero, ustekabearen faktorea bertan behera geratuko litzateke, eta faktore hori ezinbestekoa da dopinaren aurkako borrokan. Bestalde, kirolariak eskubidea dute uko egiteko dopin-kontrolak egiteari, edozein motatakoak direla ere, haien abokatuak aurrean ez badaude, baina ez du zentzurik eskubide hori defendatzeak abokatua kontrol-eremuan ez dagoenean ere. Gauza bera gertatzen da adingabeko kirolariekin; dopin-kontrolak egiteari uko egiteko eskubidea dute, haien guraso edo tutoreak aurrean ez badaude, baina ez da zentzuzkoa eskubide hori defendatzea, adingabea taldearekin eta gurasorik gabe bidaiaitzen ari bada, adibidez. Horregatik, Aurreproiektuak kirolarien eskubideak aintzat hartzen ditu, eta guztiz zentzuzkoak diren zenbait ponderazio egiten ditu. Esate baterako, kirolariak dopin-kontrolak norbaitekin egiteko duten eskubidea kontrol-eremuan dauden konfiantzazko pertsonetara mugatu behar da. Kirolariak ezin diote kontrola egiteari uko egin, beren konfiantzazko pertsona ez dagoelako kontrol-eremuan.

Bestalde, lehen ere adierazi dugun moduan, Lege-aurreproiektua kirolarien eskubideak bermatzen saiatzen da. Adibidez, kirolari bati egindako dopin-kontrolak analisiaren emaitza positiboa bada edo txostena kontrakoa bada, baina kirolariak erabilera terapeutikorako baimena badu, eta baimena balioduna bada, indarrean badago eta analisisen emaitzei dagokienez egokia bada, dopinaren aurkako batzordeak emaitza negatibotzat hartuko du, eta ez da beharrezkoa izango diziiplina-espediente bat irekitzea. Hartara, indarrean dagoen erabilera terapeutikorako baimen balioduna duen kirolariari ez zaio kalterik egingo, ez baitzaizkio dagozkion diziiplina-espedienteak irekiko; orain arte irekitzen ziren espedienteak, hala eskatzen baitzuten Kirol Diziplinako Espainiako Batzordeak (257/1998, 279/1998 eta 44/1999 ebazpenak) eta 7/2006 Lege Organikoak.

Aurreproiektu honek Dopinaren Aurkako Munduko Agentziaren irizpidea erabiltzen du. Irizpide horren arabera, dopinaren aurkako batzordeak kontrako emaitzaren bat berrikustean egiaztatzen badu erabilera terapeutikoa indarrean dagoela eta nahikoa dela, *“probaren emaitza negatibotzat erregistratuko da”*, eta ez da beharrezkoa izango diziiplina-espedientea irekitzea.

Bermeen ildo horri jarraituz, kirolari bati ezin izango zaio dopin-kontrol bat baino gehiago eginarazi proba berean. Kirolariak eskatutako lagin-motak desberdinak badira, ez da kontrol beratzat hartuko. Erregelamenduz arautuko da noraino heltzen den kirolarien eskubide hori. Horrek esan nahi du beharrezkoa izango dela lehiaketa berean dopin-kontrolak egin nahi dituzten erakundeen artean koordinatzeko formulak zehaztea.

Konpondu eta argitu nahi den beste arazoetako bat da ea noraino heltzen den juridikoki kirolariak **dopinaren aurkako kontrolak egiteko duten betebeharra**. Zenbaitetan, auzitan jarri da foro batzuetan betebeharraren konstituzionaltasuna, kirolari orok intimitaterako eta osotasun fisikorako duen oinarritzko eskubidea urratzen duela irizten baitiote.

Alde horretatik, 7/2006 Lege Organikoak nahiz Kirolaren Legeak ezartzen dute kirolariak nahitaez egin behar dituztela dopin-kontrolak.

Kirolariak dopinaren aurkako kontrolak egiteko betebeharra dutela onartu ondoren, ezinbestekoa da betebeharrak hartzen duen eremu subjektiboa zehatz-mehatz zehaztea. Lehenik eta behin, aipatu behar da Kirolaren Legeko 86. artikulua federazio-lizentzia duten kirolariak soilik aipatzen dituela, eta betebeharrari buruzko zalantzak eragiten dituela. Zer esan nahi du horrek? Federazio-lizentzia duten kirolariak soilik dutela dopinaren aurkako kontrolak egiteko betebeharra? Jakina, kode zibilaren 3.1 artikulua ezarritakoari jarraiki, Legearen irakurketa sistematikoa egiten bada, ikusiko dugu federatuta ez dauden kirolariak ez direla berariaz salbuesten betebeharraren horretatik. Bestalde, dopinaren aurkako araudiak kirolarien osasuna

babesten du eta lehiaketaren etika eta gardentasuna defendatzen ditu, eta balio horiek ezin dira kirol federatura soilik mugatu; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko aginte publikoen betebeharra da *“dopatzea eta osasunaren nahiz pertsonaren duintasunaren aurkako beste edozein jokabide kiroletik erauzteko neurriak hartzea”* (Kirolaren Legeko 2.v artikulua). Agindu horrek ezarritakoari jarraiki, dopatzea kiroletik desagerrarazi behar da, ez kirol federatutik soilik. Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat lehiaketa egiten dira (enpresa pribatuek antolatutako pilota-partida profesionalak, enpresek federatuta ez dauden kirolarien partaidetzarekin antolatzen dituzten kirol-proba herrikoiak...), eta haietan ere egin behar dira dopin-kontrolak, nahiz eta beste neurri batean izan.

Horregatik, eta ez dadin zalantzarik egon betebeharrak hartzen duen eremu subjektiboari buruz, hau da, argi gera dadin zer kirolarik duten dopinaren aurkako kontrolak egiteko betebeharra, bi irizpide hartu dira kontuan:

1.- Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren lehiaketetan parte hartzen duten kirolari guztiei eskatu ahal izango die dopinaren aurkako kontrola egiteko. Administrazio-zuzenbide zehatzailearen eremuan, lurraldetasunaren printzipioak agintzen du, ez nazionalitatearen edo auzotasunaren printzipioak. Bestalde, Kirolaren Legeko 125. artikulua hau ezartzen du XI. tituluko II. kapituluak (zigor-arauak) osatzen duten xedapenei buruz: *“Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan gertatzen diren egintzei edo ez-egitei ezarriko zaizkie kapitulu honetako xedapenak, Estatu edo nazioarte eremuko kirol-lehiaketetan gertatzen diren kontuan hartu gabe”*.

Ezin da ezkutatu, kirolarekin lotutako beste gai juridiko-administratibo batzuekin gertatzen den moduan (tabakoaren eta alkoholaren publizitatea, jendaurreko ikuskizunei eta jolas-jarduerari buruzko araudiaren babeseko administrazio-baimenak, arriskuen estaldura, zerga-ordainketa...), Euskal Autonomia Erkidegoko araudia EAEn egiten diren nazioarteko lehiaketei eta Estatuko lehiaketei aplikatzeak zenbait arazo sor ditzakeela, bai eta dopinari buruzko araudia aplikatzeak ere. Kirol-diziplinaren ikuspuntu hutsetik, lehiaketa horiei buruzko eskumenak ez dituzte ez euskal kirol-federazioek, ez Eusko Jaurlaritzak. Baina administrazioaren ikuspuntutik, Eusko Jaurlaritzak kontrolak egitea eska dezake eta zigorak ezar ditzake, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren bidez.

2.- Halaber, euskal kirol-federazioek, eta, modu subsidiarioan, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, euskal federazio-lizentzia duten kirolariei soilik ezarriko diete kirolaren alorreko diziplina-araubidea betetzeko betebeharra, edozein dela ere lehiaketa egiteko lekua edo lurraldea.

Edonola ere, Aurreproiektuak duen ezaugarri bereizgarrienetako bat hau da: 7/2006 Lege Organikoak kirol-lehiaketa ofizialen antolatzaileei ezartzen dizkien betebeharrak eta debeku gehienak (5.1 artikulua), Aurreproiektu honetan, lehiaketa ez-ofizialen antolatzaileentzat ere badirela. Ez da zentzuzkoa dopin-kontroletatik libre dagoen eremu bat egotea ofizialak ez diren kirol-lehiaketetan.

Bestalde, kontrolak egiteko betebeharraren ondorioei dagokienez, nahitaezkoa da argitzea betebeharrak horrek zer esan nahi duen; hau da, ea kirolaria behartu daitekeen, eta ea odola atera, listu-lagina hartu edo ilea ken dakioken bere borondatearen kontra. Bada, dopinaren aurkako kontrolak (hematologikoak, gernu-, ile- eta listu-laginak eta abar) kirolarien gorputzean edo intimitatean sartzea dakartenez, Aurreproiektuan dopinaren aurkako kontrolak egiteko betebeharra ezartzeak ez du esan nahi kirolariak behartu daitezkeenik, hau da, haien borondatearen aurka behartu daitezkeenik. Kontrol horiek egitera behartzea ez bada onargarria

Konstituzioaren ikuspuntutik beste alor batzuetan (aitatasun-probak, alkoholemia-probak...), zailagoa da kirolarien osasuna babesteko ikuspuntutik edo joko garbiaren ikuspuntutik justifikatzea. Horrenbestez, betebeharrak hori noraino heltzen den zehazteko, Aurreproiektuak ikuspegi juridiko hauek hartu ditu kontuan:

- a) Kirolariak lehiaketa izan baino lehen egiten badio uko dopin-kontrola egiteari, ezin izango du lehiaketa horretan parte hartu, jakina. Hau da, baldintza jakin batzuk betetzen ez dituzten kirolariek (gaitasunari buruzko azterketa medikoa, lizentzia, aseguru eta abar) lehiaketan parte hartu ezin duten bezala, zentzuzkoa da, nazioarteko erakunde publiko eta pribatuak eta estatuetako parlamentuek adostutakoaren ildotik, ez uztea parte hartzen dopinaren aurkako proba egiteari uko egiten dioten kirolariei. Uko-egite horrek kasuan kasuko zehapena dakar, noski.
- b) Kirolariak lehiaketaren ondoren egiten badio uko kontrola egiteari, oso arau-hauste larriari dagokion zehapena aplikatzea ere bidezkoa da.

Gogorarazi behar da horrekin ez dela kirolarien errugabetasun-presuntziorako eskubidea urratzen. Izan ere, uko egitea ez da *“positibotzat”* hartzen: arau-hauste autonomoa da, oso larria, kirolari bat dopatu dadin sustatzen edo laguntzen duen mediku edo laguntzaile batek egin dezakeen arau-haustea bezalakoa; kasu horretan ere ez dago dopatze-presuntzio bat, betebeharrak baten arau-haustetzat soilik hartzen baita.

Kontrol-motei dagokienez, kontuan hartuta Dopinaren Aurkako Munduko Kodean onartutako aldaketak, doktrina zientifikoaren iradokizunak eta gaur egun egiten diren dopin-kontrolen egoera, Lege-aurreproiektuak ez du dopin-kontrola egitea laginak hartzera mugatzen, eta laginak ez dira kirolarien gerru-probetara mugatzen. Testuan kontrolak aipatzean, lagin-mota guztiak hartzen dira barnean, inolako biderik inposatu gabe. Ikerketen eboluzioek eta aurrerapen teknologikoen emaitzek adieraziko dute zein den kontrola egiteko biderik egokiena une bakoitzean; Lege honek ez ditu dinamika horiek geldiarazi behar. Aitzitik, helburua da Lege irekia proposatzea, etorkizuna kontuan duena, eta aurrerapen horiei estaldura juridikoa emango diena.

Adierazi behar da, kontrol-motei buruzko atal honetan, Legeak asmo handiagoak dituela duela gutxi egindako 7/2006 Lege Organikoak baino. Izan ere, Lege Organikoaren arabera, debekatutako substantzia edo metodoen bat erabili ote den egiaztatzea helburu duten jardura materialen multzora mugatzen da kontrola; hau da, lagin bat hartu eta prozedura estandarizatuen bidez halakorik erabili ote den hautematean datza.

Aurreproiektu honetan, dopin-kontrolak askoz ere zentzu zabalagoan hartzen dira; dopinaren aurkako araudia betetzen den edo ez den betetzen egiaztatzeko jardura-multzotzat hartzen dira, hain zuzen. Gogorarazi behar da, halaber, auzitegiek onartu dutela zenbait dopin-kontrol mota daudela. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2007ko abenduaren 20ko epaian, administrazioarekiko auzien salak emandakoan, onartu egin da, indarrean dagoen araudiaren esparruan, laginak hartzeaz gain onargarriak direla beste dopin-kontrol batzuk ere; esate baterako, galdeketak.

Horrenbestez, Aurreproiektu honetan kontrolari buruz ezartzen den kontzeptua Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak *“arau-hauste ez-analitikoak”* deiturikoen ondorio da; arau-hauste ez-analitikoak kirolarien arau-hausteak dira, baina analisietan positibo eman gabe. Beraz, emaitza positiboa edo kontrako emaitza ematea ez da dopinaren aurkako arauak urratzeko modu bakarra. Dopin-substantziekin trafikatzeari, substantzia horiek hartzeko iruzurrezko aginduak ematea edota gezurrezko gaixotasunak edo lesioak asmatzea ere arauen urratetarik dira. Arau-hauste ez-analitiko horiek hautemateko, ezinbestekoa da kontrola ez mugatzea laginen analisiak egitera.

Gogorarazi behar da Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak, 2003ko bertsioan nahiz 2007ko azaroko bertsio berrian, ikerketa osagarriak egiteko ahalmena ematen diela dopinaren aurkako erakundeei (7.4 artikulua). Honako hau ezartzen du, zehazki: *“kirolariak uko egiten badio... dopinaren aurkako arauak hautsi izana salatu duen dopinaren aurkako erakundearen edo auzitegiaren galderak erantzuteari”*, *“kirolariaren aurkako emaitza negatibotzat”* hartuko da. Horrez gain, Nazioarteko Batzorde Olinpiarren Kiroleko Arbitraje Auzitegiaren (TAS) ebazpenek aitortu dute, deklaratzeari uko egiten zaionean, kirolariaren aurkako emaitza negatiboak juridikoki onargarriak direla.

Aipagarria da Aurreproiektuak **osasun-kontrolak** deiturikoei ematen dien trataera. 7/2006 Lege Organikoaren irizpide berberari jarraituz, Aurreproiektuan kontzeptu horrek jardura-multzo hau hartzen du bere baitan: Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek kirol-jarduerak osasunean izan ditzakeen ondorio kaltegarriak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko egokitutako hartzen dituzten jarduerak, bai eta kirolariek Legeak dopinaren eta osasunaren alorrean ezarritako betebeharrak bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere. Horrez gain, Lege hau erregelamendu bidez garatzen duten arauak ezarritakoa kontuan hartuta, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak zehaztuko du zer kasutan kenduko zaion lizentzia kirolari bati osasun-arrazoiengatik. Erregelamenduz zehaztuko dira kirolarien osasuna babesteko jarduerak izan behar dituzten baldintzak eta ezaugarriak.

Beraz, Aurreproiektuak onartu eta arautu egiten du kirolaren alorrean ohikoa izan den jarduna. Estatuko araudiaren aldean duen desberdintasunetako bat Lege Organikoak bosgarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin lotuta dago; xedapen gehigarri horren arabera, enpresek eskumena dute beren kirolari langileei osasun-kontrolak egiteko. Aurreproiektu honek, ordea, kirol-erakunde orori ematen dio bere kirolariei osasun-kontrolak egiteko eskumena, berdin dio langileak diren edo ez. Ez litzateke zentzuzkoa izango, adibidez, ez uztea kirol-federazioei osasun-kontrolak egiten goi-mailako kirolariei, ez dutelako lan-harremanik, edo ez uztea kirol-federazio horiei osasun-kontrolak egiten hautatutako kirolariei, ez dagoelako lan-harremanik haien artean. Era berean, ulertezina izango litzateke klubek ezin egin ahal izatea osasun-kontrolak profesionalak ez diren bertako kirolariei. Horrek egoera zentzugaberen bat sor dezake; adibidez, talde batean zenbait kirolarik (profesionalek) osasun-kontrolako araubide desberdina izatea, gainerako taldekideek ez dutena. Hortaz, Aurreproiektu honetan, osasun-kontrolak ez dira lan-harreman berezien eremura mugatzen, eta, horren ondorioz, beste kirol-erakunde batzuek osasun-kontrolak egin diezazkiekete beren kirolariei, kirolariek bere zerbitzuak jasotzen dituen erakundearekin duten harreman juridikoaren abstrakzioa eginez. Aurreproiektuan xedatutako osasun-kontrola ez dago enpresaren eta langilearen arteko harremanaren baitan, taldeko kide guztiek duten kirolari-izaeraren baitan baizik.

Indarrean dagoen kirol-legediak zehapen-araubide zorrotza ezartzen du kirol-klubentzat, beren kirolariak dopinarekin lotutako arau-hausteak egiten dituzten kasuetarako. Horri esker, bermatu egiten da kirol-erakundeek zenbait formula jar ditzaketela abian, dopinari buruzko araudia betetzen dela kontrolatzeko.

Bestalde, nabarmena da lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia ezin dela osasun-kontroletan aplikatu, horien helburua bestelakoa baita. Araudi horrek langileen osasuna zaintzeko erabiltzen dituen parametroak, prozedurak eta helburuak (borondatezkoak izatea, langileen ordezkariak aurrez jakinaraztea, datuak langilearen kalterako erabili ezin izatea, langilearen onarpenik izan gabe enpresariari datuak eman ezin izatea...) kirolarien osasuna zaintzeko erabiltzen diren oso bestelakoak dira, eta ez dira bateragarriak kiroleko osasun-kontrolen funtzionamenduari eta helburuekin. Gainera, eta hau oso garrantzitsua da, osasun-kontrolen bidez ez da kirolari bakoitzaren osasuna soilik zaindu nahi; helburua da kirol-erakundeek prebentzio-lana egitea kirolarien prestakuntza, zaintza eta errendimenduaren alorrean, kirol-taldeek dopina dela-eta jaso ditzaketen zehapen kolektiboen alorrean eta halako alorretan.

Hortaz, orain artekoa kontuan izanik, Aurreproiektuaren 17.4 artikulua argitzen du kirol-erakundeek beren kirolariei egin diezazkizketen osasun-kontrol horiek ez dutela zerikusirik kirolariak beren borondatez egin ditzaketen azterketa medikoekin, hau da, osasuna zaintzeko lan-arloko legediaren babesean egindakoekin.

Lege-testuak bereziki lantzen ditu **erabilera terapeutikorako baimenak**. Azkenaldian erabilera terapeutikorako baimen horiek gehiegi erabiltzen direla eta iruzur eginez erabiltzen direla ikusirik, Aurreproiektuak iruzurra geldiarazteko ahalegina egiten du. Alferrikakoa da dopinaren aurkako laborategi entzutetsuek lan izugarria egitea eta kontrol horietarako diru-mordoa ordaintzea, laborategiek analisisetan debekatutako substantziak hauteman dituztela azaltzen duten emaitzetako asko artxibatu egiten badira, erabilera terapeutikorako baimena dutelako kirolariak.

Ez badugu nahi dopinarekin tolerantziarik ez izatearen diskurtsoa eduki eraginkorrik gabeko erretrika hutsa bihurtzerik, urrats sendo bat eman behar dugu erabilera terapeutikorako baimenen gaian, eta ahalik eta gehien mugatu behar dugu. Aurreproiektuak oso kontuan hartzen du egoera kezkagarri hori.

7/2006 Lege Organikoaren izapidetze-prozesuan egindako zuzenketa bidez edo iritzi-artikuluen bidez, zenbait mediku-kolektibok adierazi izan dute dopinaren aurkako araudiak oztopatu egiten duela kiroleko medikuntza aritzen diren profesionalen lan profesional etikoa. Ikuspegi horretatik, Aurreproiektuak ahalegina egin du medikuek gaixoak —kasu honetan kirolariak— askatasunez tratatzeko duten eskubidea eta kirolariak lehiaketa ofizialetan parte hartzeko duten interesa bateragarri egiteko. Lege batek, lehiaketa garbia izango dela ziurtatzeaz gain, kirolarien osasuna babestu nahi badu, bitartekoak jarri behar ditu osasunaren alorreko profesionalen esku, kirolariak behar bezala tratatzeko, eta, hala, behar bezala senda daitezen lortzeko. Horretarako, Legeak bi mekanismo hartzen ditu bere baitan, bakoitzak bere araubidea duela argi nabarmenduta: erabilera terapeutikorako baimenak eta glukokortikosteroideak erabiltzen direlako adierazpenak, batetik, eta kirol-bajak, bestetik.

Erabilera terapeutikorako baimenen alorrean gaur egun egiten diren iruzurrak eragozte aldera, Aurreproiektuak zenbait berrikuntza gehitu ditu, 7/2006 Lege Organikoarekin alderatuz gero.

Lehenik eta behin, dopinaren aurkako organoek eta kirol-arloko diziplina-organoen, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzian edo beste erakunde eskudun batzuetan behar bezala erregistratuta ez dauden erabilera terapeutikorako baimenak baliozkotzat hartu ezin izateaz gain, ezin izango

dituzte baliozkotzat jo, behar bezala erregistratuta egon arren, iruzur bidez lortu direnak edo dosien baldintzak, emateko moduak edo tratamendu-epeak bete gabe aplikatu direnak.

Bigarrenik, eta tratamendu medikoei buruzko informazioa emateko betebeharra noraino heltzen den ikustearekin lotuta, aipatutako Lege Organikoak ezartzen du (5.4 artikulua) kirolariek, beren entrenatzaileek, medikuek eta gainerako osasun-langileek, bai eta kirol-klubetako eta kirol-erakundeetako zuzendariak ere, dopin-kontrolak egiterakoan adierazi egin behar dutela zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren kirolariak, nor diren horien erantzule eta tratamenduak zer hartzen duen bere baitan, baldin eta kirolariek berariaz adierazten ez badute ez dutela baimenik ematen horren berri emateko. Betebehar hori dopin-kontrola egin behar den unera mugatzen da, eta muga hori zentzugabea eta arriskutsua da dopinaren aurkako borroka eraginkorra izatea nahi badugu. Horrenbestez, laginak hartu aurretik, hartzen diren unean eta hartu eta gero ezarri du Aurreproiektuak informatzeko betebeharra. Izan ere, askotan ezinbestekoa da kirolariei informazio gehiago eskatzea, iruzur egin den edo ez egiaztatu ahal izateko.

Hirugarrenik, kirolarien tratamendu medikoen gaineko kontrola handitzearen ildo horretatik, beste xedapen bat gehitu da: kirolariak uko egiten badio aurrez aipatutako onespena emateari, tratamendu medikoei buruz informatzeko betebeharra hautsi duela ulertuko da.

Azkenik, erabilera terapeutikorako baimenei dagokienez, berrikuntza bat gehitu da kirolariei jartzen zaizkien zehapenen alorrean. Aurreproiektuko 25.4 artikulua ezartzen duenez, baldin eta kirolariak, erabilera terapeutikorako baimena edukitzeko behar bezalako mediku-justifikazioa izanik, ez badu baimen hori eskatu, edo aurretik zuen baimenak indarrean egoteari utzi badio, lehendabiziko aldian ohartarazpena ezarriko zaio, kontroleko analisiaren emaitza kontrakoa bada. Zehapen-mota hori ohikoa da nazioartean dopinaren alorrean, eta ohartarazpen bat (public warning) ezartzea normala da. Kiroleko Arbitraje Auzitegiak berak askotan aplikatzen du proportzionaltasunaren printzipioa dopinaren alorrean.

Kirolari berak bigarren aldiz egiten badu arau-hauste bera, arau-hauste larriari dagokion zehapena ezarriko zaio, guztien artean txikiena. Zehapen horrez gain, klubak ere jaso dezake diru-zehapena, halako ez-egiteetan izandako arduragabekeriagatik. Bai 7/2006 Lege Organikoak, bai Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak, bai Aurreproiektu honek berariaz hartzen dute beren baitan proportzionaltasunaren printzipioa zehapenak ezartzerakoan. Ikuspegi horretatik, zentzuzkoa dirudi erabilera terapeutikorako baimena izateko nahikoa justifikazioa duen kirolariari ez ezartzea gutxieneko hiru hileko zehapena, arduragabekeriagatik baimena eskatu ez badu edo berritu ez badu. Askotan, kirolariek gaixotasun kronikoak izaten dituzte, eta kasuan kasuko erabilera terapeutikorako baimena eskatu behar izaten dute, edo baimena berritu behar izaten dute, baina ez dira arduratsuak izaten halako kontu formalean. Oinarritzko justizia-irizpide baten aurkakoa da zorrotz zigortzea mota horretako arduragabekeria. Aurreproiektuak trataera aldatzen du arau-haustea errepikatzen den heinean.

Legeak beste berrikuntza bat du, Estatuan nahiz Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudiarekin alderatuz gero: **kirol-baja**. Berrikuntza garrantzitsua da, eta aspalditik eskatzen zuen doktrina zientifikoak, bai juridikoak bai medikoak. Kirolariak, azken batean, herritarrak dira, eta, beraz, haien osasuna ere babestu behar da. Horrenbestez, medikuei ez zaie kirolaria sendatzeko inolako mugarik ezarri behar, eta kirolariak ez diren pertsonentzat onargarriak diren substantziak edo metodoak erabil ditzakete. Nolanahi ere, kirolariek tratamendu terapeutikorako duten askatasun horrek zenbait kirol-muga izan behar ditu. Tratamenduak kirolariaren errendimendua hobetu baldin badezake, kirol-bajan egon behar du denboraldi batez.

Beraz, erabilera terapeutikorako baimenen ordezkariak erabil daitezke, baldin eta kirolariak gaixorik badaude debekatutako substantziak hartzea eskatzen duen tratamendu terapeutikoa behar duten unean. Irtenbide berritzailea da, eta oso egokia Lege honetarako, lehiaketak garbiak izatea eta kirolarien osasuna babestea sustatzen baitu.

7/2006 Lege Organikoaren 8.2 artikulua berariaz xedatzen du kirolariei osasun-kontrolak egin behar zaizkiela, eta horiek osasun-arrazoiengatik kirol-lizentzia etetea eragin dezaketela, izaera zehatzailea izan gabe eta kasuan kasuko kirol-erakundearekin adostu ondoren. Kirol-bajarekin ere antzeko zerbitzu gertatzen da; izan ere, kirolariaren kirol-eskubideak eten egiten dira osasun-arrazoiengatik, berak hala eskatuta, eta tratamendu terapeutiko aserako baimena ematen zaio, baina ezin du lehiaketetan aritu kasuan kasuko batzordeak erabakitzen duen epean.

Jakina, kirol-bajaren bitarteko berri horrek berme egokiak behar ditu. Horregatik, erabilera terapeutikorako baimenen araubidea erabili dugu kirol-baja horietarako, eta, beraz, dopinaren aurkako kasuan kasuko batzordeak jasoko du kirol-bajaren jakinarazpena. Kirolariaren alta, edo berriz aritu ahal izateko baimena, dopinaren aurkako batzordeak emango du, iruzurrak eragozteko. Horrez gain, kirolariari kontrolak egin ahal izango zaizkio.

Hori guztia bat dator uztailaren 26ko 29/2006 Legeak, Sendagaien eta osasun-produktuen erabilera zuzentzeri eta bermeei buruzkoak, 80. artikuluan ezarritakoarekin. Lege horrek ezartzen du produktu horien legalki aitortutako inportazio, esportazio, banaketa, komertzializazio eta aginduen xedea ez dela izango kirolarien gaitasun fisikoak areagotzea edota haiek parte hartzen duten lehiaketetako emaitzak aldatzea. Hortaz, medikuek sendagaiak hartzeko agindu diezaiekete gaixorik edo lesionatuta dauden kirolariei, egoki irizten dioten neurri eta moduan, eta, tratamendu horrek *“haiek parte hartzen duten lehiaketetako emaitzak aldatzea”* eragin ez dezan, debekatu egingo zaie kirolari horiei lehiaketetan parte hartzea, kasuan kasuko dopinaren aurkako batzordeak ezarritako baldintzak kontuan hartuta.

Kirolariek tratamenduan dauden bitartean lehiaketetan parte hartu nahi badute, lehen adierazitako erabilera terapeutikorako baimenetara jo beharko dute.

Dopinaren aurkako kontroletan kirolariei hartutako laginen titulartasunari buruzko arazo juridikoa lantzen du Aurreproiektuak. Proposatutako irtenbidearen helburua da tartean dauden eskubide guztiak bermatzea. Aurreproiektuan, laginen titulartasuna kirolariak duela xedatzen da, baina titulartasun horrek ematen dion eskubide bakarra da analisiak behin betiko amaitu ondoren emaitzak suntsitzekoa. Kirolariak uko egiten badio laginak suntsitzeari, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak ikerketak egiteko eska ditzake gerora (esate baterako, dopinaren mapa esaten zaiona egiteko). Horrenbestez, testuak aitortzen du kirolariek eskubidea dutela laginak suntsi daitezen eskatzeko analisi-prozesua behin betiko amaitu ondoren; erregelamenduz arautuko da eskaera hori egiteko epea, eta, epea amaitutakoan, laginen gaineko eskubidea galduko du.

Emaitzen kudeaketa ere oso gai garrantzitsua da; Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak egindako kontrolen emaitzak beste erakunde batzuetara eramatearen alderdiak dira hor arautu beharrekoak. Aurreproiektuak jarraitzen duen irizpidea 7/2006 Lege Organikoaren 3.2.2 artikuluan jasotakoa da. Dopin-kontroletan hautemandako *positiboen* filtrazio asko egon direnez, Aurreproiektuak asko azpimarratzen du datuen konfidentziasunaren gaia, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak onartutako Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen proposamenari jarraiki. Kirolariek, gainerako pertsona guztiek bezalaxe, eskubidea dute errugabetasun-printzipiorako eta emaitzen konfidentziasunerako, analisen prozedura amaitzen den arte. Horregatik, konfidentziasunerako eskubide hori berariaz gehitzen da kirolarien eskubideen katalogoaren barruan eta kirol-erakundeen jarduerak gidatzen dituzten printzipioen barruan.

Debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda argitaratzea eta etengabe **eguneratzea** bultzatu nahi du Aurreproiektuak. Aurreproiektuak bere baitan hartzen duen proposamenari jarraiki, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren aginduz, kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda. Aldian-aldean argitaratuko da zerrenda, bai eta aldaketak egiten diren guztietan ere. Horrez gain, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren betebeharra da debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrendak jakinarazteko eta zerrenda horietan kontsultak egiteko formula osagarriak jartzea. Horretarako, kirolarekin zerikusia duten erakundeek eta instituzioek orrialde digitaletan jarri behar dute zerrenda, bai eta zerrenda hori ezagutarazteko, zabaltzeko eta eskuragarri jartzeko balio duten bestelako baliabide eta euskarrietan ere.

Bestalde, Aurreproiektuak bereziki lantzen du **kirolari adingabeei dopin-kontrolak egitearen arazoa**. 7/2006 Legeak ez du gai hori arautzen, baina adingabeen eskubideei eragiten dien gai bat denez, eskubideak bermatzen direla ziurtatu nahi da. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak gomendatu izan du aldaketak egin behar direla adingabeen kontroletan. Agentzia horrek egindako Kirolariaren Gidari jarraiki, kirolari adingabea *“ordezkariren batekin egon daiteke laginak hartzeko prozedurak irauten duen denbora guztian”*.

Bada Legeak landu beharreko beste gai bat ere: **gutxitasun fisikoak, psikikoak, sentsorialak eta mistoak dituzten kirolariei eginiko dopin-kontrolak**. Dopin-kontrolak arautzen dituzten arauen berri duen pertsona orok jakin badaki kirolarien kolektibo horrek bere premietara egokitzen diren arau bereziak behar dituela. Kasu honetan ere, kontuan izan da Dopinaren Aurkako Munduko Agentziaren proposamena, hau da, laginak hartzeko prozedura aldatzearena. Kolektibo horren barruan oso arazo desberdinak badaude ere, lagin-hartze horren integritateari eragingo ez dioten berezitasunak jasotzeko aukera bere baitan hartu nahi du Legeak. Hauek dira, besteak beste, berezitasunak: prozesuak irauten duen denbora guztian norbait izatea ondoan, kirolari jakin batzuek dituzten eragozpenetara egokitutako instalazioak jartzea, edota laginak hartzeko material berezia erabiltzea zenbaitetan.

IV. kapitulua. Dopinari buruzko diziplinaren eta administrazio-zehapenaren araubidea (21-24. artikulua)

Arau-hausteen eta zehapenen alorrean, legezkotasunaren printzipio konstituzionala errespetatu nahi izan du Aurreproiektuak. Printzipio horren arabera, hauek baino ez dira arau-haustek: ordenamendu juridikoa urratzen dutenak, eta, era berean, halakotzat ezarrita daudenak lege-mailako arauen bidez. Arau-hauste horiek egiteagatik ezarritako zehapenak ere legeak xedatutakoak izango dira beti.

Konstituzio Auzitegiak eta Auzitegi Gorenak adierazi dutenez, ia ezinezkoa da arau-haustek zehatz-mehatz deskribatzea, salbuespenak salbuespen. Horregatik, tipifikazio legalaren aginduak ez du baztertzen arauzko esku-hartzea. Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 129. artikuluan ezarritakoaren arabera, *“garapeneko erregelamenduek zehaztu eta mailakatu egin ditzakete lege ezarritako arau-haustek eta zehapenak; hori guztia, jokabideak hobeto identifikatzeko eta horiei dagozkien zehapenak zehatzago finkatzeko, baina arau-hauste edo zehapen berririk sartu gabe eta legeetan ezarritako arau-hausteen izaera edo mugak ere aldatu gabe”*. Era berean, otsailaren 20ko 2/1998 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoak, 4.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, *“egongo diren zigor-erregimenak eratuko dituzten arlokoak legeak eta foru-arauek ahalik eta zehatzen tipifikatuko dituzte egongo diren arau-haustek”*.

Arau-hausteen tipifikazio zehatza, batik bat, Estatuko araudiaren arabera egin da. Dena dela, berrikuntza moduan nabarmendu behar da bosgarren xedapen gehigarrian berariaz tipifikatzen dela gimnasioetan, fitness-zentroetan, klubetan edo bestelako kirol-zentroetan substantzia edo metodo horiek biltegiratzea, merkaturatzea, sustatzea, banatzea edo hartzera bultzatzea, modua edozein dela ere. Arau-hauste hori jasota dago dagoeneko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoan, Herritarren segurtasunaren babesari buruzkoan, baina babesten duen ondasun juridikoa oso desberdina da. Kirol-zentroak kirol-legedian erregulatzen dira, eta herritarren osasunaren eta ongizatearen zerbitzurako sortu dira. Ez da *non bis in idem* printzipioa hausten, ez baitira interes berberak babesten bi arau horien bidez.

IV. kapitulu honetan, gogora ekarri behar dira Memoria honen sarreran aipatu diren Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salako 488/09 eta 586/09 epaiak, 2009ko uztailaren 20koak; izan ere, epai horiek adierazi dute, indarrean dagoen araudiari jarraiki, Eusko Jaurlaritzak ez duela dopinaren alorrean zehapenak ezartzeko eskumenik, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren alorrean duen eskumen eskusiboak ez duelako barnean hartzen EAEko Administrazioak kirol-diziplinaren alorrean zehapenak ezartzea, baldin eta ez badago administrazio-zehapenaren alor bereizi bat kirolari federatuentzat, oro har administratu guztiak mendean hartzen dituen administrazio-zehapenak aplikatu ahal izateko haiei. Aipatutako epaiek argi utzi dute beharrezkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoak berariazko araudi bat izatea dopinaren alorrean, behin betiko argitzeko zer jarduera-araubide erabili behar duten instituzioek dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko.

Alde horretatik, argi utzi behar da Lege-aurreproiektu honen ezaugarrietako bat dela **administrazio-zehapenaren araubideari (heterotutoretza) eta lotura bereziko harremanetan oinarritutako kirolaren arloko diziplina-araubideari (autotutoretza)** eusten diela, indarrean dagoen Kirolaren Legearen ereduarekin jarraituz. Kirolariaren ingurunean, gehienek ez daukate lizentziarik, eta ingurune hori oso eroso sentitu izan da orain arte dopinaren gaian egon den diziplina-bide eskasarekin. Izan ere, zentzuzkoa denez, diziplinaren bide horrek ez die eragin lizentzia edo gaikuntzarik ez dutenei; hau da, lotura bereziko harremanaren mende ez daudenei. Aipagarria da, halaber, administrazio-zehapenaren araubide horrek, Europako beste herrialde batzuetako araudietan ere badagoenak, erabat bereizita erakunde pribatuen kirolaren alorreko zehapen-araubidetik, hau duela xede: osasuna zaintzea eta kirol-lehiaketetan joko garbia babestea, lurralde-eremu jakin batean. Beraz, Administrazioak dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko dagozkion eskumenak erabiltzen ditu bere lurralde-eremuan, kontuan hartu gabe kirolari federatua den edo ez, zer nazionalitate duen eta abar. Eta administrazioaren zehapen-ahalmen horrek, jakina, bereizita egon behar du kirol-erakunde pribatuek kirol-eremua kontrolpean edukitzeko duten diziplina-ahalmenetik.

7/2006 Lege Organikoak 10/1990 Legearen bideari jarraitzen dio, eta lizentzia edo gaikuntza baliokidea duen pertsonentzat soilik balio duen “diziplina-araubide” bat ezartzen du. Hau da, Estatuko araudiari jarraiki, dopinaren alorrean arau-haustea egiten dituzten pertsonak zehatzeko, beharrezkoa da pertsona horiek lizentzia edo gaikuntza baliokidea edukitzea. 7/2006 Lege Organikoak bi artikulutan soilik ezartzen du kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea eskuratzeko ezintasuna; hain zuzen, 17.4 artikuluan (teknikariak, epaileak, arbitroak, zuzendariak eta abar) eta 18.4 artikuluan (medikuak eta osasun-arloko gainerako langileak).

Aurreproiektuak, berriz, indarrean dagoen Kirolaren Legeko ereduari jarraitzen dio diziplina-araubidea eta administrazio-zehapenaren araubidea ezartzeko. Hartara, Euskal Autonomia Erkidegoan eskumena duen organoak dopin-kontrola egiteko eskatu ahal izango dio EAEn egiten den lehiaketaren batean parte hartzen duen kirolari orori, edota medikuak, laguntzaileak, masajistak, entrenatzaileak eta abar eskatu ahal izango ditu. Administrazio-zuzenbide

zehatzailearen eremuan, lurraldetasunaren printzipioak agintzen du, ez nazionalitatearen edo auzotasunaren printzipioak, edo lehiaketa-motak.

Aurreproiektuak bere baitan hartzen duen zehapen-ereduak bi araubide ditu (kirolaren arloko diziplina-ahalmena eta administrazioaren zehapen-ahalmena), eta hori oso ohikoa da beste herrialde batzuetan ere; Frantzia dugu horren adibide. Frantziako administrazioak Frantziako lurraldean lehiari aritzen den kirolari orori ezar diezazkioke zehapenak, haren nazionalitatea eta federazio-lizentzia edozein dela ere; era berean, kasuan kasuko federazio nazionalak edo nazioarteko federazioak ere ezar diezazkioke diziplina-zehapenak. Zehapen-eredu dual hori oso nabarmena da, halaber, Kirolean egon daitekeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako uztailaren 11ko 19/2007 Legean, batera baitaude administrazio-zehapenaren araubidea (II. titulua) eta kirolaren alorreko diziplina-araubidea (III. titulua). Lege horrek ezarritakoaren arabera, onargarria da pertsona bati bi ahalmen horiek aplikatzea egintza berberengatik, baldin eta zuzenbide-oinarria bera ez bada.

Aurrez adierazi dugun Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari dagokionez, argitu beharra dago kirol-federazioek zer funtzio publiko dituzten dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko. Administrazio Publikoak funtzio hori beregana edo berreskura dezake, eta Aurreproiektuak, hain zuzen, ildo horri jarraitzen dio. Proposamen hori 7/2006 Legearen 27. artikuluan jasota dago; izan ere, artikulua horrek xedatzen du Espainiako kirol-federazioetako diziplina-organismoak dagokiela, hasiera batean, diziplina-espedienteak izapidetzea eta ebaztea. Kirol-federazio horiek ez badute betetzen aipatutako espedienteak ebazteko betebeharra, *“Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordeak hartuko du bere gain eskumena, eta izapideak egingo ditu espedienteak amaitu eta ebazti arte”*. Aurreproiektuko 38.3 artikulua ere ezartzen du, Estatuko araudian aipatzen den kasu horretan, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak bere gain har ditzakeela kirol-federazioek kirol-diziplinaren alorrean betetzen dituzten funtzio publikoak.

Aurreproiektuak **kirolarien erantzukizunei** buruzko xedapen garrantzitsu bat erantsi du 23.2 artikuluan. Estatuko araudian dopina zigortzeko ezarritako erantzukizun objektibo edo kuasiobjektiboaren printzipioaren gehiegizko ondorioak arintzea du xede bigarren paragrafo horrek. Horregatik, Aurreproiektuan argitzen da kirolariaren erantzukizuna erabakitzeke ez dela beharrezkoa izango haren asmoa, jakinaren gaineko erabilera edo zabarkeria frogatzea. Nolanahi ere, kirolariak frogatu ahal izango du ez duela errurik izan, ez dela zabarkeriarik izan bere aldetik, edo ez duela kirol-errendimendua hobetzeko asmorik izan. Halakoetan, Dopinaren Aurkako Munduko Kodean ezarritako irizpideak erabiliko dira. Hartara, honako oreka hau lortuko da: batetik, dopinaren aurkako arauak eraginkorrak izatea, eta, bestetik, kirolari baten organismoan, berak errurik izan gabe edo zabarkeriarik egon gabe, debekatutako substantzia bat aurkitzen denean, kirolariak ekitaterako eskubidea izatea. Halakorik gertatuz gero, kirolariari berari dagokio egiaztatzea.

Lege-aurreproiektuak argi eta garbi gehitu du **zehapenak elkarri onartzeko** printzipio orokorra. Kirolean paradoxa bat gertatzen da: dopina nazioarte osoko gaia dela, baina dopinaren aurka borrokatzeke neurriak ez direla nazioartekoak, lurralde-eremu txikiak mugatzen direlako. Mugarik gabeko Europa errealitate bat da aspaldidanik dopin-sareetan parte hartzen dutenentzat, baina ez dopina desagerrarazi nahi dutenentzat. Horren haritik, proposamenetako bat da, harmonizazioaz gain, beste federazio eta gobernu batzuek ezartzen dituzten zehapenak onartzea.

Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak 10.10.1 artikuluan ezartzen duenez, gaitasungabetua izan den pertsona batek, gaitasungabetzeak irauten duen denboran, ezin izango du kirol-lehiaketa edo -jardueretan parte hartu; hau da, dopinaren aurkako arauak urratzeagatik zigortuta dagoen kirolariari ez zaio lehiaketetan parte hartzen utziko. Gainera, Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak hau ezartzen du 15.4.1 artikuluan: *“kontrolak, erabilera terapeutikorako baimenak,*

ikustaldietan hartutako erabakiak eta sinatzaileraren batek emandako azken erabakiak gainerako guztiek onartu eta errespetatuko dituzte”.

Zehapenak elkarri onartzeko printzipio hori jasota dago, halaber, 7/2006 Lege Organikoan (22. eta 23. artikulua).

Horregatik, Aurreproiektuak ezartzen du beste erakunde batzuek dopina dela-eta ezarritako zehapenak elkarri onartzeko printzipio orokorra aplikatuko dutela Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kirol-jarduerak antolatzen dituzten erakundeek. Kirolariren bati dopinagatiko zehapena ezarri bazaio eta zehapen hori indarrean badago, zehapen-mota edozein dela ere, debekatu egingo zaio Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kirol-jardueretan parte hartzea.

Ez dago batere argi **zer organo eskudunek erabaki behar duen analisi-emaizta positiboa edo negatiboa den**, eta testuak egoera horri irtenbidea eman nahi dio. Aurreproiektuak, halaber, Lege Organikoko 28.1 artikulua hitzez hitzeko esanahiak eragiten dituen arazoak konpondu nahi ditu; artikulua hori emaitza positiboaren ondorengo diziplina-espedientea irekitzeari buruzkoa da. Askotan sortzen da arazoa laborategien txostenak kontrakoak badira eta erabilera terapeutikorako baimenak badaude aurrez. Arazo horrek eztabaida handia eragin du, eta erakundeek oso interpretazio desberdinak egin dituzte. Eztabaidaren muina hau da: erakunde antolatzailearen barruan, zer organok duen eskumena emaitza positiboa den edo ez den erabakitzeko. Kirol Diziplinako Espainiako Batzordeak (KDEB), 257/1998, 279/1998, 44/1999 eta 99/1999 espedienteetan emandako ebazpenen bidez, honako hau agindu zien Espainiako kirol-federazioei: kontrako analisi-txostenak diziplina-organora bidaltzeko, nahiz eta kirolariak positiboa justifikatzen zuen erabilera terapeutikorako baimena eduki. KDEB irizpide horren aldekoa zen, baina, aldi berean, Espainiako kirol-federazioen zentzuzko irizpidearen aurkakoa, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziaren irizpideen aurkakoa eta nazioarteko federazioen irizpideen aurkakoa. Izan ere, KDEBen irizpide horrek beharrezkoak ez diren prozedurak eragiten ditu, kostu handiak eragiten dizkie zehapen-espedienteen laguntza juridikoa eta medikoa beharko duten aldeei, eta, gainera, kirolarien eskubideak urratzen ditu, beharrezkoa ez den diziplina-espediente bat irekitzen baitzaie erabilera terapeutikorako baimen baliadun bat edukita ere, eta laborategiak emandako emaitzak eskuratutako baimenarekiko erabat bateragarriak izanda ere.

Aurreproiektuak hartzen duen irizpidea Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eta nazioarteko kirol-federazioek erabiltzen duten bera da, eta ñabardura batzuk gehitzen dizkio 7/2006 Lege Organikoan ezarritakoari; izan ere, Lege Organikoaren arabera, laborategiak egiten duen txostenak kontrako emaitza ematen badu, diziplina-organismoak esku hartu behar du nahitaez, eta dagokion diziplina-espedientea ireki behar du.

Aurreproiektu-proposamenaren arabera, ordea, dopina zigortzeko prozesua hiru fasetan banatzen da:

1.- Hautemateko fasea. Debekatutako substantzien kontsumoa hauteman ahal izateko xedatuta dauden izapideen multzoa da. Horien artean, izapide hauek azpimarra daitezke: kirolariak hautatzea, horiei jakinaraztea, laginak hartzea, laginak batetik bestera eramatea eta zaintzea, laborategian hasierako analisia egitea, analisisien txostena diziplina-batzordera bidaltzea, deskodetzeko eskaera egitea dopinaren aurkako batzordeari, kirolariak kontraanalisia egin diezaioten eskatzea eta abar.

2.- Isilpeko instrukziorako tarteko fasea. Hautemateko fasea amaitu ondoren eta diziplina-espedientea ireki bitartean egin beharreko izapideen multzoa da. Oro har, berrikusteko fasea, isilpeko instrukziorako fasea edo aurretiaz egin beharreko eginbideen fasea deiturikoaren parekoa izaten da. Fase honetan, diziplina-batzordeak erabilera terapeutikorako baimenei

buruzko informazioa eskatzen dio Erabilera Terapeutikorako Baimenen Batzordeari, alegazioak egiteko epea jartzen dio kirolariari, eta beste edozein motatako eginbide osagarriak egiten ditu. Fase hau ez da hautematekoa, fase hori amaitu baita, eta ez da erabat diziplinazkoa (nahiz eta neurri batean hala izan); izan ere, bigarren fase honen amaieran, jarduerak artxibatzen dira edo diziiplina-espedienteak irekitzen da.

3.- Diziiplina-fasea bera. Isilpeko instrukzioa amaitu ondoren hasten da, dagokion diziiplina-espedienteak irekitzeko ebazpena ematean.

Horregatik guztiagatik, Aurreproiektuari jarraiki, kasuan kasuko kirol-erakundeko diziiplina-organoak ebazpena eman ondoren jarriko da abian diziiplina-prozedura. Horretarako, laborategiak emandako analisien emaitzak jaso behar ditu diziiplina-organoak eta kasuan kasuko isilpeko instrukzioa amaitu. Instrukzio hori aurretiaz egiten da, jakiteko ea espedienteak irekitzea justifikatzen duten egoerak badiren edo ez, eta ea diziiplina-espedienteak irekitzeko ebazpena eman behar den edo jarduerak artxibatu behar diren.

Aurreproiektuak lantzen duen beste gai bat **“non bis in idem” printzipioa** aplikatzearena da. Aurreproiektuak printzipio horren dimentsio materiala jasotzen du, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak behin eta berriz ezarri duen eta uztailaren 7ko 188/2005 epaiak berretsi duen bezala. Beraz, aurrez zigortutako gertakariak ezin izango dira administrazio-bidetik edo diziplinazko bidetik berriro zehatu, baldin eta subjektu, gertakari eta zuzenbide-oinarri bera badute.

7/2006 Lege Organikoak ezarritako irizpideari jarraitu zaio, eta, hortaz, bide penaletik zehatutako gertakariak ezin izango zaie zehapena ezarri, baldin eta subjektu, gertakari eta zuzenbide-oinarri bera badute. Beraz, zehapen-organoak, delitu-zantzuak hautematen baditu, eten egingo ditu prozeduraren izapideak. Halakorik gertatuz gero, gertakarien berri emango dio ministerio fiskalari. Prozeduraren izapideak eten egingo dira, halaber, aurrez aipatutako hiru baldintzak beterik, zehapen-organoak jakiten badu gertakari horiek bide penaletik jazarriak izaten ari direla; hala badagokio, berriro ekingo dio prozedurari gerora.

Argi utzi ondoren ez dela posible izango zehapen penalak daudenean diziiplina- edo administrazio-zehapenak ezartzea hiru baldintzak betetzen badira (subjektu, gertakari eta zuzenbide-oinarri bera izatea), aztertu behar da zer bateragarritasun duten administrazio-zehapenak eta diziiplina-zehapenak; hau da, zer bateragarritasun duten lotura bereziko harremanen mendeko diziiplina-ahalmenak (autotutoretza) eta administrazioaren zehapen-ahalmenak (heterotutoretza).

Azkenik hartu den irizpidea administrazio-zehapenak eta diziiplina-zehapenak bateragarri egitekoa da, Kirolaren Legean indarrean dauden 118. eta 133. artikuluek ezartzen duten moduan.

Duela urte batzuk, Eusko Jaurlaritzak EAEn dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko egindako dekretu-proiektu baten izapideetan, Herrizaingo Saileko Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak iradoki zuen espedienteak eta zehapenak Herrizaingo Sailari jakinarazteko araubide bat jaso behar zela, Herritarren segurtasunaren babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren ondorioetarako. Bada, horregatik guztiagatik, Aurreproiektuak ezarri du Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailari jakinarazi behar zaizkiola dopinagatik irekitzen diren diziiplina- eta zehapen-espedienteak, bai eta espediente horien azken ebazpenak ere, bermatzeko proportzionaltasunaren printzipioa betetzen dela Herritarren segurtasunaren babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoa aplikatzerakoan.

Adierazitako jakinarazpenak ezin izango dira abian jarri, harik eta dopin-kontrolaren fasea amaitu arte eta jarduerak kasuan kasuko zehapen-organoari helarazi arte.

Gainera, lurraldeetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioek diziplina-zehapenen berri eman beharko diote Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari.

7/2006 Lege Organikoak, berriz, kiroleko zehapenak ikuskatzeko sistema bat jasotzen du; sistema hori "arbitrala" dela dio, eta ohiko administrazio-errekurtsoa ordezkatzeko duela.

"Formula arbitral" horrek eztabaida handia piztu du; izan ere, izenak berak nahasmena sor dezake, prozedura berriak ez baititu benetako sistema arbitral baten ezaugarriak: administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren aurreko administrazio-errekurtso soil bat da berez. Arbitrajea ezaugarri bereziak dituen instituzio bat da (borondatezkoa da, bide judizialaren ordezkotza aukera eta abar). Gainera, arbitrajea ez da onargarria dopin-zehapenak zehazteko edo murrizteko, ez baita aldean esku dagoen zerbait, eta, beraz, ezin dute horri buruzko akordioak lortu.

Bestalde, 7/2006 Lege Organikoak ez du nahi instantzia pila batetik igaro dadin eta prozesu mantso bat jarrai dadin dopinaren alorreko gaiak konpontzeko, eta helburu hori beste neurri batzuen bidez lor daiteke; adibidez, Kirol Justiziako Euskal Batzordearen funtzionamendu arina bermatuz. Kirol Justiziako Euskal Batzordeak bideratzen zituen espedienteen izapideak gehiegi luzatzen baziren ere, gaur egun askoz ere arinago izapidetzen dira, eta funtzionamendua askoz hobea dela esan daiteke. Horregatik guztiagatik, Aurreproiektu honetan ez da gehitu dopinaren alorreko zehapenak ikuskatzeko administrazio-sistema berria.

V. kapitulua. Prebentzio-neurriak (42-46. artikulua)

Aurreproiektuak ikuspegi integral batetik landu nahi du dopinaren aurkako borroka, jakinda ahaleginak ez direla kontrolatzera eta zigortzera mugatu behar. Ezinbestekoa da **prebentzioa** asko lantzea. Horregatik, Lege berriaren testu artikulatuak ezartzen du beharrezkoa dela prebentziorako zenbait neurri hartzea. Horien artean, ikerketa-jarduerak daude, ezinbestekoak baitira eraginkorra izan nahi bada. Dopinaren alorrean ezartzen diren xedapenen eta ebazpenen sinesgarritasunaren oinarria hau da: hautemateko sistemak fidagarriak izatea. Horretarako, funtsezkoa da ahalegin handiak egitea ikerketaren eremuan. Dopatzeko teknika modernoak etengabe eboluzionatzen ari dira, jakintza medikoen eta farmakologikoen aurrerapenez baliatuta. Horregatik, beharrezkoa da ikerketaren alorrean ahaleginak egitea, eta Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroak zeregin garrantzitsua duela aitortzea, 14/1998 Legeko 81. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Ikerketa zientifikoko programa horiek eraginkorrak izateko, Aurreproiektuak informazio-mekanismoak jasotzen ditu, eta eragile publiko eta pribatuen esku jartzen ditu programa horietan erabil daitezkeen datu guztiak.

Bestalde, Aurreproiektuak berariaz gehitu du prestakuntzako eta informazioko programak egitea, batik bat klub, federazio, kirolari, teknikari, zuzendari eta gainerako kirol-eragileentzat. Horien helburua da dopinak kirolaren balioak arriskuan ez jartzea, eta kirolariak ez baliatzea osasunari kalte larriak eragiten dizkieten eta debekatuta dauden substantziez eta metodoez.

Aipatzekoa da, halaber, dopinaren aurkako borroka sentsibilizatzeko berariazko programak ezarri direla errendimendukoa ez den kirolaren eremuan: atletismoko proba herrikoietan, bizikleta-lasterketetan, gimnasioetan eta abarretan. Europako Batzordeak egindako txosten baten arabera, fitness-zentroetako erabiltzaileen oso ehuneko handi batek dopin-substantziak hartzen ditu nahiko maiz errendimendua hobetzeko, eta merkatu beltzak erabiltzen ditu dopin-sustantzia horiek eskuratzeko.

Lege-aurreproiektuak kirolariaren **osasun-txartel** berria sortu du; txartel horrek kirolariaren osasun-txartel zaharra ordeztu du berez, indarrean dagoen Euskadiko Kirolaren Legearen 83. artikuluan xedatutakoa. Legea egin eta onartu zenetik igarotako denborak eta ordutik izandako aurrerapen teknologiko ikaragarriek justifikatu egiten dute, bai ongi justifikatu ere, papera euskarri duen informazio-eredua alde batera utzi eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak oinarri dituen informazio-eredua erabiltzen hastea.

7/2006 Lege Organikoaren 49. artikulua ere aipatzen du kirolariaren osasun-txartela. Nolanahi ere, goi-mailako kirolarientzat eta Estatuako federazio-lizentzia edo autonomia-erkidegoaren federazio-lizentzia homologatua duten kirolarientzat dago ezarrita. Aurreproiektu honek, berriz, txartelaren onuradun izan daitezkeen eremua beste kolektibo batzuetara zabaltu nahi du; esate baterako, federatuta ez dauden kirolarientzat, edota federatuta egon arren goi-mailako kirolari ez direnentzat edo Estatuaren lizentzia ez dutenentzat. Horregatik, eta alferrikako bikoiztasunak eragozte aldera, Aurreproiektuko bigarren xedapen gehigarriak xedatu du Eusko Jaurlaritzak eta Estatuak, lankidetzarako kasuan kasuko bitartekoen bidez, zenbait formula aplikatu ahal izango dituztela, elkar informatzeko sistema bat ezartzeko, kirolariaren osasun-txartela emateko, onartzeko edo egiteko, eta kontroletan parte hartuko duten albaitariak eta gainerako langileak gaitzeko.

Aurreproiektuak ezarritakoari jarraiki, kirolariaren osasun-txartela dokumentu publiko bat da, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak ematen diena federazio- eta unibertsitate-lizentziak dituzten kirolariei, bai eta erregelamenduz zehazten diren beste kirolari-kolektibo batzuei ere. Eskolako kirolariak kanpoan utzi dira, adingabeak direlako. Ikasleek nahitaezko eskolatzeko-aldian irakastorduetatik kanpo egiten duten kirol-jardura antolatua da eskola-kirola. Osasun-txartel horren bidez lortu nahi dena da kirolariak eta haren zaintza arduratzen den osasun-arloko langileak ahalik eta informazio kliniko onena izatea, min edo gaixotasunen bat sendatzeko zer tratamendu aplikatu behar den erabakitzean. Horrez gain, osasun-txartela baliagarria izan daiteke dopinaren aurkako borrokan laguntzeko. Kirolariaren osasun-txartela, horrenbestez, txartel duala da: batetik, kirolariei tratamendu medikorik onena aplikatzeko aukera ematen duen informazioa du, eta, bestetik, kirolarien gaineko kontrola eraginkorrago bihurtzeko; izan ere, kirolariei buruzko datu ugari dituen datu-base batekin konektatuta egongo da, eta datu-base horretan agertuko dira kirolarien tratamenduak, erabilera terapeutikorako baimenak, kirol-bajak, espiometriak, elektrokardiogramak, ahalegin-probak, gernu-, hemoglobina- eta hematokrito-analisiak eta abar.

Kirolariek ez dute txartela mehatxutzat hartu behar, aukeratzat baizik; oso tresna baliagarria izan daiteke, adibidez, dopinaren alorreko arau-hausteengatik irekitzen zaizkien diziplina-espedienteen defentsan erabiltzeko. Hematologia-profila, esteroide-profila edo kirolariaren osasun-txartelaren datu-basean gehitu daitezkeen beste parametro batzuk baliagarriak izan daitezke kirolarientzat, beren burua hobeto defendatzeko aukera emango baitie, benetako dopin-kasuak eta positibo faltsuak bereizi behar izanez gero.

Kirolariaren osasun-txartel hori ez da nahasi behar osasun-txartel elektronikoarekin. Bi gauza desberdin dira. Maiatzaren 28ko 16/2003 Legeak, Osasun-sistema nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoak, 57. artikuluan ezarritakoaren arabera, osasun-txartela identifikazio-dokumentu bat da, eta osasun-laguntzako zerbitzuak eskuratzeko aukera ematen die herritarrei zuzenean.

Kirolariaren osasun-txartelak ez ditu betetzen ezaugarri horiek, nahiz eta kirolariaren osasun-historia eskuratzeko aukera ematen duen.

Bi txartel horien titularrak ere ez dira berberak. Euskal Autonomia Erkidegoko federazio-lizentzia duten kirolari guztiak ez dira EAEn bizi, adibidez, mugetako zonaldeetan bizi direnak (Hendaia, Castro Urdiales, Bera, Trebiñu...). Badira, halaber, osasun-txartel elektronikoa ez duten kolektibo profesionalak (abokatuak, arkitektoak...). Gerta daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko kirolariren batek osasun-txartel elektronikoa eduki ez, eta kirolariaren osasun-txartela edukitzea; eta alderantziz, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den kirolariren batek osasun-txartel elektronikoa eduki, eta kirolariaren osasun-txartela eskuratu ahal ezin izatea.

7/2006 Lege Organikoan ez bezala, beste txartel edo zerbitzu batzuetara sartzeko aukera ematen duen euskarri fisiko berean egon daiteke kirolariaren osasun-txartela, baldin eta segurtasun-neurriek eragotzi egiten badute hirugarrenek kirolariaren osasun-txartelean dauden datuak ikustea. Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez, badago une honetan txartel elektronikoa bat —osasun-txartel elektronikoa, herri-erabilera anitzekoa (ONA)—, kirolariaren osasun-txartelerako euskarri izan daitekeena kasurik gehienetan. ONA txartela osasun-txartela da, eta, era berean, beste herri-erabilera batzuk ditu. Txartel horrek azken aurrerapen teknologikoak euskarri bakar batean uztartzen ditu, sinadura elektronikoaz baliatzeko aukera ematen du, eta eragiketetan erabateko segurtasuna bermatzen du.

Horrenbestez, Aurreproiektuari jarraiki, honako hauek soilik erabil ditzakete, hasiera batean behintzat, osasun-txarteleko datuak: txartelaren titularra den kirolariak eta, haren baimena edukiz gero, laguntzen dioten osasun-arloko langileek. Dena den, kasu batzuetan, osasun-alorreko legediak aukera ematen du, kirolariaren baimenik eduki gabe, haren datuak eskuratzeko.

Dopin-kontrolaren alorrean, ezinezkoa da kirolarien datuak eskuratzea, haien baimenik gabe. Hala eta guztiz ere, baimena emateari uko eginez gero, edota eragozpenak jarritz gero edo ikerketa-jardunak oztopatuz gero, 7/2006 Lege Organikoaren 14. artikuluan eta Lege-aurreproiektu honen 24. artikuluan kontrolerako edo informaziorako ezarritako beste edozein betebeharrak ez betetzeagatik ezartzen den zehapen berbera ezarriko da.

Honako hauek emango dituzte osasun-txartelak bere baitan dituen datuak: kirolariari lagundu dioten osasun-alorreko langileek, diziplina-organo eskudunek eta kasuan kasuko lizentzia eman dioten taldeek.

Aurreproiektuak ezarritakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak ezarriko du datuak biltzeko eta trukatzeko euskarri digitala, eta haren mantentze-lanez ere arduratuko da, segurtasun-bermeak izango dituela ziurtatuta. Horrez gain, euskarri digitala Lege honetako xedapenetan ezarritakoa beteta erabiltzen dela ere ziurtatuko du. Hala eta guztiz ere, eta Kirol Zuzendaritza horrek aukera izan dezan Osakidetzak osasun-txartel elektronikoaren gaian duen esperientzia handia eta dituen baliabideak aprobetxatzeko, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzari aukera emango zaio kirolariaren osasun-txartelaren gaian dagokion eskumena Eusko Jaurlaritzako beste organoren baten esku uzteko, nahiz eta hierarkikoki mendekoa ez izan, edota haren mendekoak diren zuzenbide publikoko beste entitate batzuen esku uzteko. Horrez gain, eraginkortasun-arrazoiengatik, Eusko Jaurlaritzan osasun-alorrean eskumena duen sailaren esku utz ditzake, kudeatzeko gomendio baten bitartez, aipatutako txartelarekin zerikusia duten jarduerak materialak, teknikoak eta zerbitzu-jarduerak.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak zehazten dituen egoeretan eta baldintzetan soilik laga ahal izango dira txartelarekin lotutako datu-basea osatzen duten datuak. Beraz, Banakako osasun-txartela arautzen duen urtarilaren 30eko 183/2004 Errege Dekretuak 7. artikuluan ezarritako ereduari eusten zaio.

Datu pertsonalen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, bai eta 15/1999 Lege Organikoaren garapenerako erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritakoa betez ere, kirolariaren osasun-txartela egiteko eta erabili ahal izateko sistemari goi-mailako segurtasun-neurriak ezarriko zaizkio; datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudian xedatuta daude neurri horiek.

VI. kapitulua. Dopinari buruzko datuen araubidea (47-49. artikulua)

Dopinarean alorrean datu pertsonalak babesteko araudia lantzen da kapitulu honetan. Aurreproiektuko zenbait xedapenek eragina dute kirolariak eta beste pertsona batzuek beren datu pertsonalak babesteko duten eskubidean, nahiz eta ez duten arautzen. Egoera jakin batzuetan, zenbait informazio agintari eskudunei jakinarazteko betebeharrak ezartzen dira; beste egoera batzuetan, datu pertsonalen tratamendua jasotzen da...

Horregatik, Aurreproiektu hau egiterakoan honako hauek hartu dira kontuan: abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu pertsonalen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren garapenerako erregelamendua onartzekoa; eta otsailaren 25eko 2/2004 Legea, Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeko buruzkoa.

Aurreproiektu honetan, dopin- eta osasun-kontrolak zerikusia duten datuak (analisien emaitzak, azterketa medikoen emaitzak, osasun-kontrolen emaitzak, erabilera terapeutikorako baimenen eskaerak eta onarpenak eta abar) osasunari buruzko datu pertsonaltzat hartzen dira, eta, horregatik, babes berezia behar dute.

Hona hemen 15/1999 Lege Organikoaren 7.3 artikulua arautzen duena: *“arrazari, osasunari eta sexu-bizitzari buruzko izaera pertsonaleko datuak bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arrazoiak direla bide, legeren batek halaxe xedatzen badu edo eragindakoak esanbidez onartzen badu”*.

Argi dago halako arrazoiak badaudela; hau da, dopinarean aurkako borroka interes orokorrekoa da, zalantzarik gabe. 7/2006 Lege Organikoa izapidetzean, Estatu Kontseiluak, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak, Estatuko Fiskaltza Nagusiak eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoak berak berariaz aitortu dute interes orokor hori. Hori dela eta, ez da beharrezkoa kirolarien baimena edukitzea haien datuak biltzeko, tratatzeko edo lagatzeko. Aurreproiektuak lege-gaikuntza bat gehitu du, dopin- eta osasun-kontrolak egitean lortutako datu pertsonalak tratatu ahal izateko, eta, beraz, bat dator 15/1999 Lege Organikoarekin. Hori hala dela onartu du Datuak Babesteko Espainiako Bulegoak, 7/2006 Lege Organikoaren aurreproiektuari buruzko 2005eko urriaren 25eko txostenean.

Baimena eskuratzetik salbuesteko ildo beretik doa abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak, Datu pertsonalen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duenak, 10.5 artikuluan xedatutakoa ere, hau ezartzen baitu osasun-zerbitzuen alorrean jakin nahi diren osasunari buruzko datu pertsonalei buruz: *“Zehazki esanda, ez da beharrezkoa izango interesatuak baimena ematea, osasunarekin zerikusia duten datu pertsonalak komunikatzeko osasun-sistema nazionala osatzen duten erakunde, zentro eta zerbitzuen artean, eta hori baita baliabide elektronikoen bidez ere, betiere datu horiek pertsonen osasun-arloko arreta eskaintzeko ematen badira; hori guztia Osasun-sistema nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legeak V. kapitulan xedatutakoaren arabera egin beharko da”*.

Nolanahi ere, ez da nahikoa lege-mailako arau batek datuak trata eta laga daitezkeela xedatzea; ezarpen hori helburutasun-printzipiora, proportzionaltasun-printzipiora eta kontserbazio-printzipiora egokitzea ere beharrezkoa da.

Aipatu behar da Aurreproiektuak garrantzi handia ematen diola kirolarien datuak babesteari; 8. artikulua, esaterako, kirolarien eskubideak lantzen ditu, eta ezartzen du dopin-kontrola egiten duten kirolariek eskubidea dutela, besteak beste, beren datu pertsonalak babesteko, indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren arabera.

Aurreproiektuaren 14. artikulua, berriz, dopin-kontrolen bermeak lantzen ditu, eta xedatzen du kontrola egingo zaiela jakinarazten zaienean esango zaiela kirolariei, eta, hala badagokio, lagina hartu baino lehen, kontrol hori dela-eta zer eskubide eta betebeharrak dituzten, eta prozeduraren funtsezko izapideen eta horien ondorio nagusien berri ere emango zaiela, bai eta Legeak datuak tratatzeari eta lagatzeari buruz xedatzen duenaren berri ere. Horrez gain, jakinaraziko zaie, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera dutela. Azken horiek datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legedian ezarrita daude.

15. artikuluan ezarritakoaren arabera, erabilera terapeutikorako baimenen alorrean datu pertsonalak tratatzeko eta lagatzeko, oso-osorik bete behar dira datu pertsonalak babestearen alorrean indarrean dagoen legedian ezarrita dauden xedapenak.

Kirolariak non dauden jakinarazteko betebeharra Aurreproiektuaren 13. artikuluan dago araututa. Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen 14.3 artikuluan jasota dago xedapen hori. 7/2006 Lege Organikoaren 5.3 artikulua ere kirolariek informatzeko duten betebeharra ezartzen du. Nabarmena da kontrolak egiteko, bereziki ustekabeak egiteko, ezinbestekoa dela kirolaria non dagoen jakiteko datuak edukitzea. Horrenbestez, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoak adierazi duenez, kirolariak egon ohi diren tokiei buruzko datuak bilduko ez balira, kiroleko dopinaren aurkako araudia ez litzateke eraginkorra izango, ustekabe-faktorea bitarteko eraginkorrena baita. Hori guztia kontuan izanik, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoak 2005eko txostenean adierazi zuen kirolaria egon ohi den tokiari buruzko datuak jakinarazteko betebeharra *“15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat datorrela”*.

Kirolarien tratamendu medikoari buruzko datuak emateko betebeharrari dagokionez, berriz, adierazi behar da badela proportzionaltasunean oinarritutako lege-gaikuntza bat. Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak nahiz 7/2006 Lege Organikoak xedatzen dute datu horiek trata eta laga daitezkeela, eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoak horri buruz berariaz adierazi du osasunaren babesa bermatzea duela oinarri, Konstituzioaren 43. artikuluan jasota dagoena. Horregatik, esan daiteke Aurreproiektu honetan datu horiek komunikatzeari buruz xedatutakoa bat datorrela 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin.

Halaber, 43. artikulua xedatutakoaren arabera, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak kirolaren eremuko dopinari buruzko informazio-sistema bat ezarriko du, informazioa eskuragarri egongo dela bermatuko duena eta kirolaren alorrean eskumena duten administrazio publikoen arteko komunikazioa bermatuko duena. Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak adierazitakoa entzunda, eginkizun hauek beteko ditu: datuen definizioa eta normalizazioa ezartzea, adierazleak hautatzea, eta informazioa osatzeko beharrezkoak diren baldintza teknikoak ezartzea. Sortutako informazioa ahalik eta fidagarriena izatea da horren guztiaren helburua.

7/2006 Lege Organikoaren eskema berari jarraituz, 43. artikulua xedatzen du irekitako diziplina-eta zehapen-espedienteen datuak, laborategietan hautemandako substantziei eta egindako analisi buruzkoak, espediente horiekin zerikusia duten organo eskudunen esku soilik egongo direla. Beste erakunde, pertsona edo entitate batzuek datu horiek eskuratu nahi izanez gero, espedientearen parte hartzen duten guzti-guztien datu pertsonalak bereizi behar dira beti aurretik. Kasuan kasuko entitate publikoek eta pribatuek behar adina datu emango dituzte informazio-sistema horri eusteko eta sistema garatzeko. Era berean, administrazio publikoek eskubidea izango dute informazio-sistema osatzen duten datuak eskuratzeko eta edukitzeko, baina, betiere, beren eskumenekoak diren eginkizunetarako behar baldin badituzte.

43. artikulua azken paragrafoak datu pertsonalak babesteko alorrean aplikagarria den legediaren mende uzten du, berriz ere, arauak aipatzen duen datuen tratamendua eta lagapena (informazio-sistema).

47. artikulua xedatzen duenaren arabera, dopin-kontrolak egingo dituzten langileek, bai eta kirol-entitateetako organoetako kideek eta langileek ere, beren lanagatik jakiten dituzten gaien konfidentzialtasuna errespetatu behar dute eta isilean gorde behar dituzte gai horiek. Artikuluaren bigarren paragrafoan berriro adierazten da beren zereginetan lortutako datuak, txostenak edo aurrekariak dopin-kontrolak egiteko soilik erabili ahal izango direla, eta, hala badagokio, diziplinazko, administrazio- edo delituzko arau-haustek izan daitezkeenak salatzeko.

Aurreproiektuaren 48. artikulua adierazten denez, kiroleko dopinaren aurkako borrokan parte hartzen duten erakunde publikoei eta pribatuei laga ahal izango zaizkie, datuen babeserako indarrean dagoen legedian xedatzen den moduan, dopin-kontrolak datuak eta fitxategiak, legalki lotesleak diren nazioarteko konpromisoek ezarritakoaren esparruan.

Nolanahi ere, Aurreproiektuak argi uzten du kirolarien osasunari buruzko datuak babesteko goi-mailako segurtasun-neurriak behar direla. Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak, Datu pertsonalen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duenak, honako hau ezartzen du 81. artikuluko 3. paragrafoan: “3. *Datu pertsonalen fitxategi edo tratamendu hauetan, oinarritzko mailako edo tarteko mailako neurriez gain, goi-mailakoak ere aplikatuko dira: a) Fitxategia ideologiarekin, sindikatu-afiliazioarekin, erlijioarekin, sinesmenekin, arraza-jatorriarekin, osasunarekin edo sexu-bizitzarekin zerikusia duten datuei buruzkoa bada*”.

Eragina indarrean dagoen araudian

Xedapenaren tituluak berak adierazten duenez, Aurreproiektuak berariaz aldatzen du Kirolaren Legea eta, beraz, nabarmena da indarrean dagoen ordenamenduan eragina duela.

Aurreproiektuak **bi xedapen indargabetzaile** hartzen ditu bere baitan. Lehen xedapen indargabetzailearen bidez, honako hauek indargabetzen dira:

- 14/1998 Legeko 81. artikulua e) idatz-zatia. Agindu horren bidez, Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroari zeregin hauek ezartzen zitzaizkion: “*Euskal Autonomia Erkidegoan antidopin-kontrola planifikatzea eta kudeatzea*”, eta aholkularitza tekniko ematea goi-mailako kirolean. Bi eremu funtzional horiek independentzia handia behar dute, eta ezin dute inolako interferentziarik eduki. Horregatik, esku artean dugun Aurreproiektuak Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari esleitzen dizkio Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroak zituen zeregin horiek.

- 14/1998 Legeko VII. tituluko V. kapitulua. Kapitulu osoa dopinari buruzkoa da, eta Lege honek ordezkaturko du.

- 14/1998 Legeko 109. artikulua (n) idatz-zatia. Bertan, diziplinari arloko oso arau-hauste larritzat hartzen da *“debekatutako substantziak sustatzea, hartzea bultzatzea eta hartzea, edo debekatutako metodoak erabiltzea eta horien gainean behar den kontrola izatea galarazten duen edozein egintza edo ez-egite”*. Aurreproiektu berriaren bidez askoz ere hobeto garatu eta tipifikatzen da arau-hauste hori; beraz, bidezkoa da idatz-zati hori indargabetzea.

- 14/1998 Legeko 127. artikulua (h) idatz-zatia. Bertan, zehapenari arloko oso arau-hauste larritzat hartzen da *“debekatutako substantzien kontsumoa edo debekatutako metodoen erabilera sustatzea, bultzatzea edo laguntzea, eta substantzia eta metodo horiek behar bezala kontrolatzea galarazten duen edozein egintza edo ez-egite”*. Aurreproiektu berriaren bidez askoz ere hobeto garatu eta tipifikatzen da arau-hauste hori; beraz, bidezkoa da idatz-zati hori indargabetzea.

Bigarren xedapen indargabetzailea klausula indargabetzaile orokorra da, eta, bertan ezarritakoari jarraiki, indargabetu egiten dira Lege honetan ezarritakoekin bat ez datozen maila bereko edo maila baxuagoko xedapen guztiak.

Aurreproiektuak **zortzi xedapen gehigarri** ditu.

Lehenengoan jasotzen dena da nola garatuko den erregelamendu bidez eta nola egokituko den Legea, kirol-probetan parte hartzen duten animaliei egiten zaizkien dopin-kontrolei dagokienez. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoan alor horretako eskumena duten organoek eta erakundeek elkarri informazioa jakinarazteko eta organo eta erakunde horiek koordinatzeko mekanismoak ezartzen dira. Animalien osasunari arloan eskumena duten lurralde historikotako foru-organoei analisiari emaitzak Dopinari Aurrak Euskal Agentziara bidaltzeko duten betebeharra jasotzen da bereziki.

Aurreproiektu honek **animaliekin egiten diren kiroltako dopinari** arazoa lantzen du. Ez du ikuspegi integral batetik lantzen gaia. Izan ere, kirol-lehiaketak garbiak izateko ikuspegitik arautzea mugatzen da, eta ez du kontuan hartzen animalien babesa, honako hauetan arautzen dena: urriaren 29ko 6/1993 euskal Legea, Animaliak babestekoan, eta urtarrilaren 22ko 6/1997 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan kultura- eta kirol-ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei droga-kontrola (antidopina) egiteko modua arautzekoan.

Araudi horrek animalien dopina errotik desagerraraztea du helburu, eta honela dio: *“animaliak beharrezko ez diren oinazeetatik eta sarritan jasanezinekoak diren portaeretatik babestea lortu nahi da”*. Argi dago, beraz, arau horiek ez direla eman kirolari arloko eskumenen babesean, eta haien helburua ez dela lehiaketak behar bezala gara daitezen bermatzea.

Aurreproiektu honek errespetatu egiten du Estatuak gai horretan duen eskumen-eremua. Izan ere, 7/2006 Lege Organikoaren lehen xedapen gehigarriak berariaz egiten die erreferentzia *“Estatuaren eremuko lehiaketetan parte hartzen duten animaliei”*.

Lege-aurreproiektu honen berrikuntzetako bat da Eusko Jaurlaritzari agintzen zaiola, animalien osasunari eta kirolari arloan eskumena duten sail guztiek hala eskatuta, araudi bat ezartzeko, kontrol-araubidearen berezitasunak kontuan hartuko dituen. Argi dago animaliei egin beharreko kontrolari alor horretan ezinbestekoa izango dela animalientzat debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda espezifiko osatzea; kirol-agintariei egindako

zerrendak eta animalien osasunaren alorrean eskumena duten agintariek onartutako zerrendak ez dute zertan, halaber, bat etorri. Horrez gain, ezinbestekoa izango da honako hauek arautzea: laginak aztertu behar dituzten laborategien baldintza orokorrak, dopin- eta osasun-kontrol motak eta horiek egiteko prozedurak edo, esaterako, erabilera terapeutikorako baimenen eta kirol-bajen araubideak. Xedapen hori bat dator 2009ko urtarrilaren 1etik indarrean dagoen Dopinaren Aurkako Munduko Kodean ezarritakoarekin.

Ez da jaso, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak bere garaian proposatu zuen moduan, animalien eskubideen zerrenda bat, kirolariekin beste irizpide bat erabili bada ere. Izan ere, ulertu da animaliak babesteko legediari dagokiola kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animaliak babestea.

Sail horrek egindako proposamenetako bat al baitariak egotea da. Beraz, xedatuta dago Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia eratzean profesional horiek ere parte hartuko dutela, Nekazaritza eta Arrantza Saileko ordezkari batekin batera.

Hurrengo xedapen gehigarriaren arabera, Eusko Jaurlaritzak eta Estatuak, lankidetzarako kasuan kasuko bitartekoen bidez, zenbait formula aplikatu ahal izango dituzte, elkar informatzeko sistema bat ezartzeko eta kirolariaren osasun-txartela emateko, onartzeko eta egiteko. 7/2006 Lege Organikoak kirolarien Estatuko osasun-txartela sortzea xedatzen du, eta ezinbestez eragotzi behar dira bi txartel horien arteko bikoiztasunak.

Hirugarren xedapen gehigarriaren bidez, Lege honetan ezarritako zehapen- eta diziplina-araubideak egokitzeko gaitzen da Eusko Jaurlaritza; zehapenen kopuruak eta haiek aplikatzeko arauak nazioarteko erakundeek emandako arauetara egokitu ahal izango ditu.

Laugarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, Lege honen eragina izaten duten Euskal Autonomia Erkidegoko elkargo profesionalek, Lege honen bidez xedatutakoa betetze aldera, beren estatutuak eta araudiak aldatu beharko dituzte, Legeak ezarritako erantzukizunak berariaz tipifikatzeko. Egokitze hori urtebeteko epean egin behar da gehienez. Beraz, 7/2006 Lege Organikoaren irizpide bera hartzen da kontuan.

Bosgarren xedapen gehigarriak berebiziko garrantzia du. Horren bidez, debekatu egiten da kirolean debekatuta dauden substantziak eta metodoak kirol-zentroetan biltegiratzea, merkaturatzea edo banatzea, modua edozein dela ere. Halaber, debekatu egiten da aurreko atalean adierazitako produktuak kirol-zentroetan kontsumi daitezen sustatzea. Debeku horiek ez betetzea arau-hauste administratibo oso larritzat hartuko da, eta, gainera, horrek eragin ditzakeen bestelako erantzukizunak ere kontuan hartuko dira.

Seigarren xedapen gehigarriak dio, indarrean jartzen den unetik beretik, Kirolaren Legeak kirolariaren osasun-txartel zaharrari egiten dizkion erreferentzia guztiak kirolariaren osasun-txartel berriari egindakotzat hartuko direla.

Zazpigarren xedapen gehigarriaren helburua hau da: federazio- eta unibertsitate-lizentziak eta kirolariaren osasun-txartel berria batera daitezen sustatzea. Ez dirudi oso logikoa denik, teknologiaren garaioan, kirolariek txartel-sorta bat eraman behar izatea aldean (federazio-lizentzia, osasun-txartela, kirolariaren osasun-txartela...), euskarri bakar batean batzea posible izanik. Horrenbestez, xedapen gehigarri honek aukera ematen du federazio- eta unibertsitate-lizentziak euskarri elektronikoetan txertatzeko, kirolariaren osasun-txartela edukitzeko ere aukera ematen dutenetan. Hala ere, bere banakotasunari eutsiko dio txartelak eta behar beste segurtasun-neurri izango ditu kirolariaren osasun-txartel horri dagozkion datuak nolanahi eskuratzen ez direla bermatzeko. Aipatutako txartel elektroniko horietan txertatutako federazio-

lizentziak salbuetsita daude, kanpoko formatu fisikoan, zenbait datu ematetik; hain zuzen, Kirol-federazioei buruzko urtarilaren 31ko 16/2006 Dekretuan eskatzen diren datuak ematetik. Hori hala izanik ere, beharrezkoa da federatuta dauden kirolariak beste bide batzuetatik informatzea, besteak beste, lizentziei gehitutako seguruei buruz, ordaindutako kuotaren xehetasunez, eta aplikatzekoak diren araudi-xedapenetan ezarritako gainerako apartekoez.

Azkenik, Aurreproiektuak, kontuan izanik edozein kirolari-motaren osasuna babestea duela helburu, araubide berezia ezarri du oso kirol-proba gogorretan edo baldintza fisiko gogorreko probetan parte hartzen duten kirolarientzat, batez ere herrikoientzat. Lizentzia duten kirolarien osasuna soilik zaintzea helburu duen legeak ezin du lege ona izan; ezinbestekoa da antolatutako kirol-jardueretan parte hartzen duten kirolari guztien osasuna zaintzea, alde batera utzita lizentzia duten edo ez. Eta, bereziki, ezinbestekoa da arrisku handienak dituzten kirolarien osasuna zaintzea.

Horregatik guztiagatik, zortzigarren xedapen gehigarriak, araudi-teknikako jarraibideak betez —jarraibide horien arabera, xedapen gehigarriak erabili behar dira araubide bereziak ezartzeko—, araubide juridiko bereizi bat ezarri du kirol-proba gogorretan edo baldintza fisiko gogorreko probetan parte hartzen duten kirolarientzat. Kirolaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak zehaztuko du zein diren.

Kirolari horientzat bi berme ezartzen dira. Alde batetik, azterketa medikoa egiteko betebeharra agindu bidez zehaztuko diren probetara zabalduko da (gaur egun, federazio-, eskola- eta unibertsitate-lizentziak izapidetzeko eskatzen da). Ez da zentzuzkoa golf-, billar-, xake- edo bolo-lizentzia eskuratzeko azterketa medikoaren emaitza ona izan dela egiaztatu behar izatea, eta maratoni batean korrika egiteko edo 250 kilometroko bizikleta-lasterketa batean parte hartzeko azterketa hori egin behar ez izatea. “Herriko” deituriko proba batzuen baldintzak oso gogorrak dira, lehiarako grina pizten dute eta dopin-jardueren gune bihurtzen dira.

Parte-hartzaile horien osasuna babesteko neurri horrekin batera, beste ezinbesteko neurri bat ezarri da: kirol-proba horietan lizentziarik gabe parte hartzen dutenei ere dopin-kontrolak egin ahal izango zaizkiela. Dena den, horiek ez daude behartuta Legeak lizentzia duten kirolarientzat ezarritako betebeharrak betetzera. Legea erregelamendu bidez garatzean ezarriko da lizentziarik gabeko parte-hartzaile horientzako araubide berezia, zenbait irizpide hartuta kontuan. Horrenbestez, behar-beharrezkoa da halako neurriak hartzea, berez osasun-iturri izan beharko luketen kirol-jarduera horietan iruzur egiten ez dela eta kirolarientzat arriskutsuak diren jarduerak egiten ez direla bermatzeko. Legeak ez du inola ere parekatzen parte-hartzaile horien araubidea lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten kirolarien araubidearekin. Horregatik, lizentzia duten kirolarien araubide zorrotzetik salbuetsi ditu parte-hartzaile horiek, eta betebeharrak gutxi batzuk baino ez dizkie jarri. Dopinaren aurkako arauak urratzen diren kasuetarako ezarrita dagoen ondorio bakarra 7/2006 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan ezarritakoaren oso antzekoa da; hau da, denboraldi batez lehiari aritzea galaraztea, osasun-arrazoiengatik.

Aurreproiektu honek **hiru xedapen iragankor** ditu.

Lehendabizikoan, administrazio-prozeduren alorrean oso ohikoa den konponbide bat ezarri da: Legea indarrean sartu aurretik abian dauden zehapen-espedienteak ez dira etengo, eta lehendik indarrean zeuden arauak jarraiki izapidetuko dira, ondorioak interesatuaren onerako diren kasuetan izan ezik.

Bigarren xedapen iragankorrak ezarritakoa betez, Lege honek Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari emandako eginkizunak Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak beteko ditu, Agentzia sortu eta benetan lanean hasi bitartean.

Hirugarren xedapen iragankorrak gai praktiko garrantzitsu bat jorratzen du; ez dela gaikuntzarik egongo dopin-kontroletan laginak hartzen dituzten taldeetan parte hartzeko, harik eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak gaikuntza horiek emateko prozesuari ekin arte. Horregatik, dopin-kontroletan laginak hartzen dituzten taldeetan parte hartzeko gaitutako pertsona moduan jardun ahal izango dute apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretuan —edo hura aldatzen edo ordeztan duen arauan— ezarritako gaikuntza dutela egiaztatzen dutenek.

Lege-aurreproiektuak **bost azken xedapen** ditu.

Azken xedapenetan lehenak Euskadiko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 4.2.v artikulua aldatzen du. Bertan, erakunde komunei *“kirolariaren osasun-txartela arautzea”* dagokiela ezartzen da. *Osasun-txartelaren erreferentziaren ordezkari “kirolariaren osasun-txartela” jarri da.*

Azken xedapenetan bigarrenak arau-testu horretako 83. artikulua aldatzen du, kirolariaren osasun-txartel berrira egokitzeko. Idazketa berriari jarraiki, kirolaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak arautuko du kirolariek beren gaitasun fisikoa kontrolatze aldera nahitaez egin behar dituzten azterketa medikoekin lotutako eskaerak eta betebeharrak. Azterketa medikoak ezinbestekoak dira, federazio-, eskola- eta unibertsitate-lizentziak emateko, eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak baldintza fisiko gogorreko jardueratzat hartzen dituen probetan parte hartzeko. Azterketa medikoetako datuak eta kirolarien osasunarekin zerikusia duten beste informazio batzuk kirolariaren osasun-txartelean sartuko dira, erregelamenduz ezarritako moduan.

Azken xedapenetan hirugarrenean, Eusko Jaurlaritzari baimena ematen zaio Legea aplikatzeko beharrezko diren xedapen guztiak emateko.

Azken xedapenetako laugarrenari jarraiki, euskal federazioek eta lurralde-federazioek eta Lege hau aplikatuko zaion kirol-erakunde orok beren estatutuak eta araudiak egokituko dituzte urtebeteko epean, Legea argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Azken xedapenetan bosgarrenak ezartzen du Estatuaren zuzenbidea ordezkia dela. Horrenbestez, Konstituzioaren 149.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoak arautu gabeko dopin-gaietan, Estatuak alor horretan ezarritako arauak aplikatuko dira.

Azkenik, arautu da Osasuna babesteko eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoan ezarritako irizpide berberari jarraituz sartuko dela indarrean Legea. Hau da, hiru hileko *“vacatio legis”* bat xedatu da, Legea nolakoa den jakin ahal izateko eta hura aplikatzeko behar diren neurriak hartu ahal izateko. Gai hau arautzeak konplexutasun ugari ditu, eta, hortaz, ez da komeni segituan indarrean jartzerik.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko urriaren 5a.

Patxi Mutiloa Aldazabal



Kirol zuzendaria



MEMORIA DE TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

1.- OBJETIVO PERSEGUIDO CON LA REGULACIÓN PROPUESTA

Las prácticas de dopaje constituyen una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva. Pero el fenómeno del dopaje, además de constituir un grave engaño deportivo, se ha convertido en un conjunto de prácticas que pueden ser muy peligrosas para la salud pública, y especialmente para la vida de los deportistas más jóvenes, que son los protagonistas habituales del deporte de rendimiento. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva para convertirse en un auténtico problema de salud pública, tal y como reconocen todos los organismos internacionales, especialmente en la Unión Europea. El recurso a sustancias o métodos prohibidos contradice la finalidad misma del deporte y en la mayoría de las ocasiones atenta contra la propia salud. El dopaje simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo.

En este contexto, la elaboración del presente Anteproyecto responde:

- 1º. El régimen novedoso introducido en la década de los noventa en el País Vasco, a través de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, ha perdido buena parte de su valor y aparece hoy necesitado de profundas reformas y actualizaciones.
- 2º. A la necesidad de armonizar la normativa del País Vasco sobre el dopaje con los principios que el Código Mundial Antidopaje proclama y adecuarla, al igual que han hecho algunos países de nuestro entorno, a la nueva realidad deportiva y jurídica para alcanzar una mayor eficacia combatiendo el dopaje en el deporte.
- 3º. A la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
- 4º. En el marco normativo actual, y como la normativa estatal constituye un ordenamiento mucho más completo, tanto el Gobierno Vasco como las federaciones territoriales y vascas vienen aplicando en el campo del dopaje lo que establece el

artículo 149.3 de la Constitución: “*el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas*”. Este artículo, que tiene como objeto garantizar la plenitud del ordenamiento jurídico, no es una solución deseable pues, entre otros problemas, genera una inseguridad jurídica incompatible con el artículo 9 de la Constitución.

4º. Al mandato parlamentario emitido desde la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día 22 de febrero de 2006, que tras el debate de la proposición no de ley sobre el control de dopaje en el deporte, instó al Gobierno Vasco a finalizar con la mayor brevedad la elaboración y aprobación de la norma por la que se debe regular la prevención, control y represión del dopaje en el deporte del País Vasco. Con arreglo a dicha proposición no de ley se establecía que dicha disposición debía incluir la creación de la Agencia Vasca Antidopaje y debía tener presentes las orientaciones emanadas desde las instituciones competentes de ámbitos supracomunitarios.

Por todo lo expuesto, resulta inaplazable llevar a buen término en el País Vasco diferentes políticas y dotar a las distintas organizaciones antidopaje y agentes deportivos de los instrumentos necesarios para combatir con eficacia la lacra del dopaje.

2. - SECTORES SOCIALES QUE RESULTAN AFECTADOS

Las prácticas de dopaje constituyen una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva. Pero el fenómeno del dopaje, además de constituir un grave engaño deportivo, se ha convertido en un conjunto de prácticas que pueden ser muy peligrosas para la salud pública, y especialmente para la vida de los deportistas más jóvenes, que son los protagonistas habituales del deporte de rendimiento. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva para convertirse en un auténtico problema de salud pública, tal y como reconocen todos los organismos internacionales, especialmente en la Unión Europea. El recurso a sustancias o métodos prohibidos contradice la finalidad misma del deporte y en la mayoría de las ocasiones atenta contra la propia salud. El dopaje simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo.

Tal y como se constata en el documento *Modelo de Deporte Europeo*, elaborado en el seno de la Comisión Europea, tanto en el deporte profesional como en el aficionado existe actualmente un extraordinario clima competitivo donde el creciente uso de sustancias y métodos prohibidos para aumentar el rendimiento de los deportistas se ha



convertido en uno de sus principales problemas. El desarrollo progresivo que va experimentando el dopaje resulta inquietante tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Por un lado, los estudios revelan que es considerable el número de deportistas que recurren a métodos y sustancias prohibidas y, por otro lado, las prácticas de dopaje ya no son la expresión de un comportamiento individual de los deportistas, sino el resultado de acciones organizadas y de mercados.

En consecuencia, la regulación propuesta afecta a la sociedad en general y al sector deportivo, en particular.

3.- PRESUPUESTOS JURÍDICOS HABILITANTES DE LA NORMATIVA PROPUESTA

Desde el punto de vista competencial conviene reseñar en primer lugar que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta, a tenor del artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia deportiva. Al amparo de dicha competencia, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte, que no reguló el ámbito del dopaje. Materia que sí ha sido regulada en la vigente Ley del Deporte.

Precisamente su artículo 4 dispone que corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco: "*La regulación de la prevención, control y represión del dopaje*", conteniendo diversas disposiciones relativas al ejercicio de esta competencia.

Asimismo, inciden en esta ley otros títulos competenciales. Además de la clara competencia exclusiva en materia deportiva, que es la que permite la regulación del dopaje en la vigente Ley del Deporte del País Vasco, la Comunidad Autónoma, por ejemplo, ostenta también competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior (art. 18 del Estatuto de Autonomía) y la competencia autonómica en materia de protección de datos que ha dado lugar a la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

El Parlamento Vasco, por tanto, ya ha venido regulando esta materia de dopaje en el ejercicio de su plena competencia en la materia.

Con el presente Anteproyecto simplemente se modifica el marco de regulación; se pasa de regular el dopaje en el seno de la legislación deportiva general a regular el dopaje en una normativa específica en atención a su gran complejidad.

Otros aspectos competenciales son analizados en la memoria que analiza detalladamente el texto legal propuesto y que consta en el expediente.

4.- FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO

La competencia de la Consejera de Cultura para iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley referido en esta memoria, se fundamenta en el artículo 15.1.a) del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, que atribuye al Departamento de Cultura el área de Deportes.

Asimismo, el Decreto 25/2006, de 14 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura, en su artículo 3.1 dispone que *"Corresponderá a la Consejera de Cultura el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 27 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre la Ley de Gobierno, y cuantas otras le atribuya la legislación vigente..."* Entre estas competencias se encuentra al de proponer para su aprobación por el Gobierno, proyectos de Ley en materias propias de su competencia.

5.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VINCULACIÓN DE CADA UNO DE LOS AFECTADOS EN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE LA NORMA Y EN SU CASO LA NECESIDAD DE TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA

El grado de vinculación de los diversos participantes en la tramitación del proyecto afectará a:

- 1) **Consejera de Cultura:** Órdenes de inicio y aprobación del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley.
- 2) **Dirección de Servicios del Departamento de Cultura:** Informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. Asimismo.
- 3) **Trámite de audiencia e información pública:** Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, se enviará a:

- Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
- Asociación de Federaciones Deportivas de Álava.
- Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia.
- Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa.
- Federaciones Vascas (totalidad de las existentes: 48).
- Diputación Foral de Álava.
- Diputación Foral de Bizkaia.
- Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekime.
- Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- Colegio Oficial de Médicos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
- Colegio Oficial de Farmacéuticos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
- Colegio Oficial de Veterinarios (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
- Dirección de Salud Pública.
- Agencia Vasca de Protección de Datos.
- Departamentos Gobierno Vasco (totalidad de los existentes: 11).
- Agencia Estatal Antidopaje.

Además se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco un anuncio por el que se da trámite de audiencia por plazo de 20 días hábiles.

- 4) **Dirección de Innovación y Administración electrónica:** Informe en virtud de lo establecido en el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional de Departamento Justicia y Administración Pública.
- 5) **Dirección de Función Pública:** Informe, en virtud de lo establecido en el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional de Departamento Justicia y Administración Pública.
- 6) **Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea:** Informe, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y con el artículo 3 d) de la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del citado Instituto.
- 7) **Dirección de Normalización Lingüística:** Informe, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 del Decreto 128/2007, de 31 de agosto, por el que se establece el trámite de evacuación de informe por el Departamento de Cultura en el marco del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.
- 8) **Oficina de Control Económico:** Informe económico-normativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 14/1994, de 30

de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

- 9) **Comisión Jurídica Asesora de Euskadi:** Informe, de conformidad con lo dispuesto el artículo 3. 1 a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

6.- LÍNEAS GENERALES DE LA REGULACIÓN PROPUESTA.

Desde la experiencia en la aplicación de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, para la elaboración del presente Anteproyecto de Ley se han tenido en cuenta la regulación estatal e internacional de la prevención, control y represión del dopaje en el deporte, especialmente la reciente Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, sobre protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, además, ha sido concebido. La normativa contenida en el texto propuesto se ha basado en los principios y normas comúnmente aceptados por los organismos internacionales y nacionales más avanzados en la lucha de contra el dopaje en el deporte. La estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exige un marco jurídico común.

El anteproyecto de ley ha quedado conformado por siete capítulos, 53 artículos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias, cinco disposiciones finales. En la memoria aneja al presente informe, se examina el contenido del mismo resaltando los aspectos que se consideran más importantes.

7.- INCIDENCIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

Procede señalar que, siendo cierto que la nueva ley implicará necesariamente un gravamen presupuestario, pues crea una nueva entidad, la Agencia Vasca Antidopaje, no es menos cierto que para su efectividad no se precisa de inversiones significativas o la contratación significativa de personal. La Agencia Vasca Antidopaje responde a la necesidad de crear un organismo independiente para separar las funciones de control del dopaje y las funciones de fomento del deporte, tanto del deporte de alto nivel como de las demás manifestaciones del deporte de rendimiento. La actual Dirección de Deportes del Gobierno Vasco ya cuenta con un médico especializado en el tema de los controles de dopaje y viene contratando hasta la fecha la mayoría de los servicios que

deberá utilizar la futura Agencia Vasca Antidopaje para la realización material de los controles.

Además, la Agencia Vasca Antidopaje se ha concebido con una organización muy sencilla basada en un órgano unipersonal, la Dirección, y un órgano colegiado (Consejo Consultivo) adecuadamente dimensionado, con escasos miembros.

Así se ha previsto que dicha agencia únicamente disponga de cuatro personas, un responsable con rango de alto cargo, un responsable médico, un asesor jurídico y un administrativo, personal que suponen el siguiente gravamen presupuestario.

PUESTO	Retribuciones	Cotización Social	Total
Un/a director/a (nivel 30)	67.087,03	20.595,72	87.682,75
Un/a responsable médico nivel 26	52.340,48	16.068,50	68.408,98
Un asesor/a jurídico/a nivel 25	48.262,81	14.816,31	63.079,12
Un administrativo/a nivel 18	30.197,59	9.270,42	39.468,01

Todo lo cual conlleva un gasto en concepto de retribuciones de personal de 258.638,86 € anuales.

Asimismo dicha agencia realizaría controles antidopaje, tal y como en la actualidad efectúa la Dirección de Deportes, lo que supondría un gasto anual de 70.000 €, destinados al laboratorio encargado de realizar los correspondiente análisis para determinar la presencia de sustancias prohibidas, y otros 30.000 € para sufragar la recogida de muestras de orina y sangre a los deportistas por personal médico autorizado.

Igualmente dentro de los órganos a implementar se encuentran el consejo consultivo y el comité Vasco de Autorizaciones de uso Terapéuticos. Si bien en el primero no se prevé gasto alguno, salvo los gastos y dietas regulados por el Decreto 16/1993, plenamente subsumibles en los gastos ordinarios de funcionamiento, en el segundo, dadas las posibles peticiones de uso terapéutico a analizar únicamente se ha estimado 3.000 € anuales para hacer frente a la contratación de un médico externo con tal función.

No se ha previsto gasto alguno para el local donde se ubicaría la mencionada Agencia, ya que es intención que se localice en los locales del nuevo campo de fútbol San

Mames Barria radicado en Bilbao, que serán cedidos al Gobierno Vasco como contraprestación a la participación en la sociedad encargada de la construcción de la citada instalación deportiva.

Igualmente los medios materiales (mobiliario, equipo informáticos, material fungible, etc) necesarios se estiman en 100.000 euros anuales.

Todo lo cual conlleva que el gravamen presupuestario anual por el funcionamiento de la Agencia Vasca Antidopaje se estime en 461.638,86 €.

8.- IMPACTO DE GÉNERO

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Pekín (Beijing) en 1995 renovó el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre los géneros, así como el desarrollo y la paz para todas las mujeres. En la misma se invitó a los gobiernos y a los demás agentes a *"integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias para las mujeres y los hombres respectivamente, antes de tomar decisiones"*.

En el ámbito de la Unión Europea, con la entrada en vigor el día 1 de mayo de 1999 del Tratado de Ámsterdam, se inició una nueva etapa en el proceso de construcción europea y especialmente en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este contexto, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y la eliminación de las desigualdades constituyen una de las prioridades a tener en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea. En el seno de ésta, y como complemento a los objetivos de la acción comunitaria prevista para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, se aprobó la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000, por la que se estableció un programa de acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005), destacando que en la misma se articula la evaluación del impacto en función del sexo en distintos ámbitos de intervención de la estrategia marco comunitaria (vida económica, social, vida civil, roles, etcétera), como una de las acciones a emprender para el logro de los objetivos mencionados en el referido programa.

Por otro lado, la Comisión de la Unión Europea ante la constatación de que decisiones políticas que, en principio, parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara, aprobó una comunicación sobre la transversalidad *"mainstreaming"* como un primer paso hacia la realización del compromiso de la Unión Europea de

integrar la perspectiva de género en el conjunto de las políticas comunitarias y elaboró una *"Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género"* diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión con objeto de evitar consecuencias negativas no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias.

Con arreglo a este marco, el País Vasco cuenta con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y que contiene los siguientes principios generales:

"Artículo 3. Principios generales

Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres son los siguientes: la igualdad de trato; la igualdad de oportunidades; el respeto a la diversidad y a la diferencia; la integración de la perspectiva de género; la acción positiva; la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; la representación equilibrada y la coordinación y colaboración.

...

4.- Integración de la perspectiva de género.

Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación."

El artículo 19 regula la evaluación previa del impacto en función del género en los siguientes términos:

"1- Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad.

2.- El Gobierno Vasco ha de aprobar, a propuesta de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género referida en el párrafo anterior, así como las normas o actos administrativos que quedan excluidos de la necesidad de hacer la evaluación y el resto de los trámites previstos en los artículos siguientes."

El artículo 22 se refiere expresamente al contenido de esta Memoria del Anteproyecto de Ley:

"Artículo 22. Memoria explicativa y aprobación de la norma o acto

1.- El proyecto de norma o disposición habrá de ir acompañado de una memoria que explique detalladamente los trámites realizados en relación con los arts. 19 a 21 de esta ley y los resultados de la misma.

2.- La aprobación o suscripción de la norma o acto administrativo de que se trate dejará constancia, al menos sucintamente, de la realización de los trámites referidos en el párrafo anterior."

Por tanto, la evaluación del impacto de género de un Anteproyecto de ley tiene como objetivo evitar consecuencias negativas no intencionadas que favorezcan situaciones de discriminación y también tiene como objetivo mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias en el ámbito de la disposición que se elabora. Tal evaluación consiste en verificar si la propuesta normativa puede afectar de manera diferente a las mujeres y a los hombres sobre la base de las diferencias sociales entre ambos. Pues bien, sin perjuicio de que la memoria del proyecto definitivo deba ir acompañada de otro estudio exhaustivo sobre el impacto de género, procede señalar que las normas que se contienen en el presente borrador de Anteproyecto, no conllevan impacto alguno por razón de género. Si se examina el contenido del borrador de Anteproyecto de ley no cabe concluir que favorezca situaciones discriminatorias o que pueda afectar de modo diferente a hombres y mujeres por las diferencias sociales.

No obstante lo anterior, el Anteproyecto incluye dentro de las funciones de la Agencia Vasca Antidopaje la función de divulgar información relativa al uso de sustancias y métodos prohibidos y sus modalidades de control; hacer informes y estudios sobre las causas y efectos del dopaje; promover e impulsar acciones de prevención, y velar por el cumplimiento de las normas vigentes. Y en el desarrollo de estas funciones, deberá integrar la perspectiva de género para fomentar y divulgar la

investigación sobre el dopaje y sus efectos concretos en los hombres y en las mujeres deportistas.

En Vitoria-Gasteiz, a de 15 de junio 2011



Pabxi Mutiloa Aldazabal
Director de Deportes

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE-AURREPROIEKTUAREN IZAPIDETZE-MEMORIA

1.- PROPOSATUTAKO ARAUAREN BIDEZ BETE NAHI DEN XEDEA

Kirol-etikaren oinarrizko printzipioak urratzen dituzte kirola egiteko dopatzen direnek. Baina kirol-iruzur larria izateaz gain, osasun publikorako oso arriskutsua izan daitekeen jarduna bihurtu da dopina; bereziki, kirolari gazteenen bizitzarako, horiek baitira errendimenduko kirolean gehien aritzen direnak. Kirol-etikaren esparrua gaintitu du dopinak, eta osasun publikoarentzako benetako arrisku bilakatu da. Horixe adierazi dute nazioarteko erakunde guztiek, Europar Batasunekoek bereziki. Kirolaren berezko xedearen kontra doa debekatuta dauden substantziez edo metodoez baliatzea. Gehienetan, gainera, osasunari berari egiten dio kalte praktika horrek. Kirolaren beraren nahiz kirolaren funtsezko balio eta oinarrien antinomia da dopina.

Aurreproiektu hau, esaterako, ondoko hauen eraginez egin da:

1. Garai hartan berritzailea izan bazen ere, balio handia galdu du Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen bidez laurogeita hamarreko hamarkadan Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako araubideak eta, gaur egun, berrikuntza eta eguneraketa asko behar ditu.
2. Dopinari buruzko Euskadiko arauak bateratu behar dira Dopinaren Aurkako Munduko Kodeko printzipioekin. Horrez gain, kirolean dopatzearen kontra are eraginkortasun handiagoz jardun ahal izateko, kirolaren eta zuzenbidearen errealitate berrira egokitu behar ditu Euskadik dopinari buruzko arauak, gure inguruko hainbat herrialdek egin bezalaxe.
3. Osasuna babesteko eta kirolean dopatzearen aurkako azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa indarrean sartu izana.
4. Gaur egungo arau-esparrua halakoa izanik, eta Estatuko araudia ordenamendu askoz ere osatuagoa denez, Eusko Jaurlaritzak zein lurraldeetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko federazioek Konstituzioaren 149.3 artikulua ezarritakoa aplikatzen dute dopin-gaietan: "Estatuko zuzenbidea, betiere, autonomia erkidegoen zuzenbidearen osagarri izango da". Artikulu horrek ordenamendu juridikoaren osotasuna bermatzea du xede, baina ez da irtenbiderik egokiena; izan ere, Konstituzioko 9. artikuluekin bateragarria ez den ziurgabetasun juridikoa sortzen du.
5. Euskal Autonomia Erkidegoan kirolean dopatzearen prebentzioa, kontrola eta zigorra erregulatzeko arauak ahalik eta azkarren egin eta onar zitzan eskatu zion Eusko Jaurlaritzari Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura Batzordeak, 2006ko otsailaren 22an izandako bilkuran, kirolean dopina kontrolatzeari buruzko legekoa ez den proposamena eztabaidatu ondoren. Legekoa ez den proposamen horren arabera, xedapen horrek bere baitan hartu behar zuen Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzea eta, halaber, kontuan hartu behar zituen erkidegoaz gaindiko eremuetan eskumena duten erakundeek emandako jarraibideak.

Arestian aipatutako guztia dela-eta, zenbait politika ezarri behar dira lehenbailehen Euskal Autonomia Erkidegoan eta, horrez gain, dopinaren aurkako erakundeei eta kirol-eragileei behar adina bitarteko eman behar zaizkie dopinaren gaitzari eraginkortasunez aurre egiteko.

2. ARTEAN DIREN GIZARTE-SEKTOREAK

Kirol-etikaren oinarritzko printzipioak urratzen ditu dopinak. Baina kirol-iruzur larria izateaz gain, osasun publikorako oso arriskutsua izan daitekeen jarduna bihurtu da dopina; bereziki, kirolari gazteenen bizitzarako, horiek baitira errendimenduko kiroletan gehien aritzen direnak. Kirol-etikaren esparrua gainditu du dopinak, eta benetako arrisku bilakatu da osasun publikorako. Horixe adierazi dute nazioarteko erakunde guztiek, Europar Batasunekoek bereziki. Kirolaren berezko xedearen kontra doa debekatuta dauden substantzietz edo metodoez baliatzea. Gehienetan, gainera, osasunari berari egiten dio kalte praktika horrek. Kirolaren beraren nahiz kirolaren funtsezko balio eta oinarrien antinomia da dopina.

Europako Kirol Eredua izeneko dokumentuak, Europako Batzordeak eginak, agerian utzi zuen lehiakortasun handia dagoela gaur egun kirol profesionalean zein zaletuen mailan eta, kirolarien errendimendua handitzeko asmoz, gero eta gehiago erabiltzen direla debekatuta dauden substantziak eta metodoak. Hain zuzen, horixe bilakatu da arazo handienetako bat. Dopina pixkanaka-pixkanaka garatzen ari da, ikuspuntu kualitatibotik zein kuantitatibotik, eta kezkatzeko modukoa da. Alde batetik, kirolari dezentek debekatutako metodoak eta substantziak erabiltzen dituztela erakutsi dute hainbat azterketek eta, bestetik, kirolari bakoitza bere kasa dopatzeaz gain, antolatutako hainbat jarduera eta merkatu daude dopinaren inguruan.

Hortaz, gizarte osoaren eta, bereziki, kirolaren sektorearen gain izango du eragina proposatutako arauak.

3.- PROPOSATUTAKO ARAUAREN OINARRI JURIDIKOAK

Eskumenari dagokionez, komeni da adieraztea, lehenik eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoak erabateko eskumena duela kirol-gaietan, halaxe ezarri baita Autonomia Estatutuko 10.36 artikuluan. Eskumen horren babespean, Soin Kulturari eta Kirolari buruzko otsailaren 19ko 5/1988 Legea onartu zuen Eusko Legebiltzarrak, baina ez zuen dopinaren alorra arautu. Indarrean dagoen Kirolaren Legeak, ordea, arautu du alor hori.

Zehazki, Lege horren 4. artikuluan ezarri da ondoko hau dagokiela Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei: *“Dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea”*, eta eskumen hori gauzatzeari buruzko xedapen ugari ditu.

Horrez gain, Legeari beste eskumen batzuk ere aipatzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoak, bestetik, eskumen eskusiboa du kirol gaietan, eta eskumen horri esker dopatzea arautu ahal izan da egun indarrean den Kirolaren Euskadiko Legeari. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena dauka barneko osasunaren alorrean Estatuko oinarritzko legeak lege berrien bidez aurrera eramateko eta betearazteko, horretarako eskumena ematen baitio Autonomia Estatutuko 18. artikulua, eta

eskumena dauka, halaber, datuak babestearen alorrean. Azken eskumen horren ondorioz sortu da, hain zuzen ere, otsailaren 25eko 2/2004 Legea, Datu Pertsonalen Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.

Beraz, Eusko Legebiltzarrak arautu izan du dopatzearen gaia, alor horretan duen erabateko eskumena baliatuta.

Aurreproiektu honen bidez, erregulazio-esparrua aldatu baino ez da egingo. Hau da, oso gai konplexua denez, berariazko araudi baten barruan arautuko da dopina, kirol-araudi orokorrean arautu beharrean.

Espedientean jasota dagoen eta proposatutako lege-testua zehaztasun handiz aztertzen duen txostenean, azkenik, eskumenekin lotura duten beste gai batzuk aztertu dira.

4.- PROIEKTUA TRAMITATZEN HASTEKO KULTURA SAILAK DUEN ESKUMENAREN OINARRIA

Kultura sailburuak eskumena du txosten honetan aztergai dugun Lege Aurreproiektua izapidetzen hasteko, halaxe zehaztu baita maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuko 15.1.a) artikuluan. Lehendakariaren 4/2009 Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dira, eta horien egitekoak nahiz jardun-arloak finkatu. Hortaz, hizpide dugun Dekretuko 15.1.a) artikuluan adierazitakoaren arabera, Kultura Sailari dagokio kirolen jardun-arloa.

Horrez gain, Kultura Sailaren Egitura Organikoa ezartzen duen otsailaren 14ko 25/2006 Dekretuko 3.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, "Kultura sailburuari ondoko eskumen hauek egikaritzea dagokio: ekainaren 30eko 7/1981 Jaurlaritzaren Legearen 26. eta 28. artikuluetan ezarritakoak (...) eta indarrean dagoen legeriaren arabera dagozkionak". Eskumen horien artean izango da, beraz, bere jardun-esparruaren barruan dauden gaiei buruzko lege-proiektuak proposatzea, Gobernuak onar ditzan.

5.- ARAUA EGITEKO LANETAN ARTEAN DIREN ERAGILEEN LOTURA-MAILA ZEHAZTEA ETA, HALA BADAGOKIO, ENTZUNALDI PUBLIKOA IZAPIDETZEA

Proiektua bideratzeko lanetan parte hartuko dutenek ondoko eginkizun hauek izango dituzte:

- 1) Kultura sailburua:** Lege-aurreproiektuaren prozedurari ekiteko eta hura onartzeko aginduak ematea.
- 2) Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritza:** Txosten bat egitea, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 7.3 artikuluan araututakoaren arabera.
- 3) Entzunaldia eta jendaurrean jartzea:** Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 8. artikuluan araututakoa betez, ondoko hauei bidaliko zaie xedapen orokorra:

- Euskal Kirol Federazioen Batasunari.

Arabako Kirol Federazioen Elkarteari. Bizkaiko Kirol Federazioen Elkarteari. Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteari. Euskal Federazioei (48 guztira).

- Arabako Foru Aldundiari.

Bizkaiko Foru Aldundiari.

- Gipuzkoako Foru Aldundiari.

EKIME Euskadiko Kirol Medikuntza elkarteari.

Soin Jarduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialari.

Medikuen Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).

- Botikarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).

Albaitarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa). Osasun Publikoko Zuzendaritzari.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.

Eusko Jaurlaritzako Sailei (11 guztira).

- Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziari.

Horiei guztiei bidaltzeaz gain, iragarki bat argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Iragarki horren bidez, 20 egun balioduneko entzunaldiari hasiera emango zaio.

- 4) Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza:** txosten bat egitea, Justizia eta Herri Administrazioko Sailaren egitura eta funtzionamendua onartzen duen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuan xedatutakoaren arabera.
- 5) Funtzio Publikoko Zuzendaritza:** txosten bat egitea, Justizia eta Herri Administrazioko Sailaren egitura eta funtzionamendua onartzen duen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuan xedatutakoaren arabera.
- 6) Emakumearen Euskal Erakundea:** txosten bat egitea, halaxe ezarri baita Emakume eta Gizonen Arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 21. artikuluan eta aipatutako Erakundea sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legeko 3. d) artikuluan.
- 7) Hizkuntza Normalizaziorako Zuzendaritza:** txosten bat egitea, abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretuko 2. artikuluan xedatutakoarekin bat. Dekretu horren bidez ezarri da, hain zuzen ere, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan txostenak bideratzeko Kultura Sailak bete behar duen araudia.

- 8) **Kontrol Ekonomikoko Bulegoa:** ekonomiari eta araei buruzko txostena egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomi Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.
- 9) **Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa:** txosten bat egitea, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluan xedatutakoarekin bat.

6.- PROPOSATUTAKO ARAUTZEAREN ILDO OROKORRAK

Euskadiko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legea aplikatzean hartutako esperientzia oinarri harturik, ondoko hauek izan ditugu kontuan Lege-aurreproiektu hau egiteko: kirol-dopina prebenitzea, kontrolatzea eta hura zigortzea xede duten estatuko nahiz nazioarteko arauak, bereziki, Osasuna Babesteari Buruzko eta Kirolean Dopatzeren Kontrako azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organiko berria. Kirol-dopinaren aurkako borrokan aurreratuen dauden estatuko nahiz nazioarteko erakundeek onartutako printzipio eta arauetan oinarriturik dago proposatutako testuan jasotako araudia. Lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta hainbat lurralde-mailetakoa nahiz eremutako kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez, esparru juridiko komuna behar da.

Lege-aurreproiektuak zazpi kapitulu, 53 artikulua, zortzi xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, bi xedapen indargabetzaile eta bost azken xedapen ditu. Txosten honi erantsitako idatzian Lege-aurreproiektuaren edukia aztertu da, eta haren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu dira.

7.- KIROLEAN DOPATZEAREN AURKAKO LEGE-AURREPROIEKTUAREN ERAGIN EKONOMIKOA

Lege berriaren eraginez erakunde berri bat sortuko da, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia, eta, horren ondorioz, karga bat sortuko da aurrekontuetan. Hala ere, ez da inbertsio handirik egin edo langile-kopuru handia kontratatu beharko lege berria indarrean jartzeko. Bazen, alde batetik, dopina kontrolatzeko funtzioak eta, bestetik, kirola sustatzeko funtzioak bereizteko beharra, goi-mailako kirolean nahiz gainerako kirolean. Hortaz, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia bi funtzio mota horiek bereizteko sortu zen. Eusko Jaurlaritzako egungo Kirol Zuzendaritzak badu dopin-kontrolen gaian espezializatutako medikua. Horrez gain, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak kontrolak egiteko erabiliko dituen zerbitzu gehienak Kirol Zuzendaritzak kontratatu izan ditu gaur arte.

Halaber, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia oso erakunde sinplea izateko asmoarekin sortu da. Hau da, bi organo nagusi izango ditu: pertsona bakarreko organo bat –zuzendaritza– eta kide anitzeko beste bat –aholku-kontseilua–, kide-kopuru txikikoa, baina behar besteko tamainakoa.

Horrenbestez, agentzia horretan lau lagun aritzea aurreikusi da: goi-mailako arduradun bat, mediku arduradun bat, aholkulari juridiko bat eta administrari bat.

LANPOSTUA	Soldata	Gizarte Segurantzako	Guztira
Zuzendari bat (30. maila)	67.087,03	20.595,72	87.682,75
Arduradun mediko bat	52.340,48	16.068,50	68.408,98
Lege-aholkulari bat	48.262,81	14.816,31	63.079,12
Administrari bat (18. maila)	30.197,59	9.270,42	39.468,01

Horrenbestez, urtean 258.638,86 euroko gastua izango da langileen ordainsarrietan.

Agentzia horrek, halaber, gaur egun Kirol Zuzendaritzak egiten dituen dopin-kontrolak egingo ditu. Hau da, laborategi bat arduratuko da debekatutako substantziak erabili diren zehazteko analisiak egiteaz. Laborategi horri 70.000 euro ordainduko zaizkio urtean. Horrez gain, beste 30.000 euro gehiago beharko dira gernu- eta odol-laginak ateratzeko baimenduta dauden medikuei ordaintzeko.

Aipatutakoez gain, beste organo batzuk sortu beharko dira, hala Aholku Kontseilua nola Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea. Bietan lehenari dagokionez, 16/1993 Dekretuak araututako gastuak eta dietak izan ezik, ez da beste gasturik aurreikusten; funtzionamenduaren ohiko gastuetan sar daitezke gastuak oso-osorik. Bigarrenari dagokionez, ordea, kanpoko medikua kontratatu beharko da substantzien erabilera terapeutikoa aztertzeko; urtean 3.000 euro baino ez dira beharko horretarako.

Agentzia horren egoitzarentzako lokala dela-eta ez da gasturik sortuko, hura Bilboko San Mames Barria futbol-zelaiaren lokaletan kokatuko baita. Lokal horiek Eusko Jaurlaritzari eman dizkiote, parte hartu baitzuen kirol-instalazioa eraikitzeaz arduratu zen sozietatean.

Bitarteko materialei dagokienez (altzariak, informatika-ekipoak, material suntsikorra, eta abar), urtean 100.000 euro beharko direla aurreikusi da.

Arestian aipatutako guztia aintzat hartuta, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren eginkizunek urteko aurrekontuan 461.638,86 euroko gastua eragingo dutela aurreikusi da.

8.- GENERO-ERAGINA

Emakumeari buruzko Munduko Laugarren Konferentzia Pekinen (Beijing) izan zen 1995. urtean. Biltzar hartan, nazioarte-mailan dagoen konpromisoa berritu zen, hain zuzen, generoen artean berdintasuna lortzeko, bai eta emakume guztientzako garapena eta bakea lortzeko ere. Halaber, konferentzia horretan

governuei eta gainerako eragileei eskatu zitzaien “politika eta programa guztietan barnera zezatela genero-ikuspegia, emakumeengan eta gizonengan, hurrenez hurren, horrek dituen ondorioak aztertzeke edozein erabaki hartu aurretik”.

Europar Batasunari dagokionez, 1999ko maiatzaren 1ean Amsterdameko Tratatua indarrean sartzean garai berri bati ekin zitzaion, Europaren eraikuntza-prozesuan eta, batez ere, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunaren alorrean. Testuingurua halakoa izanik, Europar Batasuneko politikak egituratzeko orduan, badira kontuan hartu beharreko hainbat lehentasun; horien artean dago, esaterako politika guztietan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea eta desberdintasunak desagerraraztea. Europar Batasunean, bestalde, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko ekintza aurreikusi zen. Ekintza horren helburuak osatzeko asmoz, Kontseiluaren 2000. urteko abenduaren 20ko Erabakia onetsi zen. Erabaki horren bidez, Batasuneko ekintza-programa ezarri zen, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren arloko estrategiari buruzkoa (2001-2005). Hizpide dugun erabaki horretan zehaztu da, bestetik, zer ekimen gauzatu behar diren Batasuneko ekintza-programaren helburuak betetzeko. Ekimen horietako bat da, hain zuzen ere, Batasuneko esparru-estrategiaren esku-hartze eremuetan izandako eraginaren ebaluazioa sexuaren arabera egitea (ekonomia-bizitza, gizarte-bizitza, bizitza zibila, rolak...).

Bestetik, egiaztatu egin da hasiera batean sexistak ez ziruditen, sexistak izan zitezkeela aurreikusi ez zen, eta sexistak izan zitezela nahi ez zen hainbat erabaki politikok eragin desberdina izan dezaketela emakumeen eta gizonen gain. Horren aurrean, Europar Batasunak bi ekintza gauzatu ditu. Alde batetik, Batasuneko politiketan genero-ikuspegia sartzearen aldeko konpromisoa gauzatzeko lehen urratsa eman zuen EBk zeharkakotasunari buruzko "mainstreamin" idatzia onartzearen bidez. Bestetik, Batzordean erabili beharreko "Eragina generoaren arabera ebaluatzeko gida" egin zuen. Gida horren xedea zen, zehazki, diskriminazio-egoeren iturburu diren eta nahita sortu ez diren ondorio negatiboak saihestea eta, horrez gain, Batasuneko politiken kalitatea eta eraginkortasuna hobetzea.

Euskadik badu esparru horrekin bat datorren lege bat, Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legea. Jarraian, lege horren printzipio orokorrak aipatuko ditugu:

"3. artikulua. Printzipio orokorrak

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal herri-aginteen jarduna gidatu eta bideratuko duten printzipio orokorrak ondoko hauek dira: tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea; genero-ikuspegiaren integrazioa; ekintza positiboa; sexuaren arabeko rolak eta estereotipoak desagerraraztea, eta koordinazioa eta lankidetzak.

4.- Genero-ikuspegiaren integrazioa.

"Euskal botere publikoek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta

berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten”.

Lege honek izango dituen ondorioetarako, ondoko hau hartuko da genero-ikuspegiaren integraziozat: Emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrian ezberdinak modu sistematikoan kontsideratzea, eta, horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze- eta ebaluazio-fase guztietan, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea.

Generoaren araberako eragina aurretiaz ebaluatzea arautzen duen 19. artikuluan ondoko hau xedatu da:

“1- Administrazio-arau edo -egintza bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazio-organoak ebaluatu egin behar du zein den proposamen horrek emakumeek eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran izan lezakeen eragina. Horretarako, aztertu behar du administrazio-arau edo -egintzan proiektatu den jarduketak ondorio positiboak edo kontrakoak izan litzakeen emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatzeko eta horien arteko berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean.

2.-“Emakumearen Euskal Erakundeak proposatuta, arauak edo gidalerroak onetsi behar ditu Eusko Jaurlaritzak, non adieraziko diren, batetik, zein izan behar diren aurreko paragrafoetan aipatzen den generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko erregelak, eta bestetik, zer administrazio-arau edo -egintza dauden aurretiazko ebaluazio hori eta ondoko artikuluetan jasotzen diren gainerako izapideak egin behar izatetik salbuetsita”.

22. artikulua lege-aurreproiektuaren memoria honen edukiari berari buruzkoa da:

“22. artikulua.- Azalpen-memoria eta arauaren edo egintzaren onespena.

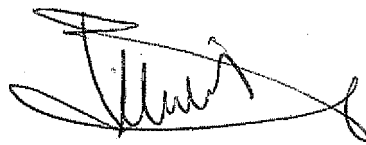
1.- Txosten bat bidali beharko da arau- edo xedapen-proiektuarekin batera. Txosten horretan zehaztasun handiz azaldu beharko da Lege honetako 19. eta 21. artikuluen harira zer izapide egin diren eta berorien emaitzak

2.- Dagokion administrazio-araua edo -egintza onetsi edo izenpetzean, aurreko paragrafoan aipatutako izapideak egin direla adierazi behar da, labur-labur bada ere.”

Horrenbestez, lege-aurreproiektu baten genero-eraginaren ebaluazioa egitearen helburua, batetik, bereizkeria-egoeren iturburu izan daitezkeen nahigabeko ondorio negatiboak saihestea da eta, bestetik, Europako Erkidegoko politiken kalitatea eta eragingarritasuna hobetzea xedapenaren eremuan. Proposatutako araudiak emakumezkoei eta gizonezkoei desberdin eragin diezaiekeen egiaztatzean datza ebaluazioa, bien arteko gizarte-desberdintasunak oinarri hartuta. Horrela, bada, kontuan hartuta behin betiko proiektuaren memoriarekin batera genero-eraginari buruzko azterketa xehea egin behar dela, nabarmentzeko modukoa da, besteak beste, esku artean duzun zirriborroak bere baitan hartzen dituen arauak ez dutela generoagatiko inolako eraginik eragiten. Lege-aurreproiektuaren zirriborroaren edukia aztertuz gero, ezin da esan hark bereizkeria-egoerarik eragiten dituenik, edo gizarte-desberdintasunak direla-eta desberdin eragiten dienik gizonezkoei eta emakumezkoei.

Nolanahi ere, aurreproiektuan ondoko eginkizun hauek ezarri zaizkio Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari: debekatuta dauden substantzien eta metodoen erabilerari buruzko informazioa eta horien kontrol-modalitateei buruzkoa jendarteratzea; dopinaren arrazoiei eta ondorioei buruzko txostenak eta azterketak egitea; prebentzio-ekintzak bultzatzea eta sustatzea; eta indarrean dauden arauak betetzen direla zaintzea. Eginkizun horiek betetzean, genero-ikuspegia integratu beharko du, dopinari eta dopinak gizon nahiz emakume kirolariengan dituen ondorio zehatzei buruzko ikerketa sustatzeko eta horren berri emateko.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko ekainaren 15ean.



Patxi Mutiloa Aldazabal Kirol Zuzendaria

VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS AL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE

El Anteproyecto ha sido elaborado por la Dirección de Deportes, habiendo sido remitido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, a las siguientes entidades, según consta en el expediente:

- Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
- Asociación de Federaciones Deportivas de Álava.
- Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia.
- Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa.
- Federaciones Vascas (totalidad de las existentes: 48)
- Diputación Foral de Álava.
- Diputación Foral de Bizkaia
- Diputación Foral de Gipuzkoa
- Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekime
- Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- Colegio Oficial de Médicos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
- Colegio Oficial de Farmacéuticos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa)
- Colegio Oficial de Veterinarios (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa)
- Dirección de Salud Pública.
- Agencia Vasca de Protección de Datos.
- Departamentos Gobierno Vasco (totalidad de los existentes: 11).
- Agencia Estatal Antidopaje.

Asimismo se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco un anuncio por el que se ha dado trámite de audiencia (BOPV nº 229 de 29 de noviembre de 2010)

Por su parte y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 y 11 de la citada Ley 8/2003 se han recibido informes de los siguientes órganos:

- Asesoría Jurídica del Departamento de Cultura.
- Emakunde.
- Viceconsejería de Política Lingüística.
- Dirección de Innovación y Administración Electrónica
- Consejo Económico y Social

En este apartado hay que hacer constar que, remitido el anteproyecto (con fechas 15 de octubre de 2010 y 15 de julio de 2011) a la Dirección de Función Pública solicitando la realización de un informe, éste, a fecha del presente escrito, aún no ha sido remitido a esta Dirección

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo IV del Título III de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y artículo 3 de la Ley 9/2004 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi tanto la Oficina de Control Económico Normativo como dicha Comisión han emitido los correspondientes informes.

Como consecuencia de los trámites expuestos, se han recibido las siguientes alegaciones cuya valoración se realiza a continuación:

1.- ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO.

Por parte de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco se presenta un escrito, de 1 de diciembre de 2010, de 5 folios de extensión, en el que se formulan observaciones al anteproyecto citado.

El artículo 1.6 del anteproyecto contiene una definición de deportista. Según la citada Dirección, *"toda actividad física que realicen las personas, independientemente de su edad o de la intensidad con que se practique, convierte a estas en deportistas"*. Y a continuación añade: *"Y sin cuestionar, en este momento, la relación entre cualquier actividad física y el deporte, esta relación no resulta de naturaleza superior a la relación existente entre la actividad física y la salud. La actividad física es considerada en muchas ocasiones como un remedio para curar o prevenir enfermedades diversas (y quien practique una actividad física como puede ser andar, nadar, etc. Para curar una enfermedad ¿es un deportista o es una persona enferma o que quiere prevenir enfermedades?)... Y esta concepción de la actividad física (práctica deportiva) formaría parte de las competencias que en materia de prevención y promoción de la salud corresponden al Departamento de Sanidad y Consumo"*.

Realmente, la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales no realiza una sugerencia o propuesta de modificación, sino que realiza una reflexión en torno a la actividad física y a la competencia que corresponde en esta materia al Departamento de Sanidad y Consumo. En cualquier caso, tal reflexión precisa de algunas puntualizaciones.

En primer lugar, la definición del dopaje, que se realiza en el apartado primero y en el apartado segundo, va referida a la utilización de sustancias o métodos prohibidos cuando ello representa una conducta contraria al espíritu deportivo o al principio de juego limpio (fair play), es decir, el anteproyecto se inserta en el ámbito de las competiciones deportivas. En el escrito de la citada Dirección se da un salto conceptual entre la práctica de un deporte y la práctica de cualquier actividad física. La citada Dirección incurre en la confusión entre los términos *deporte* y *actividad física* que, en realidad, no significan exactamente lo mismo. Aunque la pluralidad de significados del término *deporte* ocasiona más de un problema en ocasiones, lo que en esencia caracteriza al deporte frente a otras manifestaciones físicas es el objeto competitivo y bajo unas reglas aceptadas como deportivas en el marco territorial correspondiente.

En segundo lugar, resulta necesario matizar que el apartado tercero del artículo 1 establece que el ámbito material general de la Ley está constituido por determinadas competiciones deportivas y, al mismo tiempo, se relacionan las competiciones deportivas que quedan excluidas del ámbito material de la Ley. Por tanto, el ámbito de la Ley no es la protección de la actividad física en general, sino la limpieza de las competiciones deportivas y la salud de los deportistas que participan en las mismas.

En tercer lugar, en la definición de deportista, a la que hace referencia la citada Dirección, se dice que se consideran deportistas todas aquellas personas "que



practiquen algún deporte", es decir, en la definición no se emplean los términos "actividad física". A mayor abundamiento, el artículo 2 establece la obligación de las y los deportistas de someterse, dentro y fuera de las competiciones, al control de dopaje al que se les requiera. Todo del texto de la Ley está impregnado de la vinculación del deportista y el dopaje a la competición deportiva. Es decir, en ningún momento forma parte del ámbito de la Ley a los simples practicantes de actividad física.

Lo que pretende la definición amplia de deportista del anteproyecto es no restringir el concepto de deportista a las personas que cuentan en un determinado momento con licencia federada. Por ello, el anteproyecto incluye en su ámbito al deportista que habiendo tenido licencia y no habiéndola renovado en el plazo establecido, cuando existe una presunción razonable de que no ha abandonado la práctica deportiva de entrenamiento y competición y pueda estar tratando de eludir la realización de controles de dopaje fuera de competición hasta la renovación de la misma (artículo 13.5 del anteproyecto y artículo 5.2 de la Ley Orgánica 7/2006).

Finalmente, resta señalar que el anteproyecto proporciona la misma definición de deportista que el artículo 66.1 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, texto legal cuyo objeto es el deporte y que se aprobó por el Parlamento Vasco al amparo de la competencia exclusiva en deporte, prevista en el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía. Nunca se ha cuestionado tampoco la competencia de la Administración deportiva en esas cuestiones deportivas, a pesar de que la propia Ley 14/1998 reconoce de forma constante la indudable relevancia sanitaria del fenómeno deportivo.

Por parte de la Dirección se formulan también alegaciones respecto al artículo 15 del Anteproyecto, que aborda las obligaciones accesorias y las autorizaciones de uso terapéutico. La citada Dirección considera que es evidente la estrecha relación entre el libro que debe llevar cada club o federación, en el que deben hacer constar los tratamientos médicos y sanitarios que hayan prescrito a los deportistas, y la Historia Clínica, que es el documento en el que se reflejan los procesos asistenciales que tiene cada persona, incluyendo el diagnóstico y tratamiento.

Ante esta alegación debe indicarse que el anteproyecto ha tratado de recoger las previsiones contenidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2006, sobre obligación de llevanza del libro registro citado. Y el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, es el que ha desarrollado las cuestiones planteadas por la Dirección. Concretamente, este Real Decreto dispone que *"los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto tienen el deber de crear, registrar y mantener actualizado un libro-registro de tratamientos sanitarios de los deportistas susceptibles de producir dopaje en el deporte, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 37 de la Ley Orgánica 7/2006 en el presente capítulo y, en su caso, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica"*.

Por tanto, es el propio Real Decreto el que establece la competencia de la Agencia Estatal Antidopaje para determinar el formato de los libros-registro, garantizando su integridad e inalterabilidad, y el que establece el siguiente contenido:

"Los tratamientos sanitarios se harán constar por el personal sanitario los tratamientos médicos y sanitarios que hayan prescrito a los deportistas bajo su dirección, siempre que éstos consientan dicha"



inscripción, ya sea con ocasión de cada tratamiento o de manera genérica para todos los asientos que deban realizarse en el libro-registro. Los productos farmacéuticos: se inscribirán por el personal sanitario los medicamentos y/o productos sanitarios que se hayan administrado, el médico que ordene o autorice dicha utilización y el periodo de tratamiento. En el caso de los medicamentos no sujetos a prescripción médica se inscribirán los que se hayan dispensado a los deportistas.

Asimismo, en el Real Decreto se dispone que en los asientos del libro-registro relativos a cualquier procedimiento médico, terapéutico o sanitario que se vaya a prescribir o aplicar a un deportista y que se considere dopaje, o incluso que se administre con finalidad médica y la debida autorización terapéutica, deberá incluirse un apartado o anexo en el que el deportista exprese su consentimiento informado.

El Real Decreto citado atribuye a la Agencia Estatal Antidopaje la determinación de los procedimientos centralizados o descentralizados de base de datos con utilización de las tecnologías de la información e identificación electrónica, como la firma digital y los sistemas de historia electrónica única y centralizada, así como suministrar formularios específicos para recabar el consentimiento informado de los deportistas que deban someterse a procedimientos médicos, terapéuticos o sanitarios. Asimismo, dicha disposición prevé que la Agencia Estatal Antidopaje constituya y mantenga un registro para la inscripción del libro citado y de sus sucesivas ampliaciones.

Por todo lo anterior, se considera que el anteproyecto de ley contiene las menciones básicas y deberá ser el Decreto de desarrollo correspondiente, aprobado por el Consejo de Gobierno, el que determine las diferentes cuestiones suscitadas.

La Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales, partiendo del concepto de dopaje que se contempla en el artículo 1 del anteproyecto, considera que tienen cabida dentro del ámbito de la ley los estupefacientes, los psicotropos y otro tipo de medicamentos. Por ello, a su juicio, se hace necesario recoger la relación existente entre este Anteproyecto y los artículos 11 y 12 de la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias, así como la relación de esta Ley con las competencias que corresponden al Departamento de Sanidad y Consumo, para la aplicación de la Ley 29/2006, de 26 de junio, de garantías y uso racional de los medicamentos.

Respecto a esta alegación deben realizarse diversas precisiones. En primer lugar, el artículo 1, apartado 1, hace una referencia al concepto general de dopaje, concepto que se concreta posteriormente mediante una lista de sustancias y métodos prohibidos. Dicha lista no es fija o permanente, sino dinámica, está en constante proceso de cambio y sus modificaciones se publican en el Boletín Oficial del Estado, hasta ahora, y también en el Boletín Oficial del País Vasco a partir de la aprobación del anteproyecto. Algunas de las sustancias y métodos prohibidos que se encuentran en esas listas estarán dentro del ámbito de la Ley 18/1998 y otros no. El criterio de inclusión de productos o sustancias en esas listas es independiente de la legislación sobre drogodependencias.

Los artículos 11 y 12 de la citada Ley 18/1998 disponen que la Administración sanitaria, en el marco de la legislación vigente, prestará especial atención al control e inspección de estupefacientes y psicotropos, y de los medicamentos que los contengan, en las fases de producción, distribución y dispensación, así como al control e inspección de los laboratorios, centros o establecimientos que los produzcan, elaboren o importen, de los almacenes mayoristas y de las oficinas de farmacia. Asimismo, se establece que, con objeto de evitar el consumo para fines no terapéuticos de los medicamentos que contengan estupefacientes o psicotropos,

aquellos se prescribirán mediante receta en los términos previstos en la normativa básica correspondiente.

Asimismo, la citada Ley dispone, en relación con la prevención y la correcta utilización de los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, que la Administración sanitaria realizará el seguimiento de la utilización por parte de la población de estos medicamentos, para conocer los tipos y cantidades de productos utilizados, así como otros aspectos que pudieran tener relevancia para la salud pública. También prestará especial atención a la educación social para la prevención del uso extraterapéutico de estos medicamentos mediante campañas de concienciación de los usuarios potenciales y efectivos, y de información general y específica de los productos en cuestión, así como a la prevención del desvío al tráfico ilícito de tales sustancias. De igual modo, establecerá cauces de relación con el estamento médico y con el farmacéutico a fin de concretar planes tendentes al uso moderado de estos medicamentos, así como a la detección de consumos abusivos, para paliarlos.

A juicio de esta Dirección de Deportes no constituye menoscabo o interferencia en las citadas funciones de la Administración sanitaria, quien debe seguir ejerciendo dichas funciones. La legislación sobre el dopaje no habilita a los deportistas a consumir sustancias o productos prohibidos por la Administración Sanitaria o fuera de los cauces y procedimientos previstos. Lo que sucede es lo contrario. Los deportistas sólo pueden emplear aquellas sustancias o productos que se prescriben o dispensan al resto de los ciudadanos, pero tal empleo debe respetar unos límites y condiciones adicionales para garantizar unas competiciones limpias y evitar el engaño deportivo. Respecto a la relación de este anteproyecto con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos, debe señalarse que es la misma relación que detenta la Ley Orgánica 7/2006 con la misma. La Ley 29/2006 regula, en el ámbito de las competencias que corresponden al Estado, los medicamentos de uso humano y productos sanitarios, su investigación clínica, su evaluación, autorización, registro, fabricación, elaboración, control de calidad, almacenamiento, distribución, circulación, trazabilidad, comercialización, información y publicidad, importación y exportación, prescripción y dispensación, seguimiento de la relación beneficio-riesgo, así como la ordenación de su uso racional y el procedimiento para, en su caso, la financiación con fondos públicos.

Se trata de un ámbito competencial estatal y el anteproyecto de ley sobre el dopaje en el País Vasco no interfiere ni regula dicho ámbito de los medicamentos. Con el nuevo anteproyecto todos los profesionales que intervienen en el ámbito de los medicamentos de uso humano y los productos sanitarios deben cumplir las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico general, sin exclusión de la Ley 29/2009 y además, en el ámbito de la lucha contra el dopaje, deben cumplir una serie de obligaciones adicionales previstas en la ley Orgánica y en este anteproyecto de Ley. Y los deportistas, para tratar cualquier lesión o enfermedad, pueden recibir libremente el tratamiento terapéutico que se considere adecuado para tratar cualquier lesión o enfermedad, pero no estarán habilitados para participar en competiciones deportivas en determinados supuestos y condiciones.

Por parte de la Dirección de Régimen Jurídico Económico y de Servicios Sociales se señala que en el artículo 46, apartado 7, se dispone que la Tarjeta de Salud del Deportista funciona como llave de acceso a la base de datos inherente a la Tarjeta, pero no contendrá datos de salud de la o el deportista. Sin embargo, a juicio de la Dirección, se produce una contradicción con los apartados 3, 4, 5 y 6 del mismo

artículo, pues en ellos se sigue haciendo referencia a "los datos contenidos en la tarjeta".

Esta duda de la Dirección tiene una sencilla explicación. Cuando se habla de la Tarjeta de Salud del Deportista cabe referirse a ella haciendo alusión al "sistema" o al "soporte físico" (plástico o análogo). La Tarjeta de Salud del Deportista, como sistema, debe contener, por supuesto, información o datos del deportista (reconocimientos, controles, etcétera). Y ello es consecuente con su finalidad de que el o la deportista y el personal sanitario que le atienda dispongan de la mejor información en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia o enfermedad. La Tarjeta de Salud del Deportista está compuesta por algunos elementos de diferente naturaleza (físicos, lógicos, datos, etcétera) y lo que se quiere significar en el apartado 7 es que el "soporte físico" no albergará datos. Recuérdese que la vigente Ley 14/1998 contempla una cartilla sanitaria del deportista, que está configurada como un soporte físico para anotar los reconocimientos médicos, informaciones médico-sanitarias y otros datos de interés. El considerable tiempo transcurrido desde que se gestó aquella Ley, las nuevas disposiciones legales aprobadas en materia de protección de datos, en materia de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como los evidentes avances tecnológicos, explican la propuesta de cambio del anteproyecto así como la aclaración sobre la información en el soporte físico.

Respecto al artículo 46, apartados 8 y 9, se realizan por parte de la citada Dirección varias observaciones. En primer lugar se señala que se debería definir en el propio articulado de la Ley los sujetos a los que se extenderá la Tarjeta de Salud del Deportista, así como unas características técnicas básicas de la misma y su posible relación e interacción con la Tarjeta Individual Sanitaria.

El anteproyecto especifica en su apartado primero a qué deportistas se expedirá la Tarjeta de Salud del Deportista, concretamente dispone que se expedirá a deportistas con licencias federativas y universitarias y a aquellos colectivos de deportistas que se determinen reglamentariamente. Aunque la Dirección alegante considera, respecto al alcance poblacional de esta tarjeta, que prácticamente en su totalidad corresponde a personas que disponen de la Tarjeta Individual Sanitaria, lo cierto es que no van a coincidir los sujetos titulares de ambas tarjetas. No todos los deportistas con licencia federativa o universitaria vasca residen en el País Vasco como es el caso de deportistas de Hendaya, Castro Urdiales, Bera de Bidasoa, Treviño, etcétera. Asimismo, todavía existen colectivos profesionales (abogados, arquitectos, etcétera) que dispondrán de licencia federativa vasca pero no son titulares, al menos de momento, de la Tarjeta Individual Sanitaria. Por tanto, pueden existir numerosos deportistas con licencia vasca que carecen de la Tarjeta Individual Sanitaria y, por el contrario, también existirán deportistas que residen en el País Vasco, que dispondrán de la Tarjeta Individual Sanitaria, pero no podrán acceder a la Tarjeta de Salud del Deportista porque compiten en Francia, en Navarra, en Cantabria, en La Rioja, etcétera, con licencias de otros ámbitos territoriales.

Respecto a las características básicas de la tarjeta, el artículo 46 del anteproyecto responde al contenido que el artículo 49 de la Ley Orgánica 7/2006 establece respecto a la tarjeta estatal y, en todo caso, se trata de una materia que debe ser objeto de desarrollo reglamentario. Y la explicación es sencilla de comprender, se trata de una materia susceptible de modificaciones técnicas y legislativas.

Otra de las dudas que plantea esta Dirección es si la base de datos a que da acceso la Tarjeta de Salud del Deportista es la misma que la que daría soporte al "sistema de información sobre dopaje", previsto en el artículo 43, y si también incluye o coincide con el sistema de la historia clínica electrónica única y centralizada.

Sobre este particular debe decirse que las bases de datos del artículo 43 del anteproyecto y las bases de datos del artículo 46 son bases de datos con contenidos y objetivos diferentes y con organismos responsables también diferentes; en un caso es la Agencia Vasca Antidopaje y en otro es la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. Tales bases de datos estarán interrelacionadas pues parte de los datos de una pasarán a formar parte de la otra base de datos. Y el artículo 43.6 ya dispone que la base de datos estará a disposición de las administraciones públicas sanitarias en los términos de acceso que se establezca reglamentariamente y que permitan las disposiciones vigentes.

Por último, por parte de la Dirección alegante se considera que no resulta adecuado que el anteproyecto prevea la posibilidad de realizar una encomienda de gestión al Departamento de Sanidad y Consumo para la *'realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios relacionados con la citada tarjeta'*. El argumento que proporciona la citada Dirección es lógico pues para esas mismas actividades relacionadas con la base de datos de la Tarjeta Individual Sanitaria el propio Departamento de Sanidad y Consumo viene estableciendo encomiendas de gestión con EJIIE (Sociedad Informática del Gobierno Vasco). La explicación de tal previsión en el anteproyecto es sencilla de entender, la encomienda de gestión se incorporó como consecuencia de la sugerencia recibida en una reunión mantenida en la Dirección de Deportes con el anterior Director de Financiación y Contratación del Departamento de Sanidad y la anterior Directora de la Oficina de Modernización Administrativa.

II.- ALEGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia presenta un escrito, fechado el 9 de diciembre de 2010, de un folio de extensión en el que realiza dos consideraciones.

En primer lugar, apunta que el artículo 1, en su apartado 5, referente al ámbito de aplicación de la Ley, establece que la misma se extiende a los y las deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas. Y luego el apartado 6 define al deportista. A continuación añade que *"de ello podría desprenderse que no sería objeto de esta Ley el control antidopaje en animales"*. Sin embargo, el Departamento de Agricultura reconoce a continuación que el artículo 2.b cita que el dopaje puede afectar gravemente a la salud de los animales. Por ello, sugiere el Departamento definir mejor su ámbito.

A nuestro juicio, el ámbito del anteproyecto es muy claro y quizás el Departamento de Agricultura no ha leído detenidamente todo el articulado del anteproyecto y por ello no ha comprendido bien la delimitación del ámbito de la Ley. En el artículo 1.1 se hace una definición de dopaje y en el apartado 2 de dicho artículo se aclara que *"la misma definición de dopaje resulta de aplicación, con las adaptaciones procedentes, a las competiciones deportivas en las que intervienen animales"*. Es decir, en los dos primeros apartados del artículo 1, referentes a la definición del dopaje, están incluidas las competiciones deportivas con participación de animales. El apartado 3 del artículo 1 se establece una definición de dopaje a los efectos sancionadores y se refiere a las personas físicas y jurídicas infractoras. La imputabilidad sancionadora de los animales impide que queden incluidos dentro del grupo de las personas físicas y jurídicas que se encuentran sometidas a la potestad sancionadora o disciplinaria correspondiente, pero sí pueden incluirse en este grupo los jinetes, preparadores y demás personas relacionadas con los animales que intervienen en las competiciones.

El apartado 4 se refiere al ámbito material de la Ley y en este caso se refiere a todo tipo de competiciones, participen o no animales.

Por otra parte, el artículo 2 establece los principios generales por los que se rige el deporte en el campo de la lucha contra el dopaje y menciona que el dopaje puede atentar gravemente a la salud de los animales; el artículo 4 se refiere al personal auxiliar de los deportistas y de los animales; la disposición adicional primera habilita al Gobierno Vasco *"para dictar las disposiciones que fueran necesarias en la adaptación o aplicación de las previsiones recogidas en la presente Ley al ámbito específico de la prevención, control y represión del dopaje en animales que participen en competiciones deportivas"*, etcétera. Por tanto, el anteproyecto no deja margen a la duda sobre la inclusión de las competiciones con animales dentro del ámbito de la Ley.

La segunda consideración que realiza el Departamento de Agricultura es que los controles antidopaje que vienen realizando los Servicios de Ganadería de las Diputaciones Forales deberían buscar algún tipo de encaje en la nueva Ley *"en caso de que ésta también incluya el dopaje de animales"*. Este tema ya se encuentra tratado en la memoria del anteproyecto. En ella se explica que el anteproyecto no aborda la problemática del dopaje en los deportes con animales desde una perspectiva integral, el anteproyecto se limita a regular la materia desde la perspectiva de la limpieza de la competición deportiva y no desde el punto de vista de la protección de los animales, pues la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, del Parlamento Vasco, establece en su artículo 4.2.e la prohibición de suministrar a los animales alcohol, drogas o fármacos o practicarles cualquier tipo de manipulación artificial que pueda producirles daños físicos o psíquicos, aún cuando seas para aumentar el rendimiento en una competición. En desarrollo de dicha Ley, y al amparo de la competencia sobre protección animal, no de deportes, el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 6/1997, de 22 de enero, de control del uso de drogas en animales que intervienen en actos culturales y deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tales disposiciones, tal y como se expone en la citada memoria, han sido desarrolladas por normas de las instituciones comunes (Gobierno Vasco) y por los órganos forales de los territorios históricos (Diputaciones Forales) para evitar a los animales sufrimientos innecesarios, para protegerlos ante comportamientos inadecuados. Tales disposiciones no se han aprobado al amparo de las competencias en materia deportiva ni pretenden garantizar el normal desarrollo de las competiciones deportivas, o de preservar el juego limpio, el espíritu deportivo de las competiciones.

Como consecuencia de tal tratamiento dual de la problemática del dopaje en competiciones con animales, cabe la posibilidad de que existan controles de dopaje a los animales al amparo de la normativa deportiva y que existan controles de dopaje al amparo de la legislación sobre protección de animales, con arreglo a listas, procedimientos, etcétera, diferentes. Por ello, la disposición adicional única trata de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas instancias.

III.- ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO.

La única observación que realiza la Dirección de Innovación y Administración Electrónica del Departamento de Justicia y Administración Pública es a propósito del futuro Estatuto de la Agencia Vasca Antidopaje y señala que el mismo deberá recoger detalladamente todos los aspectos de organización, funcionamiento y procedimiento teniendo en cuenta los criterios de austeridad que prevé la Disposición Final Primera del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y

modificación de los de Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos

IV.- ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO.

Por parte de la Dirección de Salud Pública se realizan una serie de **consideraciones generales**. En primer lugar, se manifiesta que la redacción adquiere en muchos momentos una redacción cercana al artículo de opinión o académico que al texto legislativo. Por ello, dicha Dirección de Salud Pública desaconseja el uso de términos que implican el uso de juicios de valor y se refiere concretamente a los términos *"lacre"*, *"trama organizada"* y el superlativo *"muy"*.

Sin embargo, consideramos que la palabra *"lacre"* no constituye un juicio de valor o un término propio de un artículo de opinión. Tal término aparece en numerosos textos oficiales en relación a la lucha contra el dopaje como, por ejemplo, en la propia Ley Orgánica 7/2006, en la que aparece en varias ocasiones.

Respecto a la expresión *"trama organizada"* tampoco constituye un juicio de valor o una valoración subjetiva y, al igual que en el caso anterior, también se ha venido empleando en textos legales (Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal) y en numerosas sentencias del Tribunal Supremo.

En lo referente al adverbio *"muy"* debe señalarse que la mayoría de leyes aprobadas por el Parlamento Vasco están impregnadas de dicho adverbio. Baste recordar que, por ejemplo, es unánimemente empleado para la tipificación de las infracciones y sanciones en leves, graves y *"muy graves"*.

Respecto a la exposición de motivos, se acepta modificar la expresión *"alcanzar mayor eficacia en combatir el dopaje"*, de la página segunda, párrafo tercero, por la frase *"alcanzar mayor eficacia a la hora de combatir el dopaje"*. Dado que con esta modificación se mejora el texto.

En la página cuarta, párrafo tercero, la exposición de motivos hace una referencia a los controles de salud. A juicio de la Dirección de Salud Pública los citados controles de salud *"exceden de las competencias asignadas a los centros deportivos (s/c)"*. Tal órgano considera que puede constituir una vulneración del derecho a la intimidad facultar a cualquier entidad y, en consecuencia, este párrafo debe precisar más las actuaciones, las garantías de protección de los derechos y la asignación de competencias.

Sobre esta consideración general de la Dirección de Salud Pública deben realizarse diversas observaciones. En primer lugar, los controles de salud que contempla la Ley se articulan a través de las entidades deportivas, no de los *"centros deportivos"*. En segundo lugar, no debe perderse de vista que los controles de salud vienen realizando en el ámbito del deporte de competición desde hace muchísimos años, sin que se haya cuestionado en sede jurisdiccional su constitucionalidad. En tercer lugar procede señalar que Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, contempla en su artículo 8 los controles de salud.

Respecto a la necesidad de que la exposición de motivos sea más extensa y precise las actuaciones, las garantías de protección de los derechos y la asignación de competencias, conviene precisar que las dichas exposiciones tienen por objeto los

motivos generales que dan lugar a la aprobación de la ley, los objetivos perseguidos, los fundamentos habilitantes y los principios y líneas generales para su mejor entendimiento (Orden de 6 de abril de 1993, sobre las directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos, ordenes y resoluciones). Y el párrafo de la exposición de motivos del anteproyecto que se dedica en exclusiva a los controles de salud es de 28 líneas, es decir, ya cuenta con una generosa extensión. De hecho, la propia Dirección de Salud Pública considera que la exposición de motivos es una *"muestra de esta extensión excesiva"*. Por tanto, se considera que no procede incluir en la Exposición de Motivos, sino en la memoria justificativa en todo caso, todas las cuestiones antes comentadas.

La Dirección de Salud Pública propone una redacción alternativa en la página 5, párrafo cuarto, de la exposición de motivos. Propuesta aceptada por esta Dirección de Deportes

En la página 6, párrafo cuatro, de la exposición de motivos, se hace una referencia a la necesidad de proteger la salud de todas las personas deportistas *"con independencia de su condición"*. Por parte de la Dirección de Salud Pública se sugiere *"especificar a qué condición hace referencia"* la citada exposición. Propuesta que se rechaza por varias razones. En primer lugar, el párrafo establece que la protección de la salud no puede ceñirse a los deportistas que participan en competiciones oficiales con licencia, sino que debe protegerse la salud de toda persona deportista que participa en competiciones como, por ejemplo, las pruebas deportivas extremas, sin licencia federada. En segundo lugar, la expresión *"con independencia de su condición"* tiene un objetivo de amplitud, de no limitación, y por ello se pretende evitar precisamente la especificación. En el sistema deportivo de competición conviven muchos subsistemas (deporte federado, deporte universitario, deporte escolar, pruebas populares, etcétera) y lo que pretende la expresión empleada en la exposición de motivos es proteger la limpieza de todo tipo de competición deportiva y la salud de los y las deportistas que participan en las mismas con independencia de si son de alto nivel, de alto rendimiento, talentos deportivos o simples deportistas aficionados.

En la misma línea, y en relación al párrafo anterior, la Dirección de Salud Pública propone que la exposición de motivos *"debe contener el motivo por el cual se valora necesario un régimen especial para deportistas populares"*.

Sin embargo, hay que resaltar que la exposición de motivos ya explica el motivo de tal régimen especial. Por un lado, a un deportista popular no se le pueden establecer las mismas obligaciones que a los deportistas que participan en competiciones oficiales, pero la exposición de motivos considera que también deben impedirse actos contrarios al espíritu deportivo en las pruebas deportivas y asimismo debe garantizarse la protección de la salud de los deportistas que participan en competiciones deportivas extremas o de gran exigencia física.

Por parte de la Dirección de Salud Pública se formula reparo a la frase siguiente, *"una ley que sólo trate de proteger la salud de deportistas con licencia no puede ser una buena ley"*. No hay ningún inconveniente para suprimir tal frase o modificarla.

En la página 6, párrafo último de la exposición de motivos, se sugiere eliminar el sustantivo *"vacra"*. Ya se ha realizado anteriormente una consideración sobre esta sugerencia.

Sobre los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 se propone, por parte de la citada Dirección, un artículo que agrupe todos ellos, diferenciando por grupos los que se contemplen de forma específica. En relación con esta sugerencia cabe mencionar que se ha considerado importante visualizar cada grupo de personas con su propio nivel de

responsabilidades y que los artículos, según las directrices de técnica normativa, *"deberán ser breves"*. En este sentido, la extensión del artículo, si se sigue la propia observación inicial de la Dirección de Salud Pública, sería excesiva.

Respecto al artículo 1.1, se indica, por parte de la Dirección de Salud Pública, que la definición de dopaje debe ser objeto de aclaración pues en el texto se dice que la conducta representa *"un acto contrario al espíritu deportivo"*. Como ya se explica en la memoria justificativa, la definición de dopaje se ha sustentado básicamente en las definiciones contenidas en los diferentes instrumentos aprobados por las organizaciones internacionales. Por ello, en la definición del dopaje se ha puesto el acento en que el consumo de una sustancia o la utilización de medios que se encuentran prohibidos representan, además de un posible riesgo para la salud de los deportistas, una trampa deportiva, un engaño deportivo o un acto contrario al espíritu del deporte basado en el juego limpio.

Resulta comprensible que para los órganos gubernamentales algo más alejados del ordenamiento jurídico del deporte parezcan extraños algunos términos, pero debe decirse que el anteproyecto se ha basado en la terminología empleada en el ámbito material propio de la Ley. Así lo dice, por ejemplo, la Carta Europea contra el Dopaje en el Deporte, de 1984, cuando señala que *"el uso de productos dopantes es a la vez peligroso para la salud y contrario a la ética deportiva"*. Asimismo, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, se refiere al *"espíritu de una competición justa, limpia y entre iguales"*. Tampoco podemos perder de vista que la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005, cuyo Instrumento de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero de 2007, se refiere a que el dopaje constituye un acto contrario al principio de juego limpio (fair play).

La Dirección de Salud Pública considera que el artículo 1.3 contiene una redacción confusa, pero no se indica qué parte induce a confusión.

El artículo 2 dispone que el dopaje se regirá en la Comunidad Autónoma por una serie de principios y en el apartado b se indica que *"el dopaje puede afectar gravemente a la salud de las y los deportistas y, en su caso, animales"*. Según la Dirección de Salud Pública *"hay una confusión en la redacción entre deportistas y animales que puede dar lugar a chanzas"*. El firmante de este informe desconoce qué parte del texto transcrito puede dar lugar a chanzas pues es evidente que el dopaje puede afectar gravemente a la salud de los deportistas y a la salud de los animales (salud animal). En cualquier caso, se sugiere decir *"o, en su caso, de los animales"*.

Respecto al citado artículo 2, apartado c, se indica que la redacción es confusa pues el texto habla de *"sustancias y métodos que figuren prohibidos, por la normativa correspondiente"*. La Dirección de Salud Pública se pregunta *"¿cuál es el organismo competente?"* o *"cuál es la normativa correspondiente"*. En nuestra opinión el anteproyecto dedica suficiente extensión a la determinación de ambas cuestiones. Su artículo 20 se centra de forma monográfica en la publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos y la competencia de la Agencia Vasca Antidopaje para ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

El artículo 4 se refiere a las responsabilidades del personal auxiliar de las y los deportistas y de los animales que participen en competiciones deportivas. Considera la Dirección de Salud Pública que, tal y como está redactado el texto, se *"pone al mismo nivel a las personas y a los animales"*. Debe aclararse en primer lugar, que se ha seguido el criterio de técnica normativa de agrupación de normas que son de común aplicación. De hecho, la propia Dirección de Salud Pública realiza una consideración general sobre este Capítulo I en el sentido de sugerir la reunión en un solo artículo de



las responsabilidades de deportistas, personal auxiliar poderes públicos, entidades deportivas, organizadores, etcétera.

Pues bien, la normativa comunitaria y las leyes aprobadas por el parlamento estatal y los parlamentos autonómicos reconocen expresamente que los animales tienen una salud y una sensibilidad física y psíquica que deben ser objeto de protección. Y partiendo de ello no puede perderse de vista que el artículo 4 no se refiere a las responsabilidades de los deportistas y de los animales, sino a las responsabilidades *"del personal auxiliar"* de las y los deportistas y de los animales. Y, por último, cabe añadir que el anteproyecto en modo alguno iguala el régimen jurídico de deportistas y animales. Las y los deportistas tienen un catálogo de derechos y obligaciones, unos procedimientos, etcétera, y nada de ello se contiene en relación a los animales.

El artículo 8 del anteproyecto establece un enunciado general de los derechos y deberes de los deportistas. En el apartado c) se indica que es un derecho de los deportistas *"presentar alegaciones ante una notificación de presunto dopaje"*. La Dirección de Salud Pública se pregunta dónde debe presentar las alegaciones. Desde esta Dirección de Deportes se considera que el Capítulo I, dedicado a los principios rectores, a las disposiciones generales, no es la sede adecuada para regular los órganos ante los que puede presentar alegaciones. El Capítulo IV del anteproyecto presenta una gran extensión y establece el régimen disciplinario y sancionador del dopaje. Evidentemente, los deportistas tendrán derecho a presentar alegaciones ante el órgano instructor de los correspondientes procedimientos sancionadores y disciplinarios incoados en el seno de muy diversas instancias, públicas y privadas, internacionales, estatales y autonómicas, federativas y no federativas. La ley no es el instrumento normativo para concretar los órganos ante los que se pueden presentar las alegaciones por los deportistas y por ello tampoco lo hace la Ley Orgánica 7/2006.

En el artículo 8 se establece, en su apartado d), el derecho de las y los deportistas a que se les oiga antes de ser sancionados o sancionadas. La Dirección de Salud Pública realiza la misma pregunta que antes y la respuesta anterior debe darse por reproducida.

En el artículo 9 se regula de forma específica el patrocinio de deportistas y entidades. Considera la Dirección de Salud Pública que ya se incluye ello en artículos anteriores y que sería aconsejable no repetir. El artículo 5 se refiere en general a la responsabilidad de los poderes públicos de negar patrocinios y ayudas en determinados supuestos mientras que el artículo 9 es monográfico. Tiene una mayor extensión y nivel de concreción y detalle a través de sus diferentes apartados. A juicio de quien emite el presente informe resulta razonable el minar en el artículo 5 la letra d).

En relación al artículo 13.7 del anteproyecto, la Dirección de Salud Pública sostiene que es el o la deportista quien debe dar su autorización para que los entrenadores, personal sanitario, etcétera, puedan dar información sobre los tratamientos a los que está sometido y no al contrario. En opinión de la Dirección de Salud Pública *"lo legal es que no podrán proporcionar datos del deportista salvo que él dé su consentimiento"*.

Pues bien, el artículo 13.7 no debe ser modificado pues queda claro que los entrenadores o el personal sanitario que asiste a los deportistas deben informar, en el momento de realizar los controles de dopaje, de los tratamientos terapéuticos a los que se hallan sometidos *"salvo que las y los deportistas negaren expresamente la autorización para tal indicación"*. Téngase en cuenta que el texto del anteproyecto se ha basado en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 7/2006

**4. Los deportistas, sus entrenadores, médicos y demás personal sanitario, así como los directivos de clubes y organizaciones deportivas*

y restantes personas del entorno del deportista indicarán, en el momento de pasar los controles de dopaje, los tratamientos médicos a que estén sometidos, los responsables de los mismos y el alcance del tratamiento, salvo que los deportistas negaren expresamente la autorización para tal indicación"

Respecto al artículo 46, la Dirección de Salud Pública sostiene que en lo referente a la Tarjeta de Salud del Deportista no queda claro "cuál es su cometido ni por qué documentos estará compuesto". Asimismo, se indica que no parece adecuado que sea un documento público y que su carácter debe ser totalmente privado, debiéndose regular el acceso y custodia a dicha tarjeta.

Sobre esta alegación debe señalarse que el anteproyecto realiza un esfuerzo de clarificación del régimen, naturaleza, garantías, etcétera, respecto a la Tarjeta de Salud del Deportista. El artículo 46 está subdividido en 11 extensos apartados en los que se aborda dicha cuestión.

Respecto a su carácter público, el anteproyecto ha optado por seguir el régimen de la Ley Orgánica 7/2006 que dispone lo siguiente:

"1. La tarjeta de salud del deportista es un documento público, que expide el Consejo Superior de Deportes a quienes tienen, específicamente, reconocida la condición de deportista de alto nivel, así como al resto de deportistas federados, en el marco de los convenios específicos que a tal efecto se realicen por parte de las federaciones deportivas españolas

La tarjeta de salud tiene como finalidad que el deportista y el personal sanitario que le atiende dispongan de la mejor información clínica posible en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia.

La tarjeta de salud contendrá la información referida al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y de dopaje, realizados al deportista desde la obtención de la correspondiente licencia federativa, el resultado de los mismos y las determinaciones médicas a tener en cuenta para una adecuada atención sanitaria del mismo. Reglamentariamente, se determinará el alcance de esta obligación y la forma de transmisión de la documentación correspondiente

Asimismo, incluirá los datos relativos a las autorizaciones de uso terapéutico concedidas y a las bajas laborales y/o deportivas que haya tenido el deportista."

No puede exigirse al anteproyecto de ley, que precisa de un reglamento ejecutivo con el desarrollo de estas previsiones legales, una mayor concreción.

Por otra parte, tampoco puede perderse de vista que resulta indispensable que la Tarjeta de Salud del Deportista de la Comunidad Autónoma del País Vasco siga unas características y parámetros comunes con la tarjeta estatal. Su arquitectura debe responder a unas bases comunes al objeto de que pueda haber una interoperabilidad, una cesión de datos, etcétera.



V.- ALEGACIONES DE EMAKUNDE.

En relación al **artículo 6.1.m**, Emakunde recomienda precisar que las áreas para la realización de controles de dopaje serán adecuadas a las necesidades de mujeres y hombres deportistas.

Aunque se considera que el anteproyecto ya establece que las condiciones de las áreas deben ser las "adecuadas" a las circunstancias concurrentes, cabe tomar en consideración esta alegación de Emakunde y especificar que serán atendidas las diferentes necesidades de mujeres y hombres.

Emakunde propone, respecto al **artículo 11.7**, incorporar una cláusula para promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición del Consejo Consultivo de la Agencia Vasca Antidopaje, de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 23 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

La futura Agencia Vasca Antidopaje estará sometida a la citada Ley al igual que el resto de los organismos públicos. Desde el punto de vista de técnica normativa se considera innecesario reproducir las prescripciones de otras disposiciones legales. Dicha obligación de presencia equilibrada dimana de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y no parece procedente reproducir esa obligación legal pues en tal caso debería seguirse el mismo criterio respecto a las prescripciones de los demás ordenamientos sectoriales.

Se acepta la redacción alternativa del **apartado v)** del **artículo 12**, propuesta por Emakunde con el fin de facilitar su comprensión.

Respecto al **artículo 43**, Emakunde valora de forma positiva la referencia a la integración de la perspectiva de género en las actividades de investigación, divulgación, formación y sensibilización de la Agencia Vasca Antidopaje que se realiza en el artículo 12, letra i), pero aconseja integrar también la perspectiva de género en el sistema de información sobre el dopaje en el artículo 43.

Se acepta la propuesta.

Finalmente, Emakunde señala que en la redacción del anteproyecto se ha hecho, con carácter general, un uso no sexista del lenguaje de conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 4/2005, pero, no obstante recomienda revisar algunos términos redactados exclusivamente en masculino.

Atendiendo a tal sugerencia, se procede a revisar todo el texto al objeto de evitar que existan términos redactados exclusivamente en masculino.

VI.- ALEGACIONES DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.

La Abogacía del Estado dedica sus primeras páginas para fundamentar la conclusión de que el ejercicio de las potestades administrativas deportivas en materia de dopaje sobre las competiciones de ámbito estatal e internacional corresponden de manera exclusiva y excluyente al Estado. A su juicio, el ámbito internacional y el estatal exceden del ámbito autonómico y afectan al deporte federado español en su conjunto, por lo que, a su juicio, las potestades administrativas en materia de dopaje sobre aquellos ámbitos corresponden de manera exclusiva y excluyente al Estado.

Sentada esta consideración general previa, la Abogacía del Estado procede a analizar el contenido del anteproyecto.



En primer lugar, respecto al ámbito subjetivo del artículo 1.5 considera que se produce un posible solapamiento competencial con respecto a determinados deportistas. Dicho precepto dispone que la Ley también será de aplicación a cualesquiera personas físicas o jurídicas que residan, temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco. Y añade que dicho ámbito subjetivo se entiende sin perjuicio de la aplicación de disposiciones estatales e internacionales a los citados deportistas con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal. En opinión de la Abogacía del Estado, esta última matización que hace una salvedad a la aplicación de las disposiciones estatales e internacionales resultaba innecesaria.

Debe señalarse que tal matización se incorporó al anteproyecto en su última versión de octubre de 2010, tras la sugerencia realizada en el informe realizado por la Agencia Estatal Antidopaje. Este organismo advertía que unos mismos deportistas podían estar sometidos a varios ordenamientos simultáneamente (autonómico, estatal e internacional) y la Agencia Estatal Antidopaje sugería evitar que esos mismos deportistas pudiesen estar sometidos a tres controles: el de la federación vasca, el de la federación española y el de la federación internacional.

Esta circunstancia corrobora que el ejercicio del control y represión en materia de dopaje puede ser múltiple pues tal multiplicidad no la crea el anteproyecto de ley sino que es inherente a la pluralidad misma de sujeciones especiales de un mismo deportista. Un deportista o una deportista tiene una sola personalidad jurídica pero puede estar vinculado o vinculada a diferentes organizaciones federativas y, por ello, participar en competiciones autonómicas, estatales e internacionales. Y por esta condición múltiple del deportista parece lógica que una federación vasca pueda realizarle controles en una competición de ámbito autonómico a sus deportistas, que una federación española lo pueda hacer en un Campeonato de España a los participantes en el mismo y que, asimismo, la federación internacional pueda someter a control a tales deportistas en una competición europea. Ello es algo de puro sentido común y, además, que se verifica a diario en el ámbito de la potestad disciplinaria deportiva como consecuencia de la comisión de infracciones en competiciones vascas, estatales o internacionales. Y no resulta razonable plantear dudas sobre esta arquitectura del control y represión sobre los deportistas, con independencia de que las infracciones sean en materia de reglas de juego, de competición de dopaje, de racismo, xenofobia, etcétera.

No obstante lo anterior, la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, al objeto de evitar problemas futuros, accedió a matizar el artículo 1.5, que señalaba inicialmente que el ámbito subjetivo general de aplicación de la Ley se extiende a las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco. Y a continuación matiza que ese ámbito se entiende sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones estatales e internacionales a los citados deportistas con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal e internacional. Por tanto, a un deportista con licencia federada vasca que participa en un Campeonato de Euskadi la federación vasca le puede realizar un control de dopaje y sancionarle si el resultado es adverso. Pero si ese mismo deportista con licencia federativa vasca posee, además, la licencia estatal o la internacional para participar en competiciones estatales o internacionales en tales competiciones se les aplica la normativa estatal e internacional.

Y al objeto de que los destinatarios del presente informe ponderen la lógica de las previsiones del anteproyecto en relación al ámbito subjetivo, hay que reseñar que esa pluralidad de relaciones de un mismo deportista con diferentes entidades se ve ampliada de forma extraordinaria cuando un mismo deportista practica, por ejemplo,



triatlón, ciclismo, atletismo y natación y se federa en las correspondientes federaciones.

Por tanto, la pluralidad de regímenes normativos, de controles, de potestades disciplinarias, etcétera, no dimana del anteproyecto, sino que es una consecuencia inevitable de la pluralidad de relaciones jurídicas de un mismo deportista. Lo que sí debe exigirse a un proyecto normativo de estas características es que sea respetuoso con los principios de colaboración, eficacia, proporcionalidad, etcétera.

En segundo lugar, sostiene la Abogacía del Estado en relación a dicho ámbito competencial que el dopaje puede conllevar consecuencias sancionadoras derivadas no sólo de infracciones cometidas en el seno de competiciones sino también derivadas del ejercicio de las actividades preparatorias (entrenamientos). Y señala que la determinación del ámbito aplicable es más sencilla en el supuesto de las competiciones oficiales, de modo que su carácter estatal oficial conlleva la aplicación de las disposiciones estatales. Sin embargo, el control de dopaje en las actividades deportivas fuera de la competición genera alguna dificultad y según la Abogacía del Estado no existe más parámetro competencial que el tipo de licencia con que cuente el deportista. Y para llegar a esta conclusión recuerda que la Ley Orgánica 7/2006, al referirse al ámbito de aplicación de la Ley, se refiere a los deportistas que tengan licencia federativa estatal o autonómica homologada. Por tanto, la determinación del ámbito subjetivo de aplicación de las normas de dopaje debe venir determinada en estos casos por la relación jurídica de sujeción que liga al deportista con una determinada entidad, de modo que si el deportista tiene licencia autonómica existirá competencia autonómica en materia de dopaje, mientras que si la licencia es estatal las competencias deben corresponder a la Administración del Estado. La Abogacía del Estado concluye que no tendría sentido atribuir competencias sancionadoras a la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto de personas en relación con las cuales también tiene competencia el Estado.

Sin embargo, esta conclusión de la Abogacía del Estado no resulta acertada. Según se desprende de sus alegaciones, el deportista o tiene licencia autonómica o tiene licencia estatal, es decir, sólo cabe una de esas opciones. La realidad es que el deportista puede tener ambas licencias y, por tanto, tener una relación de sujeción diferente con una federación autonómica y con una federación española. En consecuencia, no se puede compartir la interpretación de la Abogacía del Estado según la cual no tiene sentido atribuir en el anteproyecto competencias sancionadoras diferentes a las del Estado. En consecuencia, resulta necesario que el anteproyecto habilite a las federaciones vascas a realizar controles, incluso, fuera de competición, a sus federados, con independencia de que esos mismos federados pertenezcan a otras federaciones.

El artículo 1.5 del anteproyecto, referente al ámbito subjetivo, también dispone que la Ley será igualmente de aplicación a cualesquiera personas físicas o jurídicas mientras residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco. La Abogacía del Estado trata a lo largo de su informe de rechazar el criterio de territorialidad para determinar el ámbito de aplicación de la Ley.

Sobre este particular, debe decirse que en el primer borrador se proponía, como en otros países, una aplicación plena del principio de territorialidad. Tras el informe que formuló la Agencia Estatal Antidopaje se atenuó sustancialmente la aplicación del principio de territorialidad, pero la Abogacía del Estado pretende la supresión total de este principio.

Repárese en que la Ley Orgánica 7/2006 contempla la posibilidad de que la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda realizar controles de dopaje fuera de competición a deportistas con licencia extranjera que se encuentren en Euskadi:

*"La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, al igual que la Agencia Estatal Antidopaje, podrán ordenar, **sin menoscabo de las competencias autonómicas**, la realización de controles fuera de competición a deportistas extranjeros que se encuentren en España y utilicen centros o instalaciones de entrenamiento de titularidad pública"*

Por otra parte, la Abogacía del Estado considera que la extensión del ámbito de aplicación subjetivo de la Ley contra el dopaje es extraordinariamente importante. Se aplica a los deportistas con licencia federativa (en esto coincide con la ley estatal) pero también a los deportistas que tengan una licencia universitaria o escolar. Esta extensión parece contraria a un criterio de eficacia y proporcionalidad en el ejercicio de las potestades de dopaje. A su juicio, resulta contraria al principio de eficacia, pues la experiencia demuestra que la propia delimitación que realiza la ley estatal es excesiva, ya que es imposible hacer un control mínimamente extenso, respecto al deporte federado en su conjunto. También argumenta que la aplicación de las normas de dopaje a determinados sectores que practican el deporte con otros fines muy diferentes al de la competición o de la mejora del rendimiento, como por ejemplo los ancianos o los niños, no parece tener una eficacia trascendental en la lucha contra el dopaje. Asimismo, la Abogacía del Estado manifiesta sus dudas acerca de la proporcionalidad de las medidas restrictivas de las libertades individuales (deber de localización, cesión de datos, etcétera) y si estas medidas se pueden extender a un número tan importante de personas que practican deporte en la Comunidad Autónoma.

Esta Dirección de Deportes comparte, en parte, la reflexión que realiza la Abogacía del Estado. Es cierto que el anteproyecto debe ser respetuoso con los principios de proporcionalidad y eficacia. Si la *ratio* de la Ley es la protección de la limpieza de las competiciones y de la salud de los deportistas, no resulta discutible que también la salud de los deportistas con otro tipo de licencia diferente a la federada también debe ser objeto de protección por el legislador, y que las competiciones en las que participan estos deportistas sin licencia federada también deben merecer la protección legislativa. Por tanto, no parece que pueda realizarse un reproche a la propuesta legislativa, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad la invasión en los derechos de estos deportistas presenta la misma justificación que en los deportistas federados.

Cuestión diferente es la relativa al principio de eficacia. La Abogacía del Estado cuestiona la aplicación de las normas a determinados sectores como los ancianos o los niños. Por supuesto, parece innegable que no se encuentra en los objetivos del anteproyecto aplicar la ley contra el dopaje a ancianos y niños. Ni parece previsible que la futura Agencia Vasca Antidopaje vaya a elaborar y ejecutar programas anuales de controles incluyendo, como destinatarios de los mismos, a ancianos y niños.

En mi opinión, la Ley debe mantener la posibilidad de que puedan realizarse ocasionalmente controles en el ámbito del deporte escolar y del deporte universitario. Las razones son innumerables:

- a) El deporte escolar alcanza a deportistas hasta los 16 años y de todos es sabido que la historia del deporte de alto nivel está repleta de triunfos de deportistas por debajo de esa edad. Los Juegos Olímpicos han conocido supuestos de jóvenes deportistas con medallas olímpicas a los 14, 15 y 16 años. Y en algunos casos las prácticas de dopaje han estado vinculadas a los programas que condujeron a esos triunfos.

- b) El deporte escolar no sólo contempla un itinerario de simple participación de las y los escolares. Existen competiciones de iniciación al rendimiento, actividades de tecnificación con escolares seleccionados en el itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas, etcétera.
- c) El deporte universitario es practicado por universitarios que, al mismo tiempo, son deportistas federados que tiene un importante nivel deportivo.

De cualquier modo, manteniendo a los deportistas escolares y universitarios en el ámbito subjetivo de la Ley, si parece razonable contemplar un régimen especial para los deportistas con licencia escolar y universitaria.

Respecto al contenido de la norma, la Abogacía del Estado hace una consideración sobre el concepto de dopaje contenido en el **artículo 1**. La primera cuestión que suscita dudas en la Abogacía del Estado es la indefinición del concepto de "espíritu deportivo". Se trata de un concepto jurídico indeterminado que presenta notables dificultades de concreción en cada caso.

Sobre esta alegación deben reproducirse las consideraciones realizadas en este informe con ocasión de las aportaciones realizadas por parte de la Dirección de Salud Pública

Respecto a las responsabilidades de las personas y entidades, que se enuncian en los **artículos 4, 5, 6 y 7** del anteproyecto, la Abogacía del Estado considera que el anteproyecto ha sido muy exhaustivo, pero que en *"Derecho es imposible preverlo todo y parece razonable concluir que las enumeraciones, por muy extensas que sean, siempre serán insuficientes"*.

Por supuesto, es evidente que no es posible en Derecho prever todas las situaciones y buen testimonio de ello es que las más importantes leyes que vienen aprobándose por el Parlamento estatal se están modificando continuamente desde su entrada en vigor. Pero siendo cierto ello, no es menos cierto que el anteproyecto no debe renunciar a realizar un esfuerzo en el ámbito de la lucha contra el dopaje.

Respecto a la organización administrativa, la Abogacía del Estado analiza la provisión legislativa sobre la Agencia Vasca Antidopaje y considera adecuada la atribución a la Agencia Vasca, a diferencia del organismo estatal análogo, de competencias técnicas y de competencias sancionadoras. De hecho, la Abogacía reconoce que es un modelo muy habitual en Derecho Comparado. En el artículo 12.2 del anteproyecto se contiene una extensa lista de funciones de la Agencia y al final del mismo se señala que tales funciones se entienden *"sin perjuicio de las que corresponden en los mismos ámbitos a la Agencia Estatal Antidopaje"*. Esta mención es, a juicio de la Abogacía del Estado, "obscura" pues *"debe resultar imposible un solapamiento en el ejercicio de las competencias y una concurrencia de competencias que justifiquen la referencia"*.

No pueden compararse los criterios que sostiene la Abogacía del Estado por las siguientes razones:

- a) La Ley Orgánica sigue el mismo criterio técnico-jurídico en numerosos artículos. En el artículo 31 se refiere a la competencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje y de la Agencia Estatal Antidopaje *"sin menoscabo de las competencias autonómicas"*. El artículo 1.7 atribuye al Consejo Superior de Deportes una competencia *"sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas"*. En el artículo 2.4 se señala que corresponde a la Agencia Estatal Antidopaje una función *"sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas..."*.

- b) La visión de la Abogacía del Estado sobre la imposibilidad de una concurrencia estatal y autonómica de competencias es idílica. Desgraciadamente, el bloque de constitucionalidad existente en España en el ámbito del deporte y en otras áreas sociales posibilita indeseables concurrencias competenciales. Por ello, el ordenamiento jurídico estatal y autonómico están repletos de salvedades como la cuestionada por la Abogacía del Estado.
- c) La propia Agencia Estatal Antidopaje, en su informe de 11 de mayo de 2010, confirma la consideración anterior sobre la posibilidad de concurrencias competenciales: *"En el ámbito mismo del deporte, la STS de 29 de mayo de 1990 precisa la concurrencia competencial, pues el fomento y promoción del deporte están sometidos a «sistema de concurrencias competenciales que permiten intervenir a los poderes estatales y autonómicos, incluso para emprender acciones paralelas con un mismo objeto»".*

Respecto al **artículo 12.6** (la Abogacía del Estado se refiere erróneamente al artículo 11), que establece que el personal de la Agencia que ejerza las funciones de inspección tendrá la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos, la Abogacía del Estado califica tal propuesta como interesante pues supone una evolución en la calificación del personal de las entidades involucradas en la lucha contra el dopaje y un aumento en las garantías de un ejercicio eficaz de la actividad, pues la presunción de veracidad de sus actas es un instrumento clásico para garantizar la inversión de la carga de la prueba y la presunción de veracidad impondrá la aplicación prevalente de los hechos consignados en las actas. Sin embargo, la Abogacía del Estado considera que el **artículo 39**, en el que se desarrolla el procedimiento disciplinario, no se hace mención alguna a las actas.

El procedimiento disciplinario o el procedimiento administrativo sancionador no se inician sólo con los resultados adversos tras los controles de dopaje. Los citados procedimientos pueden venir precedidos de denuncias, actas de inspección constatando, por ejemplo, una negativa u obstrucción al control. No es necesario que el artículo 39 haga referencia a las actas de inspección. En cualquier caso, su inclusión tampoco debe descartarse si proporciona mayor claridad y evita dudas como las manifestadas por la Abogacía del Estado.

La Abogacía del Estado considera que el **artículo 13.1**, referido a los deportistas con obligación de someterse a control de dopaje, presenta ciertas dificultades de interpretación puesto que, aunque el legislador actuó prudentemente a la hora de limitar la obligación de someterse a controles por la Agencia Vasca respecto de los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, al mencionar en el inciso final del precepto que cito se entiende sin perjuicio de la obligación de los deportistas de someterse a los controles previstos en las disposiciones estatales e internacionales, se puede estar generando un problema de solapamiento de competencias'.

Ya hemos apuntado anteriormente que no es válida la teoría de la Abogacía del Estado de que el deportista o tiene licencia autonómica o tiene licencia estatal, es decir, sólo cabe una de esas opciones. La realidad es que el deportista puede tener ambas licencias y, por tanto, puede tener una relación de sujeción diferente con una federación autonómica y con una federación española. En consecuencia, resulta necesario que el anteproyecto habilite a las federaciones vascas a realizar controles, incluso, fuera de competición, a sus federados, con independencia de que esos mismos federados pertenezcan a otras federaciones. Es decir, la obligación de las y los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley de someterse a los controles de dopaje que determine la Agencia Vasca Antidopaje debe entenderse

sin perjuicio de la obligación de tales deportistas de someterse a otros controles estatales e internacionales.

Para la Abogacía del Estado existe una diferente relación entre las normas internacionales y las normas estatales y entre las normas estatales y las autonómicas. Con arreglo a esta diferente relación, un deportista con licencia estatal está sujeto a la legislación estatal y también está sujeto al Código Mundial Antidopaje. Por el contrario, los deportistas con licencia vasca sólo quedan sujetos a la legislación vasca y a la internacional, no a la estatal. Desde esta perspectiva, el artículo 13.10 debe ser objeto de revisión a juicio de la Abogacía del Estado. A su juicio, es perfectamente posible que las entidades internacionales o estatales encomienden a la Agencia Vasca Antidopaje, previa la conclusión del correspondiente acuerdo o convenio, la realización de controles, pero obviamente la tramitación de los expedientes sancionadores respecto a deportistas que no tengan licencia vasca corresponderá únicamente al Estado o a la organización internacional correspondiente.

Tales conclusiones de la Abogacía del Estado debe ser matizadas. En primer lugar, como se ha apuntado anteriormente, un deportista con licencia vasca también puede ostentar licencia estatal, con lo que se podría producir la aplicación de los ordenamientos autonómico, estatal e internacional. No cabe formular ese planteamiento alternativo que hace la Abogacía del Estado: o licencia vasca o licencia estatal.

En segundo lugar, los deportistas extranjeros que son sometidos a control de dopaje por la Agencia Vasca Antidopaje, sin el correspondiente acuerdo o convenio con la federación internacional, pueden ser sancionados por dicha Agencia.

Respecto a la cualificación del personal encargado de la recogida de muestras, la Abogacía del Estado considera que el anteproyecto es parco. El artículo 14.1 del anteproyecto dispone que los controles se realizarán por un equipo de recogida de muestras bajo la responsabilidad del personal habilitado por la Agencia Vasca de Dopaje. La Abogacía del Estado admite la posibilidad de que tal cuestión se queda desarrollar mediante el correspondiente Reglamento ejecutivo, pero considera que una mínima referencia técnica sería aconsejable.

En la medida que el proceso de formaciones y profesiones es muy dinámico, tal y como está manifestándose en los últimos tiempos, se ha considerado oportuno que sea una norma de rango reglamentario la que determinen los requisitos para ser habilitado.

El artículo 14.7 incluye entre los derechos de los deportistas el derecho a *"no someterse a la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y de lo establecido en el artículo 24.1.c de esta ley"*. El artículo 14.9 dispone que la negativa *"una vez documentada, constituirá prueba suficiente para sancionar la conducta de la o el deportista"*. A juicio de la Abogacía del Estado *"no era necesario que el legislador hiciera referencia a que esta conducta, una vez documentada, será prueba suficiente para sancionar la conducta del deportista, sino que bastaba con castigar la negativa con la misma sanción que el resultado negativo"*.

A este respecto cabe advertir que el artículo 14 del anteproyecto está inspirado en el artículo 6 de la Ley Orgánica. Esta Ley establece que *"la negativa sin justa causa a someterse a los controles, una vez documentada, constituirá prueba suficiente a los efectos de reprimir la conducta del deportista"*.

Por lo que se refiere a las obligaciones accesorias contenidas en el artículo 15 del anteproyecto, la Abogacía del Estado examina la obligación genérica de los clubes y entidades deportivas que se determinen reglamentariamente de llevar un libro de

tratamientos terapéuticos que hayan prescrito a los deportistas que se encuentren bajo su dirección. Esta norma tiene una clara finalidad de protección del deportista, quien podrá eximirse de cualquier resultado por un resultado positivo si el tratamiento que lo haya producido ha sido realizado por orden de un facultativo del club. El deportista podrá no autorizar la inscripción en el libro de los tratamientos prescritos. Sin embargo, a juicio de la Abogacía del Estado, lo que constituye una garantía voluntaria para el deportista en los deportes de equipo, se convierte en una obligación para los deportes individuales.

A nuestro juicio, la interpretación que realiza la Abogacía del Estado es discutible. Por un lado, el texto del anteproyecto sigue literalmente el tenor del artículo 7.3 de la Ley Orgánica 7/2006. Por otra parte, el artículo 15.7 sólo determina, lógicamente, sobre quién recae la obligación de registro en el caso de los deportes individuales, es decir, sobre los deportistas o, en su caso, sobre las federaciones deportivas. Esa precisión del artículo 15.7 es necesaria, en contra de lo que aparentemente pueda parecer, pues los deportistas que participan en deportes individuales también forman parte de clubes en numerosos casos como, por ejemplo, en el atletismo. Un atleta puede participar en una prueba individual, como es la maratón y, sin embargo, pertenecer a un club determinado.

Por otra parte, la llevanza del registro por parte de los deportistas individuales debe tener la misma finalidad de protección del deportista individual, que se puede eximir de cualquier responsabilidad si el tratamiento ha quedado debidamente registrado y, por ello, del mismo modo que el deportista de equipo puede no autorizar al club a registrar un tratamiento, el anteproyecto no impide que el deportista individual no registre determinados tratamientos en el libro correspondiente que debe llevar.

Por lo que respecta a las autorizaciones de uso terapéutico, contempladas en el artículo 15.9, la Abogacía del Estado considera que su ámbito de aplicación se debe limitar al de la ley. A su juicio, para competir en el País Vasco no debe ser necesario comunicar la autorización de uso terapéutico expedida por otra Comunidad Autónoma, por el Estado o por una entidad internacional. La Abogacía del Estado rechaza la aplicación de la ley en base al criterio de la territorialidad.

Si se lee detenidamente el artículo 15.9 del anteproyecto no cabe concluir que sea necesario comunicar tal autorización de uso terapéutico *“para competir en el País Vasco”*. La Ley Orgánica 7/2006 contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan realizar controles a deportistas extranjeros y el artículo 15.9 tan sólo establece la obligación del deportista de declarar la existencia de una autorización en el control de dopaje que, en su caso, se le realice. Repárese en que la propia Ley Orgánica 7/2006 establece esta obligación general cuando señala que todos los deportistas *“indicarán, en el momento de pasar los controles de dopaje, los tratamientos médicos a que estén sometidos, los responsables de los mismos y el alcance del tratamiento”*. Y en el mismo sentido el artículo 50 del Real Decreto 641/2009.

Por otra parte, el anteproyecto responde, además, a una práctica habitual en los controles de dopaje en donde los deportistas declaran la existencia de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas.

Por último, debe señalarse que la redacción que cuestiona la Abogacía del Estado realmente ha tratado de suavizar la primitiva redacción. En el texto inicial se establecía que, en caso de que se hubiese concedido una autorización de uso terapéutico por parte de un organismo de otra Comunidad Autónoma o Estado, cada deportista que compitiese en Euskadi estaba obligado a remitir una copia de la autorización a la Agencia Vasca Antidopaje. Aunque nadie formuló alegaciones, se consideró muy riguroso exigir a un deportista francés, italiano o americano, que informe de la

autorización a un órgano no estatal, sino autonómico. En el anteproyecto que se ha examinado por la Abogacía del Estado se ha suavizado la obligación y sólo es obligatorio que el deportista informe de ello en el momento del control de dopaje que, en su caso, realice.

De este modo, no todos los deportistas sin licencia vasca que compitan en Euskadi deben comunicar la existencia de una autorización de uso terapéutico sino sólo aquellos deportistas que deseen competir en el País Vasco y sean sometidos a un control de dopaje.

La regulación de la baja deportiva en el artículo 16 se considera muy acertada por la Abogacía del Estado. El único reparo que formula es *“que lo que no se prohíbe es la realización de controles de dopaje durante el periodo de baja”*. No debe establecerse una ecuación entre posesión de la baja y ausencia de control. Durante la baja deportiva, para evitar fraudes, los deportistas pueden ser objeto de control. ¿Por qué? Repárese en que en la situación de baja deportiva los deportistas pueden recibir libremente el tratamiento terapéutico que consideren adecuado para tratar cualquier lesión o enfermedad, ya que estarán inhabilitados e inhabilitadas para participar en competiciones deportivas. Pero téngase en cuenta que estas personas, una vez obtenida la baja deportiva, pueden estar consumiendo sustancias prohibidas o empleando métodos prohibidos que no guardan relación con el tratamiento de sus lesiones. Es decir, la situación de baja deportiva no debe propiciar periodos exentos de control. En definitiva, el criterio es similar al empleado en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 7/2006, que contempla la posibilidad de realizar controles de dopaje a aquellos deportistas que carecen de licencia pero que pueden estar tratando de eludir la realización de controles de dopaje.

Asimismo, siguiendo con el artículo 16, la Abogacía del Estado se refiere al apartado 7, el cual señala que las decisiones de los comités antidopaje en materia de altas y bajas deportivas podrán ser impugnadas ante la Agencia Vasca Antidopaje, pero no se hace referencia al régimen de impugnación de las resoluciones que dicte la propia Agencia.

Sobre este particular debe señalarse que tampoco la Ley Orgánica 7/2006 establece el régimen de impugnación de los acuerdos de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje o de la Agencia Estatal Antidopaje. Por tanto, el régimen de impugnación de sus acuerdos se determinará reglamentariamente.

El apartado sexto del artículo 17 establece la posibilidad de que la Agencia Vasca Antidopaje decida los supuestos en los que proceda la suspensión de la licencia de algún deportista por razones de salud. La Abogacía del Estado se plantea la duda de si es posible suspender la licencia y, por tanto, impedir el ejercicio de su actividad a los deportistas profesionales por razones de salud pues se estaría afectando a un derecho fundamental como es el derecho a trabajar. Asimismo, añade la Abogacía del Estado que no es desdeñable la referencia al carácter reglamentario de las normas que van a limitar esos derechos y a una posible insuficiencia del rango de las mismas.

Sorprende esta reflexión de la Abogacía del Estado pues el anteproyecto de ley sigue el criterio de la Ley Orgánica 7/2006. Su artículo 8.2 dispone lo siguiente:

“Asimismo, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de la licencia deportiva a un deportista por razones de salud.”

Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y características que han de revestir las actuaciones de protección de la salud a los deportistas

En lo que se refiere al artículo 19.5, el anteproyecto dispone que para la realización de controles fuera de competición a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones internacionales tendrán preferencia para la realización de aquellos las organizaciones deportivas internacionales. Y la misma norma se repite en el apartado siguiente para las competiciones oficiales de ámbito estatal. La Abogacía del Estado apunta que el anteproyecto no establece sistema alguno de coordinación que permita asegurar la preferencia de las autoridades internacionales o estatales, lo que puede dar lugar a problemas a la hora de aplicación de estos controles.

A este respecto hay que señalar, que el mecanismo que se contempla en el anteproyecto para garantizar esa preferencia es el de la comunicación previa a la Agencia Vasca Antidopaje, instrumento de comunicación que contempla el anteproyecto y también la Ley Orgánica 7/2006. Por otra parte, tampoco esta Ley Orgánica ha establecido sistemas generales de coordinación en estas cuestiones.

El artículo 21 regula el ámbito de aplicación del régimen disciplinario y establece que tal régimen resulta de aplicación a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias exigidas en la Ley 14/1998 y a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción con las demás entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente ley o se sujeten voluntariamente a la misma. Por parte de la Abogacía del Estado, esta última sujeción plantea dificultades. Insiste en que el aspecto territorial no puede servir de punto de conexión para definir las competencias y, por tanto, quienes dispongan de licencia estatal y participen en competiciones oficiales de ámbito estatal no pueden quedar sometidos al régimen sancionador establecido en la normativa vasca por estar domiciliadas en el País Vasco.

Asimismo, la posibilidad de sujeción voluntaria a la Ley del Dopaje del País Vasco generaría, según la Abogacía del Estado, la imposibilidad de que las autoridades estatales practicasen los correspondientes controles y sancionaran casos positivos de modo que esa sujeción voluntaria es claramente contraria al sistema de distribución de competencias en materia de control de dopaje.

Ante esas consideraciones de la Abogacía del Estado, debe señalarse que en el País Vasco, además de las personas con licencia federada vasca se organizan numerosas competiciones o pruebas (partidos de pelota profesional, competiciones de remo, pruebas atléticas, etcétera) que no constituyen competiciones oficiales de ámbito estatal, que son las que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 7/2006, pero que precisan el sometimiento a una normativa antidopaje.

El artículo 22 del anteproyecto se refiere al ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador y establece que resultará aplicable a las acciones u omisiones que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito autonómico, estatal o internacional y con independencia de que existan relaciones de sujeción especial o no. Para la Abogacía del Estado esa aplicación del criterio de territorialidad debe ser rechazada por las razones ya apuntadas en su escrito de alegaciones.

El criterio de la territorialidad viene aplicándose en el País Vasco en materia de dopaje desde hace muchos años y ello es coherente con una tradición en el ámbito del

Derecho Administrativo Sancionador. Es por esta razón que los controles en las competiciones deportivas con animales que se han desarrollado en el País Vasco desde hace muchos años se han regido por la normativa vasca, con independencia de la categoría oficial o no de las competiciones, o con independencia de su carácter autonómico, estatal o internacional, la procedencia del animal, la nacionalidad de sus propietarios, etcétera. El Decreto 6/1997, de 22 de enero, del Gobierno Vasco se refiere al control de dopaje *en animales que intervengan en actos culturales y deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco*.

Asimismo, el artículo 125 de la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco, establece que las disposiciones integrantes del Capítulo II (Régimen Sancionador) del Título XI serán de aplicación a las acciones u omisiones *que tengan lugar en el ámbito de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito estatal o internacional*.

Tampoco se puede pasar por alto que, al igual que sucede con otras cuestiones sancionadoras relacionadas con el deporte (publicidad de tabaco y alcohol, espectáculos públicos y actividades recreativas, aseguramiento de riesgos, etcétera), se aplican las disposiciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco a las competiciones deportivas estatales e internacionales que se desarrollen en el País Vasco. Desde un punto de vista disciplinario ni las federaciones vascas ni la Agencia Vasca Antidopaje ostentan competencias pero sí desde el punto de vista administrativo sancionador.

El artículo 33.4 del anteproyecto dispone que en el supuesto de que una infracción de dopaje pudiera dar lugar simultáneamente a responsabilidades administrativas y a responsabilidades disciplinarias, los órganos disciplinarios deportivos deberán, de oficio o a instancia de parte, comunicarlo al órgano administrativo competente, todo ello sin perjuicio de la tramitación del procedimiento disciplinario. Y el órgano administrativo competente deberá realizar la misma comunicación a los órganos disciplinarios correspondientes. Entiende la Abogacía del Estado que la redacción es ambigua y oscura, por lo que sería necesario corregirla. A juicio de la Abogacía del Estado su interpretación no puede ser otra que la de entender que si existe algún tipo de conducta generadora de infracciones en materia de dopaje que, a su vez, también constituye una infracción administrativa, las autoridades deportivas deberán comunicarlos a las autoridades administrativas competentes.

En efecto, esta interpretación que realiza la Abogacía del Estado es totalmente correcta y no se alcanza a ver dónde está la supuesta oscuridad del precepto.

Asimismo, el artículo 33.7 dispone que las comunicaciones entre organismos para evitar la infracción del principio *non bis in idem* no podrán realizarse hasta que finalice la fase de control de dopaje y pasen las actuaciones al órgano sancionador correspondiente. La Abogacía del Estado considera perturbadora esta mención pues *es dable pensar en la posible existencia de supuestos lo suficientemente urgentes como para que la comunicación a las autoridades competentes tenga que ser inmediata*.

Parece razonable la propuesta que realiza la Abogacía del Estado y se recomienda la supresión del apartado 7.

En cuanto a la competencia en el ámbito disciplinario, la Abogacía del Estado considera que no se menciona a quien corresponde la competencia en materia de represión del dopaje en animales. El artículo 36 establece que los procedimientos en materia de dopaje se sustanciarán en sede federativa, en única instancia, ante el

órgano disciplinario competente en materia de dopaje que se designe en sus estatutos

A nuestro juicio no puede hacerse reproche alguno al anteproyecto pues se emplea el mismo criterio que en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 7/2006:

"La instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios corresponde, inicialmente, a los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas españolas previstos en sus Estatutos y Reglamentos"

Asimismo, en relación al artículo 38, la Abogacía del Estado apunta *"que la potestad instructora corresponde a las federaciones deportivas del País Vasco y a esas entidades en las que exista una relación de sujeción espacial. Pero hemos visto que a esta entidades se refiere con anterioridad la norma como antes afectados por el ejercicio de la potestad disciplinaria"* Por ello, la Abogacía del Estado considera que es necesaria una clarificación.

A este respecto conviene advertir, que pueden concurrir supuestos en los que una entidad como, por ejemplo, una federación deportiva, puede ejercer la potestad disciplinaria sobre un deportista, pero también las federaciones disponen de selecciones territoriales o autonómicas que participan en competiciones y tanto el anteproyecto como la Ley Orgánica establecen obligaciones que las propias federaciones deportivas también deben cumplir. Es decir, una federación puede sancionar en materia de dopaje pero también puede ser sancionada. Una federación deportiva puede organizar competiciones, pero también puede participar con sus deportistas en competiciones organizadas por otras federaciones.

En cuanto al procedimiento disciplinario, la Abogacía del Estado considera que no parece necesario en los casos en que exista un resultado positivo la tramitación de una información reservada con carácter preliminar a la incoación del procedimiento sancionador, trámite previsto en el artículo 39 del anteproyecto. La Abogacía del Estado sostiene que en la Ley Orgánica 7/2006 esta información reservada está prevista para supuestos diferentes de aquellos en los cuales se produce un resultado adverso en un control como, por ejemplo, *"cuando la constancia se tenga como consecuencia de una actuación policial"*. En la memoria justificativa del anteproyecto se argumenta que incoar un procedimiento disciplinario puede generar daños económicos y morales evitables a los deportistas. Por ejemplo, resulta absurdo incoar un procedimiento disciplinario si existe una válida autorización de uso terapéutico y los resultados analíticos del laboratorio son perfectamente compatibles con la autorización concedida

El artículo 40 del anteproyecto contempla la potestad de la Agencia Vasca Antidopaje de inspeccionar los botiquines, bolsas de deportes, taquillas, autobuses y demás espacios que permitan albergar o guardar los productos o sustancias dopantes. A juicio de la Abogacía del Estado la constitucionalidad del precepto es dudosa puesto que la privacidad de tales espacios es objeto de una protección constitucional intensa y exige la presencia de una resolución de un órgano jurisdiccional para violar esa intimidad. La Abogacía del Estado considera que la intención del anteproyecto es loable pero que quizás se ha excedido en su celo

Si la Abogacía del Estado cuestiona la constitucionalidad del artículo 40 del anteproyecto también debería discutir la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley Orgánica pues faculta *"a los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida la competencia"* la posibilidad de *"inspeccionar los botiquines y demás*

instrumentos que permitan custodiar o albergar productos y sustancias susceptibles de dar positivo en un control de dopaje'. Por otra parte, no puede obviarse que la potestad de inspección de la Agencia Vasca Antidopaje se contempla en el anteproyecto sin perjuicio de las competencias de los órganos judiciales del Estado. El artículo 8, apartado sexto, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contempla la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para conceder las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública.

El artículo 48 del anteproyecto establece que los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje, que podrán ser cedidos en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos a los organismos públicos o privados que participen en la lucha contra el dopaje. Por parte de la Abogacía del Estado son correctas las menciones del proyecto, aunque *'se sugiere el establecimiento de un sistema de actualización (sic) previa del deportista a la cesión de los datos en el momento de obtener su licencia'*

Sobre esta cuestión debe indicarse que en la mayor parte de las organizaciones deportivas importantes se viene solicitando la autorización previa de los que suscriben las correspondientes licencias. En cualquier caso, resulta desaconsejable un sistema jurídico en el que la cesión de datos a organismos que participen en la lucha contra el dopaje dependa exclusivamente de la voluntad del deportista, de su libre consentimiento. Por ello, el artículo 48 del anteproyecto sigue el modelo del artículo 36 de la Ley Orgánica 7/2006. Además, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que *"los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado lo consienta expresamente"*. Es decir, caben dos opciones: o el deportista afectado consiente expresamente la cesión de datos o lo dispone una Ley. Por esa razón, el anteproyecto contempla tal cesión eliminando la posible negativa de los deportistas.

El informe de la Abogacía del Estado también se refiere al artículo 50.3 sobre la necesidad de que los controles de dopaje que se realicen en competiciones internacionales celebradas en Euskadi requieren una comunicación previa a la Agencia Vasca Antidopaje. La Abogacía del Estado considera inútil tal previsión pues la experiencia que tiene el Estado es que *'es costumbre de las organizaciones internacionales no realizar esa comunicación previa'*.

Ya se ha tenido oportunidad de señalar anteriormente que el anteproyecto debe intentar evitar la duplicidad de actuaciones o solapamientos. Y un instrumento para evitar ello es que, de conformidad con los criterios del Código Mundial Antidopaje, se comuniquen tales actuaciones entre organismos. El no cumplimiento de tal obligación por los organismos internacionales no debe conducir a la supresión de tal previsión del anteproyecto.

Respecto al artículo 51 la Abogacía del Estado vuelve a cuestionar la residencia en Euskadi como criterio que permita a la Agencia Vasca Antidopaje ordenar la realización de controles fuera de dopaje. A su juicio debe quedar claro que la competencia para ordenar los controles debe corresponder a la entidad nacional o internacional que haya otorgado la correspondiente licencia al deportista.

Sobre esta cuestión ya se ha tenido oportunidad de manifestar la discrepancia con el parecer de la Abogacía del Estado y deben de darse por reproducidas las consideraciones efectuadas.

Por último, en relación al artículo 52.1, que establece que la realización de controles de dopaje en Euskadi fuera de competición por parte de organizaciones internacionales exige que, con carácter previo, se notifique a la Agencia Vasca Antidopaje, la Abogacía del Estado sostiene que puede aparejar la consecuencia de que las autoridades internacionales omitan la comunicación a la Agencia Estatal y sólo realicen la comunicación a la Agencia Vasca. Tal conclusión de la Abogacía del Estado es discutible por varias razones. En primer lugar, es obvio que la obligación de comunicación a un organismo no libera a la organización internacional de comunicación al otro organismo. Además, en cualquier caso, de conformidad con la Ley Orgánica 7/2006 y el anteproyecto, ambas agencias están obligadas a remitirse este tipo de informaciones. Y, por último, el texto responde al mismo tenor de lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica, que tampoco debe interpretarse como impeditivo de una comunicación previa a la Agencia Vasca Antidopaje.

VII.- ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO.

Por parte de esta Corporación se presenta escrito de 21 de diciembre de 2010, firmado por su Presidente, de 6 folios de extensión, en el que se realizan las siguientes alegaciones:

Por parte del Colegio Oficial se propone una nueva redacción del artículo 11.7.d sobre la composición de la Agencia Vasca Antidopaje por entender que *"no existe la especialidad en Medicina de la Educación Física y del Deporte"*. A su juicio, *"hablar de Medicina de la Educación Física es un error. Si la especialidad en medicina del deporte no existe, mucho menos la de educación física. La educación física no tiene ningún contacto con la medicina que trabaja específicamente en el deporte"*. Por dicha razón, dicho Colegio propone incluir una referencia a *"una persona experta en Medicina"*.

Sin embargo, esta alegación debe rechazarse. La especialidad existe oficialmente con tal denominación a la fecha de emisión del presente informe. La especialidad tiene reconocimiento oficial desde 1984 mediante el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, que reguló la obtención de títulos de especialidades y que la cataloga, en el apartado 3 del anexo, como especialidad extrahospitalaria con tal denominación.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, dispuso que en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno debía modificar, suprimir o adaptar su sistema de formación a lo previsto en el artículo 20 en el caso de las especialidades sanitarias cuya formación no se realiza por el sistema de residencia. El Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollaba tal Disposición Transitoria Cuarta contemplaba una disposición derogatoria segunda con la supresión de especialidades en régimen de alumnado. Tras diversas presiones de diversos agentes sociales, el Gobierno acordó no suprimir tal especialidad y aprobó el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, con una disposición transitoria en la que se indicaba: *"...hasta tanto el Gobierno adopte la decisión, el régimen de alumnado seguirá siendo el sistema formativo de las especialidades médicas de Hidrología Médica, Medicina de la Educación Física y del Deporte..."*

Por tanto, existe la especialidad citada en el anteproyecto de Ley contra el Dopaje y con esa denominación.

No obstante, a fecha del presente informe, se ha redactado el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la incorporación de criterios de troncalidad en la formación de determinadas especialidades en ciencias de la salud, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, proyecto fechado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con fecha de 24 de enero de 2011. La disposición derogatoria primera de dicho proyecto dispone lo siguiente:

"En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, relativa a las plazas cuyo sistema de formación no es el de residencia, se declaran a extinguir, desde la fecha en vigor de este real decreto, las especialidades médicas en régimen de alumnado de Hidrología Médica; Medicina de la Educación Física y del Deporte; y Medicina Legal y Forense, así como la especialidad farmacéutica de Farmacia Industrial y Galénica".

Quizás, a la vista de este nuevo intento del Gobierno de suprimir la especialidad, convendría que la referencia del anteproyecto se sustituyese por *"persona experta en Medicina en el ámbito del deporte"*.

Asimismo, por parte del Colegio Oficial se propone una nueva redacción del artículo 11.7.d por considerar que *"no existe la especialidad en Derecho del deporte"*. A su juicio, *"podemos hablar en su caso de una persona experta en derecho que trabaje en el ámbito del deporte"*.

Tampoco puede compartirse tal alegación. Según el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 1 de diciembre, de Universidades las enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos: Grado, Master y Doctorado. La superación de tales enseñanzas da lugar a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.

En el ámbito del Derecho Deportivo resulta posible encontrar en las dos últimas décadas una importante oferta universitaria de títulos de especialización en dicho ámbito. Un ejemplo de ello es, a modo de ejemplo, el Master Oficial en Derecho Deportivo de la Universidad de Lérida, que es un Master autorizado por las Instituciones Universitarias competentes como un título oficial a todos los efectos académicos y profesionales dentro de la nueva configuración de los títulos oficiales de post-grado adaptado al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), según el modelo de Bolonia y reconocido por los poderes públicos como un título con validez académica oficial para todo el Estado español.

A mayor abundamiento, repárese en que el anteproyecto tampoco emplea la palabra *"especialidad"*, sino la palabra *"experto"* refiriéndose, según la Real Academia de la Lengua, a aquella persona experimentada, con experiencia.

Respecto al artículo 11.7.d el Colegio Oficial considera que es función propia de los colegios profesionales colaborar con la Administración Pública en el logro de los intereses comunes, participando en los órganos administrativos. Por dicha razón, al igual que la representación de los territorios históricos y de las federaciones deportivas es a propuesta de las administraciones interesadas o de las organizaciones deportivas, *"es de derecho que también las expertas de cada área de conocimiento que se designen sean a propuesta de las organizaciones profesionales interesadas"*.

No cabe formular objeción respecto a esta aportación del Colegio Oficial.

En relación al artículo 12, el Colegio Oficial propone una nueva función de la Agencia Vasca Antidopaje consistente en *"adoptar y promover medidas de prevención"*.

Se considera a este respecto que no es necesario añadir el texto pues a lo largo del apartado uno se enumeran diversas acciones de prevención y, además, en la letra i), se establece como función de la agencia la de *"promover e impulsar acciones de prevención"*.

El Colegio Oficial propone una nueva redacción del artículo 42 y las razones que se aportan son varias. Por un lado, el texto del anteproyecto no sigue el mismo criterio a la hora de referirse a los programas de formación e información, especialmente en el orden de estos términos. Esta sugerencia se extiende a los **artículos 2.f), 3.f) y 4.f)**. Esta sugerencia debe ser atendida de modo que se haga una referencia uniforme a la *"formación e información"* del mismo modo a lo largo del texto.

Por otra parte, se sugiere que los programas de formación e información previstos también vayan destinados a los centros educativos, puesto que éstos constituyen el marco preferente de realización del deporte escolar. Se sugiere por ello la inclusión de los centros educativos en el apartado segundo.

Sin embargo, el anteproyecto tiene presente al ámbito del deporte escolar y al ámbito educativo pues el apartado 1, letra a), dispone que tales programas irán prioritariamente dirigidos a educadores y educadoras y al ámbito del deporte escolar. Asimismo, el apartado 5 dispone que las Diputaciones Forales colaborarán con la Agencia en los programas de formación e información que se encuentran vinculados a sus competencias en materia deportiva.

Lo que si se recomienda en este informe jurídico es evitar la reiteración que se pone de manifiesto en la letra a) del apartado 1 y el apartado 2.

Además de sugerencias sobre alguna cuestión de mera redacción, el Colegio propone que los programas de formación e información se refieran a la *"protección de los y las deportistas menores"*. Sin embargo, hay que resaltar que las medidas de prevención del artículo 42 van destinadas a la protección de la salud de todos los deportistas, sin distinción de su condición deportiva, laboral, edad, etcétera.

También se propone suprimir la referencia que el apartado 3 hace a los gimnasios por varias razones. En primer lugar, los centros deportivos ya se encuentran citados en el apartado 2 del artículo. Por otra parte, se manifiesta que los problemas del dopaje *"no están ligados tanto a los centros deportivos como a las distintas pruebas populares y/o no oficiales de rendimiento físico o de desarrollo muscular"*.

Esta sugerencia del Colegio Oficial puede tenerse en consideración pues, efectivamente, el apartado 2 del artículo 42 ya se refiere a los centros deportivos y los gimnasios son un tipo de centros deportivos. Quizás debe matizarse que el apartado 3 se refiere a los *"usuarios y usuarias de los gimnasios y demás centros deportivos"*. El otro argumento aportado por el Colegio Oficial no se comparte pues los problemas del dopaje si están parcialmente relacionados al mundo de los gimnasios pues la mayoría de las operaciones policiales realizadas en la última década tenían como base de operaciones o lugar de destino los gimnasios, y no sólo para quienes participan en pruebas de culturismo o musculación.

VIII.- ALEGACIONES DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Por parte de la Agencia Vasca de Protección de Datos se presenta un informe, con fecha de 26 de febrero de 2011, de 49 folios de extensión en el que se formulan diversas consideraciones sobre el anteproyecto.

Tras realizar una exposición sobre el marco jurídico general de la protección de datos de carácter personal, la Agencia procede a realizar un análisis de su articulado.

En relación con el artículo 1.1 del anteproyecto, y respecto a la definición de dopaje señala que éste, a efectos de la ley, representa un acto contrario al espíritu deportivo y, sin embargo, no se hace mención alguna al riesgo que representa para la salud.

Sobre esta observación deben realizarse las siguientes consideraciones:

1.- El artículo 2 de la Ley ya manifiesta de forma clara que *"el dopaje pueda atentar gravemente a la salud de las y los deportistas"*.

2 - En uno de los borradores embrionarios del anteproyecto se indicaba en la definición de dopaje, en su artículo primero, que el dopaje conlleva un riesgo para la salud de las personas. Finalmente, atendiendo a algunas aportaciones, se consideró que si bien es cierto que el dopaje conlleva en la mayoría de los casos un riesgo para la salud de las personas, tal riesgo no es efectivo y real en todos los casos. En algunas ocasiones algunos deportistas pueden incurrir en dopaje al tomar sustancias que serían totalmente recomendables si tales deportistas se encontrasen enfermos. En estos casos el mero hecho de su participación en competiciones deportivas y la ausencia de uso terapéutico, convierten en dopaje el consumo de tales sustancias que se prescriben para el resto de los ciudadanos. En este contexto, el anteproyecto optó razonablemente por mantener el rasgo esencial del dopaje –la trampa deportiva- e incidir a lo largo del articulado en que el dopaje constituye un grave y potencial peligro para la salud de los deportistas.

3 - La Ley Orgánica 7/2005 contiene también una definición del dopaje en su artículo primero, pero no hace referencia alguna tampoco al riesgo para la salud. Y esta omisión de la Ley Orgánica no obsta para concluir que el dopaje puede atentar gravemente a la salud de las y los deportistas.

Respecto a los apartados 5 y 6 del artículo 1, dedicado al ámbito de la Ley, considera que regulan el ámbito subjetivo en términos que quizás no son suficientemente claros pues *"parece permitir la extensión del ámbito subjetivo de la Ley a cualquier persona, de cualquier edad, que practique cualquier deporte, y resida, aunque sea temporalmente, en el País Vasco, con independencia de que esté federado o no, o de que compita o no. Sin embargo, esta conclusión que deriva del artículo 1 del texto no queda clara del resto del articulado de la ley"*. En la medida que las y los deportistas deben someterse, dentro y fuera de competición, a controles de dopaje y a otras numerosas obligaciones, la Agencia interpreta que no superaría el necesario juicio de proporcionalidad la obligación de someter a cualquier niño residente en Euskadi que practique algún deporte como, por ejemplo, fútbol o atletismo en la calle, a controles de dopaje y a los distintos tratamientos de datos personales. Por ello, sugiere *"delimitar con mayor precisión el ámbito de la ley evitando cualquier interpretación no querida por los redactores del anteproyecto"*.

Respecto a esta sugerencia pueden reproducirse aquí las consideraciones contenidas en este informe jurídico con relación a las sugerencias realizadas por otras entidades alegantes.

A juicio de la Agencia no resulta acorde con la Ley Orgánica de Protección de Datos el artículo 8.h) del anteproyecto que, al regular los derechos de las y los deportistas, les reconoce el derecho a exigir la destrucción de las muestras que le hayan sido tomadas u obtenidas una vez finalizados el proceso antidopaje y los

correspondientes plazos de prescripción. Y tal disposición añade que tal derecho no se podrá ejercer en el supuesto de que la entidad que haya ordenado el control se haya hecho con la titularidad de las muestras que, en todo caso, deberán destinarse a fines de control de dopaje o de investigaciones.

Esta previsión, según la Agencia, choca con la esencia del derecho fundamental de las personas a la protección de los datos personales, que siguen siendo suyos, de su titularidad, con independencia de quien los trate y de que ese tratamiento lo sea para el ejercicio de una función legítima prevista en una norma con rango de ley.

El anteproyecto trata de conjugar los diferentes derechos e intereses en juego y procura respetar el canon de proporcionalidad. La titularidad de las muestras a favor del deportista se reconoce en el anteproyecto de forma clara, a diferencia de otros textos legales, pero ello se trata de conjugar con la posibilidad de que, una vez que el deportista renuncie a la destrucción de las muestras, se puedan emplear tales muestras a fines de investigación como, por ejemplo, para trazar el denominado mapa del dopaje.

Repárese en que tal propuesta permite disponer de las muestras fisiológicas pero no permite disponer de los datos personales inherentes a las mismas, por lo que no resulta posible establecer la ecuación entre la titularidad de las muestras fisiológicas y la titularidad los datos personales. Existe una disociación entre las muestras fisiológicas y los datos relativos a las mismas.

Asimismo, con relación a los derechos de los deportistas en el **artículo 8**, la Agencia añade que la toma de muestras, por mucho que se trate de una medida necesaria para la propia prevención de la salud de esos deportistas, deberá modularse con el necesario respeto de su intimidad corporal.

A juicio de esta Dirección de Deportes, resulta innecesario añadir una previsión al respecto en el artículo 8 pues el artículo 18.3 del anteproyecto ya establece expresamente que en la realización de los controles se cuidará que los mismos se lleven a cabo con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona, a la protección de sus datos personales y a las mejores prácticas para la realización de dichas actividades.

También en relación con el artículo 8, desde la Agencia se sugiere hacer una mención a los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

Sobre esta sugerencia debe manifestarse que, en principio, resulta innecesaria toda vez que los deportistas, en tanto que ciudadanos, ostentan los derechos previstos en la Ley Orgánica. Los derechos ARCO se encuentran regulados en la citada Ley Orgánica y el anteproyecto constantemente hace alusión a que el régimen de dopaje se ajustará a las disposiciones contenidas en la misma. Por ejemplo, el artículo 15.13 dispone que el tratamiento y cesión de los datos de carácter personal realizados al amparo del anteproyecto se ajustará, íntegramente, a las disposiciones establecidas en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. O en el artículo 18.3 se hace referencia a que en la realización de los controles se cuidará que los mismos se lleven a cabo con pleno respeto a la protección de sus datos personales.

El **artículo 13.6** dispone que para la realización y la mayor eficacia de los controles de dopaje los *“deportistas, equipos, entrenadores y entrenadoras, personal directivo y demás personas del entorno de la o el deportista deberán facilitar”* los datos que permitan la localización habitual de las y los deportistas de forma que puedan realizar, materialmente, los controles de dopaje. A juicio de la Agencia existe cierta indeterminación respecto a los sujetos obligados cuando se hace referencia a *“las personas del entorno del deportista”*, expresión que no aparece, sin embargo, en la

Ley Orgánica 7/2006. Se sugiere sustituir tal expresión por las personas *“designadas por el propio deportista”*.

Sobre esta observación de la Agencia debe señalarse que en el anteproyecto existe una total determinación de los sujetos que deben facilitar los datos de localización del deportista, salvo en la referencia a *“las personas del entorno del deportista”*. Lo que pretende el anteproyecto es remitir al desarrollo reglamentario de la Ley ese núcleo tan importante del entorno del deportista que estará obligado a facilitar los datos. Repárese en que en el entorno del deportista hay frecuentemente personas que no son médicos ni entrenadores que tienen una influencia directa sobre el deportista. Piénsese en el preparador físico, en el personal auxiliar en los deportistas de alto nivel con algún tipo de discapacidad, etcétera.

Por la misma razón, también la Ley Orgánica 7/2006, que contiene la misma obligación de facilitar datos, podría ser objeto de reproche en la medida que se refiere al alcance de dicha obligación en los términos *“que reglamentariamente se establezca”*.

Respecto al artículo 16.8, la Agencia establece que la baja no evita el control por sorpresa y plantea si merece la pena registrar la baja en la Agencia Vasca Antidopaje o resulta suficiente que el propio deportista manifieste que tiene la baja en el momento de que se le requiera para el control.

En nuestra opinión, debe seguirse el mismo criterio que en materia de autorizaciones de uso terapéutico. Estas autorizaciones deben ser objeto de registro y no hay una razón de peso para mantener un criterio diferente con las bajas deportivas, dada su gran incidencia en el sistema de control de dopaje.

No obstante, puede introducirse una aclaración a la última frase del artículo 16.8 en los siguientes términos:

“Tampoco se incurrirá el correspondiente expediente disciplinario o sancionador en el supuesto de que el deportista no realice el control de dopaje en tal supuesto de existencia de baja deportiva debidamente registrada”

Con relación a los controles de salud previstos en el artículo 17 considera la Agencia que existe un alto grado de indeterminación respecto a los tratamientos de los datos de carácter personal que surjan de tales controles.

El anteproyecto se remite al desarrollo reglamentario de la ley en materia de determinación de las condiciones y características que han de revestir las actuaciones de protección de la salud a los deportistas. Sigue así el criterio de la Ley Orgánica 7/2006 (artículo 8.2).

Respecto al artículo 23.5 del anteproyecto, que contempla la responsabilidad de entrenadores, médicos, directivos, etcétera, por el incumplimiento de las disposiciones que regulan la obligación de facilitar a los órganos competentes información sobre las enfermedades del deportista, sus tratamientos, etcétera, cuando el o la deportista *“haya autorizado la utilización de tales datos”*, la Agencia no alcanza discernir con suficiente nitidez el papel que se atribuye a dicho consentimiento.

La Agencia considera que el anteproyecto parece otorgar carta de naturaleza al consentimiento del interesado, pero posteriormente diluye las notas características de tal consentimiento desde el punto de vista que el consentimiento debe ser entendido como una manifestación de voluntad libre y no se puede considerar que existe esa libertad si se anuda la negativa a otorgar el consentimiento a una sanción.

Sobre este particular debe indicarse en primer lugar que el concepto de consentimiento libre debe relativizarse. También los deportistas se pueden negar a someterse a un control de dopaje pues el mismo constituye una invasión en su intimidad corporal, de modo que no cabe la extracción forzosa de muestras. Pero si el deportista se niega a esa realización del control, puede ser sancionado. Lo mismo se puede decir con el consentimiento. El deportista puede no conceder la autorización e, incluso, puede negarse a dar la información que se le requiera, pero en tal caso debe caer sobre el deportista el peso de la ley.

Por otra parte, y con relación a lo anterior, debe indicarse que el anteproyecto sigue el mismo criterio que la Ley Orgánica 7/2006, que también califica como infracción el incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos y obtención de autorizaciones de uso terapéutico.

El artículo 24.1.e del anteproyecto tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos terapéuticos y obtención de autorizaciones para el uso terapéutico y desde la Agencia se constata que hay una referencia al artículo 23.4 cuando en realidad debe ser una referencia al artículo 23.5. Esta observación de la Agencia es acertada.

El artículo 15 del anteproyecto dispone que los clubes y demás entidades deportivas que se determinarán reglamentariamente están obligados a llevar un libro, debidamente registrado en la Agencia Vasca Antidopaje, y del que exista garantía de su integridad en el que harán constar los tratamientos terapéuticos que hayan prescrito a las y los deportistas bajo su dirección, siempre que éstas y éstos autoricen dicha inscripción. Sin embargo, según la Agencia Vasca de Protección de Datos, en el artículo 24 del anteproyecto, a diferencia del tratamiento sancionador por la negativa a autorizar la comunicación de los tratamientos terapéuticos, no observa consecuencia sancionadora alguna *a la negativa o a la no concesión de autorización para la inscripción de tales tratamientos terapéuticos*. También debe ser atendida esta sugerencia de la Agencia.

El artículo 33.5 dispone que la incoación de expedientes disciplinarios y sancionadores por dopaje, así como la resolución que ponga fin a los mismos, se comunicará al Departamento de Interior del Gobierno Vasco. La Agencia Vasca de Protección de Datos señala que no entiende bien la finalidad declarada en el texto para la cesión de datos.

Sobre esta observación debe indicarse que la Dirección de Régimen Jurídico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco remitió, en la fase preparatoria del actual anteproyecto, una sugerencia para que se contemplase un régimen de comunicación de expedientes y sanciones a los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Por parte del Departamento de Interior se consideraba que tal régimen de comunicación iba a permitir preservar el principio de proporcionalidad en la aplicación de la citada Ley Orgánica.

El artículo 43.2 del anteproyecto establece los objetivos del sistema de información sobre el dopaje en el deporte y considera la Agencia que existe un alto grado de indeterminación en los mismos.

Con relación a esta alegación debe indicarse que el anteproyecto sigue el mismo criterio de la Ley Orgánica (artículo 45.1).

También apunta la Agencia la existencia de indeterminación en el artículo 43.8, con relación a la expresión siguiente: *“las entidades públicas y privadas correspondientes*

aportarán a este sistema de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo.

En esta cuestión el anteproyecto ha seguido, asimismo, el criterio contenido en la Ley Orgánica (artículo 45.5).

El artículo 46 del anteproyecto regula la Tarjeta de Salud del Deportista, pero a juicio de la Agencia *'no concreta los sujetos que tendrán la tarjeta de salud'*.

El artículo 46 establece claramente a qué deportistas se expide la tarjeta (deportistas con licencia federada o universitaria), pero posibilita que por vía reglamentaria puedan determinarse otros colectivos de deportistas.

Asimismo, la Agencia apunta que el artículo 46 no clarifica si dicha tarjeta es o no obligatoria para los deportistas.

En principio, ni la Ley Orgánica 7/2006 ni el anteproyecto configuran dicha tarjeta como obligatoria para los deportistas.

En el artículo 46.4 del anteproyecto se dispone que los datos contenidos en la tarjeta de salud sólo podrán ser utilizados, en principio, por los deportistas titulares de la tarjeta y, con su consentimiento, por el personal sanitario que le atienda salvo en aquellos casos en que la legislación sanitaria permite el acceso a tales datos, sin su consentimiento, para la debida atención sanitaria. No obstante lo anterior, en el apartado 5 se dispone que, la negativa a dar el citado consentimiento, tendrá el mismo tratamiento sancionador que el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones de información sancionadas en el anteproyecto. A juicio de la Agencia esa autorización o consentimiento, tal y como se configura en la ley, dista mucho de ser una manifestación libre del interesado.

Respecto a dicha alegación procede remitirnos a lo manifestado anteriormente sobre el régimen del consentimiento o autorización del deportista.

Por último, por parte de la Agencia se indica que el anteproyecto delimita la información que se incorporará a la tarjeta y quienes deben suministrarla, pero lo que no acota es quienes pueden acceder a los datos de la tarjeta de salud, quienes pueden usarlos y el propio uso que se dará de esa información.

Sin embargo, a nuestro juicio, el anteproyecto sí determina por quienes pueden ser usados los datos contenidos en la tarjeta y el uso que se pueda dar a los mismos. El artículo 46.4 dispone que los datos contenidos en la tarjeta pueden ser utilizados por los deportistas titulares de la tarjeta y, con su consentimiento, por el personal sanitario que le atienda.

La Agencia Vasca de Protección de Datos también apunta que la tarjeta de salud del deportista se regula en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, y ha sido desarrollada por el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, pero de manera diferente pues, por un lado, la tarjeta estatal se expide exclusivamente a los deportistas de alto nivel y al resto de deportistas federados. Y, asimismo, la tarjeta estatal sólo tiene finalidad asistencial. Por ello, desde la Agencia se sugiere una reflexión *'sobre si existen intereses públicos dignos de protección, que justifiquen el tratamiento de los datos de salud obrantes en la tarjeta de salud del deportista para una finalidad no propiamente asistencial'*.

A juicio de quien emite el presente, y tomando el propio informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos, las medidas restrictivas existentes en la propia Ley Orgánica 7/2006 como en el anteproyecto examinado, no pueden considerarse desproporcionadas o carentes de justificación.

El artículo 46.7 dispone que la tarjeta podrá estar en un mismo soporte físico que permita el acceso a otras tarjetas y servicios. La Agencia cree que debe clarificarse a qué tarjetas y servicios se refiere el anteproyecto pues, en un principio, parece que se refiere a servicios sanitarios o a la tarjeta individual sanitaria.

El anteproyecto no desea cerrar las múltiples posibilidades futuras que se pueden plantear en el ámbito de las tarjetas inteligentes. Un ejemplo de esa evolución ha sido el DNI electrónico o la Tarjeta Sanitaria Electrónica con Usos Ciudadanos (ONA), que han servido como tarjeta de servicios sanitarios y, al mismo tiempo como una tarjeta de otros usos ciudadanos. Se trata de combinar en un mismo soporte o llave de acceso los últimos avances y garantizar la máxima seguridad. Con dichas tarjetas, que incorporan diversos elementos de seguridad, los ciudadanos han podido acceder a servicios municipales (padrón, multas, bibliotecas, servicios deportivos, etcétera), sanitarios (cita previa, segunda opinión médica, solicitud de cambio de médico, etcétera), forales (tramitación de IRPF, autoliquidaciones, consulta de datos fiscales, obtención de certificaciones, etcétera).

Con esta vocación, propia de las demás tarjetas inteligentes, se desea que la Tarjeta de Salud del Deportista pueda tener diferentes soportes físicos de modo que también pueda funcionar con el DNI electrónico o documentos electrónicos análogos. Y se pretende que la tarjeta electrónica con su chip pueda permitir el acceso a servicios federativos, de instituciones deportivas, sanitarias, etcétera.

El artículo 46.10 añade que la cesión de datos obrantes en la tarjeta sólo podrá realizarse en los supuestos y condiciones que determine la Agencia Vasca de Protección de Datos. Sin embargo, la Agencia precisa que los supuestos y condiciones para la comunicación de los datos de los deportistas en su tarjeta de salud no los puede determinar la Agencia Vasca de Protección de Datos, sino la normativa que regula el derecho fundamental a la protección de los datos personales.

Aunque el anteproyecto se ha basado en el criterio contenido en el artículo 7 del Real Decreto 183/2004, de 30 enero, por el que se regulaba la tarjeta sanitaria individual, que dispone que en caso de que sea necesaria la cesión de los datos de esta base, recabará la asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos, *‘a fin de que por ésta se determinen los supuestos bajo los que podrá efectuarse la cesión a terceros’*. En cualquier caso, resulta muy razonable la consideración formulada por la Agencia

En el artículo 47.1 del anteproyecto se imponen obligaciones de confidencialidad y secreto al personal que desempeñe funciones de control del dopaje así como de aquellas personas que pueden tener acceso a los datos personales de los deportistas, pero la Agencia considera que el anteproyecto no parece abordar ninguna responsabilidad por el incumplimiento de tal deber.

A este respecto hay que señalar que, no es necesario incluir ninguna responsabilidad expresa, siguiendo así el criterio de la Ley Orgánica 7/2006. La razón estriba en que el deber de secreto y de confidencialidad es un deber genérico que se encuentra recogido expresamente en la Ley Orgánica 15/1999 (artículo 10) y la violación de ese deber de secreto se encuentra tipificada por la citada Ley Orgánica.

Así, el anteproyecto debe reprimir las conductas relacionadas con el dopaje, mientras que debe ser la Ley Orgánica 15/1999 la que imponga, como así lo hace, responsabilidades por el incumplimiento de los principios, deberes y garantías de la Ley

El artículo 47.2 dispone que los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones sólo podrán utilizarse para los fines de control de dopaje y,

en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción disciplinaria, administrativa o de delito. Dicho personal queda autorizado para la cesión de dichos datos, informes o antecedentes en caso de denuncia.

Por parte de la Agencia se realizan tres observaciones.

En primer lugar, se indica que esta previsión poco o nada tiene que ver con la confidencialidad y secreto de los datos y por ello sería conveniente reubicarla en otro lugar del anteproyecto.

A este respecto, cabe señalar que el apartado segundo tiene su conexión con el deber de confidencialidad y secreto. Tanto en el anteproyecto como en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 7/2006 se sigue el mismo criterio. En el apartado primero se establece el deber de confidencialidad y secreto de los empleados que desempeñan funciones de control de dopaje y en el apartado segundo se establecen excepciones.

En segundo lugar, la Agencia indica que adolece de cierta confusión en su redacción. Sobre este particular debe indicarse que se ha seguido la misma redacción que en la Ley Orgánica 7/2006.

La última observación que se realiza es que existe una referencia incorrecta al artículo 11.1.a de la Ley Orgánica 15/1999, pues esta ley carece de esta disposición. Es correcta la observación y el anteproyecto debe referirse al artículo 11.2.a que dice que el consentimiento para la comunicación de datos no será preciso cuando la cesión esté autorizada en una ley.

IX. - INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Por parte de la asesoría jurídica del Departamento de Cultura se ha emitido informe con fecha 16 de mayo de 2011 en el que se realizan las siguientes consideraciones:

⇒ CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 9)

El artículo 1 define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación. En este sentido, define qué se entiende por dopaje, entendiendo como tal no sólo el consumo de sustancias prohibidas por parte del o la deportista, sino también la utilización de métodos prohibidos, con la finalidad de aumentar artificialmente el rendimiento deportivo, representando ello un acto contrario al espíritu deportivo.

En relación a esta definición hemos de apuntar que adolece de una falta de concreción que dificulta el entendimiento de qué se entiende por dopaje. La falta de concreción deriva de dos de los conceptos utilizados en la definición del objeto "métodos prohibidos" y "contrarios al espíritu deportivo".

Si se realiza un examen comparativo de los dos textos normativos en los que se sustenta e inspira el Anteproyecto de Ley ahora analizado, esto es, la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y la Ley Orgánica 7/2006, se comprueba que ambas normas de referencia han optado por una mayor concreción en la definición, uniendo dopaje con la tipificación de aquellas conductas prohibidas por la propia norma.

Asimismo, el Código Mundial Antidopaje define dopaje como "la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje según lo dispuesto desde el artículo 2.1 al artículo 2.8 del Código", es decir, define dopaje haciendo una remisión a un elenco de infracciones cuya comisión supondría dopaje.

No se acepta. La supuesta indefinición de conceptos no genera ningún problema de seguridad jurídica puesto que, a efectos sancionadores, ya se menciona que el dopaje es el conjunto de infracciones de la normativa antidopaje. Asimismo, el Anteproyecto,

para evitar cualquier concepto jurídico indeterminado emplea un doble mecanismo de definición del dopaje:

- a) Define el dopaje sin tautologías, es decir, sin incluir lo definido en la definición. No se puede definir el dopaje como el incumplimiento de las normas antidopaje.*
- b) Añade una definición, la estatut, a los puros efectos sancionadores*

El apartado 2 del artículo 1 extiende la definición de dopaje a las competiciones deportivas en las que intervienen animales, eso sí, "con las adaptaciones procedentes". Término a todas luces impreciso ya que se desconoce el alcance de dicho concepto.

A este respecto se ha introducido el siguiente párrafo precisando el concepto de dopaje: 'Respecto a las competiciones deportivas en las que participen animales, el dopaje consiste en la administración a los animales de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos para aumentar artificialmente su rendimiento deportivo, representando ello un acto contrario al espíritu deportivo.'

En relación con el apartado 3 del artículo 1, el último inciso "por parte de cualesquiera personas físicas o jurídicas que estén sujetas a la misma" queda inconexo con la frase anterior, es decir, se dice que es dopaje "el conjunto de infracciones de la normativa antidopaje contenida en la presente ley..." y continúa "por parte de cualesquiera personas físicas o jurídicas que estén sujetas a la misma".

No se aprecia por parte de esta Dirección proponente, ninguna falta de conexión debiendo añadir que la Ley Orgánica 7/2006 se utiliza el mismo esquema: infracción de la normativa antidopaje por parte de las personas "obligadas a ello"

Finalmente, en relación a la delimitación del ámbito de aplicación realizada en el artículo 1, se debe señalar que convendría precisar qué se entiende por actividad deportiva, así como competiciones oficiales en el País Vasco, con el fin de conferir una mayor concreción al ámbito subjetivo y no incurrir en generalidades que pudieran dar lugar a dudas sobre el ámbito de aplicación de la Ley, más teniendo en cuenta que dicho artículo es fundamental para entender la incidencia del resto del articulado

En cuanto a la inclusión de un elenco de definiciones, tanto las diversas leyes reguladoras del deporte como las leyes contra el dopaje no incluyen glosarios de términos existiendo, además, el riesgo de utilizar otras palabras o términos que, a su vez, precisen también una definición.

En el artículo 2 bajo la rúbrica de "principios generales" se recogen una serie de afirmaciones de diversa índole sin un destinatario determinado, por tanto, dirigido a la generalidad de agentes e instancias intervinientes en la materia. Algunos de los enunciados tienen un claro carácter finalista. En otros casos, más que mandatos que deben inspirar la actuación en la materia, son preceptos de carácter normativo que aparecerán más adelante en el texto. Es por ello que teniendo en cuenta que los principios generales del derecho constituyen fuente de derecho (art. 1.4 CC), aconsejamos al servicio promotor que depure este artículo eliminando aquellas ideas que ya han sido puestos de manifiesto en la Exposición de Motivos y deje aquellos que estrictamente podríamos llamar principios generales del derecho.

No se acepta dado que todas los principios recogidos reflejan ideas u objetivos que deben inspirar la actuación de los poderes públicos y de los agentes del deporte. Por supuesto, algunas de esas ideas u objetivos constituyen, además, la "ratio" de la ley.

El apartado b) de este mismo artículo dispone que el dopaje puede atentar gravemente a la salud de las y los deportistas o, en su caso, de los animales. Dado

que la aplicación de las medidas de control del dopaje en animales, si bien tienen una relación directa con la norma tramitada en la medida en que se desarrollo en el ámbito deportivo, constituiría un régimen jurídico diferenciado, dado que los bienes jurídicos tutelados serían distintos. se recomienda separar las referencias a los animales de las referencias a los deportista e incluir la alusión a ese régimen diferenciado o bien en un Capítulo independiente o bien en una Disposición Adicional

A lo largo de la parte dispositiva del Antoproyecto aparecen similares referencias respecto a las cuales se realiza la misma observación artículos 4, 24.3, 27.6, 28.6 y 37.2.

No se acepta en base a las siguientes consideraciones:

1. *Se trata de un apartado de principios generales no de aplicación concreta de disposiciones específicas.*
2. *El principio general del apartado 6 es común a ambas ya que el dopaje puede perjudicar la salud de los deportistas y de los animales*
3. *El bien jurídico a tutelar es el mismo en ambos casos: preservar la limpieza de la competición y el juego limpio.*

Respecto al artículo 6 relativo a las responsabilidades de las entidades deportivas la asesoría jurídica realiza las siguientes observaciones:

- 1º Convendría precisar qué se entiende por entidades deportivas a los efectos de esta Ley.

No se acepta por innecesario, dado que la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco ya regula estas entidades

2º. Otro tanto ocurre con el apartado 3º del artículo 6 que sólo se refiere al supuesto de que las federaciones deportivas vascas o territoriales no asuman el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en materia de dopaje, en cuyo caso actuará la Agencia Vasca Antidopaje.

Solo se hace referencia a las federaciones porque son las únicas organizaciones deportivas que tienen encomendadas funciones públicas de carácter administrativo

3º. En su apartado d). se establece que las entidades deportivas deberán "negar cualquier subvención o ayuda a cualesquiera entidades deportivas o deportistas que infrinjan la normativa antidopaje o que rehúsen someterse a los controles correspondientes". En relación a este apartado debemos señalar que en lugar de negar las ayudas a quienes "infrinjan la normativa antidopaje", debería indicarse "a quienes hayan sido sancionados por infringir la normativa antidopaje", con el fin de ser salvaguardar el principio de presunción de inocencia también aplicable a los procedimientos sancionadores.

Se acepta y se modifica el texto del apartado.

4º. En el apartado l) se prevé que las entidades deportivas del País Vasco tendrán la responsabilidad de "Obtener de las y los deportistas la autorización para permitir a los organismos competentes el tratamiento de sus datos personales que resulten necesarios para la efectiva realización de controles de dopaje y eventuales comunicaciones de resultados de tales controles". El tratamiento de datos personales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre), teniendo en cuenta que, en los supuestos en los que dicha Ley exige para el tratamiento de datos personales la autorización de las personas afectadas, esta autorización se apoya en el consentimiento libremente dado por las mismas, resulta difícil comprender cómo van a tener, las entidades deportivas, la responsabilidad de obtener dicha autorización sujeta a un decisión voluntaria del afectado. A lo sumo debería decirse que adoptarán las medidas oportunas para recabar la autorización de los y las deportistas en base a lo previsto en

la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Este mismo apartado se incluye en artículo 7. letra r)

Se acepta y se modifica el texto del apartado

5ª. Asimismo, los apartados f) y m) son muy similares, viniendo a decir prácticamente lo mismo, por lo que podrían refundirse en un único apartado. Lo mismo cabe decir en relación a los apartados c) y n) del artículo 7.

Se acepta manteniendo los dos apartados pero modificando su redacción de forma que el apartado f) hace referencia a aspectos reglamentarios y el apartado m) a aspectos orgánicos.

6ª. El apartado n) y el apartado k) del artículo 7 disponen que las entidades deportivas, así como las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos deberán velar por la confidencialidad de los resultados de los análisis de los procesos de control de dopaje hasta el momento que resulte procedente la comunicación de los mismos. Este último inciso ("hasta que resulte procedente la comunicación de los mismos") además de adolecer de una gran inconcreción que debería corregirse, no es acorde a lo previsto en el artículo 47 del Anteproyecto que establece una obligación de confidencialidad y secreto, sin límite temporal alguno, al personal que desempeñe las funciones de control del dopaje, así como a las y los miembros de los órganos de entidades deportivas y su personal

No se acepta. Este deber de confidencialidad y secreto es, como cualquier derecho u obligación, limitado. Los derechos y deberes no son ilimitados. Tanto la Ley Orgánica 7/2006, como el Anteproyecto autorizan expresamente la utilización de dichos datos para los fines de control y, en su caso, de denuncia (ante terceros). Asimismo, la Ley Orgánica 7/2006 autoriza la cesión de datos.

En el artículo 8, se contempla el listado de derechos de los y las deportistas que van a ser sometidos a un control de dopaje. Respecto a este listado de derechos debemos hacer las siguientes consideraciones:

- En el apartado e) se prevé que tendrán derecho a que se realice el control antidopaje "en condiciones que no supongan una lesión de su dignidad o intimidad salvo en los límites que resulten necesarios" Tal y como está redactado este precepto parece que se está posibilitando una lesión del derecho a la intimidad dentro de unos límites

Como se explica y fundamenta en la memoria del anteproyecto, los derechos fundamentales, en lo relativo al dopaje, precisan una lógica ponderación. El Consejo General del Poder Judicial establece que "los controles de dopaje pueden derivar restricciones y limitaciones al ámbito y contenido propio de los derechos individuales de carácter fundamental" Un ejemplo la toma de muestras de orina delante del responsable del control "de forma que se puede observar la emisión, directamente o a través del espejo que haya en la sala, sin ningún impedimento o restricción" (artículo 86 del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte.

- En el apartado h) se dice que tendrán derecho a "exigir la destrucción de las muestras de sangre, orina o cualesquiera muestras que le hayan sido tomadas u obtenidas una vez finalizados el proceso antidopaje y los correspondientes plazos de prescripción" No queda claro a qué plazos de prescripción se hace referencia. Tampoco resulta fácil comprender a qué se refiere la norma al decir que "Tal derecho no se podrá ejercer en el supuesto de que la entidad que haya ordenado el control se haya hecho con la titularidad de las muestras que,

en todo caso deberán destinarse a los fines de control de dopaje o de investigación'. Al respecto nos parece oportuno recordar lo previsto en la normativa sectorial, en la que se establece que la utilización de muestras biológicas para fines de investigación obtenidas con una finalidad originaria distinta a la investigación requiere el consentimiento del interesado, que a su vez, podrá ser revocado en cualquier momento (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica)

Se modifica el texto aceptando la alegación: "A exigir la destrucción de las muestras de sangre, orina o cualesquiera muestras que le hayan sido tomadas u obtenidas, una vez transcurrido el plazo de ocho años desde la fecha de la toma de dichas muestras. La utilización de las muestras para fines de investigación se realizará previa anonimización de manera que no pueda asociarse a ningún deportista en particular y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre investigación biomédica."

- La misma imprecisión que se constata en el apartado anterior, se repite en el apartado i) cuando se indica "hasta el momento que resulte oportuno", es decir, en dicho apartado se prevé que los deportistas tendrán derecho "a exigir de los organismos deportivos la confidencialidad de los resultados hasta el momento que resulte oportuno", debería concretarse dicho momento.

No aceptamos la propuesta conforme a lo ya expuesto respecto al apartado e).

En el artículo 9 se establece "que se hayan negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje" aconsejamos que se concrete de la siguiente forma "que hayan sido sancionados por haberse negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje".

Lo mismo ocurre en el apartado 3 de este artículo

Por último y para cerrar el comentario relativo a este Capítulo I, dada la terminología variada, con el fin de homogeneizar y aclarar la terminología empleada, posibilidad de incluir un elenco de definiciones: "deportista", "dopaje", "organización deportiva", "entidad deportiva", "sustancias o métodos prohibidos", "competiciones deportivas oficiales", "espíritu deportivo".

Se aceptan las propuestas incluidas en el párrafo primero respecto a la incorporación del término "sanción".

Respecto a determinar los tipos de sanción, penal y administrativa, consideramos que el término "sanciones" no se limita a un tipo y es, por tanto, omnicomprensiva de las sanciones administrativas, disciplinarias y penales

En cuanto a la inclusión de un elenco de definiciones, tanto las diversas leyes reguladoras del deporte como las leyes contra el dopaje no incluyen glosarios de términos existiendo, además, el riesgo de utilizar otras palabras o términos que, a su vez, precisen también una definición.

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (artículos 10 a 12).

En el artículo 11 y en relación al órgano consultivo, se prevé la participación de una persona en representación de los Territorios Históricos. No queda claro si es una persona por cada territorio o bien una persona en representación de los tres.

Se acepta y se modifica el artículo

No se prevé la composición del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico. Si bien no es necesario el desarrollo en el propio texto legal de la forma de organización de su funcionamiento interno, e incluso de su composición exhaustiva, se echa de menos una mayor concreción.

No se acepta. Tampoco se regula la composición en la Ley Orgánica 7/2006, en la que ni tan siquiera se menciona

CAPÍTULO III. CONTROLES DE DOPAJE (artículos 13 al 20).

Artículo 13

El apartado 4 toma como referencia de origen el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 7/2006. Al transcribir el citado artículo 5.2 se suprime, en primer lugar, el inciso "que hayan sido suspendidos en su licencia", para acomodar dicho artículo al ámbito subjetivo del Anteproyecto y referirse a los deportistas que hayan sido suspendidos (independientemente de que tengan licencia o no), sin embargo, a continuación se añade que en todo caso se someterán a control de dopaje con carácter previo "a la rehabilitación de la licencia deportiva". Tal y como está redactado el artículo 13 será necesario el sometimiento a control de dopaje para la rehabilitación de la licencia deportiva, sin embargo, para el supuesto de rehabilitación en la práctica deportiva sin licencia no se prevé nada.

Tanto la Ley Orgánica como el anteproyecto hablan de que todo deportista estará obligado a someterse al control, si se le practica. No debe confundirse "obligatoriedad" del deportista con la "necesidad" de que se practique el control durante la rehabilitación en todo caso.

Por otra parte, suspensión de la licencia significa que sigue existiendo licencia y que se encuentran suspendidos los derechos, pudiendo verse sometido el deportista a controles obligatorios para la rehabilitación de tales derechos. "Rehabilitación" significa "nueva habilitación" lo que supone que antes el deportista estaba licenciado o habilitado

El apartado 10 ha copiado el contenido del artículo 5.6 de la Ley Orgánica, dando por supuesto que "deportistas sin la correspondiente licencia vasca que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la CAPV, o que residan, aunque temporalmente, en ésta" es el equivalente a "deportistas con licencia no española que participen en competiciones estatales o internacionales que se celebren en el ámbito de aplicación de esta Ley". Evidentemente tal equivalencia no es cierta, por lo que la segunda parte del artículo 5.6 –referida a la normativa internacional y a las federaciones y organismos internacionales competentes– no guarda relación con el inciso precedente.

En otro orden de cosas, se produce un solapamiento con el ámbito subjetivo y material de la Ley estatal, ya que este artículo –tal y como está redactado– regula, entre otros, el sometimiento a control de los deportistas con licencia federativa española ("licencia no vasca") que participen en competiciones deportivas que se celebren en territorio de la CAPV (pudieran ser competiciones oficiales estatales). Esta previsión no es acorde con el ámbito de aplicación del Anteproyecto.

Se acepta. El artículo debe adaptarse a lo establecido en los artículos 50 y 51 del Anteproyecto de modo que:

- *En lugar de deportistas "sin la correspondiente licencia vasca" se sustituye por deportistas con licencia estatal o internacional.*
- *Aclarar que se refiere a los supuestos previstos en esta Ley.*
- *Modificar el texto "el expediente administrativo sancionador o el disciplinario se tramitará por el organismo que resulte competente con arreglo a la ley."*

El artículo 15 versa sobre las autorizaciones terapéuticas. De la lectura conjunta de la Disposición Adicional Octava (en la actualidad sexta) y del artículo 15,

en conexión con el artículo 1 del Anteproyecto (ámbito subjetivo), se llega a la conclusión que si bien se exime a los deportistas sin licencia participantes en pruebas de gran exigencia física, no así al resto de deportistas sin licencia que residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco, que -tal y como está redactado el Anteproyecto- quedarían obligados a solicitar autorizaciones de uso terapéutico y a llevar un libro-registro sobre las mismas, conclusión que resulta cuando menos sorprendente.

En resumidas cuentas, existe una contradicción entre ambos preceptos

Se acepta y se propone eximir de las obligaciones (llevar un libro registro de autorizaciones) a los deportistas que entrenen o compitan en el País Vasco.

El artículo 16 introduce una novedad no recogida en la Ley Orgánica 7/2006: la posibilidad de que las entidades deportivas contemplen en sus reglamentos la situación de baja deportiva. El problema respecto a esta remisión es que en ninguna parte del Anteproyecto se definen cuáles son las entidades deportivas a las que resulta aplicable esta Ley

No se acepta, la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco define las entidades deportivas, existiendo, además, un Registro de Entidades Deportivas

El artículo 18 bajo el título "planificación y gestión de los controles" establece que la Agencia Vasca Antidopaje determinará los controles de dopaje, de salud y demás actuaciones en materia de protección de la salud que deberán ser realizados por las entidades deportivas. El título del artículo debería concretarse más ya que no se refiere a cualquier planificación y gestión, sino, en concreto, a la planificación y gestión de los controles por parte de la Agencia Vasca Antidopaje

No se acepta, el artículo 9 de la Ley Orgánica 7/2006, tiene idéntico título.

> CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL DOPAJE (artículos 21 a 41).

El artículo 22 -relativo a la aplicación del régimen sancionador administrativo- se completa con una cláusula de salvaguardia del principio non bis in idem, remitiendo al artículo 33. No obstante, dicha cláusula, si bien se ha incluido dentro del artículo relativo al régimen sancionador administrativo, afectaría igualmente al régimen disciplinario, además no sólo en relación a los hechos sancionados penalmente, sino entre la propia potestad sancionadora administrativa y la disciplinaria. De modo que en el Anteproyecto que ahora se tramita debería preverse la salvaguardia del principio non bis in idem entre las sanciones administrativas y las disciplinarias

No se acepta en base a los siguientes motivos:

En primer lugar no es necesaria la aclaración referida ya que el artículo 33, que aborda monográficamente dicho principio, se refiere al ámbito administrativo sancionador y al disciplinario.

En segundo lugar, según el informe de la asesoría jurídica el elenco de infracciones y sanciones es el mismo en ambos procedimientos. Sin embargo, la importancia de esta cuestión no radica en la identidad o no de infracciones y sanciones sino a la identidad de sujeto, hechos y fundamento o bienes a proteger

No obstante, se introduce una aclaración en el artículo 33.4 "sólo podrá recaer sanción administrativa y disciplinaria sobre el mismo hecho cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico"

En cuanto a la redacción de los artículos 21 y 22 debemos hacer las siguientes observaciones.

- El inciso "domiciliadas en el País Vasco" no queda claro si se refiere a las personas o a las entidades deportivas. Por lo que debería precisarse la incidencia de dicho requisito y, en caso de referirse a los deportistas precisarse qué se entiende por domiciliadas.
En ese mismo párrafo 1º del artículo 21 se establece que "desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente ley". Como ya se ha dicho no existe a lo largo del Anteproyecto una definición concreta de qué se entiende por "actividad deportiva".

No se acepta, se refiere a las entidades deportivas. Como ya ha quedado expresado en páginas anteriores, tanto las diversas leyes reguladoras del deporte como las leyes contra el dopaje no incluyen glosarios de términos existiendo, además, el riesgo de utilizar otras palabras o términos que, a su vez, precisen también una definición.

En el artículo 23 del Anteproyecto se regula la responsabilidad del deportista "y de su entorno". En relación al párrafo 6º la asesoría jurídica considera que convendría concretar qué se entiende por "personas del entorno". En este sentido, la Convención Mundial Contra el Dopaje en el Deporte utiliza el término "personal de apoyo a los deportistas" y los define como "cualquier entrenador, instructor, director deportivo, agente, personal del equipo, funcionario, personal médico o paramédico que trabaje con deportistas o trate a deportistas que participen en competiciones deportivas o se preparen para ellas."

Se acepta y se modifica el texto del artículo.

El artículo 24 en su apartado 1.e) y en relación con el artículo 15.1, hace referencia al consentimiento para la inscripción de los tratamientos terapéuticos prescritos ("siempre que éstos y éstas autoricen dicha inscripción"). Este requisito no tiene sentido porque no es una decisión voluntaria del deportista, sino una obligación cuyo incumplimiento acarrea una infracción muy grave.

Se acepta y se propone eximir de las obligaciones (llevar un libro registro de autorizaciones) a los deportistas que entrenan o compiten en el País Vasco.

En otro orden de cosas, debemos señalar que la referencia al artículo 23.3 recogida en el apartado dj del artículo 24.1 es incorrecta y debería remitir al artículo 23.4. La misma corrección debería realizarse en el artículo 24.2.a).

Se acepta y se modifica el texto.

Este artículo se cierra con un apartado final en el que se establece que "Las infracciones descritas en los apartados anteriores también se entenderán referidas, con las lógicas adaptaciones, a los supuestos de participación de animales en competiciones deportivas". En este sentido, debemos señalar que en un posterior desarrollo reglamentario de dichas adaptaciones no podrán contemplarse ni infracciones ni sanciones nuevas o distintas a las tipificadas en la futura Ley, y todo ello con el fin de salvaguardar el principio de legalidad.

No se acepta ya que esta previsión es la recogida en la disposición primera de la Ley Orgánica 1/2006.

El artículo 25 sólo se refiere a la sanción de suspensión o presunción de la licencia federativa. Teniendo en cuenta que el régimen sancionador previsto en el Anteproyecto también es aplicable a deportistas sin ningún tipo de relación de sujeción



especial, no queda claro qué sanción debe imponerse a los deportistas que carecen de licencia federativa. Podría deducirse que están exentos de sanción.

Se acepta y se modifica el texto.

El artículo 27, tanto en la rúbrica como a lo largo del artículo -salvo en el 5º párrafo-, habla únicamente de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial. Sin embargo, en el apartado 5º establece un mandato a las federaciones y a las entidades organizadoras de competiciones deportivas (no necesariamente de carácter oficial, entendemos) de adaptar su normativa para incluir las previsiones contenidas en este artículo. Teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Ley también incluye dentro de su ámbito de aplicación competiciones de carácter no oficial, debería aclararse si éstas quedan o no incluidas dentro de los sujetos sancionables del artículo 27.

Se acepta y se modifica el texto del artículo

En el apartado 5º se establece lo siguiente: "Las federaciones deportivas y entidades organizadoras de competiciones deportivas adaptarán su normativa para incluir estas previsiones, que serán compatibles con la responsabilidad civil que en cada caso proceda y con la depuración de cualesquiera otras responsabilidades que resulten exigibles en virtud de lo dispuesto por esta Ley"

Por tanto, ese inciso sobre la obligación de que las federaciones, ligas y entidades organizadoras de competiciones oficiales adapten su normativa a estas previsiones se refiere, en concreto, a las previsiones contenidas en los dos párrafos anteriores. Sin embargo, al trasladar esa obligación al Anteproyecto se desvincula del apartado al que va unido en la Ley Orgánica y se coloca como apartado independiente, por lo que surge la duda sobre qué adaptaciones concretas deberán realizar las federaciones y entidades organizadoras de competiciones deportivas

Se acepta y se refunden los apartados 4 y 5.

En el apartado 6º se recoge una cláusula según la cual las sanciones previstas en dicho artículo serán aplicables a las personas propietarias y poseedoras de animales que participen en pruebas deportivas y a todas aquellas que sean partícipes en la comisión de la correspondiente infracción. Resulta complicado entender cómo se van a aplicar las sanciones previstas en el artículo 27 en aquellos casos en los que no se desempeñen cargos deportivos o no se tenga licencia deportiva o habilitación equivalente, ni relación de sujeción especial con federación o entidad deportiva alguna, ya que las sanciones reguladas en dicho artículo consisten en la inhabilitación o suspensión o privación de la licencia deportiva o, a lo sumo, de la posibilidad de obtenerlas

No se acepta. Evidentemente si la sanción consiste en la suspensión o privación de licencia o la inhabilitación de obtención de licencia, debe existir un modelo de licencia para los propietarios. Por ejemplo, la Federación Vasca de Hípica y las demás federaciones de hípica, así como de otros deportes con animales, contemplan la licencia de los propietarios.

El artículo 28, únicamente se refiere a personal sanitario bajo licencia deportiva o habilitación equivalente y al servicio o integrado en federaciones deportivas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones oficiales. Se desconoce qué ocurre con el personal sanitario sin licencia deportiva o habilitación equivalente o al servicio, por ejemplo, de entidades organizadoras de competiciones

de carácter no oficial, que también estarían incluidos en el ámbito subjetivo sancionable del Anteproyecto.

No se acepta, el párrafo 4º establece claramente las consecuencias:

- a) *No podrán obtener licencia u habilitación en un futuro*
- b) *Lo anterior se entiende sin perjuicio de la actuación de los respectivos colegios profesionales.*

El artículo 30 apartado 2 establece que las multas impuestas por la Agencia Vasca Antidopaje serán ejecutadas, en curso de impago, de manera forzosa por la Agencia, pero nada se prevé respecto a otras entidades (federaciones) que ejercitan la potestad disciplinaria.

El Anteproyecto ha excluido expresamente este supuesto pues resulta dudoso que dichas multas constituyan "ingresos de derecho público".

En el artículo 31 hay varias referencias a "la presente sección". Este inciso debería sustituirse por "el presente Capítulo", ya que en el Anteproyecto –a diferencia de lo que ocurre en la LO 7/2006– no hay secciones. Estas mismas alusiones a la "presente sección" aparecen también en los artículos 27.4, 28.4 y 28.5.

Se acepta y se modifica el texto del artículo.

El artículo 32 lleva el título "Eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad para obtener licencia deportiva". Sin embargo, ese título no es suficiente para lo regulado en el artículo 32 del Anteproyecto, ya que en dicho artículo no sólo se recogen ambos aspectos, sino también otras cuestiones.

A nuestro juicio el título del artículo comprende los contenidos del mismo

En el artículo 34 se regulan las causas de extinción de la responsabilidad, pero refiriéndose exclusivamente a la responsabilidad disciplinaria.

Se acepta y se elimina la palabra disciplinaria.

En el artículo 37 se establece que "el ejercicio de la potestad sancionadora de carácter administrativo en materia de represión del dopaje corresponderá al Gobierno Vasco", esta previsión no casa con el artículo 12.1.e) del Anteproyecto, que establece que corresponderá el ejercicio de la potestad sancionadora a la Agencia Vasca Antidopaje. Si bien no hay impedimento para que sea la Agencia Vasca Antidopaje la que ejerza la potestad sancionadora, los artículos mencionados (37 y 12.1.e.) deberían estar en sintonía.

La Agencia Vasca Antidopaje forma parte de la organización institucional del Gobierno Vasco. Su estatuto lo aprueba el Gobierno Vasco mediante Decreto y ejerce funciones que corresponden al Gobierno Vasco.

En el artículo 38.5 se señala que "el procedimiento disciplinario en materia de dopaje terminará mediante resolución o por caducidad". En caso de que termine por caducidad, también finalizará mediante resolución porque debería dictarse una resolución declarando tal circunstancia. En este sentido, aunque el artículo 38.5 se refiere al procedimiento disciplinario, entendemos que resulta igualmente aplicable el artículo 42.1 de la LRJ-PAC,

Se acepta y se elimina

En este mismo apartado 5º del artículo 38 se indica "El vencimiento del plazo establecido en el apartado primero de este artículo" pero tal apartado no hace

referencia a ningún plazo, por lo que debería señalarse más claramente que se trata del plazo de seis meses aludido en la primera frase del artículo 38.5 de modo que sería más adecuado decir: "El vencimiento de dicho plazo de seis meses" o "El vencimiento del plazo establecido en este apartado" o similar

Asimismo, si bien dicho artículo se refiere tanto a la potestad disciplinaria de las federaciones deportivas del País Vasco, como a la de las demás entidades con las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación en competiciones deportivas celebradas en el País Vasco, en su apartado 3 únicamente menciona a las federaciones. Lo mismo ocurre en el artículo 39.6.

En el artículo 38 se establecen dos plazos distintos de resolución del procedimiento disciplinario

Respecto a la primera (mención del plazo de seis meses) segunda (no restringir las previsiones disciplinarias a las federaciones deportivas) y tercera observación (concreción de la prórroga) se aceptan las propuestas. En cuanto a las contradicciones entre los dos plazos, no se acepta, se sigue el modelo estatal

En el artículo 39.3 sólo se alude al "correspondiente procedimiento disciplinario o causa penal", obviando el sistema dual del Anteproyecto
Se acepta. Se introduce la referencia al procedimiento sancionador.

El artículo 39.7 obvia la posibilidad prevista en el artículo 17 del Decreto 310/2005, de 18 de octubre, por el que se regula el Comité Vasco de Justicia Deportiva, relativo a la posibilidad de que éste adopte medidas cautelares para salvaguardar la efectividad del fallo, entre las que podría estar la suspensión de la sanción

No se acepta, por innecesaria, la referencia expresa al citado Comité. Si bien puede incluirse una referencia a cualquier órgano disciplinario, pues también las federaciones deportivas tienen órganos disciplinarios que pueden acordar la suspensión.

En el artículo 40 se debería sustituir "Gobierno Vasco" por Administración General Vasca o Administración General de la CAPV o similar.

Se acepta.

CAPÍTULO V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN (artículos 42 al 46).

En el apartado 2 del artículo 43 se establecen una serie de objetivos del sistema de información y se hace referencia a "los siguientes colectivos" pero no se mencionan los mismos

Se acepta y se modifica el artículo

En su apartado 5º se establece que en materia de control de dopaje no cabe el acceso a los datos de esta tarjeta sin el consentimiento del deportista, sin embargo, a renglón seguido se establece que el no consentimiento será constitutivo de infracción muy grave. Por tanto, debemos reiterar la falta de sentido de establecer la voluntariedad de una decisión para luego convertirla en obligación cuyo incumplimiento está sancionado

No se acepta porque como ya se ha explicado anteriormente, el concepto de consentimiento voluntario debe relativizarse. Por ejemplo, los deportistas se pueden negar a someterse a un control de dopaje y la decisión o el consentimiento recae

sobre ellos, de modo que no cabe la extracción forzosa o sin consentimiento. Pero si el deportista se niega a la realización de esos control puede ser sancionado

⇒ **CAPÍTULO VI. RÉGIMEN DE LOS DATOS RELATIVOS AL DOPAJE** (artículos 47 al 49).

En el artículo 47 se establece una obligación de confidencialidad pero no se prevé ninguna consecuencia jurídica en caso de incumplimiento.

No se acepta. Siguiendo el criterio de la Ley Orgánica 7/2006, el deber de secreto y de confidencialidad es un deber genérico que se encuentra recogido expresamente en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la violación de ese deber de secreto y confidencialidad se regula en dicha ley. El Anteproyecto debe recoger las conductas relacionadas con el dopaje, mientras que debe ser la Ley Orgánica la que imponga responsabilidades por el incumplimiento de los citados deberes.

El artículo 49.1 señala que "Los equipos que participen en competiciones que se celebren en el País Vasco están obligados a llevar un libro registro..", esta previsión excede el ámbito material previsto en el art. 1 del Anteproyecto.

Se acepta matizando el texto con la siguiente redacción: "1 - Los equipos que participan en competiciones que se celebren en el País Vasco e incluidas en el ámbito material de esta ley. ."

⇒ **CAPÍTULO VII. FEDERACIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES Y DEMÁS ENTIDADES QUE RIGEN, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, LA ACTIVIDAD DEPORTIVA** (artículos 50 al 53).

En el art. 50.1 debería cambiarse la conjunción "y" a continuación señalada por la conjunción disyuntiva "o": "La responsabilidad de la ordenación y realización de controles de dopaje en las competiciones internacionales celebradas en Euskadi corresponde al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones deportivas o instituciones internacionales (...)"

Se acepta

El artículo 51.1 excede del ámbito subjetivo y material del Anteproyecto al señalar que se podrá someter a control de dopaje a los deportistas nacionales o extranjeros que se encuentren compitiendo en Euskadi, sin excluir las competiciones que quedan fuera del ámbito de aplicación del Anteproyecto

Los controles son fuera de competición por lo cual no se pueden excluir determinadas competiciones. No obstante, convendría redefinir el ámbito subjetivo estableciendo que los controles fuera de competición se realizarán a "deportistas nacionales o extranjeros que compitan o se entrenen en Euskadi"

En el artículo 52 (en el título) debería discernirse qué tipo de licencia, ya que a los deportistas con licencia federativa española les sería de aplicación el artículo 32 de la LO 7/2006. Es por ello que si la pretensión es referirse a las licencias reguladas en la Ley 14/1998, así debería indicarse.

Se acepta matizando que la licencia puede ser vasca, española o internacional.

⇒ **DISPOSICIONES ADICIONALES.**

La **Disposición Adicional Segunda** prevé el establecimiento de fórmulas de colaboración con el Estado.

En esta Disposición convendría sustituir "Gobierno Vasco" por "Administración de la CAPV" (o similar).

Se acepta.

En la **Disposición Adicional Tercera (ahora Final Tercera)** se habilita al titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes para adaptar el régimen sancionador y disciplinario previsto en el Anteproyecto. Debe corregirse esta disposición y dirigir la facultad de desarrollo reglamentario al Gobierno y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 c) de la Ley de Gobierno (Ley 7/1981, de 30 de junio):

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en las Directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones, los mandatos de actuación o complemento normativo, es decir, los que llaman a una autoridad o norma para su desarrollo, deberían colocarse en las Disposiciones Finales.

Se acepta y se modifica el texto de la disposición

En la **Disposición Adicional Cuarta (ahora Tercera)** se ha previsto la responsabilidad disciplinaria de aquellos profesionales (con o sin licencia deportiva) que faciliten, colaboren, prescriban o dispensen sustancias y productos susceptibles de producir dopaje. A este respecto, la asesoría jurídica señala en relación a tales extremos que, teniendo en cuenta la indefinición del término actividad deportiva a los efectos de este Anteproyecto y la amplitud del ámbito subjetivo y material del Anteproyecto, podría ser pernicioso para el ejercicio profesional del personal sanitario, dado que esta responsabilidad puede alcanzar a los profesionales que prescriben a "deportistas sin licencia".

Respecto a la indefinición del concepto "actividad deportiva" nos remitimos a lo expuesto anteriormente en el presente informe.

En cuanto al ámbito excesivo de este artículo conviene precisar que la responsabilidad disciplinaria de los profesionales surge cuando no cumplen con las formalidades prescritas en sus respectivas normas de actuación y en las previstas en la ley

La **Disposición Adicional Quinta (ahora cuarta)** debería estar en el artículo ya que se trata de una conducta tipificada como infracción muy grave. El párrafo primero de la Disposición es una copia del artículo 42 de la L.O 7/2006, que consta de dos párrafos de modo que al trasladarse de forma prácticamente literal a la Disposición Adicional se ha incluido una referencia a un párrafo anterior, no existiendo párrafo previo alguno.

Asimismo, la referencia al artículo 131 de la Ley 14/1998 debería suprimirse y en su lugar debería concretarse la sanción.

Se acepta

Finalmente, en la **Disposición Adicional Octava (ahora sexta)** el apartado d) —que está incorrectamente numerado como a)— se indica que la inhabilitación o descalificación tienen carácter sancionador, y por tanto dicha previsión deberá también someterse a los principios de legalidad y tipicidad.

No se acepta, dado que en nuestra opinión no es acertada la observación sobre el carácter sancionador de esta inhabilitación. Por ejemplo, impedir la participación a los ciclistas que tienen una tasa de hematocrito muy alta no es sancionar (puede ser peligroso para su salud, aunque su origen no sea el dopaje). Y tampoco debe plantearse una modificación pues las sanciones que se pueden imponer por los

organizadores o por la Administración (potestad sancionadora) tienen su cobertura en la Ley

10. DISPOSICIONES DEROGATORIAS.

Se prevén dos disposiciones derogatorias. La **Disposición Derogatoria Primera y Segunda**

No obstante, sería conveniente refundir ambas en una única Disposición Derogatoria, ya que las directrices de 23 de marzo de 1993 recomiendan que se cierre la lista mencionada anteriormente con dicha cláusula de salvaguardia.

Se acepta y se refunden.

11. DISPOSICIONES FINALES.

En la **Disposición Final Tercera** se habilita al Gobierno Vasco para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del Anteproyecto.

Entendemos que dicha disposición responde a una previsión, que si bien puede sobreentenderse por venir referida con carácter general en otra norma como el artículo 29 del Estatuto de Autonomía y el 16 de la Ley de Gobierno, viene siendo de referencia común en la normativa comparada. No obstante, procede señalar que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno ha venido insistiendo en que se suprima, por tratarse de una previsión legal que reitera lo que el ordenamiento ya prevé (Dictamen nº 107/2003).

Se acepta y se suprime.

La **Disposición Final Quinta** establece que "de conformidad con lo establecido con el artículo 149.3 de la Constitución, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Estado sobre esta materia del dopaje en tanto no sean objeto de regulación por la CAPV". Al respecto, si bien en las Directrices para la elaboración de leyes se indica que en las Disposiciones Finales se establecerán las reglas de supletoriedad, la regla de supletoriedad establecida es redundante ya que simplemente contiene una referencia genérica al artículo 149.3 de la CE, que aunque no se contenga en una Disposición Final será igualmente aplicable.

Se acepta y se suprime.

X. INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO

El informe favorable emitido con fecha 29 de julio realiza las siguientes consideraciones

1ª No se ha acreditado de forma suficiente la necesidad de crear una nueva entidad para la consecución de los objetivos pretendidos, ni tampoco las razones que avalan la específica creación de un ente de derecho público, atípico en el ámbito de esta administración

La creación de un nuevo ente se justifica, en primer lugar, en la necesidad de separar la función de apoyo biomédico y técnico a las y los deportistas de alto nivel, cuyo objetivo es la mejora del rendimiento deportivo y la labor de lucha contra el dopaje con la finalidad de evitar que para el logro de dicho rendimiento se utilicen actuaciones contrarias a la normativa. El ejercicio de ambas funciones, asignadas a la Dirección de Deportes y desempeñadas en la actualidad por la unidad administrativa denominada Centro de Perfeccionamiento Técnico con sede en Eadura (Getxo-Bizkaia), debe realizarse por entidades diferentes al objeto de evitar que el sistema se contamine.

dado que, evidentemente, el dopaje constituye uno de los métodos "no deseables" para la mejora del rendimiento deportivo.

Por otro lado, existe, a nuestro entender, otra razón importante para la creación de la Agencia como estructura independiente. La Dirección de Deportes, está compuesta actualmente, por diversas unidades administrativas en diferentes ubicaciones (Lakua (Vitoria-Gasteiz) y Fadura (Getxo). Los servicios existentes en Fadura son: el Centro de Perfeccionamiento Técnico (CPT), la Escuela Vasca del Deporte, y el Servicio Antidopaje (compuesto por un único médico encargado del área). Además existe la Fundación Euskadi - Kirola Fundazioa también ubicada en dicho Centro, dedicada al impulso del Alto nivel deportivo y que se nutre del apoyo técnico y biomédico del CPT.

A la vista de este entramado organizativo, si ya es complicado el control desde la Dirección de dos Centros con funciones tan variadas, complejas y, en ocasiones, incompatibles (como la mejora del rendimiento y el dopaje) con ubicaciones tan alejadas las unas de las otras atribuirle el control de una nueva estructura dedicada a la lucha contra el dopaje, en todos sus aspectos formativos, divulgativos, de sensibilización, represión, sanción, no hace sino complicar extraordinariamente la gestión de los distintos servicios con una considerable reducción de la deseada eficacia en la ejecución de sus funciones.

No obstante, si se considera aceptable la observación acerca de la naturaleza de la Agencia y por ello, se modifica el texto del Anteproyecto configurando la misma como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, según lo dispuesto en los artículos 7 y 9 a 14 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2º. Las dotaciones de personal que se evalúan económicamente en la memoria económica no coinciden con las previstas en el propio texto del anteproyecto, sin que se haya fundamentado de forma suficiente la adecuación del dimensionamiento de personal estimado para el cumplimiento de las funciones a desempeñar

En la actualidad, existe una única dotación (personal médico) dedicada a la lucha contra el dopaje. Sin embargo, es imposible desarrollar esta labor, en los términos que plantea el proyecto de ley, con la dotación actualmente existente, una sola persona no puede desarrollar las funciones contempladas en la misma. En un inicio se pensó, que con el apoyo externo con el que en la actualidad se cuenta y ya mencionado en las diferentes memorias sería suficiente para el desarrollo de la actividad, pero la experiencia de unos cuantos años ha demostrado que un desarrollo eficaz y eficiente de dicha labor requiere una estructura estable que la desarrolle y afiance el trabajo realizado en los últimos años.

No obstante se ha modificado el texto del anteproyecto eliminando de la estructura de la Agencia la figura del Secretario.

3º. La creación de una nueva entidad en el sector público, y la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo, van en contra de las directrices adoptadas en el seno de este Gobierno para el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y con la política de ajuste para la sostenibilidad de las finanzas públicas vascas.

La aprobación de este anteproyecto y su posterior entrada en vigor exige, para el ejercicio de las funciones previstas en la nueva Ley, el incremento de personal, bien adscrito a la Agencia o bien adscrito a la Dirección de Deportes. En caso contrario, se vería frustrado el objetivo principal de la nueva normativa: la lucha contra el dopaje, convirtiéndose la nueva ley en una norma inaplicable

4ª No se ha determinado en la Ley la sede de la Agencia

Se ha considerado fijar la sede del organismo en Bilbao, pero dado que puede transcurrir un lapso de tiempo prolongado hasta la aprobación de la Ley, las circunstancias pueden variar, por ello no se ha introducido en el texto una sede definitiva.

XI. INFORME DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

El informe favorable emitido con fecha 27 de octubre de 2011 realiza diversas consideraciones agrupadas por materia regulada, que dada su extensión no se reproducen. A continuación se realiza la valoración de dicho informe:

Los deportistas sin licencia federativa

Se han aceptado las modificaciones propuestas en base a las siguientes consideraciones:

En el artículo 1, apartado 5, se ha realizado una importante modificación a la vista de las dificultades y diferentes interpretaciones que se han puesto de manifiesto a lo largo de la tramitación del anteproyecto. Por parte de la Comisión Jurídica Asesora se indicaba que el anteproyecto parece habilitar, a diferencia de la Ley Orgánica 7/2006, un control de dopaje sobre toda la población que practique deporte. Y añade que en la Ley Orgánica sólo los deportistas con licencia federada de ámbito estatal tienen sacrificados sus derechos a través de los controles de dopaje, pero no el resto de los deportistas (parágrafos 144 a 180). Y como consecuencia de ello sugiere, en base al criterio de proporcionalidad, que se siga el modelo de la Ley Orgánica 7/2006 de limitar los controles al deporte federado. Antes de explicar los cambios procede aclarar que las conclusiones de la Comisión Jurídica Asesora no son, a nuestro entender, acertadas pues la Ley Orgánica extiende el control de dopaje a deportistas escolares y universitarios que participan en los campeonatos de España de dichos ámbitos (véase la disposición adicional segunda). Es decir, la Ley Orgánica 7/2006 no se ciñe al deporte federado, como indica la Comisión Jurídica Asesora. No obstante, se modifica el ámbito subjetivo general de aplicación de esta Ley extendiéndolo sólo a las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco así como a todos aquellos y aquellas deportistas que compitan en el País Vasco. Es decir se ha eliminado del ámbito subjetivo los deportistas que residan, aunque sea temporalmente o entrenen en el País Vasco. Y dicha modificación se ha acompañado de una definición más restrictiva de deportista en el apartado 6. A los efectos de esta Ley "se consideran deportistas todas aquellas personas que participen en las competiciones deportivas sujetas a la presente Ley mediante licencia federada, universitaria o escolar o mediante título de inscripción que, a efectos de la presente Ley, también tendrá la consideración de licencia deportiva". El nuevo texto, pretendiendo ser consecuente con el fin de impedir actos contrarios al espíritu deportivo y con el fin, asimismo, de proteger la salud de las y los deportistas, con independencia de su condición federada, también considera deportistas a aquellos que carecen de licencia federada, aunque exige que ostenten licencia escolar, universitaria o una inscripción en la competición con efectos análogos a los de una licencia, aunque para estos últimos establece en la nueva Disposición Adicional Séptima un régimen especial. Resulta necesario proteger la salud de las y los deportistas que participan en competiciones organizadas, haciendo abstracción de la posesión de licencia federada. La Ley no pretende extender, como aclara ahora la exposición de motivos, la realización de controles de dopaje generalizados sobre toda la población que practica deporte y por ello habilita a la Agencia Vasca Antidopaje a aprobar y ordenar la publicación de una relación de las competiciones deportivas no federadas que podrán ser objeto de la realización de

controles de dopaje a sus deportistas. Se ha pretendido con ello ponderar la proporcionalidad de dicho control y limitar el mismo a aquellas competiciones deportivas que, por sus singulares características, deban ser susceptibles de control.

En el artículo 1.5 también se ha eliminado la palabra "deportiva", pues determinadas personas del entorno del deportista, también sujetas al ámbito de aplicación de la Ley, desarrollan una actividad no deportiva (médicos, fisioterapeutas, etcétera).

En relación con este apartado, se han modificado, igualmente, las Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima.

La **Disposición Adicional Sexta** se ha separado en dos disposiciones adicionales diferentes. En la Disposición Adicional Sexta sólo se mantiene la exigencia de certificación acreditativa de no existir contraindicaciones médicas para participar en competiciones de gran exigencia física. *Con arreglo a la misma*, las y los organizadores de aquellas competiciones deportivas de gran exigencia física que se determinen mediante Orden por el Departamento competente del Gobierno Vasco en materia de deporte, deberán exigir a las y los participantes la acreditación de la aptitud física mediante la certificación del correspondiente reconocimiento médico en los términos que se determinen reglamentariamente.

La nueva **Disposición Adicional Séptima** tiene dos apartados claramente diferenciados. Por un lado, la Agencia Vasca Antidopaje ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de las competiciones deportivas no federadas que podrán ser objeto de la realización de controles de dopaje a sus deportistas. Se trata de que exista seguridad jurídica y publicidad en la determinación de qué competiciones podrán ser susceptibles de control de dopaje a sus deportistas. Y en segundo lugar, se contempla un régimen especial para las y los participantes sin licencia federada en dichas competiciones deportivas, que también podrán ser sometidos o sometidas a controles de dopaje aunque en este caso no tendrán que cumplir las obligaciones documentales o informativas previstas en esta ley para las y los deportistas con licencia federada. Como consecuencia de la aplicación de los artículos 1.5 y la Disposición Adicional Séptima se concluye que, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de los deportistas, habrá:

- a) Un régimen general para los deportistas con licencia federada.
- b) Un régimen especial para los deportistas con licencia escolar, universitaria o licencias de otras organizaciones o documentos equivalentes de sujeción especial, salvo que los propios organizadores de las competiciones establezcan la sujeción al régimen general.

De este modo, el proyecto se acomoda mejor a las sugerencias realizadas por la Comisión Jurídica Asesora y demás alegantes en el proceso de tramitación. Asimismo, el modelo encaja en la filosofía de la propia Ley Orgánica que contempla un doble régimen: el general para el deporte federado y el de los campeonatos deportivos juveniles y universitarios de ámbito estatal.

Deportistas con licencia estatal o internacional

Se han aceptado las propuestas de la Comisión, excepto las siguientes.

- En el artículo 13.1 no se ha aclarado que los deportistas no federados también tendrán obligación de someterse a controles fuera de competición. Resulta innecesaria tal aclaración pues el artículo se refiere a "las y los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la presente ley" y los deportistas no federados también están dentro del ámbito subjetivo de la Ley (artículo 1.5 y artículo 1.6).

- Se mantiene el **artículo 19**, sobre la competencia para realizar controles de dopaje fuera de competición respecto a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones internacionales y estatales.

- Se mantiene el **artículo 22** pues la Comisión Jurídica Asesora considera que no procede la aplicación del régimen administrativo sancionador si existe una relación de sujeción especial. Sin embargo, a nuestro entender es evidente que sí procede pues operan sobre dos ámbitos y fines diferentes. Y ello es respetuoso con el principio *non bis in idem*. Una federación debe imponer una sanción para garantizar el buen orden y la limpieza de sus competiciones, así como la salud de sus deportistas. Y la sanción que le impone, por ejemplo, a su ciclista le inhabilita, en principio, para competir en sus pruebas ciclistas. La potestad administrativa general trata de velar por la ética en el deporte, en general, por la limpieza de las competiciones en general y las sanciones al ciclista le pueden inhabilitar para participar en todas las modalidades (triatlón, atletismo, ciclismo, natación, etcétera). Lo mismo sucede en el ámbito de la violencia en competiciones deportivas. La legislación estatal contempla dos potestades diferentes. También la vigente Ley del Deporte del País Vasco.

Responsabilidad de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos.

Respecto a los **artículos 6 y 7** no es correcta la interpretación que hace la Comisión Jurídica Asesora de que sólo las federaciones deportivas y la Agencia tienen posibilidades de realizar controles de dopaje y sancionar. El organizador de las pruebas deportivas comerciales populares, profesionales, etcétera, puede someter a controles de dopaje a los participantes y adoptar las medidas disciplinarias en el ámbito de sus competencias. Piénsese en la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), en la Asociación de Remo del Cantábrico (ARC), en la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM), en los organizadores de maratones, etcétera.

La Agencia Vasca Antidopaje:

En atención al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011 de aprobación de las Directrices Económicas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2012, referentes a la adopción de medidas de reducción de gasto, se modifican los artículos 10 y 11 del anteproyecto configurando la Agencia Vasca Antidopaje como una unidad administrativa integrada en la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.

Se aceptan, por tanto, las sugerencias de la Comisión excepto.

- Respecto a la composición del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (artículo 11.7) ésta debe responder a las directrices que, en cada caso, establezca la Agencia Mundial Antidopaje, por lo tanto, no es conveniente determinar en una Ley esa composición pues se corre el riesgo de tener que reformar con frecuencia el texto normativo para adaptarse a esas directrices internacionales sobre autorizaciones de uso terapéutico.

Hay que resaltar que tampoco la Ley Orgánica ni el Real Decreto sobre la Agencia Española Antidopaje entran a regular dicha composición.

El Instrumento de Ratificación de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005, y publicado en el BOE el 16 de febrero de 2007, establece en el Anexo II las directrices para la composición de esos comités. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ya ha publicado el 30 de diciembre de 2010 la modificación del Anexo II de aquella Convención, precisamente sobre autorizaciones de uso terapéutico.

En todo caso, se propone la siguiente redacción para el artículo 11.7:

“El Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT) actuará con plena autonomía funcional en el desempeño de sus funciones. Tal Comité será designado por el Director o Directora del Gobierno Vasco competente en materia deportiva con arreglo a las directrices que establece el Anexo II de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de 18 de noviembre de 2005 en materia de composición y cualificación de sus miembros”

- No se ha suprimido del artículo 12.1 el párrafo j) pues no es reiterativo con el párrafo f. Una cosa es establecer un programa anual de controles de dopaje, que es interno y confidencial, y otra cosa es determinar qué competiciones se encuentran sujetas a la realización de un control de dopaje. Cuestión diferente es que la redacción sea susceptible de alguna mejora y por ello se ha realizado algún pequeño cambio.

- El artículo 12.1.n debe mantenerse. La Agencia tendrá como función *“tramitar y resolver los expedientes disciplinarios cuando las federaciones deportivas no hayan resuelto en plazo los mismos”*. No se trata sólo de que las federaciones deportivas no hayan instruido, sino también puede suceder que empiecen la instrucción y quede paralizada. En ambos casos, tiene que tener la Agencia la función de resolver. En consonancia con el artículo 38.3 he añadido *“y demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial”*.

Las autorizaciones de uso terapéutico

Se han aceptado las sugerencias realizadas por la Comisión, excepto:

- En el artículo 15 no se ha incluido una definición de autorización de uso terapéutico. Tal definición no está en la Ley Orgánica vigente ni en el proyecto de reforma presentado en el Congreso de los Diputados, a pesar de que este proyecto legislativo incluye un amplio glosario de definiciones. Además, en el artículo 8 sobre derechos de los deportistas, ya se explica en qué consiste el derecho a obtener tal autorización.

- En el artículo 23.5 no se regulan los requisitos y el procedimiento para la concesión de autorizaciones de uso terapéutico. Tampoco en la Ley Orgánica 7/2006 ni en el proyecto de reforma. Se trata de requisitos que, como ha sucedido hasta la fecha a nivel estatal, se regulan reglamentariamente. La razón es muy lógica: se trata de cuestiones de detalle que son objeto de constantes adaptaciones y no pueden ser objeto de una congelación por razón del rango legal de la disposición.

El derecho a la intimidad personal y la protección de datos

En el artículo 17.4 se mantiene el objetivo de los controles de salud de controlar el cumplimiento, por los y las deportistas, de las obligaciones derivadas de la ley en materia de dopaje y salud. Según la Comisión Jurídica Asesora *“no puede cumplir la nueva finalidad que se les atribuye... si una vez comprobada la infracción la misma resulta impune”*. Sin embargo, debe aclararse que la finalidad no es únicamente la represión, sino también la prevención de graves problemas deportivos, jurídicos y económicos por los clubes y demás entidades deportivas que tratan de controlar si sus jugadores cumplen la normativa antidopaje. No resultaría concebible que una entidad deportiva no pueda hacer controles a sus deportistas con miras a eventos decisivos para evitar sanciones posteriores de tipo colectivo (pérdida de encuentro, puntos, etcétera). Es decir, el control de dopaje no siempre debe ir encaminado a la represión.

No obstante, en el artículo 46, referido a la Tarjeta de Salud del Deportista, se ha suprimido cualquier fin asociado a la lucha contra el dopaje en el deporte.

Otras cuestiones:

Se aceptan las consideraciones realizadas por la Comisión, excepto:

- En el artículo 8, sobre los derechos de las y los deportistas, se considera que los y las deportistas no tienen derecho a la destrucción de muestras aunque el procedimiento sancionador incoado sea firme. En caso contrario, puede suceder que la resolución del expediente sancionador sobre la detección de una sustancia sea absolutoria y se dicte al año de la realización del control, pero no hayan transcurrido los años de la prescripción que posibiliten buscar nuevas sustancias o las mismas sustancias con otros procedimientos más avanzados. Por tanto, no puede aceptarse que la destrucción de las muestras se produzca inmediatamente después de la resolución firme de uno de los procedimientos incoados ya que en más de una ocasión se han vuelto a analizar muestras dentro del plazo de prescripción.

- Se ha mantenido el artículo 23.2 del texto, a pesar de las observaciones de la Comisión Jurídica Asesora. El anteproyecto dispone que *"para establecer la responsabilidad de la o el deportista no será necesario demostrar intención, uso consciente o negligencia por su parte. No obstante lo anterior, podrá demostrar que no ha incurrido en culpa o negligencia o que no pretendía mejorar su rendimiento deportivo. En tal caso se seguirán los criterios establecidos en el Código Mundial Antidopaje"*. Sorprende que se haga un reproche al texto del anteproyecto, que es mucho más riguroso y conforme a la normativa internacional, que la Ley Orgánica 7/2006. Esta ley estatal establece la responsabilidad de los deportistas *"en cualquier caso"* cuando se produzca la detección de su presencia en el mismo (se refiere a que ninguna sustancia prohibida debe introducirse en su organismo). Es decir, establece una responsabilidad total e incondicionada, sin matices, del deportista cuando la sustancia prohibida es detectada en su organismo. Por el contrario, en el anteproyecto se posibilita que el deportista demuestre que esa sustancia no se ha introducido en el organismo por su culpa o negligencia o que no pretendía mejorar el rendimiento deportivo. El proyecto de reforma de la Ley Orgánica elimina la expresión *"en cualquier caso"*, pero a pesar de todo el texto de la ley estatal es mucho más severo que el del anteproyecto. Tampoco puede compartirse la interpretación que realiza la Comisión Jurídica Asesora sobre que el texto establece una especie de responsabilidad objetiva del deportista. La responsabilidad objetiva, a diferencia de la subjetiva, es la que se articula prescindiendo de la culpa del deportista en lo sustantivo, es decir, se impone haciendo abstracción de elementos culpabilísticos. Por el contrario, la responsabilidad subjetiva es la que se basa en la culpa o negligencia del deportista. El texto propuesto consagra una responsabilidad subjetiva basada en la culpa; lo único que sucede es que se dicta una norma en materia de carga de la prueba de modo que, siguiendo la normativa estatal e internacional, se establece la responsabilidad del deportista a quien se detecte una sustancia prohibida en su organismo y se posibilita que el mismo quede exento de responsabilidad si acredita que tal sustancia no se halla en su organismo por su culpa o negligencia o se ha ingerido con un fin diferente a la de aumentar artificialmente el rendimiento. No se puede, salvo que se quiera dejar sin efecto la lucha contra el dopaje, exigir que los organismos de control deban acreditar la intención del deportista. Se trataría de una prueba diabólica.

- En el artículo 40 no se especifica dónde no puede inspeccionarse según el lugar donde se encuentren los botiquines, las bolsas de deportes, etcétera. Realmente, el artículo 40 es una reproducción de la Ley Orgánica (artículo 39), que tampoco especifica dónde no puede inspeccionarse. Se propone añadir, aunque *"a priori"* pueda resultar innecesario, por constituir un mandato constitucional, que tal inspección se realizará con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Técnica normativa:

Se aceptan las consideraciones realizadas por la Comisión, excepto:

- La Comisión determina que cuando se hace una cita a una disposición, ésta debe figurar con su nombre completo. Sin embargo, las directrices de técnica normativa publicadas en el Boletín Oficial del Estado –aplicables ya que las vigentes en la Comunidad Autónoma no se refieren expresamente a ello– dedican una regla específica al respecto, regla que se denomina “economía de cita”. *“La primera cita, tanto en la parte expositiva como en la parte dispositiva, deberá ser completa y puede abreviarse en las demás ocasiones señalando únicamente tipo, número y año y, en su caso, fecha”*. Y eso es lo que he hecho; la primera cita de las leyes se hace completa, pero en las siguientes se indica sólo el tipo, número y año. Parece una carga excesiva que leyes con título extenso deban citarse cada vez de forma completa.

- En el artículo 39.7 no se ha atendido la siguiente observación de la Comisión Jurídica Asesora: *“la redacción del artículo 39.7 debe revisarse ya que las resoluciones sancionadoras adoptadas por el órgano disciplinario competente no son recurribles según el artículo 39.6, por lo que difícilmente el órgano disciplinario podrá decidir la suspensión previa adopción de las garantías conducentes al aseguramiento de la eficacia de la resolución para el caso de una eventual desestimación”* ya que el artículo 39.8 no dice sólo que no cabe recurso; aclara que no cabe recurso *“dentro de las mismas”* (federaciones deportivas y demás entidades con relación de especial sujeción). Es decir, cabe recurso ante otras instancias.

En el mismo artículo 39.7 señala la Comisión Jurídica Asesora que cuando se trata de un recurso jurisdiccional las reglas de la suspensión de las resoluciones sancionadoras vendrán determinadas en la correspondiente legislación procesal. El artículo 39.7 no regula una materia propia de la legislación procesal y el anteproyecto reproduce literalmente lo que dispone la Ley Orgánica 7/2006 en su artículo 28.5

- Tampoco se ha seguido la observación de la Comisión Jurídica Asesora cuando indica que el artículo 47.2 es asistemático ya que nada tiene que ver con los deberes de confidencialidad y secreto que se regulan en el precepto. En realidad, se ha seguido el criterio de sistemática y el texto de la vigente Ley Orgánica 7/2006 (artículo 34). Y, además, el apartado segundo acota los límites de la confidencialidad estableciendo que los datos, informes o antecedentes obtenidos por el personal que desempeñe funciones control de dopaje sólo puede utilizarse restrictivamente para determinados fines.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2011



Patxi Mutiloa Añazabal
Director de Deportes

DOPINAREN AURKAKO LEGE-AURREPROIEKTUAREN GAINEAN JASOTAKO ALEGAZIOEN BALORAZIOA

Kirol Zuzendaritzak landu du Lege-aurreproiektua eta, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. eta 9. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, ondorengo erakunde hauei bidali die, espedientean jasotakoaren arabera:

- Euskal Kirol Federazioen Batasuna.
- Arabako Kirol Federazioen Elkartea.
- Bizkaiko Kirol Federazioen Elkartea.
- Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkartea.
- Euskal Federazioak (dauden guztiak: 48).
- Arabako Foru Aldundia.
- Bizkaiko Foru Aldundia.
- Gipuzkoako Foru Aldundia.
- Ekime-Euskadiko Kirol Medikuntza Elkartea.
- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Irakasle eta Lizentziatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Elkargo Ofiziala.
- Medikuen Elkargo Ofiziala (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).
- Farmazialarien Elkargo Ofiziala (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).
- Albaitarien Elkargo Ofiziala (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).
- Osasun Publikoko Zuzendaritza.
- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa.
- Eusko Jaurlaritzako sailak (diren guztiak: 11).
- Dopinaren Aurkako Estatuko Agentzia.

Era berean, iragarki bat argitaratu da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, jendaurrean jartzeko edo entzunaldi-izapidea betetzeko (EHAA, 229. zk., 2010eko azaroaren 29koa).

Bestalde, arestian aipatutako 8/2003 Legearen 7. eta 11. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, honako organo hauen txostenak jaso dira:

- Kultura Saileko Aholkularitza Juridikoa.
- Emakunde.
- Hizkuntza Politikako Sailburuordetza.
- Eraberritzearen eta Administrazio Elektronikoen Zuzendaritza.

Atal honetan, esan behar da aurreproiektua bi aldiz bidali dugula Funtzio Publikoaren Zuzendaritzara (2010eko urriaren 15ean eta 2011ko uztailaren 15ean) txosten bat eskatuz, baina idazki honen egunean oraindik ez dugula horrelakorik jaso zuzendaritza honetan.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko 14/1994 Legearen III. tituluko IV. kapituluan xedatutakoa betez, bai eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3. artikuluan xedatutakoa ere, bai Kontrol

Ekonomikoko Bulegoak bai Aholku Batzorde Juridikoak beren txostenak eman dituzte.

Adierazitako izapideen ondorioz, jarraian aztertuko ditugun alegazio hauek jaso dira:

I.- EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN ETA KONTSUMO SAILEKO ARAUBIDE JURIDIKO, EKONOMIKO ETA ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZENDARITZAREN ALEGAZIOAK.

Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saileko Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak 5 orrialdeko idatzi bat aurkeztu zuen 2010eko abenduaren 1ean, eta han mamitu zituen aipatutako lege-aurreproiektuari eginiko oharak.

Aurreproiektuaren **1.6 artikuluan** nor den kirolaria zehazten da. Zuzendaritza horren arabera, *“pertsonak, edozein jarduera fisiko egiten dutelarik, adina eta jardueraren intentsitatea edozein dela ere, kirola egiten dute, eta, beraz, kirolari dira”*. Eta horrela gehitzen du ondoren: *“Eta horren harira, edozein jarduera fisikoren eta kirolaren artean dagoen erlazioa auzitan jarri gabe, erlazio hori ez da jarduera fisikoaren eta osasunaren artean dagoena baino goragokoa. Jarduera fisikoa hainbat gaixotasun sendatzeko edo horiei aurre hartzeko erremediotzat hartzen da askotan (eta, beraz, gaitz bat sendatzeko jarduera fisikoa egiten duena, hala nola oinez ibiltzea edo igeri egitea, zer da kirolaria edo gaixo dagoen pertsona edo gaixotasunei aurre hartu nahi diena?)... Eta jarduera fisikoari edo kirol jarduerari buruzko ikuskera hori Osasun eta Kontsumo Sailak osasunaren prebentzio eta sustapen arloan bere gain dituen eskumenen artean sartuko litzateke”*.

Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saileko Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak ez du aurreproiektua aldatzeko iradokizunik edo proposamenik egin; aitzitik, gogoeta bat egin du jarduera fisikoari buruz eta arlo horretan Osasun eta Kontsumo sailari dagokion eskumenari buruz. Nolanahi dela ere, gogoeta horren harira, beharrezkoa da zenbait zehaztapen egitea.

Lehenik eta behin, aurreproiektuaren lehen eta bigarren atalean dopatzeari buruz egiten den definizioaren arabera, dopatzea da debekatutako substantziak hartzea edo galarazitako metodoak erabiltzea, jokabide hori kirol-espirtuaren edo joko garbiaren (fair play) printzipioaren kontrakoa bada. Hau da, aurreproiektua kirol-lehiaketen esparruan sartzen da. Aipatutako Zuzendaritza horren idatziak jauzi kontzeptuala egiten du eta edozein *jarduera fisiko* egitea *kirola* egitea dela esaten du. Zuzendaritzak nahasi egiten ditu *kirola* eta *jarduera fisiko*; izan ere, berez, ez dute zehatz-mehatz esanahi bera. *Kirola* terminoak esanahi ugari ditu eta horrek arazoak sortzen ditu hainbatetan, baina gainerako adierazpen fisikoen aldean kirola bereizten duena lehia da, lurralde bakoitzaren esparruan kirol-legezkotzat onartutako arauetara jarraituz egiten den lehia, hain zuzen.

Bigarrenik, zehaztu egin behar da 1. artikuluaen hirugarren atalak zer xedatzen duen: Legearen esparru orokorra zenbait kirol-lehiaketak osatzen dutela, alegia. Eta, era berean, Legearen eremu material horretatik kanpo geratzen diren kirol-lehiaketak aipatzen dira 1. artikuluaen atal horretan. Horrenbestez, Legearen esparrua ez da jarduera fisiko oro babestea, baizik eta kirol-lehiaketak garbiak izan daitezen bermatzea eta horietan parte hartzen duten kirolarien osasuna zaintzea.

Hirugarrenik, Zuzendaritzak aipatutako kirolariaren definizioak esaten du kirolari direla *“kirolen bat egiten duten”* pertsona guztiak; hau da, definizio horretan ez da *“jarduera fisikoa”* terminoa erabiltzen. Ildo berean, 2. artikulua xedatzen du eskatutako dopin-kontrolak egiteko betebeharra dutela kirolariek, bai kirol-lehiaketan eta bai lehiaketatik kanpo. Legearen testu osoan kirolaria eta dopatzea behin eta berriro uztartzen dira kirol-lehiaketarekin. Hau da, jarduera fisikoa egiten duten herritar soilak ez dira Legearen eremuan sartzen.

Aurreproiektuan modu zabalagoan adierazi da nor den kirolaria, baina definizio zabalago horren asmoa da kirolari kontzeptua ez mugatzea une jakin batean federatu txartela duten pertsonetara. Hori dela eta, aurreproiektuaren eremuan sartzen dira aurrez lizentzia izan eta ezarritako epean lizentzia hori berritu ez duten zenbait kirolari; hain zuzen, arrazoizko susmoak badaude kirolari horiek ez dituztela utzi ez entrenamenduak eta ez lehiaketak, eta lizentzia berritu arte lehiaketatik kanpo dopin-kontrolak saihesteko asmoz ari direla uste bada (aurreproiektuaren 13.5 artikulua eta 7/2006 Lege Organikoaren 5.2 artikulua).

Azkenik, aipatzekoa da Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean, 66.1 artikuluan zehazki, kirolariari buruz egiten den definizio bera egiten duela aurreproiektuak ere. Aipatutako legezko testu horren xedea kirola da eta Eusko Legebiltzarrak kirol arloan duen eskumena baino ez zuen baliatu legea onartzeko, Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluan xedatutako eskumena, hain zuzen. Kirol-administrazioak kirol arlo horietan duen eskumena ere ez da inoiz auzitan jarri, nahiz eta 14/1998 Legeak berak behin eta berriro onartzen duen kirolak osasun aldetik duen garrantzi eztabaidea.

Bestalde, Zuzendaritzak zenbait alegazio egin ditu Lege-aurreproiektuaren **15. artikulua**n harira. Betebehar osagarriak eta erabilera terapeutikorako baimenak arautzen ditu artikulua horrek. Aipatutako Zuzendaritzaren iritziz begien bistakoa da zer lotura estua duten talde edo federazio bakoitzak eraman beharreko liburuak eta kirolari bakoitzaren historia klinikoak. Liburuetan, kirolariei agindutako tratamendu medikua eta sanitarioa jaso behar dute talde edota federazioek; historia klinikoan, berriz, pertsona bakoitzak izandako asistentzia-prozesuak adierazten dira, diagnostikoa eta tratamendua barne direla.

Alegazio horren aurrean, erregistro-liburua eramateko betebeharrari buruz 7/2006 Lege Organikoaren 7. artikuluan xedatutakoa jaso du aurreproiektuak. Eta 641/2009 Errege Dekretuak, apirilaren 17koak, garatzen ditu Zuzendaritzak planteatutako gaiak. Zehazki, honela xedatzen du Errege Dekretu horrek: *“Errege Dekretu hau aplikatzeko esparruan dauden subjektuek betebeharra dute kirolean dopatzeko aukera izan dezaketen kirolarien osasun-tratamenduen*

erregistro-liburua sortzeko, erregistratzeko eta eguneratuta mantentzeko, horrela xedatzen baita 7/2006 Lege Organikoaren 7. eta 37. artikuluetan, kapitulu honetan bertan, eta, dagokionean, Pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei buruzko azaroaren 14ko 41/2002 Legean.

Beraz, Errege Dekretu horrek berak xedatzen du Dopinaren aurkako Estatuko Agentziaren eskumena erregistro-liburuaren formatua erabakitzeke, betiere liburu horien osotasuna eta aldaezintasuna bermatuta. Orobat, dekretu horrek zehazten du ondorengo edukia:

“Osasun-tratamenduak: osasun arloko langileek beren zuzendaritzapean dituzten kirolariei agindutako tratamendu medikuak eta sanitarioak jasoko dituzte, betiere kirolariei inskripzio hori egiteko baimena ematen badute. Agindutako tratamendu bakoitzerako eman dezakete onespena, edo bestela baimen generikoa, erregistro-liburuan egin beharreko idazpen guztietarako.

Produktu farmazeutikoak: osasun arloko langileek erregistro-liburuan jasoko dute zer sendagai eta osasun-produktu eman dizkieten kirolariei, zer medikuk agindu edo baimendu duen horiek erabiltzea, eta zer epe izango duen tratamenduak. Sendagilearen errezetarik behar ez duten sendagaien kasuan, kirolariei emandakoak jasoko dira.”

Era berean, Errege Dekretu horretan xedatzen da erregistro-liburuko idazpenetan, kirolari bati agindu edo aplikatuko zaion prozedura medikoa, terapeutikoa edo sanitarioa dopatzetzat hartzen bada, baita helburu medikoarekin eta dagokion baimen terapeutikoarekin eman bada ere, atal edo eranskin bat gehitu beharko dela, kirolariak baimen informatua eman duela adierazteko.

Aipatutako Errege Dekretuaren arabera, Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak eskumena izango du informazio eta identifikazio elektronikoko teknologiak erabiliz (hala nola sinadura elektronikoa eta historia elektroniko bakar eta zentralizatu), datu-baseen zer prozedura zentralizatu edo deszentralizatu erabili erabakitzeke, baita inprimaki zehatzak emateko ere, horien bidez prozedura mediko, terapeutiko edo sanitarioak hartu behar dituzten kirolarien onspen informatua jasotzeko. Era berean, xedapen horrek jasotzen du Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak erregistro bat eratu eta mantendu beharko duela aipatutako liburua eta ondorengoak inskribatzeko.

Hortaz, aurreko guztia kontuan izanik, lege-aurreproiektuak oinarritzeko aipamen guztiak jasotzen dituela uste dugu, eta Gobernu Kontseiluak legea garatzeko onartuko duen Dekretuak erabaki eta ebatzi beharko du sortu diren kontu horien gainean.

Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak, aurreproiektuaren **1. artikuluan** jasotzen den dopatzeari buruzko kontzeptua aintzat hartuta, uste du legearen eremuan sartzekoak direla estupezahienteak, psikotropikoak eta bestelako sendagai-mota batzuk. Horrenbestez, Zuzendaritzaren iritziz, beharrezkoa da aztergai dugun aurreproiektuaren eta drogamenpekotasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legearen 11. eta 12. artikuluen artean dagoen lotura

jasotzea, bai eta 29/2006 Legea, uztailaren 26koa, osasun produktuen eta medikamentuen garantiei eta arrazoizko erabilerari buruzkoa aplikatzeko Osasun eta Kontsumo Sailari dagozkion eskumenen eta aurreproiektuaren artean dagoen erlazioa ere.

Alegazio horri buruz, beharrezkoa da hainbat zehaztapen egitea. Lehenik eta behin, 1. artikuluko lehen atalak *dopatzea* kontzeptu orokorrari buruzko aipamena egiten du, eta kontzeptu hori geroago zehazten da debekatutako substantzia eta metodoen zerrenda baten bidez. Zerrenda hori ez da ez finkoa eta ez iraunkorra, dinamikoa baizik, etengabe aldatzen baita. Aldaketa horiek Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu izan dira orain arte, eta, aurreproiektua onartzen den egunetik aurrera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko dira. Zerrenda horietako substantzia eta metodo debekatu batzuk 18/1998 Legearen esparrukoak izango dira eta beste batzuk ez. Produktuak eta substantziak zerrenda horietan sartzeko irizpideak ez du loturarik drogamenpekotasunei buruzko legediarekin.

Aipatutako 18/1998 Legearen 11. eta 12. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Osasun-administrazioak, indarrean dagoen legeriak dioenaren barruan, arreta berezia jarriko du estupefazianteak eta psikotropoak kontrolatzeko eta ikuskatzeko, eta modu berean jardun beharko du gai horiek dituzten sendagaiekin, hain zuzen ere ekoitzi, banatu eta denda edo botiketan saltzeko orduan. Bestalde, laborategiak eta gai horiek ekoizten, lantzen eta kanpoan saltzen dituzten zentro edo tegiak ere kontrolatu eta ikuskatuko ditu, eta gauza bera egingo du botikekin eta handizkako biltegiekin. Era berean, estupefazianteak eta psikotropoak dituzten sendagaiak helburu ez terapeutikoetarako erabil daitezzen saihesteko, lege horrek xedatzen du errezeta beharko dela sendagai horiek eskuratzeko, kasuan kasuko oinarritzko araudian esaten den moduan.

Halaber, sendagai estupefaziante eta psikotropikoen prebentzioari eta erabilera zuzenari buruz, aipatutako Legeak xedatutakoaren arabera, Osasun-administrazioak jarraipena egingo du herritarrek sendagai horien zer erabilera egiten duten, jakiteko zer produktu-mota eta kantitate erabiltzen dituzten, baita osasun publikorako garrantzizkoak izan daitezkeen beste alderdi batzuei buruzko informazioa eskuratzeko ere. Orobat, arreta berezia jarriko du gizartearen hezkuntzan, sendagai horiek ez daitezzen erabili helburu terapeutikoetatik kanpora, eta horretarako kanpainak bultzatuko ditu erabiltzaile izan daitezkeenei eta erabiltzaile direnei zuzenduta. Kanpaina horietan produktu horiei buruzko informazio orokorra eta zehatza emango da. Era berean, arreta jarriko du substantzia horiek legez kontrako salerosketara ez iristeko. Era berean, sendagileen eta botikarien ordezkariekin harremanetan jarriko da, sendagai horiek neurritz erabiltzeko helburua duten planak gauzatzeko eta gehiegi nork kontsumitzen duen jakiteko, horri irtenbidea aurkitzeko asmoz.

Kirol Zuzendaritza honen iritziz, aurreproiektuak ez du kalterik edo interferentziarik sortzen Osasun-administrazioaren aipatutako eginkizun horietan, eta administrazio horrek jarraitu egin behar du zeregin horietan lanean. Dopinari buruzko legediak ez die gaitasunik ematen kirolariei Osasun-administrazioak debekatutako substantziak edo produktuak hartzeko, ez eta

aurreikusitako bide eta prozeduretatik kanpo kontsumitzeko ere. Aitzitik, kontrakoa gertatzen da. Gainerako herritarrei agindutako edo emandako substantziak edo produktuak baino ezin dituzte erabili kirolariek, baina horiek hartzeko ere zenbait muga eta baldintza osagarri errespetatu behar dituzte, lehiaketan garbitasuna bermatzeko eta kirol-iruzurrik ez egiteko.

Osasun produktuen eta medikamentuen garantiei eta arrazoizko erabilerari buruzko 29/2006 Legeak, uztailaren 26koak, eta aurreproiektuak duten erlazioari buruz, berriz, aipatzekoa da 7/2006 Lege Organikoak eta aipatutako legeak duten erlazio bera dela. 29/2006 Legeak, Estatuari dagozkion eskumenen esparruan, honakoak arautzen ditu: pertsonen erabilerarako sendagaiak eta osasun-produktuak, horien ikerketa klinikoa, ebaluazioa, baimentzea, erregistroa, fabrikazioa, lanketa, kalitate-kontrola, biltegiratzea, banaketa, zirkulazioa, trazabilitatea, merkaturatzea, informazioa eta publizitatea, inportazioa eta esportazioa, errezetak eta salmenta, onura-arritsu erlazioaren jarraipena, arrazoizko erabilerari egiteko agindua eta, horrela badagokio, funts publikoen bidez finantzatzeko prozedura.

Estatuaren eskumeneko esparrua da eta Euskal Autonomia Erkidegoko dopatzeari buruzko lege-aurreproiektuak ez du eragiten eta arautzen sendagaien esparru hori. Aurreproiektu berriarekin, giza erabilerarako sendagaien eta osasun-produktuen arloan lan egiten duten profesional guztiek obligazio gehiago izango dituzte betetzeko: alde batetik, araubide juridiko orokorrean, eta hor sartzen da 29/2009 Legea ere, ezarritakoak bete beharko dituzte, eta, bestetik, dopinaren aurkako borrokaren esparruan, Lege Organikoan eta Lege-aurreproiektu honetan aurreikusitako betebeharrak osagarriak ere bai. Eta kirolariek, edozein lesio edo gaixotasun tratatze aldera, askatasuna izango dute lesio edo gaixotasun jakin hori tratatzeko egokia izan daitekeen edozein tratamendu terapeutiko jasotzeko, baina zenbait baldintza edo egoeratan ezingo dute kirol-lehiaketetan parte hartu.

Erregimen Juridiko, Ekonomiko eta Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak azaldu duenez, **46. artikuluan** 7. atalean xedatzen da Kirolariaren Osasun Txartelak giltza baten lana egingo duela txartelari loturiko datu-basean sartzeko, baina ez duela kirolariaren osasunari buruzko daturik gordeko. Alabaina, Zuzendaritzaren iritziz, kontraesana sortzen da artikulua beraren 3., 4., 5. eta 6. atalekin; izan ere, horietan aipatu egiten dira *“txartelean jasotako datuak”*.

Zuzendaritzaren zalantza horrek azalpen erraza du. Kirolariaren Osasun Txartela aipatzen delarik, ari gaitezke *“sistemari”* edo *“euskarri fisikoari”* buruz (plastikoa edo antzekoa). Kirolariaren Osasun Txartelak, *sistema* den aldetik, kirolariari buruzko informazioa edo datuak gorde behar ditu, noski (azterketa medikoak, kontrolak, etab.). Eta hori bat dator osasun-txartel horren xedearekin; izan ere, txartel horren helburua da kirolariak eta hura artatzeaz arduratzen diren osasun arloko langileak ahalik eta informazio kliniko onena izatea, gaitz edo gaixotasunen bat izanez gero, zer tratamendu den egokiena erabakitzeke. Kirolariaren Osasun Txartela hainbat eratako elementuz osaturik dago, osagai fisiko, logiko, datu, eta abar, eta, alde horretatik, 7. atalean esan nahi da *“euskarri fisikoak”* ez duela daturik izango. Gogoratzekoa da indarreko 14/1998 Legean kirolariaren osasun-kartila jasotzen dela: euskarri fisiko bat azterketa medikoak, informazio medikoak eta osasun arlokoak eta intereseko beste datu

batzuk idazteko. Lege hura sortu zenetik, ordea, denbora dezente igaro da, legezko hainbat xedapen onartu dira datuak babesteko arloan, baita informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharren esparruan ere, eta, orobat, aurrerapen teknologikoak begien bistakoak dira. Hortik dator aurreproiektuaren proposamena, kartila horren ordeztu txartel berria ezartzekoa, eta horregatik argitu da euskarri fisikoan jasotako informazioaren kontua.

Aurreproiektuaren **46. artikuluan** 8. eta 9. atalen harira, Zuzendaritza horrek hainbat ohar egin ditu. Lehenik eta behin, ohartarazi du Legearen artikuluetan zehaztu beharko litzatekeela nori egingo zaion Kirolariaren Osasun Txartela, oinarritzko zer ezaugarri tekniko izango dituen eta osasun-txartel indibidualarekin zer erlazio eta interakzio izango dituen.

Aurreproiektuak lehen atalean zehazten du zein kirolariri emango zaion Kirolariaren Osasun Txartela, eta, zehazki xedatzen du federazio- eta unibertsitate-lizentziak dituzten kirolariei eta erregelamenduz zehazten diren beste kirolari-kolektibo batzuei emango zaiela. Alegazioa egin duen Zuzendaritzaren iritziz, kirolarien txartel hori eskuratuko duten ia guzti-guztiek Osasun Txartel Indibiduala izango dute lehendik, baina ez da horrela, hainbat kasutan txartel baten titularrak ez du beste txartela izango eta alderantziz. Hau da, Euskal Herriko federazio-txartela edo unibertsitate-txartela duten kirolari guztiak ez dira Euskal Autonomia Erkidegoan bizi; horrela gertatzen da, adibidez, Hendaian, Castro Urdialesen, Beran, Trebiñun eta abar bizi direnekin. Era berean, zenbait lanbide elkargotako kideek (abokatuek, arkitektoek, etab.) EAEko federazio-txartela izango dute baina, oraingoz behintzat, ez dute Osasun Txartel Indibidualik. Beraz, hainbat kirolarik euskal lizentzia izan dezakete baina ez Osasun Txartel Indibiduala. Eta, kontrakoa: izango dira EAEn bizi, Osasun Txartel Indibiduala eduki, baina Kirolariaren Osasun Txartela eskuratu ezingo dutenak ere, Frantzian, Nafarroan, Kantabrian, Errioxan eta abar lehiatzen dutelako, beste lurralde-esparru batzuetako lizentziekin.

Txartelaren oinarritzko ezaugarriei dagokienez, aurreproiektuaren 46. artikulua bat dator 7/2006 Lege Organikoaren 49. artikuluan estatuko osasun-txartelari buruz xedatutakoarekin, eta, nolana ere, erregelamendu bidez garatzeko gaia da. Eta azalpena erraza da ulertzeko: teknikoki eta lege aldetik aldatetako izan daitezke txartelaren ezaugarrietan.

Zuzendaritzak planteatutako beste zalantzetako bat da Kirolariaren Osasun Txartelak sarbidea ematen duen datu-basea eta *“dopinari buruzko informazio-sistemari”* euskarria emango liokeena (43. artikuluan xedatua) datu-base bera ote den, eta, orobat, historia kliniko elektronikoa bakar eta zentralizatuko sistema barnean hartzen ote duen edo sistema horrekin bat ote datorren.

Horren harira, argitu beharrekoa da aurreproiektuko 43. artikuluko datu-baseak eta 46. artikuluko datu-baseak desberdinak direla eduki eta helburu aldetik, eta haien ardura duten organismoak ere desberdinak direla; batena, Dopinaren aurkako Euskal Agentzia da, eta besteara, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritza. Nolanahi ere bi datu-base horiek lotuta izango dira elkarren artean; izan ere, bateko datuak beste datu-baseko parte izatera igaroko dira. Eta 43.6 artikulua jada xedatzen du datu-basea osasun arloko administrazio publikoaren eskura izango dela. Arau bidez eta indarrean diren xedapenek

ezarritako mugak aintzat hartuta zehaztuko dira datu-base horretara sartzeko baldintzak.

Azkenik, Zuzendaritzak eginiko beste alegazio baten arabera, ez da egokia *“aipatutako txartelarekin zerikusia duten jardun material, tekniko edo zerbitzukoak”* kudeatzeko ardura Osasun eta Kontsumo Sailaren esku uzteko aukera aurreproiektuan jasotzea. Zuzendaritzak emandako argudioa logikoa da; izan ere, Osasun Txartel Indibidualaren datu-basearekin loturiko jarduera horiek berak kudeatzeko ardura EJI Eren esku uzten baitu Osasun eta Kontsumo Sailak berak; Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartearen esku, alegia. Aurreikuspen hori aurreproiektuan jaso izanak azalpen erraza du: Osasun Saileko Finantziario eta Kontratazioko aurreko zuzendariarekin eta Modernizazio Administrazio Bulegoko aurreko zuzendariarekin Kirol Zuzendaritzan izaniko bilera batean kudeaketa gomendatzeko iradokizuna jaso genuen, eta horren ondorioz jaso zen aurreproiektuan.

II.- BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO NEKAZARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak orrialde bateko idatzia aurkeztu zuen 2010eko abenduaren 9an, eta bertan bi ohar egin ditu.

Lehenik eta behin, Nekazaritza Sailak ohartarazi du **1. artikuluan 5.** puntuan, Legearen aplikazio-eremuari buruzkoan, Legeak euskal federazio-lizentzia duten kirolari guztiak hartzen dituela bere baitan, unibertsitatekoa zein eskolakoa izan, hau da, antolatzen diren kirol-lehiaketetan parte hartzeko baimena ematen duen federazio-lizentzia dutenak. Eta 6. puntuak, berriz, kirolaria nor den definitzen du. Horiek horrela, idatziaren arabera, *“horretatik ondoriozta liteke Legeak ez duela jasotzen animalien dopin-kontrola”*. Alabaina, Nekazaritza Sailak jarraian onartzen duenez, 2.b artikulua aipatzen du dopinak *kalte* larria eragin dezakeela animalien osasunean. Hori dela eta, Legearen esparrua hobeto zehazteko iradoki dio sailari.

Gure iritziz, aurreproiektuaren esparrua oso argia da eta beharbada Nekazaritza Sailak ez ditu arretaz irakurri aurreproiektuaren artikulua guztiak eta, ondorioz, ez du ondo ulertu Legeak zer eremu hartzen duen. 1.1 artikuluan dopatzea zer den zehazten da eta artikulua horren 2. puntuan honakoa argitzen da: *“dopinaren definizio bera animaliek esku hartzen duten kirol-lehiaketetan ere aplikatzekoa da, beharrezko moldaketak eginda”*. Hau da, 1. artikuluan lehen bi puntuetan, dopatzea zer den zehazten duten bi paragrafoetan, jasotzen dira animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketak. 1. artikuluan 3. puntuan dopina definitzen da zigor arloan izan ditzakeen ondorioetarako, eta arauak urra ditzaketen pertsona fisikoak eta juridikoak aipatzen dira. Animaliei ezin zaie zigorri ezarri eta, horrenbestez, dagokion zigor- eta diziiplina-ahalmenaren pean dauden pertsona fisiko eta juridikoen taldetik kanpo geratzen dira animaliak. Alabaina, talde horretan sar daitezke zaldunak, prestatzaileak eta animaliekin zerikusia izanik lehiaketetan parte hartzen duten gainerako pertsonak. Aurreproiektuaren 4. atala Legearen eremu materialari buruzkoa da, eta bertan lehiaketa-mota guztiak jasotzen dira, animaliek parte hartzen dutenak eta bestelakoak.

Bestalde, 2. artikulua dopinaren aurkako borrokaren arloan kirolean bete beharreko printzipio orokorrak ezartzen ditu eta esaten du dopatzeak kalte larria

eragin diezaiekeela animaliei; 4. artikulua kirolarien eta animalien laguntzaileak aipatzen ditu; lehen xedapen gehigarriak ahalmena ematen dio Eusko Jaurlaritzari *“behar adina xedapen emateko, eta, haien bidez, lege honetan jasotako xedapenak egokitzeko edo aplikatzeko, hain zuzen ere, kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalietan dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko eremu espezifikoan”*, eta abar. Beraz, garbi dago aurreproiektuak Legearen eremuan hartzen dituela animaliekin egiten diren kirol-lehiaketak.

Nekazaritza Sailak eginiko bigarren oharra dio Foru Aldundietako Abeltzaintza Zerbitzuek egiten dituzten dopinaren aurkako kontrolak egokitu egin beharko liratekeela nolabait Lege berrira, *“baldin eta Lege horrek animalien dopina ere jasotzen badu”*. Gai hori jorratu da jada aurreproiektuaren memorian. Memoriak azaltzen duenez, aurreproiektuak ez du ikuspegi integral batetik lantzen animaliekin egiten diren kirol-tako dopinaren arazoa; aitzitik, kirol-lehiaketak garbiak izateko ikuspegitik arautzera mugatzen da, eta ez du kontuan hartzen animalien babesa; izan ere, urriaren 29ko 6/1993 euskal Legean, animaliak babestekoan, Eusko Legebiltzarrak honakoa xedatzen du 4.2.e artikuluan: debekatuta dago kasu guztietan animaliei alkohola, drogak edo botikak ematea, edo kalte fisikoa edo psikikoa eragin diezaiekeen edozein manipulazio artifizial egitea, lehiaketaren batean errendimendu handiagoa izateko bada ere. Lege hori garatze aldera, Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 22ko 6/1997 Dekretua onartu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoan kultura- eta kirol-ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei droga-kontrolak (antidopina) egiteko modua arautzekoa. Animaliak babesteko eskumena baliatu zuen Jaurlaritzak dekretu hori onartzeko, eta ez kirol arloko eskumena. Aipatutako memorian jasotzen denez, erakunde erkideek (Eusko Jaurlaritza) eta lurralde historikoetako foru organoek (Foru Aldundiak) arau bidez garatu dituzte aipatutako xedapen horiek, animaliei alferreko oinazetik ez eragiteko eta animaliak jokabide desegokietatik babesteko. Xedapen horiek ez dira onartu kirol arloko eskumenak baliatuz, eta horien helburua ez da kirol-lehiaketan garapen normala bermatzea, edo joko garbia eta lehiaketan kirol-legezko espiritua zaintzea.

Animaliekin egiten diren lehiaketetan dopinaren arazoa tratatzeko bi bide horien ondorioz, gerta liteke animaliei dopin-kontrolak egitea kirol arloko araudiari jarraituz, eta, orobat, kontrolak egitea animaliak babesteko legediari jarraituz, batzuetan eta besteetan zerrenda, prozedura eta abar desberdinak erabilita. Hori dela eta, xedapen gehigarri bakarrak zenbait tresna ezartzen ditu bi erakundeak elkarren artean koordinatzeko eta lankidetzan jarduteko.

III.- EUSKO JAURLARITZAKO JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILEKO ERABERRITZEAREN ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN ZUZENDARITZAK EGINIKO ALEGAZIOAK.

Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saileko Eraberritzearen eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritzak eginiko alegazio bakarra Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren etorkizuneko Estatutuaren gainekoa da. Zuzendaritzaren arabera Estatutu horrek xehetasun osoz jaso beharko ditu antolaketari, funtzionamenduari eta prozedurari buruzko alderdi guztiak, aintzat harturik Lehendakariaren maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuaren azken

xedapenetako lehenengoan zehazten diren austeritate edo zorrotzasun irizpideak. Aipatutako 4/2009 Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioako sailak sortu, ezabatu eta aldatzen ditu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen ditu.

IV.- EUSKO JAURLARITZAREN OSASUN ETA KONTSUMO SAILEKO OSASUN PUBLIKOKO ZUZENDARITZAREN ALEGAZIOAK.

Osasun Publikoko Zuzendaritzak hainbat **ohar orokor** egin ditu aurreproiektuari buruz. Lehenik eta behin, erakunde horren iritziz, testuak iritzi-artikulu baten edo testu akademiko baten antzerako idazkera hartzen du askotan eta ez arau-testu batena. Horrenbestez, iritzia adieraz dezaketen terminoak ez erabiltzeko aholkatzen du Osasun Publikoko Zuzendaritzak, eta zehazki *“lakra”* *“azpijoko antolatua”* terminoak eta *“oso”* superlatiboa aipatzen ditu.

Gure ustez, ordea, *“lakra”* edo *“gaitza”* hitzak ez du iritzirik edo balio-judiziorik adierazten eta ez da iritzi-artikulu bateko berezko terminoa. Hitz hori dopinaren aurkako borrokarekin loturiko testu ofizial askotan agertzen da; esate baterako, 7/2006 Lege Organikoan bertan hainbat aldiz ageri da.

Bigarrenik, *“azpijoko antolatua”* esamoldeak ere ez du balio-judiziorik edo iritzi subjektiborik adierazten eta, aurreko terminoa bezala, hainbatetan erabili da lege-testuetan (36/2006 Legea, azaroaren 29koa, iruzur fiskala prebenitzeko neurriei buruzkoa) eta Auzitegi Gorenaren sententzia ugaritan.

Azkenik, *“oso”* adberbioren harira, aipatzekoa da Eusko Legebiltzarrak onartutako lege gehienetan usu erabiltzen dela adberbio hori. Adibidez, arau-haustea eta zigorrak arin, larri eta *“oso larri”* modura tipifikatzeko lege guztiek erabiltzen dute superlatiboa.

Zioen azalpenari buruz, **onartu egin da** bigarren orrialdeko hirugarren paragrafoan *“dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa lortzea...”* esaldiaren ordeztu beste hau jartzea: *“dopinaren aurka borrokatzerakoan eraginkortasun handiagoa lortzea”*. Bat gatoz alaketak testua hobetu egiten duela.

Zioen azalpenean, laugarren orrialdeko hirugarren paragrafoan zehazki, osasun-kontrolak aipatzen dira. Osasun Publikoko Zuzendaritzaren iritziz, osasun-kontrolak egitea *“ez da kirol-zentroen eskumeneko zeregina”*. Organo horren iritziz, pertsonen intimitate-eskubidea urra dezake edozein kirol-erakunderi horretarako ahalmena emateak, eta, ondorioz, paragrafo horretan gehiago zehaztu beharko lirake jardunak, eskubideak babesteko bermeak eta kirol-erakundeen eskumenak.

Osasun Publikoko Zuzendaritzaren ohar orokor horri buruz hainbat zehaztapen egin beharrean gara. Lehenik eta behin, Legean jasotako osasun-kontrolak kirol-erakundeen bidez gauzatzen dira eta ez *“kirol-zentroen”* bidez. Bigarrenik, gogoan izan behar da kirol-lehiaketaren esparruan aspalditik egin izan direla osasun-kontrolak, eta ez dela inongo jurisdikzio-organotan auzitan jarri kontrol horien konstituzionaltasuna. Hirugarrenik, aipatzekoa da Osasuna babesteko eta kirolean dopatzeari aurre hartzeko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoaren 8. artikuluan jasotzen direla osasun-kontrolak.

Zioen azalpenean jardunak, eskubideen babeserako bermeak eta kirol-erakundeen eskumenak gehiago zehaztu beharrari buruz eta azalpen zabalagoak eman beharrari buruz, komeni da zehaztea zein diren azalpen horien helburuak, honako hauek hain zuzen: legea onartzeko bidea ematen duten arrazoi orokorrak azaltzea, helburuen berri ematea eta legearen oinarriak, printzipioak eta ildo nagusiak zein diren jakinaraztea, era horretara legea bera hobeto ulertzeko (1993ko apirilaren 6ko agindua, lege-egitasmoak, dekretuak, aginduak eta erabakiak lantzeko irizpideei burukoa). Eta aurreproiektuaren zioen azalpenean osasun-kontrolei berariaz eskainitako paragrafoak 28 lerro ditu; hau da, badu nahikoa zabalera eta hedadura. Hain zuzen, Osasun Publikoko Zuzendaritzak berak uste du *“gehiegizko luzera horren adibide”* dela zioen azalpena. Beraz, erabaki da aurrez aipatutako ohar guztiak ez direla Zioen Azalpenean jasotzekoak, eta inon jasotzekotan arrazoiaren memorian jaso behar direla.

Osasun Publikoko Zuzendaritzak zioen azalpenean 5. orrialdeko laugarren paragrafoa beste era batera idazteko proposatu du. Kirol Zuzendaritzak onartu egin du proposamena.

Zioen azalpeneko 6. orrialdean, laugarren paragrafoan, kirolari guztien osasuna babesteko beharra aipatzen da, *“edozein dela kirolari-mota”*. Osasun Publikoko Zuzendaritzak iradokitakoaren arabera, *“zehaztu egin behar da zer kirolari-motari egiten zaion erreferentzia”* aipatutako azalpen horretan. Proposamena ez da onartu, hainbat arrazoiengatik. Lehenik eta behin, paragrafoak esaten du lizentziarekin lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten kirolarien osasuna ez ezik, bestelako lehiaketa batzuetan parte hartzen duten kirolari guztiena ere babestu behar dela; hala nola, federazio-lizentziarik gabe muturreko kirol-probetan parte hartzen dutenena. Bigarrenik, *“edozein dela ere kirolari-mota”* esamoldeak zabaltzeko asmoa du, ez mugatzekoa, eta, hain zuzen, horregatik saihestu da bereizketa handiagorik egitea. Lehiaketako kirol-sisteman azpi-sistema asko daude (kirol federatua, unibertsitate-kirola, eskola-kirola, herri probak, etab.) eta zioen azalpenean erabilitako esamolde horren helburua da kirol-lehiaketa mota guztien garbitasuna babestea, baita horietan parte hartzen duten kirolarien osasuna ere, berdin goi-mailakoena, errendimendu handikoena, kirol-talentuena eta berdin kirolari amateur soilena.

Ildo berean eta aurreko paragrafoarekin loturik, Osasun Publikoko Zuzendaritzak proposatutakoaren arabera, zioen azalpenean *“adierazi egin beharko litzateke zergatik jotzen den beharrezkotzat herri kirolarientzako erregimen berezi bat”*.

Nabarmentzekoa da, ordea, zioen azalpenean espikatzen dela erregimen berezi horren zergatia. Alde batetik, herri kirolariei ezin zaizkie ezarri lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten kirolariei ezarritako betebeharrak, baina, bestetik, zioen azalpenean beharrezkotzat jo da kirol-probetan kirol-espirtuaren kontrako jokabideak galaraztea, eta, orobat, muturreko kirol-lehiaketetan edo eskakizun fisiko handiko probetan parte hartzen duten kirolarien osasuna babestea.

Bestalde, Osasun Publikoko Zuzendaritzak erreparoa jarri ditu esaldi hau dela-eta: *“Soilik lizentzia duten kirolarien osasuna zaintzea helburu duen legea ezin da lege ona izan”*. Ez dago inolako eragozpenik esaldi hori kentzeko edo aldatzeko.

Zioen azalpeneko 6. orrialdean, azkeneko paragrafoan, *“lakra”* hitza ezabatzea iradoki du Osasun Publikoko Zuzendaritzak. Aurrez ere azaldu dugu iradokizun hori baztertzeko arrazoa.

Aurreproiektuaren **3., 4., 5., 6. eta 7. artikuluei** buruz, aipatutako Zuzendaritzak proposatu du horiek guztiak bilduko dituen artikulua bat lantzea, eta berariaz jasotakoak taldeen arabera bereiztea. Iradokizun horren harira, garrantzitsutzat jo da pertsona-multzoko bakoitza, bere ardura-mailarekin, artikulua batean bereiztea, eta, gainera, arautzeko teknikari loturiko irizpideen arabera, artikuluek *“laburrak izan behar dute”*. Alde horretatik, Osasun Publikoko hasierako oharri jarraituz gero, artikulua bakar hori luzeegia litzateke.

Aurreproiektuaren **1.1. artikuluari** buruz, Osasun Publikoko Zuzendaritzak uste du argitu egin behar dela dopinaren definizioa; izan ere, testuak dio jokabide hori *“kirol-espirtuaren kontrako ekintza”* dela. Arrazoen memorian azaldu denez, nazioarteko erakundeek onartutako hainbat lege eta tresnek jasotako definizioetan oinarritu da funtsean dopinaren definizioa. Hori dela eta, dopinaren definizioan azpimarra egin da debekatutako substantzia bat hartzea edo galarazitako bitartekoak erabiltzea kirolarien osasunerako arriskutsua izateaz gain, kirolaren ikuspegitik iruzur egitea ere badela, edo joko garbian oinarritutako kirol-legezko espirtuaren aurkako ekintza.

Ulegarria da kirolaren araubide juridikotik aldenduago dauden gobernuko organoentzat arraroak izatea zenbait termino, baina Legearen beraren esparru materialean erabilitako terminologian oinarritu da aurreproiektua. Horrela adierazten da, esaterako, 1984ko Kiroleko dopinaren aurkako Europako gutunaren pasarte honetan: *“dopin-produktuak erabiltzea arriskutsua da osasunerako, eta, aldi berean, kirol-etikaren kontrakoa ere bada”*. Era berean, Kirolean egon daitekeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako uztailaren 11ko 19/2007 Legean ere aipatzen da *“berdinen arteko lehiaketa bidezko eta garbiaren espirtua”*. Gogoan hartu beharrekoa da, halaber, Kiroleko dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioa, 2005eko azaroaren 18an Parisen hitzartu zena. Hura berresteko tresna Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2007ko otsailaren 16an, eta bertan esaten da dopina joko garbiaren (fair play) aurkako jokabidea dela.

Osasun Publikoko Zuzendaritzaren iritziz **1.3 artikulua** idazketa nahasia du, baina ez du esaten zer pasartek sortzen duen nahasmena.

Aurreproiektuaren **2. artikulua** xedatzen du dopina hainbat printzipioren bidez arautuko dela Euskal Autonomia Erkidegoan, eta **b atalean** honela zehazten da: *“dopinak kalte larria eragin diezaieke kirolariei eta, kasuan kasu, kiroleko animaliei”*. Osasun Publikoko Zuzendaritzaren arabera, *“animaliak eta kirolariak nahasi egin daitezke, eta horrek txantxak eragin ditzake”*. Txosten hau sinatzen duenak ez daki testuaren zein pasartek eragin ditzakeen txantxak; izan ere, begien bistakoa da dopinak kalte larria eragin dezakeela kirolarien

osasunean eta animalien osasunean. Nolanahi ere, esamolde hau hobetsi da: *“edo, kasuan kasu, animalien osasunean”*.

Aurreproiektuaren **2. artikuluko c atalari** buruz, Osasun Publikoko Zuzendaritzak dio idazketa nahasia dela, testuak *“dagokion araudiak... debekatutako substantziak eta metodoak”* aipatzen dituelako. Osasun Publikoko Zuzendaritzak galdera hauek egin ditu: *“Zein da erakunde eskuduna?”* eta *“Zein da dagokion araudia?”*. Gure iritziz, aurreproiektuan nahikoa azalpen ematen dira bi galdera horiek zehazteko. 20. artikuluan, modu monografikoan, debekatutako substantzia eta metodoen zerrenda zehazten da, eta Dopinaren aurkako Euskal Agentziak zerrenda hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko duen eskumena arautzen da.

4. artikulua kirolarien laguntzaileen eta kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien laguntzaileen erantzukizunak arautzen ditu. Osasun Publikoko Zuzendaritzaren iritziz, testua idatzita dagoen moduan, *“maila berean jartzen dira pertsonak eta animaliak”*. Argitu behar da, lehenik eta behin, batzuek eta besteek bete beharreko arauak biltzeko teknikari eta irizpideari jarraitu zaiola arauak egiterakoan. Hain zuzen ere, Osasun Publikoko Zuzendaritzak berak I. kapitulu honi buruzko ohar orokor bat egiten du eta iradokitzen du kirolari, laguntzaile, botere publiko, kirol-erakunde, antolatzaile eta abarren erantzukizunak artikulua bakar batean bildu beharko lirakeela.

Bada, Europako Erkidegoko legediak, Espainiako Parlamentuak eta autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek onartutako legeek berariaz onartzen dute animaliek ere badutela osasuna eta sentiberatasun fisiko eta psikikoa, eta horiek ere babestu beharrekoak direla. Eta hortik abiatuta, ohartu beharrekoa da 4. artikulua ez dituela kirolarien eta animalien erantzukizunak aipatzen, baizik eta kirolari eta animalien *“laguntzaileen”* erantzukizunak. Eta, azkenik, aurreproiektuak ez du, inolaz ere, kirolarien eta animalien araubide juridikoa berdintzen. Kirolariek eskubide eta betebeharren katalogo bat, prozedura batzuk eta abar dituzte, eta horrelakorik ez da jasotzen animalien kasuan.

Aurreproiektuaren 8. artikulua oro har kirolariek zer eskubide eta betebeharrak dituzten ezartzen du. Artikulu horren c) atalean zehazten da kirolariak, *“ustez dopatu izanaren jakinarazpena jasotzen badu, alegazioak aurkezteko”* eskubidea duela. Osasun Publikoko Zuzendaritzak galdetu du kirolariak non aurkeztu behar dituen alegazioak.

Gogoan hartu behar da I. kapitulua printzipio gidariei eta xedapen orokorrei buruzkoa dela eta, beraz, Kirol Zuzendaritzaren iritziz ez da leku egokia alegazioak zein organoren aurrean aurkez daitezkeen arautzeko. Aurreproiektuaren IV. kapitulua oso zabala da eta hor ezartzen dira dopinaren aurkako diziplina- eta zigor-araubidea. Nola ez, kirolariek eskubidea izango dute erakunde askotarikoek, publiko nahiz pribatuek, nazioartekoek, estatukoek zein erkidegoetakoek, federazioei loturikoek eta federazioz kanpokoek abiatutako zigor- eta diziplina-prozeduren gainean alegazioak aurkezteko dagokion instrukzio-organoaren aurrean. Legea ez da kirolariek beren alegazioak zein organoren aurrean aurkez daitezkeen zehazteko tresna arauemailea eta, horrenbestez, 7/2006 Lege Organikoak ere ez du horrela egiten.

Aurreproiektuaren 8. artikuluan, d) atalean zehazki, xedatzen da kirolariek eskubidea dutela entzunak izateko zigorra jaso aurretik. Osasun Publikoko Zuzendaritzak aurreko galdera bera egin du eta aurrez emandako erantzuna berritu baino ezin dugu egin.

9. artikuluan kirolarien eta erakundeen babesa arautzen da berariaz. Osasun Publikoko Zuzendaritzaren arabera aurreko zenbait artikulutan ere jasotzen da babes hori eta, beraz, komenigarria litzateke ez errepikatzea. 5. artikulua botere publikoek zenbait baldintzatan dirulaguntzarik edo bestelako laguntzarik ez emateko duten ardurari buruzkoa da oro har, eta 9. artikulua, berriz, monografikoa da. Artikulu horrek luze-zabal jorratzen du gaia eta zehaztasun eta xehetasun handiagoz, atalez atal. Txosten hau egiten duenak arrazoizkotzat jo du 5. artikuluan d) hizkia kentzea.

Aurreproiektuaren **13.7. artikulua**ren harira, Osasun Publikoko Zuzendaritzaren arabera, kirolariak eman behar die baimena entrenatzaileei, medikuei eta gainerako osasun-langileei jasotzen ari diren tratamenduei buruzko informazioa emateko, eta ez alderantziz. Osasun Publikoko Zuzendaritzaren iritziz, *“legearen arabera, ezingo dituzte kirolariaren datuak eman kirolariak berak ez badu berariaz baimentzen”*.

Bada, ez dago 13.7 artikulua zertan moldatu; izan ere, argi dago kirolariei laguntzen dieten entrenatzaileek edota osasun-langileek, dopin-kontrolak egiterakoan, adierazi egin behar dutela kirolaria zer tratamendu terapeutiko jasotzen ari den, *“baldin eta kirolariak berariaz adierazten ez badu ez duela baimenik ematen horren berri emateko”*. Kontuan izan behar da aurreproiektuaren testua 7/2006 Lege Organikoaren 5.4 artikuluan oinarritu dela:

“4. Kirolariek, beren entrenatzaileek, medikuek eta gainerako osasun-langileek, bai eta kirol-klubetako eta kirol-erakundeetako zuzendariek ere, dopin-kontrolak egiterakoan adierazi egin behar dute zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren kirolariak, nor diren horien erantzule eta tratamenduak zer hartzen duen bere baitan, baldin eta kirolariek berariaz adierazten ez badute ez dutela baimenik ematen horren berri emateko”

46. artikuluari buruz, Osasun Publikoko Zuzendaritzak dio dagokionez, ez dagoela argi Kirolariaren Osasun Txartelak *“zer erabilera duen, ezta zer dokumentuk osatuko duten ere”*. Era berean, Zuzendaritzak adierazi du ez dela egokia dokumentu publikoa izatea; txartelaren ezaugarriak aintzat hartuta, agiri guztiz pribatua izan beharko lukeela, eta, beraz, txartelaren sarbidea eta babesa arautu egin beharko liratekeela.

Alegazio horren harira, gogoratzekoa da aurreproiektuak eginahala egiten duela Kirolariaren Osasun Txartelaren araubidea, izaera, bermeak eta abar argitzeko. 46. artikulua 11 atal zabaletan banaturik dago eta horietan jorratzen dira aipatutako kontu horiek.

Txartelaren izaera publikoari dagokionez, 7/2006 Lege Organikoaren araubideari jarraitzeko hautua egin du aurreproiektuak. Honela xedatzen du lege horrek:

“1. Kirolariaren Osasun Txartela dokumentu publiko bat da, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak ematen diena goi-mailako kirolariaren izaera aitortuta dutenei eta Espainiako kirol-federazioek eginiko berariazko hitzarmenen markoan federatuta dauden gainerako kirolariei.

Osasun-txartel horren helburua da kirolariak eta hura artatzeaz arduratzen diren osasun arloko langileak ahalik eta informazio kliniko onena izatea, gaitz edo gaixotasunen bat izanez gero, zer tratamendu den egokiena erabakitzeko.

Osasun-txartelak honako hauei guztiei buruzko informazioa jasoko du: azterketa medikoak, osasun- eta dopin-kontrolak –kasuan kasuko lizentzia eskuratzen duen unetik kirolariari egiten zaizkionak–, haien emaitzak eta medikuak hartzen dituen erabakiak, hain zuzen ere, kirolariaren osasun-laguntza egokia izan dadin kontuan hartu beharrekoak. Erregelamenduz zehaztuko da informazio horren norainokoa eta dagokion dokumentazioa igortzeko modua.

Eta, horrez gain, kirolariak eskuratutako erabilera terapeutikoko baimenei buruzko datuak, eta kirolariaren lan-bajei eta/edo kirol-bajei buruzkoak ere bilduko dira txartelean.

Lege-aurreproiektuak araudi betearazlea behar du legezko xedapen horiek garatzeko, eta, horrenbestez, ezin zaio zehaztapen handiagorik eskatu.

Bestalde, ez da ahaztu behar Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolariaren Osasun Txartelak Espainiako txartelaren zenbait ezaugarri eta parametro komun bete behar dituela. Txartelaren egiturak oinarri komun batzuk izan behar ditu, bien arteko operatibotasuna bermatzeko, bateko datuak besteari uzteko eta abar.

V.- EMAKUNDEREN ALEGAZIOAK.

Aurreproiektuaren **6.1.m artikulua** dela-eta, Emakundek gomendatu du, emakume eta gizon kirolarien beharrianak aintzat harturik, zehaztu egin beharko litzatekeela dopin-kontrolak egiteko guneak egokiak izango direla.

Aurreproiektuak ezartzen du eremu horiek “*egokiak*” izan behar dutela unean uneko baldintzen baitan, baina, nolanahi dela ere, kontuan hartzekoa da Emakunderen alegazio hori eta, beraz, zehaztu egingo da aintzat hartuko direla emakume eta gizonek dituzten beharrianak desberdinak.

11.7 artikulua dela-eta, Emakundek proposatu du klausula bat jasotzea Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren Aholku Kontseiluaren osieran emakume eta gizonen kopurua orekatua izan dadin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen 23. artikuluan xedatutako irizpideari jarraituz.

Etorkizuneko Dopinaren aurkako Euskal Agentziak bete egin beharko du aipatutako lege hori, gainerako erakunde publikoek bete behar duten moduan. Arautzeko teknikaren ikuspegitik ez da beharrezkotzat jo beste legedi batzuetako arauak berritzea. Organo horretan orekari eusteko betekizuna

Emakume eta Gizonen berdintasunerako Legetik eratorria da, eta, beraz, itxura batean ez dago legezko betekizun hori berritu beharrik, gainerakoan beste sektoreetako araubideek ere irizpide berari jarraitu beharko liokete.

Emakundek eginiko proposamena aintzat harturik, onartu egin da **12. artikulua**ren v) atala beste modu batera idaztea, pasarte hori hobeto ulertzeko.

Aurreproiektuaren **43. artikulua**ren harira, Emakundek positibotzat jo du 12. artikuluan, i) hizkian, Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren ikerketa, dibulgazio, prestakuntza eta sentsibilizazio arloko jardueretan generoaren ikuspuntua aintzat hartu eta jaso izana, baina aipatutako 43. artikulua horretan berean dopinari buruzko informazio-sisteman ere generoaren ikuspegi hori jasotzeko aholkatu du.

Onartu egin da proposamena.

Azkenik, Emakundek adierazi du aurreproiektua idazteko, oro har, ez dela hizkuntzaren erabilera sexistarik egin, 4/2005 Legearen 18.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, baina, nolanahi dela ere, soilik era maskulinoan idatzita dauden zenbait termino berrikusteko gomendatu du.

Iradokizun hori aintzat hartuta, testu osoa berrikusi da soilik era maskulinoan idatzita dauden terminoak saihesteko.

VI.- KIROL KONTSEILU GORENEKO ESTATUKO ABOKATUTZAREN ALEGAZIOAK.

Estatuko Abokatutzak, honako ondorio hau arrazoitzen du alegazioen lehen orrialdeetan: Espainiako eta nazioarteko lehiaketetan dopin-gaien inguruko kirol administrazio-ahalmenak betetzea Estatuari dagokio eta ez beste inori. Erakunde horren iritziz, nazioarteko esparrua eta naziokoa autonomia-erkidegoko esparrutik harago daude, eta Espainiako kirol federatu guztiei eragiten die eta, horrenbestez, esparru horietan dopin-gaien inguruko administrazio-ahalmenak betetzea Estatuari dagokio eta ez beste inori.

Behin aurretiazko ohar hori argi utzita, Estatuko Abokatutzak aurreproiektuaren edukia aztertzen du xeheago.

Lehen-lehenik, **1.5. artikuluan** jasotako eremu subjektiboaren harira, Estatuaren Abokatutzak uste du eskumenak gainjartzeko aukera dagoela zenbait kirolariren kasuan. Arau horrek xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoan behin-behinean bizi, entrenatu edo lehiatzen den edozein pertsona fisiko edo juridikori ere ezarriko zaiola Legea. Eta aplikazio-eremu subjektiboa esandakoa izanik ere, hau gehitzen du: kirolari horiek estatuko edo nazioarteko kirol-jardueretan parte hartzen dutenean, estatuko edo nazioarteko xedapenak bete beharko dituztela. Estatuko Abokatutzaren iritziz, azken ñabardura horrek salbuespena egiten du estatuko eta nazioarteko xedapenak ezartzerakoan, eta, beraz, ez zen beharrezkoa.

Aipatu beharrezkoa da 2010eko urriko azken bertsioan gehitu zela ñabardura hori aurreproiektura, Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak eginiko iradokizunaren ondotik. Erakunde horrek ohartarazi zuen zenbait kirolari hainbat araubide bete beharrean izan zitezkeela aldi berean (erkidegokoa, estatukoa

eta nazioartekoa) eta, hortaz, iradoki zuen kirolari horiek hiru kontrol (euskal federazioarena, Espainiakoarena eta nazioarteko federazioarena) egiteko obligazioa saihestu beharrekoa zela.

Baldintza horrek berresten du dopina kontrolatzeko eta zigortzeko zeregina erakunde askorena izan daitekeela eta erakundeen ugaritasun hori ez dela lege-aurreproiektuak sorturikoa, baizik eta kirolariak berak izan ditzakeen lotura berezien berezko pluraltasunak eragindakoa. Kirolari batek nortasun juridiko bakarra du, baina hainbat federaziori loturik egon daiteke eta, horren ondorioz, autonomia-erkidegoko, estatuko eta nazioarteko lehiaketetan har dezake parte. Eta lotura ugari horien ondorioz, logikoa da, itxuraz, EAEko lehiaketa batean euskal federazio batek bere kirolariei kontrolak egiteko aukera izatea; Espainiako federazio batek Espainiako txapelketa batean parte hartzen dutenei egin ahal izatea eta, era berean, nazioarteko federazio batek Europako lehiaketa batean parte hartzen duten kirolari horiei berei kontrola egin ahal izatea. Zentzuzkoa da hori eta, gainera, egunero egiazta daiteke kirol-diziplinako ahalmenaren esparruan, kirolariek EAEko lehiaketetan, Espainiakoetan edo nazioartekoetan arau-hausteak egiten dituztenean. Eta ez da arrazoizkoa kirolariak kontrolatzeko eta zigortzeko egitura horren gainean zalantzarik sortzea, arau-hausteak edozein arlotakoak direla ere: joko-arauei loturikoak, lehiaketaren arlokoak, dopinaren arlokoak, arrazakeriarekin eta xenofobiarekin zerikusia dutenak, etab.

Aurrekoa horrela izanik ere, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak, etorkizunean izan daitezkeen arazoak saiheste aldera, onartu egin zuen 1.5 artikuluan zehaztaper bat egitea. Artikulu horrek hasieran xedatutakoaren arabera, Legearen aplikazio-eremu subjektibo orokorrak federazio-lizentzia (unibertsitatekoa zein eskolakoa) duten kirolari guztiak hartzen ditu bere baitan; hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gaitzen duen federazio-lizentzia dutenak. Eta aplikazio-eremu subjektiboa esandakoa izanik ere, honela zehazten du gero: kirolari horiek estatuko edo nazioarteko kirol-jardueretan parte hartzen dutenean, estatuko edo nazioarteko xedapenak bete beharko dituzte. Horrenbestez, euskal federazioak ahalmena du Euskadiko Txapelketan parte hartzen duen kirolari bati, euskal federatu lizentzia duen kirolari bati, dopin-kontrola egiteko eta positibo eman badu zigorra ezartzeko. Baina euskal lizentzia duen kirolari horrek berak Espainiako edo nazioarteko lizentzia ere baldin badauka estatuko edo nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko, proba horietan estatuko edo nazioarteko araudia ezarriko zaio.

Eta txosten honen hartzaileak kontura daitezen esparru subjektiboaren harira aurreproiektuaren arauak zer logika duten, nabarmentzekoa da kirolari bakar batek federazio eta erakunde desberdinekin izan ditzakeen harreman ugariak izugarri areagotzen direla kirolari berak, esaterako, triatloia, txirrindularitza, atletismoa eta igeriketa egiten baditu eta federazio horietan guztietan federatzen bada.

Horrenbestez, araubideen, kontrolen, diziplina-ahalmenen eta abarren ugaritasuna ez da aurreproiektuaren ondorio, baizik eta kirolari batek dituen harreman juridiko ugarien ezinbesteko ondorio. Horrelako arau-proiektu batek, nolana ere, zorrotz bete eta errespetatu beharko lituzke besteak beste lankidetzak-, eraginkortasun- eta proportzionaltasun-printzipioak.

Bigarrenik, eskumenen esparru horri buruz, Estatuko Abokatutzak dio dopatzeak zigorrak ekar ditzakeela ez soilik lehiaketetan egindako arau-hausteen ondorioz, baita prestakuntzarekin loturiko jardueren ondorioz ere (entrenamenduak). Eta zehazten du lehiaketa ofizialetan errazagoa dela zer esparrutako araudia ezarri behar den erabakitzea; hala, Espainiako lehiaketa ofizialetan estatuko xedapenak ezartzen dira. Alabaina, lehiaketatik kanpoko kirol-jardueretan dopina kontrolatzea korapilatsuagoa da eta Estatuko Abokatutzaren arabera eskumenak zehazteko parametro bakarra dago: kirolariak zer lizentzia-mota duen, hain zuzen. Ondorio horretara iristeko, Estatuko Abokatutzak gogora ekarri du 7/2006 Lege Organikoak, Legearen aplikazio-eremua aipatzean, estatuko edo autonomia-erkidego bateko federazio-lizentzia duten kirolariak hartzen dituela kontuan. Beraz, dopin-gaietako arauak aplikatzeko eremu subjektiboa kirolaria kirol-entitate jakin batekin lotzen duen harreman juridikoak zehaztu behar du; horrek esan nahi du kirolariak autonomia-erkidego bateko lizentzia badu autonomia-erkidegoak eskumenak izango dituela dopin-gaietan, eta lizentzia estatukoa bada, berriz, eskumenak Estatuko Administrazioarenak izango direla. Estatuko Abokatutzaren arabera ez *litzateke zentzuzkoa* Euskal Autonomia Erkidegoari zehapen-eskumenak esleitzea, pertsona batzuei dagokienez, Estatuak ere eskumenak baldin baditu horien gain.

Alabaina, Estatuko Abokatutzaren ondorio hori ez da zuzena. Alegazio horietatik ondoriozta daiteke kirolariak aukera bakarra duela: autonomia-erkidegoko lizentzia izatea edo estatukoa izatea. Berez, ordea, kirolariak bi lizentziak eduki ditzake eta, horrenbestez, loturazko harreman diferentea izan dezake autonomia-erkidego bateko federazioarekin eta Espainiako federazio batekin. Ondorioz, ez gatoz bat Estatuko Abokatutzak eginiko interpretazioarekin; beste modu batera esanda, zentzuzkoa da aurreproiektuan Euskal Autonomia Erkidegoari zehapen-eskumenak esleitzea, nahiz eta Estatuak ere eskumenak izan arlo horretan. Horrenbestez, aurreproiektuak ahalmena eman behar die euskal federazioei beren federatuei kontrolak egiteko, baita lehiaketatik kanpo ere, federatu horiek beste federazio bateko kide izan zein ez.

Aurreproiektuaren 1.5 artikulua, eremu subjektiboari buruzkoak, beste hau ere xedatzen du: Euskal Autonomia Erkidegoan aldi baterako bizi, entrenatu edo lehiatzen diren pertsona fisiko eta juridikoei ere ezarriko zaie Legea. Legearen aplikazio-eremua zehazte aldera, lurraldetasunaren irizpidea baztertzeko ahalegina egiten du Estatuko Abokatutzak bere txostenean.

Horri buruz, esan beharrekoa da lurraldetasunaren printzipioa erabat betetzea proposatzen zela lehen zirriborroan; horrela gertatzen da beste herrialde batzuetan. Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak landutako txostenaren ondoren nabarmen leundu egin zen lurraldetasun-printzipioaren aplikazioa, baina hala ere, Estatuko Abokatutzak printzipio hori erabat kendu nahi du.

Gogoan hartu beharrekoa da, esaterako, 7/2006 Lege Organikoan jasotakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak aukera duela Euskadin egon eta atzerriko lizentzia duten kirolariei lehiaketatik kanpo dopin-kontrolak egiteko:

“Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordeak, baita Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak ere, ahalmena izango dute Espainian egon eta entrenatzeko jabego publikoko instalazioak erabiltzen dituzten

atzerriko kirolariei lehiaketatik kanpo kontrolak egitea agintzeko, autonomia-erkidegoen eskumenei kalterik egin gabe

Bestalde, Estatuko Abokatutzaren iritziz oso garrantzitsua da dopinaren aurkako Legea nori aplikatzen zaion. Federazio-lizentzia duten kirolariei ezartzen zaie (horretan bat dator Espainiako legearekin), baina baita unibertsitateko edo eskolako lizentzia duten kirolariei ere. Hedadura horrek dopin-gaietako ahalmenak betetzeko eraginkortasun- eta proportzionaltasun-irizpideen aurkakoa dirudi. Abokatutzaren arabera, eraginkortasun-printzipioaren aurkakoa da, jardunak berak erakusten baitu Espainiako legeak mugatzen duen eremua gehiegizkoa dela; izan ere, ezinezkoa da kirol federatu osoaren kontrol behar bezain zorrotza egitea. Horrez gain, erakunde horrek dio kirola egitean lehiaketarekin edo kirol-errendimendua hobetzearekin inolako loturarik ez dutenen kasuan –adinekoak eta haurrak, esate baterako–, dopinari buruzko arauak aplikatzeak ez duela eraginkortasun nabarmenik dopinaren aurkako borrokan. Gainera, Estatuko Abokatutzaren arabera, eskubide indibidualen (kokalekua zehaztu behar izana, datuak uztea, etab.) neurri murriztaileen proportzionaltasunari buruzko zalantzak sor daitezke, baita neurri horiek Autonomia Erkidegoan kirola egiten duten hainbeste pertsonarengana zabaldu ote daitezkeen ere.

Kirol Zuzendaritza honek bat egiten du, neurri batean, Estatuko Abokatutzaren gogoetarekin. Egia da: aurreproiektuak errespetatu egin behar ditu proportzionaltasun- eta eraginkortasun-printzipioak. Legearen *ratioa* lehiaketen garbitasuna eta kirolarien osasuna zaintzea eta babestea bada, eztabaida ezina da federazio-lizentziaz aparteko beste lizentzia-motaren bat duten kirolarien osasuna ere babestu behar duela legegileak, eta, orobat, federazio-lizentzia hori ez duten kirolariek parte hartzen duten lehiaketak ere lege bidez babestekoak direla. Beraz, proportzionaltasun-printzipioaren ikuspegitik lege-proposamenari ezin zaio, itxuraz, kritikarik egin; izan ere, kirolari horien eskubideak inbaditzea kirolari federatuen eskubideak inbaditzea bezain arrazoizkoa da.

Besterik da eraginkortasun-printzipioari dagokionez. Estatuko Abokatutzak ezbaian jartzen du arauak zenbait sektoreri ezartzearen egokitasuna, hala nola adinekoei eta haurrei. Jakina, ukaezina da aurreproiektuaren helburuen artean ez dagoela dopinaren aurkako legea adinekoei eta haurrei ezartzea. Eta ez da aurreikusten etorkizuneko Dopinaren aurkako Euskal Agentziak landu eta betearaziko dituen urteko kontrol-programetan adinekoak eta haurrak hartzaileen artean izango direnik.

Nire iritziz, Legeak jaso egin behar du eskola-kirolean eta unibertsitate-kirolean noiz edo noiz kontrolak egiteko aukera. Ezin konta ahala arrazoi daude horretarako:

- a) Eskola-kirolak 16 urte arteko kirolariak hartzen ditu eta jakina da goi-mailako kirolaren historian adin horretatik beherako kirolari askok lortutako garaipen ugari izan direla. Joko Olinpiarretan 14, 15 eta 16 urteko hainbat kirolari gaztek lortu izan dituzte dominak. Eta zenbait kasutan dopin-jarduerei loturiko programen eskutik iritsi izan dira garaipen horiek.

- b) Eskola-kirolaren ibilbidean badira ikasleen parte-hartze hutsetik haratagoko jarduerak. Badira errendimendua hobetzen hasteko lehiaketak, teknifikazio-jarduerak kirol-talentuak eta etorkizun handiko kirolariak identifikatzeko ibilbidean hautatutako ikasleekin, etab.
- c) Unibertsitate-kirola egiten duten hainbat kirolari, aldi berean, kirolari federatuak dira, maila handiko kirolariak, gainera.

Nolanahi ere, eskola eta unibertsitateko kirolariei Legearen eremu objektiboan eutsiz, arrazoizkoa begitantzen da araubide berezia jasotzea eskola- eta unibertsitate-lizentzia duten kirolarientzat.

Araudiaren edukiari dagokionez, Estatuko Abokatutzak gogoeta bat egin du **1. artikuluko** dopina kontzeptuari buruz. Estatuko Abokatutzan zalantzak sortzen dituen lehen kontua da *“kirol-espiritua”* kontzeptua ez dela batere zehatza. Legezko kontzeptu zehaztugabe bat da, eta, gainera, kasu jakin bakoitzean zehaztea oso zaila da.

Alegazio hori dela-eta, hor dira txosten honetan bertan Osasun Publikoko Zuzendaritzak eginiko ekarpenen harira emandako azalpenak.

Aurreproiektuaren **4., 5., 6. eta 7. artikuluetan** zehazten diren pertsona eta erakundeen erantzukizunei buruz, Estatuko Abokatutzak uste du aurreproiektua oso zorrotza dela, baina *“zuzenbidean ezinezkoa dela dena aurreikustea, eta ondoriozta daiteke zerrendatzeak ez direla nahikoa izaten, oso zabalak izan arren”*.

Jakina, begien bistakoa da zuzenbidean ezin direla egoera guztiak aurreikusi eta horren frogar da Espainiako Parlamentuak onartutako lege garrantzitsuenak aldatzen ari direla etengabe indarrean sartu zirenetik. Baina hori egia izan arren, aurreproiektuak ahaleginak eta bi egin behar ditu dopinaren aurkako borrokaren esparruan.

Administrazio-antolakuntzari dagokionez, Dopinaren aurkako Euskal Agentziari buruzko lege-aurreikuspena aztertu du Estatuko Abokatutzak eta egokitzen jo du Euskal Agentziari, estatuko pareko erakundeari ez bezala, eskumen teknikoak eta zehapen-eskumenak ematea. Hain zuzen ere, Abokatutzak onartu du eredu hori oso ohikoa dela zuzenbide konparatuan. Aurreproiektuaren **12.2 artikuluan** Agentziaren eginkizunen zerrenda luze bat jasotzen da eta zerrenda horren amaieran honakoa adierazten da: *“eginkizun horiek Dopinaren aurkako Estatuko Agentziari esparru berberetan dagozkion eginkizunen kalterik gabe ulertuko dira”*. Zehaztapen hori, Estatuko Abokatutzaren iritziz, *“iluna”* da; izan ere *“ez du gainjartzerik gertatu behar eskumenak betetzean, ez eta erreferentzia justifikatuko duen eskumenen aldiberekotasunik ere”*.

Ez gatoz bat Estatuko Abokatutzaren irizpideekin, honako arrazoi hauengatik:

- a) Lege Organikoak irizpide tekniko-juridiko berari jarraitzen dio hainbat eta hainbat artikulutan. 31. artikuluan, Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordeak eta Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak dituzten eskumenak aipatzen dira, *“autonomia-erkidegoek izan ditzaketen eskumenei kalterik egin gabe”*. 1.7 artikuluan eskumen bat ematen dio Kirol Kontseilu Gorenari, *“autonomia-erkidegoek izan ditzaketen eskumenei kalterik egin gabe”*. 2.4 artikuluan zehazten da

Dopinaren aurkako Estatuko Agentziari dagokiola eginkizun jakin bat, *“autonomia-erkidegoek izan ditzaketen eskumenei kalterik egin gabe...”*.

- b) Estatuko Abokatutzaren ustez ezinezkoa da Estatuak eta autonomia-erkidegoek, biek, eskumenak izatea arlo berean. Usteak, ordea, erdia ustel. Zoritxarrez, Espainian, kirolean eta gizarteko beste esparru batzuetan dagoen konstituzionaltasun-blokeak eskumenen nahigabeko bikoizketak edo konkurrentziak eragiten ditu. Hori dela eta, estatuko eta autonomia-erkidegoko araubide juridikoa josita daude Estatuko Abokatutzak aipatutakoaren antzeko salbuespenez.
- c) Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak berak, 2010eko maiatzaren 11ko txostenean, berretsi egiten du eskumenak bikoizteko aukerari buruzko aurreko gogoeta: *“Kirolaren eremuan bertan, Auzitegi Gorenaren 1990eko maiatzaren 29ko epaiak zehaztu egiten du eskumen-konkurrentzia; izan ere, kirolaren sustapena eta bultzada «eskumenen konkurrentzia-sistema baten eraginpean daude eta horri esker estatuko eta erkidegoetako botereek, biek, dute esku hartzeko ahalmena, baita helburu bera lortzeko ekimen paraleloak abiatzeko ere»”*.

12.6 artikulua (Estatuko Abokatutzak akats baten erruz 11. artikulua aipatzen du bere alegazioetan) zehazten du ikuskatze lanak egiten dituzten Agentziako langileak agintari publikotzat onartuko direla. Bada, artikulua horren harira Estatuko Abokatutzak interesgarritzat jo du proposamena, dopinaren aurkako borrokan diharduten erakundeetako langileen kalifikazioan aurrerapausoa dakarrelako, eta jarduera eraginkortasunez betetzeko bermeak areagotzen dituelako; izan ere, beren aktak egiazkotzat hartzea tresna klasiko bat da frogak eman behar izanaren alderantzikatzeari bermatzeko, eta, hala, egiazkotasunaren presuntzioak aktetan jasotako ekintzen aplikazioa lehenetsi behar dela ezarriko du. Alabaina, Estatuko Abokatutzaren iritziz, **39. artikulua**, diziplinazko prozedura garatzen duenak, ez du akten aipamen bakar bat ere egiten.

Diziplina-prozedura edo zigortzeko administrazio-prozedura ez dira martxan jartzen soilik dopin-kontrolatan emaitza positiboak izaten direnean. Aipatutako prozedura horien aurretik gerta daiteke norbaitek salaketaren bat jartzea edo ikuskatze-aktak egitea, kirolariren batek kontrola egiteari uko egin diolako edo eragozpenak jarri dituelako, adibidez. Ez da beharrezkoa 39. artikuluan ikuskatze-aktak aipatzea. Dena dela, akta horiek jasotzea ere ez da baztertu beharreko kontua, baldin eta argigarriak badira eta Estatuko Abokatutzak adierazitakoaren antzeko zalantzak saihesten badituzte.

Estatuko Abokatutzaren iritziz Legearen **13.1 artikulua**, dopin-kontrolak egiteko betebeharra duten kirolariei buruzkoa, interpretatzean, zenbait zailtasun sortzen dira. *“Izan ere, Eusko Legebiltzarrak zuhur jokatu zuen arren legearen aplikazio-eremu subjektiboan sartutako kirolariek Euskal Agentziaren kontrolak pasatzeko obligazioa mugatzeko orduan, aginduaren azken tartekian esaten denean horrek kontuan hartzen dituela estatuko eta nazioarteko xedapenetan aurreikusitako kontrolak pasatzeko kirolariek duten obligazioa, eskumenak gainjartzeko arazo bat sor daiteke”*.

Esan dugu aurrez ere: Estatuko Abokatutzaren arabera kirolariak erkidegoko lizentzia du edo estatukoa du, ezin ditu biak izan, baina Abokatutzaren teoria hori ez da baliozkoa. Izan ere, kirolariak bi lizentziak eduki ditzake eta, horrenbestez, loturazko harreman diferentea izan dezake autonomia-erkidego bateko federazioarekin eta Espainiako federazio batekin. Horrenbestez, aurreproiektuak ahalmena eman behar die euskal federazioei beren federatuei kontrolak egiteko, baita lehiaketatik kanpo ere, federatu horiek beste federazio bateko kide izan ala ez. Hau da, legearen aplikazio-eremu subjektiboan aintzat hartutako kirolariak obligazioa dute Dopinaren aurkako Euskal Agentziak agindutako dopin-kontrolak egiteko, eta betekizun horrek ez du kalterik eragiten kirolari horiek berek estatuko eta nazioarteko beste kontrol batzuk egiteko izan dezaketen obligazioan.

Estatuko Abokatutzaren arabera erlazio desberdina da nazioarteko eta estatuko arauen artekoa eta estatuko eta autonomia-erkidegoko arauen artekoa. Erlazio desberdin hori aintzat harturik, estatuko lizentzia duen kirolariak estatuko legedia bete behar du, baita Dopinaren aurkako Mundu Kodea ere. Aitzitik, euskal lizentzia duten kirolariak euskal legedia eta nazioartekoa baino ez dituzte bete behar, eta ez estatukoa. Alde horretatik, Estatuko Abokatutzaren irudiko **13.10 artikulua** berrikusi egin behar da. Organo horren iritziz, daitekeena da nazioarteko edo estatuko erakundeek kontrolak egiteko agintzea Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari, dagokion hitzarmena edo akordioa amaitu aurretik; baina euskal lizentziarik ez duten kirolariei zigor-txostenak tramitatzea Estatuaren edo dagokion nazioarteko erakundearen esku baino ez da egongo.

Beharrezkoa da zenbait zehaztapen egitea Estatuko Abokatutzaren ondorio horiei. Lehenik eta behin, aurrez esan dugun eran, euskal lizentzia duen kirolari batek estatukoa ere izan dezake, eta, beraz, gerta daiteke EAEko, estatuko eta nazioarteko araubidea ezartzea. Horrenbestez, ez du lekurik Estatuko Abokatutzaren 'edo euskal lizentzia edo estatukoa' planteamenduak. Bigarrenik, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak dopin-kontrola egin diezaieke atzerriko kirolariei, baita zigorra ezarri ere, nahiz eta nazioarteko federazioarekin horretarako akordiorik edo hitzarmenik ez izan.

IRU&KO IAU KLAKIT/A



GOBIERNO VASCO

Laginak jasotzeko ardura duten langileen prestakuntzari dagokionez, lege-aurreproiektua urria da, Estatuko Abokatutzaren arabera. Aurreproiektuaren **14.1 artikulua** xedatutakoaren arabera, laginak hartzeko ekipo batek egingo ditu kontrolak, betiere Dopinaren aurkako Euskal Agentziak zeregin horretarako gaitutako langileen ardurapean. Estatuko Abokatutzak onartu du gai hori dagokion araudi betearazlearen bidez gara daitekeela, baina gaineratu du gutxieneko erreferentzia tekniko bat komenigarria litzatekeela.

Prestakuntzen eta lanbideen prozesua oso dinamikoa da, azken aldian agerian geratu den moduan, eta, horrenbestez, egokitzen jo da erregelamendu-mailako arau baten bidez zehaztea zer baldintza behar diren kontrolak egin ahal izateko.

14.7 artikulua kirolarien eskubideen artean honako hau jasotzen du: *“kontrola ez egiteko eskubidea, artikulua honetan xedatutakoari eta lege honen 24.1.c artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe”*. 14.9 artikulua xedatzen

duenez, dopin-kontrolak egiteari uko egitea, *“behar bezala dokumentatu ondoren, behar adinako froga izango da kirolariaren jokabidea zehatzeko”*. Estatuko Abokatutzaren iritziz, *“ez zen beharrezkoa Eusko Legebiltzarrak aipatzea jarrera hori, dokumentatu ondoren, kirolariaren jokabidea zigortzeko froga nahikoa izango dela, aitzitik, nahikoa zen uko egin izana zigortzeko kontrolaren emaitza positiboari dagokion zigor bera ezartzea”*.

Alde horretatik, kontuan hartu beharrezkoa da aurreproiektuaren 14. artikulua oinarrian Lege Organikoaren 6. artikulua dagoela. Honela xedatzen du lege horrek: *“bidezko arrazoirik gabe kontrolari uko egitea, behin dokumentatu ondoren, froga nahikoa izango da kirolariaren jarrera zigortzeko”*.

Aurreproiektuaren **15. artikuluan** zehazten diren betebeharrak osagarriak ere aztertu ditu Estatuko Abokatutzak eta bereziki honako hau: kirol-klubek eta erregelamendu bidez zehazten diren gainerako kirol-erakundeek haien mende dauden kirolarietara agindutako sendabide terapeutikoen liburu bat eramateko obligazioa. Arau horrek kirolaria babesteko helburua dauka, argi eta garbi. Hala, kontrol batean emaitza positiboa bada, kirolaria bere erantzukizunetatik salbuetsita geratuko da, baldin eta positiboa eragin duen tratamendua kirolariaren klubeko edo entitateko medikuak agindu badu. Kirolariak aukera izango du agindutako tratamenduak liburuan idazteko baimenik ez emateko. Alabaina, Estatuko Abokatutzaren iritziz, taldeko kirolean, kirolariarentzat borondatezko berme-neurria dena obligazio bihurtzen da banakako kirolean.

Gure ustez, Estatuko Abokatutzak egiten duen interpretazioa eztabaidagarria da. Alde batetik, aurreproiektuaren testuak 7/2006 Lege Organikoaren 7.3 artikulua ildotatu jarraitzen dio hitzez hitz. Bestalde, 15.7 artikulua, logikoa denez, ez du besterik zehazten: banakako kirolean erregistroaren betebeharraren ardura den; hau da, kirolariena edo, horrela badagokio, kirol-federazioena. Itxura batean ez badirudi ere, 15.7 artikulua zehaztapen hori beharrezkoa da; izan ere, banakako kirolean parte hartzen duten kirolariak kirol-taldeetako kide ere badira askotan; atletismoan, esaterako. Atleta bat banakako proba batean lehia daiteke, maratoian adibidez eta, hala ere, talde jakin bateko kide izan.

Bestalde, banakako kirolarietara erregistroa eraman beharrezko helburu bera izan behar du: kirolaria babestea, eta, beraz, kirolari hori bere erantzukizunetatik salbuetsita geratuko da tratamendua behar den moduan erregistratu badu. Orobat, taldeko kirolarietara taldeari tratamendu bat erregistratzeko baimenik ez ematea erabaki dezaketen moduan, aurreproiektuak ez die galarazten banakako kirolarietara zenbait tratamendu liburuan erregistratu gabe uztea.

Erabilera terapeutikoko baimenari dagokienez (**15.9 artikuluan** jasota daude baimen horiek), Estatuko Abokatutzaren iritziz, haien aplikazio-eremua legeak ezartzen duena da. Organo horren irudiko, EAEn lehiatu ahal izateko kirolariak ez du zertan jakinarazi beste autonomia-erkidego batek, estatuak edo nazioarteko erakunde batek emandako erabilera terapeutikoko baimena duenik. Estatuko Abokatutzak ez du onartzen legea lurraldetasun-printzipioaren arabera ezartzea.

Aurreproiektuaren 15.9 artikulua arretaz irakurriz gero, ezin da ondorioztatu *“EAEn lehiatu ahal izateko”* erabilera terapeutikoko baimenaren berri eman

behar denik. 7/2006 Lege Organikoan jasotakoaren arabera, autonomia-erkidegoek aukera dute atzerriko kirolariei dopin-kontrolak egiteko, eta 15.9 artikulua, berriz, ez du besterik zehazten: egin diezaioketen kontrolean baimen jakin bat duela jakinarazteko betebeharra. Kontuan hartu behar da 7/2006 Lege Organikoak betebeharrak orokor hori ezartzen duela pasarte honetan: “[kirolari guztiek], dopin-kontrolak egiterakoan, adierazi egin behar dute zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren, nor diren horien erantzule eta tratamenduak zer hartzen duen bere baitan”. Eta 641/2009 Errege Dekretuaren 50. artikulua ere ildo berean arautzen du.

Bestalde, dopin-kontrolatan ohikoa izaten da kirolariek jakinaraztea erabilera terapeutikorako zer baimen eman dizkieten eta, beraz, aurreproiektuak jardun hori jaso besterik ez du egiten.

Azkenik, adierazi beharrekoa da Estatuko Abokatutzak auzitan jarri duen idazketa jatorrizko testua leuntzera datorrela. Hasierako testuan xedatutakoaren arabera, beste autonomia-erkidego bateko edo estatuko erakunderen batek erabilera terapeutikorako baimenen bat emanez gero, Euskadin lehiatzekotan zen kirolari bakoitzak baimenaren kopia bat igorri behar zion ezinbestean Dopinaren aurkako Euskal Agentziari. Inork ez zuen alegaziorik egin, baina zorrotz egitatzen jo zen Frantziako, Italiako edo AEBetako kirolari bati baimen horren berri estatukoa ez zen erakunde bati –alegia, EAEkoari– emateko obligazioa exijitzea. Estatuko Abokatutzak aztertu duen aurreproiektuan leundu egin da betebeharrak hori eta, hala, kirolariak dopin-kontrola egiterakoan baino ez du eman behar baimen horren berri, horrelakorik egingo baliote, betiere.

Horrenbestez, euskal lizentziarik gabe EAEn lehiatzen diren kirolari guztiek ez dute erabilera terapeutikorako baimena dutenik jakinarazi behar, EAEn lehiatzeko asmoa izan eta dopin-kontrola egin behar dutenek baino ez.

Kirol-bajaren arautzea (**16. artikulua**) oso egokitzen jo du Estatuko Abokatutzak. Nolanahi ere, ez du onartzen jo *“bajako aldiak irauten duen artean, dopin-kontrolak egiteko debekurik ez izatea”*. Ezin dira uztartu baja izatea eta kontrolak egitea. Kirol-bajak dirauen artean ere egin ahal izango zaizkie kontrolak kirolariei, era horretara iruzurrak saihesteko. Zergatik? Kontuan hartu behar da kirol-bajak daudenean, kirolariek edozein lesio edo gaixotasun tratatzeko egokitzen jotzen den edozein tratamendu hartu ahal izango dutela askatasun osoz, eragotzita izango dutelako era guztietako kirol-lehiaketetan parte hartzea. Baina behin kirol-baja eskuratzen dutenean kirolari horiek beren lesioen tratamenduarekin zerikusirik ez duten debekatutako substantziak har ditzakete edo debekatutako metodoak erabil ditzakete. Hau da, kirol-bajak ez du ekarri behar kontrolak gabeko aldirik. Azken batean, 7/2006 Lege Organikoaren 5.2 artikuluan erabilitako irizpide berari jarraitu zaio. Lizentziarik izan ez arren dopin-kontrolak saihestu nahian ibil daitezkeen kirolariei kontrolak egiteko aukera jasotzen du aipatutako artikulua horrek.

Era berean, 16. artikuluekin jarraituz, Estatuko Abokatutzak 7. puntua ere aztertu du. Puntu horrek zehaztutakoaren arabera, dopinaren aurkako batzordeek kirol-alten eta kirol-bajen arloan hartutako erabakien aurkako inpregnazioa aurkeztu ahal izango da Dopinaren aurkako Euskal Agentzian,

baina, aldiz, Agentziak berak emandako ebazpenen aurkako helegiteak aurkezteari buruzko aipamenik ez da ageri.

Horren gainean, aipatzekoa da Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordeak edota Dopinaren aurkako Estatuko Agentziak hartutako erabakien aurkako helegiteen araubiderik ez duela ezartzen 7/2006 Lege Organikoak ere. Hortaz, organo horiek hartutako erabakien aurkako helegiteen araubidea erregelamendu bidez zehaztuko da.

Bestalde, **17. artikulua**ren seigarren paragrafoan jasotzen da Dopinaren aurkako Euskal Agentziak aukera izango duela erabakitzeko osasun-arrazoiengatik kirolari baten lizentzia etetea zer kasutan den egokia. Estatuko Abokatutzak zalantzan jartzen du lizentzia eten daitekeen, eta, beraz, osasun-arrazoiengatik kirolari profesionalei beren jarduera egitea galarazi dakiekeen; izan ere, oinarri-oinarrizko eskubide bati eragiten zaio, lan egiteko eskubideari, alegia. Era berean, Estatuko Abokatutzaren iritziz, ezin da aipatu gabe utzi eskubide horiek mugatuko dituzten arauen erregelamenduzko izaera eta arau horien maila agian ez dela nahikoa izango.

Harrigarri gertatzen da Estatuko Abokatutzaren gogoeta, lege-aurreproiektuak 7/2006 Lege Organikoaren irizpideari jarraitzen baitio. Honela xedatzen du, hain zuzen, lege horren 8.2 artikulua:

“Era berean, Lege honen erregelamenduzko garapenerako arauak ezarritakoa kontuan hartuta, Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordeak zehaztuko du zer kasutan etengo zaion lizentzia kirolari bati osasun-arrazoiengatik.

Erregelamenduz zehaztuko dira kirolarien osasuna babesteko jarduerak izan behar dituzten baldintzak eta ezaugarriak”

19.5 artikuluari dagokionez, aurreproiektuak xedatzen du nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko asmoz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kirolariei lehiaketatik kanpoko kontrolak egiteko lehentasuna nazioarteko kirol-erakundeek izango dutela. Eta arau hori bera errepikatu egiten da hurrengo puntuan estatuko lehiaketa ofizialetarako. Estatuko Abokatutzak adierazi du aurreproiektuak ez duela koordinazio-sistematik ezartzen, eskumen hori betetze aldera nazioarteko edo estatuko agintariek lehentasuna dutela bermatzeko, eta, beraz, arazoak sor daitezkeela kontrolak aplikatzeko orduan.

Alde horretatik, aurreproiektuak, bai, aurreikusten du mekanismorik lehentasun hori bermatzeko: Dopinaren aurkako Euskal Agentziari aurrez jakinaraztea, hain zuzen. Aurreproiektuak berak, baita 7/2006 Lege Organikoak ere, aurreikusitako komunikazio-tresna da aipatutako agentzia. Bestalde, Lege Organiko horrek ere ez du koordinaziorako sistema orokorrik ezarri gai horietan.

21. artikulua diziplina-araubidearen aplikazio-eremua arautzen du eta araubide hori nori ezarriko zaion zehazten du. Honako hauei, hain zuzen: 14/1998 Legean exijitzen diren lizentziak direla-eta lotura berezia duten pertsonen, bai eta, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izanik, lege honen

peko kirol-jarduerak gauzatzen dituzten kirol-erakundeekin edo lege honen pean beren borondatez jartzen diren gainerako kirol-erakundeekin lotura bereziko harremanak dituzten pertsonen. Estatuko Abokatutzaren iritziz, azken lotura horrek zailtasunak sortzen ditu. Organo horrek berriro dio lurraldetasunak ezin duela lokarri izan eskumenak zehazteko eta, horrenbestez, estatuko lizentzia dutenek eta estatuko lehiaketa ofizialetan parte hartzen dutenek ezin dutela euskal araudian ezarritako zigor-araubidearen pean egon egoitza EAEn izateagatik.

Era berean, Estatuko Abokatutzaren iritziz, Euskal Autonomia Erkidegoko Dopinaren Legeari borondatez lotuz gero, estatuko agintariek ezingo lituzkete dagozkien kontrolak egin, ez eta positiboen kasuan zigorrak ezarri ere. Hori dela eta, organo horren arabera, borondatezko lotura hori dopinaren kontrol arloko eskumenak banatzeko sistemaren aurkakoa da, argi eta garbi.

Estatuko Abokatutzaren ohar horien harira, nabarmendu beharrekoa da, euskal lizentzia duten pertsonen gain, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatutako hainbat lehiaketa edo proba (profesionalen arteko pilota partidak, arraun-lehiaketak, atletismo-probak, etab.) ez direla estatuko lehiaketa ofizialak, ez daudela, beraz, 7/2006 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan, eta haietan ere beharrezkoa dela dopinaren aurkako araudia.

Aurreproiektuaren **22. artikulua** administrazio-zehapenen araubidearen aplikazio-eremua zehazten du eta araubide hori honakoei ezarriko zaiela xedatzen du: Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, edozein kirol-lehiaketatan gertatzen direla ere, berdin autonomia-erkidegoko lehiaketetan, estatukoetan edo nazioartekoetan, eta lotura bereziko harremanak izan ala ez. Estatuko Abokatutzaren iritziz ezin da lurraldetasun-irizpide hori horrela erabili, alegazioen idatzian aurrez aipatutako arrazoiak direla medio.

Urte asko dira Euskal Autonomia Erkidegoan lurraldetasunaren irizpidea ezartzen dela dopin-gaietan eta hori koherentea da administrazio-zehapeneko zuzenbidean izan den tradizioarekin. Arrazoi hori dela medio, esaterako, EAEn aspaldiko urteotan animaliekin egin diren kirol-lehiaketetako kontrolak euskal araudiaren arabera egin dira, lehiaketen maila ofiziala izan zein ez, eta edozein zela ere lehiaketaren izaera (erkidego mailakoa, estatukoa edo nazioartekoa), animalia jatorria, jabeen nazionalitatea, etab. Eusko Jaurlaritzaren 6/1997 Dekretua, urtarrilaren 22koa, *“Euskal Autonomia Erkidegoan kultura- eta kirol-ikuskizunetan parte hartzen duten animaliei”* dopin-kontrola egiteari buruzkoa da.

Halaber, Euskadiko Kirolaren 14/1998 Legearen 125. artikulua honakoa zehazten du XI. tituluko II. kapituluak (zigor-araubidea) osatzen duten xedapenei buruz: *“Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan gertatzen diren egintzei edo ez-egiteei ezarriko zaizkie kapitulu honetako xedapenak, Estatu edo nazioarte eremuko kirol-lehiaketetan gertatzen diren kontuan hartu gabe”*.

Ezin da ahaztu, orobat, kirolarekin loturik zigorrak ekar ditzaketen beste arlo batzuetan ere horrela gertatzen baita (tabakoaren eta alkoholaren publizitatea, jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak, arriskuen estaldura, etab.), Euskal Autonomia Erkidegoko xedapenak ezartzen direla EAEn egiten diren estatuko

eta nazioarteko lehiaketetan. Diziplinaren ikuspegitik, ez euskal federazioek ez Dopinaren aurkako Euskal Agentziak ez dute eskumenik, baina bai administrazio-zehapenaren ikuspegitik.

Aurreproiektuaren **33.4 artikulua** honakoa xedatzen du: baldin eta dopina dela-eta egindako arau-hausteagatik, batetik, administrazio-erantzukizunak eta, bestetik, diziplina-erantzukizunak eskatu ahal badira, kirol arloko diziplina-organismoek, beren kabuz edo alderdi interesdunaren eskariz, horren berri eman beharko diote administrazio-organo eskudunari, eta horrez gainera diziplina-prozedura tramitatu ahal izango da. Eta administrazio-organo eskudunak, halaber, dagokien diziplina-organoei jakinarazi beharko die. Estatuko Abokatutzaren arabera, idazketa anbigua eta iluna da, eta, ondorioz, zuzendu egin behar da. Estatuko Abokatutzaren iritziz, idazketa hori irakurri eta hauxe baino ezin da interpretatu: dopinaren arloan arau-haustea sor dezakeen jokabideren bat izanez gero, eta, aldi berean, jokabide horrek arau-hauste administratibo bat eragiten badu, kirol-agintariek administrazio-agintari eskudunei eman beharko diete horren berri.

Horrela da, Estatuko Abokatutzak eginiko interpretazioa erabat zuzena da, eta, beraz, ezin dugu jakin non dagoen arauaren ustezko iluntasuna.

Era berean, **33.7 artikulua** xedatzen du *non bis in idem* printzipioa ez urratzekotan, organismoen arteko jakinarazpenik ezingo dela abian jarri, hariak eta dopin-kontrolaren fasea amaitu arte eta jarduerak kasuan kasuko zehapen-organismoari helarazi arte. Estatuko Abokatutzaren iritziz aztoratzailea da aipamen hori; izan ere *“arrazoizkoa da pentsatzea kasu batzuetan agintari eskumendunei jakinarazteko premia berehalakoa izan daitekeela”*.

Itxura batean arrazoizkoa da Estatuko Abokatutzaren proposamena eta 7. atala kentzea gomendatu da.

Diziplinaren eremuko eskumenari dagokionez, Estatuko Abokatutzaren arabera ez da aipatzen nori dagokion animalien dopin-kasuak zigortzeko eskumena. **38. artikulua** xedatutakoari jarraiki, dopinaren alorreko prozedurak federazioen barruan bideratuko dira, auzialdi bakarrean, bakoitzaren estatutuetan izendatzen den dopin alorreko diziplina-organo eskudunaren aurrean.

Gure iritziz ezin zaio inolako kritikarik egin aurreproiektuari, 7/2006 Lege Organikoaren 27.2 artikuluan erabilitako irizpide bera hartu baita oinarri:

“Diziplina-espedienteak tramitatzea eta ebaztea, hasiera batean, Espainiako kirol-federazioei dagokie, haien estatutuetan eta erregelamenduetan xedatutako diziplina-organoei, hain zuzen”.

Era berean, 38. artikulua harira, Estatuko Abokatutzak dio *“instrukzio-ahalmena Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioei eta lotura bereziko harremana duten entitate horiei”* dagokiela. Baina, ikusi dugunez, arauak aurrez entitate horiek aipatzen ditu diziplina-ahalmena betetzeak eragindako erakunde gisa”. Hori dela eta, Estatuko Abokatutzaren iritziz beharrezkoa da azalpen edo argibideren bat.

Horren harira, komeni da ohartaraztea erakunde batek –kirol-federazio batek, esaterako– kirolari baten gain diziplina-ahalmena erabiltzeko aukera izatea,

baina, aldi berean, kirol-federazioek berek ere, selekzio autonomikoak izanik eta selekzio horiek lehiaketetan parte hartzen dutelarik, bai aurreproiektuan eta bai Lege Organikoan ezarritako betekizunak bete behar izatea. Hots, federazio batek zigorrak ezar ditzake dopinaren arloan, baina zigorrak jaso ere egin ditzake. Kirol-federazio batek lehiaketak antola ditzake, baina beste federazio batzuek antolatutako lehiaketetan ere har dezake parte bere kirolariekin.

Diziplina-prozedurari dagokionez, emaitza positiboa izan den kasuetan, Estatuko Abokatutzaren arabera, ez dirudi beharrezkoa denik zehapen-prozedurari hasiera eman aurretik informazio erreserbatuaren izapideak egitea. Aurreproiektuaren **39. artikuluan** jasotzen da izapide hori. Estatuko Abokatutzaren iritziz, 7/2006 Lege Organikoan informazio erreserbatu hori ez da aurreikusten kontrol batean emaitza positiboa izan den kasuetarako soilik, beste egoera batzuetarako ere bai; esate baterako, *“ziurtasuna polizia-jarduera baten ondorioz lortu den kasuetarako”*. Aurreproiektua arrazoitzeke memorian argudiatzen da diziplina-prozedura bat irekitzeak kalte ekonomiko eta moralak sor diezazkiokeela kirolariari, saihestu daitezkeen kalteak. Adibidez, ez du zentzurik diziplina-prozedura bat irekitzeak, baldin eta kirolariak erabilera terapeutikorako baimen baliozko bat badu eta laborategiko analisisien emaitzak bat badatoz emandako baimen horrekin.

Aurreproiektuaren **40. artikulua** xedatutakoari jarraituz, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak ahalmena izango du dopin-kontrol batean positibo emateko gai diren produktu eta substantziak gordetzea eta biltzea ahalbidetzen duten botika-ontzi, kirol-poltsa, aldagela-armairu, autobus eta gainerako guneak ikuskatzeko. Estatuko Abokatutzaren iritziz, aginduaren konstituzionaltasuna zalantzazkoa da, Konstituzioak berak babesten duelako zenbait espazioren pribatutasuna eta intimitate hori bortxatzeko jurisdikzio-organo baten ebazpena behar delako. Estatuko Abokatutzaren arabera, aurreproiektuaren asmoa laudagarria da baina beharbada neurriz gain jokatu du ardura horretan.

Estatuko Abokatutzak zalantzan jartzen badu aurreproiektuaren 40. artikulua, Lege Organikoaren 39. artikulua ere ezbaian jarri beharko luke; izan ere, artikulua horrek ahalmena ematen die *“autonomia-erkidegoetan eskumena duten organoei dopin-kontrol batean positibo emateko gai diren produktu eta substantziak gordetzea eta biltzea ahalbidetzen duten botika-ontzi eta gainerako guneak ikuskatzeko”*. Bestalde, ezin da ahaztu, aurreproiektuan jasotakoaren arabera, Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren ikuskatze-ahalmenak ez duela kalterik eragiten Estatuko organo judizialen eskumenetan. Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legeak, lege horren 8. artikuluko seigarren puntuak zehazki, xedatutakoari jarraiki, administrazioarekiko auzien epaitegiek ahalmena izango dute etxebizitzetan eta titularraren adostasuna beharrezko den gainerako lekuetan sartzeko baimena emateko, betiere hori egitea badagokio administrazio publikoaren egintzen nahitaezko exekuziorako.

Aurreproiektuaren **48. artikuluan** adierazten da dopin-kontroletako datuak eta fitxategiak utzi ahalko zaizkiela, datuen babeserako indarrean dagoen legedian xedatzen den moduan, kirolaren alorrean dopinaren aurkako borrokan parte hartzen duten erakunde publikoei eta pribatuei. Estatuko Abokatutzak dio zuzena dela proiektuan adierazitakoa, baina iradoki du egokia litzatekeela *“kirolariak lizentzia lortu behar duenean, datuak eman baino lehen eguneraketa-sistema bat ezartzea”*.

Horren harira, aintzat hartu beharrekoa da kirol-erakunde nagusi gehienetan aurrez baimena eskatzen zaiela lizentzia sinatzen duten kirolariei. Nolanahi dela ere, dopinaren aurkako borrokan parte hartzen duten erakunde publikoei eta pribatuei datuak uzteko erabakia soilik kirolariaren borondate eta baimenaren esku uzten duen sistema juridikoa ez da egokia. Hori dela eta, aurreproiektuaren 48. artikulua 7/2006 Lege Organikoaren 36. artikulua hartzen du eredu. Horrez gain, honela xedatzen du 15/1999 Lege Organikoaren 7.3 artikulua: *“Arrazari, osasunari eta sexu-bizitzari buruzko izaera pertsonaleko datuak bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arrazoiak direla bide, legeren batek halaxe xedatzen duenean edo ukituak esanbidez hori onartzen duenean”*. Hau da, bi aukera leudeke: kirolariak berariaz baimena ematea datuak uzteko edo lege batek horrela xedatzea. Hori dela eta, aurreproiektuan ere bi aukerak jasotzen dira, kirolariek eman dezaketen balizko ezezkoa indargabetzeko.

Aurreproiektuaren **50.3 artikulua** ere aztertu du Estatuko Abokatutzaren txostenak. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan, dopin-kontrolak egin aurretik, Dopinaren aurkako Euskal Agentziari kontrol horien berri eman beharra arautzen du artikulua horrek. Estatuko Abokatutzaren irudiko alferrekoa da arau hori; izan ere, Estatuak duen eskarmentuaren arabera, *“nazioarteko erakundeek aurrez jakinarazpenik ez egiteko ohitura daukate”*.

Aurrez ere esan dugu aurreproiektuak ahalegina egin behar duela jardunbideak ez bikoizteko eta elkarri ez gainezartzeko. Eta horretarako bide egokia da erakundeen artean jardun horien berri ematea, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen irizpideei jarraituz. Nazioarteko erakundeek betebeharrak hori betetzen ez badute ere, horrek ez du eragin behar xedapen hori aurreproiektutik kentzea.

51. artikuluari buruz, Estatuko Abokatutzak berriro auzitan jarri du Euskadin egoitza izatea irizpide nahikoa izan ote daitekeen Dopinaren aurkako Euskal Agentziak lehiaketatik kanpo kontrolak agintzeko ahalmena izan dezan. Abokatutzaren iritziz, argi eta garbi adierazi behar da kontrolak agintzeko eskumena kirolariari lizentzia eman dion estatuko edo nazioarteko erakundeari dagokiola.

Gai horren harira, aurrez ere adierazi dugu ez gatzela bat Estatuko Abokatutzaren iritziarekin, eta arestian emaniko azalpenak hor dira Kirol Zuzendaritza honen ustea arrazoitzeko.

Azkenik, **52.1 artikulua**ren harira (nazioarteko erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaketatik kanpo dopin-kontrolak egin aurretik, Dopinaren aurkako Euskal Agentziari horren berri jakinarazi beharra ezartzen du arau horrek), Estatuko Abokatutzaren iritziz artikulua horrek ekar dezake nazioarteko agintariek Estatuko Agentziari ez ezer jakinaraztea eta Euskal Agentziari soilik jakinaraztea. Estatuko Abokatutzaren ondorio hori eztabaidagarria da, hainbat arrazoirengatik. Batetik, begien bistakoa da erakunde bati jakinarazita nazioarteko erakundeak ez duela bere betekizuna guztiz bete eta beste organismoari ere eman behar diola horren berri. Gainera, 7/2006 Lege Organikoari eta aurreproiektuari jarraituz, bi agentziek obligazioa dute horrelako informazioak elkarri bidaltzeko. Eta, azkenik, Lege Organikoaren 32.1 artikuluan xedatutakoaren ildoari jarraitzen dio testuak, baina horrek ez du

oztopo izan behar Dopinaren aurkako Euskal Agentziari aurretiazko jakinarazpen hori egiteko.

VII.- JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIETAKO IRAKASLE ETA LIZENTZIATUEN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ELKARGO OFIZIALAREN ALEGAZIOAK.

Elkargo horrek 6 orrialdeko idatzi bat aurkeztu zuen 2010eko abenduaren 21ean, erakundeko presidenteak sinatua, honako alegazio hauekin:

Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren osaerari buruzko **11.7.d artikulua** beste era batera idazteko proposatu du Elkargo Ofizialak, *“ez dagoelako gorputz-hezkuntzako eta kiroleko medikuntzako espezializaziorik”*. Elkargo horren iritziz, *“ez da zuzena gorputz-hezkuntzako eta kiroleko medikuntzaz hitz egitea. Ez dago kiroleko medikuntzako espezializaziorik, eta are gutxiago gorputz-hezkuntzako medikuntzako espezializaziorik. Gorputz-hezkuntzak ez du zerikusirik kirolaren arloan berariaz aritzen den medikuntzarekin”*. Hori dela eta, Elkargoak proposatu du *“medikuntzan aditua den pertsona bat”* izatea agentziako kide.

Alabaina, alegazio hori baztertu egin behar da. Txosten hau emateko egunean espezializazio hori existitzen da ofizialki eta izendapen horrekin. Espezializazio horrek onarpen ofiziala du 1984. urteaz geroztik. Hain zuzen, espezializazio-tituluak arautzeko urtarilaren 11ko 127/1984 Errege Dekretuak eranskinaren 3. atalean katalogatzen du, ospitalez kanpoko espezializazio moduan eta aurrez aipatutako izendapenarekin.

Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen laugarren xedapen iragankorrek ezarritakoari jarraituz, Gobernuak, Legea indarrean sartu eta bost urteko epean, moldatu, bertan behar utzi edo egokitu egin behar zuen prestakuntza-sistema 20. artikuluan xedatutakora, prestakuntza egoitza-sistemaren bidez egiten ez den osasun arloko espezializazioetan. Laugarren xedapen iragankor hori garatzen zuen Errege Dekretuaren proiektuak bigarren xedapen indargabetzaile bat ere jasotzen zuen ikasle-erregimeneko zenbat espezializazio kentzeko. Hainbat gizarte-eragileren presioen ondoren, espezializazio hori ez kentzea erabaki zuen Gobernuak, eta otsailaren 8ko 183/2008 Errege Dekretua onartu zuen. Hauxe zehazten zen dekretu horren xedapen iragankorrean: *“...Gobernuak erabakia hartu arte, ikasle-erregimena izango da espezializazio mediko hauetako prestakuntza-sistema: Hidrologia Medikoa, Gorputz-hezkuntzako eta kiroleko medikuntza...”*.

Horrenbestez, Dopinaren aurkako Lege-aurreproiektuan aipatutako espezializazio hori existitzen da eta izendapen horrekin, gainera.

Alabaina, txosten hau lantzerakoan, beste Errege Dekretu baten proiektua idatzi da eta hor arautu dira, besteak beste, honakoak: osasun zientzietako zenbait espezializazioen prestakuntzan ardaztasun-irizpideak aintzat hartzea, espezializazio tronkala berriro egitea eta trebakuntza espezifikoko arloak. Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun Ministerioak 2011ko urtarilaren 24an sinatutako proiektua da aipatutakoa. Hauxe xedatzen du proiektuaren lehen xedapen indargabetzaileak:

“Azaroaren 21eko 44/2003 Legearen laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoari jarraituz (prestakuntza egoitza-sistemaren bidez jasotzen ez duten plazei buruzkoa da xedapen hori), errege dekretu hau indarrean sartzen den egunetik bertan behera geratuko dira ikasle-erregimeneko espezialitate mediko hauek: Hidrologia Medikoa; Gorputz-hezkuntzako eta kiroleko medikuntza; eta Lege eta Auzitegi Medikuntza, bai eta Farmazia Industrial eta Galenikoaren farmazia-espezialitatea ere”.

Beharbada, Gobernuak espezialitate hori kentzeko bigarren ahalegin hori aintzat harturik, komenigarria litzateke aurreproiektuko erreferentziaren orde bestea hau idaztea: *“kirol-arloko medikuntzan aditua den pertsona”*.

Orobat, **11.7.d artikulua** beste modu batera idaztea proposatu du Elkargo Ofizialak, erakunde horren arabera *“ez dagoelako kiroleko zuzenbidea deritzon espezializaziorik”*. Elkargoaren esanetan, *“kirol-arloan lan egiten duten zuzenbideko adituak daude”*.

Alegazio horrekin ere ez gatoz bat. Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 37. artikulua arabera, unibertsitate-ikasketak hiru ziklotan egituratzen dira: gradua, masterra eta doktoregoa. Ikasketa horiek gaitzen dituenak dagokion titulu ofiziala eskuratuko du.

Azken bi hamarkadetan, unibertsitateek Kirol Zuzenbidearen esparruko espezializazio-tituluen eskaintza dezentekoa dute. Horren adibide da Leridako Unibertsitateko Kirol Zuzenbideko Master Ofiziala: Unibertsitate-erakunde eskudunek titulu ofizialtzat onartzen dute master hori irakaskuntzako eta laneko ondorio guztietarako, Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Eremura (EEE) egokitutako graduondoko titulu ofizialen antolaketa berriaren barruan eta Boloniako ereduari jarraituz; eta, orobat, botere publikoek ikasketa-balio ofiziala ematen diote Espainia osorako.

Puntu horretan gehiago sakontze aldera, erreparatu beharrekoa da aurreproiektuak ez duela *“espezialitate”* hitza erabiltzen, *“aditu”* terminoa baizik, Hizkuntzaren Errege Akademiaren definizioari jarraituz, eskarmentua, esperientzia duen pertsona adierazteko.

11.7.d artikuluari buruz, Administrazio publikoari denon interesak lortzen laguntzea da elkargo profesionalen berezko eginkizuna, hala uste du Elkargo Ofizialak, eta horretarako, administrazio-organoetan parte hartu behar dute elkargo horiek. Alde horretatik, interesdun administrazioek edo kirol-erakundeek lurralde historikoen eta kirol-federazioen ordezkaritza proposatzen duten moduan, *“egokia da interesa duten profesionalen elkargoek proposatzea esparru bakoitzean izendatuko diren adituak”*.

Ez dago eragozpenik Elkargo Ofizialaren ekarpen hori onartzeko.

Aurreproiektuaren **12. artikulua** harira, Dopinaren aurkako Euskal Agentziari beste eginkizun bat ematea proposatu du Elkargo Ofizialak: *“prebentzio-neurriak hartzea eta bultzatzea”*.

Horren harira, ez da beharrezkotzat jo testu hori gehitzea, lehen atalean hainbat prebentzio-jardura aipatzen baitira, eta, gainera, i) hizkian, agentziaren eginkizunen artean, honakoa ezartzen da: *“prebentzio-neurriak sustatzea eta bultzatzea”*.

Aurreproiektuaren 42. artikulua ere beste modu batera idaztea proposatu du Elkargo Ofizialak, eta hainbat arrazoi eman ditu horretarako. Alde batetik, aurreproiektuaren testuak ez dio irizpide berari jarraitzen prestakuntzako eta informazioko programak aipatzen dituelarik, bereziki termino horien ordenari dagokionean. Iradokizun bera egiten du **2.f), 3.f) eta 4.f) artikuluen** harira. Iradokizun hori aintzat hartu behar da eta, hala, *“prestakuntza eta informazioa”* beti modu berean aipatuko dira testu osoan.

Bestalde, aurreikusitako prestakuntza- eta informazio-programak ikastetxeei ere bideratzea iradoki du Elkargo Ofizialak, horietan egiten baita batez ere eskola-kirola. Horrenbestez, bigarren atalean ikastetxeak jasotzea iradoki du.

Alabaina, aurreproiektuak aintzat hartzen ditu eskola-kirolaren eta hezkuntzaren eremuak; izan ere, 1. ataleko a) hizkiak xedatzen du programa horiek hezitzaileengana eta eskola-kirolaren eremura bideratuko direla lehentasunez. Era berean, 5. paragrafoak xedatutakoaren arabera, Foru-aldundiek Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarekin elkarlanean jardungo dute, haien kirol-arloko eskumenei lotuta dauden prestakuntzako eta informazioko programetan.

Bistan da 1. paragrafoko a) hizkiaren edukia eta 2. paragrafokoa errepikatu egiten direla, eta txosten juridiko honek hori saihestea gomendatu du.

Idazketa hutsari buruzko zenbait iradokizunez gain, Elkargoak proposatu du prestakuntzako eta informazioko programetan *“adingabeko kirolarien babesa”* aintzat hartzea eta jorratzea. Nabarmentzekoa da, ordea, 42. artikuluko prebentzio-neurrien xedea kirolari guztien osasuna babestea dela, haien kirol-eta lan-egoera edo adina edozein dela ere.

Gimnasioei buruz 3. paragrafoan egiten den aipamena kentzea ere proposatu du Elkargoak hainbat arrazoiengatik. Lehenik eta behin, kirol-zentroak artikuluen 2. paragrafoan aipatzen direlako jada. Bigarrenik, dopinaren inguruko arazoak *“kirol-zentroekin baino lotuago daudelako errendimendu fisiko edo muskulazioko proba herrikoiekin edota lehiaketa ez ofizialekin”*.

Elkargo Ofizialaren iradokizun hori kontuan hartzekoa da; izan ere, horrela da, 42. artikuluen 2. paragrafoan jada aipatzen dira kirol-zentroak, eta gimnasioak kirol-zentro mota bat dira. Beharbada zehaztu beharrekoa da 3. paragrafoan *“gimnasioen eta gainerako kirol-zentroen erabiltzaileak”* aipatzen direla. Elkargo Ofizialak emandako bigarren arrazoiarekin, ordea, ez gatoz bat; izan ere dopinaren inguruko arazoak hein batean loturik daude gimnasioen munduekin eta horren seinale da azken hamarkadan egin diren polizia-operazio gehienetan gimnasioak izan direla abiaburu edo jomuga, eta horietan nahasitako bakarrak ez dira izan kulturismo- eta muskulazio-probetan parte hartzen zuten kirolariak.

VIII.- DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN ALEGAZIOAK.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak 49 orrialdeko txostena aurkeztu zuen 2011ko otsailaren 28an, eta aurreproiektuari buruzko hainbat ohar eta gogoeta mamitu zituen bertan.

Datu pertsonalen babesaren esparru juridiko orokorrari buruzko azalpenak eman ondoren, aurreproiektuaren artikulua aztertu ditu Bulegoak.

Aurreproiektuaren **1.1 artikulua** harira, legearen ondorioetarako dopatzea zer den zehazten du artikulua horrek, eta zehazten du kirol-espirtuaren aurkako jokabidea dela, baina ez du adierazten, ordea, dopatzea osasunerako arriskutsua dela.

Ohar horri buruz beharrezkoak dira zenbait azalpen:

1.- Legearen 2. artikulua argi adierazten du *“dopinak kalte larria eragin diezaiokeela kirolarien osasunari”*.

2.» Aurreproiektuaren hasiera-hasierako zirriborroetako batean, dopatzea zer den zehazterakoan, dopatzea pertsonen osasunerako arriskutsua zela adierazten zen lehen artikuluan. Azkenik, zenbait ekarpen aintzat hartu ondoren, erabaki zen dopatzea kasurik gehienetan pertsonen osasunerako arriskutsua izan arren, arrisku hori ez zela benetakoa kasu guztietan. Zenbaitetan, kirolari batzuek positibo eman dezakete dopin-kontrolari, gaixorik egonez gero guztiz gomendagarriak liratekeen substantziak hartuta. Horrelakoetan, baldin eta substantzia horiek ez badira erabilera terapeutikorako hartzen, kirol-lehiaketetan parte-hartze hutsarekin dopina bihurtuko litzateke substantzia horien kontsumoa. Gainerako herritarrek, berriz, medikuaren aginduz arazorik gabe har ditzakete sendagai horiek. Gauzak horrela, aurreproiektuak dopatzearen bereizgarri funtsezkoa –kirol-iruzurra– lehenetsi zuen, eta hobetsi zuen legearen artikuluetan azpimarratzea dopatzeak kirolarien osasunerako eragin dezakeen arrisku larria.

3.- 7/2006 Lege Organikoak ere dopatzea zer den definitzen du lehen artikuluan, baina osasunerako sortzen duen arriskurik ez du aipatzen artikulua horrek ere. Eta Lege Organikoak ez aipatu arren, garbi dago dopatzeak kalte larria eragin dezakeela kirolarien osasunean.

Legearen eremuari buruzko **1. artikulua 5. eta 6. paragrafoak** direla eta, Bulegoak dio termino ez oso argien bidez zehazten dutela eremu subjektibo hori; izan ere, *“itxura batean, legearen esparru subjektiboaren baitan dago edozein kirol egiten duen pertsona oro, edozein adinetakoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dena, nahiz eta aldi baterako baino ez izan, federatua izan edo ez izan, edo lehiaketetan aritu edo ez. Hala ere, legearen 1. artikulutik atera dugun ondorio hori ez dago garbi gainerako lege-testuan”*. Kirolariek lehiaketan eta lehiaketatik kanpo dopin-kontrolak egin behar dituzten heinean eta beste hainbat betebeharrak dituzten neurrian, Bulegoaren iritzia da Euskadin bizi den edozein umek, kirolen bat egiten duelarik –kalean futbolekin edo atletismoan aritzen delarik, esaterako– dopin-kontrolak egin behar izateak edo haien datu pertsonalak tratatzeak ez lukeela gaitzizko ezinbesteko proportzionaltasun-alderdia. Hori dela eta, Bulegoak iradoki du *“gehiago zehaztea legearen esparrua, eta, hala, aurreproiektua idatzi zutenek nahi ez litzaketen interpretazioak eragozte”*.

Gomendio horren harira, beste erakunde batzuek eginiko alegazio eta iradokizunei loturik txosten juridiko honetan bertan jasotako azalpenak berritu ditzakegu.

Bulegoaren iritziz, aurreproiektuaren **8.h) artikulua** ez dator bat Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoarekin. Kirolarien eskubideak arautzen ditu artikulua horrek eta, besteak beste, dopinaren kontrako prozesua eta preskripzio-epeak amaitu ostean, hartu diren laginak desegin daitezela eskatzeko eskubidea onartzen die kirolariei. Eta aipatutako arauak gehitzen du ezin izango dela eskubide hori erabili kontrola egitea agindu duen erakundea laginen titular bihurtu bada eta, edonola ere, lagin horiek dopina kontrolatzeko edo ikerketak egiteko erabili beharko direla.

Arau horrek, Bulegoaren arabera, pertsonen datu pertsonalak babesteko duten oinarritzko eskubidearen muinarekin egiten du talka; izan ere, datu horiek jarraitzen dute bereak izaten, bera da datu horien titularra, edozeinek tratatzen dituela ere eta tratamendu hori lege-mailako arau batean xedatutako eginkizun bidezko baterako bada ere.

Aurreproiektuaren asmoa da jokoan dauden eskubide eta interesak uztartzea

eta proportzionaltasunaren kanona errespetatzea. Aurreproiektuak, beste lege-testu batzuek ez bezala, argi adierazten du laginen titulartasuna kirolariak duela, baina eskubide hori aitorturik, beste aukera hau ere aurreikusten du: behin kirolariak laginak suntsitzeari uko egin ondoren, lagin horiek ikerketarako erabili ahal izatea, dopinaren mapa esaten zaiona egiteko, adibidez.

Kontuan hartzekoa da proposamen horrek aukera ematen duela lagin fisiologikoak eskuratzeko, baina ez horiei loturiko datu pertsonalak, eta, horren ondorioz, ezin da uztartu lagin fisiologikoen titulartasuna eta datu pertsonalen titulartasuna. Bereizi egiten dira lagin fisiologikoak eta horiei loturiko datuak.

Era berean, **8. artikuluan** xedatutako kirolarien eskubideen harira, Bulegoak erantsi du laginak hartzerakoan, nahiz eta kirolarien osasuna prebenitzeko beharrezko neurria izan, kirolarien gorputz-intimitatea behar den moduan errespetatuko dela.

Kirol Zuzendaritza honen iritziz, ez da beharrezkoa 8. artikuluan horri buruzko araurik gehitzea; izan ere, aurreproiektuaren 18.3 artikulua honela xedatzen du berariaz: kontrolak egitean pertsonen funtsezko eskubideak eta datu pertsonalak erabat errespetatzen direla zainduko da, eta, era berean, praktikariek onenak errespetatuz jardungo da.

Orobat, **8. artikulua** horri loturik, Bulegoak iradoki du berariaz aipatu beharko liratekeela datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak.

Iradokizun horri buruz, Kirol Zuzendaritzak ez du beharrezkotzat jo aipamen hori egitea, kirolariek, herritar diren aldetik, Lege Organikoan jasotako eskubide guztiak dituztelako. Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak araututa daude Lege Organikoan eta

aurreproiektuak behin eta berriro aipatzen du dopinaren araubidea lege horren xedapenetara egokituko dela. Esate baterako, 15.13 artikulua xedatutakoaren arabera, aurreproiektuaren babesean eginiko datu pertsonalen tratamendua eta lagatzea datu pertsonalak babestearen arloan indarreko legedian ezarrita dauden xedapenei jarraituz egingo dira. Eta 18.3 artikuluan, berriz, adierazten da kontrolak egitean datu pertsonalen babesa erabat errespetatuz egingo direla kontrol horiek.

13.6 artikulua honela xedatzen du: dopin-kontrolak egin eta ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen, *“kirolariek, taldeek, entrenatzaileek, zuzendariek eta kirolariak inguruan dituen gainerako pertsonak”* kirolariak non egon ohi diren jakiteko datuak eman behar dituzte, dopin-kontrolak egin ahal izateko. Bulegoaren iritziz, *“kirolariak inguruan dituen gainerako pertsonak”* aipatzen direlarik, ez da ondo zehazten nork duen datuak emateko betekizuna, eta esamolde hori, gainera, ez da ageri 7/2006 Lege Organikoan. Esamolde horren ordez beste hau jartzea iradoki du Bulegoak: *“kirolariak berak izendatutako pertsonak”*.

Bulegoaren ohar horren harira, adierazi beharrekoa da aurreproiektuak ondo zehazten duela nork eman behar dituen kirolaria aurkitzeko datuak, *“kirolariak inguruan dituen pertsonak”* aipamen horretan izan ezik. Aurreproiektuaren asmoa da Legearen erregelamendu bidezko garapenean zehaztea norkosatzen duen datuak ematera behartuta dauden kirolariaren inguruko nukleo garrantzitsu hori. Izan ere, kontuan izan behar da kirolariaren inguruan, mediku eta entrenatzaileez gain, beste hainbat pertsona ere izaten direla sarri; kirolariaren gain eragin zuzena duten pertsonak. Esate baterako, prestatzaile fisikoa, ezintasunen bat duten goi-mailako kirolarien laguntzaileak, etab.

7/2006 Lege Organikoan ere jasotzen da datuak emateko betekizun bera, eta arestian aipatutako arrazoi horri jarraituz gero, lege horri ere egin dakioket kritika; izan ere, betebeharrak hori nork duten aipatzean *“erregelamendu bidez ezarritako eran”* erreferentzia baino ez du egiten.

Aurreproiektuaren **16.8 artikuluari** buruz, Bulegoak dio bajaran egonagatik ere kirolariak egin egin behar dituela ustekabeko kontrolak eta galdetzen du beharrezkoa ote den bajaran hori Dopinaren aurkako Euskal Agentzian erregistratzea edo nahikoa ote den kirolariak berak bajaran dagoela jakinaraztea kontrola egiteko deitzen diotenean.

Gure iritziz, erabilera terapeutikoko baimenen gaian hartutako irizpide berari jarraitu behar zaio. Erabilera terapeutikorako baimenak erregistratu egin behar dira eta ez dago pisuzko arrazoirik kirol-bajen arloan beste irizpide bat hartzeko; izan ere, bajaran horiek eragin handia dute dopin-kontrolen sisteman.

Nolanahi ere, ohar hau sar daiteke 16.8 artikuluen azken esaldian:

‘Dagokion diziplina- edo zehapen-espedienterik ere ez da irekiko baldin eta kirolariak, behar den moduan erregistratutako kirol-baja izanik, ez badu dopin-kontrola egiten’.

Aurreproiektuaren **17. artikuluan** aurreikusitako osasun-kontrolen harira, Bulegoaren iritzia da kontrol horietatik sortzen diren datu pertsonalen tratamenduari buruzko alderdiak ez daudela batere ondo zehaztuta.

Alabaina, legea erregelamendu bidez garatuko da gero, eta, beraz, erregelamenduz zehaztuko dira kirolarien osasuna babesteko jarduerak zer baldintza eta ezaugarri izan behar dituzten. Hala, 7/2006 Lege Organikoaren irizpidea (8.2 artikulua) hartu da oinarri.

Aurreproiektuaren **23.6 artikuluari** buruz ere egin du oharra Bulegoak. Honela xedatzen du aipatutako artikulua: kirolariek, haien entrenatzaileek, medikuek, zuzendaritzako kideek eta abarrek erantzukizuna izango dute organo eskudunei kirolariaren gaixotasunei buruzko informazioa, tratamenduei buruzkoa emateko betebeharra arautzen duten xedapenak ez betetzeagatik, *“baldin eta kirolariak datu horiek erabiltzeko baimena eman badu”*. Bada, Bulegoak ez du oso garbi zertara datorren baimen hori.

Bulegoaren iritziz, itxura batean xedapen horrek indarrean jartzen du interesatuaren adostasuna, baina ondoren adostasun horren berezko ezaugarriak indargabetu egiten ditu; izan ere, kirolariak bere borondatez eta askatasunez adierazi beharko luke adostasun hori, eta ezin da aske jokatu duenik esan, onespena eman ezean atzetik zigorra jasotzen badu.

Horren harira, lehenik eta behin zehaztu egin behar da askatasunez emandako adostasunaren kontzeptua. Esaterako, kirolariek uko egin diezaiokeite dopin-kontrolari, beren gorputz-intimitatea inbaditzen duelako kontrolak, eta, hala, ezingo zaizkio laginak derrigorrez atera. Baina kirolariak uko egiten badio kontrola egiteari, zigorra jaso dezake. Horixe bera gertatzen da onespenearekin. Kirolariak erabaki dezake onespena ez ematea eta, areago, eskatutako datuak emateari ere uko egin diezaioke, baina horrelakorik gertatuz gero, legeari ezarritakoa, zigorrak barne, bete beharko luke kirolariak.

Bestalde, eta aurrekoarekin loturik, 7/2006 Lege Organikoaren irizpide berari jarraitzen dio aurreproiektuak. Lege horrek ere arau-haustetzat jotzen du tratamendu terapeutikoei eta erabilera terapeutikorako baimenei buruzko informazioari dagozkion betebeharrak ez betetzea.

Aurreproiektuaren **24.1.e artikulua** arau-hauste oso larritzat hartzen du tratamendu terapeutikoei eta erabilera terapeutikorako baimenei buruzko informazioari dagozkion betebeharrak ez betetzea. Hain zuzen, arau horretan 23.4 artikuluari erreferentzia egiten zaiola ohartarazi du Bulegoak, 23.5 artikuluari egin beharrean. Zuzena da Bulegoaren ohar hori.

Aurreproiektuaren 15. artikulua honakoa xedatzen du: erregelamendu bidez zehaztuko diren klubek eta gainontzeko kirol-erakundeek Dopinaren aurkako Euskal Agentzian behar bezala erregistratutako liburu bat izan eta bete beharko dute nahitaez. Liburu horren osotasuna bermatuko da, eta bertan kirolariei beren zuzendaritzapean agindu dizkieten tratamendu terapeutikoak jaso beharko dituzte, baldin eta kirolariek inskripzio hori egitea onartzen badute. Alabaina, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren arabera, aurreproiektuaren **24. Artikuluan** zigorra aurreikusten da tratamendu terapeutikoak jakinarazteko onespena ematen ez bada, baina ez da inolako zigorrak zehazten *“tratamendu*

terapeutiko horiek inskribatzeko baimena ez bada ematen edo uko egiten bazaio". Bulegoaren iradokizun hori ere aintzat hartu beharrekoa da.

Aurreproiektuaren **33.5 artikulua** xedatzen du diziplina- eta zigor-espedienteen irekitzea, baita horien amaiera ekarriko duen ebazpena ere, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailari jakinaraziko zaizkiola. Datuak Babesteko Euskal Bulegoak jakinarazi du ez duela ondo ulertu testuan datuak uzteko adierazitako helburua.

Ohar horren harira, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Araubide Juridikoko Zuzendaritzak iradokizun bat igorri zuen egungo aurreproiektua prestatzeko fasean, espediente eta zigorren komunikaziorako araubide bat jaso zedin, Herriarren Segurtasunaren Babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoa ezartzeak sor ditzakeen ondorioetarako. Herrizaingo Sailaren iritziz, komunikazio-araubide horrek proportzionaltasunaren printzipioa babesteko aukera ekarriko zuen aipatutako Lege Organikoa ezartzean.

Aurreproiektuaren **43.2 artikulua** kiroleko dopinari buruzko informazio-sistemaren helburuak zehazten ditu, baina Bulegoaren iritziz helburu horiek ez daude batere ondo zehaztuta.

Alegazio horri buruz, adierazi beharrekoa da Lege Organikoaren (45.1 artikulua) irizpide berari jarraitzen diola aurreproiektuak.

Orobat, **43.8 artikulua** ere ondo zehaztu gabe dagoela dio Bulegoak, esaldi hau dela eta: *"kasuan kasuko entitate publikoek eta pribatuek behar adina datu emango dituzte informazio-sistema horri eusteko eta sistema garatzeko"*.

Gai horretan ere Lege Organikoan (45.5 artikuluan) erabilitako irizpide berari jarraitu dio aurreproiektuak.

Aurreproiektuaren **46. artikulua** Kirolariaren Osasun Txartela arautzen du, baina Bulegoaren arabera, *"ez du zehazten nork izango duen osasun-txartel hori"*.

46. artikulua argi eta garbi zehazten du zein kirolariri egingo zaien txartela (federazio- edo unibertsitate-lizentzia duten kirolariei), baina aukera ematen du erregelamendu bidez beste kirolari-kolektibo batzuei ere emateko.

Era berean, Bulegoak dio 46. artikulua ez duela argitzen txartel hori kirolarientzat derrigorrezkoa den ala ez.

Hasiera batean, ez 7/2006 Lege Organikoak ez aurreproiektuak ez dute txartel hori derrigorrezkotzat jo kirolarientzat.

Aurreproiektuaren **46.4 artikuluan** xedatutakoaren arabera, osasun-txartelak bere baitan dituen datuak, hasiera batean, txartelaren titular den kirolariak baino ezin ditzake erabili, eta, haren baimena edukiz gero, artatu duten osasun arloko langileek, kasu hauetan izan ezik: beharrezko osasun-arreta jaso ahal izateko, osasun alorreko legediak kirolariaren baimenik gabe datu horiek eskuratzeko aukera ematen duenean. Aurrekoa gorabehera, legearen 5. artikulua xedatzen du baimena emateari uko eginez gero, beste zernahi informazioko betebeharrak ez betetzeari dagokion zehapen-tratamendu

bera ekarriko duela jokabide horrek. Bulegoaren iritziz, baimen edo onespen hori, legean araututa dagoen moduan, ez da, ezta gutxiago ere, interesdunak askatasunez adierazitako adostasuna.

Alegazio horren harira, hor dira txostenean kirolariaren onespen edo baimenaren araubideari buruz aurrez emandako azalpenak.

Azkenik, Bulegoak adierazi du aurreproiektuak txartelean jasoko den informazioa eta txartela nork emango duen, bai, zehazten duela, baina ez duela argitzen nork izango duen ahalmena osasun-txarteleko datuetan sartzeko, datu horiek erabiltzeko eta, orobat, ez duela zehazten zer erabilera emango zaion informazio horri.

Gure ustez, ordea, aurreproiektuak, bai, zehazten du nork erabil ditzakeen txartelean jasotako datuak eta horiei zer erabilera eman ahal izango zaien. 46.4 artikulua xedatzen du, hain zuzen, nork erabil ditzakeen txartelean jasotako datuak: titular den kirolariak, eta, haren baimena edukiz gero, artatu duten osasun arloko langileek.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak adierazi du, orobat, kirolariaren osasun-txartela azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoan arautu dela eta apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretuan garatu, baina beste modu batera; izan ere, estatuko txartela goi-mailako kirolariei eta gainerako kirolari federatuei baino ez zaie ematen. Eta, era berean, estatuko txartelak asistentzia ematea baino ez du helburu. Hori dela eta, Bulegoak gogoeta egiteko eskatu du, *“kirolariaren osasun-txartelean jasotako osasun-datuak asistentziazkoak ez diren helburuetarako tratatzea justifikatu dezakeen interes publikorik, babestu beharreko interes publikorik, baden ala ez”*.

Txosten hau landu duenaren iritziz, eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren txostena bera oinarri hartuta, bai 7/2006 Lege Organikoan bertan eta bai aurreproiektuan jasotako neurri murriztaileak ezin dira gehiegizkotzat edo justifikaziorik gabekotzat hartu.

46.7 artikulua xedatzen du beste txartel eta zerbitzu batzuetara sartzeko aukera eman dezakeen euskarri fisiko bera izan dezakeela osasun-txartelak. Bulegoaren iritziz argitu egin beharko litzateke zer txartel eta zerbitzuri buruz ari den aurreproiektua; izan ere, hasiera batean, osasun-zerbitzuei edo osasun-txartel indibidualari buruz ari dela dirudi.

Aurreproiektuak ez die aterik itxi nahi txartel adimentsuen esparruan etorkizunean zabal daitezkeen aukera ugariei. Eboluzio horren eredu dira NAN elektronikoa edo Osasun Txartel Elektronikoa, herri-erabilera anitzekoa (ONA). Bi txartel horiek osasun-zerbitzuak eskuratzeko eta, aldi berean, beste herri-erabilera batzuetarako baliatu izan dira. Euskarri edo sarrerako giltza berean azken aurrerapenak eta segurtasun gorenaren bermea uztartzea da txartel horien funtsa. Txartel horiek segurtasuneko hainbat elementu dituzte eta horiei esker herritarrek hainbat zerbitzu eskuratzeko aukera izan dute: udal-zerbitzuak (errola, isunak, liburutegiak, kirol-zerbitzuak, etab), osasun arlokoak (ordua eskatzea, bigarren iritzi medikoa, sendagilea aldatzeko eskabidea, etab.), foru-zerbitzuak (PFEZaren izapideak, autolikidazioak, datu fiskalak, ziurtagiriak eskuratzeko, etab.).

Gainerako txartel adimentsuen asmo eta bultzadari jarraituz, helburua da Kirolariaren Osasun Txartelak ere hainbat euskarri fisiko izatea, NAN elektronikoarekin edo antzerako agiri elektronikoekin lan egin dezan. Eta, orobat, asmoa da, txartel elektronikoaren eta bere txiparen bidez federazioen, kirol- eta osasun-erakundeen eta abarren zerbitzuetara sartzeko modua izatea.

46.10 artikulua gaineratzen du Datuak Babesteko Euskal Bulegoak zehazten dituen kasuetan eta baldintzetan baino ezingo direla utzi osasun-txartelean ageri diren datuak. Alabaina, Bulegoaren iritziz, Datuak babesteko Euskal Bulegoak ezin du erabaki osasun-txartelean ageri diren kirolarien datuak zer kasutan eta baldintzatan komunika daitezkeen; aitzitik, datu pertsonalak babesteko oinarritzko eskubidea arautzen duen legediak zehaztu behar du hori.

Aurreproiektuak urtarrilaren 30eko 183/2004 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritako eredua hartu du oinarri; osasun-txartel indibiduala arautzen du artikulua horrek. Hala, artikulua horrek xedatutakoaren arabera, base horretako datuak uztea beharrezkoa izanez gero, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari eskatuko zaio laguntza, *“organo horrek erabaki dezan zer kasutan utzi ahal izango zaizkien datuak hirugarrenei”*. Baina, nolanahi dela ere, oso arrazoizkoa da Bulegoak eginiko oharra.

Aurreproiektuaren **47.1 artikulua** datuen konfidentziasunari eusteko eta datu horiek isilpean gordetzeko betebeharra ezartzen du dopinaren aurkako kontroleko eginkizunak betetzen dituzten langileentzat, baita kirolarien datu pertsonaletara sarbidea izan dezaketen pertsonentzat ere, baina Bulegoaren iritziz, aurreproiektuak ez du inolako erantzukizunik aurreikusten betebeharrak ez betetzeagatik.

Horren harira, ez da beharrezkoa berariaz inolako erantzukizunik jasotzea. 7/2006 Lege Organikoak ere irizpide horri berari jarraitzen dio. Izan ere, datuen konfidentziasunari eusteko eta datu horiek isilpean gordetzeko betebeharra generikoa da eta berariaz jasotzen da 15/1999 Lege Organikoaren 10. artikuluan; eta, horrenbestez, betebeharrak horren urraketa tipifikatuta ageri da aipatutako Lege Organikoan.

Hala, dopinarekin loturiko jokabideak zigortu behar ditu aurreproiektuak, eta, aldiz, Legearen printzipio, betebeharrak eta bermeak ez betetzeagatik sortutako erantzukizunak 15/1999 Lege Organikoak ezarri behar ditu eta halaxe egiten du.

47.2 artikulua xedatzen du beren zereginetan lortutako datuak, txostenak edo aurrekariak dopin-kontrolak egiteko baino ezin izango direla erabili, eta, beharrezko izanez gero, bai eta diziplinazko, administrazioko edo delituzko arau-hausteak izan daitezkeen egintzak salatze ere. Salaketarik izanez gero, langile horiek ahalmena izango dute aipatutako datu, txosten edo aurrekariak uzteko.

Bulegoak hiru ohar egin ditu artikulua horren gainean.

Lehenik eta behin, adierazi du arau horrek ez duela zerikusirik edo, izatekotan, oso gutxi, datuen konfidentziasun eta sekretuarekin eta, horren ondorioz, aurreproiektuaren beste atalen batean kokatu beharko litzatekeela.

Horren harira, bigarren paragrafoak lotura du konfidentziasunari eusteko eta datuak isilpean gordetzeko betebeharrarekin. Hala aurreproiektuak nola 7/2006 Lege Organikoaren 34.1 artikulua irizpide berari jarraitzen diote. Lehen paragrafoan konfidentziasunari eusteko eta datu horiek isilpean gordetzeko betebeharra ezartzen da dopinaren aurkako kontroleko eginkizunak betetzen dituzten langileentzat, eta bigarrenean salbuespenak zehazten dira.

Bigarrenik, Bulegoak adierazi du arauaren idazketa nahasi samarra dela. Horren harira, aintzat hartu beharrekoa da 7/2006 Lege Organikoaren idazketa bera hartu dela oinarri.

Azken oharra dio erreferentzia oker bat egiten zaiola 15/1999 Lege Organikoaren 11.1 artikuluari, lege horrek ez baitu horrelako artikulurik. Zuzena da oharra, aurreproiektuak 11.2 artikuluari egin behar baitio erreferentzia. Artikulu horrek dio datuak jakinarazteko onespina ez dela beharrezkoa izango datu horiek lagatzea legeak baimentzen badu.

IX.- KULTURA SAILEKO AHOIKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA.

Kultura Saileko Ahoikularitza Juridikoak 2011ko maiatzaren 16an igorri zuen txostena. Honako ohar eta gogoeta hauek egiten dira bertan:

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK (1.-9. artikulua)

1. artikulua Legearen xedea eta haren aplikazio-eremua zehazten ditu. Alde horretatik, dopatzea zer den esaten du. Dopatzea ez da, soilik, kirolariak debekatutako substantziak kontsumitzea, kontzeptuaren barruan sartzen baita, halaber, debekatutako metodoak erabiltzea, kirol-errendimendua modu artifizialean handitzeko; izan ere, kiroltasunaren aurkako jokabidea adierazten du jarrera horrek.

Definizio hori aztertu ondoren, adierazi behar dugu ez dela definizio zehatza, zaildu egiten baitu dopatzea zer den ulertzea. Arauaren xedea definitzeko erabili diren bi kontzeptu hauek eragiten dute zehaztasun falta hori: "debekatutako metodoak" eta "kiroltasunaren kontrakoak". Aztertutako lege-aurreproiektuak oinarri eta iturburu dituen bi arau-testuak konparatzen badira, hau da, Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioa eta 7/2006 Lege Organikoa erkatzen badira, ikusten da definizio zehatzagoaren alde egin dutela bi-biek eta, hala, arauak berak debekatutako jokabideen tipifikazioarekin uztartu dutela dopatzea.

Halaber, dopatzearen definizio hau ematen du Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak: "dopatzearen aurkako arau bat edo batzuk urratzea, Kode honetan 2.1 artikulutik 2.8 artikulura xedatutakoaren arabera". Hau da, arau horrek igorpen baten bidez egiten du dopatzearen definizioa, eta esaten du igorpenaren xede diren arauak urratzea dela dopatzea.

Ez da onartu eskabidea. Kontzeptuen ustezko zehaztasun faltak ez du segurtasun juridikoko inolako arazorik sortzen; izan ere, zigor ondorioetarako, aipatzen da jada dopatzea zer den: dopinaren aurka zehaztutako araudia ez betetzea, hain zuzen. Era berean, zehaztasunik gabeko edozein kontzeptu

juridiko saiheste aldera, dopatzea definitzeko tresna bikoitza erabiltzen du aurreproiektuak:

a) Tautologiarik gabe esaten du zer den dopatzea; hau da, definizioan esandakoa barnean bildu gabe. Dopatzea ezin da definitu dopinaren aurkako arauak ez betetzea dela esanda.

b) Definizio bat gehitzen du, estatukoa, zigor ondorio hutsetarako.

1. artikuluko 2. puntuak zabaldu egiten du dopatzearen definizioa, eta animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketak ere hartzen ditu barnean, baina, betiere, “behar diren egokitzapenak eginez”. Termino edo kontzeptu hori ez da zehatza, ezin baita jakin zer hedadura duen kontzeptuak.

Hori dela eta, ondorengo paragrafo hau gehitu da dopatzea kontzeptua zehazteko: “Animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketei dagokienez, dopatzea izango da animaliei debekatuta dauden substantziak ematea edo debekatutako metodoak erabiltzea haien kirol-errendimendua artifizialki handitzeko; izan ere, horrek guztiak kirol-espirituaren aurkako jokabidea adierazten du.”

1 artikuluko 3. paragrafoaren harira, azken aipamena, “hura bete behar duten pertsona fisiko edo juridikoek” dioena, ez da behar bezala lotzen aurreko esaldiarekin; izan ere, bertan esaten da dopatzea “lege honetan jasotzen den dopinaren aurkako araudiaren urraketen multzoa da...” eta jarraian esaten da urratzaileak “hura bete behar duten pertsona fisiko edo juridiko oro” izan daitezkeela.

Proposamena egin duen Zuzendaritza honen aldetik ez da inolako lotura faltarik antzeman. Gainera, 7/2006 Lege Organikoak eskema bera erabiltzen du: “hura bete behar duten” pertsonen dopinaren aurkako araudia urratzea

Azkenik, aplikazio-eremua mugatzeko garaian, adierazi behar da 1. artikulua gehiago zehaztu beharko lukeela kirol-jarduera kontzeptuaren esanahia, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa ofizialen kontzeptua ere. Komeni da arauaren aplikazio-eremu subjektiboa argitzea eta orokortasunak alde batera uztea, azken horiek zalantzak sor baititzaizkete legearen aplikazioari buruz. Ez da ahaztu behar, gainera, artikulua hori funtsezkoa dela gainerako artikuluen hedadura ulertzeko.

Definizio sorta bat sartzeari buruz, kirola arautzen duten lege ugariak eta dopinaren aurkako legeak ez dute terminoen glosategirik biltzen; gainera, definizioa eska dezaketen beste zenbait hitz edo termino erabiltzeko arriskua sor lezake horrek.

2. artikuluan, “printzipio orokorrak” titulupean, hartzaile jakinik bateko zenbait xedapen jasotzen dira, eta, ondorioz, gai-alorrean parte hartzen duten eragile eta erakunde guztiei zuzendutakoak direla ulertu beharko genuke. Arau batzuetan printzipio aski finalistak formulatzen dira. Beste kasu batzuetan, arlo horretako jarduna zuzenduko duten aginduak xedatu beharrean, arauzko izaera duten xedapenak ematen dira, aurrerago testuan agertuko direnak. Horrenbestez, zuzenbidearen printzipio orokorrak zuzenbidearen iturri direla aintzat hartzen badugu (ikusitako Kode Zibileko 1.4. artikulua), araua sustatzen

duen zerbitzuari gomendatzen diogu artikulua hori fintzeko, eta, horretarako, handik kentzeko araua emateko arrazoi izan diren ideiei buruzko adierazpen horiek, zio-azalpenean adierazitakoak, eta, zentzu hertsian zuzenbidearen printzipio orokor direnak soilik uzteko.

Ez da onartu; izan ere arauan jasotako printzipio guztiek ideia eta helburuak adierazten dituzte, eta botere publikoek eta kiroleko eragileek horiek hartu behar dituzte eredu beren jardunerako. Jakina, ideia eta helburu horietako batzuek, gainera, legearen "ratioa" osatzen dute.

IUSKOJAU>ILIRITZA

\ GOBIERNO VASCO

Artikulu bereko b) paragrafoak xedatzen du dopinak kalte larria eragin dezakeela kirolarien edota kirolean parte hartzen duten animalien osasunean. Animaliekin dopina kontrolatzeko erabiltzen diren neurriek, kirol-eremuan egiten diren heinean, erlazio zuzena dute izapidetzen ari den arauarekin, baina araubide juridiko berezitua dute, beste ondasun juridiko bat babesten baita kasu horretan. Gure gomendioa da animaliekiko erreferentziak eta kirolarienak bereiztea, eta araubide berezitu horri buruzko aipamenak egitea edo kapitulu independente bat edo xedapen gehigarri bat erabiltzea horretarako. Aurreproiektuaren xedapen-zatian antzeko erreferentziak egiten dira, eta gauza bera errepikatu behar dugu horiekiko: 4, 24.3, 27.6, 28.6 eta 37.2 artikulua.

Ez da onartu arrazoi hauengatik:

- 1. Printzipio orokorreari buruzko atal bat da, ez aplikazio zehatzeko xedapen espezifikoaren atala.*
- 2. Seigarren paragrafoko printzipio orokorra bat bera da bientzat; izan ere, dopatzeak kirolarien osasunari eta animalienari egin diezaioke kalte.*
- 3. Zaindu beharreko ondasun juridikoa bat bera da bi kasuetan: lehiaketaren garbitasuna eta joko garbia zaintzea.*

Kirol-erakundeen erantzukizunei buruzko **6.** artikulua harira, aholkularitza juridikoak honako ohar hauek egin ditu:

1^a. Zehaztu egin beharko litzateke zeri esaten diogun kirol-erakunde Lege honen ondorioetarako.

Ez da beharrezkotzat jo eta, beraz, ez da onartu; izan ere, Euskadiko Kirolaren 14/1998 Legeak jada arautzen ditu erakunde horiek.

2^a. Horixe bera gertatzen da 6. artikuluko 3. paragrafoan, bertan esaten baita Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak jardungo duela, baldin eta euskal kirol-federazioek edo lurraldeetakoek ez badituzte beren gain hartzen dopinaren gai-alorrean dituzten eginkizunak.

Federazioak baino ez dira aipatzen, administrazio arloko eginkizun publikoak dituzten kirol-erakunde bakarrak direlako.

3^a. Artikuluaren d) atalean, kirol-erakundeei buruz ari dela, hauxe xedatzen da: “edozein kirol-elkarte edo kirolariri diru-laguntzarik edo bestelako laguntzarik ez ematea, dopinaren aurkako araudia urratzen badute edo kasuan kasuko kontrolak egiteari uko egiten baldin badiote”. Esan beharrekoa da, atal horri buruz, laguntza horiek “dopinaren aurkako araudia urratzen dutenei” ukatu beharrean, arauak hau esan beharko lukeela: “dopinaren aurkako araudia urratzeagatik zehatuak izan direnei”. Horrela jokatuta, babestu egingo du errugabetasun-presuntzioa, betebeharrekoa dena zehapen-prozeduretan ere.

Onartu egin da alegazioa eta moldatu egin da paragrafo horretako testua.

4^a. Artikuluaren l) atalak arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-erakundeen egitekoa izango dela honako hau: “Kirolarien baimena lortzea eskumena duten organoek kirolarion datu pertsonalak tratatzeko modua izan dezaten, era horretara dopinaren aurkako kontrolak egin eta kontrol horien emaitzak jakinarazi ahal izateko”. Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, izaera pertsonaleko datuak babestekoa, da izaera pertsonaleko datuen tratamendua arautzen duen legea, eta kontuan izan behar da lege horrek pertsonen baimena eskatzen duela pertsonen datu pertsonalen tratamendua egin ahal izateko, eta baimen hori, gainera, askatasunez eman behar dutela; hala, zaila da ulertzen nola beteko duten kirol-erakundeek baimen hori lortzeko ardura, baldin eta ukitutako pertsonaren borondatezko erabaki baten mende badago. Hori jakinda, arauak esan behar luke kirol-erakundeek beharrezko neurriak hartuko dituztela kirolarien baimena lortzeko, izaera pertsonaleko datuak babesteko araudiak ezarritakoa betez. Atal hori bera jasotzen da 7. artikuluaren r) hizkian.

Onartu egin da alegazioa eta moldatu egin da paragrafo horretako testua.

5^a. Era berean, f) eta m) paragrafoak oso antzekoak dira eta ia gauza bera esaten dute; beraz, atal bakar batean berridatzi beharko lirатеke. Horixe bera esan behar da 7. artikuluko e) eta n) atalekiko.

Onartu egin da alegazioa. Nolanahi ere, bi atalak mantendu egin dira eta testua berridatzi egin da: hala, f) atalak erregelamenduzko alderdiak aipatzen ditu eta m) atalak, berriz, alderdi organikoak.

6^a. 6.1 artikuluko n) atalak eta 7. artikuluko k) atalak xedatzen dute kirol-erakundeek eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsonak eta erakundeek zaindu egin behar dutela dopinaren aurkako kontrolak egiteko prozesuetako analisisien emaitzen konfidentziasuna, harik eta emaitza horien komunikazioa egitea bidezkoa den garaia iristen den arte. Atalaren azken ohar hori (“harik eta emaitza horien komunikazioa egitea bidezkoa den garaia iristen den arte”) ez da batere zehatza, eta, gainera, ez dator bat aurreproiektuko 47. artikuluekin, konfidentziasuneko eta sekretuko betebeharra denbora mugarik gabe ezartzen baitu dopinaren aurkako kontroleko eginkizunak betetzen dituzten pertsonentzat, kirol-erakundeetako organoetako kideentzat eta erakunde horietako langileentzat.

Ez da onartu eskabidea. Eskubide eta betekizun guztiak mugatuak baitira, konfidentziasuneko eta sekretuko betebeharra ere halaxe da. Eskubideak eta betekizunak ez dira mugagabeak. Bai 7/2006 Lege Organikoak eta bai aurreproiektuak berariaz baimentzen dute datu horiek kontrol helburuetarako

erabiltzea eta, horrela badagokio, baita hirugarrenen aurrean salaketa jartzeko ere. Era berean, 7/2006 Lege Organikoak baimena ematen du datuak uzteko.

8. artikuluan, dopinaren aurkako kontrol bat igaro behar duten kirolarien eskubideak zerrendatzen dira. Ohar hauek egin behar ditugu eskubide-zerrenda horri buruz:

■ Eskubide hau arautzen du artikulua horren e) atalak: “Dopinaren aurkako kontrola kirolariaren duintasuna eta intimitatea urratu gabe egitekoa, betiere egin beharrekoaren mugak kontuan izanda”. Arau-xedapen horren idazketari erreparatuta, intimitaterako eskubidea muga batzuen barruan urratzeko aukera arautzen dela dirudi. *Aurreproiektuaren memorian azaltzen eta arrazoitzen denez, oinarrizko eskubideak, dopinari dagokionean, neurriratu egin behar dira, logikoa den moduan. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak ezarritakoaren arabera, “dopin-kontrolak murrizketak eta mugak eragin ditzakete norbanakoen oinarrizko eskubideen eremuan eta edukietan”. Adibidez: gernuaren lagina hartzerakoan kontrolaren arduradunak “gernua isurtzen ikus dezake zuzenean, edo gelan egon daitekeen ispiluaren bidez, inolako eragozpen edo mugarik gabe” (641/2009 Errege Dekretua, apirilaren 17koa, 86. artikulua, Dopin-kontrolen prozesuak eta baimendutako analisi-laboretegiak arautzen dituenak, eta kirolean dopatzea prebenitzeko eta osasuna babesteko neurri osagarriak ezartzen dituenak).*

- h) atalean xedatzen da kirolarien eskubide hau: “dopinaren kontrako prozesua eta preskripzio-epeak amaitu ostean, hartu diren odol-, gernu- edo bestelako laginak desegin daitezela eskatzeko eskubidea”. Ez dago argi zer preskripzio-epari buruz ari den. Ez da erraz ulertzekoa, halaber, artikulua h) atal horretan bertan ezartzen den beste xedapen hau: “Ezin izango da eskubide hori erabili kontrola egitea agindu duen erakundea laginen titular bihurtu bada eta, nolana dela ere, lagin horiek dopina kontrolatzeko edo ikerketak egiteko erabili beharko dira”. Horren haren, egokia da gogora ekartzea sektoreko araudiak zer xedatzen duen; izan ere, zehazten du interesdunaren adostasuna beharko dela lagin biologikoak ikerketa-xedeetarako erabiltzeko, baldin eta lagin horien jatorrizko xedea ez bazen ikerketarako erabiltzea. Horrez gain, adostasun hori edozein unetan ezeztatu daitekeela ere arautzen du (14/2007 Legea, uztailaren 3koa, Ikerketa biomedikuari buruzkoa).

Alegazioa onartu eta berridatzi egin da testua: “Hartu diren odol-, gernu- edo bestelako laginak desegin daitezela eskatzeko eskubidea, lagin horiek hartu diren egunetik zortzi urteko epea igaro ondoren. Lagin horiek ikerketa-xedeetarako erabiltzeko, aurrez anonimo bihurtu beharko dira, era horretara laginak zein kirolariarenak diren ez jakiteko, eta, hala, ikerketa biomedikuari buruzko indarreko legedian ezarritakoa beteko da”.

- Aurreko atalean egiaztatutako zehaztasun falta bera ikusten da i) atalean ere, “egoki den unera arte” esaldiarekin; izan ere, atal horrek esaten du kirolariak eskubide hau izango dutela: “kirol-erakundeei emaitzen konfidentzialtasuna exijitzeko eskubidea, egoki den unera arte”. Zehaztasun handiagoz adierazi behar da zein izango den une hori.

Ez dugu proposamena onartu, e) atalari buruz emandako arrazoi beragatik.

9. artikuluan honakoa xedatzen da: “dopinaren kontrako kontroletan laguntzeko prest azaldu ez direnak”. Gomendatzen dugu azken esaldi hori aldatzea, eta hau jartzea haren ordez: “zehatuak izan direnak dopinaren aurkako kontroletan laguntzeari uko egin diotelako”.

Horixe bera gertatzen da artikuluan horren 3. atalean ere.

Azkenik, I. kapitulu honi buruzko oharrekin amaitzeko, adierazi behar dugu terminologia homogeneo eta argiago bat erabiltzea komeni dela. Hala, definizio hauek jaso daitezke: “kirolari”, “dopatzeari”, “kirol-antolakundea”, “kirol-erakundea”, “debekatutako substantziak edo metodoak”, “kirol-lehiaketa ofizialak”, “kiroltasuna”.

Onartu egin dira “zigorra” terminoa jasotzeari buruz lehen paragrafoan eginiko proposamenak. Zigor-motak, penalak eta administratiboak, erabakitzeari buruz, uste dugu “zigor” terminoak ez duela mota bakar bat adierazten eta, beraz, guztiak biltzen dituela: zigor administratiboak, diziplinazkoak eta penalak. Definizio sorta bat sartzeari buruz, kirola arautzen duten lege ugariak eta dopinaren aurkako legeak ez dute terminoen glosategirik biltzen; gainera, definizioa eska dezaketen beste zenbait hitz edo termino erabiltzeko arriskua sor lezake horrek.

II. KAPITULUA.- ANTOLAKETA ADMINISTRATIBOA (10.-12. artikulua).

11. artikulua aholkularitza-organoaren harira xedatutakoaren arabera, pertsona batek ordezkatzeko ditu lurralde historikoak organo horretan. Ez da argi geratzen pertsona bat izango den lurralde bakoitzeko ala pertsona batek ordezkatzeko dituen hiru lurraldeak.

Oharra onartu eta berridatzi egin da artikulua.

Arauek ez du esaten zer osaera izango duen Erabilera Terapeutikorako Baimenatarako Euskal Batzordeak. Ez da beharrezkoa legeak berak garatzea organo horren barne-funtzionamendua antolatze modua, ezta haren osaera zehatza ere, baina zehaztasun handiagoa izatea komenigarria litzateke.

Ez da onartu iradokizuna. 7/2006 Lege Organikoan ere ez da organo horren osaera arautzen; areago, aipatu ere ez da egiten organo hori.

III. KAPITULUA. DOPIN-KONTROLAK (13.-20. artikulua).

13. artikulua

Laugarren atalak 7/2006 Lege Organikoaren 5.2 artikulua hartzen du oinarri. 5.2 artikuluan hori kopiatzean, kendu egin da, lehenik eta behin, “lizentzia etenda duten kirolariak” esaldia, artikuluan hori bat etor dadin aurreproiektuaren eremu subjektiboarekin, eta, ondorioz, lizentzia etenda duten kirolariak aipatzen dira orain (hau da, kirolari guztiak, lizentzia duten ala ez kontuan hartu gabe); hala ere, aurrerago esaten du dopinaren aurkako kontrola igaroko dutela “kirol-lizentzia berriro gaitu aurretik”. Aurreproiektuko 13. artikulua idatzita dagoen moduan, dopinaren aurkako kontrol bat egin behar du kirolariak bere kirol-

lizentzia berriro gaitzeko, baina ez da ezer arautzen lizentziarik gabeko kirol-jarduerarako berriro gaitzeko moduari buruz.

Bai Lege Organikoak eta bai aurreproiektuak esaten dute kirolari guztiek dutela kontrola egiteko betebeharra, horrelakorik egitea egokituz gero. Ez da nahasi behar kirolariaren “betebeharra” eta kasu guztietan berriro gaitzeko kontrola igaro “beharra”.

Bestalde, lizentzia eteteak esan nahi du kirolariak lizentzia eduki, baduela, baina eskubideak etenda dituela, eta, horrenbestez, derrigorrezko kontrolak egin beharra izan dezakeela eskubide horiek berriro gaitzeko. “Birgaitzeak” horixe esan nahi du, “berriro gaitzea”, eta horrek adierazten du kirolariak, aurrez, bazuela lizentzia edo gaitze hori. Lege Organikoaren 5.6. artikulua eduki kopiatu du aurreproiektuko 13. artikuluko 10. atalak, eta pentsatu du pareko xedapenak direla aurreproiektuko “dagokion euskal federazioaren lizentzia ez duten kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, bertan bizi badira” xedapena eta Estatuko legeko “Espainiako lizentzia ez duten kirolariei, baldin eta Lege honen aplikazio-eremuan egiten diren Estatuko edo nazioarteko lehiaketetan parte hartzen badute” xedapena. Agerikoa da bi xedapen horiek ez direla parekoak, 5.6. artikulua bigarren zatia –nazioarteko araudia eta eskumendun diren nazioarteko federazioak eta erakundeak aipatzen dituen– ez baitator bat haren aurretik datorren esaldiarekin.

Beste gai-alor bati helduz, esan behar da aurreproiektuak gainjarri egiten dituela Estatuko legearen eremu subjektiboa eta materiala, artikulua horrek –egun duen idazketan bederen– arautzen baitu kontrolak egin beharko dituztela Espainiako federazio-lizentziak dituzten kirolariak (“euskal federazioaren lizentzia ez dutenak”) Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean egiten diren kirol-lehiaketetan parte hartzen dutenean (Estatuko lehiaketa ofizialak izan daitezke). Xedapen hori ez dator bat aurreproiektuaren aplikazio-eremuarekin.

Onartu egin da moldaketa. Artikuluak aurreproiektuaren 50. eta 51. artikuluetan xedatutakora egokitu behar du eta, horrenbestez:

- *“dagokion euskal lizentzia ez dutenak” aipamenaren ordeztu “estatuko edo nazioarteko lizentzia duten kirolariak” idatzi da.*
- *Lege honetan xedatutako kasuei buruz ari dela argitu da.*
- *Moldatu egin da testu hau: “legearen arabera eskumena duen erakundeak egingo ditu zigor-espediente administratiboaren edo diziiplina-espedientearen izapideak.”*

15. artikulua baimen terapeutikoei buruzkoa da. Zortzigarren xedapen gehigarria (gaur egun seigarrena) eta 15. artikulua irakurtzen badira, eta horiei loturik aurreproiektuko 1. artikulua (arauaren eremu subjektiboari buruzkoa), ondorioztatzen da obligazio horiek betetzetik salbuesten direla eskakizun fisiko handiko probetan parte hartzen duten lizentziarik gabeko kirolariak, baina ez, aldiz, lizentziarik gabeko gainerako kirolariak, aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatu edo lehiatzen direnak –aurreproiektuaren testuari jarraituz bederen–; izan ere, azken horiek erabilera terapeutikorako baimenak eskatzeko

eta haien erregistro-liburu bat eramateko obligazioa izango lukete. Ondorio hori, ordea, harritzekoa da, gutxienez. Laburbilduz, bi arauak kontraesanean daude.

Onartu egin da eskaera eta Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatu edo lehiatzen diren kirolariak betebeharrak horietatik (baimenen erregistro-liburu bat eramatea) salbuestea proposatu da.

Estatuko 7/2006 Lege Organikoak arautzen ez duen berritasun bat dakar **16. artikulua**: aukera ematen zaie kirol-erakundeei kirol-bajaren egoera arautzeko beren erregelamenduetan. Igorpen horrek dakarren arazoa da aurreproiektuak ez duela zehazten zein kirol-erakunderentzat den Legea aplikagarri.

Ez da onartu; izan ere, Euskadiko Kirolaren 14/1998 Legeak argi zehazten ditu kirol-erakundeak eta, horrez gain, hor da kirol-erakundeen erregistroa ere. **18. artikulua** "kontrolen plangintza eta kudeaketa" du izenburu, eta bertan arautzen du Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak erabakiko dituela kirol-erakundeek egin beharreko dopin-kontrolak, osasun-kontrolak eta osasuna babesteko gainerako jarduerak. Gehiago zehaztu behar da artikulua izenburua, ez baita edozein plangintzari edo kudeaketari buruz ari. Zehazki, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren jardunaz ari da, kontrolak planifikatu eta kudeatzeko.

Ez da onartu; 7/2006 Lege Organikoaren 9. artikulua izenburu bera du.

IV. KAPITULUA. DOPINARI BURUZKO DIZIPLINA- ETA ADMINISTRAZIO-ZEHAPENAREN ARAUBIDEA (21.-24. artikulua)

22. artikulua, administrazioaren zehapen-erregimenaren aplikazioari buruzkoa, bis idem printzipioa zaintzeko klausula batekin osatzen da, eta, hala, 33. artikulura igortzen du. Nolanahi ere, klausula horrek, administrazioaren zigor-araubideari buruzko artikuluan jaso bada ere, diziplina-araubidean ere izango luke eragina, eta ez soilik bide penaletik zigortutako egintzei dagokienean, baita administrazio-zehapenen eta diziplina-zehapenen arteko ahalmenean ere.

Horrenbestez, orain izapidetzen ari den aurreproiektuak administrazio-zigorren eta diziplina-zigorren artean non bis idem printzipioa zainduko dela aurreikusi beharko luke.

Ez da eskabidea onartu arrazoi hauengatik:

Lehenik eta behin, ez da beharrezkoa aipatutako azalpena ematea; izan ere, 33. artikulua modu monografikoan jorratzen du printzipio hori, eta biak aipatzen ditu, administrazio-zigorren eta diziplina-zigorren eremuak.

Bigarrenik, aholkularitza juridikoaren txostenaren arabera, arau-hausteen eta zigorren zerrenda bat eta bera da bi prozeduretan. Alabaina, kontu honen mamia ez da arau-haustea eta zigorrak zer-nolakoak diren, baizik eta babestu beharreko subjektuak, egintzak eta oinarriak edo ondasunak zein diren.

Nolanahi ere, 33.4 artikuluan argibide hau jaso da: "oinarri juridikoa duen identitaterik ez dagoen kasuetan baino ez da ezarri ahal izango administrazio edo diziplina arloko zigorra egintza beraren ondorioz"

21. eta 22. artikuluen idazketari buruz, berriz, honako ohar hauek egin behar ditugu:

- “egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izanik” aipamena ez dago argi pertsoneri edo kirol-erakundeei loturik dagoen. Beraz, zehaztu egin beharko litzateke baldintza horrek nori eragiten dion eta, kirolariei bada, zehaztu egin beharko litzateke zer den EAEn egoitza izatea.

21. artikulua lehen paragrafo horretan bertan beste aipamen hau zehazten da: “lege honen araupeko kirol-jarduerak egiten badituzte”. Aurrez ere esan dugun moduan, aurreproiektuan ez dago “kirol-jarduera” kontzeptuari buruzko definizio zehatzik. *Ez da onartu alegazioa; aipamena kirol-erakundeei buruzkoa da. Aurreko orrialdeetan ere adierazi dugunez, kirola arautzen duten lege ugariek eta dopinaren aurkako legeek ez dute terminoen glosategirik biltzen; gainera, definizioa eska dezaketen beste zenbait hitz edo termino erabiltzeko arriskua sor lezake horrek.*

Aurreproiektuaren **23. artikuluan** kirolariaren eta “haren inguruaren” erantzukizuna arautzen da. Artikuluaren 5. paragrafoa dela-eta, aholkularitza juridikoaren iritziz komenigarria litzateke zehaztea nor diren “inguruko pertsonak”. Alde horretatik, Kiroleko Dopinaren Aurkako Munduko Hitzarmenak “kirolariei laguntzen dieten langileak” terminoa erabiltzen du. Hitzarmen horren arabera, hauek dira langile horiek: “kirol-lehiaketetan parte hartzen duten edo haietarako entrenatzen diren kirolariekin lan egin edo haiek tratatzen dituzten entrenatzaile, prestatzaile, kirol-zuzendari, agente, taldeko langile, funtzionario eta osasun arloko langileak”.

Onartu egin da alegazioa eta moldatu egin da artikulua horretako testua.

24. artikulua, 1.e) atalean, eta 15.1 artikuluari loturik, agindutako tratamendu terapeutikoak inskribatzeko baimena aipatzen du (“kirolariak inskripzio hori egitea onartzen badute”). Baldintza horrek ez du zentzurik, ez baita kirolariak bere borondatez hartutako erabakia, betebeharrak bat baizik, eta, horrenbestez, obligazio hori ez betetzeak arau-hauste oso larria ekarriko luke.

Onartu egin da eskaera eta Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatu edo lehiatzen diren kirolariak betebeharrak horietatik (baimenen erregistro-liburu bat eramatea) salbuestea proposatu da.

Beste gai-alor bati helduz, 24.1 artikulua d) atalean 23.3 artikuluari buruz jasotzen den aipamena ez da zuzena; izan ere, 23.4 artikulua aipatu beharko litzateke. Zuzenketa bera egin beharko litzateke 24.2.a) artikuluan ere.

Oharra onartu eta berridatzi egin da testua.

Artikulu horren amaierako atalean honakoa xedatzen da: “Aurreko paragrafoetan deskribatzen diren arau-hausteak animaliek kirol-lehiaketetan parte hartzen duten kasuetan ere aplikatuko dira, dagozkion egokitze logikoekin”. Alde horretatik, etorkizunean, egokitzapen horiek erregelamendu bidez garatzen direnean, ezingo da etorkizuneko Legean tipifikatutako arau-hauste eta zigorrez gain bestelakorik jaso, eta hori guztia legezkotasunaren

printzipioa babesteko. *Ez da onartu; izan ere, xedapen hori 7/2006 Lege Organikoaren lehen xedapenean jasotako bera da.*

25. artikulua federazio-lizentzia eteteko edo kentzeko zigorra baino ez du aipatzen. Kontuan izanda aurreproiektuan aurreikusitako zigor-araubidea berdin aplikatu dakiekeela inolako lotura-egoera berezirik ez duten kirolariei, ez da argi geratzen zer zigor ezarri behar zaien federazio-lizentziarik ez duten kirolariei. Ondoriozta daiteke salbuetsita daudela zigorra jasotzetik.

Oharra onartu eta berridatzi egin da testua.

27. artikulua, bai sinaduran eta bai testu osoan –5. paragrafoan izan ezik–, kirol-lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeak baino ez ditu aipatzen. Alabaina, 5. atal horretan federazioei eta kirol-lehiaketak (ofizialak ez ezik baita bestelakoak ere) antolatzen dituzten erakundeei agintzen die beren araudia egokitzeko, era horretara artikuluko horretako xedapenak jasotzeko. Kontuan izanda Lege-aurreproiektuak bere aplikazio-eremuan biltzen dituela lehiaketa ez ofizialak ere, argitu egin beharko litzateke lehiaketa horiek 27. artikuluko subjektu zehagarrien artean dauden ala ez.

Onartu egin da alegazioa eta moldatu egin da artikuluko horren testua.

Honakoa zehazten da 5. atalean: “Kirol-federazioek eta kirol-lehiaketak antolatzen dituzten erakundeei egokitu egingo dute beren araudia lege honetako aurreikuspenak sartzeko; aurreikuspen horiek bateragarriak izango dira kasu bakoitzean dagokiokeen erantzukizun zibilarekin eta lege honetan xedatutakoaren ondorioz exijitu ahal diren erantzukizunengatik dagokiokeen kontu ematearekin”.

Beraz, federazioek, ligek eta lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeei beren araudia xedapen hauetara egokitzeko betebeharra aipatzen delarik, zehazki aurreko bi paragrafoetan jasotako xedapenez ari da. Ordea, betebeharrak hori aurreproiektura eramatean, bereizi egin da Lege Organikoan lotuta dagoen ataletik eta aparteko atal moduan mamitu da. Horren ondorioz, zalantza sortu da zer egokitzen zehatz egin beharko dituzten federazioek eta kirol-lehiaketak antolatzen dituzten erakundeei.

Onartu egin da proposamena eta batu egin dira 4. eta 5. atalak.

Artikuluaren 6. atalean jasotako klausularen arabera, artikuluko horretan aurreikusitako zehapenak kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien jabeen eta animalia horiek dauzkaten pertsonen ere ezarri ahalko zaizkie, bai eta dagokion arau-haustea egiten parte hartzen duten pertsona guztien ere. Zaila da ulertzen nola ezarriko zaizkien 27. artikuluan aurreikusitako zigorrak kirol arloan kargurik ez duten pertsonen, kirol-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik ez duten edota inongo federazio edo kirol-erakunderekin erlazio edo lotura berezirik ez duten; izan ere, artikuluko horretan honako zigor hauek arautzen dira: kirol-lizentzia edo, gehienez, lizentzia hori eskuratzeko aukera kentzea edo etetea.

Ez da onartu eskabidea. Noski, zigorra lizentzia etetea edo kentzea bada, edo lizentzia eskuratzeko ezgaitzea, lizentzia-eredu bat izan behar du animalien

jabeentzat. Adibidez, Euskal Hipika Federazioak eta gainerako hipika federazioek, baita animaliekin egiten diren beste kirol batzuetakoek ere, jabeentzako lizentzia dute.

28. artikulua honakoak baino ez ditu aipatzen: kirol-lizentziarekin edo gaikuntza baliokidearekin kirol-federazioen, liga profesionalen edo lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeen zerbitzura edo haien barruan diharduten osasun arloko langileak. Ez da esaten zer gertatuko litzatekeen kirol-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik ez duten osasun arloko langileekin edo, esaterako, lehiaketa ez ofizialak antolatzen dituzten erakundeen zerbitzura daudenekin, horiek ere aurreproiektuaren eremu subjektiboaren arabera zigorra jaso dezaketen artean leudeke-eta.

Ez da onartu; 4. paragrafoak argi zehazten ditu ondorioak:

- a) Ezingo dute lizentziarik edo gaikuntzarik eskuratu etorkizunean.*
- b) Aurrekoak ez du kalterik eragiten dagokion elkargo profesionalak har ditzakeen neurrietan.*

30. artikuluaren **2. paragrafoa** xedatutakoaren arabera, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak ezarritako isunak ordaindu ezean, nahitaez ordainaraziko ditu Agentziak berak, baina ez da ezer aurreikusten diziplina-ahalmena duten beste erakundeei buruz; federazioei buruz, adibidez.

Aurreproiektuak kanpoan utzi du berariaz kasu hori; izan ere, zalantzazkoa da isun horien ondorioz bildutakoa “zuzenbide publikoko diru-sarrera” den ala ez.

31. artikulua hainbat aldiz aipatzen da “atal honetan”. Aipamen horren ordez “Kapitulu honetan” idatzi beharko litzateke; izan ere, aurreproiektuan, 7/2006 Lege Organikoan ez bezala, ez dago sekziorik edo atalik. “Atal honetan” aipamen hori bera ageri da 27.4, 28.4 eta 28.5 artikuluetan ere.

Onartu egin da alegazioa eta moldatu egin da artikulua horren testua.

Hauxe da **32. artikulua**ren titulua: “Zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentzia eskuratzeko gaitasuna galtzea”. Alabaina, titulu hori ez da nahikoa aurreproiektuaren 32. artikuluan xedatutakoa barnebiltzeko; izan ere, bi alderdi horiek ez ezik, beste gai batzuk ere jasotzen dira artikulua horretan.

*Gure iritziz artikulua*ren titulua ondo biltzen du edukia.

34. artikulua erantzukizuna azkentzeko arrazoiak arautzen dira, baina diziplina-erantzukizunak baino ez dira aipatzen.

Onartu egin da eta ‘diziplina-’ hitza kendu da.

37. artikulua honakoa xedatzen da: “Dopina zigortzeko arloan, Eusko Jaurlaritzari dagokio administrazio-zehapenak ezartzeko ahala erabiltzea”. Arau hori, ordea, ez dator bat aurreproiektuaren 12.1.e) artikulua

Dopinaren aurkako Euskal Agentzia Eusko Jaurlaritzaren erakunde-antolaketan dago. Agentziaren estatutua Eusko Jaurlaritzak onartzen du dekretu bidez eta, beraz, Eusko Jaurlaritzari dagozkion eginkizunak betetzen ditu.

38.5 artikulua zehaztutakoaren arabera, “dopinaren alorreko diziplina-prozedura ebazpen bidez edo iraungipenez bukatuko da”. Iraungipenaren ondorioz bukatzen bada, orduan ere ebazpen bidez amaituko da, egoera hori adieraziko duen ebazpena eman beharko baita. Alde horretatik, nahiz eta 38.5 artikulua diziplina-prozedura aipatzen duen, uste dugu berdin aplika daitekeela HALGAILen 42.1 artikulua.

Onartu egin da proposamena eta, beraz, kendu egin da aipamen hori.

38. artikulua 5. paragrafo berean, aipamen hau egiten da: “Artikulu honen lehenengo paragrafoan ezarritako epemuga”. Lehen paragrafo horretan, ordea, ez da inolako epemugarik zehazten, eta, beraz, argiago adierazi beharko litzateke sei hilabeteko epea dela, 38.5 artikulua lehen esaldian aipaturikoa. Horrenbestez, egokiagoak lirateke esaldi hauek: “Sei hilabeteko epe hori igarotzean” edo “atal horretan zehaztutako epea igarotzean” edo antzekoa.

Era berean, artikulu horrek xedatutakoaren arabera diziplinazko ahala Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioei dagokie, bai eta, erkidego horretako kirol-lehiaketetan izaten den parte-hartzea dela-eta lotura bereziko harremana dagoen gainerako erakundeei ere. Artikuluaren 3. paragrafoan, ordea, federazioak baino ez dira aipatzen. Horixe bera gertatzen da 39.6 artikuluan.

38. artikuluan diziplina-prozedura ebazteko bi epe desberdin zehazten dira.

Lehen oharra (sei hilabeteko epea aipatzea), bigarrena (diziplinazko ahala kirol-federazioei ez mugatzea) eta hirugarrena (luzapena zehaztea) onartu egin dira. Bi epeen arteko kontraesanei buruzkoa, ordea, ez da onartu; izan ere, estatuko ereduari jarraitu zaio.

39.3 artikulua, “kasuan kasuko diziplina-prozeduran edo auzi kriminalean” aipatzen da, eta ez da adierazten aurreproiektuaren sistema duala. *Onartu egin da oharra. Zigor-prozedurari buruzko erreferentzia jaso da.*

39.7 artikulua ez du kontuan hartzen Kirol Justiziako Euskal Batzordea arautzen duen urriaren 18ko 310/2005 Dekretuaren 17. artikuluan jasotako aukera; hau da, Batzorde horrek kautela-neurriak hartu ahal izango dituela epaia benetan eraginkorra izango dela bermatzeko, eta neurri horien artean egon litekeela zigorra bertan behera uztea.

Aipatutako Batzordearen berariazko aipamen hori ez da beharrezkotzat jo eta, beraz, ez da onartu alegazioa. Nolanahi ere, edozein diziplina-organoren aipamena jaso daiteke; izan ere, kirol-federazioek ere badituzte diziplina-organoak eta organo horiek badute ahalmena zigorra bertan behera uztea erabakitzeko.

40. artikuluan, “Eusko Jaurlaritza” esaten duen lekuan “Euskal Administrazio Orokorra”, “EAEko Administrazio Orokorra” edo antzekoa idatzi beharko litzateke.

Onartu egin da oharra.

V. KAPITULUA. PREBENTZIO-NEURRIAK (42.-46. artikulua).

43. artikuluaren 2. paragrafoan informazio-sistemaren zenbait helburu zehazten dira eta “*honako talde hauen beharrei*” aipamena egiten da, baina ez da esaten zein talde diren.

Oharra onartu eta berridatzi egin da artikulua.

Artikulu beraren 5. paragrafoan zehazten da kirolariaren onespenerik gabe ezin dela txartel horren datuetan sartu. Baina, hurrengo esaldian ohartarazten da onespenerik ez ematea arau-hauste oso larria izango dela. Horrenbestez, errepikatu beharrean gara ez dela zentzuzkoa erabakia nork bere borondatez hartu behar duela zehaztea eta, ondoren, erabaki hori betebeharrak bihurtzea, bete ezean zigorra etor daitekeelako.

Ez da onartu, aurrez azaldutakoaren haritik, borondatezko onespeneraren kontzeptua zehaztu beharrekoa delako. Adibidez, kirolariak uko egin diezaiokete dopin-kontrol bat egiteari eta berek dute onspena emateko erabakia; hau da, ezin zaie derrigorrez edo beren onespenerik gabe laginik atera. Baina kirolariak uko egiten badio kontrol horiek egiteari, zigorra jaso dezake.

○ VI. KAPITULUA. DOPINARI BURUZKO DATUEN ARAUBIDEA (47.-49. artikulua).

47. artikulua konfidentzialtasunerako betebeharrak xedatzen da, baina obligazio hori ez betetzeak zer ondorio juridiko sor ditzakeen ez da zehazten.

Ez da onartu eskabidea. 7/2006 Lege Organikoaren irizpideari jarraituz, datuen konfidentzialtasunari eusteko eta datu horiek isilpean gordetzeko betebeharrak generikoa da eta berariaz jasotzen da Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan; eta, horrenbestez, betebeharrak horren urraketa aipatutako legean arautzen da. Hala, dopinarekin loturiko jokabideak jaso eta arautu behar ditu aurreproiektuak, eta, aldiz, aipatutako betebeharrak ez betetzeagatik sorturiko erantzukizunak 15/1999 Lege Organikoak ezarri behar ditu.

49.1 artikulua xedatutakoaren arabera, “Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren lehiaketetan parte hartzen duten taldeak behartuta daude erregistro-liburu bat eramatera...”. Arau horrek gainditu egiten du aurreproiektuaren 1. artikuluan aurreikusitako eremu materiala.

Onartu egin da oharra eta berridatzi egin da testua zehaztapen hau gehituta: “1.- Euskal Autonomia Erkidegoan egin eta lege honen eremu materialean jasotako lehiaketetan parte hartzen duten taldeak...”

VII. KAPITULUA. NAZIOARTEKO KIROL-FEDERAZIOAK ETA NAZIOARTEKO EREMUAN KIROL-JARDUERA ARAUTZEN DUTEN GAINERAKO ERAKUNDEAK (50.-53. artikulua).

50.1 artikuluan “eta” juntagailuaren ordeztu “edo” juntagailu disjuntiboa erabili beharko litzateke: “Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan, dopin-kontrolak antolatze eta egiteko ardura Nazioarteko Batzorde Olinpiarri dagokio, bai **eta** nazioarteko kirol-federazio eta erakundeei ere (...)”.

Onartu egin da oharra.

51.1 artikulua gairatu egiten du aurreproiektuaren eremu subjektibo eta materiala, EAEn lehiatzen ari diren kirolari espainiarrei eta atzeritarrei dopin-kontrola egin ahal izango zaiela adierazten baitu, aurreproiektuaren aplikazio-eremutik kanpo geratzen diren lehiaketak kanpoan utzi gabe.

Kontrolak lehiaketatik kanpo egiten dira eta, ondorioz, ezin dira kanpoan utzi zenbait lehiaketa. Nolanahi ere, komenigarria da eremu subjektiboa berriro zehaztea, eta adieraztea “EAEn lehiatu edo entrenatzen diren kirolari espainiarrei eta atzeritarrei” egingo zaizkiela lehiaketatik kanpoko kontrolak.

52. artikulua (titulua), argitu egin beharko litzateke zer lizentzia-mota; izan ere, Espainiako federazio-lizentzia duten kirolari 7/2006 Lege Organikoaren 32. artikulua aplikatu beharko litzateke. Hau da, 4/1998 Legean araututako lizentziei buruz ari bada artikulua, horrela adierazi beharko litzateke.

Onartu egin da oharra eta zehaztu da lizentzia EAEkoa, Espainiako edo

nazioartekoa izan daitekeela. XEDAPEN GEHIGARRIAK.

Bigarren xedapen gehigarriak Estatuarekin elkarlanean jarduteko tresnak ezartzea aurreikusten du.

Xedapen horretan komeni da “Eusko Jurlaritzak” dion lekuan “EAEko Administrazioa” (edo antzekoa) jartzea.

Onartu egin da oharra.

Hirugarren xedapen gehigarriaren bidez (orain azken xedapenetan hirugarrena), aurreproiektuan ezarritako zehapen- eta diziplina-araubideak egokitzeko ahalmena ematen zaio kirol arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzako Sailaren titularrari. Zuzendu egin behar da xedapen hori eta, ekainaren 30eko 7/1981 Legeak, Jurlaritzari buruzkoak, 18.c) artikuluan xedatutakoari jarraituz, Jurlaritzak izan behar du legea erregelamendu bidez garatzeko ahalmena.

Era berean, lege-proiektu, dekretu, agindu eta ebazpenak egiteko jarraibideak aintzat harturik, zerbait egiteko edo xedapena osatzeko aginduak, hau da, xedapena garatu dadila agintariei eskatu edo horretarako beste arau bat behar dutenak, azken xedapenetan kokatu beharko lirateke.

Oharra onartu eta aldatu egin da xedapenaren testua.

Laugarren xedapen gehigarrian (orain hirugarrena) dopina eragiteko gai diren substantzia eta produktuak eskaintzen, laguntzen, hartzeko agintzen edo ematen dituzten osasun-profesionalen diziplinazko erantzukizuna arautu da. Alde horretatik, kontuan harturik kirol-jarduera terminoa ez dela batere zehatza aurreproiektuaren ondorioetarako eta aurreproiektuaren eremu subjektiboa eta materiala oso zabala dela, aholkularitza juridikoak adierazi du erantzukizun horiek kaltegarri izan daitezkeela osasun arloko langileen jardun profesionalerako; izan ere, "lizentziarik ez duten kirolariei" sendagaiak hartzeko agintzen dieten profesionalenganaino irits daiteke erantzukizun hori.

"Kirol-jarduera" kontzeptuak zehaztasunik ez duela-eta, hor dira aurrez txosten honetan bertan emandako azalpenak.

Artikuluaren eremu zabalegiaren harira, zehatzu behar da profesionalek kasuan kasuko jarduera-arauetan eta lege honetan zehazten diren formalitateak betetzen ez dituztenean, orduan sortzen direla diziplinazko erantzukizunak.

Bosgarren xedapen gehigarriak (orain laugarrena) legearen artikuluetan egon beharko luke; izan ere, arau-hauste oso larritzat hartutako jokabidea arautzen du. Xedapenaren lehen paragrafoan 7/2006 Lege Organikoaren 42. artikulua kopiatu da. Artikulu horrek bi paragrafo ditu, eta testua hitzez hitz xedapen gehigarriara eramatean, aurreko paragrafoari buruzko aipamena ere jaso da, baina xedapen gehigarrian ez dago halakorik.

Era berean, ezabatu egin beharko litzateke 14/1998 Legearen 131. artikuluari eginiko erreferentzia, eta horren ordeztu zigorra zehatzu beharko litzateke. *Onartu egin da oharra.*

Azkenik, **zortzigarren xedapen gehigarriaren (orain seigarrena)** d) atalean – oker bat dela medio, a) hizkiarekin ageri da– zehaztutakoaren arabera ezgaitzea edo deskalifikatzea zigorrak izango dira eta, horrenbestez, xedapen horrek ere legezkotasun- eta tipikotasun-printzipioak bete beharko ditu.

Ez da onartu, gure iritziz ez delako zuzena ezgaitze horren zigor-izaerari buruzko oharra. Adibidez, hematokrito-tasa oso altua duten txirrindulariei proba batean ez parte hartzen uztea ez da zigortzea (tasa hori arriskutsua izan daiteke kirolariaren osasunerako, nahiz eta ez dopatzearen ondoriozkoa izan). Eta aldaketarik ere ezin da planteatu, antolatzaileek edo Administrazioak (zigortzeko ahalmena) ezar ditzaketen zigorrak jasota daudelako Legean.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK.

Bi xedapen indargabetzaile aurreikusi dira. **Lehenengo xedapen indargabetzailea eta Bigarrena**

Nolanahi ere, komenigarria litzateke biak xedapen indargabetzaile bakar batean bategitea; izan ere, aurrez aipatutako zerrenda zaintzarako klausula horrekin ixteko gomendatzen dute 1993ko martxoaren 23ko jarraibideek.

Onartu egin da eskaera eta bat egin dira bi xedapen indargabetzaileak.

AZKEN XEDAPENAK.

Hirugarren azken xedapenean ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari aurreproiektua garatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan. Xedapen horrek aurreikuspen orokor bat jasotzen du. Aurreikuspen hori ulertutzat eman daiteke Autonomia Estatutuaren 29. artikuluan eta Jaurlaritzaren Legearen 16. artikuluan ere aipatzen delako izaera orokorrarekin. Horrenbestez, aurreikuspen horren aipamena ohikoa da araubide konparatiboan. Nolanahi ere, esan beharrekoa da Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoak behin eta berriro eskatu duela kentzeko, araubideak berez xedatutakoa errepikatzen baitu legeko xedapen horrek (107/2003 ebazpena).

Onartu egin da eta, beraz, azken xedapen hori kendu egin da.

Azken xedapenetako bosgarrenak honakoa zehazten du: “Konstituzioaren 149.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoak arautu gabeko dopin-gaietan, Estatuak alor horretan ezarritako arauak aplikatuko dira”. Horren harira, legeak egiteko jarraibideetan adierazten da azken xedapenetan ordezkatzeko-erregelak zehaztuko direla, baina kasu honetan erregela hori errepikakorra da, Espainiako Konstituzioaren 149.3 artikuluari buruzko aipamen generiko bat baino ez baitu jasotzen, eta azken xedapenetan jaso gabe ere, berdin-berdin aplikatuko da aipatutako artikulua.

Onartu egin da eta, beraz, ezabatu egin da azken xedapen hori.

X. KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA

Uztailaren 29ko aldeko txostenak honako alderdi hauek jasotzen ditu:

Lehenengoa.- Ez da behar bezala egiaztatu bilatzen diren helburuak lortzeko entitate berri baten beharra, ezta ere zuzenbide publikoko erakunde espezifiko bat sortzeko arrazoiak, ez baita ohikoa administrazio honen esparruan.

Erakunde berri bat sortzearen arrazoia funtsatzen da, lehenik eta behin, beharrezkoa delako bereiztea, alde batetik, goi-mailako kirolarientzako laguntza biomedikoa eta teknikoa, alegia, kirol-errendimendua hobetzea helburu dutenak, eta, beste aldetik, dopinaren aurkako lana, hau da, aipaturiko errendimendu hori eskuratzeko legez kontra jardutea ekiditea bilatzen duena. Bi funtzio horiek Kirol Zuzendaritzari esleituta daude eta, gaur egun, Faduran (Getxo-Bizkaia) egoitza duen Hobekuntza Teknikorako Zentroa izeneko administrazio-unitateak gauzatzen ditu. Baina beste erakunde ezberdin batzuen eskuetara pasatu beharra dago, sistema kutsatu ez dadin, zeren eta, bistan da, dopina baita kirol-errendimendua hobetzeko dauden metodo “ezegokietako” bat.

Gure ustez, badago, beste alde batetik, Agentzia erakunde independente moduan sortzeko beste arrazoi garrantzitsu bat. Kirol Zuzendaritzak, une honetan, kokagune ezberdinak dituzten zenbait administrazio-unitatez osaturik dago (batzuk Gasteizko Lakuan, eta beste batzuk Getxoko Faduran). Faduran zerbitzu hauek daude: Hobekuntza Teknikorako Zentroa (HTZ), Kirolaren Euskal Eskola eta Dopinaren aurkako Zerbitzua (alor horretako mediku bakar batek osatua). Zentro horretan dago, gainera, Kirola Fundazioa, goi-mailako kirola sustatzea helburu duena eta HTZren laguntza teknikoaz eta biomedikoaz

hornitzen dena.

Egitura-antolamendu honekin, ikusten da, berez, zaila dela Kirol Zuzendaritzarentzat kontrolatzea hain eginkizun ezberdin eta konplexuak –eta batzuetan bateraezinak, errendimendua eta dopina, esaterako– dituzten bi zentro horiek, geografikoki elkarrengandik hain urruti egonik. Horretaz guztiaz gainera, dopinaren aurkako borroka egingo duen beste egitura berri bat gaineratzen bazaio, horrek dakartzan alderdi guztiekin (prestakuntza, dibulgazioa, sentiberatasuna, zigorrak, isunak) ikaragarri zailduko zaio zerbitzu guztien kudeaketa-lana egitea, eta dezente urrituko da eginkizunetan denok nahi genukeen eraginkortasun maila.

Hala eta guztiz ere, onargarria iruditzen zaigu Agentziaren izaerari buruzko oharra eta, horregatik, aldatu egingo dugu aurreproiektuaren testua, alegia, erakunde autonomo administratibo gisa eratuko da, Euskal Herriko Ogasun Orokorreko Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 7. artikuluan eta 9.etik 14.era bitartean xedatutakorekin bat etorritz.

Bigarrena.- Txosten ekonomikoan ekonomikoki ebaluatzen diren langileen dotazioak ez datoz bat aurreproiektuan bertan aurreikusitakoekin, eta ez da behar beste arrazoitu burutu beharreko eginkizunek eskatzen dituzten langileen benetako kopurua.

Gaur egun dotazio bakarra dago dopinaren aurkako lanean (langile medikua). Gauzak horrela, ezinezkoa da lantegi horri aurre egitea lege-aurreproiektuak planteatzen duen moduan gaur egongo dotazio horrekin, hots, pertsona bakar batek ezin ditu hor jasotzen diren funtzio guztiak egin. Hasieran pentsatu zen gaur egungo kanpoko laguntzarekin –memorietan jada aipatua– aski izango zela jarduera egiteko, baina urte batzuetako esperientziak erakutsi digu lan hori eraginkortasunez eta efizientziaz egiteko beharrezkoa dela egitura egonkor bat, lana taxuz egiteko eta azken urteotako jarduna finkatzeko.

Dena den, aurreproiektuaren testua aldatu da, idazkaria kendu baita Agentziaren egituratik.

Hirugarren.- Sektore publikoan erakunde berri bat sortzea eta, horren ondorioz, lanpostu berriak sortzea, ez dator bat Jaurlaritzak aurrekontuen egonkortasunari eusteko eta euskal finantza publiko jasangarriak izateko daraman doikuntza-politikarekin.

Aurreproiektua onartzeak eta indarrean jartzeak esan nahi du, lege berriak aurreikusitako funtzioak gauzatuko badira, langileen kopurua handituko dela, bai Agentziari atxikita edota kirol Zuzendaritzari atxikita. Bestela, huts egingo luke araudi berriaren xede nagusiak, dopinari aurre egitea alegia, eta lege berria ezin aplikatuzko arau bat izango litzateke.

Laugarren.- Legean ez da zehaztu non egongo den Agentziaren egoitza. Erakundearen egoitza Bilbon jartzea pentsatu da, baina legea onartu orduko denbora luzea pasa daitekeenez, eta inguruabarrak aldatu, testuan ez da behin betiko egoitzarik jarri.

XI. AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN TXOSTENA

2011ko urriaren 27an emandako aldeko txostenean, zenbait ohar egin ziren, araututako gaien arabera antolatuta. Txostena oso zabala denez, ez dira hona ekarriko oharrak. Hona hemen txosten horren balorazioa:

Federazioaren lizentzia ez duten kirolariak

Proposatutako aldaketak onartu dira, ohar hauek kontuan izanda:

1. artikuluko 5. atalean, aldaketa handi bat dago; izan ere, proiekturako oinarriaren izapidean, zailtasun batzuk izan dira, eta ikusi da zenbait kontutan interpretazio bat baino gehiago egiteko bidea zegoela. Aholku Batzorde Juridikoak adierazi zuenez, ematen du proiekturako oinarrian dopin-kontrolak kirola egiten duen edonori aplikatu behar zaizkiola, eta 7/2006 Lege Organikoan ez da hori esaten; batzordeak dioenez, Lege Organikoan, federazioaren lizentzia daukaten kirolariek bakarrik dauzkate eskubideak sakrifikatuta dopin-kontrolakin, baina ez gainerako kirolariek (144tik 180rako paragrafoak). Horrenbestez, batzordearen ondorioa da, proportzionaltasun-irizpidea kontuan izanda, 7/2006 Lege Organikoaren ereduari jarraitu beharra zaiola eta kontrolak kirol federatuetan bakarrik egin behar direla. Aldaketak agertu baino lehen, beharrezkoa da azaltzea Aholku Batzorde Juridikoak ateratako ondorioak ez direla egokiak gure usterako; izan ere, Lege Organikoan dator ikastetxeetako eta unibertsitateetako kirolariei ere egin behar zaizkiela dopin-kontrolak Espainiako txapelketetan parte hartzen dutenean (ikusi bigarren xedapen gehigarria). Hau da, 7/2006 Lege Organikoa ez dago egina kirol federaturako bakarrik, Aholku Batzorde Juridikoak dioen bezala. Batzordeak egiten duen bezala, ordea, legearen alderdi subjektiboa aldatzen da hura aplikatzeko orduan: federazioaren, ikastetxeen edo unibertsitatearen lizentzia duten kirolariak sartzen ditu (lizentzia horrek ematen die aukera EAEko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko), edota EAEn lehiatzen direnak. Hau da, ez ditu kontuan hartzen EAEn bolada baterako bada ere dauden kirolariak edo EAEn entrenatzen direnak. Eta aldaketa horrekin batera, kirolariaren definizio zehatzago bat egin da 6. atalean. Lege horren ondorioetarako, *"kirolaritzat hartzen dira Legeari loturik diren lehiaketetan federazioaren, unibertsitatearen edo eskolaren lizentziarekin parte hartzen dutenak edo izen-emate tituluarekin parte hartzen dutenak; oraingo legearen ondorioetarako, kirol-lizentziazat hartuko da izen-emate titulua ere"*. Oraingo testuan, betiere kirol-legearen kontra ez ibiltzeko eta, era berean, hala kirolari federatuen nola kirolari ez-federatuen osasuna babesteko, kirolaritzat hartuko dira federazioaren lizentziarik ez dutenak ere, baina eskolako edo unibertsitateko lizentziaren bat beharko dute, edo lizentziaren pareko izan litekeen lehiaketetako izen-emateetako agiriren bat; baina, izen-emateetako agirietarako, erregimen berezi bat ezarria dago oraingo zazpigarren xedapen gehigarrian. Beharrezkoa da lehiaketa antolatueta kirolarien osasuna zaintzea, lizentzia federatutzat hartzen dena modu zabalagoan ulertuta. Lege honekin, kontua ez da, orain azalduko baitira zergatiak, dopin-kontrolak egitea kirola egiten duen edonori; horregatik, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia gaitu du kirol-lehiaketa ez-federatuen zerrenda bat egin dezaten onesteko eta agintzeko; zerrenda horretako kirolariei dopin-kontrolak egin ahal izango dizkiete. Helburua izan da kontrolen proportzioa neurrikoa izatea eta ezaugarri zehatz batzuk dituzten kirol-

lehiaketetan bakarrik egitea kontrolak.

1.5 artikuluan "kirol" hitza ezabatu da; izan ere, lege hori bete behar duten denak ez dira kirolariak; batzuk haien inguruan dabiltzanak dira (medikuak, fisioterapeutak eta beste).

Atal horri dagokionez, moldatu egin dira seigarren eta zazpigarren xedapen gehigarriak ere.

Seigarren xedapen gehigarritik bi xedapen gehigarri egin dira. Seigarren xedapen gehigarrian, kirolariak lehiaketa gogorretan parte hartzeko arriskurik ez duela ziurtatzen duen medikuaren agiria bakarrik eskatzen da. *Horren arabera*, kirolari dagokion Eusko Jaurlaritzako sailaren aginduz, kirol gogortzat hartzen diren lehiaketetako antolatzaileek honako hau eskatu beharko diete parte-hartzaileei, arauz ezarrita dagoen bezalaxe: gorputz-gaitasuna dutela ziurtatzen duen agiria, medikuak aztertu ondotik emana.

Oraingo **zazpigarren xedapen gehigarriak** bi zati ditu, ondo bereizita. Alde batetik, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak zerrenda bat aginduko du EAEko aldizkari ofizialean argitaratzeko: zein kirol-lehiaketa ez-federatutan egin ahalko diren dopin-kontrolak. Helburua da segurtasun juridikoa eta publikotasuna izatea, jakiteko zein lehiaketatan egin ahalko zaizkien dopin-kontrolak kirolariei. Eta, beste alde batetik, erregimen berezi bat izango da lizentziarik ez duten kirol-lehiaketetako parte-hartzaileentzat: dopin-kontrolak egin ahalko zaizkie, baina ez zaie eskatuko, kirolari federatuei legean eskatzen zaien bezala, dokumentu- eta informazio-betebeharrik. 1.5 artikulua eta zazpigarren xedapen gehigarria aplikatzeko orduan, hauxe da ondorioa, kirolarien alderdi subjektiboari begira:

- a) Erregimen berezi bat izango da, lizentzia federatua duten kirolarientzat.
- b) Erregimen berezi bat izango da, eskolako edo unibertsitateko lizentzia dutenentzat edo lotura berezia ezartzen duen bestelako erakunderen bateko lizentzia edo agiri baliokideren bat dutenentzat, baldin eta lehiaketetako antolatzaileek berek ez badute lizentzia edo agiria zuzenean lotzen erregimen orokorrera.

Horrela, proiektua hobeto egokituko da Aholku Batzorde Juridikoak eta gainerako alegazio-jartzaileek izapidetan egindako oharretara. Gainera, Lege Organikoaren filosofia berekoa da erdua, bi erregimen baitauzka: kirol federaturako, orokorra, eta estatuko gazteen eta unibertsitatekoen kirol-txapelketetarako, beste bat.

Estatuko edo nazioarteko lizentzia duten kirolariak:

Batzordearen proposamenak onartu dira, hauek izan ezik:

- **13.1 artikuluan** ez da argitu kirolari ez-federatuek ere lehiaketatik kanpo kontrolak egin beharko dituztela. Ez da beharrezkoa; izan ere, artikulua "lege hau aplikatu beharreko kirolariek" ari da, eta kirolari ez-federatuak ere kontuan hartuta daude legean (1.5 artikulua eta 1.6 artikulua).

- Bere horretan gelditu da **19. artikulua**; hau da, EAEn dauden eta nazioarteko edo estatuko lehiaketetan ari diren kirolariei lehiaketatik kanpo dopin-kontrolak egiteko eskumenaz diharduena.

- Bere horretan gelditu da **22. artikulua**. Aholku Batzorde Juridikoren ustez, ez da egokia administrazioak zigortzea, lotura bereziren bat baldin badago. Gure ustez, ordea, argi dago egokia dela, bi arlo eta bi helburu direlako. Eta *non bis in ídem* printzipioa errespetatzen du. Federazio batek zigor bat ezarri beharra du, lehiaketek ordena egokia izateko, garbiak izateko eta kirolarien osasuna zaintzeko. Eta, adibidez, txirrindulari bati ezarritako zigorra, bestelakorik ez bada, federazioaren lehiaketetarako izango da. Administrazioaren ahalmena, oro har, kirol-legea zaintzeko erabiltzen da, lehiaketak garbiak izan daitezen, eta txirrindulariari ezarritako zigorrek kirol guztietarako balio dezakete (triatloia, atletismoa, txirrindularitza, igeriketa, eta abar). Berdin gertatzen da kirol-lehiaketetako indarkeriarekin. Estatuko legerian bi ahalmen-mota datoz. Baita EAEko Kirolaren Legean ere.

Kirol-jarduerak antolatzen dituzten pertsonen eta erakundeen ardura:

6. eta 7. artikuluei dagokienez, ez da zuzena Aholku Batzorde Juridikoaren interpretazioa, kirol-federazioek eta Agentziak bakarrik dutela dopin-kontrolak egiteko eta zigorrak ezartzeko ahalmena. Kirol-proba komertzialak, herrikoiak, profesionalak eta bestelakoak antolatzen dituenak dopin-kontrolak egin diezazkieke parte-hartzaileei, baita diziplina-neurriak hartu ere bere eskumenean dauden eremuetan. Esate baterako, hor dira Traineru Kluben Elkartea (TKE), Kantauriko Arraun Elkartea (KAE), Eskuzko Pilota Enpresen Liga (EPEL), maratloi-antolatzaileak eta abar.

Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia:

2011ko ekainaren 28ko Gobernu Kontseiluko akordioari dagokion gastuen murrizketa dela eta –hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. Urterako Aurrekontu Orokorrak Egiteko Jarraibide Ekonomikoak prestatzekoari dagokiona–, moldatu egin dira proiekturako oinarriko 10. eta 11. artikulua: Eusko Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzaren barneko administrazio-unitate bat izango da Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia.

Hortaz, batzordearen proposamenak onartu dira, hau izan ezik:

- Erabilera Terapeutikoa Baimentzeko Euskadiko Batzordeari dagokionez (**11.7 artikulua**), Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak ezarritako arauen arabera osatu beharra dago. Beraz, ez da komeni lege baten bidez zehaztea osaera hori; bestela, gerta daiteke testu arau-emailea askotan moldatu beharra, erabilera terapeutikoen baimenari buruzko nazioarteko arauetara egokitzeko.

Era berean, azpimarratu beharra dago ez Lege Organikoak ez Dopinaren Aurkako Espainiako Agentziari buruzko Errege Dekretuak ez dutela arautzen osaera hori.

Kirol-arloko dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioa Berresteko Tresnak, 2005eko azaroaren 18an Parisen eginak, eta 2007ko otsailaren 16an BOEn argitaratuak, II. eranskinean ezartzen ditu batzorde horiek osatzeko arauak. Gainera, Kanpo Arazoetarako eta Lankidetzarako Ministerioak dagoeneko argitaratu du, 2010eko abenduaren 30ean, konbentzio hartako II. eranskinaren

moldaketa, erabilera terapeutikoen baimenari buruz, hain zuzen.

Edonola ere, honako idatzi hau ateratzeko asmoa du, 11.7 artikulurako:

"Erabilera Terapeutikoa Baimentzeko Euskadiko Batzordea (COVAUT) autonomia funtzional osoz ariko da bere zereginak betetzen. Eusko Jaurlaritzak esango du nola eta nork osatuko duten batzorde hori eta zer prestakuntza beharko duten, Kirol-arloko dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioak 2005eko azaroaren 18ko arauen II. eranskinean ezarritako arauen arabera".

- **12.1 artikuluan**, ez da ezabatu j) paragrafoa, ez baita f)-ren berdina. Gauza bat da urteko dopin-kontrolen programa bat egitea, barnekoa eta konfidentziala, eta beste gauza bat zehaztea zein lehiaketetan egin behar diren dopin-kontrolak. Baina hobetoxeago idatz zitekeen, eta aldaketatxoren bat egin da.

- **12.1.n** artikulua bere horretan utzi behar da. Agentziaren zeregina izango da *"diziplina-espedienteen izapideak egitea eta haiek ebaztea, kirol-federazioek ez badituzte epearen barruan ebatzi"*. Kontua ez da kirol-federazioek izapideak ez hasi izana; gerta daiteke hasi eta gero bertan behera gelditzea. Nolanahi dela ere, Agentziak izan behar du ebazteko eginkizuna. 38.3 artikulua erekin bat etorritzeko, hauxe gehitu dut: *"baita lotura bereziko harreman bat daukaten gainerako erakundeak ere"*.

Erabilera terapeutikoen baimenak:

Batzordearen proposamenak onartu dira, hauek izan ezik:

- **15. artikuluan**, ez da gehitu erabilera terapeutikoen baimenari buruzko definiziorik. Definizio hori ez dago oraingo Lege Organikoan, ezta Diputatuen Kongresuan aurkeztutako berritze-proiektuan ere; definizioen glosario luze bat dakar, gainera, lege-proiektu horrek. Horretaz gainera, 8. artikuluan, kirolarien eskubideez ari dela, ageri da zer den baimen hori lortzeko eskubidea.

- **23.5 artikuluan**, ez daude araututa erabilera terapeutikorako baimenak emateko eskakizunak eta prozedura. Ezta 7/2006 Lege Organikoan eta berritze-proiektuan ere. Baldintza horiek, orain arte estatuan gertatu den bezala, araudiaren arabera arautzen dira. Arrazoia oso logikoa da: etengabe moldatu beharreko xehetasunez ari gara, eta ezin dira izoztu xedapenaren lege-mailako arrazoiaren bidez.

Norberaren intimitaterako eskubidea eta datuak babestea:

17.4 artikuluan, osasun-kontrolen helburuari eusten zaio: kirolariek dopinaren eta osasunaren betebeharez legeak dioena betetzen dutela kontrolatzea. Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, *"ez dute ondo beteko beren eginkizuna... behin araua hautsi dela berretsi eta zigorrik ez bada"*. Baina argitu beharra dago helburua ez dela errepresioa bakarrik, prebentzioa ere bada helburua, hau da: jokalariek dopin-araua betetzen dutela kontrolatzen saiatzen diren klubak eta gainerako kirol-erakundeak kirol-arazo eta arazo juridiko eta ekonomiko larrien prebentzioa. Ez liteke pentsa kirol-erakunde batek egun garrantzitsuei begira bere kirolariei kontrolik ezin egin ahal izatea balizko zigor kolektiboak saihesteko (partida-galtzeak, puntu-galtzeak eta abar). Hau da, dopin-kontrolak ez dute

zertan beti errepresiorako izan.

Ordea, **46. artikuluan**, Kirolariaren Osasun Txartelari buruzkoan, kiroleko dopinaren aurkako borrokarekin zerikusia duten helburuak kendu dira.

Bestelako kontuak:

Batzordearen oharrak onartu dira, hauek izan ezik:

- **8. artikuluan**, kirolarien eskubideei buruz, kirolariek ez dute laginak suntsitzeko eskubiderik, nahiz eta abiatutako prozedura-zigortzailea sendoa izan. Bestela, gerta daiteke substantziaren bat aurkitzeari buruzko espediente-zigortzailearen ebazpena absoluziozkoa izatea, eta kontrola egin eta urte batera ematea, baina ez pasatu izana preskripzioko urteak beste substantzia batzuk edo substantzia berak beste prozedura aurreratuago batzuen bidez bilatu ahal izateko. Beraz, ezin da onartu laginak deuseztatzea, abiatutako prozesuetako baten ebazpen sendoa izan ondoren berehala; izan ere, behin baino gehiagotan aztertu behar izan dira laginak preskripzioaren epearen barruan.

- Bere horretan utzi da testuko **23.2 artikulua**, Aholku Batzorde Juridikoaren oharrak gorabehera. Proiekturako oinarrian honela dio: "*kirolariaren erantzukizuna ezartzeko, ez da beharrezkoa izango asmoa, erabilera kontzientea edo axolagabekeria erakustea*". Aurrekoa edonola izanda ere, *demonstratu ahal* du ez duela errurik edo axolagabekeriarik izan edo ez zuela kirol-errendimendua hobetu nahi. Horrela gertatuz gero, *Dopinaren Aurkako Munduko Kodean ezarritako irizpideak jarraituko dituzte*". Harritzekoa da proiekturako oinarriaren testuarentzat horrelakoak izatea; izan ere, 7/2006 Legea baino zorrotzago eta estuago lotzen zaio nazioarteko araudiari. Estatuko lege horrek kirolarien ardura ezartzen du "edozein dela ere kasua bere baitan detektatuz gero" (esan nahi baita, ezelako substantzia debekaturik ezin dela egon haren organismoan) Hau da, kirolariaren erantzukizuna osoa eta baldintzarik gabekoa izango da, ñabardurarik gabekoa, debekatutako substantzia bere organismoan detektatuz gero. Bestaldera, proiekturako oinarrian, kirolariak demostra dezake substantzia hori ez zegoela bere erruz edo bere axolagabekeria bere organismoan, edo ez zuela kirol-errendimendua hobetu nahi. Lege Organikoaren berritze-proiektuan "edozein dela ere kasua" adierazpena ezabatu da, baina, hala ere, estatuko legea askoz zorrotzagoa da proiekturako oinarria baino. Ezin daiteke ados egon Aholku Batzorde Juridikoak testuaz egiten duen interpretazioarekin, kirolariari nolabaiteko erantzukizun objektiboa ezartzen zaiola. Erantzukizun objektiboa dago artikulatua, eta ez subjektiboa, eta horrek errugabetzen du kirolaria alderdi substantibotik; hau da, inposatu egiten da errugabetasun-elementuen abstrakzioa eginda. Ordea, erantzukizun subjektiboa oinarritzen da kirolariaren erruan edo axolagabekeria. Proposatutako testuak erruan oinarritutako erantzukizun subjektiboa ezartzen du; kontua da arau bat ematen dela probaren kargaren aldetik eta, estatuko eta nazioarteko araudiari jarraituta, *bere organismoan* substantzia debekatua detektatu dioten kirolariari ezartzen zaiola erantzukizuna; eta, hala, kirolaria bera erantzukizunetik libre gerta daiteke, ziurtatuz gero substantzia hori ez dagoela bere erruz edo axolagabekeria bere organismoan edo errendimendua artifizialki handitzeko ez beste zerbaitetarako erabili duela. Ez baldin bada nahi dopinaren aurkako borroka eraginik gabe utzi, ezin da eskatu kontrol-erakundeek ziurtatzea zein zen kirolariaren asmoa. Deabruzko proba izango

litzateke.

- **40. artikuluan**, ez dago zehaztua non ez daitezkeen begiratu botikinak, kirol-poltsak eta abar. Egiaz, 40. artikulua Lege Organikoaren (39. artikulua) erreprodukzio bat da, eta hartan ere ez dago zehaztua non ez daitezkeen begiratu. Gehitu daiteke, baina "a priori" hutsala gerta daiteke, agindu konstituzional bat betetzearren, ikuskatze hori pertsonaren funtsezko eskubideak errespetatuta egingo dela.

Araudiaren teknika:

Batzordearen oharrak onartu dira, hauek izan ezik:

- Batzordeak erabaki du xedapen bat aipatzean izen osoak agertu behar duela. Hala ere, Estatuaren Aldizkari Ofizialean emandako araudiaren teknikaz emandako arauetan –horiek aplika daitezke, Autonomia Erkidegoan ez baitago horri buruzko berariazko erreferentziarik–, arau zehatz bat dago horri buruz, "*aipuren ekonomia*" izeneko araua: "*Lehen aipua, hala azalpenezko zatian nola irekierakoan, osoa izan behar du, eta labor daiteke gainerakoetan, mota, zenbakia eta urtea aipatuta, eta, hala badagokio, data*". Eta horixe egin dut; legeen lehen aipuan osoa idatzi, baina hurrengoetan mota, zenbakia eta urtea adierazi. Gehiegizkoa ematen du titulu luzeko legeak aldiro osorik aipatzen aritzeak.

- **39.7 artikuluan**, ez dugu bete Aholku Batzorde Juridikoaren ohar hau: "*39.7 artikulua berriz ikusi beharra dago; izan ere, dagokion diziplina-erakundeak hartutako erabaki-zigortzaileak ez daitezke hel egin, 39.6 artikulua arabera; horregatik, zaila da diziplina-erakundeak suspentsioa erabakitzea ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatuko duten bermeak hartu aurretik, balizko ezespenen bat baldin badago*"; izan ere, 39.6 artikuluan, ez du esaten ezin dela helegiterik ipini; argitzen du ezin dela helegiterik ipini "*beren barruan*" (kirol-federazioetan eta lotura bereziko harremana duten gainerako erakundeetan). Hau da, ezin da helegiterik ipini bestelako eskaerak baldin badaude.

39.7 artikulua horretan bertan, Aholku Batzorde Juridikoak adierazi du, eskumeneko helegite bat dagoenean, ebazpen-zigortzaileak eteteko arauak dagokion araudi prozesalak zehaztuko dituela. 39.7 artikulua ez du arautzen araudi prozesalarena den gai bat, eta proiekturako oinarriak literalki aipatzen du 7/2006 Lege Organikoak agertzen duena 28.5 artikuluan.

- Beste kasu honetan ere, ez dugu aintzat hartu Aholku Batzorde Juridikoaren oharra; ohar horretan dio **47.2 artikulua** asistematikoa dela ez duelako inolako zerikusirik aginduan arautzen den konfidentzialtasuna eta sekretua gordetzearekin. Egiaz, sistematikaren irizpideari eta oraingo 7/2006 Lege Organikoaren testuari jarraitu gataizkio (34. artikulua). Eta, gainera, bigarren atalak konfidentzialtasuna mugatzen du, esaten baitu helburu jakinetarako bakar-bakarrik erabil daitezkeela dopin-kontrolak egiten dituztenek lortutako datuak, txostenak edo aurrekariak.

Gasteizen, 2011ko abenduaren 5ean.

Patxi Mutiloa Aldazabal
Kirol-zuzendaria

V

MEMORIA ECONÓMICA / MEMORIA EKONOMIKOA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



MEMORIA ECONÓMICA RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

Una de las novedades más importantes del anteproyecto de Ley es la adecuación del marco institucional al fenómeno del dopaje con la creación de la Agencia Vasca Antidopaje. El tiempo transcurrido desde 1998, fecha de aprobación de la vigente Ley del Deporte, ha puesto de manifiesto la tendencia generalizada a la creación de agencias nacionales antidopaje. Una de las razones para la creación de estas agencias es su mayor especialización para la realización de determinadas funciones y su independencia funcional. Se trata de separar las funciones de promoción del deporte de alto nivel y de las demás manifestaciones del deporte de rendimiento, que siguen bajo el paraguas de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, y el control de las prácticas de dopaje, que estaría dirigido por la Agencia Vasca Antidopaje.

La propia Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje prevé la creación de Agencias Antidopaje en las Comunidades Autónomas y la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje, contempla la constitución de la Comisión de Agencias Antidopaje *"cuando se acredite la existencia de agencias antidopaje cuyo ámbito sea el de las comunidades autónomas"*.

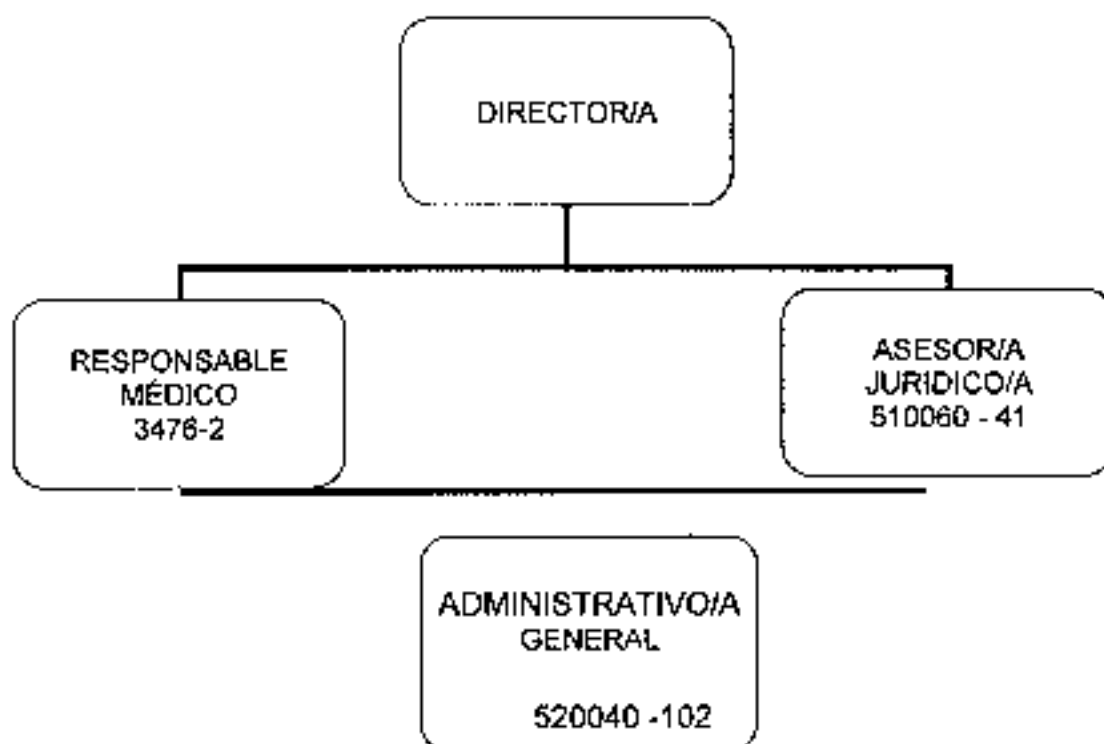
Además, la Agencia Vasca Antidopaje prevista en este anteproyecto de Ley viene avalada por un acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco, de 22 de febrero de 2006, donde se instaba al Gobierno Vasco a la elaboración de la norma por la que se regulase la prevención, control y represión del dopaje en el deporte del País Vasco, norma que debía incluir la creación de la Agencia Vasca Antidopaje.

Procede señalar que, siendo cierto que la nueva ley implicará necesariamente un gravamen presupuestario en futuros ejercicios (según la fecha de inicio de actividades 2012 ó 2013), pues crea una nueva entidad, la Agencia Vasca Antidopaje, no es menos cierto que la actual Dirección de Deportes del Gobierno Vasco ya cuenta con un médico especializado en el tema de los controles de dopaje, que sería objeto de readscripción e igualmente viene contratando hasta la fecha la mayoría de los servicios que deberá utilizar la futura Agencia Vasca Antidopaje para la realización material de los controles.

Además, la Agencia se ha concebido con una organización muy sencilla basada en un órgano unipersonal, la Dirección, y un órgano colegiado (Consejo Consultivo) adecuadamente dimensionado, con escasos miembros y cuya pertenencia no dará

lugar a retribución alguna, aunque las y los miembros y participantes de dicha Comisión tendrán derecho al abono de los gastos y dietas en los términos que se determinan en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, de indemnizaciones por razón de servicio.

Asimismo, se ha previsto que dicha agencia únicamente disponga de cuatro puestos (un alto cargo con rango de Director/a, un/a responsable médico, un/a asesor/a jurídico/a y un/a administrativo/a) de conformidad con el siguiente esquema organizativo, referenciados a plazas actualmente existentes en la Dirección de Deportes, de los cuales, el responsable médico (3476-2) se adscribiría a la Agencia:



PUESTO	Retribuciones	Cotización Social	Total
Un/a director/a	87.087,03	20.595,72	87.682,75
Un/a responsable médico 3476-2	52.340,40	16.058,50	68.408,90
Un/a asesor/a jurídico/a 510060 - 41	44.805,60	13.755,32	58.560,92
Un/a administrativo/a 520040 -102	30.197,59	9.270,42	39.468,01

Todo lo cual conlleva un gasto en concepto de retribuciones de personal de 254.120,58 € anuales.

Asimismo dicha agencia realizaría controles antidopaje, tal y como en la actualidad efectúa la Dirección de Deportes, lo que supondría un gasto anual de 71.864,13 €. destinados al laboratorio encargado de realizar los correspondiente análisis para determinar la presencia de sustancias prohibidas, y otros 30.000 € para sufragar la recogida de muestras de orina y sangre a los deportistas por personal médico autorizado.

En relación al contrato del "servicio de análisis de controles antidopaje"

Consignación presupuestaria:

2011= 30.520

Autorizaciones de gasto realizadas:

AD= 30.517,24 (crédito comprometido en años anteriores) (referencia intervención: 11-11-001965-0001) (lo relativo al contrato formalizado en 2009 cuya vigencia es del 06/mayo/2009 al 05/mayo/2011).

A= 120.040,68 (distribuido en 3 ejercicios, 2011= 41.346,89, 2012= 62.020,34; 2013= 20.673,45) (prórroga del contrato "servicio de análisis de controles antidopaje (11/13) (se prorroga durante el periodo del 6/mayo/2011 hasta el 5/mayo/2013) (referencia de intervención= 11-11-013435-0001).

11	45120	13.0100	23899	001	ANTIDOPIN- KONTROLEN ANALISIAK (09/11). Dopin- kontrolen analisiak egiteko zerbitzua. Lehendik agindutako kreditua. ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (09/11). Servicio de análisis de controles antidopaje. Crédito comprometido en años anteriores.	30.520

En relación al contrato para la "realización de controles antidopaje (11/12) (realización de pruebas y envío de muestras a laboratorio homologado, para lo cual es imprescindible contratar médicos debidamente habilitados por el Consejo Superior de Deportes).

Consignación presupuestaria:

2011= 30.000

Autorizaciones de gasto realizadas:

A= 50.000 (distribuido en 2 ejercicios, 2011= 30.000; 2012=20.000) (referencia intervención: 11-11-016341)

11	45120	13.0100	23899	003	ANTIDOPIN-KONTROLEN FROGAK 2011. Antidopin- kontrolak burutzeko zerbitzuak (frogak egitea). PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE 2011. Servicios para la realización de controles antidopaje (realización de pruebas).	30.000

Igualmente dentro de los órganos a implementar se encuentran el consejo consultivo y el comité Vasco de Autorizaciones de uso Terapéuticos. Si bien en el primero no se prevé gasto alguno, salvo los gastos y dietas regulados por el Decreto 16/1993, plenamente subsumibles en los gastos ordinarios de funcionamiento, en el segundo, dadas las posibles peticiones de uso terapéutico a analizar únicamente se ha estimado 3.000 € anuales para hacer frente a la contratación de un médico externo con tal función.

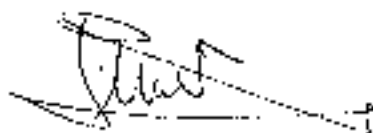
No se ha previsto gasto alguno para el local donde se ubicarla la mencionada Agencia, ya que es intención que se localice en los locales del nuevo campo de fútbol San Mames Barria radicado en Bilbao, que serán cedidos al Gobierno Vasco como contraprestación a la participación en la sociedad encargada de la construcción de la citada instalación deportiva.

Igualmente los medios materiales (mobiliario, equipo informáticos, material fungible, etc) necesarios se estiman en 100.000 euros anuales.

En cuanto a los ingresos, teniendo en cuenta los obtenidos en ejercicios anteriores, no se prevé que sean de especial relevancia, alrededor de 6.000 euros.

Todo lo cual conlleva que el gravamen presupuestario anual por el funcionamiento de la Agencia Vasca Antidopaje se estime en 458.984,71 €.

En Vitoria-Gasteiz, a de 19 de julio 2011



Patxi Mutiloa Aldazabal
Director de Deportes

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE-AURREPROIEKTUARI DAGOKION MEMORIA EKONOMIKOA

Lege Aurreproiektuaren berrikuntza garrantzitsuenetako bat zera da: erakunde-esparrua dopinaren fenomenora egokitzea, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortuta. 1998. urteaz geroztik –urte horretan onartu zen indarrean dagoen Kirolaren Legea– igaro den denborak agerian utzi du dopinaren aurkako agentzia nazionalak sortzeko joera nagusitu dela. Mota horretako agentziak sortzeko ematen den argudioetako bat da askoz ere espezializatuagoak daudela zeregin jakin batzuetarako, eta, horrez gain, funtzionalki independenteak direla. Bada, gogoan izan behar da, batetik, goi-mailako kirola eta errendimenduko gainerako kirol-jarduerak sustatzeko eginkizuna Eusko Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzarena dela; eta bestetik, dopina kontrolatzeko zeregina Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarena dela. Kontua da bi eginkizun horiek bereizi egin behar direla.

Azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoak, osasuna babestu eta kiroleko dopinaren aurka egitekoak, autonomia-erkidegoetan dopinaren aurkako agentziak sortzea aurreikusten du; eta otsailaren 8ko 185/2008 Errege Dekretuak, Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziaren estatutua onartzekoak, hirugarren xedapen gehigarrian dopinaren aurkako agentzien batzordea eratzeaz mintzo da, “baldin eta aplikazio-eremua autonomia-erkidegoa duten dopinaren aurkako agentziak daudela egiaztatzen bada”.

Gainera, Lege Aurreproiektu honetan aurreikusten den Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura Batzordearen 2006ko otsailaren 22ko akordioaren bermea ere badu; izan ere, Batzordeak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion Euskadiko kirolean dopina prebenitzea, kontrolatzea eta zigortzea helburu zuen araua idatz zezala, eta horren barruan Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortu beharra aipatzen zen.

Nabarmendu beharrekoa da egia dela lege berriak nahitaez ekarriko duela hurrengo ekitaldietako aurrekontuan eragitea (jardueren hasiera-dataren arabera, 2012koan edo 2013koan), beste erakunde bat sortzea xedatzen baitu, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia, alegia. Baina egia da, aldi berean, Eusko Jaurlaritzako egungo Kirol Zuzendaritzak baduela dopin-kontrolen gaian espezializatuta dagoen medikua (berriz adskribatu beharko da) eta gaurdaino Zuzendaritzak berak kontratatatu dituela Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak kontrolak egiteko beharko dituen zerbitzu gehienak.

Halaber, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia oso erakunde sinplea izateko asmoarekin sortu da. Hau da, pertsona bakarreko organo bat –zuzendaritza– eta kide anitzeko organo bat –aholku-kontseilua–, kide-kopuru txikikoa, baina behar besteko tamainakoa. Aholku-kontseiluko kide izateagatik ez da ordainsaririk egongo, baina, hala ere, kontseilu horretan parte hartzen duten kideek gastuak eta dietak jasotzeko eskubidea izango dute, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan zehazturiko eran.

Horrez gain, Agentzia lau lanpostuz osatua egotea aurreikusten da (zuzendaritza-lanak egingo dituen goi-kargudun bat, arduradun mediko bat, lege-aholkulari bat eta administrari bat). Lanpostu horiek dagoeneko existitzen dira Kirol Zuzendaritzan; horietatik bat, arduradun medikoa (3476-2), Agentziari atxikiko zaio. Langile horiek eskema honen arabera antolatuko dira:

ZUZENDARIA
 ARDURADUN MEDIKOA (3476-2)
 LEGE-AHOLKULARIA (510060-41)
 ADMINISTRARI OROKORRA (520040-102)

LANPOSTUA	Ordainsariak	Gizarte Segurantzako kotizazioa	Guztira
Zuzendari bat	67.087,03	20.595,72	87.682,75
Arduradun mediko bat (3476-2)	52.340,40	16.068,50	68.408,90
Lege-aholkulari bat (510060-41)	44.805,60	13.755,32	58.560,92
Administrari bat (520040-102).	30.197,59	9.270,42	39.468,01

Horrek guztiak, langileen ordainsarien kontzeptuari dagokionez, urtean 254.120,58 euroko gastua eragiten du.

Agentzia horrek, halaber, dopin-kontrolak egingo ditu, gaur egun Kirol Zuzendaritzak egiten dituen bezala. Eginkizun horrek, urtean, 71.864,13 euroko gastua eragingo du: hain zuzen ere, debekatutako substantziak badiren zehazteko kasuan kasuko analisiak egingo dituen laborategiari ordaintzeko. Beste 30.000 euro beharko dira kirolariei gernu- eta odol-laginak ateratzeko baimenduta dauden medikuek eragindako gastua ordaintzeko.

“Dopin-kontrolen analisiak egiteko zerbitzua” kontratuari esleitutako aurrekontua:

2011= 30.520

Baimendutako gastuak:

AD= 30.517,24 (lehendik agindutako kreditua) (esku-hartzearen erreferentzia: 11-11-001965-0001) (2009an formalizatutako kontratuari dagokiona; kontratuaren iraunaldia 2009/05/06tik 2011/05/05era artekoa da).

A= 120.040,68 (3 ekitalditan banatuta: 2011= 41.346,89; 2012= 62.020,34; 2013= 20.673,45) (“Dopin-kontrolen analisiak egiteko zerbitzua” kontratuaren luzapena (2011/2013) (2011/05/06tik 2013/05/05era arte luzatu da) (esku-hartzearen erreferentzia: 11-11-013435-0001).

11	45120	13.0100	23899	001	ANTIDOPIN-KONTROLEN ANALISIAK (2009/2011). Dopin-kontrolen analisiak egiteko zerbitzua. Lehendik agindutako kreditua. ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (09/11). Servicio de análisis de controles antidopaje. Crédito comprometido en años anteriores.	30.520

“Antidopin-kontrolak burutzeko zerbitzuak” (2011/2012) kontratuari dagokionez (kontrolak egitea eta laginak homologatutako laborategi batera bidaltzea; horretarako, funtsezkoa da Kirol Kontseilu Gorenak lan hori egiteko gai diren medikuak kontratatzea).

Esleitutako aurrekontua: 2011= 30.000

Baimendutako gastuak:

A= 50.000 (2 ekitalditan banatuta: 2011= 30.000; 2012= 20.000) (esku-hartzearen erreferentzia: 11-11-016341).

11	45120	13.0100	23899	003	ANTIDOPIN-KONTROLEN FROGAK 2011. Antidopin- kontrolak burutzeko zerbitzuak (frogak egitea). PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE 2011 Servicios para la realización de controles antidopaje (realización de pruebas).	30.000

Horrez gain, badira ezarri beharreko organo gehiago ere: Aholku Kontseilua eta Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea. Lehendabizikoari dagokionez, ez da inolako gasturik aurreikusten, 16/1993 Dekretuak araututako gastuak eta dietak izan ezik; horiek funtzionamenduak eragindako ohiko gastuetan sar daitezke oso-osorik. Bigarrenari dagokionez, erabilera terapeutikoa aztertzeke egin daitezkeen eskaerak kontuan hartuta, urtean 3.000 euro bakarrik beharko dira eginkizun hori beteko duen kanpoko medikua kontratatzeke.

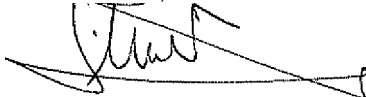
Agentzia horrek izango duen egoitza kokatzeko lokalarentzako ez da inolako gasturik aurreikusi. Izan ere, Bilboko San Mames Barria futbol-zelai berriaren lokaletan jartzea da asmoa. Lokal horiek Eusko Jaurlaritzari eman dizkiote, kirol-instalazioa eraikitzeaz arduratu den sozietatean parte hartu zuelako.

Bitarteko materialei dagokienez (altzariak, informatika-ekipoak, material suntsigarria...), urtean 100.000 euro beharko direla aurreikusi da.

Diru-sarrerei dagokienez, aurreko ekitaldietan eskuratutakoak kontuan izanda, ez da aurreikusten oso handiak izango direnik; 6.000 euro inguru, alegia.

Hori guztia aintzat hartuta, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren eginkizunek urteko aurrekontuan 458.984,71 euroko gastua eragingo dutela aurreikusten da.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko uztailaren 19a



Patxi Mutiloa Aldazabal
Kirol Zuzendaria

VI

INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO / ESTATUKO ABOKATUTZAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



REFERENCIA ABOGACÍA DEL ESTADO CSD 206/2010

ASUNTO: Petición de informe acerca del Anteproyecto de Ley contra el dopaje del Gobierno vasco.

Esta Abogacía del Estado ha examinado su petición de informe relativa al asunto de referencia. Consultadas las prescripciones legales aplicables al caso, cumpíenme y tengo el honor de informar lo siguiente:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Agencia Estatal Antidopaje ha solicitado de esta Abogacía del Estado un informe acerca del Anteproyecto de ley contra el dopaje en el deporte procedente del Departamento de cultura del Gobierno Vasco. La petición de informe se realiza de conformidad con los artículos 5.1 c) y 14 del estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje, en relación con la Disposición Adicional cuarta de Real Decreto 1370/2008, de uno de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.

La estructura territorial y administrativa del Estado español establecida en la Constitución Española prevé la coexistencia de distintas administraciones territoriales, con diferentes competencias o, como ocurre en el caso del deporte y por extensión del dopaje, con diferentes niveles territoriales y materiales de competencias. Evidentemente en el análisis de una norma deportiva con rango de



ley de una comunidad autónoma es necesario analizar, siquiera sea de manera breve, el sistema constitucional de reparto de competencias en materia de deporte, sistema contenido en los artículos 148 y 149 del texto constitucional. El Tribunal Constitucional rechaza que la gestión de los intereses propios de las Comunidades Autónomas, las cuales disfrutan de competencias exclusivas en materia de deporte, pueda suponer la afectación de intereses que son propios del deporte federado español en su conjunto, de manera que se liga el ejercicio de competencias en materia de deporte con el ámbito deportivo al que se refiera la actuación concreta de que se trate, lo que supone deslindar los respectivos ámbitos de actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Por supuesto, el hecho de que el Estatuto de Autonomía del País Vasco o la Ley del Deporte de la Comunidad Autónoma reconozcan la competencia exclusiva de ésta en materia de deporte no autoriza a entender que esa competencia se extienda más allá de donde abarcan, por su propia naturaleza, las competencias autonómicas, que son las actividades propias de su ámbito, nunca las estatales. En realidad, dicho lo anterior, una de las cuestiones subyacentes en el presente informe no es otra que la de delimitar cuáles son los ámbitos competenciales en los que operan cada una de las Administraciones Públicas concurrentes. En este sentido, el territorio de la Comunidad Autónoma vasca no es solamente territorio vasco sino también territorio estatal a los efectos de organizar en él competiciones de ámbito estatal. No existe, por lo tanto, una contradicción entre la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma vasca en materia de deporte y el hecho de que esta competencia alcance únicamente al deporte autonómico y no al deporte estatal. Por lo tanto, parece lógico respetar en toda norma autonómica dos principios fundamentales: el de competencia estatal para la organización y dirección de las competiciones calificadas oficialmente como estatales y el principio de coordinación administrativa, que debe evitar solapamientos de funciones que supongan posibles actuaciones contradictorias o un ejercicio desproporcionado de controles sobre el ciudadano.



Este sistema de distribución competencial viene siendo sostenido por el Tribunal Constitucional. En efecto, el alto intérprete de la Constitución en su sentencia núm. 1/1986 de 10 enero, se ocupa de analizar los límites competenciales que no puede sobrepasar la Comunidad Autónoma de Cataluña a la hora de ejercer pretendidas competencias sobre participación en competiciones internacionales. Dice el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“importa reparar, en efecto, en que para el planteamiento de la actora, la potestad de autorización recabada habría de ejercerse necesariamente con posterioridad a la intervención de la Federación Española respectiva, porque sólo cuando ésta haya decidido no comparecer en la competición de que se trate y si autorizar a una Federación regional para hacerlo por sí, siendo el encuentro de carácter «amistoso», podrá producirse tal participación, a tenor de la norma de la LCCFD (art. 14.1) expresamente invocada por la representación de la Generalidad. Siendo esto así, la intervención administrativa disputada habrá de incidir sobre unos entes «las Federaciones Españolas» cuya actividad se desenvuelve en el ámbito nacional y que no quedan, como tales, ni tutelados ni asistidos por la Administración deportiva de las distintas Comunidades Autónomas, sino, antes bien, por la Administración del Estado, siendo pertinente tener en cuenta, en este punto, lo dispuesto en el art. 17.1 de la LCCFD, en cuya virtud «sin perjuicio de la independencia de las Federaciones, las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos, pueden recabar las competencias necesarias para velar por el estricto cumplimiento en su territorio de los fines deportivos para los que aquéllas han sido creadas». La competición internacional por su régimen federativo interno de autorización, desplaza la articulación del eventual régimen de su intervención administrativa más allá del ámbito propio de una Federación regional y debe subrayarse que esta afectación a los intereses generales del deporte federado no ha sido en ningún momento discutida por la actora. Pues bien, desde el momento en que la decisión sobre la participación en la competición ha adquirido rango nacional, por haberse pronunciado ya la Federación Española correspondiente, es claro que la posible intervención administrativa que aquí se viene considerando no puede corresponder a las autoridades de la Comunidad Autónoma, pues si ésta tiene, sin duda, competencias en materia deportiva con arreglo a su Estatuto de Autonomía, no es menos cierto que estas competencias, como cualesquiera otras de las que ostente, no pueden desplegarse sobre entes que, como en este caso ocurre, existen y desarrollan sus actividades en un ámbito nacional sustraído ya al ejercicio de las potestades autonómicas, estando la autonomía constitucionalmente garantizada



a las Comunidades Autónomas, al servicio de la gestión de sus intereses propios (art. 137 de la Constitución), limitados ratione loci (art. 25.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), y no siendo desde ella posible, ciertamente, la afectación, como aquí habría de ocurrir, de intereses que son propios del deporte federado español en su conjunto. Si así no fuera, por lo demás, se quebraría la coherencia y el sentido mismo de la intervención administrativa controvertida, en la que ha de buscarse, sin perjuicio de otras consideraciones no pertinentes ahora, que sean coextensos los ámbitos de actuación del ente controlado y de aquel que ejerce el control. Así, autorizada por una Federación Española la comparecencia internacional de una de las Federaciones catalanas que en ella se integran, no puede reclamar la Generalidad, como competencia propia, la de sujetar a su intervención administrativa ulterior, ratificándola o no, aquella autorización federativa”

Los pasajes subrayados, si bien hacen referencia a competiciones internacionales, son perfectamente aplicables al caso que nos ocupa. De lo que se trata es de saber si sobre una competición cuyo ámbito excede del autonómico, por declaración federativa estatal o internacional, la Administración autonómica, tiene potestades en materia de dopaje. No cabe duda de que el ámbito internacional y el estatal exceden del autonómico y como dice el Tribunal Constitucional, afectan al deporte federado en su conjunto, no sólo al vasco. Por lo tanto, el ejercicio de potestades administrativas deportivas en materia de dopaje sobre aquellos ámbitos corresponden de manera exclusiva y excluyente al Estado.

Segundo.- Sentada la anterior premisa procede analizar el contenido de la norma objeto de este informe en lo que se refiere a la cuestión analizada en el epígrafe anterior. Dicha regulación está contenida en los apartados cuarto y quinto del artículo primero del anteproyecto que definen, respectivamente, el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo de aplicación. La aplicación coordinada de ambos es la que va a determinar el verdadero ámbito de aplicación de la norma en su conjunto y el que nos permitirá comprobar si se ha respetado la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de deporte y, concretamente, en materia de dopaje.



Respecto del ámbito material de aplicación de la ley éste está constituido por las actividades y competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco. Esta definición general chocaría radicalmente con el sistema de distribución constitucional de competencias si no fuera porque en el inciso final del precepto se establece una exclusión de la aplicación de la ley respecto de las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y respecto de las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente. Parece que el legislador vasco ha querido respetar la distribución constitucional de competencias excluyendo de la aplicación de su norma las competiciones de ámbito estatal de carácter oficial, es decir, las que hayan sido declaradas como tales por la entidad competente para ello de acuerdo con la Ley del Deporte y el Real Decreto de federaciones, que son las federaciones deportivas españolas. Lo mismo hace respecto de las competiciones internacionales, por una mera razón de competencia territorial y objetiva, ya que parece lógico que sobre esas competiciones la administración autonómica no disponga de competencias en materia de dopaje.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la ley, éste se extiende a deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco, así como a todos aquellos deportistas mientras residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco. También incluye dentro del ámbito subjetivo de aplicación a cualquier otra persona física o jurídica que desarrolle su actividad deportiva en el País Vasco, aunque sea temporalmente. Finalmente salva la aplicación de las disposiciones estatales e internacionales a cualquiera de los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal o internacional.



En este punto, debemos hacer varias reflexiones. La primera se refiere al posible solapamiento competencial con respecto a determinados deportistas. Así, resultaba innecesaria la referencia a la aplicación de las disposiciones estatales e internacionales que correspondan de acuerdo con el ámbito objetivo estatal o internacional, tal como acabamos de exponer.

En segundo lugar, el ejercicio de las competencias en materia de dopaje presenta una peculiaridad con respecto a la competencia deportiva general. En efecto, de todos es sabido que el dopaje puede conllevar consecuencias sancionadoras derivadas, no sólo de infracciones cometidas en el seno de competiciones (en las cuales es perfectamente posible determinar de antemano si tienen carácter estatal o autonómico) sino también de infracciones derivadas del mero ejercicio de la actividad, por ejemplo, en el caso de entrenamientos habituales o incluso esporádicos. En consecuencia, si en la determinación del ámbito de aplicación de la ley en el caso de competiciones y actividades oficiales respecto de las cuales sea posible la declaración de su carácter estatal debe primar el criterio puramente competencial, relativo al carácter estatal o no de la competición, en el caso de actividades ajenas a las competiciones no se encuentra ningún otro parámetro para enjuiciar la competencia que el tipo de licencia con que cuente el deportista. En efecto, no podemos olvidar que la Ley Orgánica 7/2006, al referirse al ámbito de aplicación de la ley, se refiere a los deportistas que tengan licencia federativa estatal o licencia autonómica homologada y a las competiciones organizadas, promovidas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas. Por tanto, la determinación del ámbito subjetivo de aplicación de las normas de dopaje no viene determinada por la mera presencia en un determinado territorio, sino por la relación jurídica de sujeción que liga al deportista con una determinada entidad deportiva, lo que determina que si el deportista tiene una licencia autonómica existirá competencia autonómica en materia de dopaje, mientras que si la licencia es estatal las competencias deben corresponder a la Administración del Estado. La solución contraria implicaría caer



en el defecto jurídico al que antes aludimos, que supondría confundir el plano meramente territorial con el plano competencial. No tendría sentido atribuir competencias sancionadoras a la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto de personas en relación con las cuales también tiene competencia el Estado.

No se puede equiparar esta situación con la que surge respecto de deportistas no españoles que van a ser objeto de controles de dopaje a instancia de organismos internacionales. En primer lugar, porque las federaciones internacionales o los órganos internacionales de lucha contra el dopaje quedarían privados completamente de competencias en cualquier Estado si no pudieran actuar en su territorio, bien directamente o bien a través de una comunicación a las autoridades competentes. En segundo lugar, porque respecto de estos deportistas en el territorio español existiría una laguna en la aplicación de la normativa en materia de dopaje al ser imposible, por una mera cuestión de soberanía del Estado, que se ejercieran en territorio español potestades coactivas o sancionadoras por parte de otro Estado u organización internacional diferente. En realidad, la solución adoptada por la Ley Orgánica 7/2006 es la más razonable, puesto que respeta el sistema de distribución constitucional de competencias, que como hemos visto, no se basa exclusivamente en criterios territoriales sino en criterios competenciales. Por lo tanto, en este ámbito se sugiere una reforma del ámbito subjetivo de aplicación de la ley para hacerla congruente con la norma estatal y mantener, de esa manera, la debida aplicación del criterio de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, la extensión del ámbito de aplicación subjetivo de la Ley contra el dopaje en el deporte del Gobierno Vasco es extraordinariamente importante. Abarca, como ya hemos visto, a los deportistas con licencia federativa (en esto coincidiría con la norma estatal) pero también a otros deportistas que tengan una licencia universitaria o escolar. Esta extensión parece contraria a un criterio de eficacia y de proporcionalidad en el ejercicio de las potestades en materia de



dopaje. En primer lugar, parece contraria al principio de eficacia dado que la experiencia demuestra que en relación con la ley estatal incluso la limitación del ámbito subjetivo al deporte federado es excesiva. Desde el punto de vista práctico es imposible hacer un control mínimamente extenso respecto del deporte federado en su conjunto, por más que se quiera sostener que la existencia de un ámbito subjetivo de aplicación respecto de un menor número de deportistas puede permitir la aplicación eficaz de la norma. En segundo lugar, la eficacia de la aplicación de las normas de dopaje a determinados sectores que practican el deporte con otros fines muy diferentes de la competición o de la mejora del rendimiento deportivo, como por ejemplo podrían ser los ancianos o los niños, no parece tener ninguna eficacia trascendental en la lucha contra el dopaje. Además, surgen dudas acerca de la proporcionalidad de las medidas restrictivas de las libertades individuales (deber de localización, obligación de permitir los controles) si estas medidas se pueden extender a un número tan importante de personas que practican deporte en la Comunidad Autónoma.

Tercero.- Respecto de los restantes aspectos técnicos referentes al resto de las cuestiones que atañen a la lucha contra el dopaje es necesario hacer una consideración previa. La lucha contra el dopaje exige una coordinación en los aspectos sustantivos de las regulaciones que se dicten en el ejercicio de las propias competencias por parte del Estado y las CCAA. No se entendería, por ejemplo, que la definición de dopaje de una norma autonómica difiriera notablemente de lo establecido en la ley estatal o en el código mundial antidopaje. Es necesario, en consecuencia, determinar si en el texto remitido por el gobierno vasco existe algún tipo de contradicción que afecte a la aplicación de las normas en materia de dopaje, o que genere algún tipo de inseguridad jurídica o de posible perjuicio para los deportistas.

Resulta imprescindible, a estos efectos, analizar en primer lugar el concepto de dopaje. La ley vasca se refiere esta cuestión en el artículo uno, en el que se define



el dopaje como el consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos para aumentar artificialmente el rendimiento deportivo representando ello conducta contraria al espíritu deportivo. Respecto de esa cuestión es necesario hacer varias consideraciones. La primera de ellas se refiere a la indefinición del concepto de espíritu deportivo. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que además presenta notables dificultades de concreción en cada caso. No queda claro si para que exista dopaje, además de que se produzca un aumento artificial del rendimiento deportivo, debe tratarse de un acto contrario al espíritu deportivo, lo cual significaría en la práctica introducir un requisito impreciso que, en definitiva, permitiría siempre alegar la adecuación al espíritu deportivo de la conducta y que generaría la obligación de los tribunales de interpretar la cuestión caso por caso. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la misma definición de dopaje sería de aplicación a las competiciones deportivas en las que participasen animales, es razonable pensar que en ese tipo de competiciones el dopaje se produce con la finalidad de aumentar artificialmente el rendimiento del animal pero también, en algunas ocasiones, con la finalidad de disminuir artificialmente ese rendimiento, supuestos que quedarían fuera del ámbito de aplicación de la norma, lo que no es en absoluto deseable.

También en relación con el concepto de dopaje se utiliza un sistema que ya se ha convertido en clásico en esta materia como es el entender que también será dopaje cualquier infracción de las obligaciones o deberes establecidos en la ley, incluso aunque estos deberes tengan un contenido meramente formal. Esta opción es razonable y congruente con la normativa internacional.

Cuarto.- Merece la pena mencionar también los posibles problemas que pueden generar la técnica normativa seguida en los artículos correspondientes a las responsabilidades de todas las personas y entidades que, de una u otra manera, intervienen en las actividades deportivas y, en consecuencia, pueden estar sujetas a la legislación de control el dopaje. En este sentido el legislador



vasco ha sido muy exhaustivo a la hora de establecer enumeraciones amplias, tratando de asegurar una buena definición de las responsabilidades de estas personas, pero es conocido que en el derecho es imposible preverlo todo y parece razonable concluir que las enumeraciones, por muy extensas que sean, siempre serán insuficientes. Además, este tipo de técnica jurídica complica sobremedura la posibilidad de conocer bien la norma para aquellas personas que no sean expertas en derecho.

Quinto.- En lo que se refiere a la organización administrativa en materia de dopaje, una de las novedades más importantes es la creación de la Agencia Vasca Antidopaje. En ese punto no hay ninguna duda de la posibilidad que tiene el Gobierno Vasco y el legislador vasco de crear una organización pública tendente a hacer uso de las competencias que tanto su Estatuto de Autonomía como la Ley del deporte vasco y la Ley Orgánica 7/2006 le reconocen en materia de deporte. Recordemos en este sentido que el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 7/2006 establece que corresponde a la Agencia Estatal Antidopaje, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades autónomas, la realización de las actividades materiales que se le encomienden en relación con la prevención y el control de la salud y del dopaje en el deporte en el marco y ámbito de aplicación de la presente ley. Por lo tanto, la potestad de autoorganización de las Comunidades Autónomas y la competencia exclusiva en materia de deporte autonómico autoriza la creación de la Agencia Vasca Antidopaje. Por otro lado, el artículo 4.6 de la propia Ley Orgánica autoriza la existencia de agencias antidopaje en el ámbito de las Comunidades Autónomas, obligando a la constitución en el seno de la Agencia Estatal Antidopaje de un órgano de participación de las mismas.

La organización administrativa definida en el artículo 10 del Anteproyecto presenta una sustancial diferencia con el sistema de lucha contra el dopaje establecido a nivel estatal. En efecto, no existe un equivalente en el ámbito vasco de la Comisión de control y seguimiento de la salud y el dopaje. Las funciones en



el ámbito estatal este último órgano serán ejecutadas, cuando corresponda, por la propia Agencia Vasca Antidopaje. Sin perjuicio de las razones que asisten al legislador estatal para establecer su propia organización, no se considera inadecuada la atribución a una misma Agencia de las competencias técnicas y de las competencias sancionadoras. De hecho, este es un modelo muy habitual en el derecho comparado.

En cuanto a sus funciones, el legislador vuelve a elaborar una extensa lista de competencias para terminar señalando que tales funciones se entiende sin perjuicio de las que corresponden en los mismos ámbitos a la Agencia Estatal Antidopaje. Esa última mención es, cuanto menos, oscura. El sistema de distribución constitucional de competencias en materia de deporte exige, tal como hemos visto, que las competencias se puedan diferenciar por el ámbito propio de cada una de las administraciones, estatal o autonómica, concurrentes. La competencia estatal no alcanzará al ámbito de aplicación de la norma vasca y viceversa, la norma vasca no puede alcanzar al ámbito de aplicación propio de la ley estatal. De esta manera, mediante una adecuada definición de las competencias y coordinación de las organizaciones públicas encargadas de hacerlas efectivas, debe resultar imposible un solapamiento en el ejercicio de las competencias y una concurrencia de competencias que justifiquen la referencia del artículo 11.2 del proyecto de ley. Por tanto, esta referencia debe entenderse limitada a los supuestos referentes a la concurrencia de la administración estatal y autonómica en foros o reuniones de ámbito estatal o internacional en las cuales cada Agencia representará los intereses que le son propios, la estatal, del deporte español en su conjunto y la vasca del deporte vasco.

También en punto a la organización de la Agencia destaca el párrafo sexto del artículo 11 en el cual se establece que el personal de la Agencia que ejerza las funciones de inspección a que se refiere el artículo 119 de la Ley del Deporte vasca tendrá la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos, y



estará obligado a guardar secreto sobre las informaciones se conozcan en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado las mismas. Sus actas se presumirán veraces. Este sugerente precepto supone una interesante evolución en la calificación del personal de las entidades involucradas en la lucha contra el dopaje. La consideración de autoridad pública supone un aumento en las garantías de un ejercicio eficaz de la actividad, pero paralelamente implica una mayor responsabilidad en el ejercicio de la función. La presunción de veracidad de sus actas es un instrumento clásico para garantizar la inversión de la carga de la prueba que justifique que quien sostenga unos hechos contrarios a los recogidos en las actas deberá probarlos o, de lo contrario, la presunción de veracidad impondrá la aplicación prevalente de los hechos consignados en las actas. Evidentemente, el desarrollo del procedimiento sancionador debe respetar esta presunción de veracidad pero, curiosamente en el artículo 39, en el que se desarrolla el procedimiento disciplinario, no se hace mención alguna a las actas.

Sexto.- El capítulo tercero del anteproyecto de ley se refiere a los controles de dopaje. Es patente que las precisiones que hemos hecho respecto del ámbito de competencias propias de la Comunidad Autónoma vasca en materia de lucha contra el dopaje determinan una limitación en lo que se refiere a los deportistas que tienen obligación de someterse a los controles de dopaje realizados por la Agencia vasca. Por eso, el artículo 13.1 de la ley presenta ciertas dificultades de interpretación puesto que, aunque el legislador actuó prudentemente a la hora de limitar la obligación de someterse a controles por la Agencia vasca respecto de los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, al mencionar en el inciso final del precepto que ello se entiende sin perjuicio de la obligación de los deportistas de someterse a los controles previstos en las disposiciones estatales e internacionales, se puede estar generando un problema de solapamiento de competencias o de uso excesivo o desproporcionado de las mismas. Qué duda cabe de que cualquier deportista está sujeto a las competencias concurrentes en materia de dopaje del país en que se encuentre y de las entidades internacionales



competentes. Con la nueva ley a estas competencias se añade una tercera, la de la Comunidad Autónoma vasca, lo que exige ser extraordinariamente respetuoso en relación con la aplicación del ámbito subjetivo de las normas autonómicas. Nótese que existe una diferente relación entre las normas internacionales y estatales y entre las normas estatales y las autonómicas. La primera relación permite una aplicación conjunta de las normas puesto que cualquier deportista con licencia estatal está también sujeto a las potestades derivadas de la convención de la Unesco y del Código Mundial Antidopaje. Por contra, el sistema de distribución constitucional de competencias del Estado español supone que el ejercicio de las competencias en materia de dopaje en territorio vasco deba fraccionarse según la naturaleza de la licencia del deportista que vaya a quedar sujeto a la obligación de control. De esta manera los deportistas con licencia vasca quedarán sujetos a la legislación vasca y a la internacional mientras que los deportistas con licencia estatal quedarán sujetos a la legislación internacional y a la Ley Orgánica 7/2006.

Por esta razón, es criticable el contenido del párrafo décimo del artículo 13 del proyecto de ley, si no se entiende en el sentido de que la realización de los controles no implicará posteriormente la tramitación de ningún procedimiento disciplinario acordado a las normas de la legislación antidopaje vasca. Es perfectamente posible que las entidades internacionales o estatales encomienden a la Agencia Vasca Antidopaje, previa la conclusión del correspondiente convenio o acuerdo, la realización de controles, pero obviamente la tramitación de los expedientes sancionadores respecto de deportistas que no tengan licencia vasca corresponderá únicamente al Estado o a la organización internacional pertinente. En ese sentido es cómo debe entenderse la referencia que el apartado 11 del mismo precepto hace a la comunicación de los resultados analíticos definitivos de los controles a los organismos deportivos correspondientes que puedan resultar competentes. Si el sistema de distribución de competencias se entiende de esta manera la norma es plenamente congruente. Si, por el contrario, se produjera una



interferencia en las competencias estatales o internacionales estaríamos hablando de un exceso que sería necesario corregir.

En lo que se refiere a la cualificación del personal encargado de la recogida de muestras, momento fundamental para la corrección formal y material de las actividades de lucha contra el dopaje, el Anteproyecto de ley es sumamente parco en lo que se refiere a la cualificación necesaria para realizar este tipo de actividades. No sabemos si es intención del legislador vasco desarrollar esa cuestión en las normas reglamentarias que deben seguir a esta ley. En cualquier caso, una referencia al carácter técnico de las personas que puedan recibir la habilitación no se consideraría desacertada en modo alguno. Se considera muy adecuado que en este tipo de recogida de muestras participen profesionales sanitarios o, tratándose de animales, veterinarios con la correspondiente cualificación. No olvidemos que la toma de muestras en el caso de personas es un acto médico que sólo puede ser realizado por quienes tengan la titulación y la cualificación correspondiente. Lo mismo se puede predicar de la toma de muestras en animales con respecto a los veterinarios.

En el párrafo séptimo del artículo 14 se incluye dentro de los derechos propios de las personas que sean sometidas a un control de dopaje el derecho a no someterse a la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el propio artículo y del establecido en el artículo 24.1 c) de la misma ley. Las remisiones legales como ésta suelen plantear ciertos problemas interpretativos y este caso no es una excepción. En primer lugar podemos decir que el artículo 24.1 c) de la ley califica como infracción muy grave la resistencia o negativa, sin justa causa, a someterse a los controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, cuando sean exigidos o requeridos por los órganos o personas competentes. En cuanto al artículo 14 parece claro que no será posible obligar a un deportista a pasar más de un control de dopaje por prueba o a ser sometido a controles en horario nocturno. Respecto de esta última cuestión el párrafo cuarto del precepto reconoce que la negativa a



ser sometido a este tipo de controles durante este periodo no generará responsabilidad alguna. Por su parte el párrafo noveno establece que la negativa sin justa causa a someterse a los controles constituirá prueba suficiente para sancionar la conducta del deportista, y define la justa causa para no someterse a un control como la imposibilidad de acudir, como consecuencia de una lesión acreditada o cuando se acredite que la realización del control ponga en grave riesgo la salud del deportista. Por tanto, la correcta interpretación del precepto exige entender que, salvo que concorra justa causa, la negativa a someterse a los controles constituirá una infracción administrativa calificada como muy grave y por tanto sancionable como tal. No era necesario que el legislador hiciera referencia a que esta conducta una vez documentada será prueba eficiente para sancionar la conducta del deportista, sino que bastaba con castigar la negativa con la misma sanción que el resultado positivo.

Por lo que se refiere a las obligaciones accesorias, de una manera similar a lo que se establece la legislación estatal se prevé una obligación genérica para los clubes y entidades deportivas que se determinen reglamentariamente de llevar un libro de tratamientos terapéuticos que hayan prescrito a los deportistas que se encuentren bajo su dirección. Esta norma tiene una clara finalidad de protección del deportista, quién podrá eximirse de cualquier responsabilidad por un resultado positivo si el tratamiento que lo haya producido ha sido realizado por orden de un facultativo perteneciente al club o entidad de la que forme parte. En este sentido debe entenderse la mención realizada en el párrafo tercero del artículo 15 de la ley. Sin embargo, esa norma que puede cumplir correctamente su función en relación con los deportes de equipo varía de faz cuando se trata de los deportes individuales. Es evidente que en relación con los deportes de equipo el deportista podrá no autorizar la inscripción en el libro de los tratamientos médicos. Sin embargo, para los deportes individuales se establece una obligación expresa de llevanza del libro para los deportistas. Por tanto, lo que es una medida de garantía voluntaria para el deportista en los deportes de equipo se convierte en una



obligación para los deportes individuales. Probablemente, en relación con estos la norma vaya a cumplir una finalidad preventiva muy superior a lo que se establece para los deportes de equipo. Sin embargo, no parece que deba ser la intención del legislador diferenciar en un mismo precepto y respecto de una misma obligación accesoria la conducta de los deportistas, quienes podrán en el caso de los deportes de equipo colaborar con el club para facilitar una mayor opacidad en los tratamientos médicos si estuvieran incurriendo en algún tipo de infracción en materia de dopaje, cosa que no podrán realizar los deportistas individuales al tener la obligación de llevar el libro y de hacer constar en él todos los tratamientos que hayan recibido.

En lo que se refiere las autorizaciones de uso terapéutico basta decir simplemente que su ámbito de aplicación se debe limitar al de la ley. Esta idea no es congruente con el hecho de que para competir en el País Vasco sea necesario comunicar la autorización de uso terapéutico expedida por otra Comunidad Autónoma, por el estado o por una entidad internacional. Nuevamente se confunde el ámbito de aplicación competencial de la norma con el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, olvidando la debida aplicación del ámbito subjetivo de aplicación de la ley.

La regulación de la baja deportiva se considera muy acertada. A nadie se le oculta que esta fórmula puede generar algún tipo de abuso pero, en general, responde a la necesidad del propio deportista de ser tratado de algún tipo de dolencia que le impida competir y que le asegure la tranquilidad de que durante ese periodo no va ser sometido a ningún tipo de sanción en materia de dopaje. Sin embargo, lo que no se prohíbe es la realización de controles de dopaje durante el periodo de baja. En efecto, el párrafo octavo del artículo 16 establece que en el caso de que exista un resultado adverso en un control de dopaje, pero exista una baja deportiva debidamente registrada, se considerará que el resultado es negativo y no se incoará ningún procedimiento sancionador. Sin embargo, la pregunta que



se plantea es qué ocurriría si el resultado adverso es consecuencia de cualquier tipo de sustancia o método completamente ajeno al tratamiento médico en razón del cual se ha obtenido la baja. Esta es una cuestión compleja a la que la ley vasca no da solución.

Por lo demás, en este punto solo cabe resaltar que en el párrafo séptimo del artículo 16 se dice que las decisiones de los comités antidopaje en materia de altas y bajas deportivas podrán ser impugnadas ante la Agencia Vasca Antidopaje pero no se hace ninguna referencia al régimen de impugnación de las resoluciones que, a su vez, dicte la propia Agencia. Se debe entender, en cualquier caso, que estas resoluciones agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El artículo 17 de la norma contiene una definición de controles de dopaje y de controles de salud. Respecto de la primera cuestión la ley entiende como controles de dopaje el conjunto de actividades realizadas por entidades y personas habilitadas por la Agencia Vasca Antidopaje. Esta referencia a entidades es interesante en la medida en que parece que la habilitación podrá referirse no solamente a personas físicas sino también a personas jurídicas. En este punto es posible recordar que dichas personas deben tener una cualificación específica. Tratándose de personas jurídicas, sus representantes en la toma de muestras deberán cumplir con estas condiciones mínimas que, parece ser, serán determinadas en el desarrollo reglamentario de la ley.

Por otro lado, en el párrafo sexto del artículo 17 se establece la posibilidad de que la Agencia Vasca Antidopaje decida, en los términos que se establezca en el desarrollo reglamentario de la ley, los supuestos en que proceda la suspensión de la licencia de algún deportista por razones de salud. La evidente relación con las normas sobre bajas médicas plantea la duda de si es posible suspender la licencia y, por tanto, impedir el ejercicio de su actividad a los deportistas profesionales por



razones de salud. En ese punto el desarrollo reglamentario deberá conducirse con la máxima prudencia puesto que se estaría afectando a un derecho fundamental como es el derecho a trabajar. No es desdeñable la referencia al carácter reglamentario de las normas que van a limitar estos derechos y a una posible insuficiencia de rango de las mismas.

En lo que se refiere a la competencia para la realización de los controles, llama la atención la norma establecida en el párrafo quinto en el que se establece que para la realización de controles fuera de competición a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones internacionales tendrán preferencia para la realización de los controles las organizaciones deportivas internacionales. La misma norma se repite para las competiciones oficiales de ámbito estatal. Nótese que esta norma se limita a la realización de los controles y no a la instrucción o tramitación de ningún procedimiento sancionador. Sin embargo, no se establece sistema alguno de coordinación que permita asegurar la preferencia de las autoridades internacionales o estatales para el ejercicio de esta competencia, lo que puede dar lugar a problemas a la hora de la aplicación de los controles.

Finalmente por lo que se refiere la publicidad de las listas de sustancias y métodos prohibidos, la ley exige publicar en el boletín oficial del País Vasco la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. En consecuencia, para los deportistas que participan en competiciones vascas, además de las restantes listas serán de aplicación las propias listas elaboradas por las autoridades vascas.

Séptimo.- En el capítulo cuarto del anteproyecto de ley se hace referencia al régimen disciplinario y administrativo sancionador del dopaje. De su análisis se deducen varias cuestiones que es necesario destacar. En primer lugar, es necesario destacar el contenido del artículo 21. En el mismo se establece la aplicación del régimen de infracciones y sanciones a todas aquellas personas



sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias vascas y también a las personas sujetas a relaciones especial sujeción con entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la propia norma o se sujeten voluntariamente a la misma. Sobre la sujeción de los deportistas con licencia vasca el texto es congruente con las menciones anteriores que ya hemos comentado. Más dificultades plantea la sujeción de los deportistas sujetos a relaciones de especial sujeción con entidades deportivas que estén domiciliadas o desarrollen actividades sujetas a la ley antidopaje del País Vasco. Como hemos venido sosteniendo a lo largo de este dictamen el aspecto territorial tiene una influencia limitadora en la eficacia de las normas jurídicas que sobre deporte se puedan dictar en el País Vasco, pero no puede servir de punto de conexión para definir las competencias en materia de deporte y, por tanto, quienes, aun residiendo en el País Vasco o perteneciendo a equipos o clubes que estén domiciliados en el País Vasco, dispongan de licencia estatal y participen en competiciones oficiales de ámbito estatal no podrán quedar sujetos al régimen sancionador establecido en la norma vasca. A todo ello hay que añadir el hecho de que el concepto de relaciones de especial sujeción es un concepto jurídico indeterminado generador de inseguridad jurídica para el deportista, que no sabe si está sujeto sólo a la legislación estatal o también a la del País Vasco. Y finalmente, la posibilidad de sujeción voluntaria a la ley del dopaje del País Vasco generaría, de acuerdo con el código mundial antidopaje, la imposibilidad de que las autoridades estatales practicasen los correspondientes controles y sancionaran en casos positivos. Por lo tanto, esa referencia a la sujeción voluntaria es claramente contraria al sistema de distribución de competencias en materia de control del dopaje que hemos ido perfilando en este informe.

A lo anterior no obsta el hecho de que los párrafos segundo y tercero del artículo 21 salven de la aplicación de la normativa autonómica las infracciones cometidas en materia de dopaje con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito



estatal o internacional. La razón es la que acabamos de apuntar y, además, resulta inadecuado que no se haga referencia a los controles fuera de competición.

Del mismo modo debe ser objeto de crítica el artículo 22 del Anteproyecto de ley. Nuevamente se establece el punto de conexión en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Incluso la aplicación del régimen de infracciones y sanciones se independiza del hecho de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito estatal o internacional e incluso, contradiciéndose de manera flagrante el legislador, llega a excluir la existencia de relaciones de especial sujeción cuando se trate de actividades deportivas de carácter no competitivo.

También en lo relativo a los procedimientos sancionadores en materia de dopaje el legislador vasco plantea en el artículo 33.4 que si una infracción de dopaje pudiera dar lugar también a una responsabilidad disciplinaria, los órganos deportivos deberán comunicarlo al órgano administrativo competente. Ese precepto tiene una redacción ambigua y oscura que sería interesante corregir. Su interpretación no puede ser otra que la de entender que si existe algún tipo de conducta generadora de infracciones en materia de dopaje que a su vez constituyese otra infracción administrativa, por ejemplo en materia de seguridad ciudadana, las autoridades deportivas tendrán obligación de comunicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las autoridades administrativas competentes. Resulta en cierta medida perturbadora la mención que el apartado séptimo hace a que esa comunicación no podrá realizarse hasta que finalice la fase de control de dopaje y pasen las actuaciones al órgano sancionador correspondiente. Es dable pensar en la posible existencia de supuestos lo suficientemente urgentes como para que la comunicación a las autoridades competentes tenga que ser inmediata.

En cuanto a la competencia sancionadora cabe destacar en primer lugar que no se menciona a quién corresponde la competencia en materia de represión de dopaje



en animales. En segundo lugar, que la potestad instructora corresponde a las federaciones deportivas del País Vasco y a esas entidades en las que exista una relación de sujeción especial. Pero hemos visto que a estas entidades se refiere con anterioridad la norma como entes afectados por el ejercicio de la potestad disciplinaria. Por eso en este punto es necesaria una clarificación.

En cuanto al procedimiento disciplinario, no parece necesario en los casos en que exista un resultado positivo la tramitación de una información reservada con carácter preliminar a la incoación del procedimiento sancionador. De hecho, en la ley estatal esta información reservada está prevista para supuestos diferentes de aquellos en los cuales se tenga noticia de la posible comisión de una infracción en materia de dopaje como consecuencia de un resultado adverso en un control, por ejemplo, cuando la constancia se tenga como consecuencia de una actuación policial.

En lo que se refiere a la denominada potestad de inspección, sería oportuno reflexionar acerca de la posibilidad de que los agentes habilitados por la Agencia Vasca Antidopaje puedan inspeccionar botiquines, bolsas de deportes, taquillas, autobuses y demás espacios que permitan guardar o albergar productos o sustancias dopantes. La constitucionalidad del precepto es dudosa puesto que la privacidad de espacios tales como bolsas de deportes o taquillas es objeto de una protección constitucional intensa, y exige la presencia de una resolución de un órgano jurisdiccional para violentar esa intimidad. No cabe ninguna duda de la loable intención del legislador pero, en este punto, entendemos que se ha excedido en su celo.

Octava.- Es habitual en las normas de lucha contra el dopaje establecer un capítulo relativo al régimen jurídico de protección de los datos relativos al dopaje. En este sentido son correctas las menciones contenidas en el proyecto de ley sometido a informe, si bien la mera revisión a la normativa sobre protección de



datos puede generar problemas a la hora de ceder los ficheros y los datos relativos a los controles de dopaje. Recordemos que se trata de datos médicos en los casos sobre los que existe un nivel de protección reforzada en la Ley Orgánica de protección de datos. Por lo tanto, se sugiere el establecimiento de un sistema de actualización previa del deportista a la cesión de los datos en el momento de obtener su licencia.

Noveno.- El capítulo séptimo del Anteproyecto de ley se refiere a las relaciones con las organizaciones deportivas internacionales. Aclara muchos de los puntos dudosos que en relación con la competencia se ha planteado con anterioridad y atribuye el ejercicio de la potestad disciplinaria y la ordenación de los controles a estas organizaciones internacionales. Establece nuevamente un régimen de comunicación previa a la Agencia Vasca Antidopaje, régimen que, en la práctica, ha demostrado ser inútil puesto que es costumbre de las organizaciones internacionales no realizar esa comunicación previa. Más dudas genera el apartado primero del artículo 51 en el que nuevamente se considera la residencia en Euskadi como elemento que permite a la Agencia Vasca Antidopaje ordenar la realización de controles fuera de competición. Debe quedar claro que en este punto la competencia para ordenar los controles debe corresponder a la entidad nacional o internacional que haya otorgado licencia al deportista. Por otro lado el artículo 52.1 puede aparejar la consecuencia de que las autoridades internacionales omitan la comunicación a la Agencia Estatal y sólo realicen la comunicación a la Agencia Vasca.



Es cuanto cumple informar. No obstante V.I. resolverá.

Madrid, 24 de enero de 2011.

EL ABOGADO DEL ESTADO EN EL C.S.D

ABOGADO DEL ESTADO
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Miguel Pardo González

SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE.

VII

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA / AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.

**INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN AL
ANTEANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE**

El presente informe se emite en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6.3.a) del Decreto 45/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura, y tiene por objeto analizar el fundamento objetivo del Anteproyecto de Ley, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa vigentes en esta Administración.

I.- ANTECEDENTES

Por Orden de la Consejera de Cultura de 14 de julio de 2010 se procedió a la iniciación del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte.

Posteriormente, y una vez elaborado por los servicios técnicos del Departamento de Cultura el texto de Anteproyecto, se procedió a su aprobación mediante Orden de 5 de octubre de 2010, de la Consejera de Cultura.

Junto con las anteriores, el pasado 23 de marzo de 2011 se remitieron a esta Asesoría Jurídica para su análisis la versión definitiva de los siguientes documentos: Anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte y memoria justificativa. Asimismo, el 29 de marzo de 2011 se recibió texto definitivo relativo a la valoración que la Dirección de Deportes hace sobre las alegaciones realizadas al Anteproyecto de Ley en el trámite de audiencia, así como las consideraciones por Enakunde, la Viceconsejería de Política Lingüística, la Dirección de Innovación y Administración Electrónica y la Dirección de Función Pública, a raíz de la emisión de sus respectivos informes preceptivos.

II.- ADECUACIÓN DE SU CONTENIDO A LA LEY Y AL DERECHO

Con el fin de valorar la viabilidad jurídica del Anteproyecto de Ley analizado, éste debe ser sometido a contraste con la normativa de referencia de la que trae causa, en especial, con la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte (en adelante LO 7/2006). En primer lugar, el análisis a realizar versará sobre si la regulación se ajusta al reparto competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma, en segundo lugar, se deberá examinar si a través del Anteproyecto se desarrolla adecuadamente el derecho fundamental

regulado en la norma orgánica, es decir, si respeta los límites materiales de la delimitación orgánica del derecho afectado.

II.1.- MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL

Como punto de partida indispensable hemos de proceder, en primer lugar, al encuadre normativo de las diversas disposiciones que confluyen en la regulación de esta materia.

Según la exposición de motivos de la LO 7/2006, ésta se ampara en el derecho a la protección de la salud (art. 43 de la CE):

- “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.”

Dicho artículo 43 CE contiene no sólo un mandato dirigido al legislador estatal, sino que encomienda a todos los poderes públicos la obligación de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, dicho artículo 43 dirige igualmente a todos los poderes públicos el mandato de fomentar el deporte. La propia LO 7/2006 afirma abiertamente (Exposición de Motivos, punto II): “Los poderes públicos obligados por este mandato constitucional son tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en los respectivos ámbitos de sus competencias exclusivas.”

Asimismo, la Disposición Final Cuarta de la LO 7/2006 señala que ésta fue dictada al amparo, fundamentalmente, del artículo 149.1.16ª de la Constitución (“16ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos”). Aunque también eran otros los títulos competenciales afectados: art. 149.1.6 (legislación penal); 149.1.31 (estadística para fines estatales); art. 149.1.18 (bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas); 149.1.5 (Administración de Justicia) y art. 149.1.29 (seguridad pública).

Si bien la mayor parte de los preceptos legales de la LO 7/2006 fueron dictados a amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de bases y coordinación general de la sanidad, dicho título competencial no veta la intervención del legislador autonómico en relación a dicha materia, ya que como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional (STC NÚM. 35/1982, de 14 de junio) las CCAA también podrán “orientar su acción de gobierno en función de una política propia sobre esa materia” en función de aquellas competencias que tengan específicamente atribuidas:

(FJ2) "El artículo 149.1 de la Constitución utiliza para delimitar el ámbito reservado en exclusiva a la competencia estatal, diversas técnicas, cuya compleja tipología no es del caso analizar en detalle. Sobresale, sin embargo, la diferencia, que aquí sí es pertinente, entre la reserva de toda una materia (v. gr. Relaciones Internacionales, Defensa y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, Hacienda General y Deuda del Estado, etc.) y la reserva de potestades concretas (sea la legislación básica, o toda la legislación sobre determinadas materias). En el primer caso la reserva estatal impide, no ya que una Comunidad Autónoma pueda asumir competencias sobre la materia reservada, sino también que pueda orientar su autogobierno en razón de una política propia acerca de ella, aunque pueda participar en la determinación de tal política en virtud de la representación específica que las distintas Comunidades tienen en el Senado. **Cuando, por el contrario, la reserva estatal es sólo de ciertas potestades, correspondiendo otras a las Comunidades Autónomas que deseen asumirlas, éstas, en el ejercicio de su autonomía, pueden orientar su acción de gobierno en función de una política propia sobre esa materia, aunque en tal acción de gobierno no puedan hacer uso sino de aquellas competencias que específicamente le están atribuidas. (...)**"

En cuanto a los títulos competenciaes autonómicos en virtud de los cuales la Comunidad Autónoma ejerce su potestad legislativa serían fundamentalmente dos:

- El artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (en adelante EAPV) que establece que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de "Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento" y,
- El artículo 18 EAPV, relativo a las competencias en materia de sanidad, que dispone:
 1. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.
 2. En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco:
 - a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.
 - b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
 3. Corresponderá también al País Vasco la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.
 4. La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la

alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.

5. Los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman en materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los Sindicatos de Trabajadores y Asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca."

Habría, además, otros títulos competenciales vinculados a la materia legislada, en concreto, resultarían afectados los siguientes: organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno (art.10.2 EAPV); normas procesales y de procedimientos administrativos que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco (art. 10.6 EAPV); ordenación farmacéutica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, e higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto (art. 10.15 EAPV); investigación científica y técnica en coordinación con el Estado (art. 10.16 EAPV) y sector público propio del País Vasco (art. 10.24 EAPV).

Tal reconocimiento competencial en nuestro ámbito territorial ha de entenderse conforme a la distribución competencial operada por la Ley de Territorios Históricos (Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos), en cuanto atribuye a éstos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de "fomento del deporte. Programas de deporte escolar y deporte para todos". Por otra parte, dicha norma utiliza la técnica de atribución general a las Instituciones Comunes de todas las funciones que correspondiendo a la Comunidad Autónoma del País Vasco, no se reconozcan en el Estatuto de Autonomía, la LTH u otra ley posterior a los órganos forales de los Territorios Históricos (artículo 6).

Conforme a dicho mapa competencial se promulgó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco (en adelante Ley 14/1998 o Ley de Deporte del País Vasco), que dedicó el Capítulo V de su Título VI: -así como otros artículos- al dopaje:

- Artículo 2.3.v), como principio rector contempló: "el reconocimiento y protección del ideario olímpico y la adopción de medidas para erradicar el dopaje en el deporte y cualesquiera otras prácticas atentatorias contra la salud y la dignidad de la persona".
- Art. 4.2: "En particular, corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las siguientes competencias:
(...)
q) La regulación de la prevención, control y represión del dopaje."

- « Art. 25.1.e): "1. Las federaciones vascas y las federaciones territoriales ejercerán las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
(...)
e) La prevención, control y sanción del dopaje."

Resultando insuficiente la previsión legal contenida en la Ley de Deporte del País Vasco para la regulación de la prevención, control y sanción del dopaje, así como para la protección de la salud de los y las deportistas, se estima necesario, dentro del marco competencial y normativo expresado, una norma legal específica para, de este modo, cubrir el vacío legal existente, así como para adaptar la normativa vasca a la normativa internacional y estatal vigente en esta materia.

II.2.- RANGO LEGAL Y DESARROLLO REGLAMENTARIO.

La regulación que se pretende adoptar la forma de Anteproyecto de Ley. En este sentido, entendemos oportuno realizar un breve recordatorio del significado de dicho rango legal, a los efectos de justificación de la naturaleza otorgada al texto, así como, a los efectos de acordar a continuación los necesarios desarrollos reglamentarios que conlleva la norma que se propone.

Habida cuenta de los títulos competenciales anteriormente analizados y, en especial, de la competencia exclusiva en materia de deporte que ostenta la Comunidad Autónoma, hemos de concluir en lógica consecuencia a capacidad normativa de la misma en la materia, esto es, la competencia para su regulación.

Dado que el Anteproyecto incorpora el régimen sancionador aplicable, es imprescindible que esta materia esté regulada por norma de rango legal; ello se desprende del artículo 25.1 del texto constitucional ("Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento"), así como de la reiterada doctrina constitucional acerca del alcance de término "legislación vigente" contenido en dicho artículo 25.1 CE, la cual considera que "es expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora", entre otras, STC núm.26/2005, de 14 de febrero, STC 113/2002, de 9 de mayo, STC 75/2002, de 11 de febrero, STC 60/2000, de 2 de marzo).

La necesidad de legislar en esta materia y además de hacerlo con norma de rango legal quedó evidenciada a raíz de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo) núm. 488/2009, y núm. 586/2009, según las cuales en la Ley 14/1998 no había título habilitante suficiente para que la Administración ejerciera la potestad sancionadora en materia de dopaje. El TSJPV concluía que sólo tenían capacidad sancionadora en el ámbito disciplinario las federaciones, pero que no así la Administración: "la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta en materia de deporte no ampara en particular a la Administración General de la CAPV para la imposición de

sanciones en materia disciplinaria deportiva, sin que quepa hablar de un diferenciado ámbito administrativo sancionador en lo que se refiere a los deportistas federados que permita aplicar a estos sanciones administrativas propias de general sometimiento de todos los administrados."

Asimismo, la reserva de ley tiene como finalidad "asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción de ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los reglamentos. El principio no excluye, ciertamente, la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador." Sentencia TC (Pleno) núm. 83/1984 de 24 julio. En este mismo sentido: STC (Pleno) núm. 235/2000, de 5 de octubre.

Además, los derechos y libertades afectados por la normativa propuesta no se reducen al derecho a la protección de la salud, sino que la norma afecta también de manera significativa al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE). Esa afectación derivaría tanto de la especial naturaleza de las pruebas antidopaje, así como de la previsión normativa contenida en el Anteproyecto relacionada con la protección de los datos personales de los y las deportistas frente a intromisiones injustificadas e ilegítimas. Luego, vista la naturaleza de los derechos y libertades regulados, se deduce que la enjundia de la materia es tal que la subordina a la ley. Dicha reserva de ley derivaría del propio texto constitucional, cuyo artículo 53 establece:

"1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a),

(...)

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 3º informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen."

Por tanto, habida cuenta de la naturaleza de las materias reguladas en el Anteproyecto y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, cabe concluir que el rango normativo elegido es adecuado para la regulación de dichas materias.

Por su parte el reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general emanada de la Administración, tiene subordinación a la ley, a la que complementa. Por ser el reglamento norma jurídica de colaboración, debe distinguirse entre la normación básica de las cuestiones fundamentales

(reserva de ley) que siempre corresponde a la ley y aquellas normas secundarias pero necesarias para completar el ordenamiento jurídico: reglamento ejecutivo, reglamento independiente y, en su caso, reglamento de necesidad. La potestad reglamentaria es, pues, un poder jurídico que participa en la elaboración del ordenamiento jurídico, de suerte que la norma reglamentaria queda integrada en el mismo. Pero la norma reglamentaria no es incondicionada, sino que está sometida a la Constitución y a las Leyes (art. 97 de la Constitución), a la que corresponde -cuando el reglamento es objeto de impugnación- determinar su validez o su legalidad.

El Tribunal Constitucional ha manifestado de forma reiterada que los reglamentos ejecutivos están directa y concretamente ligados a una ley, de manera que dicha ley es completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada y cumplimentada o ejecutada por el Reglamento: "Existe en nuestro derecho una tradición jurídica que dentro de los reglamentos, como disposiciones generales de la Administración con rango inferior a una ley, y aun reconociendo que en todos ellos se actúa a ejercicio de la función ejecutiva en sentido amplio, destaca como **«reglamentos ejecutivos» aquellos que están directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley o a un conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada y cumplimentada o ejecutada por el reglamento.** Son reglamentos que el Consejo de Estado ha caracterizado como aquellos «cuyo cometido es desarrollar una ley preexistente o que tiene por finalidad establecer normas para el desarrollo, aplicación y ejecución de una ley»." (STC (Pleno) 18/1982, de 4 de mayo)

En principio cabría apreciar una utilización bastante generalizada de la técnica de remisión al desarrollo reglamentario. En este sentido, cabe relacionar los siguientes preceptos que incluyen explícitas remisiones: artículos 13.3 / 13.6 / 13.9 / 14.2 / 14.3 / 15.1 / 15.5 / 17.3 / 17.6 / 17.7 / 31.4 / 32.3 / 40.3 / 46.1 / 46.3 / 49.1 / Disp. Adic.1ª/Disp. Adic. 8ª/Disp. Final 2ª

La aprobación de una norma con rango de ley supone abordar las notas básicas y estructurales de la regulación, sin perjuicio de su posterior complemento por el reglamento, en lo que sea indispensable. En este sentido y, salvo lo relativo a la necesidad de una mayor concreción de la organización del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico - que más adelante se analizará-, podemos entender que no se da un abuso en la utilización de la técnica de remisión a reglamento, esto es, y sin perjuicio de lo que desde el punto de vista técnico se valore al respecto, cabe concluir que las materias objeto de dicha remisión, en principio, serían susceptibles de posterior desarrollo reglamentario.

II.3.- RESERVA DE LEY ORGÁNICA Y MATERIAS CONEXAS

El artículo 81 CE establece una reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, dicha reserva ha de interpretarse en sentido restrictivo, es decir, según el TC (ssstc 5/1982,

67/1985, 160/1987, 127/1994, 173/1998, entre otras) la necesidad de legislar mediante ley orgánica debe limitarse al desarrollo directo del derecho fundamental, dejando la regulación de su ejercicio a la ley ordinaria. Esto es, a la ley orgánica le corresponde "la regulación de determinados aspectos esenciales para la definición del derecho, la previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con otras libertades constitucionalmente protegidas" (STC 132/1989).

El alcance material de la ley orgánica no viene determinado por el reparto competencial Estado-CCAA (STC 173/1998). Esto es "la relación entre la ley orgánica y la ordinaria no es la característica del reparto de la regulación de una materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas que preside el artículo 149.1 CE, sino la inherente a la distinta función constitucional que tienen encomendada cada una de esas leyes, pues como ha declarado el Tribunal Constitucional (STC 76/1983, 160/1987, 101/1991 y 173/1998) la ley orgánica es una prolongación o continuación del poder constituyente que se mueve en un plano diverso al de la ley ordinaria y que se impone a ésta (sea estatal o autonómica) en su calidad de complemento indispensable de la CE como una garantía del derecho fundamental que desarrolla (STC 140/1986).

Fuera de dicho ámbito material, corresponderá a la ley ordinaria -ya sea estatal o autonómica- la capacidad de legislar en base, ahora sí, a la distribución competencial aplicable a dicha materia.

En cualquier caso, el propio TC admitió la posibilidad de que la ley orgánica tuviera lo que se ha venido denominando "materias conexas" (STC 5/1981), es decir, materias susceptibles de ley ordinaria (estatal o autonómica), pero que han sido incorporadas a una ley orgánica, sin que la reserva de ley orgánica se traslade a dichas materias, es decir, sin que por ello se escape de la potestad legislativa del legislador ordinario, ya sea éste estatal o autonómico. El TC ha admitido la posibilidad de inclusión de dichas materias conexas siempre y cuando la propia ley orgánica identifique cuáles son dichas materias conexas.

En este sentido, la Disposición Final 5ª de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, determina los preceptos del texto legal que tienen carácter orgánico. En concreto, tienen carácter orgánico los siguientes preceptos: artículo 5 ("De la obligación de someterse a los controles de dopaje"); apartados 1, 2 y 3 del artículo 6 ("De las garantías en los controles y de los efectos legales de los mismos"); art. 8.1 ("Controles de dopaje"); párrafo primero del artículo 12 ("Publicidad de la lista de sustancias susceptibles de producir dopaje y de métodos prohibidos en el deporte"); art. 36 ("Autorización de cesión de datos") y apartado 3 de la Disposición Adicional Tercera ("Gradaciones"). Más allá de esta delimitación orgánica de la LO 7/2006, corresponderá al legislador ordinario -ya sea estatal o autonómico- legislar en base a las competencias que tenga atribuidas.

Dicha delimitación será técnica en cuenta más adelante, al realizar el examen de articulado del Anteproyecto de Ley, con el fin de dilucidar si

adecuado ajuste de la norma no sólo a la distribución competencial aludida en apartados anteriores, sino a la delimitación de los aspectos orgánicos señalados por el legislador estatal.

II.4.- CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

El Anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte consta de una parte expositiva, 53 artículos divididos en siete capítulos, ocho disposiciones adicionales, tres transitorias, dos derogatorias y seis disposiciones finales.

▫ PARTE EXPOSITIVA

En la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley se indican los motivos que dan origen a su elaboración, los objetivos perseguidos, los fundamentos jurídicos habilitantes en que se basa, los principios y fines generales inspiradores de la regulación, así como su incidencia en la normativa en vigor, con especial mención de los aspectos más novedosos. Se da, consecuentemente, respuesta adecuada a los contenidos exigidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Anteproyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones (publicada en el BOPV nº 71, de 19 de abril de 1993 por Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico).

Antes de comenzar con el análisis de articulado, hemos de señalar que la norma proyectada trata de satisfacer -entre otros- los siguientes objetivos fundamentales, explicitados tanto en la memoria justificativa que acompaña al Anteproyecto, como en su exposición de motivos:

- En materia de lucha contra el dopaje en los últimos años ha habido importantes novedades normativas tanto a nivel internacional como estatal. El objetivo del Anteproyecto de Ley es, por tanto, adaptar la normativa vasca de lucha contra el dopaje a dichas novedades y, en especial, al Código Mundial Antidopaje y a la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje.
- Se pretende también adecuar el marco institucional a la tendencia generalizada de creación de agencias nacionales antidopaje, como entidades funcionalmente independientes y especializadas en la lucha contra el dopaje.
Se pretende concretar y paliar las lagunas que había en el régimen sancionador previsto en la Ley Vasca del Deporte en lo concerniente a la lucha contra el dopaje, en concreto, se trata de solventar la falta de título habilitante del que adolecía la Ley 14/1998 en relación a la potestad sancionadora de la Administración pública, que fue puesta de manifiesto por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia núms. 488/2009 y 386/2009. De este modo, se ha abordado la tipificación de las infracciones y sanciones tratándola de ajustar a la normativa internacional y a la propia Ley Orgánica 7/2006.



➤ **CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 9)**

1.- El artículo 1 define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación. En este sentido, define qué se entiende por dopaje, entendiendo como tal no sólo el consumo de sustancias prohibidas por parte del o la deportista, sino también la utilización de métodos prohibidos, con la finalidad de aumentar artificialmente el rendimiento deportivo, representando ello un acto contrario al espíritu deportivo.

En relación a esta definición hemos de apuntar que adolece de una falta de concreción que dificulta el entendimiento de qué se entiende por dopaje. La falta de concreción deriva de dos de los conceptos utilizados en la definición del objeto: “métodos prohibidos” y “contrarios al espíritu deportivo”. A la hora de legislar hay que hacer un esfuerzo especial en cuanto a precisión y claridad y ello en aras a la materialización de dos principios generales de Derecho que han de fundamentar la labor del legislador: la igualdad de la ciudadanía ante la ley, en el sentido de que la ley debe ser accesible a todos y comprensible para todos y, la seguridad jurídica, en el sentido, de que la ley debe ser previsible en su aplicación.

La importancia del esfuerzo por conseguir precisión y claridad a la hora de legislar se ha puesto de manifiesto por el propio Tribunal Constitucional (STC núm.156/2004 (Pleno) de 21 de septiembre, FJ9 y STC núm.46/1990 (Pleno), de 15 de marzo, FJ4):

“Según nuestra doctrina el principio de seguridad jurídica recogido en el art. 9.3 CE procura «la claridad y no la confusión normativa» (STC 46/1990, de 15 de marzo, F. 4), esto es, «la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho» (STC 36/1991, de 14 de febrero, F. 5). Por este motivo, «sólo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo procuren confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica» (SSTC 156/1990, de 4 de octubre, F. 8; 142/1993, de 22 de abril, F. 4; 212/1996, de 19 de diciembre, F. 15; y 96/2002, de 25 de abril, F. 5).”

“(…) La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenderse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (...).”

Si se realiza un examen comparativo de los dos textos normativos en los que se sustenta e inspira el Anteproyecto de Ley ahora analizado, esto es,

la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte² y a Ley Orgánica 7/2006, se comprueba que ninguno es una definición genérica basada en conceptos indeterminados, sino que en ambos textos se define dopaje como la infracción de las normas en ellos contenidas. En concreto, la Convención Internacional contra el Dopaje define "dopaje en el deporte" como "toda infracción de las normas antidopaje". Asimismo, la Ley Orgánica 7/2006 lo define como "el incumplimiento o la infracción por parte de las personas que, estando obligadas a ello, violen la normativa prevista en esta Ley, en particular o dispuesto en los artículos 13 y siguientes³ de la misma".

Por tanto, nos encontramos con que ambas normas de referencia han optado por una mayor concreción en la definición, uniendo dopaje con la tipificación de aquellas conductas prohibidas por la propia norma.

Asimismo, el Código Mundial Antidopaje define dopaje como "la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje según lo dispuesto desde el artículo 2.1 al artículo 2.8 del Código", es decir, define dopaje haciendo una remisión a un elenco de infracciones cuya comisión supondría dopaje.

Nadie cuestiona que el dopaje constituye un acto contrario al espíritu deportivo, sin embargo, a la hora de redactar el articulado de una ley, debe tenerse en cuenta que estamos dictando preceptos normativos de carácter vinculante dirigidos al conjunto de la ciudadanía, por lo que no es el lugar más adecuado para la utilización de conceptos imprecisos. Es decir, no se duda de que dichos conceptos deben estar presentes en la norma, de lo que se duda es de su inculcación dentro de la definición de objeto de la norma. Es cierto que conceptos como "métodos prohibidos" o "espíritu

¹ El Código Mundial Antidopaje fue aprobado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en marzo de 2003, y supuso el primer intento de armonización de las normas para luchar contra el dopaje en el deporte. Sin embargo, carecía de fuerza vinculante en el ámbito del derecho público internacional, ya que la AMA es una fundación de derecho privado suizo.

La Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte fue adoptada por unanimidad por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, y entró en vigor el 1 de febrero de 2007 (Instrumento de ratificación publicado en el BOE, núm.41, de 16 de febrero de 2007). En su artículo 4 recoge el compromiso de los Estados partes de respetar los principios del Código Mundial Antidopaje y lo incorpora como Apéndice:

"Relaciones de la Convención con el Código.

1. Con miras a coordinar, en el plano nacional e internacional, las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los Estados Partes se comprometen a respetar los principios de Código como base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la presente Convención. Nada en la presente Convención es óbice para que los Estados Partes adopten otras medidas que puedan complementar las de Código.
2. El Código y la versión más actualizada de los Apéndices 2 y 3 se reproducen a título informativo y no forman parte integrante de la presente Convención. Los apéndices como tales no crean ninguna obligación vinculante en derecho internacional para los Estados Partes.
3. Los Anexos forman parte integrante de la presente Convención."

² Artículos relativos a la responsabilidad en materia de dopaje en el deporte: Sección 14 (artículos 13 al 26), dentro de Capítulo III ("Del régimen sancionador en materia de dopaje en el deporte")

deportivo" constituyen la motivación, finalidad e inspiración de la norma, pero lo que se cuestiona es que sean los elementos constituyentes de las definiciones o actos normativos vinculantes que se contienen en el articulado. Es decir, si bien "espíritu deportivo" puede ser un concepto usual para los especialistas del deporte, no es tan evidente la interpretación de dicho concepto para los ajenos a la materia. La amplitud o más bien la indefinición de dicho término es tal, nos conduce a desconocer qué conductas contrarían el llamado "espíritu deportivo".

Si los "métodos prohibidos" se refieren a los publicados en las listas a las que hace referencia el artículo 26 del Anteproyecto ("Publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte") debería matizarse en tal sentido con el fin de conseguir una mayor precisión en la definición del objeto.

En el apartado 2 del artículo 1 continúa la imprecisión de que adolece el párrafo anterior ya que extiende la definición de dopaje a las competiciones deportivas en las que intervengan animales, eso sí, "con las adaptaciones procedentes". Término a todas luces impreciso ya que se desconoce el alcance de dicho concepto; esto es, se desconoce si el servicio promotor ha introducido esa matización en un intento de aludir a las necesarias adaptaciones jurídicas que tendrán lugar en un desarrollo reglamentario posterior de la materia o a las precisiones legales contenidas en el propio Anteproyecto relativas a la materia de dopaje cuando afecta a animales o si se refiere a las necesarias adaptaciones que desde el punto de vista técnico-deportivo requiere dicha materia o a todas ellas.

Finalmente, en el apartado 3 del artículo 1 se realiza un intento de concretar la imprecisión definitoria anterior y se especifica que "a los puros efectos sancionadores también se considera como dopaje el conjunto de infracciones de la normativa antidopaje contenida en la presente ley y en el resto de la normativa aplicable en materia de dopaje por parte de cualesquiera personas físicas o jurídicas que estén sujetas a la misma".

En relación a este apartado hemos de decir que el último inciso "por parte de cualesquiera personas físicas o jurídicas que estén sujetas a la misma", además de ser redundante, queda inconexo con la frase anterior, es decir, se dice que es dopaje "el conjunto de infracciones de la normativa antidopaje contenida en la presente ley..." y continúa "por parte de cualesquiera personas físicas o jurídicas que estén sujetas a la misma". Hay una falta de conexión entre ambos elementos.

El apartado 4 especifica el ámbito objetivo del Anteproyecto de Ley, señalando que será de aplicación a cuantas actividades y competiciones deportivas, federadas o no, se desarrollen en el País Vasco, excluyendo a las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por el organismo olímpico o paraolímpico correspondiente. Por lo que se ha optado por el criterio de la territorialidad, es decir, se ha optado por incluir dentro del ámbito objetivo todas las actividades y

competiciones deportivas que se desarrollen en Euskadi, salvo las dos excepciones ya mencionadas.

Asimismo, el apartado 5 define el ámbito subjetivo de la Ley, el cual comprende a los siguientes sujetos:

- Deportistas con licencia vasca, ya sea federativa, universitaria o escolar, que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco.
- Todos aquellos deportistas que residan ("siquiera temporalmente"), entrenen o compitan en el País Vasco.
- Cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad deportiva en el País Vasco, aunque sea temporalmente.

Y se matiza que dicho ámbito subjetivo "se entiende sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones estatales e internacionales a los citados deportistas con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal o internacional".

Los apartados 6 y 7 complementan el ámbito subjetivo y el ámbito material, respectivamente, definiendo el apartado 6 qué se entiende por deportistas a efectos de la Ley que se tramita ("todas aquellas personas que practiquen algún deporte, aún cuando no estén federadas o no participen en competiciones deportivas") y el apartado 7 excluye de los controles antidopaje a realización de pruebas de acceso a estudios universitarios, oposiciones y otros procesos de selección análogos.

En conclusión, cualquier persona (física o jurídica) que desarrolle una actividad deportiva en el País Vasco, aunque sea temporalmente, puede quedar sometida a controles antidopaje, únicamente quedarían excluidos los deportistas que participen en competiciones oficiales estatales o internacionales. No obstante, estos últimos, fuera de la participación en dichas competiciones, en la medida que residan, entrenen o participen en otras competiciones distintas a las citadas en el País Vasco, aunque fuera temporalmente, también quedarían dentro del ámbito subjetivo del Anteproyecto de Ley.

La Ley Orgánica contra el Dopaje toma como referencia para la concreción del ámbito subjetivo la existencia de una relación jurídica de sujeción de los deportistas con sus federaciones, de modo que el ámbito subjetivo de dicha Ley o constituyen los "deportistas con licencia federativa estatal o con licencia autonómica homologadas, en competiciones deportivas organizadas, promovidas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas, en el ámbito objetivo establecido en el artículo 1.3.", es decir, "en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, que se organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte".

As mismo, la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, en su artículo 2.4 establece: "Un «deportista» es, a efectos de control antidopaje, cualquier persona que participe en un deporte a nivel internacional o nacional, en el sentido en que entienda este término una

organización nacional antidopaje, y cualquier otra persona que participe en un deporte a un nivel inferior aceptado por los Estados partes. A efectos de los programas de enseñanza y formación, un «deportista» es cualquier persona que participe en un deporte bajo la autoridad de una organización deportiva."

Por tanto, la Convención no exige la existencia de una relación de sujeción especial que delimite el ámbito subjetivo de las normas antidopaje, sino que deja, en concreto, la definición de deportista a la determinación que hagan las correspondientes organizaciones nacionales antidopaje.

No obstante, en relación a la delimitación de ámbito de aplicación realizada en el artículo 1, se debe señalar que convendría precisar qué se entiende por actividad deportiva, así como competiciones oficiales en el País Vasco, con el fin de conferir una mayor concreción al ámbito subjetivo y no incurrir en generalidades que pudieran dar lugar a dudas sobre el ámbito de aplicación de la Ley, más teniendo en cuenta que dicho artículo es fundamental para entender la incidencia del resto del articulado.

II.- Bajo la rúbrica de "principios generales" se recogen una serie de afirmaciones de diversa índole sin un destinatario determinado, por tanto, dirigido a la generalidad de agentes e instancias intervinientes en la materia. Algunos de los enunciados tienen un claro carácter finalista, es decir, son preceptos programáticos u objetivos que deberán orientar la lucha contra el dopaje, por ejemplo, "la erradicación del dopaje en el deporte debe ser un objetivo fundamental de todas las organizaciones deportivas", "la formación, la información y la investigación son instrumentos indispensables para la erradicación del dopaje". En otros casos, más que mandatos que deben inspirar la actuación en la materia, son preceptos de carácter normativo que aparecerán más adelante en el texto como la prohibición contenida en el apartado c) o la obligación del apartado d). Asimismo, en el apartado b) más que un principio se contiene una afirmación relacionada con el bien jurídico tutelado (protección de la salud), al afirmarse que "el dopaje puede atentar gravemente a la salud de las y los deportistas o, en su caso, de los animales". Es por ello que teniendo en cuenta que los principios generales del derecho constituyen fuente de derecho (art. 1.4 CC), aconsejamos al servicio promotor que depure este artículo eliminando aquellas ideas que son más la expresión de los motivos que han dado origen a la norma y que ya han sido puestos de manifiesto en la Exposición de Motivos y deje aquellos que estrictamente podríamos llamar principios generales del derecho:

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sentencia de 15 abril 2002: "Los principios generales del derecho forman parte del Ordenamiento Jurídico español, en general (art. 1.1 y 1.4 CC) y muy especialmente del Ordenamiento Jurídico administrativo, al que frecuentemente se le ha calificado de «principal», por la importancia y trascendencia que en él tienen tales principios. El Derecho administrativo es en gran medida desde sus comienzos, y lo sigue siendo en la actualidad, decantación de principios generales del Derecho efectuada por la jurisprudencia.

Incluso, la concepción institucional de nuestro ordenamiento que va más allá de lo que expresamente positivizan las normas escritas encuentra un seguro asidero en el clásico párrafo de la Exposición de Motivos de la LJCA de 1956: «lo jurídico no se encierra y circunscribe a las disposiciones escritas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad immanente en la naturaleza de las instituciones». El propio artículo 103.1, que declara el pleno sometimiento no sólo a la Ley sino al Derecho, constitucionaliza la idea básica de que la legalidad a la que está sujeta la Administración es comprensiva de principios generales que desempeñan una función supletoria e informadora del Ordenamiento Jurídico, al que también han de ajustarse los particulares.»

El apartado b) de este mismo artículo dispone: "El dopaje puede atentar gravemente a la salud de las y los deportistas o, en su caso, de los animales". Dado que la aplicación de las medidas de control del dopaje en animales, si bien tienen una relación directa con la norma tramitada en la medida en que se desarrolle en el ámbito deportivo, constituiría un régimen jurídico diferenciado, dado que los bienes jurídicos tutelados serían distintos, se recomienda separar las referencias a los animales de las referencias a los deportistas e incluir la alusión a ese régimen diferenciado o bien en un Capítulo independiente o bien en una Disposición Adicional, tal y como aconsejan las Directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones:

"1.- Disposiciones Adicionales, que incluirán por este orden:

- a) Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el texto articulado: territoriales, personales, económicos y procesales. Sólo se situarán aquí los regímenes especiales que tengan por objeto situaciones jurídicas diferentes de las reguladas con carácter general en el texto articulado y, además, no tengan suficiente entidad para integrar el contenido de un artículo o un capítulo de la parte dispositiva".

A lo largo de la parte dispositiva del Anteproyecto aparecen similares referencias respecto a las cuales se realiza la misma observación: artículos 4, 24.3, 27.6, 28.6 y 37.2.

III.- Los artículos siguientes 3, 4, 5 y 6 establecer un elenco de obligaciones de los diferentes agentes implicados en la lucha contra el dopaje, en concreto, se establece el conjunto de responsabilidades de los deportistas, del personal auxiliar de apoyo de los deportistas, de los poderes públicos y de las entidades deportivas.

En el artículo 6 se recogen las responsabilidades de las entidades deportivas. Convendría precisar qué se entiende por entidades deportivas a los efectos de esta Ley, bien incluyendo una definición concreta, bien mediante remisión a otras normas en materia deportiva que las definan. Además, es preciso hacer esta declaración ya que a pesar de que el título y el apartado 1º hacen referencia a "entidades deportivas", los apartados 2 y 3 de dicho artículo se refieren únicamente a federaciones deportivas vascas



y territoriales. Si bien es evidente que sólo las federaciones –cada su naturaleza jurídica– tienen encomendadas funciones de carácter público, la obligación de disponer de programas, disposiciones y órganos antidopaje podría afectar a otras entidades deportivas que, si bien no ejercen potestades de carácter público-administrativo, si tienen una potestad disciplinaria sobre las personas vinculadas a las mismas por relaciones jurídicas de especial sujeción, más teniendo en cuenta que en el artículo 38 del Anteproyecto, al determinar quién tiene competencia en materia de procedimientos disciplinarios, se dispone que:

“1. La potestad disciplinaria en materia de dopaje corresponde a las federaciones deportivas del País Vasco y a las demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco.

2. La instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios corresponde, inicialmente, a los órganos disciplinarios de las entidades antes citadas en los términos previstos en sus Estatutos y Reglamentos.”

Otro tanto ocurre con el apartado 3º del artículo 6 que sólo se refiere al supuesto de que las federaciones deportivas vascas o territoriales no asuman el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en materia de dopaje, en cuyo caso actuará la Agencia Vasca Antidopaje.

En este mismo artículo 6, en su apartado d), se establece que las entidades deportivas deberán “negar cualquier subvención o ayuda a cualesquiera entidades deportivas o deportistas que infrinjan la normativa antidopaje o que rehúsen someterse a los controles correspondientes”. En relación a este apartado debemos señalar que en lugar de negar las ayudas a quienes “infrinjan la normativa antidopaje”, debería indicarse “a quienes hayan sido sancionados por infringir la normativa antidopaje”, con el fin de ser más precisos y salvaguardar con más garantías el principio de presunción de inocencia también aplicable a los procedimientos sancionadores.

En el apartado l) del art. 6 se prevé que las entidades deportivas del País Vasco tendrán la responsabilidad de “Obtener de las y los deportistas la autorización para permitir a los organismos competentes el tratamiento de sus datos personales que resulten necesarios para la efectiva realización de controles de dopaje y eventuales comunicaciones de resultados de tales controles”. El tratamiento de datos personales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999, de 13 de diciembre), teniendo en cuenta que, en los supuestos en los que dicha Ley exige para el tratamiento de datos personales la autorización de las personas afectadas, esta autorización se apoya en el consentimiento libremente dado por las mismas³, resulta difícil comprender cómo van a

³ Artículo 3.5) de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;

tener, las entidades deportivas, la responsabilidad de obtener dicha autorización sujeta a un decisión voluntaria del afectado. A lo sumo debería decirse que adoptarán las medidas oportunas para recabar la autorización de los y las deportistas en base a lo previsto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Este mismo apartado se incluye en artículo 7, letra r).

Asimismo, los apartados f) y i) del artículo 6.1 son muy similares, vieniendo a decir prácticamente lo mismo, por lo que podrían refundirse en un único apartado. Lo mismo cabe decir en relación a los apartados e) y n) del artículo 7.

El apartado n) del art. 6.1 y el apartado k) del art. 7 disponen que las entidades deportivas, así como las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos deberán velar por la confidencialidad de los resultados de los análisis de los procesos de control de dopaje hasta el momento que resulte procedente la comunicación de los mismos. Este último inciso ("hasta que resulte procedente la comunicación de los mismos") además de adolecer de una gran inconcreción que debería corregirse, no es acorde a lo previsto en el artículo 47 del Anteproyecto que establece una obligación de confidencialidad y secreto, sin límite temporal alguno, al persona que desempeñe las funciones de control del dopaje, así como a las y los miembros de los órganos de entidades deportivas y su personal.

IV.- A continuación, en el artículo 8, se contempla el listado de derechos de los y las deportistas que van a ser sometidos a un control de dopaje. Respecto a este listado de derechos debemos hacer las siguientes consideraciones:

- En el apartado c) se prevé que tendrán derecho a que se realice el control antidopaje "en condiciones que no supongan una lesión de su dignidad o intimidad salvo en los límites que resulten necesarios". Tal y como está redactado este precepto parece que se esté posibilitando una lesión del derecho a la intimidad dentro de unos límites. No sé concreta qué límites son esos, del adjetivo "necesarios" parece que se trata de los límites necesarios para efectuar el control antidopaje. Teniendo en cuenta que nos movemos en el ámbito de los derechos fundamentales y, en concreto, en el ámbito del derecho fundamental a la intimidad, hemos de decir que no cabe cualquier límite, sino los límites que configuran el derecho en sí mismo y dada la importancia del bien jurídico a salvaguardar no hay espacio para imprecisiones como "dentro de los límites necesarios", por tanto, debería eliminarse el inciso "salvo en los límites que resulten necesarios", es decir, el control antidopaje deberá siempre realizarse en condiciones que no supongan una lesión a la dignidad o intimidad de los y las deportistas.

(h) Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consiente el tratamiento de datos personales que le conciernen."

- En el apartado h) se dice que tendrán derecho a "exigir la destrucción de las muestras de sangre, orina o cualesquiera muestras que le hayan sido tomadas u obtenidas una vez finalizados el proceso antidopaje y los correspondientes plazos de prescripción." No queda claro a qué plazos de prescripción se hace referencia, suporemos que se trata de los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en la Ley. Sin embargo, no se prevé el supuesto de que se tomen muestras y finalmente no haya ninguna infracción ni ninguna sanción al respecto. En relación con este apartado h) tampoco resulta fácil comprender a qué se refiere la norma al decir que "Tal derecho no se podrá ejercer en el supuesto de que la entidad que haya ordenado el control **se haya hecho con la titularidad de las muestras** que, en todo caso deberán destinarse a los fines de control de dopaje o de investigación". Al respecto nos parece oportuno recordar lo previsto en la normativa sectorial, en la que se establece que la utilización de muestras biológicas para fines de investigación obtenidas con una finalidad originaria distinta a la investigación requiere el consentimiento del interesado, que, a su vez, podrá ser revocado en cualquier momento. En concreto, en relación a esta cuestión conviene tomar como referente, la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, cuyo Capítulo III regula la utilización de muestras biológicas humanas con fines de investigación:

Artículo 58. Obtención de las muestras

"1. La obtención de muestras biológicas con fines de investigación biomédica podrá realizarse únicamente cuando se haya obtenido previamente el consentimiento escrito del sujeto fuente y previa información de las consecuencias y los riesgos que pueda suponer tal obtención para su salud. Dicho consentimiento será revocable.

2. El consentimiento del sujeto fuente será siempre necesario cuando se pretendan utilizar con fines de investigación biomédica muestras biológicas que hayan sido obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o no a su anonimización.

No obstante lo anterior, de forma excepcional podrán tratarse muestras codificadas o identificadas con fines de investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente, cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no razonable en el sentido del artículo 3.i) de esta Ley. En estos casos se exigirá el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente, el cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos:
(...)"

Artículo 59. Información previa a la utilización de la muestra biológica

"1. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, y en particular, en el artículo 45 de esta Ley, antes de emitir el consentimiento

para la utilización de una muestra biológica con fines de investigación biomédica que no vaya a ser sometida a un proceso de anonimización, el sujeto fuente recibirá la siguiente información por escrito:

- a) Finalidad de la investigación o línea de investigación para la cual consiente.
- b) Beneficios esperados.
- c) Posibles inconvenientes vinculados con la donación y obtención de la muestra, incluida la posibilidad de ser contactado con posterioridad con el fin de recabar nuevos datos u obtener otras muestras.
- d) Identidad del responsable de la investigación.
- e) Derecho de revocación de consentimiento y sus efectos, incluida la posibilidad de la destrucción o de la anonimización de la muestra y de que tales efectos no se extenderán a los datos resultantes de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo.
- f) Lugar de realización del análisis y destino de la muestra al término de la investigación: disociación, destrucción, u otras investigaciones, y que en su caso, comportará a su vez el cumplimiento de los requerimientos previstos en esta Ley. En el caso de que estos extremos no se conozcan en el momento, se establecerá el compromiso de informar sobre ello en cuanto se conozca.
- g) Derecho a conocer los datos genéticos que se obtengan a partir del análisis de las muestras donadas.
- h) **Garantía de confidencialidad de la información obtenida, indicando la identidad de las personas que tendrán acceso a los datos de carácter personal del sujeto fuente.**
- i) Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga información relativa a su salud derivada de los análisis genéticos que se realicen sobre su muestra biológica, así como sobre su facultad de tomar una posición en relación con su comunicación.
- j) Advertencia de la implicación de la información que se pudiera obtener para sus familiares y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a aquéllos.
- k) Indicación de la posibilidad de ponerse en contacto con él/ella, para lo que podrá solicitársele información sobre el modo de hacerlo.

2. En el caso de utilización de muestras que vayan a ser anonimizadas, el sujeto fuente recibirá la información contenida en los apartados a), b), c) y d) de este artículo "

Artículo 60. Consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica

1. El consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica se otorgará, bien en el acto de obtención de la muestra, bien con posterioridad, de forma específica para una investigación concreta.

2. El consentimiento específico podrá prever el empleo de la muestra para otras líneas de investigación relacionadas con la inicialmente propuesta, incluidas las realizadas por terceros. Si no fuera éste el caso, se solicitará al sujeto fuente que otorgue, si lo estima procedente, un nuevo consentimiento.

3. El consentimiento podrá ser revocado, totalmente o para determinados fines, en cualquier momento.

Cuando la revocación se refiera a cualquier uso de la muestra, se procederá a su inmediata destrucción, sin perjuicio de la conservación de los datos resultantes de las investigaciones que se hubiesen realizado con carácter previo.

Artículo 61. Conservación y destrucción de las muestras

1. En el caso de que la muestra sea conservada, el sujeto fuente será informado por escrito de las condiciones de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a terceros y condiciones para poder retirarlas o pedir su destrucción. No obstante, las muestras biológicas utilizadas en investigación biomédica se conservarán únicamente en tanto sean necesarias para los fines que justificaron su recogida, salvo que el sujeto fuente haya otorgado su consentimiento explícito para otros usos posteriores.

2. Lo indicado en el apartado anterior se entiende aplicable en tanto los datos de identificación de la muestra no hayan sido sometidos a su anonimización de conformidad con lo previsto en esta Ley.

- La misma imprecisión que se constata en el apartado anterior, se repite en el apartado 1) cuando se indica "hasta el momento que resulte oportuno", es decir, en dicho apartado se prevé que los deportistas tendrán derecho "a exigir de los organismos deportivos la confidencialidad de los resultados hasta el momento que resulte oportuno", debería concretarse dicho momento. Es decir, se desconoce qué circunstancia debe producirse para que los datos sobre los resultados del control de dopaje dejen de ser confidenciales. En relación a la cesión de datos de carácter personal el artículo 11 de la LOPD establece lo siguiente:

"1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

- a) Cuando la cesión está autorizada en una ley,
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público,
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control

implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos y científicos.

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero, cuando la información que se facilita al interesado no le permita conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquel a quien se pretenden comunicar.

4. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también un carácter de revocable.

5. Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores."

Entendemos que los datos relativos a los controles de dopaje sólo en contadas y excepcionales ocasiones podrán ser cedidos a terceros para los únicos fines de denuncia de hechos constitutivos de infracción administrativa o delito al órgano competente. En esta materia es el derecho a la intimidad de los deportistas el bien tutelado, por tanto, resulta conveniente ser especialmente escrupulosos y estrictos a la hora de su protección, por lo que imitar temporalmente la confidencialidad "hasta que resulte oportuno" supone una limitación injustificada a dicha protección.

Si bien son posibles cesiones de datos sin el consentimiento del interesado en base a la previsión del artículo 11.2.a) (cesiones autorizadas por una ley), no cabe que una norma de rango legal regule la materia sin respetar los elementos esenciales de derecho fundamental a la intimidad, es decir, no cabe cualquier excepción por esa vía al derecho de disposición del interesado sobre sus datos por el solo hecho de que tal excepción emana de una norma de rango legal. En este sentido, cabe citar la doctrina de TC sobre la regulación de los límites de un derecho fundamental (Sentencia núm.292/2000, de 30 de noviembre):

(FJ 15) "(...) la reserva de Ley prevista en el art. 53.1 CE respecto a la regulación de los límites de un derecho fundamental no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias como el que antes hemos enjuiciado, sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites.

De un lado, porque si bien este Tribunal ha declarado que la Constitución no impide al Estado proteger derechos o bienes jurídicos a costa del sacrificio de otros igualmente reconocidos y, por tanto, que el legislador pueda imponer limitaciones al contenido de los derechos fundamentales o a su ejercicio, también hemos precisado que, en tales supuestos, **esas limitaciones han de estar justificadas en la protección de otros derechos o bienes constitucionales** (F. 8 y las allí citadas) y, además, han de ser proporcionadas al fin perseguido con ellas (SSTC 11/1981, F. 5, y 196/1987, F. 6). Pues en otro caso incurrirían en la arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 CE.

De otro lado, aun teniendo un fundamento constitucional y resultando proporcionadas las limitaciones del derecho fundamental establecidas por una Ley (STC 178/1985), **éstas pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de aplicación**. Conclusión que se corrobora en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sido citada en el F. 8 y que aquí ha de darse por reproducida. Y ha de señalarse, asimismo, que no sólo lesionaría el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), concebida como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre cuál ha de ser la actuación del poder aplicando el Derecho (STC 104/2000, F. 7, por todas), sino que al mismo tiempo dicha Ley estaría lesionando el contenido esencial del derecho fundamental así restringido, dado que la forma en que se han fijado sus límites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la práctica, su ejercicio (SSTC 11/1981, F. 15; 142/1993, de 22 de abril, F. 4, y 341/1993, de 18 de noviembre, F. 7). De suerte que la falta de precisión de la Ley en los presupuestos materiales de la limitación de un derecho fundamental es susceptible de generar una indeterminación sobre los casos a los que se aplica tal restricción. Y al producirse este resultado, más allá de toda interpretación razonable, la Ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla, menoscabando así tanto la eficacia del derecho fundamental como la seguridad jurídica."

(FJ 16) "(...) Más concretamente, en relación con el derecho fundamental a la intimidad hemos puesto de relieve no sólo la necesidad de que sus posibles limitaciones estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sean proporcionadas (SSTC 110/1984, F. 3, y 254/1993, F. 7)

sino que la Ley que restrinja este derecho debe expresar con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora. De no ser así, mal cabe entender que la resolución judicial o el acto administrativo que la aplique estén fundados en la Ley, ya que lo que ésta ha hecho, haciendo dejación de sus funciones, es apoderar a otros Poderes Públicos para que sean ellos quienes fijen los límites al derecho fundamental (SSTC 37/1989, de 13 de febrero y 49/1999, de 5 de abril)."

V.- En el artículo 9 bajo el epígrafe "patrocinio de deportistas y entidades" se hace referencia a que las Administraciones Públicas de la CAPV, entidades instrumentales de Derecho Público o Privado y otras entidades participadas por aquellas, no podrán patrocinar ni subvencionar a deportistas o a entidades deportivas que hayan sido sancionadas por dopaje o en caso de que se hayan negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje. En relación a este último inciso **"que se hayan negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje"** aconsejamos que se concrete de la siguiente forma: **"que hayan sido sancionados por haberse negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje"**. Dado que la negativa a colaborar también está tipificada como infracción, aconsejamos que la negativa al patrocinio o subvención se una también al hecho de haber sido sancionado por dicha falta de colaboración, de lo contrario se estaría aplicando una medida desfavorable o de gravamen sin haber tenido lugar antes un procedimiento sancionador con todas las garantías en cuanto a medios de defensa se refiere.

Lo mismo ocurriría en el apartado 3 de este artículo, en lugar de decir "en el supuesto de que las acciones de patrocinio o las subvenciones sean anteriores a la comisión de dichas conductas", sería más apropiado decir "anteriores a la sanción de dichas conductas".

Y por seguir la redacción prevista en el artículo 50.6⁴ del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco podría añadirse "sancionadas administrativa o penalmente" para dejar constancia expresa de que la previsión comprende los dos tipos de sanción.

En otro orden de cosas, en el apartado 1º de este artículo 9 se indica que "no podrán patrocinar ni subvencionar a entidades deportivas que hayan sido sancionadas por acciones colectivas o continuadas de dopaje". En relación a este apartado procede señalar que resultaría conveniente

⁴ Art. 50.6 LPDINGPV: "La comunicación relativa a la solicitud y, en su caso, obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados a que se refiere la letra 5) del número 2 anterior, la acreditación de no estar incurso o de la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador a que se refiere el número 4 anterior, así como la acreditación de las circunstancias de no hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la probabilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incurso en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluida la referida en el número 5 anterior, podrá realizarse a través de una declaración responsable."

concretar el término "sancionadas por acciones colectivas o continuadas de dopaje". Dado que la negativa a patrocinar o subvencionar supone una medida desfavorable para los interesados, debería concretarse tal extremo. Por otro lado y en comparación con el apartado siguiente de este artículo 9 ("Las Administraciones Públicas del País Vasco y sus entidades instrumentales de Derecho Público o Privado, o entidades participadas por aquellas, no podrán patrocinar ni subvencionar a deportistas") no se entiende la razón que justifica -nada se explica en la memoria- que al deportista se le niegue la ayuda por haber sido sancionado por una acción de dopaje y a las entidades deportivas por acciones continuadas o por actuaciones de carácter colectivo.

Asimismo, cabe señalar que en este artículo se utiliza el concepto genérico "entidades participadas por aquellas" en referencia a las entidades participadas por las Administraciones Públicas del País Vasco o sus entidades instrumentales de Derecho Público o Privado, sin concretarse ninguna forma de participación. Las formas de participación de las Administraciones Públicas del País Vasco o sus entidades instrumentales de Derecho Público o Privado en otras entidades son múltiples y tan variadas que la amplitud de dicha categoría es tal que hace prácticamente imposible determinar qué entidades resultan afectadas por este mandato y, por tanto, hace ineficaz el precepto en lo relativo a este extremo.

Por último y para cerrar el comentario relativo a este Capítulo I, dada la terminología variada, con el fin de homogeneizar y aclarar la terminología empleada: posibilidad de incluir un elenco de definiciones: "deportista", "dopaje", "organización deportiva", "entidad deportiva", "sustancias o métodos prohibidos", "competiciones deportivas oficiales", "espíritu deportivo".

• CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (artículos 10 a 12).

A través del Anteproyecto de Ley se crea una nueva Institución, la Agencia Vasca Antidopaje (artículo 10), que, de conformidad al articulado propuesto, podemos concluir que ostenta naturaleza de ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones.

La posibilidad de creación de Agencias Antidopaje en el ámbito de las Comunidades Autónomas está prevista en la propia la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre (artículo 4.6): "En el supuesto de que existiesen Agencias Antidopaje en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se constituirá en el seno de la Agencia Estatal Antidopaje un órgano de participación de las mismas para la información, debate y cooperación respecto de las políticas públicas del Estado en materia de dopaje".

Procede en este punto acudir a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco -aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (en adelante LPOHGVP), en cuanto regula la organización institucional de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En este sentido, se evidencia que la tipología a la que responde la Agencia Vasca Antidopaje no aparece prevista en la clasificación institucional prevista en el artículo 7 de la citada Ley:

“1.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se halla integrada por la Administración General y por la Administración Institucional.

2.- La Administración General o Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a que se refiere el artículo 53 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, es la única entidad de la misma de carácter territorial.

3.- La Administración Institucional se halla integrada por las siguientes entidades:

a) los entes institucionales de la Comunidad que se rijan por el derecho público, los cuales reciben la denominación de organismos autónomos.

b) Los entes públicos de derecho privado.

4.- El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi está integrado por las entidades citadas en los párrafos 2 y 3 anteriores, y las siguientes:

a) Las sociedades públicas.

b) Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren los artículos 6, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los casos en que una o varias de las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano de la Comunidad Autónoma.”

Por tanto, la entidad que se pretende crear a través del Anteproyecto de Ley analizado constituiría lo que se ha venido a denominar “entidad pública atípica” prevista en una ley específica, que la crea y establece su régimen jurídico. De este modo definió la COJCA a la Agencia Vasca de Protección de Datos, de naturaleza muy similar a la ahora pretendida Agencia Vasca Antidopaje (Dictamen 024/2003): “La AVPD no tiene encaje en ninguno de los entes instrumentales previstos por la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (...), por lo que habrá que concluir que estamos ante una entidad pública atípica, prevista en una ley específica, que la crea y establece su régimen jurídico.”

La naturaleza jurídica de la entidad que se pretende crear coincide con lo que en el ámbito estatal se ha denominado “Agencias” y se ha regulado a través de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, en cuyo artículo 2.1 las define como:

"entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias.

Las Agencias Estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta Ley."

En cuanto a su régimen jurídico, se establece (art.10.3) que la Agencia sujetará su actividad a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida que ejerza potestades administrativas y someterá el resto de su actividad a lo dispuesto en la Ley que ahora se tramita y en sus disposiciones de desarrollo.

Asimismo, en el artículo 10.4 del Anteproyecto se prevé que en materia de contratación se ajuste al Derecho público vigente, tal previsión es acorde a lo previsto en el artículo 3.2.d) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que entiende que tendrán la consideración de Administraciones Públicas a los efectos de dicha Ley "Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad". En cuanto al patrimonio, en ese mismo artículo 10.4 se prevé también que su actividad se someta a Derecho Público, así como que los bienes y derechos pertenecerán al patrimonio de la CAPV, lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Patrimonio de Euskadi (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre):

"1. Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma o patrimonio de Euskadi, y constituye su ámbito subjetivo de aplicación:

(...)

j) Aquellas otras entidades de naturaleza pública en que así lo disponga su ley de creación.

2. El patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco o patrimonio de Euskadi está integrado por todos los bienes y derechos que por cualquier título pertenezcan o se atribuyan a las entidades comprendidas en el apartado anterior."

En cuanto al personal, resultará de aplicación la normativa reguladora de la función pública, y en lo relativo al régimen presupuestario de la Agencia, se establece que su presupuesto estará integrado en los Presupuestos Generales de la CAPV y que estará sometida a la legislación reguladora de régimen presupuestario de la CAPV, así como a su régimen de contabilidad pública y al control económico financiero y de gestión del Departamento de

Hacienda y Administración Pública de la Administración de la CAPV, sin perjuicio de la fiscalización de su actividad por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

El artículo 11 regula la organización de la Agencia, la cual contará con:

- una persona que ocupará el cargo de Director o Directora, la cual ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad, siendo ambas características oportunas para garantizar la naturaleza independiente de la Agencia,
- un Secretario o Secretaria,
- un Consejo consultivo,
- el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico,
- así como cualesquiera otros que establezca su estatuto.

En relación al órgano consultivo, se prevé expresamente su composición. Se prevé la participación de una persona en representación de los Territorios Históricos. No queda claro si es una persona por cada territorio o bien una persona en representación de los tres. Dada la importancia de las Diputaciones Forales, en el entramado institucional de la CAPV, sería conveniente que cada una estuviera representada en el Consejo Consultivo, más teniendo en cuenta las competencias que ostentan en la materia.

No se prevé la composición del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico, únicamente se indica que dependerá orgánicamente de la Agencia Vasca Antidopaje, que ostentará autonomía funcional y que sus miembros serán designados por el Director o Directora de la Agencia. Si bien no es necesario el desarrollo en el propio texto legal de la forma de organización de su funcionamiento interno, e incluso de su composición exhaustiva, se echa de menos una mayor concreción, al menos en lo concerniente a su composición y funciones, aunque sea en clave de mínimos susceptibles de un desarrollo posterior.

El artículo 12 regula las distintas funciones de la Agencia.

• **CAPÍTULO III. CONTROLES DE DOPAJE (artículos 13 al 20).**

Bajo este título se regulan cuestiones muy diversas relacionadas con la práctica de los controles de dopaje, en concreto, el Capítulo III versa sobre la obligatoriedad de someterse a los controles antidopaje (art. 13 y 14); sobre las autorizaciones de uso terapéutico y bajas deportivas (art. 14 y 15); los controles de salud (art. 17); la gestión de los controles (art. 18 y 19) y, finalmente, sobre la publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

I.- En el artículo 13 se establece la obligatoriedad de someterse a los controles antidopaje, de modo que, en conexión con el ámbito subjetivo de la Ley, quedan afectados por dicha obligación todos los y las deportistas incluidos en dicho ámbito subjetivo. Los controles se realizarán tanto en competición como fuera de ella. Asimismo, para el caso de realizarse fuera de competición se establece que podrán efectuarse por sorpresa o previa citación. Tal previsión acerca de la posibilidad de realizar controles de

dopaje fuera de competición y que éstos sean por sorpresa es acorde con las normas internacionales. En concreto, el Código Mundial Antidopaje regula la posibilidad de realizar controles fuera de competición en su artículo 15.2 y en relación a la posibilidad de que sean efectuados sin previo aviso el artículo 5.1.2 de dicho Código establece que "salvo en circunstancias excepcionales, todos los controles fuera de competición se realizarán por sorpresa".

El artículo 13 del Anteproyecto viene a ser una transcripción, aunque, evicentemente, con algunas modificaciones, del artículo 5 de la Ley Orgánica 7/2006. Las diferencias con el precepto legal de la LO residen en el diferente ámbito subjetivo del anteproyecto, más amplio que el caso estatal (deportistas con licencia), en las referencias a la Tarjeta de Salud del Deportista y al organismo con potestad en materia de control antidopaje (en el caso del anteproyecto son hechas a la Agencia Vasca Antidopaje). La transcripción prácticamente literal del precepto, introduciendo simplemente el cambio de los sujetos afectados por los controles, da lugar a algunos problemas de interpretación del artículo 13:

- El artículo 5.2 de la Ley Orgánica 7/2006 establecía: "La obligación de someterse a los controles alcanza, igualmente, **a los deportistas que hayan sido suspendidos en su licencia deportiva** por haber incurrido en una infracción de dopaje mientras se encuentren cumpliendo la sanción y, en todo caso, **con carácter previo a la rehabilitación de la licencia deportiva.**"

El artículo 13.4 -que toma como referencia de origen e anterior queda redactado de la siguiente forma: "La obligación de someterse a los controles alcanza, igualmente, **a las y los deportistas que hayan sido suspendidos** por haber incurrido en una infracción de dopaje mientras se encuentren cumpliendo la sanción y, en todo caso, **con carácter previo a la rehabilitación de la licencia deportiva.**"

Al transcribir el artículo 5.2 se suprime, en primer lugar, el inciso "que hayan sido suspendidos en su licencia", para acomodar dicho artículo al ámbito subjetivo del Anteproyecto y referirse a los deportistas que hayan sido suspendidos (independientemente de que tengan licencia o no), sin embargo, a continuación se añade que en todo caso se someterán a control de dopaje con carácter previo "a la rehabilitación de la licencia deportiva". Tal y como está redactado el artículo 13 será necesario el sometimiento a control de dopaje para la rehabilitación de la licencia deportiva, sin embargo, para el supuesto de rehabilitación en la práctica deportiva sin licencia no se prevé nada.

- El apartado 13.5 del Anteproyecto dice lo siguiente: "La Agencia Vasca Antidopaje podrá extender a obligación de someterse a los controles de dopaje a aquellas y aquellos deportistas que, teniendo licencia y no habiéndola renovado en el plazo establecido, exista presunción razonable de que no han abandonado la práctica

deportiva y puedan estar tratando de eludir la realización de controles de dopaje fuera de competición hasta la renovación de la misma.”

Este apartado, que reproduce el artículo 5.2. (párrafo 2º)¹ de la LO 7/2006 queda desvirtuado al incluirlo en el Anteproyecto, esto es, en la Ley vasca la obligatoriedad de someterse a controles antidopaje afecta tanto a deportistas con o sin licencia, cosa que no ocurre en la norma estatal. De modo, que conforme a la Ley vasca los deportistas que no hayan renovado su licencia tienen igualmente obligación de someterse a dichos controles, por lo que no podrán eludir la realización de controles por el hecho de no renovar la licencia. Es por ello que debería revisarse la redacción o la procedencia de incluir este apartado.

- El apartado 10 del artículo 13 es la transcripción del artículo 5.6 de la Ley estatal. El artículo estatal hace referencia al sometimiento a los controles de deportistas con licencia extranjera: “Podrán ser sometidos a control los deportistas con licencia no española que participen en competiciones estatales o internacionales que se celebren en el ámbito de aplicación de la presente Ley. La tramitación de los expedientes disciplinarios que pudieran derivarse de los mismos se realizará en la forma que establezca la correspondiente normativa internacional. Asimismo, podrán ser sometidos a controles fuera de competición cuando se encuentren entrenando en España, a instancia de la federación u organismo internacional competente. En cualquier caso, los resultados de los controles de dopaje efectuados serán trasladados a la federación deportiva internacional correspondiente y a la Agencia Mundial Antidopaje.”

El Anteproyecto de Ley ha suprimido la referencia a los deportistas con la licencia extranjera que participan en competiciones estatales o internacionales incluidas en el ámbito de aplicación de la LO 7/2006 y lo ha cambiado por “deportistas sin la correspondiente licencia vasca que participan en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la CAPV o que residan, aunque temporalmente, en ésta”. Y continúa el artículo copiando el precepto estatal: “La tramitación de los expedientes disciplinarios que pudieran derivarse de los mismos se realizará en la forma que establezca la correspondiente normativa internacional. Asimismo, podrán ser sometidos y sometidas a controles fuera de competición cuando se encuentren entrenando, a instancia de la federación u organismo internacional competente”.

Por tanto, al copiar el precepto de la Ley estatal referido a los deportistas con licencia extranjera y trasladarlo sin más al

¹ Art.5.2 (párrafo 2º). “La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje podrá extender esta obligación a aquellos deportistas que, teniendo licencia y no habiéndola renovado en el plazo establecido, exista presunción razonable de que no han abandonado la práctica deportiva y pueden estar tratando de eludir la realización de controles de dopaje fuera de competición hasta la renovación de la misma.”

Anteproyecto, cambiando únicamente la referencia al ámbito subjetivo nos encontramos con una falta de sentido en el precepto aludido. Esto es, de la primera parte del precepto no se deduce que estemos hablando de deportistas con licencia extranjera; el concepto "deportistas sin la correspondiente licencia vasca que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la CAPV o que residan, aunque temporalmente, en ésta" hace referencia no sólo a deportistas con licencia extranjera, sino también a los deportistas con licencia española o a cualquier persona sin licencia deportiva que participe en actividades deportivas que se celebren en el País Vasco o que residan, aunque sea temporalmente, en la CAPV.

A continuación se sigue diciendo que podrán ser sometidos a controles fuera de la competición a instancia de la federación u organismo internacional competente. No se entiende en base a qué una persona sin licencia deportiva vasca que resida, aunque sea temporalmente, en la CAPV puede ser sometida a un control antidopaje a instancia de una federación u organismo internacional.

Surge también otra duda respecto a este precepto, si cualquier deportista (incluidos los que no tienen licencia) que resida temporalmente en la CAPV puede ser sometido a control y, por ende, sancionado, no se entienda por qué se habla únicamente de "expediente disciplinario", si alguno de los sujetos afectados no tienen ninguna relación jurídica especial con una federación u otra entidad deportiva, es decir, si no están sometidos a ningún régimen disciplinario.

Por todo ello, se propone la revisión de este artículo 13.10.

- En otro orden de cosas, se produce un solapamiento con el ámbito subjetivo y material de la Ley estatal, ya que este artículo -tal y como está redactado- regula, entre otros, el sometimiento a control de los deportistas con licencia federativa española ("licencia no vasca") que participen en **competiciones deportivas que se celebren en territorio de la CAPV** (pudieran ser competiciones oficiales estatales). Esta previsión no es acorde con el ámbito de aplicación del Anteproyecto, en concreto, con el artículo 1.4 que establece que quedarán excluidas de la aplicación de la Ley las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente.

En resumidas cuentas en el apartado 10 del artículo 13 del Anteproyecto se ha copiado el contenido del artículo 5.6 de la LO, dando por supuesto que "deportistas sin la correspondiente licencia vasca que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la CAPV, o que residan, aunque temporalmente, en ésta" es el equivalente a "deportistas con licencia

no española que participen en competiciones estatales o internacionales que se celebren en el ámbito de aplicación de esta Ley”. Evidentemente tal equivalencia no es cierta, por lo que la segunda parte del artículo 5.6 referida a la normativa internacional y a las federaciones y organismos internacionales competentes no guarda relación con el inciso precedente.

En términos generales, debemos decir que no puede procederse a la transcripción sin más de preceptos legales, sin valorar en qué medida el diferente ámbito subjetivo y objetivo puede afectar a la lógica de dichos preceptos. Por todo ello aconsejamos la revisión de todo el artículo 13.

II.- En el artículo 14 se prevé el modo de realización de los controles de dopaje: personal autorizado; competencia para la concesión de la habilitación para la realización de dichos controles; limitaciones horarias; información acerca de derechos y obligaciones, y consecuencias de la negativa a someterse a los controles.

La redacción de este artículo es muy similar a la del artículo 6 de la Ley Orgánica 7/2006, por tanto, debemos señalar que, dado que en la actualidad se está tramitando una modificación de la citada Ley Orgánica¹ mediante la que –entre otras cosas– se va a paliar la falta de concreción del citado artículo 6, en su apartado 2, teniendo en cuenta que dicho apartado 2 tiene carácter orgánico y dado que para la redacción del artículo 14 del Anteproyecto, el artículo 6 ha servido de modelo, debería tenerse en cuenta la próxima modificación de la Ley Orgánica. En este sentido, cabe recordar que se va a modificar la Ley Orgánica y se va a concretar la franja nocturna horaria en la que no se pueden realizar controles fuera de competición, en concreto se va a establecer una franja horaria entre las once de la noche y las seis de la mañana.

El resto del artículo 14 sigue la redacción del artículo 6. El cambio más significativo aparece en el apartado 9², que no sólo se refiere a la negativa a someterse a los controles sin justa causa, sino también –y a diferencia de la normativa estatal– a la negativa a responder a los requerimientos de información por parte de la organización antidopaje. Asimismo, y a diferencia del precepto estatal se establece que la imposibilidad de acudir al control deberá ser verificada por la persona responsable del equipo de recogida de muestras.

¹ El pasado 25 de marzo de 2011 se anunció que el Consejo de Ministros había recibido un informe del Ministro de la Presidencia sobre el Anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica 7/2006, donde se recomendaban próximas modificaciones en la LO 7/2006.

² Artículo 14.9: “A los efectos de los procedimientos disciplinarios o sancionadores en materia de dopaje, la negativa sin justa causa a someterse a los controles o la negativa a responder a los requerimientos de información por parte de la organización antidopaje, una vez documentada, constituirá prueba suficiente para sancionar la conducta de la o el deportista. Se entiende por justa causa para no someterse a un control, la imposibilidad de acudir, como consecuencia de lesión acreditada o cuando se acredite que la realización del control ponga en grave riesgo la salud de la o el deportista. Dicha imposibilidad deberá ser verificada por la persona responsable del equipo de recogida de muestras.”

III.- El artículo 15 versa sobre las autorizaciones terapéuticas. La redacción de este artículo es muy similar a la del artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2006. Según este artículo 15 están obligados a llevar un libro-registro de las autorizaciones de uso terapéutico:

- Los clubes y demás entidades deportivas que se determinen reglamentariamente (art. 15.1).
- Las federaciones deportivas vascas y territoriales cuando las y los deportistas se encuentre bajo su responsabilidad en el marco de las selecciones deportivas (art. 15.6).
- En los deportes individuales, esta obligación recaerá sobre la o el deportista (art. 15.7). Teniendo en cuenta que este precepto es una reproducción del artículo 7.3 de la Ley Orgánica y siendo el ámbito subjetivo diferente, al trasladarlo al Anteproyecto y siendo el ámbito subjetivo de éste mucho más amplio que el de la Ley Orgánica, se establece una obligación de registro de las autorizaciones de uso terapéutico a todo deportista que no esté federado, es decir, a cualquier persona que realice una actividad física que resida temporalmente en la CAPV.

No obstante, en la Disposición Adicional 8ª se exime de la obligación de solicitar autorizaciones de uso terapéutico, así como de la obligación de formular declaraciones de uso de glucocorticosteroides y demás sustancias a los y las deportistas sin licencia que participen en pruebas deportivas de gran exigencia física que se determinen mediante Orden. En este sentido, de la lectura conjunta de esta Disposición y del artículo 15, en conexión con el artículo 1 del Anteproyecto (ámbito subjetivo), se llega a la conclusión que si bien se exime a los deportistas sin licencia participantes en pruebas de gran exigencia física, no así al resto de deportistas sin licencia que residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco, que -tal y como está redactado el Anteproyecto- quedarían obligados a solicitar autorizaciones de uso terapéutico y a llevar un libro-registro sobre las mismas, conclusión que resulta cuanto menos sorprendente.

En resumidas cuentas, nos encontramos de nuevo con el problema de transcribir un precepto de la Ley Orgánica sin tomar en consideración que el diferente ámbito subjetivo de ambas leyes introduce matices importantes que pueden hacer que algunos preceptos no tengan sentido para todos los sujetos afectados por la Ley vasca.

IV.- El artículo 16 introduce una novedad no recogida en la Ley Orgánica 7/2006: la posibilidad de que las entidades deportivas contemplan en sus reglamentos la situación de baja deportiva. El problema respecto a esta remisión (problema que se repite también en otros artículos) es que en ninguna parte del Anteproyecto se definen cuáles son las entidades deportivas a las que resulta aplicable esta Ley. De la lectura del articulado no queda claro cuáles son las entidades deportivas afectadas por la Ley, ya que no se contempla una definición clara de las mismas. La Ley Orgánica 7/2006 delimita con precisión qué se entiende por entidades deportivas a los efectos de dicha Ley y señala en su Disposición Adicional Octava:

"Delimitación del concepto de entidades deportivas a efectos de aplicación de esta Ley.

Sin perjuicio de la aplicación directa a las entidades previstas en el Título III de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, esta Ley será también de aplicación al resto de entidades que organicen competiciones deportivas y estén inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Consejo Superior de Deportes".

Sin embargo, el Anteproyecto no delimita el término "entidades deportivas" y las referencias que se encuentran a lo largo del articulado son variadas lo que conduce a dudas sobre qué se entiende por "entidades deportivas" a los efectos de la futura Ley, a modo de ejemplo:

- Artículo 6 (responsabilidades de las entidades deportivas): "las entidades deportivas del País Vasco".
- Artículo 15 (obligaciones accesorias y autorizaciones de uso terapéutico): "los clubes y demás entidades deportivas que se determinarán reglamentariamente".
- Artículo 16 (pajas deportivas): "las entidades deportivas a las que les resulta aplicable esta ley".
- Artículo 17.4 (controles de salud): "las federaciones y demás entidades deportivas".
- Artículo 18.5 (planificación y gestión de los controles): "deben ser realizados por las entidades a que se refiere esta ley".
- Artículo 19.1 (competencia para la realización de los controles): "las entidades previstas en esta ley".
- Artículo 21 (ámbito de aplicación del régimen disciplinario): "entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente ley o se sujeten voluntariamente a la misma".

V.- Los artículos siguientes se refieren a los controles de dopaje y los controles de salud. Los controles de dopaje se definen como aquellas actividades cuya finalidad es averiguar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario, detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto, así como aquellas actuaciones desarrolladas por los órganos antidopaje competentes para verificar el incumplimiento de la normativa antidopaje (art. 17.1). La realización de los controles, es decir, de los análisis, correrá a cargo de entidades y personas habilitadas por la Agencia Vasca Antidopaje (art. 17.1).

Asimismo, la realización de las actuaciones necesarias para efectuar dichos controles será competencia de las federaciones deportivas vascas y territoriales y del resto de entidades deportivas (art. 19.1), así como de la Agencia Vasca Antidopaje (art.18).

Asimismo, los controles de salud son el conjunto de actuaciones que a Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pudiera producir la actividad deportiva, así como para controlar el cumplimiento de las y los deportistas de las obligaciones derivadas de la Ley en materia de dopaje y salud (art. 17.4).

El artículo 18 bajo el título "planificación y gestión de los controles" establece que la Agencia Vasca Antidopaje determinará los controles de dopaje, de salud y demás actuaciones en materia de protección de la salud que deberán ser realizados por las entidades deportivas. El título del artículo debería concretarse más ya que no se refiere a cualquier planificación y gestión, sino, en concreto, a la planificación y gestión de los controles por parte de la Agencia Vasca Antidopaje.

El artículo 18.1 es una copia del artículo 9.1 de la LO, con la diferencia que el artículo 9 se refiere únicamente a las federaciones deportivas que son las que tienen competencia según la LO para la realización de los controles de dopaje. A su vez, ese artículo 9 está conectado con el artículo 11 (competencia para la realización de las actuaciones referidas a los controles antidopaje). Lo que ocurre en el Anteproyecto es que se copia el 9.1 pero ampliando el ámbito de aplicación a "las entidades a que se refiere esta Ley" (que ya hemos señalado que no están concretadas) y luego se copia el artículo 11 de la LO en el artículo 19 del Anteproyecto, de manera que, en principio según el artículo 18.1 y el 19.1 podrían realizarse controles en el seno de las federaciones, así como en otras entidades deportivas, sin embargo, sólo se prevé la intervención subsidiaria de la Agencia Vasca Antidopaje en caso de que las federaciones no dispongan de suficientes medios o estructura para la realización de dichos controles (art. 19.2).

Finalmente, se cierra este Capítulo con un artículo relativo a la publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. En este sentido, se establece que el Director o Directora, ordenará la publicación en el BOPV de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, en el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales. En cualquier caso ha de tenerse en cuenta que el artículo 12 (primer párrafo) de la LO 7/2006, relativo a la lista de sustancias publicada por el Consejo Superior de Deportes, tiene carácter orgánico y en dicho artículo se hace mención expresa a la Convención Antidopaje de la UNFSCO:

"En el marco de los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por España, y en particular en el marco de la Convención Antidopaje de UNESCO, el Consejo Superior de Deportes publicará en el «Boletín Oficial del Estado», mediante Resolución de su Presidencia, la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación tendrá carácter periódico y se producirá, en todo caso, cuando se introduzcan cambios en la misma".

❖ **CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL DOPAJE (artículos 21 a 41).**

El Capítulo IV regula a lo largo de 20 artículos el régimen sancionador aplicable a la materia objeto de regulación. Se completa este régimen sancionador con la Disposición Adicional Quinta que prohíbe el depósito, comercialización o distribución, bajo cualquier modalidad, en centros deportivos, de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, así como la incitación al consumo de tales productos en dichos centros deportivos.

Procederemos a continuación a su examen atendiendo principalmente al artículo 25 de la Constitución, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a la Ley 7/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La inclusión de este Título responde a la necesidad de cubrir un vacío legal existente en la materia que al no haberse abordado en su específica tipología por la Ley Vasca del Deporte impedía a la Administración General de la CAPV la imposición de sanciones por las conductas ahora señaladas con el consiguiente menoscabo para la eficaz protección del bien jurídico tutelado. En tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó dos sentencias (núm. 488/209 y núm.586/09) en las que anulaba sendas sanciones interpuestas por el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. En dichas sentencias se evidenciaba la inexistencia en la Ley Vasca del Deporte de un título que amparase el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración General de la CAPV en materia de disciplina deportiva.

En primer lugar, cabe hacer constar que la competencia exclusiva que ostenta la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de deporte faculta a ésta para dictar disposiciones sancionadoras.

El ejercicio de dicha potestad sancionadora halla sus límites en el propio postulado del artículo 25 de la Constitución, que instaura los principios de tipicidad y reserva de ley.

El principio de legalidad para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, se desenvuelve -SSTC 219/89, 61/90, 83/90 y 93/93 entre otras muchas- en dos vertientes: una formal que se suele denominar exigencia de reserva legal, y que significa que ha de venir regulada en ley formal -en la actualidad principio recogido en el artículo 127.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC); y otra material, conocida de ordinario como mandato de tipificación legal, artículo 129 LRJ-PAC.

El mandato de tipificación se desarrolla en dos pasos sucesivos: primero, ha de determinar la ley cuáles son las conductas que se consideran infracción administrativa -artículo 129.1 LRJ-PAC- y, luego, ha de atribuir a cada una de las infracciones la sanción que corresponde -artículos 129.2 LRJ-PAC-. En esta operación no se descarta -SSTS 83/84, 87/85 y 2/87 entre otras muchas- la "colaboración" reglamentaria -artículo 129.3 LRJ-

PAC-, para precisar conceptos de mayor amplitud comprensiva y eliminar el riesgo de inseguridad jurídica, pero siempre que no se creen regulaciones independientes y no claramente subordinadas a la ley.

En este mismo sentido y a tenor de lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley de la Potestad Sancionadora, en aras a un elemental principio de seguridad jurídica, las leyes configuradoras de regímenes sancionadores deberán tipificar las infracciones con la mayor precisión posible, evitando tipificar infracciones con idéntico supuesto de hecho que los delitos o faltas penales o que las infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

Partiendo de estos principios básicos de la potestad sancionadora, pasamos a ahondar en el contenido del Anteproyecto en este aspecto.

I.- En primer lugar, se hace necesario señalar que en lo no previsto de forma específica en la regulación propuesta y así concretamente en todo lo relativo al procedimiento administrativo, resulta plenamente aplicable la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora, en cuanto que en su artículo 1 prevé que "se aplicará a todos los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las materias en las que las instituciones comunes de ésta ostenten competencias normativas ...".

Esta técnica, a nuestro entender, viene avalada por la naturaleza unificadora y global de la que pretendió dotarse a esta Ley 2/1998, y que queda patente en su Exposición de Motivos cuando señala que "desde una perspectiva práctica debe señalarse que la forma de ley es la única que garantiza la expulsión del ordenamiento de todas las regulaciones sectoriales vigentes establecidas con rango legal y contrarias a la que en esta ley se configura, lo cual es imprescindible para el logro del objetivo de unificación y la consiguiente garantía de la seguridad jurídica".

A mayor abundamiento cabe constatar que la Ley 2/1998 establece unas reglas generales sustantivas válidas para la aplicación de cualquier régimen sancionador sectorial y fija un procedimiento con unas reglas generales igualmente hábiles para el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de cualquier materia.

El Capítulo IV del Anteproyecto regula el régimen de infracciones y sanciones siguiendo la estructura de la Ley Orgánica 7/2006, excepto algunas salvedades. Al respecto conviene recordar que este Capítulo tiene carácter de ley ordinaria (Disposición Final quinta de la LO 7/2006), por lo que en cuanto no reúna los requisitos de las condiciones básicas del artículo 149.1.16º CE el legislador autonómico puede adoptar la solución que estime más conveniente para la efectividad de la materia regulada.

Conviene destacar que el Anteproyecto opta por realizar una diferenciación entre el régimen disciplinario y el régimen administrativo sancionador. En este sentido, tal y como se expone en la memoria, el Anteproyecto ha optado por incorporar el sistema dual instaurado en la actual Ley Vasca del

Deporte. No obstante, el elenco de infracciones y sanciones es el mismo para uno y otro y viene a ser una reproducción del contenido en la LO 7/2006, pero con la diferencia sustancial de que la Ley Orgánica configura un único régimen sancionador disciplinario sólo válido para aquellas personas con licencia o habilitación equivalente y, frente a ello, el ámbito de aplicación del Anteproyecto es más extenso que el previsto en la LO 7/2006⁸ y la potestad que asume la Agencia Vasca Antidopaje no sólo se despliega con carácter supletorio a los casos en los que las entidades deportivas con potestad disciplinaria no ejerzan la misma, sino que además la puede ejercer autónomamente sin necesidad de esperar a la intervención preferente de aquellas e incorpora a sujetos más allá de aquellos que están sometidos a la potestad disciplinaria.

En definitiva, entendemos que en realidad el régimen de infracciones y sanciones regulado en el Anteproyecto es único y puede ser aplicado a los siguientes sujetos:

- a) A personas sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias exigidas en el artículo 46 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco (licencias federativas, universitarias o escolares).
- b) A personas sujetas a relaciones de especial sujeción con las demás entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente Ley o se sujeten voluntariamente a la misma.
- c) Cualquier persona que cometa una acción u omisión tipificada como infracción que tenga lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, con independencia de que se produzca fuera de competiciones o en el marco de competiciones, ya sean éstas autonómicas, estatales o internacionales, no siendo precisa la existencia de relaciones de especial sujeción para la aplicación del régimen sancionador administrativo.

Por tanto, la dualidad del sistema incorporado al Anteproyecto en realidad viene de la mano del sujeto que tiene atribuida la potestad sancionadora, de modo que si es la Administración General de la CAPV la que sanciona estaremos ante "el ejercicio de la potestad sancionadora de carácter administrativo" (art. 37) y si quienes sancionan son las federaciones deportivas del País Vasco o las demás entidades con las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco, estaremos hablando de potestad disciplinaria (art. 38). La primera afectará a cualquier persona que cometa una infracción en el ámbito territorial de la CAPV, ya sea en el marco de competiciones de cualquier índole (autonómicas, estatales o

⁸ Art. 11.3 de la LO 7/2006. "Con carácter general y, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 9.2 de esta Ley, corresponde a las federaciones deportivas españolas la realización de las actuaciones necesarias para llevar a cabo los controles que determine la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Cuando la insuficiencia de medios o la estructura de la propia federación así lo justifique, ésta podrá solicitar, mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración, que dicha función sea, íntegramente, realizada por la Agencia Estatal Antidopaje."

interaccionales) o fuera de las mismas y sin necesidad de que exista una relación de especial sujeción con una federación u otro tipo de entidad deportiva (art.22). La segunda (potestad disciplinaria) afectará a las personas con licencia federativa, universitaria o escolar o a las personas, domiciliadas en el País Vasco, afectas a relaciones de especial sujeción con entidades deportivas (art.23).

II.- El artículo 22 -relativo a la aplicación del régimen sancionador administrativo- se completa con una cláusula de salvaguardia del principio non bis in idem, remitiendo al artículo 33. No obstante, dicha cláusula, si bien se ha incluido dentro del artículo relativo al régimen sancionador administrativo, afectaría igualmente al régimen disciplinario, además no sólo en relación a los hechos sancionados penalmente, sino entre la propia potestad sancionadora administrativa y la disciplinaria.

Dado que hay una intersección entre el ámbito de aplicación de la potestad sancionadora administrativa y la disciplinaria y visto que el elenco de infracciones y sanciones es único, podríamos encontrarnos ante la sanción por ambas vías de las mismas acciones u omisiones, produciéndose una identidad de sujeto, hechos y fundamento que conduciría a sancionar los mismos hechos, aplicando el mismo tipo infractor e imponiendo la misma sanción, lo que supondría una vulneración del principio non bis in idem.

Si bien es cierto que en otros textos legales se prevén sistemas duales de potestad sancionadora y disciplinaria, dichos regímenes son totalmente independientes y a lo sumo supletorios. A modo de ejemplo y tomando como referencia una de las leyes mencionadas en la memoria que acompaña al Anteproyecto, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, además de prever regímenes de infracciones y sanciones separados para el ámbito sancionador administrativo y para el disciplinario, prevé lo siguiente en caso de concurrencia de procedimientos sancionadores relativos a los mismos hechos:

(Artículo 38) Concurrencia de procedimientos penales, administrativos y disciplinarios.

1. La incoación de un proceso penal no será obstáculo para la iniciación, en su caso, de un procedimiento administrativo y disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éstos hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal.

En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al proceso penal vinculará a la resolución que se dicte en los procedimientos administrativo y disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan merecer en una u otra vía.

Sólo podrá recaer sanción penal y administrativa y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico.

2. Cuando a una misma persona física o jurídica y con identidad de hechos le resulten simultáneamente de aplicación

sanciones administrativas y disciplinarias previstas en los títulos segundo y tercero de la presente Ley, será de tramitación preferente el procedimiento administrativo sancionador previsto en el título segundo.

Cometido el hecho infractor en que pueda producirse concurrencia de responsabilidad administrativa y disciplinaria, el órgano competente para la instrucción de cada uno de los procedimientos vendrá obligado a iniciarlo y a notificar la incoación del expediente al órgano recíproco, administrativo o federativo, según el caso.

3. Cuando un órgano federativo reciba la notificación de incoación de un expediente administrativo sancionador relativo a sujetos y hechos idénticos a los que estén dando lugar a la tramitación de un expediente disciplinario, suspenderá la tramitación del procedimiento, notificándolo al órgano administrativo que tramite el procedimiento administrativo sancionador. Caso de que no exista identidad de sujetos, hechos o fundamentos jurídicos podrá no obstante continuar la tramitación del procedimiento.

4. Una vez terminado el expediente administrativo sancionador, el órgano competente para resolverlo notificará el acuerdo resolutorio al órgano disciplinario federativo que comunicó la suspensión del procedimiento, quien levantará la suspensión y adoptará uno de los acuerdos siguientes:

a) La continuación del procedimiento disciplinario, cuando no exista identidad de fundamentos jurídicos para la imposición de la sanción, o cuando habiéndola, la sanción administrativa sea inferior a la que pueda imponerse como consecuencia del procedimiento disciplinario.

b) El archivo de las actuaciones, cuando exista identidad de fundamentos jurídicos y la sanción administrativa sea igual o superior a la que pueda imponerse como consecuencia del procedimiento disciplinario.

5. En el caso de que el órgano disciplinario decida continuar el procedimiento sancionador por existir identidad de fundamentos jurídicos pero ser la infracción susceptible de una sanción superior a la administrativamente impuesta, la resolución del expediente disciplinario reducirá la sanción aplicable en la cuantía o entidad que corresponda por aplicación de la sanción administrativa previa, haciendo constar expresamente la cuantía de la reducción en la resolución del procedimiento.

6. En el caso de que recaiga una resolución judicial que anule total o parcialmente la sanción administrativa, el órgano que dictó esta última lo notificará al órgano disciplinario federativo que en su día le hubiere comunicado la incoación del procedimiento, a fin de que el mismo proceda al archivo de las actuaciones, salvo que no exista identidad de fundamentos jurídicos entre la sanción administrativa anulada y la eventual sanción disciplinaria que pudiera imponerse, en cuyo caso se

procederá conforme a lo dispuesto en el apartado 4, letra a) del presente artículo.

7. Los acuerdos adoptados por los órganos federativos en cuanto se refiere a los apartados cuarto, quinto y sexto del presente artículo son susceptibles de impugnación con arreglo a lo dispuesto en el título XI de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte."

En la Ley Vasca del Deporte –que es otro de los ejemplos aludidos- se prevé la concurrencia de ambas potestades y se prevé la compatibilidad de ambos procedimientos en los siguientes términos, muy similares a los recogidos en el artículo 33.4 del Anteproyecto:

"1. En el supuesto de que un mismo hecho pudiera dar lugar a las responsabilidades administrativas reguladas en el Título XI de esta ley y a responsabilidades disciplinarias, los órganos disciplinarios deportivos deberán, de oficio o a instancia de parte, comunicarlo al órgano administrativo competente, todo ello sin perjuicio de la tramitación del procedimiento disciplinario.

2. Cuando los órganos disciplinarios deportivos tuvieran conocimiento de hechos que pudieran dar lugar exclusivamente a responsabilidad administrativa darán traslado de los antecedentes a los órganos administrativos competentes."

Sin embargo, hay una diferencia esencial con el modelo que ahora nos ocupa. En la Ley Vasca del Deporte el elenco de infracciones y las sanciones a aplicar por los órganos disciplinarios y por los órganos administrativos sancionadores es totalmente distinto, por lo que el principio non bis in idem queda a salvo.

De modo que, en el Anteproyecto que ahora se tramita debería preverse la salvaguardia del principio non bis in idem entre las sanciones administrativas y las disciplinarias.

III.- En cuanto a la redacción de los **artículos 21 y 22** debemos hacer las siguientes observaciones:

- El inciso "domiciliadas en el País Vasco" no queda claro si se refiere a las personas o a las entidades deportivas. Por lo que debería precisarse la incidencia de dicho requisito y, en caso de referirse a los deportistas, precisarse qué se entiende por domiciliadas.
- En ese mismo párrafo 1º del artículo 21 se establece que "desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente ley". Como ya se ha dicho no existe a lo largo del Anteproyecto una definición concreta de qué se entiende por "actividad deportiva".

IV.- En el **artículo 23** del Anteproyecto se regula la responsabilidad del deportista "y de su entorno". Se sigue el criterio del Código Mundial Antidopaje, posteriormente incorporado a la LO 7/2006, de establecer una responsabilidad objetiva (o más bien quasiobjetiva), de modo que las y los deportistas serán responsables cuando se produzca la detección de una

sustancia dopante en su organismo. No obstante, la sanción a aplicar dependerá del distinto grado de responsabilidad del deportista en la comisión de dicha infracción. Por lo que el artículo 23 se complementa con el artículo 29, el cual hace referencia a la modulación de la responsabilidad a la hora de valorar la sanción a aplicar.

En relación al párrafo 5º del artículo 23 debemos señalar que convendría concretar qué se entiende por "personas del entorno". En este sentido, la Convención Mundial Contra el Dopaje en el Deporte utiliza el término "personal de apoyo a los deportistas" y los define como "cualquier entrenador, instructor, director deportivo, agente, personal del equipo, funcionario, personal médico o paramédico que trabaje con deportistas o trate a deportistas que participen en competiciones deportivas o se preparen para ellas."

Además, resulta oportuno precisar qué se entiende por "personas del entorno del deportista", ya que en dicho artículo 23.5 se dice que las personas del entorno responderán por el incumplimiento de las disposiciones que regulan la obligación de facilitar a los órganos competentes información sobre las enfermedades de la o el deportista y tratamientos terapéuticos, sin embargo, al concretarse las sanciones, el incumplimiento de esa obligación únicamente conlleva la imposición de sanciones para el personal técnico, jueces y juezas, personal arbitral, demás personas con licencia deportiva, personal directivo, dirigentes o personal de federaciones deportivas, de ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, clubes o equipos deportivos, así como a personal sanitario de clubes o equipos (art.27). Hemos de deducir, por tanto, que esta enumeración conforma el concepto de "personas del entorno", ya que en virtud de la Ley son las que tienen la obligación aludida y, precisamente, su incumplimiento lleva aparejada una sanción. No obstante, de ser así, tal extremo debería ser concretado en el texto legal.

V.- El artículo 24 contiene el conjunto de acciones u omisiones tipificadas como infracciones en materia de dopaje y divididas en muy graves y graves. Esta relación de posibles infracciones complementan el régimen sancionador dispuesto con carácter general por la Ley Vasca del Deporte que, en consecuencia, permanece en sus tipos y sanciones plenamente vigente e inalterable, salvo los artículos 109.ñ) y 127.h) de la Ley 14/1998³, que se derogan en la Disposición Derogatoria Primera del Anteproyecto.

El listado de infracciones previstas es en su mayor parte idéntico al previsto en la LO 14/2006. La única diferencia sustancial es que en la infracción

³ **Art. 109.ñ) de la Ley 14/1998**: "Se considerarán, en todo caso, infracciones muy graves las siguientes: "() ñ) La promoción, incitación y consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida su debido control." y **art. 127.h) de la Ley 14/1998**: "Se considerarán infracciones muy graves: "() h) La promoción, la incitación o la colaboración en materia de consumo de sustancias prohibidas o utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida el debido control de aque las sustancias y métodos."

relativa al incumplimiento de las obligaciones de información sobre tratamientos terapéuticos y obtención de autorizaciones para el uso terapéutico y vulneración de la obligación de declaración de datos relativos a los productos y métodos susceptibles de producir dopaje en el deporte, se ha incluido también como infracción muy grave la negativa a autorizar la inscripción de los tratamientos en el libro registro que deberán llevar los clubes y demás entidades deportivas que se determinen reglamentariamente. En este sentido y relacionando el artículo 24.1.e) con el artículo 15.1, debemos señalar que el consentimiento a que se hace referencia en este último ("siempre que éstos y éstas autoricen dicha inscripción") no tiene sentido porque no es una decisión voluntaria del deportista, sino una obligación cuyo incumplimiento acarrea una infracción muy grave.

En otro orden de cosas, debemos señalar que la referencia al artículo 23.3 recogida en el apartado c) del artículo 24.1 es incorrecta y debería remitir al artículo 23.4. La misma corrección debería realizarse en el artículo 24.2.e).

Este artículo se cierra con un apartado final en el que se establece que "Las infracciones descritas en los apartados anteriores también se entenderán referidas, con las lógicas adaptaciones, a los supuestos de participación de animales en competiciones deportivas". En este sentido, debemos señalar que en un posterior desarrollo reglamentario de dichas adaptaciones no podrán contemplarse ni infracciones ni sanciones nuevas o distintas a las tipificadas en la futura Ley, y todo ello con el fin de salvaguardar el principio de legalidad. Este principio debe, además, conectarse con el de seguridad jurídica que vincula a todos los poderes públicos, afectando de manera especial a las normas que contienen disposiciones de carácter sancionador, y que -como ya se ha señalado con anterioridad en este informe- requiere un especial esfuerzo de precisión y concreción.

VI.- Los siguientes artículos establecen las sanciones a aplicar por la comisión de las anteriores infracciones, dividiéndose en base a las personas infractoras:

- Artículo 25: Sanciones a deportistas.
- Artículo 26: Sanciones a clubes y equipos deportivos.
- Artículo 27: Sanciones a personal técnico, jueces, personal arbitral y demás personas con licencia deportiva, personal directivo, dirigentes o personal de federaciones deportivas, de ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, clubes o equipos deportivos.
- Artículo 28: Sanciones a personal médico y demás personal sanitario de clubes o equipos.

Estos artículos son una transcripción del listado de sanciones de la LO 7/2006. El régimen sancionador previsto en la LO7/2006 tiene dos pilares distintos al Anteproyecto: por un lado, es un régimen sancionador previsto para deportistas con licencia federativa y, por otro, se trata de un régimen disciplinario. Por lo que la traslación sin más del elenco de infracciones y

sanciones al Anteproyecto de Ley vasca produce alguna laguna legal derivada precisamente de dicho ámbito subjetivo diferente de ambas leyes:

El **artículo 25.1** empieza hablando de suspensión o privación de licencia y luego, pasa a referirse únicamente a licencia federativa. Teniendo en cuenta la redacción del artículo 21, según el cual quedan incluidas en el régimen disciplinario las "personas sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias exigidas en el artículo 46 de la Ley 14/1998 -que no son sólo las federativas-, así como las personas sujetas a relaciones de especial sujeción con las demás entidades deportivas (...)", sorprende que a lo largo del artículo 25 sólo se hable de la suspensión o privación de la licencia federativa. Asimismo, teniendo en cuenta que las sanciones contenidas en este artículo también serían aplicables a los sujetos sancionables que conforman el ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador, es decir, a personas sin ningún tipo de relaciones de especial sujeción, no queda claro qué sanción se debe imponer a los y las deportistas que carecen de licencia federativa. Es por ello que la Dirección promotora debería aclarar la incidencia de las sanciones del artículo 25 para aquellos deportistas que no tienen licencia federativa.

Además, de la lectura del artículo 30 de este mismo capítulo -relativo a la imposición de sanciones pecuniarias- se desprende que "las sanciones personales de multa, en los casos de deportistas, solo podrán imponerse cuando éstos obtengan ingresos, que estén asociados a la actividad deportiva desarrollada". Por tanto, aplicando dicho precepto, se desconoce cuál es la sanción a aplicar a aquellos deportistas que no tienen licencia deportiva y que es lógico pensar no van a tener ingresos asociados a dicha actividad. Por lo que parece que, en contra de lo previsto en el artículo 22 (ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador), quedan exentos de sanción, ya que no se les puede suspender o privar de licencia y, según el artículo 30, tampoco se les puede imponer multa pecuniaria alguna.

Asimismo, en los **apartados 2 y 3 del artículo 25** se habla sólo de suspensión de licencia federativa.

El **artículo 27**, tanto en la rúbrica como a lo largo del artículo -salvo en el 5º párrafo-, habla únicamente de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial. Sin embargo, en el apartado 5º establece un mandato a las federaciones y a las entidades organizadoras de competiciones deportivas (no necesariamente de carácter oficial, entendemos) de adaptar su normativa para incluir las previsiones contenidas en este artículo. Teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Ley también incluye dentro de su ámbito de aplicación competiciones de carácter no oficial, debería aclararse si éstas quedan o no incluidas dentro de los sujetos sancionables del artículo 27. Nuevamente, vemos que la traslación literal de artículos de la LO 7/2006 provoca problemas de ajuste con el ámbito subjetivo y objetivo previsto en el Anteproyecto de Ley.

Algo similar ocurre en el **artículo 28**, que únicamente se refiere a personal sanitario bajo licencia deportiva o habilitación equivalente (apartados 1, 2 y

3) y al servicio o integrado en federaciones deportivas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones oficiales. Se desconoce qué ocurre con el personal sanitario sin licencia deportiva o habilitación equivalente o al servicio, por ejemplo, de entidades organizadoras de competiciones de carácter no oficial, que también estarían incluidos en el ámbito subjetivo sancionable del Anteproyecto.

En el **apartado 5º del artículo 27** se establece lo siguiente: "Las federaciones deportivas y entidades organizadoras de competiciones deportivas adaptarán su normativa para incluir estas previsiones, que serán compatibles con la responsabilidad civil que en cada caso proceda y con la depuración de cualesquiera otras responsabilidades que resulten exigibles en virtud de lo dispuesto por esta Ley". Este apartado es copia del último párrafo del artículo 17.4 de la L07/2006. Sin embargo, en la Ley estatal está dentro del apartado referido a personas físicas o jurídicas que realicen las infracciones del artículo 17 sin disponer de licencia federativa o de habilitación equivalente, pero prestando servicios o actuando por cuenta de federaciones deportivas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones oficiales. Dice el artículo 17.4 de la L07/2006:

"4. Las personas físicas o jurídicas que realicen las conductas tipificadas como infracciones en la presente sección, sin disponer de licencia federativa o de habilitación equivalente, pero prestando servicios o actuando por cuenta de federaciones deportivas españolas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial por delegación de las anteriores, o las personas o entidades integradas dentro de dichas organizaciones, no podrán obtener licencia deportiva o habilitación equivalente, ni ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva por un periodo equivalente a la duración de las sanciones de inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos, privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente.

Estas conductas serán consideradas como infracción de la buena fe contractual a los efectos del artículo 54.2.d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Las federaciones deportivas españolas, ligas profesionales y entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, **adaptarán su normativa para incluir estas previsiones**, que serán compatibles con la responsabilidad civil que en cada caso proceda y con la depuración de las responsabilidades que resulten exigibles en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de esta Ley y por los apartados anteriores de la presente disposición."

Por tanto, ese inciso sobre la obligación de que las federaciones, ligas y entidades organizadoras de competiciones oficiales adapten su normativa a estas previsiones se refiere, en concreto, a las previsiones contenidas en los dos párrafos anteriores, es decir, a la consecuencia de no poder obtener licencia deportiva o habilitación equivalente, ni ejercer los derechos

inherentes a la misma por el periodo que dure la inhabilitación, así como a la posibilidad de que dichas conductas sean consideradas causa de despido disciplinario. Sin embargo, al trasladar esa obligación al Anteproyecto se desvincula del apartado al que va unido en la Ley Orgánica y se coloca como apartado independiente, por lo que surge la duda sobre qué adaptaciones concretas deberán realizar las federaciones y entidades organizadoras de competiciones deportivas.

En el art. 28 del Anteproyecto se ha recogido, de similar manera, la previsión contenida en el artículo 18.4 de la LO 7/2006, sin embargo, en esta ocasión no se ha desvinculado del apartado del que trata causa:

Art. 28: "4.- Cuando el personal que realice funciones sanitarias incurra en conductas tipificadas como infracciones en la presente sección, sin disponer de licencia federativa o de habilitación equivalente, pero preste servicios o actúe por cuenta de federaciones deportivas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, o de personas o entidades integradas dentro de dichas organizaciones, no podrán obtener licencia deportiva o habilitación que faculte para realizar funciones sanitarias, ni ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva por un periodo equivalente a la duración de las sanciones de privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente. Las federaciones deportivas y entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, **adaptarán su normativa para incluir estas previsiones**, que serán compatibles con la responsabilidad civil que en cada caso proceda y con la depuración de las responsabilidades que resulten exigibles en virtud de lo dispuesto en la presente sección."

En el **artículo 27.6** se recoge una cláusula según la cual las sanciones previstas en dicho artículo serán aplicables a las personas propietarias y poseedoras de animales que participen en pruebas deportivas y a todas aquellas que sean partícipes en la comisión de la correspondiente infracción. Resulta complicado entender cómo se van a aplicar las sanciones previstas en el artículo 27 en aquellos casos en los que no se desempeñen cargos deportivos o no se tenga licencia deportiva o habilitación equivalente, ni relación de sujeción especial con federación o entidad deportiva alguna, ya que las sanciones reguladas en dicho artículo consisten en la inhabilitación o suspensión o privación de la licencia deportiva o, a lo sumo, de la posibilidad de obtenerlas.

Los siguientes **artículos 29** ("criterios para la imposición de sanciones en materia de dopaje"), **30** ("imposición de sanciones pecuniarias"), **31** ("consecuencias accesorias de la infracción y alteración de resultados"), **32** ("Eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad para obtener licencia deportiva") son muy similares a los artículos 19, 20, 21 y 22 de la LO 7/2006, salvo algunas adaptaciones.

En el **artículo 29** se recoge el principio de proporcionalidad y la graduación de la sanción en base al grado de responsabilidad apreciado según la

existencia de intencionalidad, conocimiento, nivel de responsabilidad de las funciones desempeñadas y naturaleza de los perjuicios causados, así como cualesquiera otra que pudieran servir para modular la responsabilidad.

El **artículo 30.2** establece que las multas impuestas por la Agencia Vasca Antidopaje serán ejecutadas, en caso de impago, de forma forzosa, sin embargo, nada se prevé para el resto de entidades (p.ej federaciones) que ejercitan la potestad disciplinaria, supuesto sí previsto en la LO 7/2006.

En el **artículo 31** hay varias referencias a "la presente sección". Este inciso debería sustituirse por "el presente Capítulo", ya que en el Anteproyecto -a diferencia de lo que ocurre en la LO 7/2006- no hay secciones. Estas mismas alusiones a la "presente sección" aparecen también en los artículos 27.4, 28.4 y 28.5.

El **artículo 32** lleva el título "Eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad para obtener licencia deportiva". Este título es el mismo que el del artículo 22 de la LO 7/2006 que regula exclusivamente la eficacia de las sanciones y la pérdida de la capacidad para obtener licencia deportiva. Sin embargo, ese título no es suficiente para lo regulado en el artículo 32 del Anteproyecto, ya que en dicho artículo no sólo se recogen ambos aspectos, sino también el principio general de reconocimiento mutuo de sanciones por dopaje, la imposibilidad de que un deportista sancionado participe en actividades deportivas a desarrollar en el País Vasco, así como la pérdida de la condición de deportista de alto nivel o deportista promesa.

El **artículo 33** regula la aplicación del principio non bis in idem, que ya ha sido comentado con anterioridad.

En el **artículo 34** se regulan las causas de extinción de la responsabilidad. Comienza dicho artículo aludiendo exclusivamente a la responsabilidad disciplinaria, se desconoce si ha sido esa la intención del órgano promotor o si, por el contrario, se debe a la omisión de la responsabilidad no disciplinaria al copiar dicho artículo de la LO 7/2006.

El **artículo 35** se prevé la prescripción de las infracciones y de las sanciones. En relación a los plazos de prescripción, que son los mismos que los previstos en la LO 7/2006, cabe señalar que, en breve, se van a introducir modificaciones en la LO 7/2006, por lo que convendría que el servicio promotor valorase la importancia de dichos cambios y la oportunidad de tenerlos en cuenta en el Anteproyecto que ahora se tramita.

VII.- Se cierra este Capítulo con los artículos 36 ("colaboración en la detección"), 37 ("competencia en materia sancionadora de carácter administrativo"), 38 ("competencia en materia de procedimientos disciplinarios"), 39 ("procedimiento disciplinario"), 40 ("potestad de inspección") y 41 ("decomiso").

En el **artículo 37** se establece que "el ejercicio de la potestad sancionadora de carácter administrativo en materia de represión del dopaje corresponderá al Gobierno Vasco", esta previsión no casa con el artículo

12.1.e) del Anteproyecto, que establece que corresponderá el ejercicio de la potestad sancionadora a la Agencia Vasca Antidopaje. Si bien no hay impedimento para que sea la Agencia Vasca Antidopaje la que ejerza la potestad sancionadora, los artículos mencionados (37 y 12.1.e.) deberían estar en sintonía.

En el **artículo 38.5** se señala que "el procedimiento disciplinario en materia de dopaje terminará mediante resolución o por caducidad". En caso de que termine por caducidad, también finalizará mediante resolución porque debería dictarse una resolución declarando tal circunstancia. En este sentido, aunque el artículo 38.5 se refiere al procedimiento disciplinario, entendemos que resulta igualmente aplicable el artículo 42.1 de la LR-PAC, más cuando dicho procedimiento en caso de dejación por parte del correspondiente órgano disciplinario puede sustanciarse en sede administrativa, ante la la Agencia Vasca Antidopaje:

"1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración."

Asimismo, el artículo 44 de la Ley 30/1992 (falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio) dispone:

"En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

(...)

2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92. (...) "

En este mismo **apartado 5º del artículo 38** se indica "El vencimiento del plazo establecido en el apartado primero de este artículo sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento". Al decirse "el apartado primero de este artículo" nos remite al artículo 38.1 que no hace referencia a ningún plazo, por lo que debería señalarse más claramente que se trata del plazo de seis meses aludido en la primera frase

del artículo 38.5, de modo que sería más adecuado decir: "El vencimiento de dicho plazo de seis meses" o "El vencimiento del plazo establecido en este apartado" o similar.

Asimismo, si bien dicho artículo se refiere tanto a la potestad disciplinaria de las federaciones deportivas del País Vasco, como a la de las demás entidades con las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco, en su apartado 3 únicamente menciona a las federaciones. Lo mismo ocurren en el artículo 39.6 que sólo alude a la sede federativa. "los procedimientos en materia de dopaje se sustanciarán en sede federativa".

En el artículo 38 se establecen dos plazos distintos de resolución del procedimiento disciplinario:

- a) El del art. 38.3, que establece que el plazo ante las federaciones deportivas es de dos meses y que dicho plazo podrá ser ampliado por la Agencia Vasca Antidopaje, sin concretar un límite temporal máximo, por lo que deberíamos acudir al art. 42.6 de la Ley 30/1992 para concretarlo:

"Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento."

- b) El del art. 38.6, que dice que el procedimiento disciplinario en materia de dopaje, incluida la fase de intervención de la Agencia Vasca Antidopaje, deberá concluir en el plazo máximo de seis meses.

Pues bien, si lo que se quiere es que el plazo máximo sea de 6 meses, resulta innecesaria la previsión relativa a la posibilidad de prórroga del plazo de dos meses, ya que la Agencia Vasca Antidopaje dispondría de cuatro meses más para resolver en virtud del art. 38.6 y no sólo de los dos meses que resultaría de aplicar la ampliación que posibilita el art. 42.6.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 42.2 de la Ley 30/1992 permite a la norma reguladora del procedimiento establecer el plazo máximo que estime oportuno: "El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea".

Ese inciso (c) relativo a la prórroga) que aparece en la LO7/2006 (art. 27.3) tiene sentido en la LO ya que ahí se establece un plazo máximo de dos meses, ampliable por el Consejo Superior de Deportes por un mes más previa petición previa sin preverse un segundo plazo superior de resolución

superior a los indicados. Es decir, en la LO el plazo total para resolver y notificar el procedimiento disciplinario es de dos meses más uno más de posible ampliación.

En el **artículo 39.3** sólo se alude al "correspondiente procedimiento disciplinario o causa penal", obviando el sistema dual del Anteproyecto.

En relación al procedimiento disciplinario, en la memoria se indica que no se ha seguido el sistema de revisión de sanciones previsto en la Ley Orgánica 7/2006, la cual sustituye el recurso administrativo clásico por un sistema arbitral controvertido y que, por el contrario, se ha optado por mantener el sistema clásico. Sin embargo, nada se explica sobre una modificación que ha habido en el sistema clásico de recursos administrativos en materia de disciplina deportiva y que sí se ha incorporado en el Anteproyecto; en el **artículo 39.6** del Anteproyecto se señala que "Los procedimientos en materia de dopaje se sustanciarán en sede federativa, en única instancia, ante el órgano disciplinario competente en materia de dopaje que se designe en sus Estatutos, sin que puedan ser objeto de recurso alguno dentro de las mismas, ya sea éste ordinario o potestativo". Esto es una novedad de la LO 7/2006 que sí se incorpora al Anteproyecto. Entendemos, por tanto, que dada la importancia de la modificación debería, al menos, motivarse en la memoria.

El **artículo 39.7** obvia la posibilidad prevista en el artículo 17 del Decreto 310/2005, de 18 de octubre, por el que se regula el Comité Vasco de Justicia Deportiva, relativo a la posibilidad de que éste adopte medidas cautelares para salvaguardar la efectividad del fallo, entre las que podría estar la suspensión de la sanción.

En el **artículo 40** se debería sustituir "Gobierno Vasco" por Administración General Vasca o Administración General de la CAPV o similar.

Asimismo, en el apartado 1º de dicho artículo se prevé la capacidad de inspección de la Agencia Vasca Antidopaje, dicha inspección deberá siempre ser realizada con el más absoluto respeto a los derechos fundamentales y, en especial, al previsto en el artículo 18 CE.

Se cierra el capítulo con un artículo dedicado al decomiso de las sustancias y productos dopantes y del resto de instrumentos utilizados a tal fin (art. 40).

Por último, dado que el régimen sancionador establecido en este Capítulo viene a ser prácticamente una reproducción del previsto en la Ley Orgánica 7/2006, hemos de traer a colación las próximas reformas que se van a introducir en el mismo y que fueron anunciadas el pasado 25 de marzo; en el Informe que el Consejo de Ministros recibió del Ministro de la Presidencia sobre el Anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica 7/2006 se apuntaban las siguientes reformas concernientes al régimen sancionador: la exención de sanción hasta el tercer incumplimiento en la localización; el incremento del plazo de prescripción de las infracciones hasta ocho años o la regulación de la suspensión provisional de la licencia federativa cuando se

incoa un procedimientu disciplinariu como resultado de un positivo por sustancias prohibidas. Todo ello con el fin de que el servicio promotor analice la incidencia que dichas modificaciones pudieran tener en el Anteproyecto que ahora se tramita.

CAPÍTULO V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN (artículos 42 al 46).

El Capítulo V se dedica a las diferentes medidas de prevención que fomentará o pondrá en marcha la Agencia Vasca Antidopaje (art. 42).

Asimismo, se prevé la creación de un sistema de información sobre dopaje en el deporte que facilitará la colaboración y coordinación con otras Administraciones Públicas con competencias en materia de dopaje (art. 43). Este artículo es prácticamente idéntico al artículo 45 de la LO 7/2006, sin embargo, al reproducir el apartado 1 del artículo 45, se copian las finalidades enumeradas en ese apartado, pero se eliminan los colectivos destinatarios y, sin embargo, en la entrada que se hace a la enumeración se deja la referencia a los colectivos. Esto es, el artículo 45 establece:

"El objetivo general del sistema de información será responder a las necesidades **de los distintos colectivos** y tendrá las siguientes finalidades:

- a) **Autoridades deportivas:** la información favorecerá el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones, proporcionándoles información actualizada y comparada de la evolución que experimenta la acción concertada de los poderes públicos y del sistema deportivo a favor de un deporte limpio de dopaje.
- b) **Profesionales:** la información irá dirigida a mejorar sus conocimientos y aptitudes clínicas. Incluirá directorios, resultados de estudios, evaluaciones de medicamentos, productos sanitarios y tecnologías, análisis de buenas prácticas, guías clínicas, recomendaciones y recogida de sugerencias.
- c) **Deportistas, entrenadores, directivos y clubes deportivos:** contendrá información sobre sus derechos y deberes y los graves riesgos para la salud que el dopaje comporta, facilitará la toma de decisiones sobre estilos de vida, prácticas saludables y utilización de los servicios sanitarios, además de ofrecer la posibilidad de formular sugerencias acerca de los aspectos mencionados.
- d) **Organizaciones y federaciones deportivas españolas:** contendrá información sobre las asociaciones de pacientes y de familiares, de organizaciones no gubernamentales que actúen en el ámbito sanitario y de sociedades científicas, con la finalidad de promover la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Salud."

Al trasladarse este apartado al artículo 43.2 se suprime la referencia a los colectivos, de forma que únicamente se mantienen las finalidades (excepto la d), perdiendo parte del sentido que les confiere el saber a quién se refiere cada apartado y, sin embargo, aunque se suprimen los colectivos, el apartado comienza diciendo: "El objetivo general del sistema... será

responder a las necesidades de los siguientes colectivos...". De modo que el artículo 43.2 queda redactado de la siguiente manera:

"El objetivo general del sistema de información será responder a las **necesidades de los siguientes colectivos**, con la finalidad que en cada caso se indica:

a) La información favorecerá el desarrollo de iniciativas y a toma de decisiones, **proporcionándoles** información actualizada y comparada de la evolución que experimenta la acción concertada de los poderes públicos y del sistema deportivo a favor de un deporte limpio de dopaje.

b) La información irá dirigida a mejorar **sus** conocimientos y aptitudes. Incluirá directorios, memorias, resultados de estudios, evaluaciones de medicamentos, productos sanitarios y tecnologías, análisis de buenas prácticas, guías clínicas, recomendaciones y recogida de sugerencias.

c) La información contendrá información sobre **sus** derechos y deberes y los graves riesgos para la salud que el dopaje comporta, facilitará la toma de decisiones sobre estilos de vida, prácticas saludables y utilización de los servicios sanitarios, además de ofrecer la posibilidad de formular sugerencias acerca de los aspectos mencionados."

De modo que no queda claro a quiénes se refiere dicho artículo cuando dice "proporcionándoles información", "mejorar **sus** conocimientos" o "información sobre **sus** derechos".

El **artículo 44** prevé la posibilidad de solicitar a los organismos competentes en materia de medicamentos, productos sanitarios y seguridad alimentaria, las medidas necesarias para conocer el ciclo productivo, de dispensación y comercialización de productos susceptibles de producir dopaje en el deporte.

El **artículo 45** -complementariamente a lo previsto en el art.41 LO7/2006¹⁹- establece que la Agencia Vasca Antidopaje promoverá, en coordinación con los órganos administrativos competentes, la implantación de mecanismos de información y de publicidad de los productos nutricionales que sin ser medicamentos pudieran producir dopaje.

Finalmente y cerrando este Capítulo, en el **art. 46** se regula la Tarjeta de Salud del Deportista como documento público expedido a deportistas con licencias federativa y universitarias y a cualesquiera otros que se determine reglamentariamente, en el que se contendrá la información clínica necesaria

¹⁹ Art 41 LO7/2006: "El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá, de común acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, y de acuerdo con las Comunidades Autónomas en base a sus competencias, mecanismos de información y de publicidad específicos de los productos nutricionales que, sin ser medicamentos, puedan producir en el ámbito del deporte un resultado positivo de dopaje.

Específicamente, las autoridades administrativas españolas establecerán los procedimientos adecuados para la declaración de los productos nutricionales que se introduzcan en España y que puedan causar dopaje en el deporte."

para que el personal sanitario pueda tratar adecuadamente a los y las deportistas.

En su apartado 5º se establece que en materia de control de dopaje no cabe el acceso a los datos de esta tarjeta sin el consentimiento del deportista, sin embargo, a renglón seguido se establece que el no consentimiento será constitutivo de infracción muy grave. Por tanto, debemos reiterar la falta de sentido de establecer la voluntariedad de una decisión para luego convertirla en obligación cuyo incumplimiento está sancionado. Por tanto, se debería concretar que el acceso a esos datos depende del consentimiento del o la deportista, pero que si se trata de someterse a controles de dopaje al amparo de esta ley está permitido el acceso –siempre con las debidas garantías para los derechos fundamentales de la persona- y que la negativa conllevará la consiguiente sanción. O bien, después de afirmar que el acceso está condicionado al consentimiento del o la deportista, debería concretarse sobre cuáles de dichos datos hay, sin embargo, obligación de informar en caso de control en materia de dopaje y que el incumplimiento de dicha obligación será constitutivo de infracción.

➤ **CAPÍTULO VI. RÉGIMEN DE LOS DATOS RELATIVOS AL DOPAJE (artículos 47 al 49).**

Bajo la rúbrica "Régimen de los datos relativos al dopaje" se regula la confidencialidad de los datos (art. 47), la autorización de cesión de datos (art.48) y, también, la obligación de declaración de datos relativos a los productos y métodos susceptibles de producir dopaje en el deporte (art. 49). Si este Capítulo VI concierne al régimen de protección de datos personales de los y las deportistas, no se entiende la razón de la inclusión del artículo 49 en este Capítulo, cuando trata de la obligación de declarar el transporte de productos dopantes, que parecería más lógico situar en el Capítulo anterior, en el control de productos.

En el **artículo 47** se establece una obligación de confidencialidad pero no se prevé ninguna consecuencia jurídica en caso de incumplimiento. Dada la importancia de que quienes tengan acceso a datos personales en materia de dopaje guarden secreto sobre los mismos, dado los perjuicios que podría ocasionar a los y las deportistas afectados el quebrantamiento de ese deber de confidencialidad, debería adoptarse alguna consecuencia, al menos, haciendo una remisión genérica a la normativa vigente aplicable para la exigencia de las responsabilidades que procedieran.

El **artículo 49.1** señala que "Los equipos que participen en competiciones que se celebren en el País Vasco están obligados a llevar un libro registro...", esta previsión excede el ámbito material previsto en el art. 1 del Anteproyecto.

➤ **CAPÍTULO VII. FEDERACIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES Y DEMÁS ENTIDADES QUE RIGEN, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, LA ACTIVIDAD DEPORTIVA (artículos 50 al 53).**

En este último Capítulo se regulan los controles de dopaje a realizar en diferentes situaciones:

- Art. 50: En competiciones internacionales que se celebren en Euskadi.
- Art. 51: Fuera de competición a deportistas nacionales o extranjeros que se encuentren en Euskadi.
- Art. 52: Fuera de competición, realizados en Euskadi, a deportistas con licencia por parte de organizaciones internacionales.

En relación a estos artículos debemos realizar las siguientes observaciones:

En el **art. 50.1** debería cambiarse la conjunción "y" a continuación señalada por la conjunción disyuntiva "o": "La responsabilidad de la ordenación y realización de controles de dopaje en las competiciones internacionales celebradas en Euskadi corresponde al Comité Olímpico Internacional **y** a las federaciones deportivas o instituciones internacionales (...)".

El **artículo 51.1** excede del ámbito subjetivo y material del Anteproyecto al señalar que se podrá someter a control de dopaje a los deportistas nacionales o extranjeros que se encuentren compitiendo en Euskadi, sin excluir las competiciones que quedan fuera del ámbito de aplicación del Anteproyecto.

En el **artículo 52** (en el título) debería discernirse qué tipo de licencia, ya que a los deportistas con licencia federativa española les sería de aplicación el artículo 32 de la LO 7/2006. Es por ello que si la pretensión es referirse a las licencias reguladas en la Ley 14/1998, así debería indicarse.

Finalmente, el **artículo 53** regula los efectos en Euskadi de las sanciones impuestas por las organizaciones internacionales a deportistas y demás personas con licencia.

➤ **DISPOSICIONES ADICIONALES.**

Se han previsto ocho disposiciones adicionales. El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Ordenes y Resoluciones establece el contenido a dar a las diferentes clases de disposiciones que complementan el articulado. En tal sentido, las Disposiciones Adicionales incluirán por este orden los siguientes contenidos, en caso de haberlos:

- a) Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el texto articulado: territoriales, personales, económicos y procesales. Sólo se situarán aquí los regímenes especiales que tengan por objeto situaciones jurídicas diferentes de los regulados con carácter general en el texto articulado y, además, no tengan suficiente entidad para integrar el contenido de un artículo o de un capítulo de la parte dispositiva.



- b) Mandatos y actuaciones no dirigidas a la producción de normas jurídicas. Si se establecen, fijarán el plazo en el que debe cumplirse el mandato.
- c) Los preceptos residuales que no puedan colocarse en otro lugar de la norma. La calificación de un precepto como residual se utilizará como último recurso.

La **Disposición Adicional Primera** contiene la habilitación al Gobierno Vasco para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley en relación al ámbito específico de la prevención, control y represión del dopaje en animales.

La **Disposición Adicional Segunda** prevé el establecimiento de fórmulas de colaboración con el Estado con tres finalidades:

- 1. La implantación de un sistema de mutua información.
- 2. La expedición, reconocimiento o realización de la Tarjeta de Salud de Deportista.
- 3. La habilitación de los médicos, veterinarios y demás personal que deba intervenir en los controles.

En esta Disposición convendría sustituir "Gobierno Vasco" por "Administración de la CAPV" (o similar).

Asimismo, si bien a lo largo de todo el Anteproyecto se ha cuidado la adecuada utilización del lenguaje en base a una perspectiva de género, debería corregirse en la misma línea esta Disposición Adicional.

En la **Disposición Adicional 3ª** se habilita al titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes para adaptar el régimen sancionador y disciplinario previsto en el Anteproyecto. Debe corregirse esta disposición y dirigir la facultad de desarrollo reglamentario al Gobierno y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.c) de la Ley de Gobierno (Ley 7/1981, de 30 de junio):

“Corresponde al Gobierno:

(...)

- c) Aprobar mediante Decreto los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes emanadas del Parlamento Vasco, así como los de las Leyes del Estado cuando la ejecución de la competencia corresponda a la Comunidad Autónoma en virtud de Estatuto de Autonomía, o por delegación o transferencia.”

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en las Directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones, los mandatos de actuación o complemento normativo, es decir, los que llaman a una autoridad o norma para su desarrollo, deberían colocarse en las Disposiciones Finales.

En la **Disposición Adicional 4ª** se ha previsto la responsabilidad disciplinaria de aquellos profesionales (con o sin licencia deportiva) que faciliten, colaboren, prescriban o dispensen sustancias y productos

susceptibles de producir dopaje, así como la utilización de métodos prohibidos. Dichas actuaciones darán lugar a responsabilidad por infracción muy grave y deberán ser sancionadas por sus Colegios Profesionales, los cuales adaptarán sus Estatutos y Regamentos a lo previsto en este Anteproyecto en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la publicación. Debemos señalar en relación a tales extremos que, teniendo en cuenta la indefinición de término actividad deportiva a los efectos de este Anteproyecto y la amplitud del ámbito subjetivo y material del Anteproyecto, podría ser pernicioso para el ejercicio profesional del personal sanitario y, en definitiva, para la protección de la salud de los deportistas (considerando como tal a cualquier persona que realice una actividad deportiva, que entre, compita o resida, aunque sea temporalmente, en la CAPV) la extensión de dicha responsabilidad disciplinaria a cualquier profesional sin licencia deportiva que pueda prescribir a cualquier persona sin licencia que desarrolle una actividad deportiva en la CAPV una sustancia con efectos dopantes.

La **Disposición Adicional 5ª** debería estar en el articulado ya que se trata de una conducta tipificada como infracción muy grave. El párrafo primero de la Disposición es una copia del artículo 42 de la LO 7/2006, que consta de dos párrafos, de modo que al trasladarse de forma prácticamente literal a la Disposición Adicional se ha incluido una referencia a un párrafo anterior, no existiendo párrafo previo alguno. Por tanto, debería suprimirse el inciso "a que se refiere el párrafo anterior" y dejar redactado dicho apartado de la siguiente forma: "Se prohíbe el depósito, comercialización o distribución, bajo cualquier modalidad, en centros deportivos, de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Igualmente, se prohíbe incitar al consumo de tales productos en los citados centros deportivos."

Asimismo, la referencia al artículo 131²¹ de la Ley 14/1998 debería suprimirse y en su lugar debería concretarse la sanción, pues dicho artículo 131 contiene el elenco de sanciones posibles a aplicar a los efectos del régimen sancionador regulado en la Ley 14/1998, pero al no hacer

²¹ Art. 131 de la Ley 14/1998:

"1. La comisión de las infracciones descritas en los artículos anteriores podrá ser objeto de las siguientes sanciones:

- a) Multa económica.
- b) Suspensión de actividad.
- c) Revocación de autorización administrativa.
- d) Clausura de instalaciones deportivas.
- e) Pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas.
- f) Prohibición de acceso a instalaciones deportivas.
- g) Inhabilitación para organizar actividades deportivas.

2. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multa de 10.000 a 100.000 ptas., las graves con multa de 100.001 a 1.000.000 de ptas., y las muy graves con multas de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.

3. Las sanciones accesorias mencionadas en las letras b), c), d), e), f) y g), podrán imponerse por las infracciones muy graves hasta un máximo de cuatro años.

4. Las sanciones accesorias mencionadas en las letras b), c), d), e), f) y g), podrán imponerse por las infracciones graves hasta un máximo de dos años.

5. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiere lugar podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio."

referencia a una sanción concreta está queda indeterminada y, por tanto, se vulneraría el principio de legalidad.

La **Disposición Adicional Sexta** sustituye cualesquiera referencias que pudiera haber a la Cartilla Sanitaria de Deportista por la Tarjeta de Salud de Deportista.

En la **Disposición Adicional Séptima** se contiene la posibilidad de que las licencias federativas y universitarias vayan incorporadas a la Tarjeta de Salud de Deportista.

Finalmente, la **Disposición Adicional Octava** prevé el mecanismo para someter a control de dopaje a aquellas personas que participen en pruebas deportivas de gran exigencia física, así como las obligaciones de los mismos al respecto. La determinación del concepto "pruebas deportivas de gran exigencia física" queda para un posterior desarrollo mediante Orden por parte del Departamento competente del Gobierno Vasco en materia de deportes".

En el apartado d) -que está incorrectamente numerado como a)- se indica que "las y los citados participantes podrán ser inhabilitados o inhabilitadas para participar en pruebas deportivas por razones de protección de su salud en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley. Asimismo, podrán ser descalificados o descalificadas de las pruebas en las que hubiesen participado y, en su caso, sancionados administrativamente." Dado que la inhabilitación, así como la descalificación tienen carácter sancionador, dicha previsión deberá también someterse a los principios de legalidad y tipicidad ya aludidos a lo largo del presente informe.

⇒ DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

La **Disposición Transitoria Primera** prevé que los procedimientos sancionadores incoados, tanto en vía disciplinaria como en vía administrativa, con anterioridad a la vigencia de la Ley se sigan tramitando conforme a la normativa aplicable al momento de la iniciación, salvo en los aspectos que pudieran ser favorables a los y las interesadas.

Hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la Agencia Vasca Antidopaje la **Disposición Transitoria Segunda** prevé que las funciones atribuidas a la misma sean ejercidas por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.

Por último, la **Disposición Transitoria Tercera** prevé que, mientras la Agencia Vasca Antidopaje no conceda las habilitaciones previstas en la Ley, podrán actuar como personas habilitadas en los equipos de recogida de muestras para los controles de dopaje quienes dispongan de las

habilitaciones previstas en el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril¹², o disposición que lo modifique o sustituya.

El contenido que se ha dado a estas Disposiciones Transitorias se ajusta a las directrices dadas por el antes mencionado Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993 en relación a las mismas.

➤ DISPOSICIONES DEROGATORIAS.

Se prevén dos disposiciones derogatorias. La **Disposición Derogatoria Primera** contiene una relación de las disposiciones normativas derogadas. En concreto, se derogan los siguientes preceptos de la Ley Vasca del Deporte:

- La letra e) del artículo 81 relativa a la planificación y gestión del control antidopaje en la Comunidad Autónoma, función hasta ahora encomendada al Centro Vasco de Medicina del Deporte. Dicha función, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, pasará a ser atribución de la Agencia Vasca Antidopaje.
- El Capítulo V del título VII (artículos 84 a 87): lista de sustancias y métodos (art. 84); medidas de prevención, control y represión de dopaje (art. 85); obligatoriedad del control antidopaje (art. 86); y laboratorios de control de dopaje (art. 87).
- La letra ñ) de artículo 109, en la que se tipificaba -dentro del régimen disciplinario- como infracción muy grave "la promoción, notación y consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida su debido control.

La letra h) del artículo 127, que tipifica como infracción muy grave -dentro del régimen administrativo sancionador - "La promoción, la instación o la colaboración en materia de consumo de sustancias prohibidas o utilización de métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que impida el debido control de aquellas sustancias y métodos."

La **Disposición Derogatoria Segunda** prevé una cláusula de salvaguardia que establece que "quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en esta Ley". No obstante, sería conveniente refundir ambas en una única Disposición Derogatoria, ya que las directrices de 23 de marzo de 1993 recomiendan que se cierre la lista mencionada anteriormente con dicha cláusula de salvaguardia.

¹² Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte.

⇒ DISPOSICIONES FINALES.

En la **Disposición Final Primera** opera una modificación en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, en concreto, en su artículo 4.2 v), la referencia a la cartilla sanitaria se sustituye por "Tarjeta de salud de Deportista".

A través de la **Disposición Final Segunda** se modifica el artículo 83 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, para adaptarlo al Anteproyecto. Dicho artículo 83 hace referencia a los reconocimientos médicos para controlar la aptitud física, que serán obligatorios no sólo para el otorgamiento de licencias federativas, escolares y universitarias, sino, ahora también, para la participación en aquellas actividades de gran exigencia física que determine el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes. El mencionado artículo 83 terminaba haciendo referencia a la inclusión de los datos relativos a los reconocimientos médicos en la correspondiente cartilla individual del deportista, a la confidencialidad de los datos y posible cesión entre Administraciones Públicas y a la fijación de criterios a aplicar a los reconocimientos. Ahora se dispone que los datos de los reconocimientos médicos serán incorporados a la Tarjeta de Salud de Deportista en los términos que se establezcan reglamentariamente.

En la **Disposición Final Tercera** se habilita al Gobierno Vasco para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del Anteproyecto.

Entendemos que dicha disposición responde a una previsión, que si bien puede sobreentenderse por venir referida con carácter general en otra norma como el artículo 29 del Estatuto de Autonomía y el 16 de la Ley de Gobierno, viene siendo de referencia común en la normativa comparada. No obstante, procede señalar que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno ha venido insistiendo en que se suprima, por tratarse de una previsión legal que reitera lo que el ordenamiento ya prevé (Dictamen nº 107/2003):

"(...) recoge una cláusula habitual de habilitación para el desarrollo reglamentario que la Comisión viene insistiendo en que se suprima, por cuanto la potestad reglamentaria viene ya atribuida al Consejo de Gobierno (artículos 29 EAPV y 16 de la Ley de Gobierno). Caben previsiones legales referidas a modular, impedir o imponer un determinado desarrollo, pero no para reiterar lo que el ordenamiento estatutario ya prevé." (Dictamen COJUA 107/2003).

La **Disposición Final Cuarta** se dirige a las federaciones deportivas y restantes organizaciones deportivas a las que resule de aplicación el Anteproyecto, con el fin de que, en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la publicación de la Ley, se proceda a la adaptación de sus estatutos y reglamentos.

La **Disposición Final Quinta** establece que "de conformidad con lo establecido con el artículo 149.3 de la Constitución, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Estado sobre esta materia del copaje en tanto no sean objeto de regulación por la CAPV". Al respecto, si bien en

las Directrices para la elaboración de leyes se indica que en las Disposiciones Finales se establecerán las reglas de supletoriedad, la regla de supletoriedad establecida es redundante ya que simplemente contiene una referencia genérica al artículo 149.3 de la CE, que aunque no se contenga en una Disposición Final será igualmente aplicable.

La **Disposición Final Sexta** establece el plazo de entrada en vigor de la Ley, decidiéndose que la misma "entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco".

III.- TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

El presente Anteproyecto de Ley ha de adecuarse en cuanto a su tramitación a los preceptos de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Dicha norma prevé que una vez redactado el Anteproyecto y contando con la aprobación del órgano que haya dictado la orden de iniciación, habrán de evacuarse los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan. A tales efectos, señalar que por Resolución de 5 de octubre de 2010, del Director de Deportes, publicada en el BOPV nº 229, de 29 de noviembre de 2010, se sometió a trámite de audiencia el Anteproyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte. Asimismo, se ha remitido el Anteproyecto a las siguientes entidades: Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Asociación de Federaciones Deportivas de Álava, Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia, Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa, a la totalidad de las Federaciones Vascas (48), Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa, Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekime, Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Colegio Oficial de Médicos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), Colegio Oficial de Farmacéuticos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), Colegio Oficial de Veterinarios (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), Dirección de Salud Pública, Agencia Vasca de Protección de Datos, Agencia Estatal Antidopaje y a los once Departamentos del Gobierno Vasco. Todo ello con el fin de dar cumplimiento a los artículos 8 y 9 de la antes citada Ley 8/2003, de 22 de diciembre.

Asimismo, se han solicitado y recibido informes preceptivos de las siguientes órganos o entidades:

- Emauxunde (artículos 19 y 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres).
- Viceconsejería de Política Lingüística (Decreto 128/2007, de 31 de agosto, por el que se establece el régimen al que ha de ajustarse el trámite de evacuación de informe por el Departamento de Cultura en el marco de procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general).
- Dirección de Innovación y Administración Electrónica (artículo 17.c) del Decreto 477/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública).

- Dirección de Función Pública (artículo 21.c) del Decreto 472/2009, de 28 de agosto).

Como consecuencia de los trámites anteriores se ha elaborado una memoria complementaria de valoración de las alegaciones y observaciones vertidas en dichos informes.

En otro orden de cosas, en virtud del artículo 31.1.a) de la Ley 9/1997, de 27 de junio, del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, el pasado 29 de marzo se remitió el Anteproyecto de Ley para que sea informado por el mencionado ente consultivo.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, se deberá incorporar al expediente una memoria sucinta de todo el procedimiento, así como una memoria económica. La memoria económica es un documento fundamental en la justificación del proyecto que se presenta, así lo han reiterado tanto el Consejo de Estado como la Comisión Jurídica Asesora de Euzkadi. En este sentido, conviene recordar lo dicho por ésta en su Dictamen 43/1999: "Es conveniente señalar aquí la importancia que el Consejo de Estado viene dando a este trámite dentro del procedimiento administrativo de elaboración de reglamentos. Dicho órgano, considera dicho trámite como elemental garantía de la exclusión de la arbitrariedad en el ejercicio del poder normativo y, además, lo ve como cauce para el cumplimiento del artículo 31.2 CE, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos y llama a la eficacia y economía en la programación y ejecución de dicho gasto".

En similares términos, corroborando la importancia de la memoria económica, es doctrina del Consejo de Estado la siguiente (Dictamen de 5 de diciembre de 1996, expediente nº 4.078/96): "El artículo 31.2 de la Constitución, que establece los principios de economía y eficacia en el gasto público no permite aprobar un Reglamento sin tener constancia suficiente de los medios económicos precisos para garantizar su aplicación práctica; o contrario sería equivalente a un proceder arbitrario proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, ya que es jurídicamente infundado y por tanto caprichoso aprobar un Reglamento que no se va a poder aplicar en la práctica, al no haber medios económicos suficientes para poner en funcionamiento las disposiciones que contiene la norma".

Si bien ambos dictámenes se refieren al proceso de elaboración de reglamentos son igualmente aplicables al proceso de elaboración de las leyes y ello se desprende del ya citado artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, así como de la propia lógica e importancia de aprobar leyes que vayan acompañadas de los documentos y análisis necesarios que acrediten la disponibilidad de medios económicos suficientes para poder aplicarlos. La justificación de la existencia de los recursos económicos necesarios para la aplicación de la ley es determinante de la eficacia y efectividad de la propia norma.

Para la elaboración de la memoria económica deberían seguirse las directrices establecidas en la Circular nº 2/11 de la Oficina de Control Económico, que no son sino una plasmación del mandato contenido en los artículos 42 y 43 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio de control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la CAE:

Artículo 42. "Memoria y documentación general.

1. Con independencia de otros requisitos o trámites que procedimentalmente puedan resultar exigibles en virtud de la normativa de general aplicación, todas las disposiciones sujetas a control económico-normativo acompañarán, como documento básico una Memoria que como mínimo deberá contener los siguientes extremos:

a) Cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que ocasionen su entrada en vigor con distinción de los que sean corrientes y de los que sean de operaciones de capital, e identificación del destino de dichos gastos o ingresos.

b) Financiación de los gastos presupuestarios con indicación de los recursos que se vean afectados y fuentes de financiación al margen de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euzkadi.

c) Identificación de aquellos aspectos de la disposición que incidan o repercutan en materias propias de la Hacienda General del País Vasco y de régimen presupuestario, así como descripción de los antecedentes y justificación de la necesidad de la disposición.

d) Descripción del programa económico presupuestario en el que se inserta la disposición propuesta, con identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados por la entrada en vigor de la norma y evaluación económica y social de su aplicación.

e) Evaluación del grado de ejecución y cumplimiento de los programas y de los objetivos perseguidos cuando se trate de una regulación citada en desarrollo de los programas subvencionales, así como sobre las convocatorias de las subvenciones y éstas supongan una continuidad de las aprobadas en ejercicios anteriores.

2. Cuando se trate de expedientes con repercusión presupuestaria, en tesorería y/o contabilidad, deberán acompañarse los documentos contables que resulten oportunos de conformidad con la normativa aplicable.

3. Asimismo, se remitirán todos aquellos datos, informes, estudios que permitan conocer las líneas generales y los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta, y cuantos otros faciliten la emisión del informe."

Artículo 43. "Documentación a efectos del control económico-normativo en su modalidad económico-organizativa.

1. Cuando el control económico-normativo se manifieste en relación al párrafo 2 del artículo 26 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, deberá abarcar y pronunciarse, además de sobre los apartados citados en el apartado 1 de dicho artículo que puedan ser de aplicación, sobre la racionalidad de la organización propuesta, el efecto o incidencia, en

su caso, sobre coste, rendimiento y eficacia actuales de los servicios y su previsión futura.

2. A dichos efectos, además de la documentación exigida por el artículo anterior, deberá remitirse:

a) Justificación de la necesidad o idoneidad de creación del ente u órgano, o en su caso, de su modificación y reestructuración, e efectos del cumplimiento de los programas económico-presupuestarios que vaya a ejecutar, o en los que se integre.

b) Previsión de los recursos humanos utilizados, con descripción de sus retribuciones y costes, así como de los medios materiales afectados con distinción entre los que supongan gasto corriente o de capital.

c) Estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus servicios, acompañado, en su caso, del correspondiente Plan económico a cuatro años.

(...)"

Una vez completado el expediente con dicha memoria, se deberán recahar los informes preceptivos y los dictámenes de los siguientes órganos:

- De conformidad a los artículos 26.1 y 27.1 de la Ley 14/1994, de 13 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Anteproyectos de Ley deberán ser objeto de fiscalización mediante emisión del correspondiente informe de control preceptivo. Dicho control se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a su consideración por el Consejo de Gobierno.
- En virtud de lo previsto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se impone con carácter preceptivo la emisión de dictamen por la misma, dado que así se señala para "los Anteproyectos de ley cuya quiera que sea la materia y objeto de los mismos, excepto los siguientes, que sólo se someten a su informe si lo requiere la titular o el titular del departamento competente en materia de hacienda:
 - Los que establecen la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 - Los de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, concesión de créditos adicionales, variación de las condiciones de los créditos de compromiso y liquidación de los Presupuestos."

Una vez ultimado el procedimiento establecido, el Anteproyecto se someterá a la aprobación del órgano competente, habiendo de figurar como anexo la relación de las disposiciones derogadas o modificadas.

Por último, el Anteproyecto se someterá a la toma en consideración del Gobierno Vasco, que decidirá sobre su aprobación final en la misma sesión, o bien establecerá los criterios que hayan de tenerse en cuenta en su

redacción final, y una vez aprobado se remitirá al Parlamento para su tramitación.

Este es el informe que se emite y se somete a cualquier otro mejor fundado en derecho, en Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2011.



JOSÉ ANTONIO CAYERO BILBAO
Jefe de Servicio



AMAIA HERRAN
Asesoría Jurídica

I.- AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA, KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE-AURREPROIEKTUARI BURUZKOA

Txosten hau egin da abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, 7.3. artikuluan agintzen duena betetzeko eta aintzat hartuta zer arautzen duen martxoaren 22ko 45/2011 Dekretuak, Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoak, 6.3.a) artikuluan. Txosten honen helburu edo xedea da lege-aurreproiektuaren funts objektiboa aztertzea, haren edukia legera eta zuzenbidera egokitzen den zaintzea eta Administrazio honetan indarrean dauden araugintza-teknikako irizpideak betetzen dituen ikustea.

II.- AURREKARIAK

Kultura sailburuak 2010eko uztailaren 14an emandako Aginduaren bitartez eman zitzaion hasiera Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Proiektua egiteko prozedurari.

Kultura Saileko zerbitzu teknikoek lege-aurreproiektuaren testua egin ondoren, onartu egin zen Kultura sailburuak 2010eko urriaren 5ean emandako agindu bidez.

Aurrez adierazitako bi agiriekin batera, 2011ko martxoaren 23an Aholkularitza Juridiko honetara bidali ziren, aztertuak izan daitezen, agiri hauen behin betiko bertsioak: kiroleko dopinaren aurkako lege-aurreproiektua eta justifikazio-memoria. Halaber, 2011ko martxoaren 29an, lege-aurreproiektuari entzunaldiko izapidean egin zitzaizkion alegazioei Kirol Zuzendaritzak emandako erantzunaren behin betiko testua jaso genuen, bai eta, harekin batera, Emakunderen, Hizkuntza Politikako Sailburuordetzak, Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoko Zuzendaritzak eta Funtzio Publikoko Zuzendaritzak beren derrigorrezko txostenetan egin zituzten oharpenak ere.

III.- LEGE ETA ZUZENBIDEAREKIKO BATERATASUNA

Aztertutako lege-aurreproiektuaren bideragarritasun juridikoa aztertzeko, haren jatorriko araubidearekin alderatu behar da, eta, bereziki, azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoarekin, osasuna babestu eta kiroleko dopinaren aurka egiteko lege organikoa. Lehenik eta behin aztertuko da ea arauak behar bezala betetzen duen Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen-banaketa, eta, bigarrenik, aztertu behar da ea aurreproiektuaren bidez behar bezala garatzen den arau organikoak arautzen duen oinarrizko eskubidea, hau da, ea behar bezala betetzen dituen araututako eskubidearen muga organikoak.

II.1.-- ARAUEN ETA ESKUMENEN ESPARRUA

Gai-alor honen araubideari dagozkion xedapenak zer-nolako kokapena duten aztertzea izan behar du, ezinbestean, hasierako lehen lana.

Zio-azalpenean adierazten duen moduan, osasunaren babeserako eskubidea du oinarri 7/2006 Lege organikoa, Espainiako Konstituzioko 43. artikulutik eratorria:

“1. Osasuna babesteko eskubidea aitortzen da.

2. Botere publikoei dagokie aurreneurrien bidez eta beharrezkoak diren zerbitzu eta prestazioen bidez osasun publikoa antolatu eta babestea. Horretarako, legeak ezarriko ditu guztion

eskubideak eta eginbeharrak.

3. Botere publikoek osasun-hezkuntza, hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dituzte. Era berean, aisialdiaz behar bezala baliatzen lagunduko dute."

Konstituzioko 43. artikulua horrek Estatuko legegileari zuzendutako mandatu bat ezartzeaz gain, botere publikoei agintzen die osasun publikoa antolatu eta zaindu behar dutela, prebentzio-neurriak, prestazioak eta zerbitzuak ezarri. Horrez gainera, kirola sustatzeko agintzen die 43. artikulua botere publiko guztiei. Ildo horretatik, hau adierazten du 7/2006 Lege Organikoak (zio-azalpena, III. puntua): "Konstituzioaren agindu horrek botere publiko hauek behartzen ditu: Estatuko Administrazio Orokorra, autonomia-erkidegoak eta toki-korporazioak, haien eskumen eskusiboen eremuan."

Halaber, 7/2006 lege organikoko amaierako xedapenetako laugarrenak arautzen du legea bera eman dela, funtsean, Konstituzioko 149.1.16a artikuluan oinarrituta ("16a Kanpo-osasuna. Osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra. Produktu farmazeutikoei buruzko legedia"). Ez da hura arauaren oinarri den eskumen-titulu bakarra, beste hauek ere arauaren euskarri baitira: 149.1.6 artikulua (zigor-arloko legedia); 149.1.31 (estatu-xedeetarako estatistika); 149.1.18 artikulua (Herri Administrazioen araubide juridikoaren oinarriak, autonomia-erkidegoen berezko antolamendutik eratortzen diren espezialitateak urratu gabe); 149.1.5 (Justizia Administrazioa) eta 149.1.29 artikulua (segurtasun publikoa).

Egia da Estatuak osasunaren oinarrien eta osasunaren koordinazio orokorraren gai-alorrean duen eskumen eskusiboen titulupean eman direla 7/2006 Lege Organikoko xedapen gehienak, baina eskumen-titulu horrek ez die autonomia-erkidegoetako legegileei galarazten gai-alor hori arautzea; izan ere, Konstituzio Auzitegiak adierazi du (ikus 35/1982 sententzia, ekainaren 14koa) autonomia-erkidegoen aukera dela "beren gobernu-ekintza gai-alor horretan duten politika propioaren arabera zuzentzea", aintzat hartuta, betiere, berariaz esleituta dituzten eskumenak:

(2. oinarri juridikoa) "Konstituzioko 149.1 artikulua zenbait teknika erabiltzen ditu Estatuari modu eskusiboan ematen zaizkion gai-alorrak mugatzeko, baina ez da hau haien tipologia sakon aztertzeke lekua. Nabarmenezkoa da, hala ere, kasu honetan garrantzizkoa dela, gai-alor bat bere osotasunean erreserbatzen deneko kasua (esaterako, nazioarteko harremanak, defentsa eta indar armatuak, Justizia Administrazioa, ogasun orokorra eta Estatutako zorra, etab.) eta ahalmen zehatzak erreserbatzen direnako kasuak (bai oinarritzko legedia, bai gai-alor batzuei buruzko legedi osoa). Lehendabiziko kasuan, Estatuaren aldeko erreserbak ez die eragozten autonomia-erkidegoei erreserbatutako gai-alorrekiko eskumenak bereganatzeko aukera edota beren autogobernua gai-alor horrekiko politika propio baten arabera zuzentzekoa, nahiz eta politika hori erabakitzen parte har dezaketen, autonomia-erkidegoek Senatuan duten ordezkapen espezifikoren bitartez. Estatuaren aldeko erreserba, berriz, zenbait ahalmen erreserbatzera mugatzen bada eta autonomia-erkidegoek erabaki badezakete beste batzuk bereganatu ala ez, azken horiek, autonomia-erkidegoek, gai-alor horrekiko duten politika propioaren arabera zuzen dezake beren gobernu-ekintza; hala ere, gobernu-ekintza hori aurrera eramatean, berariaz beren esku uzten diren eskumenak soilik balia ditzakete (...)"

Euskal Autonomia Erkidegoak autonomia-erkidegoen aldeko bi eskumen-titulutan oinarrituta egikarrituko luke, batik bat, bere ahalmen legegilea:

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuko 10.36 artikulua, Euskal Autonomia Erkidegoaren esku uzten baitu "Turismo eta kirolak. Aisia eta Atsedena", eta

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuko 18. artikulua, osasunaren gai-alorreko eskumenei buruzkoa, hau arautzen duen heinean:

"1. Barneko Osasuna dela eta Euskal Herriari dagokio Estatuko oinarritzko legea lege berriz aurrera eramatea eta betetzea.

2. Euskal Herriari dagokio, Gizarte-segurantzaren arloan:

a) Estatuko oinarritzko legeria lege bidez garatu eta betearaztea, Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik.

b) Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa.

3. Berebat dagokio Euskal Herriari farmazi produktuez Estatuaren legeak bete eraztea.

4. Xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, artikulua honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala ez jakiteko goren gorengo inspektzioa Estatuaren eskutan egongo delarik.

5. Osasun eta Seguru Sozial gaietan hartuko dituzten konpetentziak erabiltzean, Euskal Botere Publikoak interesatu guztien parte hartze demokratikora bilduko dira, eta baita langileen sindikatuenetara eta enpresarien asoziazioenetara ere, Legeak zertuko duenaren arabera”.

Horrez gainera, araututako gai-alorrekin lotzen dira beste eskumen-titulu batzuk ere; hala nola: autogobernu-erakundeen antolamendua, araubidea eta funtzionamendua (EAEko Estatutuko 10.2. artikulua); Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide substantibotik eta haren antolamendu propiotik eratortzen diren prozesu-arauak eta administrazio-prozedurak (EAEko Estatutuko 10.6. artikulua); farmazia-alorreko antolamendua, Espainiako Konstituzioko 149.1.16a artikulua arautzen duenaren harian, eta higieena, aintzat hartuta Estatutuko 18. artikulua arautzen duena (EAEko Estatutuko 10.15. artikulua); ikerketa zientifikoa eta teknika Estatuarekin koordinatuz jardun hori (EAEko Estatutuko 10.16. artikulua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko propioa (EAEko Estatutuko 10.24. artikulua).

Eskumenen aitortpen hori gure lurralde-esparruan ulertu behar da Lurralde Historikoen Legeak egiten duen eskumen-banaketaren baitan (27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzkoa); izan ere, lege horrek foru-erakundeei ematen baitie erakunde komunek emandako arauak garatu eta betetzeko eskumena, gai-alor honetan: "Kirolaren Sustapena. Eskolako kiroleko eta guztiontzako kiroleko programak". Bestalde, arau horrek erabiltzen duen teknika da Erakunde Komunak esku uztea Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion funtzio guztiak, baldin eta EAEko Estatuak, Lurralde Historikoen Legeak edota gerora emandako legeren batek lurralde historikoetako foru-organoen esku uzten ez dituen neurrian (6. artikulua).

Eskumenen banaketako mapa horri erreparatuz eman zen 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena (aurrerantzean, 14/1998 Legea edo Euskadiko Kirolaren Legea), eta haren VII. tituluko V. kapitulua eta beste artikulua batzuk baliatu zituen dopinaren gai-alorra arautzeko:

- Printzipio-zuzentzaile den aldetik, hau arautu zuen 2.3.v) artikulua: "ideial olinpikoak aitortu eta babestea eta neurriak hartzea kirolek dopina desagerrarazteko, bai eta osasunaren eta pertsonen duintasunaren aurkakoa diren bestelako jardunbideak ere".
- 4.2. artikulua: Berariaz, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokie eskumen hauek erabiltzea:

q) Dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea”.

SKO MUKIALAI VI

25.1.e) artikulua: "1. Euskal federazioak eta lurralde-federazioak izaera administratiboko funtzio hauek beteko dituzte:

(-..)

e) Dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea."

Euskadiko Kirolaren Legeak egiten duen lege-aurreikuspena ez da nahikoa dopatzearen aurrezaintza, kontrola eta zigorra arautzeko, ezta kirolarien osasuna babesteko ere; horrenbestez, beharrezkoa ikusten da lege-arau berariazko bat ematea adierazitako eskumen- eta arau-esparru horren baitan, gaur egungo lege-hutsunea betetzeko, eta EAEko araudia egokitzeko egun gai-alor horretan indarrean den nazioarteko eta Estatuko araubidera.

11.2.- LEGE-LERRUNA ETA ERREGELAMENDU BIDEZKO GARAPENA.

Lege-aurreproiektu baten figuran zertzen da eman nahi den araupena. Ildo horretatik, egokia deritzogu labur gogoraraztea lege-lerruna izatearen ondorioak, behar bezala azaltzeko zergatik eman zaion izaera hori testuari, eta, hori azaldu ondoren, proposatzen den arauaren erregelamendu bidezko garapenei ekin ahal izateko.

Aztertu berri ditugun eskumen-tituluak aintzat hartuta, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren gai-alorrean duen eskumen eskusiboa, ondorioztatu beharrezkoa da gure autonomia-erkidegoak arautze-ahalmena duela gai-alor horretan, hau da, gai-alor hori arautzeko eskumena duela.

Aurreproiektuak aplikatzekoa izango den zehapen-araubidea jasotzen duenez, ezinbestekoa da gai-alor hori lege-lerruneko arau baten bidez arautzea; eta Espainiako Konstituzioko 25.1 artikulua berak arautzen du hori horrela izan behar duela ("Ezin dakiok inori egite edo ez-egiteen ondorioz kondena edo zehapenik ezar, baldin eta, une horretan delitu, falta edo arau-hauste administratiboak ez badira, aldi horretan indarrean dagoen legeriaren arabera"). Horrez gainera, Konstituzio Auzitegiaren doktrinak behin baino gehiagotan adierazi du "indarreko legeria" terminoaren esanahia, Espainiako Konstituzioko 25.1. artikuluan, "zehapenaren gai-alorreko Legezko erreserba" (besteak beste, 26/2005 sententzia, otsailaren 14koa; 113/2002 sententzia, maiatzaren 9koa; 25/2002 sententzia, otsailaren 11koa; eta 60/2000 sententzia, martxoaren 2koa).

Ildo horretatik, gai-alor hori arautzeko, eta, berariaz, lege-lerruneko arau baten bidez arautzeko premia adierazi zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak (Administrazioarekiko auzien Sala) 488/2009 eta 586/2009 sententzietan; izan ere, sententzia horiek adierazten dute 14/1998 Legeak ez zuela behar adinako gaikuntza-titulurik ezartzen Administrazioak zehapen-ahalmena balia zezan dopinaren gai-alorrean. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak adierazi zuen zehapenaren gai-alorrean zehapen-ahalmena zuten bakarrak federazioak zirela, baina ez Administrazioa: "Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren gai-alorrean duen eskumen eskusiboak ez du barnean hartzen EAEko Administrazio Orokorrek kirol-diziplinaren alorrean zehapenak ezartzeko eskumena izatea, eta ezin da, ondorioz, kirolari federatuentzat berezitua izango den administrazio-zehapenaren alor baten izatea aldarrikatu, oro har administratu guztiak mendean hartzen dituen administrazio-zehapenak aplikatu ahal izateko haiei".

Era berean, lege-erreserbaren xedea da "bermatzea herritarrei dagozkien askatasun-eremuen araupena soilik haien ordezkarien borondatearen mendekoa izango dela, beraz, eremu horiek botere exekutibo edo betearazlearen ekintza-eremutik at behar dute, eta, ondorioz, haren berezko arau-tresnek, hau da, erregelamenduek, ezin dute eremu hori arautu. Egia da printzipio horrek ez duela eragozten legeek erregelamenduetarako igorpenak egiteko aukera, baina nabarmena da igorpen horiek ezin dutela araupen independenteak eta legearekiko mendetasun argirik gabekoak sorrarazi, hala eginez gero desitxuratu egiten baita Konstituzioak legegilearen alde egin duen erreserba." Konstituzio Auzitegiaren 83/1984 sententzia (osoko bilkurarena), uztailaren 24koa. Ildo hori bera jorratuz: Konstituzio Auzitegiaren 235/2000

sententzia (osoko bilkurarena), urriaren 5ekoa.

Horrez gainera, proposatutako araubideak, eskubide eta askatasunen esparruan, ez du soilik osasunaren babeserako eskubidea ukitzen, arauak nabarmen ukitzen baititu, halaber, ohorerako eskubidea, intimitaterako eskubidea eta norberaren irudirako eskubidea (Espainiako Konstituzioko 18. artikulua). Eskubide horiek ukitzen ditu, dopinaren aurkako proben izaera berezia delako, eta aurreproiektuko arau-xedapenek kirolarien datu pertsonalak babesteko arauak ezartzen baitituzte, arrazoirik eta zilegitasunik gabeko esku-hartzeen aurka. Araututako eskubide eta askatasunen izaerari erreparatuta, agerikoa da gai-alor horrek, bere garrantziagatik, legepean arautua izan behar duela. Lege-erreserba Espainiako Konstituzioko 53. artikulutik eratortzen da:

“Titulu honen bigarren kapituluan aitorturiko eskubide eta askatasunak lotesleak dira botere publiko guztientzat. Lege bidez bakarrik arautu ahal izango da eskubide eta askatasun horien egikaritzea; lege horrek, edozein kasutan, haien oinarritzko edukia errespetatu beharko du, eta eskubide eta askatasunok 161.1.a) artikuluan ezarri bezala babestuko dira.

(•)

Hirugarren kapituluan aitortutako printzipioak onartu, errespetatu eta babestu egin behar dira, eta legeria positiboak, eginera judizialek eta botere publikoen jardunak horiexek izango dituzte kontuan. Jurisdikzio arruntean halakoak alegatu ahal izateko, nahitaezkoa da haiek garatzen dituzten legeak aintzakotzat hartzea.”

Horrenbestez, aurreproiektu honek arautzen dituen gai-alorren izaerari erreparatuta eta egin berri ditugun oharpenak kontuan hartuta, ondorioztatu behar da aukeratutako arau-lerruna egokia dela gai-alor horiek arautzeko.

Erregelamendua, Administrazioak emandako arau juridiko orokorra den aldetik, legearen mendeko araua da, haren osagarria. Lankidetzazko arau juridikoa da erregelamendua; beraz, bereizi egin behar da, batetik, oinarritzko alderdien araupena (lege-erreserba), beti legeak egin beharrekoa, eta, bestetik, bigarren mailako, baina, aldi berean, behar-beharrezko garapen-arauak, erregelamenduak: erregelamendu betearazleak, erregelamendu independenteak, eta, beharrezkoa denean, premiazko erregelamenduak. Erregelamendu-ahalmena, beraz, ordenamendu juridikoa osatzen laguntzen duen ahalmen juridikoa da, ondorioz, ordenamendu horren baitan kokatzen dira erregelamendu-arauak. Erregelamendu-arauak, ordea, ez dira baldintzarik gabe ematekoak; izan ere, Konstituzioa eta Legeak bete behar dituzte (Espainiako Konstituzioko 97. artikulua), eta, aurkatzen badira, Konstituzioa da haien baliozkotasunaren edo legezkotasunaren maila erabakitzen duen araua.

Konstituzio Auzitegiak behin baino gehiagotan adierazi du erregelamendu exekutibo edo betearazleak zuzenean eta zehaztasunez daudela lege bati lotuak, erregelamenduak osatu, garatu, zehaztu, aplikatu, osatu edo betearazi egiten baitu legea: “Gure zuzenbideko tradizio juridikoa da, erregelamenduen artean, Administrazioak emandako legeaz azpiko xedapen orokorrak diren aldetik eta, zentzu zabalean, funtzio betearazlea betetzen dutela jakinda, «erregelamendu exekutibo» izendatzea zuzenean eta zehazki lege baten edo lege-multzoko baten artikulua batera edo batzuetara lotuta dauden erregelamenduak, lege (edo lege-multzoko) hori osatu, garatu, zehaztu, aplikatu eta bete edo egikaritzen dutelarik. Hau esan du Estatuko Kontseiluak erregelamendu horiei buruz: «beren egitekoa da aurretik emandako lege bat bideratzea edo arauak ezartzea lege bat garatu, aplikatu eta betetzeko».” (Konstituzio Auzitegiak (osoko bilkurak) emandako 18/1982 sententzia, maiatzaren 4koa)

Sarri erabiltzen du arauak erregelamendu bidezko garapenerako igopenaren teknika. Ildo horretatik, xedapen hauek berariazko igorpenak egiten dituzte: 13.3 / 13.6 / 13.9 / 14.2 / 14.3 / 15.1 / 15.5 / 17.3 / 17.6 / 17.7 / 31.4 / 32.3 / 40.3 / 46.1 / 46.3 / 49.1 artikulua / lehen xedapen gehigarria / 8. xedapen gehigarria / Azken xedapenetako bigarrena.

Lege-lerruneko arau bat onartzeko, araupenaren oinarritzko eta egiturazko alderdiak jorratu behar dira, nahiz eta, gerora, erregelamendu batek haren garapena egin dezakeen, ezinbestekoak diren alderdietan. Ildo horretatik, Erabilera Terapeutikorako Baimenen Euskal Batzordearen osaera hobeto zehaztea komeni dela alde batera utzita —aurrerago aztertuko dugu puntu hori—, esan dezakegu ez dela erregelamendurako igorpenen teknikaren gehiegizko erabilpenik egiten, hau da, ikuspuntu teknikitik horri buruz egin daitekeen balorazioa alde batera utzita, ondoriozta daiteke igorpenaren gai-alorrak erregelamendu bidez garatzeko modukoak direla.

11.3.- LEGE ORGANIKORAKO ERRESERBA ETA LOTUTAKO GAI-ALORRAK

Espainiako Konstituzioko 81. artikulua lege organikorako erreserba bat agintzen du oinarritzko eskubideak eta askatasun publikoak garatzeko, eta erreserba hori zentzu murriztaile batean ulertu behar da, hau da, Konstituzio Auzitegiak adierazi duenez (ikus, besteak beste, Auzitegi horren 6/1982, 67/1985, 160/1987, 127/1994 eta 173/1998 sententziak), funtsezko eskubideen zuzeneko garapena soilik egin behar da lege organikoen bidez, eta lege arruntaren bidez aratu behar da eskubide horien egikaritzea edo erabilera. Bestela esanda, lege organikoaren egitekoa da "eskubidea zehazteko funtsezko alderdiak arautzea, haren esparrua mugatzea eta Konstituzioak babesten dituen beste askatasun batzuekiko dituen mugak finkatzea" (Konstituzio Auzitegiaren 132/1989 sententzia).

Lege organikoaren esparru materiala edo gai-esparrua ez da Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketaren baitan zehaztu edo erabakitzen (Konstituzio Auzitegiaren 173/1998 sententzia). Hau da, "Konstituzioko 149.1. artikuluan agintzen den Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko banaketa ez da, gai baten araupen-esparrua zehazterako orduan, lege organikoaren eta lege arruntaren arteko harremana nolakoa izango den ezaugarritzen duena; izan ere, lege horietako bakoitzak esleituta duen funtzio edo egiteko konstituzionala da hori zehazten duena. Konstituzio Auzitegiak erabaki du botere konstituziogilearen luzapena edo jarraipena dela lege organikoa (Konstituzio Auzitegiaren 76/1983, 160/1987, 101/1991 eta 173/1998 sententziak), eta ez duela lege organikoaren plano berean jarduten. Estatuko eta autonomia-erkideetako lege arruntei gailentzen zaie lege organikoa, Espainiako Konstituzioaren ezinbesteko osagarria baita, garatzen duen funtsezko eskubidearen berme den aldetik (Konstituzio Auzitegiaren 140/1986 sententzia).

Gai-esparru horretatik kanpora, Estatuko edo autonomia-erkidegoko lege arruntaren egitekoa izango da arautzea, orain bai, gai-alor horri dagokion eskumen-banaketaren arabera.

Hori horrela izanda ere, Konstituzio Auzitegiak berak onartu du lege organikoek aukera izango dutela "lotutako gai-alorrak" arautzeko (Konstituzio Auzitegiako 5/1981 sententzia), hau da, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako lege arruntek arautzekoak izan daitezkeen gai-alorrak. Hala, gai-alor horiek lege organiko batek arautuko lituzke, baina ez litzateke gai horietara zabalduko lege organikorako erreserba, hau da, ez da eskuz aldatzen lege arruntak ematen dituen Estatuko edo autonomia-erkidegoko legegilearen legegintza-ahalmena. Konstituzio Auzitegiak onartu du lotutako gai-alorrak jaso ditzaketela lege organikoek; betiere, lege organikoak berak adierazten badu zein diren lotutako gai-alor horiek.

Ildo horretatik, 7/2006 Lege Organikoak, osasuna babestekoa eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzekoak, azken xedapenetako bosgarrenean arautzen du lege-testuko zer xedapenek duten izaera organikoa. Zehazki, xedapen hauek dute izaera organikoa: 5. artikulua ("Dopatzearen kontrolak egiteko betebeharra"); 6. artikuluko 1., 2. eta 3. puntuak ("Kontrolen bermeak eta haien lege-ondorioak"); 8.1. artikulua ("Dopatzearen kontrolak"); 12. artikuluko lehen paragrafoak ("Dopatzea eragin dezaketen substantzien eta kirolean debekatutako dauden metodoen zerrendaren publikitatea"); 36. artikulua ("Datuak lagatzeko baimena") eta hirugarren xedapen gehigarriko 3. puntuak ("Mailaketak"). 7/2006 lege organikoaren mugatze organikoa egin ondoren, Estatuko eta autonomia-erkidegoko legegile arruntaren egitekoa izango da legeak ematea, dituzten eskumenen arabera.

Eremu organikoaren mugaketa horri erreparatuko ditu, aurrerago, lege-aurreproiektuaren artikulua aztertzean. Horren helburua izango da erabakitzea ea arauak behar bezala betetzen duen aurreko ataletan adierazi den eskumen-banaketa eta Estatuko legegileak adierazi dituen alderdi organikoak.

11.4.- LEGE-AURREPROIEKTUAREN EDUKIA

Kiroleko dopinaren aurkako lege-aurreproiektuak azalpen-zati bat du, zazpi kapitulutan banatutako 53 artikulua, zortzi xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, bi xedapen indargabetzaile eta sei azken xedapen.

4. AZALPEN-ZATIA

Araua egiteko arrazoiak azaltzen dira lege-aurreproiektuaren zio-azalpenean, eta adierazten da zer helburu bete nahi diren, zer oinarri juridikok gaitzen duten araua egiteko ekimena, arauen printzipio eta ildo orokorrak, eta indarreko araubidean izango duen eragina. Bereziki aipatzen dira berritasunak dakartzaten alderdiak. Horrenbestez, behar bezala adierazten dira Jaurlearitzako Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an hartu zuen erabakiak, Legeak, Dekretuak Aginduek eta Ebazpenak egiteko irizpideak onartzekoak, eskatzen dituen edukia (arau hori 1993ko apirilaren 19ko EHAAn argitaratu zen, Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Garapen Autonomikoko sailburuak 1993ko apirilaren 6an emandako Agindua betez).

Artikuluak aztertzen hasi aurretik, adierazi behar dugu aurreikusten den arauak funtsezko helburu hauek —besteak beste— lortu nahi dituela (aurreproiektuko justifikazio-memoriak eta zio-azalpenak zehazten dituzte helburuok):

Dopatzearen aurkako borrokaren gai-alorrean, arau-berrikuntza handiak izan dira azken urteetan, bai nazioartean, bai Estatuan. Lege-aurreproiektuaren helburua da, beraz, dopinaren aurka borrokatzeko EAEko araubidea berrikuntza horietara egokitzea, eta, bereziki, Dopinaren aurkako Munduko Kodeari eta 7/2006 Lege Organikoari —osasuna babestekoa eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzekoa—.

Horrez gain, instituzioen egitura egokitu nahi da dopinaren aurkako agentzia nazionalak egiteko joera berrira. Erakunde horiek independenteak izaten dira alderdi funtzionalean eta dopinaren aurkako borrokan espezializatzen dira.

Kirolaren Euskal Legeak arautu zuen zehapen-araubidea zehaztu eta dopatzearen aurkako borrokaren eremuan zituen hutsuneak bete nahi dira; zehazki, 14/1998 legeak falta zuen gaikuntza-titulua eman nahi zaio arauari, administrazio publikoaren zehapen-ahalmenaren alorrean; izan ere, hutsune hori nabarmendu zuten Justizia Auzitegiak emandako 488/2009 eta 586/2009 sententziek. Horiek horrela, arau-hausteen jokabide-tipoak zehaztu eta haiei dagozkien zehapenak arautu dira, nazioarteko araubideak eta 7/2006 Lege Organikoak arautzen dutenaren ildoan.

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK (1-9. ARTIKULUAK)

1.- Legearen xedea eta haren aplikazio-eremua zehazten ditu 1. artikulua. Artikulu horretan, dopatzea zer den esaten du. Dopatzea ez da, soilik, kirolariak debekatutako substantziak kontsumitzea, kontzeptuaren barruan sartzen baita, halaber, debekatutako metodoak erabiltzea, kirol-errendimendua modu artifizialean handitzeko, kiroltasunaren aurkako jokabidea den aldetik.

Definizio hori aztertu ondoren, adierazi behar dugu ez dela definizio zehatza, zaildu egiten baitu dopatzea zer den ulertzea. Arauaren xedea definitzeko erabili diren bi kontzeptu hauek eragiten dute zehaztasun falta hori: "debekeatutako metodoak" eta "kiroltasunaren kontrakoak". Legeak emateko orduan, ahalegin berezia egin behar da haiek zehatzak eta argiak izan daitezen, zuzenbidearen bi printzipio orokor hauek bete behar baititu legegile orok: herritarren berdintasuna legearekiko, legeak guztientzat eskuragarria eta ulergarria izan behar duen aldetik, eta, segurtasun juridikoa; hau da, aurrez jakiteko

modukoa izan behar du legea nola aplikatuko den.

Lege zehatzak eta argiak emateko ahalegina eskatzen du Konstituzio Auzitegiak sententzia bat baino gehiagotan (156/2004 zenbakiko sententzia (osoko bilkurak), irailaren 21ekoa, 39. oinarria eta 46/1990 zenbakiko sententzia (osoko bilkurak), martxoaren 15ekoa, 4. oinarri juridikoa):

"Guk emandako doktrinaren arabera, Espainiako Konstituzioko 9.3 artikulua, segurtasun juridikoaren printzipioa arautzean, lehenetsi egiten da «arauen argitasuna eta nahasmendurik eza» (Konstituzio Auzitegiaren 46/1990, martxoaren 15ekoa, 4. oinarria), hau da, «zuzenbidea aplikatzean boterearen jarduna nolakoa izango den arrazoizko modu batean aurreikusteko aukera izan behar du herritarrek» (Konstituzio Auzitegiaren 36/1991 sententzia, otsailaren 14koa, 5. oinarria). Horregatik, «soilik beren ordenamendu juridikoan arau-testu baten edukiek edo hutsuneek, zuzenean onargarri diren interpretazio-arauak aintzat hartuta, nahasmendua edo zalantzak sortzen badituzten haien hartzailleengan, eta ziurgabetasun hori gaindiezina bada jakiteko zer jokabide bete behar den edo jokabideren batek zer ondorio izango dituen, esan daiteke arau batek urratu egiten duela segurtasun juridikoaren printzipioa» (Konstituzio Auzitegiaren 150/1990 sententzia, urriaren 4koa, 8. oinarria; 142/1993 sententzia, apirilaren 22koa, 4. oinarria; 212/1996 sententzia, abenduaren 19koa, 15. oinarria; eta 96/2002 sententzia, apirilaren 25koa, 5. oinarria)"

"(...) Legegileak segurtasun juridikoaren printzipioa bete behar duela arautzen du Konstituzioko 9.3. artikulua, eta horrek esan nahi du legegileak arau argiak eta nahasmendurik sortzen ez dutenak eman behar dituela; halaber, saiatu behar du eragile juridikoek eta herritarrek behar bezala jakin dezaten zer gertatuko den arautzen diren gai-alorretan, eta ez du sortu behar modu objektibo batean nahasgarria izan daitekeen egoerarik.

(—)."

Aztertutako lege-aurreproiektuak oinarri eta iturburu dituen bi arau-testuak konparatzen badira, hau da, Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioa eta 7/2006 Lege Organikoa erkatzen badira, ikusten da ez dutela kontzeptu zehaztugabeetan oinarritutako definiziorik ematen; izan ere, bi testuek adierazten dute beren xedapenak urratzea dela dopatzea. Berariaz, Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioak esaten du "kiroleko dopina" kontzeptuak definizio hau duela: "dopinaren aurkako arauak urratzea". Halaber, definizio hau ematen du 7/2006 Lege Organikoa: "Lege hau betebeharrekoa duten pertsonen ez betetzea Lege honek ezartzen duen araupena, eta, bereziki, 13. artikulua eta ondorengoek ezartzen dutena, edo araupen hori urratzea".

Beraz, ikusten dugu erreferentziazko bi arau horiek definizio zehatzak egitea erabaki dutela, arauak berak debekatzen dituen jarduerak egitea baita dopatzearen definizioa.

Halaber, dopatzearen definizio hau ematen du Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak: "dopatzearen aurkako arau bat edo batzuk urratzea, Kode honetan 2.1 artikulutik 2.8 artikulura xedatutakoaren arabera". Hau da, arau horrek igorpen baten bidez egiten du dopatzearen definizioa, eta esaten du igorpenaren xede diren arauak urratzea dela dopatzea.

Inork ez du zalantzan jartzen dopatzea kiroltasunaren aurkako jarduera bat denik; hala ere, lege baten artikulua idazterakoan, kontuan izan behar da izaera lotesleko arau-xedapenak ematen ari garela herritar ororentzat. Beraz, ez da egokia kontzeptu zehaztugabeak erabiltzea jarduerak deskribatzeko. Bestela esanda, ez gara esaten ari kontzeptu horiek arauan jaso behar ez direnik; aitzitik, zalantzan jartzen dena da arauaren xedari dagokion zehaztapenean adierazi behar den ala ez. Izan ere, "debeekatutako metodoak" edo "kiroltasuna" dira arauaren motibazio, xede eta iturria, baina zalantzan jartzekoa da egokia ote den halako kontzeptuak erabiltzea artikuluetan, definizioak eta arau-ekintza lotesleak zedarritzeko. Hau da, "kiroltasuna" kontzeptua ezaguna izan daiteke kirol-espezialistentzat, baina haren interpretazioa ez da hain agerikoa espezialistak ez direnentzat. Kontzeptu edo termino hori zehatza ez denez, zaila zaigu jakitea zer jokabide edo jarduera diren

"kiroltasunaren" aurkakoak.

"Debekatutako metodoak" aurreproiektuko 20. artikuluko zerrendakoak baldin badira ("Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen publizitatea"), behar bezala jaso behar da nabardura hori, arauaren xedea zehaztasunez mugatzeko.

Zehaztasun falta horixe bera ikusten da 1. artikuluko 2. puntuan; izan ere, animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketetara ere zabaltzen du dopatzearen definizioa, baina, betiere, "behar diren egokitzapenak eginez". Termino edo kontzeptu hori ez da zehatza, ezin baita jakin zer norainoko duen kontzeptu horrek; hau da, ezin da jakin araua sustatzen duen zerbitzuak nabardura hori jaso duen gai-alorraren gerorako arau-garapenean egingo diren egokitzapen juridikoak adierazteko, aurreproiektuak berak dopatzea animaliak parte hartzen duten kiroletarako egiten dituen lege-zehaztapenak adierazteko, ala gai-alor horrek edo gai-alor guztiek kirolaren eta teknikaren aldetik behar dituzten egokitzapenak adierazteko.

Azkenik, 1. artikuluko 3. puntuan ahalegin bat egiten da aurreko definizioaren zehaztasun falta konpontzeko, eta hau nabartzen du: "zehapenen arloan izango dituen ondorioengatik, dopatzea izango da, era berean, lege honetan eta ezartzekoa den gainontzeko araudian dopinaren aurka zehaztutako araudia ez betetzea edozein pertsona fisiko edo juridikok, araudia bete beharra badu".

¹ Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak onartu zuen, 2003ko martxoan, Dopinaren Aurkako Munduko Kodea, eta hura izan zen lehen ahalegina kiroleko dopinaren aurkako arauak harmonizatzeko. Hala ere, kode horrek ez zuen indar loteslerik nazioarteko zuzenbide publikoan, Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia zuzenbide pribatuko fundazio suitzar bat baita.

UNESCOko Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen, 2005eko urriaren 19an, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konferentzia, 2007ko otsailaren 1ean jarri zen indarrean (41. zenbakiko BOEn argitaratutako berreste arau-tresna, 2007ko otsailaren 16koa). Arau horren 4. artikulua arautzen du Konbentzioa izenpetu duten Estatuaren konpromisoa izango dela Dopinaren Aurkako Munduko Kodeko printzipioak errespetatzea, eta eranskin gisa jasotzen du:

"Konbentzioaren eta Kodearen arteko erlazioak.

1. Kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko jarduerak norberaren nazioan eta nazioartean koordinatzeko, Kodeko printzipioak betetzeko konpromisoa hartzen dute Konbentzioko kide diren estatuak, Konbentzio honetako 5. artikuluan arautzen diren neurrien oinarri gisa. Konbentzio honek ez du eragozten haren kide diren estatuak bestelako neurriak hartzea Kodeko xedapenak osatzeko.
2. Kodea eta 2. eta 3. eranskinetako bertsio berrienak informazio-izaeraz jasotzen dira, eta ez dira Konbentzio honetako zati. Eranskinak ez dakarte nazioarteko zuzenbideko betebeharrak loteslerik Konbentzioko kide diren Estatuentzat.
3. Konbentzio honetako zati dira Eranskinak".

² Kiroleko dopinaren gai-alorreko erantzukizunari buruzko artikulua: III. kapituluko ("Kiroleko dopinaren gai-alorreko zehapen araubidea") I. sekzioa (13. artikulutik 26. artikulura).

Atal honi buruz esan beharrekoa da hauxe dioela azken puntuan: "hura bete beharrekoa duten pertsona fisiko edo juridikoak". Esaldi hori, errepikakorra da aurreko esaldiarekiko, eta, gainera, ez da behar bezala lotzen harekin; izan ere, bertan esaten da dopatzea "lege honetan jasotzen den

dopinareen aurkako araudiaren urraketen multzoa da..." eta jarraian esaten du urratzaileak "hura bete beharrekoa duten pertsona fisiko edo juridiko orok" izan daitezkeela. Lotura falta da bi elementuen artean.

Lege-aurreproiektuaren eremu objektiboa zehazten du 4. atalak, eta esaten du hura aplikatzekoa izango dela Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kirol-jarduera eta -lehiaketa guztiei, federatuak izan ala ez. Horietatik kanpo geratzen dira estatu-mailako kirol-lehiaketa ofizialak, nazioarteko kirol-federazioek antolatutako nazioarteko kirol-lehiaketak eta erakunde olinpiko eta paraolimpiko eskumendunek antolatutakoak. Horiek horrela, lurraldetasun-irizpidearen alde egin da, hau da, Euskadin egiten diren kiroleko jarduera eta lehiaketa guztiak sartu dira arauaren eremu objektiboan, lehen adierazi diren bi salbuespenen kasuan izan ezik.

Horrez gainera, legearen eremu subjektua mugatzen du 5. artikulua, honela:

- Euskal lizentzia duten kirolariak, federaziokoa, unibertsitatekoa edo eskolakoa, baldin eta EAEko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gaikuntza badakarte.
- Euskal Autonomia Erkidegoan bizi, entrenatu edo lehiatzen diren ("aldi baterako bada ere").
- Kirol-jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan egiten duten pertsona fisikoak eta juridikoak, aldi baterako bada ere.

Aplikazio-eremu subjektiboa esandakoa izanik ere, hau nabartzen du: "kirolari horiek estatuko edo nazioarteko kirol-jardueretan parte hartzen dutenean, estatuko edo nazioarteko xedapenak bete beharko dituzte".

Artikuluaren 6. eta 7. puntuak osatu egiten dute eremu subjektibo eta materiala, hurrenez hurren. 6. puntuak arautzen du zein izango den kirolari legearen jardun-eremuan ("kirolen bat egiten duten pertsona guztiak, nahiz eta federatuta egon ez edo kirol-lehiaketetan parte hartu ez"), eta 7. puntuak dopinareen aurkako kontroletatik baztertzeko dituzten unibertsitate-ikasketetarako sarbide-probak, oposaketak eta antzeko hautaketa-prozesuak.

Horrenbestez, edozein pertsona fisiko edo juridikori egin ahal zaio dopinareen aurkako kontrol bat, baldin eta kirol-jardueraren bat egiten badu, nahiz eta denbora mugatu batez izan, Euskal Autonomia Erkidegoan. Horren salbuespen dira, soilik, estatuko eta nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten kirolariak. Hala ere, azken horiek lehiaketa horietan parte hartzen ari ez direnean, lege-aurreproiektuaren eremu subjektiboan sartuko dira, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi, entrenatu edo lehiaketatan parte hartzen badute.

Dopinareen Aurkako Lege Organikoak, eremu subjektiboa mugatzeko, kirolarien eta haien federazioen arteko loturazko erlazio juridikotik abiatzen da, eta, ondorioz, Lege horren eremu subjektiboa osatzen dute "estatuaren federazio-lizentzia duten kirolari guztiek edo autonomia-erkidegoren baten federazio-lizentzia homologatua dutenek, Espainiako kirol-federazioek 1.3 artikuluan ezarritako esparru objektiboan antolatutako, sustatutako edo baimendutako kirol-lehiaketetan parte hartzeko", hau da, "Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legearen esparruan antolatzen dituzten Estatuko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko".

Horrez gainera, hau ezartzen du Kiroleko Dopinareen Aurkako Nazioarteko Konbentzioaren 2.4. artikulua: "Dopinareen aurkako kontrolen esparrurako, nazioartean edo nazio-mailan kirol batean parte hartzen duen pertsona oro da «kirolari», baldin eta haren jardun-esparruan dopinareen aurkako erakunde nazional batek jarduten badu, eta kirola maila txikiagoren batean egiten duten pertsonak, baldin eta kide diren Estatuak onetsia badute hura.

Irakaskuntza eta prestakuntzako programetan, «kirolari» izango dira kirol-erakunderen baten agintaritzapean kirola egiten duten pertsonak".

Horrenbestez, Konbentzioak ez du eskatzen lotura-harreman berezirik dopinareen aurkako arauen eremu

subjektiboa mugatzeko; aitzitik, dopinaren kontrako erakunde nazionalen esku uzten du kirolari zein izango den zehaztu edo definitzeko ardura.

Hala ere, aplikazio-eremua mugatzeko garaian, adierazi behar da 1. artikulua gehiago zehaztu beharko lukeela kirol-jarduera kontzeptuaren esanahia, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa ofizialen kontzeptua ere. Komeni da arauaren aplikazio-eremu subjektiboa argitzea eta orokortasunak alde batera uztea, azken horiek zalantzak sor baititzaizkete legearen aplikazioari buruz. Ez da ahaztu behar, gainera, artikulua hori funtsezkoa dela gainerako artikuluen hedadura ulertzeko.

II.- Aurreproiektuak "printzipio orokorrak" titulupean jasotzen ditu hartzaile jakinik bateko zenbait xedapen, eta, ondorioz, gai-alorrean parte hartzen duten eragile eta erakunde guztiei zuzendutakoak direla ulertu beharko genuke. Esaldi horietako batzuek helburuzko xede garbia dute, hau da, xedapen programatiko edo objektiboak dira, dopinaren aurkako borrokaren gidari izan beharko luketenak. Horren adibide dira, esaterako: "kirol-organizazio guztien funtsezko helburua izan behar du dopina desagerraraztea", "prestakuntza, informazioa eta ikerketa ezinbesteko tresnak dira dopina desagerrarazteko". Beste kasu batzuetan, gai-alorreko jardunaren zuzentzaile izan behar duten helburuzko jardunbideak xedatu beharrean, arauzko izaera duten xedapenak ematen dira, aurrerago, testuan bertan; esaterako, c) atalean arautzen den debekua edo d) atalean arautzen den betebeharra. Halaber, b) atalean, printzipio bat arautu baino, babestutako ondasun juridikoarekin (osasunaren babesarekin) zerikusia duen esakune bat finkatzen da, hau esaten baita: "dopinak larriki erasan dezake kirolarien, eta, kasuan kasu, animalien osasuna". Horrenbestez, zuzenbidearen printzipio orokorrak zuzenbidearen iturri direla aintzat hartzen badugu (ikusi Kode Zibileko 1.4. artikulua), araua sustatzen duen zerbitzuari gomendatzen diogu artikulua hori fintzeko, eta, horretarako, handik kentzeko araua emateko arrazoi izan diren ideiei buruzko adierazpen horiek, zio-azalpenean adierazita baitaude jada. Horiek horrela, zentzu hertsian zuzenbidearen printzipio orokor direnak soilik utzi beharko lituzke arauan:

Auzitegi Gorena (Administrazioarekiko auzien sala, 4. sekzioa), 2002ko apirilaren 15eko sententzia: "Espainiako ordenamendu juridikoaren parte dira zuzenbidearen printzipio orokorrak, bai oro har (Kode Zibileko 1.1 eta 1.4 artikulua), bai eta, bereziki, ordenamendu juridiko administrazioarenak. Sarri askotan, «nagusia» direla esan izan da, printzipio horiek berebiziko garrantzia eta munta baitute zuzenbide-alor horretan. Administrazio-zuzenbidea hasiera-hasieratik da, eta orain ere halaxe jarraitzen du, zuzenbidearen printzipio orokorren finketa bat, jurisprudentziaren bidez egin izan dena.

Gure ordenamendu juridikoaren kontzepzio instituzionala arau idatziek berariaz zuzenbide positibo bihurtu duten xedapenez harago doa, eta, ildo horretatik, sarri aipatzen da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzeko 1956ko Legearen zio-azalpeneko paragrafo hau: «eduki juridikoak ez dira mugatzen idatzitako xedapenetara, haien baitan sartzen baitira, halaber, printzipioak eta instituzioen izaerari datxekion arautze-izaera» Arauaren 103.1 artikulua berak, Legearekiko eta, oro har, zuzenbidearekiko mendetasun osoa arautzeaz gain, argi adierazten du, oinarritzko ideia gisa, Administrazioak bete beharrekoa duen legezkotasunaren barruan sartzen direla printzipio orokorrak, ordenamendu juridikoarekiko egiteko osagarri eta informatzailea dutenak, eta pertsona partikularrek ere haien arabera moldatu behar dutela beren jokabidea."

Hau xedatzen du artikulua horren b) atalak: "Dopinak kalte larria eragin diezaieke kirolariei eta, kasuan kasu, kirolari animaliei". Animalien erabiltzen den dopina kontrolatzeko neurriek, kirol-eremuan egiten diren neurrian, erlazio zuzena dute izapidetzen ari den arauarekin, baina araubide juridiko berezitu dute, beste ondasun juridiko bat babesten baita kasu horretan. Gure gomendioa da animaliekiko erreferentziak eta kirolarienak bereiztea, eta araubide berezitu horri buruzko aipamenak egitea edo kapitulu independente bat edo xedapen gehigarri bat erabiltzea horretarako, hori egitea aholkatzen baitute Legeen, dekretuen, aginduen eta ebazpenen proiektuak egiteko Irizpideek:

"1.- Xedapen gehigarriak. Honako hauek jasoko dituzte, hurrenkera honen arabera:

- a) Testu artikuludunean jaso ezin diren araubide juridiko bereziak: lurraldetarrak, pertsonalak, ekonomikoak eta prozesukoak. Araubide bereziak baino ez dira jasoko hemen, zehazkiago, artikuluetan oro har arautzen direnez besteko egoera juridikoak xedetzat dutenak, eta, gainera, xedapen-zatiaren artikulua edo kapitulu bat osatzeko hainbesteko garrantzirik ez dutenak”.

Aurreproiektuaren xedapen-zatian antzeko erreferentziak egiten dira, eta gauza bera errepikatu behar dugu horiekiko: 4, 24.3, 27.6, 28.6 eta 37.2 artikulua.

III.- Horien ondorengo 3., 4., 5. eta 6. artikuluek betebeharrak batzuk ezartzen dituzte dopinaren aurkako borrokan diharduten eragileentzat; zehazki, obligazio batzuk ezartzen dira kirolarientzat, kirolariei laguntza ematen dieten laguntzaileei, botere publikoei eta kirol-erakundeei.

Kirol-erakundeen erantzukizunak arautzen ditu 6. artikulua. Komeni da nabartzea zein den, lege honen baitan, kirol-erakundearen definizioa. Definizio konkretu bat egitea komeni da, bai arauan bertan eginez, bai definizio hori ematen duten alorreko beste arau batzuekiko igorpena eginez. Horrez gainera, komeni da deklarazio hori egitea, tituluak eta 1. atalak “kirol-erakundeak” aipatzen dituen arren, artikulua horretako 2. eta 3. atalek euskal kirol-federazioak eta lurraldetarrak aipatzen baitituzte.

Agerikoa da soilik federazioak direla, beren izaera juridikoaren ondorioz, funtzio publikoak betetzeko eginkizunak dutenak, baina beste kirol-erakunde batzuen esku gera daiteke dopinaren aurkako programak, xedapenak eta organoak xedatzeko betebeharra. Azken horiek ez dute izaera publiko eta administratiboko ahalmenak betetzeko gaitasunik, baina zehapen-ahalmena dute haiei lotutako pertsonen lotura bereziko harreman juridikoen ondorioz. Hori nabarmen geratzen da aurreproiektuko 38. artikulua irakurrita, hauexek xedatzen baitu zehapen-prozeduren gai-alorreko eskumena dutenak zehazteko:

“1. Dopinaren alorreko diziplinazko ahala Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioei dagokie, bai eta, erkidego horretan egiten diren kirol-lehiaketetan izaten den parte-hartzea dela-eta lotura bereziko harremana dagoen gainerako erakundeei ere.

2. Diziplina-espedienteak izapidetzea eta ebaztea, hasiera batean, arestian aipatutako erakundeetako diziplina-organoei dagokie, haien estatutu eta erregelamenduetan aurreikusitako baldintzetan.”

Horixe bera gertatzen da 6. artikuluko 3. atalean, bertan esaten baita Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak jardungo duela, baldin eta euskal kirol-federazioek edo lurraldetarrek ez badituzte beren gain hartzen dopinaren gai-alorrean dituzten eginkizunak.

Artikulu horrek berak, 6. artikulua, hau arautzen du d) atalean, kirol-erakundeei buruz ari dela: “edozein kirol-elkarte edo kirolariri diru-laguntzarik edo bestelako laguntzarik ez ematea, dopinaren aurkako araudia urratzen badute edo kasuan kasuko kontrolak egiteari uko egin baldin badiote”. Esan beharrekoa da, atal horri buruz, laguntza horiek “dopinaren aurkako araudia urratzen dutenei” ukatu beharrean, arauak hau esan beharko lukeela: “dopinaren aurkako araudia urratzeagatik zehatuak izan direnei”. Horrela jakatuta, araua zehatzagoa izango da eta babestu egingo du errugabetasun presuntzioa, betebeharrekoa dena zehapen-prozeduretan ere.

Horrez gainera, 6. artikuluko l) atalak arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-erakundeen egitekoa izango dela honako hau: “Kirolarien baimena lortzea eskumena duten organoek kirolarion datu pertsonalak tratatzea izan dezaten, dopinaren aurkako kontrolak egin eta kontrol horien emaitzak jakinarazteko modua izateko”. Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, izaera pertsonaleko datuak babesteko, da izaera pertsonaleko datuen tratamendua arautzen duen legea, eta kontuan izan behar da lege horrek pertsonen baimena eskatzen duela pertsonen datu pertsonalen tratamendua egin ahal izateko, eta baimen hori, gainera, askatasunez eman behar dutela; hala, zaila da ulertzen nola beteko duten kirol-erakundeek baimen hori lortzeko betebeharra, baldin eta ukitutako pertsonaren borondatezko erabaki baten mende badago. Hori jakinda, arauak esan behar luke kirol-erakundeek neurriak hartuko dituztela

kirolarien baimena lortzeko, izaera pertsonaleko datuak babesteko arauak arautzen dutena betez. Atal hori bera jasotzen da 7. artikuluko r) letran.

³ Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoko —Izaera Pertsonaleko Datuak Babestekoa— 3.h) artikulua:

Halaber, 6.1 artikuluko f) eta II) atalak oso antzekoak dira eta ia gauza bera esaten dute; beraz, atal bakar batean berridatzi beharko lirateke. Horixe bera esan behar da 7. artikuluko e) eta n) atalekiko.

Halaber, 6.1 artikuluko n) atalak eta 7. artikuluko k) atalak xedatzen dute kirol-erakundeek eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsonak eta erakundeak zaindu egin behar dutela dopinaren aurkako kontrolak egiteko prozesuetako analisien emaitzen konfidentzialtasuna, harik eta emaitza horien komunikazioa egitea bidezkoa den garaia iristen den arte. Atalaren azken oharpen hori ("harik eta emaitza horien komunikazioa egitea bidezkoa den garaia iristen den arte") ez da batere zehatza, eta, gainera, ez dator bat aurreproiektuko 47. artikuluekin, konfidentzialtasuneko eta sekretuko betebeharra denbora mugarik gabe ezartzen baitu dopinaren aurkako kontroleko eginkizunak betetzen dituzten pertsonentzat, kirol-erakundeetako organoetako kideentzat eta erakunde horietako langileentzat.

IV.- Ondoren, 8. artikuluan, dopinaren aurkako kontrol bat igaro behar duten kirolarien eskubideak zerrendatzen dira. Ohar hauek egin behar ditugu eskubide-zerrenda horri buruz:

Eskubide hau arautzen du artikuluko horren e) atalak: "Dopinaren aurkako kontrola kirolariaren duintasuna eta intimitatea urratu gabe egitekoa, betiere egin beharrekoaren mugak kontuan izanda". Arau-xedapen horren idazketari erreparatuta, intimitaterako eskubidea muga batzuen barruan urratzeko aukera arautzen dela dirudi. Ez da zehazten zer muga diren horiek, baina badirudi dopinaren aurkako kontrolak egiteko behar diren mugak adierazten dituela "beharrekoaren" adjektiboak. Aintzat hartuta oinarritzko eskubideen jardun-eremuan ari garela, eta, zehazki, intimitaterako eskubide oinarritzkoaren eremuan, adierazi behar dugu ezin dela edozein muga onetsi, eskubidea eratzen duten mugak baitira kontuan hartu behar direnak. Kontuan izan behar da garrantzi handiko ondasun juridikoa babesten dela kasu honetan, eta, ondorioz, ezin da zehaztasunik gabeko kontzepturik erabili, hala nola, "beharrekoaren mugak kontuan izanda" eta antzerakoak. Horrenbestez, kendu egin behar da arautik "beharrezkoak diren mugen kasuan izan ezik" dion esaldia; hau da, dopinaren aurkako kontrola beti egin behar da kirolarien duintasuna eta intimitatea urratu gabe.

d) Interesdunaren adostasuna: interesdunaren borondate-adierazpen aske, zalantzarik gabe, zehatz eta arrazoitua, bera ukitzen duten datu pertsonalak tratatzeko adostasuna emateko.

Artikuluaren h) atalak dio "Dopinaren kontrako prozesua eta preskripzio-epeak amaitu ostean, hartu diren odol-, gernu- edo bestelako laginak desegin daitezela eskatzeko eskubidea" izango dutela, baina ez da garbi geratzen zer preskripzio-epe diren. Pentsatzekoa da legeak araututako arau-hauste eta zehapenen preskripzioaz ari dela. Dena den, ez da arautzen zer gertatuko den laginak hartu eta, prozesuaren amaieran, arau-hausterik eta zehapenik izango ez den kasuetan. Ez da erraz ulertzekoa, halaber, artikuluan h) atal horretan bertan ezartzen den beste xedapen hau: "Ezin izango da eskubide hori erabili kontrola egitea agindu duen erakundea laginen titular bihurtu bada; dena den, lagin horiek dopina kontrolatzeko edo ikerketak egiteko erabili beharko dira". Horren harian, egoki deritzogu gogoratzea sektoreko araudiak xedatzen duena; izan ere, agintzen da interesdunaren adostasuna beharko dela lagin biologikoak ikerketa-xedeetarako erabiltzeko, baldin eta lagin horien jatorrizko xedea ez bazen ikerketarako erabiltzea. Horrez gain, adostasun hori edozein unetan ezeztatu daitekeela. Zehazki, komeni da aintzat hartzea, gai horri buruz, uztailaren 3ko 14/2007 Legeak, Ikerketa biomedikuari buruzkoak, arautzen duena, eta, berariaz, haren III. kapituluak agintzen duena, gizakien lagin biologikoen erabilera arautzen baitu, ikerketa-helburuetarako denean:

58. artikulua. Laginak eskuratzea

"1. Lagin biologikoak lor daitezke ikerketa-xedeetarako, baina soilik aldez aurretik iturburuko subjektuaren idatzizko adostasuna lortu bada aldez aurretik eta aldez aurretik jakinarazi bazaio lagin-eskuratze horrek zer ondorio eta arrisku ekar ditzakeen bere osasunarentzat. Adostasun hori ezeztatzeko aukera izango da.

2. Iturburuko subjektuaren adostasuna beharrezkoa izango da beti, baldin eta biomedikuntza ikerketarakoak ez diren bestelako helbururen batez eskuratu badira lagin biologikoak, kontuan izan gabe lagin horiek anonimo bihurtzeko prozesu bat bete den ala ez.

Aurrekoa horrela izango bada ere, salbuespenezko kasu bat izango da iturburuko subjektuaren adostasunik gabe eta biomedikuntza ikerketarako erabiltzeko kodetutako edo identifikatutako laginak, baldin eta ezinezkoa bada adostasun hori lortzea edo adostasun hori lortzeko ahalegina egitea arrazoizkoa ez bada, Lege honen 3.i) artikulua araututako moldean. Kasu horietan, Ikerketaren Etika Batzordearen aldeko irizpena lortu beharko da, eta irizpen horrek aintzat hartu beharko ditu, gutxienez, honako baldintza-eskakizun hauek:

(—)"

59. artikulua. Lagin biologikoa erabili aurreko informazioa

"1. Izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko legediak eta, bereziki, Lege honen 45. artikulua arautzen dutena betetzeaz gain, informazio hau emango zaio idatziz iturburuko subjektuari, haren lagin biologiko bat biomedikuntza ikerketarako erabiltzeko adostasuna eskatu baino lehen, baldin eta lagina ez bada hura anonimo bihurtzeko prozesu batetik igaroko:

- a) Ikerketaren edo ikerketa-ildoaren helburua.
- b) Lortzea espero diren onurak.
- c) Laginaren dohaintzak eta eskurapenak ekar ditzaketen eragozpenak, eta, horien artean, gerora harremanetan jarri behar izatea, beste datu edo lagin batzuk eskuratzeko.
- d) Ikerketaren arduradunaren izena.
- e) Adostasuna eta haren eraginak ezeztatzeko eskubidea, eta, horren baitan, lagina suntsitu edo hura anonimo bihurtzekoa, bai eta ondorio edo eragin horiek jada egin diren ikerketen ondoriozko datuetara ez zabaltzekoa ere.
- f) Analisia egingo den lekua eta ikerketa amaitzean laginak izango duen erabilera: disoziatzea, suntsitzea edo beste ikerketa batzuetan erabiltzea. Beharrezkoa denean, berriro bete beharko dira lege honetan eskatzen diren baldintzak. Informazioa emateko unean ezin bada xehetasun horietakoren bat jakin, horren berri izan bezain laster informatzeko konpromisoa hartuko da.
- g) Dohaintzan emandako laginen analitik lortzen diren datu genetikoaren berri izateko eskubidea.
- h) Lortutako informazioa konfidentziala izango denaren bermea, eta adierazi egingo da zer pertsonak izango duten iturburuko subjektuaren datu pertsonaletarako sarbidea.**
- i) Ohartaraztea pertsonaren osasunari buruzko informazioa lor daitekeela bere lagin biologikoari egiten zaizkion analisi genetikoetatik, eta jakinaraztea jarrera bat hartu dezakeela informazio horren komunikazioari buruz.
- j) Ohartaraztea zer ondorio ekar ditzakeen lor daitekeen informazioak bere senideentzat, eta

adieraztea, egoki denean, komeni dela iturburuko pertsonak berak ematea informazio hori senideei.

k) Iturburuko pertsonarekin harremanetan jartzeko aukera dagoela adieraztea. Hori egiteko moduari buruzko informazioa eska dakioke pertsona horri.

2. Anonimo bihurtzeko prozesu bat igaro behar badute laginek, artikuluko honetako a), b), c) eta d) ataletan adierazten den informazioa emango zaio iturburuko subjektuari".

60. artikulua. Lagin biologikoa erabiltzeko adostasuna

1. Lagin biologikoa erabiltzeko adostasuna emango da, bai lagina eskuratzeko egintzan bertan, bai gerora, berariaz, ikerketa zehatz bat egiteko.

2. Berariazko adostasunaren baitan aurreikus daiteke lagina hasieran proposatutako ikerketa-ildoarekin lotutako beste ikerketa batzuetarako erabil daitekeela, hirugarren pertsonak egindakoak barne. Adostasunean ez bada halakorik aurreikusi, iturburuko subjektuari beste adostasun bat emateko eskatuko zaio, egoki irizten badu.

3. Edozein unetan ezeztatu daiteke adostasuna, osorik edo helburu jakin batzuetarako soilik. Lagina edozein erabileratarako erabiltzea ezeztatzen bada, suntsitu egingo da hura; hala ere, aurretik egin diren ikerketek emandako datuak gordetzeko aukera izango da.

61. artikulua. Laginak gordetzea eta suntsitzea

1. Lagina gordetzea erabakitzen bada, iturburuko subjektuari jakinaraziko zaio nola gordeko den, zertarako, gerora zer erabilpen izan ditzakeen, hirugarrenei lagako zaien ala ez, zer baldintzatan erretira dezakeen lagina eta nola eska dezakeen hura suntsitzea. Ikerketa biomedikorako erabiltzen diren lagin biologikoak gordetzeko aukera bakarra da haiek beharrezkoak izatea oraindik laginak eskuratzeko helburuak betetzeko, salbu eta iturburuko subjektuak berariazko adostasuna eman badu hura gerora bestelako erabilera batzuetarako erabiltzeko.

2. Aurreko atalean adierazitakoak betetzekoak izango dira, baldin eta lagina identifikatzeko datuak ez badira hura anonimo bihurtzeko prozesu batetik igaro, Lege honetan arautzen den moduan.

Aurreko atalean ikusten den zehaztasun falta bera ikusten da i) atalean ere, "egoki den unera arte" esaldiarekin; izan ere, atal horrek esaten du kirolariek eskubide hau izango dutela: "kirol-erakundeei emaitzen konfidentzialtasuna exijitzeko eskubidea, egoki den unera arte". Zehaztasun handiagoz adierazi behar da zein izango den une hori. Hau da, ez da esaten zer gertatu behar duen dopinaren aurkako kontrolaren emaitzako datuak konfidentzialak izateari uzteko. Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko Lege Organikoak haxe arautzen du, 11. artikuluan, datu pertsonalen lagapenari buruz:

"1. Tratamenduaren objektu diren izaera pertsonaleko datuak hirugarren bati komunika dakizkioke soil-soilik datu-lagatzaillearen eta datu-hartzailearen eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duten xedeak betetzeko; interesdunak aurretiaz horren inguruko adostasuna eman beharko du.

2. Aurreko idatz-zatian ezarritako adostasuna ez da beharrezkoa izango:

a) Datu horiek lagatzea legeak baimentzen badu.

b) Jendearen esku dauden iturrietatik jasotako datuak direnean.

c) Tratamendua askatasunez eta modu legitimoan onartutako harreman juridikoen ondorio izan eta harreman horiek garatzeko, betetzeko zein kontrolatzeko nahitaezkoa denean tratamendua hirugarrenen

fitxategiekin konektatzea. Kasu horretan, komunikazioa legezkoa izateko, komunikazio hori justifikatu duen helburua betetzera mugatu beharko da.

d) Egin beharreko komunikazioaren jasotzailea herri-defendatzailea, fiskaltza edo epaileak zein auzitegiak edo kontu-auzitegia (edo haien pareko erakunde autonomikoak) direnean, halakoek dituzten eginkizunak gauzatzean.

Modu berean, ez da behar izango adostasunik komunikazioaren jasotzailea herri-defentsariaren edo kontu-auzitegiaren antzeko eginkizunak dituzten autonomia-erkidegoetako erakundeak direnean.

e) Datuak herri-administrazioen artean lagatzen badira eta horren helburua gero datu horiek helburu historiko, estatistiko edo zientifikoekin erabiltzea bada.

f) Osasunari buruzko datu pertsonalak ematea beharrezkoa bada fitxategi batera sartzea eskatzen duen larrialdi bat konpontzeko edo osasunari buruzko Estatuko legerian edo legeria autonomikoan ezarritako baldintzetan azterketa epidemiologikoak egiteko.

3. Hirugarren bati izaera pertsonaleko datuak komunikatzeko adostasuna deuseza izango da, interesdunari ematen zaion informazioak ez duenean argi uzten baimendutako komunikaziora bildutako datuek zein xede izango duten edo datuak komunikatu nahi zaizkion subjektuak zein jardura-mota duen.

4. Izaera pertsonaleko datuen komunikazioaren inguruko adostasuna, halaber, ezeztatzeko modukoa da.

5. Komunikazioa egon dagoenetik, izaera pertsonaleko datuak komunikatzen zaizkion

6.

7.

8. Komunikazioa egiten bada aurretiaz disoziazio-prozedura gauzatuta, ez da aplikatuko aurreko idatz-zatietan ezarritakoa.

Gure iritzian, dopinaren aurkako kontrolei buruzko datuak salbuespenezko egoera jakinetan soilik laga ahal zaizkie hirugarrenei, organo eskumendunaren aurrean salatzeak arau-hauste administratiboak edo delitu penalak izan daitezkeen gertakariak. Gai-alor honetan, kirolarien intimitaterako eskubidea da babestutako ondasun juridikoa; beraz, komeni da oso artetsuak eta zorrotzak izatea ondasun hori babesteko. Horiek horrela, babes hori justifikaziorik gabe mugatzeko modu bat da "harik eta egokia den arte" mugatzea konfidentzialtasunaren denbora-epea.

Egia da datuen lagapenak egin daitezkeela interesdunaren adostasunik izan gabe, aukera hori arautzen baitu 11.2.a) artikulua (lege batek baimendutako lagapenak), baina lege-lerruneko lege batek ezin du gai-alor hori arautu intimitaterako oinarritzko eskubidearen funtsezko elementuak jaso gabe, hau da, ezin da interesdunak bere datuen erabilera erabakitzeko duen ahalmena salbuetsi, baldin eta horren arrazoi bakarra bada salbuespen hori lege-lerruneko arau batek egiten duela. Ildo horretatik, komeni da hona ekartzea Konstituzio Auzitegiak oinarritzko eskubideen muga araupenari buruz eman duen doktrina (292/2000 sententzia, azaroaren 30ekoa).

(15. oinarri juridikoa) "(...) Espainiako Konstituzioko 53.1. artikulua lege-erreserba bat egiten du oinarritzko eskubideen mugak arautzeko; beraz, erreserba horrek ez du aukerarik ematen gai-alor horiek arautzeko ahalmena aztertu dugunaren moduko erregelamendu-arauen esku uzteko, eta, gainera, beste eskakizun batzuk ezartzen dizkio muga horiek

ezartzen dituen Legeari.

Auzitegi horrek adierazi du Konstituzioak ez diola Estatuari eragozten eskubide edo ondasun juridiko horiek babestea arau hark babesten dituen beste batzuen kaltetan, eta, ondorioz, egia da legegileak mugapenak ezar ditzakeela oinarritzko eskubide horien edukiari edo egikaritzari, baina, era berean, nabartu dugu, halakorik egiten bada, Konstituzioak araututako beste eskubide edo ondasun batzuk babesteko ezarri behar direla muga horiek (8. oinarri juridikoak eta han adierazitakoak) eta, gainera, mugaketa horrek proportzionala izan behar duela harekin lortu nahi den helburuarekiko (Konstituzio Auzitegiaren 11/1981 sententziako 5. oinarri juridikoa eta 196/1987 sententziako 6. oinarri juridikoa). Ez badira baldintza horiek betetzen, Espainiako Konstituzioko 9.3. artikulua debekatzen duen arbitrariotasuna azalduko litzateke.

Horrez gain, nahiz eta konstituzio-mailako justifikazioa izan eta lege bidez ezarritako oinarritzko eskubidearen mugak neurrikoak izan (Konstituzio Auzitegiaren 178/1985 sententzia), Konstituzioa urra dezakete, baldin eta xedatutako muga horiek zehazten eta aurreikusten ez badira eta nola aplikatuko diren zehazten ez bada. Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentziak berretsi egiten du 8. oinarri juridiko horren konklusioa, eta, ondorioz, hona ekarritakotzat jo behar hura. Adierazi behar da, halaber, segurtasun juridikoko printzipioa urratuko litzatekeela (Espainiako Konstituzioko 9.3 artikulua), aplikatzekoa den ordenamenduari buruzko ziurtasun moduan eta botereak zuzenbidea pertsona partikularrekiko aplikatzean nola jardungo duen arrazoizko modu batean aurreikusteko aukera gisa ulertuta (Konstituzio Auzitegiaren 104/2000 sententziako 7. oinarri juridikoa), baina, era berean, Lege horrek urratu egingo lukeela horrela mugatutako oinarritzko eskubidearen funtsezko edukia, haren mugak finkatzeko moduak desitxuratu egiten baitu hura eta, praktikan, eragotzi egiten baitu eskubide hori egikaritu edo erabiltzea (Konstituzio Auzitegiaren 11/1981 sententzia, 15. oinarria; apirilaren 22ko 142/1993 sententzia, 4. oinarria, eta 341/1993 sententzia, azaroaren 18koa, 7. oinarria). Lege batek zehaztasunez ezartzen ez badu bere araupena oinarritzko eskubide baten mugapenaren suposamendu materialak finkatzean, zehaztasun gabezia bat eragin dezake mugapen hori aplikatzen den kasuak identifikatzeko orduan. Eta emaitza hori ematen bada, arrazoizko interpretazio guztiak atzenduta, legeak ez du beteko mugatzen duen oinarritzko eskubide hori bermatzeko betebeharrak edo obligazioa, legeak hura aplikatu behar duenaren esku uzten baitu lan hori egiteko ardura, eta, ondorioz, urratu egiten baititu oinarritzko eskubidearen efikazia eta segurtasun juridikoaren printzipioa".

(16. oinarri juridikoa) "(...) Zehatzago esanda, intimitaterako oinarritzko eskubideari buruz nabarmendu dugu legezko xedapenetan oinarritu behar direla haren balizko mugapenak, baina Konstituzioan oinarritutako legea izan behar duela beti eta mugapen horrek proportzionatua izan behar duela (Konstituzio Auzitegiaren 110/1984 sententziako 3. oinarria eta 254/1993 sententziako 7. oinarria), eta, horrez gain, adierazi dugu eskubide hori murriztuko duen legeak zehaztasunez adierazi behar dituela neurri mugatzailearen suposamendu material guzti-guztiak. Baldintza horiek betetzen ez badira, nekez uler daiteke hura aplikatuko duen ebazpen judizialak edo egintza administratiboak legean oinarritzen direnik, legeak beste botere publiko batzuen esku utzi baitu oinarritzko eskubidearen mugak finkatzeko ahalmena (Konstituzio Auzitegiaren 37/1989 sententzia, otsailaren 15ekoa eta 49/1999 sententzia, apirilaren 5ekoa)."

V.- Arauaren 9. artikulua, "kirolariei eta erakundeei babesa ematea" epigrafean, arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek, zuzenbide publiko eta pribatupeko erakunde instrumentalek eta haiek partaidetutako erakundeek ezin dietela babesik edo diru-laguntzarik eman dopatzeagatik zehatuak izan diren kirolariei eta kirol-erakundeei, ezta dopinaren kontrako kontrolatan laguntzeko prest azaldu ez direnei ere. Gomendatzen dugu azken esaldi hori, "dopinaren kontrako kontrolatan laguntzeko prest azaldu ez direnak", aldatzea, eta hau jartzea haren orde: "zehatuak izan direnak dopinaren aurkako kontrolatan laguntzari uko egin diotelako". Laguntzeari uko egitea arau-hauste gisa tipifikatzen du arauak, eta, ondorioz, gomendatzen duzu babesari eta diru-laguntzak ezezteko arrazoen artean jasotzea laguntzeari uko egiteagatik zehatuak izan direnen kasua; izan ere, horrela arautzen ez bada, neurri kalteko bat edo karga bat ezarriko zaio norbaiti aurretiaz zehapen-prozedura bat jarraitu gabe, eta, ondorioz, defendatzeko neurrien bermerik izan

gabe.

Hori bera gertatzen zen artikulu horren 3. puntuarekin; izan ere, egokiagoa da "babeseko ekintzak edo diru-laguntzak jokabide horiek egin aurrekoak badira" esan beharrean, "jokabide horiek zehatu aurrekoak badira" esatea.

Eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 50.6. artikulua duen idazketari jarraitzeko, "bide administratiboan edo penalean zigortuak" esaldia jar daiteke, berariaz adierazteko arau-xedapen horrek bi zigor-mota horiek barne hartzen dituela.

Beste ildo bati jarraituz, esan behar da 9. artikuluko 1. puntuak hau adierazten duela: ezin izango diete babesik ez diru-laguntzarik eman kirol-erakundeei, baldin eta kirol-erakunde horiek zehapenen bat jaso badute dopin-gertakari orokor edo jarraiengatik". Puntu horri dagokionez, adierazi behar da "zehapenen bat jaso badute dopin-gertakari kolektibo edo jarraiengatik" esaldia zehaztea komeni dela. Babesteko edo diruz laguntzeko ukoa neurri kaltegarria denez interesdunentzat, komeni da alderdi hori zehaztea.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legeko 50.6. artikulua: "Zernahi administrazio edo erakunde publiko zein pribatutik diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo xede bererako besta baliabide batzuk eskatzeari eta, kasuan kasu, lortzeari buruzko jakinarazpena, aurreko 2 zenbakiko d) idatz-zatiak aipatzen duena, itzulketako edo zehapeneko edozein prozeduratan sartuta ez egoteari edo horrelako prozedurak amaituta egoteari buruzko egiaztapena, aurreko 4 zenbakiak aipatzen duena, bai eta pertsona edo erakunde eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zehatuta ez dagoela edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ez dagoela biltzen duen egiaztapena ere, aurreko 5 zenbakian aipatzen dena barne, erantzukizunpeko aitorten baten bidez egin ahal izango da."

Bestalde, eta 9. artikuluko hurrengo puntuarekin konparatuta ("Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta beren baitako zuzenbide publiko edo pribatuko bestelako erakundeei nahiz administrazioen parte hartzea duten gainerako erakundeei ezin izango diete babesik ez diru-laguntzarik eman kirolariari"), ez da ulertzen zergatik ukatzen zaion laguntza kirolariari —memoriak ez du ezer esaten horri buruz— dopatze-ekintza bat egin duelako eta kirol-erakundeei ekintza jarraituak edo izaera kolektiboko jarduerak egin dituztelako.

Halaber, adierazi behar da artikulu horrek "parte hartzea duten erakundeak" kontzeptu generikoa erabiltzen duela Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek partaidetutako erakundeak eta zuzenbide publiko edo pribatupeko haien erakunde instrumentalak adierazteko, baina ez duela partaidetza-modurik zehazten. Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek eta zuzenbide publiko edo pribatupeko haien erakunde instrumentalek modu anitz dituzte beste erakunde batzuetan parte hartzeko, eta, ondorioz, ia ezinezkoa da zehaztea zer erakunde sartzen diren mandatu edo xedapen horren eremuan; hala, xedapena ez da efikaza alderdi horretan.

Azkenik, I. kapitulu honi buruzko oharrekin amaitzeko, adierazi behar dugu terminologia homogeneo eta argiago bat erabiltzea komeni dela. Definizio hauek jaso daitezke: "kirolari", "dopatzea", "kirol-antolakundea", "kirol-erakundea", "debekatutako substantziak edo metodoak", "kirol-lehiaketa ofizialak", "kiroltasuna".

II. KAPITULUA. ANTOLAKETA ADMINISTRATIBOA (10-12. ARTIKULUAK)

Lege-aurreproiektuaren bidez, erakunde berri bat sortzen da, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia (10. artikulua), eta, proposatutako artikuluen harian, esan dezakegu zuzenbide publikoko erakundea dela, nortasun juridiko propioa eta gaitasun osoa dituen, eta herri-administrazioekiko independentziaz jokatzeko duela bere eginkizunak betetzeko orduan.

Autonomia-erkidegoetan dopinaren aurkako agentziak sortzeko aukera arautzen du azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoak berak, 4.6. artikuluan: "Autonomia-erkidegoetan dopinaren aurkako agentziak badaude, haiek parte hartzeko organo bat eratuko da Dopinaren Aurkako Estatuko Agentzian, Estatuak dopinaren gai-alorrean egiten dituen politika publikoei buruzko informazioa, debatea eta lankidetzak sustatzeko".

Gai hori aztertzen hasi garela, komeni da ikustea zer arautzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak, azaroaren 11ko 1/1997 Dekretuaren bidez onartutakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren antolamendua arautzen duen neurrian. Ildo horretatik, ikusten da Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari legokiokeen tipologia ez dela ageri lege horretako 7. artikulua arautzen duen sailkapen instituzionalean:

"1.- Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoa administrazio orokorrak eta erakunde-mailako administrazioak osatzen dute.

2.- Administrazio orokorra edo Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa da, Euskadiko administrazio publiko guztian, lurralde-izaera daukan bakarra. Administrazio orokor hori Jaurilaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 53. atalean dago aipatuta.

3.- Honako entitate hauek osatzen dute erakunde-mailako administrazioa:

a) Zuzenbide publikoaren pean dauden erkidegoko erakundeak. Erakunde autonomo deritze.

b) Zuzenbide pribatuko ente publikoak.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan, 2. eta 3. paragrafoetan adierazitako erakundeak daude, eta ondorengo hauek ere bai:

a) Baltzu publikoak.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak.

c) Berezko nortasun juridikoa duten partzuergoak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 6. artikuluko 5. paragrafoan, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 87. artikuluan adierazitakoak, baldin eta, partzuergoen egintzak zuzenean zein zeharka Euskal Autonomia Erkidegoko organo baten erabakitzeke ahalmenari lotuta daudela, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan txertatutako erakunde batek edo batzuek, gehiengo izanik, dirua, ondasunak edo industria eman badiete partzuergo horiei, edo, eratzeko unean, erakunde hori gehiengoz finantzatzeko konpromisoa hartu badute".

Horrenbestez, lege-aurreproiektuaren bidez sortu nahi den erakundea "erakunde publiko atipikoa" litzateke, lege espezifiko batek sortzen baitu hura eta lege horrek ezartzen baitu haren araubide juridikoa. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, 024/2003 irizpenean, honela deskribatu zuen Datuak Babesteko Euskal Agentziaren izaera juridikoa, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren oso antzeko izaera juridikoa duena: "Datuak Babesteko Euskal Agentzia ez da sartzen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legeak araututako erakunde

instrumentalen artean (...), beraz, pentsatu behar dugu erakunde publiko atipiko bat dela, lege espezifiko batek sortu baitu eta lege horrek ezarri baitu haren araubide juridikoa”.

Sortu nahi den erakundearen izaera juridikoa bat dator Estatuan “agentziak” izenburupean izendatu diren erakundeekin. Uztailaren 18ko 28/2006 Legeak, zerbitzu publikoak hobetzeko sortutako Estatuko agentziei buruzkoak, arautu ditu agentzia horiek, eta horrela definitu ditu 2.1. artikuluan:

“zuzenbide publikopeko erakundeak dira, izaera juridiko publikoa, ondare propioa eta kudeaketarako autonomia dutenak. Administrazio-ahalmenak erabiltzeko eskumena dute eta Gobernuak sortzen ditu Estatuko Administrazio Orokorrek egiten dituen politika publikoetako programak betetzeko haren eskumenpeko eremuetan”.

Estatuko agentziek autonomia funtzionaleko mekanismoak dituzte, kudeaketagatiko erantzukizuna eta emaitzen kontrola egin beharra, Lege honetan araututako moduan”.

Haien araubide juridikoari dagokionez, arauaren 10.3. artikulua arautzen du Agentziak lotu egin behar duela bere jarduna azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, araututakoari, baldin eta administrazio-ahalmenak egikaritzen baditu. Haren gainerako jarduna orain izapidetzen ari den Legeak eta hura garatzeko xedapenek ezarritako moduan bete behar du.

Horrekin batera, aurreproiektuko 10.4. artikulua arautzen du indarreko zuzenbide publikoa bete behar duela kontratazio-alorrean, eta xedapen hori bat dator Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeak 3.2.d) artikuluan arautzen duenarekin, artikulua horrek esaten baitu herri-administrazioen tratamendua izango dutela lege horren esparruan honako erakunde hauek: “Zuzenbide publikoko entitateak, independentzia funtzionala edo Legeak aitortutako autonomia bereziren bat dutenak, baldin eta sektore edo jardura jakin batekiko araupen-funtzioak edo kanpo-izaerako kontrol-funtzioak badituzte”. Agentzien ondareari dagokionez, 10.4. artikulua horrek berak arautzen du haien jardura zuzenbide publikoaren mendekoa izango dela eta haien eskubide eta ondasunak Euskal Autonomia Erkidegoaren ondare izango direla; beraz, bete egiten da Euskadiko Ondare Legeko 1. artikulua (azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak onartu zuen lege horren testu bategina):

“1 Euskal Autonomia Erkidegoko ondarea edo Euskadiko ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen araubide juridikoa ezartzea da lege honen xedea. Hona hemen legearen aplikazio-eremu subjektiboa:

(..-)

j) Sortzeko legean hala xedaturik daukaten gainerako erakunde publikoak.

2. Edozein titulu bitartez, aurreko paragrafoko erakunde horien jabetzapekoak diren, edo erakunde horienak direla jotzen diren, ondasun eta eskubide guztiek osatzen dute Autonomia Erkidegoko ondarea edo Euskadiko ondarea”.

Langileei dagokienez, funtzio publikoaren arauak dira aplikatzekoak, eta aurrekontu-araubideari dagokionez, arautzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren baitan sartuko dela haren aurrekontua eta EAEko aurrekontu-araubidea arautzen duen legedia bete beharko duela; horrez gainera, haren kontabilitate publikoko araubidea bete beharko du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Ogasun eta Herri Administrazioko Sailaren finantza eta kudeaketa alorretako kontrolpean izango da, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak haren jarduna fiskalizatzeko aukera izango du.

Agentziaren antolamendua arautzen du 11. artikulua, eta artikulua horrek esaten du hauek izango dituela agenziak:

- zuzendari-kargu erabateko independentziaz eta objektibotasunez beteko duen pertsona bat, bi ezaugarri horiek egokiak direlarik Agentziaren izaera independentea bermatzeko,
- idazkari bat,
- aholku-kontseilu bat,
- Erabilera Terapeutikorako Baimenetarako Euskal Batzordea,
- haren estatutuak arautzen dituen gainerakoak.

Arauek ez du berariaz adierazten aholkularitza-organismoaren osaera. Pertsona batek ordezkatzeko ditu lurralde historikoak organo horretan. Ez da argi geratzen pertsona bat izango den lurralde bakoitzeko ala pertsona batek ordezkatzeko dituen hiru lurraldeak. Ikusita zer-nolako garrantzia duten foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko sare instituzionalean, komeni da lurralde bakoitzak ordezkari bat izatea Aholkularitza Kontseiluan; gainera, kontuan izan behar da lurralde historikoek eskumenak dituztela gai-alor horretan.

Arauek ez du esaten zer osaera izango duen Erabilera Terapeutikorako Baimenetarako Euskal Batzordeak. Esaten duen gauza bakarra da Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarekiko mendetasun organikoa izango duela, autonomia funtzionala izango duela eta Agentziako zuzendariak izendatzeko dituela haren kideak. Ez da beharrezkoa legeak berak garatzea organo horren barne-funtzionamenduaren antolamendu-modua, ezta haren osaera zehatza ere, baina araua bera osatuagoa litzateke, zehatzagoa balitz haren osaera eta funtzioak adierazterakoan, nahiz eta gerora garatzeko gutxienekoak ezartzera mugatu.

Agentziaren funtzio edo egitekoak arautzen ditu 12. artikulua.

III. KAPITULUA. DOPIN-KONTROLAK (13-20. artikulua)
Dopin-kontrolak egiteko moduari buruzko alderdi ugari arautzen ditu titulu honek; berariaz, III. kapituluak arautzen du dopinaren aurkako kontrolak egiteko obligazioa (13. eta 14. artikulua); erabilera terapeutikorako baimenak eta kirol-arloko bajak (14. eta 15. artikulua); osasun-kontrolak (17. artikulua); kontrolen kudeaketa (18. eta 19. artikulua), eta, azkenik, kirolean debekatuta dauden substantziak eta metodoak.

1.- Dopinaren aurkako kontrolak igartzeko obligazioa arautzen du 13. artikulua; hala, legearen eremu subjektiboarekiko lotura eginez gero, eremu subjektibo horretan sartzen diren kirolari guztiek bete behar dute obligazio edo betebeharrak. Lehiaketa-garaian eta garai horretatik kanpo egingo dira kontrolak. Halaber, lehiaketa-garaitik kanpo egiten badira, aurrez abisatu gabe eta aurrez zitala egin daitezke. Nazioarteko arauak ezarritako araupena betetzen dute kontrolak lehiaketa-garaitik kanpo eta aurrez abisatu gabe egiteko xedapenek. Zehazki, Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak 15.2. artikuluan arautzen du kontrolak egin daitezkeela lehiaketa-garaitik kanpo, eta haiek aurretik abisatu gabe egiteko aukera, berriz, 5.1.2. artikuluan arautzen du, hau adierazten baitu xedapen horrek: "salbuespenezko kasuetan izan ezik, lehiaketa-garaitik kanpoko kontrol guztiak sorpresaz egingo dira".

Aurreproiektuko 13. artikulua kopia egiten du, aldaketatxo batzuk egin, 7/2006 Lege Organikoko 5. artikulua. Hauek dira lege organiko horren xedapen horrekiko dituen diferentziak: aurreproiektuko eremu subjektiboa harena baino zabalagoa da (lizentziadun kirolarietara mugatzen baita Estatukoa) eta Kirolariaren Osasun Txartelaren araupenari eta dopinaren aurkako kontrolen gai-alorrean eskumena izango duen organismoari egindako erreferentziak

(aurreproiektuak Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia aipatzen du, eta ez Estatukoa). Kontrolak egin behar dituzten subjektuen esparrua aldatzera mugatzen denez, ia osorik kopiatzen du Estatuko xedapena, eta horrek zenbait arazo sortzen ditu 13. artikulua interpretatzean:

7/2006 Lege Organikoaren 5.2. artikulua dio: "Kontrolak egiteko betebeharra dopinaren alorreko arau-hauste bat egitearren lizentzia etenda duten kirolariei ere badagokie zehapena betetzen ari diren bitartean, eta, edonola ere, kirol-lizentzia berriro gaitu aurretik kontrola egin beharko dute beti.

Honela idatzita geratzen da 13.4. artikulua, aurreko xedapena erreferentziatzen hartuz: "Kontrolak egiteko betebeharra dopinaren alorreko arau-hauste bat egitearren etendura-egoera dauden kirolariei ere badagokie zehapena betetzen ari diren bitartean, eta, edonola ere, kirol-lizentzia berriro gaitu aurretik kontrola egin beharko dute beti".

Estatuko arauko 5.2. artikulua kopiatzean, kendu egin da, lehenik eta behin, "lizentzia etenda duten kirolariei" esaldia, artikulua hori bat etor dadin aurreproiektuaren eremu subjektiboarekin, eta, ondorioz, etendura-egoeran dauden kirolariak aipatzen dira orain (hau da, kirolari guztiak, lizentzia duten ala ez kontuan hartu gabe); hala ere, aurrerago esaten du dopinaren aurkako kontrola igaroko dutela "kirol-lizentzia berriro gaitu aurretik". Aurreproiektuko 13. artikulua idatzita dagoen moduan, dopinaren aurkako kontrol bat egin behar du kirolariak bere kirol-lizentzia berriro gaitzeko, baina ez da ezer arautzen lizentziarik gabeko kirol-jarduerarako berriro gaitzeko moduari buruz.

- Hau dio aurreproiektuko 13.5 artikulua: "Dopinaren aurkako Euskal Agentziak kirolari hauek ere derrigortu ahal izango ditu dopin-kontrolak egitera: lizentzia izan baina ezarritako epean berriro ez dutenak, baldin eta arrazoiz susmatzen bada kirolari horiek ez dutela kirola utzi eta lehiaketatik kanpoko kontrolak saihesteko asmoz ari direla, harik eta lizentzia berriro arte".

Atal horrek kopiatu egiten du 7/2006 Lege Organikoko 5.2. artikulua (2. paragrafoa), baina desitxuratuta geratu da aurreproiektuan jasotzean; izan ere, EAEko lege-aurreproiektuan, dopinaren aurkako kontrolak igarotzeko betebeharra dute kirolari guztiek, lizentziarik izan ala ez, eta ez da hori gertatzen Estatuko arauan. Horrenbestez, EAEko legearen arabera, lizentzia berriro ez duten kirolariek ere kontrolak igarotzeko obligazioa dute, eta ezingo dute kontrola egiteko obligazioa saihestu lizentzia berriro gabe utziz. Horrenbestez, berrikusi egin behar da xedapen horren testua edo atal hori arauan jasotzea komeni den ala ez.

Aurreproiektuaren 13. artikuluko 10. atalak kopiatu egiten du Estatuko legeko 5.6. artikulua. Estatuko artikulua atzerriko lizentzia duten kirolariek kontrolak igarotzeko duten obligazioaz dihardu: "Kontrolak egin ahal zaizkie lizentzia espainiarrik ez duten kirolariei, baldin eta Lege honen aplikazio-eremuan egiten diren Estatuko edo nazioarteko lehiaketetan parte hartzen badute. Nazioarteko araudi eskumendunak araututako moduan tramitatuko dira kontrol horien ondorioz abia daitezkeen diziplina-espedienteak. Era berean, lehiaketatik kanpora kontrolak egin ahal izango dizkiete Espainian entrenatzen ari direnean, eskumena duen nazioarteko erakundeak edo federazioak eskatuta.

Edonola ere, dopinaren aurkako kontrolen emaitzak dagokion nazioarteko kirol-federaziora eta Dopinaren Aurkako Munduko Agentziara igorriko dira".

Lege-aurreproiektuak kendu egin du 7/2006 Lege Organikoaren aplikazio eremuan sartzen diren Estatuko edo nazioarteko lehiaketetan parte hartzen duten atzerriko lizentziadun kirolariei egiten dien erreferentzia, eta, horren ordez, "dagokion euskal federazioaren lizentzia ez duten kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, bertan bizi badira". Eta

Estatuko araua kopiatuz jarraitzen du artikulua: "Kontrol horietatik etor litezkeen diziplina-espeditateak dagokion nazioarteko araudiak ezarritako eran izapidetuko dira. Era berean, lehiaketatik kanpora kontrolak egin ahal izango dizkiete entrenatzen ari direnean, eskumena duen nazioarteko erakundeak edo federazioak eskatuta".

5.2. artikulua (2. paragrafoa): "Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordeak kirolari hauek ere derrigortu ahal izango ditu dopin-kontrolak egitera: lizentzia izan baina ezarritako epean berritu ez dutenak, baldin eta arrazoiz susmatzen bada kirolari horiek ez dutela kirola utzi eta lehiaketatik kanpoko kontrolak saihesteko asmoz ari direla, harik eta lizentzia berritu arte".

AWORIT 1.9 YR

Nazioarteko lizentzia duten kirolariei buruz diharduen Estatuko Legeko xedapena ia aldaketarik egin gabe kopiatzen du aurreproiektuak, eremu subjektiboa soilik aldatzen baitu, eta, ondorioz, aurreproiektuko xedapen zehatz horrek ez du behar besteko koherentziarik. Hau da, xedapenaren lehen zatia irakurrita, ezin da ondorioztatu atzerriko lizentziadun kirolariez ari denik; izan ere, "dagokion euskal federazioaren lizentzia ez duten kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, bertan bizi badira" esaldiak ez ditu soilik atzerriko lizentziadun kirolariak barne hartzen, haiez gain, Espainiako lizentziadunak edo lizentziarik gabekoak ere sartzen baitira, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan egindako kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi badira.

Horren ondoren esten du kontrolak egin ahal zaizkiela lehiaketaz kanpo, nazioarteko federazio edo organismo eskumendunak hala eskatzen badu. Zaila da pentsatzea nolatan euskal lizentziarik gabeko pertsona bat, aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegoan bizi bada ere, dopinaren aurkako kontrol bat egitera behar daitekeen, nazioarteko federazio edo organismo batek hala eskatuta.

Xedapen horrek beste zalantza bat sortzen du, zaila baita ulertzen nola egin dakioken kontrol bat Euskal Autonomia Erkidegoan aldi baterako bizi den edozein kirolariri (lizentziarik ez dutenak barne) eta, kontrol horren ondorioz, hari zehapen bat ezarri, baldin eta xedapenak "diziplina-espediente" soilik aipatzen badu, kontuan izan behar baita badirela kirol-federazioekin edo kirol-erakundeekin lotura juridiko berezirik ez duten subjektuak, hau da, diziplina-araubide baten mende ez daudenak.

Hori kontuan hartuta, 13.10. artikulua berrikustea proposatzen dugu.

- Beste gai-alor bati helduz, esan behar da aurreproiektuak gainjarri egiten dituela Estatuko legearen eremu subjektiboa eta materiala, artikuluko horrek —egun duen idazketan bederen— arautzen baitu kontrolak egin beharko dituztela federazio-lizentzia espainiarrak dituzten kirolariak ("euskal federazioaren lizentzia ez dutenak") Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean egiten diren kirol-lehiaketetan parte hartzen dutenean (Estatuko lehiaketa ofizialak izan daitezke). Xedapen horrek urratu egiten du aurreproiektuaren aplikazio-eremua eta, zehazki, 1.4. artikulua, bertan ezartzen baita Legearen aplikazio-eremutik kanpo izango direla Estatuko kirol-lehiaketa ofizialak, nazioarteko kirol-federazioek antolatutako nazioarteko kirol-lehiaketak eta erakunde olinpiko eta paraolimpikoek antolatutakoak.

Laburbilduz, Lege Organikoaren 5.6. artikuluaaren edukia kopiatu du aurreproiektuko 13. artikuluko 10. zenbakiak, eta pentsatu du pareko xedapenak direla aurreproiektuko "dagokion euskal federazioaren lizentzia ez duten kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, bertan bizi badira" xedapena eta Estatuko legeko "lizentzia espainiarrik ez duten kirolariei, baldin eta Lege honen aplikazio-eremuan egiten diren Estatuko edo nazioarteko lehiaketetan parte hartzen badute" xedapena. Agerikoa da bi xedapen horiek ez direla parekoak, 5.6. artikuluaaren bigarren zatia —nazioarteko araudia eta eskumendun diren nazioarteko federazioak eta organizazioak aipatzen dituen— ez baitator bat haren aurretik datorren esaldiarekin.

Oro har, esan dezakegu ezin dela lege-xedapen bat kopiatu aztertu gabe arau kopiatzailearen eremu subjektibo eta objektibo ezberdinak zer-nolako eragina izango duen xedapen horien barne-logikan eta koherentzian. Hori dela-eta, 13. artikulua osorik berrikustea aholkatzen dugu.

II.- Dopin-kontrolak egiteko modua arautzen du 14. artikulua: baimendutako pertsonak; kontrol horiek egiteko gaikuntza emateko eskumena; ordutegi-mugak; eskubide eta betebeharrei buruzko informazioa, eta kontrol horiek igarotzeari uko egitearen ondorioak.

Artikulu horren testua 7/2006 Lege Organikoko 6. artikulua testuaren oso antzekoa da. Adierazi behar dugu Lege Organiko horren aldaketa bat izapidetzen ari dela, eta, aldaketa horren bidez egin nahi diren gauzetako bat dela 6. artikuluko 2. puntuak duen zehaztasun falta zuzentzea, aintzat hartuta, betiere, 2. puntu horrek izaera organikoa duela; beraz, aurreproiektuko 14. artikulua eredu lege organikoko 6. artikulua izan denez, azken xedapen horren aldaketa aintzat hartu beharko litzateke 14. artikulua idazterakoan. Ildo horretatik, gogoratu behar da aldatu egingo dela lege organikoa eta zehaztu egingo dela gaueko zer orduetan ezingo diren egin lehiaketa-garaitik kanpoko kontrolak. Zehazki, ordutegi hori gaueko hamaiketarik goizeko seiak artekoa izango da.

Lege organikoko 6. artikulua testuari jarraitzen diote 14. artikulua gainerako atalek. Aldaketa nabarmenena 9. atalean egiten da, eta haren edukia da bidezko arrazoirik gabeko kontrola igarotzeari uko egitearen ondorioak arautzea eta dopinaren aurkako organizazioak egindako informazio-eskaerei erantzuteari uko egiteak izango dituen ondorioak arautzea —Estatuko arauak ez du azken eduki hori arautzen—. Halaber, Estatuko arauarekiko beste diferentzia bat da lege-aurreproiektuak ezartzen duela laginak jasotzeko taldeko arduradunak egiaztatu egin behar duela kirolariak ezin duela kontrola egitera joan.

⁶ 2011ko martxoaren 25ean iragarri zen Presidentziako ministroaren txosten bat jaso zuela Ministro Kontseiluak, 7/2006 Lege Organikoa aldatzeko aurreproiektuari buruzkoa. 7/2006 Lege Organikoaren aldaketak zehazten dira txosten horretan.

14.9. artikulua: “Dopin arloko diziiplina- edo zehapen-prozeduren ondorioetarako, bidezko arrazoirik gabe dopin-kontrolak egiteari uko egitea edo dopinaren aurkako erakundeek egindako informazio-eskaerei ez erantzutea, behar bezala dokumentatu ondoren, behar adinako frogak izango da kirolariaren jokabidea zehatzeko. Kontrola ez egiteko bidezko arrazoitzat hartuko da kontrola egitera bertaratu ezin izatea egiaztatutako lesio baten ondorioz, edo kontrola egiteak kirolariaren osasuna arrisku larrian jartzen duela egiaztatzen denean. Ezintasun hori laginak hartzeko taldeko arduradunak egiaztatu behar du”.

Erabilera terapeutikorako baimenak arautzen ditu 15. artikulua. Artikulu horren testua 7/2006 Lege Organikoko 7. artikulua oso antzekoa da. Aurreproiektuko 15. artikulua arautzen du erabilera terapeutikorako baimenen erregistro-liburu bat bete behar dutela ondorengo hauek:

Kirol-klubek eta erregelamendu bidez zehazten diren gainerako kirol-erakundeek (15.1. artikulua).

Euskadiko kirol-federazioek eta lurraldetarrek, baldin eta kirolariak, kirol-selekzioetan, haien ardurapean badaude (15.6. artikulua).

Banakako kirolean, kirolariek (15.7. artikulua). Aintzat hartuta xedapen horrek kopia egiten duela Lege Organikoko 7.3. artikulua eta arauen eremu subjektiboa ezberdina dela, hura aurreproiektura ekartzean, ikusita azken honen eremu subjektiboa lege organikoarena baino askoz zabalagoa dela, erabilera terapeutikorako baimenak erregistratzeko obligazioa ezartzen zaie federatuak ez dauden kirolari guztiei, hau da, jarduera fisikoren bat egin eta aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona guztiei.

Hala ere, 8. xedapen gehigarriak arautzen duenaren harian, erabilera terapeutikorako baimenak

eskatzeko eta glukokortikosteroideak eta gainerako substantziak erabiltzen dituztela adierazteko obligaziorik ez dute Agindu bidez zehazten diren eskakizun fisiko handiko kirol-probetan parte hartzen duten lizentziarik gabeko kirolariek. Ildo horretatik, zortzigarren xedapen gehigarria eta 15. artikulua irakurtzen badira aurreproiektuko 1. artikulua (arauaren eremu subjektiboa arautzen du) adierazitakoarekin lotuta, ondorioztatzen da obligazio horiek betetzetik salbuesten direla eskakizun fisiko handiko probetan parte hartzen duten lizentziarik gabeko kirolariak, baina ez lizentziarik gabeko gainerako kirolariak, aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatu edo lehiatzen direnak — aurreproiektuaren testuari jarraituz bederen—, azken horiek erabilera terapeutikorako baimenak eskatzeko eta haien erregistro-liburu bat eramateko obligazioa izango bailukete, eta ondorio hori, noski, harritzekoa da, gutxienez.

Finean, Lege Organiko baten xedapen bat aurreproiektura ekartzeak dakarren arazo baten aurren gaude berriro ere, ez baita kontuan hartu bi legeen eremu subjektiboetan dauden diferentziek nabardura esanguratsuak egin beharra dakarrela, haiek egin ezean xedapen batzuek ez baitute izango zentzurik EAEko legea bete behar duten subjektu guztientzat.

IV.- Estatuko 7/2006 Lege Organikoak arautzen ez duen berritasun bat dakar **16. artikulua**: aukera ematen zaie kirol-erakundeei kirol-bajaren egoera arautzeko beren erregelamenduetan. Igorpen horrek (eta aurreproiektuko beste artikulua batzuetan egiten diren igorpenek) dakarren arazoa da aurreproiektuak ez duela zehazten zein diren Legea aplikagarri izango zaien kirol-erakundeak. Legeko artikulua irakurrita, ez da argi geratzen zer kirol-erakunde izango diren haren mende, arauak ez baitu haien definizio argirik ematen. Estatuko 7/2006 Lege Organikoak zehaztasunez mugatzen du zer diren kirol-erakundeak Lege haren eraginetarako eta, berariaz, hau arautzen du zortzigarren xedapen gehigarrian:

“Kirol-erakundeen kontzeptuaren mugapena Lege honen aplikazioaren ondorioetarako.

Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legeko III. tituluan arautzen diren erakundeei zuzenean aplikatzekoa izango bada ere, Lege hau aplikatuko zaie kirol-lehiaketak antolatu eta Kirol Kontseilu Goreneko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatuta dauden gainerako erakundeei”.

Hala ere, aurreproiektuak ez du “kirol-erakundeak” terminoa mugatzen, eta artikuluetan zehar egiten diren erreferentziak askotarikoak direnez, zalantzak sortzen dira, ez baita erraza mugatzea zein izango den “kirol-erakundeak” terminoaren definizioa EAEko lege berriarentzat. Hona hemen erreferentzia horien zenbait adibide:

- 6. artikulua (kirol-erakundeen erantzukizunak): “Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-erakundeak”.
- 15. artikulua (obligazio akzesorioak eta erabilera terapeutikorako baimenak): “klubak eta erregelamendu bidez zehaztuko diren gainerako kirol-erakundeak”.
- 16. artikulua (Kirol-bajak): “lege hau aplikagarri zaien kirol-erakundeak”
- 17.4. artikulua (osasun-kontrolak): “kirol-federazioak eta gainerako kirol-erakundeak”.
- 18.5. artikulua (Kontrolen plangintza eta kudeaketa): “lege honek adierazten dituen erakundeek egin behar dituzte”.
- 19.1. artikulua (Kontrolak egiteko eskumena): “lege honek adierazten dituen erakundeak”.

21. artikulua (zehapen-araubidearen aplikazio-eremua): “egoitza Euskal Autonomia

Erkidegoan duten kirol-erakundeak, baldin eta lege honen araupeko kirol-jarduerak egiten badituzte edo borondatez jartzen badira haren mendeana”.

V.- Dopin-kontrolei eta osasun-kontrolei buruzkoak dira hurrengo artikulua. Dopatzea eragin dezakeen substantzia debekaturen baten presentzia edo arauzkoa ez den metodo baten erabilera hautemateko helburua duten kontrolak dira dopin-kontrolak, estandarizatutako prozeduren bidez hautematen direnak xede horrekin ateratako lagin batetik, bai eta dopinaren aurkako organo eskumendunek egiten dituzten jarduerak ere, dopinaren aurkako araudiaren urraketa egiaztatzeko (17.1. artikulua). Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak gaitutako erakundeek eta pertsonak egiten dituzten kontrolak, hau da, analisiak (17.1. artikulua).

Halaber, euskal federazio lurraldetarren eta gainerako kirol-erakundeen eskumena izango da kontrol horiek egiteko behar diren jarduerak egitea (19.1. artikulua), bai eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarena ere (18. artikulua).

Halaber, osasun-kontrolak dira Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek, kirol-jarduerak beren kirolarien osasunari eragin diezazkiokeen kontrako ondorioak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko, egokitzen hartzen dituzten jarduerak, bai eta dopinaren eta osasunaren alorreko legetik eratorritako betebeharrak kirolariek bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere (17.4. artikulua).

Aurreproiektuko 18. artikulua “kontrolen plangintza eta kudeaketa” du izenburu, eta bertan arautzen da Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak erabakiko dituela dopin-kontrolak, osasun-kontrolak eta osasuna babesteko gainerako jarduerak, kirol-erakundeek egin beharrekoak. Gehiago zehaztu behar da artikulua izenburua, ez baita edozein plangintzari edo kudeaketari buruz ari. Zehazki, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren jardunaz ari da, kontrolak planifikatu eta kudeatzeko.

Lege organikoaren 9.1. artikulua kopia da 18.1. artikulua, baina bien arteko diferentzia da 9. artikulua kirol-federazioak soilik aipatzen dituela, haiek baitira, lege organikoaren esanetan, dopin-kontrolak egiteko eskumendunak. Halaber, lege organikoaren 9. artikulua horrek harremana du 11. artikuluaekin (dopin-kontrolekin zerikusia duten jarduerak egiteko eskumena). Lege organikoko 9.1. artikulua kopiatzen du lege-aurreproiektuak, baina zabaldu egiten du haren aplikazio-eremua “lege honek adierazitako erakunde” guztietara (eta esan dugu lehen ere legeak ez duela haiek zein diren zehazten), eta, ondoren, lege organikoko 11. artikulua kopiatzen du aurreproiektuko 19. artikulua; hala, hasiera batean, 18.1. eta 19.1. artikuluek arautzen duena betez, federazioek kontrolak egin ditzakete, bai eta beste kirol-erakunde batzuek ere, baina Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak soilik esku hartuko luke baldin eta federazioek ez badituzten behar adinako bitartekoak edo behar adinako egiturarik kontrol horiek egiteko (19.2. artikulua).

Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrendaren publikitatea egiten duen artikulua batek ixten du kapituluak. Ildo horretatik, arautzen da zuzendariak aginduko duela EHAA argitaratzeko kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda, nazioarteko erakunde onartutako xedapenen esparruan. Edonola ere, kontuan izan behar da 7/2006 lege organikoaren 12. artikuluko lehen paragrafoak, Kirolen Kontseilu Gorenak argitaratutako substantzia debekatuei buruzkoak, izaera organikoa duela, eta artikulua horrek berariaz egiten duela UNESCO erakundearen Dopinaren Aurkako Konbentzioaren aipamena:

“Espainiak hartutako nazioarteko konpromiso eta betebeharren baitan, eta, bereziki, UNESCOko Dopinaren Aurkako Konbentzioaren esparruan, Kirolaren Kontseilu Gorenak «Estatuko Buletin ofizialean» argitaratuko du, haren presidentziaren ebazpen bidez, kirolean debekatuta izango diren substantzien eta metodoen zerrenda. Aldian-aldean argitaratuko da zerrenda, bai eta aldaketak egiten diren guztietan ere”.

IV. KAPITULUA. DOPINARI BURUZKO DIZIPLINAREN ETA ADMINISTRAZIO-ZEHAPENAREN

ARAUBIDEA (21-24. artikulua)

Arautzen den gai-alorrari aplikagarri zaion zehapen-araubidea arautzen dute IV. kapituluko 20 artikuluek. Zehapen-araubide hori osatzen da bosgarren xedapen gehigarriarekin, debekatu egiten baitu, edozein modalitatetan, kirolean debekatuta dauden substantziak gordetzea, merkaturatzea edo banatzea kirol-zentroetan, baieta produktu horiek kontsumitzera bultzatzea kirol-zentroetan.

Jarraian, araubide hori aztertuko dugu, eta, horretarako, arau hauek hartuko ditugu kontuan: Espainiako Konstituzioko 25. artikulua; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearena; eta otsailaren 20ko 2/1998 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehapen Ahalmenari buruzkoa.

Titulu hori jasotzen du legeak gai-alor horretan dagoen lege-hutsune bat betetzeko; izan ere, Kirolaren Euskal Legeak ez du tipologia berezi hori arautu, eta debekatu egiten zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra zehapenak ezartzea orain arautzen diren jokabideak egiteagatik. Jakina, horrek eragotzi egin du babestutako ondasun juridikoa behar bezala babestea. Ildo horretatik, adierazi behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak balio gabetu egin zituela Kultura, Gazteria eta Kiroleko sailburuak jarrita bi zehapen (488/209 eta 586/09 zenbakiko sententziak). Sententzia horiek argi adierazten zuten Kirolaren Euskal Legeak ez zuela eskumen-titulurik arautzen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra zehapen-ahalmena erabil dezan kirol-alorrean.

Lehenik eta behin, nabarmendu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan kirolaren alorrean duen eskumen eskusiboak ahalmena ematen diola zehapen-xedapenak emateko.

Ahalmen hori erabiltzeko mugak Espainiako Konstituzioko 25. artikulua zehapenean adierazten dira, tipikotasunaren eta lege-erreserbaren printzipioak arautzen baititu.

Zehapen-ahalmena egikartzeko legezkotasun-printzipioa bete behar du Administrazioak —Konstituzio Auzitegiaren 219/89, 61/90, 83/90 eta 93/93 sententziak, besteak beste—, eta jardun hori bi alderdi hauek zertzen da: alderdi formalean, lege-erreserbaren eskakizunari dagokiona, lege formal batek arautu behar baitu —gaur egun, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 127.1. artikuluan arautzen du printzipio hori; eta alderdi materialean, legezko tipifikatzearen agindua esaten zaiona, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 129. artikulua arabera.

Tipifikatzeko agindua elkarren ondoko bi mailatan garatzen da: lehen mailan, zehaztu egin behar da zer jokabide izango diren arau-hauste administratiboak —Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 129.1. artikulua—, eta, ondoren, bigarren mailan, dagokion zehapena lotu behar zaio arau-hauste bakoitzari —Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 129.2. artikulua—. Eragiketa horien baitan, ez da bazterrera uzten —Auzitegi Gorenen 83/84, 87/85 eta 2/87 sententziak, besteak beste— erregelamenduek “laguntza” emateko aukera —Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 129.3. artikulua—, kontzeptuen ulermena argitu eta zehazteko eta segurtasun gabezia juridikoaren arriskua desagerrarazteko, baina, halakorik egitekotan, ez dira sortu behar araupen independenteak, argi eta garbi legearen mende ez daudenak.

Ildo horri berari jarraituz eta Zehapen Ahalmenari buruzko Legeko 4. artikulua arautzen duenaren harian, zehapen-araubideak eratzen dituzten legeek beharrezkoa dute, segurtasun juridikoaren printzipio oinarritzak beteko badute, arau-haustea ahalik eta modu zehatzenean tipifikatzea; hala, saiatu behar dute ez tipifikatzen zigor-arloko delituen edo arau-hausteen izatezko suposamendu berberak edo beste administrazio-arau zehatzaile batzuek jada tipifikatuta dituzten arau-haustea.

Zehapen-ahalmenaren oinarritzko printzipio horiek argi izanda, aurreproiektuak alderdi horretan ageri dituen edukiak aztertuko ditugu.

I.- Lehenik eta behin, adierazi behar da proposatutako arauenak berariaz aurreikusten ez dituen alderdiak, eta, berariaz, administrazio-prozedurari dagozkionak, arautzeko, betetzeko izango dela Zehapen-ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea, hau arautzen baitu haren 1. artikuluan "Euskal Autonomia Erkidegoan zigortzeko ahalmena duten ente guztiek ezarri beharko dute lege hau, erakunde komunek araugintzako eskumena duten arloetan".

Teknika horrek, gure ustez, 2/1998 Legeak ezarri nahi izan zuen izaera bateratzaile eta orokorra bultzatzen du; izan ere, hala dio lege horrek bere zio-azalpenean: "ikusuntu praktiko batetik begiratuta, arloz arlo indarrean dauden legezko araudiak ordenamendutik kanpora utzi nahi baldin baditugu lege honetan araututakoaren kontra dauden kasuetan, hori seguru lortzeko bide bakarra lege bat egitea da. Halakoetan, gainera, nahitaez utzi beharko ditugu kanpoan, baterabidea iritsi eta, ondorioz, segurtasun juridikoa bermatzea lortu nahi baldin badugu".

Ildo horretan sakontzeko, nabarmendu behar da 2/1998 Legeak arau orokor substantibo baliozko batzuk ezartzen dituela sektoreko zehapen-araubideak aplikatzeko, eta prozedura bat finkatzen duela, edozein gai-alorretan zehapen-ahalmena erabiltzeko baliagarriak diren arau orokorrak finkatzen dituen.

Arau-hausteen eta zehapenen araubidea arautzen du aurreproiektuko IV. kapituluak, eta, horretarako, 7/2006 Lege Organikoko egiturari jarraitzen dio, salbuespen batzuekin. Horri dagokionez, komeni da gogoratzea kapitulu horrek lege arruntaren izaera duela (7/2006 Lege Organikoko azken xedapenetako bosgarrena), Espainiako Konstituzioko 149.1.16. artikuluko oinarritzko baldintzen eskakizunak betetzen ez dituen neurrian, autonomia-erkidegoko legegileak aukera baitu egokiena deritzon arau-tresna emateko araututako gai-alorraren eraginkortasuna bermatzeko.

Komeni da nabarmentzea diziiplina-erregimenaren eta zehapen-araubide administratiboaren arteko bereizketa egiten duela aurreproiektuak. Ildo horretatik, memorian adierazten den moduan, Kirolaren Euskal Legeak ezarri zuen biko sistema bereganatzea erabaki du aurreproiektuak. Hala ere, arau-hausteen eta zehapenen zerrenda berdina da bietan, eta 7/2006 Lege Organikoaren edukiak kopiatzen dira, baina diferentzia nabarmenena da Lege Organikoak diziplinazko zehapen-araubide bakar bat eratzen duela lizentzia edo gaikuntza parekidea duten pertsonentzat, eta, horren aldean, jakina da aurreproiektuaren aplikazio eremua 7/2006 Lege Organikoarena baino zabalagoa dela eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak bere gain hartzen duen ahalmena zabaltzen dela, izaera osagarritz, diziiplina-ahalmena duten kirol-erakundeek ahalmen hori egikaritzen ez duten kasuetara eta, horrez gain, modu autonomoan egikaritu dezakeela ahalmen hori, haien lehentasunezko interbentzioaren zain egon gabe. Gainera, beste subjektu batzuk barne hartzen ditu, zehapen-ahalmenaren horren menean daudenetik landa.

Finean, pentsatzen dugu aurreproiektuak arau-hausteen eta zehapenen araubide bakarra arautzen duela, eta subjektu hauei aplika dakiekeela:

- a) Lotura bereziko harremanak dituzten pertsonen, EAEko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeko 46. artikuluan arautzen diren lizentziak dituztelako (federazio-lizentziak, unibertsitatekoak edo eskolakoak).
- b) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izanik, lege honen peko kirol-jarduerak gauzatzen dituzten kirol-erakundeekin edo lege honen pean beren borondatez jartzen diren gainerako kirol-erakundeekin lotura bereziko harremanak dituzten pertsonen.

Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan arau-hauste gisa tipifikatutako ekintza edo ez-egiteren bat egiten duen pertsonen, aintzat hartu gabe haiek autonomia-erkidegoko, Estatuko edo

nazioarteko lehiaketetan ala lehiaketetatik kanpo egiten diren. Ez da beharrezkoa izango lotura bereziko harremanik izatea zehapen-araubide administratiboa aplikatzeko.

Horrenbestez, aurreproiektuak bereganatzen duen sistemaren dualtasun hori, finean, zehapen-ahalmena duen subjektuak ezartzen du, eta, ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra bada zehapena jartzen duena, zehapen hori "izaera administratiboko zehapen-ahaltenaren egikaritzea" izango da jardun hori (37. artikulua); atzitik, zehapena Euskal Autonomia Erkidegoko federazioen batek edo, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kirol-ekitaldien partaidetzaren harian, lotura bereziduneko erakunderen batek jartzen badu, diziplina-ahalmena egikaritzea da (38. artikulua). Lehen aplikatuko zaie Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan arau-hausteren bat egiten duten pertsonen, edozein izaerako lehiaketetan (autonomia-erkidegokoak, Estatukoak edo nazioartekoak) edo lehiaketetatik at, eta, horretarako, ez dute zertan kirol-federazioen batekiko edo bestelako kirol-erakunderen batekiko lotura-harreman berezirik izan (22. artikulua). Bigarrena (diziplina-ahalmena), berriz, federazioko, unibertsitateko edo eskolako lizentzia duten pertsonen aplikatuko zaie, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzotasuna badute eta kirol-erakundeekiko lotura-harreman bereziak badituzte (23. artikulua).

7/2006 Lege Organikoko 11.1. artikulua: "Oro har, eta Lege honetako 9.2. artikulua arautzen duena bete beharrezkoa izanda, Espainiako kirol-federazioei dagokie Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordeak erabakitzen dituen kontrolak egiteko behar diren jarduerak egitea.

Bitartekoen gabeziak edo federazioaren egiturak berak hala justifikatzen dutenean, federazioek aukera izango dute lankidetzaz hitzarmen baten bidez, egiteko hori Dopinaren Aurrerako Estatuko Agentziak osotasunean bete dezala eskatzeko".

II.- Aurreproiektuko 22. artikulua zehapen-araubide administratiboaren aplikazioa arautzen du, eta "non bis in idem" printzipioa betearazteko klausula batez osatzen da, 33. artikulurako igorpena eginez. Hala ere, klausula hori zehapen-araubide administratiboari buruzko artikuluan sartu den arren, diziplina-araubidearen baitan ere sartuko litzateke, bai zigor-arloan zehatutako gertakarietarako, bai zehapen-ahalten administratiboaren eta diziplina-ahaltenaren beraren baitan zehatutako gertakarietarako.

Zehapen-ahalten administratiboaren eta diziplina-ahaltenaren aplikazio-eremuan elkarguneak daudenez eta arau-hausteen eta zehapenen zerrenda bakarra denez, gerta liteke bi bide horiek ekintza edo ez-egite berak zehatzea; hala, subjektuen, gertakarien eta oinarrien identitate bat eman daiteke, eta, ondorioz, gertakari berak zeha daitezke zehapen-tipo bera aplikatuz eta zehapen bera ezarrit. Hori gertatuz gero, *non bis in idem* printzipioa urratuko litzateke.

Egia da beste lege-testu batzuek zehapeneko eta diziplinako ahalmenen sistema dualak arautzen dituztela, baina, kasu horietan, araubide horiek erabat independenteak izaten dira, eta, asko jota, osagarriak. Adibide bat ematearren, aurreproiektuak dakarren memoriak aipatzen dituen legeetako baten araupena ekarriko dugu hona, Kirol-alorreko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako uztailaren 11ko 19/2007 Legearena, hain justu. Lege horrek arau-hausteen eta zehapenen araubide berezituak arautzen ditu zehapen-alor administratiborako eta diziplina-alorrerako, eta hau arautzen du zehapen-prozedura bat baino gehiago suertatzen badira gertakari bereberak aplikatzeko:

Zigor-arloko prozeduren, prozedura administratiboen eta diziplina-prozeduren konkurrentzia (38. artikulua).

1. Zigor-arloko prozedura bat abiaraztea ez da eragozpena izango, beharrezkoa

bada, gertakari berberengatik administrazio- eta diziiplina-prozedura bat abiarazteko, baina ez dira azken horiek ebatziko harik eta zigor-arloko auzian sententzia edo artxibatze-auto irmoa ematen den arte.

Edonola ere, zigor-arloko prozesuari amaiera ematen dion ebazpenak egiten duen frogatutako gertakarien deklarazioa loteslea izango da administrazio- eta diziplinako prozeduretan ematen diren ebazpenei, nahiz eta bide batean zein bestean kalifikazio juridikoak ezberdinak izan daitezkeen.

Gertakari berberetik zigor-arloko zehapenak, administrazio- alorrekoak eta diziplinakoak ezartzeko aukera bakarra da oinarri juridikoak berberak ez izatea.

2. Pertsona fisiko edo juridiko bati, gertakari berberetik, aldi berean aplikatzekoak bazaizkio Lege honetako bigarren eta hirugarren tituluetan arautzen diren administrazio alorreko eta diziplinazko zehapenak, bigarren tituluan arautzen den zehapen-prozedura administratiboa tramitatuko da lehentasunez.

Administrazio-arloko erantzukizuna eta diziplinazkoa aldi berean eman daitezkeen gertakari arau-urratzaileak gertatzen direnean, prozedura horietako bakoitzaren instrukzioa egiteko eskumena duen organoak derrigorrezkoa izango du prozedura abiaraztea eta administrazio- organo edo, kasuan kasu, federazio-organoko elkarrekikoari jakinaraztea espediente ireki dela.

3. Federazio-organoko batek jasotzen badu zehapen-espediente administratibo bat abiarazi denaren jakinarazpena, eten egingo du prozeduraren tramitazioa, baldin eta espediente horrek diziiplina-espediente bat abiarazteko arrazoi izan diren subjektu eta gertakari berberak baditu xede; hala, hori jakinaraziko dio zehapen-prozedura administratiboa tramitatzeko ari den administrazio-organuari. Subjektuak, gertakariak edo oinarri juridikoak berberak ez badira, prozedura tramitatzeko jarrai dezake.

4. Zehapen-espediente administratiboa amaitzen denean, hura ebazteko eskumena duen organoak ebazpen-erabakiaren berri emango dio prozeduraren etendura jakinarazi zuen federazioko diziiplina-organuari. Azken horrek, amaiera emango dio etendura-egoerari, eta erabaki hauetakoren bat hartuko du:

a) Diziiplina-prozedurarekin jarraitzea, baldin eta zehapena ezartzeko oinarri juridikoak berberak ez badira, edo, oinarriak berberak izanda, administrazio-zehapena arinagoa bada diziiplina-prozeduraren ondorioz ezar daitekeena baino.

b) Jardunbideak artxibatzea, baldin eta oinarri juridikoak berberak badira eta diziiplina-prozeduraren ondorioz ezar daitekeenaren berdina edo gogorragoa bada administrazio-zehapena.

5. Diziiplina-organoko erabakitzen badu zehapen-prozedurari jarraituko diola oinarri juridikoak berberak izan baina ezar daitezkeen zehapena administrazio-alorrean ezarritakoa baino gogorragoa izan daitekeelako, diziiplina-espedientearen ebazpenak arindu egingo du zehapen aplikagarria aurretiazko administrazio-zehapenaren aplikazioaren ondorioz dagokion zenbatekoan edo izaeran, eta berariaz jasoko du prozeduraren ebazpenean zenbatekoa den murrizpenaren zenbatekoa.

6. Ebazpen judizial batek osorik edo zati batean baliogabetzen badu administrazio-zehapena, zehapen hori eman duen organoak ebazpen judizial horren berri emango dio bere garaian prozedura abiarazi zuela adierazi zion federazioko diziiplina-organuari, jardunbideak artxibatzeari ekin diezaion azken horrek. Horren salbuespena izango da baliogabetutako administrazio-zehapenaren oinarri juridikoak eta balizko diziiplina-zehapenarenak berberak ez izatearen kasua. Hori gertatuko balitz, artikuluko 4. puntuko a) letran arautzen den moduan jardun behar da.

7. Aurkagarriak izango dira federazio-organoek hartutako erabakiak artikuluko honen laugarren, bosgarren eta seigarren puntuetan adierazitakoak badira. Kirolaren urriaren 15eko 10/1990 Legeko XI. tituluan araututako moduan aurkatu beharko dira.

Kirolaren Euskal Legeak, adierazitako beste adibideetako bat izanik, bi ahalmen horien konkurrentzia arautzen du, eta, aurreproiektuko 33.4. artikuluko adierazten duenaren antzera, bi prozedurak bateragarriak izan daitezkeela, baldintza hauek betetzen badira:

"1. Baldin eta egitate berbera dela-eta, batetik, lege honetako XI. tituluan araututako administrazio-erantzukizunak eta, bestetik, diziplina-erantzukizunak eskatu ahal badira, kirol arloko diziplina-organoek, ofizioz edo alderdi interesdunaren eskariz, horren berri eman beharko diote administrazio-organo eskudunari, eta horrez gainera diziplina-jardunbidea tramitatu ahal izango da.

2. Kirol-alorreko diziplina-organoek, administrazio-erantzukizuna baino ez dakarten egitateen berri izanez gero, jakinarazi egingo dizkiete aurrekariak administrazio-organo eskudunei".

Hala ere, diferentzia nabarmen bat ikusten da aztertzen ari garen ereduarekiko. Kirolaren Euskal Legeak arautzen dituen arau-hausteen eta zehapenen zerrendak, diziplina-organoek eta zehapen-organo administratiboek ezartzekoak, oso diferenteak dira, eta, ondorioz, errespetatu egiten da *non bis in idem* printzipioa.

Horrenbestez, izapidetzen ari den aurreproiektu honek berariaz arautu behar du *non bis in idem* printzipioa errespetatu beharko dutela administrazio-zehapenek eta diziplina-alorreko zehapenek.

III.- Oharpen hauek egin behar ditugu 21. eta 22. artikuluen testuari buruz:

Ez dago argi aurreproiektuak baliatzen duen "Euskal Autonomia Erkidegoan helbidea dutenak" esaldia pertsonentzat ala kirol-erakundeentzat ulertu behar den. Beraz, baldintza horren eduki subjektiboa zehaztu behar da, eta, kirolariez ari bada, helbidea izatea zer den argitu behar da.

Aurreproiektuko 21. artikuluko paragrafo horrek berak "lege honi lotutako kirol-jarduerak egiten dituztenak" aipatzen ditu. Esan dugun moduan, aurreproiektuak ez du "kirol-jarduera" terminoaren definizio konkreturik ematen.

IV.- Kirolariaren eta "haren inguruaren" erantzukizuna arautzen du aurreproiektuko 23. artikuluko. Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak erantzukizun objektibo bat (edo kuasi-objektiboa) arautu zuen eta, gerora, 7/2006 Lege Organikoak irizpide hori bera jarraitu du; hala, aurreproiektuak ere bide hori jarraitzen dio, eta, ondorioz, kirolariak izango dira erantzule, baldin eta dopina eragiten duen substantzia bat aurkitzen bada haien gorputzean. Aplikatzekoa den zehapenaren nolakotasuna erabakitzeko, kirolariak arau-hauste hori egitean izan duen erantzukizun-mailari begiratuko zaio. Horiek horrela, 23. artikuluko osagarria da 29. artikulua, erantzukizuna mailakatzen badu ezarri beharreko zehapena ebaluatzerako orduan.

Aurreproiektuko 23. artikuluko 5. paragrafoa hizpide hartuz, adierazi behar dugu "inguruko pertsonak" terminoaren esanahia zehaztea komeni dela. Ildo horretatik, Kiroleko Dopinaren Aurkako Munduko Konbentzioak "kirolariei laguntza emateko pertsonak" terminoa erabiltzen du, eta esaten du hauek direla pertsona horiek: "kirol-lehiaketetan parte hartzen duten edo horietan parte hartzeko prestatzen ari diren kirolariekin lan egiten duten edo haiekin tratua duten entrenatzaileak, prestatzaileak, kirol-zuzendariak, agenteak, taldeko langileak, funtzionarioak, mediku-langileak edo para-medikuak".

Horrez gainera, komeni da zehaztea zer den "kirolariaren inguruko pertsona" izatea, 23.5. artikuluko esaten baitu pertsona horiek erantzukizuna izango dutela, baldin eta urratu egiten

badute organo eskumendunei kirolariak izandako gaixotasunei eta tratamendu terapeutikoei buruzko informazioa emateko betebeharra; hala ere, zehapen horiek zehazteko orduan, obligazio hori betetzen ez bada, zehapenak ezar dakieke, soilik, teknikariei, epaileei, arbitratze-langileei, kirol-lizentziadun gainerako pertsonaei, zuzendaritza-langileei, kirol-federazioetako agintari edo langileei, liga profesionaletako agintari edo langileei, izaera ofizialeko lehiaketak antolatzen dituzten erakunde, klub eta taldeetako agintari eta langileei, eta kirol-klub eta -taldeetako osasun-langileei (27. artikulua). Horrenbestez, ondorioztatu behar dugu adierazpenezko zerrenda horrek osatzen duela "inguruko pertsonak" kontzeptuaren edukia; izan ere, legearen arabera, horiek dute adierazitako obligazio hori, eta, hain justu, obligazio hori ez betetzeak eragiten du zehapenaren ezarpena. Hala ere, hori horrela bada, lege-testuak berak adierazi beharko luke berariaz.

V.- Dopinaren gai-alorreko arau-hauste gisa tipifikatuta dauden ekintzak eta ez-egiteak zerrendatzen ditu 24. artikulua, eta haiek larrien eta oso larrien artean bereizten ditu. Arau-hausteen zerrenda horrek osatu egiten du, izaera orokorrean, Kirolaren Euskal Legeak arautzen duen zehapen-araubidea, eta, ondorioz, haren jokabide-tipoak eta zehapenak indarrean eta aldaketarik gabe diraute, 14/1998 Legeko 109.ñ) eta 127.h) artikuluen kasuan izan ezik, indargabetu egiten baititu aurreproiektuko lehen xedapen indargabetzaileak.

9. artikulua: 14/1998 Legeko 109.h) artikulua: "Arau-hauste oso larriak izango dira, kasu guztietan, honako hauek: "(...) ñ) Substantzia debekatuen sustapena, haiek hartzera bultzatzea eta kontsumitzea edo debekatutako metodoak erabiltzea eta haiek behar bezala kontrolatzea eragozten duen ekintza eta ez-egite guztiak." eta 14/1998 Legeko 127.h) artikulua: "Oso arau-hauste larriak izango dira: "(...) h) Debekatutako substantzien kontsumoa edo debekatutako metodoen erabilera sustatzea, bultzatzea edo laguntzea, eta substantzia eta metodo horiek behar bezala kontrolatzea galarazten duen edozein egintza edo ez-egite".

Aurreproiektuko arau-hausteen zerrenda 7/2006 Lege Organikoko zerrendaren ia berdina da. Edukizko diferentzia bakarra da arau-hauste baten barruan —tratamendu terapeutikoei buruzko informazioa emateko eta erabilera terapeutikorako baimenak eskuratzeko betebeharra urratzearen arau-haustearen baitan eta kirolean dopatzea eragin dezaketen produktu eta metodoei buruzko datuak deklaratzeko betebeharra urratzearen arau-haustearen baitan—, oso arau-hauste larria izango dela, haiekin batera, erregelamendu bidez zehazten diren klubek eta gainerako kirol-erakundeek bete behar duten erregistro-liburuan tratamenduak inskribatzeko baimena emateari uko egitea. Ildo horretatik, 24.1.e) artikulua eta 15.1. artikulua elkarrekin lotzen badira, adieraztekoa da azken artikulua horrek arautzen duen onespenei edo baimenari ("baldin eta inskripzio hori egitea baimentzen badute") zentzugabea dela, ez baita hori kirolariak borondatez hartu dezakeen erabakia. Derrigorrezkoa du kirolariak baimen hori ematea, oso arau-hauste larria egingo baitu hura eman ezean.

Beste ildo bati helduz, adierazi behar dugu ez dela zuzena 24.1 d) letrak egiten dion erreferentzia 23.3. artikuluari, erreferentzia 23.4. artikuluari egin behar bailioke. Zuzenketa hori bera egin behar da 24.2.a) artikuluan.

Artikulu horren amaieran, haxe esaten du azken atalak: "Aurreko paragrafoetan deskribatzen diren arau-hausteak animaliek kirol-lehiaketetan parte hartzen duten kasuetan ere aplikatuko dira, dagozkion egokitze logikoekin". Ildo horretatik, adierazi behar dugu egokitzapen horien gerorako arau-hausteak garapenak ezingo dutela arautu legeak tipifikatutakoez bestelako arau-hauste edo zehapenak, legezkotasun-printzipioa bete beharrekoa baita. Printzipio hori, gainera, segurtasun juridikoaren printzipioarekin lotu behar da, botere publiko guztiek bete beharrekoak baitituzte. Izaera zehatzak diren xedapenak bereziki bete beharrekoa dute azken printzipio hori; izan ere, txosten honetan bertan adierazi izan dugun moduan, ahalegin berezia egin behar da xedapen horiek zehaztu eta argitzeko.

VI.- Aurrez adierazitako arau-hausteak egiteagatiko zehapenak ezartzen dituzte behean

adieraziko ditugun artikuluek. Arau-haustea egin duen pertsonaren arabera sailkatzen dira:

25. artikulua: Kirolariei ezartzekoak diren zehapenak.

26. artikulua: Klubei eta kirol-taldeei ezartzekoak diren zehapenak.

27. artikulua: Teknikariei, epaileei, arbitroei eta kirol-lizentziadun gainerako pertsonen, zuzendaritzako langileei, zuzendariei edo kirol-federazioetako langileei, liga profesionaletako langileei, kirol-lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeei eta kirol-klubei edo -taldeei ezartzekoak diren isunak.

28. artikulua: Klubetako edo taldeetako medikuei eta gainerako osasun-langileei ezartzekoak diren zehapenak.

Estatuko 7/2006 Lege Organikoak ezartzen duen zehapenen zerrenda ekartzen dute artikuluko horiek. 7/2006 Lege Organikoak arautzen duen zehapen-araubideak bi zutabe hauek ditu, aurreproiektuaren araubidetik bereizten direnak: alde batetik, federazio-lizentzia duten kirolarientzat ezarritako zehazpen-araubidea da, eta, bestetik, diziiplina-araubidea da. Horrenbestez, aldaketarik egin gabe ekartzen badira EAEko legearen aurreproiektura lege organikoaren arau-hausteen eta zehapenen zerrenda, lege-hutsuneak eragiten dira bi legeek eremu subjektibo ezberdinak dituztelako.

Lizentziaren etenaz edo gabetzeaz dihardu, hasieran, 25.1. artikulua, eta, ondoren, soilik federazio-lizentziari buruzko dihardu. Aintzat hartzen badugu nola dagoen idatzita 21. artikulua, ikusten dugu diziiplina-araubidearen barruan sartzen direla "Euskal Autonomia Erkidegoko 14/1998 Legearen 46. artikuluan exijitzen diren lizentzien ondorioz —beraz, ez dira soilik federazio-lizentziadunak— lotura berezia duten pertsonak, bai eta, (...) gainerako kirol-erakundeekin lotura bereziko harremanak dituzten pertsonak", harritzekoa da 25. artikulua federazio-lizentziaren etenaz edo gabetzeaz hitz egitea soil-soilik. Halaber, kontuan izaten badugu artikuluko horrek arautzen dituen zehapenak aplikagarriak direla, era berean, zehapen-araubide administratiboaren aplikazio-eremuan sartzen diren subjektu zehagarriak, hau da, lotura-harreman berezirik ez duten subjektuei, ez da garbi zer zehapen ezar dakiekeen federazio-lizentziarik ez duten kirolariei. Horrenbestez, araua sustatzen duen zuzendaritzak argitu egin behar du federazio-lizentziarik gabeko kirolariei aplikatuko zaizkien ala ez 25. artikulua arautzen dituen zehapenak.

Kapitulu horretako 30. artikulua diruzko zehapenak arautzen ditu, eta haxe agintzen du, berariaz: "Pertsonari zehapen gisa ezartzen zaizkion isunak, kirolarien kasuan, diru-sarrerak izaten dituztenean baino ezingo dira ezarri, betiere diru-sarrera horiek kirol-jarduerarekin zerikusia badute". Horrenbestez, xedapen horri erreparatuta, ezin da jakin zer zehapen ezarriko zaien kirol-lizentziarik ez duten kirolariei, eta pentsatzekoa da pertsona horiek ez dutela diru-sarrerarik eskuratuko jarduera horretatik. Horiek horrela, badirudi, 22. artikulua (zehapen-araubide administrazioaren aplikazio-eremua) arautzen duenaren aurka, ez zaiela zehapenik ezarriko, ezingo baitzaie lizentziarik eten edo kendu, eta, 30. artikulua arautzen duenez, ezin zaie diruzko isunik ezarri.

Federazio-lizentziaren etena soilik arautzen dute, halaber, 25. artikuluko 2. eta 3. puntuek.

Aurreproiektuko 27. artikulua, izenburuan bertan eta —5. paragrafoan izan ezik— artikuluan zehar, izaera ofizialeko kirol-lehiaketak antolatzen dituzten erakundeez soilik hitz egiten du. Alabaina, 5. atalak agindu bat ezartzen die kirol-lehiaketak (ez dute zertan izan behar, itxura batean, ofizialak) antolatzen dituzten federazioei eta erakundeei: beren araudia egokitu behar dute, artikuluko honen xedapenak jaso ditzan. Kontuan izan behar da izaera ofizialekoak ez diren lehiaketak ere lege-aurreproiektuaren aplikazio-eremuan sartzen direla, eta, ondorioz, argitu egin behar da lehiaketa horiek antolatzen dituztenak 27. artikuluko eremu subjektiboan sartzen diren ala ez. Beste behin ikusten dugu, 7/2006 Lege Organikoko artikulua hitzez hitz kopiazeak doitze-arazoak dakartzala lege-aurreproiektuaren eremu subjektibo eta objektiboarekiko.

Antzerako zer bait gertatzen da 28. artikuluan, kirol-lizentziapeko edo pareko gaikuntza-titulupeko osasun-langileez (1., 2. eta 3. atalak) eta lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten kirol-federazioetako, liga profesionaleko eta erakundeetako zerbitzura dauden edo haietako kide diren osasun-langileez baitihardu. Ez dakigu, beraz, zer gertatzen den kirol-lizentziarik edo pareko gaitasun-titulurik ez duten osasun langileekin eta izaera ofizialik ez duten lehiaketak erakundeetako osasun-langileekin, aurreproiektuaren zehapen-araubideko eremu subjektuan sartzen baitira hasiera batean.

Hau arautzen du 27. artikuluko 5. atalak: "Kirol-federazioek eta kirol-lehiaketak antolatzen dituzten erakundeek egokitu egingo dute beren araudia lege honetako aurreikuspenak sartzeko; aurreikuspen horiek bateragarriak izango dira kasu bakoitzean dagokiokoen erantzukizun zibilarekin eta lege honetan xedatutakoaren ondorioz exijitu ahal diren erantzukizunengatik dagokiokoen kontu ematearekin". Atal horrek kopia egiten du 7/2006 Lege Organikoko 17.4. artikulua. Hala ere, Estatuko legean, artikulua hori 17. artikuluko arau-haustek federazio-lizentziarik edo haren pareko gaitze-titulurik izan gabe egiten dituzten pertsona fisiko eta juridikoei buruzko atalean dago, nahiz eta pertsona horiek lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten kirol-federazioentzat, liga profesionalentzat edo erakundeentzat zerbitzuak eman behar dituzte edo haien kontura jardun. Hau arautzen du 7/ Lege Organikoko 17.4. artikulua:

"4. Atal honetan arau-haustetzat tipifikatutako jokabideak federazio-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik izan gabe gauzatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoei, baina izaera ofizialeko kirol-lehiaketak antolatzen dituzten kirol-federazio eta liga profesionalentzat nahiz haien eskuordetzez lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeentzat zerbitzuak ematen dituztenean edo haien kontura jarduten dutenean, edo erakunde horien barruan integratutako pertsonen edo erakundeek egingo dute kirol-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik eskuratu, ez kirol-lizentziari dagozkion eskubideak baliatu kirol-karguak betetzeko desgaitze-zigorrek irauten duten bezalako aldi batez, edo kirol-lizentziak edo gaikuntza baliokideak kentzeko edo eteteko zigorrak irauten duten bezalako aldi batez.

Kontratuzko fede onaren urraketatzat hartuko dira jokabide horiek, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak, Langileen Estatutuaren Testu Bategina onartzekoak, 54.2.d) artikuluan arautzen dituen ondorioetarako.

Izaera ofizialeko kirol-lehiaketak antolatzen dituzten kirol-federazio, liga profesional eta erakunde espainiarrek egokitu egingo dute beren araudia lege honetako aurreikuspenak jasotzeko; aurreikuspen horiek bateragarriak izango dira kasu bakoitzean dagokiokoen erantzukizun zibilarekin eta Lege honetako 13. artikulua eta artikulua honen aurreko ataletan xedatutakoaren ondorioz eska daitezkeen erantzukizunengatik dagokiokoen kontu ematearekin.

Horrenbestez, atal horrek lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten federazio, liga eta erakundeen agintzen die beren araudia egokitzeko, baina egokitzen hori, berariaz, aurreko bi paragrafoetan jasotzen diren xedapenekiko egin behar dute, hau da, aintzat hartu behar dute kirol-lizentzia edo gaitze-titulu baliokide bat lortu ezinaren zehapena, desgaitzeak irauten duen bitartean hari datxekion eskubideak egikaritzeko ezinaren zehapena, eta jokabide horiek diziplinazko kaleratze baterako arrazoi izateko aukera. Dena den, obligazio hori aurreproiektura ekartzean, askatu egiten da lege organikoak goian adierazi den atalarekiko duen lotura eta atal independente moduan jasotzen da; beraz, ez da argi geratzen zer egokitzen zehatza egin behar dituzten kirol-lehiaketan antolatzen dituzten federazio eta erakundeek.

Aurreproiektuko 28. artikulua antzera ekarri du 7/2006 Lege Organikoko 18.4 artikulua araupena, baina, kasu honetan, ez da artikulua hark jatorrian zuen lotura askatu:

28. artikulua: "4.- Osasun-eginkizunak betetzen dituzten langileek atal honetan arau-

haustetzat tipifikatutako jokabideak gauzatzen dituztenean federazio-lizentzia edo gaikuntza baliokiderik gabe, eta kirol-federazioen, liga profesionalen edo kirol-lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeen kontura jarduten direnean edo zerbitzuak ematen dituztenean edo erakunde horietan atxikitako pertsonen edo erakundeen kontura jarduten direnean edo zerbitzuak ematen dituztenean, ezingo dute kirol-lizentziarik edo osasun-eginkizunetarako gaikuntzarik lortu, ez eta kirol-lizentziari dagozkion eskubideak baliatu, kirol-lizentzia edo gaikuntza baliokidea kentzeko edo eteteko zehapenak irauten duen besteko epe batez. Kirol-federazioek eta kirol-lehiaketak antolatzen dituzten erakundeek egokitu egingo dute beren araudia lege honetako aurreikuspenak sartzeko; aurreikuspen horiek bateragarriak izango dira kasu bakoitzean dagokiokkeen erantzukizun zibilarekin eta atal honetan xedatutakoaren ondorioz exijitu ahal diren erantzukizunengatik dagokiokkeen kontu ematearekin".

Aurreproiektuko 27.6. artikulua xedapen duen klausulak dio artikulua horretan aurreikusitako zehapenak kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien jabe diren pertsonen eta animalia horiek dauzkaten pertsonen ere aplikatu ahal zaizkiela, bai eta dagokion arau-haustea egiten parte hartzen duten pertsona guztiei ere. Zaila da ulertzea nola aplikatuko zaizkien 27. artikulua arautzen dituen zehapenak kirol-kargurik betetzen ez dutenei, kirol-lizentziarik edo gaitze-titulu baliokiderik ez dutenei, edo federazioen batekin nahiz kirol-erakunderen batekin lotura berezirik ez dutenei; izan ere, artikulua horrek arautzen dituen zehapenak dira kirol-lizentzia etetea edo kentzea, edo, gehienez, haiek eskuratzeko aukera etetea edo kentzea.

Ondorengo artikulua 7/2006 Lege Organikoko 19., 20., 21. eta 22. artikuluen oso antzekoak dira, nahiz eta batzuetan egokitzapen batzuk egin diren: 29. artikulua ("dopinaren gai-alorreko zehapenak ezartzeko irizpideak"), 30. artikulua ("diruzko zehapenen ezarpena"), 31. artikulua ("arau-haustearen ondorio gehigarriak eta emaitzak aldaraztea"), 32. artikulua ("zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentzia eskuratzeko gaitasuna galtzea").

Aurreproiektuko 29. artikulua proportzionaltasun printzipioa eta zehapenaren graduazioaz dihardu. Printzipio horiek betetzeko, erantzukizun-graduari erreparatzen zaio, arau-haustea intentzior egin den ala ez ikusita, jakintzari erreparatuta, betetzen ziren funtzioen erantzukizun-mailari eta sortutako kalteen izaerari begiratuta, eta erantzukizunaren nolakotasuna moldatzeko balia daitezkeen gainerako alderdiei erreparatuta.

Aurreproiektuko 30.2. artikulua arautzen du Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoak ezartzen dituen isunak ordaintzen ez badira, derrigorrean ordainaraziko direla, baina, 7/2006 Lege Organikoak ez bezala, ez du arautzen zer gertatuko den diziiplina-ahalmena egikaritzen duten gainerako erakundeek (esaterako, kirol-federazioek) ezarritako isunekin.

Aurreproiektuko 31. artikulua behin baino gehiagotan adierazten du, erreferentzia moduan, "sektzio honetara" esakunea. Esakune horren orde, "kapitulu honetara" esakunea jarri behar da, aurreproiektuak, 7/2006 lege organikoak ez bezala, ez baitu sektiorik. "Sektzio honetara" egindako erreferentziak errepikatzen dira, halaber, 27.4, 28.4 eta 28.5. artikuluetan

Hau da 32. artikulua izenburua: "Zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentzia eskuratzeko gaitasuna galtzea". Izenburu hori 7/2006 lege organikoan azaltzen den bera da, eta arautzen duen alderdi bakarra da zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentziak eskuratzeko gaitasunaren galera. Titulu hori, ordea, ez da nahikoa aurreproiektuko 32. artikulua arautzen duen edukia izendatzeko; izan ere, bi alderdi horiek arautzeaz gain, arautu egiten ditu, halaber, dopinagatiko zehapenen elkarrekiko aitopenen printzipio orokorra, zehapena jaso duen kirolariak ezin dutela Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kirol-jardueretan parte hartu, eta goi-mailako kirolariaren edo etorkizun handiko kirolariaren izaeraren galera.

Lehen adierazi dugun moduan, aurreproiektuko 33. artikulua *non bis in idem* printzipioaren aplikazioa arautzen du.

Erantzukizuna azkentzeko kausak arautzen ditu 34. artikulua. Artikuluak, hasieran diziplina-erantzukizuna aipatzen du soilik, eta ez dakigu hori izan den araua sustatu duen organoaren asmoa edo, aitzitik, 7/2006 lege organikoa kopia denean diziplinazkoa ez den erantzukizuna kendu delako gertatu den hori.

Arau-hausteen eta zigoren preskripzioa arautzen du 35. artikulua. Estatuko 7/2006 lege organikoa araututako preskripzio-epeak ekartzen ditu arau horrek, eta horiei buruz esan behar dugu, labur, zenbait aldaketa egingo zaizkiola 7/2006 lege organikoari; beraz, komeni da araua sustatzen duen zerbitzuak aintzat hartzea zer-nolako garrantzia duten aldaketa horiek eta tramitatzen ari den aurreproiektuan kontuan hartzeko aukera dagoela.

VII- Kapituluari amaiera ematen diote artikulua hauek: 36. artikulua ("dopina atzematen laguntzea"), 37. artikulua ("zehapen administratiboak ezartzeko eskumena"), 38. artikulua ("diziplina-prozeduren gai-alorreko eskumena"), 39. artikulua ("diziplina-prozedura"), 40. artikulua ("ikuskapen-ahalmena") eta 41. artikulua ("konfiskatzea").

Hau arautzen du 37. artikulua: "Dopina zigortzearen arloan administrazio-zehapenak ezartzeko ahala erabiltzea Eusko Jaurlaritzari dagokio". Xedapen hori ez dator bat aurreproiektuko 12.1.e) artikuluekin, bertan esaten baita Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoari dagokiola zehapen-ahalmena erabiltzea.

Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoa arazorik gabe izan dezake zehapen-ahalmen hori, baina bi artikulua horiek (37 eta 12.1.e. artikulua) bat etorri behar dute.

Hau arautzen du 38.5. artikulua: "Dopinaren alorreko diziplina-prozedura ebazpen bidez edo iraungipenez bukatuko da". Iraungipenez amaitzen bada, ebazpen bidez ere amaituko da, iraungipena gertatu dela deklaratzeko duen ebazpen bat eman behar baita. Ildo horretatik, 38.5. artikulua diziplina-prozedurari buruz hitz egiten badu ere, ulertzen dugu aplikatzeko dela, era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 42.1. artikulua. Aukera horrek are oinarri handiagoa du prozedura hori administrazio-eremuan izapidetu daitekeenean —diziplina-organoak bere ahalmena baliatzen ez duen kasuetan—, Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoan:

1. Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.

Preskripzioa gertatu, eskubideari uko egin, prozedura iraungi edo eskaeran atzera eginez gero, baita prozeduraren xedea gerora desagertzen denean ere, gertatutako ingurumariak adieraztea, horixe izango da ebazpena, betiere, jazotako egitateak eta aplikatu daitezkeen arauak zehaztuta.

Lehen lerroaldean aipatutako eginbeharra salbuetsita egongo da prozedura adostuta edo hitzartuta amaitzen denean, eta aldeztu aurretik administrazioari adierazteko betebeharraren mendeko eskubideez baliatzeko prozedurak direnean".

Halaber, hau agintzen du 30/1992 Legeak 44. artikuluan (Ebazpen adierazirik eza, administrazioaren kabuz hasitako prozeduretan):

Administrazioaren kabuz hasitako prozeduretan ebazpen adierazia eman eta jakinarazi gabe igaro arren gehienezko epea, administrazioak ebatzi beharra dauka lege, eta epea horrela igarotzeak ondorio hauek izango ditu:

(-.)

2. Administrazioa zehatzeko ahalez edo, oro har, esku hartzeko ahalez baliatzen den prozeduretan, interesdunei ondorio kaltegarria edo zorra sorraraz badieziaieke, iraungidura izango da ondorioa. Kasu horietan, iraungidura adierazten duen ebazpenak jarduna artxibatzeke aginduko du,

eta 92. artikuluko ondorioak izango ditu. (..)"

Hau esaten du 38. artikuluko 5. atalak: "Artikulu honen lehenengo paragrafoan ezarritako epemuga igaro eta ebazpen adierazirik jakinarazi ez bada, prozedura iraungita geratuko da". Xedapenak "artikulu honen lehen paragrafoan" esaten duenean, 38.1 artikulurako igorpena egiten du, eta artikulu horrek ez du eperik arautzen; beraz, argiago adierazi behar da 38.5. artikuluko lehen esaldiak adierazten duen sei hileko epeaz ari dela. Hala, egokiago litzateke hau arautzea: "Sei hileko epe hori igarotzean", "Atal honetan ezarritako epea igarotzean" edo antzeko zerbait.

Artikulu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioen eta kirolariak, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kirol-lehiaketetan, lotura bereziko harremana duen gainerako erakundeen diziplina-ahaltenaz dihardu artikulu horrek, baina, hala ere, 3. puntuan soilik aipatzen ditu federazioak. Horixe bera gertatzen da 39.6. artikuluan, federazio-eremua soilik aipatzen baitu: "dopinaren gai-alorreko prozedurak federazio-eremuan izapidetuko dira".

Diziplina-prozedura ebazteko bi epe arautzen ditu 38. artikulua:

- a) Aurreproiektuko 38.3. artikulua arautzen du kirol-federazioek ebazteko epea bi hilekoa dela eta Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoak luzatu egin dezakeela epe hori, baina gehieneko epemugarik finkatu gabe. Horrenbestez, 30/1992 Legeko 42.6. artikulura jo behar du gehieneko epe hori zehazteko:

"Salbuespen modura, ebatzi eta jakinarazteko gehieneko epea luzatzea erabaki daiteke, gertatutako ingurumariak argi arrazoituz, baina eskuerako baliabide guztiak agortuta daudenean bakarrik.

Gehieneko epea, azkenik, luzatzea erabakiko balitz, prozedura izapidetzeko ezarritako denbora baino luzeagoa ezin izan liteke luzapena".

- b) Aurreproiektuko 38.6. artikulua dio dopinaren alorreko diziplina-prozedura, Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoaren esku-hartze fasea barne dela, gehienez ere sei hileko epean amaitu beharko dela.

Araugilearen asmoa bada gehieneko epea sei hilekoa izatea, ez da beharrezkoa bi hileko epea luzatzeko aukera izango dela agintzen duen xedapena; izan ere, Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoak lau hilabete gehiago zituen, 38.6. artikulua xedatutakoaren arabera, ebazpena emateko, eta 42.6. artikulua xedatzen duen luzapena aplikatu ondorengo bi hilabeteak soilik.

Ildo horretatik, adierazi behar da 30/1992 Legeko 42.2. artikulua aukera ematen diola arauari nahi duen gehieneko epea ezartzeko: "Esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazteko egongo den gehieneko epea, dagokion prozedura arautzen duen arauan ezarritakoa izango da. Epe hori ez da sei hilabetetik gorakoa izango, baldin eta lege-mailako arau batek hori baino epe luzeagoa ezartzen ez badu, edo Europako erkidegoko arauetan bestelakorik ezarrita ez badago".

Estatuko 7/2006 lege organikoak 27.3 artikuluan arautzen duen luzapen horrek badu zentzurik lege organiko horretan, bi hileko gehieneko epe bat xedatzen baita ebazpena emateko. Kirol Kontseilu gorenak beste hilabete batez luza dezake epe hori aldez aurretik luzapen hori eskatzen bazaio, baina ez da bigarren ebazpen-epe luzeagorik arautzen. Hau da, lege organikoak arautzen du diziplina-prozedura ebatzi eta jakinarazteko epe osoa bi hilekoa dela eta epe hori hilabetez luza daitekeela.

Bestalde, 39.3. artikulua "kasuan kasuko diziplina-prozeduran edo auzi kriminalean" aipamena egiten du, aurreproiektuaren sistema duala aintzat hartu gabe.

Diziplina-prozedurari dagokionez, memoriak adierazten du ez dela zehapenak berrikusteko 7/2006 lege organikoak arautzen duen sistema hartu. Sistema horrek arbitraje-sistema eztabaidatu bat ezarri du

betiko administrazio-errekurtsoaren orde, baina, aurreproiektuak sistema klasikoari eustea erabaki du. Hala ere, memoriak ez du azaltzen aurreproiektuak kirol-diziplinaren gai-alorreko administrazio-errekurtsoen alorrean egin duen aldaketa bat; izan ere, hau adierazten du aurreproiektuko 39.6. artikulua "Dopinaren alorreko prozedurak federazioen barruan bideratuko dira, auzialdi bakarrean, bakoitzaren estatutuetan izendatzen den dopin alorreko diziplina-organo eskudunaren aurrean, eta haien barruan ezingo da inolako errekurtsorik jarri, ez errekurto arruntik ez berraztertze-errekurtsorik". Aurreproiektuak jaso egin du 7/2006 legeko beritasun bat. Horrenbestez, iruditzen zaigu, aldaketaren garrantzia aintzat hartuta, memoriak arrazoitu egin beharko lukeela erabaki hori.

Aurreproiektuko 39.7. artikulua ez du aintzat hartzen urriaren 18ko 310/2005 Dekretuak, Kirol Justiziako Euskal Batzordea arautzekoak, 17. artikuluan arautzen duen aukera, bertan esaten baita Batzorde horrek aukera izango duela kautela-neurriak hartzeko, ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko. Zehapena etetea izan daiteke neurri horietako bat.

Aurreproiektuko 40. artikuluan, "Eusko Jaurlaritza" kendu, eta, haren orde, Euskal Administrazio Orokorra, EAEko Administrazio Orokorra edo antzeko zerbitu jarri behar da.

Artikulu horren 1. atalak arautzen du Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoak ikuskaritza-ahalmena izango duela, eta ikuskatze-lan hori egitean errespetatu egin behar dituela oinarritzko eskubideak, eta, bereziki, Espainiako Konstituzioko 18. artikuluan arautzen direnak.

Kapitulua amaitzeko, dopatzea eragiten duten substantzia eta produktuak eta xede horretarako baliatu diren gainerako tresnak konfiskatzeko aukera ematen du 40. artikulua.

Kapitulu honek arautzen duen zehapen-araubideak kopia egiten du, ia osorik, 7/2006 Lege Organikoak xedatzen duen araubidea, eta, ondorioz, beharrezkoa da hemen adieraztea lege horri egin behar zaizkion aldaketak, aurreko martxoaren 25ean iragarri zirenak. Presidentziako ministroak 7/2006 lege organikoaren aldaketa-proiektuari buruzko txosten bat igorri zion Ministro Kontseiluari, eta, bertan, aldaketa hauek aurreratzen diren zehapen-araubidean: kirolaria non dagoen jakiteko betebeharra hirugarren aldiz urratzen den arte salbuestea zehapena; arau-hausteen preskripzio-epea zortzi urtera arte luzatzea, edo federazio-lizentzia behin-behineko izaeraz etetea diziplina-prozedura bat abiatzen bada substantzia debekatuen kontrolean positibo eman delako. Hori guztia adierazten dugu araua sustatu zuen zerbitzuak behar bezala azter ditzan aldaketa horiek zer-nolako eragina izan dezaketen izapidetzen ari den aurreproiektu honetan.

V. KAPITULUA. PREBENTZIO-NEURRIAK (42-46. artikulua)

Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoak sustatu edo abiaraziko dituen prebentzio-neurriak arautzen ditu V. kapituluak (42. artikulua).

Kiroleko dopinaren alorreko informazio-sistema bat sortzea aurreikusten da, dopinaren alorrean eskumenak dituzten beste herri-administrazio batzuekiko lankidetzat eta koordinazioa hobetuko dituen (43. artikulua). Artikulu hori 7/2006 lege organikoaren 45. artikuluan ia berdina da, baina, 45. artikuluko 1. puntua kopia egiten, puntu horretan zerrendatzen diren helburuak kopia egiten dira, baina ezabatu egin dira haien kolektibo hartzaileak; alabaina, zerrenda horren sarreratxoan ez da ezabatu kolektibo horiekiko erreferentzia. Hau arautzen du 45. artikulua:

"Informazio-sistemaren helburua talde ezberdinen beharrei erantzutea izango da, eta xede hauek izango ditu:

- a) Kirol-agintariak:** Informazioak ekimenen garapenari eta erabaki-hartzeari lagunduko dio, eta botere publikoak eta kirol-sistemak dopinik gabeko kirolaren alde egiten ari diren ekintza bateratua bizitzen ari

den bilakaerari buruzko informazio eguneratua eta alderatua eskaintzea ahalbidetuko du.

- b) Profesionalak:** informazioaren xedea izango da jakintza eta gaitasun klinikoak hobetzea, eta, besteak beste, direktorioak, memoriak, azterlanen emaitzak, sendagai, osasun-produktu eta teknologien ebaluazioak, jardunbide egokien azterketak, gida klinikoak, gomendioak eta iradokizunak biltzea jasoko dira sisteman.
- c) Kirolariak, entrenatzaileak, zuzendariak eta kirol-klubak:** Informazioak haien eskubide eta betebeharrei buruzko argibideak eta dopinak osasunerako dauzkan arrisku larriak jasoko ditu; bizi-estiloari buruzko erabaki-hartzea, jardunbide osasungarriak eta osasun-zerbitzuen erabilera erraztuko ditu, eta, gainera, aipatutako alderdi horien gaineko iradokizunak egiteko aukera eskainiko du.
- d) Kirol-arloko organizazio eta federazio espainiarrak:** informazioaren helburu izango dira pazienteen eta familien elkarteak, osasun-eremuan lan egiten duten gobernu kanpoko erakundeak eta zientzia-sozietateak, gizarte zibila Osasun Sistema Nazionalean parte har dezan sustatzeko xedez.

Atal hori 43.2. artikulura eramatean, ezabatu egiten da taldeekiko erreferentzia, eta soilik helburuei eusten zaie (d letraren kasuan izan ezik); hala, galdu egiten da atal bakoitza zeini buruz ari den jakiteak ematen duen zentzuaren zati bat, baina, hala ere, taldeak ezabatzen badira ere, honela hasten da atal hori: "Sistemaren helburu orokorra... talde hauen beharrezko erantzutea izango da...". Hala, 43.2. artikulua honela idatzita geratu da:

"Informazio-sistemaren helburua honako talde hauen beharrei erantzutea izango da, kasu bakoitzean adierazten den helburuarekin:

- a) Informazioak ekimenen garapenari eta erabaki-hartzeari lagunduko dio, eta botere publikoak eta kirol-sistemak dopinik gabeko kirolaren alde egiten ari diren ekintza bateratua bizitzen ari den bilakaerari buruzko informazio eguneratua eta alderatua eskaintzea ahalbidetuko du.
- b) Informazioa haien ezagutza eta gaitasunak hobetzera zuzenduko da. Besteak beste, direktorioak, memoriak, azterlanen emaitzak, sendagai, osasun-produktu eta teknologien ebaluazioak, jardunbide egokien azterketak, gida klinikoak, gomendioak eta iradokizunak biltzea jasoko dira.
- c) Informazioak haien eskubide eta betebeharrei buruzko argibideak eta dopinak osasunerako dauzkan arrisku larriak jasoko ditu; bizi-estiloari buruzko erabaki-hartzea, jardunbide osasungarriak eta osasun-zerbitzuen erabilera erraztuko ditu, eta, gainera, aipatutako alderdi horien gaineko iradokizunak egiteko aukera eskainiko du".

Ez da argi geratzen, hortaz, nori buruz ari den artikulua honako erreferentzia hauetan: haiei "informazioa eskaintzea", haien "ezagutza hobetzea" edota "haien eskubideak".

Aurreproiektuko 44. artikulua aukera ematen du botiken, osasun-produktuen eta janarien segurtasunaren gai-alorretan eskumendun diren erakundeei neurriak har ditzaten eskatzeko, kirolean dopatzea eragin dezaketen produktuen produkzioko, banaketako eta merkaturatzeko zikloaren berri izateko.

Aurreproiektuko 45. artikulua, 7/2006 lege organikoaren 41. artikulua arautzen duenaren osagarri, arautzen du Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoak sustatu egingo duela, administrazio-organo eskumendunekin koordinatuz, nutrizio-produktuei buruzko informazioa eman eta publizitatea egiteko mekanismoak ezartzea, baldin eta, botikak izan gabe, dopatzea eragin badezakete.

Azkenik, kapituluari amaiera emanez, Kirolariaren Osasun Txartela arautzen du 46. artikulua. Federazioko edo unibertsitateko lizentziadun kirolariei eta erregelamendu bidez zehazten diren gainerako kirolariei emango zaien agiri publikoa izango da, eta bertan jasoko da osasun-langileek kirolari horiek behar bezala artatzeko behar duten informazio klinikoa.

7/2006 lege organikoko 41. artikulua: "Osasun eta Kontsumo Ministerioak, bat etorrita Kirol Kontseilu Gorenarekin eta autonomia-erkidegoekin adostuta, nutrizio-produktu espezifikoaren informazioa eman eta haien publizitatea egiteko mekanismoak ezarriko ditu, horien ezaugarri izanda botikak ez izatea, baina kirolaren arloan emaitza positiboa eragin ahal izatea.

Berariaz, Espainiako administrazio-agintariek prozedura "egokiak ezarriko dituzte Espainian sartzen diren eta kirolean dopatzea eragin dezaketen nutrizio-produktuak deklaratzeko".

Artikuluaren 5. puntuak arautzen du dopatzearen kontrolen gai-alorrean ezingo dela txartel horren datuetara sartu kirolariaren adostasuna izan gabe, baina, hori esan ondoren, adostasun hori ez ematea arau-hauste oso larria izango dela ezartzen da. Horrenbestez, berriro esan behar dugu ez duela zentzurik erabaki baten borondatezko izaera arautzea, eta, jarraian, erabakia hartzen ez duenari zehapen bat ezarriko zaiola arautzea. Hori ikusita, zehaztu egin behar da kirolariaren adostasuna behar dela txarteleko datuak ikusteko, baina Lege honen baitan egiten diren dopin-kontrolak igaro behar badira, datuetara sartzeko aukera izango dela —pertsonen oinarritzko eskubideak behar bezala bermatuz beti—, eta kirolariak adostasunik ematen ez badu, zehapena jasotzen duela. Beste aukera bat da, arauan esatea, hasieran, kirolariaren adostasuna beharko dela txarteleko datuetara sartzeko, baina horren ondoren zehaztea datu horietako zeinetan izango den informazioa emateko obligazioa dopin-kontrolatan eta obligazio hori urratuz gero, zehapen bat ezarriko dela.

VI. KAPITULUA DOPINARI BURUZKO DATUEN ARAUBIDEA (47-49. artikulua)

Kapituluaren izenburua "Dopinari buruzko datuen araubidea" da, eta bertan arautzen da datuen konfidentziasuna (47. artikulua); datuak uzteko baimena ematea (48. artikulua); eta Kirolean dopina eragiteko gai diren produktu eta metodoei buruzko datuak aitortzeko betebeharra (49. artikulua). Kapituluak kirolarien datu pertsonalen babes-araubidea ezartzen duen aldetik, ez da ulertzen zergatik sartu den 49. artikulua kapitulu horretan, dopin-produktuen garraioa deklaratzeko obligazioa arautzen baitu. Logikoagoa izango litzateke artikulua aurreko kapitulan sartzea, produktuen kontrolari buruzkoan.

Konfidentziasun-betebehar bat arautzen du 47. artikulua, baina ez du betebehar horren urraketa onorio juridikorik aurreikusten. Berebiziko garrantzia du dopin-alorreko datu pertsonalak eskuratzeko aukera duten pertsonen isilpean gordetzea datu horiek, konfidentziasun-betebehar hori urratzeak kalteak sor baitakieki kirolariei; beraz, komeni da, gutxienez, indarreko araubideari igorpen generiko bat egitea, erantzukizunak eskatzeko.

Hau arautzen du aurreproiektuko 49.1. artikulua: "Euskal autonomia Erkidegoan egiten diren lehiaketetan parte hartzen duten taldeen obligazioa da erregistro-liburu bat betetzea...". Hala, aurreproiektuko 1. artikuluan araututako eremu materiala gaingitzen du xedapen horrek.

VII. KAPITULUA. NAZIOARTEKO KIROL-FEDERAZIOAK ETA NAZIOARTEKO EREMUAN KIROL-JARDUERA ARAUTZEN DUTEN GAINERAKO ERAKUNDEAK (50-53. artikulua)

Azken kapitulu honek hainbat egoeratan egin daitezkeen dopin-kontrolak arautzen ditu:

- 50. artikulua: Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan.
- 51. artikulua: Lehiaketa-garaitik kanpo, EAEn dauden kirolari nazional edo atzerritarrei.
- 52. artikulua: Kirolari lizentziadunei Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaketaz kanpo egiten dizkieten dopin-kontrolak.

Ohar hauek egin behar ditugu artikuluko horiei buruz:

Aurreproiektuko 50.1 artikuluan, “eta” konjuntzioa aldatu behar da eta, haren ordean, “o” disjuntzioa jarri behar da: “Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan, dopin-kontrolak antolatzen eta egiteko ardura Nazioarteko Batzorde Olinpiarri dagokio, bai eta, hurrenez hurren, lehiaketa horiek antolatzen dituzten kirol-federazio eta nazioarteko erakundeei ere (...)”.

Aurreproiektuko 51.1. artikulua gainditu egiten du aurreproiektuko eremu subjektiboa eta materiala, adierazten baitu dopin-kontrolak egin ahal zaiela Euskal Autonomia Erkidegoan lehiatzen ari diren kirolari nazional eta atzeritarrei, aurreproiektuaren aplikazio-eremutik kanpo geratzen diren lehiaketak baztertu gabe.

Aurreproiektuko 52. artikulua (tituluan) lizentzia-mota bereizi beharko luke, Espainiako federazioaren lizentzia duten kirolari 7/2006 lege organikoko 32. artikulua aplikatu behar baitaie. Horrenbestez, 14/1998 Legeak arautzen dituen lizentziei buruz ari bada, horrela adierazi beharko da.

Azkenik, nazioarteko erakundeei ezarritako zehapenak kirolariengan eta gainerako lizentziadunengan izango dituzten eraginak arautzen ditu 53. artikulua.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Zortzi xedapen gehigarri ditu lege-aurreproiektuak. Jaurlaritzako Kontseiluak 1993 martxoaren 23an onartu zituen Legeen, dekretuen, aginduen eta ebazpenen proiektuak egiteko irizpideak, eta erabaki horiek arautzen du zer eduki eman behar zaien artikulua osatzen dituzten xedapenei. Ildo horretatik, xedapen gehigarriak bada, eduki hau izango dute, ordena honetan:

- a) Testu artikuludunetan jaso ezin diren araubide juridiko bereziak: lurraldetarrak, pertsonalak, ekonomikoak eta prozesukoak. Araubide bereziak baino ez dira jasoko hemen, zehazkiago, artikuluetan oro har arautzen direnez besteko egoera juridikoak xedatzen dutenak, eta, gainera, xedapen-zatiaren artikulua edo kapitulu bat osatzeko hainbesteko garrantzirik ez dutenak.
- b) Arau juridikoak sortzea helburu ez duten mandatuak eta jardunak. Ezartzen badira, mandatuak zein epetan bete behar den finkatuko dute.
- c) Hondar-aginduak, arauaren beste alde batean kokatu ezin direnak. Azken baliabidea izango da agindu bat hondar-agindutzat jotzea.

Aurreproiektuko lehen xedapen gehigarriak Eusko Jaurlaritzari ematen zaio gaikuntza jasotzen du Lege honen garapeneko xedapenak emateko, animaliak dopatzea prebenitu, kontrolatu eta zigortzeko gai-alor espezifikoan.

Estatuarekin lankidetzan aritzeko formulak ezartzea aurreikusten du bigarren xedapen gehigarriak. Hiru helburu izango dituzte lankidetzaren formula horiek:

1. Elkarrekiko informazio-sistema bat ezartzea.

2. Kirolariaren Osasun Txartela eman, aitortu edo egitea.

3. Kontroletan esku hartu behar duten medikuak, albaitariak eta gainerako langileak gaitzeko araubidea.

Komeni da xedapen horretan "EAEko administrazioa" edo antzeko formularen bat erabiltzea "Eusko Jaurlaritza" terminoaren ordeaz.

Halaber, aurreproiektu osoan zehar behar bezala zaindu denez hizkuntzaren erabilera genero-ikuspegitik, ildo horri berari jarraitu behar zaio xedapen gehigarri horretan; beraz, zuzenketa hori egitea komeni da.

Aurreproiektuko 3. xedapen gehigarriak gaitu egiten du Eusko Jaurlaritzan kirol-alorrean eskudun den sailari, aurreproiektuak arautzen duen zehapeneko eta diziplinazko araubidea egokitzeke. Zuzendu egin behar da xedapen hori eta erregelamendu bidezko garapena egiteko ahalmena Jaurlaritzari eman behar zaio, Jaurlaritzaren Legeak (ekainaren 30eko 7/1981 Legeak) 18.c) artikuluan arautzen duena betez:

"Jaurlaritzari dagokio:

(—)

c) Erregelamenduak Dekretu bidez onartzea, Eusko Legebiltzarrak emandako Legeak garatu eta betearazteko, baita Estatuko Legeei dagozkienak ere, baldin eta eskumena gauzatzea Autonomia Erkidegoari badagokio, Autonomia Estatutuari jarraiki edo eskuordetzearen edo transferentziaren ondorioz".

Halaber, Legeen, dekretuen, aginduen eta ebazpenen proiektuak egiteko irizpideek arautzen dutenaren ildoan, arauen jardunerako edo osatzeko aginduak, hau da, arauak garatzea eskatzekoak agintari edo araei, azken xedapenetan jaso behar dira.

Aurreproiektuko 4. xedapen gehigarriak arautzen du zer diziiplina-erantzukizun izango dute lizentziadun edo lizentziarik gabeko profesionalek, baldin eta debekatutako metodoak erabiltzen badituzte edo dopatzea eragin dezaketen substantziak eta produktuak ematen, laguntzen, agintzen edo banatzen badituzte. Arau-hauste oso larria egiteagatiko erantzukizuna ekarriko dute jarduera horiek, eta profesional horien elkargo profesionalek zehatu behar dituzte. Elkargo horiek beren estatutu eta araudietara egokituko dituzten aurreproiektu honen aginduak. Hori egiteko epea urtebetekoa izango da gehienez, araua argitaratu ondorengo egunetik kontatzen hasita. Alderdi horiei buruz adierazi behar da, lehenik eta behin, aurreproiektuak ez duela argitzen zer definizio izango duen arauarentzat kirol-jarduera kontzeptuak, eta aurreproiektuaren eremu subjektibo eta material zabala kaltegarria izan daitekeela osasun-langileen jardun profesionalarentzat, eta, finean, kirolarien osasunarentzat (kirolariak izango dira, ildo horretan, kirol-jardueraren bat egiten duten pertsonak eta, denbora baterako bada ere, EAEn sartu, lehiatu edo bizi direnak); izan ere, diziiplina-erantzukizun hori kirol-lizentziarik gabeko edozein profesionalek izan dezake, baldin eta dopatze-eragina izan dezakeen substantziaren bat preskribatzen badiete Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-jardueraren bat egiten duen edozein pertsonari, nahiz eta lizentziarik ez izan.

Aurreproiektuko artikulua bat izan behar luke 5. xedapen gehigarriak, oso arau-hauste larritzat tipifikatutako jarduera baita. Espainiako 7/2006 lege organikoaren 42. artikulua kopiatzen du xedapen horren lehen paragrafoak. Artikulu horrek bi paragrafo ditu, eta xedapen gehigarria ia hitzez hitz ekarri denez, aurreko paragrafo bati egiten zaio erreferentzia, baina aurretik ez dago inolako paragraforik. Horrenbestez, "aurreko paragrafoak adierazten duena" zatia kendu behar da, eta honela egokitu behar da atal hori: "Debekatu egiten da kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoak kirol-

zentroetan biltegitratzea, merkaturatzea edo banatzea, edozein dela modua. Horrez gainera, debekatu egiten da produktu horiek kontsumitzera bultzatzea kirol-zentroetan.

Halaber, kendu egin behar da 14/1998 Legeko 131. artikuluari egiten zaion erreferentzia, eta, haren ordeaz, zehapena zehaztu behar da, 14/1998 Legeak araututako zehapen-araubidearen ondorioetarako aplika daitezkeen zehapenen zerrenda arautzen baitu 131. artikulua; izan ere, zehapen konkretu baten erreferentziarik egiten ez bada, zehaztu gabe geratuko litzateke xedapena, eta horrek urratu egingo luke legezkotasun printzipioa.

14/1998 Legeko 131. artikulua:

"1. Zehapen hauek jar dakizkieke aurreko artikuluetan azaldu diren arau-haustek egiten dituztenei:

- a) Isun ekonomikoa.
 - b) Jardueraren etendura.
 - c) Administrazio-baimena errebokatzea.
 - d) Kirol-instalazioen itxiera.
 - e) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko eskubidearen galera.
 - f) Kirol-instalazioetan sartzeko debekua.
 - g) Kirol-jarduerak antolatze gaitasunaz gabetzea.
2. Arau-hauste arinei 10.000 eta 100.000 pezeta bitarteko isunak ezar dakieke, larriei 100.001 eta 1.000.000 pezeta bitartekoak, eta oso larriei 1.000.001 eta 10.000.000 pezeta bitartekoak.
3. Zehapenak, b), c), d), e), f) eta g) adierazitakoak, arau-hauste oso larriei ezar dakieke, gehienez ere lau urteko eperako.
4. Zehapenak, b), c), d), e), f) eta g) adierazitakoak, arau-hauste larriei ezar dakieke, gehienez ere bi urteko eperako.
5. Zehapenen eta sortzen diren erantzukizunen zenbatekoak premiamendu bide administratiboa baliatuz galda daitezke".

Aurreproiektuko seigarren xedapen gehigarriak kendu egiten ditu kirolariaren osasun-kartilari egiten zitzaizkion erreferentziak eta kirolariaren osasun-txartelarenak jarri ditu haien ordeaz.

Aurreproiektuko zazpigarren xedapen gehigarriak arautzen du kirolariaren osasun-txartelean erants daitezkeela federazioko eta unibertsitateko lizentziak.

Azkenik, zortzigarren xedapen gehigarriak mekanismo bat arautzen du dopin-kontrola egiteko eskakizun fisiko handiko kirol-probetan parte hartzen duten pertsonentzat, eta pertsona horiek izango dituzten betebeharrak ezartzen ditu. Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen sailak emandako agindu bidez zehaztuko da "eskakizun fisiko handiko kirol-probak" kontzeptuaren definizioa.

Xedapeneko d) atala ez dago ondo zerrendatuta, a) letrarekin adierazten baita. Hau esaten da bertan: "parte hartzaile horiek desgaituak izan daitezke kirol-probetan parte hartzeko, Lege honen erregelamendu bidezko garapeneko arauak haien osasunaren babeserako alorrean ezar ditzaketen arrazoiak direla medio. Horrez gainera, parte hartu duten probetan deskalifikatu daitezke, eta, halakorik

bidezkoa balitz, administrazio-zehapen bat jasoko dute." Desgaitzeak eta deskalifikatzeak jarduera zehatzaileak direnez, txosten honetan zehar adierazi diren legezketasun eta tipikotasun printzipioak bete behar ditu arau-aurreikuspen horrek.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Aurreproiektuko lehen xedapen iragankorrak arautzen du diziplina-arloan nahiz administrazio-bidean legea indarrean jarri baino lehenago abiarazi diren zehapen-prozedurek haiek abiarazteko unean indarrean zegoen araubidearen arabera izapidetuko direla, interesatuen aldekoak izan daitezkeen alderdietan izan ezik.

Dopinaren Aurkako Euskal Bulegoa eratu eta martxan jarri bitarterako, bigarren xedapen iragankorrak arautzen du Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak beteko dituela haren funtzioak.

Azkenik, hau arautzen du hirugarren xedapen iragankorrak: "Dopinaren aurkako Euskal Agentziak lege honetan ezarritako gaikuntzak ematen dituen arte, dopin-kontrolarako laginen bilketa-taldeetan gaitutako pertsona moduan jardun ahal izango dute apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretuan, edo hura aldatzeko edo ordeztzeko legean, aurreikusitako gaikuntza dutela egiaztatzen duten guztiek".

Xedapen iragankorren edukiak bete egiten ditu Jaurlaritzaren Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an hartu zuen erabakiak emandako irizpideak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

Bi xedapen indargabetzaile ditu aurreproiektuak. Indargabetutako xedapenen zerrenda bat ematen du lehen xedapen indargabetzaileak. Zehazki, Kirolaren Euskal Legeko xedapen hauek indargabetzen dira:

Lege horretako 81. artikulua e) letra, EAEn dopin-kontrolen plangintza eta kudeaketari buruzkoa eta, orain arte, Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroak betetzen zuena. Lege berria indarrean jartzen denetik aurrera, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak izango du zeregin hori betetzeko ardura.

Legeko VII. tituluko V. kapitulua (84 – 87 artikulua): substantzia eta metodoen zerrenda (84. artikulua); dopatzea prebenitu, kontrolatu eta zigortzeko neurriak (85. artikulua); dopin-kontrolen derrigorrezketasuna (86. artikulua); eta dopin-kontrolak egiteko laborategiak (87. artikulua).

14/1998 Legearen 109. artikuluko ñ) idatz-zatia, diziplina-araubidearen baitan oso arau-hauste larritzat tipifikatzen zituena jokabide hauek: "debekatutako sustantziak sustatzea, hartzera bultzatzea eta hartzea, edo debekatutako metodoak erabiltzea eta horien gainean behar den kontrola izatea galarazten duen edozein egintza edo ez-egite".

Legearen 127. artikulua h) idatz-zatia, diziplina-araubidearen baitan oso arau-hauste larritzat hartzen zuena "debekatutako substantzien kontsumoa edo debekatutako metodoen erabilera sustatzea, bultzatzea edo laguntzea, eta substantzia eta metodo horiek behar bezala kontrolatzea galarazten duen edozein egintza edo ez-egite".

Aurreproiektuko bigarren xedapen indargabetzaileak klausula hau ezartzen du: "indargabetu egiten dira lege honek araututakoaren aurka doazen maila bereko eta azpiagoko xedapenak". Hala ere, komeni da bi xedapen horiek xedapen indargabetzaile bakar batean bategitea, 1993ko martxoaren 23ko irizpideek gomendatzen baitute zerrenda klausula horrekin amaitzeko.

641/2009 Errege Dekretua, apirilaren 17koa, Dopin-kontrolen prozesuak eta baimendutako analisi-laborategiak arautzen dituen, eta kirolean dopatzea prebenitzeko eta osasuna babesteko neurri osagarriak ezartzen dituen.

AZKEN XEDAPENAK

Aurreproiektuko azken xedapenetako lehenak aldaketa bat egiten dio Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeari, eta, zehazki, haren 4.2.v) artikuluan, osasun-kartilaren erreferentziaren ordeztu "Kirolariaren osasun-txartela" jartzen da.

Aurreproiektuko azken xedapenetako bigarrenak aldatu egiten du ekainaren 11ko 14/1998 Legeko 83. artikulua. Legeko 83. artikulua horrek gaitasun fisikoa kontrolatzeko mediku-azterketak arautzen ditu, eta esaten du derrigorrezkoak izango direla federazioko, unibertsitateko eta eskolako lizentziak emateko, eta, horrez gain, hemendik aurrera, kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak erabakitzen dituen eskakizun fisiko handiko jardueretan parte hartu ahal izateko. Legeko 83. artikulua horren amaieran arautzen zen mediku-azterketei buruzko zer datu jasoko ziren kirolariaren osasun-kartilan, datuak konfidentzialak izango direla, datuak herri-administrazioen artean lagatzeko aukera izango dela, eta, azkenik, azterketetan aplikatzekoak diren irizpideak finkatzen zituen. Orain arautzen du azterketa medikoetako datuak eta kirolariaren osasunarekin zerikusia duten beste informazio batzuk Kirolariaren Osasun Txartelean erantsiko direla, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.

Aurreproiektuko azken xedapenetako hirugarrenak Eusko Jaurlaritza gaitzen du aurreproiektua garatzeko xedapenak emateko.

Aurreproiektuak jasotzen duen xedapen hori isilbidez araututa dagoela uler dezakegu, EAEko Autonomia Estatutuko 29. artikulua eta Jaurlaritzari buruzko Legeko 16. artikulua horren erreferentzia orokorra egiten duten arren, ohiko erreferentzia bihurtu baita zuzenbide konparatuan. Hala ere, adierazi behar da Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoak behin baino gehiagotan adierazi duela kendu beharreko xedapena dela hori, ordenamendu juridikoak arautzen duela errepikatu baino ez duelako egiten (107/2003 irizpena):

"(...) arauaren garapena gaitzeko ohiko klausula jaso du, eta Batzordeak errepikatu du ezabatu behar dela, arautzeko ahalmena Gobernu Kontseiluari ematen baitzaio (Autonomia Estatutuko 29. eta Jaurlaritzari buruzko Legeko 16. artikulua). Ezar daitezke garapen-modu jakin bat modulatu, eragotzi edo ezartzeko lege-xedapenak, baina ez ordenamendu estatutarioak xedatzen duena errepikatzeko". (Aholku Batzorde Juridikoaren 107/2003 irizpena).

Aurreproiektuko azken xedapenetako laugarrenak kirol-federazioak eta aurreproiektua bete beharrekoa duten gainerako kirol-erakundeak aipatzen ditu, eta esaten du urtebeteko epea izango dutela gehienez, legea argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, beren estatutuak eta araudiak egokitzeko.

Hau arautzen du azken xedapenetako bosgarrenak: "Konstituzioaren 149.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, dopinaren alorrean estatuaren zuzenbidea ordezkioa izango da, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoari ez badagokio arautzea". Legeak egiteko irizpideak arautzen dute ordezkio zuzenbidearen arauak ezarriko direla azken xedapenetan, baina ordezkio zuzenbidearen araua errepikakorra da, Espainiako Konstituzioaren 149.3 artikulua egindako igorpen generiko bat egiten baitu, eta arau hori beti izango da aplikagarria, nahiz eta azken xedapen batean ez adierazi.

Aurreproiektuko azken xedapenetako seigarrenak legea indarrean jartzeko epea ezartzen du, eta hau agintzen du berariaz: "Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hilera jarriko da indarrean".

LEGE-AURREPROIEKTUAREN TRAMITAZIOA

Lege-aurreproiektua tramitatzeke prozedura Xedapen Orokorrak egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak ezarritakoa izango da.

Arau horrek esaten du, aurreproiektua idatzi eta abiatze-agindua eman duen organoaren oniritzia eskuratu ondoren, egin beharrekoak izango direla negoziazioko, entzunaldiko eta kontsultako tramiteak. Ildo horretatik, adierazi behar da Kirol zuzendariaren 2010eko urriaren 5eko ebazpenak, 2010eko azaroaren 29an eta 229 zenbakiko EHAAn argitaratutakoak, Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Aurreproiektuaren entzunaldi izapidea bete zuela. Horrekin batera, erakunde hauei igorri zaie aurreproiektua: Euskal Kirol Federazioen Batasunari, Arabako Kirol Federazioen Elkarteari, Bizkaiko Kirol Federazioen Elkarteari, Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteari – euskal federazio guztiei (48)-, Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, Euskadiko Kirol Medikuntza Elkarte-Ekimeri, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatutako Elkarte Ofizialari, Medikuen Elkargo Ofizialei (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), Farmazialarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), Albaitarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), Osasun Publikoko Zuzendaritzari, Datuen Babeserako Euskal Agentziari, Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziari eta Eusko Jaurlaritzako hamaika sailei. Hori guztia egin da abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 8. eta 9. artikulua betetzeko.

Erakunde eta organo hauen derrigorrezko txostenak eskatu eta jaso dira:

- Emakunderen txostena (otsailaren 18ko 4/2005 legea, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa, 19. eta 21. artikulua).
- Hizkuntza Politikako Sailburuordetza (abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretua, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan Kultura Sailak txostenak bideratzeko bete behar duen araudia ezartzen duena).
- Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritza (abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretua, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen, 17. c) artikulua).

Funtzio Publikoko Zuzendaritza (abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuko 21.c) artikulua).

Aurrez adierazitako izapideen harian, memoria osagarri bat egin da, alegazioak ebaluatzeko eta txosten horiek egindako oharpenak azaltzeko.

Ekainaren 27ko 9/1997, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearenak, 3.1.a) artikuluan arautzen duena betez, lege-aurreproiektua igorri zen martxoaren 19an, kontsultarako erakunde horrek irizpena eman zezan.

Halaber, abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 10. artikulua arautzen duena betetzeko, prozedura osoaren memoria labur bat eta memoria ekonomiko bat jaso behar da espedientean. Aurkezten den proiektuaren justifikazio-lanaren baitan, memoria ekonomikoa funtsezko agiria da. Hala berretsi izan dute Estatuko Kontseiluak eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak. Ildo horretatik, komeni da gogoratzea zer adierazi duen azken Kontseilu horrek 43/1999 irizpenean: "Komeni da hemen adieraztea zer-nolako garrantzi handia eman dion Estatu kontseiluak izapide horri, erregelamenduak egiteko administrazio-prozeduraren baitan. Estatuko organo horrek esan du izapide hori funtsezkoa dela arau-ahalmena arbitrariotasunik gabe beteko dela bermatzeko, eta, horrez gain, adierazi du Espainiako Konstituzioko 31.2. artikulua betetzeko bideetako bat dela, azken horrek agintzen baitu gastu publikoak ekitatezko modu batean banatu behar dituela baliabide publikoak, eta gastu horiek programatu eta betetzeko moduak eraginkorrak eta ekonomikoak izan behar dutela".

Antzeko adierazpenak egiten ditu, memoria ekonomikoaren garrantzia berresteko, Estatuko Kontseiluak (1996ko abenduaren 5eko irizpena, 4.078/96 zenbakiko espedienteak): "Konstituzioko 31.2. artikulua arautzen du gastu publikoak ekonomiaren eta efikaziaren printzipioak bete behar dituela, eta, ondorioz, ez du aukerarik ematen erregelamendu bat onartzeko, baldin eta ez badira behar bezala finkatzen hura beteko dela bermatzeko bitarteko ekonomikoak; halakorik egiten ez bada, Espainiako Konstituzioko 9.3. artikulua debekatzen duen jardura arbitrario bat egingo litzateke, funts juridikorik gabea, eta, ondorioz, kapritxozkoa bailitzateke erregelamendu bat onartzea, baldin eta ezingo bada egiaz aplikatu, nahikoa bitarteko ekonomikorik ez dagoelako arauko xedapenak betetzeko".

Bi irizpen horiek erregelamenduak egiteko prozesuari buruzkoak dira, baina berdin-berdin aplika daitezke legeak egiteko prozesuari. Izan ere, hori arautzen du abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 10. artikulua, eta hori ondorioztatzen da legeen onarpeneko logikari eta garrantziari erreparatuta, beharrezkoa baita haiek aplikatzeko beharrezkoak diren bitarteko ekonomikoak jarri direla egiaztatuko duten agiriak eta azterketak eranstea legeak onartzeko prozesuan. Legea betetzeko behar diren baliabide ekonomikoak jarri direla justifikatzea funtsezkoa da araua bera efikaza eta efektiboa izan dadin.

Memoria ekonomikoa idazteko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak 2/11 zirkularrean ezarrituen irizpideak bete behar dira. Irizpide horiek, finean, adierazi egiten ditu 464/1995 dekretuak, urriaren 31koak, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituenak, 42. eta 43. artikuluetan arautzen dituen alderdiak:

42. artikulua. "Memoria eta agiri orokorrak.

1. Oro har aplikagarriak diren arauen indarrez, prozedurak kontutan hartuta agian eskatu daitezkeen beste baldintza edo izapide batzuen kaltetan gabe, kontrol ekonomiko eta araubidezkoari atxikita dauden xedapen guztiekin batera, memoria bat aurkeztu beharko da oinarritzko dokumentu gisa. Gutxienez honako hauek jaso beharko dira bertan:

a) Hori indarrean jartzeak ekarri ditzan aurrekontu-gastu eta diru-sarreraren kuantifikazioa, ohikoak direnak eta kapital-eragiketetatik datozenak berezitu egin beharko direla eta gastu edo diru-sarrera horien destinoa identifikatu egin beharko dela.

b) Aurrekontu gastuen finantzaketa, eraginpean dauden baliabideak eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrean aparte ematen diren finantzaketa-iturriak aipatuz.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiak berezko dituen gaietan eta aurrekontu-araubidean eragina duen xedapeneko aldeak identifikatzea, xedapenaren aurrekariak deskribatzea eta horren beharrak justifikatzea.

d) Proposatutako xedapena hartzen duen aurrekontu-programa ekonomikoa deskribatzea, arau hori indarrean jartzeak bere baitan hartuko dituen helburuak, egintzak eta adierazleak identifikatuz eta hori aplikatzeak ekonomian eta gizartean izango dituen eraginaren ebaluazioa eginez.

e) Programak noraino gauzatu diren eta bilatutako helburuak noraino lortu ebaluatzea, diru-laguntzapeko programak garatzeko emandako arauak direnean. Diru-laguntzen deialdien ebaluazioa ere egin beharko da, deialdi horiek beste ekitaldi batzuetan onartutakoen jarraipena direnean.

2. Aurrekontuetan, diruzaintza eta/edo kontaduritzan eragina duten espedienteak izan daitezenean,

aplikagarriak izan daitezkeen arauetan xedatzen denaren arabera egokitzea jotako kontaduritzagiriak ere aipatu beharko dira.

3. Era berean, proposamenaren gai izan den erregulazioari indarra ematen dioten iritzi orokorrak eta juridikoak ezagutzeko bide eman dezaketen datu, txosten eta ikerketa guztiak jaso beharko dira memoria horretan. Txostena emateko bideak erraztuko dituzten beste edozein berri ere bai.

43. artikulua. "Agiriak, ekonomi eta araubidezko kontrolari buruzkoak, ekonomi-antolaera mailako modalitateari dagokionetan.

1. Ekonomi eta araubidezko kontrola, ekainaren 30eko 14/1994 Legeko 26. ataleko 2. lerroaldian aipatzen dena bezalakoa izan dadinean, aplikagarriak izan daitezkeen atal horretako 1. idazatian aipatzen diren idazatietan jasotzen direnak hartu beharko ditu kontrol horrek eta horiei buruzko iritzia eman ere bai. Honako hauek ere jaso beharko dira, hau da, proposamenaren gai izan den antolaketaren arrazionalitatea, zerbitzuen koste, errendimendu eta emankortasunaren gain kontrolak izango dituen ondorioak eta eragina.

2. Ondorio horietarako, aurreko atalean aipatu diren agiriez gain, honako hauek ere bidali beharko dira:

a) Ente edo organoa sortze edo, hala behar bada, aldatze edo berregituratze beharra edo horren egokitasuna justifikatzea, era honetan, burutu behar diren edo horietan sartuko deneko programa ekonomiko eta aurrekontu mailakoak bete ahal izateko.

b) Erabilitako giza baliabideen aurreikuspena, ordainsari eta kostuak zehaztuta, eta, halaber, erabilitako baliabide materialak, bereizita, gastu arrunt edo kapital-gastu diren kontuan hartuta.

c) Bere funtzionamenduaren eta zerbitzuen etekin edo balioaren azterketa ekonomikoa, eta, hala badagokio, baita lau urteko Plan Ekonomikoa ere.

(...)"

Espedientea memoria horrekin osatzen denean, organo hauen derrigorrezko txostenak eta irizpenak jaso behar dira:

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 26.1. eta 27.1. artikuluek arautzen dutena betetzeko, derrigorrezko kontrol-txostenen bidez fiskalizatu behar dira lege-aurreproiektuak. Jaurlaritzako Kontseiluak haiek aztertu baino lehenago bete behar da kontrol hori.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legeko 3.1.a) artikulua arautzen duena aintzat hartuta, ezinbestekoa da Batzorde horren irizpena jasotzea, arau horrek hau esaten baitu berariaz: "Lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere. Badira batzuk, hala ere, ogasuneko eskumena duen saileko titularrak eskatuz gero baino ez dutenak beharko batzordearen txostena; alegia:

- Baliabideen banaketarako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontuak finantzatzeko foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenak.

- Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuak onartzeari, kreditu gehigarriak emateari, konpromiso-kredituen baldintzak aldatzeari eta Aurrekontuak likidatzeari buruzkoak.

Araututako prozedura amaitu ondoren, organo eskumendunak aztertuko du aurreproiektuaren onarpena, eta eranskin batean adierazi behar dira indargabetutako eta aldatutako xedapenen zerrenda.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak aztertuko du aurreproiektua, eta hark erabakiko du hura onartuko duen bileraren amaieran, ala irizpide jakin batzuk ezarriko dituen aurreproiektuko azken testua idazteko, eta, onartu ondoren, Eusko Legebiltzarrera bidaliko da izapidetua izan dadin.

Hauxe da egindako txostena, eta zuzenbide-oinarri sendoagoko beste edozeinen mende dago.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko maiatzaren 16an.

JOSE ANTONIO CAYERO BILBAO
Zerbitzuburua
AMAIA HERRAN
Aholkularitza Juridikoa

VIII

INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO /
GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE..

El presente informe se elabora de conformidad con lo dispuesto en los artículo 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres y en las directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del genero y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por Consejo de Gobierno celebrado en sesión de fecha 13 de marzo de 2007.

Esta Ley 14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco, destina completamente el Capítulo V, del Título VII, al dopaje. Además de dicho Capítulo, a lo largo del resto del articulado se contienen diversas previsiones sobre tal problemática. Aunque dicha Ley supuso un primer e importante paso para dotar al País Vasco de una regulación propia para combatir la lacra del dopaje, el tiempo transcurrido desde la aprobación ha puesto de manifiesto nuevas problemáticas e importantes transformaciones organizativas y normativas en el ámbito estatal e internacional.

Por un lado, los eventos deportivos, estructurados tradicionalmente en torno a las federaciones deportivas, se han mercantilizado notablemente y están siendo organizados por entidades, ajenas a la organización federativa, para quienes no estaba prevista la normativa reguladora de la lucha contra el dopaje.

Por otra parte, aunque las diferentes prácticas de dopaje han constituido siempre una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva, en la actualidad el fenómeno del dopaje ya no es sólo un grave engaño deportivo; se ha convertido en un conjunto de prácticas peligrosas organizadas que pueden ser muy dañinas para la salud pública, especialmente para la vida de las y los deportistas. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva y de la salud individual para convertirse en un auténtico problema de salud pública. El dopaje no es la expresión de prácticas aisladas e individuales de las y los deportistas sino que responde a tramas organizadas con fuertes intereses económicos.

El marco jurídico de la lucha contra el dopaje también ha experimentando profundas reformas. Un año después de la aprobación de la Ley 14/1998 se

celebró en Lausana, Suiza, la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, que puso de manifiesto la necesidad de profundizar en la colaboración entre poderes públicos y organizaciones deportivas. Tal Conferencia supuso un cambio de rumbo en la forma de abordar el problema del dopaje en el deporte, poniendo el acento en la necesidad de crear un organismo internacional independiente que estableciera normas comunes para combatir el dopaje y coordinara los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de los poderes públicos. Ese mismo año se acordó constituir la Agencia Mundial Antidopaje, en cuya estructura y financiación participan de forma equitativa el Comité Olímpico Internacional y los gobiernos de un gran número de países, preocupados cada vez más por el auge del dopaje y su rápida expansión más allá del ámbito de la alta competición deportiva.

En 2003, la Agencia Mundial Antidopaje, fundación privada sometida al Derecho Suizo, elaboró el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que lo complementan. Tales textos constituyen un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional y de necesaria referencia para las instituciones públicas implicadas en la lucha contra el dopaje. Estas iniciativas de la Agencia Mundial Antidopaje condujeron a la aprobación, por la UNESCO, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Tales textos exigen a los gobiernos la elaboración de normas que conduzcan a una armonización sobre aspectos clave para combatir el dopaje.

Aunque inicialmente el Código Mundial Antidopaje ha carecido de fuerza vinculante en el Derecho Internacional Público, esta situación se encuentra en proceso de cambio tras la entrada en vigor el 1 de febrero de 2007 de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Por ello, con la presente Ley se trata, también, de armonizar la normativa vasca de lucha contra el dopaje con los principios que aquel Código proclama y de alcanzar mayor eficacia en combatir el dopaje en el deporte.

Otra etapa de este proceso de profundos cambios ha venido protagonizada por la aprobación, por el Parlamento Español, de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje. Parte de sus preceptos tienen naturaleza orgánica y otros han sido aprobados sobre la base de las competencias que el Estado ostenta en materias relacionadas con el dopaje.

Por todo lo anterior, la normativa que se contiene en la presente Ley se basa en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales y nacionales más avanzados en la lucha de contra el dopaje en el deporte. La



estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exige un marco jurídico común en la lucha contra el dopaje en el deporte. En el País Vasco se celebran competiciones deportivas internacionales y estatales con participación de deportistas, clubes y federaciones de diversa procedencia y ello precisa una normativa mínimamente armonizada.

Por tanto, el régimen novedoso que fue introducido en el País Vasco por la Ley 14/1998, aparece hoy día necesitado de reformas y actualizaciones para combatir un fenómeno, el dopaje, que simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo, muy particularmente en el artículo 2.1 de la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco, el cual dispone que *"el deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social"*.

Una de las novedades más importantes de la nueva Ley es la adecuación del marco institucional al fenómeno del dopaje con la creación de la Agencia Vasca Antidopaje. El tiempo transcurrido desde 1998, fecha de aprobación de la vigente Ley del Deporte, ha puesto de manifiesto la tendencia generalizada a la creación de agencias nacionales antidopaje. Una de las razones para la creación de estas agencias es su mayor especialización para la realización de determinadas funciones y su independencia funcional. Se trata de separar las funciones de promoción del deporte de alto nivel y de las demás manifestaciones del deporte de rendimiento, que siguen bajo el paraguas de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, y el control de las prácticas de dopaje, que estaría dirigido por la Agencia Vasca Antidopaje.

La propia Ley Orgánica 7/2006 prevé la creación de Agencias Antidopaje de las Comunidades Autónomas y la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje, contempla la constitución de la Comisión de Agencias Antidopaje *"cuando se acredite la existencia de agencias antidopaje cuyo ámbito sea el de las comunidades autónomas"*.

En la Ley se produce un endurecimiento notable del marco legal de la lucha contra el dopaje, endurecimiento que se ha tratado de cohonestar con el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las y los deportistas y demás personas intervinientes. El texto parte de una idea básica; la lucha contra el dopaje no puede llevarse a cabo de cualquier modo y se debe ser exquisito con todos los derechos de las y los deportistas implicados en los

controles antidopaje, sin merma alguna de la eficacia de éstos. Para alcanzar tal eficacia algunos derechos de las y los deportistas deben ser ponderados de modo proporcional a los fines legítimos que se consigan en materia de lucha contra el dopaje (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de julio de 2006).

Con esta nueva ley se aplica también el régimen de control y represión contra el dopaje a las actividades deportivas no federativas. Se amplían las actuales previsiones legales sobre el deporte federado a otras realidades deportivas que también son merecedoras de protección. En este aspecto la Ley sigue el camino iniciado con la Ley 14/1998, que ya contemplaba un régimen sancionador fuera del ámbito de las federaciones, y también sigue la estela marcada por la Ley Orgánica que contempla medidas sancionadoras en el ámbito de la actividad deportiva no competitiva. En esta línea, la Ley incorpora prohibiciones expresas con relación a los centros deportivos donde se distribuyen o comercializan sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

En materia de control de dopaje la Ley hace un esfuerzo por contemplar de forma expresa otras modalidades de control. La tolerancia cero con el dopaje no es compatible con un control de dopaje ceñido exclusivamente a las tomas de muestras y análisis. Es necesario controlar otras vías de fraude como el control de las autorizaciones de uso terapéutico. Por ello, la Ley no restringe los controles antidopaje a las tomas de muestras y, además, las tomas de muestras no se reducen a la orina de las y los deportistas sino que el texto legal abre los controles a otros tipos de muestras, sin imponer vía alguna. Tendrá que ser la evolución de las investigaciones científicas y los resultados de los avances tecnológicos quienes marquen en cada momento la vía más adecuada de control. La Ley, lejos de frenar dicho progreso, trata de ser abierta y dar cobertura jurídica a tales avances.

Mención especial requiere el tratamiento que el nuevo texto otorga a los denominados controles de salud. Siguiendo el mismo criterio que la Ley Orgánica 7/2006 se incluyen bajo ese concepto el conjunto de actuaciones que la Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva así como a controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones previstas en la Ley en materia de dopaje y salud. Asimismo, la Agencia Vasca Antidopaje determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de la licencia a deportistas por razones de salud.

En el texto legal se incorpora una mención expresa a la prohibición de patrocinio público a clubes, deportistas y demás personas físicas o jurídicas en determinadas circunstancias relacionadas con el dopaje.

La tipificación de las infracciones y sanciones de la Ley 14/1998 era muy limitada y se ha aprovechado esta Ley para ajustarla a las necesidades que han ido surgiendo y a la normativa internacional.

La Ley trata de dar respuesta al importante fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico que, como se viene reconociendo abiertamente, se ha convertido en una puerta abierta al dopaje. Las y los deportistas, como cualquier persona, pueden padecer enfermedades o lesiones que precisan tratamiento médico. La posibilidad de solicitar una autorización de uso terapéutico se reconoce en la Ley en determinadas circunstancias. Junto a esta vía se instaura la figura de la baja deportiva, nueva figura que permite a la o el deportista un tratamiento terapéutico totalmente libre, como a cualquier otra persona, pero sin posibilidad de competir.

La lucha contra el dopaje se concibe en esta ley de forma integral. No resulta deseable combatir el dopaje desde el control y la represión y abandonar el campo de la prevención. Por ello, la Ley contempla la obligación de adoptar diversas medidas de prevención. Entre las mismas se incluyen acciones de investigación y, con el objetivo de hacer efectiva dichos programas de investigación científica, la ley contempla mecanismos de información poniendo a disposición de los diversos agentes públicos y privados aquellos datos que puedan ser utilizados en el desarrollo de aquellos programas. Asimismo, se incluye expresamente la realización de programas de formación e información dirigidos fundamentalmente a clubes, federaciones, deportistas, técnicos y técnicas, dirigentes y demás agentes deportivos a fin de evitar que los valores del deporte sean amenazados por el dopaje y con el objetivo de impedir que las y los deportistas recurran a sustancias y métodos prohibidos en grave perjuicio de su salud. Especial mención se debe hacer a la previsión de programas específicos de sensibilización en la lucha contra el dopaje en el campo del deporte que no es de competiciones oficiales de rendimiento: pruebas atléticas populares, carreras cicloturistas, gimnasios, etcétera.

La Ley parte de la consideración que los datos relacionados con los controles de dopaje y de salud (resultados de los análisis, resultados de los reconocimientos médicos, resultados de los controles de salud, solicitudes y concesiones de autorizaciones de uso terapéutico, etcétera) son datos de carácter personal relativos a la salud y, por dicha razón, merecedores de una especial protección.

Por último, la Ley, pretendiendo ser consecuente con el fin de impedir actos contrarios al espíritu deportivo y con el fin, asimismo, de proteger la salud de las y los deportistas, con independencia de su condición, establece un régimen especial para las y los deportistas, especialmente populares, que participan en pruebas deportivas extremas o de gran exigencia física. Una Ley que sólo trate de proteger la salud de deportistas con licencia no puede ser una buena ley; resulta necesario proteger la salud de las y los deportistas que participan en actividades deportivas organizadas, haciendo abstracción de la posesión de licencia, y especialmente en aquellos casos en los que se asumen mayores riesgos.

En definitiva, la Ley surge de una necesidad evidente de adaptar las disposiciones establecidas a lo largo de la Ley 14/1998 en materia de dopaje a la nueva realidad y pretende dotar al País Vasco de un marco jurídico ambicioso dirigido a erradicar de forma eficaz tal lacra del dopaje en nuestro deporte.

Lo cierto es que siendo el objeto de la evaluación del impacto de género evitar consecuencias negativas no intencionadas que favorezcan situaciones de discriminación y mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias en el ámbito del dopaje. Entendiendo que tal evaluación consiste en verificar si la propuesta normativa puede afectar de manera diferente a mujeres y a hombres, tenemos que expresar que los pocos análisis que se han realizado a nivel internacional sobre la materia nos aportan poca luz sobre la materia.

La última revisión de la literatura internacional sobre dopaje en el deporte realizada por la Universidad de Leeds para la Agencia Mundial Antidopaje, señala que existe muy poca base empírica en la planificación estratégica de esta materia. La débil base práctica limita la capacidad de fijar objetivos apropiados y eficaces en los programas antidopaje y en el diseño de la normativa, especialmente para aquellos colectivos que no han sido hegemónicos en el ámbito deportivo, como el de las mujeres.

Aunque existe un consenso bastante generalizado en la literatura médica de que el uso de sustancias prohibidas afecta de manera distinta en los cuerpos, rendimiento y salud de hombres y mujeres, no se tiene aún conocimiento sobre las posibles diferencias en la percepción, valoración, motivación e involucración de hombres y mujeres respecto al dopaje en el deporte.

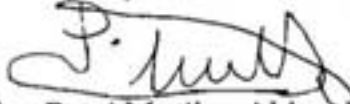
Aún teniendo la intuición de que no son semejantes, existe una gran carencia de investigaciones específicas. De las investigaciones más importantes realizadas a nivel mundial en estas materias durante los últimos años, la gran mayoría, se han realizado con muestras únicamente de hombres. Solo una de

ellas se ha realizado con mujeres, y los resultados no son extrapolables. Por tanto, es imprescindible investigar sobre las diferencias en los discursos frente al dopaje de hombres y mujeres para detectar y entender las posibles culturas específicas del doping en relación al género.

Una de las funciones de la Agencia Vasca Antidopaje que se recogen en el artículo 12 del borrador del proyecto de ley es la de promover la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación en materia de dopaje, impulsando proyectos específicos que promuevan la investigación, desarrollo o innovación. Entre las investigaciones a realizar sería conveniente analizar el impacto diferenciado de las medidas que se recogen a lo largo del texto de la Ley del dopaje y de sus consecuencias en mujeres y hombres.

Entre tanto, y como quiera que no se han detectado dichos impactos, únicamente se han adoptado las medidas generales derivadas de la Ley de Igualdad, como son la utilización del lenguaje, la necesidad de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos que se crean.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2010



Fdo.: Patxi Mutiloa Aldazabal

Director de Deportes



TXOSTENA, KIROLEKO DOPINAREN KONTRAKO LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN GENERO-ERAGINAREN AURREKO EBALUAZIOARI BURUZKOA.

Txosten hau Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 legearen 19-22. artikuluetan eta 2007ko martxoaren 13ko Gobernu Kontseiluak onartutako genero eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeko jarraibideetan eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurrietan xedatutakoaren arabera burutu da.

Euskadiko Kirolari buruzko 14/1998 legeak, ekainaren 1ekoak, VII. tituluko V. kapitulua, oso-osorik, dopinari eskaintzen dio. Baina kapitulu horretan arautzen denaz gain, gainontzeko artikuluetan ere arazo horri buruzko zenbait xedapen biltzen dira. Dena den, nahiz eta lege hori lehen urrats garrantzitsua izan Euskadin dopinaren gaitzari aurre egiteko araudi propioa izateko, onartu zenetik igaro den denborak agerian utzi du arazo berriak sortu direla eta aldaketa handiak izan direla antolaketa-moduetan eta erakundeetan, estatuan nahiz nazioartean.

Batetik, kirol-ekitaldiak tradizionalki kirol-federazioek antolatzen zituzten arren, gaur egun merkatuaren joeren menpe jarri dira nabarmen ekitaldiok, eta federazioak ez diren beste erakunde batzuek antolatzen dituzte; bada, dopinaren aurkako borroka arautzen zuen araudia ez zegoen erakunde horiei begira zehazturik.

Bestetik, nahiz eta era batera zein bestera dopatzea beti izan den kiroleko etikaren oinarritzko printzipioak urratzeko modua, gaur egun dopina ez da, besterik gabe, kirolaren arloko engainu larria, baizik eta praktika arriskutsu antolatuen multzoa, oso kaltegarriak izan daitezkeenak osasun publikoarentzat, bereziki kirolarien bizitzarentzat. Dopinak kirolaren arloko etikaren eta dopina erabiltzen duenaren osasunaren esparrua gainditu ditu, eta osasun publikoko benetako arazo bihurtu da. Dopina ez da kirolari jakin batzuek noizean behin egiten dutena; horren atzean, interes ekonomiko handiak dituzten talde antolatuak daude.

Gainera, dopinaren aurkako esparru juridikoak ere aldaketa sakonak bizi izan ditu. 14/1998 Legea onartu eta urtebetera, Lausanan (Suitzan) Kiroleko Dopinari buruzko Munduko Konferentzia izan zen, eta bertan garbi utzi zuten aginte publikoen eta kirol-erakundeen arteko elkarlanean sakondu beharra

zegoela. Konferentzia horrek norabide-aldaketa ekarri zuen kiroleko dopinaren arazoari heltzeko moduan, eta azpimarragarriena nazioarteko erakunde independente bat sortu beharra erakustea izan zen, dopinari aurre egiteko arau komunak jarri eta kirol-erakundeen nahiz aginte publikoen ahaleginak koordina zitzaizkien. Urte horretan bertan, Dopinaren aurkako Mundu Agentzia (gaztelaniaz, AMA) eratzea erabaki zen. Haren egituraren eta finantziarioan modu orekatuan parte hartzen dute Nazioarteko Batzorde Olinpiarren (NBO) eta herrialde askotako gobernuak, gero eta kezkatuago baitaude dopinak izan duen gorakadaz eta dopina goi-mailako kirol-lehiaketan eremuaz haratago azkar zabaldu izanaz.

2003. urtean, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak (Suitzako zuzenbidearen mendeko fundazio pribatua da) Dopinaren aurkako Mundu Kodea idatzi zuen, eta kode horren osagarri diren nazioarteko estandarrak ere zehaztu zituen. Testu horiek nazioarteko kirol-mugimenduak derrigor bete beharreko arau eta jarraibideen multzoa dira, eta horrekin batera, baita beharrezko erreferentzia ere dopinaren aurkako borrokan esku hartzen ari diren erakunde publikoentzat ere. Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren ekimen horien ondorioz, UNESCOk, 2005eko urriaren 19an izandako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen. Testu horiek guztiek gobernuak dopinari aurre egiteko gakoa diren gaien inguruan harmonizazioa ekarriko duten arauak idazteko eskatzen diete.

Nahiz eta hasiera batean Dopinaren aurkako Mundu Kodeak indar loteslerik izan ez nazioarteko zuzenbide publikoan, egoera hori aldatzekotan da, 2007ko otsailaren 1etik aurrera Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa, UNESCOk onartua, indarrean sartu zenetik. Esandakoa dela eta, eskuartearen dugun lege honen bidez, dopinaren aurkako euskal araudia mundu mailako kodeak dituen printzipioekin harmonizatu nahi da, kiroleko dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa lortzeaz gainera.

Izan diren aldaketa sakon horien beste erakusgarri bat Espainiako Parlamentuak Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurkako azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa onartu izana da. Jasotzen dituen aginduetako batzuk organikoak dira, eta beste batzuk onartzeko arrazoia estatuak dopinarekin zerikusia duten gaietan dituen eskumenak izan dira.

Esandako guztiagatik, lege honetan jasotako araudiak oinarri izan dituen printzipioak hain zuzen ere kiroleko dopinaren aurkako borrokan estatuan eta nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutakoak dira. Lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez lurralde-eremuetan eta -mailetan, esparru juridiko komuna behar da

kiroleko dopinaren aurkako borrokan aritzeko. Euskadin izaten diren nazioarteko zein estatuko kirol-lehiaketa batzuetan leku askotatik etorritako kirolari, talde eta federazioek hartzen dute parte, eta horrek gutxieneko kontu batzuetan behintzat harmonizatua izango den araua edukitzea eskatzen du.

Horren ondorioz, nahiz eta 14/1998 Legeak erregimen berritzailea ekarri garai hartan, gaur egun berrikuntza eta eguneratzeak behar ditu dopinari aurre egin ahal izateko; izan ere, kirolaren eta kirolari buruz zabaldu diren baloreen eta oinarrien antinomiaren sinbolo dugu dopina, bereziki Euskadiko Kirolari buruzko 14/1998 Legearen 2.1. artikuluan esaten denaren antinomia, haxe baitio artikulua horrek: *“interes publikoa duen gizarte-jarduera da kirola, pertsonen heziketan eta garapen integralean laguntzen duena; halaber, bizi-kalitatea eta norberaren nahiz gizartearen ongizatea hobetzen laguntzen du”*.

Lege berriaren berrikuntza garrantzitsuenetako bat hau da: erakunde-esparrua dopinaren fenomenora egokitzea, Dopinaren aurkako Euskal Agentzia sortuta. 1998. urtean onartu zen indarrean dagoen Kirolaren Legea, eta ordutik igaro den denborak agerian utzi du dopinaren aurkako agentzia nazionalak sortzeko joera nagusitu dela. Mota horretako agentziak sortzeko ematen den argudioetako bat da askoz ere espezializatuagoak daudela zeregin jakin batzuetarako, eta, horrez gain, independenteak direla, funtzionalki. Bada, gogoan izan behar da goi mailako kirola eta errendimenduko gainerako kirol-jarduerak sustatzeko eginkizuna ditugula, batetik, Eusko Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzaren ardurapean, eta bestetik, dopina kontrolatzea; azken lan hori Dopinaren aurkako Euskal Agentziak egingo luke, eta bi eginkizun horiek bereiztea da kontua.

7/2006 Lege Organikoak berak autonomia-erkidegoetan dopinaren aurkako agentziak sortzea aurreikusten du, eta otsailaren 8ko 185/2008 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria, Dopinaren aurkako Estatuko Agentziaren estatutua onartzekoa, dopinaren aurkako agentzien batzordea eratzeaz mintzo da, *“baldin eta aplikazio-eremua autonomia-erkidegoa duten dopinaren aurkako agentziak daudela egiaztatzen bada”*.

Legeak nabarmen gogortu du dopinaren aurka borrokan egiteko lege-esparrua, baina gogortze hori kirolarien eta prozesuan esku hartzen duten gainerako pertsonen oinarrizko eskubide eta askatasunak errespetatu beharraz bateratzen saiatu da. Testuak oinarrizko ideia bat du abiaburu: dopinaren aurkako borroka ezin da edozein modutan eraman aurrera, eta kontu handiz zaindu behar dira dopinaren aurkako kontroletan parte hartzen duten kirolarien eskubideak, baina kontrolon eraginkortasuna inondik ere gutxitu

gabe. Eraginkortasun hori lortzeko, kirolariek dituzten eskubide batzuk orekatu egin beharko dira, dopinaren aurkako borrokan lortu nahi diren bidezko helburuekin proportzionalki jardun ahal izateko (Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren 2006ko uztailaren 18ko epaia).

Lege berri honekin, bestalde, federazioenak ez diren kirol-jardueretako dopina kontrolatu eta zigortzeko erregimena ezartzen da. Gaur egungo legerian federatutako kirolari buruz egiten diren aurreikuspenak beste kirol-jarduera batzuetara ere hedatu dira, horiek ere babestu beharra dagoela ikusten baita. Gai horretan, legeak 14/1998 Legearekin hasitako bideari jarraitzen dio, orduan ere aurreikusi baitzen zehapen-erregimena federazioen esparrutik kanporako ere, eta estatuko lege organikoak zabaldutako ildoan ere badoa, lehiaketetako ez den kirol-jardueretan ere zehapenak jarri ahal izatea aurreikusten baitu. Horren inguruan, legeak berariaz aipatzen ditu zenbait debeku, kirolean galarazita dauden substantzia eta metodoak banatzen edo merkaturatzen dituzten kirol-zentroei begira.

Dopina kontrolatzearen arloan, kontrolak egiteko beste modu batzuk berariaz jasotzen ahalegindu da legea. Dopinarekin inolako tolerantziarik izan nahi ez badugu, ez da nahikoa, besterik gabe, laginak hartu eta analisiak egitea. Beharrezkoa da iruzur egiteko beste bide batzuk ere kontrolatzea, hala nola erabilera terapeutikoko baimenak. Hori dela-eta, legeak ez du mugatzen dopinaren aurkako kontrola laginak hartzera, eta gainera, hartuko diren laginak ez dira kirolarien gernuarenak bakarrik izango; legeak beste lagin mota batzuk hartzeko atea zabalik uzten du, eta ez du inolako biderik inposatzen. Zientziaren eta teknologiaren arloko ikerketa eta aurrerapenen emaitzak izango dira unean-unean kontrol modurik egokiena zein den zehaztuko dutenak. Legeak aurrerapen hori mugatu ordez, ikuspegi irekia du, eta aurrerapen horiei euskarri juridikoa eskaini nahi die.

Bereziki aipatzekoa da testu berriak osasun-kontrolak deitutakoei emandako garrantzia. 7/2006 Lege Organikoaren irizpide berbera kontuan izanik, legean, kontzeptu horrek jarduera-multzo hau hartzen du bere baitan: kirol-jarduerak osasunari eragin diezazkiokeen ondorioak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek egokitzen hartzen dituzten jarduerak, bai eta dopinaren eta osasunaren alorrean legeak ezarritako betebeharrak kirolariek bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere. Horrez gain, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak zehaztuko du, lege hau erregelamendu bidez garatzeko arauak ezarritako moduan, zein kasutan izango den egokia kirolari bati lizentzia kentzea osasuna dela-eta.

Lege-testuan berariaz aipatzen da zenbait kirol-elkarte, kirolari eta pertsona fisiko eta juridiko batzuek debekaturik izango dutela laguntza publikoak jasotzea dopinarekin zerikusia duten egoera batzuetan.

14/1998 Legean arau-hausteen eta zehapenen tipifikazioa oso mugatua zen, eta lege berri hau baliatu da sortu diren premia berriei erantzun eta nazioarteko araudiak dioenera egokitzeko.

Erabilera terapeutikoko baimenen bidez gertatzen ari diren iruzur garrantzitsuei aurre egiten saiatu da legea; izan ere, gero eta garbiago ikusten da dopinari bide emateko aukera bihurtzen ari dela erabilera terapeutikoa. Kirolariak, beste edozein pertsonak bezala, gaixotu eta lesioak izan ditzakete, eta horiek sendatzeko tratamendu medikoa behar izango dute. Hori hala izanik, legeak zenbait kasutan erabilera terapeutikoko baimenak emateko aukera aitortzen du. Baina hori egitearekin batera, kirol-baja izenekoa ere zehazten du, eta egoera horren bidez, kirolariak erabateko askatasuna izango du tratamendu terapeutikoa jasotzeko, beste edozein pertsonak egiten duen gisan, baina tarte horretan ezin izango da lehiatu.

Lege honetan, dopinaren aurkako borroka modu integralean ulertu da. Ez da komeni dopinaren aurka kontrolen eta zigorren bidez egitea, eta prebentzioa alde batera uztea. Hori dela eta, legeak prebentzioaren arloan zenbait neurri hartu beharko direla zehazten du. Neurri horien artean ikerketa-lanak sartzen dira, eta ikerketaren arloko programa horiek aurrera eramateko modua izateko, legean informazioa emateko bide batzuk zehazten dira, hain zuzen ere eragile publiko eta pribatuei ikerketako programak aurrera eramatean erabiltzeko modukoak izan daitezkeen datuak helarazteko. Halaber, legeak berariaz ezarri du formazio- eta informazio-programak egitea, batik bat, klub, federazio, kirolari, teknikari, zuzendari eta gainerako kirol-eragileei zuzenduak; horien helburua dopinak kirolaren balioak arriskuan ez jartzea da, eta osasunari kalte larriak eragiten dizkieten eta debekatuta dauden substantziez eta metodoez ez baliatzea kirolariak. Merezi du bereziki adieraztea lehiaketa ofizialetakoa ez den errendimenduko kirolaren eremuan dopinaren aurkako borrokan sentsibilizatzeko berriazko programak aurreikusi direla; hauetaz ari gara: atletismoko proba herrikoietan, bizikleta-lasterketetan, gimnasioetan eta abarretan.

Lege honetan, dopin- eta osasun-kontrolekin zerikusia duten datuak (analisien emaitzak, azterketa medikoen emaitzak, osasun-kontrolen emaitzak, erabilera terapeutikoko baimenen eskaerak eta baimenak, eta abar) osasunari buruzko datu pertsonaltzat hartzen dira, eta horregatik behar dute babes berezia.

Azkenik, legeak, kontuan izanik kirol-espirtuaren aurkako egintzak saihestu nahi dituela eta kirolariaren osasuna babestea duela helburu, edozein dela kirolari-mota, araudi berezia ezarri du oso kirol-proba gogorretan edo baldintza fisiko gogorreko probetan parte hartzen duten kirolarientzat, batez ere herrikoientzat. Soilik lizentzia duten kirolarien osasuna zaintzea helburu duen legea ezin da lege ona izan; ezinbestekoa da antolatutako kirol-jardueretan parte hartzen duten kirolari guztien osasuna zaintzea, alde batera utzita lizentzia duten edo ez. Eta, bereziki, ezinbestekoa da arrisku gehien hartzen dituzten kirolari guztien osasuna zaintzea.

Azken batean, legea idazteko arrazoi nagusia 14/1998 Legean dopinaren arloan jasotzen diren xedapenak gaur egungo egoerara egokitu beharra izan da, nabarmena delako premia hori; eta Euskadik asmo handiko esparru juridikoa izatea ere lortu nahi du, gure kirolek dopinaren gaitz larria eraginkortasunez erauzten saiatzeko.

Genero-eraginaren ebaluazioaren xedea da diskriminazioko egoerak laguntzen dituzten nahi gabeko ondorio negatiboak saihestea eta dopinaren inguruko Batasuneko politiken kalitatea eta eraginkortasuna hobetzea. Ebaluazio horrek egiaztatzen duenez arau-proposamenak emakume eta gizonengan eragin desberdina izan dezakeen, adierazi behar dugu nazioartean gai honen inguruan egin diren azterlan gutxiek ez dutela argibide askorik ematen.

Leedseko Unibertsitateak Dopinaren Aurkako Mundu Agentziarentzat kiroleko dopinaren inguruan prestatutako nazioarteko literaturaren azken berrikuspenean adierazten da oinarri enpiriko eskasa duela arlo honen plangintza estrategikoak. Oinarri praktikoa ahula izateak mugatu egiten du dopinaren aurkako programetan eta araudiaren diseinuan helburu egoki eta eraginkorrak ezartzeko gaitasuna, bereziki kirol-esparruan hegemonikoak izan ez diren kolektiboentzat, adibidez emakumeentzat.

Literatura medikoan adostasuna nahiko zabala den arren substantzia debekatuak erabiltzeak gizon eta emakumeen gorputz, errendimendu eta osasunari desberdin eragiten diotzen inguruan, oraindik ez dira ezagutzen gizon eta emakumeek kiroleko dopinaren antzemate, balorazio eta motibazioan izan ditzaketen balizko desberdintasunak.

Irudipena den arren desberdintasunak badaudela, ez dago berariazko ikerketarik. Azken urteetan gai horien inguruan mundu-mailan egindako ikerketa garrantzitsu gehienak gizonen laginekin egin dira. Ikerketa bakarra egin da emakumeekin, eta emaitzak ezin dira estrapolatu. Beraz, ezinbestekoa da gizonen eta emakumeen dopinaren aurreko diskurtsoaren

desberdintasunak ikertzea, dopinak generoaren arabera izan dezakeen berariazko kulturak antzeman eta ulertzeko.

Dopinaren Aurrakako Euskal Agentziaren funtzioetarikoa bat –lege-proiektuaren 12. artikuluan biltzen dira- da dopinaren arloan, ikerketa zientifiko eta teknikoa bultzatzea, baita garapena eta berrikuntza ere, garapena edo berrikuntza bultzatzen duten proiektu zehatzak bultzatuz. Burutu beharreko ikerketen artean, komeni da Dopinaren aurrakako Legearen testuan biltzen diren neurrien eragina bereizita aztertzea, bai eta emakume eta gizonengan dituzten ondorioak ere.

Bitartean, eta horrelako eraginik antzeman ez denez, Berdintasunerako Legearen ondoriozko neurri orokorrak soilik hartu dira: hizkera, emakume eta gizonek ordezkari izatea izatea organoetan.

Gasteizen, 2010eko urriaren 27an

Sinatua: Patxi Mutiloa Aldazabal

Kirol zuzendaria

IX

INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER /
EMAKUNDEAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

Se emite el presente informe en el ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005 y en las Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2007 y realizar propuestas de mejora.

Con fecha 12 de noviembre de 2010 se da entrada en Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer al oficio del Director de Deportes del Departamento de Cultura, en virtud del cual y de conformidad con lo establecido por la directriz segunda del referido Acuerdo del Consejo de Gobierno, se solicita la emisión del informe preceptivo de Emakunde sobre el anteproyecto de Ley más arriba referenciado.

El objeto del anteproyecto es adaptar la normativa vigente en materia de dopaje a la nueva realidad y dotar al País Vasco de un marco jurídico ambicioso dirigido a erradicar de forma eficaz la lacra del dopaje en el deporte.

Tratándose de una disposición de carácter general, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la directriz primera, el proyecto debe ser evaluado sobre su impacto de género para analizar si tiene repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad.

En este sentido, y de acuerdo con lo previsto por el apartado 4 de la directriz primera, el órgano promotor de la norma ha emitido el correspondiente Informe de Impacto en función del género, aunque sin completar los apartados y cuestionarios relativos al procedimiento ordinario requeridos por el apartado sexto de la directriz primera y el Anexo A.

Por otro lado, y en relación al contenido del anteproyecto de ley se realizan las siguientes observaciones y propuestas:

- Se valora de forma positiva la referencia incluida en el apartado i) del artículo 12 del anteproyecto de ley para la integración de la perspectiva de género en las actividades de investigación, divulgación, formación y sensibilización de la Agencia Vasca Antidopaje. Y es que, según se explica en el Informe de impacto de género remitido, ante la falta de información sobre las posibles circunstancias diferenciales del dopaje en el rendimiento deportivo y en la salud de mujeres y hombres, así como, en relación a la percepción, valoración, motivación e involucración de unas y otros en el consumo de sustancias dopantes, resulta imprescindible fomentar la detección y el entendimiento de las incidencias de género en este ámbito.

En este sentido, y de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 4/2005, consideramos que también sería necesario integrar la perspectiva de género en el sistema de información sobre el dopaje, mediante la inclusión sistemática de la variable de sexo en la recogida y explotación de los datos relativos a la población deportiva, la realización de análisis diferenciados de las expectativas y opiniones de los y las deportistas, el diseño y la introducción de indicadores de género, etc. Así, se sugiere incluir una referencia expresa en este sentido en el artículo 43.

- Con el fin de facilitar su comprensión, se recomienda reformular el apartado v) del artículo 12 del anteproyecto como sigue *"Promover la formación de*

personal para la recogida de muestras en los controles de dopaje en orden a su posterior habilitación, fomentando una participación equilibrada de mujeres y hombres que asegure el cumplimiento de las previsiones legales sobre la presencia de una persona del equipo de recogida que sea del mismo sexo que el o la deportista”.

- En el artículo 6.1.m) se recomienda precisar que la habilitación de áreas para la realización de controles de dopaje serán adecuadas a las necesidades de mujeres y hombres deportistas.
- Se propone incorporar en el artículo 11.7 del anteproyecto una cláusula para promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición del Consejo Consultivo de la Agencia Vasca Antidopaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres, en relación a los parámetros de representación previstos con carácter general en el artículo 3.7 de la misma Ley.
- Por último, nos gustaría señalar que en la redacción del anteproyecto se ha hecho, con carácter general, un uso no sexista del lenguaje de conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 4/2005. No obstante se recomienda revisar y adecuar algunos términos redactados exclusivamente en masculino como “usuarios”, “los médicos” y “veterinarios”.

Finalmente, se recuerda que, si se introducen cambios en el Informe Provisional de Impacto en Función del Género a la vista de las propuestas contenidas en el presente informe o como consecuencia de modificaciones realizadas en el proyecto normativo, aquéllos habrán de ponerse en conocimiento de este Instituto remitiendo, en su caso, la versión definitiva del Informe antes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. En caso contrario, se entenderá que el Informe Provisional se eleva directamente a definitivo a la fecha de la referida publicación. Todo ello, a fin de dar cumplimiento efectivo a la Directriz segunda



que establece que Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer debe realizar un seguimiento de los Informes de Impacto en Función del Género y llevar un registro interno de los mismos, a los efectos de que los departamentos y los organismos y entidades dependientes o vinculadas a la Administración General de la Comunidad Autónoma puedan tener acceso a ellos.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2011.

Ido.: Noemí Alangua Elvira
Técnica del Área de Cooperación

Ido.: M^a Isabel Ramos Mallaviabarrena
Asesora jurídica





**KIROJ. ARLOKO DOPATZEAREN AURKAKO LEGE-
 ALBAREPROIEKTUARI BURUZKO TXOSTENA**

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikulua Emakunde-Emakumearen Baskal Erakundeari emandako eskumenari jarraiki egin dugu txosten hau.

Txostenaren helburua da batetik, 4/2005 Legearen 19. eta 20. artikuluetan eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko otsailaren 13ko Erabakiaz onartutako Jarraibideetan agindutakoa behar bezala betetzen dela egiaztatzea -genero eraginaren aurreko ebaluazioa egiteko eta gizonen eta emakumeen desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko Jarraibideak-, eta bestetik, hobekuntzak proposatzea.

2010eko azaroaren 12an, Kultura Saileko Kiroletako zuzendariaren ofizio bati sarrera eman zaio Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundean. Aipatutako lege-aurreproiektuaren gainean Emakundek nabitaezko txostena egin dezala eskatzen da ofizio horretan, Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakiaren bigarren jarraibidean ezarritakoarekin bat etorriz.

Aurreproiektuaren xedea da dopinaren alorrean indarrean den araudia errealitate berrira egokitzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoa esparru juridiko anbiziotsu batez hornitzea, kirolean dagoen dopinaren gaitza errotik kentzeko.

Xedapen orokor bat denez, eta lehenengo jarraibideko bigarren atalean xedatutakoarekin bat, generoaren araherako eraginari buruzko txostena egin behar zaio aurreproiektuari, hain zuzen ere, emakumeen eta gizoneen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sostatzeko helburu orokorrari mesede edo kalte egiten dion aztertzeke.



Horri dagokionez, lehenengo jarraibideko 4. atalean aurreikusitakoaren arabera, arauaren organo sustatzaileak generoaren araberako Eraginaren Txostena egin du, nahiz eta bete gabe utzi dituen A eranskinean eta lehenengo jarraibideko seigarren atalean prozedura arruntetako eskatzen diren atalak eta galdesortak.

Bestalde, lege-aurreproiektuaren edukiari dagokionez, ohar eta proposamen hauek egiten ditugu:

- Positibotzat jotzen dugu lege-aurreproiektuaren 12. artikuluko i) idatz-zatian sartuko erreferentzia, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak egiten dituen ikerketa-, dibulgazio-, prestakuntza- eta sentsibilizazio-jardueretan genero-ikuspegia txertatzeari buruzkoa, alegia, izan ere, egindako genero-eraginaren txostenean azaltzen denez, ezinbestekoa da eremu horretan genero-eraginaren hantematea eta ulermena hultzatzea, zeren eta ez daukagu informaziorik kirol-errendimenduan eta emakumeen eta gizonen osasunean dopinak izan ditzakeen inguruabar bereizgarriei buruz; ez dugu informaziorik, halaber, sustantzia dopatzaileen kontsumoan batzuek eta besteek duten pertzepzio, balorazio, motibazio eta implikazioari buruz.

Horren haritik, 4/2005 Legearen 16. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etortziz, gure ustez, genero-ikuspegia txertatu beharra dago dopinari buruzko informazio-sisteman, kirolarietara buruzko datuak batu eta ustiatzerakoan sexuaren aldagaia sistematikoki sartuz, kirolarien itxaropen eta iritziak sexuaren arabera bereizita aztertuz, eta genero-adierazleak diseinatu eta sartuz, besteak beste. Hori dela eta, 43. artikuluan beren-beregi horri buruzko erreferentzia sartzeko gomendatzen dugu.

- Gaztelaniazko testuan, ulerterrazago egiteko, aurreproiektuaren 12. artikuluko v) idatz-zatia honela birformulatzeko gomendatzen dugu: *"Promover la formación de personal para la recogida de muestras en los controles de dopaje en orden a su posterior habilitación, fomentando una participación equilibrada de mujeres y hombres que asegure el cumplimiento de las*



previsiones legales sobre la presencia de una persona del equipo de recogida que sea del mismo sexo que el o la deportista”.

- 6.1.m) artikuluan, dopin-kontrolak egiteko prestatzen diren eremuak emakumeen eta gizon kirolarien beharretara egokitutakoak izan behar dutela zehazteko gomendatzen dugu.
- Aurreproiektuaren 11.7 artikuluan klausula bat sartzea proposatzen dugu: Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren Aholku Kontseiloaren osakeran emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatzeko klausula, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako Legearen 23. artikuluan -lege bereko 3.7 artikuluan oro har aurreikusitako ordezkaritza-parametroei dagokionez- ezarritakoarekin bat.
- Azkenik, adierazi nahi genuke aurreproiektua, oro har, hizkera ez sexistaz idatzi dela, 4/2005 Legearen 18.4 artikuluan aurreikusitakoari jarraituz. Dena den, soilik maskulinoz adierazitako termino batzuk berrikusi eta egokitzeko gomendatzen dugu, hala nola, “usuarios”, “los médicos” eta “veterinarios”.

Azkenik, gogorarazi nahi dizuegu txosten honetan jasotako proposamenak aztertuta, edo arau-proiektuan egindako aldaketen ondorioz, Generoaren Araberako Eragina Ebaluatzeko Behin-behineko Txostenean aldaketak eginez gero, erakunde honi jakinarazi behar dizkiozuela, eta, behar izanez gero, txostenaren behin betiko bertsioa bidali beharko duzuela, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu baino lehen. Hala egiten ez bada, argitalpenaren eguncan behin-behineko txostena zuzenean behin betiko bihurtu dela esan nahiko du. Bigarren jarraibidea betetzeko da helburua, alegia: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak generoaren araberako eragina ebaluatzeko txostenen jarraipena egin behar du, eta horien barne erregistroaz arduratu. Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren mende edo hari lotutako sailek, erakundeek eta entitateek txostenetara jotzeko aukera izan dezaten.

X

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA / BERRIKUNTZAREN ETA ADMINISTRAZIO
ELEKTRONIKOAREN ZUZENDARITZAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2010-037

Denominación: Proyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte

Aprobado:

Fdo. : Maki Ortiz Sánchez

Director de Innovación y Administración

Electrónica

Fecha: 03-11-2010

Comunicado:

Sello de la Dirección

JUSTIZIA ETA MERKATU
ADMINISTRAZIO SAILA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3 NOV 2010

E. Iñiguez Ojeda (Magistrado)
Ingeniero Comercial (1997)

SAHREERA

Z.

IRTEERRA

Z.



INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2010-037

Página: 2/3

Propuesta:

El Director de Deportes del Departamento de Cultura, mediante escrito con registro de entrada en esta Dirección de 11-10-2010, nº 874415, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.c) del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública, solicita informe del **Proyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte**, adjuntando copia del mismo al suyo de referencia

Valoración:

El Proyecto de Ley de referencia comprende:

- Un Preámbulo explicativo y de justificación de la necesidad de esta Ley, para adaptar a Ley 14/1998, en materia de dopaje, a la nueva realidad y para dotar a Euskadi de un marco jurídico en la materia.
- Sete Capítulos que en su conjunto, incluyen 53 Artículos.
- Ocho Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, dos Disposiciones Derogatorias y seis Disposiciones Finales.

De los siete Capítulos precitados, merece especial mención el Segundo, titulado Organización Administrativa, que comprende 3 Artículos, el 10º, 11º y 12º, relativos, respectivamente a la Creación, Organización y Funciones de la Agencia Vasca Antidopaje

En lo que a la Agencia Vasca Antidopaje se refiere, cabe destacar que

- Se tratará de un ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que actuará con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
- Estará sujeta al Derecho Público vigente en materia de adquisiciones patrimoniales y contratación, perteneciendo sus bienes y derechos al patrimonio de la CAPV.
- El personal a su servicio estará sometido a la normativa reguladora de la función pública en la Administración General de la CAPV.

**INFORME DE ORGANIZACIÓN**

Documento: IO-2010-037

Página: 3/3

- La Agencia se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en su Estatuto propio, que será aprobado por Decreto del Gobierno Vasco

A propósito del futuro Estatuto propio de la Agencia, el mismo deberá recoger detalladamente, en su momento, todos los aspectos de organización, funcionamiento y procedimiento teniendo en cuenta los criterios de austeridad que prevé la Disposición Final Primera 2 del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

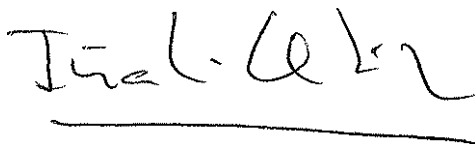
Conclusiones:

De acuerdo con las funciones asignadas a través del artículo 17 del Decreto 472/2009, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública, éstas son las observaciones que, desde el punto de vista del diseño organizativo, formulamos al Proyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte

ANTOLAMENDU-TXOSTENA	
Dokumentua:	IO-2010-037
Izena:	Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Proiektua

Onartua:

Izpta.: Iñaki Ortiz Sánchez



Erregistro Orokor Nagusia
Registro General Central

SARRERA	IRTEERA
Zk.	Zk. y6S^°i

Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoaren zuzendaria

Data: 2010-11-03

Jakinarazia:

2010eko azaroaren 3an
Erregistro Orokor Nagusia

ANTOLAMENDU-TXOSTENA	
Dokumentua:	IO-2010-037
Izena:	Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Proiektua

Proposamena:

Kultura Saileko Kirol zuzendariak **Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Proiektuaren** txostena eskatzen du. Horretarako, idatzi bat igorri du eta idatzi horri Lege Proiektuaren kopia bat erantsi dio, abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuak, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, 17.c) artikuluan xedatutakoa betez. Zuzendaritza honek 2010-10-11n jaso du idatzia, eta 874415 erregistro-zenbakia du.

Balioespena:

Erantsitako Lege Proiektua modu honetara osatuta dago:

- Sarrera: Horretan, Legea azaltzen da, eta Legea egiteko premia arrazoitzen da; hau da, Kirolaren 14/1998 Legeak dopinari buruz dioena egoera berrira moldatzea eta Euskadin gai horrek esparru juridikoa izatea.
- Zazpi kapitulu: Guztira, 53 artikulua jasotzen dira.
- Zortzi xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, bi xedapen indargabetzaile eta sei azken xedapen ditu.

Aipatutako zazpi kapituluetatik bigarrena nabarmendu behar da, Antolaketa Administrazioa izenekoa, alegia. Horretan, 3 artikulua daude: 10., 11. eta 12. artikulua. Horietan jasotzen dira, hurrenez hurren, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzea, erakundearen antolaketa, eta horren funtzioak.

Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari dagokionez, zera azpimarratu behar da:

- Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia zuzenbide publikoko erakundea izango da; berezko nortasun juridikoa eta erabateko gaitasuna izango ditu, eta herri-administrazioekiko inongo loturarik gabe beteko ditu bere eginkizunak.
- Ondarerik eskuratzeko edo ezer kontratatzeko, indarrean dagoen zuzenbide publikoa bete beharko du Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak eta Agentziaren ondasun eta eskubideak Euskal Autonomia Erkidegoaren ondarekoak izango dira.
- Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren zerbitzura dauden langileei Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzio publikoa arautzen duen araudia aplikatuko zaie.

ANTOLAMENDU-TXOSTENA	
Dokumentua:	IO-2010-037
Izena:	Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Proiektua

- Lege honetan ezarritakoak eta Agentziaren beraren estatutuak arautuko dute Agentzia. Agentziaren estatutua Eusko Jaurlaritzak onartuko du.

Agentziaren estatutuari dagokionez, Agentziak berak jaso beharko ditu, zehatz-mehatz eta dagokionean, antolaketaren, funtzionamenduaren eta prozeduraren alderdi guztiak. Horretarako, kontuan izan beharko ditu zorrotasun-irizpide jakin batzuk; hain zuzen ere, maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuak, Lehendakariarenak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, lehenengo azken xedapenean aurreikusitakoak.

Ondorioak:

Horiek dira antolamenduaren diseinuaren aldetik Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Proiektuari egin dizkiogun oharra, betiere kontuan hartuta abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuak, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, 17. artikuluan emandako funtzioak.

XI

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/HERRI ADMINISTRAZIOETAN
HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



KULTURA SAILA

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
Herri Administrazioetan Hizkuntza
Normalizatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Viceconsejería de Política Lingüística
Dirección de Normalización Lingüística de
las Administraciones Públicas

Patxi Mutiloa Aldazabal
Director de Deportes.
Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deporte.
Departamento de Cultura.

Estimado señor,

El pasado 6 de octubre, recibimos, en esta Viceconsejería de Política Lingüística, remitido desde la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura, el Anteproyecto de Ley Contra el Dopaje en el Deporte, para que emitiéramos el correspondiente informe preceptivo.

Como respuesta a dicha solicitud, basándonos en el artículo 15.2.g) del Decreto 25/2006 de 14 de Febrero por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura, y en el Decreto 128/2007, de 31 de Agosto, por el que se establece la normativa a seguir por el Departamento de Cultura dentro del procedimiento de redacción de disposiciones generales para evacuar informes, informo de la siguiente manera:

a) Nivel de cumplimiento de la normativa lingüística.

Analizado el Anteproyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte, manifiesto que cumple la normativa lingüística en vigor.

b) Impacto sobre la normalización del uso del euskera.

Propuestas encaminadas a que el anteproyecto de ley objeto de análisis influya positivamente en el uso del euskera:

b.1- Debe tenerse en cuenta que habrá tanto personas físicas como representantes de personas jurídicas que, como consecuencia de este anteproyecto de ley, mantendrán diversas relaciones con las administraciones públicas, federaciones deportivas del País Vasco y con la Agencia Vasca Antidopaje, que es una institución de Derecho Público, tal y como se especifica en el artículo 10 de este anteproyecto de ley. La Ley 10/1982 Básica de Normalización del Uso del Euskera, de 24 de noviembre, prevé que la ciudadanía podrá utilizar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones tanto orales como escritas con la administración pública, y que tiene el derecho a que se le atiende en esa misma lengua (artículos 5.2 y 6.1). Así mismo, el Decreto 16/2006, de 31 de enero, sobre Federaciones Deportivas del País Vasco, dispone que dichas federaciones deben utilizar el euskera y el castellano (artículos 25.1, 65.3, 67.2, 69.3, 165, 166 y 167).

Por lo que proponemos que se introduzca esta nueva disposición en el Anteproyecto de Ley Contra el Dopaje en el Deporte:

-Se garantizará el derecho de las personas físicas y representantes de personas jurídicas a utilizar tanto el euskera como el castellano en las relaciones, tanto orales como escritas, que puedan mantener, en el marco de esta ley, con las administraciones públicas, las federaciones deportivas del País Vasco o con la Agencia Vasca Antidopaje, así como el derecho a ser atendidos en la lengua de su elección.

b.2.- Según se prevé en el anteproyecto de ley (artículo 10), la Agencia Vasca Antidopaje es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, que actúa con plena independencia respecto a las administraciones públicas.

Deben tenerse en cuenta el carácter público de la Agencia Vasca Antidopaje así como la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, que prevé el uso de ambas lenguas por parte de los poderes públicos (artículo 8).

Por lo que proponemos que se introduzca este nuevo apartado en el Anteproyecto de Ley Contra el Dopaje en el Deporte:

-La Agencia Vasca Antidopaje utilizará el euskera y el castellano en su actividad y en sus relaciones externas.

b.3- Según el anteproyecto de ley objeto de análisis (artículo 11.7), se prevé la existencia de una comisión asesora dentro de la Agencia Vasca Antidopaje, encargada de asesorar a la dirección. Estará compuesta de representantes de la administración general de la Comunidad Autónoma Vasca, de los territorios históricos y de las federaciones deportivas y por personas expertas en la materia. Considerando la composición de la comisión asesora, formada por representantes de las administraciones públicas y del sector privado, y considerando, así mismo, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, proponemos se inserte un nuevo párrafo en el artículo 11.7:

- Los miembros de la comisión asesora podrán utilizar el euskera o el castellano en sus reuniones. Así mismo, en las convocatorias, órdenes del día, actas u otros escritos, se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 2010.

Patxi Martínez de Marigorta Guzmán
Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.



2010 AZA. 02

Euzko Jaurlaritzaren
Politikarako Sailburuordetza

Patxi Mutilloa Aldazabal

Kirol zuzendaria

Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza

Kultura Saila

SARRERA	IRTEERA
	964609

Jaun hori,

Kirol dopinaren aurkako Lege Aurreproiektua jaso genuen Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzan iragan urriaren 6an, Kultura Saileko Kirol Zuzendaritza berretatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz.

Eskaera horri erantzunez, eta Kultura Sailaren egitura organikoa ezarri zuen otsailaren 14ko 25/2006 Dekretuaren 15.2.g) artikulua zein xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan Kultura Sailak txostenak bideratzeko bete behar duen araudia ezartzen duen abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut:

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila.

Kirol dopinaren aurkako Lege Aurreproiektua aztertu ondoren, egungo hizkuntza araudiarekin bat datorrela adierazten dut.

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina.

Aztergai dugun Lege Aurreproiektuak euskararen erabileraren gaineko eragin positiboa izan dezan, proposamen hauek egiten ditugu:

b.1- Aintzat hartu behar dugu Lege Aurreproiektuaren ondorioz pertsona fisikoek eta pertsona juridikoetako ordezkariak harremanak izango dituztela herri administrazioekin, Euskadiko Kirol Federazioekin eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarekin, zuzenbide publikoko erakundeak beraz, Lege Aurreproiektuaren 10. artikuluari jarraituz, Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak aurreikusten du herriarrek euskara eta gaztelania erabil dezaketela ahoz nahiz idatziz, herri administrazioekiko harremanetan, arteta hizkuntza berean jasotzeko eskubidea bera (5.2.a eta 6.1 artikulua). Halaber, Euskadiko Kirol Federazioei buruzko urtarilaren 31ko 16/2006 Dekretuak xedatzen du federazio horiek euskara eta gaztelania erabili behar dituztela (25.1, 65.3, 67.2, 69.3, 165, 166, 167 artikulua).

Beraz, Kirol dopinaren aurkako Lege Aurreproiektuan xedapen hori aztertatzeko proposatzen dugu, eduki honekin:

2010 AZA. 03

Euzko Jaurlaritzaren
Politikarako Sailburuordetza

SARRERA	IRTEERA
93493	26

-Lege honen ondorioz herri administrazioekin, Euskadiko Kirol Federazioekin eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentziarekin dituzten harremanetan, pertsona fisikoei eta pertsona juridikoetako ordezkariak euskara eta gaztelania, ahoz nahiz idatziz, erabiltzeko eta arreta hizkuntza berean jasotzeko duten eskubidea bermatuko da.

b.2- Lege Aurreproiektuan aurreikusten denaz (10. artikulua), Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia zuzenbide publikoko erakundea da, berezko nortasun juridikoa duena eta herri administrazioei lotuta izan barik jarduten duena.

Kontuan izan behar dugu Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren izatea publiko hori, eta Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea, honek aurreikusten baitu herri publikoek bi hizkuntza ofizialak erabiliko dituztela (8. artikulua).

Beraz, Kirol dopinaren aurkako Lege Aurreproiektuaren 10. artikuluan paragrafo berria txertatzeko proposatzen dugu, eduki honekin:

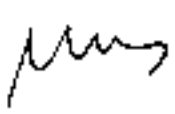
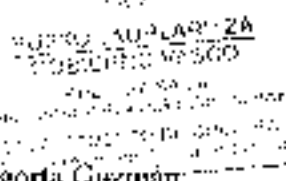
-Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak euskara eta gaztelania erabiliko ditu bere jardunean eta kanpoko harremanetan.

b.3- Aztergai dugun Lege Aurreproiektuaren arabera (11.7 artikulua), Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren barruan Aholku Batzordea egongo da, zuzendaritza aholku emango duena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko, lurralde historikoetako eta kirol federazioetako ordezkariak nahiz pertsona adituak osatuko dutena. Aholku Batzordearen osaketa ikusita, non herri administrazioaren ordezkariak eta arlo pribatuko pertsonak egongo diren, eta Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea aintzat hartuta, Lege Aurreproiektuaren 11.7 artikuluan paragrafo berria txertatzeko proposatzen dugu, eduki honekin:

-Aholku Batzordeko kideek batzarretan euskara eta gaztelania erabili ahal izango dute. Era berean, deialdietan, gai-zerrendetan, akteetan eta beste idazkietan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.

Adeitasunez.

Gasteizen, 2010eko urriaren 27an.



 Patxi Martínez de Marigorta Guzmán
 Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria

XII

DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/
EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO
BATZORDEAREN IRIZPENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.

DICTAMEN 10/11

sobre el Anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte.

Bilbao, 4 de mayo de 2011

I.- INTRODUCCIÓN

El día 26 de marzo de 2011 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social Vasco escrito del Departamento de Cultura, solicitando informe sobre el Anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte, según lo establecido en el artículo 31 a) de la Ley 9/1997, de 27 de junio, del Consejo Económico y Social Vasco.

De manera inmediata fue enviada copia del documento a todos los miembros del Pleno del Consejo a fin de que remitiesen sus propuestas y opiniones y dar traslado de las mismas a la Comisión de Trabajo pertinente según lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Económico y Social Vasco. El día 18 de abril de 2011 se reúne la Comisión de Desarrollo Social y a partir de los acuerdos adoptados, se formula Proyecto de Dictamen para su elevación al Pleno del Consejo de 4 de mayo donde se aprueba por unanimidad.

II.- ANTECEDENTES

La vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, introdujo la regulación del ámbito del dopaje, partiendo de la consideración de que los poderes públicos y las organizaciones deportivas tienen responsabilidades complementarias al respecto. Los artículos 64 a 67 de esta norma contienen diversas previsiones sobre esta problemática, y constituyeron en el momento de su promulgación un importante peso para dotar a la CAPV de una regulación propia para combatir la lucha del dopaje.

El tiempo transcurrido desde 1998 ha puesto de manifiesto nuevas problemáticas e importantes transformaciones organizativas y normativas en el ámbito estatal e internacional. Los eventos deportivos se han mercantilizado notablemente y se organizan a menudo por entidades ajenas al mundo deportivo para las cuales no estaba prevista la normativa y, además, el dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva y de la salud individual del deportista para convertirse en un auténtico problema de salud pública.

Por otra parte, desde la aprobación de la Ley 14/1998, el marco jurídico internacional de la lucha contra el dopaje ha experimentado profundas reformas, ante la constatación de la necesidad de profundizar en la colaboración entre los poderes públicos y las organizaciones deportivas. Fruto de ello se constituyó en 1999 la Agencia Mundial Antidopaje, que en 2003 elaboró el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que lo complementan. Este Código, en principio, no tenía carácter vinculante en el Derecho Internacional Público, pero esta situación se enfrenta en proceso de cambio con la entrada en vigor, en 2007, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Por todo ello, con la presente Ley se trata, también, de armonizar la normativa vasca de lucha contra el dopaje con los principios del citado Código, a fin de alcanzar mayor eficacia en el combate del dopaje en el deporte.



CES

DICTAMEN 10/11

Por último, también se han experimentado importantes cambios en el contexto normativo estatal, con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje.

En suma, la normativa que se contiene en el proyecto de Ley que se nos consulta se basa en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales y nacionales más avanzados en la lucha de contra el dopaje en el deporte. La estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exige un marco jurídico común en la lucha contra el dopaje en el deporte. En la CAPV, además, se celebran competiciones deportivas internacionales y estatales con participación de deportistas, clubes y federaciones de diversa procedencia, y ello exige una normativa mínimamente armonizada.

III.- CONTENIDO

El Anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte se compone de Exposición de motivos, 53 artículos contenidos en siete Capítulos, ocho disposiciones adicionales, tres transitorias, dos derogatorias y seis disposiciones finales, resumiéndose a continuación su contenido:

Exposición de motivos

En primer lugar, el régimen normativo introducido en la CAPV por la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco, aparece hoy día necesitado de reformas y actualizaciones para combatir un fenómeno, el dopaje, que socava la autenticidad del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han preciado de mismo, muy particularmente en el artículo 2.º de la Ley 14/1998, que dispone que "el deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social".

Una de las novedades más importantes de la nueva Ley es la adecuación del marco institucional al fenómeno de dopaje con la creación de la Agencia Vasca Antidopaje. El tiempo transcurrido desde 1998 ha puesto de manifiesto la tendencia generalizada a la creación de agencias nacionales antidopaje. Se trata de separar las funciones de promoción del deporte de alto nivel y de las demás manifestaciones del deporte de rendimiento, que siguen bajo el paraguas de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, y el control de las prácticas de dopaje, que está a dirigido por la Agencia Vasca Antidopaje.

En la Ley se produce un endurecimiento notable del marco legal de la lucha contra el dopaje, y parte de la idea de que "la lucha contra el dopaje no puede llevarse a cabo de cualquier modo y de que se debe ser exquisito con los derechos de las y los deportistas implicados, sin merma alguna de la eficacia de éstos. Para alcanzar tal eficacia, algunos derechos de las y los deportistas deben ser ponderados de modo proporcional a los fines legítimos que se consigan en la lucha contra el dopaje.

Por otra parte, con la nueva ley se aplica también el régimen de control y represión contra el dopaje a las actividades deportivas no federativas, ampliándose las actuales previsiones legales sobre el deporte federado a otras realidades deportivas que también son merecedoras de protección.

En materia de control de dopaje, la Ley hace un esfuerzo por contemplar de forma expresa otras modalidades de control, por entender que es necesario controlar otras vías de fraude como las autorizaciones de uso terapéutico. Por ello, la



C E S

DICTAMEN 10/11

La Ley no restringe los controles antidopaje a las tomas de muestras de la orina de las y los deportistas, sino que abre los controles a otros tipos de muestras, sin imponer vía específica alguna.

Mención especial requiere el tratamiento que el nuevo texto otorga a los denominados controles de salud. Siguiendo el criterio de la Ley Orgánica 7/2006 del Estado, se incluyen bajo ese concepto el conjunto de actuaciones que la Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva, así como a controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones previstas en la Ley en materia de dopaje y salud. Asimismo, la Agencia Vasca Antidopaje determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de la licencia a deportistas por razones de salud. A diferencia de la legislación estatal, los controles de salud no se insertan en el marco de las relaciones laborales, sino que se ha optado por facultar a cualesquiera entidades deportivas a realizar estos controles a sus deportistas, con independencia de que tengan una relación laboral.

Por otra parte, la tipificación de las infracciones y sanciones de la Ley 14/1958 era muy limitada y se ha aprovechado esta Ley para ajustarla a las necesidades que han ido surgiendo y a la normativa internacional, con un régimen inspirado en la Ley Orgánica 7/2006 del Estado.

Asimismo, la Ley trata de dar respuesta al importante fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico. Los deportistas pueden padecer enfermedades o lesiones que precisan tratamiento médico. La posibilidad de solicitar una autorización de uso terapéutico se reconoce en la Ley en determinadas circunstancias. Junto a esta vía se instaura la figura de la baja deportiva, que permite un tratamiento terapéutico totalmente libre, pero sin posibilidad de competir.

La lucha contra el dopaje se concibe en esta ley de forma integral, además de regular la práctica del dopaje, contempla en su articulado, de forma especial, la investigación, sensibilización, formación e información de las entidades profesionales y personas deportistas sobre los efectos que las diferentes sustancias y métodos utilizados para mejorar el rendimiento deportivo pueden tener sobre la salud. Especial mención se debe hacer a la previsión de programas específicos de sensibilización en la lucha contra el dopaje en el campo del deporte que no es de competencias oficiales de rendimiento: pruebas atléticas populares, carreras ciclistas, gimnasios, etcétera.

Capítulo especial precisa, por último, la protección de datos de carácter personal en materia de dopaje. La Ley incluye disposiciones que inciden, aunque no regulan, en el derecho de deportistas y de otras personas a la protección de sus datos de carácter personal. En algunos supuestos se contemplan deberes de comunicación de determinadas informaciones a las autoridades competentes, en otros se contempla el tratamiento de datos de carácter personal, etcétera. La Ley parte de la consideración que los datos relacionados con los controles de dopaje y de salud (resultados de los análisis de los reconocimientos médicos, de los controles de salud, solicitudes y concesiones de autorizaciones de uso terapéutico, etcétera) son datos de carácter personal relativos a la salud y, por dicha razón, merecedores de una especial protección.

Capítulo I: Disposiciones generales (arts. 1 a 9)

A los efectos de esta Ley, el dopaje consiste en el consumo por el o la deportista de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos para aumentar artificialmente su rendimiento deportivo representando ello un acto contrario al espíritu deportivo. El ámbito material general de la presente Ley está constituido, en principio, por las actividades y competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco. El ámbito subjetivo general de aplicación de esta Ley se extiende a las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilita para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco así como a todos aquellos y aquellas deportistas mientras residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco.



CE
S

DICIEMBRE 10/11

El dopaje es contrario a los valores de la ética deportiva y del olimpismo, y puede afectar gravemente a la salud de los y las deportistas o, en su caso, de los animales. El dopaje es rechazable en todas sus formas, de modo que está prohibido recomendar, promover, autorizar, permitir, facilitar, vender, suministrar, consumir o utilizar sustancias y métodos que figuren prohibidos en la lista que autoriza el organismo competente siempre que dichas acciones se realicen por personas no autorizadas para ello o fuera de los cauces, objetivos o condiciones establecidas por la normativa correspondiente.

Los y las deportistas tienen la obligación de someterse, dentro o fuera de competencias, al control de dopaje al que se les requiera por las autoridades competentes y a los exámenes, revisiones, comprobaciones o investigaciones complementarias. La erradicación del dopaje en el deporte debe ser un objetivo fundamental de todas las organizaciones deportivas, y la formación, la información y la investigación son instrumentos indispensables para ello.

Los y las deportistas tienen la obligación de conocer las disposiciones y acuerdos aplicables en el campo del dopaje y someterse a todas las medidas derivadas de los mismos. Asimismo, deben presentarse a las tomas de muestras y demás controles en que sean requeridos y proporcionar toda la información que le sea solicitada. Son responsables de todo lo que ingieran o utilicen y deben informar al personal médico de su condición de deportista y de su obligación de no consumir o utilizar sustancias o métodos prohibidos de la reglamentación deportiva y asegurarse, en la medida de sus posibilidades, de que el tratamiento terapéutico prescrito no viola las normas antidopaje.

Tienen derecho, por otra parte, a que sus datos de carácter personal sean protegidos con arreglo al ordenamiento jurídico vigente y a ser asistidos y asistidas a su costa en el control antidopaje por la persona de su confianza que se halle presente o disponible en la zona de dicho control. Pueden presentar alegaciones ante una notificación de presunto dopaje y tienen derecho a que se les oiga antes de ser sancionados y sancionadas.

Asimismo, tienen derecho a realizar el control antidopaje en condiciones que no supongan una lesión en su dignidad o intimidad salvo en los límites que resulten necesarios, a que no se les grabe o fotografíe en ese momento y a exigir la realización de un contraanálisis en el supuesto de que el primer análisis dé un resultado analítico positivo o adverso. Podrán exigir la destrucción de las muestras de sangre, orina o cualesquiera muestras que le hayan sido tomadas o obtenidas una vez finalizados el proceso antidopaje y los correspondientes plazos de prescripción y podrán exigir de los organismos deportivos la confidencialidad de los resultados hasta el momento que resulte oportuno y a ser informado por dichos organismos con carácter preferente de cualquier resultado de los análisis.

Además, la Ley presenta de manera exhaustiva en este capítulo las responsabilidades de todos los agentes intervinientes de alguna manera en la práctica deportiva, en relación al control y denuncia del dopaje: personal auxiliar de los y las deportistas, los poderes públicos, las entidades deportivas y las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos. Se trata, en síntesis, de asegurarse que todos ellos conocen la normativa, cooperan en los controles, ejercen una influencia positiva y colaboran, si se da el caso, con la Agencia Antidopaje.

Por último, las Administraciones Públicas del País Vasco y sus entidades instrumentales o entidades participadas por aquellas, no podrán patrocinar ni subvencionar a entidades deportivas que hayan sido sancionadas por acciones colectivas o continuadas de dopaje, ni a deportistas sancionados por dopaje, o que se hayan negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje.

Capítulo II: Organización administrativa (arts. 10 a 12)

Se crea la Agencia Vasca Antidopaje como ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que actúa con plena independencia en el ejercicio de sus funciones. Dicha Agencia llevará a cabo el diseño y ejecución de las acciones que en el campo de la prevención, control y represión del dopaje corresponden al Gobierno Vasco.



Sus principales funciones serán velar por el cumplimiento de la legislación sobre dopaje, atender las peticiones, consultas, denuncias y reclamaciones formuladas en la materia y proporcionar información a las personas acerca de sus derechos y obligaciones. Asimismo, requerirán a los organismos competentes la adopción de las medidas necesarias para la adecuación de su organización, normativa o actividad a la legislación en materia de dopaje y, en su caso, ordenará la cesación o modificación cuando no se ajusten a dicha legislación.

Esta Agencia ejercerá la acción inspeccional y la potestad sancionadora contra los responsables de las infracciones y realizará actividades divulgativas, formativas y de sensibilización. Determinará las competiciones y pruebas deportivas en las que será obligatorio el control antidopaje y velará por la aplicación de la normativa y por la protección de la presunción de inocencia. Tramitará y resolverá los expedientes disciplinarios, colaborará con otras agencias análogas y promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de dopaje.

Capítulo III: Controles de dopaje (arts. 13 a 20)

Las y los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la presente Ley tendrán obligación de someterse a los controles en competición y fuera de competición que determine la Agencia Vasca Antidopaje y los demás organismos públicos y privados habilitados mediante la presente Ley. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de tales deportistas a someterse a los controles previstos en las disposiciones estatales o internacionales.

Los controles, cuyos términos se determinarán reglamentariamente, se podrán realizar en competición o fuera de ella por sorpresa o previa citación. Para su realización y mayor eficacia, deportistas, equipos, entrenadores y entrenadoras, personal directivo y demás personas del entorno de la o el deportista deberán facilitar, en los términos que reglamentariamente se establezca, los datos que permitan la localización habitual de las y los deportistas. Estos indicarán, en el momento de realización de los controles de dopaje, los tratamientos terapéuticos a que estén sometidos o sometidas las y los deportistas, responsables de los mismos y el alcance del tratamiento. La negativa de una o un deportista a informar o a conceder la citada autorización para que otros informen será considerada como infracción por incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos.

Los controles para los que hayan sido citados, los controles realizados y los resultados de los mismos se incluirán en la Tarjeta de Salud del Deportista, en los términos de la regulación de la misma que se contendrán en el desarrollo reglamentario de esta Ley.

Los clubes y demás entidades deportivas que se determinarán reglamentariamente están obligados, por su parte, a llevar un libro debidamente registrado en la Agencia Vasca Antidopaje y del que exista garantía de su integridad, en el que harán constar los tratamientos terapéuticos que hayan prescrito a las y los deportistas bajo su dirección, siempre que éstos y éstas autoricen dicha inscripción. Dicho libro tendrá la consideración de documento sanitario a los efectos de custodia y protección de datos. En este libro, cada actuación sanitaria deberá ser refundada por la firma de la o el deportista como garantía de que se ha realizado dicha actuación y ha autorizado el asiento en dicho libro.

Las federaciones deportivas territoriales y vascas, así como las demás entidades deportivas a las que resulte aplicable esta Ley, podrán contemplar en sus reglamentos la situación de baja deportiva. En esta situación las y los deportistas pueden recibir libremente el tratamiento terapéutico que se considere adecuado para tratar cualquier lesión o enfermedad, aunque estarán inhabilitados e inhabilitadas para participar en competiciones deportivas de todo tipo. La situación de baja deportiva deberá ser conocida por el correspondiente Comité Antidopaje y registrada en la Agencia Vasca Antidopaje. Las altas y bajas se incorporarán a la Tarjeta de Salud de Deportista que, en su caso, disponga.

Por otra parte, a los efectos de esta Ley, se entienden como controles de dopaje el conjunto de actividades realizadas por entidades y personas habilitadas por la Agencia Vasca Antidopaje cuya finalidad es averiguar la presencia o no de



C E S

DICTAMEN 10/11

cualquiera sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto. También se considerarán controles de dopaje todas aquellas actuaciones desarrolladas por los órganos antidopaje competentes para verificar el incumplimiento de la normativa antidopaje.

Asimismo, y a los efectos de esta Ley, se entenderá por controles de salud el conjunto de actuaciones que la Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva en sus miembros así como para controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones derivadas de la Ley en materia de dopaje y salud.

La Agencia Vasca Antidopaje determinará los controles de dopaje, los controles de salud y demás actuaciones en materia de protección de la salud que deben ser realizados por las entidades a que se refiere esta Ley. Con carácter general y, sin perjuicio de las competencias de otras entidades previstas en esta Ley, corresponde a las federaciones deportivas vascas y territoriales la realización de las actuaciones necesarias para llevar a cabo los controles respecto a las competiciones que determine la Agencia Vasca Antidopaje.

Además, en el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales, la Agencia Vasca Antidopaje, a través de su Director o Directora, ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá además en cada ocasión en que se introduzcan cambios en la misma.

Capítulo IV: Régimen disciplinario y administrativo sancionador del dopaje (arts. 21 a 41)

El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta Ley resulta de aplicación a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias exigidas en el artículo 46 de la Ley 14/1996, del País Vasco, y a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción con las demás entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente ley o se sujeten voluntariamente a la misma. Las infracciones cometidas en materia de dopaje con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal se regirán por las normas disciplinarias de ámbito estatal, mientras que las infracciones cometidas en competiciones deportivas de ámbito internacional se regirán por las normas disciplinarias de ámbito internacional.

Las y los deportistas se asegurarán que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo, siendo responsables en cualquier caso cuando se produzca la detección de su presencia en el mismo. El alcance de la responsabilidad será el determinado en el régimen disciplinario y administrativo sancionador que se establece en el presente capítulo.

A continuación, se tipifican las infracciones relacionadas con el dopaje, agrupándose en muy graves y graves (artículo 24), para definirse después una serie de sanciones a los deportistas (art. 25), a los clubes y equipos deportivos (art. 26), técnicos/as, jueces/as, árbitros/as, etc. (art. 27) y médicos/as y demás personal sanitario (art. 28). En todo caso, se atiene al criterio de proporcionalidad y de las circunstancias que concurren en cada caso, específicamente las que se refieren a la existencia de intencionalidad, conocimiento, grado de responsabilidad de sus funciones y naturaleza de los perjuicios causados, así como las demás que puedan ser para la imputación de la responsabilidad.

Entre las consecuencias accesorias de la infracción y de la posible alteración de resultados, se dice que en los deportes individuales, la comisión de infracciones previstas en la presente sección implicará la retirada de premios o medallas, la anulación de los resultados individuales y la descalificación absoluta de la o el deportista en la prueba o competición en cuestión, en los campeonatos de los que forme parte o a los que esté vinculada la prueba o competición. En los deportes de

equipo, por su parte, y con independencia de las sanciones que puedan corresponder en virtud de lo dispuesto por la presente Ley, los órganos disciplinarios deberán pronunciarse sobre la procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas, competiciones o campeonatos. Para ello ponderarán las circunstancias concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en materia de dopaje tipificadas en la presente sección y la implicación de menores de edad en las referidas conductas.

Por otro lado, la imposición de sanciones relacionadas con el dopaje en el deporte constituye un supuesto de imposibilidad para obtener o ejercer los derechos derivados de las licencias deportivas emitidas al amparo de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y, especialmente, para participar en competiciones deportivas.

A continuación se regulan las causas de la extinción de la responsabilidad en una infracción, así como la relativo a la prescripción de infracciones y sanciones. Por otra parte, se dice que la o el deportista podrá quedar exonerado parcialmente de responsabilidad administrativa y, en su caso, no se someterá a procedimiento sancionador si denuncia ante las autoridades competentes a las personas o entidades autoras o cooperadoras y coopera y colabora con la Administración competente, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el procedimiento o proceso correspondiente contra aquellas.

El ejercicio de la potestad sancionadora de carácter administrativo en materia de represión del dopaje corresponderá al Gobierno Vasco, mientras que la potestad disciplinaria en materia de dopaje corresponde a las federaciones deportivas del País Vasco y a las demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco.

El procedimiento disciplinario se iniciará por resolución del órgano disciplinario de la correspondiente entidad deportiva, tras la correspondiente acta de inspección o tras recibir los resultados de los análisis del laboratorio y tras realizar la correspondiente instrucción reservada con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación y para dictar la resolución en que se decida la incoación del expediente disciplinario, en su caso, el archivo de actuaciones.

Por último, se establece que sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos y judiciales del Estado y del Gobierno Vasco, la Agencia Vasca Antidopaje podrá inspeccionar (y, en su caso, decomisar) los boliquines, bolsas de deportes, taquillas, autobuses y demás espacios que permitan guardar o albergar los productos y sustancias susceptibles de dar positivo en un control de dopaje así como instrumentos destinados a la aplicación de métodos prohibidos, y que reglamentariamente se establecerá el contenido admisible de los boliquines y, específicamente, de aquellos medicamentos y productos sanitarios que resultan necesarios para atender las contingencias derivadas de cualquier urgencia médica.

Capítulo V: Medidas de prevención (arts. 42 a 46)

Para garantizar una lucha eficaz contra el dopaje en el País Vasco, la Agencia Vasca Antidopaje, en colaboración con otros órganos con implicación en la materia, adoptará y promoverá medidas de prevención que comprenderán programas de formación e información en el ámbito del deporte federado, escolar y universitario y de otras manifestaciones deportivas de carácter no competitivo, programas de investigación sobre los efectos de las sustancias y métodos dopantes en el organismo humano, programas de investigación sobre los sistemas eficaces de detección de las sustancias y métodos dopantes y otros sobre el dopaje desde diferentes perspectivas sociológicas, éticas, deportivas, médicas y cualesquiera otras análogas.

Estos programas irán dirigidos fundamentalmente a los clubes, federaciones, centros deportivos, deportistas, técnicos, entrenadores, personal médico, educadores, educadoras, dirigentes y demás agentes deportivos, para evitar que los valores de



deporte, la ética llevada a la práctica deportiva o el rendimiento saludable sean amenazados por el dopaje e impedir que los y las deportistas recurran a sustancias y métodos prohibidos en grave perjuicio de su salud.

La Agencia Vasca Antidopaje establecerá asimismo un sistema de información acerca del dopaje en el ámbito del deporte, que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las administraciones públicas con competencias en materia de deporte. Este sistema incluirá la variable de sexo en la recogida y explotación de los datos relativos a la población deportiva, la realización de análisis diferenciados de las expectativas y opiniones de los deportistas.

El sistema de información permitirá conocer las sustancias susceptibles de producir dopaje y los métodos prohibidos en el deporte, los datos de los expedientes disciplinarios incoados y las sanciones impuestas, con indicación de las sustancias detectadas, los análisis realizados en los distintos laboratorios e incorporará, como datos básicos, los relativos a población deportiva, recursos humanos y materiales, actividad desarrollada, formación y productos sanitarios, financiación y resultados obtenidos, así como las expectativas y opinión de las y los deportistas, todo ello desde una concepción integral de la lucha contra el dopaje en el deporte.

El sistema de información estará a disposición de sus usuarios, que serán las administraciones públicas deportivas y sanitarias, las y los gestores y profesionales del deporte y de la sanidad, así como la propia ciudadanía, en los términos de acceso y de difusión que permitan las disposiciones vigentes en materia de protección de datos.

Por otra parte, la Tarjeta de Salud de Deportista es un documento público, que expedirá la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco a deportistas con las licencias federativas y universitarias y a aquellos otros colectivos de deportistas que se determinen reglamentariamente. Esta tarjeta contendrá la información referida al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y de dopaje, realizados a la o el deportista desde la obtención de la correspondiente licencia, el resultado de los mismos y las determinaciones médicas a tener en cuenta para una adecuada atención sanitaria del mismo. Asimismo, indicará los datos de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas y de las bajas laborales y/o deportivas que haya tenido el deportista. Esta Tarjeta viene a sustituir a la actual Cartilla Sanitaria del Deportista.

Capítulo VI: Régimen de datos relativos al dopaje (arts. 47 a 49)

El personal que desempeñe las funciones de control del dopaje, así como las y los miembros de los órganos de entidades deportivas y su personal, deberán guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo. Además, los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos, en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos, a los organismos públicos o privados que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes.

Capítulo VII: Federaciones deportivas internacionales y demás entidades que rigen, en el ámbito internacional, la actividad deportiva (arts. 50 a 53)

La responsabilidad de la ordenación y realización de controles de dopaje, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria en las competiciones internacionales celebradas en Euzkadi, corresponde al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones deportivas o instituciones internacionales que, respectivamente, las organicen o a aquellas federaciones o entidades en las que estas deleguen la citada organización. La realización de estos controles exige que, con carácter previo, se notifique a la Agencia Vasca Antidopaje la propuesta de realización de los mismos y las condiciones materiales de su realización. Sólo podrán llevarse a cabo estos controles de dopaje si cumplen los requisitos establecidos en esta Ley.



C E S

DICTAMEN 10/11

No obstante, la Agencia Vasca Antidopaje podrá ordenar, sin menoscabo de las competencias que puedan tener otras organizaciones antidopaje, la realización de controles fuera de competición a deportistas nacionales o extranjeros que se encuentren residiendo, entrenando o compitiendo en Euzkadi. Los resultados analíticos serán comunicados a la respectiva federación deportiva internacional, a la Agencia Mundial Antidopaje y a aquellas organizaciones antidopaje que también resulten competentes.

Otras disposiciones

En las Disposiciones Transitorias se establece que las funciones que esta Ley atribuye a la Agencia Vasca Antidopaje serán ejercidas hasta su efectiva constitución y funcionamiento por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, y la Disposición Derogatoria Primera deroga los siguientes preceptos de la Ley 14/1993:

- la letra e) del artículo 81;
- el Capítulo V del Título VII;
- la letra f) del artículo 109;
- la letra h) del artículo 127.

Por último, también se dice que las federaciones deportivas y cualesquiera organizaciones deportivas a las que resulte de aplicación la presente Ley procederán, en el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Ley, a la adaptación de sus estatutos y reglamentos.

IV.- CONSIDERACIONES

Consideraciones generales

En primer lugar, queremos manifestar que compartimos absolutamente la filosofía que subyace a la norma que se nos ha consultado, ya que opinamos que el dopaje simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo y que, además de constituir un grave engaño deportivo, se ha convertido en un conjunto de prácticas que pueden ser muy peligrosas para los y las deportistas y para la salud pública.

Esta Ley aspira a dar respuesta no sólo a la necesaria armonización y actualización del marco jurídico vasco que controle el dopaje en el deporte, como claramente lo expresa la Exposición de Motivos con las referencias internacionales y estatales, sino que también, y sobre todo, se dirige a preservar la salud pública e individual en el deporte y el juego limpio en la competición.

En relación a su contenido, valoramos positivamente que la lucha contra el dopaje en el deporte se conciba de forma integral y que se reconozca la obligación de adoptar medidas de prevención. Y que, además de regular la lucha contra el dopaje, contemple en su articulado, de forma especial, la investigación, sensibilización, formación e información de las entidades profesionales y personas deportistas sobre los efectos que las diferentes sustancias y métodos utilizados para mejorar el rendimiento deportivo pueden tener sobre la salud.

Sin embargo, siendo tan laudables los objetivos de esta nueva Ley, nos encontramos con algunos aspectos que, en nuestra opinión, ensombrecen el texto y revelan una cierta intromisión en la libertad individual de las personas deportistas como se verá con detalle en varias consideraciones específicas. Como ejemplos, citaremos el artículo 1, que al poner en un



CES

DICTAMEN 10/11

mismo plano "competición deportiva" y "actividad deportiva" parece decir que la Ley contra el dopaje puede aplicarse a cualquier persona que practique una actividad deportiva, y el artículo 8, que regula de manera restrictiva el derecho de los y las deportistas a exigir la destrucción de las muestras tomadas en el proceso antidopaje. De igual manera, el artículo 12 delega a futuras disposiciones y formularios que deberá aprobar la Agencia Antidopaje los detalles de la regulación en materia de localización de deportistas para la realización de controles antidopaje, delegación que no compartimos.

En otro orden de cosas, valoramos de forma positiva que en la redacción del anteproyecto se haya hecho un uso no sesgado del lenguaje y se tenga en cuenta la perspectiva de género. Se trata de un ejemplo de buena práctica y de cumplimiento de la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que desde el CES consideramos que debería tenerse siempre en cuenta en la elaboración de las normas.

Concluidas estas consideraciones de carácter general, el CES Vasco estima necesario emitir las siguientes específicas

Consideraciones específicas

Artículo 1. Concepto de dopaje y ámbito de aplicación

En primer lugar, proponemos las siguientes modificaciones de redacción del apartado primero de este artículo, a fin de mejorar y acotar su contenido:

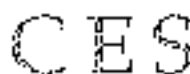
"1.- A los efectos de esta Ley, el dopaje consiste en el consumo voluntario y consciente por el o la deportista de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos para aumentar artificialmente su rendimiento físico, en actividades deportivas, deportivas representando ello un acto contrario al espíritu deportivo y un fraude".

Por otra parte, este artículo primero establece en sus apartados 4 y 5 los umbros -material y subjetivo- de aplicación de la Ley, presentando su redacción una cierta ambigüedad que podría dar lugar a una aplicación cercana al absurdo. Al quedar constituido el ámbito material "por las actividades y competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco" y extendiendo el ámbito subjetivo de aplicación no sólo a "las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilita para participar en competiciones deportivas oficiales", sino también a "cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad deportiva en el País Vasco, aunque sea temporariamente", parece poner en el mismo plano "actividad deportiva" y "competición deportiva".

Si generalmente se entiende por actividad deportiva aquella práctica que realizan las personas particularmente en su vida cotidiana, buscando su bienestar físico y mental y haciendo suyo el brocardo latino de "mens sana in corpore sano", cuesta entender que dichas personas, en el ejercicio de esa actividad deportiva, puedan verse sometidas a un control de dopaje y a una sanción por infracción muy grave al haber usado una sustancia de las que están prohibidas o no autorizadas en el deporte, por más que hubiese sido prescrita facultativamente.

Por último, de la redacción del apartado 7 de este artículo parece desprenderse que no se practicarían dichos controles, por ejemplo, en las pruebas de naturaleza deportiva y resistencia física que tienen que superar bomberos, policías municipales, etc., con lo que no podemos estar de acuerdo y por ello planteamos su modificación en los siguientes términos:

"7.- La presente Ley no sura de aplicación a los controles de dopaje realizados con ocasión de la realización de pruebas de acceso a estudios universitarios, oposiciones y procesos de selección análogos, todo ello sin menoscabo de sus repercusiones y efectos para las personas afectadas, y de la aplicación de las disposiciones establecidas al efecto".

[illegible]

42



CES

10/11

DICTAMEN 10/11

Artículo 11. Organización de la Agencia

En primer lugar, el título de este artículo no responde claramente a su contenido, por lo que podría sustituirse por la siguiente expresión: "Estructura orgánica de la Agencia".

Por otra parte, entendemos que el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT) previsto en el apartado 8 va a ser un órgano clave en el entramado de la organización administrativa antidopaje, por lo que sorprende su carencia de regulación. Sin ánimo de exhaustividad, serían deseables unas mínimas pautas o reglas de funcionamiento en cuanto a sus funciones y composición, que podrían ser, incluso, similares a las previsiones que realiza la Ley para el Consejo Consultivo.

Artículo 12. Funciones de la Agencia

Este artículo pormenoriza con detalle, en su apartado 1, las funciones de la Agencia Antidopaje, con una rigurosa meticulosidad digna de encomio. Sin embargo, el apartado c) "Aprobar las disposiciones y formularios necesarios en materia de localización de deportistas para la realización de controles de dopaje", contiene, una vez más, una limitación a la libertad individual de las y los deportistas, ya que a tenor de su redacción "las futuras disposiciones y formularios podrán contener la exigencia de estar localizables en cualquier momento y lugar para realizar el correspondiente control de dopaje".

Por otro lado, el apartado 4 contiene una remisión al "apartado anterior" que creemos puede interpretarse de manera errónea, por lo que proponemos la siguiente modificación en su redacción:

4 - A los efectos de las funciones de control de dopaje que se refiere el apartado anterior, la Agencia Vasca Antidopaje tendrá la consideración de autoridad de control, y la Ley le garantiza la plena independencia y objetividad en el ejercicio de su cometido.

Artículo 13. Deportistas con obligación a someterse a control de dopaje

En primer lugar, el apartado 2 establece que "los controles fuera de competición pueden realizarse por sorpresa o previa citación". Proponemos sustituir la expresión subrayada por "bien, sin necesidad de notificación previa, bien previa citación", por entenderla más apropiada.

En segundo lugar, los apartados 6 y 7 determinan los sujetos que están obligados a facilitar los datos que permitan la localización habitual de las y los deportistas, así como a indicar los tratamientos terapéuticos a que estén sometidos o sometidas. Se trata de: deportistas, equipos, entrenadores y entrenadoras, personal directivo, médicos, médicas y demás personal sanitario y "demás personas del entorno de la o el deportista". Esta última expresión es de gran ambigüedad y no permite llegar a comprender el alcance de la misma. ¿Se trataría de familiares por afinidad, por consanguinidad, hasta el segundo grado, que convivan con la o el deportista...? Este Consejo opina que convendría una mayor precisión en relación a las personas que se considerarían "del entorno".

Del mismo modo, llamamos la atención sobre los artículos "23. Responsabilidades de deportistas y de su entorno" y "24. Tipificación de infracciones", que hacen alusión igualmente a las personas "del entorno" de las y los deportistas, sin concretar a quiénes se refieren.

Artículo 14. De las garantías de los controles y de los efectos legales de los mismos



En relación con las garantías en los controles y sus efectos, el apartado 2 prevé que "los controles de dopaje fuera de competición y los controles de salud no podrán realizarse durante una franja horaria, que se determinará reglamentariamente y que comprenderá, en todo caso, las horas habitualmente destinadas al descanso nocturno", garantía necesaria pero que, en nuestra opinión, no es suficiente, ya que cuando se trata de realizar un control de dopaje dentro de una competición, se puede llevar a cabo en las horas de descanso nocturno.

Consideramos que sería conveniente introducir una modificación en el texto para que se garantice que tanto los controles de dopaje como los de salud no se llevarán a efecto salvo que técnicamente se justifique la excepción, en las horas habitualmente destinadas al descanso nocturno.

Artículo 15. Obligaciones accesorias y autorizaciones de uso terapéutico

Proponemos la siguiente redacción para el primer apartado, con el objetivo de que el libro al que se hace alusión tenga las garantías mínimas necesarias:

"1. Los clubes y demás unidades deportivas que se determinarán reglamentariamente están obligados a llevar un libro, debidamente registrado en la Agencia Vasca Antidopaje y del que exista garantía de su integridad, para lo cual estará debidamente legalizado o habilitado por la citada Agencia, en el que harán constar los tratamientos terapéuticos que hayan prescrito a las y los deportistas bajo su dirección, siempre que estos y éstas autoricen dicha inscripción. Dicho libro tendrá la consideración de documento sanitario a los efectos de custodia y protección de datos"

Artículo 17. Controles de dopaje y controles de salud

El apartado 6 establece que "la Agencia Vasca Antidopaje determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de licencia a una o un deportista por razones de salud".

En relación a esta cuestión, manifestamos que no estamos de acuerdo con que los supuestos de suspensión de licencias sean regulados de forma reglamentaria, entendiendo que deberían recogerse en el cuerpo de esta Ley.

Artículo 20. Publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte

En aras a la publicidad mínima exigible, proponemos modificar el texto del primer apartado en los siguientes términos:

"1. En el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales, la Agencia Vasca Antidopaje, a través de su Director o Directora, ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan cambios en la misma, y tendrá efectos desde la fecha que se fije en la disposición de modificación que se publique en el citado Boletín"

Artículos 25 a 28. En relación a la graduación de las sanciones por dopaje

Este Consejo opina que la graduación de las sanciones que se firan en estos artículos debe efectuarse no sólo en función del tipo de infracción, sino también, en el caso de las y los deportistas (artículo 25), según se trate de deportistas de



CES

DICTAMEN 10/11

élite, profesionales federados/as, aficionados/as o no federados/as y para clubes y equipos deportivos (artículo 26), en función de la categoría de estos.

Asimismo, las sanciones a técnicos, técnicas, jueces, juezas, árbitros, arbitras y demás personas con licencia deportiva, personal directivo, dirigente o personal de federaciones deportivas, de ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, clubes o equipos deportivos (artículo 27), deberán graduarse de forma más estricta para quienes ejerzan las citadas funciones de forma profesional.

Por último, opinamos que las sanciones a médicos, médicas y demás personal sanitario de de clubes o equipos (artículo 28) deberán tener en cuenta los niveles retributivos de estas personas.

Artículo 36. Colaboración en la detección

Entendemos que este artículo debería eliminarse, ya que se está primando o premiando el cumplimiento de una obligación establecida en el apartado e) del artículo 3 del anteproyecto de la Ley "denunciar ante la Agencia Vasca Antidopaje y ante otras instituciones competentes de cualquier violación de las normas antidopaje de la que tengan conocimiento".

Artículo 42. Medidas de prevención

A relacionarse en el primer apartado las medidas de prevención que la Agencia Vasca Antidopaje adoptará y promoverá, se citan, en segundo lugar, los "programas de investigación sobre los efectos de las sustancias y métodos dopantes en el organismo humano". Sugierimos completar la redacción de este punto, en los siguientes términos, dados los distintos efectos que en hombres y mujeres pueden tener las sustancias y métodos dopantes:

b) Programas de investigación sobre los efectos de las sustancias y métodos dopantes en el organismo humano, teniendo en cuenta las especificidades de hombres y mujeres.

V.- CONCLUSIÓN

El CES Vasco considera adecuada la tramitación del Anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte, con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado.

En Bilbao, a 1 de mayo de 2011

Vº Bº El Presidente
Juan María Olaegui Marua

El Secretario General
Francisco José Furióbio Burgos



Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazerarako Batzordea
Consejo Económico
y Social Vasco

10/11 RIZPENA

Kiroleko dopinaren aurkako Legearen Aurreproiektua

Bilbon, 2011ko maiatzaren 4an

I.- SARRERA

2011ko maiatzaren 25ean Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazerarako Batzordean Kultura Sailaren idazkia jaso da, Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen Aurreproiektuari buruzko brostenaren eskaria eginda, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazerarako ekainaren 27ko 9/1997 Legearen 3.1.b) artikuluan ezarritakopir helduta.

Horren kopia berehala Batzordearen osoko bilkuran esku hartutako kidea guztira bikala zitzaien: euren proposametak eta iritziaik goiti eta horiek on batzorde egokian helarazteko, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazerarako Funzionamenduarien Erregulamenduan ezarritakoa bertzat hartuta. 2011ko apirilaren 18an Gizartearen Garapenerako Batzordea bikia eta, eta adostutako akordioak abapuntu hartuta, Inzpen Proiektu hau onetsi da, hori 2011ko maiatzaren 4an Batzordearen Osoko Bilkuran helarazteko, eta bertan aho batez onetsi da.

II.- AURREKARIAK

Euskal Herriko Kiroletan buruzko indarreko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen bidez, dopinaren inguruko araukela ezartzen zen. Hain zuzen ere, agintari publikoek eta kirol-erakundeek gai horri buruzko ezarritakozun osagarriak euren gain hartu zituzte. Halaaber, arau horren 84-87 zatietako artikuluetan arazo horren inguruko aurrekariak ezberdinak jaso dira, eta aldarrikatzen zuten garrantzi handia izan dute, eta EAEko dopinaren aurka borroka egiteko araukela jaso da.

1998. urteak igarotako epea dela bidez, Estatu nahiz Nazioarteko mailan erakunde- eta ataketa-eraketa-erakundeak eta garrantzitsuek agertu dira. Kirol ekitaldiak modu nabarierak enpresen ikuspegiarekin jorratzen dira, eta sarritan federazio-munduararen zentzuek ez duten erakundeak antolatzen dituzte. Izatez, horien kasuan ez dago araukelaik, eta gainera, dopinak kirolariaren kirol-eraketan nahiz osasunaren osasun eskusiboa gaurdilu dila, osasun publikoaren eremian beretako arazo biltutia.

Bestalde, 14/1998 Legea onetsi zeneta, dopinaren aurka borroka egiteko nazioarteko esparru juridikoan aldaketa sakonak gertatu dira, agintari publikoen eta kirol-erakundeon arteko lankidetzan sakontzeko beharrezko agerian utzita. Hori dela medio, 1999. urtean Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia sortu zen, eta 2003. urtean agentzia horrek Dopinaren Aurkako Munduko Kodea eta hori osatzen dituzten nazioarteko estandarrak egin zituen. Kode hori, huseran, ez zen inbestilea Nazioarteko Zuzenbide Publikoan, baina egocia hori ataketa-lasoa minguduta dago 2007. urtean UNESCOren Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Kontentzia indarrean jarri ostean. Horrenbestez, lege horren aitzak, orobat, dopinaren aurka borroka egiteko euskal araukela harmonizatu nahi da araututako Kodearen printzipioak oinarri hartuta, kirolari jasotako dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa erdiesleto.



CE S

10/11 IRIZPENA

Azkenik Estatuaren arauketaren testuinguruan ere aldaketak garrantzitsuak gertatu dira, osasuna babestu eta dopinaren aurka borrokatzeko azarotik 21eko 7/2006 Lege Organikoa onetsita.

Oro har, guri kontsultatutako Legearen Aurreproiektuan jasotako arauketaren onarritzat krolean jasotako dopinaren aurka borrokatzeko nazioarteko nahiz nazko erakunde aurrealuenek elengabe onartutako printzipioak joen dira. Lehenik, antzeko kirolaren pramde-egiturak eta lurrealde-eremu nahiz -esparru ezberdinetan egotako kirol-erlaketan atzeko harremanak kirolko dopinaren aurka borrokatzeko esparru urdinko erkidua behar du. EAEn, halaber, jatorri ezberdineko kirolari klub eta federazioek parte hartzen duten Nazioarteko eta Estatuako kirol-irapelketak egiten dira, eta horietarako, guri gorabehera onartutako arauketa behar da.

III. EDUKIA

Krolean jasotako dopinaren aurka borroka egiteko Legearen Aurreproiektua modu honetan bereizita dago: Zioen Azalpena, 53 artikulua, hots, zatituta: zazpi Kapitulua, zortzi hedapen gehigarri, hiru eraginkor, bi idargabetzale eta sei oken zedapen; jarraian horien edukia laburtuta.

Zioen Azalpena

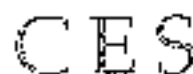
Lehenbizi, Euskal Herriko Kirolari buruzko 14/1958 Legearen bidez EAEn ezarritako araubide berritzearean gaur egun, fenomeno hon, hots, dopina, hausteko aldaketak eta gaurkotzeko behar dira. Izan ere, kirolaren nahiz bertan oinarritutako eren taldeak eta funtsez arintzen da, bereziki, 14/1998 Legearen 2.1 artikuluan ezarritako oinarrietatik: "Kirol interes publikoko gizarie-jarduerak da eta horien bidez partekatu otefatu eta gaurkotzeko goia, bizi-kalitatea hobetu eta berakako nahiz gizariekaren ongizatea bultzatzen da".

Lege berri horren berrikitzaik garrantzitsuenetakoa erakunde-esparruak dopinaren fenomenoara egin beharrieko egokitzapena da. Dopinaren aurka Euskal Agentziaren sorrerarekin 1998. urteik dopinaren aurka nazko agentziak sortzeko joera orokorra agerian utzi da. Gai malako kirola ahaliz errendimendu handiko kirolaren adierazperak sustatzeko eginkizunak bereizi nahi dira, betiere Eusko Jaurlaritzaren Zuzendaritzaren babespean, bai eta dopina antzematzen kontrola ere. Dopinaren aurka borrokatzeko Euskal Agentziak zuzenduta.

Legearen dopinaren aurka borrokatzeko lege-esparrua modu nabarmen egokitu da, eta dopinaren aurka borroka edozein modutan egin daitekeela egin eta esku hartzen duten kirolaren eskubideetako errespetua egon behar dela azpimarratu da, betiere kirolaren eraginkortasuna harriatu gabe. Eragin-erlasun honi lotzeko, kirolaren zenbait eskubide dopinaren aurka borrokatzearen jarduera eren zeda legezinkotzeko modu proportzionalak haztatu behar dira.

Bestalde, Lege berraren arabera, bereziki, dopinaren aurka kontrol- eta errepresio-araubide federatiboak ez diote kirol jardueretan aplikatu da, eta luteratutako kirolari buruzko gaur egungo lege-aurreikuspenak nabesatu behar duten bestelako kirol-errealitateetara hedatiko dira.

Dopinaren kontrol-eremuan, Legeak bestelako kontrol-motak berei beregi jasotzeko atalegina egin du, baina hazi, bestelako inbentario-erak kontrolatzeko beharritara dagokela kontrolatzeko nota, eraberrera terapeutikotzeko baimenak. Hori dela medio, Legeak ez ditu mugatzon dopinaren aurka kontrolak kirolaren gertu-eginak hartzeaz, ezpada bestelako-egin-motak kontrolatzeko aukera eskaintzen da, nolako bide zehatzik adieraz gabe.



10/11 IRIZPENA

Aipamen berezia egin behar da testu berriak osasun-kontrolari begira eskaintako irratimenduzar inguruan. Esiatutaren 7/2006 lege Organ-kontuen bizpidezari jarraiki, kontrolatu berriaren bapenak Dopinarek Aurtako Eusko Agentziak, federazioak nahiz gaurerako 3.000-erakundek kiro-jarduerak osasunaren gain eragin dezakeen ondoreak hobetu kontrolatu eta preberitzeko egokitzat jolako jarduketan munitza barnean hartzen da. Gisa berean, Dopinarek Aurtako Eusko Agentziak, arauz gertatu beharreko araudien ezarritako baktimizetan, osasun-arazoan ondorioz kiroariar izentzia eleleko kasuak zehaztuko ditu. Esiatutaren legeria akte balera itzila, osasun-kontrolak ez dira asotzen lar-harremanen espariaren barruan, espada kiro-akundeeleak edozomak kiroariar kontrolak egin ahal izango diake, lan-harremana suten edo ez duten kiroariar zan oabe.

Hesle alde batetik, 14/1992 Legearen art.1 hartzearen eta zehazpenen lipifikazioa oso mugatuta zegoen, eta Lege horren bidez Lege honi sortzen ari diren beharizarezak nahiz nardoarteko arauakelara itzuli behar da, Estatuaren 7/2006 Lege Organikoa pinari duen araubidearekin batera.

Era berean, Leysak erabilera terapeutikoko baimenetan dagoen inbuz garrantzitsuen erabiltza emen nahi die. Kiroariak medikuzaren tratamendua behar duten ga-ekasak edo lesak jasotzen dituztenei. Erabilera terapeutikoko baimena eskatzeko aukera legean inguruko zehaztasun arinaz eta Bide horrelaz baliatuta, kirol-jokariaren figura jaso da. Hain zuzen ere, tratamendu terapeutikoko erabiltza aska ahalbidetzen da, baina lehen arizteko aukerarik gabeko.

Dopnaren aurkako borroka lege hurrora osasunaren jarduera da, eta dopina auzitear gain lege-bustuan, bereziki enkurde profesionalek eta kirolariak erendimendua hobetzeko erabiliko gai eta metodoek osasunaren gain eragindako ondoreko buruzko ikerketa, sentisibizazioa, prestakuntza eta informazioa bitzen dira. Hala ere, erendimendurako txapelketa ofizialak banean hartzen ez dituen kirolaren eremuko dopnaren aurkako borrokan buruzko sentisibizazio programa zehazten auziteariaren modu berezian aipatu behar da, beriko proba atletikoak, zirkulustoi lasterketak, gimnasiak, etab.

Arterik, dopinaren eremuan izatera pertsonaleko datuen babesari buruzko kopiatua azpimaratu behar da. Legean, arautu gabe badaude erri, kiroletatik eta gainerako pertsonen datu pertsonalak babesleko og kanitu dezaketen eskubidearen gain eragina dituen ondareak jasotzen dira. Kasu batzuetan agintari eskudunei informazio zehatzak komunikatzeko inguruetarak jasotzen dira, eta beste batzuetan datu pertsonalen traimendua biltzen da. e.a. Legearen alabonitua kontuar hartuta dopinaren eta osasunaren inguruko kontrolak zehaztasun dute datuak (azterketen, moduko azterketen, osasun-kontrolen, erabiera terapeutikoko baimenak lortzeko eskabideen eta erabakien, etab. er. emaitzak) osasunari buruzko datu pertsonalak dira, eta arazoi hori dela medio, babes bereko behar dute.

1. Kapituluu.- Xedapen orokorak (1-9 art.)

Lege horren ondorelutarako, dopinarean unanimo kintzariak debekalutako gaiak edo debekalutako metodoak erabiltzen da hots, kintzariunaren aurkako ekitaldian tortutako kintzariunak erabiltzea. Lege horren eremu muelat erokorra, nasieran, Euskal Herrian garatutako federalutako edo federatu gabeko kintzariunak eta -biapelteten bidez eratuta dago. Lege hori aplikatzeko eremu subjektibo erokorra Euskal Herriko txapelketa ofizialetan parte hartzeko garatutako euskal federazio, tributazio- edo eskola-izentzia duten kintzariengana indaluta dago, bai eta Euskal Herrian bizi, behin-behinean behintzat, unirengat edo lehen eritzen dren kintzari gaitzengana ere.

Dopina kiro-elikari eta olinpismoari buruzko batzuen aurkako da, eta krolarien edo, hala denean, animalen osasunaren gain modu larrian kateak eragin ditzake. Dopina modu guztietan bazterlaxo da, eta beraz, debekaluta dago erakunde esklusibak onartzeke zehrendan debekaluta bezala jasotako gaiak eta metodoak gomendatzea, proposatzea, baimentzea, anaihidetzea, saltzea, hornitzea, kontsumitzea edo erabiltzea, baldin eta ekuntza horiek harrolarako baimendu gabeko pertsonak erabili badituzte edo kasuan kasuko araketa-aren arabera ezarritako esparruetatik, xedeetatik eta baimintzetatik kanpo erabili badituzte.



Kiroleriek, txapelketetan edo horietatik kanpo, agintari eskudunek eskatutako dopinaren kontrola nahiz azterketa egin beharuko dute, baita herrikiuspen, egiaztapen edo ikerketa osagarriak ere. Kirolean dopina ezabatzea kirol-erakunde guztien funtsezko xedea izan behar da, eta prestatuntza, informazioa eta ikerketa hoxi erdetseneko funtsezko irtenak dira.

Kiroleriek dopinaren eremuari aplikatu beharreko xedapenak eta akordioak ezagutu behar dituzte, eta horien ondoriozko neurri guztien munda geroztik behar dira. Gisa beretsuan, eskatutako laginen bilketara nahiz gainerako kontrolak bertaratuz behar dira, eta eskatutako informazio guztia eman behar du. Bada, nentsi edo erabilgarri guztaren gaurko erabilerak dira, eta modu hori kirolari-baldintzei buruzko informazioa eman behar du. Gainera, kirol-erakundean debekatuta gisa jasotako gaiak edo metodoak ez kontsumitu edo erabilizko betebeharra agerian utzi behar dute, eta alai den neurrian, ezarritako irratimendu terapeutikoak dopinaren aurkako arauak hausten ez direla ziurtatu behar dute.

Besalako, datu pertsonalak indarreko antolatamendu juridikoaren arabera babestuta egoteko eskubidea dute, bai eta dopinaren aurkako kontrolaren, kontrol horien eremuan dagoen edo eskuragarri dagoen konfiantzarako pertsonaren laguntza horren kontara izateko eskubidea ere. Ustezko dopinaren jakinarazapenaren aurka alegazioak aurkeztu ditzake, eta zehapenak ezarri aurretik horiek onartzen izateko eskubidea dute.

Era berean, dopinaren aurkako kontrola duntasunaren edo munitatearen aurkako lesioa eragin gabe egiteko eskubidea dute, betere beharrezkoak diren mugen barruan, une horretan grabatu edo argudiak ez ateratzeko eskubidez eta lehenengo analisiak posibilitate edo aurkakoa izanez gero, aurkako analisia egitea eskatzeko eskubidea. Horrela, dopinaren aurkako prozesua antailu onoreen eskurapenak oinarrituta, gero-lagira, gero-lagira edo beste edozein lagin hautesle eskatu ahal izango dute, bai eta kasuak kasuko preskripzio-egokiak ere, eta kirol-erakundeen une arte eskuratutako emaitzei buruzko informazioa eskatu ahal izango dute, eta erakunde horiek analisen ondoriozko emaitzei buruzko informazioa eman behar du.

Horrez gain, legearen bidezko honetan kirolean, kontrolan eta dopinaren salaketan esku hartzen duten eragile guztien erantzukizuna zehatz-mehatz jaso da: kirolarien laguntzaileak, agintari putzkoak, kirol-erakundeak eta kirol-ekitaldiak pertsona eta erakunde antolatzaileak. Labur bilduz, horiek guztiek arauaketa ezagutu behar dute, kontrolak laski deitzen aritu behar dira, eragin posibilitate sorrarazi behar dute, eta hala bada, Dopinaren Aurkako Agentziarekin baliatzen jarraitu behar dira.

Azkenik, Euzko Legebiltzariaren Administrazioek eta erakunde instrumentalek edo horiek partaidetuta dauden izango dute babestu edo ezin izango da eman diru-laguntzarik dopinaren eratzu kolektiboa edo elengabean ondorioz zehaztutako kirol-erakundeak, ezta dopinaren ondorioz zehaztutako kirolariak edo dopinaren kontrol egokiak egitea ukatu dutenak ere.

II. Kapitulua: Administrazioaren antolakuntza (10-12 art.)

Dopinaren Aurkako Euzko Agentzia Zuzenbide Publikoan erakunde gisa sortu da, nodasun juridiko propioarekin eta erabateko gaitasunarekin, eginkizunak erabateko independentziarekin betetuta. Agentzia horrek dopinaren prebentzio, kontrol- eta errepresio-eremuak bete beharreko erantzukizunak ditu eta gauzatuko ditu.

Eginkizun nagusiak hauek izango dira: dopinaren buruzko legearen beteapena zainbidea, gaitasun mugurkako eskubideak, kontsultak, salaketak eta (reklamazioak) araketa emaitza eta pertsonen eskubideak eta betebeharrei buruzko informazioa ematea. Gainera, erakunde eskuinean erakundeak, arauaketa edo jarduerak dopinaren legearen egokitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea eskatuko du, eta hala denetan, lagapena edo aidaketa aginduko du, betere legeri horietara doitu ez bada.

Agentzia horrek arau-hausteen aurkako kuskapen-ekintza eta zehapen-ahala egiteko dute, eta horietan, prestatuntza eta sententziarazio-jarduerak egongo dira. Dopinaren aurkako kontrola egitea nahitaezkoak izango kirol-txapelketak nahiz probak zehaztuko ditu, eta arauetaren aplikazioa nahiz erupabetasun-presuntzioa babestuko du. Disiplina-espedientien izapideak egin eta ebaztuko ditu, antzeko agentziekin antolatzen arauko da eta dopinaren ikertzea garapena eta herrikuntza sustatuko ditu.

III. Kapituluak: Dopinaren kontrolak (13-20 art.)

Lege hau aplikatzeko eremu subjektiboan jasotako kirolariak Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak eta Lege horren arara gaitulako gainerako erakunde publikoek eta pribatuak zehaztutako txapelketetan kontrolak egin beharko dituzte, bai eta txapelketatik kanpo ere. Horiek ere ulertuko da kirolari horiek Estatuak eta nazioarteko xudapenetan ezarritako kontrolak egiteko betebeharrari kaltetik egin gabe.

Kontrolak, horien biktimitzak arauz ozarrita, txapelketan edo kirolariak kanpo egin ahal izango dira, ezustean edo aurretiaz hitzordua eskaluta. Horien egiteko eta eraginkortasuna handiago izateko, kirolariak, taldeak, entrenatzaileak, zuzendaritzako langileak eta kirolariaren inguruko gainerako pertsonak, arauz ezarritako biktimitzetan, kirolariak ohi bezala identifikatzeko datuak ahalbidetu beharko dituzte. Dopinaren aurkako kontrolak egiteko unean kirolariak erabiltze beharrek iratamendua zehaztuko dituzte, horien garrantzia izanda, bai eta iratamenduari noranokoa ere. Kirolariak beste batzuek informazioa emateko aipatutako informazioa edo baita ere emateko ezarria adierazi bada, hori arau-haustelatzeko da, baina bai, medikuen iratamenduari buruzko informazioarekin zerikusia duten betebeharrak ez behar direla.

Aipatutako kontrolak, egindako kontrolak eta horien emaitzak Kirolariaren Osasun Txartelaren barruan jasoko dira, hori arautzeko biktimitzetan, eta horiek Lege horren arauzko garapenean jasoko dira.

Arau zehaztutako kirol-kliniken eta gainerako kirol-erakundeak, halaber, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren behar bezala erregistratutako liburu eratan beharko dute, eta horien osotasunari buruzko berria egiaztatze beharko dute, kirolari bere zuzendaritzapean agindutako iratamendu terapeutikoak jasota, baldin eta inplikazioa haimenlehen badaite. Liburu hori osasun-agiria izango da, datuak zaindu eta babesteko xedearekin, liburu horietan, osasun-jarduketak bakoitzak kirolariak sinatu beharko du, jarduketak hori egin dela adierazi eta liburu horietan idazpena egitea baimendu duela adierazteko berme gisa.

Lurraldeko eta Euskal Herriko kirol-federazioak, bai eta Lege hau aplikatu beharreneko gainerako kirol-erakundeak ere, kirol-jardueren egoera euren arandietan jaso ahal izango dute. Egoera hori gorabehera, kirolariak edozein lesio edo gaixotasun irabiltzeko egokitzat jotako iratamendu terapeutikoa eskatzen hasi ahal izango dute, baina inoiz guztietako kirol-irakapketetan parte hartzeko ezgaituta geratuko dira. Kirol-jardueren egoera kasuan kasuko Dopinaren Aurkako Batzordeak, oinarri eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren erregistratu beharko da. Alax eta bajak Kirolariaren Osasun Txartelaren jaso daitezke, baina hori jaso behar da.

Besalaje, Lege horren ondoretarako, dopinaren aurkako kontrolak Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak gaitulako erakundeak eta pertsonak egindako jardueren multzoa izango da, baina horien xedea dopina eragin dezakeen debekututako gaiturik bai antzemateko eta arautzeko ez den metodoaren erabilera antzemateko bada, ondorenetarako aleratako laguntza estandarizatutako prozeduren bidez identifikatu. Gainera, dopinaren aurkako kontrolak dopinaren aurkako arautzearen ez-betetzea egiaztatzeko dopinaren aurka organo eskudunek gaitutako jarduketak gaiturik izango dira.

Gisa berean, Lege horren ondoretarako, osasun-kontrolak Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, federazioak nahiz gainerako kirol-erakundeak kirol-jarduerak egiten osasunaren gain eragin ditzakeen ondoreak hobetu, kontrolatu eta prebenitzeko egokitzat jotako jardueren multzoa da, bai eta kirolariak dopinaren eta osasunaren arloan Legean bete beharreneko betebeharrak kontrolatzeko jarduketan multzoa ere.

Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak dopinaren aurkako kontrolak, osasun-kontrolak eta Lege horietan ezarritako erakundeak egin beharreneko osasuna babesteko gainerako jarduketak zehaztuko ditu. Oro har, eta Lege horietan ezarritako besteak beste erakundeak eskumenak kaltetik egin gabe, Euskal Herriko eta lurraldeko kirol-federazioak Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak zehaztutako txapelketak begira egin beharreneko kontrolerako beharrenekoak diren jarduketak egiteko dituzte.

Rada nazioarleko erakundeek onetsitako zehapenen esparruan Dopinarekin Aurrakako Euskal Agentziak zuzendaritza bidez, Euskal Herriko Aldizkan Ofizialen kintean debekatuta dauden gaien eta metodoen zerrenda argitaratzeko agindua emango du. Argitalpen honi, halaber, aldaketak egin diren kasu bakoitzaren egingo da.

IV. Kapitulua: Dopina zehatzeko diziplina- eta administrazio-araubidea (21-41 art.)

Lege honetan jasotako dopinarekin ondoriozko arau-hausteen zehapenen araubidea kotara berezia diren pertsona guztioi aplikatuko zaie, baina Euskal Herriko 14/1998 Legearen 48. artikuluan eskatutako lizentziaren bidez, eta (gainerako kirol-erakundeekin kotara esleia duten pertsonen ere aplikatuko zaie, baina erakundek honen Lege honetan jasotako jarduerak garatu badituzte, edo baimondatzen diren mende garatu badira). Estatu mailako kirol-txapelketa ofizialetan dopinarekin inguruetan egindako arau-hausteak Estatu mailako diziplina-arauen bidez arautuko dira, eta nazioarle mailako kirol-txapelketetan egindako arau-hausteak nazioarle mailako diziplina-arauen bidez arautuko dira.

Koiztiak debekolulako gaia gorpuztean ez sartzea ziurtatuko dira, eta horrenbestez, hainakoa antzematen denean horren gaineko erantzukizunak izango dira. Erantzukizunaren noranekoa kapitulu honetan ezarritako diziplina- eta administrazio-araubidean zehaztutakoa izango da.

Jarrarari, dopinarekin zerikusia duten arau-hausteak aplikatzen dira oso larriak eta larriak (24. artikulua), eta osuan talde ezberdinen inguruko zehapenak arautzen dira, hala, kirolariak (25. art.), kirol-klubak eta -taldeak (26. art.), teknikariak, epaileak eta arbitroak, elak (27. art.), eta medikuak nahiz gainerako osasun-aroko langileak (28. art.). Nolanah ere, kasu bakoitzean proportzionaltasun-irizpidea eta ingurubarrak kontuan hartu behar dira, balez ere, osasun, eragulari, eginkizunen erantzukizun mailan eta eragindako kalteen izateari buruzkoak, bai eta erantzukizuna zehatzeko baliagarriak diren gainerakoak ere.

Arau-hausteen nahiz ematen ahalaketen ondorioen arloan, guran esan dena kontuan hartuta, banakako kirolariak, eta honetan ezarritako arau-hausteen bidez saririk edo dominarik kendu, banakako emaitzak baliogabeko eta probak edo txapelketak parte hartutako kirolariak erabat kanporatuta geratuko da, bai parte hartutako txapelketetan bai probak, edo txapelketetan lotutakietan. Taldeko kirolariak, aktib, eta Lege honetan ezarritakoaren aurrean sor daitezkeen zehapenak aitzial hartu gabe, diziplina-organen txapelketetan, probetan, txapelketetan edo lehiaketetan eskuralutako emaitza, hain dezan, aldatzeko jatorriari buruz adierazi behar dira. Horretarako, atal honetan dopinarekin aplikatutako arau-hausteak egia dituzterik txapelketak, probak edo txapelketak eskuralutako emaitzak jazoeko ingurubarrak, eta nolatan ere, parte hartze erabakigarria hartatuko dira, bai eta aplikatuko jakabideak: adingabeak izandako esku-hartzea ere.

Besalake, Kirolako Dopinarekin zerikusia duten zehapenen ezarpena Euskal Herriko Kirolak buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen babespean egotritako kirol-lizentziaren ondoriozko eskubideak eskuratzeke ezintasuna da, eta bereziki, kirol-txapelketetan parte hartzeke ezintasuna.

Jarrarari, arau-haustean gertatutako erantzukizuna azkentzeko arrazoiak auratu dira, bai eta arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa ere. Besalake, kirolariak administrazioaren erantzukizunetik zat: baloan salbetsututa gertatu ahal izango da, eta hala denean, ez da ezarritako zehapen-prozedurak, agintari eskudunen aurrean pertsona edo erakunde egia edo laguntzaileak salatu behar, eta Administrazio eskudunarekin lankidetzan aritzen bada, funtsezko datuak eskainta, edo, hala denean, haren aurrakako prozedura edo prozesuan lekualtza emanda.

Dopinarekin errepresioaren inguruko administrazioaren zehapen ahalak Eusko Jaurlaritzak egokituko du, baina dopinarekin inguruko diziplina-ahalak, aktib, Euskal Herriko kirol federazioek Euskal Herrian egindako kirol-txapelketetan izandako parte-hartzea dela-eta izandako mendeko lotura berezia duten gainerako erakundeek egikaririk dute.



CES

10/11 IRIZPENA

Diziplina-prozedura kasuan kasuko kirol-erakundearen diziplina-organek gortitako ebazpenaren bidez abian jarriko da, ikuskariltza-akta egokia egin ostean, edo abertzatutako analisiaren emaitzak jaso ostean, eta onerosatutako instrukzio egokia egin ondoren, hasieran justifikatutako inguruakarak gortetu diren zehazleko eta diziplina-espedientearen hasiera, edo hala denek, jarduketan artiboa erabakitzen duen ebazpena gortzeko.

Azkenik, Estatuko eta Eusko Jaurlaritzako bestelako administrazio-organen eta organo judizialen eskumenak kaltetak egin gabe, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak botikinak, erot-botikak, salobusak eta dopinaren kontrollean posibilitatean deitaketen produktuek edo gaiak gudelitzeko gainerako espartuak ikuskatu (eta hala berean kendu) ahal izango ditu, ba eta debekatutako medikuak aplikatzeko bestelako tresnak ere. Hala ere, arazot botikinetan onartu daitezkeen erakia eta heretako enozein larraldi medikuren ondoriozko kontingentziak aurre egiteko beharrezkotzat jotako botikinak eta osasun-artoko produktuek jasoko dira.

V. Kapitulua: Prebentzio-neurriak (42-46 art.)

Eusko Herrian dopinaren aurkako borroka diognikura bermatzeko, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, gai horietan esku hartutako bestelako organoen lankidetzarekin batera, prebentzio-neurriak hartu eta burutzeko ditza, behere federazio-, eskola- eta unibertsitate-troloren eremuan prestakuntza- eta informazio-programak antolatuta, bai eta lehen eta azaleko bestelako kirol-adierazperak gaiten ondorioei buruzko kerkela-programak eta giza-aren gortutzearen gaitako dopin-erakundeak eta dopinari buruzko bestelakoak ere, ikuspegi ezberdinak aintzat hartuta: soziologikoak, etekak, kirol-erakundeak, medikuak eta antzekoak.

Programa horiek lurtean klubet, federazioet, kirol-zentrot, kirolariet, teknikariet, medikuei bezalakoet, gaitariet eta gaitariet kirol-erakundeet zuzenduta daude, kirolaren balioak, kirolaren inguruko etika edo errendimendu osasungarria dopinaren ondorioz maldatuta egotea saihesteko, baita kirolariet debekatutako gaiak edo erakundeak kontsumitzea saihesteko ere, osasunarentzat kaltegarriak direla antzeta hartuta.

Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, gisa berean, kirolako dopinari buruzko informazio sistema ezantzi du: kirolaren eremuan eskumenak dituzten herri administrazioen arteko informazioaren eta komunikazioaren eskuraketa bermatuta. Sistema horietan sekuaren gaitariet aintzat hartuta da kirol-erakundeet bizi-erakundeet zentzua duten datuen biltzetan eta ustapenean, kirolaren inguruko metatetik eta antzekoak ezberdintutako analiziaren eraketar.

Informazio-sistemaren bidez, dopina eragiten duten gaiak eta kirolaren debekatuta dauden metodoak ezagutu ahal izango dira, bai eta abian jarritako diziplina-espedienteen datuak eta ezarritako zehapenak ere, antzerkideko gaiak, eta laborategi ezberdinetan egindako datuen analisia adierazita, eta oinarritutako datu gisa: kirol-bizitaterari, giza baliabideet, kalibide materialei, garatutako jardueret, farmaziet, eta osasun-produktuei, finantzaketari eta eskurakutako emaitzet buruzkoak jasoko dira, ba eta kirolariet ingurumenak eta irizkiak ere, hori guztia kirolariet dopinaren aurka osasunarean borroka egiteko asiapuntua onartu hartuta.

Informazio-sistema erabitzarean esku egongo da, eta kirolako eta osasuneko herri administrazioet, kirolako eta osasun-erakundeet kirolariet eta profesionalak eta bizi-erakundeet, saibide- eta herri-erakundeet kirolariet kirolariet, datuak biltzetan indarretu erabazpenak antzerkideetako dituzte.

Bestalde, Kirolariet Osasun Txartela agin publikoa da eta herri Eusko Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzak kirolariet inguruko dit federazio- eta unibertsitate-herri-erakundeet, ba eta gaitariet zehaztutako kirolariet bestelako kolektibot ere. Txartel herri-erakundeet kirolariet egindako medikuei antzerketari, eta osasun- eta dopin-kontroler buruzko informazioa jasoko da, kasuan kasuko kontroler emaitzak eta osasun-erakundeet egokira erabazteko kirolariet hartu beharretako medikuei zehaztutako bidez. Gisa bertsuan emaitzak erabazteko terapeutikarret baimenak datuak eta kirolariet zehaztutako lan-bajen etateko kirolariet datuak biltzetako dira. Txartel horiek gaur egungo Kirolariet Osasun Txartela erabazteko du.

VI. Kapitulua: Dopinari buruzko datuen araubidea (47-49 art.)

Dopinaren kontrol-egokizunak beaetzen dituzten langileek, bai eta kirol-erakundeetako organoen kideek eta beraien langileek beraien ondorioz ezagutzen dituzten gaeli buruzko isil-gordea eta isilepeketasuna gorde behariko dute. Gainera, dopinaren kontroiei buruzko datuak eta fitxategiak, datuak babesteko indarreko legearen ezarritako baldintzetan, kirolaiko dopinaren aurkako borroken arku hartzen duten erakunde publikoak edo pribatuak laga ahal izango ditzkie, legea lotutakoak diren konpromisuekin ezarritakoaren esparruaren barruan.

VII. Kapitulua: Nazioarteko kirol-federazioak eta kirol-jarduera nazioarte mailan arautzen duten gainerako erakundeak (50-53 art.)

Dopina kontrolatzeko antolatzailearen eta eraketaren gaineko erantzukizuna bai eta diziplina-ahalaren egitate ere, Euskoaren egintako nazioarteko txapelketetan, hain zuzen, Nazioarteko Batzorde Olimpikoan eta antolatzaile hori eskuzarbeluta duten federazioak edo erakundeak hurrenez hurren antolatzen dituzten kirol-federazioei edo nazioarteko erakundeak dagozkie. Kontrol horiek egiteko, aurretiaz Dopinaren Aurkako Euskal Agentzian horiek egiteko proposamena eta baldintza materialak jakinarazi behariko zaizkie. Dopinaren kontrol horiek Lege honetan ezarritako beaekizunak beaetzen dituztenean teknika egina ahal izango dira.

Hala ere, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, dopinaren aurkako bestelako erakundeak eskumenei kalterik egin gabe, kontrolak txapelketak kanpo Euskoaren bizi, erlenteatu edo behar antzen diren arazoak edo alderako kirolarek egin ahal izango zaizkie. Enjuzia aplikatuz kasuak kasuko nazioarteko kirol-federazioak. Dopinaren Aurkako Munduko Agentzari eta dopinaren aurkako erakunde eskudunei komunikatuko zaizkie.

Bestelako xedapenak

Xedapen Iragarpenaren ezarritakoaren arora, Lege honetan Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari aitxikilako egokizunak Eusko Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzak hori behar bezala eratu eta alvan jarri aite egokiduz dira. Lehenengo Xedapen Indargabekoak, 14/1988 Legean jasotako aginduek sakagabetzen ditu.

- 81 artikuluaen e) letra
- VI Tituluaren V Kapitulua
- 109. artikuluaen n) letra.
- 127 artikuluaen b) letra

Ametzeko, orobat, Lege hau aplikatu beharriko kirol-federazioak eta bestelako kirol-erakundeak, Legea argitaratu den egunaren bitaramurek zabaluta, estalutak eta arauak egokiduzo dituzte.

IV. OHARRAK

Ohar orokorrak

Lehenbizi, guri kontsultatutako arauak banezin hartzen diren filosofiarekin erabat ados gaudela adierazi nahi dugu. Izan ere, guri iriziz, dopina kirolaren anizimia eta horren oinarri izan diren balioak eta funtsak aurkakoa da, eta kirol-iruzur larria erabiltzeaz gain, kirolariengan eta osasun publikoaren gain kalte arriskuak eragin ditzake.

Lege horren bidez kirolko dopinaren aurka borrokalizko Euskal esparru juridikoa harmonizatu eta gaurkotzeaz gain, Zoon Azalpenaren bidez beregi adierazi den nezaa, nazionalitate eta Estatuko aramenerain batera, eta bereziki, kirolaren osasun publikoa nahi zuten barakako osasuna eta lehen izan beharreko joko garbia artatu nahi dugu.

Edukari dagokionez, kirolko dopinaren aurkako borroka osotasunaren hartu eta prebentzio-neurriak hartzeko beharrezkoa aintzat hartzea modu positiboan balaratu dugu. *Eta, dopinaren aurkako borroka lege horretan osotasunaren jasotzen da, eta dopina erabiltzeaz gain, lege-testuan, bereziki, erakunde profesionalak eta kirolariak errendimendua hobetzeko erabilutako gai eta metodoak osasunaren gain eragindako ondorezi buruzko ikerketa, sentibilizazioa, prestakuntza eta informazioa biltzen dira.*

Zerrahi gisa, Lege berri horren xedeak hain laudagarriak izanitu, que ustez, lesioa narritzen duten zenbait akterak aurkitu dituzte, eta horiez gain, kirolaren banakako askatasunaren dagoen esku-hartzea agetan uzten da, ohar zehatzetan kasu uhel izango dugun nezaa. Adibide gisa, 1. artikulua argia dugu. Hori zuzen ere, "kirol-erria" eta "kirol-jarduerak" maila berean ezartzen baditugu, badirudi Dopinaren aurkako Legea kirol-jarduerak betetzen diren edozein pertsonak aplikatu dezakeela, eta 8. artikuluan kirolariak dopinaren aurkako prozesuan hartutako laginak hautatu dituzten eskubideak osatzen dituzten arauak dira. Era berean, 12. artikuluan ezarritakouron arabera, Dopinaren aurkako Agentziak dopinaren aurkako kontrolak egiteko kirolariak identifikatzeko araketa-kehatasunak onetsi beharko ditu, guk horako ondorekiz ez izateagatik.

Hori gora-behera, aurreproiektuan hizkuntzaren erabilera ez-sesista eta genero-ikuspegia kontuan hartu dela modu positiboan balaratu dugu. Praktika onaren eta Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen betepeneraren adibidea da. Izan ere, EGASren ustez, arauak egiteko unean hori beti kontuan hartu behar da.

Ohar orokor horiek argitu ostean, EGASren ustez beharrezkoa da ondoko ohar zehatzak igortzea.

Ohar zehatzak

1. artikulua. Dopinaren kontzeptua eta aplikazio-eremua

Lehenbizi, artikulua horren lehenengo atalean ondoko adieretak proposatu ditugu, horren edukia hobetu eta murrizteko:

"1. Lege horren ondoretarako, dopinaren onaria kirolariak borondatez eta modu kontzientziaz debekatutako gaiak edo debekatutako metodoak erabiltzea da. Arretu-errendimendua fisiko kirol-jardueretan modu artifizialean arazotuta, kirol-munduan aurkako ekitaldia eta inuzurra eraginda.

Bestealde, lehenengo artikularen 4. eta 5. ataletan Legea aplikatzeko eremu-materiale eta subjektiboak jasotzen dira, eta horien dagozeta nahasgarria da zentzugabea, beraz, Erremu materiale modu horretan osatuta egongo da "kirol-jardueren eta kirol-jardueren bidez, federazioak izan zein izan ez. Euskal Herrian garatu bada", eta aplikazioaren eremu subjektiboak "Euskal federazio-umbersitate- edo eskola-erentzia duten kirolariengana bideratuta dago, baina kirol-jarduerak ofizialki parte hartzea ahalbidetu bada", eta horiez gain, "kirol-jarduerak Euskal Herrian garatzen diren

bestelako pertsona fisikoenagana edo juridikoengana, aidi baturako bada ere" barnean hartzen d'itu. Badirud "kiri-jarduera" eta "kirol-lehia" maila berean ezari direla.

Oro har, kirol-jarduera pertsonak eguneroko bizitzan egiten duten kirol-jarduera bada, ongarzale fisikoa eta adimen ongarzalea izan daiteke. "mens sana in corpore sano" lelopean, zaila da ulertzua pertsona horiek, kirol-jarduera egitean, dopinarekin kontrolaren mende egotea eta arau-haustie larriaren ondoriozko zehapena jasatea, kirolean debekatuta edo barmendu gabe dauden gaiak erabilizkoagatik, modikuaner inbizi hori preskribatu bada ere.

Arazteko, artikulua horren 7. alalaren idazketan badirudi kontrol horiek egin ez direla esaterako, kirol-jardura duten probetan eta unesistentzia fisikako probetan, hots, sultitzariek, udaltzariek eta abar. gairiditu beharrikoak. Beraz, ezinezkoa da ados egotea, eta hori dela eta, aldaketak ezarriko dira:

"7.- Lege hon ez da aplikatuko da unibertsitate, oposaketa- eta antzeko hautespen-ikasketetan parte hartzeko probak egiteko dopinarekin kontrolatzen, hori guztia kaitelutako pertsonen gain zandako ondorioei kaitenik egin gabe, eta ondore homelarako ezarritako xedapenen aplikazioari kaitenik egin gabe".

2. artikulua. Printzipio orokorrak

Artikulu honetan jasolako printzipio orokorrei dagokienez, ohar hauek nabarmendu behar dira:

- b) alala gure artez kirolari eta animalia ei egindako apamenak alai ezberdinak berezi behar dira
- d) alala etal hasi jarraian azaldu den bezala osatu behar da, berme-arrazoien ondorioz

"d) Kirolariak, iragelketetan edo honetarik kanpo, egiten dutenak eskatutako dopinarekin kontrola nahiz azterketa egin behariko dira, bai eta barmendu, egiaztatzen edo ikertzea osagarriak ere. Baiz eta hon egitea eskatzen duten pertsonak kontrolak egiteko behar bezala akreditatuta eta laguntzailuta badaude".

- f) alala: ikazketa hobetzeko proposamena egin dugu ondoko baldintzetan:

"f) Prestakuntza, informazioa eta ikertzea berrikuntza eta teknologia berritzaile aplikazioa dopina erabartzeko ezinbesteko irratia dira"

3. eta 4. artikulua. Kirolarien eta laguntzaileen erantzukizunak

Halaber, 3. eta 4. artikuluen e) alalaren ondoko azterazpenak jasolako proposamena egin dugu

"e) Dopinarekin Aurrakio Euzko Agentziaren eta bestelako erakunde eskualdeko auzoan identifikatutako dopinari buruzko arauetarik edozein berraketa konstanteak, bai eta kirolariak edo laguntzaileak jasotako kontrol irregularak ere".

6. artikulua. Kirol-erakundearen erantzukizuna

Erantzukizun kasuan, "dopinarekin aurrakio hautespen berritzaile kirol-erakunde edo kirolari diru-laguntza edo laguntza ezartzen edo horiek kasuan kasuko kontrolak egitea ukatzen", kirol-erakundeez gain, gainerako subjektu ezberdinen erantzukizuna zango da. Beraz, gure ustez, artikulua honetan jasolaz gain, 5. laguntzaile publikoen erantzukizunak eta 7. (kiri-ekitaldien pertsona eta erakunde antolatzaileen erantzukizuna) artikuluetan ere jaso behar izateke.

8. artikulua. Kirolarien eskubideak

Halaber 8. artikulua h) alatean dopinaren aurkako prozesuan hartutako laginak hausteko eskubidearekiko salbuespena ezarri da. *Kontrola egindutik duen erakunde laginen titulutasunaren arabera egin behar da* adierazpenari biktuz.

Hala ere, eskubide hori begira zafira eta bermegabea da erakundeari laginei gainera titulutasuna baimenak edo prozedurak zehaztu gabe atxiki ahal izola adieraztea. Beraz, gure ustez, eta Char Orokorretan adieraztu dugun bezala, laginen haustura eskatzeko eskubide subjektiboa murriztu egin da. Horregatik, gure iritziz berme zehatzak ezarri edo salbuespen hori ezarri behar da.

11. Artikulua. Agentziaren antolakuntza

Lehenbizi esan behar da ogei argi eta garbi aritu behar diren bitartean, Beraz, honen ordez adierazpen hau ez da duteke *Agentziaren egitura organikoa*.

Bostalde, gure iritziz 8. alatean ezarritako Erabilera Terapeutikoa Baimentzeko Fiskal Batzordea (COVALT) dopinaren aurkako administrazio-antolakuntzaren bitartean organo garrantzirik da. Hori dela eta, harrigarria da hori arautu gabe egotea. Zehaztasuna ezartzeko asmoz izan gabe, funtzionamendurako gabeenteko jarraibideak edo erregelak ezarri behar dira irakurle eginkizunak eta eraketa dagoenez, eta horiek Batzorde Abolitu-erakundearen Legean ezarritako aurrekuspeneren antzekoak izango dira.

12. Artikulua. Agentziaren eginkizunak

Artikulu honen 1. alatean Dopinaren Aurkako Agentziaren eginkizunak zehazten dira, batiere xehetasun izugarriekin. Zehazki gisaz, u) alatean *Dopinaren kontrolak egiteko kirolariak identifikatzeko beharrezkoak diren xedapenak eta formulazioak onartzeko*, oraindik ere, kirolari bakoitzak eskatzen duen, baina egindako murrizketa jaso da. Izan ere, idazkerei ariketa, elorkizuneko xedapenak eta formulazioetan uko oio identifikatu eta dopinaren kontrol egokia egiteko prest egotea eskatzen jaso behar da.

Halaber, 4. alatean *aurteko alata* aipatzen du. Hain zuzen ere, orer interpretatu daitezkeela irte dugu eta horrenbestez, dazketan aktaketa hau egiluko proposamena egin dugu.

4. ~~Aurteko alatean aipatutako dopinaren kontrola~~ egiteko eginkizunak onartzeko Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia kontrol-agentzia izango da, eta legeak bere zeregina beteitzeko erabateko independentzia eta objektibotasuna bermatzen ditu.

13. Artikulua. Dopinaren kontrola egin behar duten kirolariak

Lehenbizi, 2. alatean *txapelketarik gorpoko kontrolak ezustean edo aurreko hilordua eskatuta egin daitezke* eta ezarri da. Gure ustez *“bai akteiz aurretik deia eginda edo bai egun gabe”* adierazpena ezarri behar da.

Bigarrenez, 6 eta 7. alatean kirolariak identifikatzeko datuak ahalbidetzen dituzten subjektuak zehazten dira: bai eta erabiltzen dituzten irratimendi, terapeutikoa ere. Horia horrela, kirolariak, taldeak, entrenatzaileak, zuzendaritzako langileak, medikuak, eta osasun-erako gainerako langileak, eta *“kirolariaren inguruko gainerako pertsonak”*. Azken adierazpen hori oso nahasgarria da eta ezinezkoa da horren norabidea ulertzen. Kirolariarekin bizi diren bigarren maila arloko kontrola-



CES

10/11 IRIZPENA

ahadelaurrezko edo odoelkidetasunezko familiakoa da? Sartzoré honen ustuz, "inguruko" hitza zehaztasun handiagoarekin adierazi behar da.

Gisa beretsuan, "23. Kroianen eta inguruko enantziokizunak" eta "24. Arau-hagasteen lipifikazioa" artikulua nabarmendu behar ditugu. Hain zuzen ere, kroianen "inguruko" pertsonen buruz dihardu, zeintzuk n-ren zehaztu gabe.

14. Artikulua. Kontrolen bermeak eta lege-ondoreak

Kontrolen bermeak eta ondoreak dagokienez, 2. atalean "trapeikotatik kanpoko dopinaren kontrolak eta osasun-arloko kontrolak ezin izango dira egin ordu-tarte zehatz batean, baina zuzen ere, arauz zehaztutakoa eta nolatan ere gaueko alsedena/idiako erabilaketa orduak bermean hartuta" adierazpena ez da, beharrezkoa den bermea, baina gure iritziz, ez da behar bestekoa izatez, baxpelkulan egin beharreneko dopinaren kontrola denean, gaueko alsedena/idiako orduetan egin daiteke.

Gure ustez, korrengana izango izateke testuan zidaketa egilea, baina bai, dopinaren kontrolak eta osasun-arloko kontrolak ondore horietarako egingo ez direla bermatzeko saila eta ikuspuntu teknikoak salbuespena justifikatzen denoan, gaueko alsedena/idiako ohi neuzala erabiltako orduetan.

15. Artikulua. Betebehar osagarriak eta erabilera terapeutikorako baimenak

Lehenengo atalean ondoko idazketa egileko proposamena egin dugu: adierazitako hitzua beharrezkoak d'ar gixiariako bermeak izateko.

"1. Arauz zehaztutako krol-klubak eta gainurako krol-erakundeak, halaber, Dopinaren Aurrak Euskal Agentzian behar bezala erregistratutako liburu arantzen behar dute, eta horren osotasunak buruzko bermea egiaztatzea behar da, berretarako aipatutako Agentzia bolar bezala legez-mota ego gaitia, bere zuzendaritza-poko krolari buruzko preskribatutako tratamendu terapeutikoak jasota, baina eta osotasun baimentzen berdea. Liburu hon osasun-agria izango da, datuak zuzen eta beharrezko xedarekin".

17. Artikulua. Dopinaren kontrolak eta osasun-arloko kontrolak

6. atalean ondoko adierazi da: "Dopinaren Aurrak Euskal Agentzia, arauz gaitu beharreneko erabilera erabiltako baimentzen, osasun arantzen ondore krolari lizenzia ofoteko kasuak zehaztuko ditu".

Gai horren kasuan, lizenzien oteaturak arauz arautzeko adis ez gaudela adierazi dugu. Lege honen lege-testuan jaso behar dela ulertuta.

20. Artikulua. Kirolean debekatutako gai- eta metodo-zerrendaren publizitatea

Eskatu daitekeen gutxieneko publizitate dagokienez, lehenengo atalaren testua modu honetan osatzeko proposamena egin dugu.

"1. Bada, nazioarteko erakundeak onartutako xedapenen esparruan, Dopinaren Aurrak Euskal Agentzia, zuzendaritza bidez, Euskal Herriko Aurrak Oteaturak Kirolean debekatuta dauden gaien eta metodoen zerrenda

argitaratzeko agindua erango da. Argitalpen hori, gainera, beran aldaketak egin diren bakoitzean egingo da, eta guduzpeak aipatutako Aldizkarian argitaratutako aldaketa-erdiapenean zehaztutako datak aurrea sartuko ditu.

25-28 artikulua. Dopinaren ondoriozko zehapen mailari dagokionez

Balzorde horren ostez, artikuluko horien zehaztutako zehapenen maila arau-hauste motaren arabera egiazak gain, krolariak ere kontuan izango dira (25. artikulua), elizozko kirolariak, profesionalak, federatuak, zaleak edo ez-federatuak diren aintzat hartuta, bai eta krol-klubak eta -lariak (26. artikulua), horien kategoriatan helduta.

Era berean, 'teknikariak, epaileak, arbitroak' eta kirol-lizentzia duten gainerako pertsonak, zuzendatutako langileak, kirol-federazioetako gidariak edo langileak, lga profesionalakoei, kirol-trapatiketa ofizialen erakunde arlozaleakoei, krol-klubak edo -lariak (27. artikulua) ezarritako zehapenak zehaztutako mailakatu behar dira, aipatutako eginkizunak modu profesionalan betetzen dituztenen kasuan.

Amaitzeko, gure ostez, medikuei eta kirol-klubak edo taldeen osasun-arloko langileei (28. artikulua) ezarritako zehapenak pertsona horien ordainsari mailak aintzat hartu beharko lituzka.

36. Artikulua. Lankidetzaren antzematean

Gure iriziz artikuluko hori ezabatu egin behar da. Izan ere, Legorren Aurpegiak 3. artikuluan el atalean ezarritako betebehariaren betepena lehenetsi edo saiatu behar da: "Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren eta gainerako erakunde eskuduntza ezagutzen dituzten dopinaren aurkako erakunde edozein berraketa salatzea".

42. Artikulua. Prebenzio-neurriak

Lehenengo atalean Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak hartutako prebenzio-neurriak zerrundatu ostean, bigarren atlean, 'gizakiaren gorputza dopatzen duten gaiak eta metodoak ondorengo berraketa-programak' aipatu dira. Puntu horien atzetik osatzeko proposamena egin dugu, hurrengo baldintzetan, dopatzeko gai eta metodoak gizonengan eta emakumeengan izan ditzaketen ondorio ezberdinak kontuan izanda:

'h) Gizonaren gorputza dopatzen duten gai eta metodoak ondorengo berraketa-programak, gizonen eta emakumeen zehaztasunak kontuan hartuta'.

10/11 IRIZPEGIA

V. - ONDORIOAK

EGABren lstez egokia da Erretzekarien Erregistroaren Dekretu Proiektuaren izapidea ogi. organo alidatuekin
horien egindako erantzak berriaz izanda

[Bilbon, 2013ko maiatzaren 4an]



Presidencaren OE
Juan Maria Otaegui Murua



Idazkari Nagusia
Francisco Jose Hernandez Burgos

XIII

CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE/
KIROLAREN EUSKAL KONTSEILUAREN ZIURTAGIRIA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.

**ELISABET ALTUBE BENGOA, SECRETARIA DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE,****CERTIFICA QUE:**

En la reunión del Pleno del Consejo Vasco del Deporte, celebrada en la Sede del Gobierno Vasco, en Lakua, Vitoria-Gasteiz, el día 23 de noviembre de 2010, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

.- INFORMAR EL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

Se presentan los aspectos básicos del Anteproyecto de Ley, cuyo texto fue remitido a las y los miembros del Consejo:

Como consecuencia de los recursos planteados por las personas sancionadas ante los Tribunales, se dictaron una serie de Sentencias en las que se puso en cuestión la capacidad del Gobierno Vasco para la imposición de sanciones en materia de dopaje. Dichas Sentencias, sin cuestionar la competencia del Gobierno para la recogida de muestras, concluyen que la potestad sancionadora reside únicamente en las Federaciones Deportivas.

Para superar dicho escenario se hace necesario dotar a la CAFE de una Ley Antidopaje que deje claras nuestras competencias en esta materia.

Previas las Consultas oportunas con los Departamentos implicados (Sanidad, Agricultura, Justicia y Administración Pública, Agencia de Protección de Datos, etc.) se ha redactado el Anteproyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte.

Dicho texto que es el que se ha remitido a las y los miembros del Consejo trata de recoger todas las modificaciones que a nivel estatal e internacional se han producido en los últimos años.

Se crea la Agencia Vasca Antidopaje con la idea de ser un órgano caracterizado por la especialización y su independencia funcional.

Se amplía el marco de aplicación a actividades no federadas.



Se amplian las modalidades de control. Además de la toma de muestras se establece el control de las AULT's y se dejan abiertas otras vías que pudieran surgir de las investigaciones que se realicen.

Se contemplan los controles de salud, contemplándose la posibilidad de suspensión de las licencias por motivos de salud de las y los deportistas.

Se recoge la prohibición del patrocinio en determinadas circunstancias relacionadas con el dopaje.

Se han ajustado las infracciones y sanciones a la realidad actual.

Trata de dar respuesta al importante fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico que se ha convertido en una puerta abierta al dopaje.

Se instaura la figura de la baja deportiva, que permite tratamientos terapéuticos libres sin posibilidad de competir.

Se prevén programas de sensibilización y trabajar en la prevención.

Se incorpora un instrumento fundamental en la batalla contra el dopaje que es el reconocimiento mutuo de sanciones impuestas por otras instancias públicas y privadas.

Se establecen cuestiones relacionadas con la protección de datos de carácter personal.

Actualmente el anteproyecto se halla en período de información pública, habiéndose recibido ya algunos informes.

HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY:

la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco junto con la Unión de Federaciones Deportivas Vascas y las Federaciones Deportivas Vascas acordó poner en marcha un programa de colaboración de lucha contra el dopaje.

Así, la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y las Federaciones Deportivas Vascas realizarán controles de Dopaje. Entendiendo por tales el conjunto de actividades materiales realizadas por médicos y personal sanitario habilitados, por el Gobierno Vasco y por las Federaciones Deportivas Vascas y por un laboratorio de análisis, debidamente homologado y autorizado, cuya



finalidad es comprobar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario.

Además, desarrollarán actividades informativas, formativas, divulgativas, de sensibilización, así como de prevención en materia de salud y dopaje.

La Dirección de Deportes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco prestará cuanta ayuda sea requerida por las Federaciones Deportivas Vascas a fin de llevar a cabo lo establecido en este programa.

Se informa favorablemente el Anteproyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte.

Y para que así y conste y surta los efectos oportunos donde proceda emito la presente certificación en Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2010.

ELISABET ALTZIBI BENGOA

SECRETARIA DEL CONSEJO
VASCO DEL DEPORTE

XIV

INFORME DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS /

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



Datuak Babesteko
Euskal Rulerria
Agencia Vasca de
Protección de Datos

IL10-010

INFORME QUE FORMULA LA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS EN RELACION CON EL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL PAÍS VASCO.

ANTECEDENTES

Se somete a informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos el Anteproyecto de Ley citado en el encabezamiento.

El presente dictamen se formula en virtud de lo previsto en el artículo quinto 3 b) de la Resolución de 28 de noviembre de 2005, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en cuya virtud corresponde a la Unidad de Asesoría Jurídica e Inspección de la misma:

"Informar todos aquellos proyectos de disposiciones sobre los que, en relación con la protección de datos personales, le sea solicitado informe."

CONSIDERACIONES

I

Constituye el objeto de la norma proyectada la regulación del dopaje en el deporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este anteproyecto de ley encuentra su antecedente inmediato en la vigente Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, que supuso el primer paso para la lucha contra el dopaje en la CAPV, sustituyendo a la Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y el Deporte, que no contenía ninguna regulación al respecto.



La exposición de motivos de la disposición legal proyectada, tras señalar que esta Ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva de la CAPV en materia deportiva, realiza un repaso del marco jurídico de la lucha contra el dopaje en el deporte hasta la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje, apuntando que esta norma se basa en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales y nacionales más avanzados en la lucha contra el dopaje en el deporte.

El anteproyecto de ley que ahora se tramita trata de adaptarse a la nueva realidad y a las exigencias demandadas por la sociedad actual de tolerancia cero. La propia exposición de motivos del texto señala que con esta ley se pretende endurecer de manera notable el marco legal de la lucha contra el dopaje, que ya no es sólo un grave daño deportivo, sino que se ha convertido en una práctica muy peligrosa para la salud pública. De ahí que se quiera que la ley se aplique a actividades deportivas no federativas, posibilitando controles de dopaje no sólo ceñidos a muestras sino controlando también las autorizaciones de usos terapéuticos, y se permita realizar controles de salud a los deportistas con independencia de que tengan o no una relación laboral.

Además de lo señalado, entre las novedades de este anteproyecto de ley, destacadas en su exposición de motivos, figuran la creación de la Agencia Vasca Antidopaje; la regulación del régimen sancionador inspirado en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre; el reconocimiento mutuo de sanciones impuestas por otras instancias públicas o privadas; la instauración de la baja deportiva y, la inclusión en la norma de disposiciones que inciden en el derecho de los deportistas y demás personas incluidas en el ámbito de la ley a la protección de sus datos personales, máxime cuando la propia ley parte de que la lucha contra el dopaje exige el tratamiento de datos sensibles, como son los datos de salud, que merecen especial protección. Por ello, la parte expositiva del anteproyecto incide en que la lucha contra el dopaje debe ser exquisita con los derechos de los deportistas, que deben ser ponderados de modo proporcional a los fines legítimos que se consigan en materia de lucha contra el dopaje.

Este Anteproyecto de Ley consta de 7 Capítulos y 53 Artículos.

El Capítulo I (Disposiciones Generales) regula el concepto de dopaje y ámbito de aplicación de la ley (artículo 1); los principios generales (artículo 2); las responsabilidades de las/los deportistas, del personal auxiliar de los mismos, de los poderes públicos, de las entidades deportivas y de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos (artículos 3 a 7, respectivamente, del anteproyecto); los derechos de las y los deportistas (artículo 8), y el patrocinio de deportistas y entidades (artículo 9).

El Capítulo II (Organización administrativa), viene dedicado a la creación de la Agencia Vasca Antidopaje (artículo 10), a su organización (artículo 11) y funciones (artículo 12).



El Capítulo III (Controles de dopaje) regula los deportistas con obligación de someterse a controles de dopaje (artículo 13); las garantías en los controles y sus efectos legales(artículo 14); las obligaciones accesorias y autorizaciones de uso terapéutico (artículo 15); las bajas deportivas (artículo 16); los controles del dopaje y controles de salud(artículo 17); la planificación y gestión de los controles (artículo 18); la competencia para la realización de los controles (artículo 19) y la publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte (artículo 20).

El Capítulo IV (Régimen disciplinario y administrativo sancionador del dopaje) viene dedicado al ámbito de aplicación del régimen disciplinario (artículo 21); al ámbito de aplicación del régimen disciplinario sancionador (artículo 22); a la tipificación de infracciones (artículo 24), a las sanciones a deportistas (artículo 25), a los clubes y equipos directivos(artículo 26) a técnicos, jueces, árbitros y demás personas a las que se refiere el artículo 27; a las sanciones a médicos y demás personal sanitario de clubes o equipos(artículo 28), a los criterios para la imposición de sanciones en materia de dopaje (artículo 29) y a la imposición de sanciones pecuniarias(artículo 30), regulándose en los artículos siguientes de este mismo Capítulo, las consecuencias accesorias de la infracción y alteración de resultados (artículo 31), la eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad para obtener licencia federativa (artículo 32); la aplicación del principio non bis in idem (artículo 33); las causas de extinción de la responsabilidad (artículo 34); la prescripción de las infracciones y sanciones (artículo 35); la colaboración en la detección (artículo 36), la competencia en materia sancionadora de carácter administrativo (artículo 37); la competencia en procedimientos disciplinarios (artículo 38); el procedimiento disciplinario (artículo 39); la potestad de inspección (artículo 40) y el decomiso (artículo 41).

El Capítulo V (Medidas de prevención), regula esas medidas (artículo 42); el sistema de información sobre el dopaje en el deporte (artículo 43); el control de los productos susceptibles de producir dopaje (artículo 44); los productos nutricionales (artículo 45) y la tarjeta de salud de deportista (artículo 46).

El Capítulo VI (Régimen de los datos relativos al dopaje), regula la confidencialidad de los datos (artículo 47); la autorización de cesión de datos (artículo 48) y la obligación de declaración de datos relativos a los productos y métodos susceptibles de producir dopaje en el deporte (artículo 49).

Finalmente, el Capítulo VII del anteproyecto (Federaciones deportivas internacionales y demás entidades que rigen, en el ámbito internacional, la actividad deportiva), regula los controles de dopaje a realizar en competiciones internacionales que se celebren en Euskadi (artículo 50); los controles de dopaje fuera de competición a deportistas nacionales o extranjeros que se encuentren en Euskadi (artículo 51); los controles de dopaje fuera de competición realizados en Euskadi a deportistas con licencia por parte de organizaciones internacionales (artículo 52); y los efectos en Euskadi de las sanciones impuestas por las organizaciones internacionales a deportistas y demás personas con licencia (artículo 53).



La ley proyectada consta también de 8 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Transitorias, 2 Disposiciones Derogatorias y 6 Disposiciones Finales (aunque las dos últimas se denominan como disposición final quinta).

II

Este informe pretende realizar un análisis del anteproyecto de ley y de los diversos aspectos y regulaciones que el mismo contiene, desde la estricta perspectiva que es propia a esta Agencia, esto es, su ajuste o no a la normativa de protección de datos de carácter personal, que se regula en la actualidad en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD, en adelante) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo y, además, en el ámbito de la CAPV, en la Ley 2/2004 de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que ha sido objeto de desarrollo mediante Decreto 308/2005, de 18 de octubre, y Decreto 309/2005, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

En este sentido, la primera cuestión que debe tenerse en cuenta es que, tal y como se reconoce en la exposición de motivos del texto remitido, la Ley contra el Dopaje parte de la consideración de que los datos relacionados con el dopaje y de salud son datos de carácter personal relativos a la salud y, por dicha razón, merecedores de especial protección. El análisis del anteproyecto de ley sometido a informe confirma esa aseveración, ya que su régimen incide, aunque no de manera exclusiva, en los datos de salud de las y los deportistas. Por ello, resulta fundamental el análisis de este anteproyecto de Ley a la luz de los principios y garantías del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

III

Configuración constitucional del derecho

La Constitución de 1978 consagra en su Título I una serie de derechos fundamentales, a los que dota de eficacia jurídica y establece distintos niveles de garantía, a través de instituciones e instrumentos de diferente naturaleza y de diferente alcance. Entre esos derechos, no existe en la CE una referencia expresa al derecho a la protección de datos de carácter personal, pero sí contempla el artículo 18.4 que dispone que *"la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos"*.



De ese precepto constitucional deriva el derecho a la protección de datos de carácter personal o derecho a la autodeterminación informativa, que la jurisprudencia constitucional (por todas, la STC 292/2000, de 30 de noviembre), ha consagrado como derecho fundamental y autónomo y que alguna doctrina ha denominado nuevo derecho fundamental del siglo XXI.

Este derecho fundamental a la protección de los datos personales es un concepto cuyo ámbito es más amplio que el derecho a la intimidad. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su STC 292/2000:

"La protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino cualquier tipo de datos de carácter personal, sean íntimos o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar a sus derechos sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. ...Los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo" (FJ 6º).

Debe insistirse en que este derecho no se limita a servir de instrumento de garantía de otros derechos frente al uso torticero de la informática sino que es un derecho fundamental que goza de sustantividad propia y de autonomía con respecto a todos los demás. Confiere a cada persona el pleno dominio sobre el flujo de informaciones que le conciernen, a protegerse frente a potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad proveniente de un uso ilegítimo del tratamiento automatizado de datos y a reaccionar ante ese tipo de actuaciones. Así, el Tribunal Constitucional viene afirmando que "se trata, por tanto, de un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos" (SSTC 254/1993, FJ 6º y 11/1998, FJ 4º y la más reciente STC 290/2000, FJ 7º).

En consecuencia, este derecho no se confunde con el derecho a la intimidad ya que el nuevo derecho de autodeterminación informativa no queda, así, limitado como aquél a la posibilidad legal de rechazar los ataques e injerencias perpetradas por extraños (sentido negativo) en la vida íntima de las personas, sino que adquiere ahora una nueva dimensión (sentido positivo) consistente en el reconocimiento de la libertad de la persona para poder controlar el acceso, tratamiento y circulación de sus datos personales (habeas data), sean estos íntimos o no.

Así lo ha declarado el TC, en el FD 6º de la STC 292/2000, al señalar que:

"..., el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y



destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. El derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos. Esta garantía impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información. Pero ese poder de disposición sobre los propios datos personales nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin

De ahí la singularidad del derecho a la protección de datos, pues, por un lado, su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones este Tribunal ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respeto de la dignidad personal (STC 170/1987, de 30 de octubre . F. 4), como el derecho al honor, citado expresamente en el art. 18.4 CE, e igualmente, en expresión bien amplia del propio art. 18.4 CE, al pleno ejercicio de los derechos de la persona. El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado "

Seguindo con la configuración que de tal derecho fundamental realiza la misma Sentencia, debe recordarse como la misma declara la existencia de "una segunda peculiaridad" consistente en la atribución a su titular de

"... un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales (STC 254/1993, F. 7) "

El TC, en esta misma STC 290/2000, ha definido el contenido de este derecho fundamental del siguiente modo:

"consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporciona a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un

tercero, sea el estado o un particular Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién disponga de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos. (...)” (FJ 7º)

Desde una perspectiva diferente, es necesario también tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a las características que debe reunir la Ley (ordinaria) que incide en un derecho fundamental, como puede ser el supuesto aquí analizado (*“La ley incluye disposiciones que inciden, aunque no regulan, en el derecho de los deportistas y otras personas a la protección de sus datos de carácter personal”*, de acuerdo con la Exposición de Motivos) porque como expresa el Tribunal Constitucional, la Ley puede vulnerar el derecho fundamental por haber regulado (o afectado) el haz de facultades que componen el contenido del derecho fundamental prescindiendo de las precisiones y garantías mínimas exigibles a una Ley sometida al insoslayable respeto al contenido esencial del derecho fundamental cuyo ejercicio regula.

Así, la STC 292/2000 de 30 de noviembre, ya citada establece que

“... Los derechos fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, F. 6; STC 18/1999 de 27 de febrero, F. 2)... De otro lado, aun teniendo un fundamento constitucional y resultando proporcionadas las limitaciones del derecho fundamental establecidas por una Ley (STC 178/1985), éstas pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de aplicación...conculcará también esa Ley limitativa si regula los límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga.

De la misma manera, el Tribunal Constitucional se encarga de establecer las características que debe reunir la Ley que proceda a establecer dichos límites.

Así, la reciente Sentencia 70/2009, de acuerdo con la cual

“Según jurisprudencia constitucional consolidada, la ley deberá concretar las restricciones, alejándose de criterios de delimitación imprecisos o extensivos, pues vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal el establecimiento de límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11). Como señalábamos en la STC 49/1999, en relación justamente con la protección del derecho fundamental a la intimidad, la injerencia en la misma exige de un modo “inexcusable” una previsión legal que “ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención” (FJ 4); ha de poseer lo que en otras ocasiones hemos denominado cierta “calidad de ley” (SS1C 49/1999, de 5 de abril, FJ 5; 169/2001, de 16 de julio, FJ 6; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 2).”



Quiere decirse con lo que antecede que aunque la norma sometida a informe tenga rango de Ley y que sea un principio general de protección de datos que el consentimiento del interesado pueda ser excepcionado cuando así lo prevea una norma con tal rango, no es posible limitarse en el presente supuesto en la constatación de que la incidencia en el derecho fundamental se produce a través de una Ley implicando ello de manera automática que no es posible entonces la vulneración del derecho fundamental, sino que deberá comprobarse que dicha Ley cumple los requisitos que la jurisprudencia constitucional exige para hacer válida dicha incidencia.

Por ello, siendo evidente que, por una parte, el derecho fundamental a la protección de datos no es ilimitado, y, por otra, que la Constitución ha querido que la Ley "y sólo la Ley", pueda fijar los límites al derecho fundamental, no lo es menos que no resulta suficiente con que los límites se contengan en una norma con rango de Ley, como lo es la proyectada, sino que es necesario el cumplimiento de otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece dichos límites porque también conculcará el derecho fundamental la Ley que limita el derecho fundamental de tal forma que lo haga impracticable, o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga.

IV Datos de Salud

Datos de salud y protección de datos de carácter personal.

El concepto "*datos de salud*", "*datos relativos a la salud*" o, últimamente, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD "*datos de carácter personal relacionados con la salud*" viene definido (artículo 5.1 g) del Real Decreto 1720/2007) como "*las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo.*"

Se establece así un concepto amplio de los mencionados datos siguiendo lo señalado en la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 y las recomendaciones adoptadas por el Comité de Ministros de la citada institución así como la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades.

En este sentido, el Considerando 45 del Convenio define los datos de salud como "*las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental de un individuo*"

De la misma manera, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de noviembre de 2003, establece que:

"Es preciso dar una interpretación amplia de la expresión datos de salud, empleada por el artículo 8 apartado 1 de la Directiva 95/46/CE de modo que comprende la información relativa a todos los aspectos tanto físicos como psíquicos de la salud de una persona".



Dicha interpretación amplia del concepto es ofrecida también por la Recomendación R(97) 5 de 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre protección de datos médicos, a cuyo tenor se entiende por tales no solo "todos los datos personales relativos a la salud de un individuo", sino también "a los datos que tengan una clara y estrecha relación con la salud y los datos genéticos".

Resulta muy clarificador al respecto el Documento de Trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos electrónicos (Documento EP131) elaborado por el Grupo del artículo 29, de acuerdo con el cual

"Esta definición (la de dato relativo a la salud) también se aplica a los datos personales cuando tienen una relación clara y estrecha con la descripción del estado de salud de una persona .. especialmente si están incluidos en un expediente médico. También habrá que considerarse sensibles otros datos, por ejemplo los datos administrativos (número de seguridad social, fecha de ingreso en un hospital, etc ..) contenidos en la documentación médica relativa al tratamiento de un paciente; si no fueran pertinentes en el contexto del tratamiento del paciente, no se habrían incluido, ni deberían haberse incluido en un expediente médico".

De la misma manera se establece en tal documento que

"Las disposiciones jurídicas que introducen un sistema de HME debe establecer por norma general el consentimiento previo del paciente para la introducción de datos en un HME o el acceso a tales datos (especialmente por lo que respecta al tratamiento de datos susceptibles de utilizarse de forma perjudicial, como por ejemplo datos psiquiátricos, datos sobre abortos, etc.), y prever la posibilidad de denegación por lo que respecta a datos menos íntimos"

Para concluir que

"Todos los datos contenidos en documentos médicos, en historiales médicos electrónicos y en sistemas de HME son datos personales sensibles. Por tanto no sólo están sujetos a todas las normas generales sobre protección de datos personales de la Directiva, sino también a las normas sobre protección de datos especiales que rigen el tratamiento de la información sensible, contenidas en el artículo 8 de la Directiva".

Que los datos de salud se encuentran dentro del ámbito protegido por la intimidad personal es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (últimamente las Sentencias 70/2009 de 23 de marzo y 159/2009 de 26 de junio)

Dichos datos son también objeto de protección desde la perspectiva del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Así la Sentencia del Tribunal Constitucional 202/1999, de 8 de noviembre, de acuerdo con la cual

"Dicho esto, y teniendo en todo momento presente que la concreta cuestión suscitada en el presente recurso de amparo se refiere a la conformidad con el art. 18 CE del tratamiento y conservación en el preciso soporte informático de los datos referentes a la salud del trabajador, a que se acaba de hacer



referencia, debemos señalar que la realización de dichas actividades proscribiendo el consentimiento expreso del afectado ha de calificarse como una medida inadecuada y desproporcionada que conculca por ello el derecho a la intimidad y a la libertad informática del titular de la información.

... lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los cánones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideración de solución idónea, necesaria y proporcionada para la consecución del fin. en este caso, el control del absentismo laboral (SSTC 66/1995), fundamento jurídico 5º; 207/1996, fundamento jurídico 4º E) y 69/1999), fundamento jurídico 4º], pues no se trata de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan más beneficios o ventajas para el interés general o para el interés empresarial que perjuicios sobre el invocado derecho a la intimidad.

Al respecto, interesa recordar que, en desarrollo de lo previsto en el art. 18.4 CE, en la LORTAD se enuncian, entre otros principios generales de la protección de datos, la congruencia y racionalidad de su utilización, «en cuya virtud ha de mediar una nítida conexión entre la información personal que se recaba y trata informáticamente y el legítimo objetivo para el que se solicita y, en consecuencia, prohíbe tajantemente el uso de los datos para finalidades distintas de las que motivaron su recogida (aps. 1 y 2 del art. 4)» (STC 94/1998, fundamento jurídico 4º), así como su exactitud y puesta al día (art. 4.3). Esta regulación es sustancialmente coincidente con lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, para la protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado por España mediante Instrumento de 27 de enero de 1984, y en los arts. 6 y ss. de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995), sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Pues bien, en este caso debemos afirmar que el expresado tratamiento informático - con vistas a su conservación- de los datos referidos a la salud de los trabajadores de que tenga conocimiento la empresa quiebra la aludida exigencia de nítida conexión entre la información personal que se recaba y el legítimo objetivo para el que fue solicitada.

Consecuentemente, debemos concluir que el tratamiento y conservación del diagnóstico médico en la mencionada base de datos sin mediar consentimiento expreso del afectado incumple la garantía que para la protección de los derechos fundamentales se contiene en el art. 53 CE.

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de julio de 2008 establece al respecto que

“La protección de datos personales, en concreto de los datos médicos, es de esencial importancia en el disfrute de un individuo del derecho al respeto de su vida privada y familiar, tal y como garantiza el artículo 8 del Convenio. Respetar la confidencialidad de los datos médicos es un principio vital en los sistemas legales de los Estados Contratantes del Convenio. Es crucial, no sólo respetar el sentido de la privacidad de un paciente, sino también, preservar su confidencialidad en la profesión médica y en los servicios de salud en general... La legislación interna debe proporcionar las garantías adecuadas para prevenir cualquier tipo de comunicación o revelación sobre los datos



personales de salud, ya que se incumplirían las garantías del artículo 8 del Convenio."

También el Tribunal Constitucional ha señalado que tal derecho fundamental no es ilimitado

"... y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los Poderes Públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución (SSTC 11/1981, de 8 de abril, F. 7.; F. 6, y respecto del art. 18, la STC 110/1984, F. 5). Esos límites o bien pueden ser restricciones directas del derecho fundamental mismo, a las que antes se ha aludido, o bien pueden ser restricciones al modo, tiempo o lugar de ejercicio del derecho fundamental. En el primer caso, regular esos límites es una forma de desarrollo del derecho fundamental. En el segundo, los límites que se fijan lo son a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que compone el contenido del derecho fundamental en cuestión, constituyendo una manera de regular su ejercicio, lo que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE. La primera constatación que debe hacerse, que no por evidente es menos capital, es que la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental. Los derechos fundamentales pueden caer, desde luego, ante bienes, e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido" STC 292/200

Y ha señalado también la manera en que se puede llevar a cabo dichas limitación

"De igual modo, respecto al derecho a la protección de datos personales cabe estimar que la legitimidad constitucional de la restricción de este derecho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la Administración Pública. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise en cada caso sus límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión cuando concurre algún derecho o bien constitucionalmente protegido. Es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias. Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la Administración el desempeño de una función que sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de Ley del art. 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y su regulación".



Régimen jurídico de la protección de los datos de salud.

El Convenio nº 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 establece en su artículo 6 que

"Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas".

Debe ser igualmente objeto de cita el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 y ratificado mediante Instrumento de 23 de julio de 1999 (BOE nº 251 de 20 de octubre de 1999) que constituye el primer instrumento internacional que trata el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas estableciéndose un marco común para la protección de los derechos humanos y la dignidad en el campo de la biología y la medicina, configurándose en su artículo 5 como regla general para una intervención en el ámbito de la sanidad el consentimiento informado de la persona afectada.

El artículo 8.1 de la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en cuanto su considerando 33 reconoce que tal tipo de datos relativos a la salud constituyen *"datos que por su naturaleza puedan atentar contra las libertades fundamentales o la intimidad"* establece que

"Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad".

La especial protección conferida a los datos de salud por las normas internacionales y comunitarias tienen reflejo en la LOPD que establece un régimen jurídico específico contenido básicamente en el apartado 3 del artículo 7, artículo dedicado a los *"datos especialmente protegidos"* merecedores del más alto nivel de protección por afectar a los aspectos más íntimos de la personalidad, situándose en un plano en el que confluyen dos derechos fundamentales: el de intimidad y de protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con tal apartado.

"Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".

Dada la incidencia especial de los datos de salud, como datos sensibles, en la esfera íntima del afectado, la LOPD ha establecido una regulación específica y más rigurosa que la establecida con carácter general tanto en lo referente a los



supuestos en que será posible el tratamiento de los datos como en lo que atañe a las medidas que habrán de adoptarse para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos, así como el cumplimiento de deberes de confidencialidad y sigilo que deben regir en el mencionado tratamiento, de tal manera que la necesidad de obtener el consentimiento expreso de los titulares de tales datos constituye la regla general para el tratamiento de los mismos.

No obstante, el mismo artículo 7.3 contempla la posibilidad de que dicho tratamiento pueda llevarse a cabo en los supuestos en los que una ley así lo disponga debiendo quedar dicha habilitación fundada en la existencia de razones de interés general.

Conviene profundizar en el significado de la expresión "...solo...cuando...así lo disponga una ley".

En tal sentido debiera comenzarse otra vez por la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 8 de la misma.

"Siempre que dispongan las garantías adecuadas los Estados miembros podrán por motivos de interés público importantes establecer otras excepciones además de las previstas en el apartado 2 bien mediante su legislación estatal, bien por decisión de la autoridad de control."

El Considerando 34 de la Exposición de Motivos de la Directiva 95/46/CE contiene la explicación de dicho precepto. De acuerdo con tal considerando "se deberá autorizar a los Estados miembros, cuando esté justificado por razones de interés público importante a hacer excepciones a la prohibición de tratar categorías sensibles de datos en sectores como la salud pública y la protección social, particularmente en lo relativo a la garantía de la calidad y la rentabilidad, así como los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen del seguro de enfermedad, la investigación científica y las estadísticas públicas; que a ellos corresponde no obstante prever las garantías apropiadas y específicas a los fines de proteger los derechos fundamentales y la vida privada de las personas".

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29, en el documento de trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos electrónicos, ha interpretado también el artículo 8.4 de la Directiva y ha entendido que

"En cada caso, el conjunto de tratamientos de datos objeto de excepción deberá presentar un interés público importante para el Estado miembro y dicho tratamiento deberá ser necesario a la luz de tal interés público importante. Este tipo de medidas deben ser proporcionadas es decir no deben existir otras medidas que supongan menos excepciones."

Además para que una interferencia con el derecho a la vida privada y familiar sea legítima, deberá ser conforme con el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y deberá entenderse a la luz de la jurisprudencia de



Estrasburgo: debe hacerse de conformidad con la ley y ser necesaria en una sociedad democrática a efectos de un interés público. La jurisprudencia de Estrasburgo ha afirmado en varias ocasiones que la ley que establezca la excepción debe indicar el alcance del poder discrecional conferido a las autoridades competentes y la forma de su ejercicio con la suficiente claridad teniendo en cuenta el objetivo legítimo de la medida en cuestión, a fin de proporcionar al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad."

El apartado 3 del artículo 8 de dicha Directiva proyecta la anterior previsión a los datos de salud estableciendo que

"El apartado 1 no se aplicará cuando el tratamiento de datos resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional sea en virtud de la legislación nacional, o de las normas establecidas por las autoridades nacionales competentes, o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto".

El punto 7. apartado primero de la Recomendación R(97) de 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre Protección de Datos Médicos trata precisamente de la comunicación de este tipo de datos, estableciendo como regla general en cuanto a su comunicación que *"Los datos médicos no se comunicarán salvo en las condiciones establecidas en este capítulo y en el Capítulo 12."*

El apartado tercero de dicho punto, en lo que ahora más puede interesar, contempla dos supuestos en los que es posible la comunicación de dichos datos sin el consentimiento de su titular:

"a) cuando la comunicación esté prevista por una Ley y constituya una medida necesaria en una sociedad democrática por:

- i. razones de salud pública; o*
- ii. la prevención de un peligro real o la represión de un delito específico; o*
- iii. otro interés público importante; o*
- iv. la protección de los derechos y libertades de otros*

b) cuando la comunicación sea permitida por una Ley con fines de:

- i. protección del sujeto de los datos o de un pariente en línea genética*
- ii. salvaguarda de intereses vitales del afectado o de una tercera persona; o*
- iii. el cumplimiento de obligaciones contractuales específicas; o*
- iv. el establecimiento, ejercicio o defensa de una reclamación legal".*

El documento WP131 al que se ha hecho referencia más arriba, señala igualmente que

"Esta excepción cubre solamente el tratamiento de datos personales para el propósito específico de proporcionar servicios relativos a la salud de carácter preventivo, de diagnóstico, terapéutico o de convalecencia y a efectos de la



gestión de estos servicios sanitarios como por ejemplo facturación, contabilidad o estadísticas.

No se cubre el tratamiento posterior que no sea necesario para la prestación directa de tales servicios, como la investigación médica, el reembolso de gastos por un seguro de enfermedad, o la interposición de demandas pecuniarías. También queda fuera del alcance de la aplicación del apartado 3 del artículo 8 otros tratamientos en áreas como la salud pública y la protección social, particularmente en lo relativo a la garantía de la calidad y la rentabilidad, así como los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen de seguro de enfermedad, dado que éstos se mencionan en el considerando 34 de la Directiva como ejemplos para invocar el apartado 4 del artículo 8"

Dichas previsiones comunitarias son también objeto de transposición por la LOPD.

Así, el artículo 7.6 de dicha Ley Orgánica, de acuerdo con el cual

"No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esta física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento"

Tal precepto ha sido objeto de interpretación por la jurisprudencia y así la Audiencia Nacional, en Sentencia de 31 de mayo de 2002 ha indicado que la excepción prevista en el artículo 7.6 habrá de ser interpretada restrictivamente, considerando que será preciso atender en cada caso concreto a que el tratamiento se dirija efectivamente a la prevención y el diagnóstico. En este sentido, un tratamiento para un fin distinto (en el caso analizado, el control del absentismo laboral) en que estas finalidades puedan ser consideradas "secundarias" no se encontraría amparado por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Más recientemente confirma dicha estricta interpretación la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2009 que cassa una anterior de la Audiencia Nacional de 24 de mayo de 2007, y de acuerdo con la cual

"En cuanto a la historia clínica, es cierto que los arts. 14 y siguientes de la Ley de Autonomía del Paciente favorecen "la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente" a fin de lograr una adecuada asistencia sanitaria. Tal vez ello justifique hablar, como hace la sentencia impugnada, de un principio de unidad de la historia clínica. Dicho esto, es preciso inmediatamente señalar que esa integración de la historia clínica, tendente a evitar la dispersión de la información sanitaria sobre cada paciente, tiene como beneficiario al propio paciente. El inciso inicial del art. 16 de la Ley



de Autonomía del Paciente es paladinamente claro a este respecto: "La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente." Las historias clínicas no deben tener carácter unitario, como pretende la sentencia impugnada, para facilitar su misión a las mutuas de prevención de riesgos laborales, ni menos aún a los empresarios. Ciertamente, permiten prestar una asistencia sanitaria mejor; pero esta mejora no se justifica por el ahorro de esfuerzo para terceros (personal sanitario, Administración, empresarios, etc.), sino por el bienestar del paciente. Este punto es de crucial importancia, porque la información sobre la salud de las personas forma parte del objeto protegido por el derecho fundamental a la intimidad, tal como ha aclarado, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2004 . De aquí que toda excepción a la confidencialidad que pesa sobre dicha información sólo pueda justificarse por el beneficio que reporte al propio paciente o, en su caso, por ineludibles y superiores exigencias de interés general debidamente ponderadas, que de ningún modo pueden consistir en un funcionamiento más ágil de las mutuas de prevención de riesgos laborales. Tan es así que el art. 18 de la Ley de Autonomía del Paciente sólo confiere el derecho de acceso a la historia clínica al paciente, no a terceros; y el sucesivo art. 19 de ese mismo texto legal obliga a establecer "un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas".

En resumen, en esta materia rige incuestionablemente la máxima confidencialidad posible, sin que haya elemento alguno en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o en la Ley de Autonomía del Paciente que permitan afirmar que la comunicación de datos no consentida llevada a cabo por Fremap estaba autorizada por una ley"

Por otra parte, en el marco de la asistencia sanitaria añade el artículo 8 que "sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad".

En este mismo sentido, recuerda el artículo 10.5 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 que "no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación de datos personales sobre la salud, incluso a través de medios electrónicos, entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se realice para la atención sanitaria de las personas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud".

Por último, el artículo 11.2 f) de la Ley Orgánica establece la licitud de la cesión de determinados datos relacionados con la salud si la misma es "necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica".

De cuanto se lleva dicho, cabe concluir a juicio de esta Agencia que el artículo 7.3 de la LOPD establece un régimen específico para los datos de salud, de modo que



su tratamiento o comunicación podrá llevarse a cabo sin consentimiento del afectado sólo en caso de que una Ley así lo prevea, debiendo quedar esta habilitación fundada en la existencia de razones de interés general.

De manera más rotunda, como hace el reciente Informe de la Agencia Española de Protección de Datos 219/2008 puede decirse que *“la aplicación del artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos implica, por mor del principio de especialidad, la imposible aplicación a los datos referidos en el mismo de cualquiera de las causas legitimadoras del tratamiento previstas en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica, quedando limitados los supuestos habilitantes del tratamiento y cesión de estos datos a los establecidos en norma especial o a aquéllos en los que la norma general se refiere expresamente a tales datos.”*

En consecuencia, la Ley Orgánica 15/1999 viene a establecer una lista tasada de casos en que será posible el tratamiento de los datos relacionados con la salud, quedando el mismo limitado a los supuestos en que:

- El interesado haya prestado su consentimiento expreso para ello.
- Una norma con rango de Ley así lo prevea, por razones de interés público.
- El tratamiento sea necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, con las restricciones previstas en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica, que deberá además ser objeto de una interpretación restrictiva, en los términos ya señalados.
- El tratamiento sea necesario para atender una urgencia vital del afectado.
- El tratamiento se lleve a cabo en el ámbito de la asistencia sanitaria respecto de los pacientes que acudan a los centros sanitarios, en los términos previstos en la legislación sectorial que resulte de aplicación.
- La comunicación de los datos sea precisa para solucionar una urgencia o para realizar los estudios epidemiológicos.

V

Normativa sobre dopaje

Ámbito estatal

El 21 de noviembre de 2006, se aprobó la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.

La aprobación de esa Ley se enmarca en el plan de lucha contra el dopaje, y viene a sustituir la normativa contra el dopaje contenida hasta entonces en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, actualizada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, incorporando al derecho interno las directrices internacionales en la materia. Con esta ley se pretende



reprimir el dopaje en la alta competición y, también, el dopaje en general, en cuanto supone una amenaza para la salud las personas. Esta ley se aplica a las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y, en los términos que señala la ley, a las actividades deportivas internacionales que se realicen en España, y a deportistas con licencia federativa estatal o con licencia federativa autonómica homologada, y se extiende también a las personas que incidan, por cualquier medio, en la realización de la actividad deportiva, en los términos que la Ley señala.

Entre las novedades de esa ley, merecen destacarse la creación de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, y la de la Agencia Estatal Antidopaje; la obligación de los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal de someterse a los controles que determina la citada Comisión, que podrán efectuarse dentro o fuera de la competición; la protección de los datos del deportista, estableciendo garantías específicas para ello; la regulación de la potestad sancionadora y la introducción en la ley de un ámbito de tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte y, finalmente, debe resaltarse la regulación de la tarjeta de salud, como documento público que contiene la información de los reconocimientos médicos y de los controles de salud y de dopaje del deportista, así como de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas y de las bajas laborales.

El Informe de la AEPD sobre el anteproyecto de ley

La AEPD emitió con fecha 25 de octubre de 2005, informe sobre el anteproyecto de la citada ley orgánica y su adecuación a la normativa de protección de datos de carácter personal, y concluyó que esa adecuación exigía, a su entender, una serie de modificaciones del texto del anteproyecto, referidas, fundamentalmente, a la necesidad de incluir una mayor referencia a la LOPD a lo largo de la ley, para su adecuación a los principios que configuran el derecho fundamental y, en entre ellos, el de finalidad y el de proporcionalidad a la hora de recoger, tratar y ceder datos o de cancelar los innecesarios, recomendando, entre otras muchas cuestiones, una mención expresa en la norma al deber de información a los deportistas de los tratamientos a los que son sometidos sus datos, y a la posibilidad de ejercer los derechos ARCO. La mayoría de sus recomendaciones fueron incorporadas finalmente al proyecto de ley.

El informe del Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial se mostró partidario de la Ley proyectada y puso especial empeño en que fuese una Ley Orgánica la que regulase la lucha contra el dopaje en el deporte, dado que al afectar a derechos fundamentales, lo exigía el artículo 81 CE.

Se consideró también por el CGPJ que el anteproyecto de ley contenía un régimen de protección que garantizaba los derechos de los deportistas. A su juicio, se respetaba el régimen de confidencialidad, cesión y transmisión de datos, mediante la



compatibilidad de la protección de datos con los fines de interés general de prevención y lucha contra el dopaje en el deporte que la norma contemplaba.

El informe del Consejo de Estado de 2 de febrero de 2006 (dictamen 31/2006)

El Consejo de Estado, en su dictamen 31/2006, analizó detalladamente el anteproyecto de ley orgánica, y se remitió al de la AEPD en lo que se refería a la protección de datos personales.

Ámbito Europeo e Internacional

Tampoco puede obviarse la existencia de instrumentos comunitarios e internacionales que se han ocupado de la cuestión.

La Unión Europea fue pionera en la lucha contra el dopaje. En este sentido, pueden recordarse las Resoluciones adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en esta materia, en concreto, la Resolución (67)12 sobre el Dopaje de los Atletas; la Recomendación número R(79) 8 sobre el Dopaje en el Deporte; la Recomendación número R(84) 19 relativa a la Carta Europea contra el Dopaje en el Deporte, y la Recomendación número R(88) 12 sobre el Establecimiento de Controles Antidopaje sin preaviso fuera de competición.

Posteriormente, se aprobó el Convenio nº 135 del Consejo de Europa, de 16 de noviembre de 1989, para la lucha contra el Dopaje. Diez años más tarde, en 1999, se celebra la primera Conferencia Mundial sobre el dopaje en el deporte, y ese mismo año se constituye y pone en marcha la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). En 2003, esta entidad elabora el Código Mundial Antidopaje, y los estándares internacionales de procedimientos que lo complementan. Este Código, que nace para proteger el derecho de los deportistas a participar en un deporte limpio, carece de fuerza vinculante en el ámbito internacional público, lo que cambia tras la incorporación de sus principios a la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, aprobada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 19 de octubre de 2005, y ratificada por España el 26 de septiembre de 2006.

Todo ello, lleva a una armonización progresiva de las normas y prácticas antidopaje en el deporte a nivel internacional.

En relación con las mismas, es posible apreciar un interés especial por la cuestión relativa a la protección de datos de carácter personal y como consecuencia puede destacarse la Norma Internacional para la protección de los datos personales hecho por la Agencia Mundial Antidopaje, y cuya versión 2.0 entró en vigor el 1 de junio de 2009 - siendo su objetivo principal, según el preámbulo de la Norma, garantizar que las organizaciones y personas que participan en actividades antidopaje en el deporte apliquen mecanismos de protección adecuados, suficientes y efectivos de los datos personales que tratan, con independencia de que ello sea asimismo obligatorio en virtud del derecho aplicable- y los Dictámenes 3/2006 y 4/2009 elaborados por el Grupo de Protección de Datos del artículo 29 en relación con dicha Norma



internacional, y otros aspectos relacionados con la intimidad en el contexto de la lucha contra el dopaje por parte de la Agencia Mundial Antidopaje y de las organizaciones relacionadas con el antidopaje, donde se concluye que hay numerosos extremos del Código AMA y de la Norma que siguen siendo incompatibles con la Directiva 95/46/CE, encontrando la mayor dificultad en la falta de especificación tanto en el Código AMA como en la Norma de las finalidades del tratamiento de los datos personales (incluidas las cesiones ulteriores) de la base de datos ADAMS (en particular, por categoría de afectados), en especial de los datos de salud y los relativos a las infracciones administrativas y penales de los deportistas.

VI

Análisis del anteproyecto. Cuestiones previas

Ámbito subjetivo y objetivo

Tal y como señalábamos con anterioridad, corresponde a esta Agencia analizar la norma proyectada desde la estricta perspectiva que le corresponde, es decir, sobre la adecuación de los tratamientos que la misma contempla a las garantías y principios que conforman el núcleo esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Ello no obstante, resulta obligado, en este caso, por las razones que a continuación se señalan, detenernos, si quiera un instante, en el ámbito de la Ley.

El anteproyecto de ley remitido, define, en su artículo 1, lo que se entiende por dopaje a efectos de la ley, y los ámbitos material y subjetivo de la norma. La concreción de los dos ámbitos, objetivo y subjetivo, resulta, a nuestro juicio, básico para analizar su afectación a la normativa en materia de protección de datos.

Respecto al ámbito objetivo, dispone el apartado cuarto de este artículo 1 que *"El ámbito material general de la presente Ley está constituido, en principio, por las actividades y competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco. No obstante lo anterior, quedan excluidas de la aplicación de la ley las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente"*.

De la redacción de dicho artículo parece desprenderse que la voluntad de sus redactores es que la norma resulte de aplicación a cualquier actividad deportiva, de competición o no, federada o no, que se desarrolle en la CAPV, con las excepciones que el propio precepto establece. Por ello, si no fuese esta la voluntad pretendida, sería aconsejable dar una nueva redacción a ese apartado más clarificador de su verdadero sentido.



Mayores consecuencias tiene, en nuestra opinión, la regulación del ámbito subjetivo.

De conformidad con el artículo 1 apartado 5 y siguientes, son destinatarios de la ley *"las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite, para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco, así como todos aquellos y aquellas deportistas mientras residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco"*

Además de a los deportistas, dice el artículo 1.5, que la ley resulta de aplicación *"a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad deportiva en el País Vasco, aunque sea temporalmente"*. Aunque los términos en los que aparece redactado este párrafo no son suficientemente claros, entendemos que parece querer referirse a las personas físicas o jurídicas que sin ser deportistas asumen una responsabilidad directa en el entrenamiento y actividad de los propios deportistas.

A continuación, ese mismo precepto legal define, en su apartado 6, el concepto de *"deportista"*, a efectos de la ley, como *"todas aquellas personas que practiquen algún deporte, aunque no estén federadas o no participen en competiciones deportivas"*.

Este concepto de deportista, según se define en el texto remitido, parece permitir la extensión del ámbito subjetivo de la ley a cualquier persona, de cualquier edad, que practique cualquier deporte, y resida, aunque sea temporalmente, en el País Vasco, con independencia de que esté o no federado, o de que compita o no.

Sin embargo, esta conclusión que deriva del artículo 1 del texto, no queda clara del resto del articulado de la ley, donde se van concretando los sujetos obligados por la norma, el alcance de sus respectivas obligaciones y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En este sentido, podemos apuntar como ejemplo que las sanciones graves o muy graves que se impondrán a los deportistas por la comisión de infracciones en materia de dopaje, consistirán en la suspensión o privación de licencia federativa por un periodo determinado y, en su caso, multa (artículo 25), con el añadido de que las sanciones pecuniarias solo podrán imponerse cuando los deportistas obtengan ingresos que estén asociados a la actividad deportiva desarrollada (artículo 30.1), de modo que las infracciones cometidas por deportistas no federados parece que quedarían impunes en la ley.

Por todo ello, creemos necesario delimitar con mayor precisión el ámbito de la ley, evitando cualquier interpretación no querida por los redactores del anteproyecto. Pero además, esa necesidad se vuelve básica, a juicio de la AVPD, para cohesionar la lucha contra el dopaje, como medio de garantizar el juego limpio y la prevención de la salud de quienes practican alguna actividad deportiva, que es la finalidad pretendida por la norma, con el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las y los deportistas y personas intervinientes, a que se refiere la exposición de motivos de la Ley, dado que la aplicación de los principios y garantías que establece la LOPD, entre ellos, el principio de calidad (artículo 4), en el sentido de proporcionalidad en el tratamiento de los datos que la ley contempla, dependerá de las personas sujetas a ella.



En este sentido, no puede perderse de vista, que el artículo 2 del texto establece la obligación de las y los deportistas de someterse, dentro o fuera de competición, al control de dopaje al que se le requiera por las autoridades competentes, y a los exámenes, revisiones, comprobaciones o investigaciones complementarias que se le exijan, y que esa obligación alcanza a todas las y los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de la ley (artículo 13.1).

Así las cosas, y en una primera aproximación a la norma, no parece que superaría ese juicio de proporcionalidad, someter a cualquier niño residente en Euskadi, que practique algún deporte, por ejemplo, fútbol o atletismo en la calle, a controles de dopaje y a los distintos tratamientos de datos personales que contempla la ley, por mucho que la finalidad de la norma proyectada sea también preservar la salud de quienes practican deporte en esta Comunidad Autónoma.

Al hilo de lo señalado, llama además poderosamente la atención que el artículo 1.1 del texto, cuando define el dopaje a efectos de la ley, diga que representa un acto contrario al espíritu deportivo y sin embargo, no haga mención alguna a que representa también un riesgo para la salud, cuando muchos de los tratamientos de datos personales que la ley contempla parecen justificarse, exclusivamente, en la necesaria protección de la salud de las y los deportistas.

Todo lo expuesto, lleva a la AVDP a recomendar una reelaboración del artículo 1 más clarificadora de su verdadero alcance, lo que, como hemos apuntado, resulta determinante para valorar la compatibilidad de la norma con los derechos fundamentales de las personas implicadas, particularmente, con su derecho a la intimidad (art. 18.1CE), y a la protección de sus datos personales (art. 18.4 CE).

Principios de protección de datos

Tras esta consideración sobre el ámbito de la norma, resulta obligado insistir en que la ley que pretenda constituirse como norma habilitante para excepcionar determinados tratamientos de datos de salud de los deportistas de la necesidad de su consentimiento, deberá respetar los principios y garantías que configuran el derecho fundamental de todas las personas a la protección de sus datos personales, ya que en otro caso, el rango de la norma no será suficiente para habilitar esos tratamientos.

Entre estos principios que conforman el derecho fundamental del 18.4 CE, cobra especial relevancia para analizar este anteproyecto el principio de calidad de los datos. Este principio, regulado en el artículo 4 LOPD, exige que los datos personales sólo puedan ser recogidos y tratados cuando sean "adecuados, pertinentes y no excesivos" en relación con las finalidades "determinadas, explícitas y legítimas" para las que se hayan obtenido (artículo 4.1), y que no puedan usarse para finalidades incompatibles (entendidas como distintas) con aquéllas para las que se han recogido (artículo 4.2), ni servirse para la recogida de datos de "medios fraudulentos, desleales o ilícitos" (artículo 4.7).

Ese principio legal exige también que los datos sean "exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado" (artículo 4.3),



de modo que "si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16" (artículo 4.4).

En consecuencia, la finalidad y actividad legítima de quien trata los datos marcan los límites a su recogida y tratamiento, que deberá ceñirse a los que sean proporcionados con la finalidad perseguida. De ahí, la obligación que impone este precepto legal de cancelarlos "cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados", disponiendo que "no serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un periodo superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados" (artículo 4.5).

Junto al principio de calidad, entendido como de finalidad legítima y proporcionalidad, deben también respetarse los principios de consentimiento del afectado (artículo 6 LOPD) y el derecho de información en la recogida de los datos (artículo 5 LOPD).

Si el derecho fundamental a la protección de datos consiste, precisamente, en el poder de disposición del ciudadano sobre la información que le concierne, resulta obvio que uno de sus elementos esenciales será precisamente la necesidad del consentimiento inequívoco de aquél como causa esencial legitimadora del tratamiento, consentimiento que podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos (artículo 6 LOPD).

El consentimiento del interesado es, por tanto, un requisito necesario para el tratamiento de sus datos personales," salvo que la ley disponga otra cosa", y aparece definido en el artículo 3 de la propia LOPD como *"toda manifestación, libre, inequívoca, específica e informada mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de datos personales que le conciernen"*. Por ello, a la hora de recabar los datos de los interesados, éstos deben ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco de si esos datos formarán parte de un fichero o serán objeto de tratamiento, además de la identidad del responsable, del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, de los derechos que le asisten y sobre todo de los fines específicos para los cuales se recaban dichos datos (artículo 5 LOPD).

Una vez informado, el interesado podrá o no prestar su consentimiento, que deberá ser, en todo caso, expreso si los datos recabados son datos de salud u otros datos especialmente protegidos del artículo 7.3 LOPD.

Del mismo modo, el consentimiento del afectado es exigido por la LOPD para la comunicación de datos personales (artículo 11.1). Sin embargo esa regla general puede venir exceptuada en los supuestos tasados en la propia LOPD, entre otros, cuando la cesión esté autorizada en una norma con rango de ley (artículo 11.2.a) LOPD), siendo necesario que el afectado sea debidamente informado en los términos exigidos en el artículo 5. LOPD. Ello no obstante, y si hablamos de datos especialmente protegidos, la ley LOPD, contempla un régimen mucho más estricto para tratamiento, y, en concreto, respecto a los datos relacionados con de salud de



los deportistas, apuntábamos anteriormente los supuestos tasados que posibilitarían los tratamientos de esos datos.

Debe por último destacarse que si la cesión se produce entre Administraciones Públicas, que actúan las mismas competencias o competencias similares en un mismo ámbito material, estas cesiones de datos, siempre que no se trate de datos especialmente protegidos, no precisan de consentimiento del titular de los mismos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la LOPD.

En cuanto a los requisitos que deberá reunir el consentimiento cuando los afectados sean menores de edad, es preciso recordar que, de conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD, habrá que distinguir entre los menores de 14 años y los mayores de esa edad. En el caso de menores de 14 años, se requerirá el consentimiento de sus padres o tutores. Si son mayores de 14 años, como regla general, podrán otorgar el consentimiento los propios menores, salvo en los casos que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. Además, la información previa a recabar ese consentimiento del menor deberá expresarse en un lenguaje fácilmente comprensible por aquél, con expresa indicación de lo dispuesto en ese precepto reglamentario, debiéndose también garantizar que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.

En definitiva, se debe analizar si el consentimiento que se exija, cumple, en cada caso, los presupuestos de la LOPD y normativa de desarrollo, en función de la tipología de datos recabados y de quienes sean los titulares de los datos y los cedentes y cesionarios de los mismos.

Estos principios, someramente expuestos deberán ser necesariamente respetados por la norma proyectada para su adecuación al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, al constituir los mismos contenido esencial del propio derecho fundamental.

Consideraciones Generales

Señalado lo anterior, y centrándonos en el texto del anteproyecto de ley remitido, vemos que éste dedica un Capítulo, el sexto, al régimen de los datos relativos al dopaje, aunque es posible observar a lo largo de prácticamente todo el articulado constantes previsiones relativas a actuaciones que constituyen tratamientos de datos de carácter personal, en ocasiones como se ha dicho, relacionados con la salud. De ahí también las abundantes referencias a la normativa de Protección de Datos de carácter personal.

En dicho sentido es posible observar cómo el texto contiene diferentes previsiones que, de una manera expresa unas veces e implícita otras, implican tratamientos de datos de carácter personal.

De esta manera, debe hacerse referencia al menos a las siguientes cuestiones con una indudable incidencia en el derecho fundamental



- Datos de localización
- Tratamientos terapéuticos
- Libro de registro
- Autorizaciones de uso terapéutico. Baja deportiva
- Sistema de información
- Tarjeta sanitaria
- Régimen de los datos relativos al dopaje.
- controles de salud
- Régimen sancionador.

VII Datos de localización

Comenzando por los datos de localización, la obligación de suministrar los mismos, se prevé en el artículo 13.6 del proyecto, de acuerdo con el cual

"Para la realización y la mayor eficacia posible de los controles a que se refiere el apartado primero, deportistas, equipos, entrenadores y entrenadoras, personal directivo y demás personas del entorno de la o el deportista deberán facilitar, en los términos que reglamentariamente se establezca, los datos que permitan la localización habitual de las y los deportistas, de forma que se puedan realizar, materialmente, los controles de dopaje."

Este precepto debe ponerse en relación con los apartados primero y segundo de tal artículo, de acuerdo con los cuales, y en lo que más interesa, las y los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley tendrán obligación de someterse a los controles en competición y fuera de competición que determine la Agencia Vasca Antidopaje y los demás organismos públicos, pudiendo realizarse los referidos a fuera de competición, por sorpresa o previa citación, y ello por cuanto dicha obligación de localización lo es "para la realización y mayor eficacia posible de los controles".

Como se reconoce en el informe del CGPJ, dicha imposición que existe en nuestro ordenamiento deportivo a través de la modificación del artículo 58 de la Ley del Deporte por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y que había sido "soriamente cuestionada por la doctrina en punto a la norma por la que fue adoptada" no puede considerarse desproporcionada o carente de justificación.

De esta manera, se dice en dicho informe que

"En este punto, se ha de destacar como elemento positivo que la obligación de localización mencionada, además de superar, con la recepción en el texto del



Anteproyecto, la crítica de carácter más formal relativa a la naturaleza de la norma en que se había aprobado, supone una menor restricción del ámbito de libertad del deportista, en tanto, se pasa de una obligación de carácter permanente (que había merecido calificativos en punto a su dudosa compatibilidad por desproporcionada en relación a los fines perseguidos con la normativa de dopaje y los medios para su prevención y represión), a una obligación vinculada a "la localización habitual de los deportistas, de forma que se haga posible la realización de los controles de dopaje". La obligación de facilitar esta información recae en los deportistas, los equipos, entrenadores y directivos, mientras el procedimiento y los términos quedan remitidos a lo que "reglamentariamente se establezca". Así pues, si el texto legal supone una relajación respecto a la obligación actual de localización permanente tal y como ha sido interpretada, la realidad y efectividad de esta disposición puede quedar en manos de la norma reglamentaria, cabiendo, incluso, la posibilidad de que el sistema no llegue a sufrir transformación alguna al respecto. Parece conveniente que la necesaria y exigida constitucionalmente proporcionalidad entre fines y medios cuando nos movemos en el ámbito de los derechos fundamentales (como tantas veces ha sostenido el Tribunal Constitucional, entre otras muchas, Sentencias 150/1991; 55/1996 y 136/1999) no deje de guiar el desarrollo reglamentario, de modo que no se prescinda de que esta obligación de localización es de naturaleza instrumental, al servicio de "la realización y eficacia de los controles", como reza el texto literal del art. 5.3 del Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje, y que sólo se justifica en la medida en que sirva a este objetivo."

En el mismo sentido, el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, de 25 de octubre de 2005 en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, deja dicho en su Fundamento VI que

"Para la posible realización de estos controles (por sorpresa o previa citación) resulta evidente que será necesario poder contar con los datos de localización del deportista que, eventualmente y de forma sorpresiva podría ser sometido al análisis de modo que sin conocerse dichos datos quedaría ineficaz la medida que pretende adoptarse y que se deriva directamente de lo dispuesto en un instrumento internacional ratificado por España.

Por este motivo, debe considerarse que la obligación de comunicar los datos de localización del deportista, que además ya se encuentra actualmente recogido en la Ley del Deporte, resulta conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999"

Dicha posición de la Agencia Española de Protección de Datos es mantenida en el informe 552/2008 elaborado en relación proyecto de Real Decreto por el que se regula los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte (que ha dado lugar al Real Decreto 641/2009, de 17 de abril.)

A cuanto se lleva dicho, debe destacarse que la mejor doctrina viene señalando que "la clave de la lucha contra el dopaje no reside en el incremento de los controles en competición, sino en el aumento de los controles fuera de competición y de manera



especial los realizados por sorpresa pues la lucha contra el dopaje ha ido poniendo de manifiesto que las prácticas de dopaje tienen lugar en la mayoría de los casos con carácter previo a las competencias".

De todo lo anterior cabe concluir que el deber de facilitar los datos que permitan la localización habitual de las y los deportistas, aparece como una medida proporcional, no atentatoria del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Sin perjuicio de cuanto se lleva dicho, sí es posible apreciar la indeterminación de los sujetos obligados respecto a "... las personas del entorno del deportista", expresión ésta que no aparece en el texto de la Ley Orgánica 7/2006.

Máxime si se tiene en cuenta que el desarrollo reglamentario de la misma por lo que respecta a dicha obligación contempla la posibilidad de que los deportistas deleguen expresamente tal obligación en su entrenador, delegado o cualquier otra persona.

Quiere decirse con lo anterior que si lo que se pretende es facilitar al deportista dicha obligación por lo que respecta a estas personas del entorno, pudiera ser conveniente señalar que serían las designadas por el propio deportista.

Por otra parte, el artículo 23 que establece las responsabilidades de deportistas y su entorno, en su apartado 4 que contempla dicha responsabilidad respecto a los datos de localización, únicamente hace referencia a las y los deportistas, sus entrenadores y entrenadoras, el personal directivo, así como las entidades deportivas a las que esté adscrito la o el deportista.

VIII

Tratamientos terapéuticos

El apartado 7 del artículo 13 del anteproyecto establece

"Las y los deportistas, sus entrenadores y entrenadoras, médicos, médicas y demás personal sanitario, así como el personal directivo de clubes y organizaciones deportivas y demás personas del entorno de la o el deportista indicarán en el momento de la realización de los controles de dopaje, los tratamientos terapéuticos a que están sometidos o sometidas las y los deportistas, responsables de los mismos y el alcance del tratamiento, salvo que las y los deportistas negaren expresamente la autorización para tal indicación. Asimismo, dicha obligación de información se extienda, cuando así se les requiera, a la verificación de las dolencias y sus tratamientos."

Tal precepto debe ser puesto en relación con otras provisiones del anteproyecto.

Así el punto 8 de tal artículo 13, de acuerdo con el cual, la negativa a informar o a conceder la citada autorización para que otros informen será considerada como infracción por incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos.



El artículo 23.5 por su parte establece que las y los deportistas, sus entrenadores y entrenadoras, médicos, médicas o personal sanitario y directivo, dirigentes, así como las entidades deportivas y restantes personas del entorno del deportista responderán por el incumplimiento de las disposiciones que regulan la obligación de facilitar a los órganos competentes información sobre las enfermedades de la o el deportista, tratamientos terapéuticos a que esté sometido, alcance y responsable del tratamiento, cuando aquél o aquélla haya autorizado la utilización de tales datos.

Por último, el artículo 24.1 e) tipifica como infracción muy grave, el incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos terapéuticos a que hace referencia el artículo 23.4 de esta Ley (entendemos que existe un error y debe hacerse referencia a lo establecido en el artículo 23.5).

No alcanza esta Agencia a discernir con suficiente nitidez el papel que en el precepto analizado se atribuye al consentimiento.

Lo que se dice porque si bien es cierto que dicho precepto parece otorgar carta de naturaleza al consentimiento del interesado (aunque sea a sensu contrario "salvo que negaren expresamente la autorización") el apartado 8 de tal artículo 13 del anteproyecto diluye las notas características de tal consentimiento desde el punto de vista del derecho fundamental ("toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada"). en especial la relativa a "libre" al anudar dicho apartado a la negativa a informar sobre o a autorizar para que otros informen una infracción por incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre dichos tratamientos.

A todo lo anterior se suma además el hecho de que, de acuerdo con el artículo 7.3 de la LOPD, el consentimiento al que en él se hace referencia respecto a datos de salud (y este sin duda es de tal tipo) debe ser "expreso".

Dicho panorama, siempre a juicio de esta Agencia, se complica más todavía si atendemos a lo dispuesto en los artículos 24.1 e) en relación con el 23.5.

Efectivamente, este último (al que creemos hace referencia el 24.1 e) aunque en él se cite el 23.4) parece establecer como requisito para la existencia de responsabilidad, y por lo tanto para que se cumpla el tipo previsto en el 24.1 e), que el titular de la información "haya autorizado la utilización de tales datos".

Es decir, la solución que mejor se ajustaría a la normativa de protección de datos de carácter personal (y que sería posible a la luz de los preceptos transcritos, en especial vista la expresión "haya autorizado" del artículo 24.1 e) sería la que proclamara la necesidad de contar con el consentimiento (autorización) del titular de los datos para proceder a los tratamientos previstos en dicha normativa.

Esta es por otra parte, la solución adoptada en la legislación estatal donde, desde el punto de vista de esta Agencia la cuestión resulta más clara, no solo porque no exista un precepto similar al 13.8 del anteproyecto, sino también porque el artículo 7.1 "in fine" de la Ley Orgánica 7/2006, y respecto a la obligación de llevanza de un libro al que luego se hará referencia exige, en relación a la anotación de los tratamientos médicos, sin duda ("siempre") que los titulares de los datos "autoricen dicha inscripción".



No es óbice a la anterior conclusión la dcción del artículo 14.1 e) de la Ley Orgánica, de acuerdo con el cual se considerará infracción muy grave "el incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos..." y ello porque tal precepto se remite al 13.4 que concluye expresando "... cuando aquél haya autorizado la utilización de tales datos".

Las anteriores conclusiones, a juicio de esta Agencia, quedan reforzadas a la luz de las disposiciones contenidas al respecto tanto en el Real Decreto 641/2009 citado más arriba como en el Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje.

Las mismas consideraciones respecto al consentimiento o autorización del titular de los datos deben realizarse en relación a la "verificación de las dolencias y de su tratamiento".

Por último en relación con esta cuestión debe recordarse que siendo uno de los principios básicos de la protección de datos el de la calidad de los datos, cuya expresión, en palabras del artículo 4.1 de la LOPD exige que "los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido", es bien posible que no cualquier tratamiento médico al que se encuentre sometido el o la deportista tenga relevancia en relación a la finalidad y objetivo que persigue el anteproyecto.

IX Libro registro

El artículo 15 del anteproyecto que contiene prescripciones de distinto contenido, regula en sus primeros apartados tal libro.

Así, el apartado primero establece que

"Los clubes y demás entidades deportivas que se determinarán reglamentariamente están obligados a llevar un libro, debidamente registrado en la Agencia Vasca Antidopaje y del que exista garantía de su integridad en el que harán constar los tratamientos terapéuticos que hayan prescrito a las y los deportistas bajo su dirección, siempre que éstas y éstos autoricen dicha inscripción. Dicho libro tendrá la consideración de documento sanitario a los efectos de custodia y protección de datos"

La primera y principal nota a destacar, en relación con los tratamientos terapéuticos analizados en el anterior punto, es la necesidad de contar con la autorización (consentimiento) de los titulares de tales datos.

Tal necesidad que aparece de manera expresa en el apartado primero, se refuerza con lo dispuesto en el apartado cuarto de tal artículo que establece la necesidad de



que cada actuación sanitaria se refrende con la firma del deportista, precisamente, como garantía de que se ha autorizado el asiento en dicho libro, dando así entrada al "consentimiento expreso" al que hace referencia el artículo 7.3 de la LOPD.

De la misma manera, y a diferencia de lo dicho más arriba sobre la autorización para comunicar los tratamientos terapéuticos en el momento de realización de los controles, no observa esta Agencia que se anude consecuencia disciplinaria alguna a la negativa o a la no concesión de autorización para la inscripción de tales tratamientos terapéuticos.

Teniendo en cuenta que la LOPD es aplicable a cualquier tipo de fichero, manual o automatizado, la llevanza de tales libros supondrá un tratamiento de datos de carácter personal sometido por lo tanto a la normativa vigente en materia de protección de datos, como expresamente se recoge en el apartado 13 de tal artículo del anteproyecto (que no habrá de considerarse accesorio, aunque ese sea el título del artículo en el que se incluye).

Siendo ello así y constituyendo tales libros ficheros de datos de carácter personal en los términos de la LOPD los respectivos responsables vendrán obligados a crear e inscribir los mismos en la Agencia competente además de en el, probable, registro que a tal efecto se constituya en dicha Agencia Antidopaje.

Lo anterior plantea desde la perspectiva de protección de datos la determinación del papel que a dicha Agencia Antidopaje ha de atribuírsele teniendo en cuenta además que el apartado segundo prevé la posibilidad de que la misma complemente o sustituya el libro por procedimientos centralizados de bases de datos.

Dichas actuaciones pueden suponer a su vez tratamiento de datos respecto de los cuales la Agencia Antidopaje tendrá la consideración de responsable.

Por último, no observa esta Agencia Vasca de Protección de Datos problema alguno en traer aquí lo dicho por la Agencia Española de Protección de Datos en su informe al Anteproyecto de Ley Orgánica en relación con el artículo equivalente de la Ley Orgánica 7/2006. De acuerdo con dicho informe

"En todo caso, es preciso indicar que el propio Anteproyecto, en conexión con las normas que posteriormente se analizarán, referidas a la confidencialidad en el tratamiento de los datos derivada de la Ley, exige el sometimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

De este modo, los datos deberán conservarse, en principio, únicamente en tanto sean adecuados a la finalidad que justifica el tratamiento, debiendo procederse a su cancelación cuando dicha finalidad desaparezca, conforme dispone el artículo 4.5 de la Ley Orgánica. Esta afirmación resulta especialmente relevante en relación con la llevanza de los libros y el tratamiento de los datos de las autorizaciones de uso terapéutico que se realice por la Agencia Española Antidopaje, que deberá cesar en caso de que el deportista cese en la práctica del deporte y haya transcurrido desde ese momento el plazo de prescripción de las posibles infracciones previsto en el artículo 22.1 del Anteproyecto.



Asimismo, será necesario que se dé cumplimiento a los deberes de notificación del correspondiente fichero, y en caso de la Agencia Española Antidopaje, de aprobación de su norma de creación.

Por otra parte, será obligada la implantación sobre los ficheros de las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en el Real decreto 994/1999, de 11 de junio, tal y como se indicó en un lugar anterior de este informe.

En todo caso, la habilitación para el tratamiento no eximirá al responsable de atender a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley Orgánica 15/1999"

X

Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUTs) y Bajas Deportivas

Dicha cuestión ha sido calificada por la mejor doctrina como "tema capital" o "problemática trascendental en la lucha contra el dopaje". En dicho sentido, la Exposición de Motivos del Anteproyecto expresa que *"La Ley trata de dar respuesta al importante fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico que, como se viene reconociendo abiertamente, se ha convertido en una puerta abierta al dopaje"*

Para ello el apartado 8 del artículo 15 expresa que

"Una copia de las autorizaciones de uso terapéutico que se expidan en el ámbito de esta Ley, así como las declaraciones de uso o consumo de sustancias determinadas y las documentaciones complementarias correspondientes deberán remitirse a la Agencia Vasca Antidopaje"

Por su parte, el artículo 12.1 w) establece como función de la Agencia Vasca Antidopaje

"Conceder o denegar las autorizaciones de uso terapéutico a través del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico"

El apartado 14 del artículo 15 establece que la concesión o denegación de autorizaciones de uso terapéutico podrá ser impugnada ante el Director o Directora de la Agencia Vasca Antidopaje y el 12 de dicho artículo que la revisión de la correcta obtención o aplicación de las autorizaciones de uso terapéutico o declaraciones deberá ser realizada por el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico de la Agencia Vasca Antidopaje.

En relación a los tratamientos de datos de carácter personal que serán necesarios para llevar a efectos las previsiones contenidas en el Anteproyecto la cuestión principal, una vez más y tratándose de manera indubitada de datos de salud, giran en torno a la necesidad o no de contar con el consentimiento del titular de tales datos.



Así, y en relación con el libro registro, el apartado 5 del artículo 15 establece que

"Cualquier tratamiento terapéutico que se pueda considerar dopaje, incluso aunque cuente con la debida autorización, deberá seguir un procedimiento de consentimiento informado que se regulará reglamentariamente y del que se guardará copia en el libro registro".

Independientemente de que sea doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la que establece que *"La fijación de los límites de un derecho fundamental, así lo hemos venido a decir en otras ocasiones, no es un lugar idóneo para la colaboración entre la Ley y las normas infralegales, pues esta posibilidad de colaboración debe quedar reducida a los casos en los que, por exigencias prácticas, las regulaciones infralegales sean las idóneas para fijar aspectos de carácter secundario y auxiliares de la regulación legal del ejercicio de los derechos fundamentales, siempre con sujeción, claro está, a la ley pertinente (SSTC 83/1984, de 24 de julio , F. 4, 137/1986, de 6 de noviembre , F. 3, 254/1994, de 21 de septiembre, F. 5)"* y tal vez precisamente por ello, lo que dicho apartado pretende, según entiende esta Agencia, es fijar la necesidad de contar con el consentimiento del titular de tales datos.

Así, el Anexo II de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte aprobada en el seno de la UNESCO el 19 de octubre de 2005 y ratificada por España el 25 de octubre de 2006 (BOE 16 de febrero de 2007) que establece las normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos en su artículo 5.1 establece que

"El solicitante debe facilitar un consentimiento por escrito para la transmisión de toda la información relativa a la solicitud a los miembros del CAUT y, según proceda, a otros expertos médicos o científicos independientes, o a todo el personal necesario involucrado en la gestión, revisión o apelación de las AUT.

En caso de que se necesite la ayuda de expertos externos e independientes, todos los detalles de la solicitud se comunicarán sin identificar al médico que participe en los cuidados del deportista. El solicitante debe proporcionar también su consentimiento por escrito para que las decisiones del CAUT sean distribuidas a otras organizaciones antidopaje pertinentes conforme a lo dispuesto en el código".

Coadyuva a la anterior conclusión el desarrollo que del artículo 7.4 de la Ley Orgánica 7/2006 de 21 de noviembre ha realizado el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril. Regula los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte, cuyo artículo 16.3, relativo al formato e inscripción de los libros-registros establece que

"En los asientos del libro-registro relativos a cualquier procedimiento médico, terapéutico o sanitario que se vaya a prescribir o aplicar a un deportista y que se considere dopaje, o incluso que se administre con finalidad médica y la debida autorización terapéutica, deberá incluirse un apartado o anexo en el que el deportista exprese su consentimiento informado."

De la misma manera el artículo 26.1 de dicho Real Decreto que en relación a las solicitudes para obtención de AUTs establece igualmente que



"La solicitud para la concesión de una AUT se presentará por el deportista con arreglo al formulario que se establezca por Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes, en el que hará constar sus datos personales necesarios junto con los deportivos y sanitarios y, en su caso, las AUTs solicitadas y concedidas o denegadas con anterioridad, y el consentimiento para el conocimiento y tratamiento de sus datos personales y clínicos por los miembros del CAUT o los expertos que éste designe."

Dicha posición es alentada por el informe de la AEPD 552/2008 al que se ha hecho referencia más arriba y de acuerdo con el cual

"En consecuencia, el tratamiento de los datos referido a las autorizaciones de uso terapéutico, tanto por el CAUT, como por los terceros independientes de los que se recabe la elaboración de los informes médicos que resultasen precisos como por la Agencia Española Antidopaje se encontrará amparado en el artículo 73 de la Ley Orgánica 15/1999, al contarse con el consentimiento del deportista, siendo además conforme al procedimiento establecido por el Convenio de 19 de octubre de 2005."

En cuanto a las responsabilidades que para los deportistas y su entorno puedan derivarse de los incumplimientos del deber de información en relación con las AUTs, pueden reproducirse aquí las consideraciones realizadas más arriba en relación con la misma cuestión respecto a los tratamientos terapéuticos por cuanto, aunque el artículo 23 contempla en dos apartados diferentes (el 5 y el 6) dichas responsabilidades respecto a tratamientos terapéuticos y autorizaciones respectivamente, la vulneración de dichos deberes se tipifican unitariamente en el artículo 24.1 e).

Las mismas consideraciones son aplicables respecto al consentimiento o autorización para realizar los tratamientos necesarios en orden a realizar "la revisión de la correcta obtención o aplicación de las autorizaciones de uso terapéutico..." previstas en el apartado 12 del artículo 15 del anteproyecto

Relacionada con las AUTs "... en la lucha contra el fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico..." según la Exposición de Motivos, aunque con un régimen respecto al fondo diferente se contempla en el artículo 16 del anteproyecto una "nueva figura que permite a la o el deportista un tratamiento terapéutico totalmente libre, como a cualquier otra persona, pero sin posibilidad de competir", la baja deportiva.

Parece que en lo relativo a protección de datos se prevé un régimen muy similar a las AUTs respecto a la necesidad de registrarla en la Agencia Antidopaje, sobre todo en relación al carácter "constitutivo" de dicho registro, por lo tanto las consideraciones respecto al consentimiento debieran ser parecidas.

No obstante siendo ello así, sí es posible apreciar diferencias en cuanto a los efectos que producen AUTs y bajas, sobre todo en lo relativo a la competición.

Esto es, hay una diferencia fundamental, y es que mientras que con la AUTs se puede competir, con la baja no.



Por otra parte, el elemento de voluntariedad aparece más marcado en las bajas deportivas.

Así, en primer lugar, el apartado 1 del artículo 16 del anteproyecto señala que "Las federaciones deportivas... así como las demás entidades deportivas a las que resulte aplicable la Ley podrán contemplar en sus reglamentos la situación de baja deportiva...".

De la misma manera, el apartado dos prevé que la baja deportiva será "concedida" por el correspondiente Comité Antidopaje, debiendo por lo tanto, ser solicitada por el interesado o interesada.

La concurrencia de tal elemento elimina gran parte de los problemas que, respecto al tratamiento de tal dato, pudieran aparecer, siempre que su titular sea debidamente informado de dichos tratamientos.

Por otra parte dicho dato se incorporará a la tarjeta de salud (a la que se hará referencia cuando se comente la misma) y, para cumplir la finalidad prevista, será necesario que quede registrada en la Agencia Vasca Antidopaje.

Dicha finalidad de acuerdo con el apartado es el de "... evitar sanciones en los supuestos de realización de controles de dopaje por sorpresa...", dicho objeto constituye por lo tanto desde la perspectiva de protección de datos la "finalidad".

En relación con dicho apartado, el 8 establece que "en el supuesto de que el resultado de un control de dopaje arroje un resultado analítico adverso, pero exista una baja deportiva debidamente registrada en la Agencia Vasca Antidopaje, se considerará por el comité antidopaje que el resultado es negativo y no se incoará el correspondiente disciplinario o sancionador."

Siendo ello así, y teniendo en cuenta que la baja no evita el control por sorpresa (el control hecho en el momento de competir se supone que sí, porque no se puede competir estando de baja), la cuestión es si merece la pena registrarlo o dejarlo a la voluntad del deportista en el sentido de que será el propio deportista cuando le hagan el control por sorpresa, el que diga que tiene la baja.

Respecto a los controles de salud la Exposición de Motivos establece que "... siguiendo el mismo criterio que la Ley Orgánica 7/2006 se incluyen bajo ese concepto el conjunto de actuaciones que la Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva así como a controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones previstas en la Ley en materia de dopaje y salud. Asimismo, la Agencia Vasca Antidopaje determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de la licencia a deportistas por razones de salud. A diferencia de la legislación estatal, tales controles de salud no se insertan en el marco de las relaciones laborales. En el presente texto se ha optado por facultar a cualesquiera entidades deportivas a realizar controles de salud a sus deportistas, con independencia de que tengan una relación laboral. Sería un franco retroceso negar a



las federaciones y demás entidades deportivas la facultad de realizar controles de salud sobre sus deportistas por el mero hecho de no existir una relación laboral."

Ajustándose a tal descripción se contiene la regulación de dichos controles en los apartados 4 y siguientes del artículo 17 del anteproyecto.

Cabe deducir de ambos elementos, a juicio de esta Agencia, el carácter obligatorio del sometimiento a los mismos (aunque no se observa consecuencia sancionadora expresa alguna a la negativa a dicho sometimiento, a no ser que se pueda incluir en el tipo del 24.1 a) *"la resistencia o negativa.... y demás conductas que... no permitan... la realización de cualesquiera otras actuaciones en los procedimientos de control y represión del dopaje"*).

Independientemente de ello y de la incidencia que en dicha obligatoriedad pueda tener la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 25/2005 o 206/2007), desde la perspectiva que interesa a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, debe señalarse que se deja al desarrollo reglamentario la determinación de las condiciones y características que han de revestir las actuaciones de protección de la salud a las y los deportistas.

No realiza el anteproyecto ninguna acotación respecto a cuáles deben ser tales condiciones y características ni respecto al contenido de tales controles, que se definen de una manera abstracta ("conjunto de actuaciones que la Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas"), salvo la referencia a la planificación que al respecto debe desarrollar la Agencia Vasca Antidopaje (artículo 18.1)

No se prevé ningún tratamiento respecto a los datos obtenidos de la realización de tales controles excepto su incorporación a la tarjeta de salud.

Se prevé la necesidad de que los datos queden sometidos a medidas de seguridad de nivel alto (lo que parece adecuado) y de la referencia a la planificación que se realiza en el artículo 18.1, se encuentra en el artículo dedicado a la tarjeta de salud a la que nos referiremos más adelante.

La conclusión que cabe obtener es que el grado de indeterminación respecto a los tratamientos de los datos de carácter personal que surjan de tales controles es muy alto.

XI

Sistema de Información y Tarjeta de Salud

Sistema de Información

El artículo 43 del anteproyecto, dentro del Capítulo V dedicado a las medidas de prevención, regula el denominado Sistema de Información sobre el dopaje en el deporte sobre la idea, como declara la Exposición de Motivos, de que "no resulta



deseable combatir el dopaje desde el control y la represión y abandonar el campo de la prevención".

Por ello, continúa dicha Exposición, "...la Ley contempla la obligación de adoptar diversas medidas de prevención. Entre las mismas se incluyen acciones de investigación y, con el objetivo de hacer efectiva dichos programas de investigación científica la ley contempla mecanismos de información poniendo a disposición de los diversos agentes públicos y privados aquellos datos que puedan ser utilizados en el desarrollo de aquellos programas."

En dicho marco, el apartado 1º de la artículo 43 ordena el establecimiento de un sistema de información acerca del dopaje en el ámbito del deporte que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las administraciones públicas con competencias en materia de deporte con los objetivos y finalidades marcados en el apartado segundo de dicho artículo por referencia a cada uno de los colectivos que en él se señalan.

El apartado tercero establece, según entiende esta Agencia, el contenido de dicho sistema de información, que es lo que se pretende dar a conocer a los anteriores colectivos en la manera en que cada uno lo necesita.

Así, dicho contenido vendrá integrado por las sustancias susceptibles de producir dopaje y los métodos prohibidos en el deporte, los datos de los expedientes disciplinarios incoados y las sanciones impuestas, con indicación de las sustancias detectadas, los análisis realizados en los distintos laboratorios, datos relativos a la población deportiva, recursos humanos y materiales, actividad desarrollada, farmacia y productos sanitarios, financiación y resultados obtenidos así como las expectativas y opinión de las y los deportistas. De la misma manera dicho sistema permitirá conocer los controles y demás pruebas realizadas al amparo de la protección de la salud de la o el deportista.

El apartado 6 establece que el sistema de información estará a disposición de sus usuarios "... en los términos de acceso y difusión que permitan las disposiciones vigentes".

De acuerdo con el apartado 8, serán las entidades públicas y privadas correspondientes las que aportarán al sistema los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo.

De la misma manera, como previsión específica respecto a lo dispuesto en el apartado 6, el apartado 8 in fine prevé que las distintas administraciones públicas tienen derecho a acceder y disponer de los datos que formen parte del sistema de información y en la medida en que, estrictamente, lo precisen para el ejercicio de sus competencias.

Por último, el apartado 9, con un alcance más general que lo proveniente en el 6, establece la sujeción de los tratamientos y de las cesiones de datos a la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.



Cabe realizar desde la perspectiva que nos ocupa las siguientes consideraciones:

En primer lugar cabe destacar cómo el término Sistema de Información desde la perspectiva que nos ocupa, se encuentra definido en el artículo 5.2 m) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Así, se entiende por tal "conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal"

De acuerdo entonces con tal definición y con el contenido del apartado primero, en relación con las obligaciones previstas en el apartado 8 parece que el establecimiento de tal sistema supondrá la existencia de tratamientos de datos de carácter personal (independientemente de los accesos que se produzcan a dichos datos cuestión a la que luego nos referiremos.)

Siendo ello así, lo primero que debe señalarse es que la existencia de dicho sistema supondrá la necesidad de creación de al menos un nuevo fichero cuyo responsable será la Agencia Vasca Antidopaje, debiendo cumplirse entonces los requisitos que para tal creación establece el artículo 20 LOPD.

Por lo que respecta a las finalidades y objetivos previstos en el apartado 2 observa esta Agencia un alto grado de indeterminación en los mismos, lo que se dice por la importancia que dichas finalidades y objetivos tendrán en la legitimación para acceder a los datos que en dicho sistema obren.

Respecto al contenido previsto en el apartado 3 y dada su similitud con el contemplado en el artículo 45.2 de la Ley estatal, es posible reproducir los comentarios realizados por la doctrina a este último, y de acuerdo con los cuales, se puede afirmar que estamos "... ante una estructura que reunirá características de unos informes estadísticos permanentes combinado a un vademécum específico sobre la protección de la salud en todas sus facetas ante una práctica deportiva como en la lucha contra el dopaje, tanto en su vertiente preventiva como de control o de represión..."

Se ha señalado al respecto que "...esta creación loable no puede ocultar que el exceso ambicioso de contenidos programáticos puedan diluir no sólo su eficacia sino también su propia puesta en funcionamiento. Por ello, el Real Decreto que ejecute dichos principios programáticos deberá ser el auténtico pilar en el que se ancle el sistema".

Y precisamente el informe de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el anteproyecto de Real Decreto de desarrollo puso de manifiesto que "... sería preciso que el Anteproyecto desarrollase lo dispuesto en los artículos 45 a 48 de la Ley Orgánica de modo mucho más detallado, estableciendo efectivamente el contenido del sistema de información, los posibles usuarios del mismo y los accesos al sistema que serán posibles en el ámbito de la habilitación conferida por la Ley Orgánica que incluso establece determinadas normas relacionadas con la difusión de los datos referidos a los procedimientos sancionadores, el acceso por el personal sanitario a los datos de salud o la ordenación del sistema con el Sistema de información del Sistema Nacional de Salud".



Se quiere decir con lo anterior que dada la redacción de dicho apartado 3, junto con la remisión que se hace en el apartado 5 a una futura definición y normalización de datos, la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios para la integración de la información, en la que colaborará activamente esta Agencia Vasca de Protección de Datos habrá que estar a dicho momento para realizar los ajustes que sean precisos desde la perspectiva del derecho fundamental.

Sin abandonar dicho apartado 3 resulta más precisa la referencia al tratamiento de *"...los datos de los expedientes disciplinarios incoados y las sanciones impuestas"* en cuanto debe acudirse para la determinación del alcance de los tratamientos en relación con dicho tipo de datos a lo dispuesto en el apartado 7 de dicho artículo 43 del anteproyecto, de acuerdo con el cual *"el acceso a los datos de los expedientes disciplinarios y sancionadores incoados, relativos a las sustancias detectadas y los análisis realizados en los distintos laboratorios, quedará siempre limitado a los órganos competentes en relación con dichos expedientes. El acceso por otras organizaciones, personas o entidades a dichos datos deberá ir siempre precedido de la disociación de los datos de carácter personal para cuantos intervengan en el expediente."*

La redacción de dicho precepto coincide con la del párrafo segundo del artículo 45.4 de la Ley Orgánica y es tributaria sin duda de lo dicho por la Agencia Española de Protección de Datos en el informe elaborado sobre el anteproyecto en el cual se proponía la inclusión de un párrafo exactamente igual al que integra la redacción definitiva, por lo que entiende esta Agencia que son plenamente válidas las consideraciones realizadas al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos.

Tal como se manifiesta este apartado, y dado el alto grado de concreción del contenido del sistema, cabe concluir que lo realmente importante del mismo, desde la perspectiva que interesa a esta Agencia no es tanto lo que contiene, (o contendrá) sino los accesos que a dicho contenido se producirán.

Y desde dicha perspectiva las previsiones del anteproyecto en cuanto a los accesos por los órganos competentes (apartado 7) y la remisión a *"...los términos que permitan las disposiciones vigentes en materia de protección de datos"* que contiene el apartado 6, no se oponen a las previsiones reguladoras del derecho fundamental, a la espera de su concreción en el correspondiente desarrollo reglamentario.

Por último y respecto a las aportaciones a dicho sistema, también, a juicio de esta Agencia la nota dominante es la de la indeterminación porque no otra cosa cabe deducir de la expresión contenida en el apartado 8 y de acuerdo con la cual *"las entidades públicas y privadas correspondientes aportarán a este sistema de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo"*, indeterminación del contenido a la que se suma la de los sujetos obligados y la forma de hacerlo.

En cualquier caso, este artículo del anteproyecto se cierra con una remisión expresa a la sujeción a la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal respecto al tratamiento y cesión de los mismos.



Tarjeta de salud del deportista

En cuanto a la tarjeta de salud del deportista, aparece regulada en el artículo 46 del anteproyecto.

El apartado 1 de este precepto, la define como un documento público, que la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco expedirá, en principio, a los deportistas con licencia federativa y universitaria en principio, pudiéndose ampliar el ámbito subjetivo a otros colectivos de deportistas que se determinen reglamentariamente.

El apartado 2 del artículo 46 establece una doble finalidad para dicha tarjeta que es, a juicio de esta Agencia, el aspecto esencial a tener en cuenta desde la perspectiva que interesa.

La primera con un claro propósito asistencial *"... que la o el deportista y el personal sanitario que le atiende dispongan de la mejor información clínica posible en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia o enfermedad"*

La segunda finalidad es la de *"...contribuir a una mayor eficacia en la lucha contra el dopaje"*.

Aspecto esencial se dice porque, siempre a juicio de esta Agencia, los diferentes apartados del precepto se articulan en atención a dicha doble finalidad.

Así, por lo que respecta al contenido de dicha tarjeta parece desdoblarse (al menos es lo que sugiere el tenor gramatical del apartado 3) atendiendo a la doble finalidad destacada anteriormente.

De esta manera, por una parte, *"la tarjeta de salud contendrá la información referida al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y dopaje realizados a la o el deportista desde la obtención de la correspondiente licencia, el resultado de los mismos y las determinaciones médicas a tener en cuenta para una adecuada atención sanitaria del mismo..."*.

Por otra y asimismo, *"incluirá los datos de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas de las bajas laborales y/o deportivas que haya tenido el deportista" para lo cual no se especifica de manera expresa finalidad alguna*

La misma dualidad parece desprenderse de los apartados 4 y 5, respecto a la utilización de los datos contenidos en dicha tarjeta de tal forma que el apartado 4 parece conectar con la finalidad de disponer de información clínica para decidir el tratamiento que debe aplicarse a la dolencia del deportista y, el apartado 5, por contra, con la finalidad de contribuir a una mayor eficacia en la lucha contra el dopaje.

En relación con tal artículo del anteproyecto debe tenerse en cuenta la Disposición Adicional Segunda del anteproyecto, de acuerdo con la cual *"El Gobierno Vasco podrá establecer con el Estado, a través de los correspondientes instrumentos de colaboración fórmulas para la expedición, reconocimiento o realización de la Tarjeta de Salud de Deportista..."*.

Asimismo, la Disposición Adicional Séptima del anteproyecto, establece, por su parte, que *"Las licencias federativas y universitarias podrán ir incorporadas en los*



soportes electrónicos que permitan el acceso a la tarjeta de salud de deportista, aunque mantendrán en todo caso una individualidad propia y dispondrán de las medidas de seguridad necesarias para impedir un acceso indebido a los datos propios de dicha Tarjeta de Salud de Deportista."

Finalmente, la Disposición Final Segunda 2 señala que *"Los datos de los reconocimientos médicos, así como otras informaciones relacionadas con la salud de deportistas serán incorporados a la Tarjeta Sanitaria del Deportista en los términos que se establezca reglamentariamente"*.

Una vez analizada el artículo 46 del anteproyecto de ley, y el resto de disposiciones del texto que contienen referencias a la tarjeta de salud de los deportistas, es preciso apuntar una serie de cuestiones:

El artículo 46 no concreta los sujetos que tendrán la tarjeta de salud. Regula los deportistas a los que en todo caso se les expedirá la tarjeta, pero prevé también la posibilidad de que se extienda a otros deportistas por vía reglamentaria.

Tampoco se clarifica en la norma si esa tarjeta es o no obligatoria para esos deportistas, aunque de la lectura integrada del precepto parece deducirse que sí.

Se trata de una tarjeta de salud del deportista, pero tiene también una finalidad distinta a la de posibilitarle una asistencia clínica adecuada. Según el artículo 46 **"los datos contenidos en la tarjeta de salud sólo podrán ser utilizados, en principio, por el propio deportista y con su consentimiento por el personal sanitario que le atienda, salvo en los casos en que la legislación sanitaria permita el acceso los datos sin su consentimiento para la debida atención sanitaria (art. 46.4), y a continuación, establece que " en materia de control de dopaje no cabe el acceso a los datos de la tarjeta de salud de deportista sin su consentimiento ", añadiendo que " No obstante lo anterior, la negativa a dar el citado consentimiento tendrá el mismo tratamiento sancionador que el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones de información sancionadas en el artículo 24.1.c) de la Ley" (artículo 46.5).**

De acuerdo con la regulación citada, estamos ante una tarjeta que, pese a su denominación, -tarjeta de salud-, persigue una doble finalidad, asistencial y de control de dopaje. Esta tarjeta va disponer de una información clínica del deportista a la que tendrá acceso el propio deportista, y con su consentimiento, el personal sanitario que le atienda, salvo en los supuestos en los que la legislación sanitaria no exija ese consentimiento, y que además, se utilizará para el control del dopaje, en cuyo caso deberá ser "autorizada" por el deportista. Sin embargo, esa "autorización" dista mucho de ser una manifestación libre del interesado, como exige la LOPD, puesto que la negativa a otorgarla llevará aparejada una sanción.

Asimismo, se delimita en el anteproyecto la información que se incorporará a la tarjeta, y quienes deberán suministrarla (la o el deportista; el personal sanitario que le atienda; los órganos disciplinarios competentes y, en su caso, el equipo con el que tenga suscrita la licencia correspondiente). Sin embargo, lo que no acota el anteproyecto es quienes pueden acceder a los datos de la tarjeta de salud, quienes pueden usarlos y el propio uso que se hará de esa información.



Por ello, y aunque no ofrece duda que la lucha contra el dopaje enlaza con la garantía de la protección de la salud de los deportistas, que consagra el artículo 43 de la Constitución, la regulación de la tarjeta de salud contenida en el anteproyecto, en los términos ahora señalados, plantea serias dudas sobre su adecuación a la normativa de protección de datos, en concreto, a los principios de consentimiento y finalidad exigidos por la LOPD.

En este sentido, resulta obligado resaltar que la tarjeta de salud del deportista se regula también en el artículo 46 de la Ley Orgánica 7 /2006, de 21 de noviembre, desarrollado por los artículos 8 y 9 del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, pero de manera distinta. Esta tarjeta se expide exclusivamente a los deportistas de alto nivel y al resto de deportistas federados, con una finalidad notamente asistencial, limitando el acceso de los datos que en ella se contienen al personal sanitario que atiende al deportista, previo consentimiento del mismo.

Además de esto, hay otras cuestiones que deben apuntarse, como la previsión de que la tarjeta del deportista esté en *"un mismo soporte físico que permita el acceso a otras tarjetas o servicios siempre que las medidas de seguridad impidan a terceras personas o entidades el acceso indebido a los datos que obren en la tarjeta de salud del deportista. Aquel soporte físico funcionará como llave de acceso a la base de datos inherente a la tarjeta de salud de deportista pero no contendrá datos de salud de la o el deportista"* (artículo 46.7).

Nada dice este artículo sobre las tarjetas o servicios a que los que se refiere, aunque de los apartados 8 y 9 de ese artículo 46 podría pensarse que se refiere a servicios sanitarios o a la tarjeta individual sanitaria, que tiene un objeto completamente distinto al declarado por la norma para la tarjeta de salud del deportista, como es identificar a su titular como usuario del sistema de salud.

Por ello, y al margen de las debidas medidas de seguridad, que eviten cualquier acceso indebido a los datos de salud obrantes en la tarjeta de salud del deportista, que serán, en todo caso, de nivel alto, creemos necesaria que esta cuestión quede suficientemente clarificada en el texto.

Añade el artículo 46, en su apartado 10, que la cesión de datos obrantes en la tarjeta sólo podrá realizarse en los supuestos y condiciones que determine la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Al hilo de tal previsión resulta obligado recordar que los supuestos y condiciones para la comunicación de los datos de los deportistas obrantes en su tarjeta de salud, no los determina la Agencia Vasca de Protección de Datos, sino la normativa que regula el derecho fundamental a la protección de los datos personales, y tratándose de datos sanitarios, la propia legislación sanitaria a la que ésta se remite, a la que nos hemos referido anteriormente al exponer el régimen jurídico de los datos de salud. Entre esa legislación, merecería destacarse la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula el sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud, para garantizar la información y comunicación recíproca entre las Administraciones sanitarias, y Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que regula, entre



otros extremos, la historia clínica, los datos mínimos que debe contener, su finalidad asistencial, su llevanza por personal sanitario, su tratamiento y el régimen de acceso a los datos allí contenidos, así como su conservación.

Todo lo expuesto en relación con la regulación proyectada de la tarjeta de salud del deportista, exigiria, a juicio de esta Agencia, una reelaboración de la misma y, fundamentalmente, una reflexión por los redactores del anteproyecto sobre si existen intereses públicos dignos de protección, que justifiquen el tratamiento de los datos de salud obrantes en la tarjeta de salud del deportista, para una finalidad no propiamente asistencial, desvinculada de la protección de su salud, y, en su caso, los términos y condiciones en los que podrá producirse el tratamiento.

XII

Régimen de los datos relativos al dopaje

Confidencialidad y secreto

El anteproyecto de ley remitido, dedica su artículo 47 a enunciar garantías específicas en cuanto a los datos relativos al dopaje, imponiendo obligaciones de confidencialidad y secreto al *personal que desempeñe las funciones de control del dopaje, así como a las y los miembros de los órganos de las entidades deportivas y su personal, a los dirigentes y personal en el ámbito deportivo que, por razón de sus funciones, pueden tener un acceso a los datos personales del deportista en materia de salud* (artículo 47.1)

Estos deberes de confidencialidad y secreto, a los que se refieren también los artículos 6.1n) y 7k) del texto, ha de entenderse que tratan de preservar adecuadamente los derechos de los deportistas a la confidencialidad (artículo 8.i), aunque a diferencia de la Ley estatal, el anteproyecto de ley autonómico no parece anudar ninguna responsabilidad por el incumplimiento de ese deber, al margen de la que derive, con carácter general, de la propia LOPD, por incumplimiento del deber de secreto, regulado en su artículo 10, que señala que *"El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo."*

El artículo 47. 2 del anteproyecto, dispone, por su parte, que *"Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones sólo podrán utilizarse para los fines de control del dopaje y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción disciplinaria, administrativa o de delito. Dicho personal queda autorizado para la cesión de dichos datos, informes o antecedentes en caso de denuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1a) de la Ley Orgánica 15/1999."*



Esta previsión legal, que poco o nada tiene que ver con la confidencialidad y secreto de los datos, y que por ello, quizás sería conveniente reubicarla en otro lugar del anteproyecto, adolece de cierta confusión en su redacción, aunque parece establecer una habilitación legal para el tratamiento de los datos de carácter personal de los deportistas, sin su consentimiento, tanto para los fines de control del dopaje, como para la denuncia de los hechos, lo que conectaría sin dificultad con el principio de finalidad proclamado en el artículo 4 LOPD. En todo caso, sería necesario corregir o suprimir la mención al artículo 11.1 a) de la LOPD contenida en ese precepto, que ni siquiera existe.

Autorización de cesión de datos

El artículo 48 del anteproyecto prevé la autorización de cesión de datos relativos a controles de dopaje *“en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos, a los organismos públicos y privados que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo dispuesto en los compromisos internacionales legalmente vinculantes”*.

Este precepto del anteproyecto es similar al artículo 36 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, y contempla la cesión y transferencia internacional de datos a los organismos a los que este artículo se refiere que participan en la lucha contra el dopaje.

En relación con dicha previsión es preciso indicar, en primer lugar, que cualquier transferencia internacional de datos ha de someterse a lo dispuesto en el Título V de la LOPD (artículos 33 y 34) y en el título VI de su Reglamento de desarrollo (artículos 65 a 70), y que tal y como expresamente señala el artículo 65 del Reglamento LOPD, la transferencia internacional de datos no excluye en ningún caso la aplicación de las disposiciones contenidas en la LOPD, de modo que únicamente podrán ser transferidos los datos que puedan ser objeto de tratamiento de conformidad con la LOPD, atendiendo a todos los principios que informan y conforman el derecho fundamental a los que nos hemos referido anteriormente.

De este modo, este precepto trata de constituirse en la habilitación legal para eximir a estas cesiones internacionales de datos del previo consentimiento de sus titulares.

En segundo lugar, la referencia en este artículo 48 del texto a *“los compromisos internacionales legalmente vinculantes”*, parece querer referirse a la excepción del artículo 34a) de la LOPD, para que la transferencia internacional de datos no precise de autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, esto es, *“Cuando la transferencia internacional de datos de carácter personal resulte de la aplicación de tratados o convenios de los que sea parte España”*.

En este caso, esa norma internacional, vinculante, al haber sido ratificada, sería la Convención de la Unesco, que en su artículo 3b) impone a los Estados miembros el deber de *“promover la cooperación internacional entre los Estados Parte y las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el dopaje en el deporte, en particular la Agencia Mundial Antidopaje”*, y cuyo artículo 14 dispone que *“Los*



Estados Parte se comprometen a prestar apoyo al importante cometido de la Agencia Mundial Antidopaje en la lucha internacional contra el dopaje".

Además, el artículo 16 de esta Convención obliga también a los Estados miembros a *"facilitar la tarea de la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones antidopaje que actúen de conformidad con el Código, a reserva de los reglamentos pertinentes de los países anfitriones, en la ejecución de los controles a sus deportistas, durante las competiciones o fuera de ellas, ya sea en su territorio o en otros lugares, alentar y apoyar los acuerdos de controles recíprocos entre las organizaciones antidopaje designadas, de conformidad con el Código y reconocer mutuamente los procedimientos de control del dopaje de toda organización antidopaje y la gestión de los resultados de las pruebas clínicas, incluidas las sanciones deportivas correspondientes, que sean conformes con el Código".* Dispone, igualmente, este artículo 16 que *"la lucha contra el dopaje en el deporte sólo puede ser eficaz cuando se pueden hacer pruebas clínicas a los deportistas sin previo aviso y las muestras se pueden transportar a los laboratorios a tiempo para ser analizadas"*

En definitiva, de los términos del artículo analizado, podemos entender que las comunicaciones internacionales de datos que se produzcan con ocasión de esta Ley, tendrán que ser acordes con la propia finalidad de la ley y con la normativa internacional vinculante en este ámbito.

XIII

Régimen sancionador

El Capítulo IV del borrador de Anteproyecto de Ley contra el Dopaje en el Deporte, viene dedicado al régimen disciplinario y administrativo sancionador del dopaje.

El primero (régimen disciplinario) resulta de aplicación a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias exigidas en el artículo 46 de la Ley Vasca 14/1998, y a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción con las demás entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la Ley o se sujeten voluntariamente a la misma (artículo 21.1 del texto).

Sin embargo, el régimen administrativo sancionador por dopaje contenido en la ley, experimenta una expansión de su ámbito, al incluir en el mismo a las acciones u omisiones que tengan lugar en la CAPV, con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones de ámbito autonómico, estatal o internacional, no siendo precisa la existencia de relaciones de sujeción especial, ni que se materialicen en actividades deportivas de carácter competitivo (artículo 22).

El artículo siguiente de este Capítulo, artículo 23, regula la responsabilidad de deportistas y de su entorno que, aunque no es definido en la Ley, parece estar referido a sus entrenadores, médicos y resto de personal sanitario, directivos, entidades deportivas vinculadas al deportista etc., que tienen obligación de facilitar a



los órganos competentes información sobre las enfermedades del deportista, tratamientos terapéuticos a que está sometido, localización habitual de los deportistas etc.

En cuanto al régimen de infracciones, merece destacarse que el artículo 24 tipifica como infracción muy grave, la resistencia o negativa, sin justa causa, a someterse a los controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, cuando sean exigidos o requeridos por los órganos competentes, así como la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y demás conductas que por acción u omisión impidan, perturben o no permitan atender los requerimientos formulados por los órganos competentes para la recogida de muestras o cualquier otra actuación necesaria en los procedimientos de control y represión del dopaje (apartado 1 c).

Tipifica también, el anteproyecto de Ley como infracción muy grave, el incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos terapéuticos y obtención de autorizaciones para el uso terapéutico, así como la vulneración de la obligación de declaración de datos relativos a los productos y métodos susceptibles de producir dopaje en el deporte (artículo 24.1 e).

Respecto a estas previsiones no procede sino dar por reproducidas las consideraciones realizadas anteriormente sobre los distintos tratamientos de datos relacionados con los controles de dopaje, como los datos de localización, datos de tratamientos médicos, autorizaciones de uso terapéutico, bajas deportivas, etc., y sobre la autorización o consentimiento del deportista para algunos de esos tratamientos.

Por otra parte, el artículo 32, que regula la eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad de obtener licencia deportiva, dispone, en su apartado 5, que las entidades que organicen actividades deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicarán el principio general de reconocimiento mutuo de las sanciones por dopaje impuestas por otras organizaciones. Este principio ya se recoge en el citado artículo 16 de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que goza de fuerza vinculante, al haber sido ratificada el 26 de septiembre de 2006.

El artículo 33 del texto, dedicado a la aplicación del principio non bis in idem, contempla varias cesiones de datos. En su apartado 2, la cesión de información al Ministerio Fiscal, cuando el órgano disciplinario o sancionador advierta indicios de delito, suspendiendo la tramitación del procedimiento. Del mismo modo, este precepto del anteproyecto prevé comunicaciones de datos entre los órganos disciplinarios y sancionadores, si la infracción de dopaje pudiera dar lugar simultáneamente a las responsabilidades administrativas y disciplinarias. (artículo 34.4), y la notificación de la incoación de expedientes disciplinarios y sancionadores por dopaje y de la resolución de los mismos al Departamento de Interior "a los efectos de preservar el principio de proporcionalidad, en la aplicación, en su caso, de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana".

La cesión de datos al Ministerio Fiscal no plantea problema desde la perspectiva de protección de datos, como tampoco lo plantea la cesión entre los órganos



disciplinarios y sancionadores en el supuesto contemplado en este precepto del anteproyecto. Sin embargo, no se entiende bien la finalidad declarada en el texto para la cesión de datos al Departamento de Interior, con independencia de que el principio de proporcionalidad actúe como criterio para graduar las infracciones en materia de seguridad ciudadana tipificadas en el artículo 23, apartados p) y q) de esa Ley Orgánica, como graves o muy graves (artículo 24).

En otro orden de cosas, el artículo 34 del anteproyecto, establece como una de las causas de extinción de la responsabilidad (en este caso, parcial), la *"colaboración en la detección, localización y puesta a disposición de los organismos competentes de las personas o los grupos organizados que suministren, faciliten o proporcionen el uso de sustancias o la utilización de métodos prohibidos en el deporte por ser causantes de dopaje"*, colaboración que, a tenor del artículo 36 se produce proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el procedimiento correspondiente.

Esta colaboración constituye desde la perspectiva de protección de datos una cesión de datos que pueden estar relacionados con la salud de las personas, que enlaza con el artículo 7.3 d) del Convenio 135 del Consejo de Europa, que dispone que *"las Partes alentarán a sus organizaciones deportivas a (...) alentar a los deportistas a participar activamente en la lucha entablada por las organizaciones deportivas internacionales contra el dopaje"*, y resulta conforme con las previsiones de la LOPD, por ser proporcional a la finalidad que la justifica.

También interesa destacar a efectos de este informe que el artículo 37 atribuye al Gobierno Vasco la potestad sancionadora de carácter administrativo, y el artículo 38, la potestad disciplinaria a las federaciones deportivas del País Vasco y a las demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco, previendo que si los expedientes disciplinarios no son resueltos en determinado plazo, la competencia sea asumida por la Agencia Vasca Antidopaje.

Finalmente, el Capítulo IV del anteproyecto regula el procedimiento disciplinario (artículo 39), y en su artículo 40, la potestad de inspección que se atribuye a la Agencia Vasca Antidopaje- sin perjuicio, dice el anteproyecto-, de las competencias de otros órganos administrativos y judiciales del Estado y del Gobierno Vasco.

En cuanto al procedimiento disciplinario, el anteproyecto de ley exige que los laboratorios pasen los resultados de los análisis al órgano competente para la incoación del procedimiento, de éste al órgano instructor y, del este último a quien deba resolverlo. Además, el artículo 39.5 del texto, exige la comunicación de la incoación del procedimiento y de la resolución a la Agencia Vasca Antidopaje.

De conformidad con las previsiones normativas ahora citadas, nos encontramos con un gran número de tratamientos y cesiones de datos derivados del régimen disciplinario y sancionador regulado en el anteproyecto. En este sentido, debemos, en primer lugar, reproducir lo manifestado por la Agencia Española de Protección de Datos en su informe al anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, en el que señalaba lo siguiente:



"Por otra parte, es preciso indicar que, según señala la Exposición de Motivos del Anteproyecto, en su apartado III, el fundamento del régimen previsto en el mismo deriva del artículo 43 de la Constitución, en el que, tras reconocerse el derecho a la protección de la salud, se señala en el apartado 2 que "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto", al propio tiempo que el apartado 3 indica que "Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio".

De lo que acaba de indicarse, cabe deducir que el legislador viene a considerar el régimen regulador de la lucha contra el dopaje como parte de las actuaciones impuestas a los poderes públicos para garantizar, mediante la adopción de medidas de carácter preventivo, el derecho de los deportistas a la protección de la salud, sin perjuicio de que la detección de sustancias prohibidas pueda llevar aparejada la consecuencia de la adopción de las medidas disciplinarias que en su caso procedan."

Señalado esto, y por lo que se refiere a las cesiones de datos a la Agencia Vasca Antidopaje, y los tratamientos de datos por parte de ese Ento de Derecho Público que el anteproyecto contempla, tendrían por objeto el cumplimiento de las funciones que la propia norma proyectada atribuye a esa Institución en relación con la prevención, control y represión del dopaje en el ámbito de esta Comunidad Autónoma (artículo 12), y parece adecuados para el logro de esa finalidad.

Respecto a los tratamientos de datos derivados del procedimiento sancionador, la cesión de datos de los laboratorios al órgano encargado de incoar el procedimiento resulta obligada dado que son los resultados de los análisis los que justifican la incoación del procedimiento, como también su posterior comunicación a los órganos encargados de la instrucción y resolución de estos procedimientos.

Además, ha de tenerse presente que el artículo 39. del anteproyecto, contempla una serie de previsiones que tratan de garantizar el derecho a la protección de datos personales de los deportistas en el seno del procedimiento, como exigir a los laboratorios que implementen las medidas necesarias para que la comunicación se realice manteniendo el anonimato y la reserva de la identidad del deportista (artículo 39.2), lo que obligará a establecer las correspondientes medidas de seguridad de evite el acceso a la información por quienes no participan en las distintas fases del procedimiento.

En este sentido, resulta preciso resaltar que la LOPD impone a los que traten datos personales unos deberes, en concreto, el deber de secreto, al que antes nos hemos referidos (art.10 LOPD) y el deber de seguridad de los datos (artículo 9), que obliga a la adopción de "las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural". Estas medidas de seguridad se regulan en la actualidad en el Título VIII del Reglamento de



desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1270/2007, de 21 de diciembre, y pueden ser de 3 niveles: bajo, medio o alto, atendiendo a la tipología de los datos tratados, recordando que los referentes a la salud exigen medidas de seguridad de nivel alto (artículo 81.3a).

Al propio tiempo, el apartado 3 del artículo 39 del anteproyecto, garantiza el respeto al principio de conservación de los datos consagrado por el artículo 4.5 LOPD, al indicarse que *"una vez cumplido el plazo de prescripción previsto en esta Ley o cuando hubiera recaído resolución firme en el correspondiente procedimiento disciplinario o causa penal, los laboratorios de control del dopaje no podrán mantener muestras vinculadas a una persona identificable"*.

En efecto, dado que los análisis de muestras tienen por objeto constituir los elementos probatorios necesarios para la imposición de las sanciones, en caso de que el plazo de prescripción de las infracciones hubiera transcurrido o, de haberse iniciado el procedimiento, hubiera recaído resolución firme, no sería necesaria la conservación de las muestras para la resolución del procedimiento, por lo que debería procederse a la anonimización de la muestra, que impida, en todo caso, volverla asociar al deportista, o a su simple destrucción.

Esta previsión sería acorde con la LOPD, que impone a quienes tratan datos personales, la obligación de conservación de los datos únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad legítima y determinada para la que hayan sido recabados, de modo que cuando esos datos ya no sean precisos para esa finalidad deberán ser cancelados (artículo 4), añadiendo que esa cancelación *"dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión"* (artículo 16.3 LOPD).

Lo que a juicio de esta Agencia no sería acorde con la LOPD, es la previsión del artículo 8h) del anteproyecto, que al regular los derechos de las y los deportistas, les reconoce, el derecho *"a exigir la destrucción de las muestra de sangre, orina o cualesquiera muestras que le hayan sido tomadas u obtenidas una vez finalizados el proceso antidopaje y los correspondientes plazos de prescripción. Tal derecho no se podrá ejercer en el supuesto de que la entidad que haya ordenado el control se haya hecho con la titularidad de las muestras que, en todo caso, deberán destinarse a los fines de control de dopaje o de investigaciones"*.

Esta previsión choca de manera frontal con la esencia del derecho fundamental de las personas a la protección de sus datos personales, que siguen siempre siendo suyos, de su titularidad, con independencia de quien los trate y de que ese tratamiento lo sea para el ejercicio de una función legítima prevista en una norma con rango de ley.

Además, y en relación con ese mismo precepto del anteproyecto, no está de más apuntar que la toma de muestras que se les practique a los deportistas, o cualquier otra vía de control del dopaje, a la que se refiere la exposición de motivos, - en función de los avances tecnológicos y la evolución de las investigaciones científicas,



por mucho que se trate de una medida necesaria para la propia prevención de la salud de esos deportistas, deberá modularse con el necesario respeto a su intimidad, y en concreto a su intimidad corporal, conforme a criterios de equilibrio y proporcionalidad. En otro caso, vulneraría el derecho fundamental de esas personas que también le reconoce el artículo 18.1 CE.

Finalmente, interesa destacar que la LOPD otorga a los afectados el derecho a conocer los datos que están siendo objeto de tratamiento (derecho de acceso), a rectificarlos, si fueran inexactos o incompletos (derecho de rectificación), a solicitar su cancelación, si fueran inadecuados o excesivos en relación con el tratamiento efectuado y la finalidad del mismo(derecho de cancelación) o a oponerse en determinadas circunstancias a ese tratamiento, en virtud de una concreta situación personal que legitima el ejercicio del derecho de oposición. Estos derechos, conocidos como derechos ARCO, se regulan el Título III de la LOPD y en el mismo Título III de su Reglamento de desarrollo.

Los derechos ARCO, junto con los principios apuntados con anterioridad, son los que configuran el derecho fundamental a la protección de los datos personales, y de ahí la obligación que impone la LOPD a quienes traten esos datos de garantizar el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de los principios y deberes que la propia Ley Orgánica exige. Por ello, y al margen de la mención que a esos derechos ARCO y al deber de informar, se contiene en el artículo 14.6 del anteproyecto (*"de las garantías en los controles y de los efectos legales de los mismos"*), creemos que sería necesaria su mención expresa en el artículo 8, que viene dedicado, precisamente, a regular los derechos de las y los deportistas.

Para concluir este informe resulta obligado apuntar que la Ley que regule la lucha contra el dopaje en el ámbito de la CAPV, deberá ponderar los derechos de las personas afectadas por las medidas que la misma establece, tratando de lograr el necesario equilibrio entre la protección de los intereses generales que la norma pretende, entre ellos, la propia salud de las y los deportistas, y el necesario respeto a sus derechos fundamentales, en especial a su intimidad y a la protección de sus datos personales.

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2011

Iñaki Vicuña de Nicolás
Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos



Datuak Babesteko
Euskal Bulegoa
Agencia Vasca de
Protección de Datos

IL10-010

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO DOPINAREN AURKAKO LEGE-AURREPROIEKTUARI BURUZ EGINDAKO TXOSTENA.

AURREKARIAK

Goiburuan adierazitako Lege-aurreproiektuari buruzko irizpena eskatuko diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.

Irizpen hau 2005eko azaroaren 28ko Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariak emandako eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egitura organikoa garatzekoa den Ebazpeneko 5 3 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki egin da, eta horren arabera, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko Aholkularitza Juridikoa eta Ikuskaritza Unitateari:

“Datu pertsonalak babestearekin zerikusia duten xedapen-egitasmo guztiei buruzko irizpena ematea, hala egitea eskatuz gero”.

KONTUAN HARTU BEHARREKOAK

Proiektatutako arauaren helburua da kiroleko dopina arautzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Lege-aurreproiektu honen aurrekaria Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea da. Lege hori izan zen, hain zuzen, EAEn dopinaren aurka borroka egiteko eman zen lehen urratsa; izan ere, Soinketari eta Kirolari buruzko otsailaren 19ko 5/1988 Legea ordeztu zuen, ez baitzuen gai horri buruzko araurik xedatzen.

Proiektatutako lege-mailako xedapenaren zioen azalpenean, adierazi ondoren

kirolaren arloan EAEk eskumen eskusiboa duelako eman dela lege hau, kiroleko dopinaren aurkako borrokari buruzko esparru juridikoaren berri ematen du, hain zuzen, osasuna babestu eta dopinaren aurka borroka egiteko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa onartu zen artekoa. Eta gaineratzen da xedapenaren oinarritzat hartu dituztela kiroleko dopinaren aurka borroka egiteko nazioarteko nahiz nazioko erakunde aurreratuenek onartuko printzipioak.

Orain izapidetzen ari den legearen aurreproiektuak egoera berrira egokitzea eta dopinarekin inolako tolerantziarik nahi ez duen egungo gizartearen eskaerei erantzutea du xede. Zioen azalpenean bertan adierazten da lege honen bidez dopinaren aurkako borrokaren lege-esparrua nabarmen gogortu nahi dela, kirolari kalte larria eragiteaz gain, osasun publikorako ere oso arriskutsu bilakatu delako. Hortaz, federazioenak ez diren kirol-jarduerai aplikatu nahi zaie legea, eta dopin-kontrolak ez dira laginak hartzea soilik izango, erabilera terapeutikorako baimenak ere kontrolatu nahi dira legearen bidez, eta, horrez gain, osasun-kontrolak egin nahi zaizkie kirolariei, lan-harremana izan zein ez izan.

Orain arte esandako horiez gain, legearen aurreproiektuak baditu berrikuntza gehiago ere, zioen azalpenean adieraziak. Hauek dira, besteak beste, berrikuntzak: Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzea; zehapen-araubidea ezartzea, azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa oinarri hartuta; beste erakunde publiko edo pribatu batzuk ezarritako zehapenak aintzat hartzea; kirol-baja ezartzea; eta araubidean xedapenak eranstea kirolarien eta lege honen esparruko gainerako pertsonen eskubidea bermatzeko datu pertsonalak babesteari dagokionez, are gehiago, legeak berak diolako dopinaren aurkako borrokan kontu handiz zaindu beharreko datuak erabiliko direla (esaterako, osasunari buruzko datuak). Beraz, aurreproiektuaren zioen azalpenaren zatiak bereziki adierazten du dopinaren aurkako borrokak **aparta** izan behar duela kirolarien eskubideekiko, eta dopinaren aurkako borrokan lortu nahi diren bidezko helburuekin proportzionalki jardun behar duela.

Legearen Aurreproiektu honek 7 kapitulu eta 53 artikulua ditu.

I. kapitulua (xedapen orokorrak). Dopatzea: kontzeptua eta ezarpen-eremua (1. artikulua); printzipio orokorrak (2. artikulua); kirolarien erantzukizunak, kirolarien laguntzaileen erantzukizunak, agintari publikoenak, kirol-erakundeenak, eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeen erantzukizunak (aurreproiektuaren 3. artikulutik 7. artikulura, hurrenez hurren); kirolarien eskubideak (8. artikulua); eta kirolariei eta erakundeei babesa ematea (9. artikulua).

II. kapitulua (Antolaketa administratiboa). Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzea (10. artikulua); haren antolaketa (11. artikulua); eta haren funtzioak (12. artikulua).

III. kapitulua (Dopin-kontrolak). Dopin-kontrolak egiteko betebeharra duten kirolariei buruzko da (13. artikulua); kontrolen bermeak eta legezko ondorioak (14. artikulua); betebeharrak osagarriak eta erabilera terapeutikorako baimenak (15. artikulua); kirol-bajak (16. artikulua); dopin-kontrolak eta osasun-kontrolak (17. artikulua); Kontrolen plangintza eta kudeaketa (18. artikulua); kontrolak egiteko eskumena (19. artikulua); Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrendaren publizitatea (20. artikulua).

IV. kapitulua (Dopinari buruzko diziplinaren eta administrazio-zehapenaren araubidea) diziplina-araubidearen aplikazio-eremuari buruzkoa da (21. artikulua); administrazio-zehapenen araubidearen aplikazio-eremua (22. artikulua); arau-hauste motak (24. artikulua); kirolariei ezartzekoak diren zehapenak (25. artikulua); klubei eta kirol-taldeei ezartzekoak diren zehapenak (26. artikulua); teknikariei, epaileei, arbitroei eta bertan adierazitako gainerako pertsonen ezartzekoak diren zehapenak (27. artikulua); klubetako edo taldeetako medikuei eta gainerako osasun-langileei ezartzekoak diren zehapenak (28. artikulua); dopina dela-eta zehapenak ezartzeko irizpideak (29. artikulua); isunak ezartzea (30. artikulua). Kapitulu beraren baitan beste artikulua hauek xedatu dira: arau-haustearen ondorio gehigarriak eta emaitzak aldaraztea (31. artikulua); zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentzia eskuratzeko gaitasuna galtzea (32. artikulua); Non bis in idem printzipioaren aplikazioa (33. artikulua); erantzukizuna azkentzeko kausak (34. artikulua); arau-haustea eta zehapenak preskribatzea (35. artikulua); dopina atzematen laguntzea (36. artikulua); administrazio-zehapenen arloko eskumena (37. artikulua); diziplina-prozeduren alorreko eskumena (38. artikulua); diziplina-prozedura (39. artikulua); ikuskapen-ahala (40. artikulua); eta konfiskatzea (41. artikulua).

V. kapitulua (Prebentzio-neurriak) neurri horiei buruzkoa da (42. artikulua); kiroleko dopinari buruzko informazio-sistema (43. artikulua); dopina eragiteko gai diren produktuen kontrola (44. artikulua); nutrizio-produktuak (45. artikulua); eta kirolariaren osasun-txartela (46. artikulua).

VI. kapitulua (Dopinari buruzko datuen araubidea). datuen konfidentzialtasuna (47. artikulua); datuak uzteko baimena ematea (48. artikulua); eta Kirolean dopina eragiteko gai diren produktu eta metodoei buruzko datuak aitortzeko betebeharra (49. artikulua).

Azkenik, aurreproiektuaren VII. kapitulua dugu (Nazioarteko kirol-federazioak eta nazioarteko eremuan kirol-jarduera arautzen duten gainerako erakundeak). Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan egin beharreko dopin-kontrolak (50. artikulua); lehiaketaz kanpoko kontrolak Euskal Autonomia Erkidegoan dauden espainiar edo atzeritar kirolariei (51. artikulua); Nazioarteko erakundeek kirolari lizentziadunei Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaketaz kanpo egiten dizkieten dopin-kontrolak (52. artikulua); nazioarteko erakundeek ezarritako zehapenak kirolariengan eta gainerako lizentziadunengan izango dituzten eraginak (53. artikulua).

Proiektatutako legeak, halaber, horiez gain ditu 8 xedapen gehigarri, 3 xedapen iragankor, 2 xedapen indargabetzaile eta 6 azken xedapen (nahiz eta azken biak azken xedapenetatik bosgarrena diren).

II

Txosten honen xedea legearen aurreproiektuaren eta bere baitan hartzen dituen zenbait alderdiren eta arauen azterketa egitea da, hain zuzen, Agentzia honi dagokion ikuspegitik. Hau da, datu pertsonalak babesteko araudiarekin bat datorren aztertuko dugu. Datu pertsonalak, egun, lege hauetan arautzen dira: Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan -datu pertsonalen babeserako Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duena-, eta, halaber, EAEn eremuan, otsailaren 25eko 2/2004 Legean -Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa-. Azken hori urriaren 18ko 308/2005 Dekretu bidez eta urriaren 18ko 309/2005 Dekretu bidez garatu da -Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Estatutua onartzen duena-.

Horren haritik, aintzat hartu beharreko lehenengo alderdia da Dopinaren Aurkako Legeak abiapuntutzat hartu duela helarazitako testuko zioen azalpenean hori hala dela adierazten da- dopinarekin eta osasunarekin zerikusia duten datuak osasunari buruzko datu pertsonalak direla, eta, hortaz, babes berezikoak direla. Irizpena emango dugun legearen aurreproiektuaren azterketak hori hala dela baieztatu du, araudiak, nahiz eta modu eksklusiboan ez izan, kirolarien osasunari buruzko datuei eragiten die. Horrenbestez, Legearen aurreproiektuaren azterketa egiteko ezinbestekoa da datu pertsonalak babesteari buruzko funtsezko eskubidearen printzipioak eta bermeak aintzat hartzea.

III

Eskubidea konstituzioan

1978ko Konstituzioaren I. tituluan zenbait oinarritzko eskubide **jasotzen** dira, horiei eraginkortasun juridikoa ematen die eta horiekiko zenbait berme-maila ezartzen ditu, norainoko eta izaera desberdina duten erakunde eta bitartekoen bidez. Eskubide horien artean, Espainiako Konstituzioan ez da esanbidez aipatzen datu pertsonalen babeserako eskubidea, baina 18.4 artikulua honako hau xedatzen du: *“Legeak informatikaren erabilera mugatuko du, herritarren ohorea, eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatua, eta horien guztien eskubideen egikaritzea osoa bermatzeko”*.

Konstituzioko xedapen hori da datu pertsonalen babeserako eskubidearen jatorria, bai eta informazio-autodeterminaziorako eskubidearena ere. Azken horren kasuan, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak (**guztiek**, Konstituzio Auzitegiak azaroaren 30ean eman zuen 292/2000 sententzia), eskubideak oinarritzkoak eta autonomoak direla esan du, eta doktrinaren batek XXI. mendeko oinarritzko eskubide berria izena eman dio.

Datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubidearen kontzeptuaren eremua intimitaterako eskubidearena baino zabalagoa da. Hona hemen Konstituzio Auzitegiaren 292/2000 sententzia:

“Horrela bada, datuak babesteko oinarritzko eskubidea zaintzeko xedea ez da murrizten pertsonaren datu intimoetara bakarrik, aitzitik, beste edozein motatako datuei ere badagokie, hirugarrenek haiek ezagutu edo erabiltzeak jabearen eskubideetan, oinarritzkoak direnetan nahiz besteetan, eragina izan badezake. Izan ere, datuen babeserako eskubidearen helburua ez da norbanakoaren intimitatea bakarrik, horretarako baitago Espainiako Konstituzioko 18.1 artikulua ematen duen babesa, datu pertsonalak baizik. Ondorioz, datu pertsonal publikoei ere badagokie, publikoak izan arren, edozeinek ezagutzeko modukoak izan arren, ez baitiote ihes egiten interesdunak duen erabakitzeke botereari, hark duen datuen babeserako eskubideak hala bermatzen du eta. ...Babestutako datuak pertsona hori identifikatzen edo identifikatzeko aukera ematen duten, hau da, haren ideologiazko, arrazazko, sexuzko, ekonomiako edo bestelako profila osatzeko balio duten guztiak, edota baldintza jakin batzuetan norbanakoarentzat mehatxu bat izan daitekeen beste erabilera baterako balio duten guztiak direla baizik.”

Argitu behar da eskubide hori ez dela mugatzen beste eskubide batzuk bermatzeko bitarteko izatera, informatikaren erabilera bidegabeari aurre egiteko. Aitzitik, oinarritzko eskubide bat da, berezko izaera eta autonomia du beste gainerako guztiekiko. Pertsona orok du berari buruzko informazio-fluxuarekiko erabateko jabetza, datuen trataera automatizatuaren erabilera bidegabeak ohoreari eta askatasunari eragin diezazkiokeen erasoan aurrean babesteko eta halako jardueren aurrean neurriak hartzeko. Horrenbestez, Konstituzio Auzitegiak *“intimitatearen eta ohorearen eskubidea eta bestelako eskubide guztiak erabili ahal izateko bermea, eskubide edo funtsezko askatasuna dena bere horretan, izan daitezkeen erasoan aurreko duintasunerako eta askatasunerako eskubidea da, datuen trataera mekanizatuaren erabilera legitimoaren aurrean”* (Konstituzio Auzitegiaren 254/1993 sententzia, OJ 6; 11/1998 sententzia, OJ 4; eta azkena 290/2000 sententzia, OJ 7).

Horren guztiaren ondorioz, eskubide hau ez da nahasten intimitaterako eskubidearekin, informazio-autodeterminaziorako eskubide berria ez baita beste hura bezala mugatzen ezezagunek pertsonen bizitza intimoari egindako erasoak eta esku-hartzeak ez onartzeko aukera legalera (zentzu negatiboa), baizik eta beste dimentsio bat du (zentzu positiboa), pertsonari askatasuna aitortzen baitzaio bere datu pertsonalak ikustea, tratatzea eta erabiltzea kontrolatzeko (habeas data), intimoak izan edo ez.

Horrela adierazi Konstituzio Auzitegiak, FD 6an, 292/2000 sententzian:

...Datuen babeserako oinarritzko eskubidearen bidez, pertsona horri bere datu pertsonalak, hauen erabilera eta xedea kontrolatzeko ahalmena bermatu nahi zaio, haien legez kontrako trafikoa, ukituaren duintasunarentzat eta eskubidearentzat kaltegarria dena ekiditeko asmoz... Datuen babeserako

eskubideak datu horiei buruz erabakitzeke boterea bermatzen die norbanakoei. Berme horrek botere publikoei informazio horren iturri bilakatzeko debekua ezartzen die, bai eta informazio hori behar ez bezala lortu edo zabaltzetik ondoriozta daitezkeen arriskuak saihesteko betebeharra ere. Baina norberaren datu pertsonalei buruz erabakitzeke botere horrek ez du inolako baliorik interesdunak ez badaki zein datu diren hirugarren batzuek dituztenak, zeinek dituzten eta zertarako

Horrexegatik da berezia datuen babeserako legea, izan ere, batetik, haren eremua zabalagoa da intimitaterako eskubidearena baino. Hau da, datuen babeserako oinarritzko eskubidearen bermeak ez du bakarrik Konstituzioaren 18.1 artikulua babesten duen intimitatea bere baitan hartzen, baizik eta epaimahai honek zenbaitetan termino zabalagoetan zehaztu duena ere bai. Esate baterako, bizitza pribatuaren eremuari dagokion nortasunaren ondasunen arloa, norberaren duintasunarekiko errespetuarekin erabat lotuta dagoena (Konstituzio Auzitegiak urriaren 30ean emandako sententzia, O 4); ohorerako eskubidea, bereziki jaso Konstituzioaren 18.4 artikuluan; eta, halaber, 18.4 artikulua berak adierazten duen zentzu zabala, eskubide horien guztien egikaritzea osoa. Datuen babeserako oinarritzko eskubideak konstituzioak aitortzen duen bermearen eremuaren baitan hartzen ditu pertsonaren eskubide ororen egikaritzarako edo egikaritzeari eragiten dioten datuak, konstituzioak jasotzen dituen eskubideak izan edo ez, eta ohore, ideologia norberaren eta familiaren intimitateari buruzkoak izan edo ez, edo konstituzioak babestutako beste ondasunen bat izan edo ez."

Oinarritzko eskubide hori sententziak adierazi bezala jaso dago konstituzioan, eta, beraz, gogora ekarri behar da "bigarren berezitasuna bat" aitortzen diola horrek. Horrek esan nahi du eskubide horren titularri honako hau aitortzen zaiola:

IF. . . ahalmen-multzo bat, zenbait botere juridiko hartzen dituen eta horiek erabiltzeak hirugarrenei betebeharrak juridikoak eragiten dizkietenak, intimitaterako oinarritzko eskubideak bere baitan hartzen ez dituenak, eta oinarritzko eskubide honek betetzen duen funtsezko funtziorako balio duena:

norbanakoak bere datu pertsonalak kontrolatzeko boterea izan dezan bermatzen da, eta hori eraginkortasunez egiteko modu bakarra hirugarrenei betebeharrak hori jartzea da." Hain zuzen ere, hauek: datu pertsonalak jasotzeko eta erabiltzeko baimena aurretik eskatzeko eskubidea, datu horien helburuari eta erabilerari buruz jakiteko eta informazioa jasotzeko eskubidea, eta datu horiek ikusteko, zuzentzeko eta ezabatzeke eskubidea. Azken batean, datu pertsonalei buruz erabakitzeke boterea (Konstituzio Auzitegiaren 254/1993 sententzia, F 7)".

Konstituzio Auzitegiak, 290/2000 sententzian bertan, oinarritzko eskubide horren edukia honela definitu du:

"datu pertsonalei buruz erabakitzeke eta datu pertsonalen gaineko kontrola izateke boterean datza, pertsona horri ahalmena ematen diona erabakitzeke zer datu emango dizkion hirugarren bati, estatua zein partikularra izan, edo zer datu jaso dezakeen hirugarren horrek, eta, horrez gain, ahalmena diona pertsona horri jakiteko nork dituen datu horiek eta zertarako, eta datu horiek eduki edo erabili ditzan kontra egitea. Datu pertsonalei buruz erabakitzeke eta kontrolatzeko botere horiek, datuen babeserako oinarritzko eskubidearen zati direnak, juridikoki honela zehazten dira: datu pertsonalak jaso, lortu eta erabiltzeko baimena emateko ahalmena, horiek gordetzeke eta horien trataerarako baimena emateko ahalmena, bai eta horien erabilera edo erabiltzeko aukerak ere beste hirugarren bati emateko ahalmena, estatua zein partikularra izan. Eta datu pertsonala horiek jakin eta informatikoki trata ditzaten baimena emateko, hau da, eskubide hori erabili ahal izateko, ezinbestekoa da, batetik, jakitea nork dituen datu pertsonal horiek eta zertarako erabiltzen dituen, eta, bestetik,

norbaitek edukitzeari eta erabiltzeari aurka egitea boterea edukitzea. (...)" (FJ 7).

Beste perspektiba bat izanik, beharrezkoa da, halaber, Konstituzio Auzitegiaren doktrina kontuan izatea, oinarritzko eskubide bati eragiten dion legeak (arrunta) izan beharreko ezaugarriei dagokienez. Esate baterako, aztertu dugun kasua dugu (*"Legeak bere baitan hartu dituen zenbait xedapenek, kirolarien eta beste pertsona batzuen eskubideei dagokienez, badu eraginik datu pertsonalen babesean, nahiz eta ez duten arautzen"*, zioen azalpenaren arabera); izan ere, Konstituzio Auzitegiak adierazi bezala, legeak oinarritzko eskubidea urra dezake, erregulatu duelako (edo eragina izan duelako) oinarritzko eskubidearen edukia osatzen duen ahalmen-multzoa, aintzat hartu gabe lege bati eska dakizkioken gutxieneko zehaztasunak eta bermeak, eta lege horrek, hain zuzen ere, halaber errespetatu behar du arautzen duen jardunaren oinarritzko eskubidearen eduki nagusia.

Horrenbestez, lehen ere aipatu dugun Konstituzio Auzitegiaren urriaren 30eko 292/2000 sententziak honela dio:

"... Oinarritzko eskubideak konstituzio-mailako garrantzia duten ondasunak eta interesak kontuan hartuta bakarrik muga daitezke eta, hortaz, justifikatu egin behar da beharrezko dela ezarritako helburu legítimoak lortzeko, neurritzkoa izan behar du eta, gainera, eta mugatu den oinarritzko eskubidearen eduki nagusia errespetatu behar du (Konstituzio Auzitegiaren otsailaren 28ko sententzia, F 6; eta otsailaren 27ko 18/1999 sententzia, F.2)... Horrez gain, nahiz eta konstituzio-mailako justifikazioa izan eta lege bidez ezarritako oinarritzko eskubidearen mugak neurrikoak izan (Konstituzio Auzitegiaren 178/1985 sententzia), Konstituzioa urra dezakete, baldin eta xedatutako muga horiek zehazten eta aurreikusten ez badira eta nola aplikatuko diren zehazten ez bada... lege mugatzaile horrek urratu egingo du, halaber, muga horiek ezinezkoa egiten badute kaltetutako oinarritzko eskubidea erabiltzea edo Konstituzioak aitortzen dion bermeak eraginkortasunik ez badu.

Hori hala izanik, Konstituzio Auzitegia arduratu da muga horiek ezarriko dituen legeak bete behar dituen ezaugarriak ezartzeaz.

Hortaz, duela gutxi emandako 70/2009 sententziaren arabera,

*"Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia finkatuaren arabera, legeak zehaztu egin behar ditu mugak, eta alde batera utzi muga-irizpide zehaztugabeak edo zabal daitezkeenak, izan ere, mugak ezartzeak norberaren intimitaterako oinarritzko eskubidea urratzen du eta ezinezkoa egiten dute kaltetutako oinarritzko eskubidea erabili ahal izatea edo Konstituzioak aitortzen dion bermeak eraginkortasuna galtzen du (Konstituzio Auzitegiaren azaroaren 30eko 292/2000 sententzia, FJ 11). Hain zuzen ere intimitaterako oinarritzko eskubideari buruz Konstituzio Auzitegiaren 49/1999 sententzian adierazitakoaren arabera, eskubide horretan eskua sartuz gero, "nahitaezkoa" da legeak aurreikustea, eta "esku-hartzearen baldintza eta oinarri guzti-guztiak adieraztea" (FJ 4); eta beste batzuetan **"lege-mailako kalitatea"** izendatu duguna izan behar du nolabait (Konstituzio Auzitegiaren apirilaren 5eko 49/1999 sententzia, FJ 5; uztailaren 16ko 169/2001 sententzia, FJ 6; eta urriaren 23ko 184/2003 sententzia, FJ 2).*

Horrekin guztiarekin adierazi nahi dugu, nahiz eta lege mailakoa izan irizpena eskatu zaigun araudia eta datuen babeserako printzipio orokorra izan, ezin dela interesatuaren baimena **salbuespentzat** eman, arau-mailako arauak hala xedatzen duelako, eta, aztertzen ari garen kasuan, lege baten bidez oinarritzko eskubide batean eskua sartzea. Horrek esan nahi du, ezin dela automatikoki oinarritzko eskubidea urratu, eta egiaztatu egin behar dela ea lege horrek betetzen dituen Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak ezarritako baldintzak, gertaera baliozkoa izan dadin.

Horrenbestez, agerian geratu da, batetik, datuen babeserako oinarritzko eskubidea ez dela mugagabea, eta, bestetik, Konstituzioak xedatzen duela lege bidez “eta lege bidez soilik” ezar daitezkeela mugak. Horrez gain, agerian geratu da, halaber, ez dela nahikoa muga horiek lege-mailako arau batean jasotzea -proiektatua halako da-, ezinbestekoa baita mugak ezartzen dituen legearen edukiari dagozkion beste betebeharrak batzuk betetzea. Izan ere, oinarritzko eskubidea mugatzen duen lege horrek ere urra dezake oinarritzko eskubidea, erabiltzea ezinezkoa izatea eta Konstituzioak aitortzen dion bermeak eraginkortasunik ez izatea eragin baitezake.

IV

Osasunari buruzko datuak

Osasunari buruzko datuak eta izaera pertsonaleko datuen babesa.

Kontzeptu hori, hau da, “*osasun-datuak*”, “*osasunari buruzko datuak*” edo, azkenaldian, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatu zuen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan adierazten bezala “*Osasunarekin zerikusia duten datu pertsonalak*” honela definitzen da 170/2007 Errege Dekretuan (5.1 g artikulua): “*Pertsona baten garai bateko, oraingo edo etorkizuneko osasun fisiko edo mentalari buruzko informazioa*”.

Aipatutako datu horien kontzeptu zabala ezarri da, 1981eko urtarrilaren 28ko Europako Kontseiluaren 108. hitzarmenaren zioen azalpenean adierazitakoari jarraiki eta erakunde horren Ministroen Batzordeak ezarritako gomendioei jarraiki, bai eta Erkidegoetako Auzitegi Nagusiaren jurisprudentziari berari jarraiki ere.

Horren haritik, hitzarmenaren 45. kontuan hartzekoak honela definitzen ditu osasun-datuak: “*Pertsona baten garai bateko, oraingo edo etorkizuneko osasun fisiko edo mentalari buruzko informazioa*”.

Halaber, Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2003ko urriaren 6ko sententziak honela dio:

“Komeni da 95/46/EE Zuzentarauaren 8. artikuluko 1. atalak erabiltzen duen osasun datuak kontzeptuaren gainean egiten den interpretazioa zabala izatea, eta pertsonen osasunaren alderdi fisikoaz gain, alderdi psikikoa ere biltzea bere baitan”.

Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak ere kontzeptuaren gaineko interpretazio zabala egin zuen estatu kideei datu medikoen babesari buruz egindako 1997ko otsailaren 13ko R(97)5 Gomendioan. Hona hemen: *“pertsonaren osasunari buruzko datu pertsonal guztiez gain, osasunarekin eta datu genetikoekin zerikusi zuzena eta argia duten datuak ere osasun datutzat joko dira”*.

Oso argigarria da historial mediku elektronikoetako osasunari buruzko datu pertsonalen tratamenduari buruz, Datuak Babesteari buruzko 29. artikuluko Lan Taldeak egin zuen Laneko Dokumentua (EP 131). Hona han ezarritakoa:

Definizio hau (osasun datua zer den dioen definizioa) datu pertsonalei ere ezarri behar zaie, baldin eta datu horiek zerikusi zuzena eta argia badute pertsonen osasun egoeraren deskribapenekin... batik bat mediku espedienteetan jasota badaude. Beste datu batzuk ere datu sentsibletzat jo beharko dira, adibidez, dena delako pazientearen tratamenduari buruzko dokumentazio medikuaren baitako datu administratiboak (gizarte segurantzaren zenbakia, ospitaleratze-data, eta abar); batez ere, kontuan hartzen bada, pazientearen tratamenduaren testuinguruan ezinbestekoak ez balira, datu horiek ez zirela mediku espediente batean jasota egongo eta ez zirelako inondik inora han jaso beharko”.

Halaber, dokumentu horretan hau ere ezarri da:

“HME sistema bat aipatzen duten xedapen juridikoek arau orokortzat ezarri behar dute pazientearen aurretiazko baimena edukitzea datuak HME sisteman sartzeko edo datu horiek ikusi ahal izateko (bereziki, kalterako erabil daitezkeen datuen tratamenduari dagokionez; esaterako, datu psikiatrikoak, abortuei buruzko datuak, etab.), eta hain intimoak ez diren datuekiko uko egiteko aukera xedatu behar dute”.

Bukatzeko, zera dio:

“Dokumentu medikuetan, historial mediku elektronikoetan eta HME sistemetan dauden datu guztiak dira datu pertsonal sentsibleak. Beraz, Zuzentarauak dauzkan datu pertsonalak babesteari buruzko arau guztiak bete behar izateaz gain, Zuzentarauko 8. artikuluan informazioa sentsiblearen tratamendua arautzeko jasotako datu-babesari buruzko arauak ere bete beharko dira.

Osasunari buruzko datuak norberaren intimitateak babesten duen eremuaren barrukoak direla Konstituzio Auzitegiak askotan adierazi duen doktrina da (azken aldiz, martxoaren 23ko 70/2009 sententzian eta ekainaren 26ko 159/2009 sententzian).

Datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubidearen ikuspegitik ere babestu beharreko datuak dira horiek.

Horrenbestez, Konstituzio Auzitegiak azaroaren 8an eman zuen 202/1999 sententzian, honela zioen:

“Hori hala izanik, eta kontuan hartuta uneoro babes-errekurtso honen gaia Konstituzioaren 18. artikuluekin bat datorren aztertzea dela -langilearen osasunari buruzko datuen tratamendua eta horiek euskarri informatiko egokian gordetzea, aipatu berri dugun gaia baita-, adierazi behar dugu halako jardunak egitea kaltetuaren berariazko baimenik izan gabe, neurri desegokitza eta neurri kanpokotzat hartu behar dela, eta informazioaren titularraren intimitaterako eskubidea eta askatasun informatikorako eskubidea urratzen direla.

..., nabarmentzeko modua da, berez, enpresak hartutako neurria, oinarritzko eskubide batekiko neurri murrizgarri batek proportzionaltasun-neurria gainditu duen egiaztatzeko xedatuta dauden arauak aintzat hartuta ezarritako neurria

da hori, ez da irtenbide egokitza, beharrezkotza eta proportzionaltza hartzen helburu lortzeko, kasu honetan, absentismoa kontrolatzeko [Konstituzio Auzitegiaren 66/1995 sententzia, oinarri juridikoa 5; 207/1996 sententzia, oinarri juridikoa 4 E] eta 69/1999 sententzia, oinarri juridikoa 41]; izan ere, neurri horren bidez ez dira interes orokorrerako edo enpresaren intereserako onura edo alde on gehiago eragin, urratutako intimitaterako eskubiderako kalteak baino.

Horren haritik, komeni da gogora ekartzea, Espainiako Konstituzioaren 18.4 artikuluan xedatutakoa garatze aldera Datu Pertsonalen Tratamendua Erregulatzeko Lege Organikoan (aurrerantzean, gaztelaniazko LORTAD sigla), datuen babeserako printzipio orokorrak adierazten direla, besteak beste, erabileraren kongruentzia eta arrazoizkotasuna. "Horren arabera, jasotako eta informatikoki tratatutako informazio pertsonalak lotura argia izan behar du datuak eskatzeak dituen helburu legítimoarekin, eta, hortaz, erabat debekatuta dago datuak erabiltzea, baldin eta ezarritako helburu horietarako ez bada (4. artikuluko 1. eta 2. paragrafoak)" (Konstituzio Auzitegiaren 94/1998 sententzia, oinarri juridikoa 4), bai eta horiek zehaztea eta eguneratzea ere (4.3 artikulua). *EErregulazio hori nagusiki bat dator 1981eko urtarrilaren 28ko Europako Kontseiluaren hitzarmenaren 5. eta 7. artikuluetan ezarritakoarekin (datu pertsonalen tratamendu automatizatuari dagokion pertsonen babesari buruzkoa). Espainiak ere hori bera berretsi zuen 1984ko urtarrilaren 27ko agiriaren bidez, eta 1995eko 95/46/EE Zuzentarauaren 6.artikuluaren eta ondorengo artikuluen bidez (zuzentarau hori pertsona fisikoen datu pertsonalak tratatzeari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa). Horrenbestez, enpresak langileen osasunari buruz dituen datuen tratamendu informatikoak –horiek gordetze aldera- urratu egiten du jasotako informazio pertsonalaren eta datu horiek jasotzeak zuen helburu legítimoaren arteko lotura argia.*

Beraz, hau da ondorioa: diagnostiko medikoaren tratamenduak eta horiek aipatutako datu-basean gordetzeak kaltetuak esanbidezko baimena eman gabe, ez du betetzen oinarrizko eskubideen babeserako Espainiako Konstituzioaren 53. artikuluan xedatzen duen bermea".

Horren haritik, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren 2008ko uztailaren 17ko sententziak honela dio:

"Datu pertsonalak babestea, eta bereziki datu medikoak babestea, ezinbestekoa da gizabanakoak goza dezan bere bizitza pribatu eta familia-bizitzarako eskubideaz, hitzarmenaren 8. artikulua bermatutakoaren arabera. Datu medikoen konfidentzialtasuna errespetatzea funtsezko printzipio bat da, hitzarmena sinatu duten estatuetako lege-sistemetan. Berebiziko garrantzia du, paziente baten pribatutasuna errespetatzeaz gain, haren konfidentzialtasuna zaintzeak medikuntzaren lanbidean eta osasun-zerbitzuetan orokorrean... Barne-araudiak berme egokiak eman behar ditu osasun-datu pertsonalei buruzko komunikazio mota oro prebenitzeko edo jakinarazteko, hitzarmenaren 8. artikulua xedatzen dituen bermeak ez bailirateke beteko".

Konstituzio Auzitegiak ere adierazi du oinarrizko eskubide hori ez dela mugagabea

"... nahiz eta Konstituzioak ez dizkion berariaz muga jakinik ezarri, eta ez dien botere publikoei bideratu haiek erabaki dezaten -beste oinarrizko eskubide batzuekin hala egin baitu-, ez dago zalantzarik konstituzioak babesten dituen gainerako oinarrizko eskubideetan eta ondasun juridikoetan aurkitu behar dituztela (Konstituzio Auzitegiaren apirilaren 8ko 11/1981 sententzia, F 7, F 6; eta 18. artikuluari dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren 110/1984 sententzia, F 5).Muga horiek izan daitezke oinarrizko eskubidearen muga zuzenak, lehen aipatutakoak, edo oinarrizko

eskubidea erabiltzeko modu, une edo tokiko mugak. Lehenengo kasuari dagokionez, muga horiek erregulatzea oinarritzko eskubidea garatzeko modu bat da. Bigarren kasuan, dena delako oinarritzko eskubidearen edukia osatzen duten ahalmen-multzoa erabili edo egikaritu beharreko modu jakinari ezartzen zaizkion mugak dira, eta, beraz, erabilera erregulatzeke modu bat da, eta hori lege arrunt baten bidez egin behar da, Espainiako Konstituzioaren 53.1 artikulua ezarritakoari jarraiki. Hori hala izanik, lehen ondorioa da, nabarmena delako ez du garrantzi gutxiago, Konstituzioak behartzen duela Lege bidez, eta soilik Lege bidez, mugak ezartzea oinarritzko eskubideei. Oinarritzko eskubideak konstituzio-mailako garrantzia duten ondasunak eta interesak kontuan hartuta bakarrik muga daitezke eta, hortaz, justifikatu egin behar da beharrezkoa dela ezarritako helburu legitimoa lortzeko, neurritzkoa izan behar du eta, gainera, mugatu den oinarritzko eskubidearen eduki nagusia errespetatu behar du" (Konstituzio Auzitegiaren 292/200 sententzia).

Eta, halaber, muga horiek nola jarri ere adierazi du

"Horrez gain, datu pertsonalen babeserako eskubideari dagokionez, eskubide horren mugak konstituzioaren legimititatea izateko, **ezin da justifikatu, bere horretan, administrazio publikoaren jarduna delako**. Eta ez da nahikoa, halaber, Legeak ahalmena ematea hari kasuan kasu erabakitzeke mugak, eta, konstituzioaren bidez babestutako eskubide edo ondasunen bat urratzen denean, nolabaiteko doitasuna egin behar duela adierazi besterik ez du egingo. Legeak zehaztu behar du noiz urratu den ondasun edo eskubide hori, datu pertsonalen babeserako eskubidea mugatu izana justifikatzeko, eta zer egoeratan muga daitekeen, eta, horrez gain, arau zehatzen bidez egin behar du interesdunak aurretiaz jakin dezan muga hori jarri diotela eta horrek zer ondorio dituen. Izan ere, beste kasu batean, legeak berak igorriko lioke administrazioari funtzio hori bete zezan, eta Legeak soilik du eskumena oinarritzko eskubideen gaitetan, Espainiako Konstituzioaren 53.1 artikulua Lege-erreserbaren arabera, hau da, argi ezartzen muga eta haren erregulazioa".

Osasun-datuen babesari buruzko araubidea.

1981eko urtarrilaren 28ko Europako Kontseiluaren 108. hitzarmenaren 6. artikulua ezarritakoaren arabera,

"Arraza-jatorria, iritzi politikoak, pentsamolde erlijioso zein filosofikoak, sindikatu-bazkidetza, bai eta osasunari edo sexu-bizitzari buruzko datuen tratamendua jakinarazten duten datu pertsonalak ezin izango dira automatikoki tratatu, baldin eta barne-zuzenbideak ez baditu berme egokiak xedatzen".

Merezi du aipatzea, halaber, Giza eskubideak eta gizakiaren duintasuna biologiako eta medikuntzako aplikazioetatik babesteko hitzarmena, 1997ko apirilaren 4an Oviedon sinatua eta 1991ko uztailaren 23ko Agiriaren bidez berretsia (1999ko urriaren 20ko BOE, 251. zk.). Izan ere, pertsonen osasunari buruzko informaziorako eskubidea, baimen informaturako eskubidea eta informazioaren intimitaterako eskubidea lantzen duen nazioarteko lehen lege-bitartekoa da, eta eremu komun bat ezarri du giza eskubideak eta giza duintasuna babesteko biologiaren eta medikuntzaren aplikazioan. Haren 5.artikuluaren xedatutakoari jarraiki, osasun-alorreko interbentziorako pazientearen baimen informatua behar da beti.

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak urriaren 24an emandako 95/46/EE Zuzentarauaren 8.1 artikulua, hain zuzen, datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askearen zirkulazio askearen arloan pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, eta haren 33. kontuan hartzekoak aitortzen du "oinarritzko askatasunen edo intimitatearen aurka eraso egin dezaketen datuak izan daitezkeela osasunari

buruzko datuak". Aurrekoaren harira, honela dio artikuluko horrek:

"Estatu kideek datu pertsonalen tratamendua debekatuko dute, baldin eta datu horien bidez jakinarazten bada pertsonaren arraza edo jatorri etnikoa, iritzi politikoak, pentsamolde erlijioso zein filosofikoak, sindikatu-bazkidetza, edo osasunari zein sexualitateari lotutako informazioa".

Osasunari buruzko datuak modu berezian babesten dituzte nazioarteko eta Europako araudiek, bai eta Datuak Babesteko Lege Organikoak ere. Berariazko araubidea ezartzen du haren 7. artikuluko 3. paragrafoak, "Modu berezian babestutako datuak". Babes-maila handiena dute, pertsonaren datu intimoenei eragiten baitie, eta, horrez gain, bi oinarritzko eskubide hauek bat egiten baitute: Intimitaterako eskubidea eta datu pertsonalen babeserako eskubidea.

Honela dio hirugarren paragrafo horrek:

"Arrazari, osasunari eta sexu-bizitzari buruzko izaera pertsonaleko datuak bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arrazoiak direla bide, legeren batek halaxe xedatzen duenean edo ukituak esanbidez onartzen duenean hori".

Osasunari buruzko datuek eragin berezia dutenez dena delako pertsonaren ingurune intimoan, kontu handiz zaindu beharreko datuak baitira, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoak araudi zehatzagoa eta zorrotzagoa xedatu du, izaera orokorreko araudiak baino, honako egoera hauetarako: datuak tratatu behar direnean, datuen tratamendurako segurtasuna bermatzeko neurriak hartu behar direnean, eta konfidentzialtasunari eta isiltasunari buruzko betebeharrak bete behar direnean. Horrenbestez, datu horien titularraren esanbidezko baimena edukitzea ezinbesteko arau orokorra da datu horien tratamendurako.

Nolanahi ere, 7.3 artikuluko horrek berak datuen tratamendurako aukera ematen du, baldin eta tartean interes orokorreko arrazoiak direla-eta legeren batek hala xedatzen badu.

Komeni da esaldi horren esanahia sakonago aztertzea, gau da, "...baldin eta... legeren batek hala xedatzen duenean".

Horren haritik, komeni da berriz ere Europako Parlamentuak eta Kontseiluak urriaren 24an emandako 95/46/EE Zuzentaraua gogora ekartzea, datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askearen arloan pertsona fisikoen babesari buruzkoa.

Honela dio 8. artikuluko 4. lerrokadak:

"Beharrezkoak diren bermeak ezarriz gero, Estatu kideek aukera izango dute interes publikoko arrazoi garrantzitsuak direla eta, 2. idatz-zatian aurreikusitakoez gain bestelako salbuespen batzuk jartzeko, bere legedi nazionalaren bidez edo kontrol agintarien erabaki bidez".

95/46/EE Zuzentaruaren Zioen azalpeneko 34. kontuan hartzekoan ematen du arau horren azalpena. Kontuan hartzeko horren arabera, "Kontuan izanik, Estatu kideei ere baimena eman beharko zaiela interes publiko garrantzitsuek justifikatzen dutenean debeku horri salbuespenak egitea, hain zuzen ere, osasun publikoa eta gizarte babesaren moduko kategoria sentiberen tratamenduan —kalitatearen eta errentagarritasunaren bermeari dagokionez bereziki—, baita gaixotasun seguruen erregimenean prestazio eta zerbitzuen erreklamazioak konpontzeko erabiltzen diren prozeduretan, ikerketa zientifikoan eta estatistika publikoetan; beraiei dagokiela, hala ere, berme egokiak eta zehatzak aurreikustea pertsonen oinarritzko eskubideak eta bizitza pribatua babesteko".

Bestalde, 29. artikuluan aipatzen babes-taldeak, osasunaren gaineko datu pertsonalak historial mediku elektroniketan egiten den tratamenduari buruzko azterketaren dokumentuan, honako hau adierazi du zuzentarau horren 8.4

artikuluaren interpretazioaz:

“Hala gertatuz gero, salbuetsitako datuen tratamendu-multzoak interes publiko handia izan behar du estatu kidearentzat, eta interes publiko hori garrantzitsua dela nabarmena izan behar du, datu horiek tratatuko badira. Neurri-mota horiek proportziozkoak izango dira, hau da, ez da salbuespen gutxiago izango duten bestelako neurririk izango.

Horrez gain, bizitza pribatu eta familiartekorako eskubideari legitimoki eragiteko, Giza Eskubideei buruzko Europako Hitzarmenaren 8. artikularekin bat etorri behar du, eta aintzat hartu Estrasburgoko jurisprudentzia: Legeak ezarritakoaren arabera egin behar da eta ezinbestekoa izan behar du gizarte demokratikoan, interes publikoaren izenean. Estrasburgoko jurisprudentziak behin baino gehiagotan adierazi du salbuespena ezartzen duen legeak garbi azaldu behar duela eskudun agintariei eman zaien botere-ahalmenaren norainokoa eta botere hori erabiltzeko modua. Hau da, behar beste argitu behar du dena delako neurri horren helburu legitimoa kontuan hartuta, eta arbitrariotasunaren aurka behar bezala babesteko gizabanakoa”.

Zuzentarau horren 8. artikuluen 3. paragrafoak osasunari buruzko datuentzat arautzen du arestian ezarritakoa:

“1. idatz-zatia ez da aplikatuko datuen tratamendua osasun prebentzio edo diagnostikoetarako, osasun asistentzia edo tratamendu medikoetarako edo osasun zerbitzuen kudeaketarako beharrezkoa denean, betiere, datuen tratamendu hori osasun profesional baten eskutik egiten bada, legedi nazionalak edo eskumendun agintari nazionalak ezarritako arauak direla-eta sekretu profesionalaren pean dagoena, edo beste pertsonaren baten eskutik baina baita isilpeko antzeko eginbehar azpian dagoena ere”.

Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak datu medikoen babesari buruzko 1997ko otsailaren 13ko G(97) Gomendioaren 7. ataleko lehen paragrafoa, hain zuzen, datu-mota horren gainekoa da, eta horiek jakinarazteari buruz arau orokor hau ezarri du: *“Datu medikuak ez dira jakinaraziko, kapitulu honetan eta 12. kapituluaren adierazitako egoeretan izan ezik”.*

Atal horren hirugarren paragrafoak, guri dagokigun gaiari dagokionez, bi egoera xedatzen ditu titularraren baimenik gabe datu horiek jakinarazi ahal izateko:

“a) Legeak jakinarazi daitekeela xedatzen duenean eta ezinbestekoa denean gizarte demokratikoan, arrazoi hauengatik:

- i. osasun publikoa; edo*
- ii. segurtasun publikoarentzat benetako arriskua prebenitzea edo delitu jakinen bat zigortzea; edo*
- iii. beste interes publiko garrantzitsuren bat; edo*
- iv. beste batzuen eskubideak eta askatasunak babesteko*

b) jakinaraztea Legeak berak baimentzen duenean, xede

hauek izanik:

- i. datuen nagusia edo genetikoki senitartekoa dena babestea*
- ii. tratamenduak eragiten dion pertsonaren edo hirugarren baten berebiziko interesa babestea; edo*
- iii. Kontratu-betebehar jakinak betetzea; edo*
- iv. erreklamazio legala ezartzea, egikaritzea edo defendatzea”.*

Lehen aipatutako WP131 dokumentuan, halaber, honako hau xedatzen da:

“Salbuespen hori soilik izango da datuen tratamenduaren xede denean osasunaren gaineko zerbitzuak ematea, helburu hauetarako: prebenitzea, diagnostikoa egitea, helburu terapeutikoa denean edo suspertzea denean, bai eta osasun-zerbitzu horiek kudeatzea ere, esaterako, fakturazioa, kontabilitatea edo estatistikak egitea.

Salbuespen horrek ez du bere baitan hartzen zerbitzu horiek zuzenean emateko beharrezkoa ez den datuen tratamendua; esaterako, ikerketa medikua, gaixotasun-seguruen batengatik gastuak kobratzea edo isunak ezartzea helburu badu. Halaber, 8 artikuluko 3. paragrafoa ez da aplikatuko beste tratamendu batzuetan, esaterako, osasun publikoan eta gizarte-babesean, bereziki kalitatearen eta errentagarritasunaren bermeari dagokionez; ez eta gaixotasun-seguruen erregimenean prestazio eta zerbitzuen erreklamazioak konpontzeko erabiltzen diren prozeduretan ere. Izan ere, kasu horiek Zuzentarauaren 34. kontuan hartzekoan adierazten dira, 8. artikuluen 4. paragrafoari dagozkion adibide modura.

Europako xedapen horiek Datuen Babeserako Legeak ere jaso ditu. Honela dio Lege Organiko horren 7.6 artikulua:

“Aurreko idatz-zatietan xedatutakoa gorabehera, artikulua honen 2 eta 3. idatz-zatiek aipatu izaera pertsonaleko datuak tratatzeko modukoak izan daitezke, datu horiek tratatzea beharrezkoa denean prebentziorako edo medikuaren diagnostikoarentzat, osasun-laguntza emateko edo tratamendu medikoarentzat edo osasun-zerbitzuak kudeatzeko, baldin eta datu horiek tratatzen baditu lanbide-isiltasuna duen osasun-arloko profesional batek, edo lanbide-isiltasunaren pareko betebeharra duen beste pertsonaren batek.

Aurreko paragrafoak aipatzen dituen datuak tratatzeko modukoak izango dira, berebat, tratamendua beharrezkoa denean ukituaren edo beste pertsona baten berebiziko interesa babesteko, ukituak bere adostasuna emateko gaitasunik ez duenean arrazoi fisiko zein juridikoen ondorioz”.

Arau horri buruzko interpretazioa egin jurisprudentzia bidez. Izan ere, 2002ko maiatzaren 31ko epaian Auzitegi Nazionalak adierazi zuen 7.6 artikuluan xedatutako albuespena modu murriztailean interpretatu behar zela, eta kasuan kasu aztertu behar dela jakiteko ea tratamenduaren xedea benetan den prebenitzea eta diagnostikoa egitea. Horren haritik, beste helburu batzuetarako gauzatu bada datuen tratamendua (aztertu dugun kasuan, lan-absentismoa) eta helburuak “bigarren mailakotzat” har badaitezke, ez luke 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren babesik.

Duela gutxi berretsi da interpretazio murriztaile hori Auzitegi Gorenak 2009ko urriaren 20an emandako epaian, eta, aldi berean, bat datorrena 2007ko maiatzaren 24an Auzitegi Nazionalak emandako beste epai batekin. Honela dio:

“Historia klinikoari dagokionez, egia da Pazientearen Autonomiari buruzko Legearen 14. artikulua eta ondorengoek “paziente guztien dokumentazio klinikoaren ahalik bateratuen egotea” bultzatzen duela, osasun-laguntza egokia izan dadin. Baliteke modu horretan justifikatzea historia klinikoaren batasun-printzipioaz hitz egitea, aurkaratutako epaian adierazitakoak bezala. Hortaz, ezinbestekoa da azaltzea historia klinikoaren integrazioaren onuraduna paziente bera dela, lortu nahi duela paziente berari buruzko osasun-informazioa sakabanatuta ez egotea. Legearen 16. artikuluen 1. idatz-zatiak garbi dio “Historia klinikoaren paziente bera behar bezala atenditua izatea xede duen tresna bat dela”. Historia klinikoek, ordea, ez dute izaera unitarioa izan behar, inpugnatutako epaiak esaten duen moduan; historia klinikoaren helburua ez delako laneko arriskuen prebentziorako mutuen zeregina erraztea, eta are gutxiago enpresarioena erraztea. Egia da historia klinikoak osasun asistentzia hobea

ematea ahalbideratzen duela, baina hobekuntza horren arrazoa pazientearen ongizatea da, eta ez hirugarrenei lana aurrezteak (osasun arloko pertsonalari, administrazioari, enpresarioei eta abar. Eta horrek garrantzi handia du, pertsonen osasunari buruzko informazioa intimitaterako oinarritzko eskubideak babesten duen objektuaren atal bat delako; eta Konstituzio Auzitegiaren 196/2004 Epaia, eta beste batzuk ere bai, halaxe dela xedatu dute. Horrexegatik da osasun informazioarekiko konfidentzialtasuna halako hertsia eta pazienteari onurak ekar diezazkiekeelako bakarrik egin ahal izango dira salbuespenak, edo, halakorik badagokio, saihestu ezin diren maila goreneko interes orokorreko betekizunak badaude, eta behar bezala balioztatuta badaude; baina salbuespenen helburua ezingo da izan laneko arriskuen prebentzioko mutuen funtzionamendua hobetzea. Eta hori hala dela argi uzten du 41/2002 Legearen 18. artikulua, ezen pazienteari berari baino ez dio aitortzen historia klinikoa atzitzeko eskubidea; eta ez die eskubide hori hirugarrenei aitortzen; Legearen 19. artikulua xedatzen du "historia klinikoen zainketa aktiboa eta arduratsua egiteko mekanismoa" finkatu behar dela".

Labur esanda gai honetan konfidentzialtasun gorenak agintzen du, eta Laneko Arriskuen Prebentzioko Legean eta Pazientearen Autonomiari buruzko Legean ez da ikusten Fremap-ek, adostasunik gabe, egindako datu-komunikazioa legeren baten hala xedatu duelako egin denik. Horregatik baiesten da Estatuko Abokatuaren kasazio errekurtsuaren oinarrian dagoen arrazoa, eta, beraz, inpugnatutako epaia baliogabetu egin beharko da"

Bestalde, osasun-laguntzari buruz honako hau dio 8. artikulua: "Lagapenaren inguruan 11. artikulua xedatutakoa gorabehera, erakunde eta osasun-zentro publiko zein pribatuak eta kasuan kasuko profesionalak eurengana jotzen duten pertsonen edo eurek tratatu behar dituzten pertsonen osasunari buruzko izaera pertsonaleko datuak trata ditzakete, estatuko edo kasuan kasuko autonomia-erkidegoko osasunari buruzko legerian xedatutakoaren arabera".

Horrez gain, 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamenduaren 10.5 artikulua dio: "... ez da beharrezkoa izango interesatuak baimena ematea, osasunarekin zerikusia duten datu pertsonalak komunikatzeko osasun-sistema nazionala osatzen duten erakunde, zentro eta zerbitzuen artean, eta hori baita baliabide elektronikoen bidez ere, betiere datu horiek pertsonen osasun-arloko arreta eskaintzeko ematen badira; hori guztia osasun-sistema nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen V. kapituluaren xedatutakoaren arabera egin beharko da".

Azkenik, Lege Organikaren 11.2 f) artikulua ezarritakoaren arabera, osasunari buruzko datu jakinen lagapena legezkota da: "Osasunari buruzko izaera pertsonaleko datuak lagatzea beharrezkoa denean, fitxategira jotzea eskatzen duen larrialdiari aurre egiteko edo ikerketa epidemiologikoak egiteko, estatuko zein autonomia-erkidegoetako osasunari buruzko legerian ezarritakoaren arabera".

Hori guztia hala izanik, Bulego honen ustez, Datuen Babeserako Lege Organikaren 7.3 artikulua osasunari buruzko datuentzako berariazko araudia ezarri du, eta, horrenbestez, datu horiek interesdunaren baimenik gabe tratatu edo jakinarazi daitezke Legeren batek halaxe xedatzen duenean, eta, horretarako, interes orokorreko arrazoiak egotea ezinbestekoa da.

Argiago dio duela gutxiko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren 219/2008 txostenak: "*Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikaren 7.3 artikulua ezartzeak esan nahi du, espezialitate printzipioari helduta, **ezinezkoa dela Lege Organikaren 11.2 artikulua aurreikusten dituen tratamenduak legezkotzat jotzeko arrazoiak aplikatzea bertan aipatutako datuei; ondorioz, kasu jakin***

batzuetan baino ezin izango dira datu horien tratamendua eta lagapena gaitu: arau berezi batek halakorik jasotzen duenean ala lege orokorrak horrelako datuak berariaz aipatzen dituenen”.

Horrenbestez, 15/1999 Lege Organikoak osasunarekin zerikusia duten datuen tratamendua baimenduta dagoen kasuen zerrenda finkatua ezarri du, eta egoera hauetara mugatu du aukera hori:

- Interesatuak horretarako esanbidezko baimena ematen duenean.
- Lege-mailako arau batek hala xedatzen duenean, interes publikoko arrazoiak direla eta.
- Datu horiek tratatzea beharrezkoa denean prebentziorako edo medikuaren diagnostikoa egiteko, osasun-laguntza emateko edo tratamendu medikoentzat edo osasun-zerbitzuak kudeatzeko, Lege Organikoaren 7.6 artikuluan ezarritako mugak kontuan izanik; horrez gain, horiek modu murritzailan interpretatu behar dira, lehen adierazita bezala.
- Datuak tratatzea beharrezkoa denean kaltetuaren urgentzia oso larriari aurre egiteko.
- Datuak osasun-laguntzaren eremuan tratatzen direnean, osasun-zentroetara joaten diren pazienteei dagokienez, aplikatzekoa den sektoreko legedian xedatutako terminotan.
- Datuak jakinaraztea ezinbestekoa denean, egoera larri bati aurre egiteko edo azterketa epidemiologikoak egiteko.

V

Dopinari buruzko araudia

Espainiako Estatuko eremua

2006ko urriaren 21ean onartu zen 7/2006 Lege Organikoa, osasuna babestekoa eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzekoa.

Lege hori dopinaren aurka borroka egiteko planaren baitan onartu zen, eta ordura arte indarrean zegoen urriaren 15eko 10/1990 Legea, Kirolari buruzkoa, ordeztu zuen. Hori, halaber, Zerga, administrazio eta gizarte-arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 53/2002 Legearen bidez eguneratu zen. Goi-mailako dopina eta dopina oro har eragozteko du xede lege horrek, arriskutsua baita pertsonen osasunerako. Lege hori estatuko kirol-lehiaketa ofizialetan, eta, legeak adierazitako terminotan, nazioarteko kirol-jardueretan aplikatu da, bai eta estatuko federazio-lizentzia edo autonomia-erkidegoren baten federazio-lizentzia homologatua duten kirolariei ere, eta, halaber, kirol-jardueretan parte hartzen duten pertsonen, edozein dela parte hartzeko modua, Legeak adierazitako terminotan.

Lege horrek zenbait berrikuntza ekarri ditu, eta, besteak beste, hauek dira nabarmentzeko modukoak: Osasunaren eta Dopinaren Kontrol eta Jarraipenerako Batzordearen, eta Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziaren sortu ziren; estatuko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko lizentzia duten kirolariek Batzordeak zehaztutako kontrolak egiteko betebeharra dute, eta kontrol horiek lehiaketa barruan zein kanpoan egingo dira; kirolariaren datuen babesa, horretarako berariazko bermeak ezarri; zehapen-ahalmena erregulatu da; eta zuzenbide-bidez babesteko da osasun publikoa, kiroleko dopinarekin zerikusia duten jardueretan; eta, azkenik, aipatzeko modukoa da osasun-txartela erregulatu izana, izan ere, dokumentu publiko bat da, eta bertan jasota geratzen dira kirolariaren osasun- eta dopin-kontrolei eta azterketa

medikoei buruzko informazioa, bai eta erabilera terapeutikorako emandako baimenei eta laneko bajei buruzko informazioa ere.

Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren txostena, lege-aurreproiektuari buruzkoa

Datuak Babesteko Espainiako Agentziak 2005eko urriaren 25ean eman zuen txostena, aipatutako lege organikoaren aurreproiektuari buruzkoa eta datu pertsonalak babesteko araudiari egokitzeko moduari buruzkoa. Bertan jasotakoaren arabera, egokitzeko ezinbestekoa zen, haien ustez, aurreproiektuaren testuan zenbait aldaketa egitea, batik bat, Datuak Babesteko Lege Organikoari buruzko aipamen gehiago egin behar zirela adierazi zuten, oinarritzko eskubidearen baitako printzipioekin bat etortzeko. Horien artean, datuak biltzeko, tratatzeko edo lagatzeko helburuaren printzipioarekin eta proportzionaltasunaren printzipioarekin bat etortzeko, edo beharrezkoak ez diren datuak ezabatzeko eskubidearekin bat etortzeko. Gomendioen artean, besteak beste, txostenak zioen araudian berariaz adierazi behar zela ezinbestekoa dela kirolariei informatzea haien datuak zertarako erabiltzen diren, eta haiei jakinaraztea datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezereztzeko edo datuen aurka egiteko eskubidea dutela. Haiek emandako gomendio gehienak erantsi zituzten lege-proiektuan.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak adierazi zuen proposatutako legearen aldekoa zela, eta bereziki ahalegindu zen Lege Organiko bidez erregula zedin kiroleko dopinaren aurkako borroka, oinarritzko eskubideei eragiten dielako, eta, hortaz, Espainiako Konstituzioaren 81. artikulua hala agintzen duelako.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren ustez, halaber, kirolarien eskubideak bermatzeko babes-araudia hartzen zuen bere baitan legearen aurreproiektuak. Haren ustez, datuen konfidentzialtasunari, datuak uzteari eta jakinarazteari buruzko araudia errespetatzen zuen, datuen babesa bateragarria zelako kiroleko dopina prebenitzeko eta dopinaren aurka borroka egiteko interes orokorreko helburuekin, legedian adierazitakoekin, alegia.

Estatu Kontseiluaren txostena, 2006ko otsailaren 2koa (31/2006 irizpnea)

Estatu Kontseiluak, 31/2006 irizpenean, xehetasunez aztertu zuen lege organikoaren aurreproiektua, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziari igorri zion datu pertsonalen babesari zegokion zatia.

Europako eta nazioarteko esparrua

Kontuan izan behar dira, halaber, European eta nazioartean gai honi buruz dauden lege-bitartekoak ere.

Europar Batasuna aitzindari izan zen dopinaren aurkako borrokan. Horren haritik, gogora ekarri behar dira gai honi buruz Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak emandako ebazpenak. hain zuzen, atleten dopinari buruzko Ebazpena (67) 12; kiroleko dopinari buruzko Gomendioa (79) 8; kiroleko dopinaren aurkako Europako gutunari buruzko Gomendioa (84) 19; eta lehiaketatik kanpo eta aurretik ohartarazi gabe, dopinaren aurkako kontrolak ezartzeari buruzko Gomendioa (88) 12.

Gerora, dopinaren aurka borroka egiteko Europako Kontseiluaren hitzarmena (1989ko azaroaren 16koa, 135. zk.) onartu zen. Hamar urteren buruan, 1999an, Kiroleko Dopinari buruzko Munduko Konferentzia izan zen, eta, urte berean,

Dopinaren Aurkako Munduko Agentzia eratu eta jarri zen abian. 2003. urtean, erakunde horrek Dopinaren Aurkako Munduko Kodea osatu zuten, bai eta kode horren osagarri diren nazioarteko estandarrak ere. Kode hori dopinik gabeko kirolean parte hartzeko kirolariek duten eskubidea babesteko sortu zen, baina ez du indar loteslerik nazioarteko esparru publikoan. Egoera hori aldatu egin zen bere baitan hartzen dituen printzipioak Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioan ezarri zirenean, Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundeak (UNESCO) onartua 2005eko urriaren 19an eta Espainiak berretsia 2006ko irailaren 26an.

Horrela, kiroleko dopinaren aurkako nazioarteko araudiak eta jardunak pixkanaka bateratzen hasi ziren.

Horiei dagokionez, nabarmena da datu pertsonalen babesaren gaiari buruzko interes berezia dagoela. Hori hala dela erakusten dute, batetik, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak datu pertsonalen babeserako Nazioarteko Araudia osatu izanak– 2.0 bertsioa 2009ko ekainaren 1ean jarri zen indarrean; haren xede nagusia, araudiaren hitzaurrekoan adierazitakoaren arabera, kiroleko dopinaren aurkako jardueretan parte hartzen duten erakundeek eta pertsonak erabiltzen dituzten datuak babesteko mekanismoak egokiak, behar bestekoak eta eraginkorrak izango direla bermatzea– eta Datuen Babeserako Taldeak emandako irizpenak (3/2008 eta 4/2009). Ebazpen horiek, hain zuzen, Nazioarteko Araudi horren 29. artikuluari buruzkoak eta, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziari eta dopinaren aurkako borrokarekin zerikusia duten erakundeei dagokionez, dopinaren aurkako borrokaren testuinguruan intimitatearekin zerikusia duten beste alderdi batzuei buruzkoak dira. Ebazpen horietan adierazten da Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eginiko Kodearen eta Araudiaren zenbait alderdi ez dira oraindik ere bateragarriak 95/46/EE Zuzentarauarekin. Eragozpen handiena zen, hain zuzen, ADAMS datu-baseko (bereziki, kaltetuen kategoriakoak) datu pertsonalen tratamenduaren helburuak (ondorengo lagapenak barne) ez daudela behar beste zehaztuta ez Kodean, ez Araudian, batez ere, kirolarien osasunari buruzko datuen tratamenduarenak eta arau-hauste penal eta administratiboari buruzko datuen tratamenduarenak.

VI

Aurreproiektuaren analisisa. Aldez aurreko alderdiak

Esparru subjektiboa eta objektiboa

Lehen ere esan dugu, proposatutako legearen alderdi jakin bat aztertuko duela bulego honek, dagokiguna baino ez. Hau da, legeak bere baitan hartzen dituen datuen tratamenduak bat datozen datu pertsonalak babesteko oinarritzko eskubidearen ardatz nagusia osatzen duten bermeekin eta printzipioekin.

Nolanahi ere, ezinbestekoa da, kasu honetan, eten bat egitea, txikia bada ere, Legearen esparruan.

Helarazi zaigun legearen aurreproiektuaren 1. artikuluan, aztertzen ari garen legean dopatzea zer den definitzen da, eta, horrez gain, legearen esparru objektiboa eta subjektiboa zehazten da. Bi esparru horiek zehaztea, objektiboa eta subjektiboa, gure ustez, funtsezkoa da, aztertzeko legeak zertan eragiten dion datuen babesari buruzko gaiari.

Esparru objektiboari dagokionez, honako hau dio 1. artikuluauren laugarren paragrafoak: *“Legearen eremu material orokorra, oro har, Euskal Autonomia*

Erkidegoan garatutako kirol-jarduerek osatzen dute, federatua izan edo ez izan. Aurrekoa hala izanik ere, ez zaie legeak dioena ezarriko estatuko lehiaketa ofizialei eta nazioarteko kirol-lehiaketei, azken horiek nazioarteko kirol-federazioek edo kasuan kasuko erakunde olinpikoak edo paraolimpikoak antolatzen dituenen.

Artikulua idazteko moduaren arabera, badirudi idatzi dutenek asmoa zela EAEn egin diren kirol-jarduera orori aplikatzea, lehiaketakoa izan edo ez izan, eta federatua izan edo ez izan, arauak berak adierazitako kasuei izan ezik. Horrenbestez, hori ez bada helburua, komeni da atal hori berridaztea, eta benetako esanahia argitzea.

Ondorio handiagoak ditu, gure ustez, esparru subjektiboaren erregulazioak.

Legearen aplikazio-eremu subjektibo orokorrak federazio-lizentzia duten kirolari guztiak hartzen ditu bere baitan, unibertsitatekoa zein eskolakoa izan, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen diren kirol-lehiaketetan parte hartzeko baimena ematen duen federazio-lizentzia dutenak. Horiez gain, Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen, lehiaketan aritzen eta bizi diren kirolariak ere hartzen ditu bere baitan.

Kirolariei aplikatzeaz gain, legearen 1.5 artikulua dio *“kirola Euskadin egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiei ere ezarriko zaie legea, nahiz eta kirol-jarduera hori aldi batez baino egin ez”*. Nahiz eta paragrafo horren idazketa ez den behar bezain argia, badirudi pertsona fisiko eta juridikoei egiten diola erreferentzia, hau da, kirolaria izan ez eta kirolarien entrenamenduan eta jardueran zuzeneko erantzukizuna beren gain hartzen dutenei.

Gero, lege-xedapen horrek berak, 6. paragrafoan, *“kirolaria”* kontzeptuaren definizioa ematen du, eta lege horretan kirolariak honako hauek direla dio: *“edozein kirol egiten duen pertsona oro izango da kirolaria, nahiz eta federatuta ez egon edo kirol-lehiaketetan parte hartu ez”*.

Kirolariaren kontzeptua halakoa izanik, eta helarazitako testuan definitutako moduaren arabera, legearen esparru subjektiboaren baitan dago edozein kirol egiten duen pertsona oro, edozein dela adina, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dena, nahiz aldi batez baino bizi ez, federatua izan edo ez izan, edo lehiaketan aritu edo aritu ez.

Hala ere, legearen 1. artikulutik atera dugun ondorio hori, ez dago garbi gainerako lege-testuan. Izan ere, testuan aurrera egin ahala, zehaztu egiten dira nork bete behar duen legea, horietako bakoitzak dituen betebeharren esparrua eta ez betetzeak eragiten dituen ondorioak. Horren haritik beretik, hona hemen zenbait adibide. Dopinaren alorrean arau-hausteengatik kirolariei ezarriko zaizkien zehapen larriak edo oso larriak izango dira, legearen arabera, federazio-lizentzia etetea edo kentzea aldi jakin baterako eta, hala badagokio, isuna (25. artikulua), eta diru-zehapenak bakarrik ezarriko dira garatutako kirol-jarduerarekin lotuta diru-sarrerak eskuratzen dituenen kirolariak (30.1 artikulua). Hortaz, federatu gabeko kirolariek egindako arau-hausteak zigorrik gabe geratu lirateke legean.

Horrenbestez, gure ustez, ezinbestekoa da gehiago zehaztea legearen esparrua, eta, hala, aurreproiektua idatzi zutenek nahi ez lituzketen interpretazioak eragotzi. Baina, horrezaz gain, ezinbestekoagoa da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren ustez, dopinik gabeko kirola bermatzeko eta kirol-jardueraren bat egiten dutenen osasuna prebenitzeko, hori baita legearen xedea, bateragarri egitea dopinaren aurkako borroka eta kirolarien eta prozesuan esku hartzen duten gainerako pertsonen oinarritzko eskubide eta askatasunekiko errespetua –Legearen zioen azalpenean

adierazia. Izan ere, Datuen Babeserako Lege Organikoak ezarritako printzipioak eta bermeak aplikatzeko –besteak beste, kalitatearen printzipioa (4. artikulua), legean adierazitako datu-tratamenduaren proportzionaltasunari dagokionez–, legeak bere baitan zer pertsona hartzen dituen jakin behar da.

Horren haritik, gogoan izan behar da testuaren 2. artikulua xedatzen duena. Hau da, Kirolariek, lehiaketetan ari direla nahiz horietatik kanpora, dopinaren aurkako kontrolak egin beharko dituzte hala eskatzen dietenean eskumena duten agintariek, eta beste horrenbeste gertatuko da azterketa, egiaztatze eta ikerketa osagarriekin ere. Betebehar hori legearen esparru subjektiboak bere baitan hartzen dituen kirolari guztientzat da (13.1 artikulua).

Hori hala izanik, eta araua aztertzen hasteko, ez dirudi gaingaitasun lukeenik proportzionaltasun-alderdia, Euskadin bizi den edozein haurri, kirola egiten duenari, esaterako, futboleko edo atletismoan aritzen denari katean, dopin-kontrola egiteak eta legeak adierazten dituen datu pertsonalak tratatzeak, nahiz eta proposatutako araudiaren helburua autonomia-erkidego honetan kirola egiten dutenen osasuna zaintzea ere izan.

Horren hari beretik, oso deigarria egin zaigu 1.1 artikulua testua, legean arautzen denerako dopatzea zer den zehazten duena. Izan ere, legeak dio kirol-espirtuaren aurkakoa dela, baina ez du adierazten, ordea, dopatzea osasunerako arriskutsua dela, eta legeak xedatzen dituen datu pertsonalen tratamendua justifikatzeko argudioa, kirolarien osasuna ezinbestez zaindu beharra dela dio.

Horregatik guztiagatik, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren gomendioa da 1. artikulua berridaztea, eta argiago azaltzea haren benetako norainokoa. Izan ere, lehen adierazi bezala, erabakigarria da baloratzeko araua bateragarria ote den parte hartzen duten pertsonen oinarritzko eskubideekin, batez ere, intimitaterako eskubidearekin (Espainiako Konstituzioaren 18.1 artikulua) eta datu pertsonalen babeserako eskubidearekin (Espainiako Konstituzioaren 18.4 artikulua).

Datuak babesteari buruzko printzipioak

Araudiaren eremuari buruzko gogoeta horiek egin eta gero, ezinbestekoa iruditu zaigu berriro esatea kirolarien osasun-datuaren tratamendu jakinak salbuesteko legeak gaitu nahi duen araua kirolari horien baimena izatea bada, errespetatu egin behar ditu pertsona guztiek duten datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubideak bere baitan hartzen dituen printzipioak eta bermeak; izan ere, bestela, arau-maila ez da nahikoa tratamendu horiek egin daitezen gaitzeko.

Espainiako Konstituzioaren 18.4 artikulua xedatzen duen oinarritzko eskubide horrek bere baitan hartzen duen printzipioetako batek garrantzi berezia du, aurreproiektu honetan datuen kalitate-printzipioa aztertzeko. Printzipio hori Datuen Babeserako Lege Organikoaren 4. artikuluan xedatzen da, eta, haren arabera, datu pertsonalak bildu eta tratatuko dira bakar-bakarrik “datu horiek egoki eta bidezkoak izateaz gain, gehiegizkoak ez direnean, datu horiek zein esparrutan eta zein xederekin lortu eta halakoei begira” (4.1 artikulua), eta zein xederekin bildu eta ezin izango dira erabili xede horrekin bateraezinak (xede horiek ez direnak) diren xedeetarako (4.2 artikulua), eta debekatuta dago “lege-iruzurrean, legearen aurka edo zilegi ez den moduan” datuak biltzea (4.7 artikulua).

Legezkotasun-printzipio horrek, halaber, xedatzen du datuak “zehatzak eta eguneratuak izango dira, ukituak une bakoitzean duen egoerarekin benetan bat etor daitezen” (4.3 artikulua),

Eta, hortaz, “erregistratutako izaera pertsonaleko datuak zehaztugabeak badira, oso-osoan zein zati batean, edo osagabeak, datu horiek ezereztu eta, ofizioz, halakoen ordezkasun kasuko datuak erregistratuko dira, zuzenduta edo osatuta, 16. artikulua ukituei aitortutako ahalmenei kalterik egin gabe” (4.4 artikulua).

Horrenbestez, batetik helburuak eta bestetik datuak tratatuko dituen jardun legitimoak baldintzatuko dute datuen bilketa horien tratamendua, eta horiek proportzionalak izango dira lortu nahi den helburuarekiko. Beraz, horregatik dio lege-xedapen horrek datuak ezereztu egingo direla “jaso edo erregistratu ziren xederako beharrezko edo egoki ez direnean”, eta gaineratzen du “ez dira gordeko, interesduna nor den jakitea ahalbidetzeko moduan, datu horiek jaso edo erregistratzeko xedeak zein izan eta xede horiek betetzeko behar den denbora baino gehiago” (4.5 artikulua).

Kalitatearen printzipioaz gain, helburu legitimoa eta proportzionala den aldetik, errespetatu egin behar dira, halaber, interesdunaren adostasun-printzipioa (Datu Pertsonalen Babeserako Legearen 6. artikulua) eta informazio-eskubidea datuak biltzean (Datu Pertsonalen Babeserako Legearen 5. artikulua).

Datuen babeserako oinarritzko eskubidearen oinarria baldin bada, hain zuzen, norberaren informazioari buruz erabakitzeke ahalmena izatea, begi-bistakoa da funtsezko elementuetako bat dela pertsona horren zalantzarik gabeko adostasuna izatea, tratamendua legitimoa izan dadin. Hala ere, adostasuna ezeztatu daiteke horretarako arrazoi justifikatua izan eta ezeztatze horrek atzeraeraginezko ondorerik ez duenean (Datu Pertsonalen Babeserako Legearen 6. artikulua).

Interesatuaren adostasuna, beraz, ezinbesteko baldintza da haren datu pertsonalak tratatu ahal izateko, “salbu eta legeak beste zerbaitekin xedatzen duenean. Datu Pertsonalen Babeserako Legearen 3. artikuluan dago jasota definizioa: *“Interesdunaren borondate-adierazpen aske, zalantzarik gabe, zehatz eta arrazoitua, bera ukitzen duten datu pertsonalak tratatzeko adostasuna emateko”*. Horregatik guztiagatik, datu pertsonalak eskatzen zaizkien interesdunari aurretiaz eta esanbidez informazio zehatza eta zalantzarik gabea eman beharko zaie, ondoko hauen inguruan: fitxategi batean gordeko diren edo tratatu egingo diren; tratamenduaren arduraduna nor den; egingo zaizkien galderei erantzutea nahitaezkoa edo borondatezkoa den; datuak lortzearen ondorioak edo datu horiek ez ematearen ondorioak; dagozkion eskubideak; eta, batez ere, datu horiek biltzearen helburu zehatzak zein diren (Datu Pertsonalen Babeserako Legearen 5. artikulua).

Informazioa jaso ondoren, interesdunak baimena eman dezake edo ez. Baimena emanaz gero, esanbidezkoa izan behar du beti, baldin eta osasunari buruzko datuak badira eta Datuen Babeserako Lege Organikoaren 7.3 artikulua bidez babestutako datuak badira.

Bestalde, datu pertsonalak beste hirugarren bati komunikatu ahal izateko, Datuen Babeserako Lege Organikoaren arabera, kaltetuak adostasuna eman behar du (11.1 artikulua). Hala ere, arau orokor hori salbuetsi daiteke, eta halako kasu zehatzak jasota daude Datuen Babeserako Lege Organikoan. Besteak beste, adostasuna ez da beharrezkoa izango legeak baimentzen duenean lagapena (11.2.a artikulua), baina ezinbestekoa izango da interesatua behar bezala informatzea, 5. artikulua xedatutakoari jarraiki. Nolanahi ere, badira modu berezian

babestutako datuak, eta Datuen Babeserako Lege Organikoak arau askoz ere zorrotzagoak ezarri ditu datu horien tratamendurako, eta, bereziki, kirolarien osasunarekin zerikusia duten datuentzat. Lehen adierazi ditugu zein kasu jakinetan tratatu daitezkeen datu horiek.

Azkenik, eskumen berdinak edo gai berdinei buruzko eskumenak dituzten administrazio publikoen artean egiten bada lagapena, datu-lagapen horietarako ez da beharrezkoa datu horien titularraren adostasuna, baldin eta modu berezian babestutako datuak ez badira, 21. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Interesduna adingabea denean adostasun horrek bete behar dituen baldintzei dagokionez, gogora ekarri behar da, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak, datu pertsonalen babeserako Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duenak, bereizi egiten dituela 14 urte baino gutxiago dituztenak eta 14 urte baino gehiago dituztenak. Hamalau urtetik beherako kasuan, gurasoen edo tutoreen oniritzia behar izango da. Hamalau urte baino gehiago dituztenen kasuan, arau orokor modura, horretarako baimena eman dezakete, non eta legeak ez duen eskatzen, datu horiek utzi ahal izateko, guraso-agintea dutenek edo tutoretza dutenek laguntzea. Halaber, datuak jaso ahal izateko . Horrez gain, adostasuna eskatzean, adin txikikooi igortzen zaien informazioan erraz ulertzeko moduko hizkera erabiliko da, eta esanbidez aipatu beharko da artikulua honetan xedatzen dena. Horrezaz gain, ziurtatu egin behar da adin txikikoaren adina benetan hori dela, eta, hala behar duenean, gurasoek, tutoreek edo legezko ordezkariak emandako baimena benetakoa dela.

Azken batean, aztertu egin behar da eskatzen den adostasun horrek betetzen dituen, kasuz kasu, Datuen Babeserako Lege Organikoak eta hura garatzeko Erregelamenduak xedatzen dituztenak, kontuan hartuta bildutako datu-mota, datu horien titularrak, eta datu horiek laga eta jasoko dituztenak.

Printzipio horiek, azaletik azaldu ditugunak, ezinbestez errespetatu behar ditu proposatzen den araudiak, bat etortzeko datu pertsonalen babeserako oinarrizko eskubidearekin, horiek baitira oinarrizko eskubidearen funtsezko elementuak.

Ohar orokorrak

Behin hori esanda, eta helarazitako legearen aurreproiektuari dagokionez, kapitulu bat, seigarrena, dopinarekin zerikusia duten datuen araubideari buruzkoa da. Hala ere, nabaria da testu ia osoan etengabe daudela datu pertsonalen tratamenduaren arloko jardueri buruzko xedapenak, eta, esan dugun bezala, osasunarekin zerikusia dutenak, zenbaitetan. Eta, beraz, datu pertsonalen babeserako araudiari buruz ere askotan egiten dira aipamenak.

Horren haritik beretik, testuan adierazten diren xedapenek datu pertsonalen tratamenduari eragiten diote, batzuetan berariaz eta beste batzuetan inplizituki.

Hortaz, batik bat alderdi hauei buruzko aipamena egin behar da, inolako zalantzarik gabe eragina baitute oinarrizko eskubidean.

- Kokalekuari buruzko datuak
- Tratamendu terapeutikoak
- Erregistro-liburua
- Erabilera terapeutikorako baimenak Kirol-baja

- Informazio-sistema
- Osasun-txartela
- Dopinari buruzko datuen araubidea
- Osasun-kontrolak
- Zehapen-araubidea.

VII Kokalekuari buruzko datuak

Kokalekuari buruzko datuei dagokienez, ezinbestez eman behar direla xedatzen du proiektuaren 13.6 artikulua. Honela dio:

“Lehen paragrafoan adierazitako kontrolak egin eta ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen, kirolariek, taldeek, entrenatzaileek, zuzendariak eta kirolariak inguruan dituen gainerako pertsonen kirolariak non egon ohi diren jakiteko datuak eman behar dituzte –erregelamendu bidez ezarritako eran–, dopin-kontrolak egin ahal izateko”.

Xedapen horrek bere baitan hartzen ditu artikulua horren lehen paragrafoa eta bigarrena. Horien arabera, eta guri gehien interesatzen zaigunez, Legearen aplikazio-eremu subjektiboak bere baitan hartzen dituen kirolariek kontrolak egiteko betebeharra dute, lehiaketan zein lehiaketatik kanpo, hala agintzen badute Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak eta gainerako erakunde publikoen. Lehiaketatik kanpoko kontrolak ustekabeen edo alde aurretik noiz egingo diren jakinarazita egin daitezke, eta, beraz, kirolariek non egon ohi diren jakiteko datuak eman behar dituzte, "kontrolak egin eta ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen".

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostenak ere aitortzen duenez, betebeharrak ezin da neurrigabekotzat eta justifikazio gabekotzat hartu. Izan ere, betebeharrak gure kirol-antolamenduan ezarrita dago Kirolaren Legearen 58. artikulua aldatu baitzen, hain zuzen, Zerga, administrazio eta gizarte-arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 53/2002 Legearen bidez, eta “doktrinak ezbaian jarri zuen betebeharrak ezartzeko **araua**”.

Horrenbestez, txostenak dio:

*“Paragrafo honetan, nabarmendu beharrekoa da elementu positiboa delako, non egon ohi diren jakiteko datuak emateko betebeharrak gainditu egiten duela -aurreproiektuaren testuan jaso baita- onartu zeneko arauaren nolakotasunari buruzko kritika formalenak. Horrez gain, kirolariaren askatasun-esparrua gutxiago mugatzea dakar, betiereko betebeharrak izateari utzi baitio (dopinari buruzko araudiarekin bat ote zetorren zalantza jarri zuten **kalifikatiboak eman baitzituzten**, araudiarekin lortu nahi diren helburuekiko eta dopina prebenitzeko eta zigortzeko bitartekoekiko neurrigabekotzat hartu baitzuten) eta, hala, betebeharrak mugatzen da “kirolariak non egon ohi diren jakinaraztera, dopin-kontrolak egin ahal izateko”.*

kirolariek, taldeek, entrenatzaileek eta zuzendariak dute informazio hori emateko betebeharra, eta, prozedura eta modua, berriz, “erregelamendu bidez ezarritako eran”. Hortaz, legearen testuak ez duenez zehazten kirolariak non dauden jakinarazteko egun ezarrita dagoen betebeharra –

egindako interpretazioaren arabera-, xedapen horren nolakotasuna eta eraginkortasuna erregelamendu-arauaren esku gera daiteke, eta, are gehiago, baliteke horretarako sistema bat ere ez aldatzea. Oinarrizko eskubideen alorrean, helburuen eta bitartekoen artean proportzionaltasuna beharrezkoa denez, konstituzioak hala ezartzen duelako (Konstituzio Auzitegiak ere askotan berretsi du, besteak beste, 150/1991, 55/1996 eta 136/1999 sententzietan), komeni da hori aintzat hartzea erregelamendua garatzerakoan. Beraz, non egon ohi diren jakinarazteko betebeharrari uko ez egitea erabat instrumentala da, "kontrolak egiteko eta horiek eraginkorrak izateko". Izan ere, hala xedatzen du osasuna babesteko eta dopinaren aurka borroka egiteko Lege Organikoaren aurreproiektuaren 5.3 artikulua, eta helburu horretarako baliatzea bakarrik justifikatzen duenak".

Horren haritik beretik, Osasun Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurka Borrokatzeko Lege Organikoaren aurreproiektuari buruz, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak 2005eko urriaren 25ean eman zuen txostenaren VI oinarriak dio:

"Nabarmena da kontrol horiek egin ahal izateko (ustekabez edo aurretik jakinarazita), ezinbestekoa dela kirolaria non dagoen jakiteko datuak edukitzea, noizean behin eta ustekabeaz kontrolak egin ahal izateko. Horrenbestez, kirolariak egon ohi diren tokiari buruzko datuak bilduko ez balira, kiroleko dopinaren aurkako araudia ez litzateke eraginkorra izango, eta Espainiak berretsi duen nazioarteko lege-bitarteko batek ezarritakoak eragindakoa da zuzenean.

Horregatik guztiagatik, kirolaria non egon ohi den jakiteko datuak emateko betebeharra, dagoeneko Kirolaren Legean egun jasota, bat dator 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin".

Iritzi bera adierazi zuen Datuak Babesteko Espainiako Agentziak 552/2008 txostenean, dopina kontrolatzeko prozesuak eta baimendutako analisi-laboreak, eta dopinari aurrea hartzeko eta kirolean osasuna babesteko neurriak erregulatzeko Errege Dekretuaren proiektuari buruzkoan (apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretua eman da gerora).

Orain artean esandakoaz gain, nabarmentzeko modukoa da doktrina hoberenak etengabe adierazten duela "dopinaren kontrako gakoa ez datza lehiaketan kontrol gehiago egitean, baizik eta lehiaketatik kanpo gehiago egitean, eta, bereziki, ustekabeaz egiten direnak. Izan ere, dopinaren aurkako borroka agerian utzi du dopin-jarduerak, gehienetan, lehiaketak baino lehen izaten direla".

Hau da azaldutako guztiaren ondorioa: kirolariak non egon ohi diren jakiteko datuak ematea neurri proportzionala da, eta ez du datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubidea urratzen.

Hala eta guztiz ere, nabaria da ez dagoela zehaztuta nork duen datuak emateko betebeharra, izan ere...*"kirolariak inguruan dituen gainerako pertsonak"*, eta adierazpen hori ez da ageri 7/2006 Lege Organikoan.

Are gehiago, lege hori garatzeko erregelamenduak betebeharrak horri dagokionez ezarritakoari jarraiki, kirolariak betebeharrak hori entrenatzailearen, ordezkariaren edo beste pertsona baten esku utz dezake.

Horrekin esan nahi dugu, helburua baldin bada inguruan dituen gainerako pertsona horiek kirolariari betebeharrak hori betetzen erraztea, komeni da kirolariak berak izendatutako pertsonak izatea.

Horrez gain, Kirolariaren eta haren inguruaren erantzukizuna xedatzen du 23. artikulua, eta haren 4. paragrafoak ezarritakoari jarraiki, non egon ohi diren jakiteko datuekiko erantzukizuna soilik dute kirolariek, entrenatzaileek, zuzendariak eta kirolaria atxikita dagoen kirol-erakundeak.

VIII Tratamendu terapeutikoak

Aurreproiektuaren 13. artikuluen 7. paragrafoak hau ezartzen du:

"Kirolariek, beren entrenatzaileak, medikuek eta gainerako osasun-langileak, bai eta kirol-klubetako eta kirol-erakundeetako zuzendariak ere, eta kirolariak inguruan dituen gainerako pertsonak dopin-kontrolak egiterakoan adierazi egin behar dute zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren kirolariak, nor diren horien erantzule eta tratamenduak zer hartzen duen bere baitan, baldin eta kirolariek berriaz adierazten ez badute ez dutela baimena ematen horren berri emateko. Era berean, eskatzen zaienean, gaitzak eta gaitzen tratamendua egiaztatzeko ere eman beharko dute informazioa".

Xedapen horren eta aurreproiektuaren beste xedapen batzuen arteko lotura ezarri behar da.

Esaterako, 13. artikuluen 8. paragrafoaren arebera, kirolariak ez badu tratamenduari buruzko informaziorik ematen edo ez badu informatzeko baimena ematen, arau-haustetzat hartuko da, tratamendu medikoei buruz informatzeko betebeharrak ez betetzeagatik.

23.5 artikulua dio kirolariek, haien entrenatzaileak, medikuek, osasungintzako langileak edo zuzendaritzako kideak eta kirol-erakundeak eta kirolarien inguruko gainerako pertsonak erantzukizuna izango dutela organo eskudunei kirolariaren gaixotasunei buruzko informazioa, tratamendu terapeutikoei buruzkoa eta tratamenduaren helmen eta erantzuleari buruzkoa emateko betebeharrak arautzen duten xedapenak ez betetzeagatik, baldin eta kirolariak datu horiek erabiltzeko baimena eman badu.

Azkenik, 24.1 e) artikulua arau-hauste oso larritzat hartzen du Lege honen 23.4 artikuluan aipatzen diren tratamendu terapeutikoei buruzko informazioaren gaineko betebeharrak ez betetzea (gure ustez, akats bat dago eta 23.5 artikuluan ezarritakoa izan behar da kontuan).

Bulego honek ez behar adina garbi bereizten aztertu dugun arauak adostasunari edo baimenari egotzi zaion funtzioa.

Hau da, naiz eta xedapen horrek indarrean jartzen duen interesatuaren adostasuna (hala ere, kontrako zentzuan adierazten da "salbu eta legeak beste zerbait xedatzen duenean"), aurreproiektuaren 13. artikuluen 8. paragrafoak adostasun horren ezaugarriak indargabetu egiten ditu, oinarrizko eskubidearen ikuspegitik ("ematen duen baimena, askatasunez, zalantzarik gabe, zehaztasunez eta informazioa izanda"), batez ere, "askatasunez" terminoari dagokionez. Izan ere, paragrafo hori lotu egiten du tratamendu horiei buruzko betebeharrak ez betetzeagatik arau-hausteekin. Kontuan izan behar baita, kirolariak tratamendu horiei buruz informatzeko betebeharra duela edo beste batzuek informa dezaten baimena ematekoa.

Horrez gain, bada beste alderdi bat ere. Datuen Babeserako Lege Organikoaren 7.3 artikuluen arabera, osasun-datuei buruzko adostasuna (eta zalantzarik gabe halakoa da) "berariazkoa" izango da.

Egoera halakoa izanik, Bulego honen ustez beti ere, are eta konplexuago egiten da, 24.1 e) artikuluan 23.5 artikuluari buruz xedatzen denari erreparatuz gero.

Izan ere, azken horretan [uste dugu 24.1 e) artikulua horri egiten diola erreferentzia, nahiz eta 23.4 aipatu], badirudi erantzukizuna egoteko baldintzat hartzen duela, eta, hortaz, 24.1e) artikuluan xedatutako betetzeko, informazioaren titularrak "datu horiek erabiltzeko baimena eman" izana.

Hau da, datu pertsonalen babeserako araudiarekin ondoen egokituko litzatekeen irtenbidea (eta posible da, xedapenak kontuan izanik, batez ere 24.1 e) artikuluen "baimena eman" adierazpena ikusita) hau litzateke: datuen titularraren adostasuna (baimena) beharrezkotzat hartzen duena, araudi horretan xedatutako tratamenduetarako.

Irtenbide hori bera hautatu du estatuko legediak, eta, bulego honen ustez, askoz ere argigarriagoa da. Izan ere, aurreproiektuaren 13.8 artikuluen antzeko xedapena jasotzeaz gain, 7/2006 Lege Organikoaren 7.1 "in fine" artikulua, gero bereziki aztertuko dugun liburu bat edukitzeko betebeharra ezartzen du, bertan, tratamendu medikoei buruzkoak jasotzeko, baldin eta datuen titularrek "inskribatze baimena ematen" badute ("beti ere").

Aurreko ondorio horrek ez dio eragozpenik eragiten Lege Organikoaren 14.1 e) artikuluen idazketari, bertan jasotakoaren arabera arau-hauste oso larria da "tratamendu medikoei buruzko informazioari dagozkion betebeharrak ez betetzea...", izan ere, xedapen horrek 13.4 artikuluen aipamena egiten du, amaieran zera baitio: "baldin eta kirolariak datu horiek erabiltzeko baimena eman badu".

Aurreko ondorio horiek, bulego honen ustez, indar handiago hartzen dute gaiari buruzko xedapenak dituzten Errege Dekretu hauen bidez: arestian aipatutako 641/2009 Errege Dekretua, eta urtarrilaren 25eko 63/2008 Errege Dekretua, dopinaren alorrean diziplina-zehapenak ezartzeko eta berrikusteko prozedura arautzen duena.

Datuen titularraren adostasunari edo baimenari buruzko ohar berberak egin behar dira gai honi buruz ere "gaitzak eta gaitzen tratamendua egiaztatze ere eman beharko dute informazioa".

Aztertzen ari garen gaiari dagokionez, azkenik, gogora ekarri behar da datuen kalitatea dela datuen babeserako oinarriko printzipioetako bat dela; honela dio Datuen Babeserako Lege Organikoaren 4.1 artikulua: "Izaera pertsonaleko datuak tratatzeko bil daitezke bakarrik, bai eta tratamendu horren mende

jartzeko ere, datu horiek egoki eta bidezkoak izateaz gain, gehiegizkoak ez direnean, datu horiek zein esparrutan eta zein xederekin lortu eta halakoei begira. Gainera, esparru eta xedeak zehatzak, argiak eta legitimoak izan beharko dira". Hortaz, oso litekeena da kirolariak duen edozein tratamendu mediko ez izatea eragina aurreproiektuak dituen xede eta helburuetan.

IX Erregistro-liburua

Aurreproiektuaren 15. artikulua hainbat edukitako xedapenak ditu, eta lehendabiziko paragrafoetan xedatzen du liburu horri buruzkoak.

Hortaz, honela dio lehen paragrafoak:

Erregelamendu bidez zehaztuko diren klubek eta gainontzeko kirol-erakundeek Dopinaren aurkako Euskal Agentzian behar bezala erregistratutako liburu bat izan eta bete beharko dute nahitaez. Liburu horren osotasuna bermatuko da, eta bertan kirolariei beren zuzendaritzapean agindu dizkieten tratamendu terapeutikoak jaso beharko dituzte, baldin eta kirolariek inskripzio hori egitea onartzen badute. Liburu hori osasun-agiritzat hartuko da datuen babesaren ondorioetarako.

Nabarmendu beharreko lehen alderdia eta nagusia da, aurreko atalean aztertutako tratamendu terapeutikoei buruz, ezinbestekoa dela datu horien titularren baimena (adostasuna).

Lehen paragrafoan berariaz adierazten da ezinbestekoa dela, eta artikulua horren laugarren paragrafoan xedatutakoarekin indarra hartzen du, bertan ezartzen baita osasun-jarduera bakoitza kirolariaren sinadurarekin berretsi beharko dela, hala, jarduera hori egin dela eta liburuan idazpena egitea baimendu duela berresteko. Hortaz, Datuen Babeserako Lege Organikoaren 7.3 artikuluan adierazten den "esanbidez onartu" aipatzen da.

Halaber, dopin-kontrolak egiterakoan zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren esateko baimenari buruz lehen esan ez bezala, bulego honen ustez, ez dagokio inolako diziplinazko ondoriorik tratamendu terapeutiko horiek inskribatzeko baimena ez bada ematen edo uko egiten bazaio.

Kontuan izan behar da Datuen Babeserako Legea fitxategi-mota orori, eskuz egindakoa zein automatizatua, aplikatzekoa dela, eta, hortaz, liburu horiek edukitzeak esan nahi du datu pertsonalak erabiliko direla eta datuen babeserako alorrean indarrean dauden arauak bete behar dituztela, aurreproiektuaren 13. atalean berariaz jasotakoari jarraiki (ez da osagarritzat hartuko, nahiz eta jasota dagoen artikuluen izenburuak horrela dioen).

Hori hala izanik, eta liburu horiek datu pertsonalen fitxategiak direnez Datuen Babeserako Lege Organikoaren terminotan, liburu horiek kasuan kasuko arduradunek sortu eta dagokion Bulegoan inskribatu behar dituzte, bai eta Dopinaren Aurkako Agentziak horretarako propio eratuko duen erregistroan ere.

Horrek esan nahi du, datuak babestearen ikuspegitik, erabaki egin behar dela zer funtzio dagokion Dopinaren Aurkako Agentzia horri. Gainera, kontuan izan behar da bigarren paragrafoak ezartzen duela agentziak osatu edo ordeztu egin ahal izango duela erregistro-liburu hori datu-baseen prozedura zentralizatuen bidez.

Jarduera horiek, halaber, datuak tratatu beharra eragin dezakete, eta horren ardura Dopinaren Aurrakako Agentziak izango du.

Azkenik, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak ez du inolako eragozpenik hona ekartzeko Datuak Babesteko Espainiako Agentziak adierazitakoa Lege Organikoaren aurreproiektuari buruzko txostenean, hain zuzen, 7/2006 Lege Organikoak jasotzen duena antzeko artikuluen gainean. Txostenean jasotakoaren arabera

“Nolanahi ere, aurreproiektuak berak, gerora aztertuko ditugun arauak dagokienez, Legeak jasotako datuen tratamenduan konfidentzialtasunari buruz dio 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa bete behar dela.

Horrela, bada, datuak gordeko dira, hasiera batean, bakar-bakarrik tratatu ziren xederako egokiak direnean, eta ezereztu egin behar dira xedea betetakoan, Lege Organikoaren 4.5 artikulua ezarritakoari jarraiki. Esaldi horrek bereziki garrantzia du Dopinaren Aurrakako Espainiako Agentziak liburuetan datuak jaso behar ditueneko eta erabilera terapeutikorako baimenei buruzko datuak tratatu behar ditueneko. Eginbehar horiek ez ditu beteko kirolariak kirola egiteari utzi eta egon daitezkeen arau-hausteen preskripzio-epea igaro ondoren, aurreproiektuaren 22.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Halaber, ezinbestekoa da kasuan kasuko fitxategiari buruz jakinarazteko eginbeharra betetzea, eta, Dopinaren Aurrakako Espainiako Agentziaren kasuan, fitxategia sor dadin onartzea.

Bestalde, behar-beharrezkoa da goi-mailako segurtasun-neurriak ezartzea fitxategiekiko, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuan xedatutakoak, lehen ere txosten honetan bertan adierazi bezala.

Hala ere, nahiz eta datuen tratamendurako baimena eduki, horren arduradunak erantzun egin behar die datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideei.

X

Erabilera terapeutikorako baimenak eta kirol-bajak

Doktrina hoberenaren ustez, “funtsezko gaia” edo “dopinaren aurrakako borrokaren barruko arazo transzendentalak” da aztertuko dugun gaia. Honela dio Aurreproiektuaren Zioen Azalpenak: *“Erabilera terapeutikorako baimenen bidez gertatzen ari diren iruzur garrantzitsuei aurre egiten saiatu da legea; izan ere, gero eta garbiago ikusten da dopinari bide emateko aukera bihurtzen ari dela erabilera terapeutikoa”.*

Hori hala izanik, 15. artikuluen 8. paragrafoak dio:

“Erabilera terapeutikorako baimenen kopia bat —lege honen esparruan emandakoena—, substantzia jakin batzuk erabili edo hartu izanari buruzko adierazpenak eta dagozkion dokumentazio osagarriak Dopinaren aurrakako Euskal Agentziara bidali beharko dira, erregistratu daitezen”.

Halaber, 12.1 w) artikuluan jasotakoari jarraiki, funtzio hau dagokio Dopinaren Aurrakako Euskal Agentziari:

“Erabilera terapeutikorako baimenak ematea edo ukatzea, erabilera terapeutikorako baimenen euskal batzordearen bidez”.

Bestalde, 15. artikulua 14. paragrafoak xedatutakoaren arabera, erabilera terapeutikorako baimenak emateko edo ukatzeko erabakiaren aurkako inpugnazioa aurkeztu ahal izango zaio Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren zuzendariari. Eta artikulua horren beraren 12. paragrafoak dio Erabilera Terapeutikorako Baimenen Euskal Batzordeak berrikusiko ditu erabilera terapeutikoko baimenak edo adierazpenak behar bezala lortu edo aplikatzen diren.

Aurreproiektuak bere baitan hartzen dituen xedapenak betetzeko beharrezkoak da datu pertsonalak tratatzea, eta, beraz, alderdi nagusia da, askotan bezala eta zalantzarik gabe osasunari buruzko datuak baitira, ezinbestekoa den edo ez datu horien titularraren adostasuna izatea.

Hortaz, eta erregistro-liburuari dagokionez, 15. artikulua 5. paragrafoak xedatzen du:

“Dopatze gisa har daitekeen edozein tratamendu terapeutikotan, nahiz eta tratamenduak behar den baimena izan, erregelamendu bidez arautuko den baimen informatuko prozedura bete beharko da, eta erregistro-liburuan horren kopia bat gordeko da”.

Nahiz eta Konstituzio Auzitegiaren doktrinak askotan adierazitakoaren arabera ezarri “oinarrizko eskubide baten mugak ezartzea, hala esan izan dugu beste batzuetan, ez da egoera egokia legearen eta lege-maila ez duten arauen arteko lankidetzarako. Izan ere, lankidetzaz-aurkera hori kasu jakinetarako izango da, esate baterako, egoerak hala eskatzen duelako, eta lege-maila ez duten arauak egokienak direlako oinarrizko eskubideak erabiltze aldera lege-araudiaren bigarren mailako alderdiak eta alderdi osagarriak ezartzeko, beti ere, jakina, dagokion legeari jarraiki; uztailaren 24ko Konstituzio Auzitegiaren 83/1984, F 4; azaroaren 6ko 137/1986, F 3; irailaren 21eko 254/1994 F5)”. Hortaz, agian horrexegatik, bulego honen ustez, paragrafo horren bidez datu horien titularraren adostasuna beharrezkoa izatea lortu nahi da.

Horrenbestez, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioaren II. eranskinean, –UNESCOk 2005eko urriaren 19an onartu zuen eta Espainiak 2006ko irailaren 26an berretsi (BOE, 2007ko otsailaren 16)– ezarri ziren erabilera terapeutikorako baimenak emateko arauak, eta honela dio 5.1 artikulua:

“Eskatzaileak idatzizko adostasuna eman behar du, Erabilera Terapeutikorako Baimenen Batzordeko kideei helarazteko eskaerari buruzko informazio guztiak, eta, beharrezkoa bada, beste mediku edo zientzialari independente aditu batzuei helarazteko, edo erabilera terapeutikorako baimenak kudeatzen, berrikusten edo apelatzen aritzen diren behar beste langileri helarazteko.

Aditu independenteen eta kanpokoan laguntza beharrezkoa izanez gero, eskaeraren xehetasun guztiak jakinaraziko dira, baina esan gabe nor den kirolariaren zaintzan parte hartzen duen medikua. Eskatzaileak, halaber, idatzizko adostasuna eman behar du Erabilera Terapeutikorako Baimenen Batzordeak hartutako erabakiak dopinaren aurkako beste erakunde batzuei banatzeko, kodean ezarritakoaren arabera”.

Ondorio horretarako lagungarria izan da azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoaren 7.4 artikulua buruz egindako garapena, hain zuzen, apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretuaren bidez egina. Dopatzea kontrolatzeko prozesuak eta baimendutako analisi-laboreak arautzen ditu, eta kirolean dopatzea prebenitzeko eta osasuna babesteko neurri osagarriak ezartzen ditu

Errege Dekretu horrek, eta erregistro-liburuen formatu eta inskripzioari buruzko 16.3 artikulua dio:

“Erregistro-liburuko idazpenetan, kirolari bati agindu edo aplikatuko zaion prozedura mediko eta dopatzetzat hartzen diren, edo xede mediko izan eta dagokion baimen terapeutikoa duen prozedurei buruzkoak badira, atal edo eranskin bat gehitu beharko da, kirolariak baimen informatua eman duela adierazteko.

Errege Dekretu horren beraren 21.1 artikulua, halaber, erabilera terapeutikorako baimena lortzeko eskaerei buruz dio: *“Erabilera terapeutikorako baimenak lortzeko eskaerak kirolariak aurkeztuko ditu, Kirol Kontseilu Goreneko presidenteak emandako ebazpenaren bidez ezarritako inprimakiari jarraiki. Bertan, beharrezko datu pertsonalak jasoko dira, bai eta kirolari eta osasunari buruzko datuak ere, eta, hala badagokio, erabilera terapeutikorako lehendik egindako eskaerak eta emandakoak edo ezeztutakoak, eta, horrez gain, kirolariaren baimena bere datu pertsonalak eta klinikoak erabilera terapeutikorako baimenen batzordeko kideeiedo hautatzen diren adituei jakinarazteko eta horiek tratatzeko”.*

Erabaki horrekin bat dator lehen ere aipatu dugun Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 552/2008 txostena; bertan jasotakoaren arabera:

“Horrenbestez, erabilera terapeutikoei buruzko datuak tratatzeko, dela erabilera terapeutikorako baimenen batzordeak, direla beste hirugarren independente batzuk (hau da, txosten medikoak egiteko beharrezkoak diren datuak tratatzeko) edo dela Dopinaren Aurkako Espainiako Agentziak, 15/1999 Lege Organikoaren 7.3 artikulua babesa izango du, kirolariaren adostasuna beharrezkoa baita, eta, halaber, 2005eko urriaren 19ko Hitzarmenak ezarritako prozedurari jarraitu behar dio”.

Kirolariak eta haien ingurukoak erabilera terapeutikorako baimenei buruz informatzeko betebeharra dute, eta horiek ez betetzeak eragin diezazkieketen erantzukizunei dagokienez, tratamendu terapeutikoei buruz lehen ere adierazitako oharrak egin daitezke. Izan ere, 23. artikulua bi paragrafotan bereizten baditu ere tratamendu terapeutikoei eta baimenei buruzko erantzukizunak, hurrenez hurren, betebeharrak horien gaineko arau-hauste motak bateratu xedatzen ditu 24.1 e) artikulua.

Ohar horiek berberak aplika daitezke beharrezkoak diren tratamenduak egiteko adostasunei edo baimenei dagokienez, hain zuzen, “berrikusteko erabilera terapeutikoko baimenak edo adierazpenak behar bezala lortu edo aplikatzen diren”, aurreproiektuaren 15. artikuluko 12. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

Erabilera terapeutikorako baimenekin lotuta, “... erabilera terapeutikorako baimenen alorrean izaten diren iruzurrei aurre egiteko borrokan...”, zioen azalpenean jasotakoaren arabera, nahiz eta edukiari dagokion araubidea desberdina izan, aurreproiektuaren 16. artikuluan kirol-baja izenekoak ere zehazten du, eta “egoera horren bidez, kirolariak erabateko askatasuna izango du tratamendu terapeutikoa jasotzeko, beste edozein pertsona egiten duen gisan, baina tarte horretan ezin izango du lehiatu”.

Datuak babesteari dagokionez, erabilera terapeutikorako baimenen alorrean dagoen araubidea oso antzekoa da, Dopinaren Aurkako Agentzian erregistratzeko beharrendu gainean. Batez ere, erregistro horren nolakotasun “eratzailari” dagokionez; hortaz, baimenari buruzko oharrak oso antzekoak dira.

Hori hala izanik ere, bien arteko aldeak nabarmenak dira, erabilera terapeutikorako baimenek eta kirol-bajek eragiten dituzten ondorioei dagokienez, batik bat,

lehiaketaren alorrean.

Hau da, bien artean funtsezko desberdintasun bat dago: erabilera terapeutikorako baimenetan lehiaketan parte har daiteke, kirol-bajan ez.

Bestalde, borondatezkoa izatea nabarmenagoa da kirol-bajen kasuan.

Hortaz, batetik, aurreproiektuaren 16.1 artikulua dio: “kirol-federazioek... baita lege hau aplikatzekoa zaien gainontzeko kirol-erakundeek ere, beren araudietan kirol-bajaren egoera aurreikusi ahal izango dute...”.

Halaber, bigarren paragrafoak ezarritakoaren arabera, kirol-bajaren egoera dagokion dopinaren aurkako batzordeak “eman” beharko du, eta, beraz, interesatuak eskatu behar du.

Alderdi hori jasota egoteari esker, datuen tratamenduaren gainean sor daitezkeen arazo asko eragozten dira, baldin eta behar bezala informatzen bazaio tratamendu horiei buruz.

Eta bestetik, datu hori kirol-txartelean erantsi behar da (gai hori aztertzean emango ditugu azalpenak), eta, ezarritako xedea betetze aldera, ezinbestekoa da Dopinaren Aurkako Euskal Agentzian erregistratzea.

Paragrafo horretan adierazitakoaren arabera, hau da xedea: “... ustekabeen egindako dopin-kontrolako zehapenak eragozteko...”; xede hori da, beraz, “helburua” datuen babeserako ikuspegitik.

Paragrafo horrekin lotuta, zortzigarrenak dio: “dopin-kontrol baten analisiaren emaitza kontrakoa bada, baina kirolariak Dopinaren Aurkako Euskal Agentzian behar bezala erregistratutako kirol-baja badu, emaitza negatibotzat hartuko du dopinaren aurkako batzordeak eta ez da diziiplina- edo zehapen-espedientea irekiko”.

Hori hala izanik, kontuan izan behar da kirol-baja izateak ez duela esan nahi ustekabeko kontrola ezin dela egin (lehiaketaren unean egiten dena bai, izan ere, bajan egonda ezin da lehian aritu). Dena dela, kontua da merezi ote duen erregistratzea edo kirolariaren nahiaren baitan utzi beharko liratekeen, kirolariak berak esango baitu bajan dagoela, ustekabeko kontrola egiten diotenean.

Zioen azalpenean honako hau xedatzen da osasun-kontrolei buruz: “... 7/2006 Lege Organikoaren irizpide berbera kontuan izanik, legean, kontzeptu horrek jarduera-multzo hau hartzen du bere baitan: kirol-jarduerak osasunari eragin diezazkiokeen ondorioak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek egokitzen hartzen dituzten jarduerak, bai eta dopinaren eta osasunaren alorrean legeak ezarritako betebeharrak kirolariek bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere. Horrez gain, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak zehaztuko du, lege hau erregelamendu bidez garatzeko arauak ezarritako moduan, zein kasutan izango den egokia kirolari bati lizentzia kentzea osasuna dela eta. Estatuko legerian ez bezala, osasun-kontrol horiek ez dira sartzen lan-harremanen esparruaren barruan. Lege honek kirol-erakunde orori ematen dio eskumena osasun-kontrolak egiteko erakundeko kirolariei, lan-harremana izan edo ez izan. Atzerapauso nabarmena izango litzateke federazioei eta gainontzeko kirol-erakundeek beren kirolariei osasun-kontrolak egiteko aukera ukatzea, lan-harremanik ez egotea arrazoitzen hartuta.”

Deskripzio hori aintzat hartuta, kontrol horiei buruzko arauak ezartzen dira aurreproiektuaren 17. artikuluan 4. paragrafoan eta ondorengoetan.

Horrenbestez, bulego honen ustez, derrigorrezkoa da horiek betetzea (nahiz eta inolako zehapenezko ondorio jakinik eragiten ez duen horiei uko egitea, baldin eta ez badira sartzen 24.1 a) artikuluan ezarritakoen artean *“dopin-kontrolak egiteari uko egitea edo aurka egitea... eta dopinaren kontrol- eta zigortze-prozeduretan beste edozein jarduera gauzatzeko egindako eskakizunak eragozten duten gainerako jokabideak”*).

Horrezaz gain, eta Konstituzio Auzitegiaren doktrinak betebeharrak horretan eragin dezakeenaz gain (Konstituzio Auzitegiaren 25/2005 sententzia eta 206/2007 sententzia), Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren ustez, adierazi behar dugu kirolarien osasuna babesteko jardueren ezaugarriak eta baldintzak araudia garatzean erabakiko direla.

Aurreproiektuan ez da inolako oharrik egiten baldintza eta ezaugarri horiei buruz, ez eta kontrol horien nondik norakoei buruz ere. Modu abstraktuan definitzen dira kontrolak (*“Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek egokitzen hartzen dituzten jarduerak”*), Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak egin beharreko planifikazioa izan ezik (18.1 artikulua).

Ez da inolako tratamendurik xedatzen, kontrol horiek egin ondoren lortzen diren duen tratamenduari dagokionez. Soilik adierazten da osasun-txartelean erantsi behar direla.

Datu horiekiko goi-mailako segurtasun-neurriak ezarri behar direla xedatzen da (egokia, gure ustez), eta 18.1 artikuluan adierazitako planifikazioari dagokionez, aurrerago aztertuko dugun osasun-txartelari buruzko artikuluan xedatuta dago.

Hona hemen ondorioa: kontrol horietatik sortzen diren datu pertsonalen tratamenduari buruzkoak ez daude behar beste zehaztuta, hau da, zehaztugabetasun-maila oso handia da.

XI

Informazio-sistema eta osasun-txartela

Informazio-sistema

Aurreproiektuaren 43. artikulua, prebentzio-neurriei buruzko V. kapituluaren barruan, kiroleko dopinari buruzko informazio-sistema esaten zaiona arautzen du. Zioen azalpenean adierazi bezala, hau da abiapuntuko ideia: *“Ez da komeni dopinaren aurka kontrolen eta zigorren bidez egitea, eta prebentzioa alde batera uztea”*.

Hori dela eta, azalpen horretan bertan adierazten da *“... legeak prebentzioaren arloan zenbait neurri hartu beharko direla zehazten du. Neurri horien artean ikerketa-lanak sartzen dira, eta ikerketaren arloko programa horiek aurrera eramateko modua izateko, legean informazioa emateko bide batzuk zehazten dira, hain zuzen ere, eragile publiko eta pribatuei ikerketako programak aurrera eramatean erabiltzeko modukoak izan daitezkeen datuak helarazteko.*

Horren baitan, 43. artikuluan 1. paragrafoak xedatzen du euskal agentziak kirolaren eremuko dopinari buruzko informazio-sistema bat ezarri behar duela, informazioa eskuragarri egongo dela bermatuko duena eta kirolaren alorrean

eskumena duten administrazio publikoen arteko komunikazioa bermatuko duena, eta artikulua horren bigarren paragrafoan ezarritako xedeak eta helburuak aintzat hartuta, adierazten diren talde guztiei dagokienez.

Hirugarren paragrafoak, bulego honen ustez, informazio-sistema horren edukari buruzkoak xedatzen ditu. Eduki hori, hain zuzen, adierazitako taldeei jakinarazi nahi dena da, horietako bakoitzaren beharren arabera.

Hortaz, informazio-sistemak eduki hauek izango ditu: dopina eragiteko gai diren substantziak eta kiroleko metodo debekatuak, abian jarritako diziplina-espedienteetako datuak eta ezarritako zehapenak, hauteman diren substantziak adierazita, eta laborategietan egindako analisiak, kirol-biztanleriari buruzko datuak, giza baliabide eta baliabide materialei buruzkoak, egindako jarduerak, farmazia eta osasun-produktuak, finantzaketa eta lortutako emaitzak, bai eta kirolarien espektatibak eta iritziak ere. Era berean, kirolarien osasuna babesteko egiten diren kontrolak eta gainerako probak ezagutzeko aukera emango du.

Seigarren paragrafoak ezarritakoaren arabera, informazio-sistema bere erabiltzaileen eskueran egongo da, ..."datuen babesaren arloan indarrean dauden xedapenak ahalbidetzen dituzten eskuratzeko- eta zabaltzeko-baldintzetan".

Zortzigarren paragrafoak ezarritakoari jarraiki, kasuan kasuko erakunde publikoek eta pribatuek behar adina datu emango dituzte informazio-sistema horretarako, sistema eduki eta garatu ahal izateko.

Halaber, 6. paragrafoan ezarritakoaren berariazko xedapen modura, 8. in fine artikulua ezarritakoaren arabera, administrazio publikoek eskubidea izango dute informazio-sistema osatzen duten datuak eskuratzeko eta edukitzeko, baina, betiere, beren eskumenekoak diren eginkizunetarako behar duten neurrian.

Azkenik, 9. paragrafoak, 6. paragrafoan ezarritakoak baino esparru zabalagoa hartzen du, eta dio datuen tratamendua eta datuak uztea datu pertsonalak babesteko alorrean aplikagarri den legediari atxikita egongo direla. Guri dagokigun alorrari dagokionez, hona hemen oharrak:

Guri dagokigunez, informazio-sistema kontzeptua abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 5.2 m) artikuluan dago jasota definizioa.

Honela dio: "Datu pertsonalak tratatzeko erabiltzen diren fitxategi, tratamendu, programa, euskarri eta, hala badagokio, ekipoen multzoa".

Hortaz, definizio hori eta lehen paragrafoaren edukia kontuan hartuta, 8. paragrafoan ezarritako betebeharrei dagokienez, sistema ezartzeak berekin dakar datu pertsonalak tratatzea (edozein dela datu horiek eskuratzeko, gero aztertuko ditugunak).

Hori hala izanik, lehenik eta behin adierazi behar dugu sistema hori egoteak ezinbestez eskatzen duela beste fitxategi bat, gutxienez, sortzea. Horren ardura Dopinarekin Aurkako Euskal Agentziak izango du, eta, beraz, Datuen Babeserako Lege Organikoaren 20. artikulua fitxategiak sortzeko ezarritakoa bete behar da.

Bigarren paragrafoan ezarritako xede eta helburuei dagokienez, bulego honen ustez, zehaztugabetasun-maila oso handia da, xede eta helburu horiek garrantzi handia baitute sistema horretako datuak eskuratu ahal izateko legitimazioan.

Hirugarren paragrafoan ezarritako edukari dagokionez, eta estatuko

Legearen 45.2 artikuluan ezarritakoaren oso antzekoa denez, doktrinak azken horri buruz egindako iruzkinak azaltzea merezi du, eta, iruzkinak aintzat hartuta, esan dezakegu *“estatistika-txosten iraunkorren ezaugarriak dituen egitura bat dela, uztartuta duena, aldi berean, berariazko esku-liburu bat, kirol-jardueraren alorrean ikuspegi guztietatik osasuna babesteari buruzkoa (esaterako, dopinaren aurkako borrokaren ikuspegitik), bai prebentzioari dagokionez, kontrolari, zigorri...”*.

Hona hemen horren gainean esandakoa: *“... txalotzeko moduko sistema horrek ezin du ezkutatu eduki programatikoen gehiegizko asmoa, eta horrek eraginkortasuna lausotzeaz gain, funtzionamendu bera ere lausotzea eragin dezake. Hortaz, programa aldetiko printzipio horiek abian jarriko dituen Errege Dekretuak izan behar du sistemaren benetako oinarria.*

Eta hain zuzen Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren txostenak, Errege Dekretu bidezko aurreproiektukoari buruzkoan, agerian utzi zuen *“aurreproiektuak ezinbestez garatu behar zituela Lege Organikoaren 45. artikulutik 48. artikulura bitartekoak, eraginkortasunez ezarri behar zuela informazio-sistemaren edukia, nork erabili ahal izango duen informazio-sistema eta Lege Organiko bidez nori ematen zaion ahalmena sistemak bere baitan hartzen dituen datuak eskuratzeko. Izan ere, Lege Organikoak, aldi berean, alderdi hauekin zerikusia duten arau jakin batzuk ematen ditu: zehapen-prozedurei buruzko datuen hedapena, osasun-alorreko langileek datuak eskuratzeko ahalmena eta sistemaren antolamendua, Osasun Sistema Nazionalaren Informazio Sistemarekiko”*.

Hirugarren paragrafoaren idazketa halakoa denez, eta 5 a paragrafoak ezartzen duenez gerora definituko dituela eta normalizatuko dituela datuei buruzkoak bai eta informazioa bateratzeko beharrezkoak izango diren adierazleak eta baldintzak – Datuak Babesteko Euskal Bulegoak parte hartuko du horretan–, aurreko horrekin guztiarekin esan nahi da adi egon behar dela behar beste egokitzapen egiteko, oinarritzko eskubideari dagokionez.

Hirugarren paragrafo horri dagokionez, askoz ere zehatzagoa da datuen tratamenduari buruzko aipamen hau: *“abian jarritako diziiplina-espedienteetako datuak eta ezarritako zehapenak”*. Izan ere, aurreproiektuaren 43. artikulua 7. paragrafoan ezarritakoa bete behar da datu-mota horiek tratatzeko. Honela dio, hain zuzen: *“Abian jarritako diziiplina- eta zehapen-espedienteetako datuak – laborategietan hautemandako substantziei eta egindako analisiei buruzkoak– espediente horiekin zerikusia duten organo eskudunen esku egongo dira, eta soilik haientzat izango dira eskuragarri. Beste erakunde, pertsona edo entitate batzuek datu horiek eskuratu nahi izanez gero, espedientearen parte hartzen duten guzti-guztien datu pertsonalak bereizi behar dira beti aurretik.*

Xedapen horretan jasotakoa eta Lege Organikoaren 45.4 artikulua 7. paragrafoan ezarritakoa bat datoz, eta, zalantzarik gabe, bat egin du aurreproiektuari buruz Datuak Babesteko Espainiako Agentziak egindako txostenean adierazitakoarekin. Izan ere, proposatzen zen behin betiko idazketak bere baitan hartzen duen paragrafo hori bera eranstea. Hortaz, bulego honen ustez, erabat baliozkoak dira Datuak babesteko Espainiako Agentziak horri buruz egindako oharak.

Paragrafo honek agerian uzten duenez, eta sistemaren edukiari buruzko zehaztugabetasun-maila oso handia denez, ondorio modura esan behar dugu benetan garrantzitsuena ez dela, bulego honi interesatzen zaion alderdia kontuan hartuta, edukia (edo izango duen edukia) baizik eta eduki horren eskuragarritasuna.

Eta alderdi horretatik, aurreproiektuak dio eskudun organoek izango dutela eskura (7. paragrafoa), eta 6. paragrafoak, berriz, "... datuen babesaren arloan indarrean dauden xedapenak ahalbidetzen dituzten eskuratze- eta zabaltze-baldintzetan". Beraz, ez dira oinarritzko eskubidea erregulatzen duten xedapenak urratzen, baina ikusi egin beharko da nola zehazten den dagokion arau-garapenean.

Azkenik, sistemari egin beharreko ekarpenei dagokienez, bulego honen iritziz, alderdirik nabarmenena zehaztugabetasuna da, eta hori hala dela agerian dago 8. paragrafoan jasotakoari erreparatuta; hain zuzen, honela dio: "kasuan kasuko entitate publikoek eta pribatuek behar adina datu emango dituzte informazio-sistema horretarako, sistema eduki eta garatu ahal izateko". Edukiei buruzkoak ez zehazteaz gain, ez du zehazten zein subjektuk duen betebeharra, ezta nola bete dezakeen betebeharra ere".

Nolanahi ere, aurreproiektuaren artikulua horren azken paragrafoa zehatzagoa da, datuen tratamendua eta datuak uztea, datu pertsonalak babesteko alorrean aplikagarri den legediari atxikita egongo direla ezartzen baitu.

Kirolariaren osasun-txartela

Aurreproiektuaren 46. artikuluan arautzen dira kirolariaren osasun-txartelari buruzkoak.

Artikulu honen 1. paragrafoak jasotako definizioaren arabera, dokumentu publiko bat da, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak federazio- eta unibertsitate-lizentzia duten kirolariei ematen diena hasiera batean, eta, aplikazio-eremua handituz gero, erregelamenduz zehaztuko diren beste kirolari-kolektibo batzuei ere emango diena.

46. artikulua 2. paragrafoak dio helburu bikoitza duela txartelak, eta, bulego honen ustez, eta hori da kontuan izan beharreko funtsezko alderdia, guri interesatzen zaigun ikuspegitik.

Lehen helburua laguntzekoa da, argi eta garbi "*...kirolariak eta haren zaintzaz arduratzen den osasun-arloko langileak ahalik eta informazio kliniko onena izatea, min edo gaixotasunen bat sendatzeko zer tratamendu aplikatu behar den erabakitzean*".

Bigarrena, berriz, hau da: "*...dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa izatea*".

Funtsezko alderdia dela esan dugu, beti ere bulego honen ustez, arauak xedatzen dituen alderdi desberdinak helburu bikoitz horren baitan egituratzen direlako.

Horrenbestez, txartel horren edukiari dagokionez, bereizi egiten dela dirudi (hori da 3. paragrafoaren hitzez hitzeko edukiak adierazten duena behintzat), lehen aipatu dugun helburu bikoitzari jarraiki.

Horrenbestez, batetik, "*Osasun-txartelak honako hauei guztiei buruzko informazioa jasoko du: azterketa medikoak, osasun- eta dopin-kontrolak –kasuan kasuko lizentzia eskuratzen duen unetik kirolariari egiten zaizkionak–, haien emaitzak eta medikuak hartzen dituen erabakiak, hain zuzen ere, kirolariaren osasun-laguntza egokia izan dadin kontuan hartu beharrekoak...*".

Eta bestetik, halaber, "*kirolariak eskuratutako erabilera terapeutikoko baimenei buruzko datuak, eta kirolariaren lan-bajei eta/edo kirol-bajei buruzkoak*". Ez da zehazten berariaz inolako helbururik.

Dualtasun hori bera adierazten dute 4. eta 5. paragrafoek, txartel horrek bere baitan hartzen dituen datuen erabilerari dagokionez. Hala, 4. paragrafoaren

helburua, antza, informazio klinikoa edukitzea da, erabakitzeko zer tratamendu aplikatu behar den kirolariaren mina sendatzeko; eta 5. paragrafoarena, berriz, dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa izatea.

Aurreproiektuaren artikulua horri dagokionez, kontuan izan behar da aurreproiektuaren bigarren xedapen gehigarria. Hain zuzen, honela dio: *“Eusko Jaurlaritzak, estatuarekin batera, formula batzuk ezarri ahal izango ditu – lankidetzarako kasuan kasuko bitartekoen bidez–, elkarren artean informazioa trukatzeko duen sistema bat ezartzeko, Kirolariaren Osasun Txartela emateko, onartzeko edo egiteko...”*.

Halaber, aurreproiektuaren zazpigarren xedapen gehigarriak xedatutakoaren arabera, *“Federazio- eta unibertsitate-lizentziak euskarri elektronikoetan txertatu ahal izango dira, kirolariaren osasun-txartela edukitzeko ere aukera ematen dutenetan. Hala ere, norberaren banakotasunari eutsiko dio txartelak eta behar beste segurtasun-neurri izango ditu, Kirolariaren Osasun Txartel horri dagozkion datuak nolanahi eskura ez daitezen”*.

Eta azken xedapenetan bigarrenak honako hau dio: *“Azterketa medikoetako datuak eta kirolarien osasunarekin zerikusia duten bestelako informazioak kirolariaren osasun-txartelean erantsiko dira, erregelamendu bidez ezarritako moduan”*.

Lege-aurreproiektuaren 46. artikulua eta kirolarien osasun-txartelari buruzko erreferentzia egiten duten gainerako xedapenak aztertu ondoren, ezinbestekoa da alderdi hauek adieraztea:

46. artikulua ez du zehazten nork izango duen osasun-txartela. Txartela berez emango zaien kirolariak arautzen ditu, baina xedatutakoaren arabera, halaber, erregelamendu bidez beste kirolari batzuei ere eman **diezaieke**.

Horrez gain, arauan ez da argi zehazten txartela derrigorrekoa den kirolari horientzat, nahiz eta araua osorik irakurriz gero, badirudi hala dela.

Kirolariaren osasun-txartela da beraz, baina laguntza kliniko egokia ematea ez den beste helburu bat ere badu. 46. artikulua arabera, *“osasun-txartelak bere baitan dituen **datuak soilik erabili ahal izango ditu, hasiera batean**, kirolariak berak, eta, haren baimena edukiz gero, haren zaintzaz arduratzen diren osasun-langileak, osasun-laguntza egokia emate aldera osasun-arloko legediak haren baimenik gabe datuak eskuratzeko aukera ematen duen kasuetan **izan ezik**”* (46.4 artikulua); eta gero honela dio: *“**Dopin-kontrolaren alorrean, ezinezkoa da** kirolarien datuak eskuratzeko, haien baimenik gabe”, eta gaineratzen du: “**Hala eta guztiz ere, baimena emateari uko eginez gero**, Legearen 24.1.c) artikuluan kontrolerako edo informaziorako ezarritako beste edozein betebeharrak ez betetzeagatik ezartzen den **zehapen berbera** ezarriko da”* (46.5 artikulua).

Aipatutako erregulazioaren arabera, txartel horrek, nahiz eta izena hori duen – osasun-txartela-, helburu bikoitza du: laguntza ematea eta dopina kontrolatzea. Txartel horrek kirolariaren informazio klinikoa jasoko du, kirolariak berak datu horiek eskuratu ahal izango ditu, eta, haren baimena edukiz gero, haren zaintzaz arduratzen diren osasun-alorreko langileek ere bai, osasun-alorreko legediak haren baimena izatea beharrezkoa ez dela xedatzen duen kasuetan izan ezik, eta, horrezaz gain, dopina kontrolatzeko ere erabiliko da, horretarako kirolariaren *“baimena”* beharrezkoa izango bada ere. Hala ere, *“baimen”* horrek gutxi du interesatuaren adierazpen asketik, nahiz hala behar duela xedatu Datuen Babeserako Lege Organikoak. Izan ere, baimena emateari uko egiten badio, zehapena ezarriko zaio. Halaber, aurreproiektuan mugatu egiten da zer informazio erantsiko den txartelean, bai eta nork eman behar duen ere (kirolariak; haren zaintzaz

arduratzen diren osasun-alorreko langileak; diziplina-organo eskudunek eta kasuan kasuko lizentzia eman dioten taldeek).

Baina aurreproiektuak ez du mugatzen, ordea, nork eskura ditzakeen osasun-txartelak bere baitan dituen datuak, nork erabil ditzakeen eta informazio horren erabilera bera.

Horrenbestez, nahiz eta zalantzarik ez dagoen dopinarena urkako borroka eta kirolarien osasun-babesaren bermea bat datozela -Konstituzioaren 43. artikuluan jasoa-, aurreproiektuak osasun-txartelari buruz bere baitan hartzen duen erregulazioak, orain arte adierazitako terminotan, zalantza handiak eragiten ditu, erabakitzeke bat ote datorren datuak babesteko araudiarekin, zehatz-mehatz, Datuen Babeserako Lege Organikoak xedatzen dituen baimenaren printzipioarekin eta helburuaren printzipioarekin.

Horren haritik beretik, ezinbestekoa da adieraztea kirolariaren osasun-txartela azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoaren 46. artikulua ere aratzen duela, eta apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretuaren 8. eta 9. artikuluen bidez garatzen dela, baina beste modura batera egiten dutela. Txartel hori goi-mailako kirolariei eta gainerako kirolari federatuei soilik ematen zaie, eta helburua laguntza ematea baino ez da. Bere baitan dituen datuen eskuragarritasunari dagokionez, kirolariaren zaintzaz arduratzen den osasun-arloko langileek bakarrik dute, baldin eta kirolariaren baimena badute.

Horrez gain, badira adierazi beharreko beste gai batzuk ere. Esate baterako, kirolariaren txartelak *“beste txartel edo zerbitzu batzuetara sartzeko aukera ematen duen euskarri fisiko berean egon behar du, kirolariaren osasun-txartela, baldin eta segurtasun-neurriek eragozten badute hirugarrenek ikustea kirolariaren osasun-txartelean dauden datuak. Euskarri fisiko horrek kirolariaren osasun-txartelari dagokion datu-basera sartzeko giltza moduan funtzionatuko du, baina ez ditu bilduko kirolariaren osasunari buruzko datuak”* (46.7 artikulua).

Artikulu horrek ez du ezer esaten aipatutako txartel edo zerbitzu horiez. Dena dela, 46. artikuluen 8. eta 9. paragrafoen arabera, pentsa daiteke osasun-zerbitzuak edo osasun-txartel indibiduala direla, eta horren helburua erabat desberdina da arauak kirolariaren osasun-txartelerako ezarritakoarekin, esaterako, haren titularra osasun-sistemaren erabiltzailetzat hartzea.

Hortaz, kirolariaren osasun-txartelari dagozkion datuak nolanahi ez eskuratzeko segurtasun-neurriez gain, eta horiek ezinbestez izango dira maila handikoak, gure ustez behar-beharrezkoa da gai hori behar beste argitzea testuan.

Halaber, 46. artikulua gaineratzen du, 10. paragrafoan, Datuen Babeserako Euskal Agentziak zehazten duen egoeretan eta baldintzetan soilik utzi ahal izango direla txartelaren datuak.

Xedapen horri dagokionez, ezinbestekoa da gogora ekartzea kirolariaren osasun-txartelak bere baitan dituen haren datuak jakinarazteko egoerak eta datuak ez dituela erabakitzen Datuak Babesteko Euskal Bulegoak, baizik eta datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubidea erregulatzen duen araudiak. Eta osasun-datuak direnez, araudi horrek igortzen duen osasun-alorreko legeriak berak, lehen ere adierazia osasun-datuei buruzkoa araubidea azaltzerakoak. Legedi horien artean, nabarmentzeko modukoak dira osasun-sistema nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legea, osasun-sistema nazionalaren osasun-alorreko informazio-sistema erregulatzen duena osasun-arloan eskumena duten administrazio publikoen arteko informazioa

eta komunikazioa bermatzeko; eta 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharreri dagokiena, erregulatzen dituenak, besteak beste, historia klinikoa, bere baitan hartu behar dituen gutxieneko datuak, haren laguntza-helburua, osasun-arloko langileek hura nola jaso behar duten, eta datuak tratatzeko, datuak eskuratzeko eta datuak gordetzeko araudia.

Kirolariaren osasun-txartelaz proposatutako erregulazioari buruz adierazitako guztiaren arabera, bulego honen ustez, ezinbestekoa da berriz idaztea, eta, batez ere, aurreproiektua idatzi dutenek gogoeta egitea babestea merezi duten moduko interes publikoez, erabakitzeko halakorik baden eta horiek justifikatzen ote duten kirolariaren osasun-txartelak dituen datuak tratatzea, hain zuzen, berez laguntzarako ez den beste helburu baterako, zirikusirik ez duena osasunaren babesarekin, eta justifikazioa balego, zehazteko zein terminotan eta baldintzatan trata daitezkeen datuak.

XII

Dopinari buruzko datuen araubidea

Konfidentzialtasuna eta sekretua

Helarazitako lege-aurreproiektuaren 47. artikuluan dopinari buruzko datuei dagozkien berme zehatzak jasotzen dira, eta zenbait betebeharrak ezartzen ditu. Honela dio: *“dopin-kontrolak egingo dituzten langileek, bai eta kirol-entitateetako organoetako kideek eta langileek ere, eta kirol-alarreko zuzendariak eta langileek beren lanagatik jakiten dituzten gaien konfidentzialtasuna errespetatu behar dute eta isilean gorde behar dituzte gai horiek”* (47.1 artikulua).

Konfidentzialtasuna eta datuak isilean gordetzeko betebeharrak horien xede da -testuaren 6.1 n artikuluan eta 7.k artikuluan jasoak- kirolariak konfidentzialtasunerako duen eskubidea behar bezala zaintzea (8.1 artikulua). Hala ere, estatuko legeak ez bezala, autonomia-erkidegoko lege-aurreproiektuak ez dirudi erantzukizunik xedatzen duenik betebeharrak horiek betetzen ez direnerako, **Datuen Babeserako Lege Organikoak** berak, oro har, xedatzen dituenek gain. Hain zuzen, 10. artikulua erregulatzen du, eta honela dio: *“Fitxategiaren arduradunak eta izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren edozein fasetan parte hartzen dutenak lanbide-sekretua izan behar dute nahitaez datu horien gainean, eta datu horiek gordetzeko eginbeharra ere izango dute. Betebeharrak horiek bere horretan iraungo dute, nahiz eta fitxategiaren titularrarekin edo, hala denean, arduradunarekin dituzten harremanak amaituta izan”*.

Aurreproiektuaren 47.2 artikulua, halaber, honela dio: *“Beren zereginetan lortutako datuak, txostenak edo aurrekariak bakar-bakarrik dopin-kontrolak egiteko erabili ahal izango dira, eta, beharrezkoa izanez gero, bai eta diziplinazko, administrazioko edo delituzko arau-haustek izan daitezkeen egintzak salatze ere. Langile horiei, salaketarik izanez gero, datu, txosten edo aurrekari horiek uzteko baimena ematen zaie, 15/1999 Lege Organikoaren 11.1.a artikuluan xedatutakoarekin bat etorruta”*.

Lege-xedapen horrek ez du zerikusirik edo zerikusi gutxi du datuen konfidentzialtasunarekin eta horiek isilean gordetzearekin. Hortaz, komeni da aurreproiektuaren beste tokiren batean jartzea, izan ere, idazketak nolabaiteko nahasmena eragiten du. Hala ere, badirudi lege-gaikuntza ezartzen duela kirolarien datu pertsonalak tratatzeko, haien baimenik gabe, dopin-kontroleko helburuetarako zein egintzak salatzeke, eta hori bat dator Datuen Babeserako Lege Organikoaren 4. artikuluan eskatzen den helburuaren printzipioarekin. Nolanahi ere, beharrezkoa da zuzentzea edo kentzea xedapen horretatik Datuen Babeserako Lege Organikoaren 11.1 a artikulua aipamena, ez baita existitu ere egiten.

Datuak lagatzeko baimena

Aurreproiektuaren 48. artikulua xedatzen duenez, dopin-kontrolei buruzko datuak ahal izango zaizkie *“datuen babeserako indarrean dagoen legedian xedatzen den moduan, kirolaren alorrean dopinaren aurkako borrokan parte hartzen duten erakunde publiko eta pribatuei, legez lotesleak diren nazioarteko konpromisoek xedatzen dutenaren esparruan”*.

Xedapen hori eta osasuna babesteko eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoaren 36. artikulua oso antzekoak dira, eta, azken horretan ezarritakoaren arabera, datuak laga eta transferitu ahal izango zaizkie artikulua horretan adierazten diren erakundeei, hau da, dopinaren aurkako borrokan parte hartzen dutenei.

Xedapen horri dagokionez, ezinbestez adierazi behar dugu, lehenik eta behin, datuen nazioarteko transferentzia orok bete behar dituela Datuen Babeserako Lege Organikoaren V. tituluan (33. eta 34. artikulua) ezarritakoa eta hura garatzeko Erregelamenduaren VI. tituluan (65. artikulutik 70. artikulura bitartekoak) ezarritakoa. Horrez gain, aintzat hartu behar da Datuen Babeserako Lege Organikoaren garapenerako Erregelamenduaren 65. artikulua, berariaz adierazten baitu datuak nazioartean transferitzeak ez duela inola ere esan nahi aplikatuko ez direnik Datuen Babeserako Lege Organikoan ezarritako xedapenak. Hortaz, Datuen Babeserako Lege Organikoaren arabera tratatu daitezkeen datuak soilik transferitu ahal izango dira, eta aintzat hartu behar dira, halaber, oinarritzko eskubidea **informatzen** etaosatzen duten printzipio guztiak, lehen adierazi ditugunak.

Hortaz, xedapen horrek eratu nahi duen legezko gaikuntzaren bidez, datuen nazioarteko lagapen horietarako titularren alde aurreko baimena **salbuetsi nahi da**.

Bigarrenik, 48. artikuluan *“legez lotesleak diren nazioarteko konpromisoak”* esaten denean, badirudi Datuen Babeserako Lege Organikoaren salbuespenei buruzko 34.a artikulua erreferentzia egin nahi duela, eta, hala, datuak nazioartean transferitzeko Datuak Babesteko Espainiako Agentziako zuzendariaren baimena behar ez izateko, hau da, *“Izaera pertsonaleko datuen nazioarteko transferentzia Espainia alderdi den tratatu edo hitzarmenak aplikatzearen ondorio denean”*.

Kasu horretan, nazioarteko arau hori, loteslea, berretsia izan denez, Unescoren Konbentzioak ezarriko luke. Izan ere, 3b artikulua ezartzen baitie betebeharrak hau kide diren estatuei: *“nazioarteko lankidetzaren sustatzea kide diren estatuen eta kiroleko dopinaren aurkako borroka egiteaz arduratzen diren erakunde nagusien artean, bereziki, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziaren artean”*; eta 14. artikulua ezartzen du: *“Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak dopinaren aurka nazioartean borroka egiteko duen zeregin garrantzitsuan laguntzeko konpromisoa hartzen dute kide diren estatuek”*.

Eta hirugarrenik, Konbentzio horren 16. artikulua betebeharrak hau ezartzen die estatu

kideei: *"laguntzea Dopinaren Aurkako Munduko Agentziari eta Kodean ezarritakoari jarraiki aritzen dopinaren aurkako beste erakunde batzuei, herrialde anfitrioiaren kasuan kasuko erregelamenduak zaintze aldera. Hain zuzen ere, eginkizun hauetan laguntzea: norberaren kirolariei kontrolak egiten, lehiaketa zein lehiaketetatik kanpo, izan norberaren lurraldean zein beste tokiren batean; sustatzea eta bultzatzea dopinaren aurkako kontrol-akordioak erakundearen artean –horiek Kodeari jarraiki hautatuko dira; eta elkarri onartzea dopinaren aurkako erakunde guztiek dituzten dopin-kontrolko prozedurak eta azterketa klinikoetako emaitzak kudeatzeko prozedurak, kasuan kasuko kirol-zehapenak barne, baldin eta Kodean ezarritakoaren arabera". 16. artikulua horrek, halaber, honako hau ezartzen du: "kiroleko dopinaren aurkako borroka eraginkorra izango da bakar-bakarrik kirolariei azterketa klinikoak aurretik jakinarazi gabe egiten bazaizkie eta laginak garaiaz eramaten badira laborategietara azter ditzaten".*

Azken batean, artikulua aztertu bezala aztertu ondoren, gure ustez, Lege honen baitan datuak nazioartean jakinarazteko, legearen helburuarekin berarekin eta alor honetan nazioartean lotesleak diren araudiekin bat etorri behar dute jakinarazpen horiek.

XIII. Zehapen araubidea

Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege-aurreproiektuaren zirriborroaren IV. kapitulua dopinaren diziplina-erregimenari eta administrazio-zehapenen erregimenari buruzkoa da.

Lehendabizikoa (diziplina-erregimena) aplikatu zaie, hain zuzen, Euskadiko Kirolari buruzko 14/1998 Legearen 46. artikuluan exijitzen diren lizentziak direla-eta lotura berezia duten pertsonei, bai eta, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izanik, lege honen peko kirol-jarduerak gauzatzen dituzten kirol-erakundeekin edo lege honen pean beren borondatez jartzen diren gainerako kirol-erakundeekin lotura bereziko harremanak dituzten pertsonei (testuaren 21.1 artikulua).

Baina lege honetan ezarritako dopinagatiko administrazio-zehapenen erregimenaren eremua zabalagoa da, EAEn gertatzen diren egintzei edo ez-egiteei ezarriko baitzaie, autonomia-erkidegoaren, estatuaren edo nazioartean eremuko kirol-lehiaketetan gertatzen diren kontuan hartu gabe, eta ez da beharrezkoa izango lotura bereziko harremanak edukitzea, ezta lehiaketako kirol-jardueretan gertatzea ere (22. artikulua).

Kapitulu beraren hurrengo artikuluan, 23. artikuluan, kirolariaren eta haren inguruaren erantzukizuna erregulatzen da. Horiek zein diren ez da zehazten legean, baina badirudi haren entrenatzaileak, medikuak eta osasun-alorreko gainerako langileak, zuzendariak, kirolariarekin lotura duten kirol-erakundeak... direla. Horiek eskudun organoei informazioa emateko betebeharra dute, besteak beste, honako hauei buruzko informazioa: kirolariaren gaixotasunak, egiten ari den tratamendu terapeutikoak eta kirolariak non egon ohi diren.

Arau-hausteen erregimenari dagokionez, nabarmentzeko modukoa 24. artikulua arau-hauste oso larritzat jotzen duela organo edo pertsona eskudunek hala eskatzen dutenean, lehiaketa barruan edo kanpoan dopin-kontrolak egiteari uko egitea edo aurka egitea, bidezko arrazoirik gabe. Era berean, organo edo pertsona eskudunek laginak biltzeko egindako eskakizunak, edo dopinaren kontrol- eta

zigortze-prozeduretan beste edozein jarduera gauzatzeko egindako eskakizunak eragozte, eskakizun horiei kasurik ez egitea, edo bidegabeki atzeratzea, edo ezkutaketan aritzea; orobat, eskakizun horiek betetzea galarazteko edo nahastea eragiteko gainerako jokabideak, egintzak edo ez-egiteak, edo eskakizun horiek betetzen uzten ez duten gainerako jokabideak, egintzak edo ez-egiteak (1. c paragrafoa).

Lege-aurreproiektuak, halaber, arau-hauste oso larritzat jotzen du tratamendu terapeutikoei eta erabilera terapeutikorako baimenei buruzko informazioari dagozkion betebeharrak ez betetzea, bai eta Kirolean dopina eragiteko gai diren produktu eta metodoei buruzko datuak aitortzeko betebeharra urratzea ere (24.1 e artikulua).

Xedapen horiei dagokienez, soilik da egokia dopin-kontrolekin zerikusia duten datuen tratamendu orori buruz lehen emandako oharrak berriz ere adieraztea; esaterako, kirolariak egon ohi diren lekuei buruzkoak, tratamendu medikoei buruzkoak, erabilera terapeutikorako baimenei eta kirol-bajei buruzkoak. Bai eta datuen zenbait tratamendutarako kirolariaren baimenari edo adostasunari buruz adierazitakoak ere.

Bestalde, 32. artikulua zehapenen eraginkortasuna eta kirol-lizentzia eskuratzeko gaitasuna galtzea erregulatzen du, eta 5. paragrafoan xedatutakoaren arabera, beste erakunde batzuek dopina dela-eta ezarritako zehapenak elkarri onartzeko printzipio orokorra aplikatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kirol-jarduerak antolatzen dituzten erakundeek. Printzipio hori lehendik ere jasota dago lehen aipatu dugun Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioaren 16. artikuluan, eta eragin loteslea du 2006ko irailaren 26an berretsi baitzen.

Testuaren 33. artikulua Non bis in idem printzipioaren aplikazioari buruzkoa da, eta zenbait datu-lagapen xedatzen ditu. Artikulu horren 2. paragrafoan, ministerio fiskalari egin beharreko lagapena; diziiplina-organoak, delitu-zantzuak hautematen baditu, eten egingo du prozedura-izapidea. Halaber, aurreproiektuaren xedapen horrek diziiplina- eta zehapen-organoen artean datuak elkarri jakinaraztea xedatzen du, baldin eta dopinagatiko arau-hausteagatik administrazio-erantzukizunak eta diziiplina-erantzukizunak batera eskatu ahal badira (34.4 artikulua); horrez gain, bertan xedatutakoari jarraiki, dopinagatiko diziiplina- eta zehapen-espedienteak ireki izana, eta horiei buruzko azken ebazpena ere Herrizaingo Sailari jakinarazi behar zaizkio. Hori hala egingo da, *“Herritarren Segurtasunaren Babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoa aplikatzerakoan, hala badagokio, proportzionaltasunaren printzipioa babeste aldera”*.

Ministerio fiskalari datuak lagatzeak ez du arazorik eragiten datuen babesari dagokionez, ez eta diziiplina- eta zehapen-organoen artean datuak elkarri lagatzeak ere, aurreproiektu honetan ezarritako moduan.

Dena dela, testuan ez da ondo ulertzen zein den Herrizaingo Sailari datuak uztearen helburua, nahiz eta proportzionaltasunaren printzipioa irizpidetzat hartu, herritarren segurtasunaren alorreko arau-hausteak graduatzeko, Lege Organiko horren 23. artikulua p) eta q) paragrafoetan tipifikatzen direnak larritzat edo oso larritzat (24. artikulua).

Beste azterketa-ildo bati jarraituz, aurreproiektuaren 34. artikulua erantzukizuna azkentzeko kausatakotzat hartzen du (kasu honetan partezkoa) honako hau: *“dopina eragiteagatik kirolean debekaturik dauden gaiak edo metodoak ematen edo hornitzen dituzten pertsonak edo talde antolatuak, edo gai edo metodo horiek baliatzeko modua ematen dutenak atzematen, bilatzen eta organismo eskudunen esku uzten laguntzea”*. 36. artikulua arabera, laguntza gori kasuan kasuko prozesuan lekukotza emanez edo funtsezko datuak emanez gauzatzen da.

Laguntza hori, datuen babeserako ikuspegitik, pertsonen osasunarekin zerikusia izan dezaketen datuak lagatzean datza, eta bat dator Europako Kontseiluaren 135. hitzarmenaren 7.3 d) artikuluekin, honela baitio: *“kide diren estatuek lagundu egingo diete norberaren estatuko kirol-erakundeei haiek kirolariak bultza ditzaten parte hartzera dopinaren aurkako nazioarteko kirol-erakundeek gauzatzen duten borrokan”*. Laguntza hori bat dator, halaber, Datuen Babeserako Lege Organikoaren xedapenekin, proportzionala delako lortu nahi duen helburuarekiko.

Merezi du, halaber, txosten honetan agerian uztea 37. artikulua Eusko Jaurlaritzari ematen diola administrazio-zehapenak ezartzeko eskumena, eta 38. artikulua, berriz, diziplina-ahala Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioei, eta, erkidego horretan egiten diren kirol-lehiaketetan izaten den parte-hartzea dela-eta lotura bereziko harremana dagoen gainerako erakundeei; eta gaineratzen du, halaber, diziplina-ahala espedienteak ez badira betetzen epe jakin batean, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak hartuko duela bere gain eskumen hori.

Azkenik, aurreproiektuaren IV. kapituluak diziplina-prozedura erregulatzen du (39. artikulua), eta 40. artikulua, berriz, ikuskapen-ahala Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari ematen dio, kontuan hartzen direla –azaltzen du aurreproiektuak-Espainiako eta Eusko Jaurlaritzako beste organo administratibo eta judizial batzuen eskumenak.

Diziplina-prozedurari dagokionez, lege-aurreproiektuak xedatutakoari jarraiki, laborategikoek eskudun organoei helaraziko dizkie analisisien emaitzak haiek prozedura abian jar dezaten, haiek instrukzio-organoei, eta, azken horrek ebaztea dagokionari helaraziko dizkio. Halaber, testuaren 39.5 artikulua xedatutakoari jarraiki, prozedurari hasiera emateko erabakia eta prozedura amaitzeko ebazpena Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari jakinarazi behar zaizkio.

Arestian azaldu ditugun arau-xedapenetan ezarritakoaren arabera, aurreproiektuak erregulatutako diziplina-erregimenaren eta zehapen-erregimenaren ondorioz, datu-tratamendu eta datu-lagapen asko egin behar dira. Horren haritik beretik, Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurka Borroka egiteko Lege Organikoaren aurreproiektuari buruz, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak adierazitakoa jaso dugu:

“Bestalde, ezinbestez adierazi behar dugu aurreproiektuaren zioen azalpenaren III. atalean jasotakoaren arabera, bertan xedatutako araubidearen funtsa Konstituzioaren 43. artikulua dela, eta osasuna babesteko eskubidea aitortu ondoren, 2. paragrafoak honako hau xedatzen duela: “Botere publikoei dagokie aurreneurrien bidez eta beharrezkoak diren zerbitzu eta prestazioen bidez osasun publikoa antolatu eta babestea. Horretarako, legeak ezarriko ditu guztion eskubideak eta eginbeharrak”. Halaber, 3. paragrafoak dio: “Botere publikoek osasun-hezkuntza, hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dituzte”.

Hori hala izanik, gure ustez, Eusko Legebiltzarrak botere publikoei ezarritako jardueren zatitza hartzen du dopinaren aurka borroka egiteko araubidea, horren bidez bermatzeko, prebentzio-neurriak ezarriz, osasuna babesteko kirolariek duten eskubidea. Hala ere, kontuan izan behar da debekatuta dauden substantziak hautematen badira, kasuan kasu dagozkion diziplina neurriak jar daitezkeela”.

Horrenbestez, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari datuak lagatzeari dagokionez, eta zuzenbide publikoko erakunde horrek datuak tratatzeari dagokionez –aurreproiektuak xedatutakoak-, arauak berak erakunde horren esku uzten dituen funtzioak betetzea izango luke helburu, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoaren

eremuan dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko funtzioak (12. artikulua), eta gure ustez, egokiak dira helburu horiek lortzeko.

Zehapen-prozeduraren ondorioz sortutako datuen tratamenduari dagokionez, ezinbestekoa da laborategietakoek datuak uztea prozedura abian jarri behar duen organoaren esku. Izan ere, analisisen emaitzen baitan dago prozedura abian jartzea, bai eta prozedura horiek izapidetzeko eta ebazteko ardura duten organoei jakinaraztea ere.

Halaber, gogoan izan behar da aurreproiektuaren 39. artikulua bere baitan hartzen dituen xedapenak, prozedurak iraun bitartean kirolariaren datu pertsonalen babeserako eskubidea bermatzea helburu dutenak. Esaterako, laborategiei eskatzen zaie beharrezko neurriak hartzeko, jakinarazpen hori kirolariaren anonimotasuna eta identitate-erreserba gordeta egin dadin (39.2 artikulua). Horrek esan nahi du behar beste segurtasun-neurri ezartzeko betebeharra dutela, prozedura-faseetan parte hartzen dutenek informazioa eskuragarri izan ez dezaten.

Alde horretatik, nahitaez adierazi behar dugu Datuen Babeserako Legeak zenbait betebeharrak ezartzen dizkiela datuen tratamenduaz arduratzen direnei. Hain zuzen, sekretu-eginbeharra -Datuen Babeserako Legearen 10. artikulua, lehen aipatutakoa-, eta datuen segurtasuna (9. artikulua), betebeharrak hau ezartzen dira: "izaera pertsonaleko datuen segurtasuna bermatzeko eta baimenik gabe datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo horietan sartzea saihesteko beharrezko neurri teknikoak eta antolaketa-izaerakoak hartuko ditu, teknologia-egoera, biltegiratutako datuen izaera eta datu horiek dituzten arriskuak kontuan hartuta; arrisku horiek izan daitezke gizakiaren ekintzaren zein inguru fisiko edo naturalaren ondorio". Neurri horiek, gaur egun, Datuen Babeserako Lege Organikoaren garapenerako Erregelamenduaren VIII. Tituluan erregulatzen dira -abenduaren 21eko 1270/2007 Errege Dekretu bidez onartu zen Erregelamendu hori-, eta 3 maila daude: oinarritzekoak, maila ertainekoak eta goi-mailakoak, tratatzen diren datu-motaren arabera, eta adierazten da osasunari buruzko datuen kasuan, goi-mailako segurtasun-neurriak ezarri behar direla (81.3a artikulua).

Aldi berean, aurreproiektuaren 39. artikulua 3. paragrafoak datuak gordetzeari buruzko ezarritako printzipioa errespetatzen dadin bermatzen du (Datuen Babeserako Legea Organikoan ere jasoa). Hala dio aurreproiektuak: "*Behin lege honetan aurreikusitako preskripzio-epea betetzen denean edo kasuan kasuko diziplina-prozeduran edo auzi kriminalean ebazpen irmoa ematen denean, dopatzea kontrolatzeko laborategiek ezingo dute gorde pertsona identifikagarri bati lotutako laginik*".

Izan ere, laginak analizatzearen helburua zehapenak ezartzeko beharrezkoak diren probak lortzea denez, arau-hausteen preskripzio-epea betetzen bada, edo zehapen-prozedura abian jartzen bada, edo ebazpen irmoa ematen bada, ez da beharrezkoa laginak gordeta edukitzea prozedura ebazteko; hortaz, laginak anonimoa izan beharko luke, eta ez litzateke erabili beharko inola ere lagina zein kirolariarena den jakiteko, edo, bestela, suntsitu egin beharko litzateke lagina.

Xedapen hori bat dator Datuen Babeserako Lege Organikoarekin, datu pertsonalak tratatzeaz arduratzen direnei ezartzen baitie betebeharrak hau: datuak helburu legitimoa betetzeko beharrezkoa den denboran bakar-bakarrik gorde behar dituzte datuak, eta, beraz, datu horiek ezereztu egin behar dituzte helburu horretarako baliagarriak ez direnean (4. artikulua). Datuak ezerezteari buruz dio: "*ezerezteak datuak blokeatuko ditu, eta datu horiek administrazio*

publikoen, epaileen eta auzitegien esku bakarrik gordeko dira, tratamenduak erator ditzakeen erantzukizunei aurre egiteko, erantzukizun horien preskripzio-epeak iraun bitartean. Aipatu epea igaro ostean, datuak suntsitu egin beharko dira” (Datuen Babeserako Lege Organikoaren 16.3 artikulua).

Bulego honen ustez, ordea, aurreproiektuaren 8 h) artikulua ez dator bat Datuen Babeserako Lege Organikoarekin. Izan ere, kirolarien eskubideak erregulatzean dio, eskubidea dutela *“dopinaren kontrako prozesua eta preskripzio-epeak amaitu ostean, hartu diren odol-, gernu- edo bestelako laginak desegin daitezela eskatzeko. Ezin izango da eskubide hori erabili kontrola egitea agindu duen erakundea laginen titular bihurtu bada; dena den, lagin horiek dopina kontrolatzeko edo ikerketak egiteko erabili beharko dira”*.

Xedapen hori ez dator bat inola ere datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubidearen funtsarekin. Izan ere, beti izango dira kirolariarenak, haren titulartasunekoak, edozein dela datuak tratatzen dituenak, eta nahiz tratamendu hori lege-mailako araua batean xedatutako funtzio legitimorako izan.

Aurreproiektuaren xedapen horri berari buruz, gainera, komeni da adieraztea kirolariei egiten zaien lagin-hartzea edo zioen azalpenean aipatzen den beste dopin-kontrol motaren bat -zientziaren eta teknologiaren arloko ikerketa eta aurrerapenen emaitzen araberrakoa-, nahiz eta kirolarien osasuna prebenitzeko beharrezko neurria izan, haien intimitatea errespetatzeko behar beste modulatuko dira, eta, bereziki, haien gorputz-intimitatea, orekaren eta proportzionaltasunaren irizpideei jarraiki. Bestela, pertsona horien oinarritzko eskubidea urratuko litzateke, Espainiako Konstituzioaren 18.1 artikulua ere aitortzen duena.

Azkenik, agerian uztea komeni zaigu Datuen Babeserako Lege Organikoak interesatuei eskubidea ematen diela jakiteko zer datu ari diren tratatzen (datuetan sartzeko eskubidea), eta, horrez gain, zuzentzeko eskubidea, zehaztugabeak edo osagabeak izanez gero (zuzentze-eskubidea), ezerezta daitezten eskatzeko eskubidea, desegokiak edo gehiegizkoak balira egindako tratamenduarekiko eta horien helburuarekiko (ezerezte-eskubidea), edo tratamendu horren aurka egiteko egoera jakinetan, egoera pertsonal jakin baten arabera, aurka egiteko eskubidea erabiltzea legitimatzen duena. Eskubide horiek, datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezerezteko edo datu horien aurka egiteko eskubideak Datuen Babeserako Lege Organikoaren III. Tituluan erregulatzen dira, bai eta hura garatzeko Erregelamenduaren III. Tituluan ere.

Arestian aipatutako eskubide horiek, lehen adierazitako printzipioekin batera, datu pertsonalen babeserako oinarritzko eskubidea osatzen dute, eta, beraz, Lege Organikoak berak xedatzen dituen eskubide horiek erabil daitezela bermatzeko eta printzipio eta betebeharrak horiek beteko direla bermatzeko betebeharra ezartzen die Datuen Babeserako Lege Organikoak datu horiek tratatzen dituztenei. Horrenbestez, aurreproiektuaren 14.6 artikulua datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezerezteko edo datu horien aurka egiteko eskubideei eta informatzeko betebeharrei buruz egiten duen aipamenaz gain (*“Kontrolen bermeak eta haien lege-ondorioak”*), gure ustez, beharrezkoa da hori bereziki aipatzea 8. artikuluan, hain zuzen, kirolarien eskubideak erregulatzen dituen artikuluan.

Txosten hau amaitutzat emateko, ezinbestez adierazi behar dugu EAEren eremuan dopinaren aurkako borroka erregulatzea xede duen Legeak haztatu egin behar dituela lege horretan ezartzen diren neurriek eragiten dieten pertsonen eskubideak, eta, horrez gain, saiatu egin behar duela oreka lortzen honako hauen artean: legeak xede duen interes orokorraren babesa -besteak beste, kirolarien osasuna bera- eta haien oinarritzko eskubideekiko behar besteko errespetua -bereziki, haien intimitatea

eta datu pertsonalen babesa-.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko otsailaren 28a.

DATUEN BABESA.

Iñaki Vicuña de Nicolás
Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria

XV

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO / KONTROL LEGE-EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA.

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico.

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones.

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 10 del Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Economía y Hacienda, se emite el siguiente

INFORME

I. OBJETO.

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto epigrafiado en el encabezamiento que pretende la regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca de la lucha contra el dopaje en el deporte, entendido éste como el consumo por el deportista de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos para aumentar artificialmente su rendimiento deportivo representando ello un acto contrario al espíritu deportivo.

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA.

Según manifiesta el preámbulo de la propia Ley, ésta surge de la necesidad de adaptar las disposiciones establecidas en materia de dopaje en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte en el País Vasco, a la nueva realidad y pretende dotar al País Vasco de un marco jurídico ambicioso dirigido a erradicar de forma eficaz la lacra del dopaje en nuestro deporte.

El Anteproyecto de referencia figura incluido en el apartado 11 del Anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2009, por el que se aprueba el Calendario de la Legislatura (2009-2013), como iniciativa atribuida al

Departamento de Cultura con el nombre de "Ley contra el dopaje en el País Vasco", prevista para el cuarto trimestre de 2010. En el ap. 48 del anexo II "Documento de fichas informativas" del citado acuerdo se recoge lo siguiente:

48.- Proyecto de Ley contra el Dopaje en el País Vasco

a.1.) Objeto principal de la regulación:

Adaptar las disposiciones establecidas a lo largo de la Ley 14/1998 en materia de prevención, control y represión del dopaje en Euskadi a la nueva realidad con el objetivo de erradicar de forma eficaz tal lacra del dopaje.

a.2.) Otros objetivos:

- Incorporar al ordenamiento jurídico del País Vasco una definición de dopaje.
- Definir el ámbito subjetivo general de aplicación extendiéndolo a las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco, a aquellos y aquellas deportistas que entrenen o compitan en el País Vasco y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que cuenten con alguna de dichas licencias o que desarrollen su actividad deportiva en el País Vasco, aunque no sean competiciones oficiales.
- Creación de la Agencia Vasca Antidopaje con el fin de separar las funciones de promoción del deporte, tanto el del alto nivel como las demás manifestaciones deportivas de competición que no son de alto nivel, y el control de las prácticas de dopaje.

a.3.) Sectores sociales implicados (en orden de importancia con la regulación propuesta):

- Deportistas
- Clubes
- Federaciones deportivas
- Administraciones públicas
- Ciudadanía en general

b) Incidencia financiera (estimada):

La que se deriva de la creación de la Agencia Vasca Antidopaje concebida como una organización muy sencilla basada en un órgano unipersonal, la Dirección, y un órgano colegiado (Consejo Consultivo) adecuadamente dimensionado.

Se prevé la posibilidad de la generación de créditos como consecuencia de la recaudación por la imposición de sanciones económicas que puedan imponerse en ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.

c) Fecha estimada de remisión a Consejo de Gobierno para aprobación del Proyecto de Ley:

Cuarto trimestre de 2010.

En relación con lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, que establece en su apartado primero punto 1 que "la Orden de inicio se dé a conocer en el espacio colaborativo -Legesarka-" y en el punto 3 que "todos los Departamentos están obligados a tramitar los proyectos de Ley y las disposiciones normativas de carácter general,

exclusivamente, a través de la aplicación informática desarrollada con esta finalidad", todo ello "siempre que la disposición normativa se haya iniciado con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo" (apartado segundo), se observa que no es de aplicación pues el expediente se inició mediante Orden fechada el 14 de julio de 2010, de la Consejera de Cultura.

En el expresado contexto, al objeto de dar cumplimiento al citado compromiso, se ha incoado el oportuno expediente, que ha sido remitido a esta Oficina, por el Departamento de Cultura, para la sustanciación del trámite de control económico normativo.

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se acomoda sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y resulta suficiente para que esta Oficina materialice su actuación de control económico normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En todo caso, el anteproyecto ha de ser, de conformidad con lo prevenido en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, sometido con carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha instancia consultiva.

En relación con ello, ha de recordarse que, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico normativo y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (*según redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi*), deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (*para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico*).

III. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.

La Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, obliga en su artículo 57 a que los proyectos de ley vayan acompañados de un estudio sobre el posible gravamen presupuestario que la regulación suponga.

De conformidad con lo exigido en el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, *"en el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración Pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros aspectos se determinen por la normativa*

que regule el ejercicio del control económico normativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste que pueda derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general".

Por lo que respecta, de forma específica, a la normativa que regula el ejercicio del control económico normativo, el artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, exige para la emisión del informe de control económico normativo, la remisión de una memoria que, entre otras cosas, realice una cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que ocasione la entrada en vigor de la norma; determine los modos de financiación de tales gastos; describa los antecedentes y justifique la necesidad de la disposición; describa el programa económico presupuestario en el que se inserta la disposición, con identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados; realice una evaluación económica y social de su aplicación; y aporte cuantos datos, informes y estudios permitan conocer las líneas generales y los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta. El artículo 43 del mencionado Decreto, requiere documentación adicional a la mencionada (medios materiales y personales con distinción entre los que supongan gasto corriente o de capital, estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus servicios, etc...), cuando el control económico se realice en su modalidad económica-organizativa.

En el dictamen nº 43/1999 CIA, por su parte, se señalaba que el fin último de previsión sobre la viabilidad de la norma pueda requerir, además del estudio de gasto público que genere, un análisis más amplio que tenga en cuenta el esfuerzo económico que a la sociedad va a suponer la aplicación de la regulación de que se trate y lo contraste con los beneficios económicos o de otro tipo que ésta pueda producir, realizando, a continuación, una ponderación de ambos extremos a la luz del principio de proporcionalidad. Y este estudio o evaluación coste-beneficio, precisa no sólo de la valoración del gasto público que conlleve el proyecto (el artículo 31.2 de la CE obliga a una consideración del gasto público que atienda a esa evaluación coste-beneficio, cuando ordena el reparto equitativo de los recursos públicos), sino también de una ponderación de la repercusión económica que para la iniciativa empresarial y para los profesionales implicados puede derivar de las obligaciones y condiciones que a sus actividades ponga la norma pretendida, procurando prever, entre otras cosas, la incidencia que tal repercusión pueda tener en los precios de ciertos bienes y servicios.

Se trataría, en definitiva, y dentro del proceso de reflexión previo a la aprobación de la norma, de realizar una completa evaluación del gasto que comporta la regulación pretendida, y ello con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de economía y eficacia en el gasto público. Y de que se valore también la incidencia económica de la norma en los particulares y en la economía en general, a fin de garantizar su razonabilidad y viabilidad.

Dicho lo cual y examinada la documentación remitida, esta Oficina procede a su actuación de control económico normativo y económico organizativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a cuya tarea se circunscribe el presente informe.

A) Aspectos Organizativos

En lo que respecta a esta Administración, la repercusión mas relevante se produce con la creación de un nuevo **ente de derecho público**, la "Agencia Vasca Antidopaje" (artículos 10, 11 y 12) que "... llevará a cabo el diseño y ejecución de las acciones que en el campo de la prevención, control y represión del dopaje corresponden al Gobierno Vasco" (art. 10.1). Dicho ente tendrá como órganos propios: el director, el secretario, el consejo consultivo y el comité vasco de autorizaciones de uso terapéutico, además de los que puedan establecerse en su estatuto propio (art. 11.1).

La atribución funcional que se hace a favor del nuevo Ente supondrá (así se deduce de la disposición derogatoria primera) el traspaso al mismo de las funciones que en materia de dopaje viene realizando el Centro Vasco de Medicina del Deporte, servicio administrativo creado por la Ley 14/1998, entre cuyas funciones se encuentra "*la planificación y gestión del control antidopaje en la Comunidad Autónoma*".

Se constata que la memoria justificativa del proyecto que obra en el expediente contiene un apartado específico destinado a justificar la oportunidad de la creación de la Agencia Vasca Antidopaje, en el que se recogen las razones de la solución organizativa por la que se ha optado, pues aunque no pueda obviarse la competencia relativa a la libre organización de la propia Administración Autónoma (artículo 10.2 EAPV), no es menos cierto que las decisiones que en este ámbito se adopten han de estar suficientemente fundamentadas, y en este sentido, hubiera sido deseable que la memoria justificativa remitida hubiera concretado en mayor medida, aspectos como el alcance real que pueda tener, para esta administración, la descentralización y autonomía pretendida en el desarrollo de las funciones que la proyectada ley le asigna al nuevo Ente, que permita apreciar la razonabilidad, en términos de eficiencia administrativa, de la nueva estructura propuesta.

Así, la memoria remitida no identifica suficientemente, en nuestra opinión, aquellos aspectos de la actual organización (medios materiales, personales, procedimentales y organizativos de la Dirección de Deportes, y más en concreto del servicio administrativo denominado "Centro Vasco de Medicina del Deporte" que tiene atribuida en la actualidad las funciones de planificación y gestión del control antidopaje en la Comunidad Autónoma) que impiden desarrollar eficazmente las funciones que se le atribuyen por la ley proyectada a la Administración de la CAE, y que puedan ser solventados de manera más eficaz con la creación de la agencia. Se recuerda, en este sentido, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, la memoria debe "justificar la necesidad o idoneidad de creación del ente u órgano, a efectos del cumplimiento de los

programas económico-presupuestarios que vaya a ejecutar, o en los que se integre”, “así como definir los objetivos cuantificables a medio plazo que se persiguen con la creación del ente y establecerse los indicadores tanto objetivos como subjetivos que permitan medir su cumplimiento”, extremos éstos que no acababan de completarse en el expediente remitido.

La memoria justificativa se limita a argumentar la procedencia de la creación del ente con las siguientes razones:

- desde la entrada en vigor de la Ley 14/1998, se ha dado una tendencia generalizada a la creación de agencias nacionales antidopaje en razón de su mayor especialización para la realización de determinadas funciones y en razón de su independencia y con la finalidad de separar las funciones de promoción del deporte y de control de las prácticas de dopaje;
- la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, prevé la creación de agencias antidopaje en las comunidades autónomas al contemplar la constitución de la comisión de agencias antidopaje “cuando se acredite la existencia de agencias antidopaje cuyo ámbito sea el de las comunidades autónomas”;
- el Acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco de 27 de febrero de 2006 instaba al Gobierno Vasco a elaborar y aprobar un decreto por el que se regule la prevención, control y represión del dopaje en el deporte del País Vasco “que deberá incluir la creación de la agencia vasca antidopaje”.

A juicio de esta Oficina, ninguna de las razones esgrimidas presupone necesariamente la opción de crear un ente de derecho público como el que se contiene en el proyecto.

En primer término no se justifican las razones que avatan la necesidad de independencia para el correcto desempeño de las funciones que se han de acometer. Se suele garantizar de una manera cualificada la independencia de determinados órganos y entidades cuando éstos han de ejercer de alguna manera un control sobre el actuar de la propia administración (es el caso de la Agencia Vasca de Protección de Datos o de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, órgano colegiado de la Administración General, sin personalidad jurídica propia). No se vislumbran ni se alegan en el expediente razones específicas que aconsejen la personificación del ente de cara a garantizar una especial independencia para el correcto y eficaz desempeño de sus funciones.

Por otro lado, el hecho de que en las razones esgrimidas se hable de “agencia” no presupone su naturaleza jurídica, por cuanto que tal modalidad de ente no existe como categoría específica de nuestro entramado institucional. Al contrario de la que sucede en el ámbito de la Administración del Estado (en el que

las agencias estatales son organismos públicos con una regulación específica contenida en la *Ley 28/2006, de 18 de julio, del agencias estatales para la mejora de los servicios públicos*, en la que destaca la exigencia de una gestión transparente y de calidad medible a través de objetivos), en el ámbito de nuestra organización institucional, las denominadas "agencias" no tienen encaje en ninguna de las modalidades de entes instrumentales recogidos por la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Se trata, pues, de una entidad pública atípica, carente de regulación general, creada por una ley específica que es la que establece su régimen jurídico.

A este respecto, tampoco la memoria justificativa aporta razones específicas que permitan concluir la necesidad de creación de un ente atípico por la inadecuación de los que conforman nuestro propio sistema organizativo (lo que provoca forzosamente lagunas sobre el régimen aplicable a multitud de cuestiones que si se hayan reguladas para el resto de la administración institucional y para el resto de organismos que componen el sector público vasco de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la LPOHGVP).

En este sentido, la creación de la Agencia Vasco Antidopaje en los términos que se pretende, hubiera requerido, no sólo la identificación de las deficiencias que la actual estructuración comporta para el eficaz desempeño de las funciones, sino además, las concretas razones que avalan la elección de un ente instrumental que no encuentra acomodo entre los existentes dentro del sector público vasco tal y como se define en el referido artículo 7 de la LPOHGVP).

Por último, tampoco parece razonable, y nada se argumenta en el expediente al respecto, que se cree un ente específico para el desempeño de un ambicioso elenco funcional (especificado en el artículo 12 del anteproyecto) y que tal ente pretenda llevar a cabo su cometido con una exigua dotación de medios humanos, dotación que se circunscribe, de conformidad con la memoria económica, al director, un responsable médico, un asesor jurídico y un administrativo.

Debe tenerse en cuenta que la propia existencia de la agencia como ente institucional con personalidad jurídica propia e independiente de la Administración General, va a suponer la necesidad de que por éste se desempeñen determinadas funciones comunes a todos los organismos públicos (de contratación, contabilidad, gestión de nóminas, etc...) cuyo desempeño por el propio ente debe sumarse al extenso listado de funciones que se establecen en el artículo 12 del anteproyecto.

Sin necesidad de profundizar mucho en esta cuestión, resulta evidente que ha de resultar muy difícil abarcar todos estos ámbitos con la dotación de recursos humanos que se propone, lo que a su vez, obligaría a la externalización de servicios. A este respecto, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2010 sobre los criterios para la externalización de los servicios, establece una serie de pautas de difícil cumplimiento en la materia que nos ocupa [véanse los servicios que deben proveerse con medios propios recogidos en el punto tercero del acuerdo, y especialmente el recogido en su apartado c)].

Por último resaltar, además, que la oportunidad de tal opción y de la redistribución orgánico-funcional proyectada resulta contradictoria con lo establecido en la Disposición Final Primera del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, que determina que la estructura de los Departamentos se diseñará de acuerdo con criterios organizativos de austeridad y reducción, entendida como que el número de órganos administrativos, en su conjunto, deberá disminuir respecto a la estructura actual.

Podemos decir en conclusión que no se ha acreditado debidamente en el expediente la necesidad de la creación de un ente de derecho público para el cumplimiento de los objetivos pretendidos, ni la adecuación de medios humanos con los que pretende dotarse y que además dicha creación choca con los criterios organizativos de austeridad que informan de forma especialmente intensa a la Administración de la Comunidad Autónoma en el momento presente.

Procede hacer un último apunte en este apartado respecto a la falta de determinación en la Ley de la sede del ente, por cuanto que, de lo que se desprende del expediente, se prevé fijar su sede en los locales del nuevo campo de fútbol San Mamés Barria, en Bilbao. A este respecto, procede traer a colación lo dispuesto en el Dictamen 69/2006 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en relación con el anteproyecto de Ley de creación del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua, todo ello respecto de la sede de la entidad:

"48. Nos encontramos ante lo que se presenta como el ejercicio descentralizado de competencias propias de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma (artículo 15 de la Ley de Principios Ordenadores de Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en adelante LPOH). Por lo tanto, es de aplicación el artículo 4 EAPV, el cual requiere Ley para la designación de sede de las instituciones comunes.

49. La Comisión interpreta que la provisión estatutaria no se encuentra agotada por la Ley 1/1980, de 23 de mayo, de Sede de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, habiendo lugar a sedes diferentes a la de Vitoria-Gasteiz que allí se establece, pero el texto estatutario es claro al exigir para ello precisamente Ley de Parlamento Vasco.

50. La determinación de sedes (tradicionalmente, en las capitales) presenta una importancia política reconocida por el ordenamiento; así, el artículo 147.2.c) de la Constitución literalmente ubica tal señalamiento en el propio Estatuto de Autonomía, y para el Estado la señala expresamente en su artículo 5) que impide deslegalizarla no ya a favor de un departamento, sino ni siquiera del Gobierno.

51. En similar sentido, respecto al ente público de derecho privado Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca y al organismo autónomo OSAI AN, nos pronunciamos en DCJA 56/2003 y 32/2002 respectivamente. Como allí dijimos, "sólo una Ley puede excepcionar, siempre y cuando exista una justificación suficiente para ello, lo establecido en la Ley de Sedes" (párrafo 44). Por lo tanto, no puede deferirse a órgano ejecutivo alguno la determinación de la sede, y, a su vez, el silencio de la ley supondría la imposibilidad de fijar luego una sede distinta".

B) Incidencia económico-presupuestaria.

El proyecto examinado comporta, además del aspecto organizativo analizado, potencial incidencia económica en el ámbito de esta administración que, en parte, es cuantificada en la memoria económica incorporada al expediente. Se cuantifican únicamente los gastos asociados a la creación de la Agencia Vasca Antidopaje, sin realizar análisis alguno del coste que pudiera implicar la asunción de nuevas funciones respecto de las que se vienen desempeñando en la actualidad (el elenco de funciones que se recogen en el artículo 12 sugiere que se asumen funciones novedosas en el campo de la lucha contra el dopaje).

Las magnitudes económicas que recoge la memoria económica son las siguientes:

A). En la vertiente de los ingresos:

La memoria económica remitida cuantifica, estimativamente, unos ingresos anuales de 6000 euros sin especificar su naturaleza.

B). En la vertiente de los gastos:

La memoria económica ofrece la siguiente estimación de un coste presupuestario anual de la Agencia Vasca por importe de 458.984,71 euros, desglosados de la siguiente forma:

- 1.- Retribuciones de personal (4 puestos):** cubría el coste de 1 director, 1 responsable médico (nivel 26), 1 asesor jurídico (nivel 24), y 1 administrativo (nivel 18), por un total de 254.120,58 euros.
- 2.- Gastos del laboratorio** encargado de hacer los correspondientes controles antidopaje, por importe de 71.846,13 euros (gasto estimado para el 2011 en el Programa 4512-Deportes).
- 3.- Recogida de muestras** de urina y sangre a los deportistas por personal médico autorizado, por importe de 30.000 euros (gasto estimado para el 2011 en el Programa 4512-Deportes).
- 4.- Consejo Consultivo:** no se cuantifican porque no se prevé gasto alguno, salvo los gastos y dietas "plenamente asumibles por los gastos ordinarios de funcionamiento".
- 5.- Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico:** dadas las posibles peticiones de uso terapéutico a analizar, únicamente se ha estimado 3.000 euros para hacer frente a la contratación de un médico externo con tal función.
- 6.- Medios materiales** (mobiliario, equipos informáticos, material fungible, etc): se estiman 100.000 euros anuales.
- 7.- Local donde se ubicaría la Agencia Vasca Antidopaje:** en la citada memoria se indica que no se ha previsto gasto alguno para el local "ya que es

intención que se localice en los locales del nuevo campo de fútbol San Mames Barria radicado en Bilbao, que serán cedidos al Gobierno Vasco como contraprestación a la participación en la sociedad encargada de la construcción de la citada instalación deportiva."

Respecto de tales estimaciones, debemos realizar las siguientes consideraciones:

1. Con respecto a los gastos de personal, no se cuantifica el coste (pero ni tan siquiera se menciona en la memoria económica) del secretario de la agencia, uno de los órganos de la agencia, específicamente creado por la ley (artículo 11 puntos 1 y 6).

Tal y como hemos dicho con anterioridad, no se justifica en el expediente la adecuación de las dotaciones de personal proyectadas para el correcto cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 12.

Hay que destacar, en cualquier caso, que el dimensionamiento final de la plantilla, y por consiguiente el coste asociado a ella, sería el que resulta, en su caso, del análisis que específicamente realice en su momento la Dirección de Función Pública, en los correspondientes procedimientos que se promuevan para la creación de dichas plazas.

2. Con respecto a la falta de coste económico que se vincula a la ubicación de la sede la entidad en locales de nuevo campo de fútbol en Bilbao, si bien tal ubicación no comporta incidencia económica directa y a futuro en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, no puede entenderse que carece de contenido económico, pues la realidad es que la cesión de tales locales tiene un valor económico inquestionable y que si no se exige aportación económica a futuro es porque dicha aportación se ha materializado a través de *"la participación en la sociedad encargada de la construcción de la citada instalación deportiva"*. Entendemos, por ello, que la memoria económica hubiera debido evaluar el coste estimado que la ubicación de la sede del ente en tales locales comporta.
3. Por último, tal y como hemos dicho antes, no se ofrece estimación cuantitativa del coste adicional que supondría la realización de aquellas actividades, servicios o prestaciones que corresponderá realizar, de forma novedosa, a la Administración de la CAE, que permita apreciar en alguna medida el alcance o dimensión económica de la asunción de tales actuaciones, así como deducir su viabilidad financiera.

Llegados a este punto, procede remitirse a las **consideraciones vertidas por la Dirección de Presupuestos en su informe de 21 de julio de 2011**, relativo al presente anteproyecto de Ley, que suscribimos en su integridad (se acompaña como anexo del presente informe) y cuyos aspectos esenciales y conclusiones finales, en lo que se refiere a la financiación presupuestaria del gasto correspondiente a esta administración, transcribimos a continuación:

1 – Gastos de Personal

En cuanto a los Gastos de Personal, la actual Dirección de Deportes del Departamento de Cultura ya cuenta con un médico especializado en el tema de los controles que sería readscrito a la Agencia, por lo que se crearían 2 puestos de trabajo, además del Alto Cargo

En relación a esta creación de los 2 puestos se debe tener en cuenta que en estos momentos la Instrucción de Función Pública por la que se establecen medidas para la contención del gasto de personal en 2011, en lo relativo a la creación de plazas indica que:

'Todas las solicitudes de creación de nuevas dotaciones quedan temporalmente suspendidas hasta que el análisis organizativo determine las necesidades de los departamentos/organismos autónomos. Se autorizará la creación de aquellas dotaciones que supongan un ahorro efectivo para la Administración por ser consecuencia del desempeño con recursos propios de actividades actualmente externalizadas.

Cualquier proceso de creación de plazas ligado a una amortización será riguroso, con la aplicación del análisis de carga de trabajo en el Departamento solicitante".

Así mismo, en las Directrices económicas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAE para el año 2012, en lo relativo a los gastos de Personal, se indica que no incrementará la plantilla presupuestaria con respecto al total agregado de las plazas existentes a 31 de diciembre de 2011.

Por otra parte, dado que la creación de las nuevas plazas se debería realizar cuando se crea la Agencia, es decir, a la entrada en vigor de la Ley, al tramitar su creación se deberá atender a la normativa vigente en ese momento

2 – Presupuesto

La Dirección de Deportes (Programa 4512-Deportes) viene contratando la mayoría de los servicios que deberá utilizar la futura Agencia Vasca Antidopaje para la realización material de los controles.

En base a la información de la Memoria Económica, en el siguiente cuadro se ha intentado hacer una aproximación comparativa, para el ejercicio 2011, entre el coste de las actuaciones en esta materia de la Dirección de Deportes (Programa 4512-Deportes) y el coste del inicio del funcionamiento de la Agencia:

	Agencia	Presupuesto 2011	Diferencia
Gastos de Personal	254.120,58	68.408,90	185.711,68
Gastos de Funcionamiento	104.864,13	101.864,13	3.000,00
Otros Gastos Corrientes e Inversiones (Medios materiales)	100.000,00		100.000,00
TOTAL	458.984,71	170.273,03	288.711,68

La creación de la Agencia supondría un coste adicional de alrededor de 300.000 euros.

En cuanto a los ingresos de la Agencia, en la Memoria Económica se cuantifican en torno a los 6.000 euros, sin concretar su naturaleza.

En relación a esto, en el artículo 30 del anteproyecto de Ley se indica el producto de las multas recaudado como consecuencia de la potestad sancionadora de la Agencia "constituye un ingreso de derecho público que se afecta al cumplimiento de los fines de investigación indicados en el artículo 12 y que permitirán generar a la Agencia Vasca Antidopaje los créditos necesarios para el desarrollo de dicha actividad, cuya realización material se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley".

3 Otras consideraciones

- Esta Dirección de Presupuestos considera que ni la plantilla prevista para la nueva entidad ni las dotaciones económicas de su presupuesto aconsejan la creación de la nueva entidad. Es decir las cargas administrativas que conlleva la gestión de una nueva entidad encarecerán los servicios que presta la administración en esta materia. A nuestro entender se pueden gestionar las actividades previstas desde un centro de gasto adscrito a una Dirección del Departamento de Cultura.

- La segunda consideración es relativa a la forma jurídica adoptada para la nueva entidad. Llama la atención que no se elija ningún tipo de entidad contemplada en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, para el sector público de la CAE, cuyos presupuestos se regulan en el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En la Memoria Económica que presenta el Departamento de Cultura se justifica la elección de este tipo de entidad por la necesidad de independencia funcional. Debemos señalar que hay abundantes ejemplos en nuestro ámbito institucional en los que existe autonomía funcional y se realizan actuaciones con carácter de máxima confidencialidad desde centros o servicios de la propia Administración General (tribunales administrativos, de la competencia, económico administrativo, Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, ...) o desde otras entidades contempladas en las dos normas antedichas. En consecuencia, en caso de que se opte por la creación de una entidad, proponemos que se elija una figura jurídica contemplada en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, para el sector público de la CAE. Entre ellas, la figura más apropiada sería la de organismo autónomo administrativo por ejercer potestades sancionadoras administrativas a que se refiere la Memoria relativa al proyecto de ley contra el dopaje en el deporte de la Dirección de Deportes.

- El coste económico que supone la creación de la Agencia Vasca Antidopaje, deberá ser asumido con las dotaciones económicas que tenga asignadas en ese momento el Departamento competente en materia de deportes, procediendo, si fuera necesario, a la realización de las modificaciones presupuestarias oportunas dentro de los créditos de los mismos.

- En cualquier caso si, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley contra el Dopaje en el Deporte, se incurriese en algún coste económico adicional, deberá ser asumido con las dotaciones económicas que tenga asignadas el Departamento competente en materia de deportes.

- Una vez creada la Agencia Vasca Antidopaje, las transferencias que para su sostenimiento se pudieran realizar con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE, deberán ajustarse anualmente a las directrices económicas que apruebe el Gobierno.

- Se debería incluir en el anteproyecto de la Ley contra el Dopaje en el Deporte alguna disposición en la que "se autoriza al Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia presupuestaria para crear la sección presupuestaria correspondiente y para realizar, de acuerdo con la legislación reguladora del régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las modificaciones presupuestarias precisas para la aplicación de lo dispuesto en esta ley".

- Finalmente, desde la Dirección de Presupuestos se considera que, dado que en el ejercicio 2012 la CAE daba seguir cumpliendo sus compromisos con la estabilidad presupuestaria y se va a continuar con la política de ajuste y consolidación fiscal necesaria para la sostenibilidad de las finanzas públicas

vascas, no parece adecuado la creación de una nueva estructura organizativa como la Agencia Vasca Antidopaje.

En este sentido debería tomarse en consideración la Directriz Económica Séptima para la Elaboración de los Presupuestos Generales de la CAF para el año 2012, relativa a la "No creación de nuevas entidades del sector público" en la que se indica que "No se contemplará la creación de nuevos OOA, Entes Públicos de Derecho Privado, Sociedades Públicas, Fundaciones y Consorcios. Sólo se constituirán los que a 31 de diciembre de 2011 ya tuvieran aprobada su creación."

IV. CONCLUSIÓN.

Una vez analizado el texto del anteproyecto, así como el resto de la documentación que obra en el expediente, debemos realizar las siguientes consideraciones a modo de conclusión:

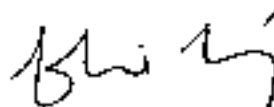
1º.- No se ha acreditado de forma suficiente la necesidad de crear una nueva entidad para la consecución de los objetivos pretendidos, ni tampoco las razones que avalan la específica creación de un ente de derecho público, atípico en el ámbito de esta administración.

2º.- Las dotaciones de personal que se evalúan económicamente en la memoria económica no coinciden con las previstas en el propio texto del anteproyecto, sin que se haya fundamentado de forma suficiente la adecuación del dimensionamiento de personal estimado para el cumplimiento de las funciones a desempeñar.

3º.- La creación de una nueva entidad en el sector público, y la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo, van en contra de las directrices adoptadas en el seno de este Gobierno para el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y con la política de ajuste para la sostenibilidad de las finanzas públicas vascas.

4º.- Por las razones apuntadas, esta Oficina debe informar **DESFAVORABLEMENTE** el anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte en los términos en que ha sido planteado.

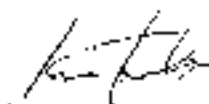
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2011



Fdo.: Julia Sirés

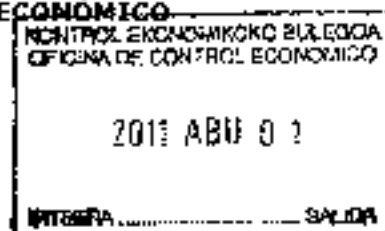
CONTROL ECONÓMICO NORMATIVO

Vº Bº:



Fdo.: Javier Serrano Chamizo

DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO



EKONOMIAREN ETA ARAUEN KONTROLARI BURUZKO TXOSTENA, KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAK EGINIKOA, KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGEAREN AURREPROIEKTUARI DAGOKIONEZ

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak ekonomia- eta araudi-kontrola arautzen du III. tituluko IV. kapituluan. Derrigorrezko izaera du, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako txostenaren bidez gauzatzen da.

Kontrol horren barnean sartzen da, ekonomiari eta antolaketari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioiko organoen sorrerari eta kentzeari dagokion fiskalizazioa, bai eta horien aldaketak eta berregituraketak ere.

Aintzat hartuta bai aipatutako arau hori, bai urriaren 31ko 464/1995 Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren alorrean barne-kontrol ekonomikoa antolatzen duenak– III. kapituluaren 3. paragrafoan xedatutakoa, bai urriaren 20ko 568/2009 Dekretuak –Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura eta eginkizunak ezartzen dituenak– 10. artikuluan adierazitakoa, honako txosten hau egin da:

TXOSTENA

I. XEDEA.

Goiburuan jasotako proiektuari buruzko ekonomia eta arauak kontrolatzea du xede txosten honek. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kiroleko dopinaren aurkako borroka erregulatzea da proiektua. Erregulazio horretan, ondorengoa izango da dopatzea: kirolariaren errendimendua artifizialki handitzeko, debekatuta dauden substantziak hartzea edo debekatutako metodoak erabiltzea; hori guztia kirol-espirtuaren aurkakoa izango da.

II. AURREKARIAK ETA IGORRITAKO DOKUMENTAZIOA.

Legearen beraren hitzaurrean adierazten denez, legea idazteko arrazoi nagusia ekainaren 11ko 14/1998 Legean dopinaren arloan jasotzen diren xedapenak gaur egungo egoerara egokitu beharra izan da, nabarmena delako premia hori; eta Euskadik asmo handiko esparru juridikoa izatea ere lortu nahi du, gure kiroletik dopinaren gaitz larria eraginkortasunez erauzten saiatzeko.

Aipatutako aurreproiektu hori jasotzen du Gobernu Kontseiluaren 2009ko azaroaren 17ko Akordioaren eranskinaren 11. paragrafoak, Legegintza Egutegia (2009-2013) onartzen duenarenak. Kultura Sailari egotzitako ekimen gisa jasota dago, "Euskal Autonomia Erkidegoko Dopinaren Aurkako Legea" izenarekin, 2010eko laugarren hiruilekorako aurreikusia. Akordio horretako II. eranskinaren 48. atalean –fitxa informatiboen dokumentua– honako hau jaso da:

48.- Euskal Autonomia Erkidegoko Dopinaren aurkako Lege-proiektua

a.1.) Erregulazioaren helburu nagusia:

14/1998 Legean Euskadin dopina prebenitu, kontrolatu eta zigortzeko ezarritako xedapenak gaur egungo errealitatera egokitzea, dopina modu eraginkorrean errotik kentzeko helburuarekin.

a.2.) Beste helburu batzuk:

- *Euskal Autonomia Erkidegoko antolamendu juridikora dopinaren definizioa sartzea.*
- *Legearen aplikazio-esparru subjektibo orokorra zehaztea. Alegia, honako hauek hartuko dira barnean: federazioaren, unibertsitatearen edo eskolaren euskal lizentzia —Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gaitasuna ematen duena— duten kirolariak; Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen edo lehiatzen diren kirolariak; eta lizentzia horietakoren bat duten edo kirol-jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan egiten duen beste edozein pertsona fisiko edo juridiko, nahiz eta lehiaketa ofizialak ez izan.*
- *Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzea, kirola sustatzeko eginkizunak (goi-mailakoak zein goi-mailakoak ez diren gainerako lehiaketako kirol-jarduerak) eta dopin-jardueren kontrola bereizteko helburuarekin.*

a.3.) Eragindako gizarte-sektoreak (proposatzen den arauketak sektorearentzat duen garrantziaren arabera hurrenkeran):

- *Kirolariak*
- *Klubak*
- *Kirol-federazioak*
- *Administrazio publikoak*
- *Herritarrak, oro har*

b) Finantza-eragina (zenbatetsia):

Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzeak berekin ekarriko duena. Agentzia horrek oso antolaketa bakuna izango duela aurreikusi da: oinarri izango ditu kide bakarreko organo bat, Zuzendaritza, eta kide anitzeko organo bat (Aholku Batzordea), neurri egokiduna.

Administrazioaren zehapen-ahalmena gauzatzean ezar litezkeen zigor ekonomikoen ondoriozko bilketa dela-eta kredituak sortzeko aukera aurreikusi da.

c) Lege-proiektua gutxi gorabehera noiz bidaliko den Gobernu Kontseilura onar dezan:

2010eko laugarren hiruhilekoa.

Gobernu Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko Akordioan xedatutakoari dagokionez – xedapen orokorrak izapidetzeko jarraibideak onartzekoa–, lehen paragrafoaren 1. lerrokadan dio: "*Hasteko agindua lankidetzarako gunean –Legesarea– jakinaraziko da*", eta 3. lerrokadan, berriz: "*Sail guztiek dute betebeharra Lege-proiektuak eta arau-xedapen orokorrak izapidetzeko, eta helburu horretarako garatutako aplikazio informatikoa erabiliko du bakar-bakarrik*" baldin eta "*arau-xedapena Akordio hau onartu eta gero eman bada*" (bigarren lerrokada). Horrenbestez, hori ez da aplikatzekoa, Kultura sailburuak 2012ko uztailaren 14an onartutako Agindu bidez eman baitzitzaion hasiera espedienteari.

Testuingurua halakoa izanik, eta aipatutako konpromisoa betetze aldera, dagokion espedientea egin da. Kultura Sailak hurrengo lerroetan azaltzen den dokumentazioa bidali du Bulego honetara, horren gaineko ekonomia- eta araudi-kontrola egiteko.

Helarazitako dokumentazioa aztertuta, uste da hura bat datorrela funtsean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Barneko Ekonomiaren Kontrola eta Kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 42. artikuluan ezarritakoarekin, eta nahikoa da bulego honek arauaren kontrol ekonomikoko jarduna garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.etik 27.era bitarteko artikuluetan zehaztutako baldintzetan.

Edonola ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, aurreproiektua aholku-erakunde horren irizpenaren pean jarri behar da onartu aurretik.

Horri dagokionez, gogorarazi beharrekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (*Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen Azken Xedapenetan lehenengoak emaniko idazketaren arabera*), jakinarazi egin beharko zaizkiola Kontrol Ekonomikoko Bulegoari lege aurreproiektuetan eta xedapen arautzaileen proiektuetan sartu ahal diren aldarazpenak, horiek Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren iradokizun eta irizpen proposamenen ondorio direnean (*horretarako, Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendariaren 2005eko urriaren 14ko 2/2005 zirkularrean ezarritakoa bete beharko da*).

III. ESPEDIENTEAREN ANALISIA.

Jaurilaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak 57. artikuluan agintzen du lege-proiektuekin batera azterketa bat egin behar dela, lege berriak eragin dezakeen aurrekontu-kargari buruzkoa.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, proiektuaren espedienteak "*memoria ekonomiko bat edukiko du, eta, hor, egitekoa den arauaren kostuaren zenbatespena azalduko da: gastu eta diru-sarrerak zenbatuta agertuko dira, eta, orobat, herri-administrazioaren aurrekontuetan izango duen eragina, finantzaketa-iturri eta -erak nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ekonomia- eta araudi-kontrolaren gaineko arauak zehaztutako beste alderdi batzuk. Hura aplikatzeak beste herri-administrazio batzuei, banakoei eta oro har ekonomiari ekarriko dion kostua ere neurtuko du*".

Ekonomiaren eta arauen kontrolari buruzko arautegiari dagokionez, *Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuko 42. artikulua berariaz ezarritakoaren arabera*, ekonomiaren eta arauen kontrolari buruzko txostena emateko ezinbestekoa da memoria bidaltzea, honako datu hauek kontuan hartuta: araua indarrean jartzeak ekarriko dituen aurrekontu-gastuak eta sarrerak; gastu horiek finantzatzeko moduak; xedapenaren aurrekariak eta justifikazioak; xedapena xertatuko den aurrekontuko programa ekonomikoa, haren helburuak, ekintzak eta adierazleak adierazita; araua aplikatzeak ekonomian eta gizartean izango duen eraginaren ebaluazioa; proposatzen den arauaren ildo nagusiak eta oinarri juridikoak ezagutzeko behar diren datu, txosten eta azterlan guztiak. Aipatutako dekretuaren 43. artikulua ezarritakoaren arabera, ekonomia-kontrola, ekonomia- eta antolaketa-mailako modalitateari dagokionez, dokumentazio gehigarria aurkeztu beharko da, hau da: bitarteko materialak eta giza baliabideak, ohiko gastua edo kapital mailakoa ekar dezaketenak bereizita, funtzionamenduaren kostuari eta zerbitzuen errendimendu edo erabilgarritasunari buruzko azterlan ekonomikoa.

Aholku Batzorde Juridikoaren 43/1999 irizpenak adierazten duenez, arauaren bideragarritasunari buruzko aurreikuspen-xede nagusirako, sortuko den gastu publikoaren azterketaz gain, ikerlan zabalagoa ere eska liteke, gizarteari delako araudia aplikatzeak ekarriko dion ahalegin ekonomikoa aintzat hartzeko eta aplikazio horrek sor ditzakeen onura ekonomiko eta bestelakoekin konparatzeko, halako moduz non bi alderdiak proportzionaltasunaren printzipioaren arabera neurtuko diren. Azterketa hori edo kostuen eta etekinen ebaluazio hori egiteko, proiektuak dakarren gastu publikoaren balioespena egiteaz gain (Espainiako Konstituzioak baliabide publikoen bidezko banaketa agintzen duenean 31.2 artikuluan xedatzen du kostuen eta etekinen ebaluazio

hori aintzat hartzen duen gastu publikoen balioespena egin behar dela), haztatu egin behar dira ezarri nahi den arauak sortuko lituzkeen betebeharrekin eta baldintzek enpresa-ekimenei eta inplikaturik dauden profesionalei ekar diezazkiekeen ondorio ekonomikoak. Aurreikusi behar da, besteak beste, eragin horrek zenbait ondasun eta zerbitzuren prezioan izan ditzakeen ondorioak.

Laburbilduz, eta araua onetsi aurreko hausnarketa-prozesuaren barruan, ezarri nahi den arau horrek eragingo duen gastuaren ebaluazio osoa egingo litzateke, gastu publikoan ekonomia- eta eraginkortasun-printzipioak betetzen direla bermatzeko. Gainera, arauak norbanakoengan eta ekonomian oro har izango duen eragin ekonomikoa ere aztertu behar da, arrazoizkoa eta bideragarria dela bermatzeko.

Hori guztia aipatuta, eta bidalitako dokumentazioa aztertuta, Bulego honek ekonomia- eta arau-kontrola nahiz ekonomia- eta antolamendu-kontrola egingo ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.etik 27.era bitarteko artikuluetan ezarritakoari jarraiki. Txosten honen zeregina, hain zuzen ere, hori da.

A) Antolamendu-alderdiak

Administrazioari dagokionez, **zuzenbide publikoko erakunde** berriaren sorrera izan da nabarmenena, hau da, "Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia" (10., 11. eta 12. artikulua). "*Dopinari aurrea hartzeko eta dopina kontrolatu eta zigortzeko arloan, Eusko Jaurlaritzari dagozkion ekintzak diseinatu eta gauzatuko ditu*" (10.1 artikulua). Erakunde horren organoak dira: zuzendaria, idazkaria, aholku-kontseilua eta erabilera terapeutikoko baimenetarako euskal batzordea, eta, horiez gain, Agentziaren estatutuan ezartzen direnak (11.1. artikulua).

Lehenengo xedapen indargabetzailearen arabera, erakunde berriari emango dizkio Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroak dopinaren alorrean zituen zereginak. 14/1998 Legeak sortutako zerbitzu administratiboa da, eta zereginetako bat hau zuen: "*Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurkako kontrola planifikatzea eta kudeatzea*".

Ikusten da espedienteak proiektuaren justifikazio-memoria bat jaso duela, eta berariazko paragrafo bat duela arrazoitzeko zergatik den egokia Dopinaren Aurkako Euskal Legea. Memoria horretan arrazoitzen da zergatik aukeratu den antolamendu-modu hori; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko autonomia-estatutuak, 10.2. artikuluan, eskumena ematen dio EAEko Administrazioari bere administrazio-antolamendua askatasunez erabakitzeko, baina egia da, era berean, alor horretan hartzen diren erabakiak behar bezala arrazoitutakoak izan behar dutela. Ildo horretatik, askoz egokiagoa izango zen bidali zaigun memoriak hobeto zehaztu izan balu zernolako ondorioak izango dituen, administrazio honentzat, legeak Erakunde berriarentzat arautzen dituen deszentralizazioak eta autonomiak, behar bezala ikusteko zenbateraino den arrazoizkoa proposatzen den egitura berria, administrazioaren efizientziari erreparatuta.

Horrenbestez, helarazitako memoriak ez ditu behar beste zehazten, gure ustez, egungo antolamenduari buruzko alderdi batzuk (Kirol Zuzendaritzaren bitarteko materialak, giza bitartekoak, prozedurazkoak eta antolamenduzkoak, eta, zehatzago esanda, Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroa izeneko zerbitzu administratiboarenak, eta azken horri eman zaizkio, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurkako kontrolaren planifikazio- eta kudeaketa-zereginak), eragozten dutenak EAEko administrazioari lege bidez egozten zaizkion zereginak eraginkortasunez egitea, eta eraginkortasun handiagoz egin ahalko zirenak agentzia eratuz gero. Alde horretatik, gogorarazi nahi dugu urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 43. artikulua ezarritakoa, izan ere, honela dio: "*Erakundea edo organoa sortzeko beharra edo horren*

egokitasuna justifikatzea, gauzatu behar diren edo horietan sartuko direneko programa ekonomiko- eta aurrekontu-mailakoak bete ahal izateko, "horrez gain, entitate hori sortzeaz lortzea nahi deneko ertain mailako denboraldiaren barruan kuantifikagarriak diren helburuak definitu beharko dira, eta horiek betetzeko bideak eskainiko dituzten adierazleak ere finkatu beharko dira, nahiz objektiboak, nahiz subjektiboak". Bi alderdi horiek ez dira helarazitako espedientean jaso.

Justifikazio-memoriak erakundearen sorreraren nondik norakoak arrazoitu baino ez du egiten, arrazoi hauek emanda:

- 14/1998 Legea indarrean sartuz geroztik, dopinaren aurkako agentzia nazionalak sortzeko joera orokortu egin da, zenbait zereginetan gehiago espezializatu ahal izateko independenteak izanik, eta kirola sustatzeko zereginak eta dopin-jardueren kontrola bereizteko;
- azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoak, osasuna babestekoak eta kiroleko dopinaren aurka borroka egiteari buruzkoak, autonomia-erkidegoetan dopinaren aurkako agentzien sorrera xedatzen du, eta dopinaren aurkako agentzien batzordea eratzeari buruz honela dio: "*baldin eta aplikazio-eremua autonomia-erkidegoa duten dopinaren aurkako agentziak daudela egiaztatzen bada*".
- Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura Batzordearen 2006ko otsailaren 22ko Akordioaren bidez, Eusko Jaurlaritzari eskatu zioten Euskadiko kirolean dopina prebenitzea, kontrolatzea eta zigortzea helburu zuen dekretua idatz eta onar zezala, "*Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren sorrera bere baitan hartzen zuela*".

Bulego honen ustez, emandako argudio horietako bakar bat ere ez da nahikoa arrazoi proiektuak aipatzen duen eskubide publikoko erakunde bat sortzeko.

Batetik, eginbeharrekoak behar bezala egiteko ezinbestez independente izateko argudioak ez dira justifikatzen. Organo eta erakunde jakin batzuk independenteak direla berme kualifikatua dute, baldin eta horiek administrazioaren beraren jardunari buruzko nolabaiteko kontrola egin behar badute (esate baterako, Datuak babesteko Euskal Agentzia, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa, berezko izaera juridikorik ez duen Administrazio Orokorraren kide anitzeko organoa). Espedientean ez da sumatzen ez eta ematen ere berariazko arrazoirik, berezko izaera juridikoa izango duen erakundea sortzeko, horren bidez independentzia berezia bermatze aldera eginbeharrak behar bezala eta eraginkortasunez egiteko.

Bestetik, adierazitako arrazoiengan "agentzia" erabiltzeak ez du esan nahi nortasun juridikoa izatea, modalitate hori ez baita berariazko kategoriatzat existitzen gure erakunde-antolaketan. Estatuko Administrazioan, ordea, hori ez da hala. Izan ere, estatuko agentziak erakunde publikoak dira eta berariazko erregulazioa dute, Estatuko Agentziei buruzko uztailaren 18ko 28/2006 Legean jasoa. Bertan, kudeaketa gardena eta kalitatezkoa izatea eskatzen zaie, helburuen bidez neurtzeko modukoa. Gure erakunde-antolaketaren eremuan, "agentziak" esaten zaienek ez dute lekurik Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legeak bere baitan hartzen dituen erakunde instrumentalen modalitate bakar batean ere.

Horrenbestez, ezohiko erakunde publikoa da, erregulazio orokorrik gabea eta berariazko lege baten bidez sortua, haren araubide juridikoa xedatzen duena.

Alderdi horretatik ere ez du justifikazio-memoriak berariazko arrazoirik ematen ezohiko erakunde bat sortzeko premia dagoela erabakitzeko, geure antolaketa-sistemakoak desegokiak izateagatik (horrek derrigorrean hutsuneak eragiten ditu gai askori aplikatzekoa den araudiarekiko, lehendik dagoeneko araututa daudenak gainerako erakunde-administrazioentzat eta euskal sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeentzat, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 7. artikuluan xedatutakoari jarraiki eratuak horiek. Alde horretatik, proposatutako moduan Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzeko, eginkizunak eraginkortasunez betetzeko egungo antolaketak dituen gabeziak identifikatzeaz gain, erakunde instrumental bat hautatzeko arrazoi zehatzak identifikatu beharko lirateke, hain zuzen, aipatutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 7. artikuluan xedatutakoaren arabera euskal sektore publikoaren barruan lekuri izango ez lukeen erakunde instrumentala).

Eta azkenik, ez dirudi zentzuzkoa eta horri buruzko argudiorik ere ez da ematen espedientean, asmo handiko funtzio-zerrenda bat egiteko erakunde jakin bat sortzea (aurreproiektuaren 12. artikuluan zehaztutakoa), eta, horrez gain, erakunde horrek giza baliabide hain gutxirekin bete nahi izatea bere eginkizunak. Izan ere, giza baliabideak, memoria ekonomikoaren arabera, honako hauek osatzen dituzte: zuzendaria, mediku arduradun bat, aholkulari juridiko bat eta administrari bat.

Kontuan izan behar da agentzia sortzeak berak, berezko nortasun juridikoa izango duenak eta Administrazio Orokorrarekiko independentea izango denak, derrigorrean dakarrela erakunde publiko guztiek betetzen dituzten eginbehar jakin batzuk betetzea agentzia horrek ere (kontratazioa, kontabilitatea, nomen kudeaketa...). Eginbehar horiek agentziak berak egitekoak dira, eta aurreproiektuaren 12. artikuluan adierazitako funtzio-zerrendan erantsi behar dira.

Gai horretan gehiago sakondu gabe, nabarmena da oso zaila izango litzatekeela proposatutako giza baliabideekin alderdi horiei guztiei aurre egitea, eta derrigorrean kanpoko zerbitzuak beharko litzuketela. Alderdi horri dagokionez, Gobernu Kontseiluaren 2010eko urriaren 19ko Akordioak, zerbitzuak kanporatzeko irizpideei buruzkoak, lantzen ari garen gaiari buruzko zenbait jarraibide ematen ditu, nekez betetzekoak [ikusi norberaren baliabideen bidez eman behar diren zerbitzuak, akordioaren hirugarren paragrafoan jasotakoak, eta, bereziki, C) lerrokadan jasotakoak].

Amaitzeko, agerian utzi nahi dugu, halaber, proposatutako aukera eta proposatutako organoen eta funtzioen birbanaketa ez datorrela bat maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuak, Lehendakariarenak, Azken Xedapenetan lehenengoan ezarritakoarekin. Izan ere, sailen egitura zehazten du, eta antolaketa-irizpide hauek kontuan hartuta diseinatu behar direla dio: zorrotasuna eta murrizketa, hau da, administrazio-organoen kopuruak, oro har, orain artekoak baino txikiagoa izan behar du.

Horrenbestez, esan daiteke espedientean ez dela behar bezala egiaztatu zuzenbide publikoko erakunde bat sortzea beharrezkoa denik proposatutako helburuak betetzeko, ez eta proposatutako giza baliabideak egokiak direnik ere. Horrez gain, zorrotasunari buruzko antolaketa-irizpidearen aurkakoa da, eta bereziki ari dira horri buruz behin eta berriz informatzen Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari.

Merezi du azken ohar bat egitea atal honetan, hain zuzen, erakundearen egoitzari buruzkoa. Izan ere, legean ez da ezer zehazten, eta, beraz, badirudi Bilboko San Mames Barria futbol-zelai berriaren lokal berrietan izango duela egoitza. Horren haritik, egokia iruditu zaigu Etxepare Euskal Institutua sortzeko lege-aurreproiektuari buruz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak eman zuen 69/2006 Irizpena, hain zuzen ere, erakundearen egoitzari dagokionez:

"48. Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen berezko eskumenen egikaritzaz deszentralizatu baten aurrean gaude (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 15. artikulua; haren testu bategina azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartu zuen). Horrenbestez, aplikatzekoa da, kasu honetan, EAEko autonomia-estatutuko 4. artikulua, erakunde komunen **egoitza Lege bidez izendatu behar dela** xedatzen duena.

49. Batzordeak ulertzen du autonomia-estatutuak egiten duen aurreikuspen hori ez dela maiatzaren 23ko 1/1980 Legeak, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Erakunde Egoitzari buruzkoak, arautzen duenaren baitan agortzen, bai baitaude egoitzak, lege horrek araututakoarekin bat etorri gabe, Vitoria-Gasteiz hirian ez daudenak, baina autonomia-estatutuak argi arautzen du egoitza horiek zehazteko Eusko Legebiltzarrak emandako lege bat behar dela.

50. Ordenamendu juridikoak berak nabarmentzen du egoitzak kokatzeko (oro har, hiriburuetan kokatzen dira) erabakiek garrantzi politikoa dutela; Espainiako Konstituzioaren 147.2.c) artikulua hitzez hitz adierazten du autonomia-estatutuek zehaztuko dutela nola hartuko diren erabaki horiek, eta Estatuaren kasuan, berariaz arautzen du 5. artikuluan ezingo direla erabaki horiek legearen esparrutik aldentu, ez gobernuaren alde, eta ez, noski, sail baten alde ere.

51. Arrazoibide-ildo hori bera jarraitu genuen Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pribatupeko erakunde publikoaren eta OSALAN erakunde autonomiadunaren kasuetan eman genituen (Aholku Batzorde Juridikoa) ABJI 56/2003 eta 32/2002 irizpenetan, hurrenez hurren. Irizpen horietan esan genuen moduan, "Lege batek soilik arau dezake Egoitzei buruzko Legeak araututakoa salbuesteko aukera, baina, betiere, salbuespen hori egiteko nahikoa arrazoi badago" (44. paragrafoa). Horrenbestez, ezin da organo betearazle baten esku utzi egoitza erabakitzeko ardura, eta, horrez gain, legeak ezer arautzen ez duen neurrian, ezingo litzateke gerora bestelako egoitzarik finkatu".

B) Ekonomia- eta aurrekontu-eragina.

Aztertu dugun proiektuak antolamenduari dagozkion alderdiak jasotzeaz gain, administrazio honen eremuan izan dezakeen eragin ekonomikoa ere jaso du. Eragin horren zati bat memoria ekonomiko honetan kuantifikatuta dago, eta espedientean erantsi da. Dopinarekin Aurrakako Euskal Agentzia sortzeak eragingo dituen gastuak soilik kuantifikatzen dira, eta gaur egun betetzen diren eginkizunaz gain eginkizun berriak bere gain hartzeak eragin dezakeen kostuari buruzko analisirik ez da jaso (12. artikuluan adierazten den funtzio-zerrendaren arabera, funtzio berriak hartzen ditu bere gain dopinarekin aurrakako borrokaren eremuan).

Zenbateko ekonomiko hauek jaso dira memoria ekonomikoan:

A). Diru-sarreraren alderdia:

Helarazi zaigun memoria ekonomikoan, urtero 6.000 euroko diru-sarrera izango dela kalkulatu da, haien nolakotasuna zehaztu gabe.

B). Gastuen alderdia:

Memoria ekonomian adierazitakoaren arabera, Euskal Agentziaren urteko aurrekontua 458.984,71 eurokoa izango da gutxi gorabehera; gastuak honela banatu dituzte:

1.- Langileen ordainsariak (4 lanpostu); hau da, honako hauen kostua: 1 zuzendari, 1 arduradun mediko (26. maila), 1 lege-aholkulari (24. maila), eta 1 administrari (18. maila); guztira, 254.120,58 euro.

2.- Laborategiko gastuak; kasuan kasuko dopin-kontrolak egiteaz arduratuko dena: 71.846,13 euro (2011. urterako kalkulaturako gastua, 4512 Programan –Kirolak–).

3.- Laginen bilketa; kirolariei gernu- eta odol-laginak ateratzeko baimenduta dauden medikuek eragindako gastua: 30.000 euro (2011. urterako kalkulaturako gastua, 4512 Programan –Kirolak–)

4.- Aholku-kontseilua: ez dira kuantifikatu, ez delako inolako gasturik aurreikusten, gastuak eta dietak izan ezik "horiek funtzionamenduak eragindako ohiko gastuetan sartzen dira".

5.- Erabilera Terapeutikoko Baimenetarako Euskal Batzordea: erabilera terapeutikoko eskaerak azter daitezkeela kontuan hartuta, urtean 3.000 euro bakarrik aurreikusi dira eginkizun hori beteko duen kanpoko medikua kontratatzeko.

6.- Bitarteko materialak (altzariak, informatika-ekipoak, material suntsigarria, etab.): urtean 100.000 euro aurreikusi dira.

7.- Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren lokala: memorian adierazi dute ez dela inolako gasturik aurreikusi lokalerako, *"izan ere, Bilboko San Mames Barria futbol-zelai berriaren lokaletan jartzea da asmoa. Lokal horiek Eusko Jaurlaritzari eman dizkiote, kirol-instalazioa eraikitzeaz arduratu den sozietatean parte hartu zuelako"*.

Aurreikusitako gastuei dagokienez, hona hemen oharra:

1. Langileei ordaintzeko gastuei dagokienez, ez da agentziako idazkariaren kostua kuantifikatu (memoria ekonomikoan ere ez da aipatzen); agentziaren organoetako bat da, lege bidez berariaz sortua (11. artikulua, 1. eta 6. paragrafoak).

Lehen esan dugun bezala, espedientean ez da justifikatzen 12. artikuluan adierazitako eginkizunak behar bezala betetzeko proposaturako langile-kopurua.

Nabarmentzekoa da, edonola ere, guztizko langileen kopurua eta, ondorioz, haiek eragingo luketen kostua jakiteko, Funtzio Publikoko Zuzendaritzak berariaz egingo duen analisiari erreparatu beharko litzaiokeela, lanpostu horiek sortzeko abian jartzen diren prozeduren baitan.

2. Erakundearen egoitza Bilboko futbol-zelai berriaren lokaletan kokatzeak kostu ekonomikorik ez duela baieztatzeari dagokionez, argitu behar da, egia dela kokapen horrek ez dakarrela eragin ekonomiko zuzenik eta aurrera begirakorik Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan, baina, halaber, ezin da ulertu eduki ekonomikorik ez duenik. Izan ere, berez, lokal horiek lagatzeak zalantzan jar ezin daitekeen balio ekonomikoa du, eta gerora begira ekarpen ekonomikorik ez da eskatzen, hain zuzen, ekarpen hori *"kirol-instalazioa eraikitzeaz arduratu den sozietatean parte hartuta"* gauzatu delako. Hori guztia kontuan izanik, gure iritziz, memoria ekonomikoak ebaluatu egin behar zuen erakundea lokal horietan kokatzeak eragingo lukeen kostua.

3. Azkenik, eta lehen adierazi badugu ere, memoriak ez du jaso EAEko Administrazioak, lehen aldiz, egin beharko lituzkeen jarduera, zerbitzu edo prestazio horiek eragin ditzaketen kostu gehigarrien kalkulu kuantitatiborik; beraz, ezin da jakin zenbateko kostu ekonomikoa izango duen jarduera berri horiek bere gain hartzeak, eta ezin da, era berean, haien finantza-bideragarritasuna aztertu.

Horrenbestez, eta testuingurua halakoa izanik Lege-aurreproiektuari dagokionez, **Aurrekontuen Zuzendaritzak 2011ko uztailaren 21ean eman zuen txostenean egin zituen oharrak** ekarri behar ditugu hona, erabat ados baikaude adierazitakoekin (txosten honen eranskin gisa atxiki ditugu). Ondorengo lerroetan transkribatuko ditugu txosten haren funtsezko alderdiak eta azken ondorioak, administrazio honi dagokion gastuaren aurrekontu-bidezko finantzazioari buruzkoak:

"1 - Pertsonal-gastuak

Pertsonal-gastuei dagokienez, egungo Kultura Saileko Kirol Zuzendaritzak badu kontrolen gaian espezializatutako mediku bat, eta Agentziari atxikiko litzaioke; hortaz, 2 lanpostu sortuko lirateke, goi-kargudunaz gain.

Kontuan hartu behar da, 2 lanpostu horien sorrerari dagokionez, Funtzio Publikoak zenbait jarraibide eman dituela langileria-gastuen kontrolerako neurriak ezartzeko 2011n, eta, horren harian, hauxe esaten duela lanpostuen sorrerari buruz:

"Lanpostu berriak sortzeko eskaera guztiak eten egingo dira aldi baterako, harik eta antolamenduaren azterketak zehazten duen arte sail/erakunde autonomiadunek zer-nolako beharrianak dituzten. Administrazioari eraginkortasunez aurrezteak dakarkioten lanpostuak sortzea baimenduko da, baldin eta gaur egun haren kanpoko baliabideen bidez ematen diren jarduerak Administrazioaren baliabide propioez ematea badakarte.

Lanpostuak sortzeko prozesuak zerikusirik baldin badu lanpostuen amortizazioekin, zorroztasun handiz aztertuko da hura eskatzen duen sailaren lan-karga".

Halaber, 2012. urterako EAEko Aurrekontu Orokorrek egiteko jarraibide ekonomikoetan, pertsonal-gastuei dagokienez, adierazten da ez dela langileen aurrekontu-saila gehituko, 2011ko abenduaren 31n zeuden lanpostuen guztizko agregatuarekiko.

Horrez gain, lanpostu berriak Agentzia eratu ondoren sortu beharko liratekeenez, hau da, Legea indarrean jarri ostean, une horretan indarrean dagoen araudiari jarraitu behar zaio lanpostuen sorrera izapidetzean.

2 - Aurrekontua

Kirol Zuzendaritzak (4512 Programa-Kirolak) gaurdaino berak kontratatatu ditu zerbitzu gehienak, etorkizunean izango dugun Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak erabili beharko dituenak kontrolak egiteko.

Memoria ekonomikoaren informazioa aintzat hartuta, ondoren erantsi dugun taulan, alderatu egin ditugu, 2011ko ekitaldirako, Kirol Zuzendaritzak gai honetan gauzatutako jardueren kostua (4512 Programa-Kirolak) eta Agentzia

	Agentzia	2011ko aurrekontua	Aldea
Pertsonal-gastuak	254.120,58	68.408,90	185.711,68
Funtzionamendu-gastuak	104.864,13	101.864,13	3.000,00
Beste ohiko gastu batzuk eta Inbertsioak (Baliabide materialak)	100.000,00		100.000,00
GUZTIRA	458.984,71	170.273,03	288.711,68

abian jartzeak eragingo duen kostua:

Agentzia sortzeak kostua handiago izatea ekarriko luke, hain zuzen, 300.000 euro gehiago, gutxi gorabehera.

Agentziaren diru-sarrerei dagokienez, 6.000 euro inguru izango direla kalkulatu da memoria ekonomikoan, baina ez da horien nolakotasuna zehaztu.

Alde horretatik, Lege-aurreproiektuaren 30. artikuluari jarraiki, Agentziaren zehapen-ahalmenaren ondorioz bildutako isunen emaitza "zuzenbide publikoko diru-sarrera izango da, eta 12. artikuluan adierazitako ikerketa-helburuetarako baliatuko da. Hala, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak jarduera horretarako behar diren kredituak sortu ahal izango ditu, eta kreditu horiek lege honetan ezarritakoari jarraituz baliatuko dira".

3 - Beste ohar batzuk

- Aurrekontu Zuzendaritza honen ustez, erakunde berrirako aurreikusitako lanpostuei buruzkoak aztertu ondoren eta aurrekontuaren zuzkidura ekonomikoa aztertu ondoren, ez da komeni erakunde berri bat sortzea. *Hau da, erakunde berri bat kudeatzeak dakartzan administrazio-kargen ondorioz garestitu egingo dira administrazioak gai honetan ematen dituen zerbitzuak. Gure ustez, aurreikusitako jarduera horiek Kultura Saileko Zuzendaritzari atxikita dagoen zentro batek kudea ditzake.*

-Bigarren oharra erakunde berrirako hautatu den izaera juridikoari buruzkoa da. Deigarria egin zaigu EAEko sektore publikorako ez hautatzea azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzekoan, xedatutako erakunde-motaren bat. Eta horien aurrekontuak maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuaren bidez arautzen dira. Legegintza-dekretu horren bidez, Euskadiko aurrekontu araubidearen arloan indarrean diren lege xedapenen testu bategina onartzen da eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu araubidea arautzen da.

Kultura Sailak aurkeztutako memoria ekonomikoan, funtzionamenduan independente izan beharrarekin justifikatu da erakunde-mota hori hautatu izana. Horren haritik, esan behar dugu gure erakundeen artean badirela Administrazio Orokorren mende dauden zentroak edo zerbitzuak edo lehen aipatutako bi araudi horietan xedatutako beste erakunde batzuk, funtzionamenduan autonomia dutenak eta eginbeharrekoak erabateko konfidentzialtasunez betetzen dituztenak (administrazio-epaimahaiak, lehiaren defentsarako auzitegia, epaimahai ekonomiko-administratiboa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa...). Horrenbestez, erakunde bat sortzea erabakiz gero, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan xedatutako izaera juridikoren bat hautatzea proposatzen dugu. Hain zuzen, EAEko sektore publikorako, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena da. Horien artean, egokiena administrazio-erakunde autonomiaduna litzateke, zehapen-ahalmen administratiboak dituelako, eta, hain zuzen, Kirol Zuzendaritzaren memorian, kiroleko dopinaren aurkako lege-proiektuari buruzkoan, adierazten da.

- Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzeak eragindako kostu ekonomikoari dagokionez, kirol-gaietan une horretan eskumena duen sailak dituen zuzkidura ekonomikoek hartuko dute beren gain, eta, behar izanez gero, zuzkidura ekonomiko horien kredituetan behar adina aurrekontu-aldaketa egingo dira.

- Edonola ere, Kiroleko Dopinaren Aurkako Legea indarrean sartzeak kostu ekonomiko osagarriarik eraginez gero, kirol-gaietan eskumena duen sailak dituen zuzkidura ekonomikoek hartuko dute beren gain.

- Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortu eta gero, EAEko Aurrekontu Orokorren kontura transferentziarik egin behar izanez gero, Jaurlaritzak onartutako jarraibide ekonomikoetara egokitu behar dira urtero.

- Kiroleko Dopinaren Aurkako Legearen aurreproiektuan xedapenen bat erantsi beharko litzateke, xede hau izanik: "aurrekontuen gaian eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Sailari baimena ematea dagokion aurrekontu-atala sortzeko, eta lege horretan ezarritakoa aplikatzeko behar beste aurrekontu-aldaketa egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu-araubidea arautzen duten legeei jarraiki".

- Azkenik, 2012ko ekitaldian aurrekontu-egonkortasunarekiko konpromisoak betetzen jarraitu behar duenez EAEk, eta euskal finantza publikoen iraunkortasuna bermatzeko behar besteko finkatze fiskala eta egokitze-politika egiten jarraituko duenez, Aurrekontu Zuzendaritzaren ustez ez dirudi egokia erakunde-egitura berria sortzea, esaterako, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzea.

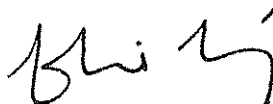
Horren haritik, aintzat hartu beharko litzateke 2012. urterako EAEko Aurrekontu Orokorrak egiteko zazpigarren jarraibide ekonomikoa: "Sektore publikoko erakunde berririk ez sortzea", eta bertan zehazten da: "Ezin izango da organismo autonomo, zuzenbide pribatuko ente publiko, sozietate publiko, fundazio edo partzuergo berririk sortu. Sortzeko erabakia 2011ko abenduaren 31rako onetsita zutenak bakarrik sortuko dira".

IV. ONDORIOA.

Aurreproiektuaren testua eta espedientean jasotako gainerako dokumentuak aztertu ondoren, hona hemen ondorio gisa egindako gogoetak:

- 1.- Ez da behar bezala erakutsi proposatutako helburuak lortzeko erakunde berri bat sortzea beharrezkoa denik, ez eta zuzenbide publikoko berariazko erakunde bat sortzeko arrazoiak ere, administrazio honen eremuan ezohikoa den erakunde-mota.
- 2.- Langile-kopurua ekonomiaren alderditik ebaluatu da memoria ekonomikoan, eta ebaluazio hori ez dator bat aurreproiektuaren testuan bertan aurreikusitakoarekin. Izan ere, ez da behar bezala arrazoiu langile-kopurua egokia denik betebeharreko eginkizunetarako.
- 3.- Jaurlaritzaren baitan ezarritako jarraibideen aurkakoa da, batetik, sektore publikoan erakunde berri bat sortzea, eta, bestetik, horren ondorioz lanpostu berriak sortzea. Izan ere, jarraibide horiek aurrekontu-egonkortasunarekiko konpromisoak betetzeko eta euskal finantza publikoen iraunkortasuna bermatzeko egokitze-politika egiten jarraitzeko dira.
- 4.- Arrazoi horiek guztiak direla eta, bulego honek KONTRAKO IRIZPENA eman dio kiroleko dopinaren aurkako lege-aurreproiektuari, proposatu den terminotan.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko uztailaren 29an



Izpta.: Julia Sirés

EKONOMIA- ETA ARAU-KONTROLA

O.E.:



Izpta.: Javier Serrano Chamizo

KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOKO ZUZENDARIA

XVI

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI / EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO IRIZPENA

PROYECTO DE LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGE PROIEKTUA.



AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
EUSKADI

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en la sesión del día 27 de octubre de 2011, con la asistencia de los miembros que al margen se expresan, ha examinado su **consulta**, registrada con el nº 202/2011, relativa al **anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte**.

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, el vocal Sr. Beitia Ruiz de Arbulo.

PRESIDENTA

Sra. Amaia Ortiz Cabezas.

VICEPRESIDENTE

Sr. Iñan Gurutz Echiave Atanzabal

VOCALES:

Sr. Luis M^o Eskubi Juanisti.

Sr. Inaki Beitia Ruiz de Arbulo.

Sra. Loreto Abalgaz Echegoyen.

Sra. Ana Arcocha Azcue

Sra. Fátima Sáiz Ruiz de Loizaga.

Sr. Carlos Erlantz Zarrozua Aierbe.

Sr. Imanol Zubizarreta Arceche

SECRETARIO

Sr. Jesús M^o Alonso Qullchano

DICTAMEN N^o 231/2011

ANTECEDENTES

1. Por Orden de 29 de agosto de 2011, de la Consejera de Cultura (con registro de entrada de 5 de septiembre), se somete a consulta de la Comisión el anteproyecto de Ley señalado en el encabezamiento.
2. Además de la Orden de remisión de la Consejera y del texto del anteproyecto, el expediente consta de:
 - a) Orden de 14 de julio de 2010 de la Consejera de Cultura, por la que se da inicio al procedimiento para la elaboración del proyecto de Ley contra el dopaje en el deporte.
 - b) Primer borrador del proyecto.
 - c) Memoria del proyecto de ley, de 5 de octubre de 2010.



- d) Orden de 5 de octubre de 2010 de la Consejera de Cultura, por la que se aprueba con carácter previo el proyecto de Ley contra el dopaje en el deporte.
- e) Informe provisional sobre la evaluación previa del impacto en función del género, de 27 de octubre de 2010.
- f) Oficios de la Dirección de Deportes remitiendo copia del proyecto de Ley contra el dopaje en el deporte a las federaciones deportivas vascas, la Unión de federaciones deportivas vascas, y las asociaciones de federaciones deportivas de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Oficios del mismo remitente y objeto dirigidos a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los distintos departamentos del Gobierno Vasco, las Direcciones de Función Pública, de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, de Salud Pública y de Innovación y Administración Electrónica, la Agencia Vasca de Protección de Datos, así como a la Sociedad Vasca de Medicina del Deporte, el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y los Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
- g) Resolución de 5 de octubre de 2010, del Director de Deportes, por la que se somete a trámite de audiencia el proyecto de Ley y anuncio referido a dicha Resolución publicado en el Boletín Oficial del País Vasco con fecha 29 de noviembre de 2010.
- h) Informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de 26 de enero de 2011.
- i) Informe de la Dirección de Innovación y Administración Electrónica, de 3 de noviembre de 2010.
- j) Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas de la Viceconsejería de Política Lingüística, de 27 de octubre de 2010.
- k) Oficio de la Agencia Estatal Antidopaje, de 25 de enero de 2011, mediante el que se da traslado del informe elaborado por la Abogacía del Estado en el Consejo Superior de Deportes, de 24 de enero de 2011.
- l) Informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos, de 28 de febrero de 2011.
- m) Dictamen 10/11 del Consejo Económico y Social Vasco, de 4 de mayo de 2011.
- n) Alegaciones de la Dirección de Salud Pública, del Departamento de Sanidad y Consumo, de 8 de noviembre de 2010.
- o) Informe de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Sanidad y Consumo, de 1 de diciembre de 2010.



- p) Alegaciones de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia, de 9 de diciembre de 2010.
 - q) Alegaciones del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de 27 de diciembre de 2010.
 - r) Informe Jurídico de la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura, de 16 de mayo de 2011.
 - s) Valoración de las alegaciones recibidas al proyecto de Ley contra el dopaje en el deporte, elaborada por la Dirección de Deportes, de 15 de junio de 2011.
 - t) Memoria de tramitación del proyecto, de 15 de junio de 2011.
 - u) Memoria Económica relativa al proyecto, de 19 de julio de 2011.
 - v) Texto objeto del informe de la Oficina de Control Económico.
 - w) Informe de la Oficina de Control Económico de fecha 29 de julio de 2011.
3. Mediante Oficio de 6 de septiembre de 2011 del Director de Servicios del Departamento de Cultura (con entrada el 8 de septiembre siguiente), se remite para su incorporación al expediente el Informe Jurídico de la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura, de 16 de mayo de 2011, y la Valoración de las alegaciones recibidas al proyecto de Ley contra el dopaje en el deporte, elaborada por la Dirección de Deportes, de 15 de junio de 2011, que habían sido remitidos de forma incompleta previamente por error.

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO

- 4. El anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte consta de una Exposición de Motivos, cincuenta y tres artículos encuadrados en siete capítulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
- 5. En la Exposición de Motivos se señala la intención de reformar el actual régimen de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, para adecuarlo a una nueva realidad y a las profundas reformas introducidas en su marco jurídico.
- 6. Los eventos deportivos se han mercantilizado notablemente y el dopaje se ha convertido en un fenómeno que ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva y de la salud individual del deportista para convertirse en un auténtico problema de salud pública.



7. Las transformaciones jurídicas han venido de iniciativas en el orden Internacional, con la constitución de la Agencia Mundial Antidopaje y la aprobación del Código Mundial Antidopaje, que condujeron a la aprobación por la UNESCO de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de 19 de octubre de 2005, ratificada por España. También se ha aprobado en este tiempo la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje.
8. En cuanto a sus contenidos, como una de las novedades más importantes de la nueva ley se destaca la creación de la Agencia Vasca Antidopaje. El tiempo transcurrido desde 1998 ha puesto de manifiesto la tendencia generalizada a la creación de agencias nacionales antidopaje, por su especialización e independencia funcional.
9. Se insiste en que la ley produce un endurecimiento notable del marco legal de la lucha contra el dopaje, pero la lucha contra el dopaje no puede llevarse a cabo de cualquier modo y se debe ser exquisito con los derechos de las y los deportistas implicados.
10. Por otra parte, con la nueva ley se aplica también el régimen de control y represión contra el dopaje a las actividades deportivas no federativas, ampliándose las actuales previsiones legales sobre el deporte federado a otras realidades deportivas que también son merecedoras de protección.
11. En materia de control de dopaje, la ley hace un esfuerzo por contemplar de forma expresa otras modalidades de control. Por ello, la ley no restringe los controles antidopaje a las tomas de muestra de la orina de las y los deportistas, sino que abre los controles a otros tipos de muestras, de forma que se adapten a la evolución de las investigaciones científicas y los resultados de los avances tecnológicos.
12. También reciben en el texto un tratamiento específico los denominados controles de salud que, a diferencia de la legislación estatal, no se insertan en el marco de las relaciones laborales, sino que se ha optado por facultar a cualesquiera entidades deportivas a realizar estos controles a sus deportistas, con independencia de que tengan una relación laboral.
13. Por otra parte, la tipificación de las infracciones y sanciones de la Ley 14/1998 era muy limitada y se ha aprovechado esta ley para ajustarla a las necesidades que han ido surgiendo y a la normativa internacional, con un régimen inspirado en la Ley Orgánica 7/2006
14. Asimismo, la ley trata de dar respuesta al importante fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico. Los deportistas pueden padecer enfermedades o



lesiones que precisan tratamiento médico. La posibilidad de solicitar una autorización de uso terapéutico se reconoce en la ley en determinadas circunstancias. Junto a esta vía, se instaura la figura de la baja deportiva, que permite un tratamiento terapéutico totalmente libre, pero sin posibilidad de competir.

15. La lucha contra el dopaje se concibe en esta ley de forma integral. Además de regular la práctica del dopaje, contempla en su articulado, de forma especial, la investigación, sensibilización, formación e información de las entidades profesionales y personas deportistas sobre los efectos que las diferentes sustancias y métodos utilizados para mejorar el rendimiento deportivo pueden tener sobre la salud. Especial mención se debe hacer a la previsión de programas específicos de sensibilización en la lucha contra el dopaje en el campo del deporte que no es de competiciones oficiales de rendimiento: pruebas atléticas populares, carreras cicloturistas, gimnasios, etcétera.
16. También recibe un tratamiento especial la protección de datos de carácter personal en materia de dopaje. La ley parte de la consideración que los datos relacionados con los controles de dopaje y de salud (resultados de los análisis, de los reconocimientos médicos, de los controles de salud, solicitudes y concesiones de autorizaciones de uso terapéutico, etcétera) son datos de carácter personal relativos a la salud y, por dicha razón, merecedores de una especial protección.
17. Por último, establece un régimen especial para los deportistas, especialmente populares, que participan en actividades deportivas extremas o de gran exigencia física.
18. La parte dispositiva se inicia con el Capítulo I ("Disposiciones generales"), que agrupa nueve artículos, del 1 al 9.
19. El artículo 1 se ocupa del concepto de dopaje y del ámbito de aplicación. Cuando se enuncia el concepto de dopaje se dice que consiste en el consumo por el o la deportista de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos para aumentar artificialmente su rendimiento deportivo, representando ello un acto contrario al espíritu deportivo (artículo 1.1). También se considera dopaje el conjunto de infracciones de la normativa antidopaje contenida en la presente ley y en el resto de la normativa aplicable en materia de dopaje (artículo 1.3).
20. Para delimitar el ámbito de aplicación de la ley se distingue el ámbito material general —las actividades y competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco, salvo las competiciones oficiales de ámbito estatal o internacionales (artículo 1.4)— y el ámbito subjetivo general —los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco, así como a todos aquellos y



aquellas deportistas mientras residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco (artículo 1.5)–. Para la ley es deportista toda persona que practique algún deporte, aun cuando no esté federada o no participe en competiciones deportivas (artículo 1.6)

21. El artículo 2 versa sobre los principios generales que informan la lucha contra el dopaje. El dopaje es contrario a los valores de la ética deportiva y del olimpismo, y puede atentar gravemente a la salud de las y los deportistas o, en su caso, de los animales, es rechazable en todas sus formas, y los deportistas tienen la obligación de someterse, dentro o fuera de competiciones, al control de dopaje al que se les requiera por las autoridades competentes y a los exámenes, revisiones, comprobaciones o investigaciones complementarias. La erradicación del dopaje en el deporte debe ser un objetivo fundamental de todas las organizaciones deportivas, y la formación, la información y la investigación son instrumentos indispensables para ello.
22. El artículo 3 lista las responsabilidades de los deportistas. Entre otras, tienen la obligación de conocer las disposiciones y acuerdos aplicables en el campo del dopaje, deben presentarse a las tomas de muestras y demás controles en que sean requeridos y proporcionar toda la información que le sea solicitada, son responsables de todo lo que ingieran o utilicen, han de informar al personal médico de su condición de deportista y de su obligación de no consumir o utilizar sustancias o métodos prohibidos en la reglamentación deportiva y asegurarse, en la medida de sus posibilidades, de que el tratamiento terapéutico prescrito no viola las normas antidopaje.
23. Los artículos 4, 5, 6 y 7 establecen, respectivamente, las responsabilidades del personal auxiliar de las y los deportistas y de los animales que participan en competiciones deportivas, las responsabilidades de los poderes públicos, las responsabilidades de las entidades deportivas, y las responsabilidades de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos.
24. El artículo 8 señala los derechos de los deportistas que vayan a ser sometidos a un control de dopaje, entre los que figuran el derecho a que sus datos de carácter personal sean protegidos con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, a ser asistidos y asistidas, a su costa, en el control antidopaje, por la persona de su confianza que se halle presente o disponible en la zona de dicho control, a presentar alegaciones ante una notificación de presunto dopaje, a que se les oiga antes de ser sancionados y sancionadas, etc.
25. Por último, el artículo 9 prescribe que las administraciones públicas del País Vasco y sus entidades instrumentales o entidades participadas por aquellas no podrán patrocinar ni subvencionar a entidades deportivas que hayan sido sancionadas por



acciones colectivas o continuadas de dopaje, ni a deportistas sancionados por dopaje o que se hayan negado a colaborar en los correspondientes controles de dopaje.

26. El Capítulo II ("Organización Administrativa") comprende los artículos 10 a 12.
27. El artículo 10 crea la Agencia Vasca Antidopaje como Organismo Autónomo Administrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que actúa con plena independencia en el ejercicio de sus funciones. Dicha Agencia llevará a cabo el diseño y ejecución de las acciones que en el campo de la prevención, control y represión del dopaje corresponden al Gobierno Vasco.
28. El artículo 11 se ocupa de la organización de la Agencia, estando compuesta por el Director o Directora, que tiene consideración de alto cargo, estando nombrada por Decreto del Gobierno Vasco por un periodo de cuatro años, el Consejo Consultivo, el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico y aquellos órganos que se establezcan en sus estatutos.
29. El artículo 12 contempla entre las principales funciones de la Agencia las de velar por el cumplimiento de la legislación sobre dopaje, requerir a los organismos competentes la adopción de las medidas necesarias para la adecuación de su organización, normativa o actividad a la legislación en materia de dopaje, ejercer la potestad sancionadora y la disciplinaria cuando las federaciones deportivas no hayan resuelto en plazo los expedientes, realizar actividades divulgativas, formativas y de sensibilización, determinar las competiciones y pruebas deportivas en las que será obligatorio el control antidopaje, y emitir informe sobre proyectos normativo en materia de dopaje.
30. El Capítulo III ("Controles de Dopaje") agrupa los artículos 13 a 20.
31. El artículo 13 dispone que los deportistas tendrán obligación de someterse a los controles en competición y fuera de competición que determine la Agencia Vasca Antidopaje y los demás organismos públicos y privados habilitados mediante la presente ley. Los controles, cuyos términos se determinarán reglamentariamente, se podrán realizar en competición o fuera de ella, por sorpresa o previa citación. Para su realización y mayor eficacia, deportistas, equipos, entrenadores y entrenadoras, personal directivo y demás personas del entorno del deportista deberán facilitar, en los términos que reglamentariamente se establezca, los datos que permitan la localización habitual de las y los deportistas. Estos indicarán, en el momento de realización de los controles de dopaje, los tratamientos terapéuticos a que estén sometidos los deportistas, responsables de los mismos y el alcance del tratamiento. La negativa de un deportista a informar o a conceder la autorización



para que otros informes será considerada como infracción por incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos.

32. Los controles para los que hayan sido citados, los controles realizados y los resultados de los mismos se incluirán en la Tarjeta de Salud del Deportista, en los términos de la regulación que se dicte en desarrollo reglamentario de esta ley.
33. El artículo 14 prevé una serie de garantías en los controles, que incluyen aspectos como el personal que ha de realizarlos, que deberá estar convenientemente habilitado por la Agencia, el horario, sin que puedan practicarse en las horas de descanso nocturno, el número de controles en una prueba —solo uno— y la obligación de informar a los deportistas de los derechos y obligaciones que les asisten.
34. El artículo 15 regula las obligaciones accesorias y autorizaciones de uso terapéutico, de suerte que los clubes y demás entidades deportivas que se determinen reglamentariamente están obligados, por su parte, a llevar un libro, debidamente registrado en la Agencia Vasca Antidopaje y del que exista garantía de su integridad, en el que harán constar los tratamientos terapéuticos que hayan prescrito a las y los deportistas bajo su dirección, siempre que éstos y éstas autoricen dicha inscripción. Dicho libro tendrá la consideración de documento sanitario a los efectos de custodia y protección de datos. En este libro, cada actuación sanitaria deberá ser refrendada por la firma de la o el deportista como garantía de que se ha realizado dicha actuación y ha autorizado el asiento en dicho libro.
35. En el caso de las autorizaciones de uso terapéutico, deberá remitirse una copia a la Agencia Vasca Antidopaje y, si le hubiera sido expedida por otro organismo, el deportista deberá informarlo en el control de dopaje que se le realice. Las entidades deportivas podrán limitar en sus reglamentos el número máximo de deportistas con autorizaciones de uso terapéutico o declaraciones de uso de glucocorticosteroides u otras sustancias con régimen análogo que pueden alinearse en los correspondientes equipos.
36. El artículo 16 establece que las federaciones deportivas territoriales y vascas, así como las demás entidades deportivas a las que resulte aplicable esta ley, pueden contemplar en sus reglamentos la situación de baja deportiva. En esta situación las y los deportistas pueden recibir libremente el tratamiento terapéutico que se considere adecuado para tratar cualquier lesión o enfermedad, aunque estarán inhabilitados e inhabilitadas para participar en competiciones deportivas de todo tipo. La situación de baja deportiva deberá ser concedida por el correspondiente Comité Antidopaje y registrada en la Agencia Vasca Antidopaje. Las altas y bajas se incorporarán a la Tarjeta de Salud de Deportista que, en su caso, disponga.



37. El artículo 17 distingue los controles de dopaje y los controles de salud. Se entienden como controles de dopaje el conjunto de actividades realizadas por entidades y personas habilitadas por la Agencia Vasca Antidopaje cuya finalidad es averiguar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario, detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto. También se considerarán controles de dopaje todas aquellas actuaciones desarrolladas por los órganos antidopaje competentes para verificar el incumplimiento de la normativa antidopaje.
38. Por controles de salud se entienden el conjunto de actuaciones que la Agencia Vasca Antidopaje, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva en sus miembros, así como para controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones derivadas de la ley en materia de dopaje y salud.
39. El artículo 18 se ocupa de la planificación y gestión de los controles. La Agencia Vasca Antidopaje determinará los controles de dopaje, los controles de salud y demás actuaciones en materia de protección de la salud que deben ser realizados por las entidades a que se refiere esta ley. Podrán establecerse controles adicionales en el caso de los deportistas que integren o vayan a integrar las selecciones deportivas vascas.
40. El artículo 19 delimita la competencia para la realización de los controles. Con carácter general, y sin perjuicio de las competencias de otras entidades previstas en esta ley, corresponde a las federaciones deportivas vascas y territoriales la realización de las actuaciones necesarias para llevar a cabo los controles respecto a las competiciones que determine la Agencia Vasca Antidopaje. Los análisis deberán llevarse a cabo en laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial de Dopaje.
41. El artículo 20 dispone que, en el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales, la Agencia Vasca Antidopaje, a través de su Director o Directora, ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan cambios en la misma.
42. El Capítulo IV, "Régimen disciplinario y administrativo sancionador del dopaje", agrupa los artículos 21 a 41.
43. El artículo 21 delimita el ámbito de aplicación del régimen disciplinario. El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta ley resulta de aplicación a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción a través de las licencias



exigidas en el artículo 46 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco (LDPV), y a todas aquellas personas sujetas a relaciones de especial sujeción con las demás entidades deportivas que, domiciliadas en el País Vasco, desarrollen actividades deportivas sujetas a la presente ley o se sujeten voluntariamente a la misma. Las infracciones cometidas en materia de dopaje con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal se regirán por las normas disciplinarias de ámbito estatal, mientras que las infracciones cometidas en competiciones deportivas de ámbito internacional se regirán por las normas disciplinarias de ámbito internacional.

44. Por su parte, el artículo 22 delimita el ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador. El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones y omisiones que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito autonómico, estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales. No es precisa la existencia de relaciones de especial sujeción y las acciones u omisiones también podrán materializarse en actividades deportivas de carácter no competitivo. Sin perjuicio de la aplicabilidad del principio *non bis in idem*.
45. El artículo 23 fija las responsabilidades de los deportistas y su entorno. Las y los deportistas se asegurarán que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo, siendo responsables en cualquier caso cuando se produzca la detección de su presencia en el mismo. El alcance de la responsabilidad será el determinado en el régimen disciplinario y administrativo sancionador que se establece en el presente capítulo. También se establecen las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones en materia de localización habitual, información sobre las enfermedades y tratamientos terapéuticos.
46. A continuación, se describe el elenco de infracciones relacionadas con el dopaje, tipificándose en muy graves y graves (artículo 24), para delimitarse a continuación las posibles sanciones a imponer a los deportistas (artículo 25), a los clubes y equipos deportivos (art. 26), técnicos, técnicas, jueces, juezas, árbitros, arbitras y demás personas con licencia deportiva, personal directivo, dirigentes o personal de federaciones deportivas, de ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial o no oficial, clubes y equipos deportivos (artículo 27) y médicos, médicas y demás personal sanitario (art. 28).
47. A la hora de imponer las sanciones, el artículo 29 señala que se atenderá al criterio de proporcionalidad y a las circunstancias que concurran en cada caso.



específicamente las que se refieren a la existencia de intencionalidad, conocimiento, grado de responsabilidad de sus funciones y naturaleza de los perjuicios causados, así como las demás que puedan servir para la modulación de la responsabilidad.

48. En el caso de deportistas, la imposición de sanciones pecuniaras queda circunscrita, según el artículo 30, a aquellos que obtengan ingresos que estén asociados a la actividad deportiva desarrollada. Las multas impuestas por la Agencia Vasca Antidopaje serán ejecutadas, en caso de impago, de forma forzosa según los términos establecidos en la legislación administrativa aplicable, quedando afectado su importe al cumplimiento de los fines de investigación de la Agencia.
49. El artículo 31 contempla las consecuencias accesorias de la infracción y de la posible alteración de resultados. Para lo cual se diferencia si se trata de deportes individuales, en los que implicará la retirada de premios o medallas, la anulación de los resultados individuales y la descalificación absoluta de la o el deportista en la prueba o competición en cuestión, en los campeonatos de los que forme parte o a los que esté vinculada la prueba o competición, o de deportes de equipo, debiéndose pronunciar los órganos disciplinarios sobre la procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas, competiciones o campeonatos. Para ello ponderarán las circunstancias concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en materia de dopaje tipificadas en la presente sección y la implicación de menores de edad en las referidas conductas.
50. En lo que se refiere a la eficacia de las sanciones y pérdida de la capacidad para obtener licencia deportiva, el artículo 32 prescribe que la imposición de sanciones relacionadas con el dopaje en el deporte constituye un supuesto de imposibilidad para obtener o ejercer los derechos derivados de las licencias deportivas emitidas al amparo de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, y, especialmente, para participar en competiciones deportivas. A continuación se arbitra un cauce para solicitar la incompatibilidad de la sanción impuesta por un órgano diferente a los previstos en esta ley. También se prevé que las entidades que organicen actividades deportivas aplicarán el principio de reconocimiento mutuo de las sanciones impuestas.
51. El artículo 33 declara la aplicabilidad del principio *non bis in idem* en los casos en que se aprecie la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. También se dispone que se suspenderá el procedimiento disciplinario o sancionador cuando se adviertan indicios de delito o estén siendo perseguidos los hechos en vía penal. Cuando los hechos pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades sancionadoras y disciplinarias, el órgano administrativo y disciplinario deberán ponerlo en conocimiento del otro. También se comunicará al Departamento de



Interior, a los efectos de preservar la proporcionalidad en la aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana.

52. El artículo 34 regula las causas de la extinción de la responsabilidad, mientras que el artículo 35 establece el régimen de prescripción de las infracciones y las sanciones. El artículo 36 señala que el deportista podrá quedar exonerado parcialmente de responsabilidad administrativa y, en su caso, no se someterá a procedimiento sancionador si denuncia ante las autoridades competentes a las personas o entidades autoras o cooperadoras y coopera y colabora con la Administración competente proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el procedimiento o proceso correspondiente contra aquéllas.
53. Con arreglo a la previa disociación entre el régimen administrativo y disciplinario, el artículo 37 señala que la potestad sancionadora de carácter administrativo en materia de represión del dopaje corresponderá al Gobierno Vasco, mientras que el artículo 38 otorga potestad disciplinaria en materia de dopaje a las federaciones deportivas del País Vasco y a las demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco.
54. Es objeto del artículo 39 el procedimiento disciplinario que se iniciará por resolución del órgano disciplinario de la correspondiente entidad deportiva, tras la correspondiente acta de inspección o tras recibir los resultados de los análisis del laboratorio y después de realizar la correspondiente Instrucción reservada con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación, y para dictar la resolución en que se decida la incoación del expediente disciplinario o, en su caso, el archivo de actuaciones.
55. El artículo 40 establece que, sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos y judiciales del Estado y de la Administración General de la Comunidad Autónoma, la Agencia Vasca Antidopaje podrá inspeccionar los botiquines, bolsas de deportes, taquillas, autobuses y demás espacios que permitan guardar o albergar los productos y sustancias susceptibles de dar positivo en un control de dopaje, así como los instrumentos destinados a la aplicación de métodos prohibidos. Reglamentariamente se establecerá el contenido admisible de los botiquines y, específicamente, de aquellos medicamentos y productos sanitarios que resultan necesarios para atender las contingencias derivadas de cualquier urgencia médica.
56. Según el artículo 41, las sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en el deporte y los instrumentos y útiles empleados a tal fin podrán ser objeto de decomiso.



57. El Capítulo V ("Medidas de prevención") engloba los artículos 42 a 46. Para garantizar una lucha eficaz contra el dopaje en el País Vasco, el artículo 42 dispone que la Agencia Vasca Antidopaje, en colaboración con otros órganos con implicación en la materia, adoptará y promoverá medidas de prevención que comprenderán programas de formación e información en el ámbito del deporte federado, escolar y universitario y de otras manifestaciones deportivas de carácter no competitivo, programas de investigación sobre los efectos de las sustancias y métodos dopantes en el organismo humano, programas de investigación sobre los sistemas eficaces de detección de las sustancias y métodos dopantes y otros sobre el dopaje desde diferentes perspectivas: sociológicas, éticas, deportivas, médicas y cualesquiera otras análogas.
58. El artículo 43 contempla que la Agencia Vasca Antidopaje establecerá asimismo un sistema de información acerca del dopaje en el ámbito del deporte, que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las administraciones públicas con competencias en materia de deporte.
59. El artículo 44 habilita a la Agencia Vasca Antidopaje para que solicite a los organismos competentes en materia de medicamentos, productos sanitarios y seguridad alimentaria que adopten las medidas necesarias para conocer el ciclo productivo y de dispensación y comercialización de los productos susceptibles de producir dopaje.
60. El artículo 45 señala que la Agencia Vasca Antidopaje promoverá, junto a los organismos competentes de la materia, la implantación de mecanismos de información y de publicidad específicos de los complementos nutricionales que, sin ser medicamentos, puedan producir un dopaje positivo.
61. El artículo 46 se ocupa de la Tarjeta de Salud de Deportista para definirla como un documento público que expedirá la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco a deportistas con las licencias federativas y universitarias y a aquellos otros colectivos de deportistas que se determinen reglamentariamente. Esta tarjeta contendrá la información referida al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y de dopaje realizados a la o el deportista desde la obtención de la correspondiente licencia, el resultado de los mismos y las determinaciones médicas a tener en cuenta para una adecuada atención sanitaria del mismo. Asimismo, incluirá los datos de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas y de las bajas laborales y/o deportivas que haya tenido el deportista.
62. El Capítulo VI ("Régimen de datos relativos al dopaje") se compone de los artículos 47, 48 y 49. El artículo 47 obliga al personal que desempeñe las funciones de control del dopaje, así como a las y los miembros de los órganos de entidades deportivas y



su personal, a guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo.

63. El artículo 48 contempla que los datos y ficheros relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos, en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos, a los organismos públicos o privados que participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes.
64. El artículo 49 impone la obligación a los equipos que participen en competiciones que se celebren en el País Vasco e incluidas en el ámbito material de esta ley de llevar a un libro registro en el que consten los productos que se han dispensado o recetado a los y las deportistas, los métodos prohibidos, el médico que ordena o autoriza dicha utilización, periodo y forma de prescripción. Las y los deportistas, equipos o grupos deportivos y las y los directivos extranjeros que los representen estarán obligados, cuando entren en el País Vasco, a cumplimentar formularios sobre los productos que transportan, los instrumentos que permiten la aplicación de métodos prohibidos, las unidades del mismo y el médico responsable de su administración.
65. El Capítulo VII ("Federaciones deportivas internacionales y demás entidades que rigen, en el ámbito internacional, la actividad deportiva") agrupa los artículos 50 a 53. El artículo 50 dispone que la responsabilidad de la ordenación y realización de controles de dopaje, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria, en las competiciones internacionales celebradas en Euskadi corresponde al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones deportivas o Instituciones Internacionales que, respectivamente, las organicen o a aquellas federaciones o entidades en las que éstas deleguen la citada organización. La realización de estos controles exige que, con carácter previo, se notifique a la Agencia Vasca Antidopaje su realización.
66. No obstante, el artículo 51 señala que la Agencia Vasca Antidopaje podrá ordenar, sin menoscabo de las competencias que puedan tener otras organizaciones antidopaje, la realización de controles fuera de competición a deportistas nacionales o extranjeros que compitan o entrenen en Euskadi.
67. El artículo 52 establece las condiciones para los controles de dopaje fuera de competición, realizados en Euskadi a deportistas con licencia por parte de organizaciones internacionales, exigiendo su previa notificación a la Agencia Vasca Antidopaje.
68. Por último, el artículo 53 se ocupa de los efectos de las sanciones impuestas por las organizaciones internacionales a deportistas y demás personas con licencia,



69. La disposición adicional primera habilita al Gobierno Vasco para que dicte las disposiciones que fueren necesarias para su adaptación al ámbito específico de la prevención, control y represión del dopaje en animales que participen en competiciones deportivas.
70. La disposición adicional segunda prevé que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá establecer con el Estado, a través de los correspondientes instrumentos de colaboración, fórmulas para la implantación de un sistema de mutua información y para la expedición, reconocimiento o realización de la Tarjeta de Salud de Deportista y para la habilitación de los médicos y médicas, veterinarios y veterinarias y demás personal que deba intervenir en los controles.
71. La disposición adicional tercera contempla que serán constitutivas de infracción muy grave y sancionadas de acuerdo con las normas de los colegios profesionales, las y los profesionales sanitarios y cualesquiera profesionales que faciliten, colaboren, prescriban o dispensen sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en el ámbito de la actividad deportiva, o propicien la utilización de métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte, sin cumplir con las formalidades prescritas en sus respectivas normas de actuación y en las previstas en esta ley.
72. La disposición adicional cuarta señala que, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, todas las referencias a la Cartilla Sanitaria de Deportista se entenderán realizadas a la Tarjeta de Salud de Deportista.
73. La disposición adicional quinta dispone que las licencias federativas y universitarias podrán ir incorporadas en los soportes electrónicos que permitan el acceso a la Tarjeta de Salud de Deportista, aunque mantendrán en todo caso una individualidad propia y dispondrán de las medidas de seguridad necesarias para impedir un acceso indebido a los datos propios de dicha Tarjeta de Salud de Deportista.
74. La disposición adicional sexta establece un régimen específico para aquellas pruebas deportivas de gran exigencia física que se determinen, mediante Orden, por el departamento competente del Gobierno Vasco en materia de deportes, en las que se deberá exigir a las y los participantes la acreditación de la aptitud física mediante la certificación del correspondiente reconocimiento médico y los que no sean titulares de licencia también podrán ser sometidos o sometidas a controles de dopaje, aunque en este caso no tendrán que cumplir las obligaciones documentales e informativas previstas en esta ley para las y los deportistas con licencia.
75. La disposición transitoria primera prevé que los procedimientos sancionadores, tanto en vía disciplinaria como en vía administrativa, incoados con anterioridad a la



vigencia de esta ley se seguirán tramitando conforme a la normativa aplicable al momento de la Iniciación, salvo por lo que se refiere a los efectos que pudieran ser favorables a las y los interesados.

76. La disposición transitoria segunda establece que las funciones que esta ley atribuye a la Agencia Vasca Antidopaje serán ejercidas, hasta su efectiva constitución y funcionamiento, por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco.
77. La disposición transitoria tercera señala que, mientras la Agencia Vasca Antidopaje no conceda las habilitaciones previstas en la presente ley, podrán actuar como personas habilitadas en los equipos de recogida de muestras para los controles de dopaje quienes acrediten disponer de las habilitaciones previstas en el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, o disposición que lo modifique o sustituya.
78. La disposición derogatoria deroga los siguientes preceptos de la Ley 14/1998: la letra e) del artículo 81; el Capítulo V del Título VII; la letra ñ) del artículo 109; la letra h) del artículo 127. También todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en esta ley.
79. La disposición final primera modifica el artículo 4 2.v) de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.
80. La disposición final segunda modifica el artículo 83 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
81. La disposición final tercera habilita al Gobierno Vasco para adaptar el régimen sancionador y disciplinario previsto en esta ley, en lo referente a la cuantía de las sanciones y reglas de aplicación de las mismas, a las normas emanadas por los organismos internacionales y a la legislación estatal que, en su caso, resulte aplicable.
82. La disposición final cuarta concede el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la ley, a las federaciones deportivas y cualesquiera organizaciones deportivas a las que resulte de aplicación la presente ley para que procedan a la adaptación de sus estatutos y reglamentos.
83. La disposición final quinta determina su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

84. Este Dictamen se emite de conformidad con el artículo 3.1.a) de la ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (en adelante LCJAE).



que incluye como ámbito de la función consultiva de la Comisión los "anteproyectos de ley", cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, siempre que no se encuentren incursos en las excepciones que contempla, lo que no es el caso.

CONSIDERACIONES

I EL PROCESO DE ELABORACIÓN

- 85 La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante LPEDG), incluye en su ámbito de aplicación a las disposiciones de carácter general que adopten la forma de ley (artículo 3.1 LPEDG).
- 86 Ello no obstante, esta Comisión ha venido reiterando (por todos, DCJA 76/2004) las diferencias que existen en la valoración que debe hacerse del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, en atención a la peculiar naturaleza del producto al que conduce la tramitación.
87. Para los anteproyectos de Ley, la LPEDG persigue orientar la actividad del Gobierno en la fase previa a la iniciación del procedimiento legislativo *stricto sensu*, a fin de que procure seguir en la redacción de los proyectos de ley la misma metodología que emplea para elaborar las disposiciones generales porque, como señala la Exposición de Motivos de la citada LPEDG, "De ese modo, se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone".
- 88 Es en sede parlamentaria donde se desenvuelve con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la Constitución (CE), el Estatuto de Autonomía (EAPV) o, en algunos casos, las leyes orgánicas, imponen condiciones a su adopción, la única exigencia que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre ellos, cuando menos, la memoria general, anejo de financiación e informe de control económico en aquellos proyectos que comporten un gravamen al presupuesto, nuestro dictamen y los informes que con arreglo a la legislación sean preceptivos (artículo 57 de la Ley de Gobierno y artículo 132.2 del Reglamento de la Cámara).
- 89 Esto es, la LPEDG no es parámetro para enjuiciar la validez de la norma sino que sirve para allegar todos los elementos relevantes que arrojen a la luz la iniciativa, sus condicionantes jurídicos y económicos, su incidencia en la realidad donde se proyecta y en sus destinatarios más directos, etc... y verificar en qué medida existe



una adecuación entre la Iniciativa y los objetivos que se pretenden conseguir, y si éstos podrán ser alcanzados con su puesta en vigor.

90. En el caso del procedimiento de elaboración del anteproyecto que se somete a dictamen, se han respetado en lo sustancial las exigencias establecidas al respecto en la LPEDG.
91. Se ha dictado la Orden de Iniciación, prevista en el artículo 5 LPEDG, con expresión sucinta del objeto y finalidad del proyecto de ley contra el dopaje, y se han señalado los trámites e informes que se estiman procedentes en razón de la materia y el contenido de la regulación propuesta.
92. Obra en el expediente una amplia memoria en la que se analiza la necesidad de la adecuación de la legislación, el título competencial y rango de la disposición, los objetivos y propuestas a los que obedece la confección de sus distintos capítulos y su incidencia en la normativa vigente.
93. Una vez aprobado el texto articulado, siguiendo la secuencia temporal del artículo 7.1 LPEDG, se abre el procedimiento a la participación externa.
94. Se ha practicado el trámite de audiencia, conforme a lo previsto en el artículo 8.3 LPEDG, remitiéndose a las organizaciones y asociaciones que agrupan o representan a ciudadanos cuyos derechos e intereses legítimos se encuentran directamente afectados.
95. El anteproyecto fue remitido a las asociaciones de federaciones deportivas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, a la Unión de Federaciones Vascas, y a las federaciones vascas.
96. También fue enviado a la Sociedad Vasca de Medicina del Deporte, a los colegios oficiales de médicos, farmacéuticos y veterinarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que formuló alegaciones.
97. Por Resolución de 5 de octubre de 2010, del Director de Deportes, fue sometido a información pública, al entenderse que, si bien la mayoría de los destinatarios se encuentran integrados en las federaciones deportivas vascas, a las que se ha dado trámite de audiencia, no es menos cierto que pueden existir ciudadanos afectados por dicha norma no encuadrados en dichas federaciones, por lo que la audiencia ha de realizarse directamente (artículo 8.1 LPEDG).
98. Su posible afectación a otras administraciones llevó a que fuera sometido a consulta en el marco del artículo 9 LPEDG, siendo remitido a la Administración del Estado



[Agencia Estatal Antidopaje} y a las diputaciones forales de la Comunidad Autónoma (Araba, Gipuzkoa y Bizkaia).

99. Consta en el expediente el informe emitido por la Abogacía del Estado en el Consejo Superior de Deportes. También formuló alegaciones la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia.
100. Han sido llamados al procedimiento todos los departamentos del Gobierno Vasco. Las Direcciones de Salud y de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Sanidad y Consumo han emitido su opinión del anteproyecto, atendiendo a sus ámbitos sectoriales.
101. Fue solicitado asimismo dictamen del Consejo Económico y Social, según lo establecido en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/1997, de 27 de junio, del Consejo Económico y Social, que lo informó debidamente.
102. En cuanto a la falta de participación del Consejo Vasco del Deporte, prevista en la Orden de Iniciación del procedimiento, a la luz de las atribuciones que le confiere el artículo 7.1 LDPV en su condición de órgano superior de asesoramiento, consulta, seguimiento y debate sectorial de las administraciones públicas en asuntos que afecten a la política deportiva en la Comunidad Autónoma, cuya regulación legal completa el Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, no se ha expresado ninguna razón que justifique su omisión, lo que convendría subsanar.
103. El anteproyecto ha sido objeto del Informe jurídico elaborado por la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura, con el contenido que establece al efecto el artículo 7.3 de la LPEDG.
104. Dicho informe ubica en primer lugar el anteproyecto en el marco normativo y competencial, para analizar seguidamente su rango legal y desarrollo reglamentario, la incidencia de la reserva de ley orgánica establecida por el artículo 81 CE, procediendo a continuación a realizar un detallado análisis de su contenido siguiendo su estructura, para finalizar con un estudio de la tramitación que debe seguirse para su definitiva aprobación por el Gobierno y conversión en Proyecto de Ley, antes de su remisión al Parlamento.
105. Se ha elaborado el informe de evaluación previa del Impacto en función del género que establece el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, realizado por la Dirección de Deportes, aunque sin completar los apartados y cuestionarios relativos al procedimiento ordinario requeridos por el apartado sexto de la Directriz primera y Anexo A de las directrices fijadas para su confección por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2007.



106. El Informe preceptivo de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer contemplado en el artículo 21 de la citada Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, contiene una serie de observaciones y propuestas. Se valora positivamente la integración de la perspectiva de género en las actividades de investigación, divulgación, formación y sensibilización, pero habría que integrarla asimismo en el sistema de información sobre el dopaje. También se sugieren mejoras en el artículo 12.v) y 6.1.m) del anteproyecto, incorporar en el artículo 11.7 una cláusula para promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición del Consejo Consultivo de la Agencia Vasca Antidopaje, y revisar la redacción para evitar un uso no sexista del lenguaje.
107. La Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Departamento de Cultura ha emitido el informe preceptivo establecido en el Decreto 128/2007, de 31 de agosto, por el que se establece el régimen al que ha de ajustarse el trámite de evacuación de informe por el Departamento de Cultura en el marco del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, en el que, tras constatar que es conforme con la legislación sectorial en materia lingüística, formula tres propuestas a fin de que el anteproyecto refleje que: (i) se garantiza el derecho de las personas físicas y representantes de las jurídicas a utilizar y recibir atención en euskara y castellano, tanto de forma oral como escrita, en sus relaciones con las federaciones deportivas vascas y la Agencia Vasca Antidopaje; (ii) la Agencia Vasca Antidopaje utilizara el euskara y el castellano en su funcionamiento y en sus relaciones exteriores; y (iii) los miembros del Consejo Asesor podrán utilizar el euskara y el castellano. Asimismo, se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma vasca en las convocatorias, órdenes del día, actas y demás escritos.
108. También ha intervenido en el procedimiento de elaboración la Dirección de Innovación y Administración Electrónica del Departamento de Justicia y Administración Pública, atendidas las funciones que le confiere el artículo 17.c) del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública.
109. De igual forma, la Agencia Vasca de Protección de Datos ha informado el anteproyecto, a la vista de las previsiones que en materia de tratamiento de datos de carácter personal contiene el texto, incluyéndose entre sus funciones, artículo 17.1.a) de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, la de velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.



110. En su informe la Agencia aborda la configuración constitucional del derecho, el tratamiento que reciben los datos de salud en el marco de la protección de los datos de carácter personal y realiza un estudio detenido del anteproyecto, distinguiendo el régimen de los datos de localización, tratamientos terapéuticos, libro registro, autorizaciones de uso terapéutico y baja deportiva, sistema de información y tarjeta de salud, régimen de los datos relativos al dopaje y régimen sancionador. En su conclusión la Agencia señala que se deberán ponderar los derechos de las personas afectadas por las medidas que la ley establece, tratando de lograr el necesario equilibrio entre la protección de los intereses generales que la norma pretende, entre ellos, la propia salud de las y los deportistas, y el necesario respeto a sus derechos fundamentales, en especial, a su intimidad y a la protección de sus datos personales.
111. La valoración de las consideraciones y sugerencias realizadas, su aceptación (con la consiguiente modificación —de supresión o adición— del texto) o, por el contrario, su rechazo y los motivos de éste se contienen en el informe de la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura, de 15 de junio de 2011. La Comisión ha de reconocer el esfuerzo argumental desarrollado para dar debida respuesta a las fundadas objeciones formuladas a lo largo del procedimiento, lo que sin duda le ha facilitado un análisis del texto remitido — pese a su complejidad— con un mejor conocimiento de sus consecuencias e implicaciones.
112. Con esa misma fecha (15/6/2011) se ha redactado una Memoria de tramitación del anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte, suscrita también por la Dirección de Deportes que, si bien responde en su denominación al trámite dispuesto en el artículo 10.2 LPDEG, su contenido es otro, pues en el mismo se vuelve a insistir de forma recopilatoria en el objetivo perseguido con la regulación propuesta, sectores sociales que resultan afectados, presupuestos jurídicos habilitantes de la normativa propuesta, fundamento de la competencia del Departamento de Cultura para iniciar la tramitación del proyecto, determinación del grado de vinculación de cada uno de los afectados en los trabajos de elaboración de la norma y, en su caso, necesidad de trámite de audiencia pública, líneas generales de la regulación propuesta, incidencia económica del anteproyecto e impacto de género.
113. Lo destacable del documento es el estudio del impacto económico de la Iniciativa que hasta ese momento no se había realizado, estudio que da lugar a la confección con posterioridad de una memoria económica.
114. En dicha memoria se reconoce que la ley implicará necesariamente un gravamen presupuestario en futuros ejercicios pues se crea una nueva entidad, la Agencia Vasca Antidopaje, pero su organización es muy reducida, ya que se compone de un



órgano unipersonal (el Director, con rango de alto cargo) y un órgano colegiado (un Consejo Consultivo, cuyos integrantes tendrán derecho al abono de gastos y dietas), existirán tres puestos (un responsable médico, un asesor jurídico y un administrativo) y seguirá contratando la realización de los controles antidopaje (con el laboratorio encargado de realizarlos y la recogida de orina y sangre por personal médico autorizado).

115. También se ha previsto un coste reducido por la actividad que desarrollará el Comité Vasco de autorizaciones de uso terapéutico, y ninguno por el local, mientras que los medios materiales se estiman en cien mil euros. Todo lo cual conlleva un gravamen presupuestario anual por el funcionamiento de la agencia de 458.984,71 €. No se prevén ingresos de especial relevancia, alrededor de 6.000 €.
116. La Oficina de Control Económico, tras analizar el expediente y en particular los aspectos organizativos y la incidencia económico-presupuestaria, ha informado desfavorablemente el anteproyecto de Ley contra el dopaje en el deporte, ya que: (i) no se ha acreditado de forma suficiente la necesidad de crear una nueva entidad para la consecución de los objetivos pretendidos, ni tampoco las razones que avalan la específica creación de un ente de derecho público, atípico en el ámbito de esta Administración; (ii) las dotaciones de personal que se evalúan económicamente en la memoria económica no coinciden con las previstas en el propio texto del anteproyecto, sin que se haya fundamentado de forma suficiente la adecuación del dimensionamiento de personal estimado para el cumplimiento de las funciones a desempeñar; y (iii) la creación de una nueva entidad en el sector público y la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo van en contra de las directrices adoptadas en el seno de este Gobierno para el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y con la política de ajuste para la sostenibilidad de las finanzas públicas vascas.
117. El expediente ha sido remitido a esta Comisión sin que conste la valoración del departamento promotor sobre el reparo manifestado por la Oficina de Control Económico, lo cual deberá subsanarse antes de su elevación al Consejo de Gobierno a fin de que éste resuelva la discrepancia y decida si procede o no incluir en el proyecto de Ley la creación de la Agencia Vasca Antidopaje. Aunque no falta la memoria conclusiva que prevé el artículo 10.2 LPEDG, ya que creemos que es suficiente con el documento en el que se recopilan las observaciones manifestadas por los intervinientes en el procedimiento y se les da una respuesta acorde con la decisión finalmente adoptada de aceptarlas o rechazarlas, se echa en falta, sin embargo, como contenido de la misma una valoración jurídica y económica acerca de la conclusión negativa manifestada por la Oficina de Control Económico.



II DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL

118. Antes que nada se hace preciso señalar que la Comunidad Autónoma ya tiene una regulación en materia de dopaje en el deporte, recogida en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco (LDPV). Ley que constituye el antecedente inmediato de la norma proyectada.
119. En particular, el Capítulo V ("Dopaje") del Título VII del mencionado texto legal contiene las disposiciones generales en dicha materia, estando prevista su derogación expresa en el anteproyecto.
120. El anteproyecto pone el énfasis en la necesidad de reformas y actualizaciones en dicho régimen legal, lo que se ha traducido en una regulación diferenciada para reprimir más eficazmente y con unos instrumentos mejor definidos prácticas que simbolizan la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo.
121. Con carácter general debemos indicar que, tras reconocer el apartado 1 del artículo 43 CE el derecho a la protección de la salud, el apartado 2 del mismo precepto señala que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, y el apartado 3 prevé que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
122. La STC 194/1998, de 1 de octubre, recuerda la estrecha vinculación existente entre la salud y la educación física y el deporte, tanto porque la educación física y el deporte son un medio para mantener la salud, como porque un ejercicio inadecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, "especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un riesgo muchas veces no pequeño", tiene repercusiones muy negativas sobre la salud.
123. Como tales principios rectores de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección han de informar la actuación de los poderes públicos, ex artículo 53.3 CE.
124. Estrictamente en materia de reparto competencial, éste deberá realizarse desde una doble perspectiva Estado-Comunidad Autónoma y Comunidad Autónoma-Territorios Históricos, contrastando, en primer lugar, las previsiones y preceptos de aplicación contenidos en el Título VIII de la CE y en el EAPV, y posteriormente, los del propio EAPV y de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (LTH). Dicho análisis será completado con el examen de las previsiones de la legislación de régimen local en relación con esta materia.



125. Cabe recordar que el artículo 10.36 del EAPV atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deporte, en la cual se incardinan de pleno tanto la referida LDPV, como la Iniciativa que dictaminamos.
126. Ahora bien, no podemos desconocer que existe una ordenación del dopaje a nivel estatal contenida en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte (en adelante LOD), ley que invoca de forma genérica —al margen de la fuente competencial que esgrime para determinadas previsiones— la competencia del "Estado para dictar aquellos preceptos relativos a su propia organización y los que se refieren a los intereses que afectan al deporte estatal federado en su conjunto", y lo dispuesto en el artículo 149.1.16^a de la Constitución" (disposición final cuarta LOD).
127. La STC 1/1986, de 10 de enero, vino a reconocer las competencias en materia deportiva de las comunidades autónomas con arreglo a su estatutos de autonomía, pero fueron matizadas porque "no es menos cierto que estas competencias, como cualesquiera otras de las que ostente, no pueden desplegarse sobre entes que, como en este caso ocurre, existen y desarrollan sus actividades en un ámbito nacional sustraído ya al ejercicio de las potestades autonómicas, estando la autonomía constitucionalmente garantizada a las Comunidades Autónomas, al servicio de la gestión de sus intereses propios (art. 137 de la Constitución), limitados *ratione loci* (art. 25.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), y no siendo desde ella posible, ciertamente, la afectación, como aquí habría de ocurrir, de intereses que son propios del deporte federado español en su conjunto. Si así no fuera, por lo demás, se quebraría la coherencia y el sentido mismo de la intervención administrativa controvertida, en la que ha de buscarse, sin perjuicio de otras consideraciones no pertinentes ahora, que sean coextensas los ámbitos de actuación del ente controlado y de aquel que ejerce el control "
128. En lo que se refiere a la competencia estatal reconocida por el artículo 149.1.16^a CE, "Bases y coordinación general de la sanidad", ésta debe cohererse con la del artículo 18 EAPV que atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.
129. En materia sanitaria, según la STC 98/2004, de 25 de mayo, "ni la fijación de las bases ni la coordinación general a la que también se refiere la regla 16 del art. 149.1 CE [que persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones, y reduciendo disfunciones según SSTC 32/1983, de 28 de abril, F. 2; 42/1983, de 20 de mayo, F. 3; 80/1985, de 4 de julio, F. 2], deben llegar a tal grado de desarrollo que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias que las Comunidades Autónomas hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de abril, F. 2)".
130. Conforme a ese esquema, cabría decir, desde la perspectiva deportiva, que la Comunidad Autónoma ostenta competencias para la ordenación del deporte vasco y puede desplegar dicha competencia, como ocurre en el anteproyecto,



estableciendo una regulación dirigida a combatir el dopaje, mientras que desde la perspectiva sanitaria, a partir de las bases establecidas por el Estado que han de consistir en un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses generales, la Comunidad Autónoma, en defensa de su propio interés puede "introducir las peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro del marco competencial que en la materia le asigne su Estatuto" (SSTC 32/1981; 1/1982; 32/1983; 48 y 49/1988; 69/1988; y otras más recientes como SSTC 149/1991; 141/1993; 109/2003; etc.).

131. Se ha de añadir, además, en tanto que determinados preceptos de la LOD tienen naturaleza orgánica (disposición final quinta), que : (i) la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE no contiene, en puridad, ningún título competencial habilitante a favor del Estado, pero sólo el Estado puede dictar esta forma de leyes en desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas y las comunidades autónomas al ejercer sus competencias deben respetar el contenido de las mismas; (ii) la necesidad de aplicar un criterio estricto o restrictivo, de suerte que requiere ley orgánica únicamente la regulación de un derecho fundamental o de una libertad pública que "desarrolle" la Constitución de manera directa y en elementos esenciales para la definición del derecho fundamental, ya sea en una regulación directa, general y global del mismo o en una parcial o sectorial, pero, igualmente, relativa a aspectos esenciales del derecho, y no, por parcial, menos directa o encaminada a contribuir a la delimitación y definición legal del derecho (STC 127/1994, fundamento jurídico 3.º, b).
132. Desde la perspectiva de la distribución competencial Estado-comunidades autónomas, según la STC 173/1998, de 23 de julio, "pueden extraerse dos criterios de interpretación fundamentales. De un lado, que el ámbito de la reserva de Ley Orgánica no es coextenso al de las competencias atribuidas al Estado —así se establece de forma implícita en la práctica totalidad de las resoluciones de este Tribunal que han abordado este tema— y, de otro lado, que, en aplicación de un elemental criterio de interpretación sistemática, al fijar el alcance de la reserva de Ley Orgánica debe cohererse con el contenido de los preceptos del llamado bloque de la constitucionalidad que distribuyen las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ya que, como bien dice la STC 137/1986, "ni la unidad de la Constitución toleraría que una de sus disposiciones [art. 149 (...)] se desvirtuase íntegramente por lo establecido en otra [art. 81.1], ni de otra parte, un precepto ordenador del sistema de fuentes (...) puede sobreponerse a la norma (...) que busca articular los ámbitos materiales".
133. De esa conjunción se extrae la idea de que corresponde al Estado, ex art. 81.1 CE, la regulación de los aspectos esenciales, el desarrollo directo del derecho fundamental considerado en abstracto o "en cuanto tal", en tanto que se atribuye la regulación de la "materia" sobre la que se proyecta el derecho al legislador ordinario,



estatal o autonómico, con competencias sectoriales sobre la misma (SSTC 127/1994, 61/1997).

134. En nuestro caso, será preciso indagar en qué medida las previsiones de la LOD calificadas como orgánicas establecen contenidos esenciales para la definición de un derecho fundamental y constituyen límites infranqueables para el legislador autonómico cuando procede a normar sobre el dopaje en el deporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
135. Baste ahora con decir que es incuestionable la competencia de la Comunidad Autónoma para dictar una norma como la proyectada, al margen de lo que luego se dirá sobre aspectos concretos de la misma.
136. Respecto a las competencias de los órganos forales de los Territorios Históricos, el artículo 7.b).6 de la LTH les confiere el desarrollo y ejecución de las normas autonómicas en materia de fomento del deporte, programas de deporte escolar y deporte para todos.
137. De forma consecuente con lo dispuesto en el artículo 6 LTH, la LDPV atribuye a las instituciones comunes la competencia en materia de "regulación de la prevención, control y represión del dopaje" [artículo 4.2 q) LDPV], previsión cuya vigencia no se verá afectada por la aprobación del anteproyecto.
138. De otro lado, era el Gobierno Vasco el que debía elaborar, actualizar y publicar, "de conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la materia", una lista de sustancias y métodos prohibidos destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones [artículo 84 LDPV] y aprobar un reglamento en el que, como mínimo, se regulara todo lo relativo a: a) las salas de toma de muestras; b) los procesos de recogida y envío de muestras; c) los análisis y comunicación de resultados; d) los laboratorios de análisis de muestras; y e) los derechos y obligaciones de los intervinientes en el control antidopaje (artículo 85.2 LDPV). Previsiones que se derogarán con la nueva ley en cuanto resultan incompatibles con sus dictados.
139. En cuanto a los ayuntamientos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local (en adelante LBRL), establece en su artículo 25. 2.m) la competencia de los municipios en materia de "actividades o instalaciones culturales y deportivas".
140. Pero es claro que el dopaje en el deporte constituye un fenómeno que rebasa únicamente el ámbito de interés municipal, lo que justifica que su intervención en este campo se desarrolle en un plano secundario.



141. Ahora bien, en la medida en que ostentan competencias en materia de deporte, tanto a los órganos forales de los territorios históricos (artículo 5 LDPV) como a los municipios (artículo 6 LDPV), en tanto que poderes públicos del País Vasco, el artículo 5 del anteproyecto les impone una serie de obligaciones en la lucha contra el dopaje, dentro lógicamente de su ámbito de actuación, lo cual no merece reproche alguno y debe verse como expresión lógica de su necesaria implicación, en el nivel correspondiente, para la erradicación del dopaje en el deporte.
142. En suma, ningún problema vemos al contenido del proyecto en tanto que resulta ejercicio legítimo de las competencias de la Comunidad Autónoma.
143. De forma residual, sin la trascendencia de aquellas que hemos examinado más detenidamente (deporte y sanidad), también se encuentran concernidas, (i) con motivo de la creación de la Agencia Vasca Antidopaje, la materia de organización de las instituciones de autogobierno (artículo 10.2 EAPV); (ii) al diseñar los procedimientos disciplinarios, la competencia sobre normas procesales y de procedimientos administrativos que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País vasco (artículo 10.6 EAPV); y (iii) al prever la adopción de programas de investigación, la competencia en materia de investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado (artículo 10.16 EAPV).

III EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

A) Consideraciones generales:

144. Como ya hemos advertido anteriormente, el anteproyecto modifica la regulación de la LDPV en materia de dopaje en el deporte.
145. Se trata de un reforma profunda, cuya oportunidad y justificación se encuentran fuera de toda duda y que viene motivada, muy destacadamente, por la aprobación de la LOD, teniendo en cuenta, como se explica en el Preámbulo, que la estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exige un marco común en la lucha contra el dopaje.
146. Ahora bien, antes de entrar a enjuiciar los términos del anteproyecto, considera la Comisión conveniente reparar, siquiera sea sucintamente, sobre la forma en la que la LOD plasma su regulación, en la medida en que el legislador estatal distingue con claridad el deporte organizado —para ordenar la lucha contra el dopaje en el entorno deportivo federativo y competitivo. Título I LOD— y la práctica deportiva no





organizada —en el que las medidas son de salud pública y se asocian con la actividad física en general, artículo 1.5 y Título II LOD—.

147. Como indica su exposición de Motivos, "sus líneas centrales pueden resumirse en dos enunciados: de una parte, actualizar los mecanismos de control y represión del dopaje en el ámbito del deporte de alta competición y, de otra, crear una marco sistemático y transversal de prevención, control y represión del dopaje, en general, considerado como una amenaza social, como una lacra que pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales como de los practicantes habituales u ocasionales de alguna actividad deportiva".
148. Las técnicas de intervención en un ámbito y en otro son muy distintas. En el primer caso, los controles giran en torno al deportista, son consecuencia del vínculo de sujeción especial que supone la licencia deportiva expedida por las federaciones y que permite el ejercicio de una actividad deportiva competitiva. En el segundo caso, el objeto de los controles son los productos, medicamentos o complementos nutricionales susceptibles de producir dopaje en el deporte, y las obligaciones de declaración, prohibiciones específicas, etc., son manifestación de una política pública que pretende supervisar su tráfico ilícito y dispensación irregular.
149. También su represión sigue distintos caminos: en el primer caso, la LOD establece un régimen sancionador muy detallado (que ocupa una parte importante de la ley orgánica), mientras que en el segundo se deriva a otros ámbitos, al de la seguridad ciudadana (artículo 42 y disposición final 3ª) y al de las profesiones tituladas (artículo 43).
150. La única salvedad deriva de la protección unitaria de tipo penal que reciben los "deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas", cuando se den las circunstancias que describe el nuevo artículo 361 bis del Código Penal (artículo 44 LOD).
151. La LOD no iguala los mecanismos de control en ambos ámbitos y desde luego no impone la posibilidad de realizar controles de dopaje generalizados sobre la población para controlar la práctica deportiva en su conjunto y combatir de esa forma la utilización de sustancias dopantes por deportistas que no están sometidos a la vinculación que supone una licencia deportiva.
152. Como ha expuesto la doctrina más autorizada, varias son las razones que explican dicha diferencia (los costes de tales controles, la asimetría que podría darse cuando en España la utilización de productos de drogadicción no está penada cuando es para uso particular, etc.) pero la más importante de todas ellas, sin duda, es la proporcionalidad de la medida.



153. Como es sabido, el principio de proporcionalidad desarrolla sus funciones en relación con el control de constitucionalidad de la actividad legislativa que imponga una restricción o limitación de derechos fundamentales.
154. La LOD otorga rango orgánico a su artículo 5 (de la obligación de someterse a los controles de dopaje, localización habitual y tratamientos médicos), artículo 6.1 (personal habilitado), artículo 6.2 (prohibición de controles en determinada franja horaria), artículo 6.3 (derecho a ser informados y a no someterse a la prueba), artículo 8.1 (controles de dopaje), artículo 36 (autorización de cesión de datos), artículo 44 (nuevo tipo penal) y párrafo tres de la disposición final tercera (que modifica el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, LOPSC). Tal calificación, al margen de los dos últimos supuestos en los que resulta meridiana (las restricciones de la libertad del artículo 17.1 CE dispuestas en el Código Penal han de estar previstas en normas orgánicas, y el artículo 24 LOPSC ya está calificado de orgánico por la LOPSC, al afectar fundamentalmente a los derechos de reunión y manifestación reconocidos por el artículo 21 CE), obedece a la intensa afectación que producen sobre derechos fundamentales, en particular sobre el derecho a la integridad física (artículo 15 CE) y a la intimidad personal (artículo 18.1 CE).
155. Los controles de dopaje, que se desarrollan mediante procedimientos estandarizados a través de una muestra extraída al efecto ("ure, orina, sangre o cualquier otro fluido o muestra de carácter menor", artículo 17.3 del anteproyecto), constituyen un supuesto de intervención corporal que afecta, por todas STC 207/1996, de 16 de diciembre, a ambos derechos. También las obligaciones de localización y de indicación de los tratamientos médicos introducen limitaciones al derecho a la intimidad personal.
156. De otra parte, inciden también sobre el derecho fundamental de protección de datos de carácter personal (artículo 18.4 CE), porque los resultados de tales análisis van a ser objeto de tratamiento, se impone un deber de comunicación a las autoridades competentes, y en otros su cesión a otras entidades y organismos. El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), dispone que los datos "de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o cuando el afectado consienta expresamente".
157. Pues bien, el legislador estatal ha considerado que tales derechos podían ser limitadamente sacrificados tratándose de "deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales, de ámbito estatal" (artículo 5.1) y "deportistas que hayan sido suspendidos en su licencia deportiva por haber incurrido en una infracción de dopaje mientras se



encuentren cumpliendo la sanción" (artículo 5.2), para alcanzar un fin constitucionalmente lícito.

158. Tales derechos no son absolutos y pueden ceder ante razones justificadas de interés general convenientemente previstas por la ley, entre las que se encuentra la actuación del *ius puniendi*. El interés en la determinación de los hechos relevantes para corregir las infracciones cometidas en materia de dopaje en el deporte justificaría la realización de tales controles y la imposición de las obligaciones mencionadas.
159. En suma, la LOD configura un ámbito de sujeción especial que comprende a los deportistas con licencia federativa para participar en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, en el que se persigue el consumo de sustancias ilegales, lo que justifica las restricciones que se imponen a los derechos fundamentales de tales deportistas, y un ámbito de sujeción general, que engloba a los deportistas en general que practiquen un deporte sin estar sometidos a la disciplina federativa, en el que se persigue, fundamentalmente, el tráfico de productos que contengan sustancias dopantes y su indebida dispensación, sin que se hayan previsto controles generalizados (semejantes a lo que ocurre en otros ámbitos como la conducción de vehículos).
160. Una vez formuladas tales consideraciones generales que nos sirven de aproximación para el estudio del anteproyecto, pasamos a analizar aquellos contenidos que reclaman un análisis detenido.

B) Los deportistas sin licencia federativa:

161. El anteproyecto parece seguir el modelo de la LOD, pues en gran medida reitera el contenido de sus previsiones sustantivas. Sin embargo, no se extrae esa conclusión con claridad y surgen dudas sobre el mantenimiento de la diferenciación explicada, no solo por razones sistemáticas (no se distinguen nítidamente las previsiones específicas dirigidas a los deportistas federados de las previsiones dirigidas a la población en general), sino fundamentalmente por la redacción escogida a la hora de delimitar aquellos obligados a someterse a los controles de dopaje.
162. El artículo 13.1 dispone que los deportistas incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la presente ley tendrán obligación de someterse a los controles en competición y fuera de competición que determine la Agencia Vasca Antidopaje y los demás organismos públicos y privados habilitados mediante la presente ley. Obligación que, además, no les exonera de someterse a los controles previstos en las disposiciones estatales e internacionales.



163. El artículo 1 dedica sus apartados 4, 5, 6 y 7 a llevar a cabo la tarea de delimitación de su ámbito de aplicación. El apartado 4 se centra en el ámbito material, constituido por las actividades y competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco —del que se excluyen las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente—.
164. El apartado 5 dibuja el ámbito subjetivo para incluir en el mismo a los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco. Pero a dichos deportistas se añaden los que residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco. De igual forma, la ley también será de aplicación a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad deportiva en el País Vasco, aunque sea temporalmente. La delimitación no se cierra sin advertir que “dicho ámbito subjetivo se entiende sin perjuicio de la aplicación de disposiciones estatales e internacionales a los citados deportistas con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal o internacional”.
165. Finalmente, y a los efectos que ahora nos interesan, el apartado 6 trae a la ley la definición de deportista del artículo 66 LDFV, esto es, todas aquellas personas que practiquen algún deporte, aún cuando no estén federadas o no participen en competiciones deportivas.
166. Esa definición omnicomprendiva de deportista a los efectos de la aplicación de la ley, se hace muy presente al fijar el ámbito de aplicación del régimen disciplinario y sancionador —artículo 21 y 22—, ya que el artículo 22.1 lo proyecta sobre el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y su párrafo *in fine* puntualiza que “No será precisa la existencia de relaciones de especial sujeción y las acciones u omisiones también pueden materializarse en actividades deportivas de carácter no competitivo”.
167. Ello puede inducir a pensar que la futura ley se proyecta sobre cualquier practicante de un deporte y a esa conclusión han llegado, además, varios de los órganos que han intervenido en el procedimiento de confección del anteproyecto, caso del Departamento de Sanidad y Consumo o la Agencia Vasca de Protección de Datos.
168. El departamento promotor ha insistido en que en ningún momento se ha querido que la ley se aplique a los simples practicantes de una actividad física; lo que se pretende es proteger la limpieza de las competiciones deportivas y la salud de los deportistas que participan en las mismas.

169. Tal vez los problemas nacen de la forma en la que el anteproyecto refleja la idea de extender el control a competiciones no oficiales, pero de gran repercusión pública,



organizadas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en las que no es requisito necesario para participar la posesión de la licencia federativa e Integración en las federaciones deportivas.

170. La LOD deja a salvo las competencias de las comunidades autónomas en materia de deporte y fija su ámbito objetivo en las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y su ámbito subjetivo en los deportistas con licencia federativa estatal o autonómica homologada, en competiciones deportivas organizadas, promovidas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas, sin perjuicio de su aplicación a las actividades deportivas internacionales que se realicen en España, en los términos del artículo 33.
171. Considera la Comisión que el ámbito natural de regulación del anteproyecto ha de venir circunscrito a las competiciones deportivas de carácter oficial y ámbito territorial autonómico o inferior y a los deportistas que participan en las mismas en posesión de licencia federativa vasca. Sobre tales competiciones y deportistas despliegan las federaciones deportivas del País Vasco sus prerrogativas de autoridad pública, participando en la gestión de un servicio público administrativo.
172. Ahora bien, la competencia genérica en materia de deporte también permitiría, a nuestro juicio, impulsar una política de prevención y control que incluyera, asimismo, la posibilidad de controles de dopaje a los deportistas con licencia universitaria o escolar vasca, y se extendiera el ámbito de tales controles a determinadas competiciones no oficiales y a quienes participen en ellas.
173. Correspondería ponderar al legislador autonómico la proporcionalidad de la medida a la vista de los derechos fundamentales afectados, respetando eso si su contenido esencial tal y como ha sido definido por la LOD, asumiendo que tales controles también se enderezan a la consecución de una finalidad legítima como lo es la de erradicar el dopaje en dichas competiciones.
174. Como ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: "si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)".
175. Aún existiendo prácticas de dopaje fuera del ámbito federativo competitivo, habría que valorar si resulta proporcional al peligro para la salud y la limpieza en el deporte que supone el dopaje en tales competiciones el que los deportistas con licencias



universitarias o escolares o participantes sin licencia deban someterse a controles de dopaje, obligaciones de localización y de información sobre sus tratamientos terapéuticos, para descartar que tales cargas generen un desequilibrio patente y excesivo entre la medida restrictiva y la finalidad de la norma.

176. En cualquier caso, dentro de la lógica de incluir en el ámbito general de la ley determinadas competiciones no oficiales y a quienes participen en ellas sin licencia, no se entiende que la disposición adicional sexta establezca un régimen aparentemente completo para un caso singular de tales competiciones, como son "las pruebas deportivas de gran exigencia física".
177. La forma en la que tal regulación se realiza debería ser, además, a juicio de la Comisión, sopesada. Convendría explicitar de manera precisa si pueden ser sometidos o no a controles fuera de competición —en cuyo caso habría que valorar si podrían llevarse a cabo sin la obligación de facilitar sus datos de localización—, cuáles son sus obligaciones exactas, porque de un lado quedan exonerados de "las documentales e informativas previstas en esta Ley para las y los deportistas con licencia" —en una asunción indirecta de que el ámbito subjetivo de la ley coincide con el de dichos deportistas—, pero por otro deben cumplir algunas de ellas —como muestran los criterios que deben regir el régimen particular de control que ha de guiar la confección del reglamento—, y especificarse de forma nítida si es de aplicación el régimen sancionador dispuesto por la ley (tipificación, prescripción, procedimiento, etc.) cuál es el órgano competente para instruir y sancionar, y fijar las sanciones manifestando de forma indubitada que tienen esa naturaleza las que se contemplan en la citada disposición, distinguiendo las principales —inhabilitación para participar durante un plazo o a perpetuidad— y las accesorias —descalificación, anulación de resultados, etc.—.
178. Si en general la correcta delimitación del ámbito de una norma es fundamental para su adecuada aplicación, qué decir cuando se actúa sobre derechos fundamentales; en tales casos, la redacción de la norma debe buscar la seguridad jurídica y la certeza del derecho, sin que con su ambigüedad pueda dar lugar a distintas interpretaciones.
179. Aun teniendo un fundamento constitucional y resultando proporcionadas las limitaciones del derecho fundamental establecidas por una ley, éstas pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de aplicación. El Tribunal Constitucional ha exigido lo que ha denominado cierta "calidad de ley", es el legislador quien debe determinar cuándo concurre un bien o derecho que justifica la restricción de derechos fundamentales "y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es el quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal



limitación y sus consecuencias. Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la Administración el desempeño de una función que sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de ley del artículo 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y su regulación" (STC 292/2000, de 30 de noviembre).

180. Estima la Comisión, en síntesis, que es necesario realizar un esfuerzo para depurar los términos del anteproyecto y solventar de esa forma los problemas interpretativos que suscita

C) Deportistas con licencia estatal o internacional:

181. No solo se ha revelado problemática la delimitación del ámbito del anteproyecto por esa razón, sino que también lo ha sido por motivos competenciales. La Abogacía del Estado en el Consejo Superior de Deportes ha sostenido que las potestades administrativas en materia de dopaje sobre las competiciones de ámbito estatal e internacional corresponden de manera exclusiva al Estado. También que la competencia para la realización de los controles fuera de competición tiene que venir determinado por el tipo de licencia con que cuente el deportista, de modo que si el deportista tiene licencia autonómica existirá competencia autonómica en materia de dopaje, mientras que si la licencia es estatal las competencias deben corresponder a la Administración del Estado.
182. El redactor del anteproyecto parece coincidir con ese planteamiento —el sometimiento a control es proyección del vínculo que une al deportista con la correspondiente federación, si bien no es exclusivo porque los deportistas no poseen una sola licencia ni tan siquiera están federados en una única federación—, pero lo cierto es que la suma de distintos mensajes dispersos a lo largo del articulado del anteproyecto dan como resultado un régimen que reclama su clarificación si se quieren evitar conflictos cuando se proceda a su aplicación.
183. En opinión de la Comisión cabe enunciar con cierta nitidez la regla según la cual la potestad de intervención de cada federación en el ejercicio de las funciones delegadas en materia de dopaje es acorde con su ámbito territorial de actuación. Por ello, las federaciones vascas pueden someter a control y sancionar a los deportistas con licencias federativas vascas, al margen de que tales deportistas posean asimismo otra licencia federativa de ámbito superior, y en tal caso se encuentren asimismo bajo la disciplina de otra federación u organismo internacional.
184. Con arreglo a dicha premisa resulta adecuado el artículo 1.4, según el cual el ámbito material general de la presente ley está constituido, en principio, por las actividades y competiciones deportivas, federadas o no, que se desarrollen en el País Vasco, del que se excluyen las competiciones deportivas oficiales de



ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente, que según el artículo 21.1 y 2 se rigen por las normas disciplinarias de ámbito estatal o de ámbito internacional, respectivamente. Mantiene su vigencia el artículo 105.3 LDPV, según el cual "las infracciones cometidas con ocasión de competiciones deportivas de ámbito estatal se regirán por las normas disciplinarias de ámbito estatal".

185. También lo es el inicio del artículo 1.5, cuando establece que el ámbito subjetivo general de aplicación de esta ley se extiende a las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco.
186. Son los añadidos posteriores del artículo 1.5 los que introducen dudas sobre el alcance de la futura ley ("así como a todos aquellos y aquellas deportistas mientras residan, siquiera temporalmente, entrenen o compitan en el País Vasco. De igual forma, la Ley también será de aplicación a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad deportiva en el País Vasco, aunque sea temporalmente. Dicho ámbito subjetivo se entiende sin perjuicio de la aplicación de disposiciones estatales e internacionales a los citados deportistas con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal o internacional").
187. El anteproyecto separa la potestad de control al deportista y la competencia disciplinaria. Con cierta ambigüedad en el artículo 12.3 (donde se prevé el traslado de los resultados analíticos a las agencias antidopaje que ostenten competencias en la materia), y sin ambages en el artículo 13.10 (pues pueden ser sometidos los deportistas con licencia estatal e internacional que participen en competiciones deportivas que se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o que residan temporalmente, en ésta, aunque "la tramitación de los expedientes administrativos sancionadores o disciplinarios que pudieran derivarse de los mismos se tramitará por el organismo que resulte competente con arreglo a la ley") y artículo 13.11 (en el que se reitera el traslado de los resultados analíticos definitivos de los controles de dopaje efectuados en el País Vasco a los organismos deportivos correspondientes que puedan resultar competentes). La obligatoria sujeción a los controles autonómicos se infiere también del artículo 19, apartados 5 y 6 (en controles fuera de competición a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones internacionales o competiciones oficiales de ámbito estatal, pese a que se reconoce la preferencia en su realización a otras organizaciones).
188. Sigue ese esquema, finalmente, el artículo 51, donde se explicita que la Agencia Vasca Antidopaje podrá ordenar, sin menoscabo de las competencias que puedan tener otras organizaciones antidopaje, la realización de controles fuera de competición a deportistas nacionales o extranjeros que compitan o se entrenen en



Euskadi, pero se añade que los resultados analíticos serán comunicados a la respectiva federación deportiva internacional, a la Agencia Mundial Antidopaje y a aquellas organizaciones antidopaje que también resulten competentes.

189. Aunque el artículo 22.1, párrafo ad limine, prescribe que "el régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta Ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito autonómico, estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales", tal previsión ha de entenderse que se refiere, sin embargo, a aquellas infracciones que cometan quienes no se encuentren sometidos al régimen disciplinario deportivo (esto es, quienes no tengan la condición de deportistas federados y personal de su entorno que realicen funciones bajo licencia deportiva o habilitación equivalente).
190. Debe descartarse que pueda existir un supuesto de solapamiento de responsabilidades administrativas y disciplinarias, por una infracción y un mismo autor, cuando son idénticas las tipificaciones y las sanciones aplicables. La Comisión considera que, a los efectos de la represión del dopaje en el deporte, los deportistas federados son sujetos cualificados sometidos a una disciplina específica, y coincide con lo expuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sus sentencias de 20 de julio de 2009 y 21 de septiembre de 2009, cuando afirmaba que no cabe "hablar de un diferenciado ámbito administrativo sancionador en lo que se refiere a los deportistas federados que permita aplicar a estos sanciones administrativas propias de general sometimiento de todos los administrados", cuando menos en esta materia y a la vista de la forma en la que se regula.
191. Ese conjunto de normas prefiguran, en suma, un régimen de sujeción generalizada de todos los deportistas federados, incluso de los titulares de licencia estatal o internacional, a los controles autonómicos ordenados por la Agencia Vasca Antidopaje, mientras residen, entrenan o compiten en el País Vasco. Sin embargo, también se viene a reconocer que los deportistas con licencia estatal o internacional se encuentran sujetos a otra normativa (estatal o internacional) y que la competencia sancionadora sobre los mismos es de la correspondiente federación (estatal u organismo internacional).
192. De esa forma aparecen disociadas la potestad de inspección —genérica, pues se proyecta sobre todos los deportistas— y la potestad disciplinaria —específica, al circunscribirse a deportistas con licencia vasca—.
193. Ahora bien, la actividad desplegada con los controles pretende garantizar el cumplimiento de las normas que rigen en la materia de dopaje. Su función, por tanto, es la de ser un instrumento para vigilar el comportamiento de los deportistas, tarea que se desarrolla como eventual antecedente de un procedimiento



disciplinario y que tiene en sí misma un componente coercitivo pues impone a sus destinatarios la carga de soportar su intervención.

194. La actividad de inspección y control es manifestación de la actividad administrativa de policía y está directamente conectada con la potestad sancionadora de la Administración, porque no es entendible al margen de aquella. Por ello, debe necesariamente participar de la habilitación normativa de esta.
195. En el caso que nos ocupa la actividad de recogida de muestras genera cargas en los deportistas en forma de deberes de soportar la actividad del equipo encargado de llevarla a cabo, cargas que no son sanciones, pero que carecerían de todo sentido si no fuera porque pueden terminar en un procedimiento disciplinario.
196. Es por ello por lo que debe existir una continuidad entre la labor de control y la disciplinaria, al encontrarse íntimamente enlazadas, sin que se desplieguen sobre ámbitos diferentes.
197. Todo lo anterior se manifiesta con el fin de que se reflexione sobre el texto del anteproyecto, a la vista de la discordancia apreciada, porque los resultados de los controles han de ser el antecedente que posibilita el subsiguiente ejercicio de la potestad disciplinaria de los órganos autonómicos, sin que se despliegue al margen o, si se prefiere, de forma independiente y aislada de la misma, a favor de otros organismos o entes competentes.
198. Ello no es óbice para que la ley pueda prever la colaboración entre las administraciones públicas afectadas —o de las federaciones que ejercen las correspondientes funciones delegadas— en la realización material de los controles de dopaje.
199. Desde el punto de vista de la factibilidad, sería complejo elaborar un programa anual de controles de dopaje [artículos 12. f) y 18], cuando sus destinatarios son deportistas que van a encontrarse en el País Vasco de forma temporal y en muchos casos sin previo aviso (v.gr. cuando se trasladen para residir o entrenar durante un periodo de tiempo).

D) Responsabilidad de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos:

200. A tenor del artículo 44.2 LDPV, tendrán la consideración de competiciones oficiales aquellas que previamente sean calificadas como tales por las federaciones en el calendario anual correspondiente. El artículo 45.1 LDPV dispone, por su parte, que las funciones de ordenación, calificación y autorización de las competiciones oficiales corresponden a las federaciones territoriales y vascas. Dichas federaciones



deberán coordinar sus funciones garantizando una correcta estructura piramidal de las competiciones deportivas. Por último, el artículo 46 prevé que, para participar en las competiciones deportivas de carácter oficial enumeradas en el artículo anterior, será necesario estar en posesión de la licencia federativa, universitaria o escolar, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de esta ley.

201. El anteproyecto distingue en sus artículos 6 y 7 las responsabilidades de las entidades deportivas y la responsabilidad de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos.

202. Con esa distinción se destinan, fundamentalmente, las responsabilidades federativas (calificadas como entidades deportivas por el artículo 9 LDPV) y las de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que organizan competiciones.

203. Pero sin que ello suponga un diferencia sustancial en su respectivo tratamiento, ya que, de un contraste entre las previsiones de ambos preceptos, se concluye que las responsabilidades de las entidades deportivas y las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos son idénticas, con alguna ligera modificación, e incluyen, entre otras, aprobar la reglamentación antidopaje, realizar los adecuados controles de dopaje, exigir la aceptación de las normas antidopaje a los clubes, deportistas y demás agentes deportivos para poder participar en su actividades deportivas, velar por la confidencialidad de los resultados de los análisis de los procesos de control de dopaje, etc.

204. De otro lado, el reconocimiento para la realización de controles se traslada al artículo 19.1 (corresponde a las federaciones deportivas vascas y territoriales "con carácter general y, sin perjuicio de las competencias de otras entidades previstas en esta Ley") y se conecta el ámbito de aplicación del régimen disciplinario, vía artículo 21.1, con la competencia en materia de procedimientos disciplinarios, ya que el artículo 38 declara que la potestad en materia de dopaje corresponde a las federaciones deportivas y a las demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial "con ocasión de la participación en competiciones deportivas celebradas en el País Vasco".

205. Esto es, se produce una asimilación funcional de las federaciones y las entidades organizadoras, pese a que solo las federaciones pueden actuar como agentes colaboradores de la Administración pública, ejerciendo por delegación funciones públicas de carácter administrativo (artículo 15.3 LDPV), entre las que se incluyen la prevención, control y sanción del dopaje (artículo 25.1 d) LDPV).

206. Tal posibilidad debe reconsiderarse ya que tanto la competencia para la realización de los controles como la competencia en materia de procedimientos disciplinarios



para la represión del dopaje en el deporte han de remitir a una autoridad pública. Se trata de auténticas intervenciones públicas y de sanciones administrativas sujetas a un régimen público sancionador.

207. En lo que se refiere a los controles, el artículo 11.4 LOD arbitra una fórmula para el caso de las competiciones oficiales de carácter profesional que podría hacerse extensiva a las entidades organizadoras, de suerte que un convenio entre la Agencia Vasca Antidopaje —o la federación— y la correspondiente entidad podría fijar la forma, las condiciones de realización y financiación de los controles, siempre sobre la base de que la responsabilidad final y disciplinaria corresponde, únicamente, a la Agencia Vasca Antidopaje o a la respectiva federación deportiva, en razón de su consideración de potestad pública propia o legalmente delegada.
208. En el caso de la sanción, los expedientes deberán ser resueltos por los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas —por delegación de la Agencia— o por la propia Agencia, sin que puedan imponerlas, en tanto que manifestación del *jus puniendi* del Estado, una entidad organizadora, con las correcciones que ello implica en otros mensajes del anteproyecto (artículo 32.5, artículo 38, apartados 1. 2 y 3 y 39. 6).

E) La Agencia Vasca Antidopaje:

209. El Capítulo II del anteproyecto (artículo 10 a 12) se dedica a la creación de la Agencia Vasca Antidopaje como organismo autónomo administrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
210. De acuerdo con su catalogación de organismo autónomo administrativo, se constituye de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (LPOHGPV), cuyo artículo 9 determina que los organismos autónomos son aquellos entes institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización, en régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y que se rigen por el derecho público.
211. La creación de estos organismos deriva de la potestad de autoorganización de las administraciones públicas que con carácter general reconoce el artículo 10.2 del EAPV, y el anteproyecto lo contempla como órgano clave en el desarrollo de las actuaciones que a la Administración de la Comunidad Autónoma le corresponden en materia de dopaje.



212. Ahora bien, lo primero que llama la atención es que el anteproyecto ni tan siquiera señala su forma de integración en la Administración de la Comunidad Autónoma. Una cosa es que no quede sometido a una dependencia jerárquica, al constituirse en un organismo autónomo independiente sui generis, cuyo régimen jurídico singular viene definido por su ley de creación, y otra que ni tan siquiera quede adscrito a un departamento del Gobierno.
213. En realidad, la independencia del organismo viene concretada al establecerse el estatuto de su Director, que "ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna en el desempeño de aquellas" (artículo 11.3).
214. El Director de la Agencia queda caracterizado por una serie de rasgos definitorios que refuerzan la autonomía con la que ha sido investido el organismo. Es nombrado por Decreto del Gobierno Vasco, por un período de cuatro años (artículo 11.2), lo que permitirá que quede desvinculado del Gobierno que lo nombró. Tendrá la consideración de alto cargo, quedando sometido al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma (artículo 11.5), y el cese en el cargo no es libre sino que existen una serie de supuestos tasados que pueden conducir al mismo (artículo 11.4).
215. Sin embargo, sorpresivamente, entre las causas de cese se incluye "por separación, acordada por Consejo de Gobierno" (artículo 11.4 b), lo que deja sin contenido las garantías con las que, al parecer, quería ser concebido.
216. En cualquier caso, tampoco existen razones que obliguen a dotar al órgano de independencia; si bien su creación se ha inspirado en la Agencia Estatal Antidopaje, no puede decirse que dicha Agencia sea independiente, estando sometida a la legislación reguladora de las agencias estatales. Al Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Consejo Superior de Deportes, le corresponde la dirección estratégica, evaluación y control de resultados de su actividad mediante el seguimiento y control del contrato de gestión (artículo 4 de sus estatutos aprobados por Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero) que, elaborado por la Agencia, debe ser aprobado por orden conjunta de los Ministerios de Educación y Ciencia, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda (artículo 19 de los Estatutos).
217. Es más, tratándose de un organismo autónomo cuya labor se centra básicamente en la represión de las infracciones en materia de dopaje, ejerciendo una labor de policía administrativa que implica ejercicio de autoridad, no parece que su actuación administrativa merezca un plus de eficacia o legitimidad si se despliega de forma independiente de la Administración territorial de la que es parte integrante.
218. Como dijimos en el DCJA 53/2010, en nuestro ordenamiento no existe un modelo definido de órganos de gobierno de los organismos autónomos, ni lo dispone la



Ley de Gobierno ni la LPOHGIV, habiéndose optado por diferentes fórmulas en las leyes de creación y en los decretos de estructura orgánica que las han desarrollado.

219. Pese a la disparidad de órganos administrativos que integran los organismos autónomos, de la observación empírica cabe extraer las siguientes notas caracterizadoras de su estructura interna: (i) un órgano superior colegiado, en el que habitualmente participan representantes de distintas administraciones públicas y en ocasiones organizaciones representativas de intereses sociales; (ii) un órgano ejecutivo unipersonal, con la denominación de Director o Directora.
220. Este Director o Directora responde en su caracterización a un alto cargo de la Administración que asume la dirección del organismo en los términos del artículo 31.2 de la Ley de Gobierno.
221. Esta Comisión viene señalando reiteradamente que la ley que crea un organismo autónomo debe establecer los aspectos esenciales organizativos del mismo, que pueden ser desarrollados reglamentariamente. Sin embargo, en este caso el anteproyecto carece de la densidad normativa suficiente.
222. El anteproyecto prescribe que son órganos de la Agencia el Director o Directora, el Consejo Consultivo, el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT) y aquellos otros que se establezcan en su estatuto propio.
223. Pues bien, en lo que se refiere a sus competencias y funciones estas se encuentran escasamente perfiladas. El Director dirige la Agencia y ostenta su representación (artículo 11.2). La labor del Consejo Consultivo consiste en asesorar al Director o Directora, quien debe oír al Consejo "en aquellas propuestas que éste realice en el ejercicio de sus funciones" (artículo 11.3 y 6). El COVAUT, por último, concede o deniega las autorizaciones de uso terapéutico (artículo 11.1.w) y, aunque depende orgánicamente de la Agencia Vasca Antidopaje, actuará con plena autonomía funcional en el desempeño de sus atribuciones (artículo 11.7).
224. En lo relativo a la composición de los órganos colegiados, si bien se preocupa de establecer el número y forma de investidura de los integrantes del Consejo Consultivo, precisando que la pertenencia al Consejo no dará lugar a retribución alguna, pero tendrán derecho a abono de gastos y dietas, nada se concreta respecto al COVAUT, del que se desconocen enteramente tales extremos.
225. Si la definición organizativa resulta escasa, ocurre lo contrario cuando se aborda el régimen jurídico que rige la actividad de la Agencia. En tanto que responde en su concepción a un organismo autónomo administrativo, ello determina su sujeción al derecho público y a las leyes correspondientes que en materia de procedimiento.



patrimonio y contratación, función pública y régimen presupuestario disciplinan tales aspectos, sin que sea preciso insistir sobre ellos.

226. En cuanto a las funciones de la Agencia, hay que decir que las mismas se enuncian de forma genérica en el párrafo *in fine* del artículo 10.1: "Dicha Agencia es el organismo autónomo que llevará a cabo el diseño y ejecución de las acciones que en el campo de la prevención, control y represión del dopaje corresponden al Gobierno Vasco"; y de forma específica en el artículo 12.1 donde se listan en 24 letras con la siguiente introducción: "Son funciones de la agencia Vasca Antidopaje, con relación a la prevención, control y represión del dopaje y en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, además de cualesquiera otras previstas en esta Ley, las siguientes". Para dotar de un mayor grado de complejidad a la delimitación, el artículo 12.2 prevé que "tales funciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden en los mismos ámbitos a la Agencia Estatal Antidopaje".
227. La Comisión sugeriría depurar la redacción del artículo 10.1 y sustituir Gobierno Vasco por Administración General de la Comunidad Autónoma, pues no se debe confundir ésta con quien la dirige, sin que las competencias del Gobierno recogidas en el artículo 29 EAPV y artículo 16 y ss de la Ley de Gobierno puedan ser atribuidas a la Agencia.
228. La acotación del artículo 12.1, "con relación a la prevención, control y represión del dopaje y en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco", resulta suprimible por volver a insistir en lo ya señalado en el artículo 10.1.
229. También convendría eliminar el artículo 12.2, pues no corresponde al legislador autonómico salvaguardar las competencias de un órgano estatal.
230. En el examen del listado de funciones del artículo 12.1 pudieran resultar reiterativas las previstas en las letras a) ("Velar por el cumplimiento de la legislación sobre dopaje") y k) ("Velar por la rigurosa aplicación de las reglas vigentes para la realización de los controles antidopaje, en competición o fuera de competición"), así como las previstas en las letras f) ("Elaborar y, en su caso, llevar a cabo y vigilar, un programa anual de controles de dopaje que incluya controles en y fuera de competición realizados a su instancia, sin perjuicio de los que pudieran ser realizados en Euzkadi por otras Entidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco") y j) ("Determinar las competiciones y las pruebas deportivas en las que es obligatorio el control antidopaje y establecer controles antidopaje obligatorios fuera de competición en el ámbito del País Vasco").
231. También se hace preciso indicar que, en el supuesto de que se mantenga la competencia en materia de procedimientos disciplinarios de las "demás entidades con las que exista una relación de sujeción especial" (artículo 38.3), la posibilidad de revocación de la delegación cuando no haya sido instruido en el plazo máximo de



dos meses tendría que reflejarse en la letra n) ("Tramitar y resolver los expedientes disciplinarios cuando las federaciones deportivas no hayan resuelto en plazo los mismos") del artículo 12.1.

232. Por último, habría que revisar lo dispuesto en la letra l) ("Velar por la protección de la presunción de inocencia de los y las deportistas sometidos a control hasta que la jurisdicción competente adopte algún acuerdo sancionador") del citado artículo 12.1.

233. La presunción de inocencia del deportista, como derecho subjetivo público, opera en un doble plano. Conforme a la STC 109/1986, de 24 de septiembre, *mutatis mutandi*, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a percibir la consideración o el trato de no autor o no partícipe en hechos delictivos o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se le apliquen las consecuencias o efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo. Opera, además y fundamentalmente, en el campo procesal e, igualmente, en el seno del procedimiento administrativo sancionador o disciplinario (pues el ejercicio del *ius puniendi* en sus diversas manifestaciones está condicionado por el artículo 24.2 CE, por todas STC 76/1990, de 26 de abril), y significa que no puede ser sancionado sin una actividad probatoria de cargo, producida con las debidas garantías, de la que pueda deducirse de forma razonada y razonable su culpabilidad.

234. Cabe pensar que lo que el anteproyecto persigue es hacer valer el derecho en su primera faceta pero, una vez impuesta la sanción por el órgano administrativo competente —con las garantías que confiere su segunda faceta—, deja de regir, por lo que no puede prolongarse, como dice el anteproyecto, hasta que la jurisdicción competente se pronuncie. Sería preferible que se enunciara el derecho sin establecer ningún añadido, ya que es su propia configuración la que determina sus límites inherentes.

235. Por otro lado, debe señalarse que, sin que corresponda a esta Comisión entrar a valorar las razones de oportunidad que justifican la creación de la Agencia Vasca Antidopaje que traslada el expediente y se recogen en la Exposición de Motivos del anteproyecto (la existencia de una tendencia generalizada de creación de agencias nacionales antidopaje por su mayor especialización e independencia funcional, el aval a la posible creación de agencias antidopaje de las comunidades autónomas otorgado por la LOD y el Acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco de 22 de febrero de 2006), tales razones deben ser convenientemente sopesadas teniendo en cuenta las consecuencias que dicha decisión comporta y las circunstancias que rodean su adopción en el momento presente de contención del gasto público.



236. La creación de la Agencia Vasca Antidopaje, cuando se produzca su efectiva constitución y funcionamiento (disposición transitoria segunda), absorberá el conjunto de funciones ejecutivas que hasta la fecha viene desarrollando la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura en materia de dopaje (y el servicio administrativo Centro Vasco de Medicina del Deporte).
237. Como hemos dicho recientemente, la creación de un nuevo organismo autónomo supone un incremento de las necesidades administrativas y estructurales. En este caso la Agencia tendrá que asumir funciones que hasta su constitución desarrollaba la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura o los órganos comunes del Departamento para la gestión del personal, la provisión de plazas, la contratación o la respuesta a otras políticas transversales en materia de igualdad, euskera, etc...
238. La memoria económica contempla para la Agencia una estructura muy sencilla (un alto cargo, un médico, un asesor jurídico y un administrativo) y un gravamen presupuestario anual de 458.984,71 €. Si bien pudiera calificarse que su incidencia presupuestaria será modesta (el coste adicional calculado es de 300.000 €), de igual forma difícilmente se aprecia que pueda mejorar sustancialmente la respuesta institucional a la lucha contra el dopaje.
239. Por ello, la Comisión se suma a las fundadas objeciones manifestadas por la Oficina de Control Económico a su creación y considera oportuno recordar la reciente aprobación por el Consejo de Gobierno, en sesión de 28 de junio de 2011, de las Directrices Económicas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2012, referentes a la adopción de medidas de reducción del gasto, adoptándose, entre otros, el siguiente acuerdo: "no se contemplará la creación de nuevos OOAAs, Entes Públicos de Derecho Privado, Sociedades Públicas, Fundaciones y Consorcios. Sólo se constituirán los que a 31 de diciembre de 2011 ya tuvieran aprobada su creación".

F) Las autorizaciones de uso terapéutico:

240. El anteproyecto se ocupa en distintos preceptos de las autorizaciones de uso terapéutico, de manera acorde con la importancia que a la materia le atribuye la Exposición de Motivos del anteproyecto: "La Ley trata de dar respuesta al importante fraude existente en materia de autorizaciones de uso terapéutico que, como se viene reconociendo abiertamente, se ha convertido en una puerta abierta al dopaje".
241. Es esa ordenación la que, empero, no permite vislumbrar con nitidez cuál es el régimen jurídico con el que se pretende normar tal importante cuestión.



242. En primer lugar, el anteproyecto alude a las autorizaciones de uso terapéutico y a las declaraciones de uso de glucocorticosteroides u otras sustancias con régimen análogo.
243. Pese a que el artículo 23.6 señala que los deportistas y su entorno responderán por el incumplimiento o infracción de los requisitos establecidos para la obtención "de las autorizaciones de uso terapéutico o para la formulación de las declaraciones de uso de glucocorticosteroides o de otras sustancias previstas en la normativa vigente". lo que se califica como infracción muy grave en el artículo 24.1.e), no hay en el anteproyecto una regulación material de tales requisitos.
244. La Convención Internacional contra el Dopaje incluye en un Anexo II las "normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos". Para la Convención una autorización de uso terapéutico permite al deportista usar "una sustancia prohibida o un método prohibido". En cuanto a las declaraciones, el punto 9 señala que "en la lista de sustancias y métodos prohibidos ya no figuran sustancias o métodos cuya utilización exija una declaración de uso y, por consiguiente, no es necesario presentar una declaración de uso" (según la nueva redacción que entró en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2011, Resolución de 22 de diciembre de 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación).
245. Entiende la Comisión que habría que coheretizar los términos del anteproyecto con los de la Convención y convendría incorporar, como mínimo, esa definición de las autorizaciones de uso terapéutico, sin perjuicio de que la ley se remita al reglamento para una ordenación sustantiva más acabada.
246. El anteproyecto establece una ordenación adjetiva, de tipo procedimental, que se centra en exclusiva en las autorizaciones de uso terapéutico (ya que nada disciplina sobre las declaraciones de uso de glucocorticosteroides o de otras sustancias), si bien ésta resulta un tanto imprecisa.
247. El artículo 12.1.w) contempla como función de la Agencia Vasca Antidopaje la de "conceder o denegar las autorizaciones de uso terapéutico a través del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico". Por su parte, el artículo 15.14 prevé que "la concesión o denegación de autorizaciones de uso terapéutico podrá ser impugnada ante el Director o Directora de la Agencia Vasca Antidopaje".
248. Ahora bien, el artículo 6.1.o) y artículo 7.ñ) señalan que es responsabilidad de las entidades deportivas y de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos "revisar la concesión y aplicación de las autorizaciones de uso terapéutico y de las bajas deportivas", y el artículo 15.12 incide en esa revisión de la correcta obtención o aplicación de las autorizaciones de uso terapéutico o declaraciones que deberá



realizarse por el Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico de la Agencia Vasca Antidopaje (COVAUT).

249. Suponemos que, cuando los artículos 6.1.o) y 7.ñ) aluden a una revisión, se quieren referir más limitadamente a una actividad de "comprobación", para instar, en su caso, su revocación por parte del órgano competente. Por el contrario la revisión de la COVAUT permitirá a dicho órgano dejarlas sin efecto con las garantías correspondientes, al ser quien las concede.
250. De otra parte, el artículo 15.8 dispone que una copia de las autorizaciones de uso terapéutico que se expidan en el ámbito de esta ley, así como las declaraciones de uso o consumo de sustancias determinadas y las documentaciones complementarias, deberán remitirse a la Agencia Vasca Antidopaje para su registro. Tal previsión parece superflua porque dichas autorizaciones las concede la COVAUT —sin que se contemple que puedan ser expedidas por otro organismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma—, esto es, un órgano del Agencia, por lo que no parece precisa remisión alguna, pudiendo procederse a su registro de oficio.

G) El derecho a la intimidad personal y la protección de datos:

251. Las previsiones del anteproyecto han sido objeto de un riguroso escrutinio por parte de la Agencia Vasca de Protección de Datos, sin que proceda insistir en las consideraciones que en su informe se vierten sobre la configuración constitucional del derecho y el tratamiento que merecen los datos de salud.
252. Tampoco va entrar la Comisión a analizar aquellos contenidos del anteproyecto que se ajustan a lo dispuesto en la LOD y que, además, responden a redacciones sugeridas por la Agencia Española de Protección de Datos, en el informe emitido sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, de 25 de octubre de 2005.
253. Ello le permite centrarse en dos aspectos novedosos que, a su juicio, tendrían que ser reconsiderados.
254. En primer lugar, el artículo 8 LOD distingue los controles de dopaje y los controles y demás actividades de protección de la salud. Los controles de dopaje tiene una funcionalidad muy concreta, comprobar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario. Los controles y demás actividades de protección de la salud se enmarcan en una política de salud, para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva.



255. La disposición adicional quinta LOD señala que, con independencia de lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley (controles de salud), cuando las empresas realicen controles de salud a los deportistas profesionales resultará de aplicación la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
256. El artículo 17.4 del anteproyecto, apartándose de la LOD, añade una nueva finalidad a los controles de salud: "controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones derivadas de la Ley en materia de dopaje y salud".
257. El anteproyecto, en su parte expositiva, advierte además que, a diferencia de la legislación estatal, tales controles no se insertan en el marco de relaciones laborales, y concluye: "En el presente texto se ha optado por facultar a cualesquiera entidades deportivas a realizar controles de salud a sus deportistas, con independencia de que tengan una relación laboral. Sería un franco retroceso negar a las federaciones y demás entidades deportivas la facultad de realizar controles de salud sobre sus deportistas por el mero hecho de no existir una relación laboral".
258. En cuanto a las consecuencias de tales controles de salud, sus resultados "no conllevarán sanciones disciplinarias o administrativas, aunque sí podrán llevar aparejadas medidas de carácter deportivo o laboral establecidas por dichas entidades deportivas y podrán servir para la planificación de los controles de dopaje".
259. Así las cosas, cabe ya adelantar que mal pueden cumplir la nueva finalidad que se les atribuye —controlar el cumplimiento de las obligaciones en materia de dopaje— si una vez comprobada la infracción —al detectarse la utilización, uso o consumo de sustancias o métodos prohibidos o no autorizados— la misma resulta impune.
260. Pero sin entrar a valorar esa posible incongruencia, se hace preciso insistir que dicha finalidad se aleja de la forma en la que tales controles de salud quedan disciplinados en la LOD, pues se disponen en el marco ordinario de vigilancia de la salud de los deportistas que atiende a los riesgos derivados de la práctica deportiva y que se desenvuelve a favor del deportista o, a lo sumo, en interés en general de los practicantes de la correspondiente disciplina o modalidad deportiva.
261. En materia de controles de salud en el seno de la empresa, de la lectura de la STC 196/2004, de 15 de noviembre, en la que se realiza una exégesis detenida de las previsiones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y Ley General de la Seguridad Social (LGSS), se desprende que los reconocimientos médicos sólo podrán realizarse, por regla general, cuando el trabajador preste su consentimiento, fundamentalmente por la afectación que producen sobre el derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18.1 CE. Los datos que cabe extraer de tales reconocimientos forman parte de la esfera íntima y su revelación constituye una intromisión en el citado derecho fundamental.



Su resultado son datos relativos a la salud del sujeto que también están protegidos desde la perspectiva del derecho a la protección de los datos personales del artículo 18.4 CE.

262. Ahora bien, existen sin embargo excepciones a ese principio de libre determinación del sujeto, configurándose supuestos de obligatoriedad, pero "los límites legales (las excepciones a la libre disposición del sujeto sobre ámbitos propios de su intimidad, previstos en el art. 22.1, párrafo segundo, LPRD) quedan vinculados o bien a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores o de terceros, o bien, en determinados sectores, a la protección frente a riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (pues es obvio que existen empresas y actividades sensibles al riesgo y por tanto trabajadores especialmente afectados por el mismo – ATC 272/1998, de 3 de diciembre –). La obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquel, según se dijo, es libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiendo o no a los reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión".

263. En lo que se refiere al artículo 196.1 y 2 LCSS, la conclusión del Tribunal Constitucional es inequívoca:

"el reconocimiento médico en la relación laboral no es, en definitiva, un instrumento del empresario para un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar. Su eje, por el contrario, descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de su salud. Un derecho que sólo puede venir restringido por las excepciones enunciadas, con los requisitos y límites mencionados. En suma, la regla es -y la regla tiene una clara base constitucional a tenor de la conexión íntima entre los reconocimientos médicos y derechos fundamentales como el de la intimidad personal- la conformidad libre, voluntaria e informada del trabajador para la vigilancia y protección de su salud frente a los riesgos del trabajo".

264. En ese contexto, la diferenciación entre los controles de dopaje y los controles de salud debe mantenerse, sin que se conviertan en técnicas intercambiables. En el caso de los controles de salud estos deben ser, por regla general, voluntarios; sólo si se apreciara una situación objetiva de riesgo o peligro en la salud de los deportistas o de terceros, o bien en determinadas disciplinas o modalidades deportivas, riesgos específicos y, por tanto, deportistas especialmente expuestos, podrían imponerse reconocimientos preceptivos. Tales criterios tendrán que ser valorados también cuando se desarrolle lo previsto en el nuevo artículo 83.1 LDPV (cuya nueva redacción es objeto de la disposición final segunda del anteproyecto).



265. Desde luego hay que descartar que los controles de salud se orienten a conseguir otras finalidades (como la de reprimir el dopaje), en especial cuando para alcanzarlas ya se han dispuesto otras formas que también imponen limitaciones al derecho fundamental.
266. También debemos expresar las objeciones que nos suscita la regulación de la tarjeta de salud del deportista contenida en el artículo 46.
267. En este supuesto se produce, asimismo, una redefinición de un instrumento, la tarjeta de salud del deportista, concebido en la LOD para que el "deportista y el personal sanitario que le atiende dispongan de la mejor información clínica posible en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia" (artículo 49.1 párrafo segundo), al añadirle la siguiente finalidad: "contribuir a una mayor eficacia en la lucha contra el dopaje".
268. La tarjeta de salud, que contendrá la información referida al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y de dopaje realizados al deportista desde la obtención de la correspondiente licencia, el resultado de los mismos y las determinaciones médicas a tener en cuenta para una adecuada atención sanitaria del mismo, ha de incluir asimismo las autorizaciones de uso terapéutico y las bajas laborales y deportivas que haya tenido el deportista.
269. De forma coherente con la nueva finalidad, el apartado 5 del artículo 46 prescribe que en materia de control de dopaje no cabe el acceso a los datos de la tarjeta de salud de deportista sin su consentimiento, pero "la negativa a dar el citado consentimiento tendrá el mismo tratamiento sancionador que el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones de información sancionadas en el artículo 24.1.c de la ley".
270. Estamos ante una obligación que se impone a los deportistas vascos que incorpora una limitación a su derecho fundamental de protección de datos, al prescribir un tratamiento de datos relativos a la salud y su comunicación a personal que desempeñe funciones de control de dopaje, en el marco, cabe suponer —aunque no lo diga expresamente el anteproyecto— de un control de dopaje —tanto dentro como fuera de competición—.
271. En este supuesto, aunque la comunicación de datos se subordina al consentimiento del interesado, es claro que, al igual que en el caso de la información relativa a los tratamientos terapéuticos (artículo 13.7), dicho consentimiento no es libre, porque de negarse a prestarlo será sancionado.

272. Entiende la Comisión que asumida la legitimidad constitucional del tratamiento de datos que implica la tarjeta sanitaria (cuyos datos serán recogidos de diversas fuentes: deportista, personal sanitario, órganos disciplinarios competentes y, en su



caso, por el equipo con el que tenga suscrita la licencia) cuando lo es en beneficio del propio deportista, a fin de que reciba la mejor asistencia posible, ello no significa que pueda servir para alcanzar otros objetivos, como el de mayor eficacia en la lucha contra el dopaje, cuando no existe un interés general que prime sobre el derecho fundamental a su confidencialidad.

273. Son varias las razones que cabe esgrimir para cuestionar la razonabilidad del sacrificio del derecho fundamental. Como es sabido, la afectación debe respetar los principios de proporcionalidad y calidad que rigen en materia de protección de datos y que enuncia el artículo 4.1 LOPD ("Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido").
274. Pues bien, para valorar si la cesión de los datos de la tarjeta a los órganos disciplinarios resulta una solución equilibrada, habrá que atender la naturaleza de los datos, el interés público afectado y el modo en el que se desarrolla la intervención pública en el marco del dopaje en el deporte.
275. A juicio de la Comisión, dejando en el aire la cuestión de si es posible que la implantación de la tarjeta obedezca a distintas finalidades a nivel estatal y a nivel autonómico, resulta difícil sostener que sea necesaria para la mayor eficacia en la lucha contra el dopaje, hasta el punto de que resulte constitucionalmente legítima la medida limitadora del derecho fundamental.
276. Hay un argumento inicial que no cabe desdeñar. Es indudable que la LOD prevé mecanismos adecuados y, entre ellos, no figura el que quiere activar el anteproyecto. Pero lo que es decisivo es que no acaba de encontrarse un fundamento a la necesidad de obtener datos pertenecientes a la privacidad del deportista a través de la tarjeta de salud, cuando los datos precisos para perseguir y castigar las infracciones se recaban a través de otras fuentes que implican también importantes limitaciones del derecho fundamental, como son la obligación de someterse a controles de dopaje (artículo 13.1), las obligaciones en materia de localización (artículo 13.6), de información de tratamientos terapéuticos (artículo 13.7), de llevanza del libro registro (artículo 15.1 y 7), o las que se derivan de las autorizaciones de uso terapéutico y bajas deportivas, con motivo de su solicitud, comunicación y registro (artículo 15. 8 y ss y artículo 16).
277. De otro lado, si se mantiene esa utilidad del artículo 46.2, sería preciso valorar si ello supone una infracción del derecho reconocido por el artículo 4.5 LOPD, pues mediante la tarjeta no se cancelan datos de carácter personal asociados a un deportista (la presencia o no de alguna sustancia prohibida o la utilización de un método no reglamentario) que fueron recabados o registrados para la posible



imposición de una sanción y que ya han dejado de ser necesarios o pertinentes para esa finalidad (una vez cumplido el plazo de prescripción o cuando hubiere recaído resolución firme en el correspondiente procedimiento sancionador, disciplinario o causa penal).

278. En suma, no apreciamos una justificación, o por lo menos no ha sido expresada en el expediente, que muestre la necesidad de que se comuniquen datos sensibles del deportista y se invada su esfera privada mediante un mecanismo adicional a los que están ya previstos en la LOD.

H) Otras cuestiones:

279. A continuación añadimos una serie de observaciones de menor enjundia, con el propósito de facilitar una mejor comprensión de determinados mensajes normativos, en beneficio de la seguridad jurídica, y establecer una regulación coherente que mitigue el riesgo de distintas interpretaciones por parte de los operadores jurídicos.

280. El artículo 4 alude al personal auxiliar de las y los deportistas. Posteriormente, el concepto que se utiliza es el de personas de su entorno que incluye, cuando menos, para el deber de localización, al personal de los "equipos, entrenadores y entrenadoras y personal directivo" (artículo 13.6), y para el deber de información de los tratamientos terapéuticos a que estén sometidos o sometidas las y los deportistas, responsables del mismo y el alcance del tratamiento, "sus entrenadores y entrenadoras, médicos y médicas y demás personal sanitario, así como el personal directivo de clubes y organizaciones deportivas" (artículo 13.7).

281. La relación enunciativa se repite, pero con ligeras adaptaciones, cuando el anteproyecto se refiere nuevamente a ambas obligaciones en los apartados 4 y 5 del artículo 23, que lleva por título responsabilidad de deportistas y de su entorno: Es más, el apartado 5 añade una definición de personas del entorno "cualquier entrenador o entrenadora, instructor o instructora, director o directora deportivo, agente, personal del equipo, funcionario o funcionaria, personal médico o paramédico que trabaje con deportistas o trate a deportistas que participen en competiciones deportivas o se preparen para ellas".

282. Por si fuera poco, al determinarse las sanciones, el anteproyecto las establece en atención a su autoría y así el artículo 25 contempla las sanciones a deportistas, el artículo 26 las sanciones a los clubes y equipos deportivos, el artículo 27 las sanciones a técnicos, técnicas, jueces, juezas, árbitros, arbitras y demás personas con licencia deportiva, personal directivo, dirigentes o personal de federaciones deportivas, de ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial o no oficial, clubes o equipos deportivos, y el artículo





28 las sanciones a médicos, médicas y demás personal sanitario de clubes o equipos, o que preste servicios o actúe por cuenta de federaciones deportivas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, o de personas o entidades integradas dentro de dichas organizaciones.

283. La definición de personas del entorno del artículo 23.5 coincide con la definición de personal de apoyo a los deportistas que emplea la Convención Internacional contra el Dopaje y sería útil que fuera aplicada de manera uniforme para señalar los responsables (artículo 4), delimitar los obligados a facilitar los datos para la localización (artículos 13.6 y 23.4) y la información sobre los tratamientos terapéuticos de los deportistas (artículos 13.7 y artículo 23.5) y, posteriormente, para sancionar su incumplimiento (artículos 27 y 28).

284. El artículo 3.b) enuncia como responsabilidad del los deportistas "proporcionar toda la información que le sea solicitada". Tal obligación podría entenderse bien anudada a la información relativa a los datos de localización y tratamientos terapéuticos que deben proporcionar conforme a las previsiones de la ley o bien de forma independiente en atención a las facultades que reconoce a la Agencia Vasca Antidopaje el artículo 12.5.

285. La inserción del artículo 12.5 es adecuada porque el artículo 39 de la LRJPAC viene a exigir norma con rango de ley para imponer tales deberes —"los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en los casos previstos por la Ley"—, cuyo inmediato antecedente era el artículo 27 de la hoy derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 que admitía la imposición de dicho deber de colaboración también en norma reglamentaria (posibilidad hoy arrumbada).

286. Pero de nuevo se emplea un concepto "deportistas y otras y otros obligados a colaborar" que convendría sustituir por personas del entorno, y en cuanto al alcance de la obligación la acotación final, "en los términos que permita la legislación vigente", permite sorteear los problemas que pudiera suscitar su generalidad. Es posible rastrear en su redacción cierta influencia de la STS de 27 de enero de 2010 (RJ 3168/2010), que consideró que no había lugar al recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma contra una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que estimó el recurso interpuesto por particulares contra una Orden de la Consejera de Cultura sobre sanción por incumplimiento de la obligación de los deportistas de colaborar con la administración deportiva en materia de dopaje y proporcionar la información que les sea requerida.

287. La letra h) del artículo 8 reconoce el derecho de los deportistas a "exigir la destrucción de las muestras de sangre, orina y cualesquiera muestras que le hayan sido tomadas u obtenidas.



una vez transcurrido el plazo de ocho años desde la fecha de la toma de dichas muestras. La utilización de las muestras para fines de investigación se realizará previa anonimización de manera que no pueda asociarse a ningún deportista en particular y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre investigación biomédica".

288. Sin embargo, el artículo 39.3 dispone que, "una vez cumplido el plazo de prescripción previsto en esta Ley o cuando haya recaído resolución firme en el correspondiente procedimiento sancionador, disciplinario o causa penal, los laboratorios de control de dopaje no podrán mantener muestras vinculadas a una persona identificable". Esta última previsión figura asimismo en el artículo 28.1, párrafo *in fine*, LOD y responde a una modificación introducida por indicación de la Agencia Española de Protección de Datos.
289. Entiende la Comisión que, una vez cumplido el plazo o la condición del artículo 39.3, las muestras deben ser destruidas y sólo podrán conservarse disociadas para fines de investigación si el deportista expresa su consentimiento. Debe aplicarse lo dispuesto por la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, y las garantías de su artículo 58.
290. La concreción reglamentaria que encierra la aprobación de las listas de sustancias y métodos prohibidos en el deporte que prevé el artículo 20 exige que sea encomendada bien al Gobierno, como titular de la potestad reglamentaria originaria, o excepcionalmente al titular del departamento competente en materia de deportes.
291. Conforme al esquema del artículo 152.1 CE, artículo 29 EAPV y artículo 16 de la Ley de Gobierno, es el Gobierno el que ostenta la potestad reglamentaria genérica, mientras que los Consejeros, a tenor del artículo 26.4 de la Ley de Gobierno, dictan disposiciones administrativas generales en materias propias de su departamento, esto es, en principio, de naturaleza doméstica y sin efectos *ad extra* —sin perjuicio de la posibilidad de desarrollar en tales materias los reglamentos del Gobierno—.
292. Aunque en supuestos en los que sea necesaria una gran flexibilidad se ha admitido la competencia de los Consejeros para dictar un reglamento ejecutivo de ley, siempre que la ley les habilite para dictar disposiciones reglamentarias concretas.
293. Se recomendaría suprimir por entero el artículo 23.2 por las razones que a continuación se expresan. Inicialmente parece encaminado a establecer una responsabilidad objetiva del deportista (no será necesario demostrar intención, uso consciente o negligencia por su parte), algo que, de partida y dentro del régimen sancionador administrativo, resulta cuestionable.
294. El Consejo de Estado, en el Dictamen de 2 de febrero de 2006 sobre la posterior LOD, alertó de las características del Código Mundial Antidopaje, en el que se



distinguen sanciones por responsabilidad objetiva —o más bien quasiobjetiva, por la práctica imposibilidad de demostrar que no hay razón para la presencia de la sustancia en el cuerpo del deportista— que conlleva la pérdida de reconocimiento oficial de los resultados de la competición y, por tanto, la anulación de premios y medallas, y sanciones por responsabilidad culpable que conllevan pérdida de licencia y otros efectos adicionales al no reconocimiento de los resultados deportivos.

295. Sin embargo, ni la LOD ni el anteproyecto siguen el esquema del Código Mundial Antidopaje, ya que la alteración de resultados no se concibe de forma independiente sino que constituye una consecuencia accesorio de la sanción principal (que tendrá incidencia sobre la licencia).
296. Pero su significado se altera profundamente con el párrafo siguiente: "No obstante lo anterior, podrá demostrar que no ha incurrido en culpa o negligencia o que no pretendía mejorar su rendimiento deportivo". De esa forma se viene a desplazar la carga de la prueba de la no culpabilidad sobre el deportista, en contra del principio de presunción de inocencia.
297. Conforme a los principios que informan el ejercicio de la actividad sancionadora de la Administración y que también son de aplicación en materia de dopaje, toda sanción ha de apoyarse en una actividad probatoria de cargo o de demostración de la realidad de la infracción que se reprime, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio, toda vez que el ejercicio del *ius puniendi*, por todas las STC 76/1990, de 26 de abril, está condicionado en sus diversas manifestaciones por el artículo 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un pronunciamiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones.
298. O dicho de otra forma, la culpa o negligencia no se presumen sino que deben corroborarse con las pruebas que se recaben en el procedimiento sancionador, y a lo largo del mismo el deportista tiene el incontestable derecho a alegar y solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes en su defensa porque no puede ser castigado sin antes ser oído. Será el órgano sancionador el que valore, a la vista de todo el material probatorio, si procede o no la imposición de la sanción.
299. La potestad de inspección que atribuye a la Agencia Vasca Antidopaje el artículo 40.1 del anteproyecto se refiere a elementos como los botiquines, raquillas, bolsas de deportes y demás espacios que permitan guardar o albergar los productos y sustancias susceptibles de dar positivo en un control de dopaje, así como instrumentos destinados a la aplicación de métodos prohibidos, pero no se especifica en qué lugares podrán encontrarse, por lo que se hace preciso advertir que tal facultad deberá atemperarse al respeto de los derechos fundamentales, entre



los que se incluye la inviolabilidad del domicilio, en los términos previstos por el artículo 18.2 CE.

300. Una cautela en ese sentido resultaría especialmente oportuna en una ley que impone, en otros preceptos, el pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.
301. En principio, los autobuses se utilizan exclusivamente como medio de transporte y no encierran un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva la esfera o ámbito privado de un individuo, pero pudiera darse algún caso singular que requiera una respuesta *ad hoc*.

IV TÉCNICA NORMATIVA

302. Siguiendo el contenido del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Ordenes y Resoluciones, publicado por Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico (en adelante, Directrices), la Comisión considera conveniente efectuar las siguientes mejoras de técnica normativa:
303. En los proyectos de ley la parte expositiva debe ir precedida del título "Exposición de Motivos".
304. En la citada exposición convendría que cuantas veces se cita aparezca con su nombre completo y fecha la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. También cabría completar la cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Caso David Meca y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 18 de julio de 2006.
305. Con respecto a la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, podría resultar clarificador añadir que "Dicha Convención que ha sido ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de febrero de 2007, forma parte del ordenamiento interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 CE".
306. Resulta, a nuestro entender superfluo el párrafo *ad limine* del artículo 1.2 ya que, respecto a competiciones deportivas en las que intervienen animales, se da luego una definición de dopaje.
307. Llama la atención que los poderes públicos se limiten a "colaborar en los programas de formación, información e investigación en materia de dopaje" (artículo 5 f) a la vista de las funciones que se atribuyen a la Agencia Vasca Antidopaje (artículo 12.1 i) y artículo



42.1], quedando afectas las multas que recaude al cumplimiento de los fines de investigación que tiene atribuidos (artículo 30.3). También que no se liste en el artículo 5 la responsabilidad de negar cualquier subvención o ayuda a cualesquiera entidades deportivas o deportistas que hayan sido sancionados por infringir la normativa antidopaje o que rehúsen someterse a los controles correspondientes, cuando se impone a las entidades deportivas en el artículo 6.1 d) y es coherente con lo dispuesto en el artículo 9.

308. Los artículos 6 y 7 relacionan las responsabilidades de las entidades deportivas y de las personas y entidades organizadoras de eventos deportivos, respectivamente. Con independencia de lo que hemos señalado anteriormente, no se entiende que no se incluya en el artículo 6.1 la de "Impedir la participación de deportistas con sanciones vigentes en materia de dopaje" y que no se añada en el artículo 7.m), "adaptadas a las necesidades de mujeres y hombres deportistas".

309. Tampoco se comprende que deban "exigir": (i) la aceptación de las normas antidopaje a los clubes, deportistas y demás agentes deportivos para poder participar en sus actividades deportivas [artículo 6.1.k) y artículo 7.j)]; y (ii) a las y los deportistas la autorización preceptiva para permitir a los organismos competentes el tratamiento de sus datos personales que resultasen necesarios para la efectiva realización de los controles de dopaje y eventuales comunicaciones de resultados de tales controles [artículo 6.1 l) y artículo 7 o)].

310. Tales normas y las limitaciones al derecho fundamental de protección de datos vienen impuestas por ministerio de la ley, sin que requieran de un acto de sujeción voluntario para que resulten eficaces.

311. En lo que se refiere al artículo 8, los derechos de las letras c) y d) remiten a una misma garantía reconocida por el artículo 24.2 CE, también aplicable en el procedimiento administrativo sancionador: que el implicado disfrute de una posibilidad de defensa previa a la toma de decisión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el expedientado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga (SSTC 18/1981, 2/1987, 229/1993 y 56/1998).

312. En la letra e) del artículo 8 o se suprime la salvedad o se utiliza un concepto diferente al de "lesión" que conlleva una connotación de infracción del derecho, por ejemplo "con pleno respeto a su dignidad e intimidad salvo...".

313. En la medida en que el artículo 47 regula el régimen de confidencialidad de los datos, sería preferible en el artículo 8.i) sustituir "hasta el momento en que resulte oportuno" por "en los términos previstos en esta ley".



314. Varías son las observaciones que merece el artículo 9. En su apartado 1, la acotación que hayan sido sancionadas "por acciones colectivas o continuadas de dopaje" no figura en el artículo 6.1 d), cuya formulación permite una aplicación menos farragosa de la prohibición de subvención o patrocinio, porque no requiere, una vez impuesta la sanción, realizar un segundo juicio para dilucidar si resulta procedente o no. En el artículo 9.2 se echa en falta la acotación final del artículo 9.1, esto es, "tal prohibición subsistirá mientras dure la sanción o subsista la falta de colaboración". Podría mejorarse la redacción del artículo 9.3 para concluir que, en el supuesto de que se encuentre vigente una relación de patrocinio o subvencional, la sanción llevara aparejada su resolución.
315. En el artículo 11.6.a) falta el pronombre "se" pues debe decir "que se designarán" o si se prefiere "que serán designados". Si en las demás letras quien designa es el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes, también debería designar en ese supuesto dicho departamento y no su Consejera o Consejero.
316. Mejoraría el tenor del artículo 12.1.e) si se suprimiera "contra quienes puedan ser responsables de las infracciones".
317. En el artículo 13.3 falta el artículo "los" entre "realización de" y "controles", o podría concluirse con la expresión "los mismos".
318. El mensaje del apartado 11 del artículo 13 debe formar parte del apartado 10 ya que va unido a los controles a los que puedan ser sometidos deportistas con licencia estatal o internacional.
319. El artículo 19 tiene por objeto determinar "la competencia para la realización de los controles", lo que hace respecto a los controles en competición (apartados 1 y 2), mientras que, en el caso de los controles fuera de competición, omite explicitarla y se limita a establecer una regla de preferencia en el caso de los "deportistas que se encuentran en el País Vasco" para participar en competiciones internacionales u oficiales de ámbito estatal.
320. En el artículo 23.3 convendría añadir a los Convenios Internacionales la expresión "ratificados por España", porque solo éstos forman parte del ordenamiento interno.
321. El artículo 24.1.d) se remite erróneamente al artículo 23.3, cuando suponemos que hará al artículo 23.4.
322. Convendría revisar la redacción de la letra e) del artículo 24.1. En primer lugar, las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos terapéuticos y obtención de autorizaciones para el uso terapéutico figuran, no solo en el artículo 23.5, sino



también en el artículo 23.6. En segundo lugar, se castiga la negativa de la autorización para la inscripción de tales tratamientos terapéuticos, referida en el artículo 15.1. No se castiga, sin embargo, la no llevanza del libro, especialmente cuando dicha obligación recae sobre el propio deportista (artículo 15.7). Llama la atención, por último, que no se castigue la obtención fraudulenta de la baja deportiva, sin que se contemple tampoco como una responsabilidad del deportista y de su entorno en el artículo 23 el incumplimiento o infracción de los requisitos establecidos para la obtención de la misma.

323. La letra k) describe una nueva conducta infractora no prevista en el artículo 14.1 LOD, en la que se han aglutinado, con alguna variación, las que contemplan las letras p) y q) del artículo 23 de la ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana (disposición final tercera LOD).
324. No acaban de verse las razones de la inclusión de una misma conducta en ambos regímenes sancionadores, ya que, a nuestro entender, comparten el mismo bien jurídico protegido (el tráfico ilícito y dispensación irregular de sustancias y métodos prohibidos). Es de señalar, además, que en el anteproyecto solo se castiga su infracción a los clubes y equipos deportivos (artículo 26), pues no figura en los listados de letras que se citan en el caso de los demás autores (pese a que engloba también la incitación), y la sanción es pecuniaria (y, en su caso, pérdida de puntos o puestos en la clasificación o descenso de categoría o división), al igual que en la LOPSC, siendo diferentes los importes.
325. De otro lado, convendría mejorar la redacción añadiendo "al consumo de tales" los sustantivos "sustancias y productos".
326. Los apartados 1 y 2 del artículo 25 anudan a la comisión de una segunda infracción la privación "o posibilidad" de obtención de licencia federativa a perpetuidad, cuando suponemos que se querrá referir a la "imposibilidad".
327. En el apartado 3 del artículo 25 se alude, hasta tres veces, a la "posibilidad" en vez de a la "imposibilidad".
328. Convendría reflexionar sobre si resulta adecuada la sanción accesoria que contempla el artículo 25.5, pues, de un lado, se extiende a la posibilidad de entrenar (lo cual podría resultar excesivamente riguroso) y, de otro lado, se limita a las instalaciones públicas (lo que restringe su eficacia). En cualquier caso, habría que añadir que dicha imposibilidad de competir y entrenar en instalaciones públicas del País Vasco se prolongará durante el tiempo en que dure la suspensión, privación o imposibilidad de obtención de la licencia.



329. El mensaje del apartado 3 del artículo 26 debe incluirse en el apartado 2 de dicho artículo, ya que alude a la comisión de una tercera infracción grave.
330. Es preciso clarificar el régimen del artículo 27. En su título engloba a las entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter "oficial o no oficial", en su apartado 4 alude inicialmente a entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter "oficial" por delegación de las anteriores, pero en su párrafo *in fine* dispone que las federaciones deportivas y entidades organizadoras de competiciones deportivas "oficiales o no" adaptarán su normativa para incluir tales previsiones. El paralelo artículo 28.4 solo se ocupa de las entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial.
331. No es aventurado afirmar que el artículo 33.4 parte de la premisa de que se deriven distintos responsables de unos mismos hechos, algunos sometidos al régimen disciplinario y otros al régimen sancionador general, al ser subsumible su conducta en la correspondiente tipificación.
332. Ahora bien, lo procedente en tales casos es que se enuncie la regla prevista en el artículo 28 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (LPSAP), según la cual "Cuando, en cualquier fase del procedimiento sancionador, el órgano que tiene que resolver considere que existen elementos de juicio indicativos de que los hechos son constitutivos de una infracción cuya sanción no le compete, lo comunicará al órgano que considere competente a tal efecto, trasladándole todo lo actuado".
333. De igual forma, la regla del artículo 33.5 del anteproyecto, por la que se han de comunicar la "incoación de expedientes disciplinarios y sancionadores por dopaje, así como la resolución que ponga fin a los mismos" al Departamento de Interior, contiene una exigencia excesiva, ya que no todos los hechos sancionados en el anteproyecto se encuentran tipificados en la LOPSC. La posible concurrencia con otros procedimientos sancionadores es objeto de regulación en el artículo 27 LPSAP, según el cual, "Cuando el instructor tenga conocimiento de que se está siguiendo otro procedimiento sancionador por los mismos hechos lo notificará al órgano sancionador, el cual, sin paralizar el procedimiento, se pondrá en contacto con el órgano competente para resolver el procedimiento de referencia, a fin de coordinarse para la eficaz aplicación de los artículos 16, 17 y 18 de esta Ley".
334. Cabe pensar que será el interesado quien pondrá en conocimiento del instructor la circunstancia de que se encuentra abierto otro expediente sancionador por aplicación de la LOPSC, lo que permitirá que se active el citado mecanismo.
335. Al distinguirse el procedimiento disciplinario y sancionador habría que mencionar ambos en los artículos 35.3, 36.1, 36.2.



336. En el artículo 35.3, la mención a la interrupción de la prescripción en caso de suspensión del procedimiento "por alguna de las causas previstas en esta Ley", podría ser más específica ya que se conecta con las establecidas en el artículo 33.
337. En atención a los objetivos de la medida, el párrafo *in fine* del artículo 36.3 podría anudar la revocación de la suspensión a su sometimiento a un procedimiento disciplinario o sancionador posterior "en materia de dopaje", en vez de "por infracción de esta Ley".
338. Conforme al artículo 12.1.e) del anteproyecto, será el Director de la Agencia Vasca Antidopaje el órgano competente en materia sancionadora de carácter administrativo. Sin embargo, el artículo 37.1 atribuye tal competencia al Gobierno Vasco.
339. La redacción del artículo 39.7 debe revisarse ya que las resoluciones sancionadoras adoptadas por el órgano disciplinario competente no son recurribles según el artículo 39.6, por lo que difícilmente podrá decidir su suspensión "previa adopción de las garantías conducentes al aseguramiento de la eficacia de la resolución para el caso de una eventual desestimación". Tratándose de un órgano jurisdiccional, las reglas vendrán determinadas en la correspondiente norma procesal, sin que la ley autonómica pueda condicionar la forma en que los jueces y tribunales ejercen su función constitucional.
340. La acotación "en colaboración con otros órganos con implicación en la materia" del texto introductorio del artículo 42.1 parece impedir la iniciativa unilateral de la Agencia, lo cual no tiene sentido. Una cosa es que colabore con otras administraciones, posibilidad que contempla de forma genérica el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y otra muy distinta que no pueda emprender tales acciones en solitario.
341. En el artículo 43.3 suponemos que los datos no son únicamente de los expedientes "disciplinarios", sino también de los sancionadores incoados, como luego se especifica al regularse el acceso en el artículo 43.7.
342. De mantenerse la doble funcionalidad de la tarjeta de salud del deportista, la remisión del artículo 46.5 ha de hacerse al artículo 24.1 e) de la ley.
343. El párrafo *in fine* del artículo 47.2 resulta asistemático, ya que nada tiene que ver con los deberes de confidencialidad y secreto que se regulan en el precepto.
344. La remisión que contempla el artículo 50.2 sería más precisa si lo fuera al artículo 32.2 de la presente ley.



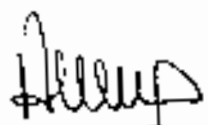
345. La salvedad con la que principia la disposición adicional tercera no es exacta, porque la ley también dispone en el artículo 28.4 sanciones para el personal que realice funciones sanitarias sin disponer de licencia federativa o de habilitación equivalente.
346. En la disposición transitoria tercera la cita del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, ha de ser completa con su nombre. También debe ser citada de forma completa la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, en la disposición derogatoria.
347. En la disposición final tercera se ha de suprimir la acotación referida al Gobierno Vasco "competente en materia de deportes".

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de Ley de referencia.

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2011 para su conocimiento y consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre).


Jesús María Alonso Quilchano,
Secretario

Vº Bº:

Amaia Ortiz Cabezas
Presidenta

ANEXO II ANEXO DE ESECCIÓN
COMISIÓN ASESORA
FEDATARIO

04 NOV 2011

SARRERA	IRTEERA
	429.495



AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
COMISIÓN JURÍDICA ASI SORA
EUSKADI

KULTURAKO SAILBURU ANDREA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, 2011ko urriaren 27an egindako osoko bilkuran, erretzean adierazitako kideak bertaratu direla, zure **kontsulta** aztertu du, 202/2011 zenbakiarekin erregistratu baita; hain zuzen ere, **Kiruleko Dopinariaren aurkako Legearen aurreproiektuari** buruzkoa.

Eztaba:datu eta gero, ondorengo irizpena eman du, aho batez. Beñtia Ruiz de Arbulo bokal jaunak adierazi du Batzordearen iritzia.

LEHENDAKARIA:

Amalia Ortiz Cabezas and.

LEHENDAKARIORDEA

Ion Gilutx Echevarri AienzaDel j.

BOKALAK:

Luis M^e Eskubi Juaristi jn
Inaki Beria Ruiz de Arbulo jn
Loren Abegat Echegoyen and.
Ana Arcocha Azcua and.
Fátima Saiz Ruiz de Irujoaga and.
Gorka Erlantz Zorroza Aierbe jn.
Imanol Zubizarreta Arceche jn

IDAZKARIA

Jesús M^e Alonso Quilchano jn

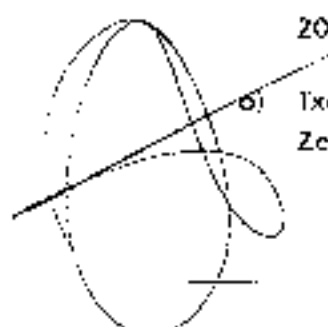
IRIZPEN ZK.: 231/2011

AURREKARIAK

1. Kulturako sailburuak, 2011ko abuztuaren 29an emandako Aginduaen bidez (izailaren 5eko sarrera-erregistroa darama), goian aipatutako lege-aurreproiektua aurkeztu dio Batzordeari, kontsultarako.
2. Sailburuaren bidalketa-agindua eta aurreproiektuaren testuaz gain, honako hauek dituen espedienteak:
 - a) Agindua, 2010eko uztailaren 14koa, Kulturako sailburuarena, Kiruleko Dopinariaren aurkako Legearen aurreproiektua prestatzeko prozedurari hasiera ematen diona.
 - b) Proiektuaren lehen zirriborroa.
 - c) Lege-proiektuaren memoria, 2010eko urriaren 5koa.
 - d) Agindua, 2010eko urriaren 5koa, Kulturako sailburuarena, Kiruleko Dopinariaren aurkako Legearen aurreproiektuari alde aurreko onarpenera ematen diona.



- c) Txostena, behin-behinekoa, genero eraginaren alde aurreko ebaluazioari buruzkoa, 2010eko urriaren 27koa.
- d) Ofizioak, Kirol Zuzendaritzarenak, Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen aurreproiektuaren kopia bidaliz euskal kirol-federazioei, Euskal Kirol Federazioen Batasunari, eta Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko kirol-federazioen elkarteri. Ofizioak, bidaltzaile era xede berberarekin. Ofizioen hartzaileak: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiak; Eusko Jaurlaritzaren sailak; hainbat zuzendaritza: Funtzio Publikoarena, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeak, Osasun Publikokoa, Berrikuntzarena eta Administrazio Elektronikokoa; Datuak babesteko Euskal Bulegoa; Euskadiko Kirol Medikuntza Elkarteak; Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziarako Lizentziadunen Elkargo Ofiziala; eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuen, farmazialarien eta albatarien elkargo ofizialak.
- g) Ebazpena, 2010eko urriaren Sekoa, Kiroleko zuzendaritza, Kiroleko Dopatzaren aurkako lege-aurreproiektuaren entzunaldi-izapidetza egiteko dena, eta ebazpen horren iragarkia, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2010eko azaroaren 29an argitaratua.
- h) Txostena, Emakunderena, 2011ko urtarrilaren 26koa.
- i) Txostena, Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikokoren Zuzendaritzarena, 2010eko azaroaren 3koa.
- j) Txostena, Kultura Saileko Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatze Zuzendaritzarena, 2010eko urriaren 27koa.
- k) Ofizioa, Dopinaren aurkako Estatuko Agentziarena, 2011ko urtarrilaren 25koa; Kirol Kontseilu Goreneko Estatu Abokatuak prestatutako txostena, 2011ko urtarrilaren 24koa, inforazi dute.
- l) Txostena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoarena, 2011ko otsailaren 28koa.
- m) 10/11 irazpena, Euskadiko Gizarte eta Ekonomia Kontseiluarena, 2011ko martxoaren 4koa.
- n) Alegazioak, Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzarenak, 2010eko azaroaren 8koa.
- o) Txostena, Osasun eta Kontsumo Sailaren Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzarena, 2010eko abenduaren 1ekoa.





- p) Alegazioak, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusienak, 2010eko abenduaren 9koa.
 - q) Alegazioak, Gorputz Hezkuntzako Lizentziadunen eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Lizentziadunen Elkargo Ofizialarenak, 2010eko abenduaren 27koa.
 - r) Txosten juridikoa, Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzarena, 2011ko maiatzaren 16koa.
 - s) Balorazioa, Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen aurreproiektuari egindako alegazioa, Kirol Zuzendaritzak egina, 2011ko ekainaren 15koa.
 - t) Memoria, proiektuaren izapidetzeari buruzkoa, 2011ko ekainaren 15koa.
 - u) Memoria ekonomikoa, proiektuari buruzkoa, 2011ko uztailaren 19koa.
 - v) Testua, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak bere txostenerako aztertu zuena.
 - w) Txostena, Kontrol Ekonomikoko Bulegoarena, 2011ko uztailaren 29koa.
3. Kultura Saileko Zerbitzuen zuzendararen 2011ko irailaren 6ko ofizioaren bitartez (2011ko irailaren 8an sartu baitzen) bidali zituzten, espedienteari erantzeko, Kultura Saileko Zerbitzuen Zuzendaritzaren txosten juridikoa, 2011ko maiatzaren 16koa, eta Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen aurreproiektuari egindako alegazioen balorazioa, Kirol Zuzendaritzak egina, 2011ko ekainaren 15koa; izan ere, osatu gabe bidali baitzituzten lehenago, akats bat zela medio.

AURREPROIEKTUAREN DESKRIPZIOA

- 4. Hauek ditu Kiroleko Dopinaren aurkako lege-aurreproiektuak: zioen adierazpena, berrogeita hamahiru artikulua, zazpi kapitulutan banatuta, sei xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat, eta lau azken xedapen.
- 5. Zioen adierazpenean ageri denez, Euskadiko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen egungo araubidea eraberritu nahi dute, errealitate berrira eta esparru juridikoan izandako erreforma sakonera egokitzeko.
- 6. Kirol-ekitaldiak merkatuaren joeren menpe jarri dira, eta dopina kirolaren arloko etikaren eta kirolari jakin baten osasunaren esparrua gainditu eta osasun publikoko benetako arazo bihurtu da.



7. Nazioarte-mailako ekimenetatik etorri dira eraldaketa juridikoak: Dopinaren aurkako Mundu Agentzia eratu, eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea idatzi zuten, eta horien ondorioz, UNESCOk, 2005eko urriaren 19an izandako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen, baita Espainiako Estatuak berretsi ere. Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurkako azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoa ere onartu dute.
8. Aurreproiektuaren edukiei dagokienez, berrikuntzetan garrantzizkoenetako bat dugu, nabarmentzeko modukoa, Dopinaren aurkako Euskal Agentzia sortzea. 1998 urteaz geroztik igaro den denborak agerian utzi du dopinaren aurkako agentzia nazionalak sortzeko joera nagusitu dela, espezializatuagoak eta funtzionalki independenteak baitira.
9. Azpimarratu dutenez, legeak nabarmen gogortu du dopinaren aurka borrokan egiteko lege-esparrua, baina gogortze hori kirolarien eta prozesuan esku hartzen duten gainerako pertsonen oinarritzko eskubide eta askatasunak errespetatu behariaz bateratzen saiatu da.
10. Lege berri honekin, bestalde, federazioenak ez diren kirol-jardueretako dopina kontrolatu eta zigortzeko erregimena ezartzen da. Gaur egungo legerian federatutako kirolari buruz egiten diren aurreikuspenak beste kirol-jarduera batzuetara ere hedatu dira, honek ere babestu beharra dagoela ikusten baita.
11. Dopina kontrolatzaren arloan, kontrolak egiteko beste modu batzuk beraz jasozen ahalegindu da legea, hori dela eta, legeak ez du mugatzen dopinaren aurkako kontrola kirolarien gertuaren laginak hartzea; aitzitik, legeak beste lagin mota batzuk hartzeko atea zabalki uzten du, halako moldez non zientziaren eta teknologiaren arloko ikerketa eta aurrerapenen bilakaerari egokituko zaizkion.
12. Bereziki aipatzekoa da testu berriak osasun-kontrolak deitutakoak emandako garrantzia. Estatuko legerian ez bezala, osasun-kontrol horiek ez baitira sartzen lan-harremanen esparruaren barruan. Lege honek kirol-erakunde orori ematen dio eskumera osasun-kontrolak egiteko erakundeko kirolari, lan-harremana izan ala ez.
13. Beste aldie batetik, 14/1998 Legean arau-hausteen eta zehapenen tipifikazioa oso mugatua zen, eta lege berri hau baliatu da sortu diren premia berriei erantzun eta nazioarteko araudira egokitzeko. 7/2006 Lege Organikoa erreferentziatzat hartuta.
14. Ildo beretik, erabilera terapeutikoko baimenak bidez gertatzen ari diren iruzur garrantzitsuei aurre egiten saiatu da legea. Kirolariek gaixotasu eta lesioak izan ditzakete, eta horiek sendatzeko tratamendu medikoa behar izango dute. Hori hala izanik, legeak zenbait kasutan erabilera terapeutikoko baimenak emateko aukera altortzen du. Baina hori egitearekin batera, kirol-baja izenekoa ere zehazten du, eta



egoera horren bidez, kirolariak erabateko askatasuna izango du tratamendu terapeutikoa jasotzeko, baina tarte horretan ezin izango du lehiatu.

15. Dopinaren aurkako borroka modu integratuan ulertu da lege honetan. Dopatzea arautzeaz gainera, artikuluetan, modu berezian jaso da kirol-errendimendua hobetzeko erabiliko substantzia eta metodoek osasunean izan ditzaketen ondorioei buruzko ikerketa, eta, era berean, erakunde profesional eta kirolariel horren gaineko informazioa ematea eta sensibilizazio eta prestakuntza programak ezartzea aurreikusi da. Merezki du bereziki adieraztea lehiaketa ofizialetakoa ez den errendimenduko kirolaren eremuan dopinaren aurkako borrokan sensibilizatzeak berariazko programak aurreikusi direla; hauetaz ari gara: atletismoko proba herrikoiak, bizikleta-lasterkerak, gimnasioak eta abar.
16. Tratamendu berezia behar du dopinaren aurreko datu pertsonalen babesarekin zerikusia duen orok. Lege honetan, dopin- eta osasun-kontrolekin zerikusia duten datuak (analisiari emaitzak, azterketa medikoen emaitzak, osasun-kontrolen emaitzak, erabilera terapeutikoko baimenen eskaerak eta baimenak, eta abar) osasunari buruzko datu pertsonaltzat hartzen dira, eta horregatik behar dute babes berezia.
17. Azkenik, legeak araudi berezia ezarri du oso kirol-proba gogorretan edo baldintza fisiko gogorreko probetan parte hartzen duten kirolarientzat, batez ere herrikoientzat.
18. Xedapen-zatiri hasiera emateko, I. kapitulua ("Xedapen orokorrak"), 1. artikulutik 9.era bitanekoak hartzen dituenak.
19. Dopatzearen kontzeptuaz eta ezarpen-eremuaz dihardu 1. artikulua. Ondorengoa izango da dopatzea: kirolariaren errendimendua artifizialki handitzeko, debekatuta dauden substantziak hartzea edo debekatutako metodoak erabiltzea; hori guztia kirol espirituaren aurkakoa izanik (1.1 artikulua). Dopatzea izango da, era berean, lege horretan eta ezartzekoa den gainontzeko araudian dopinaren aurka zehaztutakoa ez botetzea (1.3 artikulua).
20. Legearen aplikazio-eremua zehazgarritze aldera, hauek bereizi dituzte: eremu material orokorra, oro har —Euskal Autonomia Erkidegoan garatutako kirol-jarduerak, federatuak izan edo ez izan, estatuko lehiaketa ofizialak eta nazioarteko kirol-lehiaketa ofizialak salbu— (1.4 artikulua); eta aplikazio-eremu subjektibo orokorra —euskal lizentzia, dela federaziokoa, unibertsitatekoa zela eskolakoa, duten kirolari guztiak, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen diren kirol-lehiaketetan parte hartzeko baimena ematen duen federazio-lizentzia dutenak. Horiez gain, Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen, lehiaketan aritzen eta bizi diren kirolariak ere (1.5 artikulua)—. Lege horren ondorioetarako, edozein kirol egiten duen





persona oro izango da kirolaria, nahiz eta federatuta ez egon edo kirol-lehiaketetan parte hartu ez (1.6 artikulua).

21. 2. artikulua: dopinaren aurkako borrokarako printzipio orokorrak. Dopina kiroleko erikaren eta olinpismoaren baloreen aurkakoa da, eta kalte larria eragin diezake kirolariari eta kiroleko animaliei, eta kirolariek, lehiaketetan ari direla nahiz horietatik kanpora, dopinaren aurkako kontrolak egin beharko dituzte hala eskatzen dietenean eskumena duten agintariek, eta beste horrenbeste gertatu da azterketa, egiaztatze eta ikerketa osagarriekin ere. Kirolek dopina erabaztea kirol-antolakunde guztien oinarritzko helburuetako bat izango da. Informazioa, prestakuntza eta ikerketa ezinbesteko lantresnak dira dopina desagerrarazteko.
22. 3. artikulua: kirolarien erantzukizunaren zerrenda. Kirolariek ondorengo erantzukizunak hartu beharko dituzte, besteak beste: dopinaren esparruan ezartzekoak diren baldintza eta akordioen berri izatea; hala eskatzen zaienetan, lagunak ematera eta gainontzeko kontroletara joatea eta, era berean, eskatzen zaien informazio guztia ematea; irensten duten edo erabiltzen duten guztiaren erantzule izatea; medikuntza-alorreko langileei jakinaraztea kirolaria izateagatik ez duela kirol-alorreko legearen debekatuta dagoen substantziarik hartu edo metodorik erabili; eta ziurtarzea, ahal duen neurrian, agindu dioten tratamendu terapeutikoak ez dituela dopinaren aurkako arauak urratzen.
23. 4., 5., 6. eta 7. artikuluek, euren aldetik: kirolarien laguntzaileen eta kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animalien laguntzaileen erantzukizunak; aginte publikoen erantzukizunak; kirol-erakundeen erantzukizunak; kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeen erantzukizuna.
24. 8. artikulua, dopinaren aurkako kontrola egin beharko duten kirolarien eskubideak: haien buruzko datu pertsonalak babestuta egoteko eskubidea, indarrean den ordenamendu juridikoaren arabera; dopinaren aurkako kontrola egitean, konfiantzazko pertsona batek laguntzeko eskubidea, betiere kontrol-gunean edo inguruan baldin badago; ustez dopatu izanaren jakinarazpena jasotzen badu, alegazioak aurkeztekoa; zehapena jaso aurretik, kirolariek diotena entzutekoa; eta abar.
25. Azkenik, 9. artikulua dio Eusko Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta beren barutako zuzenbide publiko edo pribatuko bestelako erakundeek nahiz administrazioen parte hartzea duten gainerako erakundeek ezin izango dietela babesik ez diru-laguntzarik eman kirol-erakundeel eta kirolariari, baldin eta horiek zehapenen bat jaso badute dopin-gertakari okor edo jarraiegatik, edo dopin-kontrolak egiterakoan lankidetzak eskaintzeari uko egin badilote.

II Kapitulua ("Antolaketa administratiboa") 10. artikulutik 12.era bitartekoak ditu.



27. 10. artikulua. Dopinaren aurkako Euskal Agentzia sortzea zuzenbide publikoko erakunde gisa; berezko nortasun juridikoa eta erabateko gaitasuna ditu, eta herri-administrazioekiko inongo loturarik gabe beretzen ditu bere eginkizunak. Agentzia hori da dopinari aurrea hartzeko eta dopina kontrolatu eta zigortzeko arloan Eusko Jaurlaritzari dagozkion ekintzak diseinatu eta gauzatuko dituen erakunde publikoa.
28. 11. artikulua. agentziaren antolaketa. agentziaren organoak dira zuzendaria (goikarguduna izango da, eta Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez izendatuko da lau urterako), aholku-kontseilua. Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea, eta agentziaren estatutuaren ezartzen direnak.
29. 12. artikulua. agentziaren eginkizun nagusiak dira, besteak beste, dopatzeari buruzko legeria betetzen dela zaintzea; eskumena duten organismoen, haien antolaketa, araudia edo jardura dopinaren arloko legeriara egokitzeko eskatzea; zehatze- eta diziplina-ahala egikaritzea, baldin eta kirol-federazioek ez badituzte espediente horiek epearen barruan elbatzi; zabalkunde, prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak egitea; dopin-kontrolak zein lehiaketa eta probatan diren nahitaezkoak zehaztea; eta arau-egitasmoel —dopinaren aurkako borroka eragiten dietenel— buruzko txostena ematea.
30. III. kapituluak ("Dopin kontrolak") 13. artikulutik 20.era bitartekoak hartzen ditu.
31. 13. artikulua. arabera, kirolariak nahitaez egin beharuko dituzte, lehiaketan eta lehiaketetatik kanpora, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak eta lege honen bidez gaitutako erakunde publiko eta pribatuak erabakitako kontrolak. Lehiaketan eta lehiaketatik kanpoko kontrolen baldintzak erregulamendu bidez zehaztuko dira, eta kontrolak ustekabean edo alde aurretik noiz egingo diren jakinarazita egin daitezke. Kontrolak egin eta ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen, kirolariak, taldeak, entrenatzaileak, zuzendariak eta kirolariak inguruan dituen gainerako pertsonak kirolariak non egon ohi diren jakiteko datuak eman behar dituzte erregulamendu bidez ezarritako erab-, dopin-kontrolak egin ahal izateko. Kirolariak, beren entrenatzaileak, medikuek eta gainerako osasun-langileak, bai eta kirol-klubetako eta kirol-erakundeetako zuzendariak ere, dopin-kontrolak egiterakoan adierazi egin behar dute zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren kirolariak, nor diren honen erantzule eta tratamenduak zer hartzen duen bere baitan. Kirolariak ez badu tratamenduari buruzko informaziorik ematen edo ez badu informatzeko baimena ematen, arau-haustelzat hartuko da, tratamendu medikoei buruz informatzeko betebeharrak ez betetzeagatik.

32

Kontrola egiteko hitzorduek, egindako kontrolak eta kontrolen emaitzak jasoko dira Kirolariaren Osasun Txartelean, lege honen erregulamenduzko garapenean adierazitako moduan.



33. Kontrolatarako berme batzuk aurreikusi ditu 14. artikulua, eta horien artean, kontrolak egin behar dituzten pertsonak, betiere Dopinaren aurkako Euskal Agentziak zeregin horretarako gaituak; kontrolak egiteko orduak, gaueko atsedenetarako erabiltzen ohi diren orduetan ezin da eta kontrolak egin; proba bakoltzeko kontrol bana, gehienez ere; eta kirolarietara euren eskubide eta betebeharren berri eman beharra.
34. Betebehar osagarriak eta erabilera terapeutikoko baimenak arautu ditu 15. artikulua, halako moduz non erregulamendu bidez zehaztuko diren klubek eta gainontzeko kirol-erakundeek Dopinaren aurkako Euskal Agentzian behar bezala erregistraturako liburu bat izan eta bete beharko duten beharrez. Liburu horren osotasuna bermatuko da, eta bertan kirolarietara beren zuzendaritzapean agindu dizkieten tratamendu terapeutikoak jasotzeko dituzte, baldin eta kirolariak inskripzio hori egitea onartzen badute. Liburu hori osasun-agiritzat hartuko da zaintzaren eta datuen babesaren ondorioetarako. Liburuan, osasun-jarduera bakoltza kirolariaren sinadurarekin berretsi beharko da, jarduerak hori egin dela eta liburuan idazpena egitea baimendu duela berresteko.
35. Erabilera terapeutikoko baimenak dagokienez, kopia bat bidali beharko da Dopinaren aurkako Euskal Agentzian, eta erabilera terapeutikoko baimena beste erakunde batek emana bada, kirolariak horren berri eman beharko du dopin-kontrola eginez gero. Kirol-erakundeek, beren araudietan, mugatu egin ahal izango dute, lehiatuko diren taldeetan, erabilera terapeutikoko baimenak edo glukokortikosteroideak edo parkekoak erabiltzen dituztelako adierazpenak dauzkaten kirolarien kopurua.
36. 16. artikulua ezartzen duenez, Euskadiko kirol-federazioek eta lurraldeetakoek, bartz lege hau aplikatzeko zailtasunak gainontzeko kirol-erakundeek ere, beren araudietan kirol-bajaren egoera aurreikus ahal izango dute. Egoera horretan, kirolariak edozein lesio edo gaixotasun tratatzeko egokitzen joaten den edozein tratamendu hartu ahal izango dute askatasun osoz, nahiz eta eragotzita izango duten era guztietako kirol-lehiaketetan parte hartzea. Kirol-bajaren egoera dopinaren aurkako dagokun batzordeak eman beharko du, eta Dopinaren aurkako Euskal Agentzian jasotzeko da. Alak eta bajak kirolariaren osasun-terapeutan jasoko dira, halakorik badauka.
37. Dopin-kontrolak eta osasun-kontrolak bereizi ditu 17. artikulua. Dopin-kontrolak hartuko dira Dopinaren aurkako Euskal Agentziak gaitutako erakunde eta pertsonak egindako jarduerak, dopina eragiteko moduko debekatutako substantziarik gabeen egiaztatze edo arauz kanpoko moduorik erabili den egiaztatze. Prozedura estandarren bidez hautematen dira halakoak, eta, horretarako, lagin bat ateratzen da. Dopin-kontrolak hartuko dira, era berean, eskumenak duten dopinaren aurkako organoek egindako jarduerak guztiak, dopatzaren aurkako araudia bete den egiaztatzeak.



38. Osasun-kontrol kontzeptuak jarduerak multzo hau hartzen du bere baitan: Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek, kirol-jarduerak beren kirolarien osasunari eragin diezazkizkeen kontrako ondorioak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko, egokitze hartzen dituzten jarduerak, bai eta dopinaren eta osasunaren alorreko legetik eratorritako berebeharrak kirolariek bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere.
39. Kontrolen plangintzaz eta kudeaketaz diktatutako 18. artikulua. Dopinaren aurkako Euskal Agentziak zehaztuko ditu lege honetan aipaturako erakundeek egin behar dituzten dopin-kontrolak, osasun-kontrolak eta osasunaren babasaren arloan egin beharreko gainontzeko jarduerak. Kontrol osagarriak egin ahal izango zaizkie kirolariei, batez ere, euskal kirol-selektzioetan parte hartzen dutenean edo parte hartzekotan direnean.
40. Kontrolak egiteko eskumena zedarritu du 19. artikulua. Orokorrean, era legean adierazitako beste erakunde batzuen eskumenen kalterik gabe, Euskadiko kirol-federazioei eta lurraldeetakoiei dagokie behar diren jarduerak egitea Dopinaren aurkako Euskal Agentziak zehaztutako lehiaketetako kontrolak egiteko. Analiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategietan egin behar dira.
41. 20. artikulua xedatu duenez, nazioarteko erakundeek onartutako xedapenen esparruan, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, zuzendaritaren bidez, kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaran argitaratzeko aginduko du. Gainera, zerrendan aldaketak egiten diren guztietan, berriro argitaratuko da zerrenda.
42. IV. kapituluak ("Dopinari buruzko diziplina- eta administrazio-zehapenen araubidea") 21. artikulutik 41. era bitartekoak hartzen ditu.
43. 21. artikulua diziplina-araubidearen aplikazio-eremua buruzkoa da. Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen (EAEKL) 46. artikuluan exijitzen diren ezentzuak direla-eta lotura berezia duten pertsonai, bai eta, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izanik, lege honen peko kirol-jarduerak gauzatzen dituzten kirol-erakundeekin edo lege honen pean boren borondatez jartzen diren gainerako kirol-erakundeekin lotura bereziko harremanak dituzten pertsonai. Estatuko kirol-lehiaketa ofizialean dopina dela-eta egindako arau-hausteak estatuko diziplina-arauen pean egongo dira; aldiz, nazioarteko kirol-lehiaketetan dopina dela-eta egindako arau-hausteak nazioarteko diziplina-arauen pean egongo dira.
44. 22. artikulua, bere aldetik, administrazio-zehapenen araubidearen aplikazio-eremua zehaztuko du. Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta



zehapenen araubidea aplikatuko zale, bidezko den linean. Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, edozein kirol-lehiaketatan gertatzen direla ere, dela kirol-lehiaketa autonomia-erkidegoaren eremukoa, dela estatuaren eremukoa edo nazioartekoa, nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olimpikoek edo parolimpikoek antolatua. Ez da beharke lotura bereziko harremanik egon dadin, eta egiteak edo ez-egiteak lehiak kanpoko kirol-jardueretan ere gauza daitezke. Hargarik eragotzi gabe, jakina, non bis in finem printzipioaren aplikazioa.

45. Kirolariaren eta haren inguruaren erantzukizunak finkatu ditu 23. artikulua. Kirolariak ardura hartu beharke dute berei gorputz-organismoan gai debekatuen sar ez dadin, eta gorputzean horrelako gairen bat atzematen zaienean, berea izango da erantzukizuna, beti. Erantzukizunaren helmena, kapitulu honetan ezarritako diziplinako eta administrazio-zehapeneko araubidean ezarritakoa izango da. Beste betebeharrak batzuk ez konpliztearen ondoriozko erantzukizunak ere ezarri dira, eta betebeharrak horiek dira, besteak beste, kirolariak ohikotasunaz lokalizatzeari buruzkoak, eta kirolariaren gaixotasunak eta tratamendu terapeutikoei buruzko informazioaren gainekoak.
46. Jarraian paratu dute dopinarekin zerikusia duten arau-haustoen zerrenda, eta oso larrietan eta larrietan banatu dituzte arau-hauste horiek (24. artikulua); ezar daitezkeen zehapenak ere zerrendatu dituzte, jakina, eta zehapena noiztat den, bada horren arabera bereizi dituzte: kirolariak ezartzekoak (25. artikulua); klubei eta kirol-taldeei ezartzekoak (26. artikulua); teknikariak, epaileak, arbitroak eta kirol-lizentziadun gainerako pertsonak, zuzendaritzako langileak, zuzendariak edo kirol-federazioetako langileak, ilga profesionalak eta langileak, kirol-lehiaketa ofizialak edo ez-ofizialak antolatzen dituzten erakundeak eta kirol-klubei edo -taldeei ezartzekoak (27. artikulua); eta klubetako edo taldeetako medikuei eta gainerako osasun-langileei ezartzekoak (28. artikulua).
47. Zehapenak ezartzerakoan, 29. artikulua dio zehapenak graduatuko direla proportzionalitate-irizpideari eta kasu bakoitzean ageri diren inguruabarrak jarraituz, batez ere arazorik izan den, jakinaren gainean egin den, eginkizunen erantzukizunaren maila nolakoa den eta zer kalte mota eragin diren begiratur, bai eta erantzukizuna modulatzeko balio dezaketen gainerakoei begiratur.
48. 30. artikuluan arabera, pertsonak zehapen gisa ezartzen zaizkien isunak, kirolarien kasuan, diru-sarrerak izaten dituztenean baino ezingo dira ezarri, betiere diru-sarrera horiek kirol-jarduerarekin zerikusia badute. Dopinarekin aurkakoa Euskal Agentziak ezarritako isunak ordaindu ezean, gaitiaz ordainaraziko dira, aplikatzeko den administrazio-legerian ezarritako moduan, eta hala bildutako isunen erailza Agentziaren lehiaketa-helburuetarako baliatuko da.



49. Arau-haustearen ondorio gehigarriak eta emaitzak aldatzeko aukera aurreikusi ditu 31. artikulua. Ondorio horretarako, bereizi egin dira banakako kirol-jarduerak (kirolariari kendu egingo zaizkio dena delako kirol-lehiaketako sariak edo dominak, baliogabetu egingo zaizkio emaitzak eta erabateko deskalifikazioa ezarriko zaio dena delako lehiaketa edo proba horretan, edo dena delako lehiaketa edo proba hori sartuta dagoen txapelketetan), eta talde-kirolak (diziplina-organismoek adierazi behariko dute ea beren iritziz egokila ote den partiden, proben, lehiaketen edo txapelketen emaitza aldatzea). Horretarako, egoeraren inguruabarrak hazteruko dituzte, eta orobat, dopina dela-eta atal honetan tipifikatutako arau-hausteak egin dituztenek partidaren, probaren edo lehiaketaren emaitzan izandako parte hartzea erabakigarria izan ote den, eta zer parte-hartze izan duten adingabeek jokabide horietan.
50. 32. artikulua zehapenen eragin-kortasunari eta kirol-lizentzia eskuratzeko gaitasuna galtzeari buruz dioenez, kiroleko dopina dela-eta zehapenak ezarri izana Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 4/1998 Legearen babesean emandako kirol-lizentziari dagozkion eskubideak lortzeko edo baliatzeko ezintasun kasuetako bat izango da, eta, bereziki, kirol-lehiaketetan parte hartzeko ezintasun-kasuetako bat. Jarraian iruki du bide bat, zehapena lege honetan aurreikusitakoez besteko organo batek ezarri duenean, zehapenaren batoraezintasuna adieraztea eskatzeko. Beste erakunde batzuek dopina dela-eta ezarritako zehapenak elkarri onartzeko printzipio orokorra aplikatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kirol-jarduerak antolatzen dituzten erakundeek.
51. 33. artikulua deklaratu duenez, *non bis in idem* printzipioa aplikatuko da subjektua, egitatea eta funtsa berberak izanez gero, biko beretik xedatu du delitu-zantzuak hauteman, edo gertakari horiek bide penaletik zigortzen ari direlako berri izanez gero, eten egingo dela diziplina- edo zehapen-espedienteak. Baldin eta egintzek, batetik, administrazio-erantzukizunak eta, bestetik, diziplina-erantzukizunak eskatu ahal izatea badakarte, kirol arloko diziplina organismoek horren berri eman behariko diote administrazio-organoei eskudunari. Herrizaingo Sailari ere jakinarazi behariko zaio. Hori hala egingo da, Herritarren Segurtasunaren Babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoa aplikatzerakoan, hala badagokio, proportzionaltasunaren printzipioa babeste aldera.
52. Erantzukizuna azkentzeko kausak erregulatu ditu 34. artikulua, eta 35. artikulua, bere aldetik, arau-hausteen eta zehapenen preskripzioaren araubidea ezarri. 36. artikulua dioenaren arabera, baldin eta kirolariak agintari eskudunen aurrean salatzen baditu pertsona eta erakunde egileak eta laguntzaileak, eta administrazio eskudunari laguntzen badio haien kontra prozeduran edo prozesuan lekukotza emanez edo funtsezko datuak emanez, salbuetsirik geraruko da, partez, administrazio-erantzukizunetik, eta, hala badagokio, ez du zehapen-prozedurarik igaro behar.



53. Administrazio-araubidearen eta diziplina-araubidearen arteko berelaketaren ikotik, aldez aurretik paratu baitute, 37. artikulua dio dopina zigortzearen arloan administrazio-zehapenak ezartzeko ahala erabiltzea Eusko Jaurlaritzari dagokiola; 38. artikulua, aldiz, hauri esleitu die dopinaren alorreko diziplinazko ahala: Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioei, bai eta erkidego horretan egiten diren kirol-lehiaketetan izaten den parte-hartzea dela-eta lorura bereziko harremana duten gainerako erakundeei ere.
54. 39. artikulua xedea, diziplina-prozedura: kasuan kasuko kirol-erakundeko diziplina-organoak ebazpena eman ondoren jarriko da abian. Horretarako, dagokion ikuskapen-akta edo laborategiak emandako analisiaren emaitzak jaso behar ditu diziplina-organoak eta kasuan kasuko isilpeko eginbidea amaitu. Eginbide hori aurretiaz egiten da, jakiteko ea espedienteak irekitzea justifikatzen duten egoerak badiren eta azken ebazpena eman ahal izateko, eta, hala, diziplina-espedienteari hasiera emateko, edo, hala badagokio, jarduketak artxibatzeak.
55. 40. artikulua ezarri duenez, Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko beste organo administratibo eta judizial batzuen eskumena alde batera utzita, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak ikuskatu ahal izango ditu dopin-kontrol batean poslibo emateko gai diren produktu eta substantziak gordetzea eta bilztea ahalbidetzen duten botika-ontzi, kirol-poltsa, aldagela-armairu, autobus eta galnerako guneak, bai eta metodo debekatuak aplikatzera bideratzen diren tresnak ere. Erregelamenduz ezarriko da botika-ontzien eduki onargarria, eta, berariaz, edozein larrialdi medikoren onariora diren gertaere: erantzuteko beharrezko diren sendagai eta osasun-produktuak.
56. 41. artikulua araber, kirolean dopina eragiteko gai diren substantzia eta produktuak eta xede horretarako erabiltzen diren tresna eta lanabesak konfiskatu ahal izango dituzte.
57. V. kapituluak ("Prebentzio-neurriak") 42. artikulutik 46.era bitartekoak hartzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurkako borroka eraginkorra bermatzeko, haxe xedatu du 42. artikulua: Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, gaitan inplikazioa duten beste organo batzuen laguntzarekin, prebentzio-neurri batzuk hartuko eta sustatuko ditu, besteak beste: prestakuntzako eta informazioko programak kirol federatuaren, eskola-kirolaren, unibertsitate-kirolaren eta lehiak kanpoko beste kirol-adierazpen batzuen esparruan; dopin-substantzia eta metodoek giza organismoan dituzten eraginaren gaineko ikerketa-programak; dopin-substantzia eta metodoak hautamateko sistema eraginkorren gaineko ikerketa-programak; eta dopinaren gaineko ikerketa-programak, hainbat ikuspegitatik: soziologikoak, etikoak, kirolekoak, medikoak eta beste zehazki antzeko.

58. 43. artikulua aurreikusi duenez, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak kirolaren gremioa dopinari buruzko informazio-sistema bat ezarriko du. Informazioa



eskuagari egongo dela bermatuko duena eta kirolaren alorrean eskumena duten administrazio publikoen arteko komunikazioa bermatuko duena.

59. 44. artikulua: Dopinaren aurkako Euskal Agentziak sendagaien, osasun-produktuen eta elikagai-segurtasunaren alorreko erakunde eskudunei eskatu ahal izango die kirolaren eremuan dopina eragiteko gai diren produktuen ekoizpen-zikloa eta banatze- eta merkaturatze-zikloak ezagutzeko beharrezko neurriak har ditzaten.
60. 45. artikulua: Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, gai honetako administrazio-organu eskudunekin batera, sendagaiak izan gabe, dopinaren eremuan emaitza positiboak edo aurkakoa eragin dezaketen nutrizio-produktuei buruzko informazioko eta publizitateko mekanismo berriak ezartzea sustatuko du.
61. 46. artikulua Kirolariaren Osasun Txartelari buruzkoa da: dokumentu publiko bat da, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak federazio- eta unibertsitate-lizentzia duten kirolariak eta erregelamenduz zehaztutako elen beste kirolari-kolektibo batzuei ere emango diena. Osasun-txartelak honako hauei buruzko informazioa jasoko du: azterketa medikoak, osasun- eta dopin-kontrolak –kasuan kasuko lizentzia eskuratzen duen unetik kirolariari egiten zaizkionak–, haien emaitzak eta medikuak hartzen dituen erabakiak. hain zuzen ere, kirolariaren osasun-laguntza egokia izan dadin kontuan hartu beharrezkoak. Eta baita, horrez gain, kirolariak eskuratutako erabileren terapeutikoko baimenei buruzko datuak, eta kirolariaren lan-bajei edo kirol-bajei buruzkoak.
62. VI kapitulua ("Dopinari buruzko datuen araubidea") 47., 48. eta 49. artikulua hartzen ditu. 47. artikulua: arabera, dopin-kontrolak egingo dituzten langileek, bai eta kirol-erakundeetako organoetako kideek eta langileek ere, beren lanagatik jakiten dituzten gaien inguruko konfidentzialtasuna errespetatu behar dute, eta gai horiek isilean gorde.
63. 48. artikulua dioenez, dopin-kontrolak datuak eta fitxategiak urzi ahal izango zaizkie, datuen babeserako indarrean dagoen legedian xedatzen den moduan, kirolaren alorrean dopinaren aurkako borrokan parte hartzen duten erakunde publiko eta pribatuak, legez lotesleak diren nazioarteko konpromisoak xedatzen dutenaren esparruan.
64. 49. artikulua dioenez, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren eta lege honen eremu materialean sartuta dauden lehiaketetan parte hartzen duten taldeak behartuta daude erregistro-liburu bat eramatea. Liburu horretan modu frogagarrian jaso behar da zer produktu hartzeko eman edo agindu zaien kirolariari, zer metodo debekatu erabili den, zer medikua agindu edo baimendu duen hori, eta noiz eta nola egin den agindu hori. Atzerriko kirolari, talde, kirol-talde eta haien ordezkari diren zuzendari-karguek ere, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-jarduerak batean parte



hartzera sartzen direnari, inprimakiak bete beharko dituzte, eta informazioa eman, hauek aintzat hartuta: erabiltzeko garraiatzen dituzten produktuak, debekatutako metodoak aplikatzea ahalbidetzen duten tresnak, produktu horien unitateak eta emateaz arduratzen den medikua.

65. VII. kapituluak ("Nazioarteko kirol-federazioak eta nazioarteko eremuan kirol-jardura arautzen duten gainerako erakundeak") 50. artikulutik 53.era bitartekoak hartzen ditu. 50. artikulua xedatu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan, dopin-kontrolak antolatzeko eta egiteko ardura, orobat diziplinazko ahala erabiltzea, Nazioarteko Batzorde Olinpiarri dagokio, edo, hurrenez hurren, lehiaketa horiek antolatzen dituzten kirol-federazio eta nazioarteko erakundeei, edo, antolaketa hori beste federazio edo erakunde batzuen eskutik uzten denean, federazio edo erakunde haiei. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren nazioarteko lehiaketetan egiaz dopin-kontrolak egiti aurretik, dena dela, Dopinaren aurkako Euskal Agentziari jakinarazi beharko zaio.
66. Hala ere, 51. artikulua xedatu duenez, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, dopinaren aurkako beste antolakunde batzuek izan ditzaketen eskumenel kalterik egin gabe, Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen edo lehiatzen ari diren espainiar edo atzerriar kirolariei lehiaketaz kanpoko kontrolak egitea agintu dezake.
67. 52. artikulua baldintzak ezarri ditu nazioarteko erakundeei lizentzia duten kirolariei Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaketaz kanpo egiten dizkieten dopin-kontrolatarako. Nolanahi ere, Euskal Agentziari jakinarazi beharko zaizkio.
68. 53. artikulua, azkenik, nazioarteko erakundeei ezarritako zehapenek kirolariengan eta gainerako lizentziadunengan izango dituzten eraginez dihardu.
69. Lehenengo xedapen gehigarriaren arabera, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio behar adina xedapen emateko, eta, haien bidez, lege honetan jasotako xedapenak egokitzeko edo aplikatzeko. Hain zuzen ere, kirol-lehiaketetan parte hartzen duten animaietan dopina prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko eremu espezifikoan.
70. Bigarren xedapen gehigarriak aurreikusi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Estatuarekin batera, formula batzuk ezarri ahal izango ditu —lankidetzarako kasuan kasuko bitartekoen bidez—, elkarren artean informazioa trukatzeko duen sistema bat ezartzeko, Kirolariaren Osasun Txartela emateko, onartzeko edo egiteko, eta kontroletan parte hartuko duten medikuak, albaranak eta gainerako langileak gaitzeko.
71. Hirugarren xedapen gehigarriaren arabera, kirol-jarduerean eremuan dopina eragiteko gai diren substantzia eta produktuak eskaintzen, laguntzen, hartzeko agintzen edo ematen duten osasun-profesionalak eta beste zernahi profesional, bai



eta metodo arauz kanpokoak edo debekatuak erabiltzea errazten dutenak ere. Kasuan kasuko jarduerara-araueetan eta lege honetan aurreikusitako arauetan zehazten diren formalitateak bete gabe, disziplinazko erantzukizunean eroriko dira. Arestian azaldu diren jokabideak arau-hauste oso larritzat joko dira, eta beren elkargo profesionalen kasuan kasuko arauen arabera zehatuko dira.

22. Leugarren xedapen gehigarriaren arabera, legea indarrean sartzen denetik aurrera, Kirolariaren Osasun Kartilari egiten zaitzkeen aipamen guztiak Kirolariaren Osasun Txartelari egindakotzat ulertuko dira.
23. Bosgarren xedapen gehigarriak xedatu duenez, federazio- eta unibertsitate-lizentziak euskarri elektronikotara txertatu ahal izango dira. Kirolariaren Osasun Txartela edukitzeko ere aukera ematen dutenotan. Hala ere, norberaren banakotasunari eutsiko dilo txartelak eta behar beste segurtasun-neurri izango ditu, Kirolariaren Osasun Txartel horri dagozkion datuak nolanahi eskura ez daitezen.
24. Seigarren xedapen gehigarriak beranazko araubidea ezarri die baldintza fisiko gogorreko kirol-probei —Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailaren agindu bidez erabakiko dira zein diren haiakoak—, izan ere, antolatzen dituztenek parte hartzeko gaitasun fisikoa egiaztatzea eskatu beharko diete parte-hartzaileei. Kasuan kasuko azterketa medikoaren zultagiriaren bidez egiaztatuko da gaitasuna, eta erregelamenduz zehaztuko dira baldintzak. Lizentziarik ez dutenek ere dopin-kontrolak egin beharko dituzte; nahiz eta haiek ez dituzten bete beharko lege honetan kirolari lizentziadunenentzat ezarritako betebeharrak (dokumentu- eta informazio-betebeharrak, hain zuzen ere).
25. Lehenengo xedapen iragankorrak aurreikusi duenez, legea indarrean sartu aurretik hasitako zehazpen-prozedurak, diziplina bidekoak zein administrazio bidekoak, izapideak hasi zirenean aplikagarri zen arauari jarraituz izapidetzen jarraituko dira, salbu eta interesdunenentzat aldeko izan litezkeen ondorioei dagokienez.
26. Bigarren xedapen iragankorraren arabera, legeak Dopinaren aurkako Euskal Agentziari egozten ditzkion eginkizunak Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak beteiko ditu, hura eratzen den eta benetan lanean hasten den bitartean.
27. Hirugarren xedapen gehigarriak adierazi duenez, harik eta Dopinaren aurkako Euskal Agentziak lege honetan ezarritako galkuntzak ematen dituen arte, dopin-kontrolerarako laginen bilketa-taldeen gaitutako pertsona moduan jardun ahal izango dute apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretuan, edo hura aldatzeko edo oneratzeko xedapenean, aurreikusitako galkuntza dutela egiaztatzen diren guztiak.
28. Xedapen indargabetzaileak dioenez, honako agindu hauek geratzen dira indargabetuta 14/1998 Legean 81. artikuluko c) idatz-zatia; VII. tituluko V.



kapitulua; 109. artikuluko f) idatz-zatia; 127. artikuluko h) idatz-zatia. Indargabetu egiten dira, halaber, lege honetan ezarritakoekin bat ez datozen maila bereko edo beheagoko xedapen guztiak.

79. Azken xedapenetatik lehenengoak Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 4.2.v artikulua aldatu du.
80. Azken xedapenetatik bigarrenak Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 63. artikulua aldatu du.
81. Azken xedapenetatik hirugarrenaren arabera, Eusko Jaurlaritzak ahalmena du lege horretan zehazpenen kopuruari eta zehapen horiek aplikatzeko arauci buruz ezarritako zehapen eta diziplina-araubidea nazioarteko erakundeek ezarritako arauetara eta, beldar izanez gero, aplikagarri gertatzen den estatuko legedira egokitzeko.
82. Azken xedapenetatik laugarrenaren arabera, kirol-federazioek eta legea aplikatzekoa zaion kirol-antolakunde orok beren estatutu eta erregelamenduak egokitu dituzte urtebeteko epean, legea argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
83. Azken xedapenetatik bosgarrenaren arabera, berriaz, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hilabetera sartuko da indarrean legea.

BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA

84. Irizpen hau ematea nahitaezkoa da, "lege-aurreproiektuak" direnerako halaxe ezarri baitu —horien edukia eta helburua direnak direla ere— Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruz azaroaren 24an emandako 9/2004 Legeak (aurrerantzean, EABJL) 3.1.a) artikuluan. Era berean, ez gaude xedapen berak nahitaezkotasun hori buruz adierazitako salbuespenetako baten aurrean.

KONTUAN HARTU BEHARREKOAK

I EGITEKO PROZESUA

85. Xedapen Orokorzak Egiteko Prozeduran buruzko 8/2003 Legeak, abenduaren 22koak, aurrerantzean XOEPL bere ezarpen-eremuaren barruan sartu ditu lege-forma duten xedapen orokorzak (XOEPLen 3.1 artikulua).

86. Aurrekoa gorabehera, Batzorde honek behin eta berriaz aipatu izan ditu ideneri erakusgarri, 76/2004 ABJL) lege-aurreproiektuak egiteko prozedurari egin behar



zalon balorazioan dauden alde edo diferentziak, izapidetzeak buru emango dion produktuarien izaera berezia dela eta.

87. Lege-aurreproiektuei dagokionez, XOEPLen helburua da jaurlaritzaren jarduera bideratzea, legegintza-prozedura *strictu sensu* hasi baino lehenagoko fasean, lege-proiektuak idazterakoan erabilitako prozedura bat etor dadin xedapen orokorrak egiteko baliatzen duenarekin; izan ere, XOEPLen Zioen Azalpenak dioenez, "Horrela legegintzako ahala duenaren eginkizuna erraztu egingo da, hobetu funtsatutako egitasmoak aurkeztuko baitzaizkio eztabaidarako eta erabakia hartzeko, helburuak iziteko egokigooa eta finagoa den teknika juridikoa arakulua banatuak".
88. Hain zuzen ere, Legebiltzarrean hedatzen baita bere zabalean legegintza-prozedura, eta Konstituzioak (EK), Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuak (EAE) edo, batzuetan, lege organikoek baldintzak ezartzen dituzten berariazko kasuetan izan ezik, lege-proiektuak bete behar duten baldintza bakarra da beharrezko aurrekariekin batera bidaltzea Legebiltzarrera. Parlamentuak bere iritzia eman eta erabakia hartu ahal izan dezan; gutxienez ere, memoria orokorra, finantzaketari buruzko eranskina eta kontrol ekonomiko txostena, aurrekontuari karga edo zama dakarkioten proiektuetan, gure irizpena eta legeraren arabera nahitaezko diren beste txostenak (Jaurlaritzaren Legearen 57 artikulua, eta Eusko Legebiltzarreko Araudiaren 132.2 artikulua).
89. Hau da, XOEPL ez da arauaren baliozkotasuna juzgatzeko parametro, baizik eta baliabide bat, ekimenari dagozkion garrantzizko alderdi guztiak (baldintza juridiko eta ekonomikoak, xede duen errealitatearen eta hantze zuzeneko gaitzeko eragina, eta abar) biltzeko edo hurreratzeko, eta, jakina, ekimena lortu nahi diren helburuei noraino egokitzen zaien ikusteko, eta, baita ere, ekimena indarrean jarri gero helburu horiek lortu ahal izango diren.
90. Irizpenerako aurkeztu dituzten aurreproiektua prestatzeko prozedurari dagokionez, errespetatu egin dira, funtsean, XOEPLk horri buruz dituen eskakizun-betebeharrak.
91. Hasiera-agindua, XOEPLen 5. artikuluan aurreikusia, eman dute, dopinaren aurkako lege-proiektuaren xede helburuak labur aipatuta: era berean, proposatu den erregulazioaren gaiari eta eduklari egokitzen zaizkion izapidetza eta txostenak adierazi dituzte.
92. Espedientearen barruan dago memoria zabal bat, hauek jorratzen dituztena: legeria egokitu beharra, eskumen titulua, xedapenaren maila, araua bere kapitulutan taxurzeko izan diren helburuak eta proposamenak, eta indartzeko arauetiko eragina.
93. Behin artikuludun testua onartuta, eta XOEPLen 7.1 artikulua dakarren denbora-segidan jarraiki, kanpokoan parte hartzeari ireki zaio prozedura.



94. Entzunaldiaren izapidea ere egin da, XOEPLen 8.3 artikuluaaren arabera; hain zuzen ere, ekimenak zuzenean eragindako eskubide eta interes bidezkoak dituzten herritarrak bildu edo ordezkatzeko dituzten elkarteak helarazi zaie aurreproiektua.
95. Aurreproiektuaren hantzaile izan ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak kirol-federazioen elkarteak, Euskal Kirol Federazioen Batasuna eta euskal federazioak
96. Hauek ere jaso zuten aurreproiektua: Euskadiko Kirol Medikuntza Elkarteak; Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuen, farmazialarien eta albatzarren elkargo ofizialak; eta jardueren Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Lizentziadunen Elkargo Ofizialak, zeinak alegazioak aurkeztu baitzituen.
97. Kirolerako zuzendaria 2010eko urriaren 5eko Ebazpenaren bidez jarri zuten jendaurrean lege-aurreproiektua, haxe iritziz baltzioten: destinatzaile gehienak euskal kirol-federazioetan integratuta egon arren, eta entitate horiei bidezko entzunaldia eman zaien arren, egia da egon daitezkeela federazio horietatik kanpo eragindako herritarrak, eta kasu horretan entzunaldia zuzen-zuzenean egin behar da (XOEPLen 8.1 artikulua)
98. Beste administrazio batzuei ere eragin diezaikeenez, XOEPLen 9. artikulua aintzat hartu, eta kontsultarako bidali zitzaizkien aurreproiektua Estatuko Administrazioari (Dopinarekin aurkako Estatuko Agentzia) eta Euskal Autonomia Erkidegoko foru-diputazioei (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia).
99. Espedienteon dago jasota Kirol Kontseilu Gorenko Estatu Abokatuaren txostena, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusiak ere aurkeztu zituen alegazioak.
100. Eusko Jaurlaritzako sail guztiei ere egin zaie prozedurarako deia Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun Zuzendaritzak eta Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak eman dute aurreproiektuari buruzko iritzia, bakoitzak bere sektore-eremuari errepikatuta.
101. Era berean, Euskadiko Gizarte eta Ekonomia Kontseiluari ere eskatu zitzaion irizpena, ekainaren 27ko 9/1997 Legeak, Euskadiko Gizarte eta Ekonomia Kontseiluarenak, 3.1.a) artikuluan ezarri duenaren arabera.
102. Kirolaren Euskal Kontseiluak ez du partetik hartu prozeduran, nahiiz eta prozedurari hasiera eman zion Aginduan haren parte-hartzea aurrekusi; izan ere, EAEKLen 7.1 artikuluaaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-politikari eragiten dioten gaietan aholkularitza emateko, kontsulta eta jarraipena egiteko eta eztabaldatzeko hain administrazioen arlo-organo nagusia da, eta azaroaren 7ko 220/2000



Dekretuak osatu du legezko erregulazio hori. Bada ez dute inongo arrazoirik agertu parte hartu ez izana zuzitzeko, eta komeni da hori konpontzea.

103. Kultura Saileko Zerbitzuen Zuzendaritzak txosten juridikoa prestatu du aurreproiektuari buruz, XOEPLen 7.3 artikulua horretarako ezarri edukiarekin.
104. Txosten horrek, lehenengo, arau- eta eskumen-esparruan kokatu du aurreproiektua; bigarren, lege-lerroa eta erregelamendu-garapena aztertu ditu, EKren 81 artikulua ezarritako lege organikoaren erreserbaren eraginekin batera; jarraian, aurreproiektuaren edukia aztertu du, zehatz-mehatz, egiturari jarraiki, eta, amaitzeko, izapidetzea aztertu du, jaurlaritzak behin betiko onarpena eman eta lege-proiektu bihurtu dezan. Legebiltzarrera bidali aurretik.
105. Genero-eraginaren alde aurreko ebaluazioari buruzko txostena egin da, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoak, aurreikusi baitu 19. artikuluan. Kirol Zuzendaritzak egin du, nahiz eta osatu ez Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko otsailaren 13an hartu zuen Erabakian finkatu zituen jarraibideetan lehenengoaren seigarren atalak eta A eranskinak prozedura arrunta dela-eta eskatzen dituzten atalak eta galdetegiak.
106. Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuaren nahitaezko txostenak —otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, 21. artikuluan aurreikusi baitu— badu hainbat gogoeta eta proposamen. Positibotzat jo dute genero-ikuspegia txertatu izana Ikerketa-, dibulgazio-, prestakuntza- eta sentsibilizazio-jardueretan; hala ere, genero-ikuspegia txertatu beharra dago dopinari buruzko informazio-sisteman. Aurreproiektuaren 12.v) eta 6.1.m) artikuluetarako hobekuntzak ere iradoki dituzte, eta, 11.7 artikuluari dagokionez, klausula bat sartzea. Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren Aholku Batzordearen osakeri emakumeen eta gizonen presentzia orokorra sustatze aldera; azkenik, idatzera berrikustea gomendatu dute, hizkeraren erabilera sexista saihesteko.
107. Kultura Saileko Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak ere eman du bere txostena, abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretuaren arabera eman ere, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan Kultura Sailak txostenak bideratzeko bete behar duen araudia ezarri baitu dekretu horrek. Txosten horretan, aurreproiektua hizkuntzaren alorreko legeria sektoralarekin bat datorrela egiaztatzen ondoren, hiru proposamen egin dituzte, aurreproiektuak hauek jaso ditzan: (i) lege honen ondorioz herri administrazioekin, Euskadiko kirol-federazioekin eta Dopinaren aurkako Euskal Agentziarekin dituzten harreretan, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoek ordezkariak euskara eta gaztelania, ahoz nahiz idatziz, erabiltzeko eta arreta hizkuntza berean jasotzeko duten eskubidea bermaruko da; (ii) Dopinaren aurkako Euskal Agentziak euskara eta gaztelania erabiliko ditu bere jardunean eta kanpoko harreretan; eta (iii) Aholku Batzordeko kideek batzartean euskara eta



gaztelania erabili ahal izango dute. Era berean, delaköietan, gai-zerrendetan, akteretan eta beste idazkietan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.

108. Justizia eta Herri Administrazio Saileko Bernikuntzaren eta Administrazio Elektronikoa Zuzendaritzak ere hartu du parte araua prestatzeko prozeduran, abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuak, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezarri duenak, 17 c) artikuluan esleitu dizkion eginkizunak aintzat hartuta.
109. Era berean, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak ere eman du txostena aurreproiektuari buruz, horren testuak datu pertsonalen tratamenduari gainera aurreikuspenak dituela ikusita; Bulegoak, egin-eginean ere, bere eginkizunen artean baitu datuak babesteko legeak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan bete daitezkeen zaintzea [Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitzategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 17.1.a) artikulua].
110. Bulegoak bere txostenean jorratu ditu eskubidearen taxutze konstituzionala eta osasun-datuak datu pertsonalen babesaren esparruan duten tratamendua, eta zehatz-mehatz aztertu du aurreproiektua, zenbait gairen araubidea aintzat hartuta: lokalizazio- edo kokapen-datuak, tratamendu terapeutikoak, erregistro-liburua, erabilera terapeutikoko baimenak eta kirol-bajak, informazio-sistema eta osasun txartela, dopinari buruzko datuen araubidea eta zehapen-araubidea. Bulegoak txostenaren ondorioetan adierazi duenez, hartzatu egin beharko dira legeak ezarritako neurriak eragindako pertsonen eskubideak, eta beharrezko orieka lortu arauak erdetsi nahi duen interes orokorren (horien artean, kirolarien euren osasuna) babesaren eta kirolarien oinarizko eskubideei zor zaien errespetuaren artean, kirolarien intimitatea eta kirolarien datu pertsonalen babesa bereziki aintzat hartuta.
111. Eragindako gogoeten eta isadokizunen balorazioa, horiek onartzea (eta, ondorioz, testuaren aldaketa, zenbait gehitu edo kentzekoa), ala, bestela, bazteritzea, eta horren arazoak horra Kultura Saileko Kirol Zuzendaritzaren 2011ko ekainaren 15eko txostenaren edukia. Batzordeak aitortu egiten du, jakina, eragindako argumentazio ahalegina, prozeduran agertu diren oinarriak eragozpenerik erantzuteko egin dutena, zalantzarik gabe erraztu baitu bidalitako testuaren azterketa —testu konplexua den arren—, ondorioak eta inplikazioak hobeto ezagutzeko bera eman duen aldetik.

112. Data berbereko (2011/6/15) beste memoria bat dago, Kiroleko Dopinariaren aurkako Legearen aurreproiektuari: Izapidetzeari buruzkoa. Kirol Zuzendaritzarena hori ere: dena den, horren izena bat etorri arren XOLPren 10.2 artikulua xedatu duen izapidetzekin, bestelako edukia du, berriz ere azpimarratu ditzutela, laburpen



gisa-edo, proposatutako erregulazioarekin erdietsi nahi duten helburua, eragindako gizarte-sektoreak, proposatutako arauaren oinarri juridikoak, Kultura Sailak proiektua izapidetzen hasteko duen eskumenaren oinarria, araua prestatzeko lanetan zerikusli duzuenetako bakoitzaren lotura-mailaren zehaztapena, eta entzunaldi publikoaren izapidearen beharra, proposatutako erregulazioaren ildo nagusiak, aurreproiektuaren eragin ekonomikoa eta genero-eragina.

113. Dokumentu horren zatirik azpimarragarriena, dena den, ekimenaren eragin ekonomikoaren azterketa da, egin gabe baitzegoen artean; egin-eginean ere, memoria ekonomikoa egitea ekarri baitu gero.
114. Memoria ekonomiko horretan onartu dutenez, legeak nahitaez ekarriko du aurrekontu-karga hurrengo ekitalditarako, erakunde berria sortu nahi dute-eta, Dopinarekin aurkako Euskal Agentzia alegia, autolamendu arinarekin bada ere: pertsona bakarreko organoa (zuzendaria, goi-karguduna) eta kide anitzeko organoa (kontsulta- edo aholku-kontsellua, gastuak eta dietak kobratzeko eskubidea izango baitute kideek), hiru lanpostu (arduradun medikoa, aholkulari juridikoa eta administraria), eta Dopinarekin aurkako kontrolak kanpo-kontratazioaren bidez egiten jarraituko dute (laborategi batek egingo ditu analisiak, eta baimenduta dauden medikuak aterako dizkiete kirolariei gernu- eta odol-laginak).
115. Kostu txikia aurreikusi dute, era berean, Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordearen jarduerarako, eta ez dute batere aurreikusi lokalerako, baliabide materialena chin mila eurotan jarri badute ere. Horrek, guztira, 458.984,71 €-ko aurrekontu-karga dakar agentziaren funtzionamenduetarengatik. Ez dute garrantzizko saiererarik aurreikusi: 6.000 € inguru.
116. Kontrol Ekonomikoko Bulegoak espedienteaz aztertutako, eta, bereziki, autolamendu-alderdiak eta ekonomia- eta aurrekontu-eragina, eta Kirolako Dopinarekin aurkako Legearen aurreproiektuaren kontrako txostena eman du. Hona arazoak: (i) ez dituzte behar bezala egiaztatu hauek: erakunde berria sortu beharra lotu nahi diren helburuak erdietszeko, eta zuzenbide publikoko erakundea sortzeko arazoak, atipikoa balta Administrazio honen eremuan; (ii) memoria ekonomikoan alderdi horretatik ebatzatzen diren langile-dotazioak ez datoz bat aurreproiektuaren testuan aurreikusi direnekin, eta ez dute behar bezala oinarritu beharrezkotzat jotako langile-dimentsioa egokia denia bete beharreko eginkizunetarako; eta (iii) sektore publikoan erakunde berria, eta, horren ondorioz, lanpostu berriak sortzea ez dator bat Jaurlaritzak onartutako irizpideekin, aurrekontu-egonkortasunerako konpromisoak betetze aldera erabakurakoei alegia, bai ez datorren bezala euskal finantza publikoan iraunkortasunerako doikuntza-politikarekin.

117. Espedienteaz Batzorde honetara bidali dutelarik, ez dago jasota arau-proiektua sustatu duen sailak Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren erreparuari emandako



balorazioa, eta, beraz, konpondu egin beharko da ments hori jaurlaritzaren Kontseilura igorri baino lehen, horrek erabaki beharko baltu auzia, eta Dopinarekin zurrakako Euskal Agentzia sortzea lege-aurreproiektuan sartu behar den ala ez erabaki. Guse ustez, ez da XOEPLen 10.2 artikulua aurreikusitako amaiera-memoria falta, nahikoa irizten baitiogu prozeduran parte hartu dutenen oharrak bildu, eta onartzeko ala baztertzeko arrazoiekin erantzuna ematen dien dokumentuari. Hala ere, dokumentu horren edukian faltar emari dugu Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ondorio negatiboaren gaineko balorazio juridiko-ekonomikoa.

II ESKUMEN BANAKETA

118. Ezer baltu lehen, ezinbestekoa da gogoratzea autonomia erkidegoak erregularuta duela jada kirolaren alorreko dopinarekin gaia Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean (EAEKL). Lege hori baltu, hain zuzen, proiektaturiko arauaren hurren-hurrenko aurrekaria.
119. Zehazki, aipatu lege-testuaren VII. tituluko V. kapituluak ("Dopina") blitzen diru gaiari buruzko xedapen orokorrak, eta aurreproiektuak beren-beregi aurreikusi du horren derogaia.
120. Aurreproiektuak azpimarratu duenez, eraberritu eta eguneratu beharra du lege-araubide horrek, eta, horretarako, erregulazio bereizia paratu dute, eraginkorrago eta hobeto definituriko tresnekin aurre egiteko jarduerak batzuel, kirolaren eta kirolari buruz zabaldu diren baloreen eta oinarrien antinomiaren erakusgarri diren heinean.
121. Oro har, EKren 43. artikulua bere 1. paragrafoan aitortu du osasuna babesteko eskubidea, eta 2. paragrafoan esleitu die botere publikoek dagokicia aurreneurrien bidez osasun publikoa antolatu eta babestea, eta 3. paragrafoan aurreikusi du botere publikoek osasun-hezkuntza, hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dituztela, eta era berean, aisialdiaz behar bezala baliatzen lagunduko dutela.
122. Konstituzio Auzitegiaren urriaren 1eko 194/1998 epaiak gogoratu duenez, estu-estu loruta daude osasuna eta heziketa fisikoa eta kirola, hala heziketa fisikoa eta kirola osasunaren eusteko bide direlako, nola jarduerak fisikotik eta kirolotik behar ez bezala aritzeak, "batez ere askotan arrisku ez txiki daramaten kirolotik", ondorio oso txarrak dakartzakelako osasunari.
123. Politika sozial eta ekonomikoaren gida-oinarri diren aldetik, printzipio horiek alfortuz, errespetatuz eta babestuz zertuko da botere publikoen jardura (EKren 53.3 artikulua).
124. Eskumenen banaketari zehatz begiratuta, ikuspegi bikoitza hartu behar da aintzat: Estaturak/autonomia-erkidegoa eta autonomia-erkidegoa/lurralde historikoak.

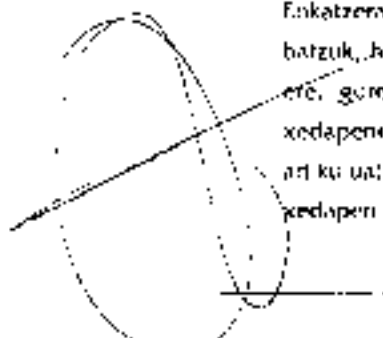


Horretarako, lehenik eta behin erkatu beharko dira EKren VIII. tituluan eta EAEEn jasotako aurreikuspenak eta xedapenak, kasu jakin honetan aplikatu behar direnak alegia; eta, gero, EAEEnak eta azaroaren 25eko 27/1983 Legearenak (Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoenak Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzkoa baita, aurrerantzean LHLI, Toki-araubidearen gaineko legediak gai honi buruz aurrekusi dituenen azterketarekin osatuko da analisi hori.

125. Gogoratu dezagun EAEEn 10.36 artikulua eskumen osoa ematen diola Euskal Autonomia Erkidegoari kirolaren alorrean, zinean bete-betean sartzen baitira bai EAEKL, bai irizpena egiten ari gataizkion ekimena bera.
126. Hala ere, ezinbestekoa da gogoratzea badagocia estatu-mailako dopin-antolamendu bat, Osasuna Babesteko eta Kirolean Dopatzeari Aurre Hartzeko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoak (aurrerantzean, DLO) jaso duena. Lege horrek, xedapen jakin batzuetarako erabili duen eskumen-iturriaz gain, era generikoan aintzatesten ditu Estatuaren eskumen bat, hots, Estatuaren antolamenduari buruzko xedapenak ematekoa, baita Estatuko kirol federatuari bere osan eragiten duten interesen gainekoak ere, eta Konstituzioaren 149.1.16 artikulua xedatu duena (DLOren azken xedapenetan laugarrena).
127. Konstituzio Auztegiaren 1/1986 epaiak, urtarilaren 10ekoak, kirolaren alorreko eskumenak aitortu zitkien autonomia-erkidegoei, autonomia-estatutuen arabera, nabardurekin, dena den: izan ere, "egia da, orobat, eskumen horiek, autonomia-erkidegoaren beste edozein eskumen bezala, ezin dituztela hartu autonomia-erkidegoaren alialen egikaritzaz kanpoko estatu-esparruan diren eta dirloduten erakundeak (horiez ari baikoa kasu honetan); Konstituzioak, egia da, autonomia bermatu die autonomia-erkidegoei, esanien interesak xudeatu dituzten (Konstituzioaren 137. artikulua; *Autisme Lexi* mugarekin (Katalunianko Autonomia Estatutuaren 25.1 artikulua), baina autonomia horretatik ezinezkoa da, zinez, Espainiako kirol federatuari bere osan dagozkion interesak ukitzea, kasu honetan gertatuko litzatekeen bezala. Gainerakoa, hala ez balitz, zalantzan jarraitu administrazioaren esku-hartzearen koherentzia eta zentzua bera hautsiko lirateke, egin-eginean ere, esku-hartze horretan bilatu behar dena baita, orain horien ez ditazoten beste gogoeta batzuk azle baita utzita, kontrolatutako erakundearen jardute premua eta kontrola egiten duenarena heratuta berekoak izatea"
128. EKren 149.1.16 artikulua Estatuari aitortu dion eskumenera ("Osasunaren ularrak eta koordinazio orokorra") dagokionez, EAEEn 18. artikuluekin uztartu behar da, Euskal Autonomiari esleitu baitio, barne-osasun arloan, Estatuko oinarritzko legeria lege bidez garatu eta beteaztea

129. Osasunaren alorrean, eta malatzaren 25eko 98/2004 KAEn arabera, "EKren 149.1 artikulua 16. eregelek ere aipatzen dituen oinarriak finkatzea edota koordinazio orokorra izati edo azpisistemen dibertsitate edo aniztasuna multzo edo sistemara bildu nahiz du, kontraesanak



saihestuz eta disuntzioak gaituz, honako lauen arabera: 32/1983 KAE, apirilaren 28koa, 2. OJ; 42/1983 KAE, maiatzaren 20koa, 3. OJ; 80/1985 KAE, uztailaren 4koa, 2. OJ; ezin dira garatu autonomia-erkidegoei arau horien arnasetan eduki ulizasetan kideko eskumenen edukia nusterano (32/1983 KAE, apirilaren 28koa, 2. OJ)”.


130. Eskema horren arabera esan genezake, kirolaren ikuspegitik, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena duela euskal kirola antolatzeke, eta eskumen hori egikaritu dezakeela, aurreproiektuan egin duen bezala, dopinari aurre egiteko erregulazioa ezarrita; osasunaren ikuspegitik, berriz, Estatuak ezarritako oinarriak hartu beharke ditu aintzat, Estatu osoan guztien interesak modu bateratuan eta berdintasun-baldintzen arabera ziurtatzeko xedea baitute oinarriak, hortik abiatuta autonomia-erkidego bakoitzak egoki deritzen berezitasunak sar ditzakeelarik bere estatutuak dena delako gai horretan esleitzen dizkion eskumenen esparruaren barruan, bere interesak aldeztu aitera (KAEak: 32/1981, 1/1982, 32/1983, 48 eta 49/1988, 69/1988; baita berriagoak ere: 149/1991, 141/1993, 109/2003, eta abar).
131. Hauxe ere erantsi behar dugu, gainera, DLOren xedapen batzuek lizaera organikoa duen aldetik (azken xedapenetatik hasgarrena): i) EKren 81.1 artikuluko lege organikorako erreserba horrek ez du, bere horretan, Estatuak galtzeko eskumen- titulurik jasotzen, baina Estatuak bakarrik eman ditzake lurako legeak oinarritzko eskubideak eta askatasun publikoak garatzeko, eta autonomia-erkidegoek, euren eskumenak egikaritzean, errespetatu egin behar dute lege horien edukia: ii) irizpide zorrotza edo murriztailea erabili behar da erreserbaren inismena zehazteko, hau da, lege organikoa behar duela Konstituzioa zuzenean eta oinarritzko eskubidea definitzeko funtsezko elementuetan “garatzen” duen oinarritzko eskubide baten edo askatasun baten erregulazioak; erregulazio zuzena, orokorra edo globala izan daiteke, baita partziala edo sektoral ere, baina, betiere, eskubidearen funtsezko alderdiei buruzkoa, eta, partziala izanagatik ere, eskubidearen legezko zehaztapena eta definizioa egiten laguntzera bideratua (127/1994 KAE, 3.5 oinarri juridikoa).
132. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzearen ikuspegitik, Konstituzio Auzitegiaren uztailaren 23ko 173/1998 epaiak dioenez, “interpretazio-irizpide funtsezko bi atara daitezke. Alde batetik, lege organikoaren erreserbaren eremua eta Estatuari esleiturako eskumenena ez direla hurbildua berekoak —hala ezarri baitu epizirkui Auzitegi honek ga hori jorratuz eman dituen ebazpenak—, eta, bestetik, interpretazio sistematikoaren oinarritzko irizpidea erabilita, lege organikoaren erreserbaren norainakoa Enkarterakoan, berdin hartu behar direla aintzat konstituzionaltasun-bloke deritzonaren xedapen batzuk, hots, eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeari buruzkoak; izan ere, gure 137/1986 epaiak ongi dioenez, “Konstituzioaren batasunak ez luke onartuko bere xedapenetako bat (149.1 artikulua) guztiz hurbiltzea Konstituzioaren beste xedapen batek (81.1 artikulua) ezarritakoaren poderioz, onartuko ez lukeen bezala, bestalde, iturri-sistema antolatzeke xedapen batek (...) goia hartzea eremu materialak artikulatu nahit duen arauari (...)”.



133. Hortik ateratzen da Estatuari EKren 81.1 artikulua ere bitartez dagokiola oinarritzko eskubidearen funtsezko alderdiak arautzea, eskubide hori zuzenean garatzea, oinarritzko eskubidea era abstraktuan edo "eskubidea bera" aintzat hartuta; aldiz, eskubide horrek zer "gal" hartzen duen, bada legegile aruntazi, estatukoari zein autonomikoari, dagokio gal hori arautzea, horri buruzko eskumen sektorialak dituen aldetik (KAEak: 127/1994, 61/1997).
134. Aztertzen ari garen kasuan, zera azakatu beharko litzateke: DLOn organikotzat jotako aurreikuspenek zer neurritan ezarri dituzten funtsezko edukiak oinarritzko eskubide bat definitzeki dagokionez, noraino zaizkion legegile autonomikoari mugak galdiezin, autonomia-erkidegoaren esparruan kirolaren alorreko dopina arautzeki ekiten dionean.
135. Oraingoz, aski izan bedi esatea zalarritzari gabekoa dela gure autonomia-erkidegoak proiektatu duen moduko arau bat emateko eskumena, arauaren alderdi zehatzei buruz gero esango denari kalterik egin gabe.
136. Lurralde historikoetako foru-organoen eskumenei dagokienez, beriz, EHLk bere 7.b).6 artikuluan esleitu die foru-organoei arau autonomikoak garatu eta exekutatzea alor hauetan: kirola sustatzea, eskola-kirolaren programak eta denontzako kirolarenak.
137. LHLren 6. artikulua xedatu duenarekin bat, EAEKLk erkidego osorako erakundeei esleitu die alor hauetako eskumena: dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea (EAEKLren 4.2.q) artikulua). Aurreproiektua onartuz gero, ez zulo xedapen horren indarra dion eragingo.
138. Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzari zegokion kirolarien gorputz-gaitasunak artifizialki areagotzeko edo lehiaketan emaitzak artifizialki aldatzeko substantzia debekatuen eta metodoen zerrenda bat egin, eguneratu eta argitaratzea, "osasun eta kirol arloan nazionarteko hitzarmenetan zehaztutakoa jarraituz" (EAEKLren 84. artikulua), orobat, araudi bat onartzea, eta, gutxienez, puntu hauek erregulatzea: a) laginak hartzeko gelak, b) laginak hartzeko eta bidaltzeko prozesuak; c) emaitzen analisiak eta zabalkundea; d) laginak aztertzeko laborategiak; eta e) dopatzearen aurkako kontrolean parte hartzen dutenen eskubideak eta betebeharrak (EAEKLren 85.2 artikulua). Xedapen horiek guztiak, dena den, deroga gertaerako dira lege berriarekin, horiek dionarekin bateraezina diren neurrian.
139. Udalei dagokienez, beriz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 24/1985 Legeak (aurrerantzean, TAOL) 25.2.m) artikuluan ezarri du udalen eskumena kultura eta kirolerako jarduerak zein instalazioetan.



140. Argi dago, hala ere, kirolaren alorreko dopinak nabarmen gailnditzen duela udalen Interes-eremua, eta horrek justifikatu egiten du udalen esku-hartzea bigarren mailakoa izatea alor honetan.
141. Dena den, kirolaren alorrean eskumena duten heinean, hala lurralde historikotako foru-organoei (EAEKLren 5. artikulua) nola udalei (EAEKLren 6. artikulua), Euskal Autonomia Erkidegoko botere publiko diren neurrian, betebeharrak batzuk izango dituzte dopinaren aurkako borrokan, bakoitza bere jardute-eremuaren barruan noski, aurreproiektuaren 5. artikuluaaren pordeioz. Horrek ez du botere eragozpenik, logikoa baita, nabiatuz esku hartu beharko dute-eta, bakoitzak bere mailan, dopina kirolekik erazuteko.
142. Laburbilduta: ez diogu inongo arazorik ikusten proiektuaren edukari, EAEKLk jaurdaritzari esleitu eskumenak bidezko oran egikarituta daudelako.
143. Beste plano batean, hondarreko gisa, zehatzago aztertu ditugunak (kirola eta osasuna) baino garrantzi gutxiagorekin, eskumen hauek ere ukitzen dira: (i) Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren sorrera dela-eta, autogobernu-erakundearen antolamendua (EAEKLren 10.2 artikulua); (ii) diziplina-prozedurak disziplinatzerakoan, Euskal Herriak emandako zuzenbidearen berezitasunen eta bere antolaketa bereziaren haritik datozen prozesu-arauen eta administrazio-jardunbideari dagozkion arauen gaineko eskumena (EAEKLren 10.6 artikulua); eta (iii) ikerketa-programak abiaraztea aurrekusi dutenean, zientzia- eta teknika-ikerketa, Estatuarekin koordinatuta (EAEKLren 10.16 artikulua).

III. AURREPROIEKTUAREN EDUKIAREN AZTERKETA

A) Oro har kontuan hartzekoak:

144. Lehenago ere gogoratu dugunez, EAEKLren erregulazioa aldatu nahi du aurreproiektuak kiroleko dopinaren alorrari dagokionez.
145. Erreforma sakona da, inondik ere, eta aproposa eta zilegia, zaiantzarik gabe, DLO onartzearen ondoriozkoa, batez ere, Testuaren atariko zatian ageri denaren ildotik, lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez lurralde-eremuetan eta -mailetan, esparru juridiko komuna behar da kiroleko dopinaren aurkako borrokan aritzeko.
146. Dena den, aurreproiektuak dioena aztertzeari ekin baino lehen, Batzordeak egoki deritzo aipatzeari, labur bada ere, DLOk nola gauzatu duen erregulazio hori: izan ere, estatuko legegileak argi eta garbi bereizi baititu kirol antolatua —federazio- eta lehiaketa-kirol eremuko dopinaren aurkako borroka antolatuzko, DLOren I. titulua—,



era kirol-jarduera ez antolatua —osasun publikoko neurriak ezartzen baitira hor. jarduera fisikoari lotuak oro har. DLOren 15 artikulua eta II. titulua—.

147. DLOren zioen adierazpenaren ildotik, bi esalditan laburbil daitezke legearen ardatz-lerroak: alde batetik, goi-mailako kirol-lehiaketen alorreko dopinaren kontrolerako eta jazarpenarako mekanismoak eguneratzea; eta, bestetik, zeharreko esparru sistematiko bat sortzea dopina, oro har, kontrolatu eta jazartzeko, gizartearentzako ineharxutzat hartzen baita, gaitz edo izurritzat, osasuna arrisku larrian jartzen diena, kirolari profesionalei ez ezik, kirol-jardueraren batean ohikotasunez edo noizbehinka an disener ere.
148. Oso bestelakoak dira eremu batean eta bestean esku hartzeko teknikak. Lehen kasuan, kirolariaren ingurukoak dira kontrolak, eta sorburutzat dute federazioek emandako kirol-lizentziak dakarren lotura berezia, lehiaketetako kirol-jardueran aritzeko bera ematen baitu. Bigarrenean, berriz, kontrolaren xede dira kirolean dopina sor dezaketen produktu, medikamentu edo elikadura-osagarriak, eta horien legez kanpoko trafikoa eta banatze iregularra gainbegiratu nahi duen politika publikoaren erakusgarri dira deklaratu beharra, debeku bereziak eraz antzekoak.
149. Jazarpena ere egiten da bide berezietatik: lehen kasuan, zehapen-araubide oso zehatza ezarri du DLOk (lege organikoaren zati handia hartzen baitu); bigarrenean, berriz, beste eremu batzuetara lerratzen da kontua: herritarren segurtasuna (42. artikulua eta azken xedapenetan hirugarrena), eta tituludun lanbideak (43. artikulua).
150. Salbuespen bakarra da alor penaleko babes unitario bat, lehiaketetan aritzen ez diren kirolari federatuek, kirolean olgera-gisa aritzen diren kirolariek, edota kirol-erakundeek Espainian antolatutako lehiaketetan aritzen diren kirolariek jasotzen dutena, Zigor Kodearen 361 bis artikuluko berriak (DLOren 44. artikulua) deskribatzen dituen inguruabarrak gertatzen direnean.
151. DLOk ez ditu bi eremuetako kontrol-bideak berdintzen, eta, jakina, ez du inposatzen herritar guztiei dopin-kontrol orokortuak egiteko aukera, kirol-praktika bere osoan kontrolatu, eta, hartara, kirol-lizentziak dakarren loturarik ez duten kirolariek dopin-substanciak erabiltzeari aurre egiteko.
152. Doktrinarik aitortuenak adierazitakoaren ildotik, badira desberdintasun hori azaltzeko hainbat arrazoi (kontrol horien kostuak; gerta zitekeen asimetria, Espainian ez baitago zigortua drogadiakzio-produktuak edukitzea, orabilera partikularerako baldin bada, eta abar), baina horietan garrantzitsuenak, zalantzarik gabe, neurriaren heinokotasuna edo proportzionalitatea da.



153. Gauza jakina denez, oinarritzko eskubideei murrizketa edo muga ezartzen dien legegintzaren kontrolaren inguruan hedatzen ditu bere funtzioak heinekotasun- edo proportzionalitate-printzipioak.
154. DLOk maila organikoz jantzi ditu bere artikulua zenbait: 5. artikulua (dopin-kontrolei men egin beharra, ohiko kokapena eta tratamendu medikoak), 6.1 artikulua (gaitutako langileak), 6.2 artikulua (kontrolak ordu jakin batzuetan egiteko debekua), 6.3 artikulua (informazioa jasotzeko eta proba ez egiteko eskubidea), 8.1 artikulua (dopin-kontrolak), 36. artikulua (datuak lagatzeko baimena), 44. artikulua (tipo penal berria), eta azken xedapenetan hirugarrenaren hirugarren paragrafoa (Herzitarren Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren, HSBLO, 24. artikulua aldatzen duena). Kalifikazio hori, azken bi kasuez landa, oso argi baitago (arau organikotik jarri behar dira EKren 17.1 artikulua aurreikusi askatasunerako Zigor Kodeak xedatu murrizketak, eta HSBLOren 24. artikulua organikotzat jota dago jada HSBLOn bertan. EKren 21. artikulua aitortutako bilkura- eta manifestazio-eskubideei eragiten dielako funtsean), oinarritzko eskubideen gaineko eragin sakonaren ondorioa da, osotasun fisikoaren gaineko eskubidea (EKren 15. artikulua) eta intimitate pertsonalerakoa (EKren 18.1 artikulua) ukitzen baitira, batez ere.
155. Dopinaren aurkako kontrolak prozedura estandarren bidez garatzen dira, eta horretarako, lagin bat ateratzen da ("aire, gema, odol edo beste erdozko fluidotatik hartutakoak edo lagin txikiak izango dira", aurreprolektuaren 17.3 artikulua), eta gorputzean esku hartzeko kasua da hori, eta bi eskubide horiei eragiten die (denen erakusgarri, Konstituzio Auzitegiaren 207/1996 epaia, abenduaren 16koa). Norberaren kokapenaren berri eman beharrak eta tratamendu medikoak adierazi beharrak ere jartzen dizkiote mugak intimitate pertsonalerako eskubideari.
156. Beste alde batetik, datu pertsonalak babesteko oinarritzko eskubideari (EKren 18.4 artikulua) ere eragiten diote, analisi horien emaitzak tratatu egingo dituztelako, eskumena duten agintariak jakinarazi behar zaizkielako, eta, beste barzuetan, beste erakunde eta organismo batzuei utzi behar zaizkielako. Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren (aurrezantzean, DBLO) 7.3 artikuluaaren arabera, "arazari, osasunari eta sexu-bizitzari buruzko itziera pertsonaleko datuak bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arazoiak direla bide, legeren batek balaxe xedatzen duenean edo ukituak esanbidez inartzen duenean hori".
157. Bada, estatuko legegilearen alburuz, bi kasutan sakrifikatu daitezke, neurri batean, eskubide horiek: "testatu-mailako kirol behiaketa olizalean parte hartzeko federazio-lizentzia duten kirolariak" (5.1 artikulua), eta "dopinaren alorreko arau-hausteren bat egin izanagatik kirol-lizentzia etenda duten kirolariak, zehapena betetzen ari diren bitartean" (5.2 artikulua); sakrifikatu ere, Konstituzioaren arabera zilegi den helburu bat lortzeko.



158. Eskubide horiek ez dira absolutuak, eta interes orokorreko arrazoi justifikatuek hartu diezaike aurrea, baldin eta legeak behar bezala aurreikusi baditu, eta arrazoi horien artean daude *ius puniendiaren* ondoriozko jarduerak. Egin-eginean ere, kirolko dopinaren alorrean egindako arau-hausteak zuzentzeko egintza garrantzizkoak zehazteko interesak justifikatu egingo luke kontrol horiek egitea eta aipatu berebeharrak ezartzea.
159. Laburbilduta, atxikipen edo lotura bereziko eremu bat taxutu du DLOk, eta bertan sartu estatu-mailako kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko federazio-lizentzia duten kirolariak, eta eremu horretan jazarri nahi du legez kanpoko substantziak hartzea, eta horrek justifikatzen du kirolari horien oinarritzko eskubideei ezarritako murrizketak: baita atxikipen edo lotura orokorreko beste eremu bat ere, federazio-diziplinatik at kirolen batean ari diren kirolariak hartzen dituen oro har, eta eremu horretatik erauzi nahi dituzte, funtsean, substantzia dopanteak dituzten produktuen trafikoa eta behar ez bezala banatzea, eta ez dute kontrol orokorturik aurreikusi (beste eremu batzuetan gertatzen denaren ildorik, ibilgailuen gidaritzan adibidez).
160. Behin gogoeta orokor horiek eginda, aurreproiektuaren azterketarako hurbilketa gisa ballatu baititugu, azterketa zehatza behar duen edukiak jorratuko ditugu.

B) Federazio-lizentziarik gabeko kirolariak:

161. Dirudienoz, DLOren ereduaren ildotik doa aurreproiektua, horren aurreikuspen substantiboan edukia errepikatzen baitu, neurri handi batean. Hala ere, ezin esan ondorio hori argi eta garbi ateratzen denik, zalantzak sortzen direlako azaldu dugun bereizketa mantentzen ote den, eta ez bakarrik arrazoi sistematikoengatik (ez dira argi bereizten kirolari federatuentzako aurreikuspen espezifikoak oro har herritar guztientzako direnetatik), baizik eta, funtsean, dopinaren aurkako kontrolak jasan beharra dutenak zedarritzera hurbeltzen diren erredakzioarengatik.
162. 13.1. artikuluaaren arabera, legearen aplikazio-eremu subjektiboan sartutako kirolariek nahitaez egin beharko dituzte, lehiaketan eta lehiaketetatik kanpora, Dopinaren aurkako Euskal Agentziak eta lege honen bidez gaitutako erakunde publiko eta pribatuak erabakitako kontrolak. Horrez gain, kirolari horiek estatuko eta nazioarteko xedapenetan ezarritako kontrolak egiteko berebeharra izango dute.
163. Legearen aplikazio-eremua zedarritzera bideratuta daude 1. artikuluaaren 4., 5., 6. eta 7. paragrafoak. Legearen eremu materialaz alihardu 4. paragrafoak. Euskal Autonomia Erkidegoan garatutako kirol-jarduerak osatzen baitute, federatua izan edo ez izan —eremu horretatik kanpo geratzen dira, dena den, estatuko lehiaketa ofizialei eta nazioarteko kirol-lehiaketei, azken horiek nazioarteko kirol-federazioek edo kasuak kasuko erakunde olimpikoak edo paraolimpikoak antolatzen dituenen—.



164. Legearen aplikazio-eremu subjektiboa marraztu du 5. paragrafoak, eta bertan sartu ditu euskal lizentzia, dela federaziokoa, unibertsitatekoa zein eskolakoa, duten kirolari guztiak, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen diren kirol-lehiaketetan parte hartzeko baimena ematen duen federazio-lizentzia dutenak. Baina, horiez gain, Euskal Autonomia Erkidegoan, aldi baterako baino ez bada ere, entrenatzen, lehiaketan aritzen eta bizl diren kirolariak ere hartzen ditu. Era berean, kirola Euskadin egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiei ere ezarriko zaie legea, nahiz eta kirol-jarduera hori aldi batez baino egin ez. Zedarrizeari itxiera emateko, dena den, hauxe ere ohartarazi dute: "aplikazio-eremu subjektiboa ezindakoa izanik ere, kirolari horiek estatuko edo nazioarteko kirol-jardueretan parte hartzen dutenean, estatuko edo nazioarteko xedapenak bete beharko dituzte".
165. Azkenik, orain interesatzen zaigunerako, EAEKLren 66. artikulua kirolariari eman definizioa ekarri du aurreproiektura 6. paragrafoak; hau da, edozein kirol egiten duen pertsona oro, nahiz eta federatuta ez egon edo kirol-lehiaketetan parte hartu ez.
166. Legearen aplikazioaren ondorioetarako paratu duten kirolari-definizio orohartzaile hori nabarmendu egiten da diziplina eta zehapen-araubidearen aplikazio-eremua finkatzerakoan —21. eta 22. artikulua—, autonomia-erkidegoaren lurralde-eremura proiektatu baitu 22.1 artikulua, horren azken lehenaldia zehaztu duenez "Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin, eta egiteak edo ez-egiteak lehiatzaileei kirol-jardueretan ere gauza daitezke".
167. Egin-egincan ere, zera pentsaraz dezake horrek: kirolean diharduen ororentzat izango dela etorkizuneko legea, hain zuzen ere, ondorio hori atera baitute, gainera, aurreproiektua prestatzeko prozeduran ibili diren batzuk, hala nola Osasun eta Kontsumo Sailak edo Datuak Babesteko Euskal Agentziak
168. Ekimena sustatu duen sailak azpimarratu duenez, inoiz ez du asmozik izan legea jardura fisikoren batean besterik gabe dihardutenei aplikatzeko, hauxe nahi baitzuen: kirol-lehiaketen garbitasuna eta horietan parte hartzen duten kirolarien osasuna begiratzea.
169. Behar bada, arazoan sorburua izan liteke aurreproiektuak ideia bat azaldu duen modua, eta ideia hori da kontrola hedatzea oihartzun publiko handiko lehiaketa ez ofizialetara, pertsona fisiko edo juridiko publiko zein pribatuak antolatutara, horietan parte hartzeko beharrezko ez den arren federazio-lizentziarik izatea edo kirol-federazioen barruan egotea.
170. DIOk, autonomia-erkidegoek kirol-aldorrean dituzten eskumenak errespetatuta, honela finkatu du bere eremu objektiboa: estatu-mailako kirol-lehiaketa ofizialak; eta eremu subjektiboari dagokionez, berriaz, honela: estatuko kirol lizentzia edo lizentzia autonomiko homologatua duten kirolariak, Espainiako kirol-federazioek antolatu,



sustatu edo balmendutako lehiaketetan, hargatik galarazi gabe Espainian egiten diren nazioarteko kirol-jarduerei ere aplikatzea, 33. artikuluaaren ildotik.

171. Batzordearen ustez, gauzak zehazte aldera, aurreproiektuaren erregulazio-eremu naturalean sartu behar dira lurralde-eremu autonomikoko edo beheargoko kirol-lehiaketa ofizialak, eta hor iehiatzen diren kirolariek, euskal federazio-lizentzia dutenak. Izan ere, lehiaketa eta kirolari horien gainean hedatzen dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioek euren agintaritza publikoari dagozkion prerrogatibak, administrazio-zerbitzu publiko baten kudeaketan parte hartuta.
172. Kirolaren gaineko eskumen orokorrak, dena den, ulde emango luke, gure ustez, prebentzio- eta kontrol-politika bat bultzatu, eta bertan sartzeko, eta berean, euskal unibertsitate- edo eskola-lizentzia duten kirolariek ere dopin-kontrolak egiteko aukera, orobat kontrol horien eremua hedatzeko lehiaketa ez ofizial batzuetara eta horietan parte hartzen dutenengana.
173. Legegile autonomikoari egokituiko litzaioke neurri horren heinekotasuna baztatzea, eragindako oinarrizko eskubideak aintzat hartuta, eta betiere errespetatuta horien funtsezko edukia, DLOk definitu duen hein horretan; egin-egincan ere, helburu zilegia izango bailukete kontrol horiek: dopina lehiaketa horietatik erazteak alegia.
174. Konstituzio Auzitegiak askotan esan izan duenez, oinarrizko eskubide bat murrizteko neurri batek heinekotasun edo proportzionalitate-juzgua gainditzen duen ala ez egiaztatzeko, hurrengo hiru baldintza edo betekizunak konplitzen dituen begiratu behar da: "lortu nahi den helburua erietesteko modukoa izan behar du neurriak (eginkortasun-juzguak: beharrezkoa izan behar du, helburu bera eraginkortasun beherarekin lortzeko neurri leunagoak ez izatea alegia (beharrezkotasun-juzguak); eta, azkenik, ponderatua eta urratua behar du, hots, interes orokorrerako onura edo abantaila gehiago atzeratzen beste ardasun edo baldintzuetarako kaltea baino (proportzio- edo heinekotasun-juzgu zehatza)".
175. Lehiaketan federazio-eremutik kanpo dopin-praktikarik badela onartuta ere, hauxe hartatu beharko litzateke: ea lehiaketa horietako dopinak osasunari eta kirol-garbitasunari dakarkion arriskuaren heinekoak edo neurrikoak ote diren unibertsitate- edo eskola-lizentzia duten kirolariek edo lizentziarik gabe lehiaketa horietan parte hartzen dutenak dopin-kontrolak egin beharra, ohiko kokapenari buruzko datuak jakinarazi beharra, eta tratamendu terapeutikoen berri eman beharra. Egin-egincan ere, hauxe baztertu beharko litzateke: zama edo betebehar horiek gehiegizko desoreka nabarmena sortzea neurri murriztailearen eta arauaren helburuaren artean.
176. Nolanahi ere den, lehiaketa ez ofizial jakin batzuk eta horietan lizentziarik gabe parte hartzen dutenak legearen eremu orokorrean sartzeko logikaren barruan, ez dugu ulertzen seigarren xedapen gehigarriak araubide itxuraz osatua ezartzea lehiaketa horien kasu berezi baterako, baldintza fisiko gogorreko kirol-probetarako alegia.



177. Batzordearen ustez, gainera, haztatu egin behar da erregulazio hori gauzatzeko modua. Egin-eginean ere, argi utzi beharko litzateke ea lehlaketa kanpoko kontrolak egin daitezkeen ala ez —hala bada, kokapen-datuak eman beharrik gabe ere egiteko aukerarik izango ote zen baloratu beharko litzateke—. baita kirolari horien betebeharrak zehatzak argitu ere. A'de batetik, legean kirolari lizentziadunenizat ezarritako dokumentu- eta informazio-betebeharrak konplizetik jare daudelako —zeharka onartuz horrela legearen eremu subjektiboak kirolari lizentziadunak hartzen dituela—, baina, bestetik, betebeharr horietako batzuk konplitu behar dituztelako —erregulamendu bidez garatuko den kontrolko araubide berezla prestatzeko jarri diren inzipideek hala erakusten dute—; argiro zehaztu beharko den bezala legeak paratutako zehapen-araubidea (tipifikazioa, preskripzioa, prozedura, eta abar) aplikatu daitekeen, eta zeintzuk diren prozedura instruitu eta zehapenak proposatu eta ezartzeko eskumena duten organoak, zalantzarik gabe adierazita zehapen-izaera dutela zehapen horietan aurreikusten direnak, eta ongi betelzita zehapen nagusiak — parte hartzeko gaikuntza kentzea aldi baterako edo betiko— eta osagarriak — deskalifikazioa, emaitzak baliogabetzera, eta abar—.

178. Oro har, arau baten eremua zuzen zedarritzea oinarritzkoa da araua egoki aplikatu ahal izateko; are gehiago oinarritzko eskubideei eragiten zaien arauaren erredakzioak ongi begiratu behar ditu eta segurtasun juridikoa eta zuzenbideko ziurtasuna, erredakzioaren ambiguitasunak interpretazio desberdinak ez eragiteko.

179. Oinarritzko eskubide bati lege bidez ezarritako mugak, konstituzio-oinarria eta proportzionalitatea izan arren, Konstituzioa urra dezake, behar bezalako segurtasunik eta aurreikusgarritasunik ez badute ezarritako mugak eta horiek aplikatzeko moduari dagokionez. Egin-eginean ere, "lege-kaitate"tzat jo duena eskatu du Konstituzio Auzitegiak: legegileari berari baitagokio zehaztea oinarritzko eskubideak mugatzea zilegitzen duen ondare edo eskubidea noiz agitzen den, "baita zer ingurabarretan mugatu daitekeen ere; eta, gainera, legegileak betak eman behar ditu horretarako arau zehatzak, interesatuen argizteko moduan muga hori ezartzen dela eta mugaren ondorioak. Legegileak, bestela, Administrazioaren esku utziko luke EKren 53.1 artikuluan lege-emeterearen ondorioz oinarritzko eskubideen alorrean betari bakarrik dagokion funtzioa betelzea: eskubidearen muga eta horren erregulazioa argi ezartzeaz ari gara, nuki" (Konstituzio Auzitegiaren 292/2000 epaia, azaroaren 30ekoak).

180. Batzordearen ustez, beraz, ahalegina egin behar da aurreproiektuaren terminoak arazteko, eta, hartara, sortutako interpretazio-arazoak konpontzeko.

C) Estatuko edo nazioarteko lizentzia duten kirolariak:

181. Baina aurreproiektuaren eremuaren zedarritzeak ez du hori arazo bakarra, eskumen-arazotak ere sartekatzen direlako. Kirol Kontseilu Gorenko Estatu Abokatuaren



arabera. Estatuaren eskumen eskusibukoak dira estatu- eta nazioarte-mailako lehiaketetako dopinaren gaineko administrazio-ahalak. Haren iritziz, kirolariaren lizentzia-motaren arabera finkatu behar da lehiaketaz kanpoko kontrolak egiteko eskumena, eta, beraz, kirolariak lizentzia autonomikoa bada, autonomia-erkidegoarena izango da dopinaren gaineko eskumena; aldiz, lizentzia estatu-mailakoa bada, Estatuako Administrazioari egokituko zaizkio eskumenak.

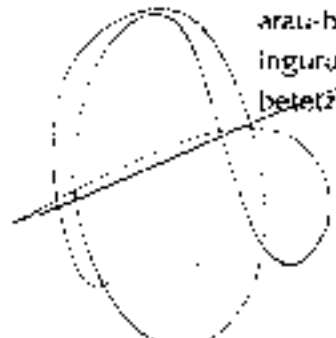
182. Aurreproiektua datatzi duena bat dator, dirudienez, planteamendu horrekin —kirolaria dagokion federazioarekin lotzen duen estekaren proiektzioa da kontrolaren mende egotea, esteka hori eskusiboa ez bada ere, liratekeena dela kirolariak lizentzia bakarra ez izatea, eta federazio bat baino gehiagotan egotea—, baina, egia esan, aurreproiektuan barneiatutako mezuen baturak erakusten duen araubidea ez da oso gardena, eta argitu beharra dago, aplikazioan gatazkak salhestuko badira.
183. Batzordearen ustez, nahiko argi eman daiteke arau edo erregela bat: federazio bakoitzaren jarduerako lurralde-eremuaren araberakoa da dopinaren arloan esleitu zaizkion eginkizunak betetzeko duen esku-hartze ahalak. Hori dela eta, euskal federazioen esku geratzen da euskal federazio-lizentzia duten kirolariak kontrolatzea eta zehatzea, alde batera utzita kirolari horiek, era berean, goragoko mailako beste federazio-lizentziaren bat izatea, halakoetan beste federazio edo nazioarteko erakunderen baten diziplina-aren mende ere geratuko liratekeelako.
184. Premisa horren arabera, egokia da 1.4 artikulua, zeinaren arabera legearen eremu material orokorra, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoan garatutako kirol-jarduerak osatzen baitute, federatua izan edo ez izan. Aurrekoa hala izanik ere, ez zaie legeak dioena ezarriko estatuko lehiaketa ofizialei eta nazioarteko kirol-lehiaketek, azken horiek nazioarteko kirol-federazioek edo kasuan kasuko erakunde olimpikoak edo parapolimpikoak antolatzen dituenen. Egin-egitean ere, 21.1 eta 2 artikuluen arabera, estatuko diziplina-arauen edo nazioarteko diziplina-arauen pean egongo dira, hurrenez hurren. Indarrean jarraitzen du EAEK-ren 105.3 artikulua: "Estatu-eremuko kirol-lehiaketak dirala eta egindako arau-baustek, estatu eremuan diziplina-arauak izango dituzte jarraibide".
185. Egokia den bezala 1.5 artikuluen hasiera, hauxe xedatu baitu: legearen aplikazio-eremu subjektibo orokorrak euskal lizentzia, dela federaziokoa, unibertsitatekoa zein eskolakoa, duten kirolari guztiak hartzen ditu, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen diren kirol-lehiaketetarako parte hartzeko balmena ematen duen federazio lizentzia duenak.

186. Egin-egitean ere, 1.5 artikulua gero dioenak baitakartza etorkizuneko legearen helmenari buruzko zalantzak ("Horiez gain, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen, lehiaketa aritzen eta bizi diren kirolariak ere hartzen ditu bere baitan. Era berean, kirola Euskadin egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiak ere ezarriko zaie legea, nahiz eta kirol-jarduerak hiri



aldi batera baino egin ez. Aplikazio-eremu subjektiboa erabakitzea izanik ere, kirolari horiek estatuko edo nazioarteko kirol-jardueretan parte hartzen dutenean, estatuko edo nazioarteko xedapenak bete beharko dituzte".)

187. Aurreproiektuak berelzi egin ditu kirolaria kontrolatzeko ahala eta diziplina-eskumena. Bereizi ere, halako anbiguitasun batez 12.3 artikuluan (hauxe aurreikusi baitu: analisien emaitzen berri eman ahal izatea arto honetan eskumenak dituzten dopinaren aurkako agentziei), eta itzulitururik gabe 13.10 artikuluan (kontrola egin ahal izango baitzate estatuen lizentzia edo nazioarteko lizentzia duten kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, bertan bizi badira. Hala ere, "legearen arabera eskumena duen erakundeak izapidetuko ditu kontrol honen ondorioz iriaki liezketen zehapen- edo diziplina espediente administratiboak"), eta 13.11 artikuluan (berretsi egiten baitu Euskal Autonomia Erkidegoan egindako dopin-kontrolerako analisien behin betiko emaitzak dagozkion kirol-erakundetara --eskumena izan dezaketenetara bidalko direla). Aurreproiektuaren 19. artikuluko 5. eta 6. paragrafoetatik ere ateratzen da kontrol autonomikoei men egin beharra (nazioarteko lehiaketetan edo estatu-mailako lehiaketa ofizialetan parte hartzeko asmoz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kirolariei lehiaketatik kanpoko kontroletan, beste erakunde batzuei lehentasuna eman arren kontrol horiek egiteko).
188. Eskema beretik doa, azkenik, 51. artikulua, hauxe zehaztu baitu: Dopinaren aurkako Euskal Agentziak, dopinaren aurkako beste antolakunde batzuek izan ditzaketen eskumenei kalterik egin gabe, Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen edo lehiatzen ari diren espainiar edo atzeritar kirolari lehiaketa kanpoko kontrolak egitea agindu dezakeela, hau ere erantsi arren emaitza analitikoak, bidezko ondorioetarako, kasuan kasuko nazioarteko kirol-federazioari, Dopinaren aurkako Mundu Agentziari eta eskudunak diren dopinaren aurkako antolakundeei jakinaraziko zaizkiela.
189. Hona 22.1 artikulua hasieran dioena: "Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie bidezko den heinean, Euskal Autonomia Erkidegoaren urralde-eremuan gertatzen diren egiteel edo ez-egiteei, edozein kirol-lehiaketatan gertatzen direla ere, dela kirol-lehiaketa autonomia-erkidegoaren eremuko, dela estatuen eremuko edo nazioarteko, nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olimpikoek edo par olimpikoek antolatua". Aurreikuspen hori ulertzeko, hala ere, hauxe hartu behar da kontuan: kirolaren alorreko diziplina-araubidearen mende ez daudenez egindako arau-hausteez ari dela (hau da, kirolari federatu ez direnek, edo kirolarien ingurukook, beren eginkizunak kirol-lizentziarik edo gaikuntza balokiderik gabe bete(zen) dituztenek).





190. Baztertu egin behar da administrazio- eta diziplina-arantzukizunak pilatze edo gainjartzea arau-hauste eta egile berberarengatik, baldin eta tipifikazioak eta aplikatzeko zehapenak berdinak badira. Batzordearen ustez, kirolaren alorreko dopinaren jazarpenari dagokionez, subjektu kualifikatuak dira kirolari federatuak, eta berriazko diziplina baten mende daude, horrenbestez, ber egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salak 2009ko uztailaren 20an eman zituen 488/09 eta 586/09 epaietan adierazitakoarekin, hauxe baitetsi zuen eta: "Nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegoak erabateko eskumena izan kirolaren alorrean, ez da berriaz babesten EAEko Administrazio Orokorra, eta, horrenbestez, ezin da esan kirolari federatuentzako zehapen-eremu bereziak dagoenik, hots, ez dago guztiei aplika dakizkiekeen berezko administrazio-zehapenak ezartzeko eremu bereziak"; ez gai honetan behintzat, erregulatu den modua ikusita.
191. Arau-multzo horrek zera baitakar, azken buruan: kirolari federatu guztiak, baita estatuko edo nazioarteko lizentzia dutenak ere. Dopinaren aurkako Euskal Agentziak agindutako kontrol autonomikoen mende geratzea oro har, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi, entrenatu edo lehiatzen diren bitartean. Hala ere, onartu egiten da, era berean, estatuko edo nazioarteko lizentzia duten kirolariak beste arau batzuen mende ere badaudela (estatuko edo nazioarteko arauen mende, alegia), eta dagozkien federazioek (estatukoa edo nazioarteko erakundeak) dutela kirolari horien gaineko zehapen-eskumena.
192. Hartara, berezita ageri dira Ikuskapen-ahala —generikoa, kirolari guztiengana hedatzen baita—, eta diziplina-ahala —espezifikoa, euskal lizentzia duten kirolarietara mugatua—.
193. Kontrolatuko jarduerak, dena den, dopinaren alorreko arauak betetzen direla bermatu nahi du. Horren funtzioa, beraz, kirolarien portaera begiratzea edo behatzea da, diziplina-prozedura baten balizko aurrekari gisa edo, era behatze horrek berez du hertsapen edo kohertze-osagai bat, esku-hartzea jasan beharra ezarri baitie hartzaileei.
194. Polizia-jarduera administratiboaren erakusgarri da Ikuskapen- eta kontrol-jarduera, eta zuzenean lotzen zaio Administrazioaren zehapen-ahalarri, ezin baita hura gabe ulertu. Horrenbestez, biek partekatu behar dute arau-gaikuntza berbera, nahitaez.
195. Aztertzen ari garen kasuan, laginak hartzeko jarduerak kargak edo zama dakartzkie kirolariet, laginak hartu behar dituen taldearen jardura jasan behar dutelako; zama horiek, alabaina, ez dira zehapenak, baina ez lukete zentzurik batera edukiiko diziplina-prozedura batean amai dezaketelako ez balitz.

196. Horregatik behar da kontrol-lanaren eta diziplina alorraren arteko jarraitutasuna, estu-estu baintude lotuta, ez dira-eta eremu desberdinetara hedatzen.

197. Aurreproiektuaren testuaren gaineko hausnarketa egin dezaten diogu aurreko hori guztia, aresuko diskordantzia ikusita; kontrolen emaitzek, egin-eginean ere, aurrekari



izan behar dute organo autonomikoen ondoren diziplina-ahal egikaritzeko bidea izan dezaten, eta ez dira diziplina-ahal horretatik ar, edo, nahiago bada, ahal horretatik bereiz eta isolaturik, gauzatu behar, eskumena duten beste organismo edo erakundeen alde,

198. Horrek guztiak, jakina, ez du eragozten legeak aurrekusi ahal izatea zerikusia duten herri-administrazioen —edo eskuordetzan emandako eginkizunak egikaritzen dituzten federazioen— arteko lankidetzak dopin-kontrolak egiteko garaian.
199. Egingarritasunaren ikuspegitik, dena den, zalla izango litzateke dopin-kontrolen urteko programa egitea [12.f) eta 18. artikulua] baldin eta hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoan aldi baterako bakarrik egongo diren kirolariak badira, aldez aurretik abisatu gabe ere etorriko baitira sarritan (adibidez, aldi baterako bizitzeko edo entrenatzeko etortzen direnean).

D) Kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeen erantzukizuna:

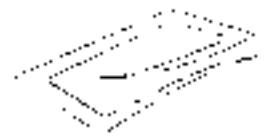
200. EAEKLren 44.2 artikuluan arabera, federazioek dagokion urteko egutegian ofizializat jotako lehiaketak izango dira lehiaketa ofizialak. EAEKLren 45.1 artikulua bere aldetik xedatu duenez, lehiaketa ofizialak bideratzea, kalifikatzea eta baimentzea lurralde-federazioei eta euskal federazioei dagokie. Federazioek elkarlanean aritu beharko dute kirol-lehiaketek egitura piramidala egokia izango dutela bermatzeko. Azkenik, 46. artikulua aurrekusi duenez, aurreko artikuluan aipatutako lehiaketa ofizialean parte hartzeko, beharrezkoa izango da unibertsitateko edo eskolako federazio-bizentzia izatea, lege hau garatzeko xedapenetan ezarritako baldintzekin bat etorritik.
201. Aurreproiektuak bere 6. eta 7. artikuluetan bereizi ditu kirol-erakundeen erantzukizuna eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeen erantzukizuna.
202. Bereizketa horrekin zedarritzen dira, funtsean, federazio-erantzukizunak (EAEKLren 9. artikulua kirol-erakundeak alpatzen ditu), alde batetik, eta, bestetik, ekitaldiak edo lehiaketak antolatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak, berdin dio publiko edo pribatu diren.
203. Baina bakoitzari dagokion tratamenduan diferentzia funtsezkorik egin gabe; izan ere, xedapen biek diotena konparatuta egiazta daitekeenez, berdinak dira kirol-erakundeen eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeen erantzukizunak, aldaketa txikiren bat gorabehera, eta bane hartzen dute, besteak beste, dopinaren aurkako erregelamendua onartzea; dopinaren aurkako kontrol egokiak egitea; kirol-elkarte, kirolari eta gainontzeko kirol agentei dopinaren



aurkako arauak onar ditzatela eskatzea, antolatzen dituzten kirol-jardueretan parte hartzea izan dezaten; dopina kontrolatzeko prozesuetan egiten diren analisiak emaitzak isilpean gordeko direla zaintzea, eta abar.

204. Beste alde batetik, 19.1 artikuluan zehaztu dute kontrolak zeinek egin behar dituen ("Orokorrean, eta lege horietan adierazitako beste erakunde batzuen eskumenen kalterik gabe, Euskadiko kirol-federazioek eta lurraldeetakoak dagokien..."), eta diziplina-araubidearen aplikazio-eremua 21.1 artikulua bidez lotu dute diziplina-prozeduretarako eskumenarekin; izan ere, 38. artikulua deklaratu duenez, dopinaren alorreko diziplinazko ahala kirol-federazioei dagokio, bai eta, "eruditego horietan egiten diren kirol-lehiaketetan izaten den parte-hartzea dela eta" lotura bereziko harremana duten gainerako erakundeei ere.
205. Hau da, eginkizun edo funtzioen aldetik parekatzen direla federazioak eta erakunde antolatzaileak, nahiz eta federazioek bakarrik ahal duten herri-administrazioaren laguntzaile gisa jardun, ordezkotzaaren bidez egikarituta izatera administrazio-boko funtzio publikoak (EAEKLren 15.3 artikulua), horien artean baitaude dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea [EAEKLren 25.1.c) artikulua].
206. Horrenbestez, berriz ere aztertu behar da aukera hori, agintaritza publiko baten mendeko baitira kirolean dopina jazartzeko kontrolak egiteko eskumena eta diziplina-prozeduretarako eskumena. Zinezko esku-hartze publikoak dira, eta zehapenerako araubide publiko baten mendeko administrazio-zehapenak.
207. Kontrolari dagokionez, DLOren 11.4 artikulua izatea profesionaleko lehiaketa ofizialektarako formula bat paratu du, erakunde antolatzaileetara ere ondo hedatu daitekeena; hartara, Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren —edo federazioaren— eta dagokion erakundearen arteko hitzarmen batean finkatuko lirateke kontrolak egiteko modua, baldintzak eta finantzatzeko bideak, betiere oinarri sendotzat hartuta Dopinaren aurkako Euskal Agentziari, edo dena dela kirol-federazioari, bakarrik dagokiona diziplinaren alorreko azken erantzukizuna, berezko edo legez ordezkaturako ahal publikoaren poderioz.
208. Zehapenera dagokionez, berriz, Agentziak berak edo kirol-federazioetako diziplina-organismoek, Agentziak eskuordetza emanda, ebatzi beharko dituzte espedienteak; izan ere, erakunde antolatzaile batak ezin du zehapenok ezarri. Estatuaren *ius puniendiari* dagozkionez. Horrenbestez, beharrezko zuzenketak egin beharko dira aurreproiektuaren beste mezu batzuetan (32.5 artikulua, 38. artikuluanen 1. 2. eta 3. paragrafoak, eta 39.6 artikulua).



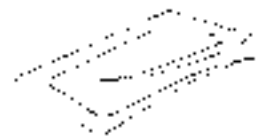


E) Dopinarean aurkako Euskal Agentzia:

209. Aurreproiektuaren 11. kapitulua (10. artikulutik 12.era) Dopinarean aurkako Euskal Agentzia sortzeari buruzkoa da: administrazioako erakunde autonomoa da, berezko nortasun juridikoa eta erabateko gaitasuna ditu, eta herri-administrazioekiko inongo loturarik gabe betetzen ditu bere eginkizunak.
210. Administrazioako erakunde autonomoa den aldetik, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratua onartzekoak (EONAE), ezarritakoaren arabera eratu da, hauxe xedatu baitu legegintza dekretuaren 9. artikulua: erakunde autonomiak duten erakunde-mallako enteak dira, Euskal Autonomia Erkidegokoak eta nortasun publikokoak; haien helburua erkidego horren aginpidepeko aktibitateak egitea da, deszentralizazio erregimenean beti ere; eta zuzenbide publikoaz araututa daude.
211. EAEEn 10.2 artikulua herri-administrazioei izatera orokorrekin aitortu dien autoantolamendu-ahalekietan onartzen da erakunde edo organismo horien sorrera, eta aurreproiektuak berak taxutu du aipatzen ari garen organoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dopinarean alorrean dagozkion jarduerak garatzeko funtsezkoak.
212. Hala ere, hasiera-hasieratik ematen du agentzia aurreproiektuak aipatu ere ez duela egiten Agentzia noia txertatzen den autonomia-erkidegoaren Administrazioan. Gauza bat da mendekotasun hierarkikorik ez izatea, erakunde autonomo independente sui generis gisa eratu balture, sorrera-legeak definituko dio-eta araubide juridiko berezia; eta besterik da Jauraritzairen sail bati ere ez atxikitzea.
213. Egia esan, zuzendariaren eskaturua finkatu dutenean zehaztu dute erakundearen independentzia, zuzendariak "bere eginkizunak askatasun osoz eta objektibotasunez beteiko ditu, eta eginkizun horiek betetzean ez da ezin aginduren menpe egongo" (11.3 artikulua).
214. Agentziako zuzendariak baditu esaugari batzuk, erakundeari eman dioten autonomia inbertzen dutenak Eusko Jauraritzairen dekretu bidez izendatuko dute, lau urterako (11.2 artikulua), eta izendatu zuen Jauraritzailek nolabait askatzeko bera emango dio horrek; goi-karguduna izango da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioako goi-kargudunaren bateraezintasunen araubidearen menpe egongo da (11.5 artikulua); ez dago kargutik kentzeko askatasun osorik, arrazoi jakin batzuegatik bakarrik utzi behar izango duenako kargua (11.4 artikulua).
215. Hala ere, kargua utzeko arrazoen artean, ustekabeak, "Jauraritzaile Kontseiluak kargutik kentzea erabakizteagatik" ageri da (11.4.b) artikulua), eta horrek edukiz husten ditu itxura batean eman nahit zizkieten bermeak.



216. Nolanahi ere, ez dago organoa independentziaz jantzi beharria dakarren arrazoirik: inspirazio-iturritzat Dopinarekin aurkako Estatuko Agentzia hartu badu ere, ezin esan agentzia hori independentea denik, estatu-agentziak erregulatzeko legeriaren mende dagoelako. Egin-eginean ere, Kirol Kontseilu Gorenaren bitartez, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioari dagukio estatu-agentzia horren zuzendaritza estrategikoa eta jardueraren emaitzen ebaluazioa eta kontrola gauzatzea, kudeaketa-kontratu baten jarraipenaren eta kontrolaren bidez (agentziaren estatutuen 4. artikulua, otsailaren 8ko 185/2008 Errege Dekretuaren bitartez onartu baitzituzten). Estatu-agentzia horrek prestatuko du kontratua, eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak, Herri Administrazioetakoak eta Ekonomia eta Ogasunekoak onartuko dute, batera emandako agindu batean (estatutuen 19. artikulua).
217. Are gehiago, erakunde autonomoa denez, eta lantegi nagusitzat duenez dopinarekin alorreko arau-hausteen jazarpena, agintea erabiltzea dakarren administrazio-poliziaren zeregina beteta, ez du ematen agentziaren administrazio-jarduerak eraginkortasun edo zilegitasun handiagoa izango duenik lurralde-administrazioetik (horren zati bat baita) bereizita erabiliz gero.
218. Guse 53/2010 inbazean esan genuenez, gure ordenamenduak ez du definitu erakunde autonomoen gobernu-organoen ereduak, Jauriaritzaren Legeak eta EONALEk ez baitute ezarri: egln-eginean ere, erakunde bakoitza sortzeko legeak eta horiek garatzeko egitura organikoak deketuak formula desberdinak erabili dituzte.
219. Erakunde autonomoak osatzen dituzten organo administratiboen arteko desberdintasunak desberdintasun, behaketa empirikotik atera daitezke horien barne-egituraren ezaugarriok: (i) kide antzeko organo gorena, zenbait administrazio publikoren ordezkariak hartzen dituen eskualdi, eta gizarte-interesen ordezkariak batzuetan; (ii) pertsona bakarreko organo exekutiboa, zuzendari baten bitartez.
220. Administrazioaren goi-karguduna izan ohi da zuzendari hori, eta Jauriaritzaren Legearen 31.2 artikulua inbazean bereganatzen du erakundearen gidaritza.
221. Batzorde honek behin eta berri esan duenez, erakunde autonomo baten antolamenduari buruzko funtsezko alderdiak ezarri behar ditu sortzeko legeak, erregulamenduz garatuko badira ere. Oraingo honetan, hala ere, aurreproiektuak ez du arau-trinkotasunik aski.
222. Aurreproiektuaren arabera, Agentziaren organo dira zuzendaria, aholku-kontseilua, Erabilera Terapeutikoko Baimenetarako Euskal Batzordea (COVAT) eta Agentziaren estatutuan ezartzen direnak.
223. Bada, organoen eskumenak eta eginkizunak begiratzen badiegu, ez dituzte gehiegi raxutu. Zuzendariak Agentzia zuzentzen eta ordezkaltzen du (11.2 artikulua).



Aholku kontseiluaren zeregina da zuzendariari aholkuak ematea, eta zuzendariak entzun egin beharko dio, "aholku-kontseiluak bere zereginak betetzean, ezer proposatzen baidio" (11.3 eta 6 artikulua). COVAUT delakoari dagokio, azkenik, erabilera terapeutikoko balmenak ematea edo ukatzea (12.1.w artikulua), organikoki Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren menpe egon arren, autonomia funtzional osoz beteko baititu bere eskumenak (11.7 artikulua).

224. Kide anitzeko organoen osakerari dagokionez, aholku-kontseiluko kideen kopurua ezarri du, baita horiek izendatzeko modua ere, eta hauxe zehaztu: aholku-kontseiluko kide izateagatik ez dela ordainsaririk egongo, baina, hala ere, batzorde horretan parte hartzen duten kideek gastuak eta dietak jasotzeko eskubidea izango dutela. Aldiz, ezertxo ere ez dute zehaztu COVAUT horri dagokionez, osakerari eta halakoei dagokionez.
225. Antolamendu-definizioa urria izanagatik ere, kontrakoa gertatzen da agentziaren jardueraren araubide juridikoari ekiten. Kontzeptu-ikuspegirik erakunde autonomo administratiboa denez, zuzenbide publikoaren menpe dago, eta arauzat hartu behar ditu hainbat lege, prozedura, ondarea eta kontratazioa, funtzio publikoa eta aurrekontu-araubidea (liziplintzen dituztenak, alegia. Ez dago gehiago sakondu beharrik.
226. Agentziaren eginkizunei dagokionez, era orokorrean adierazten dira 10.1 artikuluan azkeneko erroaldetari. "Agentzia hori da dopinari aurrea hartzeko eta dopina kontrolatu eta zigortzeko aldiin Eusko Jaurlaritzan dagozkion ekintzak disonatu eta gauzatzeko dituen erakunde publikoa"; eta zehatzago 12.1 artikuluan, 24 letrako zerrenda jarri baitute, hurrengo sarrerarekin: "Dopinaren aurkako Agentziaren eginkizunak dira, dopinari aurrea hartzeari eta dopina kontrolatu eta zigortzeari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen barruan, lege honetan ezarritako beste batzuen gain, honako hauek". Zehaztutzeari ari zailtasun handiagoa emateko, hauxe aurreikusi du 12.2 artikulualak: "eginkizun honet Dopinaren aurkako Estatu Agentziari espartu berberetan dagozkion eginkizunen kalterik gabe ulertuko dira".
227. Hauxe iradokitzen du Batzordeak: 10.1 artikuluan idatzkera araztea, eta Eusko Jaurlaritzaren ordez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra jartzea; izan ere, ez baita administrazio hori nahiastu behar administrazioa zuzentzen duenarekin; egin-eginean ere, EAEren 29. artikulua eta Jaurlaritzaren Legearen 16. artikulua eta hurrengo batzuek jasotako gobernu-eskumenak ezin baitzaizkio Agentziari esleitu.

228. Azalpen edo oharpen hau dakar 12.1 artikulua: "dopinari aurrea hartzeari eta dopina kontrolatu eta zigortzeari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen barruan". Baina, kendu egin daiteke, 10.1 artikulua jada adierazia erreplikatzen duelako.



229. 12.2 artikulua ere kendu beharko litzateke, legegile autonomikoari ez baitagokio estatu-organo baten eskumenak zaintzea.
230. Autoreproiektuaren 12.1 artikulua dakarren eginkizun-zerrendari begiratuta, eginkizun hauek gerta daitezke errepikakori: a) ("Dopatzeari buruzko legeria betetzen dela zaintzea") eta k) ("Dopin-kontrolak egiteko indarrean dauden arauak zehatz betetzen direla zaintzea, hai lehaketetan bai lehiaketetarako kanpo"), eta letra hauetan aurreikusitakoak ere: l) ("Dopin-kontrolen urteko programa bat egitea eta, hala badagokio, programa hori gauzatzea eta zaintzea. Programa horren barmen, lehiaketan bertan eta lehiaketarik kanpo Agentziak betarik eskatuta egindako kontrolak sartuko dira. Nolanahi ere, honek garrantzitsua da, Euskal Autonomia Erkidegoko beste erkunde batzuek Euskoan beste kontrol batzuk egiteko ahal izango dituzte"), eta j) ("Dopin-kontrolak zein lehiaketa eta probatan diren nabarazteko zehaztea, eta nabarazko dopin-kontrolak ezartzea lehiaketetarik kanpo Euskal Autonomia Erkidegaren esparruan").
231. Hauxe ere adierazi behar: "lotura bereziko harremanak duten gainerako erkundeek" diziplina-prozeduretan eskumena edukitzeari eutsiz gero (38.3 artikulua), 12.1 artikuluko b) letrak ("Diziplina-espedienteak izapidetu eta erazteko baldin eta kirol-federazioek ez badituzte espedienteak honek epearen barmen ebatzi") agertu beharko litzatekeela eskuordetzea ezartzearen aukera, espedientea bi hilera gehienezko epean izapidetzen ez bada.
232. Azkenik, berrikusi egin beharko litzateke aipatu 12.1 artikuluko i) letrak xedatu duena ("Kontrola egiten zaen kirolaren erugabetasun-presuntzioa babestea, harik eta eskumena duen jurisdikzioak zehatzeko erabakiren bati hartu arte").
233. Eskubide subjektibo publikoa baita, bi planotan eragiten du kirolariaren erugabetasun-presuntzioak. Konstituzio Auzitegiaren irailaren 24ko 109/1986 epaiaren arabera, *mutatis mutandi*, prozesuz kanpoko egoetarako balio du, eta eskubide bat osatzen du, hots, inor delitu edo antzekoen egilezat hartua edo tratatua ez izatekoa, eta berez dakar beste eskubide bat, alegia, delitu-eginzori lotzen zaizkien ondorioak edo eragin juridikoak ez aplikatzeari edonolako harreman juridikoetan. Baina, batez ere, prozesuaren eremurako balio du, baita zehapen- edo diziplina-prozedura administratiboaren barrurako ere (FKren 24.2 artikulua baldintzatu egiten baitu *ius puniendi*aren egikaritzea, alor guztietan; denon erakusgarri, Konstituzio Auzitegiaren apirilaren 26ko 76/1990 epaiak), eta hauexek esan nahi du: inor ezin dela zehatu karguko frogajarduerarik gabe (behar besteko bermeekin egin beharko baita), eta eruduntasuna zentzuz eta arrazoiz ondorioztatzea beharko dela karguko frogajardura horretatik.

234. Uste izatekoa denez, eskubidearen lehen planoak edo aldea baliarazi nahi izango du autoreproiektuak, baina eskumena duen administrazio-organoak zehapena ezartze gero —eskubidearen bigarren planoak edo aldeak eskatzen dituen bermeekin ezarri ote—, ez dago jada indarrean: hortaz, ezin du irain eskumena duen jurisdikzioak



bere iritzia eman arte, aurreproiektuak hala badio ere. Hobe luke aurreproiektuak eskubidea eranskirik gabe ezartzea, eskubidearen txuak berak zehazten dituelako eskubidearen berezko mugak.

235. Beste alde baterik adierazi behar dugu, nahiz eta Batzorde honi ez egokitu baloratzea Dopinarek aurkako Euskal Agentzia sortzea justifikatzen duten aukera-arrazoia, espedienteak erakutsi eta aurreproiektuaren zioen adierazpenean jasotzen baitira (dopinaren aurkako agentzia nazionalak sortzeko joera nagusitu dela, askoz ere espezializatuagoak daudela zeregin jakin batzuetarako, eta, horrez gain, independenteak direlako; DLOk berak autonomia-erkidegoetan dopinarek aurkako agentziak sortzea aurrekusten duela, eta Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura Batzordearen 2006ko otsailaren 22ko akordioaren berrera), behar bezala hartatu behar direla arrazoiak, kontuan hartuta sortze-erabakiak dakartzan ondorioak, eta erabaki horren inguruabarrak, gastu publikoari eutsi behar zaion sasoi honetan.
236. Dopinarek aurkako Euskal Agentziak, eratzen eta benetan lanetan hasten denean (bigarren xedapen uragankorra), bere gain hartuko ditu Kultura Saileko Kirol Zuzendaritzak gaur egunera arte dopinarek alorrean garatu izan dituen eginkizun exekutiboak, baita Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroa izeneko administrazio-zerbitzua ere.
237. Berdiktan esana dugunez, administrazio- eta egitura-beharrizanak emendatzea dakar erakunde berri bat sortzeko. Oraingo honetan, Agentziak bere gain hartu beharko ditu Agentzia eratu arte Kultura Saileko Kirol Zuzendaritzak edo saileko organo erkideek bereko dituen batzuk: langileen kudeaketa, lanpostuak betetzea, kontratazioak egitea edota berdintasunaren, euskararen eta alarren alorreko zeharkako politikak erantzutea.
238. Memoria ekonomikoak egitura oso sinplea aurreikusi dio Agentziari (goi karguduna, medikua, aholkulari juridikoa eta administrazioa), eta 458.984,71 €-ko aurrekontu-zana urteko. Horren aurrekontu-eragina apaltzat jo badaiteke ere (300.000 € kalkulatu dira kostu gehigarritzat), nekez ikus daiteke, eta berean, dopinarek kontrako borrokaren alorreko erakunde-erantzuna funtsean hobetu daitekeenik.
239. Batzordeak, beraz, bat egiten du Kontrol Ekonomiko Bulegoak adierazitako eragozpen onarndunekin, eta egoki deritzo hauxe gogoratzeari: Jauriaritzaren Kontseiluak oraintsu, 2011ko ekainaren 28ko billean, onartu dituela Euskal Autonomia Erkidegoaren 2012. urterako Aurrekontu Orokorrak egiteko jarraibide ekonomikoak, gastua murrizteko neurriak hartzei buruzkoak. Hauxe ere erabaki du, besteak beste: "Ezin izango da organismo autonomo, zuzenbide pribatuko erle publiko, sozietate publiko, fundazio edo partzuergo berririk sortu. Sortzeko erabakia 2011ko abenduaren 31rako onetsita zutenak bakarrik sortzeko dira".



E) Erabilera terapeutikoko baimenak:

240. Xedapen baten baimo gehiagotan ari da aurreproiektua erabilera terapeutikoko baimeneri buruz, aurreproiektuaren zioen adierazpenak gai horri erantzi dion garrantziarekin bat etorrira: "Erabilera terapeutikoko baimenen bidez gertatzen ari diren iruzur garrantzitsuari aurre egiten salatu da legera, izan ere, gero eta garbago ikusten da eragotzi behar diren emazteko aukera biltzen ari dela erabilera terapeutikoa".
241. Ordenazio honek, alabaina, ez du argi ikusten uzten zer araubide juridiko nahi duten garrantzizko gai hori arautzeko.
242. Lehenengo eta behin, hauek aipatzen ditu aurreproiektuak: erabilera terapeutikoko baimenak, eta glukokortikosteroideak eta pareko araubidea duten beste substantziak erabiltzeko adierazpenak.
243. Aurreproiektuaren 23.6 artikuluan arabera, erabilera terapeutikoko baimenak eskuratzeko ezarritako betekizunak ez betetzeagatik edo hausteagatik izango dute erantzukizuna kirolariak eta haien ingurukoak, bai eta indarrean dagoen araudian glukokortikosteroideak edo beste gai batzuk erabili izanari buruzko adierazpenak egiteko ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik edo hausteagatik ere: hain zuzen ere, 24.1.e) artikulua jo baitu hori arau-hauste oso larritzat, nahiz eta aurreproiektuak betebeharrak horiei buruzko erregulazio materialik jaso ez duen.
244. Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioak II. eranskinean sartu ditu helburu terapeutikotarako erabiltzeko baimenak emateko arauak. Konbentzioaren ondorioetarako, erabilera terapeutikoko baimen batek "debekatutako substantzia edo debekatutako metodoa" erabiltzea onartzen dio kirolariari. Deklarazio edo adierazpenak dagokienez, 9. puntuak dio substantzia eta metodo debekatuen zerrendan ez direla jada ageri erabili ahal izateko erabilera-deklarazioa eskatzen duten substantziak edo metodoak, eta, beraz, ez dela beharrezkoa erabilera-deklaraziorik aurkeztea lorokorrean eta Espainiako Estaturako 2011ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen erredakzioaren arabera, Kanpo Arazotarako eta Lankidetzarako Ministerioaren 2010eko abenduaren 22ko Ebazpena).
245. Batzordearen ustez, aurreproiektuak dioena eta Konbentzioak dioena uztartu beharra dago, eta komeniko litzateke aurreproiektuan sartzea erabilera terapeutikoko baimenen definizio hori gutxienez, hargatik galarazi gabe legeak erregelamendura jotzea erregulazio substantibo onduagoa egite aldera.
246. Izan ere, ordenazio adjektiboa, prozeduraren alorrekoa ezarri baitu aurreproiektuak, eta erabilera terapeutikoko baimenak baino ez ditu jorratu lezertxo ere ez baitu arautu glukokortikosteroideak edo beste substantzia batzuk erabiltzeko deklarazioei buruz), halako zehazgabetasun batez bada ere.



247. Aurreproiektuaren 12.1.w) artikulua araberaz, Dopinarekin aurkako Euskal Agentziaren eginkizunetako bat da "erabilera terapeutikoko baimenak ematea edo ukatzea, erabilera terapeutikoko baimenen euskal batzordearen (COVAT) bidez". Aurreproiektuaren 15.14 artikulua bere aldetik aurreikusi duenez, "erabilera terapeutikoko baimenak emateko edo ukatzeko erabakiaren aurkako inpugnazioa aurkeztu ahal izango zaien Dopinarekin aurkako Euskal Agentziaren zuzendaria".

248. Hala ere, aurreproiektuaren 6.1.o) artikulua eta 7.n) artikulua araberaz, Euskadiko kirol-erakundeen eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsonen eta erakundeen erantzukizuna da "erabilera terapeutikoko baimenak eta horren ondoriozko kirol-bajak nolabait emari diren eta noia betetzen diren berri kutsia"; eta 15.12 artikulua dio Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordeak (COVAT) berrikusiko duela erabilera terapeutikoko baimenak edo adierazpenak behar bezala jardu edo aplikatzen diren.

249. Gure ustea da 6.1.o) eta 7.n) artikuluek berrikustea aipatzen dutenean era mugatuagoan aipatu nahiz dutela "egiaztatuko" jardura bat, eskumenia duen organoari eskatzeko, hala bada, baimenak edo adierazpenak errebokatzea. COVATen berrikuspenak, aldiz, baimen-adierazpenok Indarrak gabe uzteko aukera emango dio organo hori (dagozkion berriekin beti ere), organo horrek ematen baititu.

250. Aurreproiektuaren 15.8 artikulua xedatu duenez, bestalde, erabilera terapeutikoko baimenen kopia bat —legearen esparruan emandakoa—, substantzia jakin batzuk erabili edo hartu izanari buruzko adierazpenak eta dagozkion dokumentazio osagarriak Dopinarekin aurkako Euskal Agentziara bidali behar dira, erregistratu daitezkeen. Alferreko aurreikuspena ematen du, COVATek ematen diuelako baimen horiek —eta ez dago aurreikusita autonomia-erkidegoaren eremuan beste erakunderen batek ematea—, Agentziaren organo batek alegia. Beraz, ez du beharrezko ematen ezer bidaltzerik, ofizioz ere erregistratu daitezkeelako kontu horiek.

G) Intimitate pertsonalerako eskubidea eta datuen babesa:

251. Datuen Babeserako Euskal Bulegoak zorrotz aztertu ditu aurreproiektuaren xedapenak, eta ez ditugu errepikatuko bulego horrek bere txostenean eskubidearen taxurte konstituzionalari eta osasun-datuei zor zaien tratamenduei buruz egindako gogoetak.

252. Batzordeak ez ditu jorratuko, ezta ere, aurreproiektuak eman dituen beste eduki batzuk, DLOk xedatuaren arabera ere alegia; izan ere, osasuna babesteko eta kirolean dopatzeari aurre hartzeko Lege Organikoaren aurreproiektuari buruz Datuak



Babesteko Espainiako Agentziak prestatu txostenean (2005eko urriaren 25ekoan) iradokitako erredakzioen ondorio baitira.

253. Gauzak horrela, bi alderdi berrii emango diogu arreta, berriaz aztertu beharko lirateke eta, gure ustez.
254. Lehenik eta behin, DLOren 8. artikulua ongi bereizi ditiu dopin-kontrolak, eta osasuna babesteko kontrolak eta gainerako jarduerak. Dopin-kontrolen funtzionalitatea oso zehatza da: dopina eragiteko moduko debekatutako substantziarik dagoen egiaztatzea, edo arauz kanpoko metodorik erabili den egiaztatzea. Osasuna babesteko kontrolak eta gainerako jarduerak, aldiz, osasun-politikaren barruan kokatzen dira, kirol-jarduerak osasunaren kontra eragiri ditzakeenak hobetu, kontrolatu eta prebenitzeko.
255. DLOren bosgarren xedapen gehigarriak adierazi duenez, lege horren 8.2 artikulua (osasun-kontrolak) aurreikusitakoa gorabehera, enpresek kirolari profesionali osasun-kontrolak egiten dizkietenetan, laneko arriskuen prebenitzarako arauak aplikatuko dira.
256. Aurreproiektuaren 17.4 artikulua, DLOtik aldentu, eta beste helburu bat gehitu die osasun-kontrolari: "dopinaren eta osasunaren alorreko legetik eraturitako betebeharrak kirolariak bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak".
257. Aurreproiektuak azalpen-zatian ohararazi duenez, gainera, Estatuko legerian ez bezala, kontrol horiek ez dira lan-harremanen barruan sartzen. Hona ateratzen ondorioa: "Lege honek kirol-erakunde bori ematen dio eskumena osasun-kontrolak egiteko erakundeko kirolariel, lan-harremana izan edo ez izan. Atzerapauso nabarmena izango litzateke federazioei, eta gainontzeko kirol-erakundeek betien kirolariel osasun-kontrolak egiteko aukera ukatzea, lan-harremanik ez egotea arrazoitzat hartuta".
258. Osasun-kontrol horien ondorioei dagokienez, kontrolen emaitzek "ez dute diziplina- edo administrazio-zehapenik ekarriko. Hala ere, kontrol horien ondorioz, kirol erakunde boriel ezarritako kirol eta lan arloko neurriak ezarri ahal izango zaizkile kirolariel, eta dopin-kontrolen plangintza egiteko balio ahal izango dute".
259. Gauzak horrela, hemendik bertatik aurreratu dezakegu nekez beteko dutela esleitu zaizkien helburu berria —dopinaren alorreko betebeharrak konplitzen direla kontrolatzea—, baldin eta, behin arau-haustea egiaztatuta —substantzia edo metodo debekatu edo baimendu gabekoak erabili edo kontsumitu direla ikusita—, zigor edo zehapenik gabe gertatzen bada.

260. Balizko inkongruentzia hori baloratzera sartu gabe ere, berriaz ere adierazi behar da helburu hori aldentu egiten dela DLOk osasun-kontrol horiek arautu dituen



modutik, kirolarien osasuna begiratzeko esparru arruntaren barruan kokatu baititu, kirol-jardueraren ondoriozko arriskuari begiratuta, eta kirolariaren alde, edo, gehienez ere, dagokion kirol-diziplina edo -modalitatean dihardutenen interesen alde, orokorrean

261. Enpresaren barruko osasun-kontrolen alorrean, Konstituzio Auzitegiaren 196/2004 epaia, azaroaren 15ekoa, irakurrita ateratzen denez —exegesi zehatz-mehatza egin baitzuten Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen (LAPL) eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren (GSLO) aurreikuspenei—, azterketa medikoak, oro har, langileak baimena emanida bakarrik egin ahal izango dira, batez ere EKren 18.1 artikulua bermatu intimitate pertsonalerako eskubideari eragiten zaiolako. Azterketa horietatik atera daitezkeen datuak bakoitzaren barne-intimitatearen barrukoak dira, eta alpatu oinarritzko eskubidean sartzea litzateke datu horiek argitara ematea. Azterketa horien emaitzak, era berean, pertsonaren osasunari buruzko datuak dira, eta EKren 18.4 artikulua dakarren datu pertsonalak babesteko eskubidearen alderik ere zaintzen dira

262. Hala ere, subjektuaren determinazio askearen printzipio horrek baditu salbuespenak, betebeharrak batzuk ere tartekatzen direlako, baina "legezko mugak (subjektuak bere intimitatearen beretzko eremuaren gainean duen disposizio askearen salbuespenak, LAPLren 22.1 artikulua bigarren tertziaduan aurrerakusi dituenak) lotu egiten zaizkio, alde baterik, langileen edo hirugarren batzuen osasunerako arriskuaren benetakotasunari, ala, bestetik, sektore jakin batzuetan, berariazko arriskuen aurreko babesari eta arriskugarritasun berezia duten jardueren aurreko babesari (arriskuarekiko oin minberak diren enpresak eta jarduerak baitaude, jakina, eta, beraz, arriskuak bereziki eragindako langileak —272/1998 KAA, abenduaren 3koa—). Aldez, objektibatuzko moduko eta zinezko arriskurik ezaren, ezin da nahitaezkerotasunik ezarri langilearen beraren osasuna besterik ez dagonenean arriskuak, langileak, esan gabeenez osotasuna duela ere osasunaren zaintzari dagokionez, eta bere esku duela azterketa medikoak egitea ala ez egitea, erabaki horietarako egoki irizitako inguruabarrak eta balnorioak aintzat hartuta".

263. GSLOren 196.1 eta 2 artikuluari dagokionez, zailentzarik gabekoa da Konstituzio Auzitegiaren ondorioa:

"lan-bereketanaren barruko azterketa medikoa ez da, beraz, enpresaburuak langileen osasuna naherara kontrolatzeko tresna, eta ez da, ezta ere, enpresaburuaren analisia bat, enplegatuen lasbide-gaitasuna edo egokitasun psikofisikoa egiaztatzea, langileak imutatzeko edo antzeko helburuarekin. Aitzitik, langileak bere osasuna zaintzeko duen eskubidea jama behar zaio onartu. Eta adierazhako salbuespenetan baino ezin daiteke mugatu eskubide hori, alpaletako betekizun eta mugekin betiere. Liburtibilduta, horiaz, araua da —eta konstituzio-oinarri argia du arau horrek, ikusita zein eredu lotuta dauden azterketa medikoak eta oinarritzko eskubideak, intimitate pertsonalerako kasu langileak



libreki, borondatez eta informazioa haitu ondoren ematea baimena, osasuna an-
arriskuetatik zaindu eta babeste aldera”.

264. Testuinguru honetan, eutsi egin behar zaio dopin-kontrolen eta osasun-kontrolen arteko bereizketari, eta ez dira elkarren trukagarri bihurtu behar. Osasun-kontrolak dagokionez, borondatezkoak izango dira, oro har, eta nahitaezko azterketa medikoak bakarrik ezarri ahal izango dira kirolarien edo hirugarren batzuen osasunerako arrisku-egocra objektiboetan, edota kirol-diziplina edo -modalitate jakin batzuetan, berariazko arriskuak, eta beraz, kirolariak kalteak jasateko arrisku bereziak, diruztenetan. Eta irizpide horiek baloratu behar dira, baita ere, EAEKLen 83.1 artikuluko berriak aurreikusi duena garatzen denean (laureproiektuaren azken xedapenetarik bigarrenak emari baitu emedakzio berri hori).
265. Baztertu egin behar da, baztertu behar denez, osasun-kontrolak beste helburu batzuetara bideratzea (dopinari aurre egitea, adibidez): batez ere, helburu horiek lortzeko beste modu batzuk ere ezarri direnean, oinarritzko eskubideari mugak jarrita.
266. Eta objektiboak agertu behar ditugu, baita ere, 46. artikuluko kirolariaren osasun-txartelaz dakarren erregulazioa dela eta.
267. Kasu honetan ere gertatu da DLOk paratu duen tresna baren bizdefinizioa, kirolariaren osasun-txartelarena alegia, DLOren 49.1 artikuluko bigarren letrazaldetaren arabera “kirolariak eta hura aratzeaz arduratzen den osasun arloko langileak ahalik eta informazio kliniko onena izatea, gaitz edo gaixotasunen bat izatez gero, zer tratamendu den egokiena erabakitzeko” baitu helburu. Izan ere, beste helburu hau gehitu diote: “dopinaren aurkako borrokan eraginkortasun handiagoa izatea”.
268. Osasun-txartel horrek honako hauei guztiei buruzko informazioa jasoko du: azterketa medikoak, osasun- eta dopin-kontrolak —kasuan kasuko lizentzia eskuratzen duen unetik kirolariari egiten zaizkionak—, haien emaitzak eta medikuak hartzen dituen erabakiak, hain zuzen ere, kirolariaren osasun-laguntza egokia izan dadin kontuan hartu beharrekoak. Eta baita, horrez gain, kirolariak eskuratutako erabilerak terapeutikoko baimenei buruzko datuak, eta kirolariaren lan-bajel eta kirol-bajel buruzkoak.
269. Helburu berriarekin bat etorrita, hauxe xedatu du 46. artikuluko 5. paragrafoak: dopin-kontrolaren alorrean, ez dela zilegi kirolariaren osasun-txartelako datuak eskuratzea, haren baimenik gabe, baina “aurreko gurabuhera, baimena ematean dago egunez gero, legearen 24.1.c artikuluan xedatutako beste zehazki informazioko betebeharrak ez betetzea izagokien zehapen-tratamendu bera emango da”.
270. Euskal kirolariak ezarritako betebeharrak dugu aurrean, eta muga bat ezarri zaio haien datuak babesteko oinarritzko eskubideari; izan ere, osasunari buruzko datuen



tratamendua ezarri da, eta datuok dopin-kontrolerako zereginetan diharduten langileei jakinaraztea, lehiaketaren barruko zein kanpoko dopin-kontrol baten barmuan antza —nahiz eta aurreproiektuak beren-beregi ez esan—.

271. Oraingo honetan, datuak jakinaraztea interesatuaren baimenaren mende jarri badute ere, argi dago, tratamendu terapeutikoei buruzko informazioaren kasuan bezala (13.7 artikulua), baimen edo onarpen hori ez dela librea, baimena ukatuz gero zehapena egongo litzatekeelako.
272. Batzordearen ustez, kirolariaren beraren mesederako denean, ahalk eta sorospenik onena jasotze aldera, osasun-txartelak dakarren datu-tratamenduaren zifegitasun konstituzionala onartzeak (hainbat iturri baitago datuok jasotzeko: kirolaria, osasun-langileak, eskumena duten diziplina-organismoak, eta, hala bada, lizentzia zer taiderekin sinatu duen, bada talde hori) ez du esan nahi beste helburu batzuk erdiesteko baliabiderik, dopinaren aurkako borrokaren eraginkortasun handiagoa konparazioz, baldin eta ez badago datuen isilpekoasunerako oinarritzko eskubideari gailentzen zaion interes orokorrik.
273. Eta arrazoi bat baino gehiago ekar daiteke oinarritzko eskubidearen sakrifizioaren arazopizkotasuna zalantzan jartzeko. Jakina denez, eskubideari eragin nahi bazaio, heinekotasun- edo proportzionalitate-printzipioa era kalitatearena errespetatu beharko dira, indarrean baltaude datuen babesaren alorrean, DBLOren 4.1 artikulua dionaren ildotik ("izaera pertsonaleko datuak tratatzeko bi daitezke bakanik, bai eta tratamendu horren mende jartzeko ere, datu horiek egoki eta biderzak izateaz gain, gehiegirik ez direnean, datu horiek zein esparrutan eta zein xedetekin lortu eta erabiltzeko begira. Gainera, esparru eta xedeak zehatzak, argiak eta legitimak izan beharko dira").
274. Bada, txartelean jasotako datuak diziplina-organismoetara lagatzea intenbide egokia denentz baloratzen, kontuan hartu beharko dira, nahitaez, datuen izaera, eragindako interes publikoa, eta esku-hartze publikoa nola garatzen den kirol-dopinaren esparruan.
275. Batzordearen ustez, alde batera utzita txartela ezartzeak estatu-eremuan eta eremu autonomikoan helburu desberdinak izatea posible ote den, zaila da baiesten dopinari eraginkortasun aurre egiteko beharrezkoa denik, oinarritzko eskubidea murrizteko neurria Konstituzioaren ikuspegiatik zlegia dela esateraino.
276. Eta bada hasierako argudio bat, alde batera utzi ezin duguna, DLOx mekanismo egokiak, paratu dituzte, zalantzarik gabe, eta horien artean ez da aurreproiektuak abarazi nahi duena ageri. Are erabakigarriagoa oraindik: ez zela funtsik edo oinaririk ikusten kirolariaren pribatasunaren barruko datuak osasun-txartelaren bitartez eskuratu beharrik, arau-hausteak jazarri eta zigortzeko datuak beste iturri batzuetatik eskuratzen direnean, oinarritzko eskubideari garrantzizko mugak ezarrita.



era berean. Aipatu iturri horiek dira, besteak beste, dopin-kontrolak jasan beharra (13.1 artikulua), kokapenari buruzko betebeharrak (13.6 artikulua), tratamendu terapeutikoei buruzko informazioa eman beharra (13.7 artikulua), erregistro-lliburuak eman beharra (15.1 eta 7 artikulua), edota erabilera terapeutikoko balmenen eta kirol-bajen ondoriozkoak, eskatu, jakinarazi eta erregistratzen direnean (15.8 artikulua eta hurrengo paragrafoa, eta 16. artikulua).

277. Beste alde batetik, 46.2 artikuluko helburu horri eruziz gero, baloratu egin beharko litzateke ea ez ote den DBLOren 4.5 artikulua aitortutako eskubidea urratzen, izan ere, txartelaren bidez ez baitira ezereztan kirolari bati lotutako datu pertsonalak (debekatutako substantziaren bat zegoen ala ez, edo erregelamenduz kanpoko metodoren bat erabili izana), hala egokituz gero zehapenen bat ezartzeko jaso edo erregistratu zirenak, eta helburu horretarako jada beharrezko edo egoki ez direnak (behin preskripzio-epaia bereta, edo kasuan kasuko zehapen-prozeduran, diziplina-prozeduran edo auzi kriminalean ebazpen irmoa ematen denean).
278. Laburbilduta, ez dugula justifikaziorik ikusten (edo guxienez ez dute espedienteen halakorik erakutsi) kirolariarenak izaki kontuz erabili behar diren datuak jakinarazi beharra ezartzeko, eta DLOk dagoeneko aurreikusi duen mekanismoez bestelako baten bidez kirolariaren eremu pribatuari saritzea.

H) Bestelakoak:

279. Garrantzi txikiagoko oharra plazaratuko ditugu jarraian, arau-mezu jakin batzuk hobeto ulertzea errazteko, segurtasun juridikoaren mesedetan, eta erregulazio koherenteagoa ezartzeko, eragile edo operadore juridikoek interpretazio desberdinak egiteko arriskua gutxiagotzearen.
280. Kirolarien laguntzaileak alpatzen ditu 4. artikulua. Geroa, ordea, kirolarien inguruko pertsonak kontzeptua erabiltzen da, eta hor sartzen dira, gutxienez, aurkitzeko moduan egotearen betebeharrari dagokionez, taldeetako langileak, entrenatzaileak eta zuzendariak (13.6 artikulua); eta informazio-betebeharrari dagokionez (informazioa eman behar dute eta kirolariak zer tratamendu terapeutiko egiten ari diren, nor diren horien erantzule, eta tratamenduak zer hartzen duen bere baitan), berriaz, entrenatzaileak, medikuak eta gainerako osasun-langileak, bai eta kirol-klubetako eta kirol-erakundeetako zuzendariak ere (13.7 artikulua).
281. Zerronda errepikatu egiten da, egokitzearen txikiak egokitzearen, aurreproiektuak berriaz ere aipatzen dituenean betebeharrak horiek 23. artikuluko 4. eta 5. paragrafoetan, kirolariaren eta haren inguruaren erantzukizuna baita artikulua horren izenburua. Are gehiago, 5. paragrafoan ematen da inguruko pertsonen definizioa: entrenatzaileak, irakasleak, kirol zuzendariak, agenteak, taldeko langileak.



funtzionarioak, medikuak edo paramedikuntzako langileak, baldin eta kirol-letziaketeran parte hartzen duten edo letziaketa horietarako prestatzen diren kirolariek lan egiten badute edo kirolari horiek tratatzen badituzte.

282. Aurrekoa gutxi balitz, zehapenak zehazterakoan, egilearen arabera ezarri ditu aurreproiektuak, eta, ildo horretatik, kirolariei ezartzeko zehapenak paratu ditu 25. artikuluan, klubei eta kirol-taldeei ezartzekoak diren zehapenak 26. artikuluan; teknikariel, opailuei, arbitroei eta kirol-lizentziadun gainerako pertsonen, zuzendaritzako langileei, zuzendariei edo kirol-federazioetako langileei, liga profesionaletako langileei, kirol-letziaketa ofizialak edo ez-ofizialak antolatzen dituzten erakundeei eta kirol-klubel edo -taldeei ezartzekoak direnak 27. artikuluan; eta 28. artikuluan, azkenik, klubetako edo taldeetako medikuei eta gainerako osasun-langileei ezartzekoak diren zehapenak, edota kirol-federazioen, liga profesionalen edo kirol-letziaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeen kontura jarduten direnei edo zerbitzuak ematen dituztenei, edo erakunde horietan atxikitarako pertsonen edo erakundeen ezartzekoak.

283. Aurreproiektuaren 23.5 artikulua kirolarien inguruko pertsonen ematen duen definizioa bat dator Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioak kirolarien laguntzaileez ematen duenarekin, eta egokia litzateke era koherentean aplikatzea erantzuleak seinaltatzeko (4. artikulua), eta kokapen-datua (13.6 eta 23.4 artikulua) eta kirolarien tratamendu terapeutikoei buruzko informazioa eman behar dutenak (13.7 eta 23.5 artikulua) zehaztuzko, eta, gero, ez betetzeak zehatzeko (27. eta 28. artikulua).

284. Aurreproiektuaren 3.b) artikulua dioenez, kirolarien erantzukizuna da "eskatzen zaie informazio guztia ematea". Betelbehar hori bi modutara uler daiteke, batetik, legearen aurreikuspenen arabera kokapen-datuei eta tratamendu terapeutikoei buruzko informazioa eman beharri lotuta; bestetik, era independentean, aurreproiektuaren 12.5 artikulua Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari aitortu dizkion ahalmenen barruan.

285. Egokia da 12.5 artikulua hori sanzea; izan ere, AJAPELen 39. artikulua lege-lerruneke araua eskatzen baltu halako betebeharrak ezartzeko —"Heritarak lege bidez ezarritako kasuetan bakarrik daude beharrita administrazioari txostenak txusketan edo bestelako ibilketak egiteko erantzutasunak ematea"—, eta horren zuzeneko aurrekaria da gaur egun derogaturik dagoen 1958ko Administrazio Prozeduraren Legearen 27. artikulua, zeinak aukera ematen baitzuen laguntzeko behar hori erregelamendu bidez ere ezartzeko, gaur egun aukera hori baztertua badago ere.

286. Baina oraingoan ere ageri zaigu kontzeptu bat, "kirolariel eta laguntzeko betebehara duten beste batzuei", eta kormeniko litzateke horren ordez "ingurukoak" jartzea; izan ere, azken tartekiarren ("ndarrean dagoen legeriak ahalbidetzen duen ean") norainokoari



dagokionez, horren orokortasunak ekar itzazkeen arazoak saihesteko bidea ematen baitu. Erredakzio horrek aurrekari edo eragingarritzat izango du, behar bada, Auzitegi Gorenaren 2010eko urtarrilaren 27ko epaia (R/ 3168/2010), zeinak ez baitzuen onartu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epai baten kontra jarritako legearen intereseko kasazio-errekurtso bat; Auzitegi Nagusiaren epaiak, egin-eginean ere, onartu egin baitzuen partikular batzuek Kulturako sailburiaren Agindu baten aurka jarritako errekurtsoa, eta agindu horren gara zen zehapen bat, kirolariek, dopinaren alorrean, kirol-administrazioari laguntzeko betebeharra eta eskatzen zaien informazioa ematekoa ez konpitzearen ondoriozkoa.

287. 8. artikuluko h1 letrak eskubide bat aitortu die kirolariei, hots, "hartu zarkun odol-, gerru- edo bertelako laginak diseinatu daitezkeen eskubidea, laginak hartu direnetik zortzi urte igaro ondoren. Laginak ikerketarako erabilgarriak izan behar dira, laginen anuntiazioa egin behar da, laginak kirolari jakin batekin lotzeko modurik izan ez dadin. Halaber, laginak ikerketa biomedikoari buruz indarrean dauden araudiarekin bat etorritik erabili daitezke".
288. 39.3 artikulua, hala ere, hauxe xedatu du: "behin-egite horietan aurreikustako preskripzio-epaia betetzen denean edo kasuan kasuko zehapen-prozeduran, eliziplina-prozeduran edo auzi kimikalean ebazpen irmoa ematen denean, dopatzea kontrolatzeko laborategiek esango dute gorde pertsona identifikagarri bati lotutako laginik". DLOren 28.1 artikulua azken lerroaldean ere ageri da aurreikuspen hori, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziak aholkatutako aldaketa baten ondorioz sartu zen.
289. Batzordearen ustez, behin 39.3 artikuluko epaia edo baldintza beteta, suntsitu egin behar dira laginak, eta ikerketa-erabilerearako bakarrik kontserbatu ahalko dira, datu pertsonalak disoziatuta, baldin eta kirolariak beren-beregi ematen badu baimena. Horrenbestez, hauek aplikatu behar dira: Ikerketa Biomedikoari buruzko uztailaren 3ko 14/2007 Legeak xedatu duena, eta horren 58. artikuluko bermeak.
290. Aurreproiektuaren 20. artikulua araberak, kirolan debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrenda onartuko da, eta erregulamenduz zehaztea eskatzen du horrek; beraz, jaurlaritzari eman beharke zulo lantegi hori, jatorrizko erregulamendu-ahala duen aldetik, edo, salbuespen gisa, kirolaren alorrean eskumena duen sailburuari.
291. EKren 152.1 artikulua, EAEEn 29. artikulua eta Jaurlaritzaren Legearen 16. artikulua taxutu eskemaren araberak. Jaurlaritzak du erregulamendu-ahal orokorra; sailburuek, aldiz, eta Jaurlaritzaren Legearen 26.4 artikulua araberak, euren sailko gaiak buruzko administrazio-xedapen orokorrak ematen dituzte ("etxerako" alegia, ad extra ondorioz gabe), jaurlaritzaren erregulamenduak gai horietan garatzeko aukerari kalterik egin gabe.



292. Hala ere, malgutasun handia behar den kasuetarako, onartu egin da sailburuek eskumena dutela legearen erregelamendu exekutiboa emateko, baktin eta legeak, betiere, gaikuntza ematen badie erregelamendu-zehapen zehatzak emateko.
293. Aurreproiektuaren 23.2 artikulua osorik kentzea gomendatuko genuke, jarraian azalduko ditugun arrazoiengatik. Hasieran, badirudi kirolariaren erantzukizun objektiboa ezarri nahi duela (ez da beharrezkoa izango haren asmoa, jakinaren gaineko erabilera edo zabarkeria frogatzea), eta zalantzan jartzeko modukoa da honi, abiapuntu gisa, zehapen araubide administratiboan.
294. Estatu Kontseiluak gero DLO izango zenari buruz eman zuen txostenean, 2006ko otsailaren 2koan, ohartarazi zuen Dopinaren aurkako Mundu Kodearen ezaugarriak buruz, kode horrek ongi beretzten baititu zehapen batzuk, erantzukizun objektiboaren ondoriozkoak —ia objektiboa, hobeto esateko, substantzia kirolaren gorputzean egoteko arrazoirik ez dagoela frogatzeko ezintasun praktikoagatik—, lehiaketaren emaitzei aitorpen ofiziala kentzea, eta, beraz, sariak eta dominak kentzea dakartenak; eta beste batzuk, errudun erantzukizunaren ondoriozkoak, kirol-emaitzak ez onartzeaz gain lizentzia galtzea eta beste ondorio batzuk dakartenak.
295. Hala ere, DLO eta aurreproiektua ez doaz Dopinaren aurkako Mundu Kodearen ildotik, emaitzak aldatzea ez delako era independentean ikusten, zehapen nagusaren (horrek eragingo lioke lizentziari) ondorio gehigarri gisa baizik.
296. Baina hurrengo lehenaldeak erabat aldatzen du paragrafoaren esanahia: "Hori guztia gorabehera, kirolariak frogatu ahal izango du ez duela erunk izan, ez dela zabarkeriak izan bere aldetik, edo ez duela kirol-errendimendua hobetzeko asmoak izan". Hartara, kirolariari eramanen zaio errudun ez delakoa frogatzaren zaina, errugabetasun-presuntzioaren printzipioaren aurka.
297. Administrazioaren zehapen-jardueraren printzipioen arabera, dopinaren alorzean ere aplikatzen baitira, zehapen orok behar du karguko froga-jarduera bat, zehatu nahi den arau haustearen errekalatea eglaztatzekoa, eta inork ez du bere errugabetasuna zertan frogatuik. Horrenbestez, egindako frogen emaitzetan inongo gabeziarik ikusiz gero, zehatze-organismoak libreki baloratuko baitu, absolutzioaren aldeko erabakia eman behar da; izan ere, *ius puniendi*a egikaritzeko (denen erakusgarri, 76/1990 KAE, apirilaren 26koa), nahitaez hartu behar baitira kontuan Konstituzioaren 24.2 artikuluko baldintzak, hots, frogatu beharra eta arau-haustea leporatzen zaiotarik bere jarrera defendatzeko aukera izatea dagokion organismoak erabakia hartu baino lehen.
298. Bestela esanda, errua edo zabarkeria buruz ez dagoela presuntzionik, zehapen-prozedurak batutako frogekin berretsi behar dira-eta. Kirolariak, jakina, zalantzan jarri ezin den eskubidea du prozedura horretan: alegazioak egin, eta bere defentsarako egoki irizitako frogak gauza daltezen eskatzea, ezin baitzaio zigor edo zehapenik



jarri, aldez aurretik entzun ez bazaio. Zehatze-organismoak baloratuko du, froga-material guztia ikusita, zehapena jarri behar den ala ez.

299. Aurreproiektuaren 40.1 artikulua Dopinaren aurkako Euskal Agentziari esleitu dion ikuskarpen-ahalak hauek hartzen ditu baruan: dopin-kontrol batean positibo emateko gai diren produktu eta substantziak gordetzea eta biltzea ahalbidetzen duten botika-ontzi, kirol-poltsa, aldagela-armairu, autobus eta gainerako gureak, bai eta metodo debekatuak aplikatzera bideratzen diren tresnak ere; dena den, ez du zehazten honek guztiak zer tokitan aurki daitezkeen, eta, horrenbestez, hauek ohartarazi behar da: ahalmen hori neurritu egin behar dela oinarritzko eskubideei zor zaien errespetuarekin, eskubide horien artean baitago egoitzaren bortxazintasuna, EKren 18.2 artikulua aurreikusi duenaren ildotik.

300. Ezin egokiagoa litzateke erresalbu edo kautelaren bat ildo horretatik, legeak beste xedapen batzuetan aldarrikatu baitu pertsonaren oinarritzko eskubideei zor zaien errespetu osoa.

301. Lehen batean, garraibideak baino ez dira autobusak, eta ez daramate baruan norbanakoen eremu edo inguru pribatua egikaritzeko edo garatzeko gunerik, baina litekeena da kasu bereziren bat gertatzea, eta ad hoc erantzuna behar izatea.

IV ARAUGINTZA TEKNIKA

302. Legegintza-teknikari dagokionez, lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak lantzeko jaraibideen arabera (Jaurkitzearen Kontseiluak 1993ko martxoaren 23ko Erabakiaren bidez onartu, eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapenerako Sailburuaren 1993ko apirilaren 6ko Aginduaren bitartez argitaratu baitzen), egoki iritzi diogu ondorengo hobeakontzak iradokitzeari, araugintza-teknikaren ildotik:

303. Lege proiektuetan, "Zioen adierazpena" izenburua jarri behar zaio azalpen-zatiari.

304. Zioen adierazpen horretan, komeni da izen osoarekin eta datarekin aipatzea 14/1998 Legea, uztailaren 11koa, Euskadiko Kirolarena, eta 7/2006 Lege Organikoa, azaroaren 21koa, Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurkakoa. Egoki litzateke, era berean, Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren epaiaren aipua osatzea: David Mera eta beste batzuk Europako Erkidegoetako Batzordearen aurkako kasua, 2006ko uztailaren 18ko epaia.

305. UNESCOk onartu zuen Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioari dagokionez, argigarria litzateke aipatzea Espainiako Estatuak berretsia duela, eta Estatuko Buletin Ofizialean argitaratu dutela 2007ko otsailaren 16an, eta barne-ordenamenduaren zati dela, EKren 96. artikulua xedatu duenaren arabera.



306. Gure ustez, alferrekoa da 1.2 artikulua ren azken zatia; izan ere, gero ematen baita dopinaren definizioa, animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketetarako dagokienez.
307. Deigarria da botere publikoak "dopinaren aurkako informazio-, prestatuntza- eta ikerketa-programetan parte hartze"ra mugatzea (5 f artikulua), ikusita Dopinaren aurkako Euskal Agentziari esleitu zaizkion eginkizunak [12.1.i) artikulua eta 42.1 artikulua], hark bildutako isunen emaitza esleitu zaizkion ikerketa-helburuetarako ballatuko baita. Deigarria den bezala 5. artikuluko zerrendan ez agertzea beste erantzukizun bat, hots, edozein diru-laguntza edo laguntza ukatzea kirol-erakundeei eta kirolari, baldin eta zehapenen bat jaso badute dopinaren aurkako arauak hausteagatik, edo dagozkien kontrolak egiteari uko egiteagatik: egin-eginean ere, kirol-erakundeei ezarri baitzaie 6.1.c) artikuluan, eta ber baitator 9. artikulua xedatu duenarekin.
308. Aurreproiektuaren 6. eta 7. artikuluek hurrenez hurren zerrendatu dituzte kirol-erakundeen erantzukizunak eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten pertsona eta erakundeen erantzukizunak. Lehenago adierazi duguna alde batera utzita, ez dugu ulertzen 6.1 artikuluan sartu ez izana "dopina dela eta zehapenak indarrean dituzten kirolari, kirol-ekitaldiaren parte hartzea galaraztea", eta 7.n) artikuluan gehitu ez izana "emakumezko eta gizonezko kirolarien beharrezkoak diren egoerak".
309. Ulertzen ez den bezala hau "eskatzeko" edo "exijitzeko": i) kirol-elkarte, kirolari eta gainontzeko kirol-agenteei dopinaren aurkako arauak bete ditzatela, antolatzen dituzten kirol-jardueretan parte hartzea izan dezaten (6.1.k) artikulua eta 7.j) artikulua]; eta ii) kirolari baimena, eskumena duten organoek kirolarien datu pertsonalak tratatzea izan dezaten, dopinaren aurkako kontrolak egin eta kontrol horien emaitzak jakinarazteko modua izateko (6.1.l) artikulua eta 7.o) artikulua).
310. Legearen indarrez ezartzen dira arau horiek eta datuen babeserako oinarritzko eskubidearen mugak, eta berdin-berdin dira eraginkorrak, borondatezko men egiterik gabe ere.
311. Aurreproiektuaren 8. artikulua dagokionez. EKren 24.2 artikulua aitortutako berme biter, zehapenerako administrazio-prozeduran ere aplikatzen dena, jotzen dute c) eta d) letretako eskubideek: inplikatuak defendatzeko aukera izatea erabakia hartu baino lehen, eta, gainera, Administrazioak bere prozeduran espedienteari aukera ematea egoki irizitako frogak proposatu eta ekar ditzan, eta bere eskubideari dagokiona alegatzeko (Konstituzio Auzitegiaren epaiak: 18/1981, 7/1987, 729/1993 eta 56/1998).

312. Aurreproiektuaren 8. artikuluko e) letzan, bietako bat: edo salbuespena kendu, edo "urratu"z bestelako konzeptua erabili, zuzenbidea urratzen delako konfrazioa baita: "adibidez, "kirolariaren duintasuna eta intimitatea erabat errespetatuta egitekoa, betiere".



313. 47. artikulua datuen isilpekotasunaren araubidea arautzen duen neurrian, hobe litzateke 8.i) artikuluko "egokia den unera arte behintzat" kendu, eta "lege honek ezarritakuen arabera" jarzea.
314. Oinar bat baino gehiago zor zaio 9. artikuluari. Lehenengo paragrafoan, kirol-erakunde horiek zehapenen bat jaso izana "doping-gemakari uzokor edo jarratuegatik" ez da ageri 6.1.d) artikuluan, zelnaren formulazioak aplikazio errazagoa ahalbidetzen baitu diru-laguntzarik edo babesik emateko debekurako, behin zehapena jarrita ez duelako behar bigarren juzgua egitea, bidezko den ala ez erabakitzeko. 9.2 artikuluan, berriz, faltan eman dugu 9.1 artikularen azken zehaztapena, hots, "debeku horrek bere horretan jarraituko du, zehapena indarrean den artean edo lankidetzak eskaintzeari uko egiten zain artean". 9.3 artikularen erredukzioa ere hobetu daiteke, eta haxe ondorioztatu: babes- edo laguntza-harremanik indarrean izanez gero, harremana suntsiaraztea ekarriko duela zehapenak.
315. 11.6.a) artikuluan, gaztelaniazko bertsioan, "se" falta da, haxe jarri beharko litzateke eta: "que se designarán", edo nahiago bada, "que serán designados". Gainerako letretan kirol arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak egiten badu izendapena, a) letza horretan ere egin beharko luke sailak izendapena, eta ez sailburuak.
316. 12.1.e) artikularen idazkera hobeto egingo litzateke "arau hausteen erantzule izan daitezkeenen aurka" konduta.
317. 13.3 artikuluan, gaztelaniazko bertsioan, "los" falta da "realización de" eta "controles" en artean: edo bestela, "los mismos" esamoldea jar daiteke.
318. 13. artikularen 11. paragrafoko mezua 10.ean sartu behar da, estatuaren lizentzia edo nazioarteko lizentzia duten kirolariel egin ahal zaizkien kontrolak lotzen zaielako.
319. 19. artikularen xedea da "kontrolak egiteko eskumena" zehaztea, eta hala egiten da lehiaketetako kontrolak dagokienez (1. eta 2. paragrafoetan); hala ere, lehiaketaz kanpoko kontroletan, ez da zehazten, eta lehentasun-araua baino ez da ezartzen. nazioarteko lehiaketetan edo Estatu mailako lehiaketa ofizialeetan parte hartzeko asmoz "Euskal Autonomia Eskualdean dauden kirolari"ei dagokienez.
320. 23.3 artikuluan, komeniko zen "Espainiak berretsitako" esamoldea gehitzea nazioarteko hitzarmenei, berretsitakoak baino ez direlako barne-ordenamenduan sartzen.
321. 24.1.d) artikulua oker jo du 23.3 artikulua, 23.4 artikulua aipatu behar delako.

322. Komeni da 24.1 artikuluko e) letzaren idazkera berrikustea. Lehenengo eta behin, kirolariaren gaixotasunel buruzko informazioaren eta erabilera terapeutikorako baimenak eskuratzearen gaineko betebeharrak, 23.5 artikuluan ez ezik, 23.6



artikuluak ere ageri dira. Bigarrenik, tratamendu terapeutiko horien inskripzioa egiteko baimena (15.1 artikuluan aipatutakoa) ukatzea zehatzen da. Baina ez da zehatzen libururik ez betetzea, batez ere kirolariari berari dagokionean (15.7 artikulua). Azkenik, arontzioa ematen du kirol-baja inuzurren bitartez lortu izana ez zehatzea; egin-eginean ere, 23. artikuluan, ez baitute kirolariaren eta haren ingurukoen erantzukizunen barnean sartu baja hori eskuratzeko baldintzak ez betetzea edo urratzea.

323. DLoren 14.1 artikulua aurreikusi ez duen arau-haustea dakar k) letrak; izan ere, aldiaketatxoak gorabehera, batu egin baitira Herriaren Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren (HSBLO) 23. artikuluko p) eta q) letrak aurreikusitakoak (DLoren azken xedapenetan hirugarrena).

324. Azken buruan, ez dugu arrazoirik ikusten portaera bera zehapen-araubide bietan sartzeko: izan ere, gure ustez, ondasun juridiko babestu bera partekatzen dute (debekatutako substantzia eta metodoek legez kanpoko trafikoa eta bidalgabeko banaketa). Aipatzekoa da, gainera, klubak eta kirol-taldeak baino ez dituela arau-hauste horregatik zehatzen aurreproiektuak (26. artikulua), ez baita gainerako egileei dagozkien letren zerrendan ageri (bultzatzea sartzen bada ere), eta diruzloa dela zehapena (eta, hala balegokio, puntuak erlo positiboak galtzea sailkapenean edo kategoriaz edo mailaz jaisteak). HSBLOn bezala, zenbatekoak desberdinak badira ere.

325. Beste alde batetik, komeri da gaztelaniazko bertsioaren erredakzioa hobetzea, eta "al consumo de tales" gehitzea "sustancias y productos" izenak.

326. Gaztelaniazko bertsioa 25. artikulua 1. eta 2. paragrafoen arabera, bigarren arau-hausteari lotu zaio la privación "o posibilidad" de obtención de licencia federativa a perpetuidad, gure ustez "imposibilidad" jarri beharko litzateke.

327. Egin-eginean ere, 25. artikuluko 3. paragrafoan, hirutan ageri da "posibilidad" "imposibilidad" en ordez.

328. Hausnarketa egin beharko litzateke ea 25.5 artikulua aurreikusitako zehapen osagarria egokia ote den: alde batetik, entrenatzeko aukerara ere hedatzen delako (zorrotzegia gerta liteke, agian), eta bestetik, instalazio publikoetara mugatzen delako (eraginkortasuna kentzen dlo horrek). Nolanahi ere den, hauxe gehitu beharko litzateke: lizentzia eten, kendu edo ezin eskuratzeko zehapenak (diraue bitartean egongo dela indarrean Euskal Autonomia Erkidegoko instalazio publikoetan lehiatu eta entrenatu ezina.

329. Aurreproiektuaren 26. artikuluko 3. paragrafoaren mezua artikulua horretako 2. paragrafoan sartu behar da, arau-haustea hirugarren aldiz egitea aipatzen baitu.



330. Aurreproiektuaren 27. artikuluaaren araubidea ere argitu behar da: egin-eginean ere, kirol-lehiaketa "ofizialak edo ez-ofizialak" antolatzen dituzten erakundeak sartu ditu izenburuan, eta 4. paragrafoan, kirol-federazioen kontura edo haien eskuordetzez lehiaketa "ofizialak" antolatzen dituzten erakundeak aipatzen ditu hasiera batean. Baina hau xe datu du azkenean: kirol-federazioek eta kirol-lehiaketa "ofizialak edo ez-ofizialak" antolatzen dituzten erakundeek egokitu egingo dutela beren araudia lege honetako aurreikuspenak sartzeko. Aurrekoaren pareko 28.4 artikulua, bere aldetik, kirol-lehiaketa ofizialak antolatzen dituzten erakundeak baino ez ditu aipatzen.
331. Ez litzateke ausartegia izango esatea 33.4 artikulua premisatzat hartu duela erantzule desberdinak izatea egingiza berberengatik, diziplina-araubidearen mendeakoa batzuk, eta zehapen-araubide orokorraren mendeakoa beste batzuk, portatza dagokion tipifikazioaren barruan sartzen dela.
332. Dena den, hau egin beharko litzateke halakoetan: Euskal Herriko Herri Administrazioen Zigor Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen (EHAZAL) 28. artikulua jo: "Ebazti behar diren organoak, zigor-jardunbideku edozein alditan, datu adierazgarriez bidez uste badu esku artean duela bere eskumenekoa ez den gertakari bati dagokion arau-bazter, eta hortaz zigorra ezarriaz ez dagokiola berari, eskumen hori daukan organoari jakinaraziko dio eta eginkizku guztia hejaraziko dio".
333. Era berean, aurreproiektuaren 33.5 artikuluaaren arauak, horren bitartez Herriazango Sallari jakinarazi behar zaizkio "dopinagatiko diziplina- eta zehapen-espedienteak ireki izana, eta hori buruzko azken ebazpena ere", gehiegizko eskakizuna dakar: Izan ere, aurreproiektuan zehatutako egintza guztiak ez baitaude HSBLOn tipifikatuta. EHAZALen 27. artikuluan erregulatu dute bestelako zehapen-prozedurekiko balizko konfidentzila. Artikulu horren arabera, "Isapidegileak jasotako beste zigor-jardunbide bat egiten ari dela gertakari berberak zirela eta, horren berri emango dio zigor-argudioari. Organo hori, jardunbidea gelditu gabe, harremanetan jarriko da jardunbidea ebatzeko organo eskudunarekin, eta, horrela, zuzen koordinatu ahal izango dute beren artean lege honen 16., 17. eta 18. atalek ezarritakoa".
334. Uste izateko modukoa da Interesatuak berak jakinaraziko diola instruktoareari beste zehapen-espediente bat irekita dagoela HSBLO aplikatuta, eta horrek bide emango diola aipatu mekanismoari.

335. Diziplina-espediente eta zehapen-espediente berdezi direnez, biak aipatu beharko lirateke 35.3, 36.1, 36.2 artikuluetan.

336. Hauke alpasu dute 35.3 artikuluan: preskripzioaren etendurak bere horretan jarraituko duela, zehapen-prozedura "lege honetan azalduzako kausaren batengatik" eten bada. Gehiago zehaztu beharko lukete aipamen hori, 33. artikuluan ezarritako afrazolekin baitu lotura.



337. Neurriaren helburuel begiratuta, 36.3 artikulua azken leerroaldetan, etendura ezeztatzea hobeto lotuko litzaioke gero "dopinen alorreko" beste diziplina edo zehapen-prozedura bat jasateari, "lege hau urratzeagatik" diziplina- edo zehapen-prozedura bat jasateari balio.
338. Aurreproiektuaren 12.1.e) artikulua araber, Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren zuzendariak du administrazio-izaerako zehapen-alorrerako eskumena. Aurreproiektuaren 37.1 artikulua, aldiz, Eusko Jaurlaritzari esleitu dio eskumen hori.
339. Berriz azertu behar da 39.7 artikulua erredakzioa, eskumena duen diziplina-organoak hartutako zehapen-ebazpenak ezin direlako ezekurritu. 39.6 artikulua araber, nekez erabaki daiteke zehapen-ebazpenak etetea "balikin errespetu-kasu batenak erabazpenaren eraginkortasuna segurtatzera bidartutako bermeak hartu ondoren". Organo juridikionalei dagokienez, dagokion arau prozesalak zehaztuko ditu enegelak, lege autonomikoak ezin duelako baldintzatu epaileek eta auzitegiek euren funtzio konstituzionala erabiltzeko modua.
340. Aurreproiektuaren 42.1 artikulua hasierako testuan tarteki bat ageri da, "gaian inplikazioa duten beste organo batzuen laguntzarekin", eta badirudi Agentziari bere kabuz ekitea galarazten zaiola, horrek zentzurik ez badu ere. Gauza bat da beste administrazio batzuekin aritzea lankidetzan, aukera hori aurreikusita baitago, oro har, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazioaren Prozedura Erkidaren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 6. artikuluan; eta oso bestelakoa, bere kabuz ezin ekina.
341. 43.3 artikulua dagokionez, gure ustez, datuak ez dira bakarrik "diziplina espedienteetakoak" izango, abiarazitako zehapen-espedienteetakoak ere bai, gero zehaztu dutenez, datuen eskuragarritasuna 43.7 artikuluan arautzerakoan.
342. Kirolariaren osasun-txartelaren funtzio bikoitzari eutsiz gero, legearen 24.1.e) artikulua aipatu behar du aurreproiektuaren 46.5 artikulua.
343. Aurreproiektuaren 47.2 artikulua azken leerroaldia asistematikoa da, ez duelako zerikusirik batere zehapen horretan arautzen diren konfidentzialtasun- eta isilepeotasun-betebeharrekin.

344. Aurreproiektuaren 50.2 artikulua erremisiya zehatzagoa izango litzateke legearen 32.2 artikulua aipatuta.

345. Hugarren zehapen gehigarriaren hasierako salbuespena ez da zehatza, legeak 28.4 artikuluan ere aurreikusi dituelako zehapenak osasun-eginkizunak federazio-lizentzia edo gaikuntza baliokiderik gabe betetzen dituzten langileentzat.



- 346 Hirugarren xedapen iragankorrean, izen eta guzti aipatu behar da apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretua. Xedapen indargabetzailean, halaber, osorik aipatu behar da 14/1998 Legea, uztailaren 11koa, Euskadiko Kirolarena.
- 347 Azken xedapenetatik hirugarrenean, gaztelaniazko testuan, kendu egin behar da Eusko Jaurlaritzari buruzko espezifikazioa: "competence en materia de deportes".

ONDORIOA

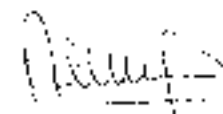
Batzordeak emandako irizpenaren arabera, aipatutako lege-aurreproiektua, behin irizpen honen manra egindako oharrek aintzakotzat hartutakoan, Jaurlaritzaren Kontseiluari aurkeztu ahal izango zaio, onespena eman dezan.

Vitoria-Gasteizen ziurtatzen dugu, 2011ko azaroaren 4an, jakinaren gainean egon zaltezen eta aintzat har dezazun: era berean, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 30.2 artikulua aurkezkusi duen betebeharra gogoratzen dizugu: azkenean onartutako xedapena edo ebazpena Batzorde honi jakinaraztea, antolaketa eta jardura araudian (irailaren 12ko 167/2006 Dekretuz onetsia) ezarritako epean eta moduan.



Jesús María Alonso Qullchano,
Idazkaria

O.E.:



Amaia Ortiz Cabezas,
Lehendakaria